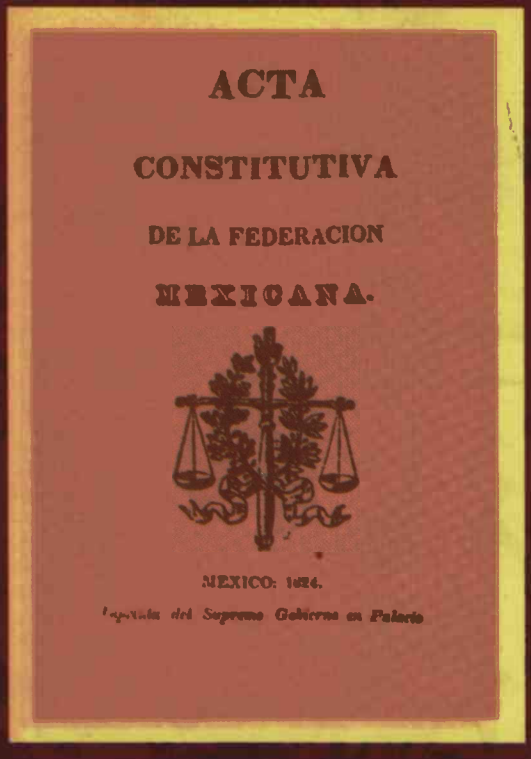
Manuel Calvillo



La República Federal mexicana
Gestación y nacimiento

EL COLEGIO DE MÉXICO
EL COLEGIO DE SAN LUIS

LA REPÚBLICA FEDERAL MEXICANA
GESTACIÓN Y NACIMIENTO

LA REPÚBLICA FEDERAL MEXICANA

GESTACIÓN Y NACIMIENTO

Manuel Calvillo
compilador

LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL, 1820-1824

LOS PROYECTOS DE CONSTITUCIÓN PARA MÉXICO, 1822-1824

TOMO 1
[RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA]

TOMO 2
[DOCUMENTOS]

EL COLEGIO DE MÉXICO
EL COLEGIO DE SAN LUIS

972.03
R4264

La República Federal mexicana : gestación y nacimiento : la consumación de la independencia y la instauración de la República Federal, 1820-1824 / [coordinador] Manuel Calvillo. -- 2a ed. -- México : El Colegio de México : El Colegio de San Luis, 2003, 1974.
2 t ; 23 cm.

t. 1. Reconstrucción histórica -- t. 2. Documentos.

ISBN 968-12-1066-2

México -- Historia -- 1810. I. Calvillo, Manuel, coord.

Primera edición, 1974

Portada de Irma Eugenia Alva Valencia

Segunda edición, 2003

DR © El Colegio de México, A.C.
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10749 México, D.F.
www.colmex.mx

DR © El Colegio de San Luis, A.C.
Parque de Macul 155
Fraccionamiento Colinas del Parque
78299 San Luis Potosí,
www. colsan.edu.mx

ISBN 968-12-1066-2

Impreso en México

Tomo 1

LOS PROYECTOS DE CONSTITUCIÓN PARA MÉXICO, 1822-1824

[RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA]

ÍNDICE DEL TOMO 1

Presentación 11
Nota previa 13

Parte primera
EL PLANTEAMIENTO REVOLUCIONARIO

1. Acotación cronológica y condicionalidad 19
2. La restauración constitucional española 25
3. El antiliberalismo de México. Las reuniones de La Profesa 33
4. La subversión liberal 37
5. La reivindicación absolutista 51
6. La subversión liberal y México 59

Parte segunda
EL PLAN DE IGUALA Y LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

1. Preámbulo del Plan de Iguala 71
2. Hacia el Plan de Iguala. Iturbide y Guerrero 79
3. El Plan de Iguala 91
4. Iturbide en el Plan de Iguala 97
5. El Tratado de Córdoba 109
6. El monarquismo en el sur. Punchuaca 125

Parte tercera
LA INDEPENDENCIA DECLARADA

1. La consumación y el Acta de Independencia 141
2. Las actas de independencia. México-Lima 149
3. Las declaraciones de independencia. Venezuela 159
4. Las declaraciones de independencia. Nueva Granada 171

Parte cuarta

LA INDEPENDENCIA MONÁRQUICA

1. Las Cortes ante la consumación de la independencia 183
2. El desenlace en España 191
3. México. Ambigüedad y desconcierto 205
4. Desconcierto e indefinición 215
5. La definición republicana del doctor Mier 225

Parte quinta

EL PROYECTO MONÁRQUICO

1. La convocatoria del Congreso Constituyente 237
2. Hacia el primer Congreso Constituyente 247
3. El Congreso Constituyente. El conflicto 257
4. El Congreso. Oposición y desconcierto 267
5. El primer desenlace del conflicto 277
6. La proclamación de Agustín I 287

Parte sexta

LA PERTURBACIÓN MONÁRQUICA

1. La frustración desconcertada y Agustín I 299
2. El imperio de Agustín I 307
3. El Congreso frente a Agustín I 315
4. Los proyectos de constitución monárquica. Antonio José Valdés. Miguel Guridi y Alcocer 325
5. La aprehensión de los diputados. El punto muerto del conflicto 331
6. La disolución del Congreso 343

Parte séptima

LA REVOLUCIÓN REPUBLICANA

1. La Junta Instituyente y el Plan de Veracruz 357
2. El Proyecto de Reglamento Político del Imperio. El Proyecto de Constitución de José María Couto 371
3. El Plan de Casa Mata 385
4. La reinstalación del Congreso 397
5. La abdicación de Agustín I 411
6. Hacia la proclamación republicana 423

Parte octava

LA INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL

1. La proclamación republicana 441
2. Los primeros proyectos de Constitución Republicana: El de S.F. Austin —29 de marzo de 1823— y el de la comisión del Congreso —18 de mayo de 1823— 455
3. Las diputaciones provinciales. Un paréntesis 465
4. El proyecto republicano federal, I. Las Provincias Internas de Oriente. Ramos Arizpe. Stephen F. Austin 477
5. El proyecto republicano federal, II. Guadalajara. Prisciliano Sánchez 491
6. Las provincias federales. Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Zacatecas, Durango. Las juntas de Celaya 505

Parte novena

EL DESENLACE. LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL

1. Hacia la reunión del nuevo Congreso Constituyente 523
2. La instauración federal. El proyecto de Acta Constitucional 537
3. La instauración federal. El Acta Constitutiva de la Federación. El voto particular de José María Becerra 551
4. El debate del proyecto de Acta Constitucional. El discurso del doctor Mier 561
5. La fundación de la república federal 569
6. La emancipación republicana 579

Apéndices

Exposición presentada a las Cortes por los diputados de ultramar en la sesión del 25 de junio 591
Proyecto presentado a las Cortes por Miguel Ramos Arizpe y José María Couto, diputados mexicanos, en la sesión del 26 de junio de 1821 603

Índice del tomo 2 609

PRESENTACIÓN

Con objeto de conmemorar el sesquicentenario de la fundación de la república federal en México y de la creación del Distrito Federal, el Gobierno de la República y la entonces Jefatura del Departamento del Distrito Federal encomendaron a un selecto grupo de historiadores y juristas, dirigido por el doctor Octavio Hernández y coordinado por el licenciado Manuel Calvillo, la elaboración de una obra que, por su contenido fundado en fuentes primarias, diera cuenta del significado de acontecimientos de tanta transcendencia para nuestra historia.

El título general de la obra es *La república federal mexicana. Gestación y nacimiento*; los editores la dividieron en ocho volúmenes, algunos de ellos de más de un tomo. El lector juzgará por el nombre de los autores y los títulos de cada volumen el interés y el valor que el conjunto de ensayos y documentos aún tiene.

El volumen escrito por Ernesto Lemoine se llama *La revolución de independencia* y es acompañado por un segundo tomo con testimonios, bandos, proclamas, manifiestos, discursos, decretos y otros escritos.

Tarsicio García Díaz es autor del volumen titulado *La prensa insurgente*, que consta de dos tomos.

Andrés Lira es autor del volumen sobre *La creación del Distrito Federal.*

Salvador Novo, en colaboración con Miguel Capistrán, escribió *La vida en la Ciudad de México en 1824.*

En particular, el volumen titulado *La consumación de la independencia y la instauración de la república federal, 1820-1824*, se debe a la pluma de Manuel Calvillo; su tomo 1 está dedicado al análisis de *Los proyectos de constitución para México, 1822-1824*, y es de especial importancia por tratarse de un trabajo aún insuperado, no sólo por el valor de las fuentes utilizadas, sino por lo riguroso del tratamiento que el autor da a la reconstrucción histórica de ese episodio de la vida nacional. Transcurridos más de 25 años sin que este ensayo con su apéndice documental hayan sido nuevamente publicados, El Colegio de México y El Colegio de San Luis han considerado de enorme utilidad volverlos a poner al uso de los lectores, sin descartar la posibilidad de publicar más adelante otros volúmenes de la obra.

Explica Calvillo, en la nota previa de su ensayo, que inicialmente éste fue pensado como una publicación meramente documental y que el prólogo y las notas procurarían su ilación, pero que habiendo considerado insatisfactoria esta opción por diversos motivos, se decidió aprovechar la documentación y divulgarla de la manera más extensa posible. Se trataría, pues, de reproducir los documentos disponibles con la mayor amplitud posible, integrándolos en una exposición de los hechos. Se optó también por referirse exclusivamente a los aconteci-

mientos políticos obvios y a los documentos institucionales y revolucionarios, así como a testimonios de partícipes en ellos.

Con extrema modestia, el autor señala las limitaciones del trabajo, pero, involuntariamente, da cuenta de la amplitud y profundidad con las que trabajó, mencionando sólo para efectos ilustrativos la inmensa bibliografía consultada y haciendo mención al periodo al que se contrae la obra, que va del 1 de enero de 1820 al 31 de enero de 1824, pues considera que, con la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en esa última fecha fue fundada la República. Desde las primeras páginas, no obstante, el lector comprobará el rigor con que son tratados los temas, y las explicaciones e interpretaciones que siempre se encuentran fundadas documentalmente.

En el tomo 2, Calvillo nos indica que se limitó a reproducir los proyectos de constituciones que vieron la luz entre 1822 y 1824. Sólo se publicaron 11 de ellos porque, aunque fueron más, éstos eran desconocidos en la fecha en que fue dada a la imprenta la obra. De los proyectos publicados, cuatro eran monárquicos y siete republicanos; de estos últimos, uno organizaba centralizadamente al Estado y seis eran federalistas. En la lectura de los agradecimientos se adivina la diversidad de archivos y bibliotecas en los que tuvo que investigar para dar culminación a la obra.

El autor logra comunicar toda la tensión que los documentos esconden: "las fechas, dice, sólo revelan la evidencia del suceso, pero ocultan el intenso forcejeo en la Nación para llegar a constituirse como república federal, forcejeo que se prolonga aun en el Congreso Constituyente y en el debate del proyecto de Acta Constitucional. Efectivamente, con las explicaciones y comentarios de su ensayo, corre el velo y muestra la trama que vibra detrás de los programas ideológicos cuya lectura nos ofrece.

David Pantoja Morán

NOTA PREVIA

Este volumen sobre la consumación de la independencia y la fundación de la república federal en México se pensó inicialmente como una publicación documental. El prólogo y las notas a los documentos propondrían su ilación. Se partía de un pre-juicio: la familiaridad más o menos amplia con los sucesos y su significado, incluyendo la del propio autor preocupado por ellos. El supuesto era falso en gran parte respecto a los hechos y extrañamente menos sobre el significado, que la polémica histórica tradicional virtualmente lo dilucida. Además, las obras de los últimos veinte y tantos años, aunque no se refieran directamente a los sucesos de 1820 a 1824, replantean su examen y corrigen las tautologías inevitables de las polémicas anteriores. Todo ello nos obligaría a extendernos en el prólogo y las notas; y aun referidos a los acontecimientos políticos y no al conflictivo proceso ideológico y a la realidad subyacente —económica, etnográfica, cultural— en los que se insertan, se excederían los límites previstos para el volumen, destinado el segundo, como está, a la sola reproducción de los proyectos de constituciones —los que obtuvimos— que se formaron entre 1822 y 1824.

Otra consideración circunstancial se impuso: el apremio de concluir una edición conmemorativa nos impedía intentar siquiera una indagación, que es siempre morosa, para llenar los vacíos documentales, lo que ciertamente no los excusa.

Nuestro proyecto inicial se alteró así necesariamente.

Dijimos que la idea primera sobre este volumen partía de un pre-juicio: la familiaridad con los sucesos y su significado, y que el supuesto era parcialmente falso. De una manera o de otra la historia de la consumación de la independencia y la fundación de la república federal se venía reiterando dentro y fuera de sus extremos polémicos, a partir de las obras de Lucas Alamán, Carlos María Bustamante y Lorenzo de Zavala, sin ignorar la de José María Bocanegra, testigos y partícipes de los acontecimientos. Acudir a ellas sigue siendo imprescindible. Pero no es novedad preguntarnos hasta dónde, en cuanto se refieren al periodo que nos interesa, son historia, y hasta dónde son documentos para la historia. Sin examinar la cuestión, no podemos ignorarla.

Por lo que se refiere a nuestra obra son pertinentes unas consideraciones. Concebida como un volumen documental mencionamos los motivos que la hacían poco satisfactoria. Renunciando al primer proyecto, la opción de un ensayo expositivo tampoco satisfacía nuestro propósito. Se nos imponía aprovechar la documentación y divulgarla de la manera más extensa posible. El término medio podía ser híbrido. No obstante, asumimos el riesgo: los documentos disponibles se reproducirían no íntegros ni en su totalidad, pero sí con amplitud, integrándolos en una exposición de los hechos. En todo caso esperamos cumplir aunque en parte, con la intención de divulgarlos.

Una segunda limitación nos obligaba a deslindar los sucesos. Optamos por referirnos exclusivamente a los acontecimientos políticos obvios y a los documentos institucionales y revolucionarios, así como a testimonios de partícipes en ellos. No acudimos a la historiografía más general y posterior que se refiere a esos años. A partir de los documentos implicaría su revisión. No obstante, una obra, *La diputación provincias y el federalismo mexicano* —1955—, de Nettie Lee Benson, fue la guía e hizo posible la elaboración de gran parte de este volumen. No es nuestra única deuda con la doctora Benson. Otra obra, el tomo primero —1957—, de los tres de *El liberalismo mexicano* de Jesús Reyes Heroles, que atiende al proceso inicial de naturalización del liberalismo en México, es la aportación más significativa al tema. Charles A. Hale recientemente —1972—, en *El liberalismo en la época de Mora, 1821-1853*, disiente y corrobora la interpretación de Reyes Heroles. El primer planteamiento del tema lo debemos a Francisco López Cámara en *La génesis de la conciencia liberal en México* —1954. No podrían omitirse los nombres de José Miranda con *Las ideas y las instituciones políticas mexicanas* —1952—, Luis Villoro, con *La revolución de independencia* —1953—, y Raúl Cardiel Reyes con su monografía sobre Manuel María Gorriño, *Del modernismo al liberalismo* —1967.

*

Sabemos que no es posible la inteligencia de un suceso revolucionario, como el de 1820 a 1824, sin atender a su compleja proyección al menos en el futuro inmediato. Menos aún lo es desatendiendo o ignorando su gestación, sus antecedentes. Pero nos sería imposible hoy y aquí esbozar siquiera una bibliografía sobre ellos, aunque limitada a la de los 20 años últimos. Son accesibles al lector mexicano, y no haremos un catálogo de obras, las de O'Gorman, Pablo González Casanova, Flores Caballero, Guadalupe Nava Otero, Anna Macías, Florescano, Silvio Zavala, Remolina Roqueñí, Arcila Farías, Pompa y Pompa, Sugawara Hikichi, Echánove Trujillo, Fuentes Díaz, Arnaiz y Freg, González Navarro, Ocampo, Bazant, Noriega, De la Torre Villar, Lemoine, Ortega y Medina, Brading, Abellán, Meyer, Valadez, María del Carmen Velázquez, y Monelisa L. Pérez Marchand. *La lucha del pueblo mexicano por sus derechos*, el amplio ensayo de Octavio A. Hernández presentando los ocho volúmenes de los *Derechos del pueblo mexicano* —1967—, es la más considerable aportación que se ha hecho como historia constitucional mexicana de la independencia a nuestros días. A ella debe sumarse *El constitucionalismo social mexicano* —1972—, de Jorge Sayeg Helú.

Mencionar otros nombres tornaría más evidentes las omisiones injustificadas.

Las obras conmemorativas de Ernesto Lemoine V., Tarsicio García Díaz, Salvador Novo, Andrés Lira, y la nuestra, se insertan en el contexto de las aludidas. En este volumen la consideración de las ideas cede ante la de los hechos como tales, incluso en su relación sumaria con los contemporáneos en España y el norte de América del Sur, y sin atender, como se dijo, ni a la realidad subyacente ni a la historia de las ideas.

*

Las líneas anteriores confiesan algunas de nuestras limitaciones. Una más y grave es desatender la folletería y las publicaciones periódicas o que se propusieron serlo a partir de la restau-

ración constitucional de 1820. Trabajar sobre ese material obliga al más riguroso discernimiento, del que es un ejemplo *Las ideas de un día*, de Javier Ocampo. Cualquiera tesis previa puede probarse con su aprovechamiento parcial. Por otra parte, concluir de los impresos solos el alcance que tuvo la propagación de las ideas y de las noticias, es aventurado. Los impresos circularon en las poblaciones y entre quienes tenían acceso a la lectura, una minoría que ciertamente comprendía la actividad que hacían la revolución y la contrarrevolución. El medio de difusión y adoctrinamiento que cubría más amplia y constantemente el país era el púlpito. Sobre él no se ha hecho siquiera el planteamiento para una investigación. Fernando Pérez Memén, en *El Episcopado y la independencia de México (1810-1836)*, tesis de grado en El Colegio de México, que citaremos, avanza con acierto en esa dirección.

Las limitaciones dentro de las limitaciones estrecharon más nuestro trabajo. La del tiempo obligó a apresurar, no a improvisar la exposición.

Los sucesos y los documentos mismos proponen las claves para su inteligencia. Mas deben llenarse nuestras omisiones, y rectificarse nuestro ensayo en una revisión cabal de los acontecimientos a la luz de las ideas y de la realidad.

No ampliamos ni ahondamos estas y otras reflexiones que se imponen. Los acontecimientos y los documentos las suscitan y volvemos sobre ellas en nuestra exposición.

En nuestro ensayo atendemos únicamente el periodo del 1 de enero de 1820 al 31 de enero de 1824. En él se explican las razones de esta limitación adicional. Con la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824 consideramos fundada la república federal. Los sucesos del agitado año de 1824, hasta la promulgación de la Constitución del 4 de octubre, corresponden ya a la historia de la Federación.

Sobre la publicación de un volumen reproduciendo los proyectos de constituciones para México, los que se formaron entre 1822 y 1824, basta señalar que los textos ilustran el significado de los acontecimientos y del conflicto, como proyectos políticos —monárquicos y republicanos— que sus autores consideraron posibles en el México de esos días. Su divulgación incitará a su estudio particular, que no intentamos en este volumen.

*

El autor deja constancia de varios reconocimientos que le obligan. Al licenciado Octavio Sentíes, jefe del Departamento del Distrito Federal, por haber aprobado la preparación y edición de estas obras conmemorativas. Al doctor Octavio A. Hernández por su previo interés en su realización, y como director de ellas por su más benévola comprensión ante las demoras que tuvimos en su conclusión. Al licenciado Carlos Gálvez Betancourt, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y al licenciado Ricardo García Sáinz, subdirector del Instituto, por haberme concedido tan liberalmente disponer del tiempo que destiné a la tarea de coordinar las obras y preparar la mía propia. Al licenciado Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, por el apoyo que me prestó en este trabajo y autorizar la reproducción de documentos del Archivo General de la Nación en el volumen segundo de *La Revolución de Independencia*. Al licenciado Mario Ramón Beteta, subsecretario de Hacienda, por su acuerdo para que en la Dirección de Estampillas y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se fotografiara la prensa insurgente y parte de los proyectos de constituciones. Estoy

obligado con el doctor Ernesto de la Torre Villar, director de la Biblioteca Nacional, por todas las facilidades de consulta que me brindó y por autorizar la reproducción de los proyectos constitucionales y de las portadas de folletos existentes en el Fondo Reservado. Al doctor Stanley R. Ross, vicerrector de la Universidad de Texas, y a ella, por autorizar la reproducción facsimilar del proyecto de Constitución Federal, y la del proyecto para una república central de S.F. Austin. A la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América por facilitarnos y permitirmos reproducir el proyecto monárquico de Constitución de José María Couto, existente en los Iturbide Papers.

Al bibliófilo don Manuel Porrúa por facilitarnos de su colección particular, y autorizarnos para reproducirlo, el proyecto de Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos. A don Antonio Pompa y Pompa y al Instituto Nacional de Antropología e Historia por su autorización para reproducir en el primer volumen de *La prensa insurgente* los siete números de *El Despertador Americano*, y en otros volúmenes ilustraciones del Museo Nacional de Historia. Al Centro de Estudios Históricos de Condumex y a don Juan Luis Mutiozábal, su director, agradecemos su autorización para reproducir ejemplares no conocidos del *Diario político militar mexicano*, de *El Mexicano Independiente* y de *El Ejército Mexicano de las Tres Garantías*, sobre los que nos llamó la atención don Antonio Martínez Báez.

Un reconocimiento nos obliga con la doctora Nettie Lee Benson, directora de la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Texas, quien inauguró el replanteamiento histórico sobre la fundación de nuestra república federal, por su bondadosa atención en nuestra consulta y copia de documentos, y por su inteligente interés en nuestra tarea. Al doctor Antonio Martínez Báez debo el haberme señalado la existencia del proyecto constitucional de José María Couto, y haberme proporcionado, el primero, los textos de los proyectos de S.F. Austin.

Dejo constancia de mi reconocimiento a la señorita Carmen Ruiz Castañeda por las facilidades de consulta que me concedió en la Hemeroteca Nacional, de la que es directora.

A la Biblioteca Benjamín Franklin, y en lo personal a la señora Jovita Zubaran, agradecemos su interés y diligencia para obtener copias de documentos en bibliotecas norteamericanas.

A don José Lozada Tomé, director de *Artes de México*, agradezco el facilitarme, autorizando su reproducción, varios de los retratos que aparecen en este volumen.

Finalmente expreso mi gratitud al licenciado Miguel Covián Pérez por el arduo trabajo de leer el original de mi obra, y por sus acertadas observaciones.

Dejo también constancia de la temporal pero valiosa colaboración de Ricardo Martínez Lacy en nuestra investigación.

La invariable paciencia de mi esposa me asistió al pasar en limpio el manuscrito de este volumen. La serena amistad de Rosario Castellanos nos acompañó en días de inquietud al redactar este ensayo. Nuestra gratitud no puede expresarse.

MANUEL CALVILLO
Coyoacán, marzo de 1974

Parte primera

EL PLANTEAMIENTO REVOLUCIONARIO

1

ACOTACIÓN CRONOLÓGICA Y CONDICIONALIDAD

Acotar entre dos fechas precisas acontecimientos de un proceso histórico puede ser útil y no deja de ser arbitrario. Un suceso quizá ocurre, se consuma, en una fecha dada. Registrar aquél y ésta, aun siendo imprescindible en el proceso, no ofrece en sí los elementos para descubrir su sentido. Y lo mismo podemos decir aun de una serie de acontecimientos comprendidos entre dos fechas. Mencionemos dos ejemplos.

La llamada Acta de Independencia de México se firmó el 28 de septiembre de 1821. No es debatible considerarla como el documento que verifica la consumación de nuestra independencia. Pero sí lo es aceptarla como el Acta de Independencia, como el acto de fundación y su constancia documental de la decisión de unos hombres que, en nombre de la nación, declaran expresamente que "queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del Trono español; que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo de su felicidad..." como se dijo en el Acta solemne de la declaración de la independencia de la América septentrional, firmada el 6 de noviembre de 1813 en Chilpancingo por siete diputados al Congreso de Anáhuac.

Podríamos decir que en esto no existe hoy problema o que, en todo caso, es un anacrónico o falso problema el cuestionar los dos documentos como extraños y aun contradictorios entre sí, o bien considerarlos consecuentes en un proceso sin solución de continuidad, que sería el de la independencia de México. El primer criterio es el de la polémica histórica entre liberales y conservadores, que postula la contradicción. El segundo respondería a un propósito conciliador, o dialéctico, aunque no sabemos de alguna exposición satisfactoria de él.

La escisión entre la insurgencia —1810-1820—, y la consumación de la independencia, a partir de o con base en el Plan de Iguala —24 de febrero de 1821—, hasta la abdicación de Iturbide emperador —de marzo de 1823—, parece evidente. Y no como herencia consagrada por la vieja polémica, o como desinteresado y fácil juicio posterior. La escisión es objetiva, mas las contradicciones no son simples. No lo son y aparecen en cualquier otro proceso por más que constituyan una unidad ideal. No nos referimos sólo a las contradicciones entre partidos, o facciones como se decía entonces, sino también a las contradicciones internas en la acción que se propone un sentido cierto y que incluso lo tiene. Importa que aparecen, y que a través de ellas puede desentrañarse la naturaleza de un conflicto. Sin entrar en detalles, y sin examinarlas, como ejemplo previo y revelador del conflicto hagamos dos citas de documentos fundamentales del periodo o episodio de la consumación.

En el Acta de 28 de septiembre de 1821 se declara que después de 300 años sin "libertad propia ni libre uso de la voz, (la nación) sale hoy de la opresión en que ha vivido". Se habla en verdad de consumación y, sin eufemismos, de opresión secular. Las mismas palabras sobre la opresión se venían repitiendo en los 11 años de la insurgencia americana. Pero el juicio del documento de septiembre de 1821 no coincidía con la Proclama de 24 de febrero de 1821 —apenas siete meses anterior—, en la que Agustín de Iturbide presentaba el Plan de Iguala. "Trescientos años hace la América Septentrional de estar bajo la tutela de la Nación más Católica y piadosa, heroica y magnánima", escribió entonces.

Las citas anteriores, más que a una mudanza en las convicciones de Iturbide, aluden a la ambigüedad de la situación en aquellos días, y a un conflicto difícil de soslayar. Atenderemos a ellos en otro lugar. La Proclama de 24 de febrero y el Acta de septiembre de 1821 plantean otra cuestión, pues el hecho de la consumación de nuestra independencia, en los términos en que se realizó en una fecha dada, fue una secuela del Plan de Iguala, al menos como documento público precedente. Aunque a su vez el proyecto de Iturbide y el Acta de Iguala fueron condicionados por la restauración constitucional española.

Lucas Alamán, el más autorizado historiador y político conservador, después de una página de intenciones probatorias, afirma: "Nada es pues, menos cierto que lo que suele decirse con jactancia, que Méjico ganó su independencia con diez años de guerra y sin auxilios de nadie". Y agrega: "La independencia se hizo, para usar las palabras mismas de Iturbide en su exposición a la regencia de 7 de diciembre de 1821, *sin efusión de sangre, sin destrozo de fortunas, y para decirlo de una vez, sin guerra,... Cualquiera escaramuza de la época pasada, costó más sangre americana que la grande obra de nuestra libertad...*". Alamán es todavía más concluyente en una página anterior. "Ninguna parte tuvo en ella —en la independencia consumada en 1821— la antigua insurrección, si no la muy remota de haber dado motivo a que se formara un ejército, y que éste después de algún tiempo hiciera la independencia".[1]

No vamos a examinar aquí el juicio de Alamán. Nos importa, sí, en cuanto acusa en los sucesos de esos días un significado peculiar dentro del proceso de la emancipación de México y de América.

Sin acudir ahora a otras consideraciones, creemos se justifica una acotación cronológica, y señalar dos fechas para ella: el 1 de enero de 1820 y el 31 de enero de 1824, fechas de la proclama del coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, sobre la restauración de la Constitución española de 1812, y fecha de la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación en México.

Nuestro propósito es también publicar los proyectos de constituciones que se hicieron para México entre 1822 y 1824; proyectos para una nación cuya independencia estaba consumada. No es innecesario insistir en la peculiaridad de esa consumación que condicionó, como se dijo, la historia inmediata y el carácter de los proyectos, hasta la constitución de la república federal en el documento de 31 de enero de 1823, aunque esta última consecuencia fue, y adelantemos el juicio, una liberación de la condicionalidad anterior.

[1] Lucas Alamán, *Historia de México*, México, 1942, tomo v, pp. 331-332.

* * *

La proclama del coronel Riego el 1 de enero de 1820 no inició la restauración constitucional en España, que venía de atrás a través de conspiraciones y patíbulos, inició sí, el episodio del trienio constitucional. Este episodio es, con los acontecimientos de 1808 a 1814 en España, los que se proyectan con más amplitud en América. La proclama de Riego no es sólo un documento consagrado por la victoria liberal española, es también ejemplar para la insurgencia americana. Ya las noticias llegadas en julio de 1819 sobre las prisiones de oficiales del ejército expedicionario para América, como conspiradores liberales, "pusieron los ánimos en movimiento en México, y al virrey Apodaca en consternación", escribe Lorenzo de Zavala, y agrega: "La solicitud del gobierno y su empeño en desacreditar las voces de este movimiento, eran un estímulo para darles mayor ascenso".[2]

Más tarde, con las noticias de que se había proclamado y de que Fernando VII había jurado la Constitución, "los adictos a la independencia se prometían conseguir ésta —dice Alamán— a favor de los trastornos que el nuevo orden de cosas debía producir, el cual proporcionaba para lograrla los medios eficaces de la libertad de imprenta, las elecciones populares y los ayuntamientos constitucionales...". Podríamos acumular más citas.

El general Tomás Iriarte, federalista de los años 1819 y 1820 en las Provincias del Plata, cuando redacta sus *Memorias* recapitula y enjuicia el año 20 de la anarquía: "Como si la providencia se hubiera interesado en la emancipación —escribe—, cuando más desaciertos cometíamos, cuando en fuerza de ellos era más inminente el riesgo de volver a la antigua dominación española, la revolución de Riego de primero de enero de 1820, en la Isla de León, puso término a los preparativos marciales del monarca español contra las antiguas colonias, y contra las del Plata" que habrían podido resistir menos a las armas españolas.[3]

Bartolomé Mitre habla de la acción de Riego como "el grito que lo ha inmortalizado, al proclamar al frente de las banderas la constitución del año XII, abriendo así la era de la libertad para su patria, a la vez que cerraba el periodo de la guerra de la América con su antigua metrópoli".[4] Con los historiadores argentinos, ve el otro aspecto del suceso que nos importa señalar, aunque sin citar textualmente la proclama de Riego, elocuente ella misma.

El 17 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura había aprobado la Ley Fundamental de la República de Colombia, uniendo Colombia y Venezuela, antes de trasladarse a Cúcuta en donde un nuevo Congreso promulgaría, el 12 de julio de 1821, la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia. El general Pablo Morillo había reconquistado Caracas, y Bolívar estaba empeñado en la liberación del territorio de Colombia y, contra la suerte de la guerra en Venezuela, en la realización de su proyecto de unión de los dos países. El 7 de mayo de 1820 escribía desde Cúcuta al general Santander: "Las noticias de España no pueden ser mejores. Ellas han decidido nuestra suerte, porque ya está decidido que no vengan más tropas a América...". El 1 de mayo había escrito a Guillermo White: "¡Golpe de fortuna! Aun-

[2] Lorenzo de Zavala, *Ensayo crítico de la Revolución de México desde 1808 hasta 1830*, en Lorenzo de Zavala, *Obras*, tomo I, *El historiador y el representante popular*, México, 1967, p. 84.

[3] Tomás Iriarte, *Memorias*, tomo I, *De la Independencia a la anarquía*, Buenos Aires, 1944, p. 396.

[4] Bartolomé Mitre, *Historia de San Martín y de la emancipación americana*, Buenos Aires, 1968, tomo II, p. 207.

que triunfe Fernando, ya no puede mandar otra expedición, sabiendo los expedicionarios cómo se han de quedar". Y el 19 de junio decía al general Soublette: "Aun los liberales mismos tendrán que halagar al ejército con la paz, porque la cuestión no es otra que la no venida a América; y el modo de calmar hasta la sospecha de este mal, es concluir la guerra".[5]

Los pronósticos no se cumplirían. Bolívar, en su entusiasmo, no contaba con la tenacidad o la obcecación españolas, aun en los días mismos de la desintegración del imperio, y en el más grave del último desistimiento.

Consultemos el documento que inspiraba tan seguras esperanzas, la proclama de Riego del 1 de enero de 1820.

"La oficialidad del Ejército de Ultramar, mirando el bien de la Patria y de las tropas —dice la proclama en su primer párrafo—, se ha decidido a tomar las armas para impedir que se verifique el embarque proyectado y establecer en nuestra España un Gobierno justo y benéfico..." para continuar en el tercero: "Los militares del Ejército expedicionario deben estar convencidos de los peligros que corren si se les embarca en buques medio podridos, aún no desapestados, con víveres corrompidos, sin más esperanzas para los pocos que lleguen, que morir víctimas del clima aunque sean vencedores. Deben también acordarse de la injusticia que les ha hecho el Gobierno, ya obligando a los cumplidos a continuar su servicio, ya trayendo batallones enteros hasta la orilla del mar".[6] Después, y en más breves palabras, Riego exalta el sistema liberal que restaurará. Mitre, que no cita la proclama de Riego, llama la atención sobre las palabras del general Antonio Quiroga, jefe militar reconocido de la rebelión liberal, al dirigirse el 2 de enero al ejército: "¡Soldados! Nuestra España iba a destruirse: con nuestra ruina iba a completarse la de la patria. Vosotros estabais destinados a la muerte, no para realizar *la reconquista ya imposible de la América*, sino para libertar al gobierno del terror que de vuestro valor ha concebido".[7]

Mitre señala la coincidencia de la rebelión liberal española y el derrumbe del gobierno centralista del director Rondeau en Buenos Aires ante las fuerzas federalistas de las provincias de la Liga del Litoral, y la decisión del general San Martín de no comprometer su ejército en la guerra civil de las Provincias del Plata, para realizar la campaña del Perú.

Aquí nos interesa señalar el significado de la proclama de Riego y de las palabras de Quiroga. Ambos dejaron dos testimonios, de los más elocuentes, sobre lo que fue el desistimiento imperial de España, anterior y más profundo que la crisis política del antiguo régimen español. Muy evidente se manifestó aquél desde el siglo XVII, y temprano, cuando el 17 de entro de 1609 en consulta del Consejo de Estado español se aceptaba, ante una realidad adversa, reconocer la libertad de las Provincias Unidas holandesas, sin garantía siquiera a la libertad religiosa de los católicos, libertad que dos años antes se postuló como irrenunciable. Un doble desistimiento, del poder político y de la guarda y defensa de la fe, era el que se iniciaba entonces.

La historia del desistimiento español es compleja, contradictoria y polémica. Sería vano el intento de aludir a ella.

[5] Simón Bolívar, *Obras completas*, La Habana, 1950, tomo I, pp. 428, 431 y 453.

[6] Maximiano García Venero, *Historia del parlamentarismo español (1810-1830)*, Madrid, 1946, p. 275.

[7] Bartolomé Mitre, *op. cit.*, tomo II, pp. 207-208.

Volvamos al documento de Riego. No es hipótesis el aceptarlo como testimonio de ese desistimiento, del que en verdad habría una pronta retractación liberal.

La historia de España que importaba en esos días era la peninsular. Y por más que a lo largo de tres siglos vio estrechadas sus fronteras europeas hasta la línea de los Pirineos, fue la que importó, y fue esa historia y fueron sus intereses continentales los que dictaron la política de la monarquía mas sin llegar en ella a una tan expresa declaración. El mismo proyecto del conde de Aranda en 1783 sobre los reinos independientes de América tenía otro sentido, al igual que los proyectos menos lúcidos y audaces de Manuel Godoy. Paradójicamente, en la causa liberal por cuya victoria se resignaba circunstancialmente el dominio de América, fue en la que los americanos participamos por primera vez en la historia de España, incluso reclamados por ella misma. Lo que significó esa primera y última fatiga en común —lo fue en gran parte—, no lo hemos esclarecido del todo ni en España ni en América.

Se confesó en la proclama de Riego, y en las palabras de Quiroga, el claro desistimiento de lo que para éste, Quiroga, era ya en esas fechas una expedición de "*reconquista imposible de la América*".

El nombre de Rafael de Riego fue pronto sinónimo de libertad y heroísmo, pero su proclama no se reimprimió en México, lo que no quiere decir que permaneció desconocida. Como otros documentos de la época, y anteriores, llegó a México y se conoció. Lo mismo había ocurrido con el Manifiesto a la Nación de 30 de octubre de 1807, en el que Carlos IV informaba del descubrimiento de la conspiración del Escorial, "el más enorme y temerario plan que se ha trazado en mi mismo palacio contra mi persona", y con el Decreto de 5 de noviembre de ese mismo año en el que se transcribían las dos cartas del príncipe Fernando a la reina y el rey confesando su culpa y pidiendo el perdón real, que se le concedía en el decreto.[8] El virrey Iturrigaray no autorizó la publicación de los documentos oficiales en la *Gaceta del Gobierno de México*. En Nueva Galicia, su comandante general, Roque Abarca, informaría más tarde a la junta Suprema de Sevilla que se "quemó estos horrorosos papeles, contemplándoles forjados por algún traidor...", y la Real Audiencia de México, que los guardó "quedando sepultado el secreto entre nosotros".[9] El descrédito de la casa real de España también quedó entre nosotros sepultado en secreto, acumulando los papeles de 1808 en Bayona y la correspondencia de Carlos y Fernando con Napoleón I, y la de la reina Luisa y de su hija la princesa de Etruria con el duque de Berg, papeles publicados en 1814 por Juan Antonio Llorente en las *Memorias para la Historia de la Revolución Española con documentos justificativos, recogidos y compilados por Juan Nellerto*, obra que burló la vigilancia absolutista en América. También fueron mencionados los documentos por Álvaro Flores Estrada en su representación a Fernando VII "en Defensa de las Cortes", editada en Londres en 1819 y seis veces en España y una en Mé-

[8] Conde de Toreno, *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*, Madrid, 1839, tomo I, pp. 14 y 17-18; Manuel Godoy, *Memorias críticas y apologéticas para la historia del reinado del señor D. Carlos IV de Borbón*, Madrid, 1956, tomo II, pp. 202, 206-207; *Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España*, Madrid, 1842, tomo I, pp. 46-47 y 51-53 (obra atribuida sin contradicción a Estanislao de Koska Bayo. En adelante se citará como Bayo).

[9] Enrique Lafuente Ferrari, *El virrey Iturrigaray y los orígenes de la independencia de México*, Madrid, 1951, p. 75.

xico en 1820, a la que nos referiremos más adelante. Importa no olvidar que esos hechos no eran desconocidos en México, aunque *conocidos en secreto.*

Los documentos en que Fernando aceptó su culpa y el haber delatado a sus cómplices, eran para Abarca "forjados por un traidor". Cabe preguntarnos cuál fue la calificación, también sepultada en secreto, para las palabras de Quiroga y la determinación de Riego, que dejaban a las autoridades y a los realistas de América, absolutistas y liberales, entregados a sus propias fuerzas.

En la sucesión inmediata de los hechos, y desde el principio de la revolución liberal, la amenaza para unos y la esperanza en otros fueron ciertas. Luis Gonzaga Cuevas afirmó que en México "todas las autoridades superiores decididas a mantenerse por un sentimiento de conveniencia y también por fidelidad, se hallaban convencidas de que el cambio que se habla proclamado no hacía otra cosa que propagar contra sus mismas intenciones la opinión en favor de la independencia".[10] La revolución liberal incitaba a combatir directamente los fundamentos del sistema colonial en América, y venía a sustituir las instituciones del antiguo régimen por las de una ideología que era profesada o alegada por los partidarios de la independencia. Ello, agravado por esa renuncia a la *reconquista* que hacían desde el primer momento los mismos jefes de la revolución. La situación no sólo se planteaba así. Existe otra secuencia en los acontecimientos de aquellos días, los de la restauración constitucional española, y la han señalado los historiadores contemporáneos a ella.

Carlos María de Bustamante refiriéndose a la restauración liberal en España, y al juramento de la Constitución en México, escribió: "yo no la miraré —a la Constitución— como una obra política consumada; pero sí aseguraré que a su adopción debimos el feliz tránsito que hicimos hacia nuestra independencia y libertad". La opinión por ella creció, "y acabó de reunir a casi todos en el punto de la independencia la conducta estrepitosa y antipolítica que adoptaron las Cortes de Madrid, tratando de hacer innovaciones violentas en asuntos eclesiásticos y con lo que dieron ansa a estas corporaciones para que las calificasen de heréticas...".[11]

"El alto clero y las clases privilegiadas —escribió Zavala— que veían aparecer de nuevo los principios revolucionarios del año de 1812, y que consideraban en peligro sus rentas y beneficios, se unieron como por instinto a oponer una barrera insuperable, a su modo de ver, al restablecimiento de la Constitución española que tanto había debilitado su influjo".[12]

Zavala es más preciso. La oposición en México fue, desde un principio, a la Constitución misma y al constitucionalismo doceañista, sin esperar a la legislación de las Cortes de Madrid, que se instalarían el 6 de julio de 1820.

[10] Luis Gonzaga Cuevas, *El porvenir de México*, México, 1954, p. 25.

[11] Carlos María de Bustamante, *Cuadro histórico de la revolución mexicana*, México, 1926, tomo v, p. 78.

[12] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 293-296; Miguel Artola, *La España de Fernando VII*, Madrid, 1968, pp. 659-661.

2

LA RESTAURACIÓN CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA

Hagamos referencia al breve periodo de la restauración constitucional bajo la Junta Provisional de España, hasta el 29 de agosto, cuando se da la noticia de la instalación de las Cortes en Madrid el 6 de julio, y del juramento de la Constitución que hizo el rey ante ellas.

Las noticias públicas iniciales las encontramos en la *Gaceta del Gobierno de México* a partir del 1 de junio de 1820, con la de la restauración de la Constitución del año 12. El día 3 apareció el Decreto de 9 de marzo creando la Junta Provisional, dos días posterior al del 7 en el que el rey declaró estar decidido a jurar la Constitución, y posterior en horas al restablecimiento del Ayuntamiento Constitucional de Madrid, ante el que Fernando juró por primera vez el Código de 1812. La Junta Provisional sería órgano consultivo en todas las providencias reales, que se publicarían con su acuerdo. Entre los individuos de la Junta Provisional, presidida por el cardenal de Borbón —personaje ubicuo que presidió altos cuerpos liberales y absolutistas— aparecían los nombres de Manuel Abad y Queipo y de Manuel Lardizábal –mexicano.

En esa misma *Gaceta* del día 3 se publicó el manifiesto de Fernando VII a la nación, del 10 de marzo, documento en el que dice aquello de "Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional". El manifiesto no dejaba de contener expresiones reveladoras "meditaba maduramente —declaró el rey—... las variaciones de nuestro régimen fundamental, que parecían más adaptables al carácter personal y al estado presente de las diversas porciones de la Monarquía Española" cuando "me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución", la de 1812, a lo que apareció ceder sin reticencias. Las reticencias, o mejor aún, la resistencia de Fernando consta en documentos también oficiales pero no publicados en México. Días antes, el 3 de marzo y frente a la revolución, el rey había firmado y publicó un manifiesto que no alcanzó a circular en las provincias, en el que hablaba de sus propósitos de "desterrar abusos envejecidos y arraigados, como también en reprimir innovaciones peligrosas e inmaturas", propósitos que no había podido llevar a cabo por "las circunstancias de la Europa, (y) las atenciones a nuestras descarriadas Colonias de esas hermosas y vastas posesiones del Nuevo Mundo". Hoy los realizaría, ofreció, "teniendo presentes las leyes fundamentales de la Monarquía y las variaciones que los tiempos y diversas circunstancias exigen en pro y utilidad del Estado", siendo además "una firme barrera y sostén fuerte contra las ideas perturbadoras del orden", pues no podía menos de advertir "que el genio del mal, inquieto y revoltoso, inspirando ideas demagógicas y revolucionarias, hace sentir sus terribles efectos en todas las Naciones, aun las más ilustradas, obligándolas a recursos fuertes para contener sus progresos". Consultaría a los tribunales superiores, a las corporaciones y a las

universidades, y aun a individuos, a través del Consejo de Estado. El 6 de marzo, presionado y sin el apoyo del ejército, Fernando resistió aún, con un decreto en el que ofrecía convocar las Cortes con "arreglo a las leyes fundacionales que tengo juradas...".[13]

El manifiesto del 3 de marzo, y el frustrado decreto del día 6, si bien no se publicaron en México, muy difícilmente pudieron ser desconocidos. Las noticias de los sucesos del 7 de marzo y de los días siguientes invalidaban y contradecían los documentos del 3 y del 6. Los acontecimientos presumen muy claramente una información más amplia en México, y aun se explican por ella.

Antes de atender los sucesos en México, volvamos a las resoluciones de la Junta Gubernativa, sancionadas en decretos reales, que se publicaron aquí en ese primer periodo de 1820.

En la *Gaceta* de 3 y 6 de junio se publicó el Real Decreto de 22 de marzo convocando a elecciones de diputados a Cortes de 1820-1821 y a las diputaciones provinciales, con las instrucciones especiales para las provincias de ultramar, que se complementaron después con el bando de 10 de julio, comunicando los arreglos de la junta preparatoria para efectuar las elecciones en la Audiencia de la Nueva España. Las elecciones de diputados a Cortes se efectuarían el 17 de septiembre siguiente, y el 18 las de diputados a las provinciales. El número de diputados por Nueva España sería igual al de 1812, con base en el censo del virrey Revillagigedo de 1794 que dio, según el decreto, una población de 3 180 044 habitantes de la que deberían descontarse 214 606 de castas. Los diputados serían 41, sin contar los de Yucatán. En tanto se realizaban las elecciones comenzaron a restablecerse provisionalmente las diputaciones provinciales, con sus diputados de 1814, de acuerdo con el decreto de 30 de marzo. La primera en reunirse fue la de Yucatán —13 de mayo—, y la última la de México —20 de julio.[14]

El Ayuntamiento de la Ciudad de México se había reunido desde luego, cumpliendo el decreto de 17 de marzo, con sus individuos de 1814, y juró la Constitución el 10 de junio. El 8 del mismo mes se publicó en la *Gaceta* el bando con la real orden de 9 de marzo convocando a elecciones de alcaldes y ayuntamientos, las que se iniciaron también en junio. El mismo día apareció el decreto, del 9 de marzo, ordenando se pusieran al frente de las instituciones sujetos familiarizados y afectos a la Constitución.

El 31 de mayo el virrey Ruiz de Apodaca había jurado la Constitución ante la Real Audiencia, y después había recibido el juramento de ella. La presión del juramento constitucional el 26 de mayo en Veracruz influyó para que en México se hiciera antes de recibir las órdenes formales de España. El acto en México, precipitado y con escasa concurrencia, dice Alamán, "tuvo más bien el aspecto de una ceremonia fúnebre" no obstante las exterioridades de los repiques de las campanas y las salvas de artillería. A partir del 8 de junio, y la publicación de las disposiciones para que se jurara la Constitución en Nueva España, se fueron sucediendo los actos de juramento por las autoridades y cuerpos en la capital y en las poblaciones de las provincias. La restauración liberal era un hecho aceptado oficialmente.

En la ciudad de México 5 y sin publicarse aún el real decreto de 9 de marzo que suprimía el Tribunal de la Inquisición, éste cesó el mismo día 31 de mayo, abandonando su edificio y trasladando los presos a conventos y cárceles, según fueran sus procesos por causas reli-

[13] Maximiano García Venero, *op. cit.*, pp. 293-296.

[14] Nettie Lee Benson, *La diputación provincial y el federalismo mexicano*, México, 1955, pp. 44-45.

giosas o políticas. No fue sino hasta el 14 de junio cuando Ruiz de Apodaca comunicó al tribunal el real decreto que lo suprimía, y que ordenaba la libertad de sus presos por *opiniones políticas o religiosas*, "pasándose a los RR. Obispos las causas de estos últimos para que las substancien" de acuerdo con el decreto de las Cortes de 22 de febrero de 1813. El decreto se publicó en la *Gaceta* el 11 de julio. El mismo día 11 apareció el de 14 de marzo que restauraba el Supremo Tribunal de Justicia.

En la *Gaceta Extraordinaria* del 19 de junio, y en bando del mismo dia, el virrey publicó el real decreto de 11 de marzo ordenando el restablecimiento de la Constitución de 1812, por lo que, se expresaba, "se halla en toda su fuerza y vigor cuanto ella comprende, y especialmente en lo relativo a la seguridad personal de mis súbditos y a la libertad de imprenta". Se ordenaba la inmediata reunión de las juntas de censura con los individuos nombrados por las Cortes en 1813. La libertad de imprenta se regirá por los decretos de 10 de noviembre de 1810 y 10 de junio de 1813.

En Madrid se reunió la junta con los que la formaban en 1814, entre ellos José Manuel Quintana y Pablo de la Llave —mexicano.

* * *

Los que, según Alamán, eran para los partidarios de la independencia "medios eficaces" para conseguirla, estaban dados. Paradójicamente, ellos y las disposiciones que siguieron llegando a España en la restauración liberal, movieron otros ánimos, precisamente los más adversos a la emancipación, y la historia seguiría un curso extraño pero no incongruente, que la llevaría hasta la consumación de nuestra independencia.

Por la *Gaceta* del 25 de julio y por oficios directos, el conde de Venadito circuló, por orden de 11 de abril del ministro de la Gobernación de Ultramar, el manifiesto que Fernando VII dirigió a los habitantes de Ultramar "La triste experiencia de seis años, en que los males y desgracias se han ido acumulando —declaraba el rey— por los mismos medios que se juzgaba debían hacer la felicidad; el clamor general del pueblo de ambos hemisferios y sus demostraciones enérgicas, me convencieron al fin de que era preciso retroceder el camino que incautamente había tomado; ... (y) me he adherido a sus sentimientos, identificándome sincera y cordialmente con sus más caros deseos que son los de adoptar, reconocer y jurar, según he ejecutado espontáneamente, la Constitución formada en Cádiz...". A los insurgentes de América les decía: "Ya tenéis lo que hace tanto tiempo buscáis a costa de inmensas fatigas... de guerras sangrientas, de asombrosa desolación y de extremo exterminio. Hemos adoptado un sistema más amplio en sus principios y conforme con el que habéis manifestado vosotros mismos... La Metrópoli os da el ejemplo; seguidle..., vuestros hermanos de la Península esperan ansiosos a los que vengan enviados por vosotros para conferenciar con ellos como iguales suyos, sobre el remedio que necesitan los males de la patria y los vuestros particularmente...". El manifiesto concluía con una patética enumeración de infortunios si los insurrectos americanos no accedían a la concordia.[15]

Para don Juan Ruiz de Apodaca, el publicar la confesión real sobre la "triste experiencia

[15] Rafael de Alba, *La Constitución de 1812 en la Nueva España*, México, 1912, tomo II, pp. 180-183.

de seis años" fue un amargo cumplimiento. No seis años antes, sino cuatro, el 22 de mayo de 1816, el virrey había circulado por bando la real cédula de 20 de marzo. En ella se mencionaba cómo se recogieron en España cinco impresos con los títulos de *Catecismos políticos y lecciones políticas*, publicados entre 1812 y 1814, cuya doctrina se calificó de "subversiva, sediciosa y destructora del orden público", propagando errores teológicos, y proponiéndose destruir la monarquía. Los fiscales del Consejo de Indias consideraron que los escritos resultaban más perniciosos en América, por lo que se mandó recogerlos, así como los de igual especie.

La fidelidad de Ruiz de Apodaca al rey, como la de tantos españoles y hasta criollos antiliberales, pasó por una dura prueba. Oficialmente se siguió cumpliendo con el rito formal de publicar las reales órdenes y decretos que sancionaban, en ese primer periodo, las decisiones de la Junta Gubernativa de España.

El 16 de julio se publicó el decreto de 26 de abril indultando a los españoles —los afrancesados—, que habían seguido a José Bonaparte.

La *Gaceta* de 17 de agosto publicó el decreto de 24 de abril que ordenaba a todos los dedicados a la enseñanza, eclesiásticos y seglares, que explicaran la Constitución en sus cátedras. Quienes durante seis años habían profesado contra las herejías constitucionales, debían por decreto exaltar en adelante sus virtudes, y acudiendo a las sediciosas doctrinas expuestas en los *Catecismos y lecciones* proscritas en 1816 por el mismo virrey que hoy las juraba en México. Pero ya existía en esa fecha un distinguido ejemplo de retractación. El obispo de Puebla —Antonio Joaquín Pérez—, presidente de las Cortes españolas en 1814, cuando su disolución por el real decreto de 4 de mayo de 1814, y además suscriptor *a posteriori* vergonzante de la representación de "los persas" del 12 de abril anterior, pidiendo al rey aquella derogación constitucional, se había anticipado a la publicación de las exigencias liberales con su pastoral de 27 de junio, haciendo una calurosa apología de la Constitución. El obispo, sin grandes ni pequeños escrúpulos, recordaba otra pastoral suya, absolutista, de 18 de noviembre de 1816, comentando la encíclica de Pío VII, de 30 de enero de ese año, que exhortaba a los insurrectos americanos a volver, como súbditos, a la fidelidad de Fernando VII. El obispo Pérez prescribe en junio de 1820 que una vez jurada la Constitución por el rey, "queda por consiguiente anulada y proscrita toda doctrina que a ella pueda ser de cualquier manera contraria; y en esta censura declaro con cuanta solemnidad sea necesaria, que están formalmente comprendidas todas y cada una de las expresiones, que sean, o puedan ser injurias en la referida pastoral —la de noviembre de 1816—, única producción en este género que reconozco".[16]

Con demora, Ruiz de Apodaca publicó en la *Gaceta* del 14 de noviembre el real decreto de 24 de abril, en cuanto imponía a los prelados cuidaran que los párrocos explicasen desde el púlpito la Constitución.

Antes, en la *Gaceta* del 26 de agosto se había publicado el decreto de 15 de abril, por el que se restablecían en pleno vigor los de las Cortes del primer periodo constitucional sobre América, refiriéndose expresamente al de 9 de noviembre de 1812 que abolió "las mitas, o mandamientos, o repartimientos de indios, y todo servicio personal que bajo aquellos u otros nombres presten a particulares", o a cualquiera corporación, o curas párrocos. El mismo día

[16] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, tomo III, p. 263.

26 se publicaba el de 8 de marzo ordenando la libertad de "todos los que se hallen presos o detenidos en cualquier punto del Reino por opiniones políticas..., igualmente que todos los demás que por las mismas causas se hallen fuera del Reino...". El 13 de octubre apareció el bando del virrey comprendiendo a los enjuiciados por infidencia.

En la *Gaceta Extraordinaria* de 26 de agosto se dio la noticia de la instalación de las Cortes en Madrid, el 9 de julio, y del juramento que ante ellas prestó Fernando VII.

Si no había desobediencia de Ruiz de Apodaca a las disposiciones liberales que llegaban de Madrid, sí es notoria su cauta negligencia para publicarlas. Aun después de conocerse la instalación de las Cortes seguían apareciendo en México decretos emanados de la ya extinta Junta Gubernativa, como el de 19 de abril sobre la reposición de funcionarios liberales depuestos al abolirse en 1814 la Constitución, abonándoseles sus sueldos desde la fecha de su separación. Y algunos tan inquietantes como el de 26 de marzo por el que, de conformidad con el decreto de 17 de agosto de 1812, se reiteró que todo el que se resistiese a jurar la Constitución, o lo hiciere con protestas o reservas sería indigno de considerarse español, y quedaría destituido de honores, empleos, emolumentos y prerrogativas civiles, expulsándosele de la monarquía; y siendo eclesiástico, se le ocuparían además sus temporalidades. En las reales órdenes del 1, 3 y 5 de julio, posteriores a la instalación de las Cortes, y publicadas en México el 25 de noviembre, el rey hacía constar que habiendo restaurado en general los decretos del primer periodo constitucional, precisaba varios de ellos del año de 1812, entre los que citaremos el de 5 de noviembre, sobre límites de las jurisdicciones eclesiásticas, militar y ordinaria; el de 12 de abril, para que los empleos se dieran a amantes de la Constitución; el de 15 de septiembre sobre la formación de las juntas preparatorias para elegir diputados a las Cortes y a las diputaciones provinciales, y el de 21 de septiembre disponiendo que los eclesiásticos regulares tendrían voto en las elecciones de ayuntamientos, pero no podían ser elegidos. El rey hacía méritos constitucionales al recordar su interés restaurador.

Si atendemos a los anteriores decretos de las Cortes que se restablecieron mencionándose concretamente, es evidente que no se afectaba con novedades, al menos extrañas al primer periodo constitucional, los privilegios e intereses eclesiásticos. Aunque, como Alamán lo señala, el clero, "persuadido de que restablecida la Constitución, seguirían los liberales ejecutando las reformas que habían comenzado a introducir en su perjuicio, veía con terror la próxima instalación de las Cortes...".[17]

No debe olvidarse que el constitucionalismo doceañista tuvo una precaria y efímera vigencia en México, aunque, como también asienta Alamán, "las impresiones que dejó en los espíritus fueron profundas y duraderas, porque fueron las primeras de esta naturaleza que recibieron y —agrega como censor— funestos sus efectos que todavía se perciben". Con un criterio liberal adverso al de Alamán y suprimiendo el adjetivo *funestos*, se puede hacer el mismo juicio.

En el año 1820 en México no ocurrió más que la restauración constitucional de un liberalismo moderado. La Iglesia, el gran cuerpo eclesiástico, no había padecido en sus privilegios. Antes, por decreto de 8 de mayo de 1811 se hizo extensivo a América, después de acalorado debate con los diputados americanos, el préstamo forzoso ordenando recoger la plata y oro de

[17] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 29.

las iglesias y corporaciones piadosas que no fuese "absolutamente necesario para el culto", para destinarse a la defensa de España. Pero el decreto no se publicó ni cumplió en México. Las propias Cortes, por decreto de 16 de abril de 1811 exceptuaron a América de la aplicación del de 1 de diciembre de 1810 por el que se suspendía la provisión de prebendas, raciones, beneficios y otras piezas eclesiásticas, destinándose sus rentas a auxiliar las obligaciones de la nación. El decreto de 18 de febrero de 1813, de "providencias interinas sobre el restablecimiento de algunas casas religiosas", sólo se refería a las de España que por la guerra habían sido dispersadas. No obstante, el encabezado del decreto declaraba que se dictaba "sin perjuicio de las medidas generales que se sirvan adoptar (las Cortes) cuando llegue el caso de resolverse el expediente general sobre la reforma de éstos" (los regulares). El proyecto de reforma era conocido en México, al menos por los interesados, y se había discutido públicamente y con encono en los papeles de Cádiz a partir de septiembre de 1812. Tres cartas de fray Francisco Alvarado, *El Filósofo Rancio*, en octubre y noviembre de ese año, prevenían contra el proyecto.

Otro decreto afectaba a algunas órdenes religiosas. El 13 de septiembre de 1813 se ordenó que las nuevas reducciones y doctrinas de indios de ultramar, con diez años de reducidas a cargo de religiosos misioneros, se entregaran inmediatamente a los ordinarios eclesiásticos correspondientes. Los religiosos podrían ir en misiones a otros lugares, y los obispos y prelados podían destinar religiosos a tenientes de curas, sin que pudieran aspirar a párrocos. Los religiosos cesarían inmediatamente en la administración de las haciendas de indios, y quedarían a cargo de ellas los que éstos eligieran por medio de sus ayuntamientos y con intervención del jefe superior político. Si el decreto afectaba a algunas órdenes, no era una novedad introducida por el liberalismo. Había una antigua rivalidad entre los cleros secular y regular, y la corona venía disminuyendo la influencia del último desde el siglo XVIII.

Importa señalar esa primera etapa de la restauración liberal, hasta la instalación de las Cortes en Madrid el 9 de junio de 1820, de la que se da noticia en México el 29 de agosto. Con las nuevas Cortes se iniciaría la gran escalada liberal española.

En México se realizaron, entre agosto y noviembre de 1820, las elecciones de los diputados a las Cortes y a las diputaciones provinciales. En tanto llegaban a Madrid los diputados americanos, la representación de ultramar se integró con suplentes aplicando las mismas disposiciones de 1810, que concedió 30 a todo el imperio ultramarino de América y Asia, dando motivo a las más airadas protestas de los americanos residentes en España. Volveremos sobre estos hechos más adelante, aunque consignando que esa discriminación inicial era conocida en México desde el 3 y el 6 de junio, al publicarse la convocatoria a elecciones.

* * *

Por ahora conviene llamar la atención sobre el hecho de que si bien no fue sino hasta el 29 de agosto cuando se conoció en México la instalación de las Cortes, con independencia de que se fueran publicando los decretos de ellas, a partir del 26 de septiembre se anunció la venta de los cuadernos de las sesiones de las Cortes. No sólo se divulgaría el texto formal de los decretos; a la prensa española que llegara se sumaba el conocimiento directo de los debates en las Cortes. Seguir la difusión de ellos y su influencia sería una de las investigaciones más sugestivas aunque hasta hoy no ha tentado nuestra curiosidad en México.

Desde sus primeras sesiones, las Cortes se ocuparon de los diputados firmantes del célebre manifiesto de "los persas" en 1814. La Junta Gubernativa no dictó ninguna resolución sobre ellos, y dejó el asunto a las Cortes que se reunirían en junio. En tanto, la junta los confinó en monasterios.[18] "Las Cortes, por decreto tardío de 26 de octubre, deseando dar una nueva prueba de generosidad", relevaron a los 69 diputados "de la formación de causa y sus resultas", con las condiciones siguientes: 1º quedaban privados de "empleos, honores, condecoraciones y cualquiera otra gracia que tuviesen antes del 4 de mayo de 1814", y de las obtenidas desde aquella fecha. 2º La privación prescrita era extensiva a los cargos públicos, "y con respecto a los eclesiásticos a la ocupación de sus temporalidades". En los artículos 3o. y 4o. se declaró que habían perdido la confianza de la nación, y que "si alguno de ellos quisiese ser juzgado por el Tribunal de Cortes no se le negará el juicio con arreglo a la Constitución".[19] El decreto, que no se publicó en México, era aplicable al obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, a Ángel Alonso Pantiga y a José Cayetano de Foncerrada, que también suscribieron el manifiesto como diputados por Yucatán, y Valladolid de Michoacán. Pero éstos no figurarían en el periodo que nos importa.

El 21 de enero de 1821 Ruiz de Apodaca informó al ministro español de Gracia y Justicia, que al saberse lo resuelto sobre "los persas" se inquietó Puebla, hubo juntas clandestinas, y "se atribuían también al mismo obispo —según la versión de Alamán manejos e inteligencias para eludir la pena decretada". Los cuerpos religiosos habían pedido a Apodaca suspender el decreto, atendiendo a lo que el obispo había logrado en la pacificación de la provincia. Apodaca pedía que no se aplicase el decreto al obispo de Puebla, y en España, el Consejo de Estado, consultado por el ministro, aprobó la discreción del virrey, aunque sin opinar en definitiva sobre la no aplicación del decreto".[20] Debemos tener presente que el inquieto obispo de Puebla estaba enterado de que en las Cortes se trataba el asunto de *los persas* desde septiembre de 1820, al llegar a México las actas con los debates de ellas.

Mencionamos el caso del obispo de Puebla como extremo, aunque no extraño al de la generalidad de las altas jerarquías eclesiásticas y civiles, que durante seis años habían exorcizado a la Nueva España del liberalismo.

Mas precisemos por ahora una primera fecha, la del 16 de agosto de 1820, cuando se informó oficialmente en México la instalación de las Cortes en Madrid.

Las referencias a la legislación doceañista restaurada por la Junta Gubernativa de España muestran que no se causaba perjuicio a los privilegios eclesiásticos, excepto en la extinción del Tribunal de la Inquisición, y con la restauración de la libertad de imprenta, no aceptada por las jerarquías, aun con la limitación expresa en el artículo VI del decreto de 10 de noviembre de 1810, que imponía a los escritos sobre materias de religión "la previa censura de los Ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento". Aunque, por otra parte, en

[18] Miguel Artola, *La España de Fernando VII*, Madrid, 1968, p. 674.

[19] *Colección de órdenes y decretos de la primera legislatura de las Cortes ordinarias*, Madrid, 1821, tomo VI, pp. 255-256. La colección de los decretos y órdenes de las Cortes en los dos periodos constitucionales de 1811-1814 y 1820-1823 se comenzó a imprimir en Cádiz en 1811 y se continuó, numerando sucesivamente sus volúmenes hasta 1823, en Madrid. En adelante se citarán los decretos de los dos periodos remitiendo a la fecha de ellos.

[20] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo V, pp. 50-51.

el artículo XXXII del reglamento de la Junta de Censura de 10 de junio de 1813, se establecía que las pastorales, instrucciones y edictos de los arzobispos y obispos, prelados y jueces eclesiásticos que contuviesen expresiones contrarias a la Constitución, las leyes, el rey o la Regencia, tendrían el mismo trámite constitucional que los decretos conciliares y bulas pontificias, o sea, serían suspendidos y recogidos, y si hubiese méritos, se formaría causa a los autores ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Se dijo que las Cortes del primer periodo constitucional 1810-1814 no resolvieron sobre la reforma de los regulares y la desamortización de bienes eclesiásticos, aunque en ellas se trató la cuestión. El *Dictamen de las Comisiones encargadas de informar a las Cortes sobre el restablecimiento y reforma de las casas religiosas*, que finalmente dio lugar al decreto ya citado del 26 de agosto de 1813 —que únicamente se refería a comunidades religiosas dispersadas en la península durante la guerra contra Napoleón—, fue impreso en Cádiz en 1813, y llegó a América. Ciertamente preocupó a los interesados. No era infundado, ni en México ni en España, prever que las Cortes se ocuparan de nuevo de la reforma. El 1 de octubre de 1820 quedó aprobado el decreto de supresión de monacales y reforma de regulares, después de que el 1 de septiembre se declararon desaforados y sujetos a la jurisdicción ordinaria los eclesiásticos seculares y regulares, si eran reos de delitos que. merecieran penas *corporis aflictiva*. Ambos decretos fueron precedidos por el de 17 de agosto suprimiendo la Compañía de Jesús, curiosamente restableciendo este último la ley IV, título 26 del libro primero de la Novísima Recopilación o sea, el Real Decreto de Carlos III de 3 de septiembre de 1773. Los tres decretos se publicaron en México en la *Gaceta* de 23 de enero de 1821.

Refiriéndose al proyecto de reforma de los regulares, de 1813, Miguel Artola señala su origen en el siglo XVIII y su doble significado de reducir el clero regular a funciones más puramente religiosas, al mismo tiempo que se liberaba una parte de la propiedad eclesiástica, haciéndola accesible a particulares para incrementar su rentabilidad.[21] En 1820, la reforma es "el punto de arranque de una renovación política" que llevó al definitivo enfrentamiento con la Iglesia y con el rey, quien había negado su sanción al decreto, cediendo finalmente el 26 de octubre ante la unión de liberales moderados y exaltados que impusieron su publicación.[22] El rey se preparaba a salir de Madrid al Escorial, cuando el 25 de octubre, día de su viaje, los secretarios del despacho le advirtieron que se producirían tumultos para detenerlo hasta que firmase el decreto. "Violentando así el ánimo real, cedió Fernando lleno de desprecio y de rabia... adorado por unos mientras otros lo humillaban y escarnecían —según Bayo—, robustecíase en el pecho del rey el odio a la Constitución y el amor al cetro absoluto".[23]

[21] Miguel Artola, *op. cit.*, pp. 508-509.
[22] *Ibid.*, p. 687.
[23] E. de K. Bayo, *op. cit.*, p. 207.

3

EL ANTILIBERALISMO DE MÉXICO
LAS REUNIONES DE LA PROFESA

Mas volvamos a los sucesos en México. La noticia de que Fernando VII aceptaba el triunfo constitucional se recibió en México el 29 de abril, y Ruiz de Apodaca y el Real Acuerdo se propusieron ocultarla. Alamán menciona que el virrey concibió "un plan para omitir del todo la publicación de la Constitución, conservando el gobierno bajo el pie establecido en las leyes de Indias".[24] No precisa cuándo se iniciaron las reuniones de los antiliberales en el convento de La Profesa, pero sí que aquellos "individuos de los más respetables de la ciudad, los cuales vieron con horror las ideas que se habían manifestado en las Cortes en materia religiosa... querían a toda costa oponerse a su propagación y ejecución en el país". El diligente canónigo Monteagudo y Miguel Bataller, regente de la Real Audiencia, debieron comenzar a reunir adictos, para obrar y no sólo desaprobar los sucesos de España, desde los primeros días de mayo, y aun antes. En las juntas se convino en declarar que Fernando VII no estaba en libertad al jurar la Constitución, por lo que se depositaría el gobierno en el virrey para que el reino de la Nueva España se conservara fiel al rey, permaneciendo independiente de España y rigiéndose por las Leyes de Indias, en tanto fuera vigente la Constitución de 1812 en la península. La actitud y los argumentos del Ayuntamiento de México en 1808, y los de Caracas, Quito, Santa Fe y Buenos Aires, ante las abdicaciones de Bayona, se reproducían con intención contraria.

Monteagudo, Bataller y el ex inquisidor José Tirado, son los que Alamán menciona como conjurados. Vicente Rocafuerte coincide mencionando también en 1822 los mismos nombres, y afirma que el proyecto de La Profesa "en substancia viene a ser el mismo que el de Iguala".[25] Lorenzo de Zavala se refiere al proyecto de Apodaca, y su abandono por el virrey al triunfo de la revolución en España, para que se fraguara otro en el que no intervino, aunque originado en el primero para declarar una "independencia que asegurase la monarquía en México y llamar un príncipe de la familia reinante en España". "Todos hablaban en este sentido —agrega— y el ejército mismo parecía tomar parte en el proyecto". Los diputados elegidos a las Cortes lo promoverían en ellas.[26] Atribuye a Iturbide este plan, para cuya realización "fingió entrar en unos ejercicios espirituales en la congregación de San Felipe Neri en donde dicen que se trabajó el Acta" —la de Iguala.[27] La versión de Zavala resulta incierta.

Bustamante no habla de La Profesa, pero confirma la repugnancia de Apodaca hacia la

[24] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 29.

[25] Vicente Rocafuerte, *Bosquejo histórico de la revolución de México, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide*, Filadelfia, 1822, p. 4.

[26] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 85-86.

[27] *Ibid.*, p. 88.

restauración constitucional, agregando que la comunicó a Fernando VII. Cumpliría el virrey las órdenes de España "solamente en lo muy preciso", sin comprometer la seguridad de su gobierno. Según Bustamante, Fernando acogió favorablemente la disposición de Ruiz de Apodaca, y le dio instrucciones para formar un partido fuerte que declarándose contra la Constitución lo invitase a trasladarse a reinar en México. José Presas, aventurero español que deambuló intrigando por América en la época de la independencia, publicó en 1828 una supuesta carta de Fernando VII a Ruiz de Apodaca en este sentido.[28] La carta la reprodujo Alamán, sin negar ni afirmar su autenticidad, pero admitiendo su verosimilitud, como veremos más adelante. La carta es de 24 de diciembre de 1820.[29]

Asegura Bustamante que el virrey hizo los preparativos adecuados, en tanto que en España los infantes reales concebían también aspiraciones al mismo trono. El plan llevaba a una contrarrevolución, en la que resultaba necesario un jefe americano aparente. Un eclesiástico, que no nombra Bustamante, propuso a Iturbide. Los antecedentes del candidato repugnaban al virrey, pero las objeciones se desvanecerían entrando Iturbide a ejercicios espirituales, reparando así la mala opinión que se tenía de él. Aceptado Iturbide, se le nombró Comandante del Sur para batir al general Guerrero.[30] La sumaria relación de Bustamante no esclarece lo ocurrido al narrarlo como un suceso simple.

El padre Mariano Cuevas se refiere al grupo de La Profesa como "aquellos hombres prudentes de la Nueva España en quienes aún vivía el sentido de responsabilidad... (y) pensaban que la Independencia mexicana era, no solamente lícita sino ineludible, y gravemente obligatoria su consecución", por los "verdaderos trastornos y catástrofes que tuvieron lugar en la España peninsular y que seriamente amenazaban a todos estos reinos de aquende los mares". Cuevas continúa en su tan personal estilo: "Vieron también claramente estos buenos señores que tenía que hacerse la Independencia, *manu militari*, y convinieron bien pronto *nemine discrepante*, en que el hombre para llevar a cabo tan difícil empresa era solamente el Coronel D. Agustín de Iturbide,[31] ya exonerado de las acusaciones por su conducta cuando era jefe militar en el Bajío Además, ya convencido también de la necesidad de la independencia, Iturbide aceptó la misión. Extrañamente, Cuevas que fue el primero en trabajar los Iturbide Papers en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, no ofrece más datos sobre las reuniones y el proyecto de La Profesa. Al padre Cuevas le preocupó más la inocencia de Iturbide en sus manejos por el Bajío que puntualizar lo tratado y el proyecto o proyectos que se hicieron en las juntas de La Profesa, así como las relaciones con el virrey.

W.S. Robertson, autor de la más acuciosa investigación y la obra más objetiva sobre Iturbide, se refiere a la restauración constitucional del año 20 en México, mencionando el decreto que suprimió la Compañía de Jesús, el que reformaba las órdenes religiosas, y el desagrado con que se recibieron. Menciona también la amnistía que desde el 17 de abril de 1820 había concedido el virrey y a la que se hablan acogido, según él, miles de insurgentes.[32] Pero Robert-

[28] José Presas, *Juicio imparcial sobre las principales causas de la revolución en la América española y acerca de las poderosas razones que tiene la metrópoli para reconocer su absoluta independencia*, Burdeos, 1828, pp. 82-84.

[29] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 71-72, 886-887.

[30] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 79.

[31] Mariano Cuevas, *El Libertador*, México, 1947, pp. 27-28.

[32] William Spence Robertson, *Iturbide of Mexico*, Durham, Carolina del Norte, 1952, pp. 52-53.

son ignora inexplicablemente los planes de La Profesa y la intención del virrey de desconocer el gobierno constitucional de España. Las ideas de Iturbide sobre independencia aparecen, al igual que su nombramiento de comandante del sur, sin relación con tales antecedentes.

* * *

Hemos acudido a las historias de Alamán, Bustamante y Zavala, por ser no sólo autores calificados sino también testigos muy inmediatos de los hechos, y partícipes en muchos de ellos, los más importantes. Bustamante publica el tomo V de su *Cuadro histórico* en 1827, y declara que lo inició en agosto de 1821. Zavala publica en 1831 su *Ensayo histórico de las revoluciones de México*, y habiendo sido diputado en el primer Congreso Constituyente, recoge los testimonios más cercanos a los acontecimientos anteriores. Rocafuerte escribe y publica su *Bosquejo* en 1822, y su detracción violenta de Iturbide no desautoriza su veracidad. Aunque no vive en México en ese año, su información revela una correspondencia contemporánea y amplia con personas bien enteradas de los sucesos. Anastasio Zerecero, abogado que se suma al Ejército Trigarante, y preso en 1822, no hace historia de los sucesos de entonces, aunque tal vez por los motivos que más adelante se verán. El silencio de Zerecero explica quizá el de muchos otros.

Volvamos a la *Historia* de Alamán, más precisa en sus referencias, aunque invariablemente omisa en los nombres. Continuando su relato sobre las juntas de La Profesa, dice que necesitando los conjurados contar con un jefe de crédito militar y confianza política, se pensó en Iturbide. Monteagudo y alguno, o algunos más, hablaron con él de su proyecto, y con su conformidad arreglaron una entrevista con el virrey. En ella, Ruiz de Apodaca "con las más doloridas expresiones, a la vista del retrato del rey, le expuso la opresión que sufría", y que por violencia había jurado Fernando la Constitución. Iturbide ofreció su persona.[33] La versión la recogió Alamán de Manuel Bermúdez Zozaya, abogado y hombre de las confianzas de Iturbide. En un discurso de Bermúdez Zozaya el 27 de octubre de 1841, en elogio de Iturbide, dio su versión pública. "Nuestro Iturbide supo la repugnancia del virrey a publicar aquí la constitución, ...bajo el especioso pretexto de hallarse el monarca sin libertad, permaneciendo las cosas en el pie que estaban hasta verse libre. Con esto aspiraba (Iturbide) a dar un paso hacia la independencia, con la mira de perfeccionarla después en la primera oportunidad... Ésta fue, señores —explicó—, la primera inspiración del Sr. Iturbide, en la que ni remotamente entró la idea de sostener el absolutismo, y mucho menos el despotismo inquisitorial, como muchos le atribuyeron después de salir el plan de Iguala, que nada tuvo que ver con ese primer proyecto, en el que se comprendía la Inquisición, porque existía, mas no porque se quería proteger por aquel hombre ilustrado". La oportunidad de Iturbide, según Bermúdez Zozaya, una vez abandonado el plan del virrey de desconocer la Constitución, se presentó días después de las elecciones de diputados a las Cortes de España. Iturbide concibió el proyecto de que los elegidos se reunieran en Veracruz, y suspendiendo su viaje a Madrid proclamaran la independencia, apoyados por las fuerzas a sus órdenes. El plan no se realizó por no aceptarlo los diputados, lo que Bermúdez calla. No quedó a Iturbide más que proclamar el Plan de

[33] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 62, 67.

Iguala que, dice en un exceso apologético, lo "concibió en la tarde del 24 de febrero... obra toda de su ingenio, sin cooperación alguna de otra persona".[34] Dentro del exaltado panegírico, las corroboraciones a la más mesurada versión de Alamán y a las restantes, se van complementando. La vinculación de Iturbide con el primitivo proyecto del virrey Apodaca fue tan evidente, que 20 años después, en 1841, Bermúdez Zozaya se sentía obligado a paliar su significado para exculparlo.

En la premiosa narración de Alamán son definidas las referencias al plan de Ruiz de Apodaca para no jurar la Constitución y mantener el país independiente del gobierno liberal de España, coincidiendo con lo que se fraguaba en La Profesa. La entrevista entre el virrey e Iturbide sólo pudo efectuarse antes del 31 de mayo, doliéndose Apodaca de la opresión del rey. La relación entre el virrey y los hombres de La Profesa resulta más que evidente. En cambio, no aparece tan precisa la fecha en que uno y otros abandonaron el proyecto original.

Según Alamán, al jurar el virrey la Constitución su plan quedó desconcertado. Jurada la Constitución en Veracruz el 26 de mayo, Ruiz de Apodaca consideró además la presión y aun la exigencia del juramento que harían jefes y oficiales españoles del ejército expedicionario en México, en su mayoría afiliados, como numerosos altos funcionarios, a las sociedades masónicas que ya existían en Nueva España.[35] La misma consideración explica también el que los hombres de La Profesa, y el propio virrey, pusieran sus ojos en un militar criollo no sospechoso de liberalismo, para dar la apariencia de una jefatura americana en el movimiento que preparaban. La identificación de Iturbide con el primer plan absolutista no es dudosa. El propio Alamán tiene una expresión inequívoca. "*Aunque el primer plan de Iturbide hubiese quedado desvanecido con la publicación de la Constitución* —subrayo las palabras de Alamán—, conocía bien (Iturbide) que esta misma publicación y todo lo que se había ido siguiendo, era un fuerte estímulo para la revolución y que ésta había venido a ser inevitable, pero que era menester darle conveniente dirección...[36] La intención original de mantener a México ajeno a la restauración liberal española no varió, aunque sí y muy sustancialmente su mortalidad. Si consideramos la cuestión de principios, el de evitar la contaminación liberal privó. En todo caso, desde mayo y junio Iturbide era un factótum en el escenario de la conspiración, y entre el juego o combate de intereses había llegado a una singular situación. Aceptar que después obró conforme a los dictados de su solo juicio, no es más que una aventurada hipótesis.

[34] Manuel Bermúdez Zozaya, *Oración cívica pronunciada en la Alameda el 27 de octubre de 1841*, México, 1841.

[35] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 68.

[36] *Ibid.*, p. 69.

4

LA SUBVERSIÓN LIBERAL

Si en esos meses, entre junio y diciembre del año 1820, había fundadas prevenciones antiliberales por la reunión de las Cortes, también existía esa profunda y duradera impresión que dejó el fugaz y limitado constitucionalismo de la primera época, de la que habla Alamán. Felipe Remolina Roqueñí publicó en 1971 un documento inédito de Carlos María de Bustamante, *La Constitución de Cádiz o Motivos de mi afecto a la Constitución*, escrito, como Remolina lo señala, en 1820, observando además que encontrándose avanzado el último movimiento de independencia, Bustamante no consideró oportuno publicarlo. Victoriano Salado Álvarez menciona el escrito inédito de Bustamante, dedicado "*al Pensador Mexicano*, protomártir de la libertad de imprenta", aunque borró la dedicatoria.[37] Comienza Bustamante su escrito quejándose de la "charlatanería" de quienes bendicen o vituperan la Constitución recién jurada de nuevo, y de que hasta el día no existiera una Cátedra de Constitución.

Se duele Bustamante de la engañosa vigencia del código en su primera época. El firmante del *Acta Solemne de la declaración de Independencia de la América septentrional*, de 6 de noviembre de 1813, escribe en 1820: "jurada ya nuevamente (la Constitución) y cimentada su estabilidad con lágrimas, con sangre y desengaños adquiridos en seis años, es obligación de todo Magistrado... dar idea de la parte que cada uno pueda de las ventajas que adquirirá la América y por ahora observando la Constitución". En nuestra insurgencia conmemorativa no deja de ser desconcertante leer esas palabras de un diputado al Congreso de Anáhuac, fundador de la República en México, que se proponía persuadir en 1820 a cada uno de sus lectores "que debe amar la Constitución como la única tabla que debe salvarla en la tormenta borrascosa del despotismo que nos ha agitado por trescientos años... y que debe dar la vida antes que consentir en la menor transgresión de ella". Por más que Bustamante no hubiese sido, al menos desde 1810, y no fuera un fidelista, su profesión de liberalismo distaba de ser insurgente al escribir.

Bustamante recuerda, aludiéndolas, antiguas y benéficas leyes fundamentales de España, atropelladas u olvidadas. "Sin embargo de todo esto —advierte—, y de que la pretendida Constitución antigua exista en sus primeros códigos y fueros, privado el Ciudadano del uso de su dignidad y derechos ha sido restituido a ellos por medio del Art. 3o. de la Constitución de España que declara: "*Que la soberana reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales*". Bustamante elogiará la libertad de imprenta, la supresión de la Inquisición, la igualdad civil y política, la limitación

[37] Victoriano Salado Álvarez, *La vida azarosa y romántica de don Carlos María de Bustamante*, México, 1968, p. 131.

del poder monárquico al restituirlo limitado como ejecutivo, la reforma judicial, la seguridad individual, la garantía de juicio ante juez competente, la inviolabilidad del domicilio, la reforma penitenciaria, la creación de las diputaciones provinciales, en fin, los establecimientos de la revolución doceañista de España. Elogiará también la legislación liberal de los años 13 y 14, años en los que él, acompañando a don José María Morelos, era diputado en el Congreso que declaró la independencia y promulgó en 1814 la primera Constitución republicana de México, la que en su artículo 5 declaraba "La soberanía reside originalmente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos...".

Bustamante cita el artículo 3 de la Carta de Cádiz, y parece no advertir o elude destacarlo como la clave revolucionaria en la Constitución. Más tarde, consumada la independencia y convocado el primer Congreso Constituyente, será él mismo quien con perspicacia y malicia la señalará al protestar, como diputado electo, por las limitaciones que al jurar el Plan de Iguala se ponía a su ejercicio. Y no será el único.

Bustamante cita el artículo 3 de la Constitución de 1812, y haciendo el elogio de ella seguramente olvida pero no ignora que en el proyecto de Constitución que presentó a las Cortes su comisión especial, el 17 de agosto de 1811, el artículo 3 venía redactado en términos más radicales: "*La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales* —para concluir—, y *de adoptar la forma de gobierno que más le convenga*". Menos podía ignorar que la Constitución de Apatzingán, de 24 de octubre de 1814, que él suscribió como diputado, ampliaba aun a la Constitución de Cádiz, declarando en sus artículos 2 y 3: "La facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberanía. Ésta es por su naturaleza imprescriptible, inenajenable, e indivisible".

La Constitución de Apatzingán se liga así más con el proyecto que con el texto aprobado en Cádiz. Según la comisión de las Cortes, en el discurso preliminar del proyecto, "la soberanía de la Nación está reconocida y proclamada del modo más auténtico y solemne en las leyes fundamentales de este código" —el fuero juzgo que menciona—, y se pregunta: "¿no era preciso que para sostener lo contrario se señalase la época en que la Nación se había despojado a sí misma de un derecho tan inherente, tan esencial a su existencia política?"[38] No importa aquí ocuparnos del propósito declarado en Cádiz de restaurar las leyes fundamentales de España, sistematizándolas y corrigiendo los abusos del despotismo.

Bustamante conocía también la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, de 21 de diciembre de 1811, que en sus artículos 143 y 144, decretaba: "Una sociedad de hombres reunidos bajo unas mismas leyes, costumbres y gobierno forma una soberanía". "La soberanía de un país, o supremo poder de reglar o dirigir equitativamente los intereses de la comunidad reside, pues, esencial y originalmente, en la masa general de sus habitantes y su ejercicio por medio de apoderados o representantes de éstos, nombrados y establecidos conforme a la Constitución". El documento fue precedido por el Acta Solemne de Independencia, aprobada por el Congreso de representantes de las Provincias Unidas, el 5 de julio del mismo año de 1811, expresando que "a nombre y con la voluntad y autoridad, que tenemos del

[38] *Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la comisión de Constitución el proyecto de ella*, Cádiz, 1811, p. 8.

virtuoso pueblo de Venezuela declaramos solemnemente al mundo, que sus Provincias Unidas son y deben ser de hoy más de hecho y de derecho Estados Libres, soberanos e independientes, tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos...".

* * *

A propósito de la cita que hace Bustamante del artículo 3 de Cádiz, llamamos la atención sobre la fraternidad o filiación de textos constitucionales que hasta la Constitución republicana de Apatzingán —de 1814— se manifiesta en el área del idioma. Las referencias formales son reveladoras. Las mismas variaciones verbales no alteran en manera alguna las coincidencias; diríamos que las acentúan. Ahora importa atender a la sola declaración de la titularidad de la soberanía.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que precedía la Constitución francesa de 3 de septiembre de 1791, en su artículo 3o. estableció: "El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer la autoridad que no emane de ella expresamente". En el artículo lo. del título III de la Constitución se reiteró así: "La soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. Pertenece a la Nación. Ninguna sección del pueblo, ningún individuo puede atribuirse su ejercicio". Continuando en el artículo 2o.: "La Nación, de la cual únicamente emanan todos los poderes, no puede ejercitarlos sino por delegación". Consignemos que el artículo 2o. de la sección II del capítulo 1 del título III, la Constitución estableció el sufragio censario, o sea, la nación representada por *el tercer estado.*

En la Constitución republicana francesa de 24 de junio de 1793, la constitución roussoniana, en los artículos 25 a 29 y 33 a 35 de su Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, se definió su naturaleza democrática: "La soberanía reside en el pueblo. Es una e indivisible, imprescriptible e innenagenable" (art. 25); "Ninguna fracción del pueblo puede ejercer todo el poder del pueblo; pero toda sección del pueblo soberano tiene derecho de expresar su voluntad con perfecta libertad" (art. 26). "Todo individuo que asuma la soberana deberá ser condenado a muerte por los hombres libres" (art. 27). "El pueblo tiene derecho de revisar, alterar y reformar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes las generaciones futuras" (art. 28). "Todo ciudadano tiene derecho a concurrir a la formación de las leyes, y a nombrar a sus mandatarios o agentes" (art. 29). "La resistencia a la opresión se deduce de los demás derechos del hombre" (art. 33). "Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección de éste y de cualquiera parte de él, es el más sagrado y el más indispensable de los deberes" (art. 35). El Acta Constitucional de la República concedía el voto universal y directo a los ciudadanos para elegir diputados al Cuerpo Legislativo (art. 7 y 8). La concepción de una democracia popular, que se proponía ser lo más próxima posible a la directa, estableció que los proyectos de leyes, para considerarse aprobados, requerían no ser objetados por una décima parte de las asambleas primarias de la mayoría de los departamentos (arts. 58 y 59).

Cualquiera que sea la interpretación que se pretenda dar a la institucionalización de la soberanía, reconociendo como titular al pueblo o la nación, la genealogía documental es concluyente.

Se han limitado las referencias a la sola titularidad, por más que ella no pueda ser, y no fue, concebida aisladamente.

Quince años antes de la promulgación de la Constitución francesa de 1791, el 4 de julio de 1776, se firmó el primer documento declarando la independencia de un pueblo en América: "Tenemos como verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres han sido creados iguales; que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos inenajenables; que entre ellos se hallan la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad. Que para asegurar esos derechos se han establecido los gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes justos del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno llega a ser destructora de estos fines, es un derecho del pueblo alterarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno..., y organizando sus poderes en la forma que crean más apta para hacer probablemente su felicidad".

Los representantes de las 13 colonias continuaban formulando la serie de agravios contra la corona inglesa, para concluir su expresa declaración de independencia. Ni en esta Declaración, ni en los Artículos de Confederación y Unión Perpetua entre los Estados, de 9 de julio de 1778, ni en la Constitución de los Estados Unidos de América, de 17 de septiembre de 1787, se acuña una expresión sobre la titularidad y significado de la soberanía. La Declaración de Independencia, redactada por Jefferson, es explicativa y además un acto de fundación. Los dos textos constitucionales dan por supuesta la titularidad de la soberanía *ejercida* por "los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General", con el alcance implícito y subversivo de que por ella y en su ejercicio podían llegar a la ruptura con el antiguo régimen colonial.

Para los diputados de las 13 colonias, la legitimidad para declarar su independencia y constituirse se fundaba en la inmutabilidad de estos derechos previos, y circunstancialmente en la violación de ellos por la corona y el Parlamento ingleses. Para un roussoniano se invierten los términos, pues el soberano, la sociedad, es legitimado por el pacto entre los individuos y "no tiene ni puede tener interés contrario al de ellos; por consecuencia —afirma Rousseau— la soberanía no tiene necesidad de dar ninguna garantía a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros... El soberano, por la sola razón de serlo, es siempre lo que debe ser". El radicalismo de Rousseau, contradictorio, se acusa más cuando dice que "no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni aun el mismo contrato social".[39]

Las citas solas extreman la ficción roussoniana, y aun la desnaturalizan, pero expresan el desiderátum de Juan Jacobo. Ambas ideas, la de soberanía y la del pacto social, y las declaraciones de los derechos del hombre, preñan los acontecimientos de esos días. Volvamos a ellos.

* * *

La cita del escrito de Bustamante nos llevó a la de textos constitucionales en los que la titularidad de la soberanía se atribuyó original o esencialmente al pueblo o la nación. De esos tex-

[39] Juan Jacobo Rousseau, *El contrato social o principios de derecho político*, en *Obras selectas*, Buenos Aires, 1966, p. 744.

tos importan aquí los de la Constitución española de 1812, lo que nos lleva a las Cortes de Cádiz.

El artículo 3o. se debatió los días 28 y 29 de agosto de 1811. El debate del artículo 3o. suponía el decreto de 24 de septiembre de 1810, fecha de la instalación de las Cortes. Ese día, el 24 de septiembre de 1810, después de una misa solemne, oficiada por el inevitable cardenal de Borbón, los diputados prestaron el juramento: mantener, sin admitir otra, la religión católica; conservar la integridad de la nación; conservar la corona a Fernando y a sus legítimos sucesores; desempeñar el encargo de la nación "guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar o variar aquellas que exigiese el bien de la nación".[40] Algunos diputados objetaron las restricciones del juramento pero finalmente lo aceptaron.

El juramento asentía con los términos de la convocatoria a Cortes, de 29 de enero de 1810, y que eran los de "acordar los extraordinarios medios y recursos que son necesarios para rechazar al enemigo", y arreglar "lo que conveniente pareciese para dar firmeza y estabilidad a la Constitución; y el orden, claridad y perfección posibles a la legislación civil y criminal del reino, y a los diferentes ramos de la administración pública...".[41]

Terminada la misa, el 24 de septiembre las Cortes se instalaron solemnemente en el Teatro Coliseo. Después de conocer y no resolver sobre la renuncia de la Regencia, tomó la palabra Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura, antiguo rector de la Universidad de Salamanca y canónigo de Villafranca. Torrero presentó un proyecto de decreto, que, en la versión de Toreno, coincide con el decreto aprobado por las Cortes ese mismo día.[42]

El conde de Toreno, José Queipo de Llano, diputado por Asturias, hace un relato sucinto de la sesión, de la que no existe versión taquigráfica. En el debate, que elogia, "pocos discordaron".[43] El decreto aprobado merecería transcribirse, pero nos referiremos únicamente a sus puntos esenciales: "Los diputados que componen este Congreso, y que representan a la Nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional". A continuación "reconocen, y proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo Rey al señor D. Fernando VII de Borbón; y declaran nula, de ningún valor ni efecto la cesión de la Corona que se dice hecha en favor de Napoleón I, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, *sino principalmente por faltarle el consentimiento de la Nación*" —subrayamos nosotros. Después se dividían los tres poderes, reservándose las Cortes el legislativo "en toda su extensión". Ratificaron a los individuos del Consejo de Regencia en sus cargos, debiendo éste *reconocer la soberanía nacional en las Cortes, y jurar obediencia a las leyes y decretos de ellas*, de acuerdo con la siguiente fórmula: "¿Reconocéis la soberanía de la Nación representada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias? ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes y constitución que establezca según los santos fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar? ¿Conservar la independencia, libertad e integridad de la Nación? ¿La religión católica apostólica romana? ¿El gobierno monárquico del reyno? ¿Restablecer en el trono a nuestro

[40] Conde de Toreno, *op. cit.*, tomo II, p. 208.
[41] *Ibid.*, p. 413; Maximiano Venero García, *op. cit.*, p. 74.
[42] Conde de Toreno, *op. cit.*, pp. 211-222.
[43] *Ibid.*, pp. 211-222.

amado Rey D. Fernando VII de Borbón? ¿Y mirar en todo por el bien del estado? Si así lo hiciéreis, Dios os ayude; y si no seréis responsables a la Nación con arreglo a las leyes". Se confirmaron los tribunales y las autoridades civiles y militares. Se declaró la inviolabilidad de las personas de los diputados, contra los que no se podría intentar *cosa alguna* sino de acuerdo con el reglamento especial que se formaría.[44]

Cuando se instale el segundo Congreso Constituyente de México, el 5 de noviembre de 1823, después del derrocamiento del imperio de Iturbide, su primer decreto será el de nombramiento de su presidente, vicepresidente y secretario, en "cumplimiento del artículo 118 de la constitución (la española de 1812 vigente en tanto se expidiera la aprobada por el Congreso, y en cuanto no contradijese la sola independencia), después de prestado el juramento que previene el anterior".[45] Ese decreto anterior fue el de 24 de febrero de 1822 "sobre la instalación del Congreso; bases constitucionales; autoridades que han de ejercer los poderes; juramento de la regencia", coincidente, como desde ahora señalamos, con el de las Cortes españolas de 24 de septiembre de 1812. En 1823 se suprimió en México en el juramento lo relativo al gobierno monárquico y los llamamientos al trono conforme al Tratado de Córdoba, que estaban comprendidos en la nulidad de la coronación de Iturbide y la insubsistencia del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, decretadas por el Congreso mexicano el 8 de abril de 1823.[46]

El decreto de 24 de septiembre de 1810 y el artículo 3 de la Constitución de Cádiz, son uno de los precedentes, incluso verbales, de textos mexicanos.

* * *

El contenido del decreto español, ratificado y excedido en el artículo 3 de la Constitución de 1812, es la clave de la naturaleza revolucionaria de los acontecimientos en España y México, cualquiera que sea la filiación que se atribuya a las proclamaciones. Someramente nos ocuparemos de los debates en Cádiz los días 28 y 29 de agosto de 1811 , cuando se aprobó el artículo 3 del proyecto presentado por la Comisión de Constitución, de la que, por cierto, formaba parte don Antonio Joaquín Pérez, nuestro versátil obispo de Puebla, entonces canónigo de su catedral. El mismo día se debatió el artículo 2 del proyecto: "La nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona".

El debate del artículo 2 fue excepcionalmente breve. Cinco diputados hablaron, entre ellos Joaquín Lorenzo Villanueva, a quien acudiremos al tratar el tema de la soberanía, y que no hizo objeción al artículo. El padre Antonio Llaneras, diputado por Mallorca, propuso que se aclarara el artículo expresando que la nación era independiente "de toda dominación extranjera", lo que no se aprobó. Aunque Llaneras no impugnó que se declarase que la nación no era patrimonio de ninguna familia *ni persona*, hizo observaciones de fondo que no fueron refutadas: que la España estaba constituida sobre la religión, bajo las leyes que la regían, por

[44] *Colección de órdenes y decretos de las Cortes*, tomo I, pp. 1-3.

[45] *Colección de órdenes y decretos de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y Soberanos Congresos Generales de la Nación Mexicana*, México, 1829, tomo III, p. 1.

[46] *Ibid.*, tomo II, pp. 91-92.

más que acataría, dijo, las que las Cortes aprobasen; y que la nación continuaría bajo el dominio de Fernando, supuestos aceptados libremente por la propia nación. La ausencia de objeciones a lo dicho por Llaneras, y la no objeción por éste a la declaración de que España no era ni podía ser patrimonio de familia ni persona alguna, no dejan de parecer contradictorias. En todo caso, esta última parte del artículo no podía disimular su obvio significado. El artículo se aprobó.

El texto del artículo 3 en el proyecto era: "La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga".

El debate lo inició Felipe Aner de Esteve, diputado por Cataluña, quien objetó desde luego que se dijese que la nación tenia el derecho de *adoptar la forma de gobierno que más le convenga*, porque la facultad estaba contenida en la primera y la segunda partes de él, al declararse que ella era soberana y que podía establecer sus leyes fundamentales. Por otra parte, afirmó que España no estaba en "el caso de variar su forma de gobierno", ni le convenía, además de que ya había jurado a Fernando. La variación de la forma de gobierno resultaba muy remota. Es más, "el honor de V.M. (las Cortes) y el de los diputados en particular está interesado en que esa cláusula se suprima". Y agregó: "Muchas veces se nos ha acusado de que seguimos unos principios enteramente democráticos, que el objeto era establecer una república...". No debía darse motivo a tales interpretaciones.

Vicente Terrero, diputado por Sevilla y cura de Algeciras, planteó la cuestión desde otro ángulo, el del veto real a las leyes aprobadas por las Cortes, que las podría suspender por tres años consecutivos, en "un juego irrisorio de la soberanía". Pidió además Terrero que se ampliara el artículo hasta comprender "las demás (leyes) convenientes y necesarias" al bueno gobierno, porque "la ley debe emanar de una autoridad superior a todo código, y eminente sobre los mismos principios". Ningún juramento liga a la nación, porque "para adoptar cualquier forma de gobierno basta y sobra la potestad radical de que jamás se desprende". El gobierno es legítimo en cuanto es justo; al ser nocivo, "aquella potestad radical se desarrolla y la (nación) puede volver a ejercer sus derechos y funciones...". Terrero concluyó que la cláusula impugnada sobre el derecho a variar la forma de gobierno debía mantenerse.

Agustín Argüelles, uno de los hombres más célebres en el liberalismo español y miembro de la Comisión de Constitución, rechazó las insidias a que dio oído Aner, que imputa al *dañado designio de Napoleón* y a los que "no quieren constitución ni reforma", los privilegiados del absolutismo. Su discurso es extenso y especioso. La voluntad de la monarquía en la península y ultramar fue una sola en 1808: la fidelidad a Fernando; "la nación ha excluido del modo más explícito toda forma de gobierno que no sea el monárquico" —afirmó—, y las Cortes fueron "congregadas para restablecer la primitiva constitución, mejorándola en todo lo que conviniere...". "¿Cómo pues, podía (la comisión) ofrecer en su proyecto ningún artículo, ninguna cláusula que incluyese la menor idea contraria a la solemne y auténtica declaración de la voluntad nacional?" Y aún están las consideraciones a las potencias extranjeras. Siendo España libre e independiente, la comisión la habría comprometido "si hubiese procedido en su obra con servilidad. El derecho público de las naciones había establecido y consagrado desde mucho tiempo el respetable principio de que ninguna nación tiene derecho para mezclarse bajo ningún pretexto en el arreglo interior y económico de otra". Espa-

ña ha sido escrupulosa observante de él, como consta a su fiel aliada Inglaterra, pues en los tiempos de sus revoluciones fue respetada por España y Europa: cuando el protectorado de Cromwell, en el restablecimiento de la monarquía, en la abdicación de Jacobo II y el llamamiento de Guillermo con las limitaciones que la nación le impuso. "Sólo el trastorno de todas las leyes y de todos los derechos por la revolución de Francia es el que ha introducido el pernicioso ejemplo de respetar poco tan discreta como ventajosa política". No, la comisión, reiteró Argüelles, no introduce "ninguno de aquellos principios subversivos...". Debe examinarse, "todo el sistema de la obra". Víctima siempre de influencias extranjeras, España debe cortar "el germen de tantas guerras y discusiones". La cláusula, a su parecer (el de la comisión), era la única que podría conseguirlo. La renuncia de Luis XIV a nombre de su esposa María Teresa no podía, se dijo, perjudicar los derechos de sus nietos. En 1700, sin consultar a la nación, se llevó a España a la guerra civil entre los intereses de la Casa de Austria y los Borbones. Los sucesos de Bayona los menciona para demostrar que "la independencia de la nación debía ser tan absoluta, que a ella sola le tocase hasta la forma de gobierno que más le conviniera". Las restantes objeciones las califica de secundarias.

El debate sobre el artículo 3 fue el primero que difundido en el idioma trató la cuestión de la titularidad de la soberanía. Impreso en el tomo 8 del *Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes*, el mismo año de 1811 circuló en América.

Argüelles discurrió entre paralogismos y evidencias ideológicas para explicar y defender una cláusula cuyo significado e inferencias no se podían desvanecer ni aun soslayar.

Francisco Javier Borrul, comisario de la Inquisición y diputado por Valencia, leyó un discurso impugnatorio. Trataría, dijo, "una de las cuestiones más importantes que ofrece el derecho público... Se trata de la soberanía, y se propone generalmente y sin limitación alguna en este artículo, que pertenece a la nación el derecho de adoptar la forma de gobierno que más le convenga". Si faltaran "todos los príncipes que por las leyes fundamentales estaban llamados a la sucesión del reino, no podría ofrecerse dificultad para que la nación, consultando con su mayor utilidad y beneficio, escogiera la forma de gobierno que mejor le pareciese... formando una aristocracia o una democracia, o eligiendo un nuevo príncipe". En España ya ocurrió, y da los ejemplos de don Pelayo y de García Ximénez. No es la situación actual. "El Estado se halla constituido, siglos hace..." y la sociedad no fue constituida por la convención de que habla Hobbes, "la que hace cada uno con los demás socios", sino por las otras, "y son adoptar la forma de gobierno que fue la de una monarquía moderada, elegir rey, y determinar en los siglos inmediatos que no fuese electivo el reino" sino dinástico. Si existen algunos con derecho a la sucesión no se les puede privar de él "ni adoptar otra forma de gobierno, pues esto sería una temeraria violación de los más claros principios que han establecido la razón y la justicia en todos los estados y fomentar grandes trastornos y crueles guerras en los mismos". Impugna también que sea derecho exclusivo de la nación establecer sus leyes fundamentales, que ya existen desde hace siglos y que no han sido abolidas. A través de la defensa de la monarquía, Borrul ataca la declaración de que la soberanía reside en la nación, no negándolo en sí sino oponiéndose a que se restaure esa titularidad y que se declare en la Constitución.

En la convocatoria se les fijaban como funciones a las Cortes "la formación de las leyes y reglamentos oportunos para verificar las grandes y saludables reformas que los desórdenes del antiguo Gobierno, el presente estado de la Nación y, su futura felicidad hacen ne-

cesarias...". Mas los poderes a los diputados se ampliaban para "acordar y resolver cuanto se propusiese en las Cortes, así en razón de los puntos indicados como en otros cualesquiera, con plena, franca, libre y general facultad, sin que por falta de poder dejasen de hacer cosa alguna, pues todo el que necesitasen lo conferían (sus electores) sin excepción ni limitación alguna".[47]

En el decreto de 24 de septiembre de 1810 las Cortes declaraban que residía en ellas la soberanía. Los artículos 2 y 3 del proyecto de constitución extremaban el proceso, y Borrul lo señalaba con claridad al objetarle, aunque, como los autores del proyecto, acudiendo también y con propósitos contrarios a las antiguas leyes fundamentales de la monarquía. El juramento hecho a Fernando en 1808, y aun el prestado por los diputados el 24 de septiembre de 1811, los concebía, aunque no lo dijese expresamente, identificándolos con *pacto subjectionis* en la transmisión de la autoridad de la comunidad al príncipe, teóricamente posible sin más limitaciones que las del derecho natural y el de gentes, y las expresas en el pacto o sancionadas por las costumbres. El discurso de Borrul, escolástico y suareciano, va al fondo de la cuestión, aunque también con los obligados eufemismos de los autores del proyecto, al impugnar o postular el principio fundamental de la revolución liberal que iniciaban.

El obispo de Calahorra fue otro impugnador severo. La soberanía "que se supone, o se quiere suponer, residir en la nación, ya la enajenó o trasladó (la nación) a sus reyes electivos y después a los hereditarios —afirma el obispo—, pues como se ha demostrado, y lo acreditan las leyes de nuestros códigos, los reyes de España han sido siempre y sin interrupción, soberanos, supremos legisladores, etc.". Es cierto que en el traslado de la soberanía al rey "le ponían freno las leyes fundamentales que juraba, para que, aunque enteramente autorizado, no pudiese partir, dividir ni enajenar los bienes pertenecientes a la corona... y aunque legislador supremo, no pudiese dar fuerza, vigor ni perpetuidad de ley a sus órdenes y decretos, sino cuando lograban el consentimiento de las Cortes, compuestas de las tres clases que representaban a la nación". A ese monarca soberano habían jurado en España y América, y los comitentes de los diputados estaban ligados por ese juramento previo.

Lo que se pretende en el artículo 3 —censuraba el obispo— es, "degradar su dignidad (la del rey), estrechar su poder, deprimir su imperio, envilecer su señorío, apropiándose a sí mismo (el pueblo por medio de sus representantes) la soberanía que tenía cedida solemnemente por el contrato y pacto más irrevocable expresado en las leyes fundamentales". Bien está "que se tome providencia para contener los abusos que la arbitrariedad y el despotismo han introducido y pueden sobrevenir; hágase al rey que observe las obligaciones, condiciones y pactos que ha jurado... juntamente con los demás que establezca la constitución, sancionada por las Cortes; añádanse, si se contempla necesario, algunas limitaciones en punto a ministros, magistrados, rentas, tributos, administración, etc.; en una palabra, celébrense frecuentemente Cortes, y en ellas trátese con energía de la observancia de la Constitución; hágase presente al rey las infracciones que la ley ha padecido, y se verá puesto un freno a las arbitrariedades del monarca; pero désele el goce de su soberanía; que no se le prive de lo que es suyo... nadie puede ni debe despojarle de esta suprema potestad, que aun cuando no fuera derivada a su real persona, inmediatamente de Dios, está ya cedida a sus ascendientes; y a

[47] Conde de Toreno, *op. cit.*, tomo II, p. 202.

nuestro deseado Fernando le toca por derecho de sucesión y justicia", jurado como lo fue por toda la monarquía.

Pedro González de Llamas, diputado por Murcia, aportó un nuevo argumento en contra del proyecto del artículo 3: por la prisión y ausencia de Fernando éste no puede ejercer sus funciones, por lo que el pueblo "tiene el incontestable derecho de atraerse a sí toda la soberanía; pero no en propiedad, sino intensamente y en calidad de depósito...". Las Cortes no pueden derogar las antiguas leyes constitucionales, "a menos que la necesidad no sea tan urgente, como lo fue la que dio lugar al establecimiento de los gobiernos, y principios del derecho social...". Cuando regrese Fernando se sancionarán las novedades introducidas para que no sean reclamadas como nulas.

En el debate intervino el conde de Toreno. Accede a la supresión de la última parte del artículo, sobre el derecho a variar la forma de gobierno, "para evitar en lo posible interpretaciones siniestras de los malévolos, y más principalmente por ser una redundancia; pues claro es que si la nación puede establecer sus leyes fundamentales igualmente podrá establecer el gobierno, que no es más que una de estas mismas leyes por esto convengo con su opinión (la de Aner), y no porque la nación no pueda ni deba; la nación puede y debe todo lo que quiere". Toreno argumenta para demostrar "que la soberanía reside en la nación, que no se puede partir, que es el *super omnia* (de cuya expresión se deriva aquella palabra) al cual no puede resistirse, y del cual es tan imposible se desprendan los hombres y lo enajenen, como de cualquiera de las otras facultades físicas que necesitan para su existencia". El gobierno es sólo "la potestad ejecutiva de la constitución", "la soberanía es un derecho que no pueden quitar las Cortes ni está en sus facultades, porque las Cortes pueden dar leyes, pero no dar ni quitar derechos a la nación, sólo sí declararlos y asegurarlos". Cita al padre Mariana, que en su *Rege et Regis Institutioni* dice "que la sociedad se formó para la salud de todos, y para bien común, que el consentimiento de todos nombró al rey, que si la nación quiere removerlo nadie puede estorbárselo..." y concluye demandando que se apruebe la declaración de que la soberanía reside esencialmente en la nación.

El debate, que se prolongó los días 28 y 29 de agosto, aunque necesariamente reiterativo no es profuso. Once oradores, y entre ellos uno solo americano —Miguel Guridi y Alcocer, diputado por Tlaxcala—, intervinieron. La invariable apelación a las antiguas leyes fundamentales de España y al origen pactista de la sociedad y de la autoridad fue el consenso. La interpretación de esas antiguas leyes fundamentales, y de la soberanía de la nación trasmitida al príncipe, como irrevocable o como ejercicio limitado de facultad ejecutiva y aun colegislativa, pero inenajenable en sí y vigente en su ejercicio en todo tiempo por la nación, constituyó la cuestión de fondo.

La intervención de Guridi y Alcocer se limitó a proponer que el artículo declarase que la soberanía residía radical u originalmente en la nación, admitiendo que se podía o se pudo poner en el rey, pero Guridi no insistió.

En el debate, como Toreno y el presidente de las Cortes insinuaron, no era cuestión de principio el mantener que la nación "podía adoptar la forma de gobierno que más le convenga", si se declaraba que en ella residía esencialmente la soberanía y que tenía el derecho exclusivo de establecer sus leyes fundamentales.

El artículo, suprimiendo su última cláusula, se aprobó por 87 votos contra 67. De los 11

miembros de la Comisión de Constitución cuatro eran diputados por América —Antonio Joaquín Pérez por Puebla, Mariano Mendiola por Querétaro, y Joaquín Pérez de Leiva y Vicente Morales Duarez por Lima—, y cinco eran eclesiásticos.

* * *

El esquema del debate sobre los artículos 2 y 3 del proyecto de constitución pone de manifiesto cómo se planteó la cuestión de la titularidad de la soberanía. Declarada ésta, no deja de ser evidente la falacia en los argumentos liberales sobre su fidelidad o certidumbre por la concreta perduración de la monarquía española, por más que no existiera ánimo republicano en los *novadores*, como se les llamaba. La subversión de la titularidad esencial de la soberanía, y su naturaleza de no enajenable, imprescriptible y siempre actual, no podía disimular en forma alguna su radical significado revolucionario, cualesquiera que fuesen las consecuencias institucionales que las Cortes aprobaran. Sancionado el principio, la monarquía y todos sus títulos eran precarios de derecho. La restauración constitucional de 1820 fue la de esa subversión consumada en 1811.

En ese año de 1811, los diputados americanos, excepto Guridi y Alcocer, fueron únicamente testigos de la polémica, y entre ellos estaba Miguel Ramos Arizpe, quien se había incorporado a las Cortes desde el 21 de marzo, como diputado por Coahuila. La insistente apelación a las leyes fundamentales de la monarquía española alegaba títulos peninsulares que les eran ajenos, o que, en todo caso, eran parte de un derecho limitado y supletorio de la legislación de Indias. La incorporación de los americanos a las Cortes había sido elocuente y hasta patética: "os veis elevados a la dignidad de hombres libres, no sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo más duro mientras más distante estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia", expresaba el Consejo de Regencia en su manifiesto de 14 de febrero de 1810 a los americanos españoles.[48] Ningún discurso excusaba los puntuales motivos por los que eran llamados —la necesidad de los auxilios de América a la España invadida, necesidad más imperiosa que la del reconocimiento o concesión de derechos que dictara el naciente liberalismo, como lo probaría el regateo de éstos por los propios caudillos peninsulares de la revolución.

Los silenciosos diputados ultramarinos —silenciosos esos días— eran testigos de cómo las Cortes sancionaban, más que implícitamente, las tesis de las juntas americanas de 1808 a 1811 que ante las abdicaciones de los Borbones en Bayona consideraron que por el pacto que ligaba a los reinos de América con la corona, revirtiendo la soberanía a la nación o a cada pueblo que la ejercerían en el interregno de la cautividad del rey. En México, Quito, Caracas, Asunción, Buenos Aires, La Paz, Santiago y Santa Fe de Bogotá, se había negado por las autoridades metropolitanas la tesis en sí, y que los pueblos o reinos asumieran el ejercicio de la soberanía en nombre de Fernando VII en el interrengo de su ausencia.

Si la América reconocía estar unida a España en la persona del monarca común, las Cortes, al declarar que la titularidad de la soberanía residía esencialmente en la nación, proclamaban en el imperio el carácter vicario y mudable de la monarquía, con la grave conse-

[48] Maximiano García Venero, *op. cit.*, p. 85.

cuencia de que el vínculo de las Américas con la corona desaparecía, para que los reinos ultramarinos pasaran a formar una fracción indivisible de la nación española representada en las Cortes. La situación era paradójica: al desvanecerse los títulos de la corona de Castilla sobre las Américas, éstas dejaban de ser reinos independientes de la península. Mas la renuncia a esa secular independencia —ficticia pero legal—, y la unión con la España, confundiéndose en una sola nación, suponía necesariamente un pacto de conformidad entre esas partes autónomas de la monarquía, un pacto que sólo podía concluirse en el ejercicio de las varias soberanías involucradas. Pacto que, declarada la soberanía en los términos de los artículos 2 y 3 aprobados, sería siempre precario. Y preexistía y subsistía la cuestión sobre si los diputados americanos habían recibido los poderes suficientes para llevar a cabo aquella renuncia y pactar la nueva unidad. El que los diputados americanos callaran, no suponía que no percibieran el planteamiento, formados como estaban en casuismos escolásticos o no.[49]

El planteamiento no es puramente hipotético. Los sucesos se habían precipitado en América rebasando la ficción fidelista. El 5 de julio de 1811, ya lo vimos, las Provincias Unidas de Venezuela reunidas en Congreso de sus diputados, habían declarado su independencia de España. Días antes, el 1 de julio, el mismo Congreso, en su sección legislativa para la provincia de Caracas, promulgó una Declaración de los Derechos del Pueblo y los Derechos y Deberes del Hombre en Sociedad y Deberes del Cuerpo Social, extendida en 44 artículos. "La Soberanía reside en el pueblo; y el ejercicio de ella en los Ciudadanos con derecho a sufragio, por medio de sus apoderados legalmente constituidos", expresaba el artículo primero, y el segundo, "La Soberanía es por su naturaleza y esencia imprescriptible inenajenable e indivisible".[50]

En Buenos Aires, de hecho sustraído desde 1810 al dominio de España, la declaración de Caracas se reprodujo en *El Grito del Sud* por la Sociedad Patriótica-Literaria: "la publicación de los *derechos del hombre* sobre los que el pueblo caraqueño ha levantado el majestuoso edificio de su independencia —escribió su editor Bernardo Monteagudo— sería muy conforme a los sentimientos de nuestra sociedad que va a tener una gran parte en la independencia de las Provincias del Río de la Plata".[51]

La filiación de la declaración de Caracas no era española —su artículo 2 coincide con el 21 de la francesa de 24 de junio de 1793—, mas propagaba en el sur la misma subversión de la titularidad de la soberanía.

[49] Servando Teresa de Mier, bajo el pseudónimo de José Guerra, escribiría en su *Historia de la revolución de Nueva España*, impresa en Londres en 1813: "No: nuestro pacto social no puede ser variado sin nuestro consentimiento, y nosotros ni lo hemos prestado por nuestros Diputados, ni han sido llamados en el número correspondiente igual a su población como en España... En nuestro pacto invariable no hay otro pueblo americano, que ni por sus leyes ni por las declaraciones de ese mismo Congreso es súbdito de España sino su igual, y puede hacer lo que le parezca para gobernarse conforme convenga a su *Conservación y felicidad*, que es la suprema ley imprescriptible, y *el fin de toda sociedad política*, como asienta con razón la misma nueva Constitución española" (en la p. 200 de la edición mexicana de 1922).

[50] *Gaceta de Caracas*, 23 de julio de 1811, edición facsimilar, Caracas, 1960; *El Publicista de Venezuela*, edición facsimilar, Caracas, 1959.

[51] *El Grito del Sud*, 1 de diciembre de 1812, edición facsimilar, Buenos Aires, 1961.

* * *

En la *Carta de un americano al español sobre su número XIX*, de 11 de noviembre de ese año de 1811, fray Servando Teresa de Mier polemizó con José Blanco-White, quien impugnaba desde Londres la declaración de independencia venezolana. El doctor Mier argumentó erudita y extensamente: "Yo diría que los venezolanos han restituido a la América una obra suya que produjo tan excelentes resultados en los Estados Unidos, donde las circunstancias eran iguales a las suyas". El doctor Mier apuntaba al modelo, pero también alegó "que por la renuncia de Carlos IV en Bayona... la dinastía de Borbón perdió todo derecho a ella —a la corona de España—, incluso Fernando que sólo es rey por la elección aclamada del pueblo. Que éste es libre e independiente, y no es ni puede ser el patrimonio de ninguna familia ni persona, y que en él reside esencialmente la soberanía..." etc., agregando Mier la cláusula que no fue aprobada sobre que la nación podía adoptar la forma de gobierno que más le conviniera, para concluir que tales principios de los artículos 2 y 3 de la Constitución, los debía jurar Fernando "si quisiere ser rey".

La carta de Mier al español de Londres se publicó entre el 13 de septiembre y el 22 de noviembre de 1812 —números 9 a 19— en el *Semanario Patriótico Americano*, dirigido en la insurgencia de México por Andrés Quintana Roo.

No obstante que no existían versiones taquigráficas de los debates de Caracas, y sí de las Cortes de Cádiz, las declaraciones venezolanas —anteriores a las españolas—, con la proclamación de la independencia absoluta de las Provincias Unidas de la Confederación Americana de Venezuela, proponían a los dominios españoles un modelo propio y axiomático del ejercicio de la soberanía por el pueblo: la independencia y la república. En el *Manifiesto que hacen al pueblo mexicano los representantes de las provincias de la América Septentrional*, de 6 de noviembre de 1813, se dijo: "Caracas, antes que ninguna otra provincia... reconoció sus derechos y se armó para defenderlos".[52]

En Cádiz se explayarían y propagarían los discursos magisteriales corroborando esa subversión.

El significado de los artículos 2 y 3 de la Constitución de 1812 no podía ser más indisputable.

[52] Puede consultarse en *El Congreso de Anáhuac*, México, 1963, p. 112.

5

LA REIVINDICACIÓN ABSOLUTISTA

La representación y manifiesto que dirigieron al rey, el 12 de abril de 1814, 69 diputados de las Cortes, al regreso de Fernando VII a España, fue explícito sobre la subversión consumada. El decreto de 24 de septiembre de 1810, por el que las Cortes declaraban que *residía en ellas la soberanía* era en 1814 para diputados que habían jurado la Constitución, "un despojo de la autoridad real sobre que la monarquía española está fundada... desde el primer paso en la equivocación de decir al pueblo, que es soberano y dueño de sí mismo después de jurado su gobierno monárquico...". Así, "el deseo de coartar el poder del Rey de la manera que en la revolución de Francia extravió aquellas Cortes, y convirtió el gobierno de España en una oligarquía, incapaz de subsistir por repugnante a sus costumbres...". Los diputados *persas* impugnaron minuciosamente el texto constitucional y con particular encono el decreto de 10 de noviembre de 1810 sobre la libertad de imprenta, "perjudicial en una nación pudorosa, y además subversiva en las Américas". El decreto de 15 de octubre del mismo año de 1810, que establecía la "igualdad de derechos entre los españoles europeos y ultramarinos" en los países que reconocieran "la autoridad legítima y soberana, que se halla establecida en la madre patria", era para los diputados firmantes, "lo mismo que dispersar en ultramar la sublevación de las provincias... porque si sólo el pueblo había de ser soberano; pueblo más extenso, dividido por los mares tenían allí, que habían de considerarse con igual soberanía para dirigirse por sí...".[53] Los diputados hacían un paralelo entre lo decretado en España y los sucesos de la Revolución francesa.[54] Elogiaban la institución de las antiguas Cortes y las leyes fundamentales de la monarquía, por las que "los vasallos contratan la obligación de obedecer, y servir con sus personas y haberes al soberano y a la patria; y éste la de hacer justicia, sacrificarse por el bien público, observar las condiciones del pacto, las franquezas y libertades otorgadas a los pueblos, guardar las leyes fundamentales, no quebrantarlas; y en fin, regir y gobernar con acuerdo y consejo de la nación".[55] Pero sólo en el derecho a hacer la guerra las antiguas Cortes tenían potestad decisiva.

No podemos extendernos en cuanto contiene la representación que, sin adoptar la doctrina del derecho divino de los reyes, concluía: "La monarquía absoluta... es una obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamen-

[53] *Representación y manifiesto que algunos diputados de las Cortes Ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid (el 12 de abril de 1814)*, Madrid, 1820, pp. 20-21.

[54] *Ibid.*, pp. 42-43.

[55] *Ibid.*, p. 50.

tales del estado: fue establecida por derecho de conquista, o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus Reyes. Así que el Soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad...: por esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés común, y obligar a la obediencia a los que se nieguen a ella". Declamar contra la monarquía era confundir el poder absoluto con el arbitrario. "Hay entre el príncipe y el pueblo ciertas convenciones que se renuevan con juramentos en la consagración de cada Rey: hay leyes y cuanto se hace en contra de sus disposiciones es nulo el derecho". En Cádiz se habían violado —sin poderes de los pueblos a los diputados e integrando las Cortes sin los estamentos tradicionales— las leyes constitucionales de la monarquía.[56] Los diputados daban fin a su representación pidiendo al rey la convocatoria de Cortes "con la solemnidad y en forma que se celebraron las antiguas", y en tanto, rigiéndose por la secular Constitución española, se suspenderían los efectos del código de Cádiz y los decretos de sus Cortes. Los diputados firmantes iban más lejos, pidiendo al rey "que se abra causa (a fin de castigar los delitos y precaver la seguridad nacional en adelante) contra cuantos son reos de los más notorios, averiguando los fines y los medios que se han empleado para atacar la integridad de España, para extraviar su opinión, para traer envueltos en convulsiones populares a vasallos honrados...".[57]

La respuesta real se dio en el decreto de 4 de mayo. Al absolutismo tradicionalista cuya restauración se pidió en el documento de 12 de abril, Fernando correspondía proclamando: "Desde que la divina Providencia, por medio de la renuncia espontánea y solemne de mi augusto padre, me puso en el trono de mis mayores, del cual me tenía ya jurado sucesor el reino por sus procuradores juntos en Cortes, según fuero y costumbre de la nación española...". El lenguaje del rey era el exordio de sus designios. Las Cortes liberales esperaban en Madrid al rey para que jurara la Constitución, y él se refería a ellas, que "en el mismo día de su instalación, y por principio de sus actas, me despojaron de la soberanía, poco antes reconocida por los mismos diputados, atribuyéndola nominalmente a la nación para apropiársela a sí ellos mismos, y dar a ésta después sobre tal usurpación las leyes que quisieron, imponiéndole el yugo de que forzosamente las recibiese con una nueva Constitución, que sin poder de provincia, pueblo ni junta, y sin noticia de las que se decían representadas por suplentes de España e Indias, establecieron los diputados, y ellos mismos sancionaron y publicaron en 1812. Este primer atentado fue como la base de los muchos que siguieron...". "A la verdad —afirmó el rey— casi toda la forma de la antigua Constitución de la monarquía se innovó; y copiando los principios revolucionarios y democráticos de la Constitución francesa de 1791, y faltando a lo mismo que se anuncia al principio de la que se formó en Cádiz, se sancionaron, no leyes fundamentales de una monarquía moderada, sino las de un gobierno popular, con un jefe o magistrado, mero ejecutor delegado, que no rey, aunque ahí se le dé este nombre para alucinar y seducir a los incautos y a la nación".[58]

Pero no era fácil, al menos en esos días, abolir la existencia misma de las Cortes. Su nombre sólo era el símbolo de la resistencia contra Napoleón. Refiriéndose a la convocación de las

[56] *Ibid.*, pp. 61-63.

[57] *Ibid.*, pp. 67-68.

[58] El documento íntegro en E. de K. Bayo, *op. cit.*, tomo II, pp. 379-383.

Cortes durante la invasión napoleónica, Agustín Argüelles dice: "Las Cortes llevaban en su mismo nombre un prestigio tal... que era preciso conservarle como sagrado...".[59] En las reuniones de Fernando con sus consejeros en Valencia, antes de llegar a Madrid se había fraguado el decreto, y en éste ofrecía que, para precaver en el futuro los vicios del despotismo, "conservando el decoro de la dignidad real y sus derechos, pues los tiene de suyo, y los que pertenecen a los pueblos, que son igualmente inviolables, yo trataré con sus procuradores de España y de las Indias; y en Cortes legítimamente congregadas, compuestas de unos y otros, lo más pronto que, restablecido el orden y los buenos usos en que ha vivido la nación, y con su acuerdo han establecido los reyes, mis augustos predecesores, las pudiere juntar, se establecerá sólida y legítimamente cuanto convenga al bien de mis reinos, para que mis vasallos vivan prósperos y felices en una religión y un imperio estrechamente unidos en indisoluble lazo...". "Las futuras leyes serán establecidas con acuerdos de las Cortes", ofrecía también el rey, empleando la palabra *acuerdo* en su antigua y clara acepción de consulta. El decreto concluía: "declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno de las Cortes Generales y extraordinarias, y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la Constitución y las leyes de que largo tiempo la nación ha vivido, sino el declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiese pasado jamás tales actos, y se quitase de enmedio del tiempo...". A quien se opusiere al decreto, lo "declaro reo de lesa magestad" y a los que impidieron que los documentos todos de las Cortes se recojan y guarden como el rey ordena, y que las Cortes cesen en sus sesiones, "lo declaro reo de lesa magestad, y que como a tal se le imponga pena de la vida".[60] El real decreto se publicó en México, parcialmente, en la *Gaceta* del 13 de agosto de 1814 e íntegro en la del día 17. En México, como en América, era el primer testimonio de una decisión tomada *libremente* por Fernando VII.

* * *

Señala Miguel Artola que la doctrina del manifiesto de los *persas* sobre la naturaleza de las Cortes, "no es otra que la clásica española del Siglo de Oro", matizada e inspirada en autores contemporáneos a los sucesos, como Martínez Marina, Campany y otros; doctrina en la que los liberales fundaban la división de poderes, y los *persas* y el rey, el absolutismo.[61] El juicio de Artola simplifica demasiado, y desde luego en la consecuencia. La consideración circunstancial de no ser posible u oportuno negar a su regreso del *cautiverio en Francia* la legitimidad institucional de las Cortes, llevó a Fernando de Borbón a condenar las liberales de Cádiz, para remontarse sobre dos dinastías absolutistas, Borbones y Habsburgos, y tres siglos, hasta los últimos Trastámara, Fernando e Isabel, y ofrecer una presunta restauración de antiguas constituciones de España. Que ése fuera el propósito de Fernando y sus consejeros, lo revelarían los

[59] Agustín Argüelles, *Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes generales y extraordinarias*, Londres, 1835, reeditado como *La Reforma constitucional de Cádiz*, Madrid, 1970, p. 151.

[60] E. de K. Bayo, *op. cit.*, tomo II, pp. 379-383.

[61] Miguel Artola, *Los orígenes de la España contemporánea*, Madrid, 1959, tomo I, p. 623; *La España de Fernando VII*, Madrid, 1968, pp. 523-525.

siguientes seis años, por más que el rey no hubiese tomado una decisión clara al ser liberado por Napoleón.

Un corolario del decreto de 4 de mayo fue la real orden del mismo día al general Francisco Eguía, nombrado gobernador militar y político de Madrid y capitán general de Castilla la Nueva, para que procedieran al arresto de varias personas. Algunos tendrían arresto domiciliario con centinelas a la vista, y los *más señalados* pasarían a la cárcel de Corte y al Cuartel de Guardias de Corps, recogiéndoseles sus papeles. Todo se prepararía "procurando evitar se trasluzca la comisión". La lista primera de quienes debían ser arrestados, dándose los domicilios, comprendía a los más distinguidos liberales: Manuel Quintana, Agustín Argüelles, el conde de Toreno, José María Calatrava, Francisco Martínez de la Rosa, José Miguel Ramos Arizpe, Ramón Feliú, Joaquín Lorenzo Villanueva, Diego Muñoz Torreno, Manuel García Herreros, Antonio Cano Manuel, Juan O'Donojú y José Canga Argüelles, entre otros que figurarían en 1820 en las Cortes y en el gobierno de la restauración constitucional.[62] Los arrestos de liberales continuaron con la presión absolutista. El diputado por Nueva España, José María Couto, aunque no firmó la *Representación de los persas*, protegido de los marqueses de Villafranca fue nombrado canónigo de la colegiata del marquesado.[63] En enero de 1823 sería autor en México de un proyecto de constitución monárquica.

"El problema esencial en la causa a los diputados —señala Artola— es la carestía de figuras de delito con los cuales identificar sus actos y declararlos culpables...". En las leyes españolas no había antecedentes. Artola cita una carta del general Girón a su padre: "Las causas de esta gente se hace tan despacio como mal, pues teniendo tanto por dónde atacarle no les buscan más que por la cuestión teológica y política de la soberanía y se están en conclusiones el juez y el acusado".[64] El cargo primero contra los diputados fue "el de haber atentado contra la Soberanía del Sr. D. Fernando VII y contra los derechos y regalías del trono para establecer un gobierno democrático, privarle de su corona real y de la posesión de sus reinos". La cuestión de la soberanía no se planteaba con alternativas posibles, y era la de fondo.

El decreto de disolución de las Cortes se comunicó el 10 de mayo al presidente de ellas, nuestro conocido el canónigo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, firmante de la *Representación de los persas*, quien, como asientan Toreno y Bayo, "no tardó en recibir como premio de sus servicios una mitra", la de Puebla,[65] en donde volvería a practicar sus metamorfosis durante la restauración liberal del año 20 y la consumación de la independencia.

Toreno se explica el instantáneo derrumbe de las Cortes. "El nombre de Fernando —escribió— obraba en aquel tiempo en la nación mágicamente; y al sonido suyo y a la voluntad expresa del rey hubiera cedido todo y hubiéranse abatido y humillado hasta los mayores obstáculos".[66] Para Bayo "las señales más humillantes de la esclavitud de oriente revelaban que el vulgo quería que entre las libreas, los azotes y la horca, mezclase las dádivas de palacio y los empleos vendidos al favor". El rey regresaba entre "el mágico alborozo y frenético ardimiento de la plebe y de las clases todas que enloquecían de amor al deseado Fernando... adorado

[62] Conde de Toreno, *op. cit.*, tomo III, pp. 362-363; E. de K. Bayo, *op. cit.*, tomo II, pp. 377-378.

[63] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo II, p. 140.

[64] Miguel Artola, *La España de Fernando VII*, pp. 531-533.

[65] E. de K. Bayo, *op. cit.*, p. 33; Conde de Toreno, *op. cit.*, pp. 563-564.

[66] Conde de Toreno, *op. cit.*, p. 565.

de ellos con la veneración de un Dios".[67] Ni Toreno ni Bayo son sospechosos de proclividad alguna absolutista cuando rinden su melancólico testimonio sobre la súbita inanición liberal frente al monarca.

Miguel Artola, como otros autores, dan la filiación doctrinaria de la *Representación de los persas* y del real decreto de 4 de mayo de 1814, por más que las expresiones verbales del rey correspondieran a otro ánimo no tan conforme con los propósitos manifestados. El sexenio absolutista de 1814-1819 lo aclararía. Aunque debemos tener presente que la historia nunca es lineal ni recta, y que los designios de Fernando VII seguían más que frecuentemente caminos oblicuos.

Para el rey, lo vimos ya, el delito y culpa mayores de los diputados y los liberales, y el agravio más profundo que le habían inferido, era el haberlo despojado de su soberanía. Su concepto de la soberanía no era por cierto anacrónico, al menos no tanto como la idílica restauración de las leyes fundamentales de la monarquía y las Cortes que ofrecía convocar de acuerdo con ellas.

* * *

Uno de los diputados liberales más eminentes de los años 12, y después en las primeras Cortes del trienio de 1820-1823, fue el canónigo de Valencia, Joaquín Lorenzo Villanueva, quien había publicado en 1793, siendo calificador del Santo Oficio, un *Catecismo del Estado según los principios de la religión.* La obra, hoy olvidada, es una de las más exactas exposiciones de la doctrina del derecho divino de los reyes.[68] En su ortodoxia absolutista, Villanueva acude a los libros sagrados, los Padres de la Iglesia, San Pablo, San Agustín, los concilios, Bossuet, etc., en erudito despliegue de autoridades.

No es posible hacer una síntesis de la obra, ni siquiera de su temática. Villanueva acepta, aunque aclarando que las escrituras callan en esto, que el príncipe pudo ser elegido por el pueblo, y distingue que una es la elección y otra la autoridad. La elección es por orden o necesidad pública, y queda a la prudencia humana la forma que se establezca, electiva o hereditaria, pero "una vez establecido este orden, no tiene ya potestad el pueblo para mudarlo. Porque la facultad de hacer leyes no reside ya en el pueblo, sino en el Príncipe a quien comunica Dios su poder para que gobierne. Y como en un reino hereditario nunca está el pueblo sin rey, no puede jamás el pueblo estar en estado de hacer nuevas leyes para mudar el orden de la sucesión o la constitución del gobierno. Porque la autoridad legítima para esto no reside sino en

[67] E. de K. Bayo, *op. cit.*, p. 15.

[68] Richard Herr cita las *Cartas* de Villanueva contra el obispo Gregoire en la España y la revolución del siglo XVIII, p. 350; el *Catecismo* en la 307, y la *Vida literaria* en la 14, considerándolo únicamente como jansenista. Artola, en sus dos obras citadas lo cita con frecuencia mencionándolo tan sólo como liberal. Menéndez Pelayo lo califica como uno de "los tres —y Villanueva el primero— más notables teólogos y canonistas que *jansenizaron o galicanizaron* a España", y menciona el Catecismo de Estado como "adulatorio de la potestad monárquica" (*Historia de los heterodoxos españoles*, Madrid, 1945, tomo V, pp. 221, 223). Es Javier Herrero quien llama la atención sobre el catecismo de Villanueva, que expone "los principios básicos y distintivos de la monarquía absoluta "tradicional" (radicalmente opuesta —advierte— a la auténtica tradición española que murió en el siglo XVII"). *Los orígenes del pensamiento reaccionario español*, Madrid, 1971, p. 132.

aquel o aquellos a quien Dios la comunica, según el orden civil que en los pueblos se haya establecido".[69] Que históricamente el pueblo haya alterado alguna forma de gobierno fue, admite, por "una especial providencia de Dios".[70] La fisura es visible, pero Villanueva la cubre cuando dice: "El que resiste el poder de los malos Príncipes, no resiste el abuso de la Potestad que es del hombre, sino a la misma potestad, que es de Dios. Querer eximirse de esta potestad, es no sujetarse a la ley eterna que consiste en el orden invariable. Y así no puede llegar el caso en que sea vituperable el orden de la potestad Real, por grande que sea la injusticia y la tiranía del Príncipe: o que en la honra que se debe a la potestad, pueda ser minorada por la maldad del que la ejercita".[71] No hay rebeldía posible, aunque el príncipe se oponga "a los fines por los que se ha dado la potestad, y quebrantado cuanto es de su parte el orden establecido por Dios. Pero la Iglesia no sufre en ninguno de sus hijos que por esta causa sacuden el yugo de la potestad civil".[72] Cristo ofreció el ejemplo sujetándose a la injusticia. "Los vasallos sólo pueden emplear contra el Príncipe las armas de los gemidos y de la oración, resistir a la autoridad con las lágrimas poderosas de la piedad...".[73] Y de esa inviolabilidad no quedaban excluidos ni los usurpadores.

Todas las amonestaciones al príncipe para atender el bien y la felicidad de los súbditos, y su comparecencia para responder ante un *Juez Supremo*, podían ser convincentes y conminatorias, pero la doctrina de un incontaminado absolutismo se exponía no sólo contra las ideas heréticas del siglo, sino contra "los nuevos teólogos" —entre los que menciona Villanueva a Hervas y Panduro, quien fuera tan acérrimo censor de la Revolución francesa—, y aun contra la mejor tradición de los teólogos —juristas españoles de los siglos de oro.

El 2 de noviembre de 1810, Villanueva propondría a las Cortes, en sesión secreta, que se recluyera al obispo de Orense, para que un concilio nacional juzgase su negativa a jurar el decreto de 24 de septiembre anterior, en el que se declaró que la soberanía nacional residía en ellas.[74]

Más próximo que todas las antiguas leyes fundamentales del reino, a que el rey parecía acogerse, estaba un absolutismo radical y borbónico. Que Villanueva lo expresara extremándolo es más revelador aún, más revelador en un hombre que consumaría la ruptura con ese antiguo régimen ideológico profesado por él mismo. El 22 de julio de 1815, el tribunal español del Santo Oficio prohibió, aun a los que tuvieran licencia para leer libros prohibidos, el *Dictamen* de Villanueva presentado a las Cortes el 20 y 21 de enero de 1813 en relación con el proyecto de decreto sobre los tribunales protectores de la religión.[75]

Es la fidelidad al régimen de Fernando VII durante el sexenio absolutista la que reúne a los hombres de La Profesa, y la que acepta Iturbide acaudillar en mayo de ese año de 1820.

[69] Joaquín Lorenzo Villanueva, *op. cit.*, p. 128.
[70] *Ibid.*, pp. 143-144.
[71] *Ibid.*, pp. 155-156.
[72] *Ibid.*, p. 158.
[73] *Ibid.*, p. 171.
[74] Joaquín Lorenzo Villanueva, *Mi viaje a las Cortes*, publicada en *Memorias de tiempos de Fernando VII*, Madrid, 1957, tomo II, pp. 25-28.
[75] *Índice general de los libros prohibidos compuesto del índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar hasta fin de diciembre de 1789... (adicionado hasta 1842)*, Madrid, 1844. Apéndice del índice, p. 8.

* * *

Un acontecimiento contemporáneo, en cierta manera análogo, y sin la polarización a que se llegó en España, planteaba la cuestión al restaurarse la Casa de Borbón en Francia después de la derrota napoleónica. El 6 de abril de 1814, el Senado conservador francés decretó una breve Constitución para una monarquía hereditaria, en la que el pueblo llamaba "libremente al trono de Francia a Luis Estanislao Xavier de Francia, hermano del último rey, y después a los otros individuos de la familia de Borbón, en el orden antiguo" (arts. I y II). El rey, el Senado y el cuerpo legislativo concurrirían a la formación de las leyes (art. V). La Constitución sería presentada al pueblo para su aceptación (art. XXIX).

El 4 de julio, después de no aceptar el documento, Luis XVIII decretó por sí la carta constitucional, que regiría hasta la Revolución de julio de 1830. En el preámbulo de la carta el rey declaró: "Al mismo tiempo que reconocemos que una Constitución libre y monárquica debía corresponder a la expectación de la Europa ilustrada, no podíamos olvidar que nuestro primer deber respecto a nuestros pueblos es conservar, por su propio interés, los derechos y prerrogativas de la corona". Así, "voluntariamente y en libre ejercicio de nuestra autoridad real —declaró el rey—, hemos concedido y otorgamos a nuestros súbditos, en nombre de nuestros sucesores y para siempre la carta constitucional que sigue...". De hecho y derecho el rey asumía la potestad soberana, y de acuerdo con la "Constitución otorgada" compartiría el ejercicio de la facultad legislativa con dos cámaras, la de los pares, con individuos nombrados por el rey, y la de diputados de los departamentos, de origen electivo. La carta sancionó los derechos de propiedad, de igualdad civil, la libertad individual, la de cultos —declarando la religión católica como la de Estado—, la libertad de imprenta, y el sufragio censario. El artículo II establecía: "Se prohíbe toda averiguación de opiniones y votos expresados hasta la época de la restauración. El mismo olvido impone a los tribunales y a los ciudadanos". Luis XVIII eludió el empleo de la palabra soberana en el documento.

Citamos la *Carta otorgada* por cuanto ella, fundando en la legitimidad monárquica el ejercicio de la soberana, incorporaba instituciones liberales, y también por ese inicial olvido del pasado en favor de los antiguos revolucionarios y los bonapartistas, entre los que había regicidas.

Ni en la restauración española de 1814 ni en la francesa, los monarcas abdicaban la soberanía. Los establecimientos liberales que adoptaba Luis XVIII restringían su ejercicio, pero no la derogaban. Para los dos Borbones la entidad del problema era la titularidad de la soberanía. La subversión de ésta era la clave de la ruptura revolucionaria con el antiguo régimen. Las diferencias de temperamentos de los dos Borbones, y la del espíritu de sus consejeros, eran visibles.

No puede acusarse a los consejeros de Fernando VII ni a los diputados *persas*, absolutistas radicales o moderados, de engañar al rey al advertirle el significado de la *reforma de Cádiz*, ilustrándolo además con la versión literal de los debates sobre los artículos 2 y 3 de la Constitución. Podían ser perjuros, pero no delatores de lo que estaba expresa y públicamente declarado. No importaba la restauración de las leyes fundamentales de la monarquía española, propuesta en la convocatoria a Cortes y en el discurso preliminar del proyecto de Constitución. Se había expresado: "nada ofrece la comisión en su proyecto que no se halle consignado

del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española sino que se mire como nuevo el método con que han de distribuirse las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva, en el que estuviese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla...". La comisión aclaró que adoptaba un método apropiado al estado de la nación y a la ciencia del gobierno, no conocida antes e imprescindible en los días.[76] La misma comisión proclamó el "principio innegable de que la autoridad soberana está originaria y esencialmente en la Nación", y que nunca ésta "se había despojado a sí misma de un derecho tan inherente, tan esencial a su existencia política".[77]

El preámbulo de la Constitución expresó que las Cortes la promulgaban "después del más detenido examen y madura deliberación (con la seguridad) de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que aseguren de un modo estable su entero cumplimiento", llenarían el objeto de la prosperidad y bien de la nación.

La ficción no ocultaba en manera alguna lo que el rey calificó de despojo de su soberanía para atribuirla a la nación.

[76] *Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella*, Cádiz, 1811, pp. 2-3.

[77] *Ibid.*, p. 8.

6

LA SUBVERSIÓN LIBERAL Y MÉXICO

En 1818, Álvaro Flores Estrada publicó en Londres su *Representación hecha a S.M. C. el Señor Don Fernando VII en defensa de las Cortes.* En 1820, la obra se reimprimió seis veces en España y una en México. La defensa se inicia con una inequívoca acusación al rey por haber renunciado "de todos sus derechos en favor del mismo conquistador". Acude a Locke para demostrar que ese abandono de las funciones reales deja al pueblo en "*libertad de proveer para sí, según tenga por conveniente, a su seguridad y mejor estar, ya mudando las personas, ya variando la misma forma de gobierno*". De aquí la legitimidad del ejercicio de la soberanía por los diputados elegidos a Cortes. Mas Flores Estrada recuerda al rey "el decreto de El Escorial y los motivos en él publicados y circulados a la nación por vuestro mismo augusto padre. Ellos —los diputados— sabían que la renuncia de Aranjuez había sido hecha en medio de un tumulto popular, sin consentimiento de la nación y sin la menor previa fórmula de decencia", y que el propio Carlos IV la declaró nula, por lo "que sería una contradicción desentenderse, si obrasen atenidos únicamente al principio de *legitimidad*, por cuya sola virtud vuestros consejeros os quieren suponer rey de las Españas". No obstante, las Cortes, en su primera sesión "declararon solemnemente a V.M. por el *rey de las Españas.* Por este reconocimiento ellos os hicieron el don de una corona que habíais perdido y que, aunque recibida de sus manos, era más legítima aún que la anterior, mucho más decorosa, más apreciable y más conforme a la razón. En fin, señor, era la única que os podéis jactar de llevar, por ser la sola pura de toda objeción".[78]

Flores Estrada sería diputado a Cortes —1820-1822—, y miembro del ministerio en la crisis de principios de 1823.

Flores Estrada fue un autor predilecto de los constituyentes mexicanos, por más que en 1811 hubiese publicado en Londres su *Examen imparcial de las disensiones de la América con la España...* una alegación liberal en contra de la independencia ultramarina.

El cáustico lenguaje liberal de Flores Estrada corroboraba implícitamente la prevención de los diputados *persas* al rey, sobre que la igualdad de derechos entre españoles peninsulares y americanos, y el reconocimiento de la soberanía en el pueblo, era "lo mismo que dispersar en ultramar la sublevación de las provincias". No sólo ello. Pero la autoridad metropolitana no podía postular el principio de la subversión y negar su consecuencia en América.

En España, las Cortes convocadas en nombre del rey y en su ausencia, declarando nulas las abdicaciones de Bayona y reconociendo y jurando a Fernando VII, proclamaban, prime-

[78] Álvaro Flores Estrada, *op. cit.*, pp. 38-39.

ro, que en ellas residía el ejercisio de la soberanía, y después, que la potestad soberana residía esencial y actualmente en la nación, como intransferible. Por la ausencia de Fernando a quien, inconsulto, no se representaba ciertamente al hacer al menos la última declaración, surgía el problema de una doble soberanía.

En el debate de los artículos 2 y 3 de la Constitución está planteada con claridad la situación, y en la negativa del obispo de Orense, Pedro de Quevedo y Quintana, a prestar el juramento del decreto de 24 de septiembre, y en las objeciones que a ese juramento hicieran los también individuos del Consejo de Regencia, el mexicano Miguel de Lardizábal y el marqués del Palacio, por estar ya jurado el rey como soberano, y en *la España vindicada* del decano gobernador del Consejo del Castillo, José Joaquín Colón.[79]

"Base de todas las resoluciones posteriores de las Cortes" calificó Toreno al decreto de 24 de septiembre de 1810.[80] Sánchez Agesta señala dos fechas, 24 de septiembre de 1810 y 19 de marzo de 1812, para afirmar que en "pocas ocasiones se ha precipitado la historia española con movimiento más vertiginoso". Para él, el decreto de 24 de septiembre "contiene el principio revolucionario esencial cuya trascendencia no es preciso ponderar".[81] Ve los antecedentes, los presuntos fundamentos doctrinarios, el debate de los artículos constitucionales. Con todo lo satisfactorio que sea el examen de la motivación circunstancial, no pierde ésta su carácter de coyuntura. "La comisión (de Constitución), aunque lo hubiera deseado —escribió Argüelles—, no era árbitro de restablecer lo que la insurrección había aniquilado en sus fundamentos", el antiguo régimen del absolutismo borbónico.[82] Todavía hacia 1835, cuando publicó en Londres su obra, Argüelles pretenda integrar la Constitución en la tradición secular de las leyes fundamentales de la monarquía, violada por las dinastías extranjeras de los Habsburgos y los Borbones. "En lugar de una pura democracia hallaron —dice Argüelles—, la monarquía de Castilla y Aragón, restaurada por una ley fundamental que las consolidaba (a las provincias) de un modo superior a la antigua reunión de las dos coronas".[83] Lo que ya no era tan fácil decir sobre las "Provincias americanas".

Ningún discurso desvirtuaría la subversión consumada en Cádiz. Sánchez Agesta afirma que la guerra contra Napoleón vino "a despertar de una forma espontánea la idea de soberanía nacional frente a la legitimidad monárquica", y que "baste recordar que nuestra institución nacional más característica, las Cortes, fue desvirtuada hasta darle la forma de una Asamblea francesa".[84] Rico y Amat en su *Historia política y parlamentaria de España*, refiriéndose a la restauración constitucional de 1820-1823 va señalando las analogías de los sucesos con las etapas de la Revolución francesa, en una virtualidad mitigada.

[79] Una síntesis de las impugnaciones en Miguel Artola, *Los orígenes de la España contemporánea*, tomo I, pp. 433-437; Agustín Argüelles, *op. cit.*, pp. 275-276; Javier Herrero, *Los orígenes del pensamiento reaccionario español*, Madrid, 1971, pp. 274-293.

[80] Conde de Toreno, *op. cit.*, tomo II, p. 214.

[81] Luis Sánchez Agesta, *Historia del constitucionalismo español*, Madrid, 1955, p. 54.

[82] Agustín Argüelles, *op. cit.*, p. 259.

[83] *Ibid.*, p. 274.

[84] Luis Sánchez Agesta, *op. cit.*, p. 58.

* * *

La guerra defensiva frente a Napoleón, las abdicaciones de Bayona y el cautiverio de Fernando VII, apresuraron en España el acceso a la proclamación de la soberanía en la nación, y en América a la consecuente declaración de independencia fundada en el mismo título. Hasta dónde motivaron y condicionaron los sucesos en España ese acceso, no es nuestro tema. En todo caso los pronósticos y las demandas de la independencia americana eran ciertamente anteriores a las formulaciones liberales españolas. Incluso, lo asentamos ya, en Caracas se anticipó la declaración de la titularidad de la soberanía en el pueblo, de filiación francesa, y la de la independencia republicana y federal, de inspiración norteamericana. Contemporánea, el Acta de la Independencia de Cartagena, de 11 de noviembre de 1811, suscrita por "los representantes del buen pueblo de Cartagena de Indias, congregados en junta plena con asistencia de todos los tribunales de esta ciudad, a efecto de entrar en pleno goce de nuestros justos e imprescriptibles derechos, que se nos han devuelto por el orden de los sucesos con que la Divina Providencia quiso marcar la disolución de la monarquía española..." se inicia con unas claras rememoraciones de la Declaración de Derechos de Virginia, de 12 de junio de 1776, y de la de Independencia de Estados Unidos de América, de 4 de julio de ese año.

En el ánimo de la emancipación toda idea propicia se adoptaba, y de ellas, la que negaba radicalmente la legitimidad del régimen metropolitano fue la que postuló la subversión de la titularidad de la soberanía, *la thesis theson* de la revolución. Atendemos a ese solo hecho significativo, el que ofrece la clave de los acontecimientos en España y América, cuando se consuma la independencia de México condicionando la peculiaridad de su conflicto interno y su solución. La sola aceptación de un régimen en menor o mayor medida liberal la encontramos en la restauración borbónica francesa, pero sin abdicar la titularidad de la soberanía. Luis XVIII llegó en su *Carta otorgada* a establecer incluso la libertad de cultos, lo que no harían las Cortes liberales españolas ni siquiera en el trienio de 1820-1823. Sería hasta el *Estatuto real* de 1837 cuando, eludiendo pronunciar expresamente la libertad religiosa o la intolerancia, se estableció que el Estado mantendría el culto y a los ministros "de la religión católica que profesan los españoles" (artículo 11). En 1856, los autores del proyecto de Constitución en México, propusieron en el artículo 15 la expresa libertad de cultos, que no fue aprobada. En ambos casos, el liberalismo se retraía como en Cádiz.

El antiguo régimen consiente en amplias reformas siempre que subsista su principio fundamental. La alternativa es: *reformismo* o *revolución.* Cualquiera que sea el concepto o teoría de la revolución que se acepte, *históricamente* el proyecto, expreso o tácito en el proceso revolucionario, se funda en la subversión del principio de legitimidad del antiguo régimen. Sin esta subversión no es concebible la *revolución liberal.* En cuanto se postula la subversión de hecho, su ilicitud dentro del ámbito del antiguo régimen es manifiesta. Frente al antiguo régimen, la autarquía de la postulación revolucionaria es su único fundamento, y es además preconstituyente. El hecho de la subversión que se legitima a sí misma y que *asume el poder,* crea su primera forma institucional en el poder constituyente, que no puede tener otro origen. Lenin, que fue uno de quienes con mayor nitidez comprendió *la revolución,* escribió en 1905, impugnando las resoluciones del III Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata: "Esta gente lanza frases sobre la asamblea 'constituyente', cerrando púdicamente los ojos an-

te la conservación de la fuerza y del poder en manos del zar, olvidando que para 'constituir' hay que tener *fuerza* de constituir".[85] Esa fuerza proconstituyente es la soberanía subvertida en acción, atenida a su propio poder y su propia legitimidad. No es necesario aceptar el modelo marxista-leninista para convenir con la objetiva inteligencia de los hechos. Aunque no debe olvidarse que la revolución marxista, cualesquiera que sean sus accidentes episódicos en los diversos países, es la primera que dispone de un definido proyecto previo, lo que no ocurría en las revoluciones anteriores. Por más que la Revolución francesa sea un precedente de las liberales en España y en América, sus proyectos —los franceses— no son *stricto senso* los de ellas, y consta, por ejemplo, el repudio inicial al jacobinismo y al terror institucionales, aun por los anticlericales españoles y americanos.

En las revoluciones premarxistas el proyecto se gesta en el proceso revolucionario mismo, como corolario de la subversión proclamada. El proyecto, o mejor aún, los proyectos que se formulan son, o pretenden ser, *el programa ideológico posible* de la revolución en el poder. En una relación institucional y es la que pretendemos, el proyecto final es el que adopta el órgano creado por la revolución para constituir el nuevo régimen: el poder constituyente, que lo promulga como Constitución.

En esta consideración no se impone un estricto orden cronológico, sino lógico, porque la subversión revolucionaria se puede producir dentro de los establecimientos mismos del antiguo régimen. En Francia, los estados generales devienen en Asamblea Nacional a la que sucede la Convención, y la ruptura con el antiguo régimen se va proponiendo en etapas que adoptan sucesivos proyectos en las Constituciones de los años 1791 y 1793, para mencionar documentos ejemplares. En Cádiz, las Cortes pretenden fundar su legitimidad en una restauración histórica. Pero el debate fue concluyente: que ningún juramento ligaba a la nación soberana porque —como expresó el padre Terrero— "para adoptar cualquier forma de gobierno basta y sobra la potestad radical de que jamás se desprende". Sin intentar definición alguna de la soberanía. Toreno por su parte simplemente argumentó que "si la nación puede establecer sus leyes fundamentales, igualmente podrá establecer el gobierno que no es más que una de esas leyes...", concibiéndolo como "la potestad ejecutiva de la Constitución".

El decreto de 24 de septiembre de 1810, y el debate de los artículos 2 y 3 del proyecto de Constitución, y su aprobación, consumaban en el seno de una institución histórica idealizada, primero la instauración revolucionaria del poder constituyente, y después la definitiva subversión del principio de legitimidad del antiguo régimen. Mas sin fundarse en la postulación subversiva de la titularidad de la soberanía las Cortes no serían constituyentes. La cronología no altera la lógica. La Constitución de 1812 fue el proyecto revolucionario aprobado como posible. No podemos demorarnos más en el tema, pero tanto el carácter programático de la Constitución como el de su posibilidad encuentran su más amplia corroboración en los debates españoles y en las proclamaciones federales en México.

No se ha adoptado una *teoría* de *la revolución*, ni siquiera de la revolución liberal. A través de una ilación recurrente, reiterativa, se intentó verificar, acudiendo a testimonios internos, la clave de la revolución en España en cuanto importaba a la América.

[85] V.I. Lenin, *Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática*, en *Obras completas*, Buenos Aires, 1959, tomo IX, p. 34.

Los establecimientos liberales pueden ser incorporados a un régimen, aun negando la subversión de la titularidad de la soberanía, y el antiguo régimen se transforma en un mayor o menor grado, se liberaliza. La historia lo ilustra, y antes nos referimos a la *Carta otorgada* por Luis XVIII que, cualquiera que sea el juicio sobre ella, y las oscilaciones ideológicas de los sucesivos gabinetes de Luis XVIII y Carlos X, no corresponde a un régimen absoluto. Un liberalismo así, adoptado en España, podía hacerse extensivo al imperio sin proponer la subversión, aunque sin impedir la independencia. El hecho, que podemos llamar de la recepción del liberalismo en el antiguo régimen institucional, no es nuestro problema. Más bien lo sería el de la sobrevivencia del antiguo régimen en el nuevo instaurado por la revolución.

La subversión era el núcleo en la integración ideológica y dogmática del liberalismo. Nos importa acentuar su postulación como hecho consumado, porque su restauración en 1820 condicionó la peculiaridad de la consumación de nuestra independencia, como se ha dicho, y su conflicto interno y su solución.

* * *

Volvamos a los acontecimientos en México.

Sabemos que la noticia de que Fernando VII aceptaba la restauración constitucional se recibió en México, según Alamán, el 29 de abril; que desde la noticia del definitivo acto del rey, Ruiz de Apodaca de acuerdo con la Real Audiencia se propuso no publicar ni jurar la Constitución, guardando el reino bajo las antiguas leyes hasta que Fernando VII recobrase la libertad; que el canónigo Monteagudo y otro u otros de los personajes que se reunían en La Profesa, coincidiendo con los planes del virrey, gestionaron una entrevista de éste con Iturbide, a quien habían atraído a sus ideas. Las expresiones de Ruiz de Apodaca ante Iturbide sobre la opresión que sufría el rey, establecen, primero, la evidencia de una previa conformidad entre el virrey y los conspiradores antiliberales —entre los que estaban el regente de la Real Audiencia, Miguel Bataller, y el ex inquisidor José Tirado—, y después, la de que la entrevista se llevó a cabo antes del 31 de mayo, fecha a partir de la que el virrey, según Alamán, desechó su plan. La entrevista de Iturbide con el virrey la sitúa también Julio Zárate antes del 31 de mayo.[86] Hasta dónde era cierto este abandono, resulta impreciso, pues el virrey no tomó medida alguna en contra de quienes continuaron reuniéndose con Monteagudo, e incluso nombraría al coronel Iturbide Comandante General del Sur el 9 de noviembre, medio año después de su primera entrevista. Alamán, que menciona inequívocamente las dos entrevistas de Iturbide con el virrey, la última en víspera de su nombramiento el 9 de noviembre, señala expresamente la primera relacionándola con el original proyecto de los hombres de La Profesa.[87] La aceptación de ese primer plan por Iturbide tratará de explicarla y justificarla públicamente Bermúdez Zozaya todavía en 1841.

En el llamado Manifiesto de Liorna, fechado el 27 de septiembre de 1823, Iturbide habla de la situación en México en los días de la restauración, y lo subrayamos, de "*la llamada Constitución de las Españas*", y de que en "todas partes se hacían juntas clandestinas en las que

[86] *México a través de los siglos*, tomo III. *La guerra de independencia*, por Julio Zárate, s.f., p. 663.

[87] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo V, pp. 67-68 y 76-77.

se trataba del sistema de gobierno que debía adaptarse", con las más diversas y contrarias tendencias. Pero a las reuniones de La Profesa sólo se refiere en una nota, para negar que el Plan de Iguala se hubiese fraguado en ellas, como lo aseguró Vicente Rocafuerte. La versión de Iturbide desde Liorna es otra: "prescindo de las ideas de aquellos a quienes se atribuye: son cosas en que ordinariamente el vulgo se equivoca; para mí son personas muy respetables por sus virtudes y saber: este escrito llegará a sus manos, y yo no me atrevería a llamarle mío (al Plan de Iguala), porque tengo bastante delicadeza para exponerme a ser desmentido".[88] La discreción de Iturbide sobre el primitivo Plan de La Profesa y los hombres que trabajaron en él es total. Iturbide, como sus parciales y sus adversarios contemporáneos, omite nombres y detalles del hecho que le llevó a figurar en el episodio de la consumación de nuestra independencia. Iturbide se mantuvo fiel a quienes habían pensado en él en mayo de 1820, y cuando escribió al virrey enviándole el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, para integrar la Junta Gubernativa que se encargaría del gobierno, presidida por Ruiz de Apodaca, le propuso entre otros y en primer lugar a Miguel Bataller, incluyendo al canónigo Monteagudo, "sin que se pueda desconfiar de sus luces, ni de su honradez, ni de su firmeza de carácter...", aseguró.[89]

"Cuáles fueron los planes que se hubiesen concebido, y los que por fin se adoptaron —dirá Alamán refiriéndose a los conciliábulos de La Profesa—; quienes tuviesen parte en ellos y contribuyesen a su ejecución, es hoy imposible de averiguar, porque habiendo tenido el intento un resultado muy diverso del que se propusieron sus autores, éstos han tomado el mayor empeño en ocultar la participación que en él tuvieron, y en hacer desaparecer todos los documentos que pudiesen hacerlo conocer".[90]

No obstante, es el mismo Alamán quien da las precisiones sobre los sucesos, sin ofrecer motivo a duda alguna.

Hemos visto que hacia mayo de 1820, cuando se iniciaron las reuniones con Monteagudo, únicamente se conoce en México la restauración de la Constitución. No es sino hasta el 26 de agosto cuando se da la noticia de la instalación de las Cortes el 9 de julio en Madrid, y ello después de que en México se habían restablecido, con sus individuos de 1814, los ayuntamientos constitucionales, y las diputaciones provinciales de Yucatán y de la Provincia de Nueva España. Excepto en las Provincias Internas de Oriente y de Occidente, para fines de septiembre se habían realizado las elecciones de diputados a las provinciales de Nueva Galicia, Yucatán, Nueva España y San Luis Potosí, y las de diputados a las Cortes de 1820-1822. En noviembre estaban instaladas las seis diputaciones provinciales del antiguo virreinato,[91] y elegidos los diputados a Cortes. La restauración del sistema representativo era un hecho.

El decreto de supresión de monacales y de reforma de regulares, de 1 de octubre de 1820, que había sido vetado por Fernando VII, quien finalmente lo firmaría el 25 de ese mes, co-

[88] Citamos la traducción mexicana de la edición inglesa publicada en Londres en 1823 con el título de *Political Life of the Ex-Emperor of Mexico, Don Agustín de Iturbide*, y las citas remiten a su reimpresión en la obra de Carlos Navarro y Rodrigo: *Vida de Agustín de Iturbide. Memorias de Agustín de Iturbide*, Madrid, 1919. Esperamos la edición del documento manuscrito que posee el bibliófilo don Manuel Porrúa. En adelante se citará como *Manifiesto de Liorna*.

[89] Mariano Cuevas, *op. cit.*, p. 190.

[90] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 70-71.

[91] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 45-47.

mo se consignó, no se publicó en México en 1820. Con este decreto se apresuraría en España la escalada liberal afectando los privilegios corporativos de la Iglesia. Por más que se conociera en el país el proyecto de reforma de 1813, al que ya se hizo alusión, al menos hasta noviembre no podían existir más que prevenciones sobre la reforma de los regulares. Lo cierto es que en 1820 se llevó a cabo la sola restauración de la Constitución y de la legislación de las Cortes de Cádiz. Esta restauración comprendía en México la del sistema electoral para órganos representativos —2 y 3 de junio—, la de la libertad de imprenta —19 de junio—, y las supresiones del Tribunal del Santo Oficio y de la Compañía de Jesús. Aunque no debemos olvidar que las dos primeras habían sido adoptadas en la restauración borbónica de Luis XVIII, sin abdicar éste de la soberanía, y que el Santo Oficio no existía en Francia.

* * *

En nuestra acotación cronológica dos hechos condicionan el de la consumación de la independencia en México: la proclama de Riego de 1 de enero de 1820, en cuanto es una expresa declaración del desistimiento a la reconquista de América por el ejército expedicionario destinado a ella, y la restauración constitucional aceptada formalmente por Fernando VII el 7 de marzo de 1820. Se ha intentado precisar el significado de ésta acudiendo a documentos originales, entre ellos a la convocatoria a Cortes, al decreto de 24 de septiembre de 1810 y al debate de los artículos 2 y 3 del proyecto de Constitución, en los que constan los términos y el alcance que tenía la subversión de la titularidad de la soberanía atribuyéndola a la nación. El significado de ella la corroboran explícitamente la *representación de los persas*, de 12 de abril de 1814, y el real decreto de 4 de mayo que declaró la nulidad de la Constitución y de lo legislado por las Cortes.

Históricamente, el decreto de 4 de mayo de 1814 fue la primera decisión libremente tomada por Fernando VII. Esta decisión y la conducta posterior del rey confirmatorio de ella, incluso al no cumplir durante seis años su ofrecimiento de tratar con procuradores de España e Indias, en Cortes *legítimamente reunidas*, eran irrecusables testimonios de esa libre voluntad del monarca. Mas no sólo existían los concluyentes testimonios de 1814. Es difícil suponer que Ruiz de Apodaca, el obispo Antonio Joaquín Pérez, los individuos de la Real Audiencia y del Santo Oficio, los del Consulado de México, el canónigo Monteagudo, y quienes se agrupaban en torno a ellos ignoraran, aunque no circularon oficialmente, el manifiesto de Fernando VII de 3 de marzo de 1820, y el frustrado real decreto del día 6 —la víspera de que el rey jurara por primera vez la Constitución—, a que ya nos referimos, y en los que constaba expresamente la repugnancia de Fernando VII a aceptar la Constitución y convocar a Cortes en los términos de 1810.

La primitiva decisión del virrey de no publicar y jurar la Constitución, coincidiendo y presumiblemente de acuerdo con Monteagudo y Bataller, no podía tener motivos más fundados.

No en *El Libertador*, su directa apología de Iturbide, sino en la *Historia de la Iglesia en México*, el padre Mariano Cuevas cita un informe del 21 de diciembre de 1821 del teniente coronel mayor Vicente Bauzá al capitán general de Cuba, sobre los sucesos de México. Según Bauzá, los conspiradores de La Profesa escogieron a Iturbide "para rasgar en fin el velo de sus maquinaciones... No es difícil —agrega— conocer las armas que manejaría el clero para atizar este fuego y remover los obstáculos que precederían este cambio político... El confesiona-

rio y los púlpitos se erigieron en otras tantas cátedras de doctrina para separación del sistema constitucional, siendo tanto más útil este método cuanto que en este país (¡qué tiempos!) se cuentan muy pocos libertinos que no cumplan con el precepto pascual... Intrigaron (el padre Monteagudo y consocios) para hacer Comandante General del rumbo del sur a Iturbide".[92]

No obstante lo fragmentario de la cita, lo enrevesado del estilo, y la confusión en las etapas del plan, es clara la referencia a una "separación del sistema constitucional" apoyada por el clero desde el púlpito y el confesionario. O sea, al inicial propósito del virrey y de los hombres de La Profesa, distinto y contrario al de una independencia de España, no lo era tanto si se trataba de una independencia antiliberal.

La referencia a la secuela del plan original la hace Ruiz de Apodaca en un documento de 31 de enero de 1821, también citado por Cuevas e identificado con su registro en el Archivo General de Indias. "En efecto —escribió el virrey—, no puede dudarse que desde la época en que comenzaron a correr aquí los impresos de esa Península con los referidos decretos (sobre regulares y desafuero del clero), empezó también a extrañarse la opinión...; y no se trata de otra cosa que de fijar en estos habitantes la idea de su emancipación de la Metrópoli, siendo ya demasiado familiar la voz de la independencia que se pronuncia casi sin el menor recato y consideración... Entre otras especies que se propalan y han llegado a mi noticia vagamente, una es la de erigir este gobierno en República, indicando para esta variación el próximo mes de marzo, y otra, y la más válida, la de que los diputados a Cortes que van por estas Providencias, están de acuerdo en pedir la separación de ellas a su Metrópoli, sujetándolas al mando de uno de los señores Infantes de la Casa Reinante; cuyo pensamiento, aunque yo no he podido comprender bajo qué plan o con qué clase de autoridad se realice, con todo, no puedo dejar de llamar la atención a S.M. hacia esas especies".[93] El cauto virrey, ante el hecho de la restauración constitucional y dirigiéndose a autoridades liberales, no dice una palabra sobre los planes de mayo para desconocer la Constitución. Al mencionar la reforma de los regulares alude a sucesos posteriores, como al referirse al proyecto de obtener una independencia bajo el *mando* de un infante, como el más cierto, y aunque menciona a los diputados electos como gestores del plan, es sólo dubitativo y no severo en su juicio.

Más adelante nos ocuparemos de la misión confiada por Iturbide a Juan Gómez Navarrete, para proponer en Veracruz a los diputados electos a Cortes que suspendiesen su viaje a España, y esperar la victoria militar y política de Iturbide, con el fin de formar un Congreso del reino sin necesidad de convocar a nuevas elecciones. Los diputados que lo ignoraban, conocieron entonces en su esencia el plan que sería promulgado el 24 de febrero de 1821 en Iguala. Aludimos aquí al episodio porque los diputados se embarcaron a España el 13 de febrero, y el informe del virrey es de 31 de enero. Que Ruiz de Apodaca no intentase siquiera impedir el viaje de los diputados resulta enigmático en tanto no se disponga de más documentos sobre la ocurrencia.

Volvamos al proyecto de mayo para desconocer al gobierno constitucional y guardar el reino fiel a Fernando VII hasta que éste pudiera obrar con libertad, plan aceptado por Iturbide y frustrado al abandonarlo el virrey jurando la Constitución.

[92] Mariano Cuevas, *Historia de la Iglesia en México*, México, 1932, tomo v, p. 63.
[93] *Ibid.*, pp. 62-63.

La posibilidad de su realización la ofrecía la metrópoli, con las públicas manifestaciones de Riego y Quiroga que renunciaban expresamente a la reconquista de América. La renuncia aseguraba a los antiliberales de México la impunidad para desconocer la Constitución. En todo caso, los riesgos que afrontarían serían internos. Ruiz de Apodaca dudó en hacer la declaración pública, y después de un mes resolvió no enfrentarse a esos riesgos que, según Alamán, incluso los representaban los propios jefes y oficiales españoles, que en número apreciable estaban afiliados a las sociedades masónicas. Que esto significara la aceptación llana de régimen liberal es otra cuestión. El desconcierto de un plan no implicaba renunciar a la resistencia por otros medios. En todo caso, se estaría al desenlace del conflicto en España como alternativa última.

Pero con independencia de la secuela del proyecto original, su carácter y su propósito no ofrecen ambigüedad alguna. Que los antiliberales profesaran un absolutismo como el doctrinario de Joaquín Lorenzo de Villanueva en su *Catecismo de Estado*, o el menos extremista de Clemente Peñaloza y Zúñiga en su obra sobre *La monarquía*, no es un problema. Frente a la Revolución francesa, en España se habían formulado las tesis radicales del absolutismo borbónico; y ante la revolución doceañista, en su primera y libre manifestación Fernando VII lo había reiterado entre limitadas condescencias, que serían sólo verbales. La cuestión de fondo a fines del XVIII, y en el constitucionalismo doceañista, no fue en sí la de los establecimientos liberales, sino la de la titularidad de la soberanía. Las instituciones liberales podían repugnar a los absolutistas, pero no eran las premisas de la revolución por más que así se las condenara, pues podían insertarse en el antiguo régimen siguiendo el ejemplo de Luis XVIII, en tanto subsistiera su norma fundamental, para emplear un término kelseniano. En 1814, y en los seis años siguientes, Fernando VII no admitió alternativas, ni siquiera la que en su antiliberalismo le ofrecieron hasta los diputados *persas*. Fernando planteó una disyuntiva. Los antiliberales de México optaron con el rey, en la certeza de que la metrópoli no dispondría de un ejército para someterlos. Y el que en La Profesa se pensara en Iturbide como su hombre, no podía ser un juicio gratuito. Su misma aceptación a participar, que lo llevó a recibir la confidencia del virrey, no puede ser desvirtuada por los sucesos. Presumir que se trataba de un ardid es una aleatoria apología *a posteriori*.

El singular origen del episodio de la consumación de nuestra independencia condicionó, lo hemos dicho, su proceso inmediato. La ruptura con el antiguo régimen sería más ardua en la promiscua ambigüedad de quienes intervenían en ella.

Parte segunda

EL PLAN DE IGUALA Y LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

1

PREÁMBULO DEL PLAN DE IGUALA

Desde las primeras páginas aceptamos que hubo una escisión entre la insurgencia —1810-1820— y el episodio de la consumación de nuestra independencia. Resulta paradójico, y a los contemporáneos enterados de los sucesos debió resultarles todavía más, que el criollo realista más notorio en el ejército, el hombre de confianza escogido para intervenir en la realización del proyecto absolutista de mayo de 1820, llegara a ser el factótum de la final emancipación de México. Con lenguaje del XIX podríamos hablar de una *adaptación al medio* por parte de Iturbide y los activistas de La Profesa.

El juramento de la Constitución por el virrey fue, dice Bustamante, "el día más grande en que se cortó el brazo derecho al coloso deforme del despotismo" porque a ello "debimos el tránsito feliz que hicimos a nuestra independencia y libertad".[1] No importa que Bustamante hubiese escrito en 1820 los *Motivos de mi afecto a la Constitución*, que no publicaría, olvidando aparentemente su antigua insurgencia para acogerse únicamente al liberalismo doceañista de la metrópoli.

Atendamos aquí a los hechos que llevarían a la proclamación del Plan de Iguala. Para Alamán, "las ideas de Iturbide se fijaron desde entonces —cuando se fraguó en mayo el plan de La Profesa— en el establecimiento de una monarquía, con un príncipe europeo", ideas a las que asentía Monteagudo.[2] En todo caso, subsistía el propósito antiliberal. La vinculación de Monteagudo y el hecho de considerar posible la conformidad del general José de la Cruz y del obispo Ruiz de Cabañas —los tres, con Monteagudo, españoles anticonstitucionales— sólo podía fundarse en la previa actitud común. "Se trata, pues —escribe Luis Villoro—, del último intento de la clase europea para adelantarse al movimiento que se anuncia, con un golpe de audacia", similar al de 1808 en contra del virrey Iturrigaray. Mas en 1820 los europeos ya están divididos en constitucionales y antiliberales; los comerciantes de Veracruz habían obligado al juramento de la Constitución el 25 de mayo, y entre jefes y oficiales españoles afiliados a sociedades masónicas se profesaba un claro liberalismo.[3] La ideología liberal era un factor nuevo y perturbador en el viejo conflicto entre criollos y peninsulares.

No es necesario hacer historia, y ni siquiera una mínima enumeración de los memoriales de agravios criollos, y a favor de los indios, que se dirigieron a la corona, y que se repitieron en el Cádiz de las Cortes. Juan de Solórzano Pereira en su *Política indiana* registra los anteriores al si-

[1] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, tomo V, pp. 77-88.

[2] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo V, p. 71.

[3] Luis Villoro, *La revolución de independencia*. México, 1953, p. 182.

glo XVII. El capítulo XIX del libro IV de la obra, "De la justificación, y conveniencia que ay, para que en las Iglesias, y Beneficios de las Indias se prefieran en igualdad de méritos a los que hubiesen nacido en ellas y de las leyes del Derecho común y del Reyno, y Cédulas Reales que tratan de esto", es una suficiente exposición del conflicto. Solórzano acude a la doctrina y las costumbres, y citando ordenanzas del Consejo de Indias, de 1571, y una real cédula de 1609, concluye que si "todas se fundan en la eficaz razón, y consideración, en que pues estos naturales de las Indias, y sus Progenitores las pueblan, habitan y defienden, y con su sangre, sudor y trabajos las descubrieron, conquistaron y pacificaron, no debe preferirse en las honras y comodidades de ellas a los estragos, y advenedizos, porque siempre se ha reputado al criollo estrangeron de repartimiento, y distribución de los premios por duro y cruel, y totalmente contrario a las reglas jurídicas y de caridad bien ordenada, como lo tengo dicho y probado para otros intentos". Y aún llega más lejos: "Con ser cosa tan deseada y encargada, que los tesoros y riquezas y de las Indias que traigan a España, todavía encarga a los Prelados de ellas, que amonesten a todos sus pueblos, que las limosnas, y demás obras pías, que se pretendan hacer en vida o muerte las hagan y funden en las partes y lugares donde Dios les permitió adquirir, y juntar los dineros y haziendas de que querían hazerlas".[4] La voz *naturales de las Indias* consagra en Solórzano el *ius soli* en los reinos de América. "Entre los naturales de las Indias —afirma Solórzano—, a quienes se debe en primer lugar los beneficios de ellas... se podrían y deberían contar también los Indios y Mestizos, si el Derecho que por este titulo del origen y naturaleza tienen adquirido, no se perdiese por servicios o viciados, y de malas costumbres, o espurios, y ilegítimos en su nacimiento...". Solórzano excluye la ilegitimidad acudiendo a una bula de Gregorio XIII, de 1576, que facultaba a los obispos de Indias para dispensarla, consignando que no se le dio el *placet* en España.[5]

El alegato, que en buena y erudita parte ofrece la obra de Solórzano, era insospechable: "que causa dolor y sentimiento en los Criollos —escribió— verse excluir en su patria de estos honores, teniendo partes para poder esperarlos, y que les vengan a mandar y señorear extraños".[6] Solórzano no puede incluirse, en forma alguna, entre los autores de la "leyenda negra" y cuanto dice de lo eclesiástico corresponde también al gobierno civil. No es necesario acumular citas. La descendencia criollista de Solórzano fue prolífica. En el más apasionado de los documentos criollos del XVIII, la *Carta dirigida a los españoles americanos* del jesuita expulso del Perú, Juan Pablo Viscardo, que Francisco Miranda distribuiría en su desafortunado desembarco en Coro, en 1806, excitaba iracundo a la independencia. La alegación la hará suya nuestro beligerante doctor Mier en los años diez del XIX, y correría por todos los papeles de la emancipación. Acudir a la *Política* de Solórzano era un sólido argumento de autoridad formulado por uno de los más eminentes teóricos del absolutismo del siglo XVII.

* * *

La restauración constitucional el año 1820, después de diez años de insurgencia americana, era además el factor perturbador en el conflicto criollos-peninsulares de México. El restable-

[4] Juan de Solórzano Pereira, *Política indiana*, Amberes, 1703, p. 345.
[5] *Ibid.*, pp. 347-348.
[6] *Ibid.*, p. 380.

cimiento liberal llegaba a través de la doble frustración del constitucionalismo del año 1812, en España con el regreso de Fernando VII y su profesado absolutismo, y en México, primero con el escamoteo de la Constitución, y después con la ejecución de don José María Morelos, el desastre de Javier Mina, y la paulatina consolidación del régimen virreinal y el desaliento de antiguos insurgentes que, como Bustamante, veían en 1820 a la Constitución como "la única tabla que debe salvarnos en la tormenta borrascosa del despotismo".

La ecuación inicial de diez años antes, independencia-colonialismo, se involucra en la de constitucionalismo-antiliberalismo. Las beligerancias también se alteran, y la insurrección es desplazada por el activismo ideológico, público y conspirativo. En este activismo probó su diligencia eficaz el grupo que rodeaba a Monteagudo, aunque no logró sus fines.

La insurgencia del primer lustro de los años diez, según Alamán, no fue "una guerra de nación a nación, como se ha querido falsamente presentarla; no fue un esfuerzo heroico de un pueblo que lucha por su libertad...: fue, sí, un levantamiento de la clase proletaria contra la propiedad y la civilización...". La rebelión de Iturbide, por el origen que la hizo posible, y cualquiera que fuesen sus fidelidades o no al plan original, se propuso ser la negación de aquella insurgencia, por más que se niegue la simplificación polémica de Alamán.

El proceso de nuestra independencia no fue, ni podía serlo, unívoco y lineal en el orden de las ideas y los hechos. Con nitidez señala Luis Villoro, refiriéndose a Hidalgo y Morelos: "Ninguna de las dos figuras puede dibujarse de un solo trazo... En efecto, sus ideas se resienten de un doble origen. En Hidalgo las propias concepciones ilustradas se ven desplazadas por el impulso popular; en Morelos el proceso es inverso; su personal concepción popular se trasforma al contacto con las ideas ilustradas criollas".[7]

La caracterización es cierta, mas debe precisarse que Morelos optó hacia el constitucionalismo liberal y por la independencia absoluta y republicana.

Carlos María de Bustamante, que desde 1808 está involucrado en los acontecimientos, es uno de los hombres que con menos reservas vive los sucesos de la emancipación y los riesgos de sus propias contradicciones. En 1817, teniendo como insurgente indultado la ciudad de Veracruz por cárcel, escribió *El indio mexicano o Avisos al rey Fernando VII para la pacificación de la América Septentrional.* "Esta obrilla —declara— se ha formado en el tumulto estrepitoso de la revolución en que he tenido que batallar conmigo mismo para colocar en orden mis ideas". El documento es mencionado por primera vez en *La constitución de Apatzingán,* de Felipe Remolina Roqueñí, quien se ocupa de él. El documento es fidelista y propone al rey un plan de gobierno para la pacificación. Bustamante había firmado, como diputado al Congreso de Anáhuac, el Acta de Independencia y el manifiesto de 6 de noviembre de 1813, y la Constitución republicana de 22 de octubre de 1814.

La oscilación, o más exactamente el desconcierto en las ideas y los intereses de los americanos fue profundo desde el año diez, y se acentuó con el de los europeos al iniciarse la crisis de los veinte. Luis Villoro expone el conflicto inicial en su breve y lúcido examen del proceso de don Miguel Hidalgo.[8] De no ser así, la independencia se hubiera logrado sin una larga lucha, estando gran parte de la riqueza minera y territorial en manos criollas. Éstos, los crio-

[7] Luis Villoro, *op. cit.*, p. 81.
[8] *Ibid.*, p. 71-76.

llos opulentos, simpatizantes o enemigos de la independencia, liberales o no, dentro del antiguo régimen estarían al desenlace de los acontecimientos. El episodio de la consumación de nuestra independencia es también, como lo juzga Villoro, el "último intento de la clase europea para adelantarse al movimiento que anuncia, con un golpe de audacia", y no sólo ello, pues en La Profesa se anticipaban al anuncio de los movimientos.

La renuncia del virrey a desconocer la Constitución evitó la colisión entre los constitucionalistas y los antiliberales, al perder éstos el apoyo de su autoridad, más propició las metamorfosis de Iturbide y de quienes lo apoyaron.

La suerte de la independencia sería ajena al sentido de sus primeros años. Sobre este sentido no es necesario especular. Un testimonio temprano y sorprendente lo dio el coronel Diego García Conde en su informe de 8 de diciembre de 1810 al virrey Venegas, al ser liberado por las fuerzas insurgentes. García Conde narra su prisión, y un diálogo con Ignacio Allende sobre la insurrección. Allende le habló de que se le unirían las tropas realistas por el encono que existía en contra de los peninsulares, "pues no era razón que una alhaja tan preciosa como ésta, se viese subyugada por unos hombres de tan pocos principios como los que generalmente venían de Europa". García Conde le respondió "que aun cuando consiguiese el exterminio de los Europeos —sin que Allende hubiese hablado de exterminio—, que estaba muy distante de poderse realizar, debía esperar de una Indiada muy sedienta ya de sangre, que no se contentaría con los Europeos, sino que acabaría con los Blancos del país...". Según García Conde, sus argumentos no fueron refutados; Allende admitió "las fatales consecuencias" de la insurrección, "pero que ya la cosa estaba hecha, y que no tenía remedio: consolándose con que en el caso de suceder, como yo lo temía, quedarían estos países a favor de los Indios sus primeros dueños:...".[9]

A Ignacio Allende lo heredamos identificado con la rebeldía criolla no con la insurgencia populista, y quizá no es falsa la imagen, pero el testimonio de García Conde lo muestra aceptando *la cosa que estaba hecha* y, como americano, aceptando también una justificación reivindicatoria de la usurpación padecida en la conquista. El episodio se inserta en una historia sin solución de continuidad a partir del sermón de fray Antonio de Montesinos, hacia la navidad de 1511 en la isla Española, y en el fiero bregar por medio siglo del padre Las Casas. Ese origen corresponde al sentido popular que era ajeno a quienes fraguaron el fin de la emancipación en México.

* * *

Volvamos a la situación en 1820. Hipólito Odoardo, fiscal de la Audiencia de México, la expone al ministro de Gracia y Justicia en su informe del 24 de octubre de 1820, documento que Alamán cita con amplitud. Para Odoardo la pacificación del país estaba lograda, excepto en zonas de Chilapa y la Costa Sur. Pero ya "no es la Nueva España lo que era en enero o febrero de este año. El espíritu público ha cambiado enteramente: las cabezas antes pacíficas se han vulcanizado", todos recelan unos de otros, y los más esperan "un cambio que consideran favorable y cuya naturaleza no se atreven a indicar. Así lo hemos palpado desde que se comen-

[9] J.E. Hernández y Dávalos, *Colección de documentos para la Historia de la Guerra de Independencia de México de 1808 a 1821*, México, 1879, tomo II, p. 269.

zaron a recibir en marzo las primeras noticias de la isla de León". En la cita de párrafos que hace Alamán no se menciona la proclama de Riego, pero de las primeras noticias de la isla de León, la primera y más importante era la proclama de 1 de enero. Odoardo habla de la cordial unión que se había logrado entre los militares, los eclesiásticos, las clases influyentes, que "trabajaron con igual celo y constancia en conservar estos dominios" y perseguir a los insurgentes. Las elecciones de diputados y de ayuntamientos, y la implantación de la libertad de imprenta, de la que se abusa, llevan a un trastorno general, que unos desean y otros temen, y a "un próximo incendio, más funesto que el que acabamos de pasar. Los indultados, diseminados en todas las provincias, han tomado un aire arrogante, y bajo el nuevo nombre de Capitulados, han empezado a suspirar por los grados militares que tenían en sus campos, y barrancas, y por su vida libre y vagabunda... Los abogados y oficinistas ven en un cambio probable la perspectiva de nuevas magistraturas... Los militares y el clero, que fueron y son el apoyo del gobierno, se hallan resentidos, y si hemos de creer en apariencias, no todos concurrirán con la misma eficacia que en épocas pasadas, a sostener el gobierno y defenderlo de los nuevos ataques que nuevamente se preparan". Los militares no tienen los beneficios que los de La Habana y Costa Firme, y no reciben ascensos. "El clero secular y regular, a vista de los papeles públicos y de las reformas que se proyectan en algunas casas religiosas, temen novedades en su existencia, en sus rentas e inmunidades personales"; quienes hicieron servicios en el pasado están olvidados por Madrid. Los europeos, antes unidos, que auxiliaban al gobierno, no tienen ya los mismos sentimientos, sea por cansancio "o que la juventud europea esté dominada como siempre por la influencia del comercio de Cádiz, en el día exageradamenta liberal y enemiga del antiguo gobierno". Temen lo que ocurra pero no se les ve decisión para oponerse a los males. Los mismos sentimientos son los de los propietarios: "también consideran inevitable el suceso de una próxima revolución" y aunque prevén perjuicios no se unen al gobierno, y "los vemos por el contrario divergentes en sus opiniones, y andar vagando de una en otra tertulia o en cofradías vergonzantes, para explorar los planes de independencia que en ellas se discuten con más o menos embozo, y ponerse bajo la protección de los varios muñidores y proyectistas que en ellas sobresalen". Alamán escribe en una nota al párrafo: "Ésta ha sido constantemente desde entonces la conducta de la clase propietaria y la causa de su anonadamiento y de la ruina del país". Odoardo continúa: "Esta conspiración habitual contra el gobierno, con agentes que se derraman por todas partes en busca de prosélitos, es la que ha acabado de pervertir la opinión pública...: el público ve envilecida la primera autoridad del reino, indefenso el gobierno, burlado por las juntas de censura y atacado por las corporaciones municipales... (que) blasonan derechos soberanos que no tienen... yo no me atreveré a indicar el tiempo de la catástrofe que muchos esperan ver realizada por el momento, pero sí diré que siguiendo las cosas su curso natural, no saldremos del año sin algunas conmociones más o menos generales, y éstas las veo venir o por uno o más Caudillos indultados, que se presentan en la escena mejor dirigidos de lo que estuvieron los primeros corifeos de la revolución, o que el clero comience esta guerra por odio a los principios adoptados y a la sombra del R. Obispo de Puebla, que tiene gran influencia en su diócesis, o finalmente, que se revolucione el virreinato con apoyo de los Estados Unidos, si no se les cede las Floridas..." Odoardo también señalaba los límites que a la autoridad territorial ponía la Constitución, proponiendo que se suspendiera su aplicación hasta que desapareciesen la inquietud y las ideas

que había dejado la revolución y se restablecieran los hábitos antiguos bajo la vigencia de las antiguas Leyes de Indias, dándose al virrey poderes absolutos. El propio Ruiz de Apodaca "había indicado sus verdaderos sentimientos —informa Odoardo—, ya en la renuncia de su cargo, por no considerar suficiente su actual magistratura para conservar el reino... y ya con la manifestación que nos hizo consternado (a la Audiencia formando acuerdo) el día de la jura, sobre que iban a malograrse todos los trabajos que había empleado felizmente en la pacificación del reino, por el abuso que se haría de las nuevas instituciones".

Pero la *prudente medida* era tardía, según Alamán, "cuando no se trataba ya más que de los medios que se debían adoptar para efectuar la independencia, en la que estaban conformes todos, variando sólo el modo de llevarla a ejecución".[10]

Cuando se instale el primer Congreso Constituyente de México, el 24 de febrero de 1822, José Hipólito Odoardo será elegido su presidente en la sesión inaugural. Más tarde, bajo el imperio, se exiliará a La Habana, y al reinstalarse el Congreso disuelto por Iturbide, se le invitará a regresar a México. Hacia 1851 y 1852, cuando Alamán concluye y publica el tomo v de su *Historia*, Odoardo es director del Montepío de La Habana. El informe de octubre de 1820 se lo envió Odoardo a Alamán después de leer el tomo i de la *Historia*, o sea en 1849 o 1850. Del informe dice Alamán: "vi con satisfacción que nuestras ideas estaban de tal manera conformes, que parecía habernos copiado el uno al otro". La utilización amplia pero fragmentaria del informe es suficiente al exponer la situación, pero omisa en cuanto se pudo referir con más detalle a las *tertulias y cofradías* en que se trataba la independencia, y a la proposición del mismo Odoardo para que se suspendiera la Constitución en México, permaneciendo el reino bajo las Leyes de Indias y el gobierno del virrey con poderes absolutos. Las coincidencias no explicadas no dejan de causar perplejidad. Dejemos las sugerentes interrogaciones en este punto, no disponiendo de referencias sobre la conducta de Odoardo en los días de La Profesa.

* * *

La descolonización de América, después de diez años de azarosa insurrección en el imperio y de los contrarios sucesos en España, desconcertaba y confundía a los hombres de México, colonialistas o partidarios de la independencia, incluyendo a los insurgentes.

Excepto en el mutilado virreinato del Perú, el Alto Perú y la América del istmo, la independencia se había declarado formalmente en los países del sur. La Banda Oriental del Plata estaba invadida por el Brasil, y el Paraguay clausurado por la dictadura del doctor Rodríguez Francia. El imperio español de América se disgregaba. Las noticias podían censurarse pero no ser desconocidas.

Frustrado el plan de mayo que todavía en octubre de 1820 está expreso en la exposición de Odoardo al gobierno español, Iturbide, con la aprobación de Monteagudo, concibe el establecimiento de una monarquía en México con un príncipe europeo. Frente a la España constitucional se plantea la independencia motivada por un previo antiliberalismo. No nos demoraremos atendiendo a la manera como Iturbide se proponía dar un golpe de mano en la

[10] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 54-60.

ciudad de México, análogo al de 1808 cuando se apoderaron los españoles del virrey Iturrigaray y lo depusieron, aunque Iturbide se proponía que el virrey sólo aceptara su proyecto.[11]

En la situación que describe Odoardo trascurren los meses de 1820 hasta noviembre, coincidiendo sus apreciaciones con las de Iturbide en el Manifiesto de Liorna de 1823: sobre la división de opiniones respecto a la forma de gobierno que convenía al país, Iturbide escribe que entre los europeos y sus adictos unos estaban por la Constitución, otros por su reforma, por inadaptable a Nueva España, y que aun había quienes suspiraban por el absolutismo. Eran las opiniones de "las clases privilegiadas y los poderosos". "Los americanos deseaban la independencia; pero no estaban de acuerdo en el modo de hacerla, ni en el gobierno que debía adoptarse". Había partidarios de exterminar a los españoles, confiscando sus bienes, otros de sólo separarlos de los empleos. Sobre el gobierno, se hablaba de república, federal o central, y de monarquía moderada. Entre los afiliados a las logias escocesas, "una parte de sus agentes deprimía al clero, otra lo alentaba. De este modo —afirma Iturbide— luchando los eclesiásticos entre la confianza de mejoras y desesperación por los ataques bruscos que les dirigían, tomaron con empeño la regeneración y se logró".[12] La regeneración sería la propuesta por Iturbide en el Plan de Iguala, aunque debemos averiguar qué era lo que se regeneraba una vez que no podía restituirse el antiguo régimen absoluto, y cuando esta imposibilidad era ya una evidencia, al menos en América.

Iturbide percibe lo inmediato de las circunstancias, mas no advierte la cuestión de fondo: el significado subversivo de la revolución, la de la emancipación americana y la de la revolución liberal en España. Ve en ambas lo adjetivo, los intereses eclesiásticos y particulares afectados, la pugna entre criollos y peninsulares, las nuevas *formas* del gobierno, no el supuesto de ellas. Fernando VII y Luis XVIII, y sus consejeros, en cambio, atendieron a ese supuesto, y de maneras diversas lo negaron, manteniendo el fundamento del antiguo régimen en la titularidad de la soberanía. Que histórica y parcialmente ese antiguo régimen prevaleciera, es otra cuestión. Iturbide en su propia justificación, y ni siquiera al hablar del Plan de Iguala parece enterado de que el hecho solo de declarar "la absoluta independencia de este reino", suponía la asunción de la soberanía por el pueblo al desconocerse los títulos previos de la corona española. En La Profesa debió ser aleccionado sobre ello cuando aceptó participar en el desconocimiento de la Constitución española, que formalmente incorporaba a las Américas como sujetos de la titularidad de la soberanía. En todo caso, la omisión no puede ser menos que significativa y contradictoria. En su lugar nos ocuparemos del documento de Iguala.

El preámbulo del Plan de Iguala, entre mayo de 1820 y febrero de 1821, se inscribe en el desconcierto y en la manipulación de una independencia en la que, como dice Alamán, testigo de los sucesos, estaban conformes todos, "variando sólo el modo de llevarla a la ejecución".

[11] Manuel Gómez Pedraza, *Manifiesto que Manuel Gómez Pedraza, ciudadano de la república de Méjico, dedica a sus compatriotas o sea una reseña de su vida pública*, Nueva Orleáns, 1831.

[12] Agustín de Iturbide, *Manifiesto de Liorna*, pp. 240-241.

2

HACIA EL PLAN DE IGUALA
ITURBIDE Y GUERRERO

Iturbide calla en su Manifiesto de Liorna la manera como se le nombró comandante general del sur, sustituyendo al coronel José Gabriel Armijo, que había renunciado al mando. Alamán, que se propuso rectificar las versiones sobre el nombramiento, recoge la del teniente coronel Miguel Badillo, quien tenía a su cargo el ramo de guerra en la que ya era entonces Capitanía General de la Provincia de Nueva España. Ruiz de Apodaca solicitó a Badillo nombres de jefes para suplir al coronel Armijo. Aquél propuso varios, y el virrey "se detuvo al oír el de Iturbide sin duda —observa Alamán— por la recomendación anterior que el doctor Monteagudo había hecho de él".[13] El virrey pidió a Badillo su opinión sobre Iturbide, y la recibió favorable. Alamán da una llana versión sin considerar las anteriores entrevistas entre el virrey e Iturbide, la primera en 1816, recién llegado Ruiz de Apodaca a México. En esa primera entrevista Iturbide explicó al virrey su conducta en el Bajío, respondiendo a las acusaciones que se le hacían por depredaciones y malos manejos. Al parecer, la entrevista fue satisfactoria para Iturbide, según carta suya a un amigo.[14]

La siguiente entrevista de que se tiene noticia cierta fue la de mayo de 1820. Iturbide, recomendado por Monteagudo, oyó del virrey graves confidencias en un proyecto en extremo comprometedor. Ruiz de Apodaca también estaba informado de la opinión que tenía de Iturbide el regente de la Audiencia, Miguel Bataller, complicado en las reuniones y planes de La Profesa, y quien había conocido la causa seguida contra Iturbide por los asuntos del Bajío. Iturbide llegaba en 1820 a la confianza del virrey después de estar separado del mando efectivo de tropas desde 1816. W.S. Robertson dedica el capítulo III de su obra que titula *Interludio* en la vida de Iturbide, 1816-1820, al episodio de las acusaciones y su incierto proceso, que no tuvo resolución formal definitiva. El mismo Robertson repara que es evidente "que el coronel no había sido totalmente recompensado por las contribuciones —incluso de su patrimonio— que hizo a la causa del rey", en los años que combatía a los insurgentes. Y agrega: "parece que durante un periodo crítico en la historia de México, ciertos males verdaderos o imaginarios enconaban la mente de un capaz y ambicioso comandante criollo...". "Es más —según Robertson, que no defiende la inocencia de Iturbide—, en vista de los ataques que le hicieron, parece que se convenció que no podía esperar una carrera brillante en el servicio militar español, y que por lo tanto debía buscar un nuevo camino a su ambición".[15]

[13] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 76.
[14] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 41.
[15] *Ibid.*, pp. 49-50.

El general Filisola refirió a Alamán, y los historiadores posteriores lo han repetido, que el día del asalto al fuerte de Cóporo, el 4 de marzo de 1815, ante el fracaso realista, Iturbide se lamentó del inútil derramamiento de sangre, llamando la atención a Filisola sobre "la facilidad con que la independencia se lograría, poniéndose de acuerdo con los insurgentes las tropas mexicanas que militaban bajo las banderas reales; pero considerando el completo desorden de los primeros y el sistema atroz que se habían propuesto, concluyó diciendo, que era menester acabar con ellos antes de pensar en plantear ningún plan regular".[16]

El conocimiento que Ruiz de Apodaca tenía de Iturbide no podía fundarse sólo en recomendaciones, por calificadas que ellas fueran. Su conocimiento de Iturbide era más antiguo.

El general Gómez Pedraza cuenta cómo reanudó en 1820 su amistad con Iturbide, después de que fue elegido diputado a las Cortes por la provincia de México, y poco antes de partir a España. El diálogo lo relata Gómez Pedraza: "...me preguntó: ¿qué juicio forma V. del estado político de nuestra patria? Se prepara le contesté, un movimiento general que importaría rectificar y conducir; ¿V. cree que yo sería capaz de hacer eso? mejor que nadie. ¿Y V. me ayudaría? —le preguntó Iturbide, contestándole Pedraza—: En cuanto V. me juzgue útil, en esto rematamos la conversación". En una segunda entrevista en la casa de Gómez Pedraza, éste lo disuadió de su idea de preparar una acción en la ciudad de México, convenciéndolo de que el movimiento "debería comenzarse de la circunferencia al centro, y que la ocupación de la capital sería el último paso de la empresa". Para lograr un mando militar fuera de México, Iturbide, "pasó a los dos días a presentarse al Virrey, quien siempre que lo veía le manifestaba el deseo de que saliese de la oscuridad en que estaba...". Así, según Gómez Pedraza, obtuvo el mando del sur. Las entrevistas se sitúan en los primeros días de noviembre, y no es una especulación que Iturbide buscó a Gómez Pedraza por haber sido elegido diputado a Cortes. Éste le dio a Iturbide cartas de presentación dirigidas a los oficiales españoles Joaquín Parrés y José Antonio Echávarri, al coronel Anastasio Bustamante, y para Anastasio Román, vecino de Teloloapan, y Arce, de los Llanos de Apan.

En tan breves días, escribe Gómez Pedraza, pues el 16 de noviembre saldría Iturbide de México rumbo al sur, "el plan había cambiado de hecho, y estaba reducido a que los diputados que marchaban a España se reunieran en Veracruz y que allí se constituyesen en congreso nacional, bajo la protección de Iturbide, que debía pronunciarse en el sur simultáneamente con los Diputados de Veracruz...". Se separaron, Iturbide hacia el sur y Gómez Pedraza a Veracruz. En el camino, Gómez Pedraza informó el proyecto a los diputados electos Molinos del Campo y González Angulo. Ya en Veracruz se reunieron los diputados: "Deseaban la independencia —dice Gómez Pedraza—, pero querían que cayera del cielo...". Él mantenía informado de todo a Iturbide, y "los pasos que dábamos Molinos del Campo y yo —dice—, no pudieron estar ocultos al gobierno; cada día nuestra situación se volvería más difícil" Sin llegar a acuerdo alguno, los diputados embarcaron hacia España.[17]

Inexplicablemente, Gómez Pedraza, que se atribuye participación tan estrecha con Iturbide, excepto sobre el propósito de la independencia no dice una palabra sobre el régimen que

[16] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 67.

[17] Manuel Gómez Pedraza, *op. cit.*, pp. 7-10.

se proyectaba. Y también parece ignorar lo que el virrey sabía tan bien y de lo que informaba a España el 31 de enero de 1821.

* * *

En el segundo proyecto, nacido al abandonarse el de mayo de 1820, se propone ya la independencia con un príncipe europeo. Iturbide contaba con un hombre de su total confianza entre los diputados elegidos a las Cortes, Juan Gómez Navarrete, quien seguiría fiel a su memoria. Alamán, también diputado a Cortes, da su versión, sin intenciones autojustificativas. Reunidos los diputados mexicanos en Veracruz, Gómez Navarrete los citó a todos a una junta reservada en el convento de Betlemitas, con la aprobación de fray José de San Ignacio, general de los religiosos, quien ya conocía el decreto de las Cortes de 1 de octubre de 1820, de supresión de monacales y reforma de regulares, que el rey, contrariado por su propio ministerio, firmó el 25 siguiente. Fray José de San Ignacio "tomaba con el mayor calor lo que podía conducir a una revolución", dice Alamán, y continúa su narración de las dos juntas de que da cuenta. Textualmente Alamán relata: "Navarrete puso en conocimiento de la junta —la primera— el plan de Iturbide, invitando a los diputados a demorar su salida, para instalar el congreso luego que la revolución se hubiese verificado, sin demora de nuevas elecciones. Varias fueron las opiniones que se manifestaron: los unos como el comandante de la división de Tehuantepec, don Patricio López, dejaron ver desconfianza en Iturbide: otros disgusto (*sic*) del plan propuesto, pues se inclinaban a una república y repugnaban la monarquía que Iturbide intentaba establecer; los más estaban por dejar que la independencia se hiciese y reservar para después de lograda, el hacer sobre sistema de gobierno lo que mejor pareciese. En cuanto a la demora que Iturbide solicitaba, nada se resolvió, conviniendo en tener otra reunión dos o tres días después y comprometiéndose todos a tener lo tratado en la mayor reserva, como lo cumplieron". Habían concurrido tres diputados que eran españoles, el coronel Matías Martínez y Aguirre, Tomás Murphy y Andrés del Río, "pues eran conocidas sus opiniones favorables a la independencia... En la segunda junta, sin llegar a un acuerdo sobre la proposición de Iturbide, se convino que cada uno obrase según su juicio. Entre los que desistieron del viaje estaban Bermúdez Zozaya, González Angulo y el doctor Cantarines. En una nota Alamán se refiere a la versión de Gómez Pedraza en 1831, y declara no saber nada de la comisión que le encargó Iturbide, pues el único que habló en su nombre fue Gómez Navarrete".[18] En sus divergencias, Alamán y Gómez Pedraza se corroboran.

La posterior conducta de los diputados mexicanos en Madrid supone el conocimiento del plan de Iturbide, que se haría público el 24 de febrero de 1821. El informe de Ruiz de Apodaca de 31 de enero de ese año lo alude claramente. Hasta dónde sabía el virrey el papel que desempeñaba Iturbide, se dilucidará cuando se conozcan sus informes reservados al rey, o los papeles que llevó consigo a España. En la discreción de quienes estaban informados sobre el plan de establecer una monarquía con príncipe europeo, como el general Cruz y el obispo Ruiz Cabañas, parece difícil excluir a los individuos de la Real Audiencia y a importantes funcionarios y vecinos de la ciudad de México, implicados o no. El plan venía a ser un secre-

[18] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 294-296.

to a voces, que si no era alentado tampoco fue reprimido. Los antiliberales y los independentistas coincidían en separarse del gobierno constitucional de España, incluso los diputados mexicanos a las Cortes de Madrid, confiaran o no en Iturbide, y aprobaran o desaprobaran su proyecto.

* * *

El nombramiento de Iturbide como comandante general del sur lo firmó el virrey el 9 de noviembre de 1820, y le dio instrucciones verbales de evitar en principio acciones cruentas, intentando atraer al indulto al general Vicente Guerrero y a Pedro Ascencio, irreductibles sobrevivientes en la insurgencia desde el año 1811. El 15 de noviembre solicitó Iturbide el grado de brigadier, y que se uniera a las fuerzas bajo sus órdenes el regimiento de Celaya, que había comandado antes del año 1816 en sus campañas contra los insurgentes.

El 16 de noviembre salió Iturbide de México a cumplir su misión en el sur. Ese día inició la aventura en la que desplegaría, hasta septiembre de 1821, sus habilidades más singulares. Había llegado la hora en la que el criollo, discriminado y enjuiciado en el ejército español, vindicaría su nombre erigiéndose en árbitro entre criollos y peninsulares, entre constitucionalistas y antiliberales, y entre insurgentes y realistas. El espejismo no podía ser más luminoso.

Alamán, de imprescindible consulta, narra la conversación de Iturbide con el capitán Francisco Quintanilla, del regimiento de Celaya, cuando se le incorporó en su cuartel general de Teloloapan a principios de diciembre. Iturbide le expuso sin eufemismos su proyecto de independencia. "Quintanilla no se atrevía a creer lo que oía —cuenta Alamán—, tan contrario a las opiniones y conducta anterior de su coronel, y no pudo menos de manifestar su sorpresa y desconfianza. No, le dijo Iturbide, con resolución, *nada tiene esto de incierto: V. desconfía, pero documentos intachables harán desaparecer toda incertidumbre*, y abriendo una gaveta, le puso en las manos el plan que después fue proclamado en Iguala, y la correspondencia que llevaba con varias personas de Méjico, entre cuyas firmas vio Quintanilla con no menor sorpresa, las de sujetos de la más alta categoría. Entonces le aseguró que el batallón haría lo que Iturbide le mandase..." Iturbide le recomendó silencio. Poco después, y para evitar deserciones en la oficialidad del regimiento de Celaya, Iturbide los informó de su plan y obtuvo su fidelidad.[19]

Desde su cuartel general en Teloloapan iniciará Iturbide su diligente y eficaz actividad epistolar. En cuanto a batir las fuerzas de Guerrero y Ascencio, fue menor y poco afortunada.[20] No obstante, recibió auxilios adicionales de dinero: 25 000 pesos del obispo Ruiz Cabañas, 12 000 y después 30 000 más del virrey, que le urgía ya exterminar a los insurgentes.[21]

No nos interesa ocuparnos del aspecto militar de la situación.

El hombre a quien debía combatir Iturbide, el general Vicente Guerrero, es un nombre

[19] *Ibid.*, pp. 80-81.

[20] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 56; Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 88-91, 96-97; Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, 93-96.

[21] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 57.

epónimo de la insurgencia de México. Nació el 10 de agosto de 1783 en el pueblo de Tixtla, de familia campesina. Iturbide nació el 27 de noviembre de ese mismo año de 1783, en Valladolid, hijo de español vasco, hacendado y casado con mexicana distinguida en su provincia, de ascendencia navarra. Ese mismo año de 1783 nacía en Caracas, el 24 de julio, Simón Bolívar. También ese año el conde de Aranda presentó a Carlos III su memoria reservada sobre la independencia de Estados Unidos, con su proyecto sobre la de los grandes reinos de América. El general Guerrero militaba en las armas insurgentes desde 1811; Iturbide en las realistas desde 1810 hasta 1816, para regresar en 1820. No deben ocuparnos las biografías de ambos. Como curiosidad bibliográfica registremos que en el *Dicccionario de insurgentes*, preparado por José María Miquel I Vergés dirigiendo un grupo de alumnos de El Colegio de México —dato que no consta en la primera y hasta hoy única edición, México, 1969—, del general Guerrero se ocupan 477 líneas, y del general Iturbide 685. La bibliografía sobre Guerrero llena 27 líneas y la de Iturbide 66. La curiosidad es superficial y paradójica. Iturbide es el hombre que inaugura la historia conservadora; a Guerrero lo hereda la liberal. El culto a Guerrero es cívico; el que se tributa a Iturbide es en ceremonias eclesiásticas privadas en los aniversarios de su ejecución.

El general Guerrero venía de la insurgencia popular. Iturbide era el criollo de más crédito militar en el ejército realista, aun separado del mando desde 1816. Lorenzo Zavala, hombre clave en la rebelión de la Acordada que llevó al general Guerrero a la Presidencia de la República en 1828, hace el retrato de Guerrero: "...nada debe al arte y todo a la naturaleza. Tiene un talento claro, una comprensión rápida y extraordinaria facilidad para aprender. No habiendo recibido ningún género de educación, y habiendo comenzado su carrera en la revolución, muy pocas lecciones pudo tomar de elocuencia y cultura en los cerros y entre indígenas y otras castas a cuya cabeza hacía la guerra obstinada a los españoles... su constancia es a la verdad un testimonio irrefragable de que posee virtudes sociales".[22] El retrato que hace Zavala de Iturbide no puede ser más elogioso: "...estaba dotado de cualidades brillantes, y entre las principales, de valor y de actividad poco comunes... Tenía un carácter altivo y dominante...". Y llega aún más lejos: "es indudable —escribe— que Iturbide tenía un alma superior, y que su ambición estaba apoyada en aquella noble resolución que desprecia los peligros y que no se detiene por obstáculos de ninguna especie... había podido medir la capacidad de los jefes de ambos partidos, y es necesario confesar que no se equivocó en sus cálculos cuando se colocó sobre todos ellos".[23] En verdad, sólo una personalidad atrayente podía satisfacer a los hombres de La Profesa para escogerlo como jefe visible en el movimiento que desconocería la Constitución restablecida en España. Y sólo un hombre así era capaz de continuar la aventura que lo llevaría hasta la consumación de la independencia. Pero si Iturbide tenía esa personalidad y esas cualidades, la empresa acometida lo obligaba a otros discernimientos.

Cuevas, su más fervoroso parcial, hablando de su adolescencia y su juventud, y de "la fuerza intelectual" (*sic*) que manifestaría, escribe: "la cercanía de su casa al convento de S. Agustín y la gran amistad que unía a los Iturbide con el Prior y Comunidad de dicho Con-

[22] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 110.
[23] *Ibid.*, pp. 86-87.

vento, nos hace pensar que en la, entonces riquísima, biblioteca Agustiniana, el joven Iturbide se pasó muy buenos ratos y muy bien aprovechados por su natural talento". Debió conocer, piensa también Cuevas, a Abad y Queipo, "hijo del Conde Toreno", y tratar a don Miguel Hidalgo. El ilustrado ambiente de Valladolid de Michoacán debió ser propicio a su inteligencia clara y retentiva.[24] Hasta los 15 años de edad estudió en el Seminario Conciliar de Valladolid, y salió de él para trabajar como mayordomo en una finca de su padre. Ciertamente Valladolid fue a fines del XVIII y principios del XIX la capital de provincia más ilustrada del virreinato de Nueva España, mas la habilidad, incluso la pluma fácil de Iturbide, son ajenas a esas condicionales suposiciones del padre Cuevas sobre su formación intelectual. La sagacidad oportuna sí fue suya, al menos hasta septiembre de 1821.

* * *

Continuemos por el camino de Iturbide hacia el Plan de Iguala, cuando él sabe que no es fácil ni probable, y menos próximo, que pueda batir y derrotar a Guerrero y Ascencio. La realización del proyecto de Iturbide le impone la necesidad de llegar a un acuerdo con él. Ernesto Lemoine es quien con más objetividad bien fundada plantea la situación de Guerrero. Todos los autores lo califican de *invicto*, lo que no puede decirse de Hidalgo o Morelos, apunta Lemoine. "Pero ¿el término invicto significa a la vez el de vencedor?", se pregunta. "Pretender una ofensiva en grande... y derramar la revolución más al norte de la frontera convencional que se había marcado, no se le ocurrió nunca, pues fue consciente de que su fuerza estaba en sus dominios y su debilidad fuera de ellos. En este razonamiento del que no se apartó, radica el secreto de su éxito. Pero también el de sus obvias limitaciones". Hacia principios de 1820, Guerrero "siendo invicto, estaba imposibilitado de transformarse en vencedor... la independencia de México había llegado a un callejón sin salida, a un punto muerto". Se conoce entonces la noticia de que Fernando VII había jurado la Constitución. Guerrero está bien informado de los sucesos de España y México, y frente a la nueva situación decide una acción conforme a ella con un plan "tan insólito como atinado", un plan que "hace girar en muchos grados la imagen histórica tradicional de Guerrero".

Lemoine acude a un documento de Guerrero, publicado por Abraham López Lara en 1968 (*Excélsior, Diorama*, 22 de noviembre de 1968). El 17 de agosto de 1820 Guerrero escribió al coronel Carlos Moya, que a las órdenes de Armijo tenía su cuartel en Chilpancingo: "Como considero a V.S. bien instruido de la revolución de los liberales de la Península... (realizada por) aquellos discípulos del gran Porlier, Quiroga, Arco, Agüero, Riego y sus compañeros, no me explayaré sobre esto, y sí paso a manifestarle que éste es el tiempo más precioso para que los hijos de este suelo mexicano, así legítimos como adoptivos, tomen aquel modelo, para ser independientes no sólo de Fernando, sino aun de los españoles constitucionales". Y continúa Guerrero: "Sí, señor don Carlos, la mayor gloria de Guerrero fuera ver a V.S. decidido por el partido de la causa mexicana y que tuviera yo el honor de verlo, no de coronel de las tropas españolas (en donde se tiene muchos rivales), sino con la banda de un Capitán General de las Americanas, para decir por todo el orbe que yo tenía un jefe, padre de mi afli-

[24] Mariano Cuevas, *El Libertador*, p. 20.

gida patria, un libertador de mis conciudadanos y un director que con sus realzadas luces y pericia supiera guiarnos por la senda de la felicidad. Esta alma grande que tiene V.S., ¿para cuándo es, si no para ahora? Sin embargo, que al sostenerse en la distinguida carrera de las armas con el carácter debido es propio de los militares... cuando se trata de la libertad de un suelo oprimido, es acción liberal en el que se decide a variar de sistema, más cuando supongo que no ignorará V.S. el rompimiento que entre liberales y realistas yace en la Península y aun se prepara en este Hemisferio".

Si el general Guerrero no podía ganar la independencia por las armas insurgentes, había otra posibilidad, y la ofrecía a un jefe realista. "Los que no advierten que para Guerrero y los suyos, en la crítica coyuntura de 1820-1821, cualquier abertura significaba ganancia y no pérdida, es porque simplemente ignoran la circunstancia militar, social y política, especialísima, de ese momento", comenta Lemoine.[25]

En el orden de las prelaciones dentro del campo insurgente, la independencia es la primera, como en el antiliberal lo es el separarse del constitucionalismo de la metrópoli. Aquel desistimiento de combatir en América, que se declara expresamente por Riego y Quiroga, ofrece la coyuntura a todos los proyectos e intentos que deben resolverse en el viejo virreinato dentro de sus propias contradicciones y dejados a la suerte de sus propias fuerzas.

Moya informó a Armijo de la proposición de Guerrero, y Armijo a Ruiz de Apodaca. Las propuestas de indulto que le enviaba Armijo, Guerrero las rechazaba obstinadamente. ¿Cuando Iturbide sale al sur el 16 de noviembre, el virrey le informó a su vez de la atrevida proposición de Guerrero a Moya el 17 de agosto?

El 10 de enero de 1821, desde Cualotitlán, Iturbide escribe su primera carta a Guerrero, después de que John Davis Bradburn quien había llegado a México en la expedición de Francisco Javier Mina en 1817 y militaba a las órdenes de Guerrero, había solicitado el indulto a Iturbide el 16 de diciembre anterior. ¿Cuáles fueron las confidencias de Bradburn, a quien Iturbide nombró ayudante suyo? Las interrogaciones siguen sin respuesta.

"Las noticias que ya tenía del buen carácter e intenciones de Ud., y que me ha confirmado don Juan Davis Bradburn, y últimamente el teniente coronel don Franisco Antonio Berdejo, me estimulan a tomar la pluma en favor de Ud. mismo y de la patria", escribió Iturbide a Guerrero. Le ofrece que "cesando las hostilidades, y sujetándose con las tropas a su cargo a las órdenes del gobierno... yo dejaré a usted el mando de su fuerza; y aun le proporcionaré algunos auxilios para la subsistencia de ella". Lo hace porque "habiendo ya marchado nuestros representantes al congreso de la Península, poseídos de las ideas más grandes de patriotismo y de liberalidad, manifestarán con energía todo cuanto nos es conveniente; entre otras cosas, el que todos los hijos del país, sin distinción alguna, entren en el goce de ciudadanos, y tal vez que venga a México, ya que no puede ser nuestro soberano, el Sr. don Fernando VII, su augusto hermano el Sr. don Carlos, o don Francisco de Paula; pero cuando esto no sea, persuádase Ud. que nada omitirán de cuanto sea conducente a la felicidad de nuestra patria. Mas si contra lo que es de esperarse, no se nos hiciese justicia, yo seré el primero en contribuir con mi espada, con mi fortuna y con cuanto pueda, a defender nuestros derechos; y juro a Ud. y

[25] Ernesto Lemoine, "Vicente Guerrero y la consumación de la independencia", *Revista Universidad de México*, diciembre de 1971, pp. 1-10.

a la faz de todo el mundo, bajo la palabra de honor en que puede Ud. fiar, porque nunca la he quebrantado, ni la quebrantaré jamás". Iturbide asegura que no espera. "se falte a la justicia en el congreso, porque en España reinan hoy las ideas liberales, que conceden a los hombres todos sus derechos; y se asegura en cartas muy recientes, que Fernando VII, el grande, no ha querido que en las Cortes se decidan reformas de religiosos, y otros puntos de esta importancia, hasta tanto no lleguen nuestros representantes, lo que manifiesta con claridad que estos países le merecen a S.M. el debido aprecio". Por la restauración constitucional se ha liberado a Sixto Verduzco, Nicolás Bravo e Ignacio Rayón. Invita a Guerrero a que envíe persona de su confianza para hablar de las proposiciones que le hará. O sea, que las de su carta no son todas. Ha dado órdenes al teniente coronel Berdejo, que sustituía precisamente al coronel Carlos Moya en el mando, de que suspenda toda acción militar.[26]

El 20 de enero contesta el general Guerrero. Como descubre en Iturbide "algunas ideas de liberalidad", le expondrá las suyas. Hace historia de la revolución "los americanos, cansados de promesas ilusorias, agraviados hasta el extremo, y violentados por último de los diferentes gobiernos de España, que levantados entre el tumulto uno de otro, sólo pensaron en mantenernos sumergidos en la más vergonzosa esclavitud, y privarnos de las acciones que usaron los de la Península para sistemar su gobierno, durante la cautividad del rey, levantaron el grito de libertad bajo el nombre de Fernando VII, para sustraerse sólo a la opresión de los mandarines". Los caudillos mexicanos fueron combatidos como enemigos por el virrey Venegas. Las Cortes reunidas en Cádiz, cuando España más necesitaba los auxilios de América, "descubren todo el engaño y oprobio con que siempre alimentan a los americanos; entonces declaran su desmesurado orgullo y tiranía; entonces reprochan con ultraje las humildes y justas representaciones de nuestros diputados... no se nos concede la igualdad de representación", y al americano se le infama como colono después de declarar a ultramar parte de la monarquía. Van los nuevos diputados a Madrid; nada debe esperarse "porque ni ellos han de alcanzar la gracia que pretenden, ni nosotros tenemos necesidad de pedir por favor lo que se *nos debe de justicia...*". Perdida la última esperanza, "entre la ignominia y la muerte, preferimos ésta, y gritamos: *independencia y odio eterno a aquella gente dura*". Nada puede esperarse de España, lo sabe bien Iturbide. "Concluyamos con que Ud. —le dice— equivocadamente ha sido nuestro enemigo, y que no ha perdonado medios para asegurar nuestra esclavitud; pero si entra en conferencia consigo mismo, conocerá que, siendo americano ha obrado mal, que su deber le exige lo contrario, que su honor le empuja a empresas más dignas de su reputación militar, que la patria espera de Ud. mejor acogida, que su estado le ha puesto en las manos fuerzas capaces de salvarla, y que si nada de esto sucediera, Dios y los hombres castigarán su indolencia".

Guerrero evita toda ambigüedad. "Soy de sentir que lo expuesto es bastante para que Ud. conozca mi resolución y la justicia en que me fundo, sin necesidad de mandar sujeto, a discurrir sobre propuestas ningunas, porque nuestra única divisa es *libertad, independencia* o *muerte*. Si este sistema fuese aceptado por Ud., confiaremos nuestras relaciones; me explayaré algo más. Combinaremos planes, y protegeré de cuantos modos sea posible sus empresas; pero si no se separa del constitucional de España, no volveré a recibir contestación suya, ni ve-

[26] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 171-172; Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 96-98.

rá más letra mía... Obre Ud. como le parezca, que la suerte decidirá, y me será más glorioso morir en campaña, que rendir la cerviz al tirano". Antes le había ofrecido: "decídase ud. por los verdaderos intereses de la nación, y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes, y conocerá un hombre desprendido de la ambición e interés, que sólo aspira a sustraerse de la opresión, y no a elevarse sobre la ruina de sus compatriotas".[27]

Cinco meses después de su carta al coronel Carlos Moya —español—, Guerrero insta en su proposición a Iturbide, pero su lenguaje se altera. A Moya lo invita; con Iturbide es conminatorio y arrogante. Si Iturbide tenía conocimiento de lo propuesto por Guerrero a Moya el 17 de agosto de 1820, lo que es la presunción más razonable, cabe preguntarnos cuánto sabía Guerrero de los manejos de Iturbide desde mayo. Iturbide inicia una negociación y rastrea posibilidades. Guerrero fija los términos, o mejor aún, la condición.

La respuesta de Iturbide, el 4 de febrero, es inmediata: "Estimado amigo: ...me lisonjeo de darle a Ud. en breve un abrazo que confirme mi expresión... envío a Ud. al portador, para que le dé por mí las ideas que sería muy largo de explicar con la pluma; y en este lugar sólo aseguraré a ud. que dirigiéndonos ud. y yo a un mismo fin, nos resta únicamente acordar por un plan bien sistemado, los medios que nos deben conducir indubitablemente y por el camino más corto... Para facilitar nuestra comunicación me dirigiré luego a Chilpancingo... que más haremos sin duda en media hora de conferencia, que en muchas cartas".[28]

Zavala se refiere a la entrevista de Iturbide y Guerrero, "en un pueblo del Estado de México", "sobre cuyos pormenores —dice— me ha instruido el propio general Guerrero". Con las tropas a tiro de cañón, "se encuentran y se abrazan". Iturbide alaba a Guerrero, "un patriota que ha sostenido la noble causa de la independencia y ha sobrevivido él solo a tantos desastres..." Guerrero le corresponde: "Yo, señor, felicito a mi patria porque recobra en este día un hijo cuyo valor y conocimiento le han sido tan funestos". "Después de haber descubierto Iturbide sus planes e ideas al señor Guerrero", éste llamó a sus tropas para presentarlo a ellas. Desde ese momento se reconoció a Iturbide como general en jefe. Iturbide encomendó a Guerrero la captura de la conducta que llevaba a Acapulco 750 000 pesos, valor de las mercancías de la nave de Manila.[29]

Alamán, sin mencionar a Zavala, niega categóricamente la entrevista. Pero Alamán no cita ninguna refutación contemporánea a la afirmación de Zavala, hecha en su obra en 1831. Los arreglos, en representación de Guerrero, los llevó a cabo su oficial José Secundino Figueroa, según Alamán, y sólo consistieron en la adhesión al plan que se publicaría en Iguala. Como constará más adelante, el enviado de Iturbide a Guerrero fue Antonio Mier y Villagómez, según testimonio del propio Guerrero. La entrevista de Iturbide con Guerrero se efectuó cuando aquél se dirigía al Bajío, según Alamán.[30]

Robertson acepta la opinión de Alamán, aunque recoge la tradición de la entrevista.[31] En el Manifiesto de Liorna, Iturbide calla el nombre de Guerrero y su encuentro. Pero resulta difícil suponer el acuerdo sino a través de una entrevista de ambos, y más tratándose de llamar

[27] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 98-101.
[28] *Ibid.*, p. 101.
[29] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 89-90.
[30] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 98-99.
[31] William Spence Robertson, *op. cit.*, pp. 64-65.

a Fernando VII, o a sus hermanos, al trono de México, después de que apenas cinco meses antes, el 17 de agosto, Guerrero había escrito a Moya, un coronel español, que se estaba en el tiempo más preciso "para ser independiente no sólo del yugo de Fernando, sino aun del de los españoles constitucionales". El *yugo* de Fernando eran los seis años de absolutismo. El 20 de enero Guerrero incitaba a Iturbide a seguir el ejemplo de Quiroga, declarándole: "Sabe ud. que el rey identifica nuestra causa con la de la Península, porque los estragos de la guerra, en ambos hemisferios, le dieron a entender la voluntad general del pueblo; pero véase cómo están recompensados los caudillos de ésta, y la infamia con que se pretende reducir a los de aquélla". Y agregó: "porque ni me ha de convencer nunca a que abrace el partido del rey, sea el que fuere...".

Si el desacuerdo no era el de monarquía o república, al menos en principio, sí lo era la persona de Fernando VII, que Guerrero expresamente repudiaba. Lo arduo de la negociación para Iturbide radicó en este punto y no en otro. Vencida la resistencia de Guerrero, el conflicto se aplazó y la suerte estaba echada.

* * *

Lucas Alamán expone crítica y finalmente favorable el contenido del plan, considerando que fue aceptado porque proclamaba la independencia, esperando cada quien, de acuerdo con sus ideas, combatir por sus principios más tarde.[32]

El plan lo presentaba Iturbide el mismo día 24 en una proclama a los americanos, entre los que comprende "no sólo a los nacidos en América, sino a los Europeos, Africanos y Asiáticos, que en ella residan". La proclama es una explícita profesión de fe: "Trescientos hace la América Septentrional de estar bajo la tutela de la Nación más Católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y la engrandeció, formando esas ciudades opulentas..., esas provincias y reinos dilatados que en la historia del Universo van a ocupar lugar muy distinguido...; los daños que origina la distancia del centro de unidad y viendo que la rama es igual al tronco, la opinión pública y la general de todos los pueblos, es la independencia absoluta de la España y de toda otra Nación. Así piensa el europeo, y así los americanos de todo origen. Esta misma voz que resonó en el pueblo de Dolores el año de 1810, y que tantas desgracias originó al pueblo de las delicias, por el desorden, el abandono, y otra multitud de vicios, fijó también la opinión pública, de que la unión general de europeos y americanos, indios e indígenas, es la única base sólida en que puede descansar nuestra común felicidad. Y quién pondrá duda en que —reflexiona—, después de la experiencia horrorosa de tantos desastres, no hay uno siquiera que deje de prestarse a la unión para conseguir tanto bien. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América Septentrional... No anima otro deseo al ejército, que el conservar la Santa Religión que profesamos, que hacer la felicidad general".

En la proclama son tres las bases que propone: la unión de americanos y españoles, la independencia absoluta de España y la conservación de la religión; y el argumento para declarar la independencia es: "la distancia del centro de unidad", y la opinión de los pueblos por

[32] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 126.

ella, una opinión que no fundaba sus títulos, sin agravios y aun reconocida a la metrópoli. El documento no puede ser más ajeno a los de la insurgencia americana, y a la carta de Guerrero de 20 de enero.[33]

Hagamos una sola cita. El *Manifiesto que hacen al pueblo mexicano los representantes de las provincias de la América Septentrional*, desde Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813, comienza así: "Conciudadanos: hasta el año de 1810 una extraña dominación tenía hollados nuestros derechos; y los males del poder arbitrario, ejercido con furor por los más crueles conquistadores, ni aun nos permitían indagar si esa libertad, cuya articulación pasaba por delito en nuestros labios, significaba la existencia de algún bien, o era sólo un prestigio propio para encarar la frivolidad de los pueblos. Sepultados en la estupidez y anonadamiento de la servidumbre, todas las nociones del pacto social nos eran desconocidas...". La lejana corona "se nos figuraba la mansión de la infalibilidad, desde donde el oráculo se dejaba oír de cuando en cuando... Adorábamos como los atenienses un Dios desconocido, y así no sospechábamos que hubiese otros principios de gobierno, que el fanatismo político que cegaba nuestra razón".[34]

[33] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 192-193.

[34] Ernesto Lemoine, *Morelos: su vida revolucionaria a través de sus escritos y otros testimonios de la época*, México, 1965, pp. 225-226.

3

EL PLAN DE IGUALA

El plan de Iturbide se proclamaría en Iguala el 24 de febrero de 1821. Antes de esa fecha comienza Iturbide su actividad epistolar.

El 18 de febrero desde la hacienda de Mazatlán, y seis días antes de proclamar el Plan de Iguala, informó al virrey, y éste lo hizo público en la *Gaceta Extraordinaria* del día 25: "Tengo la satisfacción de decir a V.E. que D. Vicente Guerrero se ha puesto a mis órdenes, y por consiguiente a las de V.E.... a consecuencia de los pasos de que he dado parte a esa superioridad". El arreglo lo concluyó, le dice, con José Figueroa, comisionado de Guerrero, con la condición de que no se le considerara indultado.

El virrey anotó de su mano, al margen, su satisfacción, y pidió a Iturbide el texto del convenio, que debía ajustarse a las instrucciones recibidas de las Cortes, de las que le enviaba ejemplares. Guerrero y los suyos debían jurar la Constitución.

Antes de recibir la comunicación directa de Iturbide sobre la proclamación del Plan de Iguala, el virrey se enteró de lo ocurrido en Iguala por el arzobispo de México, Pedro Fonte. Las noticias corrían más veloces en las manos eclesiásticas.[35] Pero hombres como el general José de la Cruz, y otros jefes militares, no parece que fueran muy diligentes en informar al virrey las graves y confirmadas noticias que tenían.

Antes, el 25 de enero, Iturbide escribe al general español Pedro Celestino Negrete, en Guadalajara.[36] Menciona una carta anterior, el envío con ella de un papel sobre el *giro del negocio*, y le anexa la carta que dirigirá al virrey. Se refiere a una carta de Negrete del 25 de diciembre, por la que supone la adhesión de Andrade, el coronel José Antonio Andrade, que sería suplente de Negrete como jefe superior político en Nueva Galicia, al pronunciarse éste por el Plan de Iguala. Iturbide tiene palabras reveladoras: "Los peligros del camino han hecho que no sepa Ud. hasta ahora las *medidas tomadas para el plan*, para cuyo séquito me ha hecho un honor que nunca sabré corresponder dignamente, apoyado sólo en el conocimiento de mi carácter..." no dudando del éxito, "porque están en él individuos de toda importancia, y amigos de talento, de carácter, de representación y firmeza, de quienes ha sido aprobado sin enmienda".[37] Negrete ignoraba las *medidas tomadas*, pero no el plan, al menos el que debía conocer en lo fundamental, y en el que están conformes tantos "sujetos de la más alta jerarquía", algunas de cuyas firmas vio el capitán Quintanilla a principios de diciembre con "el plan que después proclamó en Iguala" Iturbide.

[35] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 106-107.

[36] *Ibid.*, pp. 134-135.

[37] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 175-176.

El plan, en su redacción original, evidentemente lo llevaba Iturbide desde México. Que el texto fue alterado por él, o la versión que conocía Negrete, lo presume la carta de 22 de febrero que dirigió a éste: "Habrá Ud. notado —le dice— en el proyecto que le expliqué en mi(s) última(s) escrita(s) en 25 del próximo pasado y 5 del presente, algunas cositas que no se conformarán absolutamente con el genio e ideas de Ud., como no se conforman con las mías, pero la consideración de que es preciso adherirse a algunos caprichos o preocupaciones del común de los socios me hace abrazarlas, seguro de que después entrarán por la buena dirección en las reformas útiles, para lo cual hay de antemano medidas exactas".[38] La confianza y los vínculos con Negrete eran tales, que su carta de 25 de enero lleva esta postdata: "Acompaño a Ud. cuatro firmas en blanco por si, en razón de alguna circunstancia, exigiesen las cartas adjuntas que se enmiende o añada alguna cosa, o para que le sirvan en cualquiera ocurrencia del movimiento".

Iturbide va realizando un metódico y múltiple juego. No es admisible que el general Negrete, español y liberal moderado, hubiese dado su adhesión, y sólo por confianza personal a Iturbide, a la empresa de declarar la independencia de la Nueva España. El 25 de enero Iturbide le envía a Negrete copia de la carta que dirigirá al virrey "para que se resuelva la gran cuestión", y con ella iba el plan. ¿Fue el texto publicado el 24 de febrero el que recibió Negrete? En la carta de 22 de febrero le dice a Negrete algo que resulta enigmático: "No sienta Ud. que no hable por menor de mis proyectos; sabe Ud. que soy medio taciturno, y que *gusto también algo de sorpresas.* Opino con Ud. que aquel sujeto para nada es bueno porque los déspotas en estos días son inútiles y perjudiciales, y es para mí tan despreciable como para Ud". No hagamos conjeturas sobre las sinuosas implicaciones.

Las cartas anteriores al 24 de febrero son varias. Cuevas publica también las dirigidas al general José de la Cruz, al brigadier Domingo Lauces, al coronel Luis Quintanar, al coronel Antonio Flon. Al general Cruz, español, le escribe el 29 de enero: "¡Qué cierto es, mi estimado general y amigo, que para obrar, las circunstancias deben ser el norte de los hombres que raciocinan! El año 10 exigía de los honrados, de juicio y de alguna ilustración, cierta conducta, y, el año 21 exige de los mismos otra muy diversa". Se siente obligado a comunicarle su plan y busca su apoyo. Le envía copia de la carta que dirigirá al virrey, para que "pueda Ud. con su privilegiada perspicacia, conocer toda la extensión del plan y deducir las consecuencias... sea, o no, aceptado. Yo no quiero gastar otra divisa que la que llevo 8 años hace en mi manga; con gusto obedeceré las órdenes de Ud. si se dirigen al mismo fin... Todo está a las órdenes de Ud. en caso necesario, bajo aquel concepto".[39] Iturbide parafrasea el 29 de enero lo que Guerrero le escribió el día 20 sobre ponerse a sus órdenes si se decide por la independencia.[40]

Al brigadier Domingo Lauces, también español, le comunica su plan el 17 de febrero, anexándole copias de las cartas al virrey, y le informa: "...los jefes y oficiales que puedan reunirse, harán la elección del jefe que deba mandar el ejército de las Tres Garantías y que yo sabiendo de positivo la anuencia de Ud. al Plan, será propuesto con los de su grado y con los

[38] *Ibid.*, p. 182.
[39] *Ibid.*, pp. 177-178.
[40] *Ibid.*, pp. 225-226.

del mío y yo me sujetaré gustosísimo a las órdenes de aquel en quien recaiga el voto general...". El 12 de febrero escribía al coronel Luis Quintanar, español: "Desde el año 10 tomamos la espada para defender el orden y la religión; la Patria y el Rey exigen la conservemos fuera de la vaina hasta no lograr el fin completamente, es decir, hasta que no veamos en México, establecido un gobierno supremo, piadoso y liberal al mismo tiempo". También envía el plan y la copia de la carta al virrey. Concluye: "...nuestras ideas han sido siempre las mismas, igual es nuestro interés por la religión, la patria y el rey; por consecuencia necesaria, han de ser iguales nuestras operaciones subsecuentes".

Otra carta, del 17 de febrero, invita al teniente coronel Antonio Flon, mexicano e hijo del antinsurgente conde de La Cadena. La carta es ideológicamente neutra, pero expresa estar en el concepto de que los jefes y oficiales que puedan reunirse harán "elecciones de jefe para el ejército, pues hay en el plan quienes tienen mayor graduación que la mía y aunque yo sea quien lo ha formado, no aspiro a otra cosa que a la felicidad de nuestra patria y servir gustoso a las órdenes de cualquiera individuo que merezca la mayor confianza de nuestros compañeros de armas".[41]

Sin volver sobre las citas, son obvias las insinuaciones liberales a Negrete o ambigua a Quintanar, y su declaración de sujetarse al mando de quien elijan los jefes y oficiales de las fuerzas que se unan al plan propuesto.

Más explícito será en su correspondencia posterior al 24 de febrero. "Las mejores provincias las había recorrido —dice Iturbide en el Manifiesto de Liorna—, tenía ideas exactas del terreno y del carácter de sus habitantes, de los puntos fortificables y de los recursos con que podía contar... tenía amigos en las principales poblaciones, que lo eran antiguos de mi casa, o que adquirí en mis viajes y tiempo que mandé; contaba también con el amor de los soldados: todos los que me conocían se apresuraron a darme noticias". En más de un sentido Iturbide fue el hombre de las circunstancias.[42]

* * *

En tanto se dirigía a jefes militares, Iturbide consultaba a hombres de su confianza en México, como Bermúdez Zozaya y Juan José Espinosa de los Monteros. A éste le escribió el 25 de enero. Espera su colaboración en la ejecución del plan que le envía, tan avanzada ya que "nada importaría su publicidad". No obstante no debe conoerse aún. Aunque nada varíe, "si lo exige mi amistad —le dice— sobre la manera de hacer manifiestas al público mis razones, y sobre el plan que debe contribuir moralmente al objeto. Sírvase Ud. corregir o variar francamente, si gusta, la proclama No. 1, y los artículos del plan No. 2, añadiendo, quitando o acotando lo que su ilustración y luces le sugiera". Los documentos deben ser concisos. Le pide un manifiesto con las ideas que le comunica, y otra proclama.[43] No consta que Espinosa haya contestado el requerimiento. Alamán conoció el documento enviado a Espinosa de los Monteros, y opina que el plan fue obra de Iturbide, pues las juntas de La Profesa "disminuyeron

[41] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 179-182. Las cartas a Lauces, Quintanar y Flon.

[42] *Manifiesto de Liorna*, pp. 242-243.

[43] Mariano Cuevas, *op. cit.*, p. 174.

mucho de importancia desde que se frustró el objeto principal".[44] Esto parece contradecir lo que él mismo relata sobre cómo Iturbide confió a Quintanilla su proyecto, a no ser que se hubiese formado otra conspiración de la que Alamán no tuvo noticia, lo que no es fácil admitir. Además, está la referencia que hace Iturbide cuando se explica con Negrete, a "*algunos caprichos y preocupaciones del común de los socios*" con los que se ve obligado a condescender, aunque está seguro "de que después entrarán por la buena dirección de las reformas útiles". Que Iturbide disimulara ante Negrete sus propias ideas es otra cuestión, pues subsisten en todo caso las *del común de los socios* a los que estaba ligado.

En el desconcierto ante la restauración constitucional, y en las complejidades de una conspiración, se urdió el proyecto que llevaría al Plan de Iguala. No haremos la narración episódica de su proclamación y juramento el 24 de febrero y 3 de marzo. Creemos pertinente reproducir aquí los artículos del que acompañaba la proclama del 24 de febrero.

1. La religión Católica Apostólica Romana, sin tolerancia de otra alguna.

2. La absoluta Independencia de este Reino.

3. Gobierno Monárquico, templado por una Constitución análoga al país.

4. Fernando VII y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante serán los Emperadores, para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados de la ambición.

5. Habrá una junta, ínterin se reúnen Cortes que hagan efectivo este Plan.

6. Ésta se nombrará Gubernativa, y se compondrá de los vocales ya propuestos al Señor Virrey.

7. Gobernará en virtud del juramento que tiene prestado al Rey, ínterin éste se presenta en México y lo presta, y entonces se suspenderán todas ulteriores órdenes.

8. Si Fernando VII no se resolviera a venir a México, la Junta de la Regencia mandará a nombre de la Nación mientras se resuelva la testa que debe coronarse.

9. Será sostenido este Gobierno por el Ejército de las Tres Garantías.

10. Las cortes resolverán si ha de continuar esta junta o sustituirse una Regencia, mientras llega el Emperador.

11. Trabajarán luego que se unan, la Constitución del Imperio Mexicano.

12. Todos los habitantes de él, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo.

13. Sus personas y propiedades, serán respetadas y protegidas.

14. El Clero Secular y Regular, conservado en todos sus fueros y propiedades.

15. Todos los ramos del Estado, y empleados públicos, subsistirán como en el día, y sólo serán removidos los que se opongan a este plan, y sustituidos por los que más se distingan en su adhesión, virtud y mérito.

16. Se formará un Ejército protector, que se denominará de las Tres Garantías, y que se sacrificará del primero al último de sus individuos, ante la más ligera infracción de ellas.

17. Este Ejército observará a la letra la Ordenanza, y sus Jefes y Oficialidad continúan en el pie que están con la expectativa no obstante, a los empleos vacantes y a los que se estimen de necesidad o conveniencia.

[44] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 125-126.

18. Las tropas de que se componga se considerarán como de línea y los paisanos que quieran alistarse, se mirarán como milicia Nacional, y el arreglo y forma de todas, lo dictarán las Cortes.

19. Los empleos se darán en virtud de informes de los respectivos Jefes, y a nombre de la Nación provisionalmente.

20. Ínterin se reúnen las cortes se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución Española.

21. En el de conspiración contra la Independencia se procederá a prisión, sin pasar a otra cosa hasta que las Cortes dicten la pena correspondiente al mayor de los delitos, después del de lesa Majestad Divina.

22. Se vigilará sobre los que intenten sembrar la división y se reputarán como conspiradores contra la Independencia.

23. Como las Cortes que se han de formar son constituyentes, deben ser elegidos los Diputados bajo este concepto. La Junta determinará las reglas y el tiempo necesario para el efecto.

El 1 de marzo reunió Iturbide a los jefes y oficiales bajo sus órdenes, y después de hablarles y rechazar el título de teniente general que le ofrecían, aceptó el de primer jefe del ejército. El 3 de marzo se reunieron de nuevo y sobre el libro de los Evangelios prestaron el juramento:

¿Juráis a Dios y prometéis bajo la cruz de vuestra espada, observar la santa religión católica, apostólica, romana?

¿Juráis hacer la independencia de este imperio, guardando para ello la paz y unión de europeos y americanos?

¿Juráis la obediencia al Sr. D. Fernando VII si adopta y jura la constitución que haya de hacerse por las cortes de esta América Septentrional?[45]

Los soldados que habían jurado defender estos artículos —observa Alamán—, se consideraban como los campeones de la fe, así como en España tomaron este nombre, todos los que se declararon contra el gobierno constitucional y favorecidos por la Francia establecieron la junta de Urgel, que tanto coadyuvó al restablecimiento de la monarquía absoluta".[46]

Pero Alamán, como otros, no atiende a la más singular anomalía del triple juramento: *no se juró el Plan de Iguala.* Iturbide había escrito al general Negrete que se vio precisado a adherirse "a algunos caprichos o preocupaciones de los socios... seguro de que después entrarán por la buena dirección de las reformas útiles, para lo cual hay de antemano medidas exactas". Cualquiera que sea la interpretación de los documentos, no puede eludirse la presunción del carácter provisional que para Iturbide tenía el plan del 24 de febrero. Ciertamente él se movía con meditada y extrema cautela hacia el futuro.

[45] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 111-113; Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 888-891; Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 192-194.

[46] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 110, 114-115.

4

ITURBIDE EN EL PLAN DE IGUALA

El 24 de febrero Iturbide escribe al virrey enviándole el plan que proclamó ese día. Comienza por una condenación de la insurgencia: "La noche del 15 al 16 de septiembre de 1810 se dio el grito de Independencia entre las sombras del horror con un sistema (si así puede llamarse) cruel, bárbaro, sanguinario, grosero, e injusto por consecuencia; y a pesar de que el modo no podía ser más contrario al genio moderado y dulce de los americanos, aún subsisten sus efectos en el año de 1821... Hoy vemos reanimar de un modo bien notable, y con llama más viva el mismo fuego". Los planes se forman en Oaxaca, Puebla, Valladolid, Querétaro, San Luis Potosí, y "en la misma capital alrededor de V.E.; tal vez dentro de su misma habitación. La Nueva España quiere ser independiente. Esto nadie lo duda. Le conviene. La misma madre patria le ha enseñado el camino...". Se emprenderá "en el día, de manera muy diversa, con otra ilustración, con otros recursos, con otro séquito que en el año de 10". Lo invita a que evite la catástrofe "fijando en este suelo, cuya crisis se acerca, nuestra Religión Santa; cerrando a la impiedad las puertas... antes de que se difunda con más velocidad que el fuego eléctrico, por la vasta extensión de estas provincias". Ofendería al virrey si tratara de convencerlo de "la necesidad de separar la América Septentrional para conservar incorrupta nuestra sagrada Religión..." Iturbide alega ante Ruiz de Apodaca las mismas razones que animaban a éste en mayo de 1820, nueve meses antes, a desconocer el gobierno constitucional de España, conservando la Nueva España fiel a Fernando VII, hasta que el rey recobrase la libertad.

Alega el encono entre americanos y españoles, y también la lealtad de los americanos que combatieron en las filas realistas, entre los que estaba él mismo. No importa el lugar de nacimiento, ¿quién "se ocuparía de tales accidentes dejando la importancia del asunto"?

En Nueva España todos son uno. Pero el remedio urge y es el que propone. Presenta al virrey los nombres de los que formarán la junta gubernativa, y elogia su saber y virtudes. Ruiz de Apodaca estará a su cabeza. Se llamará "velozmente a los Diputados a Cortes que existan en el Reino de último nombramiento y anteriores; pues ellos podrán con una representación suficiente, y con conocimientos necesarios, promover lo que convenga para el fin propuesto a V.E....". En tanto, la junta gubernativa "paralizará cualesquiera proyectos de las sublevaciones tumultuarias que amenazan por todas partes". Iturbide, como en la misión que encomendó a Gómez Navarrete ante los diputados electos reunidos en Veracruz, insiste en integrar un congreso con ellos, contradiciendo el artículo 23 del Plan de Iguala sobre el carácter constituyente de él, y la elección de diputados "bajo este concepto". Ya apuntamos la presunción de la provisionalidad del Plan de Iguala, que se confirma en la carta al virrey.

No dispone el virrey, le advierte Iturbide, ni de un solo cuerpo militar completo. Espera

que en marzo se decida en Madrid la aceptación de la corona de México por Fernando VII, o uno de los infantes. En manos del virrey está la solución.[47]

A esta comunicación oficial, Iturbide acompañó una carta privada: "Mi carísimo y muy respetado general", le escribe, con "la más tierna efusión de mi corazón... y movido por el solo deseo de que se conserve pura nuestra Santa Religión" y de que se eviten los males que amenazan. No puede limitarse a lo que le dice en la carta oficial. "Yo no he creído, ni creerá V.E. sin duda, que nuestro amado y desgraciado Rey haya adoptado voluntariamente un sistema que no sólo es contrario a las prerrogativas que fueron anexas a la corona que heredó de sus augustos predecesores, sino que destruye los sentimientos piadosos de que sobreabunda su corazón... ¿No le persuade a V.E. que si México lo llamase para que reinara pacíficamente dejando al Clero regular y secular en el mismo goce de sus fueros por una constitución moderada, y al mismo tiempo le dejase (al rey) en el goce de muchas preeminencias justas y razonables de que ha sido despojado vendría volando a disfrutar en tranquilidad de su cetro a ser feliz y hacer la felicidad de los habitantes del Anáhuac?" Las motivaciones de los hombres de La Profesa y del mismo virrey se renuevan más explícitamente.

La situación del país la describe Iturbide coincidiendo con el informe de Hipólito Odoardo, y con el del propio virrey, de enero de ese año de 1821. "Un nuevo gobierno, un nuevo sistema abrazado por V.E. disipando los principios del odio y de la confianza, se recibirá generalmente, porque cada uno de los partidos creería haber ganado mucho a poco costo aun cuando no llenasen todo su intento".[48]

Ruiz de Apodaca contesta la carta oficial con una proclama, publicada en la *Gaceta* del 3 de marzo, invitando a no leer los papeles de Iturbide y a mantener la fidelidad al rey. Y a Iturbide se dirige el 27 de febrero diciéndole que ese mismo día el padre Piedras le entregó un sobre indicando que era *particular*, y que no abrió por haberlo enterado Piedras de su contenido, "manifestado a V.S. en sólo este hecho, cuanto cabe sobre su anticonstitucional proyecto de independencia". Lo invita a seguir en su fidelidad al rey y a la constitución jurada.[49]

El padre Piedras había sido enviado por el virrey a Guerrero en agosto de 1820. Piedras rindió su informe escrito a Ruiz de Apodaca el 7 de octubre, pero el documento no aclara cuáles fueron las proposiciones que Guerrero hizo directamente al virrey, ni a qué se refiere Piedras con satisfacción.[50]

El mismo 24 de febrero Iturbide escribe al general José Dávila, al mando en Veracruz, reiterando sus ideas: la subsistencia de la religión, la independencia del reino, "conservándolo para el Sr. Fernando VII... bajo las reglas que especifico; hacer desaparecer la odiosa y funesta rivalidad de provincialismo y hacer, por una sana igualdad, unir los intereses de todos los habitantes del imperio". Para evitar un rompimiento tumultuario, "que se reúnan en México los diputados a Cortes que se han de elegir en el próximo marzo, para que establezcan las leyes

[47] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 188-191.

[48] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 119-121; Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 183-185.

[49] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, tomo v, p. 123.

[50] Relación que hace al Virrey el Br. de la Piedra, de los incidentes habidos en su comisión cerca del Gral. Guerrero. 2 de agosto a 7 de octubre de 1820. Manuscrito en el Fondo Hernández y Dávalos, de la Colección Latinoamericana de la Universidad de Texas. Reproducido por Ernesto Lemoine en el volumen documental de su obra *La guerra de Independencia. 1808-1821.*

fundamentales, y nos constituyan convenientemente con prudencia del genio del país...". En tanto, gobernaría una junta de 11 individuos, cinco europeos y seis americanos, de los que le envía los nombres.[51]

Iturbide insistirá con el virrey para llegar a un acuerdo. El 16 de marzo le envía su instancia a Fernando VII. El mismo 16 le informa que se apresaron en Acapulco las fragatas españolas de guerra *Prueba* y *Venganza*, con 700 infantes, que iban hacia el Perú. Menciona las proclamas del gobierno. El virrey asegura que la opinión pública le apoya; "manos a la obra —le propone Iturbide—: únanse los representantes de las provincias en punto donde sin el temor y los respetos de V.E., ni del ejército a mi cargo, puedan explicar libremente la voz del pueblo y he aquí terminada la cuestión. Yo me someto gustosamente a lo que decida el Congreso. Si éste resuelve que las Américas del Septentrión continúen subordinadas a la Península Española, dejaré inmediatamente las armas de la mano, porque yo no me he erigido ni quiero erigirme en dictador". Todavía ambos, el virrey y él, pueden lograr la paz. Ante el curso de los sucesos y la actitud de Ruiz de Apodaca, le llega a pedir que "olvidando el sistema que el Sr. Venegas observó con Hidalgo en el año 10, se sirva obrar con la liberalidad que exigen las luces de esta época...".[52] Pero la escisión en cuanto a la independencia absoluta los separa irremisiblemente. El antiliberal gobernante se mantiene fiel a Fernando VII. En mayo de 1820 se proponía serlo contra los constitucionales de España; en 1821 lo sería finalmente corriendo la suerte del rey frente a la independencia de México, y aun frente al liberalismo español.

Iturbide no desconocía a Fernando VII, pero su reconocimiento era ya condicional y, más aún, equívoco su fidelismo, una vez planteada la independencia absoluta.

El 27 de febrero escribe a Miguel Bataller, del grupo primitivo de La Profesa, invitándolo a apoyar el Plan de Iguala: "la resolución urge en extremo" ante la inminencia de una explosión que debe evitarse. Y sobre él mismo, "es una verdad, es inconcuso, amigo mío —le asegura—, que ni he de obrar contra el sistema que por educación nutrió mi espíritu al mismo tiempo que la leche mi cuerpo; ni resuelto una vez a obrar en una justa armonía y consecuencia con ella, sino cuando concluya mi existencia". La arbitraria puntuación de la época ofrece alguna ambigüedad entre la razón y la educación que nutrió su espíritu. Él mismo la desvanecerá. También el 27 de febrero escribe al obispo Ruiz Cabañas, de Guadalajara: "Es el caso que por mis cuatro costados soy navarro y viscaíno, y no puedo prescindir de aquellas ideas rancias de mis abuelos...". Sólo cree en una religión que "se halla atacada de mil maneras y sería destruida si no hubiera espíritus de alguna fortaleza que a cara descubierta y sin rodeos salieran a su protección...", y así, "ya me tiene V.E.I. en campaña. En dos palabras: o se ha de mantener la religión de Nueva España, pura y sin mezcla o no ha de existir Iturbide".[53]

El proceso que llevó a la formulación y proclamación del plan que presidió la consumación de nuestra independencia no podía ser más singular. Manteniendo su repudio a la insurgencia anterior, la independencia era propuesta para conservar la pureza de la religión en México, manteniéndolo incontaminado del liberalismo constitucional español. Es cierto que

[51] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 185-186.
[52] *Ibid.*, pp. 209-210.
[53] *Ibid.*, pp. 196-199.

Iturbide dice a Negrete que se ve obligado a condescender con "algunos caprichos o preocupaciones de los socios", esperando que después "entrarán por la buena dirección de las reformas útiles...". La pregunta obligada es sobre las convicciones de Iturbide, y sobre las de los hombres con quien estaba comprometido en el proyecto. Si el virrey hubiese aceptado el Plan de Iguala y presidir la junta gubernativa, ¿cuál hubiese sido la etapa siguiente? O, al menos, ¿cuál era la prevista?

"El Plan de Iguala —dirá Iturbide en Liorna— garantía la religión que heredamos de nuestros mayores. A la casa reinante de España proponía el único medio que le restaba para conservar aquellas dilatadas y ricas provincias. A los mexicanos concedía la facultad de darse leyes y tener en su territorio el Gobierno. A los españoles ofrecía un asilo que no habrían despreciado, si hubieran tenido previsión. Aseguraba los derechos de igualdad, de propiedad, de libertad, cuyo conocimiento ya está al alcance de todos; y una vez adquiridos, no hay quien no haga cuanto está en su poder por conservarlos...; destruía la odiosa diferencia de castas...; dejaba expedito el camino al mérito...; conciliaba las opiniones razonables y oponía un valladar impenetrable a las maquinaciones de los díscolos".[54]

El documento de Liorna lo fechó Iturbide el 27 de septiembre de 1823, cuando era un hombre en el exilio y acosado por Fernando VII y el gobierno de Viena, el monarca al que había ofrecido la corona de México, y el centro de la Alianza del antiguo régimen europeo. Desde el 23 de abril de ese año de 1823, Fernando VII, obligado por el ministerio de Evaristo San Miguel, ante la invasión de España por los *cien mil hijos de San Luis* al mando del duque de Angulema, había declarado la guerra a Francia. Para el 24 de septiembre, la derrota liberal en España era un hecho. El 1 de octubre, el rey firmaba el decreto que en dos artículos restauraba el régimen absoluto. Ante la consolidación absolutista podemos decir que los sentimientos de Iturbide se liberalizan, y habla de los *derechos de igualdad, de propiedad, de libertad*, que "una vez adquiridos, no hay quien no haga cuanto está en su poder por conservarlos". Las palabras no corresponden a 1821. Además, Iturbide tiene los ojos en México, y saldrá de Liorna a Londres el 29 de noviembre siguiente.

Volvamos a 1821. El 16 de marzo escribe Iturbide al virrey, enviándole el "pliego con que me dirijo a la piedad del rey" exponiéndole el estado de la Nueva España y "la voz que reina en ella de independencia, en que estriba su felicidad", con el ruego de que lo haga llegar a Fernando VII. El mismo día se dirige a las Cortes de Madrid. En ambos documentos remonta a 1810 el clamor por la independencia. Los mismos insurgentes se le unen hoy, "olvidando y detestando lo que tenía de equívoco e injusto —le dice al rey—, un sistema hijo aún más de la necesidad que de la voluntad". Envía los documentos de Iguala, el plan, los oficios al virrey, las moderadas instrucciones a sus generales, para probar su carácter. Espera, desea, la separación pacífica, dictada por España: "Venga pues un soberano de la casa de Fernando —escribe a las Cortes— a ocupar aquí el trono de felicidad que le preparan los sensibles americanos", evitando así los males funestos de la guerra.[55]

El 17 de marzo escribe al diputado Gómez Navarrete acompañándole documentos, y pidiéndole que haga llegar a las Cortes su representación. Y esa misma fecha en otra carta le

[54] *Manifiesto de Liorna*, pp. 243-244.

[55] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 204-209.

confía "que muchos de los que debían obrar con decisión esperan *mejor ocasión*; es vergonzosa su debilidad". Le acompaña la carta confidencial que dirigió al virrey, y la oficial, "por si quiere V. hacer algún uso de ellas con nuestro amado Fernando". Aquélla, en la que dijo al virrey: "Yo no he creído, ni creerá V.E. sin duda, que nuestro amado y desgraciado Rey haya adoptado voluntariamente un sistema que no sólo es contrario a las prerrogativas que fueron anexas a la corona..., sino que destruye los sentimientos piadosos de que sobreabunda su corazón".[56]

En su correspondencia a los españoles y americanos en México, Iturbide le habla a cada uno en el idioma que puede serle más grato o menos ingrato, y a través de Gómez Navarrete ensaya tocar el punto más vulnerable en el ánimo de Fernando VII, al que no puede enviar directamente su carta privada al virrey por la más elemental precaución. Iturbide no presume las convicciones de Fernando. No únicamente por las confidencias del virrey en mayo de 1820, sino por el real decreto de 4 de mayo de 1814, constaban de la manera más pública e irrefutable, ratificadas después durante seis años.

Además, para esas fechas era oficial en México, desde el 23 de enero de 1821, el decreto de extinción de monacales y reforma de los regulares, firmado por el rey el 25 de octubre anterior entre tumultos populares y la presión del ministerio de Argüelles. El decreto no se aplicaría íntegro ni en la totalidad del territorio de la Nueva España, pero la inquietud del clero se agudizaba. El decreto de extinción de la Compañía de Jesús, de 16 de agosto de 1820, se publicó en México también el 23 de enero, y su cumplimiento exacerbó la animosidad en contra de las Cortes. Por más que no se publicara en México, el decreto de las Cortes de 16 de octubre anterior, sobre los 69 *diputados persas* que firmaron la representación al rey de 12 de abril de 1814, había dado lugar a que el virrey, como ya lo consignamos, se dirigiera a Madrid explicando su no aplicación al obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez. La influencia del obispo en su diócesis venía a establecer una extensa tierra de nadie entre las autoridades constitucionales de la ciudad de México y las zonas del sur, en donde se rebeló Iturbide.

* * *

Aunque su autenticidad no ha sido probada, no debe ignorarse la carta de Fernando VII a Ruiz de Apodaca, de 24 de diciembre de 1820, que circuló en México después de la deposición del virrey. La carta, por su fecha, podía estar en México a principios de marzo de 1821. En ella dice el rey que tiene noticias de que Ruiz de Apodaca y los americanos "detestando el nombre de constitución, sólo apreciáis y estimáis mi real nombre", en tanto que en España, "ingratos, desagradecidos y traidores, sólo quieren y aprecian el gobierno constitucional, y que su rey apoye providencias y leyes opuestas a nuestra sagrada religión". Para verse libre y "poder usar libremente de la autoridad real que Dios tiene depositada en mí: os encargo, que si es cierto que vos me sois tan adicto como se me ha informado por personas veraces, pongáis de vuestra parte todo el empeño posible, y dictéis las más activas y eficaces providencias para que ese reino quede independiente de éste...; a vuestro cargo queda el hacerlo todo con la perspicacia y sagacidad de que es susceptible vuestro talento; y al efecto pondréis vuestras mi-

[56] *Ibid.*, p. 214.

ras en un sujeto que merezca toda vuestra confianza, para la feliz consecución de la empresa; que en el entretanto, yo meditaré el modo de escaparme incógnito y presentarme cuando convenga en esas posesiones...". El virrey debe obrar "bajo un sistema que pueda lograrse sin derramamiento de sangre, con unión de voluntades... y poniendo por base de la causa, la religión que se halla en esta desgraciada época tan ultrajada...".[57]

Las asombrosas coincidencias con los sucesos fortalecen las dudas sobre la autenticidad del documento. Alamán, no obstante, se inclina por ella. La hermana del marqués del Jaral aseguró a Hipólito Odoardo que el virrey había informado de la carta al del Jaral, y Alamán consideró una confirmación el hecho de que ella no lo negara cuando se le preguntó.[58] La carta la publicó por primera vez fuera de México, José Presas en 1828.[59] José Vadillo, diputado liberal en el primer periodo del trienio constitucional, y ministro de Ultramar en 1823, en el gabinete de San Miguel, se refiere a la carta, y a su publicación por Presas. Según Vadillo, el virrey encomendó a Iturbide la realización del proyecto, y éste "en vez de proclamar el absolutismo, proclamó la independencia". Señalemos que la fecha de la carta es posterior a la designación de Iturbide para la campaña contra Guerrero. Las instrucciones de la carta coincidían por cierto con el proyecto de mayo de 1820, abandonado por Ruiz de Apodaca al jurar la Constitución. En todo caso, la carta del 24 de diciembre daría nueva vigencia al plan original. Mas lo que nos interesa es la opinión de Vadillo sobre la autenticidad del documento. Publicado por Presas en 1828, el rey envió a París "a uno de sus más robustos defensores" para que lo desautorizara. "Yo no sé lo que pruebe la importancia misma que el gobierno español dio a la simple noticia de un folleto" —escribe Vadillo. "Pero todavía comprendo menos —agrega— cómo el que la dio, haya consentido en dejar vacilante su opinión, cuando, según también se susurra, habría fácilmente podido vindicarla y afirmarla, con sólo declarar que él mismo fue el portador de la carta para Apodaca... Algo y aún más que algo se cree generalmente que sobre el punto podría decirnos asimismo aquel D. José Joaquín (*sic*) Pérez, obispo de Puebla de los Ángeles, que siendo en Madrid presidente de las Cortes el año de 1814 se dio tal prisa y tan buena traza para concurrir al restablecimiento del absolutismo en España, venciendo la misma representación nacional a cuyo frente se hallaba". Vadillo menciona también la pastoral del obispo, de 20 de julio de 1820, en la que hizo profesión de fe constitucional.[60] La obra de Vadillo, *Apuntes sobre los principales sucesos que han influido en el actual estado de la América del Sur*, se reeditó en 1830 en París, "corregida y aumentada", y no da noticia ni contesta cualquiera refutación que hubiese hecho Presas a su primera edición.

La referencia a la supuesta carta de Fernando VII ofrece otras implicaciones. El 17 de marzo, Iturbide escribe de nuevo al virrey. Menciona su carta del día anterior, en la que le propone la reunión de los diputados de las provincias en un punto neutral, ofreciendo someterse a lo que decidan sobre la independencia. El 17 añade "otras reflexiones y otro arbitrio nuevo que me parece digno de la alta consideración de V.E. y lo creo de grande importancia. Me ade-

[57] Lucas Alamán, *op, cit.*, pp. 886-887.

[58] *Ibid.*, pp. 72-73.

[59] José Presas, *Juicio imparcial sobre las principales causas de la revolución de la América española y acerca de las poderosas razones que tiene la metrópoli para reconocer su absoluta independencia*, Burdeos, 1828.

[60] José Vadillo, *Apuntes sobre los principales sucesos que han influido en el estado actual de la América del sud*, segunda ed., París, 1830, pp. 62-63, 228-229.

lantaré a cualquiera punto para tratar con el Exmo. Sr. D. Pascual Liñán y con V.E. mismo, si es preciso, hasta la capital...". Se propone evitar el encuentro con las armas. La nueva proposición la concreta: podría concertarse un armisticio, dando cuenta a la Corte, esperando su resolución y manteniendo el libre tráfico y comercio en el país. El virrey quedaría a cubierto de toda responsabilidad. "Adelantemos el paso —le dice— que con aprobación de todas las naciones ilustradas se ha dado en Caracas; paso por el que Morillo y Bolívar no se avergonzarán de comparecer ante todos los hombres". Con ello satisface "el amor a los españoles europeos cuya sangre, con gran satisfacción, veo palpitar en mis arterias, el amor a la patria, y el deseo de evitar los insultos a la majestad divina que son inseparables de todas las revoluciones...".[61]

La súbita proposición, a 24 horas de la anterior, sólo podía inspirarla una noticia nueva y extraordinaria y no una reflexión propia. Iturbide menciona el armisticio entre Morillo y Bolívar. La negociación la había iniciado el general Morillo el 17 de junio de 1820, dirigiéndose a Bolívar, al Congreso de Angostura y a otros jefes insurgentes, cumpliendo las instrucciones del ministro de Ultramar de 11 de abril, mismo día en el que se le ordenaba publicar la Constitución. Después de cautelosas y difíciles respuestas, Morillo y Bolívar se entrevistaron en la hacienda de Santa Ana el 27 de noviembre, cuando ambos habían ratificado el tratado de armisticio concertado en Trujillo por sus representantes el día 25. El preámbulo del documento no pudo ser más sorprendente. "Deseando los gobiernos de España y de Colombia transigir las discordias que existen entre ambos pueblos y considerando que el primer y más importante paso para llegar a tan feliz término es suspender recíprocamente las armas", el general Morillo, de parte del gobierno español, y "S.E. el Presidente de Colombia, Simón Bolívar, como jefe de la República", nombraron sus representantes, que, canjeados sus poderes, convinieron el tratado de armisticio. Por éste se suspenderían las hostilidades entre ambos ejércitos durante seis meses, conservando sus territorios, que estarían abiertos al comercio, así como los puertos de Cartagena y Maracaibo. Como el objeto del armisticio era la negociación de la paz, los gobiernos de España y Colombia recibirían a los comisionados que la trataran. El 27 de noviembre, como consecuencia del armisticio, se firmó un tratado de regularización de la guerra.[62] Dejamos constancia del documento sin aludir siquiera a sus circunstancias y fracaso posterior.

El *armisticio* del 25 de noviembre y el tratado de regularización de la guerra, del día 27, circularon con profusión en Colombia, y llegaron al territorio insurgente de México por Acapulco u otro puerto del sur. Con retraso, el 27 de mayo de 1821, se entera Iturbide de los documentos, y propone inmediatamente a Ruiz de Apodaca su modelo. Iturbide pudo conocer no sólo el texto de los tratados. Si ellos llegaban del sur, los presentaba Bolívar con su proclama de 7 de diciembre al ejército: "Con la paz contad con todos los bienes de la libertad, de la gloria, y de la independencia. Pero si nuestros enemigos por su ceguedad, que no es de temer ni aun remotamente, persisten en ser injustos, ¿ no sois vosotros los hijos de la victoria?"[63]

[61] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 214-215.

[62] *Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela*, Caracas, 1957, vol. I, pp. 3-10; Salvador Madariaga, *Bolívar*, Buenos Aires, 1959, tomo II, pp. 89-103; Gerhard Masur, *Simón Bolívar*, México, 1960, pp. 350-357; José Gil Fortoul, *Historia constitucional de Venezuela*, Caracas, 1967, tomo I, pp. 427-436.

[63] Simón Bolívar, *Obras completas*, La Habana, 1952, tomo III, p. 711.

Para Iturbide el espejismo no puede ser más alucinante. El general en jefe del ejército expedicionario español en Tierra Firme había concertado un tratado de armisticio con "el Presidente de Colombia, Simón Bolívar, como jefe de la República". El suceso no podía ser más promisorio para Iturbide que ofrecía a Fernando VII y a su casa la corona de México. Y a este hecho se suma la otra hipótesis: que, de ser cierta, tuviera noticia de la carta de Fernando VII al virrey. Bustamante la alude y habla de las medidas adoptadas por Ruiz de Apodaca para recibir al rey. Pero atribuye equivocadamente a esos planes el nombramiento de Iturbide.[64]

Antonio Martínez Báez, escrupuloso en sus juicios, escribe, que "si se interpreta la carta como el testimonio expreso de un proyecto previo, transmitido a Venadito por algún *conducto verbal*—medio usado con frecuencia por Fernando—, muchos misterios históricos pueden empezar a aclararse: la conspiración de La Profesa, la extraña conducta del virrey, la elección de Iturbide como comandante del sur, el punto cuarto del Plan de Iguala que ofrece la corona a Fernando VII, y la seguridad de Iturbide de contar con el virrey apoyando su plan".[65]

La conjetura de Martínez Báez es verosímil. Los conductos verbales, y más hacia América, eran los confiables para el rey una vez establecido el gobierno constitucional. Todo concuerda. El tratar de que Fernando VII conociera la carta privada de Iturbide a Ruiz de Apodaca, en la que no cree, ni lo creerá el virrey, "que nuestro amado y desgraciado monarca haya adoptado voluntariamente un sistema no sólo contrario a las prerrogativas que le fueron anexas a la corona..., sino que destruye los sentimientos de que sobreabunda su corazón", confirma la certidumbre de Iturbide sobre las convicciones de Fernando VII en ese mismo año de 1821.

* * *

Mas la peculiaridad del episodio de la consumación de nuestra independencia, no sólo en el origen de su monarquismo antiliberal expreso, tiene más corroboraciones documentales. El Plan de Iguala ofrece otra decisiva. Iturbide desde Liorna en 1823, y Bermúdez Zozaya en 1841, afirman que su único autor fue el propio Iturbide. Para Vicente Rocafuerte el plan elaborado en las juntas de La Profesa "en substancia viene a ser el mismo que el de Iguala", aunque consultando Iturbide "este negocio con su rubia Aspasia... (ella) le aconsejó que de ninguna manera proclamase el plan según se lo habían dado en La Profesa", y lo variase para no restaurar el régimen de 1808, "pues los criollos españoles liberales —le decía—, no convendrán en el plan en que no se ve otra cosa que las ideas de los serviles".[66] Más tarde volveremos a encontrar a la *rubia Aspasia*. Iturbide consultó desde el sur a Bermúdez Zozaya y a Espinosa de los Monteros, y éste, según Rocafuerte, "lo varió según corre hoy y se proclamó en Iguala". Espinosa de los Monteros, que moriría hacia el año cuarenta, no desmintió, que sepamos, a Rocafuerte.

El plan proclamado en Iguala evidentemente no era el proyecto original de mayo de 1820, ni fue puntualmente otro posterior convenido en México, por las alteraciones que le hi-

[64] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 79.

[65] Antonio Martínez Báez, "El trasfondo constitucional del movimiento de Iguala", *Revista Universidad de México*, diciembre de 1971, pp. 11-19.

[66] Vicente Rocafuerte, *op. cit.*, pp. 5, 41-42.

zo Iturbide, quien lo consultaba a Espinosa desde Teloloapan el 25 de enero de 1821. Pero su texto último, el de la proclama de 24 de febrero, revela el carácter de su origen conspirativo. Citemos los solos artículos que nos importan aquí.

El artículo 4 establece: "Fernando VII y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante serán los Emperadores...". El 5: "Habrá una junta, ínterin se reúnen Cortes que hagan efectivo este Plan". Artículo 6: "Ésta se nombrará Gubernativa, y se compondrá de los vocales ya propuestos al Señor Virrey". Artículo 7: "Gobernará en virtud del juramento que tiene prestado al Rey, ínterin éste se presenta en México y lo presta...". Artículo 8: "Si Fernando VII no se resolviese a venir a México, la Junta de la Regencia mandará a nombre de la Nación mientras se resuelve la testa que debe coronarse". Artículo 10: "Las cortes resolverán si ha de continuar esta junta o substituirse una Regencia, mientras llega el Emperador". Artículo 11: "Trabajarán luego que se unan —las Cortes—, la Constitución del Imperio Mexicano".

Desde luego aparecen inconsecuencias. Habrá una Junta Gubernativa en tanto se reúnen las Cortes (arts. 5 y 6), y si Fernando VII no acepta venir a México, "la Junta de la Regencia mandará a nombre de la Nación" en tanto se resuelve a quién se ofrecerá la corona (art. 8). El plan no dice qué órgano tomará esta grave decisión, la "Junta de la Regencia" o las Cortes hasta que se reúnan. Por otra parte, las Cortes resolverán si continúa la Junta Gubernativa o se sustituye por una Regencia en tanto llega el emperador.

La imprecisión en las disposiciones del plan es obvia. Resulta difícil suponer que un plan elaborado en México, con la obligada minuciosa exigencia, incurriera en ellas, interviniendo, o al menos adhiriéndose a él, "los sujetos de la más alta jerarquía", cuyas firmas vio Quintanilla en diciembre del año anterior al conocer el plan que le mostró Iturbide. El mismo Iturbide firmaría el "*Plan o indicaciones para el gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar nuestra sagrada Religión y establecer la independencia del Imperio Mexicano y tendrá el título de Junta Gubernativa del Imperio Mexicano...*". El documento, que Iturbide fecha también el 24 de febrero, no resuelve las confusiones.

No es explicable la existencia simultánea, y en el mismo día, de los dos textos.

Otro de los aspectos es más revelador. El artículo 6 del plan contenido en la proclama habla de la Junta Gubernativa, que "*se compondrá de los vocales ya propuestos al Señor Virrey*". Si la carta al virrey es también de ese día 24, y con ella se le enviaba el plan, sólo por una inadvertencia se podía hablar en éste "de los vocales *ya propuestos* al Señor Virrey". Aceptamos la inadvertencia o manera de hablar, aunque llamamos la atención sobre el *Plan e indicaciones* del mismo día, en el que su artículo 6 expresa: "Dicha Junta, que se denominará Gubernativa, debe componerse de los vocales que habla la carta oficial al Exmo. Sr. Virrey", lo que ratifica la posteridad del *Plan e indicaciones.*

Si el texto original del *Plan e indicaciones* es del 24 de febrero, resulta inexplicable la inclusión de otro tan impreciso en la proclama del mismo día. Que alguien, al lado de Iturbide, revisó el texto de la proclama, es una conjetura razonable, y otra, que recibió de alguno de sus corresponsales —¿Espinosa de los Monteros?— el texto corregido, al que puso la fecha de 24 de febrero. Desde luego el título de *Plan e indicaciones* supone un plan previo, al que se agregan las *indicaciones.*

El texto siguiente y último es más revelador.

El artículo 7 del plan incluido en la proclama declara que la Junta Gubernativa goberna-

ría "en virtud del juramento que tiene prestado al Rey, ínterin éste se presenta en México y lo presta, y hasta entonces se suspenderán todas ulteriores órdenes". El texto no ofrece equívoco alguno. Se dice que la Junta "*gobernará en virtud del juramento que tiene prestado al rey*", y la expresión se repite idéntica en el *Plan e indicaciones*. La pregunta que no se puede rehuir es: ¿cuándo se prestó ese juramento por los vocales de la Junta propuestos al virrey, y cuál fue ese juramento?

A Fernando VII se le juró como rey, la primera vez en 1808, y después como rey constitucional en 1812, para abjurar de la Constitución, no del rey, en 1814. En 1820 se juró de nuevo a Fernando rey constitucional. Al declarar Iturbide la absoluta independencia en el antiguo virreinato ninguno de esos juramentos y abjuraciones podía subsistir. Cualquiera buena lógica, escolástica o no lo concluye así. Pero si la Junta, integrada por los individuos propuestos por Iturbide gobernaría "en virtud del juramento *que tiene prestado* al rey", y no del que prestara al constituirse formalmente después del 24 de febrero, la expresión sólo tiene un sentido, y es el que sus individuos habían jurado ya a Fernando como emperador de un país independiente. Una historia novelada, sin falsear la naturaleza del acto, podría narrarlo en una fascinante conspiración conventual y oligárquica.

Las inferencias de los hechos, de los documentos y del texto mismo de Iguala, nos llevarían a preguntarnos únicamente quiénes formaban el grupo que después de mayo de 1820 acordó el proyecto de independencia con Fernando, o uno de su dinastía, como emperador, y también por el plan original aprobado en México.

La primera pregunta no puede responderse, al menos hasta que no se conozcan documentos fehacientes. Iturbide, en su carta de 24 de febrero al virrey, menciona al regente de la Real Audiencia, Miguel Bataller, en primer lugar, entre los propuestos para la Junta Gubernativa, y en tercero al canónigo Matías Monteagudo. En una *Lista de los señores que deben componer la Junta*, firmada por Iturbide también el 24 de febrero, Bataller aparece como vicepresidente de ella, y Monteagudo como vocal.[67] Ambos figuran en el grupo de La Profesa desde su primer proyecto antiliberal de mayo de 1820. Que Iturbide en su carta a Bataller no aluda a un previo acuerdo, es un disimulo y una discreción obligados en un documento que podía ser interceptado. Iturbide hace, o acepta modificaciones en documentos que data el mismo día. En la carta al virrey propone ocho vocales y tres suplentes. En la *Lista* del mismo día son 11 los vocales de la junta y cuatro los suplentes. ¿Todos los individuos propuestos por Iturbide para la Junta Gubernativa habían jurado a Fernando VII? Alterado el documento original, resultaría gratuito afirmarlo. Las incoherencias todas son inexplicables si se acepta que fue Iturbide el único autor del Plan de Iguala, y que los documentos son efectivamente de la misma fecha.

Iturbide se enfrentó desde el sur a un primer desconcierto, cuando los diputados electos se negaron en Veracruz a suspender su viaje a España y, esperando su éxito, formar el Congreso del reino. Si al partir de México llevaba un plan que suponía la aceptación de ellos, el plan debió modificarse, aunque él insista en reunir a diputados elegidos a las Cortes. Y si además, como escribió el 17 de marzo a Gómez Navarrete, "*muchos de los que debían obrar con decisión esperan mejor ocasión*", comprometiendo la empresa, el desconcierto se acentuó. Obliga-

[67] Mariano Cuevas, *op. cit.*, p. 195.

do, y atenido a sus solas luces, y las de Antonio Mier y Villagómez redacta el plan que se publica con la proclama de 24 de febrero, después de que lo ha consultado, como consta, a Espinosa de los Monteros. Pero ni él ni Espinosa, u otro, alteran más tarde los términos del artículo 7, en los que se confiesa el juramento *que tienen prestado al rey*, los individuos que integrarán la Junta Gubernativa, juramento que sólo pudieron hacer conformes con un plan que conocían.

No son los hechos los que hablan, son las palabras.

Ir más lejos nos llevaría a presumir detalles del plan original. La religión católica, con intolerancia de toda otra; la absoluta independencia de México; la monarquía con Fernando VII, o alguien de su dinastía en el trono; la institución de una Junta que gobernaría provisionalmente, y la reunión de unas Cortes que darían una constitución "análoga al país", no inoculada por el liberalismo español, son los que podemos considerar postulados fundamentales del plan original. Y que en esencia fue éste el plan proclamado en Iguala es menos que dudoso, como parece inaceptable que Iturbide fuera su autor, aunque sí el factótum en la aventura de la consumación de nuestra independencia por tan contrarios caminos.

Si Iturbide es el hombre de las circunstancias, las circunstancias lo envuelven y confunden. Las *luces de la época* no son sus luces. El proyecto de la independencia rebasa sus motivos.

5

EL TRATADO DE CÓRDOBA

No atenderemos a la propagación del Plan de Iguala, las deserciones en las fuerzas realistas para adherirse a él, y a la campaña de siete meses. Los historiadores contemporáneos y posteriores las registran, y entre ellos Alamán y Bustamante, con más detalle, además de la prensa insurgente.

Después de diez años se deseaba un preservativo ante la inminencia de un nuevo y sangriento enfrentamiento entre españoles y criollos, cuando éstos estaban decididos por la independencia. Así, los que examinen el Plan de Iguala, "teniendo presente las circunstancias en que se hallaba la nación mexicana —opina Lorenzo de Zavala—, convendrán en que fue una obra maestra de política y de saber". El plan conciliaba todos los intereses.[68] Iturbide había escrito el 24 de febrero al virrey, que adoptado el plan "cada uno de los partidos creería haber ganado mucho a poco costo, aun cuando no llenasen el todo de su intento". Si no conciliaba todos los intereses, satisfacía al general de los mexicanos por la independencia, y garantizaba a los españoles los suyos; los privilegios y propiedades del clero se mantenían; la monarquía subsistía en la Casa de los Borbones bajo una constitución "análoga al país", ajena a la española repudiada por Fernando VII. Para Zavala "hizo callar delante de este inmenso beneficio —el de la independencia— a los que querían la república y a los que deseaban la monarquía *absoluta*".[69]

Alamán examina el plan, y lo juzga coincidiendo con Zavala, aunque profesando convicciones definidamente monárquicas y conservadoras.

El liberal Julio Zárate escribe que el plan "examinado fríamente sesenta y cinco años después de su proclamación, demuestra la sagacidad de su autor principal para halagar las aspiraciones de los partidos. Los tres grandes principios en él invocados, la Religión, la Independencia y la Unión... resumían en efecto los más bellos ideales de aquella sociedad y resguardaban los intereses de la fracción española... quizá la más poderosa por sus recursos, posesión e influencia". Mas para Zárate, ofrecer el trono a Fernando VII y su casa, y poner la condición de que se juraría la constitución que aprobaran las Cortes de México, "era lo mismo que excluirlos del trono", pues Iturbide no podía dudar "de los verdaderos sentimientos de los príncipes españoles respecto de las instituciones constitucionales", vinculado como estuvo a los absolutistas de La Profesa.[70] Quizá el juicio se aventura demasiado en las previsiones de Iturbide. La previsión en una situación análoga la hizo el gene-

[68] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 87.
[69] *Ibid.*, p. 88.
[70] Julio Zárate, *op. cit.*, p. 685.

ral San Martín, ese año de 1821 en el Perú, según lo declaró más tarde, como veremos, al general Miller.

El significado del triunfo del Plan de Iguala lo expone Alamán a su manera, citando y coincidiendo con Iturbide. Hagamos una amplia cita de un texto al que ya nos referimos: "Nada es, pues, menos cierto, que lo que suele decirse con jactancias, que Méjico ganó su independencia con diez años de guerra y sin auxilio de nadie. Esos años de guerra no fueron otra cosa que el esfuerzo que la parte ilustrada y los propietarios, unidos al gobierno español, hicieron para reprimir una revolución vandálica... La independencia se hizo, para usar las palabras mismas de Iturbide en su exposición a la regencia el 7 de diciembre de 1821 sobre premios al ejército: *en cortísimo tiempo de campaña, sin efusión de sangre, sin destrozo de fortunas, y para decirlo de una vez, sin guerra... Cualquier escaramuza en la época pasada* —prosigue diciendo Iturbide— *costó más sangre americana que la grande obra de nuestra libertad...; no hablo ya de los que intentaron en el principio, aunque por senda errada, la indicada libertad, que por falta de fuerza moral, tuvieron que andar prófugos por los bosques y barrancos... Las tropas mismas que pelearon por restablecer el orden y preparar la libertad bajo bases sólidas y justas... padecieron más que las trigarantes, porque éstas hicieron su marcha por caminos carreteros, y sin tropiezo, llenos de fragancia..., encontrando los corazones preparados de acuerdo y conformidad por la religión cristiana, la libertad razonable y la unión justa*". "Nada puede oponerse a semejante confesión", declara Alamán, y agrega: "Pero si ésta —la independencia— se logró sin oposición no fue sin auxilios muy eficaces de los españoles establecidos en el país. Un canónigo español, fue el primero que puso en práctica los medios para conseguir la independencia de una manera efectiva; a un comerciante español se atribuye haber proporcionado apoderarse de los fondos de la conducta de Manila...; muchos jefes y oficiales españoles firmaron las actas de pronunciamientos de Iguala y de Sultepec; español fue el que decidió a Iturbide a marchar al Bajío, y él mismo el que obligó a rendirse a Bracho y a S. Julián; igual origen tenía el que proclamó la independencia en Guadalajara, que la hizo proclamar en todas las provincias internas hasta lo más remoto del Norte, y que fue el único de los jefes principales, que en esta guerra sacó una herida honrosa en el rostro...; europeo fue el jefe que dio la acción de Huerta, y españoles el coronel y la mayor parte de los soldados del Cuerpo de Infantería que la sostuvo de una manera tan bizarra contra sus paisanos; español, el que hizo abrir las puertas de Méjico al ejército trigarante sin efusión de sangre, y español, por último, el que prestó el dinero para que se solemnizara la entrada triunfal en la capital: auxilios todos bastante poderosos, para que sean contados como una parte muy principal entre las causas que produjeron la independencia". Por la revolución iniciada en la isla de León se perdió la América, opina Alamán, y "así fue como una sedición militar y las indiscretas disposiciones de las Cortes, destruyeron una dominación formada por la sabiduría de tres siglos", y a través de una guerra interna y una nueva invasión francesa, España volvió al absolutismo.[71]

En su juicio, Alamán ignora el imperio de América insurrecto desde los años diez.

Alamán es el propio y diáfano glosador de sus ideas, aun atentando, por su proclividad polémica contra su reconocido talento.

M.A. Alperovich, con otro lenguaje y otra ideología, coincide con Alamán: "...el Plan de

[71] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo v, pp. 332-334.

Iguala era en cierto sentido —escribe— un compromiso entre los comerciantes y funcionarios españoles, y el alto clero, por un lado, y los terratenientes criollos y elementos burgueses, por otro", aislando al gobierno virreinal.[72]

* * *

En tanto se propaga el Plan de Iguala, y las adhesiones de jefes realistas, americanos y españoles, se van sucediendo, proclamando la independencia en las provincias, en España se nombra, por real orden de 30 de marzo de 1821, capitán general y jefe político superior de la Provincia de Nueva España, no del territorio del antiguo virreinato de Nueva España, al general Juan O'Donojú. La Provincia de Nueva España era una de las seis en que se dividió el virreinato bajo el régimen constitucional, y comprendía en sus límites generales los hoy estados de México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, las regiones más pobladas e importantes de México.

El general O'Donojú, ya lo consignamos, había sido procesado como liberal en 1814, condenándosele a cuatro años de prisión en el castillo de San Carlos de Mallorca, con prohibición de volver a Madrid en los cuatro siguientes al cumplimiento de su pena, y declarándosele "inhábil para obtener toda clase de mando". El nombre de O'Donojú apareció en 1816 en las indagaciones con tormento sobre la célebre y nunca aclarada *conspiración del triángulo,* junto a los de Renovales, Calatrava y Yandiola. Los conspiradores, se dijo, se proponían asesinar a Fernando VII. Las señales de tormento que tenía en los dedos O'Donojú se atribuían a ese episodio.[73] El prestigio liberal de O'Donojú era grande, tanto como para que él aspirara a figurar en la restauración constitucional antes que el general Quiroga.

Ramos Arizpe afirma que el nombramiento de O'Donojú se dictó gracias a sus gestiones, y a las de otros diputados.[74] Las relaciones con O'Donojú las ratifica éste en su carta a Iturbide, el 6 de agosto. En todo caso, su nombramiento fue posterior al *Papel que la Diputación Mexicana dirige al Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra,* de 23 de enero de 1821. Los siete diputados suplentes por México expresan que desde el 9 de marzo de 1820, cuando el rey juró la Constitución, hasta el 9 de julio en que se instalaron las Cortes, fueron únicamente espectadores de lo que el gobierno hacía respecto a las Américas. Desde la restauración constitucional, el gobierno y la nación españoles creyeron "era de absoluta necesidad mudar en todas las provincias y en el centro mismo de la Corte todos los agentes principales del gobierno antiguo, como de hecho se han mudado. ¿Y se ha hecho lo mismo en diez meses —preguntan— respecto de las autoridades antiguas que estaban al frente de los gobiernos del vasto continente de América?" Hacerlo es imperioso para la unión de los pueblos.

Para la unión y la felicidad común se impone "una política ilustrada e imparcial, (y) una legislación civil fundada en una verdadera filosofía. No hay otro remedio —declaran los di-

[72] M.S. Alperovich, *Historia de la Independencia de México (1810-1824),* México, 1967, pp. 211-212.

[73] Miguel Artola, *La España de Fernando VII,* pp. 625-626; E. de K. Bayo, *op. cit.,* tomo II, pp. 108-110.

[74] Miguel Ramos Arizpe, *Idea general de la conducta de D... natural de la provincia de Coahuila, como diputado que ha sido por esta provincia a las Cortes generales y extraordinarias, y en las ordinarias de la Monarquía española desde el año de 1810 hasta el de 1821,* México, 1822, pp. 13-14.

putados—, si es que lo hay en lo humano; o la guerra, más ominosa para la España Europea que para la Ultramarina, ha de seguir con el resultado seguro de la separación eterna de entreambas". En España, la mudanza de jefes y de casi todos los subalternos ha sido cumplida. En las Américas no, y "todos o casi todos son los que en el año de 14 derrocaron el sistema constitucional, o los que después han sostenido el sistema del mando absoluto, y que además han cooperador... a inundar de sangre aquella tierra virgen".

Esta suerte de preámbulo se dirige a un fin. "Existen hoy de hecho, Señor Excelentísimo, con escándalo del mundo... con peligro inminente de las Américas y con grande descrédito del Gobierno español los mismos gobernantes que han existido los últimos años anteriores, y que ellos han sostenido los más, con suma crueldad, el sistema de arbitrariedad ministerial: allí están aún a más de Morillo los Virreyes Pezuela, Apodaca... los Comandantes Generales Cruz, los dos Garcías Condes, Llano, Liñán, Armijo, Madrid, Álvarez, Bustamante, Concha, Armiñán, Hevía", de los que no se puede desmentir que fueron escogidos para destruir el sistema constitucional, y han derramado sangre americana. No pueden ser ellos los restauradores de la Constitución.

"V.E. —manifiestan— acaba de hacer un público reconocimiento de los principios que hemos sentado, y de la justicia de las quejas que la América tiene del Gobierno español... proponiendo a S.M. como se acaba de verificar el relevo del Virrey de Nueva España, reemplazándole el Teniente General D. Juan O'Donojú. Por nuestra parte, y creemos poder decir por toda Nueva España, tributamos a S.M. y en la parte que toca a V.E. nuestra gratitud...; pues aunque el Virrey Apodaca es ciertamente uno de los más justificados que ha tenido aquel reino, los hábitos adquiridos en su larga vida y la debilidad propia de su ancianidad respetable hacen que naturalmente propenda a obrar siempre como ha obrado siempre, y además el Regente Bataller, el oidor Velazco de la Vara, el Canónigo Monteagudo, y otros varios marcados notoriamente de enemigos del orden constitucional son puntualmente los que más rodean a su persona...". Pareciera que los diputados mexicanos están al tanto de los sucesos en México al restaurarse la Constitución.

El *Papel* es un extenso alegato en favor de otras medidas, como la separación de los mandos militares y políticos, justificando incluso la primera revolución de independencia "que no tuvo en su principio más objeto que el que tuvo en la Península la insurrección del año ocho", y que debió ser terminada en América "en media hora de conversación justa y franca". El documento lo firman Ramos Arizpe, José Mariano Michelena, Francisco Fagoaga, José María Couto, José Manuel Cortázar, Juan de Dios Cañedo y José Montoya. Las gestiones de los diputados mexicanos en favor de O'Donojú son ciertas.

No podría esperarse, y menos pedirse a los diputados mexicanos ir más lejos en sus expresiones. El *Papel* se imprime en Madrid y se reimprime en Puebla en la Oficina Liberal de Troncoso Hermanos, sin constar la fecha, mas probablemente antes de la llegada de O'Donojú a Veracruz, pues no se hace referencia a ella. El documento no puede menos que prevenir al gobierno colonial de México en contra de O'Donojú.

* * *

Nombrado O'Donojú, debe seguir las minuciosas instrucciones que en 40 puntos se le dieron, comenzando por "velar sobre la puntual observancia de la Constitución" y decretos de las Cor-

tes. No obstante que existe la división territorial de virreinato en seis provincias, cuyos gobiernos estarían subordinados constitucionalmente sólo al de Madrid, las instrucciones a O'Donojú parecen suponer que su autoridad se extenderá a la totalidad del antiguo territorio virreinal. Algunas precauciones debía tomar sobre las diputaciones provinciales y ayuntamientos. El punto 21 de las instrucciones prescribe la conducta que debe seguir frente a los "muy cortos restos de la insurrección: ...urge el que V.E. emplee la mayor actividad y conato —se le indica— en extinguir éstos por medios suaves y conciliatorios, ofreciendo premios, empleos y honores a los principales jefes de ella en obsequio a la tranquilidad y para evitar desgracias: y si esto no bastase, se perseguirá con rigor a los que perturben el orden...". A los indultados "se les adelantará en sus grados y destinos" si han dado pruebas de adhesión a la Constitución".[75]

O'Donojú sale de Cádiz el 30 de mayo y llega a Veracruz en los últimos días de julio o primeros de agosto. Enterado de los sucesos en México, escribe el 4 de agosto al ministro de Gobernación de Ultramar, "lleno de sentimiento, para anunciar a S.M. las tristes ocurrencias que han tenido lugar en estas provincias y el estado desesperado en que se encuentran".[76] Antes de la salida de O'Donojú a América habían llegado a Madrid los diputados elegidos en México. Sus relaciones con Ramos Arizpe deben mantenerlo al tanto del proyecto de los americanos que era conocido en las Cortes, y que se había aceptado a nivel de juntas con miembros del Ministerio. Esta aceptación inspira la primera proclama de O'Donojú desde Veracruz.[77] Y no es difícil que tuviera noticias del plan de Iturbide.

La proclama de O'Donojú no podía ser más embarazosa. Habla de sí mismo y de su liberalismo. Escribe palabras que, sin proponérselo, refutan las de la proclama de Iturbide de 24 de febrero. ¿O se lo propuso? "Nueva España empezaba a respirar el aire puro de la justa libertad; un nuevo sistema de gobierno acababa de derrocar al despotismo, de extinguir para siempre la arbitrariedad que por casi cuatro siglos la había abrumado; una Constitución meditada... prometía recompensar con lucro incalculable sus pasados males, su abatimiento, sus desgracias..." O'Donojú escribe "con anticipación la historia de nuestro malhadado país" si continúa la insurrección, y dice: "quiso ser independiente cuando de nadie dependía: ...quiso tener por sí representación soberana, y rompió intempestivamente los vínculos más sagrados de la política, de la sociedad...; intempestivamente, pues esta misma representación la habrían tenido a ninguna costa pocos meses después, y no la tuvieron consolidada jamás, porque mal aconsejados atropellaron tan arriesgada operación; algún tiempo, muy poco tiempo de esperar habría bastado para que sus deseos quedasen satisfechos, sin ruinas; ya sus representantes trazaban en unión con sus hermanos europeos el plan que debía elevarla al alto grado de dignidad de que era susceptible. Ideas equivocadas —dirá esa historia futura que describe O'Donojú—, resentimientos anteriores, error de cálculo... (hicieron de) Nueva España la colonia de extranjero, o la presa de un tirano ambicioso. Así se escribirá dentro de algunos años".[78]

La proclama supone, y él lo confesará al general Dávila en agosto, algo más que el conocimiento del proyecto americano en Madrid, y es una refutación liberal implícita a la procla-

[75] Jaime Delgado, *España y México en el siglo XIX*, Madrid, 1950, tomo III, Apéndice documental, pp. 7-15.
[76] Jaime Delgado, *op. cit.*, tomo I, p. 55.
[77] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo V, p. 510.
[78] Julio Zárate, *op. cit.*, p. 736.

ma de Iturbide y a su juicio sobre el régimen liberal. Y cabe la pregunta sobre cuánto sabía O'Donojú de los proyectos anticonstitucionales en México, y de la participación de Iturbide en ellos. Es difícil admitir que los diputados elegidos, al menos los que iban desde la ciudad de México, los hubiesen ignorado, y que ante los liberales españoles los ocultaran El mismo gobierno debió comunicar a O'Donojú cuanto sabía, cierto o incierto. Y a todo debe sumarse lo que el general Dávila le informa en Veracruz.

Ruiz de Apodaca no obra con la diligencia y eficacia obligadas, y la insurrección se extiende por el país. En su carta del 4 de agosto, O'Donojú describe su situación en Veracruz: "No hay guarnición; apenas ascenderá a 150 a 200 soldados; los demás que le presidiaban desertaron al enemigo la noche del 7 (de julio). Se carece absolutamente de correspondencia con México y todo el interior; estamos reducidos al recinto de la población; no hay tropas ni en dónde levantarlas; no hay dinero, no hay víveres; no hay ninguna clase de recursos". Si el gobierno español no lo auxilia, volverá a Europa. No obstante, los socorros llegarían tarde, y "suponiendo que aun llegando a tiempo, no hay fuerza contra un vasto imperio decidido por la libertad, que jura sostenerla a toda costa". Sus proclamas las juzga un "triste recurso".[79] La situación de O'Donojú la agravaba el vómito negro, y entre los que murieron de él estaban dos sobrinos suyos.

* * *

O'Donojú envía comisionados a Iturbide para arreglar una entrevista entre ambos. En torno a Veracruz merodeaba Antonio López de Santa Anna, incorporado a la insurrección hacia el 30 de marzo y recién estrenado su ascenso a teniente coronel realista.

O'Donojú escribe a Iturbide el 6 de agosto: "Cuando me instruyeron (al desembarcar) de las últimas ocurrencias del reino, y del estado de las provincias: quedé sorprendido con tamañas novedades, ni esperaría ninguno que se hallase en mi lugar, que tuviese los antecedentes de yo, y que estuviese en correspondencia y relaciones de amistad con los americanos más decididos por la verdadera felicidad de su patria". Sus intenciones son obrar "no consolidando el despotismo, no prolongando la dependencia colonial, ni incurriendo en las funestas debilidades de mis antecesores, convidados por un sistema de gobierno que se resentía del barbarismo de los siglos en que se estableció, y que ya felizmente no rige entre nosotros". Abunda en las ideas que Iturbide expuso al virrey en su carta de 18 de marzo, que leyó en *El Mexicano Independiente*. Acordará con él evitar la hostilidad, "entretanto el rey y las Cortes aprueban el tratado que celebremos, y porque V. tanto ha anhelado". Le pide el paso hacia la capital. Le envía su proclama, en tanto que pueda "hacerle otras comunicaciones de sumo interés...".[80]

Iturbide le contesta desde Puebla el 11 de agosto, y le propone Córdoba como lugar para la reunión, y a donde se trasladará después de un movimiento que debe hacer sobre México, en el que evitará la sangre.[81] Se felicita de tratar con él y no con Novella, que no tiene representación "para entrar en convenios legales y subsistentes".

[79] Jaime Delgado, *op. cit.*, tomo I, p. 56; William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 109.

[80] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 218-220.

[81] Mariano Cuevas, *op. cit.*, p. 247.

Iturbide impide toda comunicación de O'Donojú con la capital.

En julio los sucesos se habían precipitado en México. Las noticias adversas, las deserciones de jefes españoles al campo insurrecto, el descontento contra Ruiz de Apodaca, decidieron a los jefes del ejército expedicionario a obrar. Se unieron compañías con el nombre de *Defensores de la integridad de las Españas*, y los jefes de la asonada se presentaron el 5 de julio a la junta de guerra que estaba reunida en Palacio. Después de *acaloradas contestaciones*, Ruiz de Apodaca firmó un documento por el que entregaba el mando político y militar, "a petición respetuosa de los oficiales y tropas expedicionarias", al mariscal de campo Francisco Novella, quien lo aceptó sin haber participado en el movimiento. La Diputación Provincial y la Audiencia no hallaban solución legal a lo ocurrido. Pero se trataba de un hecho consumado. Novella se preparó a resistir la insurrección.

Si las deserciones en el ejército realista hacían peligrar el régimen español, tanto o más influían en la población las adhesiones eclesiásticas del Plan de Iguala. El 22 de mayo, el cabildo de Valladolid recibe a Iturbide y jura la independencia; el de Linares, en el norte del país, lo hace el 4 de julio; Saltillo jura el 1 de junio; en una sucesión que no se interrumpiría.[82]

En enero de ese año de 1821, ante la expedición libertadora del Perú, al mando del general San Martín, los jefes liberales del ejército realista imputaban al virrey Pezuela las mismas ineptitudes que en México se atribuían a Ruiz de Apodaca. El 29 de enero, los jefes, en junta de guerra, intimaron a Pezuela para que hiciera entrega de sus mandos al general La Serna, como ocurrió. En México y el Perú las ocurrencias eran paralelas, aunque en el Perú los jefes liberales no desertaban del campo realista. No sería la única analogía. "Los constitucionalistas españoles armados, al asumir —en el Perú— esta actitud en nombre de los derechos de la madre patria, viéronse más tarde obligados por la lógica de sus deberes —escribiría Bartolomé Mitre—, a mantener en alto la bandera del rey absoluto en pugna con la independencia americana y con sus principios".[83]

* * *

El 5 de agosto, la víspera de que O'Donojú escribiera a Iturbide, y después de la capitulación realista y la entrada de Iturbide a Puebla, se realizó en la catedral, la solemne jura de la independencia, que ilustró con un elocuente discurso el invariablemente ubicuo don Antonio Joaquín Pérez, su obispo, citando el salmo *Laqueus contritus est, et nos liberti sumus* (Quebrantose el lazo y somos libres). Antes de la ceremonia religiosa se oyeron en el atrio de la catedral los primeros gritos de ¡Viva Agustín I! La alocución de Su Ilustrísima, como todos sus documentos, es relevante. Se complace en metáforas, como la de la joven que llega a la edad de la emancipación, que difundió el abate de Pradt al que cita. Y entra al fondo del conflicto ideológico: "Hablo en primer lugar de los intereses sagrados de la religión, porque ¿quién es entre nosotros el que la profesa, que no haya sido vivamente conmovido, al tener noticia de los ultrajes que recientemente ha padecido en los objetos que abraza su culto, en la sublimidad

[82] Fernando Pérez Memén, *El Episcopado y la independencia de México* (tesis de grado presentada en El Colegio de México. Consultada en mimeógrafo, se remite a los capítulos), cap. IV.

[83] Bartolomé Mitre, *op. cit.*, tomo II, p. 314.

de sus dogmas, en la pureza de su moral... en la jerarquía de sus ministros y en cuanto hasta aquí ha servido al hombre para tributar a su Creador el honor y la gloria...?" El peligro para la religión es inminente. "¿Quién es —agrega— para compendiarlo en pocas palabras, el que puede dudar que si muchas de estas novedades están ya más o menos indicadas, más o menos protegidas por los modernos legisladores de la antigua España, acaso no estará muy distante el día en que el reino más católico llegue a dementarse hasta el grado de proferir públicamente que no hay Dios...?" Corren libros sacrílegos e imágenes obscenas que aparentan difundir la ilustración.

Pero el obispo tiene otro argumento: "Quebrantado en el hecho, el ominoso vínculo —dice—, y restituido casi enteramente el reino de la Nueva España a la libertad que le concedió la naturaleza (obra no menos estupenda por la perentoriedad con que se ha ejecutado...), es preciso adorar en todo ello un profundo misterio, superior a nuestros alcances...". Frente al suceso providencial en España la monarquía está en un peligro, y "no son ya vanos temores de una imaginación acalorada... los que nos hacen presumir, que están vivos los enemigos del trono español, y que continuamente trabajan por desocuparlo...". Las memorias de los ministros, las de las comisiones de las Cortes, los papeles públicos, "están de acuerdo con estos presagios. Qué puede ser más grato a Fernando y a su dinastía que un imperio fiel como el que se le ofrece. Mas si no lo aceptaran, yo apelo, señores, a todas las naciones del mundo —declara—, y no dudo que su fallo sea el más conforme a la justicia de vuestra causa". Desconfiad, previene, "de toda máxima que altere los principios fundamentales de la independencia, porque yo no sé que ella pueda ser admisible, siempre que propenda a la tolerancia de los cultos... o a cualquiera otro de los vicios opuestos a la religión católica".

Elogia la unidad proclamada entre americanos y peninsulares. Aconseja que se presenten al futuro Congreso observaciones sobre los artículos que convenga modificar en el Plan de Iguala, y él formula las primeras dirigiéndose a Iturbide: "Son los de un hombre absorto —le dice— en la contemplación de los caminos por donde conduce la Divina Providencia a sus criaturas..." uno de los caudillos que combatía la independencia "hoy la corrige y dulcifica... Proseguid en vuestra empresa, hijo de la dicha y la victoria, prestaos con docilidad a los altos designios que tiene sobre vos y por vos la eterna Providencia...".[84] En verdad nada puede asombrar en don Antonio Joaquín Pérez. La admonición de Su Ilustrísima es más que un halago emotivo y retórico: Iturbide será huésped del obispo en el palacio episcopal durante varios días.

Desde el 11 de julio, el general Ciriaco de Llano había recibido una representación de los vecinos de los barrios de Puebla pidiéndole que se adhiriera al Plan de Iguala, precisamente para defender la religión ultrajada en España. La mano del obispo era sensible.[85]

Alamán no puede dejar de observar que si el obispo de Puebla "inspiró o apoyó la idea de convertir el Plan de Iguala en provecho de Iturbide en las conferencias que tuvieron en Puebla, es menester convenir que hizo a su país y al mismo Iturbide el más funesto presente", porque "no tiene duda que Iturbide desde entonces, en todas sus operaciones tuvo por obje-

[84] Antonio Joaquín Pérez, *Discurso pronunciado entre las solemnidades de la misa que cantó el día 5 de agosto acabada de proclamar y jurar la independencia del Imperio Mexicano*, Puebla, 1821.

[85] Fernando Pérez Memén, *op. cit.*, cap. IV.

to abrirse el camino al trono, removiendo los obstáculos que él mismo había puesto en el Plan de Iguala...".[86]

* * *

Es después de escuchar al obispo de Puebla cuando Iturbide recibe la carta de O'Donojú del 6 de agosto. Contesta el día 11, como ya se consignó, y maniobra para impedir que O'Donojú y Novella se concierten. A O'Donojú le ofrece carruajes para que salga de Veracruz a Córdoba.

Iturbide se mueve con rapidez. Llega a la vista de la ciudad de México, y logra que José Morán, marqués de Vivanco, abandone con sus fuerzas el campo realista. El 23 de agosto está en Córdoba y pasa a saludar a O'Donojú en su alojamiento. El 24 de agosto se entrevistan. La versión de Alamán sigue la de Bustamante. Iturbide coincide con ambos.[87]

Por amplias que fueran las conversaciones, O'Donojú no concebía esperanza alguna de impedir la independencia absoluta de México. Obtener algunas ventajas dentro de ella podía ser su mejor logro. El reconocimiento de esa independencia era la condición del tratado.

En el texto incluido en la proclama de 24 de febrero, el artículo 4 del Plan de Iguala estableció que "Fernando VII y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante serán los Emperadores". En el *Plan e indicaciones*, del mismo día 24, se alteraba el artículo 4: "Será su Emperador el Sr. D. Fernando VII y no presentándose personalmente en México dentro del término que las Cortes señalaren a prestar el juramento, serán llamados en su caso el serenísimo Sr. Infante D. Carlos, el Sr. D. Francisco de Paula, el Archiduque Carlos u otro individuo de casa reinante que estime por conveniente el Congreso".

En la primera redacción pública, la de la proclama, se amagaba a Fernando y a la Casa de España con acudir a otra de no aceptar el trono del imperio. En el *Plan e indicaciones* se proponía una alternativa más, la del archiduque Carlos, de la Casa Habsburgo, la reinante en España durante la conquista de México y el siglo XVII, en una suerte de opción fidelista. También se podía acudir a otra dinastía. En Madrid se conocían bien las gestiones que los representantes de las Provincias del Plata venían haciendo desde 1815 para obtener un príncipe. Aunque Iturbide las ignorara, no las desconoció O'Donojú, suficientemente instruido por su gobierno, como debía estarlo, de los asuntos de América. No cabe aventurar siquiera la pregunta de si en México se tenían esas noticias, aislado como estaba del resto de Europa.

O'Donojú obtiene que en el tratado firmado por él se incluya el nombre de Carlos Luis, príncipe heredero de Luca —quizá el más solicitado o mencionado para los presuntos tronos americanos—, y en caso de que no aceptara, "el que las Cortes designaren", excluyéndose al archiduque Carlos, al menos nominalmente, y la condición de que el elegido perteneciera a alguna dinastía. ¿La significativa omisión fue sugerida por el obispo de Puebla? El de Luca era sobrino de Fernando VII, y su nombre se había mencionado recientemente en las gestiones del argentino Valentín Gómez ante el ministerio francés.

[86] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 249.

[87] *Ibid.*, pp. 260-261; Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 222; *Manifiesto de Liorna*, pp. 245-246.

En el Tratado de Córdoba, al igual que en los varios textos del plan, no se fija el número de los miembros de la Junta Gubernativa, aunque Iturbide los había propuesto individualmente desde febrero al virrey. Por otra parte, la junta que en el plan se denominaba únicamente gubernativa, en el tratado se la llama Junta Provisional de Gobierno, y O'Donojú formaría parte de ella, pero no como su presidente, cargo que Iturbide había ofrecido a Ruiz de Apodaca el 24 de febrero. La junta, que nombraría su presidente, haría un manifiesto a la nación y aprobaría el "modo de proceder a la elección de diputados a Cortes". También nombraría una regencia de tres individuos, que ejercería el Poder Ejecutivo, estableciéndose una primera división de poderes. En tanto se reunieran las Cortes, el Poder Legislativo lo ejercería, en lo urgente, la junta, siendo además órgano consultivo de la Regencia. El tratado viene a ser la sistematización última del Plan de Iguala. Excepto en la inclusión del príncipe de Luca y la exclusión del archiduque Carlos, y el compromiso de O'Donojú para obtener que las fuerzas realistas de la capital la desocuparan "por una capitulación honrosa", no se advierte en el tratado otra aportación de O'Donojú. La solución de las imprevisiones en los textos primeros del Plan de Iguala debió ser anterior al 24 de agosto, y obra de quienes hicieron observaciones a solicitud de Iturbide.

El Tratado de Córdoba es un documento breve —17 artículos—, y al transcribirlo aquí se integra en la ilación de la exposición:

1. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo imperio mexicano.

2. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado.

3. Será llamado a reinar en el imperio mexicano (previo el juramento que designa el artículo 4 del Plan) en primer lugar el Sr. D. Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano, el serenísimo señor infante D. Carlos; por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante D. Francisco de Paula; por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor D. Carlos Luis, infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de Luca, y por la renuncia o no admisión de éste, el que las Cortes del imperio designaren.

4. El emperador fijará su corte en México que será la capital del imperio.

5. Se nombrarán dos comisionados por el excelentísimo señor O'Donojú, los que pasarán a las cortes de España a poner en las reales manos del Sr. D. Fernando VII copia de este tratado, y exposición que le acompañará, para que sirva a S.M. de antecedente. Mientras las cortes del imperio le ofrecen la corona con todas las formalidades y garantías que asunto de tanta importancia exige; y suplican a S.M. que en el caso del artículo 3, se digne noticiarlo a los serenísimos señores infantes llamados en el mismo artículo por el orden que en él se nombran, interponiendo su benigno influjo para que sea una persona de las señaladas de su augusta casa la que venga a este imperio, por lo que se interesa en ello la prosperidad de ambas naciones, y por la satisfacción que recibirán los mexicanos en añadir este vínculo a los demás de amistad con que podrán, y quieren, unirse a los españoles.

6. Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de Iguala, una junta compuesta de los primeros hombres del imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y concepto, de aquellos que están designados por la opinión general, cuyo número sea bastante considerable para que la reunión de luces asegure el acierto en sus determi-

naciones, que serán emanaciones de la autoridad, y facultades que les concedan los artículos siguientes.

7. La junta de que trata el artículo anterior se llamará junta provisional gubernativa.

8. Será individuo de la junta provisional de gobierno el teniente general D. Juan O'Donojú, en consideración a la conveniencia de que una persona de su clase tenga una parte activa e inmediata en el gobierno, y de que es indispensable omitir algunas de las que estaban señaladas en el expresado plan, en conformidad de su mismo espíritu.

9. La junta provisional de gobierno tendrá un presidente nombrado por ella misma, y cuya elección recaerá en uno de los individuos de su seno, o fuera de él, que reúna la pluralidad absoluta de sufragios: lo que si en la primera votación no se verificase, se procederá a segundo escrutinio entrando a él los dos que hayan reunido más votos.

10. El primer paso de la junta provisional de gobierno será hacer un manifiesto al público de su instalación y motivos que la reunieron, con las demás explicaciones que considere convenientes para ilustrar al pueblo sobre sus intereses, y modo de proceder en la elección de diputados a cortes, de que se hablará después.

11. La junta provisional de gobierno nombrará, en seguida de la elección de su presidente, una regencia compuesta de tres personas de su seno o fuera de él, en quien resida el poder ejecutivo, y que gobierne en nombre del monarca, hasta que éste empuñe el cetro del imperio.

12. Instalada la junta provisional, gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al Plan de Iguala, y mientras las cortes formen la constitución del Estado.

13. La regencia inmediatamente después de nombrada, procederá a la convocación de cortes conforme al método que determine la junta provisional de gobierno; lo que es conforme al espíritu del art. 24 del citado Plan.

14. El poder ejecutivo reside en la regencia, el legislativo en las cortes; pero como ha de mediar algún tiempo antes que éstas se reúnan, para que ambos no recaigan en una misma autoridad, ejercerá la junta el poder legislativo: primero, para los casos que puedan ocurrir, y que no den lugar a esperar la reunión de las cortes; y entonces procederá de acuerdo con la regencia: segundo, para servir a la regencia de cuerpo auxiliar y consultivo en sus determinaciones.

15. Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno o pasando el país a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna adonde le convenga, sin que haya derecho para privarle de esta libertad, a menos que tenga contraída alguna deuda con la sociedad a que pertenecía, por delito o de otro de los modos que conocen los europeos avecinados en Nueva España, y los americanos residentes en la península; por consiguiente, serán árbitros a permanecer adoptando esta o aquella patria, o a pedir su pasaporte, que no podrá negársele, para salir del reino en el tiempo que se prefije, llevando o trayendo consigo sus familias y bienes, pero satisfaciendo a la salida por los últimos los derechos de exportación establecidos o que se establecieron por quien puede hacerlo.

16. No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los empleados públicos o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana, sino que éstos necesariamente saldrán de este imperio dentro del término que la Regencia prescriba, llevando sus intereses y pagando los derechos de que habla el artículo anterior.

17. Siendo un obstáculo a la realización de este tratado la ocupación en la capital por las tro-

pas de la península, se hace indispensable vencerlo; pero como el primer jefe del ejército imperial, sus sentimientos a los de la nación mexicana, desea no conseguirlo con la fuerza para lo que sobran recursos, sin embargo del valor y constancia de dichas tropas peninsulares, por la falta de medios y arbitrios para sostenerse contra el sistema adoptado por la nación entera. Don Juan O'Donojú se ofrece a emplear su autoridad para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión de sangre y por una capitulación honrosa. Villa de Córdoba, 24 de agosto de 1821.- Agustín de Iturbide.- Juan O'Donojú.

* * *

El tratado le abre a Iturbide las puertas de la capital y le evita combatir con sus antiguos compañeros de armas. Pero los *genios disputadores* dudan de sus facultades y de las de O'Donojú para concertarlo, mas "sería muy fácil contestarles —escribiría Iturbide en Liorna— que en mí estaba depositada la voluntad de los mexicanos", constando la adhesión al Plan de Iguala. En cuanto a O'Donojú, "era la primera autoridad con credenciales de su gobierno", y aun sin instrucciones especiales debía hacer por su nación "todo lo que estaba en su arbitrio", desarmado como se encontraba, y con la ciudad de México bajo el mando del mariscal Novella, sin ningún título legal.[88]

Iturbide sabía "que el Tratado era prácticamente nulo", porque necesitaba ser ratificado en España, y "porque esa ratificación no llegaría nunca", opina Jaime Delgado elogiando *la destreza* de Iturbide al no pedir a O'Donojú sus poderes. Iturbide ostentaba los irrecusables de un rebelde victorioso, y los hacía valer con evidente largueza.[89]

Los términos del tratado se convienen con brevedad. "Dados los puntos —narra Bustamante—, y encerrados en el despacho del señor O'Donojú dichos jefes con sus respectivos secretarios, el de Iturbide —José Domínguez— extendió el tratado". O'Donojú "sólo tachó de mano propia dos expresiones que cedían en elogio suyo".[90] El 31 de agosto, y desde Córdoba, escribe O'Donojú al secretario de Estado y del Despacho de Ultramar. Menciona sus anteriores informes sobre su situación desesperada, sin tiempo para obrar y hallar "un sendero que me sacase del tortuoso laberinto a que me había conducido la fatalidad. Todas las provincias de Nueva España habían proclamado la independencia", y las plazas habían caído y capitulado ante "los sostenedores de la libertad": un ejército de 30 000 hombres disciplinados, "un Pueblo armado en el que se han propagado portentosamente las ideas liberales y que recuerdan la debilidad (que ellos le dan otro nombre) de sus anteriores gobernantes... y puesto a la cabeza de las tropas un jefe que supo entusiasmarles... que siempre los condujo a la victoria...". El ejército real desertando, pocos lugares fieles aún, y la capital sin fortificaciones, con una autoridad *intrusa* que depuso al virrey. El derrumbe del régimen colonial lo describe convincente. Aunque sin instrucciones resolvió negociar, y escribió a Iturbide, sin pensar "que podría sacar de la entrevista partido ventajoso para mi patria", pero "sin sucumbir jamás a lo que no fuese justo ni decoroso". Iturbide "estaba prevenido por sus comisionados, que tuvieron

[88] *Ibid.*, pp. 245-246.
[89] Jaime Delgado, *op. cit.*, tomo I, p. 72.
[90] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 222.

cuidado de formar apuntes de mis contestaciones, de las bases en que era preciso apoyarse para que pudiésemos entrar en convenio...". Como resultado se pactó el tratado que envía. "La independencia ya era indefectible sin que hubiese fuerza en el mundo capaz de contrarrestarla; nosotros mismos hemos experimentado —declara O'Donojú— lo que sabe hacer un pueblo que quiere ser libre".

Elogia las cláusulas aprobadas: gobierno monárquico constitucional, propio para países extensos, con ciertos recursos, educación y luces, que no admiten el despotismo, pero "que no tienen todas virtudes que sirven de sostenimiento a las Repúblicas y Estados federativos, así se tuvo presente para dictar el artículo 2o. Un pueblo que se constituye tiene derecho a elegirse el Príncipe que ha de gobernarle... y lo que vemos en la historia es que siempre recayó en uno de los hombres del mismo Pueblo, por lo común en el más atrevido, muchas veces en el que disponía de la fuerza... y pocas en el más virtuoso...". En México tendrá la corona uno de los príncipes de España, o el sobrino de Fernando.

A su nombramiento como individuo de la Junta Provisional de Gobierno no se opuso por estimarlo conveniente para cuidar los intereses de España. Permanecerá en México hasta la llegada del monarca. Las garantías que se dan a los españoles en el tratado moverán, ellas solas, la indulgencia del rey y de la nación.

Reconocida por él, O'Donojú, la independencia, debían acordarse las providencias para evacuar la capital y el reino. Cree haberlo pactado con honor. Suplica que se apruebe su conducta "hija de mis deseos de ser útil a S.M., a la Nación y a la humanidad".[91]

No puede olvidarse que cuando O'Donojú dejó en Puerto Cabello al general Juan de la Cruz Mourgeon, nuevo jefe político superior del virreinato de Nueva Granada, Bolívar victorioso en Carabobo el 24 de junio, podía escribir al Congreso de Cúcuta: "Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la república de Colombia".[92]

O'Donojú se atribuye una influencia mayor de la que tuvo en el contenido del tratado, que únicamente sistematiza, ya se dijo, los textos del Plan de Iguala. Cuanto pidiera en favor de los españoles, Iturbide estaba pronto a concederlo. Pero el informe está escrito con convicciones liberales.

Las paradojas subsisten: el representante liberal de la metrópoli arguye en favor de la independencia que está consumando el insurrecto antiliberal de la colonia. Otra carta de O'Donojú será más explícita.

El 26 de agosto O'Donojú escribió al general Dávila, enviándole desde Córdoba el tratado que firmó: "él lo garantizan las luces del siglo, la opinión general de los Pueblos ilustrados, el liberalismo de nuestras Cortes, las intenciones benéficas de nuestro Gobierno y los paternales del Rey". Lo firmó, le dice a Dávila —quien había sido forzado a jurar la Constitución—, por las razones de conveniencia que existen, y "aun cuando no hubiese estado como lo estoy convencido de la justicia que asiste a toda sociedad para pronunciar su libertad y defenderla a par de la vida de sus individuos; de la inutilidad de cuantos esfuerzos se hagan, de cuantos diques se opongan, para contener este sagrado torrente una vez que haya emprendido su curso majestuoso...; de que es imposible contrariar ni aun alterar el orden de la natu-

[91] Jaime Delgado, *op. cit.*, tomo III, pp. 21-25.

[92] Simón Bolívar, *op. cit.*, tomo I, p. 506.

raleza (pues) ella puso límites a las Naciones...". Como a los hombres, ella "nos dio en la virilidad, razón y fuerza para ser independientes y no vivir sujetos a tutela; el mundo moral está modelado por las mismas reglas que el físico. Principios tan luminosos no podían ocultarse a la alta penetración del Rey, y a la sabiduría del Congreso... En efecto ya la representación nacional pensaba antes de mi salida de la península en preparar la independencia mexicana, ya en una de sus comisiones, con asistencia de los Secretarios de Estado, se propusieron y aprobaron las bases, ya no se dudaba de que antes de cerrar sus sesiones las cortes ordinarias quedaría concluso este negocio importante...". En México se pronuncia la independencia, pero se ofrece la unión entre americanos y españoles, y así se pactó por él.[93] ¿O'Donojú habló con Iturbide del proyecto de los diputados americanos?

Iturbide se proponía inmunizar de liberalismo a México, y proclamaba la independencia para preservar la pureza de la religión, en la que involucraba los privilegios corporativos y temporales de la Iglesia. El liberalismo anticlerical de O'Donojú accedía a la independencia por razones bien diversas: la situación de México y su casi solitaria congruencia ideológica, aunque no podía ignorar la proclama y el plan de 24 de febrero de Iturbide.

Carlos María de Bustamante, el menos sospechoso de iturbidismo, con el doctor Mier y Juan Pablo Anaya, es quizá quien en dos ocasiones ofrece la imagen más favorable de la persona de Iturbide, hablando de "las zalemas y obsequios que sabía emplear felizmente cuando quería agradar... vive Dios —exclama Bustamante— que era una persona hermosa, gallarda, fina en sus maneras, y acostumbrada a mandar...".[94]

O'Donojú, liberal y anticlerical, nuevo jefe político superior en México, el antiguo imperio de Moctezuma, se entrevista con el jefe criollo insurrecto, gallardo y fino, no con un insurgente indio o mestizo, hombres a los que Iturbide parece señorear. Tratan sobre la independencia. Iturbide, como en su carta al general Negrete, puede hablarle de esas cosas "que no se conformarán absolutamente con el genio e ideas de Ud., como no se conforman con las mías, pero la consideración de que es preciso adherirse a algunos caprichos del común de los socios —ante O'Donojú, el común de los habitantes del reino— me hace abrazarlas, seguro de que después entrarán en la buena dirección de las reformas útiles". El dilema es simple: aceptar el plan de Iturbide o "el desorden, el abandono y otra multitud de vicios" de la primera insurgencia, como Iturbide escribió en la proclama de 24 de febrero, y que pintaría vivamente a O'Donojú, empleando sus mejores y más persuasivas dotes. Mas la situación no sólo se puede ver desde esa perspectiva.

La solución convenida la explica y justifica el propio O'Donojú con un argumento apremiante: la Casa de España debe aceptar la corona de México, que puede, lo advierte, caer en "uno de los hombres del mismo pueblo —como ha ocurrido en la historia—, por lo común el más atrevido, muchas veces el que disponía de la fuerza... y pocas en el más virtuoso".

No nos preguntaremos por esta inquietud de O'Donojú ante un pueblo armado y 30 000 soldados, "dirigidos por hombres de conocimientos y de carácter, y puesto a la ca-

[93] Jaime Delgado, *op. cit.*, pp. 17-19.

[94] Carlos María de Bustamante, *Continuación del cuadro histórico de la revolución mexicana*, México, 1953, tomo II, pp. 90-110.

beza de las tropas un jefe que supo entusiasmarlos, adquirirse su concepto y su amor, que siempre los condujo a la victoria y que tenía a su favor todo el prestigio que acompaña a los héroes".

En el sur, el 22 de noviembre de ese año, Bolívar escribe desde Bogotá al general Soublette sobre las noticias de México: que se establecerá una monarquía con príncipes Borbones, mas si no lo aceptan en España, prevé Bolívar, "la corona recaerá necesariamente sobre el que tenga más audacia y resolución en México". No será éste el único juicio ni la única previsión de Bolívar.[95]

[95] Simón Bolívar, *op. cit.*, tomo I, p. 608.

6

EL MONARQUISMO EN EL SUR
PUNCHUACA

El Plan de Iguala se proclama el 24 de febrero y el Tratado de Córdoba se concerta el 24 de agosto de 1821. En Punchuaca, a 25 kilómetros de Lima, el 2 de junio de ese año se encuentran el general José de San Martín, general en jefe del Ejército Libertador del Perú, y el general José de la Serna, quien había sustituido al general Joaquín de la Pezuela, como capitán general y jefe político superior del Perú, por el golpe militar del 29 de enero de ese año.

En las conferencias de Punchuaca se formula el otro proyecto monárquico, no el único pero sí el contemporáneo al de México, como desenlace al conflicto de la emancipación americana. La simultaneidad de los acontecimientos, el origen contrario de Iturbide y San Martín en la guerra por la emancipación, como el de sus preocupaciones y motivos, justifica que atendamos al suceso de Punchuaca.

El 8 de septiembre de 1820 desembarcó el general San Martín en la Playa de Pisco, a unos 200 kilómetros al sur de Lima. Llevaba una proclama a los peruanos, que se preparaban a jurar la Constitución el día 11: "La revolución de España es de la misma naturaleza que la nuestra: ambas tienen la libertad por objeto, y la opresión por causa. Pero la América no puede contemplar la Constitución española sino como un medio fraudulento de mantener en ella el sistema colonial... yo vengo a poner término a esa época de dolor y humillación. Éste es el voto del Ejército Libertador, ansioso de sellar con su sangre la libertad del Nuevo Mundo".

San Martín llevaba también una proclama al pueblo del Perú, del director supremo de Chile, el general Bernardo O'Higgins: "Seréis vuestros propios legisladores, y, por consiguiente, constituiréis una nación tan libre, e independiente como vosotros mismos". A William Worthington, cónsul de los Estados Unidos, inquieto por los planes de la expedición al Perú, O'Higgins le había mostrado la proclama, diciéndole: "Estamos porque el pueblo forme el gobierno y tan pronto como el Perú esté emancipado, esperamos que Buenos Aires y Chile formarán con el Perú una gran Confederación, semejante a la de los Estados Unidos".[96]

No podemos hacer historia del proyecto de la expedición contra el Perú, que se remonta a 1814, y a su paciente y lúcida concepción y realización por el general San Martín. Pero sí podemos recordar uno de los sucesos más singulares de la emancipación de América, el que consta en el Acta de Rancagua, de 2 de abril de 1820.

Después de realizar la reconquista insurgente de Chile, el general San Martín preparaba

[96] Bartolomé Mitre, *op. cit.*, tomo II, p. 260; Jaime Eysaguirre, *O'Higgins*, Santiago de Chile, 1946, p. 225.

la expedición al Perú. Dejaba a sus espaldas las disensiones en las Provincias del Plata. El republicanismo federal de las provincias de la Liga del Litoral se oponía al centralismo, con inclinación monárquica desde el Congreso de Tucumán, en el gobierno directorial de Buenos Aires. La guerra civil a través de intermitentes conatos de paz se prolongaba desde 1815. La invasión portuguesa de la Banda Oriental y la resistencia de Artigas frente a ella y contra el gobierno de Buenos Aires, aceleraba el proceso crítico de desintegración. El Paraguay bajo el doctor Rodríguez Francia era un territorio independiente de hecho. Desde Buenos Aires, Juan Martín Pueyrredón, director supremo en el gobierno central, y quien apoyaba el proyecto para liberar Chile e invadir el Perú, renunciaba a su cargo el 9 de junio de 1819. Sobre Buenos Aires continuaba la amenaza de la expedición española que comandaría el general Félix María Calleja, ex virrey de Nueva España, y el nuevo director supremo, el general José Rondeau ordenó San Martín, el 11 de agosto de 1819, su regreso a Buenos Aires para preparar su defensa. El 11 de octubre se le reiteró la orden por el general Irigoyen, ministro de Guerra, ya no ante la inminencia de la expedición española, sino ante el avance de las fuerzas federales de Santa Fe y Entre Ríos, que rompían abiertamente con Buenos Aires. El caudillismo de Estanislao López y Francisco Ramírez, y la leyenda de las Montoneras, avasallaban la imaginación popular. Las deserciones fortalecían la Liga del Litoral.

San Martín había intentado desde 1816, dirigiéndose a Estanislao López y aun a Artigas, que se llegara a un acuerdo con Buenos Aires, en donde la oposición al gobierno se generalizó el año 1819.

San Martín duda y debe decidir entre tomar partido con su ejército, o parte de él, comprometiéndolo en la guerra civil de las Provincias del Plata, o llevar a cabo la expedición contra el Perú y Lima, el centro del poder español en el sur. El 22 de marzo de 1814, San Martín había escrito a Nicolás Rodríguez Peña, el pertinaz conspirador por la independencia desde 1806, que las campañas contra el Alto Perú —Bolivia—, al norte, no conducirían a nada. La liberación de Chile, y "por el mar a Lima... es el camino, y no éste, mi amigo. Convénzase usted que hasta que no estemos sobre Lima la guerra no acabará".[97] San Martín revivía la estrategia de Escipión, y Lima era la Cartago de América del Sur.

La insurgencia de América es una y prevalece a través de sus desconciertos más confusos. De espaldas a ellos en las Provincias del Plata, San Martín la propone aunque no pueda conjurar todos en sí mismo. Sostener el gobierno directorial de Buenos Aires no es la causa en que está empeñado, y repasa los Andes. Cae Buenos Aires, después de la batalla de Cepeda, y el 1 de febrero del año 1820 de la anarquía, se firma el Tratado del Pilar, de 23 de febrero, por Manuel de Sarratea, Estanislao López y Francisco Ramírez, representando a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, declarando que "el voto de la nación, y muy particularmente el de las provincias de su mando, respecto del sistema de gobierno que debe regirnos, se han pronunciado a favor de la Federación que de hecho admiten" (art. 1).[98] La república federal logra una de sus victorias efímeras, aunque hereda uno de sus documentos fundamentales.

[97] Ricardo Levene, *El genio político de San Martín*, Buenos Aires, 1950, p. 61; Augusto Barcia Trelles, *San Martín en América*, segunda parte, La Ciudadela, Buenos Aires, 1944, p. 326.

[98] Alberto Demicheli, *Formación constitucional rioplatense*, Montevideo, 1955, tomo III, p. 486.

En territorio chileno, el general San Martín renuncia el 26 de marzo al mando del Ejército de los Andes, porque el "Congreso y el Director Supremo de las Provincias Unidas del Plata —a quienes debe su nombramiento— no existen", para que los oficiales del ejército "por sí y bajo su espontánea voluntad, nombren un general en jefe que deba mandarlos..., y salvar de este modo los riesgos que amenazan la libertad de América". El 2 de abril, en Rancagua, los jefes y oficiales del Ejército de los Andes discuten la renuncia y por unanimidad acuerdan que "la autoridad que recibió el Sr. general para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país, no ha caducado ni puede caducar, porque su origen que es la salud del pueblo, es inmutable".[99]

No seguiremos la preparación de la campaña del Perú. El gobierno de Chile es aliado y auxilia desde esa fecha *a un ejército de América*, que irá al Perú bajo la bandera chilena. En el Perú se consumaría la emancipación del continente sur, y también el encuentro y la escisión de San Martín y Bolívar.

El 22 de julio, y antes de embarcarse el 20 de agosto hacia el Perú, San Martín dirige una proclama a las Provincias del Plata. El documento es su justificación y una profesión de fe política: "Antes de mi partida quiero deciros algunas verdades que sentiría las acabarais de conocer por la experiencia. Vuestra situación no admite dudas: diez años de constantes sacrificios sirven hoy de trofeo a la anarquía...Habéis trabajado un precipicio con vuestras propias manos, y acostumbrados a su vista, ninguna sensación de horror es capaz de detenemos. El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación: esta palabra está llena de muerte, y no significa sino ruina y devastación". No obstante su condenación, agrega: vosotros "me habéis acriminado aun en no haber contribuido a aumentar vuestras desgracias, porque éste habría sido el resultado si yo hubiera tomado una parte activa en la guerra contra los federalistas. Mí ejército es el único que conservaba su moral, y lo exponía a perderla, abriendo una campaña... En tal caso, era preciso renunciar a la idea de libertar el Perú, y suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos... probaré que desde que llegué a mi patria su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado...".[100]

No es el momento de atender ni al antifederalismo ni al monarquismo de San Martín, porque ni la derrota de éste con el triunfo republicano federal en las Provincias del Plata lo desviaban de su *único pensamiento.* Quien con más acritud en la detracción sanmartiniana negará su plan para derrotar el imperio español en el Perú, será un ilustre federalista, Juan Bautista Alberti, atribuyéndole objetivos limitados únicamente al que había sido Virreinato del Río de la Plata, incluso afirmando que los proyectos sobre Chile y el Perú fueron concebidos en 1815 y 1816 por José Miguel Carrera y Tomás Guido.[101]

En 1820 los federales victoriosos son los insurgentes que dominaban el territorio que protegía a Buenos Aires del Norte, y con Belgrano y Güemes acosaron y resistieron a los realistas del Alto Perú, y al oriente a los brasileños invasores de la Banda Oriental.

[99] Augusto Barcia Trelles, *op. cit.*, pp. 456-457.

[100] Bartolomé Mitre, *op. cit.*, tomo II, pp. 258-259.

[101] Juan Bautista Alberti, *Grandes y pequeños hombres del Plata*, París, s./f., pp. 225-233.

* * *

Sigamos a San Martín en el Perú. En los días en que desembarca en Pisco, el virrey Pezuela recibe de España las órdenes de jurar la Constitución, y las instrucciones del 11 de abril para tratar con Chile el reconocimiento de ella. De no lograrlo, Pezuela debe "procurar una suspensión de armas, mientras que los diputados americanos se dirigiesen a España a exponer sus quejas ante el soberano, o bien a esperar los que éste enviase a América para arreglar las diferencias pendientes".[102]

Tanto la restauración constitucional como las instrucciones para tratar con Chile no son del todo gratas al virrey, pero las trasmite al Alto Perú para que se inicien negociaciones con Buenos Aires. Enterado del desembarco de San Martín, suspende el envío de comisionados a Chile, y Pezuela se comunica con él invitándolo a tratar con sus enviados. Los representantes de ambos se reúnen en Miraflores, al sur de Lima, conviniendo un armisticio de ocho días, del 26 de agosto al 4 de septiembre. No nos demoraremos en los incidentes de la frustrada conferencia, pero consignemos la entrevista privada de los representantes de San Martín —Tomás Guido y Juan García del Río— con Pezuela. La versión la da éste en *nota reservada* del 30 de noviembre dirigida al gobierno español a través del conde de Casa Flores, su embajador en Río de Janeiro: No fue posible llegar a un acuerdo —informa Pezuela—, pues la base de éste era el reconocimiento de la independencia, que "ni mi honor ni mis facultades me autorizaban... El medio que los diputados de San Martín indicaron, fue que: *no sería difícil encontrar, en los principios de equidad y de justicia, la coronación de un príncipe de la casa reinante de España*; también me fue preciso desecharlo por lo que a mí toca, y reservar su examen al gobierno supremo de la nación". La proposición la califica Pezuela de *estratagema dilatoria*.[103]

En la versión que escribirá el general Tomás Guido en 1865, sobre las negociaciones de Punchuaca, no hace referencia a las de Miraflores ni a esa proposición que se había hecho al virrey Pezuela.

El 5 de noviembre, el almirante Cochrane se apodera en El Callao de *La Esmeralda*, buque de 44 cañones. Los realistas ejecutan a marinos norteamericanos del *Macedonia*, surto en la bahía, por sospechas de haber cooperado con los navíos de la escuadra chilena. Se persigue a los criollos y a los ingleses en Lima. San Martín dirige un manifiesto a la capital: "Jamás creí que llegase a este extremo la barbarie de los que se jactan de pertenecer a la monarquía constitucional de España; pero asegurado del hecho por las noticias que recibo, me veo forzado por la ley de talionación a declarar que desde el momento que se derrame una sola gota de sangre por las arbitrariedades o la venganza, todo español quedará fuera de la ley y dondequiera que sea aprehendido será pasado por las armas. Éste es el extremo más cruel para mi corazón, pero ya estoy resuelto a seguir las reglas de la reciprocidad y empeño mi palabra que no quedará sin expiación el crimen de los que derramen la sangre de los america-

[102] Bartolomé Mitre, *op. cit.*, tomo II, p. 267.

[103] *Ibid.*, tomo II, p. 270; Ricardo Piccirilli, "San Martín y el diario de Abreu", en *Historia*, año II, núm. 7, enero-marzo de 1957, p. 128; José Pacífico Otero, *Historia del libertador don José de San Martín*, Buenos Aires, 1932, tomo III, pp. 93-94. Otero pone en duda la proposición. Piccirilli la registra sin objetarla: *San Martín y la política de los pueblos*, Buenos Aires, 1957, pp. 257-258.

nos". El manifiesto tiene efectos y las persecuciones públicas en contra de los americanos cesan en Lima.[104]

San Martín se rembarca para establecer sus cuarteles en Huacho, amagando a Lima por el norte. El marqués de Torre Tagle, gobernador de Trujillo, se declara por la independencia.

La táctica de San Martín es evitar todo encuentro por las armas, excepto con sus fuerzas bajo el mando del general José Arenales, que tiene encomendada la *campaña de la sierra.* Cuenta en Lima con partidarios que le informan de cuanto ocurre, y él escribe al arzobispo Las Heras y a Gaspar del Río, regente de la Audiencia, tratando de ganar sus voluntades o convencerlos de lo inevitable de la emancipación.

El 10 de diciembre, Pezuela escribe al embajador de España en Río Janeiro: las deserciones se propagan; Cochrane se apoderó de *La Esmeralda* en El Callao; los puertos están bloqueados; sin tener la superioridad en el mar el Perú se perderá.[105] El 26 de enero el general La Serna sustituye a Pezuela por el golpe militar.

La Serna informa al gobierno español el 20 de marzo de 1821 sobre su precaria situación, en la que a pesar de su superioridad numérica San Martín rehúsa combatir. Reclama urgentes auxilios. "Sin ellos —expresa— está mi deber y en mi conciencia asegurar a V.E. para que lo haga a S.M. que este país se pierde irremisiblemente y, en mi concepto, con él toda la América, y hasta las esperanzas de recuperarla".[106]

Desde el campo insurgente, en Huara, se publica por Bernardo Monteagudo *El Pacificador del Perú,* que se introduce en Lima. En su primer número, de 10 de abril, da la noticia del *banquete* que el 28 de marzo dio San Martín al comisionado español Manuel Abreu, que llegó con instrucciones de su gobierno para tratar con los americanos insurgentes. Abreu se había comunicado con San Martín desde Panamá solicitando un salvoconducto para pasar a Lima, e informándole del armisticio de Morillo y Bolívar. Los comisionados nombrados en España para negociar con Chile fueron el brigadier José Rodríguez de Arias, que murió en La Habana, y el capitán de fragata Manuel Abreu, que continuó su misión.

San Martín recibe a Abreu con especiales deferencias. Los prisioneros realistas hablan con Abreu y agradecen a San Martín el trato que les da. San Martín y Abreu hablan de la situación desesperada de Lima, que San Martín espera ocupar sin combatir. San Martín habla del futuro, y Abreu lo consigna en su diario. "Que conocía muy bien la impotencia de la América para erigirse en república independiente, por carecer de virtudes, y civilización y que en estos extremos había convenido con los de su ejército en coronar un príncipe español, medio único capaz de ahogar las opiniones de enemistad, reunirse de nuevo las familias y los intereses, y que por honor y obsequio de la península se harían tratados de comercio con las ventajas que estipulasen. Y que en cuanto a Buenos Aires *emplearía sus bayonetas para compelerlos a ésta si no se prestasen*" —las cursivas son de Abreu.[107] Abreu le aclara lo limitado de sus poderes para tratar la pacificación, mas sin mostrarle las instrucciones que lleva.

La sola declaración ante Abreu puede ser un señuelo ofrecido a La Serna para iniciar ne-

[104] José Pacífico Otero, *op. cit.*, tomo III, p. 41.

[105] José Pacífico Otero, *op. cit.*, tomo III, pp. 162-163.

[106] *Ibid.*, p. 819.

[107] *Ibid.*, pp. 265-266; Ricardo Piccirilli, "San Martín y el diario de Abreu", p. 134; Augusto Barcia Trelles, *ibid.*, tercera parte, p. 201.

gociaciones, apoyándose además en el armisticio de Morillo y Bolívar como antecedente, y sin dejar de ignorar los conflictos entre el rey y las Cortes, y la oposición anticonstitucional en España, hechos por los que se interesa San Martín en sus conversaciones con Abreu. Mas el liberalismo de las Cortes y la legislación en cuestiones eclesiásticas no parecen afectar el planteamiento de la situación.

* * *

Abreu pasa a la capital. La Serna, en cumplimiento de las instrucciones que le transmite, y consultando a los jefes militares, invita a San Martín a que se reúnan representantes de ambos en Punchuaca, a cinco leguas al norte de Lima. El 4 de mayo se reúnen por primera vez. Las instrucciones de La Serna a sus comisionados para un armisticio lo prevén por seis meses, con el objeto de enviar comisionados a España, tanto con la representación de Chile como con la de La Serna. San Martín conservará los territorios al norte del río Santa hasta Trujillo, y La Serna el sur del Perú. Se abrirá el comercio entre los dos campos. Se desarmarán las guerrillas. Ninguna de las partes puede contraer alianzas con poderes extraños. Se convendrá si la guerra continúa, que se lleve "conforme al derecho público".[108]

Las instrucciones de San Martín de 27 de abril, son: negociar la independencia de Chile y de las Provincias del Plata, y establecer la del Perú, no aceptando la Constitución española. "Todo armisticio preliminar en las negociaciones es inadmisible —dispone el punto 4— a menos que la disposición de los diputados de la junta —la de pacificación de Lima— se anuncie preparada a convenir en algún principio consistente con el espíritu del artículo 2 de estas instrucciones", o sea, que lo que se negocia es la independencia de Chile, el Plata y el Perú. Cualquier proposición de que vayan a España diputados de Chile y Perú "para sujetar a su decisión la cuestión principal de su emancipación, no es aceptable", en tanto no se evacue Lima y el castillo de El Callao como garantía del armisticio para negociar en España.[109]

La cuestión del armisticio se torna principal no pudiendo resolverse las de la independencia y el reconocimiento de la constitución, pues "el nombre de aquel código es ominoso para la libertad del nuevo mundo y que su liberalidad respecto de éste ha sido demostrada por la razón y la experiencia" como declaran por escrito los americanos en la reunión del día 5.[110]

El 22 de mayo se, firma un armisticio por 20 días y se conviene una entrevista personal de San Martín y La Serna, con asistencia de sus negociadores, entre los que están los generales Andrés García Camba y Tomás Guido, quienes darán después sus versiones del suceso, hasta ahora, con el *Diario* de Abreu, los testimonios directos de la ocurrencia.

Según García Camba, Abreu llegó a Lima "prodigando indiscretamente elogios a San Martín y a sus compañeros, que se traducían en otras tantas indirectas aprobaciones al sistema de independencia que defendían, y dejando deslizar de sus labios con mayor inconsideración algunas indicaciones que tendían a hacer recaer sobre los jefes del ejército español la obstinada continuación de la guerra", pasando ante muchos "más bien como un ciego apologista

[108] José Pacífico Otero, *op. cit.*, p. 279.
[109] *Ibid.*, pp. 280-281.
[110] Augusto Barcia Trelles, *op. cit.*, p. 206.

de los independientes que por un agente de la España...". En Lima se tienen noticias de la anarquía en Buenos Aires y la victoria de los caudillos federales, lo que garantiza la seguridad en el Alto Perú y el que el general Olañeta pueda amenazar y auxiliar al Perú del Pacífico. Para el general García Camba, esta situación favorable no inclina a La Serna y a los jefes militares a tratar con San Martín, y se obedecen únicamente las instrucciones que lleva Abreu. La Serna cumple con ellas para "justificar más y más la guerra", y para evitar que las conversaciones de los comisionados se prolonguen, apremia una entrevista con San Martín, a la que éste accede.[111]

García Camba contradice el informe de La Serna de 20 de marzo, a que ya nos referimos. Abreu, en su diario anota que San Martín es quien propone a La Serna la entrevista el 22 de mayo, y por ello se firmó el armisticio de 20 días para dar tiempo a formar las bases de un acuerdo.[112] San Martín confía a Abreu el día 1 lo que el 2 de junio propondrá a La Serna.

"Los realistas notaron pronto en sus adversarios un deseo vivo, verdadero o aparente, de pedir a la España un príncipe de la familia real para que gobernara el Perú en calidad de monarca independiente pero constitucional: y los nuestros les contestaron que si las Cortes con el rey así lo acordasen, no era otra la obligación del ejército que obedecer...", suspendiéndose hostilidades hasta recibir instrucciones de España.[113]

San Martín habla en privado con La Serna. Éste informa a cinco de sus acompañantes la proposición de San Martín. A petición de éste La Serna reúne a los jefes españoles. San Martín hace público su plan: los comisionados, dice, convienen "que la independencia del Perú no es inciliable con los más grandes intereses de España, y ceder a la opinión de los pueblos haría un servicio a su patria. Pasó ya el tiempo en que el sistema colonial pueda ser sostenido por España". Los ejércitos españoles se batirán con bravura pero el éxito no es dudoso para los millones de americanos por la independencia. "Si V.E. se presta a la cesación de una lucha estéril y enlaza sus pabellones con los nuestros, para proclamar la independencia del Perú, se constituirá un gobierno provisional presidido por V.E. compuesto de dos miembros más, de los cuales V.E. nombrará uno y yo el otro; los ejércitos se abrazarán sobre el campo; V.E. responderá de su honor y su disciplina; y yo marcharé a la península si necesario fuere a manifestar el alcance de esta alta resolución, dejando a salvo en todo caso hasta los últimos ápices de la honra militar, y demostrando los beneficios para la misma España de un sistema que, en armonía con los intereses dinásticos de la casa reinante, fuese conciliable con el voto fundamental de América independiente".[114]

La versión del general García Camba varía las palabras, no el sentido. San Martín propone una regencia que "gobernaría independiente el Perú hasta la llegada de un príncipe de la familia real de España; y que para pedir ese príncipe el mismo San Martín se embarcará seguidamente para la Península, dejando las tropas de su mando a las órdenes de la regencia",

[111] Andrés García Camba, *Memorias del general... para la historia de las armas españolas en el Perú*, Madrid, s./f., tomo I, pp. 512-514.

[112] Citado por Barcia Trelles, *op. cit.*, p. 210.

[113] Andrés García Camba, *op. cit.*, tomo I, p. 515.

[114] Tomás Guido, "Negociaciones de Punchuaca", en *Revista de Buenos Aires*, 1865, tomo VII, núm. 28, pp. 495-496.

Abreu apoya la proposición, al igual que el mariscal de campo Manuel de Llano, y el alcalde de segundo voto en Lima, José María Galdiano que acompañan a La Serna.[115]

Después de oír a San Martín se pasa al refrigerio, según Guido, y a los brindis por una feliz unión, aunque la propuesta no es definitivamente aceptada. La Serna ofrece dar su contestación en dos días.

El día 4, después de una reunión en Lima con los jefes militares y sin consultar a otras corporaciones, La Serna envía su respuesta a San Martín, que se halla a bordo de la goleta *Moctezuma* frente a El Callao. La contraproposición es simple: suspender hostilidades por el tiempo necesario para recibir una respuesta definitiva de España, y en tanto se tirará una línea entre los dos campos; La Serna irá a España para informar, y si San Martín lo desea, puede ir con él. Los enviados españoles discuten con San Martín, y García Camba, que es uno de ellos, escribe que "al desechar San Martín la proposición del virrey, dijo con harta ironía a Valdés y Camba: "*que sentía tanta obstinación, pues veía con pesar que dentro de poco tiempo no tendrían los españoles más recurso que tirarse un pistoletazo*". García Camba reflexiona que sin la nobleza de La Serna "era posible que el Perú dejara en Punchuaca de pertenecer a España, como en menos apurada situación admitió O'Donojú en Córdoba la independencia del imperio mexicano".[116] El testimonio de García Camba corrobora lo que escribirá San Martín al general Miller, como veremos a continuación, limitándose únicamente a la propuesta monárquica en Punchuaca.

* * *

San Martín no dejó constancia escrita de la proposición que hizo a La Serna.

Seis años después, el 19 de abril de 1827, San Martín contesta en Londres las preguntas que el general Guillermo Miller le hace sobre diversos sucesos en el Perú. Una de las preguntas de Miller es sobre las proposiciones de San Martín a La Serna en Punchuaca. San Martín las enumera: la.) como preliminar de toda negociación, el reconocimiento de la independencia del Perú; 2a.) que se formase una Junta Gubernativa con tres individuos, uno nombrado por La Serna, otro por él, San Martín, "y el tercero por la capital, cuya junta, en unión de un diputado por cada provincia se encargaría de la formación provisoria de una Constitución, hasta la reunión del Congreso General"; 3a.) que dos comisionados, uno por él y otro por La Serna, irían a España a participar la independencia del Perú e invitar al rey nombrase un infante de su dinastía para coronarse en el Perú, jurando antes admitir la Constitución que se le presentase". Y se explica: "San Martín conocía el Gabinete de Madrid, y sabía que nunca aprobaría el tratado; sólo trataba —dice de sí mismo— de comprometer a los jefes españoles al reconocer la independencia, no dejándoles después más partido que el americano".[117]

En las proposiciones del 2 de junio en Punchuaca la perspectiva de la independencia se limita al virreinato del Perú.

[115] Andrés García Camba, *op. cit.*, tomo I, p. 516.

[116] *Ibid.*, pp. 516-518.

[117] *San Martín. Su correspondencia, 1823-1850. Recopilada por Adolfo P. Carranza*, Madrid, 1911, pp. 109-110.

En sí, y sin atender a las contradicciones de su versión con las de Guido y García Camba, el argumento resulta plausible, y, corroborado por su negativa a la proposición última de La Serna. Mas la cuestión es otra.

Bartolomé Mitre, el autor de la obra magistral sobre San Martín, califica la entrevista de Punchuaca como "el paso más trascendental en la vida de San Martín, pues, aunque no produjese ningún hecho inmediato, determinó un rumbo en su carrera de libertador, que debía conducirlo a un camino sin salida. La América española estaba independiente de hecho y republicanizada de derecho... La república estaba en el orden de las cosas", lo eran ya en el Plata, en Chile y en Colombia. "La monarquía era un plan artificial o violento de gobierno, que contrariaba las tendencias de los pueblos emancipados, y sólo podía ser posible en una distribución dinástica y un acuerdo doméstico entre la metrópoli y la colonia, como sucedió en el Brasil". San Martín propone la monarquía "en momentos en que en México se implantaba el mismo sistema por una combinación de circunstancias, pasadas las cuales, la ley revolucionaria recobraría su imperio". Mitre formula el juicio que centra la polémica. San Martín dice, se "extraviaba como político que no veía claro ni preveía los obstáculos, y como guerrero destemplaba sus armas. Como libertador, se desautorizaba ante las nuevas naciones emancipadas... Como diplomático, comprometía ante el mundo libre, y ante el mundo reaccionario la causa de las instituciones que estaba encargado de hacer triunfar...".[118]

No la proposición en Punchuaca sino el monarquismo de San Martín no es dudoso, y no lo desvanece su respuesta al general Miller. Aunque el planteamiento para él es otro, y lo hace desde 1816 en una carta del 24 de marzo dirigida a Tomás Godoy, diputado al Congreso de Tucumán: "Si yo fuese diputado —escribe— me aventuraría a hacer al Congreso las siguientes observaciones...: Soberano Señor: un americano republicano por principios e inclinación, pero que sacrifica esto mismo por el bien de su suelo hace al Congreso presente: lo. Los americanos o provincias unidas no han tenido otro objeto que la emancipación del mando de fierro español... 2o. ¿Podremos constituirnos república sin una oposición formal del Brasil... sin Artes, Ciencia, Agricultura, Población, y con una extensión de territorios que con más propiedad pueden llamarse desiertos? 3o. Sí, por la maldita educación recibida, no repugna a mucha parte de los partidos un sistema de gobierno puramente popular, persuadiéndose tiene ésta una tendencia a destruir nuestra religión...".[119]

La segunda pregunta, en el inequívoco laicismo de San Martín, es una consideración a las preocupaciones y hábitos populares, no a sus convicciones personales en este punto.

No vamos a adelantar en la cuestión dubitativa sobre su monarquismo por convicción o por táctica y consideraciones circunstanciales. Ricardo Piccirilli ha ahondado y documentado más concluyentemente el pensamiento de San Martín, en su "insistencia y persistencia por hacer prosperar una solución monárquica", ante la realidad que para él hacía imposibles y erróneas las repúblicas en América: condiciones del territorio, hábitos, inestabilidad de las instituciones, ambiciones rivales, anarquía.

Años después, cuando el general Guido escriba sobre las negociaciones de Punchuaca, reflexionará: "¿Nos haríamos acaso herederos obligados de un trono quebrantado, para levan-

[118] Bartolomé Mitre, *op. cit.*, tomo II, pp. 330-331.

[119] Ricardo Piccirilli, *San Martín y la política de los pueblos*, pp. 246-247.

tar sobre sus fragmentos esparcidos, el solio de la independencia de América?" Quienes por años habían combatido por la emancipación, "llegaron en los malos días hasta desconfiar de sus magníficas promesas. Esto explica muchas decepciones y aquellos planes sigilosos para monarquizar el continente, a que no han sido ajenos algunos de sus más claros hijos".[120] En Buenos Aires, y años después, Guido no puede dejar de pensar, aunque no los nombre, en Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia, para mencionar sólo dos.

* * *

Volvamos a 1821. Lo ocurrido en Punchuaca no podía permanecer oculto. El 15 de ese mes de junio, el general Tomás de Heres escribe desde Trujillo al general Bolívar, presidente de Colombia. Le da noticias de la llegada del comisionado Abreu y las conferencias en Punchuaca. En ellas, informa Heres, "se sentó por base el reconocimiento de la independencia del Perú por el gobierno español, bajo la condición de que viniese a reinar un infante de la familia real de España, y de que reinase sujeto a una constitución que se le presentaría por los representantes del país". Como garantía, San Martín recibiría las fortificaciones de El Callao, conviniéndose un armisticio de 16 meses, "mientras daba parte a España y se recibiría la resolución de su Gabinete" De la entrevista de San Martín y La Serna resultó, según Heres, que el representante del rey y la Junta de Pacificación de Lima reconocían la independencia y la proclamarían en Lima. Como se sigue conferenciando, Heres comunicará a Bolívar las futuras novedades.[121]

El 24 de junio de ese año Bolívar derrota a los realistas en Carabobo, y escribe al Congreso reunido en Cúcuta: "Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la república de Colombia". Un año antes, cuando el general Pablo Morillo recibió la noticia de la batalla de Boyacá el 7 de agosto, Morillo escribió: "En un solo día Bolívar destruye los frutos de cinco años, y en una batalla reconquista todo lo que habíamos ganado...".[122] Después de Bovacá el virrey Sámano huyó a Cartagena y Bolívar entraba a Bogotá el 10 de agosto.

El 12 de julio de 1821, el Congreso de los Pueblos de Nueva Granada y Venezuela, reunido en la villa del Rosario de Cúcuta, promulga los 14 artículos de la Ley Fundamental de Unión de los Pueblos de Colombia. Por su artículo primero los "pueblos de Nueva Granada y Venezuela quedan reunidos en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expreso de que su gobierno será hora y siempre popular representativo", y "será conocida y denominada con el título de república de Colombia" (art. 2o.). El 30 de agosto del mismo año, el Congreso decreta la Constitución que regirá hasta 1830 la República de la Gran Colombia.

Bolívar recibe las noticias que le da el general Heres sobre las conferencias de Punchuaca. Aunque frustrado, conoce el proyecto. Bolívar calla y espera, con los ojos puestos en Quito y Guayaquil. El 16 de noviembre de 1821, desde Bogotá y con documentos que le autorizan a opinar juzgando a terceros, Bolívar, presidente de la República de Colombia, escribe al

[120] Tomás Guido, *op. cit.*, p. 501.

[121] Daniel Florencio O'Leary, *Historia de la independencia americana. La emancipación del Perú según la correspondencia del general Heres con El Libertador*, Madrid, 1919, pp. 11-12.

[122] Antonio Rodríguez Villa, *El teniente general don Pablo Morillo*, Madrid, 1908, tomo IV, p. 49.

general San Martín con motivo de la insurrección en Guayaquil: "La libertad de las provincias del sur de Colombia, y la absoluta expulsión de los enemigos que aún quedan en la América meridional, es en el día tanto más importante cuanto que los acontecimientos de México van a dar un nuevo aspecto a la resolución de América. Según las últimas noticias que tenemos, el general Iturbide y el nuevo virrey general O'Donojú han concluido un tratado el 24 de septiembre de este año, que, entre otros artículos, comprende: que Fernando VII deberá trasladarse a México, en donde tomará el título de emperador con independencia de España y de toda otra potencia; que la ciudad de México será evacuada por las tropas reales y ocupada por el general Iturbide con los imperiales, habiendo entre tanto un armisticio. De antemano había preparado el general Iturbide este acontecimiento con el plan que publicó, y de que incluyó a V.E. un ejemplar. Este nuevo orden de cosas me hace creer con fundamento, que si el gabinete español acepta el tratado hecho en México entre los generales Iturbide y, O'Donojú y se traslada allí Fernando VII u otro príncipe europeo, se tendrán iguales pretensiones sobre los demás Gobiernos libres de América, deseando terminar sus diferencias con ellos, bajo los mismos principios que México. Trasladados al Nuevo Mundo estos príncipes europeos, y sostenidos por los reyes del antiguo, podrán causar alteraciones muy sensibles en los intereses y en el sistema adoptado por los gobiernos dé América. Así es que yo creo que ahora más que nunca es indispensable terminar la expulsión de los españoles para arrostrar los nuevos enemigos y los nuevos medios que pueden emplear".[123] Los sucesos de México le dan ocasión para formular algo más que una advertencia a San Martín.

El 22 de noviembre escribe al general Soublette sobre "el aspecto que ha tomado la revolución de México en estos últimos días", pues aunque no acepte la corona un príncipe europeo, ésta "recaerá necesariamente sobre el que tenga más audacia y resolución...". Un Borbón en México será un aliado de los tronos europeos, y "todos deberán, por su interés particular, auxiliarlo y sostenerlo, y el trono de México tendrá constantemente pretensiones sobre su limítrofe Colombia, cuyo sistema debe alarmarlo". Ve aun peligros de invasión, y del empleo de todos los medios para destruir "nuestro sistema republicano".[124]

El Ejército Libertador del Perú había llegado bajo banderas de Chile. Bolívar escribe desde Cali, el 8 de enero de 1821, a Bernardo O'Higgins, director supremo de Chile: "Hemos expulsado a nuestros opresores, roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas: mas todavía nos falta poner el fundamento del pacto social, que debe formar de este mundo una nación de Repúblicas".[125]

* * *

Bolívar adelanta una cuestión de principio sobre la que no hay transacción. Si él hubiese conocido las reflexiones de San Martín sobre la realidad americana, haciendo suyas las premisas refutaría únicamente, corno lo hace en 1821 y después, la conclusión monárquica. La independencia rompe con la metrópoli, pero ello sólo no es una ruptura con el antiguo régimen. La

[123] Simón Bolívar, *op. cit.*, tomo I, pp. 606-607.
[124] *Ibid.*, pp. 608-609.
[125] *Ibid.*, p. 619.

extensión y la profundidad de esta ruptura es otro problema. En Francia en 1789 y en España en los dos periodos constitucionales, la revolución liberal conservó la institución monárquica formal. En la emancipación, los títulos de España sobre América eran los presuntos de la corona de Castilla, y ya nos referimos al conflicto que planteaba la subversión de la titularidad de la soberanía en favor de la nación, de la que se declaró que formaba parte América.

Que proponemos una ficción frente a otra ficción, es cierto. Pero las consecuencias de aceptar o negar estas ficciones son reales, tan reales como la guerra de la emancipación de América, en la que el símbolo mismo de la supuesta legitimidad metropolitana era la corona.

Si un hecho primario de la revolución política es la toma del poder por los excluidos de él, los americanos lo tomaban por sí mismos y para sí. Instaurar un trono, a partir de esta asunción de la soberanía, era abdicar parcialmente de una de sus potestades. La república era la forma en la que teóricamente la soberanía no se enajenaba. Sabemos que la realidad no corresponde, y menos fielmente, a estos supuestos, pero ellos eran consecuentes con el hecho de la independencia.

Al referirnos a las conferencias de Punchuaca no establecemos un paralelo ni biográfico ni ideológico de San Martín e Iturbide, sino una coincidencia de ambos en sus proyectos para el desenlace de la emancipación de América. Emancipación ya inevitable, por la decisión de los americanos, por la imposibilidad metropolitana de mantener sujeto un continente, por la caducidad del antiguo régimen y de la "legitimidad de sus títulos" a través de diez años de insurgencia y de la revolución liberal en la península. La restauración del absolutismo en España a partir de 1823 es un hecho ajeno a la historia de América.

Un problema americano fue el que planteó el conflicto entre monarquía y república. Edmundo O'Gorman lo sitúa hacia la perspectiva del siglo XIX. México como entidad histórica es "una entre otras posibilidades" que se gestaron en los tres siglos de la colonia, posibilidades entre las que se pronunciarían los mexicanos. O'Gorman ve las oscilaciones y primeras pugnas entre independencia relativa y absoluta, y después entre monarquía y república. Con Morelos y los hombres del Congreso de Chilpancingo la decisión fue por la independencia absoluta y la república; con Iturbide y quienes estuvieron en la formación de sus proyectos, es por la monarquía independiente.

Desde su gestación "el germen del ser de México incluía —escribe O'Gorman—, no uno, sino dos Méxicos distintos" y la historia nuestra es "en el fondo, el inevitable y sordo conflicto. Este subterráneo forcejeo ontológico, cuya razón de ser hunde sus raíces en la diferente constitución originaria entre las dos Américas, proporciona el marco para poder apreciar el verdadero alcance del Triunfo... que es, no casual y precisamente, el del republicanismo americano sobre, no menos precisamente, el monarquismo europeo".[126]

El planteamiento de O'Gorman es justo. No obstante, conviene más al proyecto concreto de San Martín que al origen y las motivaciones del de Iturbide. Si San Martín no concibe la viabilidad de la república democrática, no por ello deja de ser un insurgente desde el año 1812. Propone para el nuevo ente histórico de un pueblo emancipado, para emplear los términos de O'Gorman, la forma monárquica.

[126] Edmundo O'Gorman, *La supervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el monarquismo mexicano*, México, 1969, pp. 11-15.

En México, el proyecto de 1820 y 1821 en la consumación de la independencia no plantea interrogación alguna dentro del contexto de la emancipación americana, de la insurgencia de México y de la revolución liberal. Sus metamorfosis son condicionadas por los sucesos contemporáneos a partir de la restauración constitucional en España —del mismo "grito de Riego", ya lo vimos—, y todas sus instancias son un repudio de la revolución liberal. El Plan de Iguala, después del de mayo de 1820, es la segunda opción de independencia en contra del liberalismo más que de la metrópoli. Se intenta restituir una nación independiente al antiguo régimen. Que ello no es ya posible lo advierten los autores mismos del plan. Y no nos atreveríamos a dudar que la opción de la independencia satisface más íntimamente al criollo que es Iturbide, tanto, al menos, como es una ingrata resolución para los antiliberales españoles de México, con los que estaba comprometido. Pero la independencia sola congrega las voluntades dispersas.

El proyecto sufre mudanzas obligadas por una realidad que no se puede ignorar, se reforma a sí mismo para ser probable. "La lucha por las reformas —escribe una de las conciencias revolucionarias más lúcidas— no genera su propia fuerza independientemente de la revolución. Durante cada periodo histórico, la lucha por las reformas se lleva a cabo sólo en el sentido indicado por el ímpetu de la revolución; y continúa en tanto que el impulso de ella sigue haciéndose sentir".[127]

A partir de las juntas de La Profesa, y a través del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, y la consumación de la indepencia, en este proceso se intenta suplantar la insurgencia y la revolución liberal, cuando expresamente no se les niega.

[127] Rosa Luxemburgo, *Revolución o reforma*, México, 1967, p. 89.

Parte tercera

LA INDEPENDENCIA DECLARADA

1

LA CONSUMACIÓN Y EL ACTA DE INDEPENDENCIA

No nos demoraremos en las contestaciones entre el general O'Donojú y el mariscal Francisco Novella, con el mando en la ciudad de México desde el 5 de julio, por el movimiento militar que depuso a Ruiz de Apodaca. Novella, sitiado prácticamente en México, recibe los oficios de O'Donojú reclamando su obediencia y la aceptación del Tratado de Córdoba, en tanto los realistas veían disminuidos sus territorios y sus fuerzas día a día.

El 13 de septiembre se entrevistan Novella y O'Donojú en la hacienda La Patera, al suroeste de la ciudad de México, y la reunión, acalorada, concluye participando Iturbide. El día 14, y en junta de los cuerpos de la capital, Novella declara que reconoce a O'Donojú como capitán general y jefe político superior, y que está dispuesto a entregarle el mando y la ciudad, previas las garantías necesarias a las fuerzas expedicionarias españolas en relación con los sucesos del 5 de julio al deponer a Ruiz de Apodaca. La resolución se comunica al día siguiente a O'Donojú.[1]

El 16 se trasladan O'Donojú e Iturbide a la villa de Tacubaya, hacia el poniente de la ciudad y más próxima, en donde los esperan la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, el Cabildo eclesiástico, jueces y empleados de gobierno, y una multitud con las personas prominentes de la capital.

El 20 de septiembre, registra Bustamante, se recibe de Tacubaya un papel en el que se anuncia el retiro de las tropas del país de los lugares que ocupan, y que el 22 "saldrán los negros y mulatos —que se habían mantenido fieles a España— para tierra caliente". El 21 anota que han pasado a Tacubaya "varios *Títulos de Castilla* y personas que sirven en el ejército imperial, y (que) diariamente recibe el primer jefe del ejército las visitas y cumplidos de las principales personas de México; hallándose a su lado los condes de Regla, de Peñasco y del Valle, los marqueses de San Miguel de Aguayo, de Salvatierra, de Uluapa; los dos hijos del marqués de Guardiola, los mayorazgos de Cadena, de la Higuera o Cervantez y de Villanil".[2]

El 22 se reúne, presidida por Iturbide, una numerosa junta de quienes formarán el gobierno. "Al ver esta junta —escribe Bustamante—, creeríamos que Iturbide era extranjero en este país, y desconocía a sus habitantes, y el mérito de los que podrían salvarlo... Algunos de estos vocales, dos meses antes eran nuestros enemigos declarados; estaban obrando juntamente con los satélites de Novella; proclamaban la integridad de las Españas...".[3]

[1] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, tomo v, pp. 304-305.
[2] *Ibid.*, p. 311.
[3] *Ibid.*, p. 312.

A las reuniones del 22 y 25 de septiembre en Tacubaya asisten los designados por Iturbide para integrar la Junta Provisional de Gobierno que estaba prevista en el Tratado de Córdoba. Alamán consigna que esas designaciones, que *no fueron arbitrarias*, las objetó Bermúdez Zozaya, proponiendo que las hiciesen las diputaciones provinciales, lo que le daría "cierto aire de popularidad" y "la ventaja de poder contar con una junta más dócil". Iturbide no aceptó la sugerencia, lo que lo distanció temporalmente de Bermúdez Zozaya.[4]

En la primera reunión de la Junta, el 22 de septiembre, se nombraron cuatro comisiones: para formar los reglamentos de la Junta y de la Regencia, fijando su carácter y atribuciones, con nuestro conocido el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, Miguel Guridi y Alcocer, Juan Francisco Azcárate y Juan José Espinosa de los Monteros. Las tres comisiones restantes conocerían del reconocimiento y pago de la deuda pública, de los premios y distinciones militares, y del paso y cumplimiento de las cédulas, despachos, órdenes, y empleos, que trajese O'Donojú o llegasen de Madrid. A Manuel de la Bárcena, arcediano de Valladolid de Michoacán, a Sánchez de Tagle y a Guridi y Alcocer se encargó de formar el manifiesto de la Junta al imperio.

En la segunda sesión preparatoria de la Junta, el, 25 de septiembre, se aprobó:

1a) Que la Junta tendrá exclusivamente el ejercicio de la representación nacional hasta la reunión de las Cortes.

2a) Que la Junta Provisional gubernativa tendrá por este atributo de gubernativa, todas las facultades que están declaradas a las Cortes, por la Constitución política de la monarquía española, en todo lo que no repugne a los Tratados de la Villa de Córdoba.

3a) Que las decisiones de la Junta por su atributo legislativo, serán las que declaran dichos Tratados, entendiéndose provisionales, para la reforma que el Congreso de la Nación estime conveniente.

4a) Que la Regencia tendrá las facultades que obtuvo la Regencia de España por el último de los tres reglamentos que se formaron en lo que no repugne a los Tratados de Córdoba.

5a) Que la Junta se denominará Soberana y tendrá el tratamiento de Majestad.

6a) Que para la división de comisiones permanentes se adapte la propuesta de la comisión, variando según la pluralidad de votos en la tercera clase de denominación de este modo. Primera: De Relaciones Interiores. Segunda: De Exteriores. Tercera: De Justicia y lo Eclesiástico. Cuarta: De Hacienda. Quinta: de Guerra.

7a) Que las comisiones permanentes, o fijas en dichos ramos, las distribuirá el primer Jefe.

8a) Que el juramento de los vocales de la Junta, se haga bajo esta fórmula: ¿Juráis observar las garantías proclamadas en Iguala por el Ejército del Imperio Mexicano con su primer Jefe: los Tratados celebrados en la Villa de Córdoba referentes al Plan del mismo Iguala, en que se hizo el pronunciamiento de la Independencia del Imperio, y desempeñar fielmente en servicio de la Nación vuestro encargo de vocal de la suprema Junta provisional gubernativa, que se ha establecido en consecuencia de lo ordenado en los mismos Tratados? —Sí juro— Si así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, os lo demande.[5]

[4] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo v, p. 308.

[5] Isidro A. Montiel y Duarte, *Derecho público mexicano*, México, 1871, tomo i, p. 65.

Los individuos de la Junta al aprobar que ella "tendrá exclusivamente el ejercicio de la representación nacional", como consecuencia no prevista en Iguala ni en Córdoba establecen que serán suyas por su "atributo de gubernativa todas las facultades que están declaradas a las Cortes, por la Constitución política de la monarquía española", en lo que no repugne al Tratado de Córdoba. Mas en el artículo 3 se llega más lejos, al aprobar la Junta por sí misma que "se denominará Soberana y tendrá el tratamiento de Majestad".

Iturbide en Liorna escribirá que para integrar la Junta quiso, "sobre todo en su totalidad, llamar a aquellos hombres de todos los partidos que disfrutaban, cada uno en el suyo, el mejor concepto, único medio en estos casos extraordinarios de consultar la opinión del pueblo".[6] Si bien hay entre ellos partidarios de la independencia no figura el "partido insurgente". La intención declarada en sí es loable, pero los individuos de la Junta, a los que execra Bustamante en general, deparan a Iturbide la primera sorpresa al adoptar modelos constitucionales de España.

En la ciudad se hacen los preparativos para la entrada del ejército el 27 de septiembre. O'Donojú se anticipa, recibiéndosele solemnemente el día 26. El 25 había salido Ruiz de Apodaca a Veracruz para embarcarse en el navío *Asia*, el mismo en el que había llegado O'Donojú, "acompañándole las virtudes inseparables de su honrado ánimo... su compasión al pueblo mexicano, su moderación... No deja tras de sí los torrentes de sangre y lágrimas que derramaron sus predecesores..." escribiría Bustamante.[7]

La entrada triunfal de Iturbide a México el 27 de septiembre —día en el que cumple 38 años de edad— la narran los papeles contemporáneos y las historias. El arzobispo de México, doctor Pedro Fonte, lo espera de pontifical y bajo palio en la puerta de la catedral, en la que se oficia un *Te Deum*.

La independencia estaba consumada. "¿Que no fuera dado a los Hidalgos, Allendes y Morelos, disfrutar del espectáculo...? Ellos honran la patria en sus suplicios, como hoy la honra Iturbide a la cabeza de estas huestes vencedoras", escribe Bustamante, el antiguo diputado en el Congreso de Chilpancingo, que pronto sería uno de sus más irreductibles impugnadores.[8]

El mismo día 27 corre la proclama de Iturbide a la nación, "digna del caudillo y del pueblo a quien se dirigía", escribirá más de 60 años después Julio Zárate: "...ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad, y toqué los diversos resortes para que todo americano manifestase su opinión escondida —declara Iturbide—, porque en unos se disipó el temor que los contenía, en otros se moderó la malicia de sus juicios, y en todos se consolidaron las ideas".[9]

* * *

El 28 se reúnen en el palacio virreinal los individuos de la Junta Gubernativa. Iturbide se presenta y se dirige a ella: "El pueblo mexicano, reintegrado a merced de sus esfuerzos heroicos en la plenitud de sus derechos naturales, sacude hoy el polvo de su abatimiento", y entra a ser nación independiente. Será la Junta, dice, la que establezca "las bases primordiales sobre las

[6] *Manifiesto de Liorna*, p. 246.

[7] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 314-315.

[8] *Ibid.*, p. 316.

[9] Julio Zárate, *op. cit.*, pp. 751-752; *Gaceta Imperial de México*, 4 de octubre de 1821.

que ha de levantarse el imperio más grande y respetable". Nombrar la regencia y "acordar el modo con que ha de convocarse el cuerpo de diputados que dicte las leyes constitutivas del imperio y ejercer las potestades legislativas mientras se instala el congreso nacional", son sus funciones. "Una vez derrocado el trono de la tiranía, a vosotros toca substituir el de la razón y humanidad". En su breve ejercicio, "nada omitiréis para conservar el orden, fomentar el espíritu público, borrar las rutinas tortuosas del despotismo, y demostrar las ventajas de un gobierno que se circunscribe en la actividad a la esfera de lo justo".[10]

El lenguaje de Iturbide se altera. El 24 de febrero, siete meses antes, la América septentrional había vivido, dijo, durante tres siglos "bajo la tutela de la Nación más católica y piadosa, heroica y magnánima", que "la educó y engrandeció". El 28 de septiembre se derroca el trono de la tiranía, que se va a sustituir por el de la razón y la humanidad, después de recorrer "el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad". Las alteraciones verbales las hará suyas la Junta. Sólo en diálogos privados con el *común de los socios*, que mencionara a Negrete, podía explicarse la mudanza oratoria de Iturbide, que por lo demás no dejaría de oscilar en el futuro.

Ese mismo día 28 los individuos de la ya Soberana Junta Provisional Gubernativa firman el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, reiterando el lenguaje del discurso de Iturbide. Su texto es breve:

> La nación mejicana, que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido.
>
> Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables.
>
> Restituida, pues, esta parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el Autor de la naturaleza y reconocen por inenajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la junta suprema del imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión, que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieron los tratados: que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas: que va a constituirse con arreglo a las bases que en el plan de Iguala y tratados de Córdoba, estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y, en fin, que sostendrá a todo trance, y con sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos (si fuere necesario), esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mejicana.

Alamán comenta el acta, "la cual se funda toda en un error vulgar... que no hubiera debido tener cabida entre hombres de ilustración... Tal es el dar por supuesto que la nación me-

[10] *Colección de órdenes y decretos de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y de los Soberanos Congresos Generales de la Nación Mexicana*, segunda edición, México, 1829, tomo I, pp. 3-4.

xicana que había existido antes de la conquista, salía al cabo de trescientos años de la opresión en que había vivido... siendo muy extraño que O'Donojú, Bárcena y Monteagudo y demás españoles vocales de la junta diesen su voto de aprobación a un documento por el que se declaraba a la nación española opresora de la que había sido creada por ella... No es menos notable —agrega— que Iturbide en este documento, que firmó el primero, hubiese olvidado tan completamente las ideas verdaderas y exactas que manifestó en la proclama de Iguala".[11]

Si O'Donojú aprobó o no el documento, no consta, pues no lo firmó, agregándose simplemente su nombre en la publicación de él.

Cuando la ciudad conoce el texto del Acta, y ella corre por el país, se leen los nombres de los individuos de la Soberana Junta que la firman. La lista de ellos, con sus títulos, grados y empleos o cargos es ésta:

> Illmo. Sr. D. Antonio Joaquín Pérez, Obispo de la Puebla de los Ángeles, el Exmo. D. Juan de O'Donojú, Teniente General de los Ejércitos Nacionales, Gran Cruz de las Órdenes de Carlos III y San Hermenegildo, el Dr. D. Manuel de la Bárcena, Arcediano de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid y gobernador de aquel Obispado, y los señores Dr. D. Matías Monteagudo, Rector de la Universidad Nacional, Canónigo de esta Santa Iglesia Metropolitana y Prepósito del Oratorio de San Felipe Neri, D. José Isidro Yáñez, Oidor de esta Audiencia Nacional, D. Juan Francisco Azcárate, Abogado de dicha Audiencia y Síndico segundo del Ayuntamiento Constitucional, D. Juan José Espinosa de los Monteros, Abogado de la misma Audiencia Nacional y Agente Fiscal de la Civil en ella, D. José María Fagoaga, Magistrado honorario de la misma e individuo de la Junta provisional, Dr. D. Miguel Guridi y Alcocer, individuo de la misma Diputación y Cura del Sagrario de esta Santa Iglesia Metropolitana, D. Miguel Cervantes y Velasco, Marqués de Salvatierra y Caballero Maestrante de Ronda, D. Manuel de Heras Soto, Conde de Casa de Heras, Teniente Coronel retirado, D. Juan Bautista Lobo, Regidor antiguo de la Ciudad de Veracruz, e individuo de la Diputación Provincial, D. Francisco Manuel Sánchez Tagle, Regidor del Ayuntamiento y secretario de la Academia de San Carlos de esta Capital, D. Antonio Gama, Abogado de la Audiencia y colegial mayor de Santa María de Todos Santos, D. José Manuel Sartorio, Clérigo Presbítero de este Arzobispado, Exmo. Sr. D. Manuel Velázquez de León, Intendente honorario de Provincia, Tesorero de Bulas y electo Consejero de Estado en la Península, D. Manuel Montes Argüelles, D. Manuel Sotarriba, Brigadier de los Ejércitos Nacionales, Coronel del regimiento de la Corona y Caballero de la Orden de San Hermenegildo, D. Mariano Zardaneta, Marqués de San Juan de Rayas, Caballero de la Orden de Carlos III y vocal de la Junta de Censura, D. Ignacio García Illueca, Abogado de esta Audiencia, Sargento mayor retirado y suplente de la Diputación provincial, D. José María Bustamante, Teniente Coronel retirado, D. José María Cervantes y Padilla, Coronel retirado, D. José Manuel Velázquez de la Cadena, Capitán retirado, Señor de la Villa de Yecla y Regidor de este Ayuntamiento, D. Juan Horbegoso, Coronel de los Ejércitos Nacionales, D. Nicolás Campero, Teniente Coronel retirado, D. Pedro José Romero de Terreros, Conde de Xala y Regla, Marqués de San Cristóbal y de Villahermosa de Alfaro, Gentil hombre de Cámara con entrada y Capitán de Alabarderos, D. José María Echevers Valdivieso, Vidal de Lorea, D. Manuel Martínez Mansilla, Oidor de esta Audiencia, D. Juan Bautista Raz y Guzmán, Abogado y Agente

[11] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 352.

Fiscal de lo Civil en ella, D. José María Jáuregui, Abogado de la misma Audiencia, D. Anastasio Bustamante, Coronel del Regimiento de San Luis, y Dr. D. Isidro Ignacio Icaza. Lista que consta en el acta de la sesión de la Junta de 28 de septiembre.[12]

Entre los 33 nombres, siete son de españoles y uno de venezolano. Doce son funcionarios, 11 abogados, 11 militares, ocho eclesiásticos, seis títulos, y dos hacendados —sin títulos de nobleza o profesión. Los títulos son también hacendados o mineros. Algunos son militares retirados. De los 11 nombres propuestos por Iturbide a Ruiz de Apodaca en su carta del 24 de febrero, ocho vocales propietarios y tres suplentes, excepto los de Miguel Bataller y Juan de Juanmartiñena, los nueve restantes firman el Acta de Independencia.

Los integrantes de la Junta que, con mayor o menor jerarquía, participaban en el gobierno colonial, pasan a ejercer el todo de la autoridad pública a nombre de una nación independiente. En la nueva situación su lenguaje también cambia. El manifiesto de la Junta a la nación se firma el 13 de octubre por su presidente, el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, y los dos secretarios de ella, Espinosa de los Monteros y Suárez Pereda. En las primeras palabras del manifiesto de nuevo se mudan formalmente las de la proclama del 24 de febrero desde Iguala. "Después de la prolongada noche de tres siglos, en que ha yacido la América sumergida entre sombras, rayó por fin la aurora de la felicidad...". Los fundamentos de la independencia son para la Junta el geográfico y el de la mayoría de edad. "Las dos Españas, antigua y nueva, a lo que es lo mismo Castilla y México, que han llevado esos nombres, pertenecen a distintas regiones de la tierra... y a opuestas zonas de la esfera, divisiones que fundan la justicia de su separación. Si han estado unidas como Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca, y han permanecido así por largo tiempo, este mismo, dando a la última sus creces, las ha precisado a reñir y a dividirse, como aquellos gemelos hicieron lo primero en el seno materno, y después lo segundo en sus descendencias". El aumento de la población es el paso de la juventud a la mayoría de edad, y exige la separación; "pero ha tiempo que se niega el consentimiento para su emancipación... las fuerzas que denominan esa edad, se encuentran en ella; ora se hable de las espirituales de las luces; ora de las corporales de las armas y población". Así, la Nueva España se emancipa, y sustrae "del yugo que la embarazaba su prosperidad poniendo a su labor, industria, comercio y universalmente a todos los giros, cuantos límites y trabas los enervasen, para que preponderara la utilidad del país que la dominaba, o más bien para que todo cediese en ella absolutamente". Una extremada mesura alude a los agravios americanos, como aquellos que uno de los individuos de la Junta, Guridi y Alcocer, hiciera valer en términos acusatorios como diputado en las Cortes de Cádiz.[13]

La Junta se refiere a los principios de gobierno "que se ha adoptado conformes al plan de Iguala y tratados de Córdoba... El gobierno representativo con preferencia al absoluto, la monarquía moderada, y el sistema constitucional que ya conocemos, son las máximas fundamen-

[12] *Diario de las sesiones de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano instalada según previenen el Plan de Iguala y Tratados de la Villa de Córdoba*, México, 1821, pp. 6-8.

[13] *Manifiesto de la Junta Provisional Gubernativa, al público del imperio*, México, 1821. Y en Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, *Continuación del cuadro histórico de la revolución mexicana*, México, 1953, tomo I, pp. 8-11.

tales, la piedra angular de nuestro edificio. No hay que temer las ideas que las contrasten, ni nada cuanto huela a las que no sufren las luces del día. Son puramente liberales las que nos animan, y se observarán, hasta (que se reúnan) las Cortes, la Constitución y la legislación españolas, en lo que no pugnen con las particulares circunstancias del país".

Por vez primera se menciona expresamente la Constitución española. En el artículo 12 del Tratado de Córdoba únicamente se habló de la *legislación vigente*. La Junta avanza con cautela verbal y declara que la monarquía moderada será la de un gobierno representativo, animada la Junta, como también declara, por ideas puramente liberales. ¿Cuál es el sentido de sus expresiones? En verdad no es el que Iturbide le explicaba a Ruiz de Apodaca en su carta privada del 24 de febrero, sobre la posible disposición de Fernando VII para trasladarse a México "en el goce de muchas preeminencias justas y razonables de que ha sido despejado...".

Cuatro días antes, el 9 de octubre, la Junta dictó un decreto, ordenando "que desde luego se proceda a la publicación del último reglamento de la libertad de imprenta", el de 22 de octubre de 1820. El reglamento se adiciona el 13 de diciembre, considerando los ataques a las bases del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba.[14]

* * *

La primera institución del gobierno independiente no puede evadirse al proceso de reforma del proyecto que la crea, reforma impuesta por la revolución liberal contra los propósitos mismos que lo generaron.

El manifiesto de la Junta lo califica Alamán, que no puede ignorar el significado de lo que ocurre, de "indigno de la ocasión, lleno de principios falsos, de ideas triviales, en lenguaje vulgar, y por la repetición de algunas comparaciones de que hizo el obispo de Puebla en su discurso, cuando hizo la jura de la independencia en aquella ciudad, parece salido de su pluma".[15]

En la consumación de la independencia se suplanta el proyecto insurgente republicano del Congreso de Anáhuac, y la beligerancia entre el antiguo régimen y la revolución se desplaza hacia una pugna interna y confusa, en la que participan los hombres escogidos por Iturbide para integrar la Junta Provisional Gubernativa. La situación general se plantea en el *Estado actual de cosas*, firmado por *V.G.* en ese año de 1821, que cita con oportuna agudeza Jesús Reyes Heroles. El folletista menciona a los europeos y españoles "resueltos a ser independientes y habiendo tomado las armas bajo juramento". V.G. advierte al gobierno virreinal, ya constitucional, que los eclesiásticos, aun obispos, favorecen la independencia, directa o indirectamente, al igual que las castas que militan en el ejército real —excluidas de la ciudadanía—, y las clases de la sociedad que no alcanzan a ver los beneficios de la Constitución. Por otra parte, señala V.G., los principios liberales en España obligan al reconocimiento de los derechos americanos a la emancipación. V.G. parece bien enterado de ciertos hechos y más malicioso en su argumentación de lo que pueda suponerse a primera vista. "Pero según V.G. —se pregunta Reyes Heroles—, esos principios, ¿obligarán a la América a seguirlos? El liberalismo que

[14] *Colección de órdenes y decretos de la soberana junta...*, pp. 13-14, 44-48.

[15] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 352-353.

le sirve (a V.G.) para argumentar por la independencia, ¿le servirá para su gobierno y régimen propio? V.G. reflejo ya de la inspiración con que consumamos la independencia, deja, en sus contradicciones y sujeción a las circunstancias, sin contestación la anterior pregunta. Es también quizá más liberal —reflexiona Reyes Heroles—, sostener la conveniencia de que la nación establezca el sistema de gobierno que más le acomode", como opina V.G.[16]

La independencia en sí misma tiene prelación, pero una prelación imperiosa y ambigua, que en ese año de 1821 se acentúa en su apremio. Es el punto de unión emotivo y de los intereses de los criollos, y aun de los españoles en México, que asumen el poder, pero no es el de la conciliación de las ideas.

Súbitamente, en sólo siete meses, el "pacificado" reino de la Nueva España logra lo que la Tierra Firme, en donde batalla Simón Bolívar, no ha alcanzado en diez años. En un documento se declara la consumación de la independencia de un territorio de 81 144 leguas cuadradas —4 146 463 km^2, según V. Alessio Robles—, que se extiende de los 16 a los 38 grados de latitud norte, con una población de 5 760 000 habitantes en el cálculo de Humboldt. De la población, más de 1 000 000 son criollos, 75 000 españoles, 2 300 000 son indios, y 2 385 000 forman las "otras castas". Las cifras de Humboldt en sus *Tablas geográficas del Reino de Nueva España* —que él entregó al virrey Iturrigaray en 1804, y que se dieron a conocer parcialmente en el *Diario de México*—, importan, aun sin rectificaciones o con las del *Ensayo* de Humboldt publicado en francés en 1811, y las posteriores, por el conocimiento que se tuvo de ellas en México y la autoridad de su autor. En sus inexactitudes reflejan lo que México era o creía ser en la hora de consumar su independencia.[17]

La minoría activa, pero no todos los que suman el 1 075 000 de criollos y españoles, informará, decide y decidirá la opinión de la mayoría, y sobre la situación de más de 4 000 000 de indios y "otras castas".

Una situación análoga la expone Bolívar sin eufemismos ante el Congreso de Angostura el día de su instalación el 15 de febrero de 1819. Menciona la dispersión del Imperio Romano, cuando de cada parte se "formó entonces una nación independiente conforme a su situación o a sus intereses; pero con la diferencia de que aquellos miembros volvían a restaurar sus primeras asociaciones. Nosotros —dice Bolívar— ni aún conservamos los vestigios de lo que fue en otro tiempo: no somos Europeos, no somos Indios, sino una especie media entre los Aborígenes y los Españoles, Americanos por nacimiento y Europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores; así nuestro caso es el más extraordinario y complicado". El discurso de Bolívar continúa: "no solamente se nos había robado la libertad sino también la tiranía activa y doméstica".[18]

En la singular consumación de nuestra independencia, México se debate entre el antiguo régimen y la revolución, y un grupo de hombres beneficiados por la donación, no por la toma del poder, en el desconcierto de las ideas debe decidir el futuro.

[16] Jesús Reyes Heroles, *El liberalismo mexicano*, tomo I; *Los orígenes*, México, 1957, pp. 114-118.

[17] Alejandro de Humboldt, *Tablas geográficas políticas del reino de Nueva España y correspondencia mexicana*, México, 1969, pp. 27, 45, 50.

[18] Simón Bolívar, *op. cit.*, tomo III, pp. 676-677.

2

LAS ACTAS DE INDEPENDENCIA
MÉXICO-LIMA

La polémica sobre Iturbide no ha cuestionado el título de *Acta de Independencia* al documento de 28 de septiembre de 1821. Ya en las primeras páginas la consideramos como el documento que verifica su consumación, "empresa memorable —se dice en él— que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables". La insurgencia es más que ignorada. Siete años antes, el 6 de noviembre de 1813, se firmó en Chilpancingo el *Acta solemne de independencia de la América septentrional.* Su texto es el siguiente:

> El Congreso de Anáhuac legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América septentrional por las provincias de ella: declara solemnemente a presencia del Señor Dios árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita según los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del Trono español: que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y paz, y establecer alianzas con los Monarcas y repúblicas del antiguo continente, no menos que para celebrar concordatos con el Sumo Pontífice romano, para el régimen de la Iglesia católica, apostólica romana, y mandar embajadores y cónsules: que no profesa ni reconoce otra Religión más de la católica, ni permitirá, ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna: que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas, y conservación de los cuerpos regulares: declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya sea protegiendo a los europeos opresores, de obra, palabra o por escrito; ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra hasta que su independencia sea reconocida por las naciones extranjeras, reservándose el Congreso presentar a ellas por medio de una nota ministerial, que circulará por todos los gabinetes el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolución, reconocida ya por la Europa misma.- Dado en el palacio nacional de Chilpancingo a seis días del mes de noviembre de 1813 años.- Lic. Andrés Quintana, vicepresidente.- Lic. Ignacio Rayón.- Lic. José Manuel de Herrera.- Lic. Carlos María de Bustamante.- Dr. José Sixto Verduzco.- José María Liceaga.- Lic. Cornelio Ortiz de Zárate, secretario.

El 22 de octubre de 1814, el Congreso promulgó el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, rubricado ya por 14 diputados.

En el Acta de Independencia se declara que la América septentrional recobra el *ejercicio de su soberanía usurpado,* y en los artículos 2 y 3 del Decreto Constitucional de 24 de octubre

del año 1814, que la "facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberanía", y que ésta es "por su naturaleza imprescriptible, inenajenable, e indivisible". El artículo 5 establece que "la soberanía reside originalmente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la constitución". Los ciudadanos, "unidos voluntariamente en sociedad... tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más convenga, alterarlo, mudarlo, modificarlo, y abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo requiera", declaró el artículo 4.

La filiación de los textos nos lleva, ya se señaló en la Parte primera, a la Constitución francesa de 1793, y a su Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos que en su artículo 25 declaró: "La soberanía reside en el pueblo. Es una e indivisible imprescriptible e inenajenable", y en el 27: "El pueblo tiene el derecho de revisar, alterar y reformar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes las generaciones futuras".

En la Constitución mexicana de 1814 se iba aún más lejos que en la francesa, que únicamente reconocía el derecho y el deber a la insurrección *cuando el gobierno viola los derechos del pueblo* (art. 35 de su Declaración de Derechos). Como lo verifica Remolina Roqueñí, el artículo 4 de Apatzingán se inspira directamente en el 8 de la Constitución de Massachusetts de 1780.

El examen más acucioso hasta ahora de las fuentes institucionales de la Constitución insurgente promulgada el 24 de octubre de 1814, lo ha realizado Felipe Remolina Roqueñí en su obra *La Constitución de Apatzingán*, cuyo capítulo cuarto es de imprescindible consulta.[19]

Atendamos aquí al Acta de Independencia de 28 de septiembre de 1821, que suplanta la del 6 de noviembre de 1813. El documento de 1821 no se inspira, no podía inspirarse por su propio origen, en el de 1813. Incluso, en la suplantación y eludiendo negarlo, simplemente lo ignora. No obstante, en el proceso por el que la revolución obliga y condiciona los términos de la reforma del antiguo régimen y su sentido —y el proyecto de 1820 llega a septiembre de 1821 a través de obligadas mudanzas—, se impone la revolución y los informa al consumarse la independencia. No es dudoso en manera alguna que los autores del acta de 1821 deliberadamente evitan toda coincidencia verbal con la de 1813 y el Decreto Constitucional de 1814, de los que fueron adversarios. Mas el hecho solo de declarar una independencia absoluta obliga a proclamaciones que no se pueden evitar o siquiera disimular. Un simple cotejo de textos es ilustrativo.

*

Acta de 1821

"Restituida, pues, esta parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y, reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra...".

"La Nación Mexicana está en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su libertad y sus designios..." "...con arreglo a las bases que en el plan de Iguala y tratados de Córdoba estableció sabiamente el Jefe del Ejército Imperial...".

[19] Felipe Remolina Roqueñí, *La Constitución de Apatzingán*, Morelia, 1965, pp. 201-225.

Se "declara solemnemente por medio de Junta Suprema de la Nación, que (la mexicana) es Nación Soberana e independiente de la antigua España...".

*

Acta de 1813

La América Septentrional "por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado...".

"que es árbitro (la América Septentrional) para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior...".

El Congreso de Anáhuac fijó la forma de gobierno "mientras la nación, libre de los enemigos..., dicta su constitución" —Preámbulo del *Decreto Constitucional* de 20 de octubre de 1814.

"El Congreso de Anáhuac... declara solemnemente que queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del Trono español...".

* * *

La fórmula final de la declaración de independencia en México, y en América, es una, cualquiera que sean los designios ideológicos de sus autores. En 1813 se dijo en Chilpancingo que la nación *ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado*, y en 1821 en México que está *restituida la nación al ejercicio de cuantos derechos le concedió el Autor de la naturaleza*, para legitimar la proclamación de su independencia y la potestad de constituirse. La sinonimia no puede ser más exacta. Sólo en el ámbito de la revolución se puede declarar la independencia, y si los propósitos de ésta, de sus autores, son antirrevolucionarios, aun expresamente antiliberales, no es posible eludir esa primaria subversión del fundamento del antiguo régimen, el de la titularidad de la soberanía. En 1821, al pretenderse ignorar y suplantar las declaraciones de 1813 y 1814, se incurre en una reiteración de ella, aunque evitando coincidir en las expresiones verbales.

Es cierto que en 1821 se limitan las facultades de constituir a la nación sujetándola a las bases del Plan de Iguala y del Tratado de Córdoba, que "estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías". Tan sabiamente, que en el Tratado de Córdoba elimina Iturbide la condición impuesta para que el designado, de no ser de la dinastía española pertenezca a "otra reinante... para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados de la ambición". En el tratado, ante la no aceptación de la Casa de España o el de Luca, se previene que será monarca "el que las Cortes del imperio designaren". ¿La reforma fue sugestión del capcioso don Antonio Joaquín Pérez? El significado no escapó a O'Donojú, como consta de su comunicación de 31 de agosto al secretario de Estado y del Despacho de Ultramar.

Mas la limitación plantea en la misma Acta de Independencia de 1821 un conflicto inicial entre *el ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza* a la nación "en la libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad", y esas bases que *estableció sabiamente el primer jefe del ejército.* Los autores del acta no pueden ignorarlo, aunque no lo puedan evitar y resolver. Si Iturbide hubiese atendido la opinión de Bermúdez Zozaya, la

Junta designada por las diputaciones provinciales hubiese satisfecho una mínima ficción representativa para aceptar el Acta de Iguala y el Tratado de Córdoba.

No obstante, los antiliberales adelantan por el camino de las reformas, impuesto por el hecho de la revolución insurgente que tratan de eludir, y las limitaciones establecidas en Iguala y Córdoba no pueden derogar la eminencia de la titularidad de la soberanía en la nación.

El Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba están sujetos en México a la condición resolutoria de lo que decida la nación en el ejercicio de *cuantos derechos le concedió el Autor de la naturaleza.* Y en cuanto a la familia real de España, llamada al trono, a la suspensiva de su aprobación por las Cortes de la península.

Carlos María de Bustamante, como diputado electo al primer Congreso Constituyente, firma el 23 de febrero de 1822 una protesta por las limitaciones y juramento impuestos en Iguala y Córdoba, "...cubriéndome —dice— con la égida de la inviolabilidad la constitución de Cádiz que nos rige concede a sus Diputados en sus personas por sus opiniones políticas. Se me manda que constituya a mi Nación del modo que más convenga a su felicidad y bienestar futuro, y al mismo tiempo que se me concede esta amplia facultad se me restringe enormemente ciñéndome al Plan de Iguala. Yo no puedo decir ni calificar —expresa— que las bases del Plan de Iguala son buenas o malas. Para hacerlo debo meditarlo en un Congreso de sabios auxiliándome de sus luces, y, mientras lo hago no puedo jurar guiarme por ellas. Pero si he de constituir por mi parte a mi Nación, y por la cualidad de Diputado Constituyente debo darle tales máximas y reglas... déjeseme a lo menos con plena libertad de hacerlo como me parezca; no se me trabe y ligue por preceptos anticipados; menos se me comprometa a obrar por la sagrada religión (bajo) juramento... déjeseme corresponder a mis sentimientos religiosos y patrióticos... y si porque así lo suplico, señor, mereciese vuestro desagrado, súplalo antes que incurrir en la nota de perjuro". Su conciencia le dicta: "jura delante de la Divinidad dar a la Patria la constitución política que más cuadre a su Religión, a sus intereses, a su localidad, y a sus relaciones políticas con las Naciones del antiguo y nuevo continente, consultando en tus juicios a lo que dictare tu conciencia y tu honor. Ésta es mi resolución, éste mi juramento. ¡Plegue a Dios que por ella no vibre en mi cabeza un rayo!".[20] El notario, escribano público, Ignacio Montes de Oca protocolizó la "Protesta legal" que Bustamante hizo ante él en la misma fecha y con el mismo sentido del documento anterior. En el número 190, de 4 de julio de 1823 del *Diario Liberal México,* Bustamante reproduciría el testimonio notarial.

Bustamante cuida que su documento sea una expresión personal, no invitando a los restantes diputados a solidarizarse con él. Sin embargo, concluye no aceptando más juramento que el dictado por su conciencia, lo que plantea esa cuestión general a todos.

* * *

Dijimos que la fórmula final de la declaración de la independencia es una en América, cualquiera que sea el órgano o los individuos que la hagan. Contemporánea a la de 1821 en Mé-

[20] Carlos María de Bustamante, Protesta ante el Congreso por las limitaciones al ejercicio constituyente, 23 de febrero de 1822. Manuscrito en la Colección Hernández y Dávalos de la Colección Latinoamericana de la Universidad de Texas.

xico, el 15 de julio de ese año se firmó la del Perú. Ocupada Lima por el general San Martín el día 10, después de evacuarla el general La Serna, el 14 se dirigió San Martín al Ayuntamiento de la ciudad pidiéndole se convocara a "una junta de vecinos honrados, que representando al común de los habitantes de esta Capital, expresen si la opinión general se halla decidida por la independencia". El mismo día contestó el Ayuntamiento que está eligiendo a las personas que deben reunirse el día 25 para votar por la independencia. El acta del 25 es el más lacónico de los documentos americanos. Reunidos el Ayuntamiento, el arzobispo de Lima, los prelados de los conventos, los títulos de Castilla, y "varios vecinos" de la capital, a "dar cumplimiento a lo prevenido por el oficio del Exmo. Señor General en jefe del Ejército Libertador del Perú", al que se dio lectura, aprobaron: "Que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquiera otra extranjera; y que para que se proceda a su sanción por medio del correspondiente juramento se conteste con copia certificada de esta Acta al mismo Sr. Exmo...".[21]

El 3 de agosto San Martín expide un decreto en el que explica: "Al encargarme de la importante empresa de la libertad de este país no tuve otro móvil que mis deseos de adelantar la sagrada causa de la América... Desde mi llegada a Pisco anuncié que por el imperio de las circunstancias me hallaba revestido de la suprema autoridad...", la que seguirá ejerciendo en tanto deba combatir al ejército español. La experiencia de diez años de guerra en América, dice, "me ha hecho conocer los males que ha ocasionado la convocación intempestiva de congresos...; primero es asegurar la independencia, después se pensará en establecer la libertad sólidamente". Por sí mismo, en el artículo 1 declara que están "unidos desde hoy en mi persona el mando supremo político y militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de *Protector*".[22]

Mitre lo juzga como gobernante: "San Martín, Protector del Perú, no se agranda, y se muestra inferior a su misión", no porque se iniciara asumiendo todos los poderes sino porque San Martín no es un "gobernante". No obstante la "obra reformada del Perú que lleva el nombre de San Martín fue grande y fecunda", dirá Mitre. Mas éste no es nuestro tema, y menos aún la polémica sobre él.

El 8 de octubre promulga San Martín el Estatuto Provisional de su gobierno. "Yo habría podido encarecer la liberalidad de mis principios en el estatuto provisorio, haciendo magníficas declaraciones sobre los derechos del pueblo, y aumentando la lista de los funcionarios públicos para dar un aparato de mayor popularidad a las formas actuales. Pero convencido de que la sobreabundancia de las máximas laudables, no es el mejor principio para establecerlas, me he limitado a las ideas prácticas que pueden y deben realizarse... yo administraré el poder directivo del estado, cuyas atribuciones sin ser las mismas, son análogas a las del poder legislativo y ejecutivo. Pero me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su salvaguardia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo...". El artículo 1 de la sección octava del estatuto sanciona los derechos ciudadanos para "conservar y defender su honor, su libertad, su seguridad, su propiedad y su existencia", de los que sólo pueden ser privados "por el pronunciamiento de autoridad competente, dada

[21] *Gaceta del Gobierno de Lima Independiente*, 16 de julio de 1821, edición facsimilar, Buenos Aires, 1950.
[22] *Ibid.*, 11 de agosto de 1821.

conforme a las leyes". El artículo 2 de la sección última declaró: "El presente estatuto regirá hasta que se declare la independencia en todo el territorio del Perú, en cuyo caso se convocará inmediatamente un Congreso General que establezca la constitución permanente y forma de gobierno que regirá en el Estado".[23]

El monarquismo, no manifestado públicamente, y el autoritarismo expreso de San Martín, eluden la definición republicana, pero no la convocatoria de un Congreso Constituyente.

No obstante su inalterable convicción sobre la necesidad de una forma monárquica, y lo que declara en el preámbulo del Estatuto Provisional de 8 de octubre, rehusándose a hacer "magníficas declaraciones sobre los derechos del pueblo", el 28 de agosto se había jurado públicamente la independencia del Perú en la plaza mayor de Lima. San Martín proclamó ante la multitud: "El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, y por la justicia de su causa que Dios defiende".

La fórmula final y única de la legitimidad en toda declaración de independencia se reitera, aunque atenuada verbalmente.

* * *

Más monarquista que antiliberal, San Martín se va aislando ante la emancipación republicana en el continente del sur. En ese año de 1821 los proyectos monárquicos de Buenos Aires están relegados en el descrédito, y Rivadavia mismo inicia la consolidación de la república, y la frustración federal.

A Lima llegan las noticias de Colombia. La *Gaceta Extraordinaria* del 10 de noviembre publica la de la victoria de Bolívar en Carabobo, y la declaración del Congreso de Cúcuta: "ha dejado de existir el único ejército en que el enemigo tenía fincadas sus únicas esperanzas en Venezuela", con lo que, dice el Congreso, se "ha consolidado igualmente la existencia de esta nueva república".

El monarquismo recibe un nuevo aliento. La *Gaceta Extraordinaria* del 22 de noviembre encabeza su noticia: "América Septentrional —El Imperio Mexicano Reconocido.— Tratados celebrados en la Villa de Córdoba". Se transcriben el Tratado de Córdoba y las proclamaciones de Iturbide y O'Donojú de 27 de septiembre. La carta de Bolívar sobre el suceso, de 16 de noviembre, a que ya nos referimos, la recibirá San Martín con posterioridad a las noticias de México.

El 28 de noviembre y en la misma *Gaceta* se dan noticias atrasadas de la América septentrional sobre la resistencia y la propagación de la insurrección iturbidista. Una de ellas tomada del número 23 de *La Abeja Patriótica de Yucatán.*

El 5 de diciembre, la *Gaceta de Lima* transcribe íntegro el oficio de O'Donojú al general Dávila, de 26 de agosto, quizá la profesión de fe liberal más importante que haya formulado una autoridad española en América en relación con la independencia. El 8 de diciembre se publica el Acta de Independencia de Guatemala, de 15 de septiembre, dictada por "la voluntad general del pueblo de Guatemala", ordenándose las elecciones de diputados al Congreso "que-

[23] *Ibid.*, suplemento de 17 de octubre de 1821.

daba decidir el punto de independencia general y absoluta y fijar en caso de acordarla la forma de gobierno y ley fundamental que deba regirla".

El interés de Lima en los sucesos de México es manifiesto, aunque en la entrevista de San Martín con Bolívar en Guayaquil, según el informe de 22 de julio de 1822, dictado por Bolívar a su secretario J.G. Pérez para el secretario de Relaciones de Colombia, no lo expresó. "S.E. —Bolívar— habló al Protector sobre las cosas de México —escribirá Pérez—, de que no pareció muy instruido y el Protector no fijó juicio sobre los negocios de aquel Estado. Parece que no ve a México con una grande consideración e interés".[24]

Después de la carta de Bolívar a San Martín, de 16 de noviembre de 1821, el disimulo de San Martín resulta explicable, aunque trate con Bolívar, según éste, la cuestión de la monarquía en el Perú.

El 11 de diciembre de 1821, fracasadas las conferencias de Punchuaca, y con las nuevas noticias llegadas de México, San Martín se dirige al general realista Canterac, para no hacerlo a La Serna: "reflexiono sobre los juiciosos principios que han separado al opulento México de la dependencia de España —le dice—, sin romper sus vínculos, como consta en los documentos impresos en la Gaceta, incluso descubro en ellos la exactitud de mis pensamientos en Punchuaca..." San Martín supone que O'Donojú concluyó la guerra de conformidad con sus instrucciones, y le habla a Canterac de un proyecto en España para dividir la América en tres grandes secciones, cada una con un poder legislativo, y un ejecutivo con un infante al frente.[25] "San Martín tenía siempre dos cuerdas en su arco: una visible y otra oculta", escribirá Mitre, sin perder o alterar su proyecto primario y único de la independencia absoluta.[26] El intento de acercamiento con Canterac no se logra, y la historia de la emancipación impone su sentido a realistas e insurgentes.

El principio subversivo de la titularidad de la soberanía debe ser postulado expresamente, y en sus consecuencias, si la independencia es algo más que una decisión bélica, como en verdad y a pesar de su insistencia monárquica lo era para San Martín. El 27 de diciembre firma un decreto: "Para el primero de Mayo de 1822 se reunirá en esta capital el congreso general constituyente de los departamentos libres del Perú, para establecer la forma definitiva de gobierno, y dar la Constitución que mejor convenga al Perú según las circunstancias en que se hallan su territorio y población. Los poderes que den los pueblos a sus diputados, se contraerán exclusivamente a estos objetos..." (arts. 1 y 2), sin limitarlos en cuanto a una forma de gobierno prescrita.[27] El proyecto de Constitución de 9 de noviembre de 1822, que prepararía una comisión del Congreso, en la que figuraron Javier de Luna Pizarro e Hipólito Unanue se publicaría en México en abril de 1823 en *El Águila Mexicana.*

El 1 de enero de 1822 San Martín firma otro decreto nombrando a Bernardo Monteagudo para sustituir a Juan García del Río, que debe salir a Europa a cumplir con la misión diplomática que le encargó el Consejo de Estado. No es ésta la ocasión de ocuparnos de la mi-

[24] Simón Bolívar, *op. cit.*, tomo I, p. 658.

[25] César Pacheco Vélez, "Sobre el monarquismo de San Martín". *Anuario de Estudios Americanos*, tomo IX, diciembre de 1952, pp. 457-480.

[26] Bartolomé Mitre, *op. cit.*, tomo III, pp. 37-38.

[27] *Gaceta del Gobierno de Lima Independiente*, 29 de diciembre de 1821.

sión de García del Río, a quien acompañaría Diego Paroissien, en el último conato de San Martín para llegar a un arreglo en Europa y establecer la monarquía en el Perú.

El significado interno del monarquismo de San Martín en Perú nos obligaría a referirnos también a la compleja legislación durante el Protectorado, lo que nos desviaría demasiado de nuestro tema, o sea, de la sola verificación del fundamento revolucionario a la legitimidad de la independencia en la hora de su consumación.

El 13 de marzo de 1822 la *Gaceta del Gobierno* en Lima anuncia la entrada a México del "ejército imperial trigarante", la instalación de la "Junta suprema de gobierno" y el nombramiento de la regencia, publicando el Acta de Independencia de 28 de septiembre, y dando la noticia de la muerte de O'Donojú. Se cita la "Gaceta de México". La noticia es halagüeña al monarquismo en el Perú.

* * *

Después de demorarse la reunión del Congreso Constituyente en el Perú, éste se declara solemnemente instalado el 20 de septiembre de 1822, con la asistencia de 79 diputados, los elegidos en los tres departamentos ocupados por el Ejército Libertador, y los nombrados supletoriamente en representación de los ocho departamentos en poder de los realistas.[28] Se sigue el modelo español de Cádiz y de Madrid en la elección de diputados suplentes.

San Martín se dirige lacónicamente al Congreso. Después de dimitir el poder expresa: "Desde este momento queda instalado el Congreso Soberano, y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes".

El Congreso dicta su primer decreto: "Deseando llegue a noticia de todo el pueblo Peruano haberse reunido por medio de sus representantes, y entrando en la plenitud de su soberanía ha venido en decretar y decreta lo siguiente: " 1ro. Se halla solemnemente instalado el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 2o. Que la soberanía reside esencialmente en la nación; y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa".[29] Las elusiones del acta de 15 de julio de 1821 se resuelven en la expresa declaración de 1822.

El primer presidente del Congreso es Francisco de Luna Pizarro, racionero de la catedral de Lima y rector del Colegio de San Fernando, quien había viajado por España cuando las Cortes de Cádiz estaban reunidas, y que en 1822 toma el partido republicano. De él escribiría el mariscal José de la Riva Agüero, primer presidente de la República del Perú, años después y cuando Riva Agüero hace profesión de monarquismo, calificándolo de *demagogo frenético*. Agüero reproduce en su ataque el discurso que Luna Pizarro dijo el 30 de mayo de 1820 con elogios al decreto de Fernando VII de 30 de mayo de 1814, por el que el rey restableció en el imperio "las costumbres y el orden".[30] Riva Agüero será además uno de los más enconados autores en la detractación en contra de San Martín y Bolívar.

Los hombres y los acontecimientos en la revolución frustran las previsiones. San Martín

[28] Jorge Basadre, *Historia de la República del Perú*, Lima, 1963, tomo I, p. 21.

[29] *Gaceta del Gobierno de Lima...*, 22 de septiembre de 1822.

[30] Pruvonena (pseudónimo de José de la Riva Agüero), *Memorias y documentos para la historia de la independencia del Perú y causas del mal éxito que ha tenido*, París, 1858, tomo I, p. 116, tomo II, p. 126.

expresó un año antes: "habría podido encarecer la liberalidad de mis principios... haciendo magníficas declaraciones sobre los derechos del pueblo..." pero diez años de experiencia americana le habían hecho conocer "los males que ha ocasionado la convocación intempestiva de congresos... (porque) primero es asegurar la indepencia, después se pensará en establecer la libertad sólidamente". San Martín distingue con claridad la liberación de la opresión —que informa su ejercicio del Protectorado— y la libertad política, en el sentido que a ambas les da H. Arendt.[31]

La independencia del Perú no está concluida y asegurada en esos días, pero la declaración de independencia significa más que una victoria bélica. El sentido de la revolución lo da la ruptura con el antiguo régimen, una ruptura también independiente de la que se realiza por la revolución liberal en España, en un acto único o en un suceso que tenga ese propósito de doble ruptura.

El 20 de septiembre de 1822, con la renuncia de San Martín al Protectorado y a todo otro cargo, se clausura el proyecto monárquico en la emancipación del continente del sur.

¿Era posible declarar y aun consumar la ruptura con la metrópoli y demorarla con el antiguo régimen, manteniendo la perpetuación monárquica de su símbolo, y el equilibrio interno a través de un proceso de adecuación paulatina hacia la revolución? No fue sólo San Martín el que se lo propuso, ni el único que renunciaría al proyecto.

[31] Hanna Arendt, *Sobre la revolución*, Madrid, 1967, pp. 39-40.

3

LAS DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA
VENEZUELA

El 5 de julio de 1811 se fecha el Acta de Independencia de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la confederación Americana de Venezuela, en el continente meridional, por los representantes de ellas reunidos en Congreso. Los diputados hacen la declaración "considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legislativamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del Trono español por la conquista y sucesión de otra dinastía constituida sin nuestro consentimiento: queremos antes de usar de los derechos que nos tuvo privados la fuerza, por más de tres siglos, y nos ha restituido al orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al Universo las razones, que han emanado de estos acontecimientos, y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra Soberanía". Los argumentos del acta coinciden con las declaraciones en las actas de independencia y en los manifiestos de ellas en América. "No queremos sin embargo —se dice— empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado, para recuperar su estado de Propiedad e Independencia: olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones, que el derecho funesto de conquista han causado indistintamente a todos los descendientes de los Descubridores, Conquistadores y Pobladores de estos países, hechos de peor condición, por la misma condición que debía favorecerlos; y corriendo un velo sobre los trescientos años de dominación Española en América, sólo presentaremos los hechos auténticos y notorios, que han debido desprender y han desprendido de derecho a un Mundo de otro, en el trastorno, desórdenes y conquistas que tiene ya disuelta la Nación Española".

Los 300 años de dominación trasmutaron al colono en colonizado, y el *ius soli* funda sus derechos. Los títulos ilegítimos de la conquista dejan de serlo cuando los ficticios dependientes de descubridores, conquistadores y pobladores, los alegan contradictoriamente al ser violados en ellos, reivindicando la soberanía cuya representación ostentan en los territorios coloniales.

Ante los sucesos de España, la fidelidad de Venezuela se mantuvo no obstante que, se advierte, los Borbones abdicaron en Bayona, "abandonando el territorio Español contra la voluntad de los pueblos" que los habían puesto en el trono "a despecho de la Casa de Austria". Y recientemente los "intrusos gobiernos que se arrogaron la representación nacional..., contra sus mismos principios sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando, para devorarnos y vejarnos impunemente, cuando más nos prometían la libertad, la igualdad y la fraternidad en discursos pomposos..., para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante". Cuando se suceden en España los gobiernos y Venezuela se ve obligada

a conservarse a sí misma, "se desconoció toda su anterior conducta, se variaron los principios, y se llamó insurrección, perfidia, e ingratitud, a lo mismo que sirvió de norma a los Gobiernos de España, porque ya se le cerraba la puerta al monopolio de administración que quería perpetuar a nombre de un Rey imaginario". Así, "para añadir el desprecio a la calumnia se nos nombra apoderados contra nuestra expresa autoridad, para que en sus Cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses, bajo el influjo y fuerza de nuestros enemigos... (y) nos sometieron a una Tarifa mezquina y diminuta...". El mismo Fernando, a sus ligas con Bonaparte, las de fuerza, "ha añadido los vínculos de sangre y amistad, por lo que hasta los Gobiernos de España —observa el Congreso—, han declarado ya su resolución, de no reconocerle sino condicionalmente". En el acta, redactada por Juan Germán Roscio, aparecía la firma del diputado por Barcelona, Francisco de Miranda.[32]

En Caracas estaban bien informados de las gestiones que Fernando hizo desde el castillo de Valençay pidiendo a Napoleón una esposa elegida por éste, y que lo adoptara por hijo, como consta en las cartas de Fernando que el emperador publicó en el *Monitor* de París.[33]

Simón Bolívar había salido de Inglaterra, de regreso a Venezuela, el 21 de septiembre de 1810, y Miranda le siguió a principios de octubre para entrar a Caracas, contra la oposición del gobierno y entre la simpatía popular, el 12 de diciembre. Sus noticias y papeles eran fehacientes. La degradación de Fernando ante Napoleón no podía estar más documentada.

Tres años de ambigüedad funesta, continúa el Acta del Congreso, autorizó y obligó "a ir más allá de lo que nos proponíamos, impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los Gobiernos de España, que nos ha relevado del juramento condicional, con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos". Por tan incontrastables y sólidas razones fue necesario ejercer "los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos, para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, (y) creemos, que no podernos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España, y que como todos los pueblos del mundo estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra...". Se decide la independencia no obstante "la influencia poderosa de las formas habituales a que hemos estado a nuestro pesar acostumbrados —agregando—: también conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas, cuando podemos sacudirlas, sería más ignominioso para nosotros y más funesto para nuestra posteridad, que nuestra larga y penosa servidumbre, y que es ya de nuestro indispensable deber proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente todas las formas de nuestra anterior constitución".

El acta termina con la forma ritual de la declaración:

> Nosotros los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser Supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones... y ratificándole en el momento que nacemos a la dignidad, que su Providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libres creyendo y defendiendo la Santa Católica y Apostólica Religión de Jesucristo, como el primero de nuestros deberes. Nosotros, pues a nombre y con la voluntad y autoridad, que

[32] *Las Actas de la Independencia de América*, Washington, 1955, pp. 127-142.

[33] Estanislao de Koska Bayo, *op. cit.*, tomo I, pp. 235-236, 374-375.

tenemos del virtuoso Pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo, que las Provincias Unidas son y deben ser, desde hoy de hecho y de derecho Estados libres, Soberanos e independientes, y que están absueltas de toda sumisión y dependencia de la corona de España, o de los que se dicen, o dijeren apoderados, o representantes, y que como tal Estado libre e independiente, tiene un pleno poder, para darse la forma de Gobierno, que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas..., y ejecutar todos los demás que hacen y ejecutan las Naciones libres e independientes. Y para hacer válida, firme, subsistente esta nuestra declaración, damos y empeñamos mutuamente unas Provincias a otras, nuestras vidas, nuestras fortunas, y el sagrado de nuestro honor nacional. Dado en el Palacio Federal de Caracas, firmada de nuestra mano, Sellada con el gran sello provisional de la confederación y refrendada por el Secretario del Congreso...[34]

El documento, redactado por Juan Germán Roscio, diputado por la provincia de Caracas, y por Francisco Isnardi, secretario del Congreso, no es un texto historiado; "olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones" se dice en él. Su discurso es doctrinario de fondo, y su motivación circunstancial, referida a los acontecimientos en España.

* * *

El Congreso se había instalado solemnemente el 2 de marzo anterior. Después del acto civil, el Congreso se trasladó a la iglesia en donde esperaban todos los cuerpos de la ciudad. Se ofició misa pontifical, en la que después del Evangelio, los diputados prestaron el juramento, que se les leyó:

¿Juráis a Dios por los Santos Evangelios que vais a tocar, y prometéis a la patria conservar y defender sus derechos y los del Señor Fernando VII, sin la menor relación, o influjo con la Francia, independientes de toda forma de gobierno de la Península de España; y sin otra representación que la que reside en el Congreso general de Venezuela; oponernos a toda otra dominación que pretenda ejercer soberanía en estos países, o impedir su absoluta y legítima independencia, cuando la federación de sus Provincias la juzgue conveniente; mantener pura, ilesa e inviolable nuestra Sagrada Religión, y defender el Misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen María Nuestra Señora; promover directa o indirectamente los intereses generales de la confederación de que sois parte, y los particulares del distrito que os ha constituido; respetar y obedecer las leyes y disposiciones que este Congreso sanciona y haga promulgar... y cumplir fiel y exactamente los deberes de la diputación que vais a ejercer?[35]

Ciento veinticinco días más tarde el Congreso tiraría la máscara de Fernando VII, y las Provincias Unidas de Venezuela proclamarían solemnemente la primera declaración de independencia en el imperio español.

Los sucesos que sin solución de continuidad llevan a la América española a la formal de-

[34] *Gaceta de Caracas*, 16 de julio de 1811, edición facsimilar, Caracas, 1960.
[35] *Ibid.*, 8 de marzo de 1811.

claración de su independencia, a partir de los acontecimientos de 1808 en España, inicialmente adoptan, con diversas fortunas, el mismo y simultáneo modelo fidelista, constituyendo juntas tuitivas, conservadoras, etc., de los derechos del cautivo Fernando. Juntas independientes de las que en el nombre del monarca se forman en España, y aunque cedan las Américas al reconocimiento de la Junta Central por la imposición de las autoridades coloniales, al llegar las noticias de la disolución de ésta y la creación de la Regencia, ante las victorias francesas de 1810 en Andalucía, el juntismo americano se enfrentará definitivamente al régimen colonial. Los virreinatos, capitanías generales, y aun las provincias aisladas, reivindican el ejercicio de la soberanía por vacar ella en España, con el consecuente desconocimiento de las autoridades coloniales en América, las que en todo caso pueden subsistir fugaz y precariamente por la resolución de quienes asumen el ejercicio de una soberanía duple: la del monarca ausente, y la de la nación o provincia que restaura la suya original de la que, se declara invariablemente, fueron despojados por la conquista. Que tal formulación americana no discierna su obvia contradicción no importa. Nuestro doctor Mier hablará de los derechos heredados por los americanos de sus padres los descubridores, conquistadores y pobladores, cuyos pactos con la corona formaron la primera constitución de las Américas, y reclamará los derechos de la soberanía usurpada a los naturales por esos mismos conquistadores y pobladores, soberanía de la que también los americanos somos herederos. Los argumentos contradictorios y excluyentes, en el alegato americano son las premisas de una única conclusión, la de la legitimidad de la emancipación absoluta. En el ánimo de la emancipación, se dijo ya, toda idea propicia se adopta.

Entre nosotros, en México, desde fray Bartolomé hasta el doctor Mier y don José María Morelos, los derechos de soberanía usurpados devienen en los naturales e imprescriptibles del XVIII y el XIX. En Venezuela, el proceso final se aceleró. El Congreso se instaló solemnemente el 2 de marzo de 1811, y el 5 de julio decretó la independencia absoluta. Días antes de éste, el 1 de julio, aprobó el decreto sobre la *Soberanía del Pueblo, Derechos y Deberes del Hombre en Sociedad y Deberes del Cuerpo Social*, "decisión de puro carácter doctrinario que anunciaba la proclamación de la independencia... por el cual se funda una república donde la ley, la virtud serán las normas de la vida ciudadana",[36] escribe Parra Pérez. Es el decreto de derechos que la Sociedad Patriótica-Literaria de Buenos Aires publicará en *El Grito del Sud* de 1 de diciembre de 1812, "sobre los que el pueblo caraqueño ha levantado el majestuoso edificio de su independencia", como escribió Monteagudo al presentarlo, y que "sería muy conforme a los sentimientos de nuestra sociedad que va a ser una gran parte en la independencia de las Provincias del Río de la Plata". En el preámbulo del decreto de 1 de julio se dice que el Congreso "ha creído que el olvido y desprecio de los derechos del pueblo, ha sido hasta ahora la causa de los males que ha sufrido por tres siglos: y queriendo empezar a precaverlos radicalmente, ha resuelto, conformándose con la voluntad general, declarar como declara solemnemente, ante el Universo todo, estos mismos derechos inenajenables a fin de que los ciudadanos puedan comparar continuamente los Actos del Gobierno con los fines de la Institución Social...".[37]

[36] C. Parra Pérez, *Historia de la primera República de Venezuela*, Caracas, 1939, tomo II, p. 33-34.

[37] *El Publicista de Venezuela*, 18 de julio de 1811, edición facsimilar, Caracas, 1959; *Gaceta de Caracas*, 23 de julio de 1811.

La declaración no corresponde textualmente a la que se hace en los artículos 151 a 199 de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, de 21 de diciembre de ese mismo año de 1811.

La declaración de 1 de julio postuló que la "soberanía reside en el Pueblo; y el ejercicio de ella en los ciudadanos con derecho a sufragio, por medio de sus Apoderados legalmente constituidos" (art. 1), siendo ella "por su naturaleza y esencia imprescriptible, inenajenable, e indivisible" (art. 2).

La declaración de derechos, aunque promulgada por la sección legislativa del Congreso para la provincia de Caracas, fue la primera proclamación del órgano creado por la revolución en la que se subvierte el fundamento del antiguo régimen, al no expresarse además reconocimiento alguno a los títulos del monarca.

* * *

No podemos remontarnos aquí a los sucesos de 1808 en Caracas, cuando, como en Buenos Aires en 1810, fue la autoridad colonial, en Caracas el capitán general Juan de Casas, quien receloso de sucesos graves propuso al Cabildo Civil de Caracas, el 27 de julio, la creación de una junta siguiendo el ejemplo de Sevilla, al *conmocionarse* Caracas por las noticias de las abdicaciones de Bayona y con la llegada de un enviado de Napoleón, lo que excitó la adhesión popular a Fernando VII. En tanto, se conspiraba en la *Cuadra de los Bolívares* y después en la de José Félix Ribas, la independencia de las autoridades coloniales, con la patriarcal aprobación del conde de Tovar.

Quienes se interesen en el suceso de 1808 en Caracas pueden consultar la documentación de la averiguación ordenada por Juan de Casas sobre las especies en contra del reconocimiento de la Junta de Sevilla, por considerar que ésta "no tenía autoridad alguna, que tampoco la tenía la Real Audiencia ni el Gobierno de estas Provincias y que únicamente debía gobernar el pueblo..." como se expresa en la orden de Casas de 18 de noviembre de ese año. La documentación aparece en la *Conjuración de 1808 en Caracas, para formar una junta Suprema Gubernativa*, en dos tomos, Caracas, 1969.

El proyecto había tenido su forma pública el 22 de noviembre, firmado por 45 *primeras notabilidades* de Caracas en representación dirigida al capitán general y presidente gobernador, Juan de Casas, quien ya en esa fecha no aceptaba formar junta alguna, y ordenó enjuiciar a los firmantes, que por cierto hacían profesión de fe fidelista.

El intento, fracasado en 1808, se renueva en 1810 en el Cabildo Abierto del 19 de abril, por su propia determinación. En presencia de Vicente Amparán, nuevo capitán general, Juan Germán Roscio y José Félix Sosa, que no pertenecían al Cabildo pero que hablaron como "diputados del pueblo", propusieron la creación de una Junta de Gobierno, presidida por Amparán, última concesión a la autoridad colonial, señala Parra Pérez. Un chileno, el padre José Félix Blanco, atacó a la persona de Amparán y pidió su deposición. La multitud reunida lo apoyó.[38]

[38] C. Parra Pérez, *op. cit.*, tomo I, pp. 267-276. El acta de instalación de la Junta en José Manuel Restrepo, *Historia de la revolución de la República de Colombia*, Besançon, 1854, tomo I, pp. 599-602.

El cabildo se constituyó en Junta Suprema incorporando a presuntos delegados de clases y corporaciones. La Junta depuso a los oidores de la Real Audiencia, y comenzó a ejercer las funciones de gobierno.

El 3 de mayo se dirigía al Consejo de Regencia de España, expresando "sus verdaderos y cordiales sentimientos de fraternidad con respecto a los Españoles de Europa. Pero se engañarían V.V. —manifestó— si creyesen por esto que se hallan igualmente prontos a tributar su obediencia y vasallaje a las diversas corporaciones que substituyéndose indefinidamente unas a otras sólo se asemejan en atribuirse todas una delegación de la Soberanía, que no habiendo sido hecha ni por el monarca reconocido, ni por la gran comunidad de españoles de ambos hemisferios, no puede menos de ser absolutamente nula, ilegítima, y contraria a los principios de nuestra misma legislación". La Junta Central carecía de autoridad porque "no emanaba originalmente de otra cosa que de la aclamación tumultuaria de algunas capitales de Provincias, y porque jamás han tenido en ella los habitantes del nuevo hemisferio la parte representativa que legítimamente les corresponde". La Junta Central de España habla declarado "que consideraba los Dominios Americanos como partes integrantes de la Monarquía Española; y la América no vio, ni podía ver esta declaración como la fuente de unos derechos que siempre ha debido gozar, y nunca han podido disputarse sin injusticia, sino como una confesión solemne del despotismo con que hasta entonces había sido tiranizada", desde la época de la conquista, "como VV. EE. mismos los conocen y confiesan en la proclama que nos han dirigido", la de 14 de febrero de 1810, ya citada, en la que se dijo aquello de: "Desde estos momentos, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres, no sois ya los mismos de antes, encorvados bajo un yugo más duro mientras más distante... vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia".

En la elección de americanos a la Junta Central, y en la convocatoria a elegir diputados a las Cortes, la Junta de Caracas no "ha visto otra cosa que una insufrible parcialidad en favor de las desgraciadas reliquias de España, y una reserva injuriosa en convidarla —a la América— a usar de sus derechos". Los motivos y sus derechos, Caracas se empeñará en propagarlos a las provincias de América. "Se lisonjea de que tarde, o temprano, estarán unánimes..." y sólo el despotismo puede sofocarlos. Se desconoce expresamente al Consejo de Regencia, "pero si la España se salva —concluye la Junta—, seremos los primeros en prestar obediencia a un Gobierno constituido sobre bases legítimas y equitativas".[39]

El 20 de abril, la Junta de Caracas se había dirigido a las provincias de Venezuela: "Pensad que si nosotros reconocemos y reclamamos altamente los sagrados derechos de la naturaleza para disponer de nuestra sujeción civil...; no respetamos menos en vosotros tan inviolables leyes, y os llamamos oportunamente a tomar parte en el ejercicio de la Suprema autoridad con proporción al mayor o menor número de individuos de cada provincia".[40]

No es nuestro asunto el de los actos de gobierno de la Junta de Caracas. Tampoco lo es la opinión de los funcionarios coloniales denunciando el significado de las ocurrencias, cuando los documentos americanos los manifiestan sin equívocos. Ni lo es la polémica que se abre con las autoridades españolas que subsisten en Venezuela y Nueva Granada, ni las exposiciones doctrinarias que fundan la legitimidad de las decisiones americanas.

[39] *Gaceta de Caracas*, 18 de mayo de 1810.
[40] *Ibid.*, 27 de abril de 1810.

Aludamos únicamente a la real orden del Consejo de Regencia, de 1 de agosto de ese año, sobre los sucesos de Caracas, "cuyos naturales... han cometido el desacato de declararse independientes de la Metrópoli, y creado una Junta de Gobierno para ejercer la pretendida autoridad independiente...". La Regencia tomó medidas, oyendo al Consejo de España e Indias, y decretó el bloqueo riguroso de la provincia de Caracas, y la confiscación de toda mercancía enviada a ella. Se castigará a los autores de la subversión si no se someten, y se ofreció indulto general.[41]

La *Gazeta* del 20 de noviembre publicó una carta de Francisco de Miranda, desde Londres, a la *Junta Suprema de Gobierno de la Provincia de Venezuela, Conservadora de los derechos de Fernando VII.* Miranda conocía bien los vericuetos de la historia, y sin reparar sobre el título de la Junta escribió: "Permítame V.A. que uno de sus fieles y menores conciudadanos, llegue a darles la enhorabuena por los gloriosos y memorables hechos del 19 de abril de 1810; época la más célebre en la historia de esa Provincia, y para los anales del Nuevo Mundo". Habló, informa, con Simón Bolívar y Luis López Méndez, llegados a Londres como comisionados de la Junta. Envía el memorial que presentó al gobierno inglés "poniendo así término a las negociaciones que desde veinte años a esta parte tenía establecidas en favor de nuestra emancipación e independencia", solicitando además del gobierno inglés el permiso para regresar a Venezuela. Más de 50 volúmenes del archivo de Miranda son el repositorio documental de ocho lustros en la vida fabulosa del Precursor. A los 61 años de edad, y después de 39 de un exilio nómada, el viejo conspirador y revolucionario, el más perseverante americano en la idea americana de la emancipación regresaría a su patria. El Precursor sería también actor en la hora de proclamarla desde América, y también sería una de las primeras víctimas de nuestros desconciertos en una de sus horas más sombrías, la noche de 30 de julio de 1812 en el puerto de La Guaira.

La convocatoria que la Junta hizo para el Congreso Constituyente de las Provincias de Venezuela será el último documento institucional que relacionaremos. Desde el 15 de junio de ese año de 1810, la *Gazeta de Caracas* comenzó a publicar el manifiesto de la Junta del 10 de junio que precedía a los artículos de convocatoria, redactado también por Roscio. "El ejercicio más importante de los derechos del Pueblo es aquel en que los trasmite a un corto número de individuos, haciéndolos árbitros de la suerte de todos. En este momento decisivo importa más que nunca proscribir el interés personal, y aun el de Corporaciones particulares, renunciar y anatematizar los manejos ocultos de la ambición, penetrarse en fin en los sagrados deberes que impone la Patria a sus hijos. El suelo en que habitáis no ha visto desde su descubrimiento una ocurrencia más memorable y de más trascendencia...". La Junta "va a prescribir —declara— reglas saludables para evitar los peligros de reuniones tumultuarias, que dando pábulo a las facciones, impedirán acaso que se oyese la opinión general... Todas las clases de hombres libres son llamadas al primero de los goces de Ciudadano, que es el concurrir con su voto a la delegación de los derechos personales y reales que existieron originalmente en la masa común y que le ha restituido el actual interregno de la monarquía". Las censuras a la Junta Central y al Consejo de Regencia españoles se reiteran, por la parcialidad discriminatoria en contra de América, con independencia de sus vicios de origen en la propia España. To-

[41] *Ibid.*, 6 de noviembre de 1810.

do, expresa la Junta desde Caracas, "demuestra suficientemente la necesidad de una representación particular para cada uno de los Distritos Americanos... *mientras llega quizá otra época de más consuelo y esperanza, en que confederados todos los Pueblos de la América tan estrechamente como lo permita la inmensidad del suelo que ocupan, y como lo prescribe la identidad de Religión, idioma, costumbres e interés, puedan acompañar a la justicia de sus reclamaciones la fuerza que resulte de su agregación*". Entre tanto, las Provincias de Venezuela, fieles a Fernando, y dispuestas a reconocer un gobierno legítimo, como lo han jurado, reconocen la necesidad de crear su propia representación, corregir los vicios de la administración anterior, y "entenderse oportunamente con el Gobierno legítimo que se constituya en la Metrópoli, así como con pueblos aliados y neutrales". Los representantes elegidos deberán crear un poder ejecutivo, y no usurpar las funciones de los tribunales de justicia, aprobando los reglamentos de esos dos poderes.

Si en Caracas se declaró solemne y expresamente por primera vez la independencia en la América española, también, y no sabemos por qué se ignora, olvida o desatiende, se habló de "*otra época de más consuelo y esperanza en que confederados todos los pueblos de la América... puedan acompañar a la justicia de sus reclamaciones la fuerza que resulte de su agregación*". El 10 de junio de 1810 hereda otra consigna americana que podemos conmemorar porque se sigue esperando, más de medio siglo después, esa "*otra época de más consuelo y esperanza*".

El reglamento de elecciones estableció el voto censario en un proceso de dos grados.[42]

"A ninguno de los diputados elegidos al Congreso —escribe C. Parra Pérez—, podía dársele aún el dictado de republicano o de realista ni clasificársele en determinado partido político".[43]

* * *

En enero de 1811 había llegado de España el comisionado Feliciano Montenegro Colón, con pliegos de Esteban Palacios y Fermín Clemente, elegidos en Cádiz como diputados suplentes de Venezuela a las Cortes, solicitando instrucciones. La respuesta de la Junta, de 1 de febrero, negó la legitimidad de las Cortes y todo mandato a Palacios y Clemente.[44]

En su respuesta, la Junta puso en duda la conducta del propio Fernando VII, y no opinó sobre él en definitiva, "a pesar de las relaciones de familia en que ha entrado con el Emperador de los Franceses, y de lo que resulta de la empresa del Barón de Koll".

Las informaciones en Caracas no podían ser más concluyentes. El 4 de abril de 1810 Fernando escribió a Napoleón desde Valençay: desea hablar personalmente con el emperador sobre asuntos de importancia, pero lo "que ahora ocupa mi atención es para mí un objeto del mayor interés. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de S.M. el emperador, *nuestro soberano*. Yo me creo merecedor de esta adopción —agrega Fernando—, que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de S.M. como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos". Carta publicada por Napoleón, co-

[42] José Gil Fortoul, *op. cit.*, tomo I, pp. 216-227; C. Parra Pérez, *op. cit.*, tomo II, pp. 335-356.

[43] *Ibid.*, pp. 359.

[44] C. Parra Pérez, *op. cit.*, p. 362; *Gaceta de Caracas*, 4 de enero de 1811.

mo otras, en el *Monitor* en febrero de 1810.[45] Mas Fernando, después de leer publicadas en el *Monitor* sus cartas al emperador, le escribiría el 3 de mayo que ellas "han dado a conocer al mundo entero los sentimientos de perfecto amor de que estoy penetrado a favor de V.M.I. y R., y al propio tiempo mi vivo deseo de ser vuestro hijo adoptivo. La publicidad que V.M.I. se ha dignado dar a mis cartas me hace confiar que no desaprueba mis sentimientos... y esta esperanza me llena de gozo". Depositará en Napoleón "los pensamientos de un corazón que —expresó Fernando— ...es digno de perteneceros... Que V.M.I. y R. se digne —suplicó— unir mi destino al de una princesa francesa de su elección, y cumplirá mis más ardientes votos".[46]

La historia del barón de Koll, que fraguó la fuga de Fernando VII de Valençay y de Francia, y quien fue delatado por el mismo Fernando, sumaba ignominias a ignominias.[47]

La respuesta a Montenegro Colón acumulaba otras imputaciones, como la personal a él mismo: "El ser V.S. Ministro del Consejo de Castilla, e Indias, lejos de recomendar su comisión —se le dijo—, la hace más sospechosa en un país donde se vieron los actos de reconocimiento, con que ambos Tribunales obsequiaron al intruso Rey de España en una ciudad donde aparecieron las cédulas y órdenes con que el Consejo de Indias y el Ministro de Gracia y Justicia nos intimaban las cesiones y abdicaciones hechas en las Cortes extraordinarias de Bayona, exigiendo de nosotros el reconocimiento y obediencia a José Bonaparte".[48]

Francisco de Miranda había entrado a Caracas desde el 12 de diciembre de 1810 con su bagaje de papeles. Mencionar y citar la respuesta de la Junta al comisionado Montenegro Colón no es desviarnos hacia la anécdota. Ni éste, ni las autoridades de la península desmentían, ni podían hacerlo, al menos a los hombres de Caracas.

Después del regreso de Miranda, López Méndez y Bolívar, de Londres, la máscara del fidelismo a Fernando VII resultaba en Caracas un ostensible escarnio a las autoridades de España y a las colonias de la antigua Tierra Firme de América. La independencia absoluta se apresuraría entre quienes la promovieron, ante el descrédito más humillante de la corona en la historia de España.

Si planteáramos los acontecimientos en términos de incitación y respuesta, la declaración de la independencia absoluta fue la respuesta inmediata y directa, precipitada por la ignominia del monarca, dentro de la respuesta más amplia frente al régimen colonial en la coyuntura de los sucesos de España.

El oficio de 1 de febrero de la Junta de Caracas al comisionado español Montenegro Colón, es una satisfactoria demostración del conocimiento que se tenía de la conducta de Fernando ante Napoleón, lo que no podía menos que vulnerar el fidelismo en sí al monarca y la máscara de él.

No podemos demorarnos en los sucesos entre el 2 de marzo y el 5 de julio, cuando se declaró la absoluta independencia por el órgano representativo creado por la revolución. Dejar constancia del suceso, aunque insuficiente y menos que somera, alude a su naturaleza.

[45] La carta la reproduce Estanislado de Koska Bayo, *op. cit.*, tomo I, p. 242.

[46] *Ibid.*, p. 243.

[47] *Ibid.*, pp. 245-246; Miguel Artola, *La España de Fernando VII*, pp. 619-620.

[48] *Gaceta...*, 5 de febrero de 1811.

* * *

La actitud de los *mantuanos*, la oligarquía criolla y gran terrateniente, preparándose a sustituir en el poder a las autoridades coloniales, y la del grupo del Cabildo Civil, orientándose hacía una revolución que sería republicana, mencionados así, no revela la fluidez de los beligerantes. Mencionar también a Coro y Maracaibo declarándose por las autoridades peninsulares; el debate en folletos y en periódicos multiplicando y propagando las ideas; la creación de la Sociedad Patriótica, que reuniendo a mantuanos y revolucionarios, bajo la influencia de Miranda demandaba la declaración de una independencia absoluta, atrayendo a los pardos y al pueblo en general, no es sino incurrir en vagas alusiones a unos días en los que los americanos se empeñaban en hallar o formular su propia definición.

La Sociedad Patriótica, creada por la Junta desde el 14 de agosto de 1810, y a la que el general Pablo Morillo calificaría el 31 de mayo de 1815, de "fuente de todos vicios y delitos que se cometieron y perjuicios que se causaron" se convertiría en tribuna, aun para diputados al Congreso, desde la que se demandaba la independencia absoluta. El 4 de julio de 1811 una comisión de ella la pidió formalmente al Congreso, después de que el día 3 los diputados Cova, Peñalver, Yanes y Miranda la habían propuesto como urgente.[49]

Y no podríamos ignorar el proyecto de 26 de julio de 1811, que Fernando de Peñalver presentó al Congreso, de una Constitución federal permanente de las provincias de Caracas, "confederación (que) proclamará la independencia del reconocimiento que ha hecho de D. Fernando VII, cuando sea perjudicial a su libertad y prosperidad", como se expresaba en su artículo XX.[50] Como no podríamos ignorar los *Derechos de la América del Sur y México*, alegato por la independencia republicana escrito por William Burke y publicado por la *Gazeta de Caracas* desde el 23 de noviembre de 1810. Poco después llegaría el gran alegato republicano de Thomas Paine.

Juan Germán Roscio, redactor del proyecto de Acta de Independencia de 5 de julio de 1811, y acérrimo enemigo de Miranda, escribiría a Domingo González el 22 de ese mismo mes: "Siempre demostraba —él mismo, Roscio— la justicia y necesidad de declarar nuestra total independencia pero siempre me ocurría como impedimento legítimo el no haber en los pueblos toda la ilustración necesaria para ser bien recibida sin escándalo, ni turbación. Siempre concluía con la necesidad de esperar mejor oportunidad...".[51]

Lo decía el hombre que al redactar el Acta de Independencia había escrito que los representantes de Venezuela reunidos en Congreso "considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legislativamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza durante más de tres siglos", exponer las razones que autoriza "el libre uso, que vamos a hacer de nuestra soberanía".

[49] *Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela, 1811-1812*, Caracas, 1959, tomo I, pp. 149-200.

[50] *Testimonios de la época emancipadora*, Caracas, 1961, pp. 12-26.

[51] *Epistolario de la Primera República*, Caracas, 1960, tomo II, p. 214.

* * *

En Venezuela, ese *reasumir* la soberanía también se proclamó, pero lo declaraban hombres que, como en toda la América española, nunca la habían poseído, porque la prehispánica, de la que se hablaba en un lenguaje metropolitano, estaba, como su historia, abolida, y porque incluso el idioma único y la conciencia del rebelde legatario del colonizador y del colonizado no eran otros que los de la revolución europea y de la América anglosajona. La declaración era la renuncia a una identidad a la que los criollos habían aspirado secularmente, lo que no era una contradicción sino un conflicto.

Las morosas y dispendiosas informaciones de limpieza de sangre promovidas por los criollos para probar su ascendencia de "españoles, cristianos viejos, limpios de toda mala raza de moros, judíos, o mulatos, ni herejes, ni de los nuevamente convertidos al gremio de Nuestra Santa Iglesia Católica; ni castigados ni penitenciarios por el Santo Oficio de la Inquisición ni por otro algún tribunal, pública ni secretamente en pena alguna que les infamase, ni haber servido ni ejercido oficios viles ni mecánicos", que se acumularon en los archivos durante los siglos coloniales hasta la iniciación de la independencia, prueban más la preocupación por la distancia que separa al criollo del colonialista peninsular que la asimilación o identidad que se propone obtener.[52]

En un territorio, el de la Capitanía General de Venezuela, de 33 700 leguas cuadradas, 12 000 europeos y 200 000 criollos predominaban sobre cerca de 600 000 indios, negros y castas, excluidos de la educación, de la riqueza y de los poderes.

La primera ruptura emancipadora será la del criollo consigo mismo, una emancipación minoritaria dentro de una minoría, y claramente distinta aunque no ajena a las protestas americanas por su exclusión en el ejercicio del poder civil y del eclesiástico, en la proporción que al menos debería corresponderles como "españoles americanos".

No obstante, al asumir el criollo conscientemente la condición y el destino del colonizado, y lo hace en el momento de su rebelión, seguirá siendo un hombre nacido a imagen y semejanza del colonialista, distinto a la oscura mayoría que pretende representar. Su ambigüedad o ambivalencia y su encono serán más profundos frente a la otra ambigüedad, la del colonialista liberal que, en el común idioma de ambos, inicia la revolución en España y la regatea o niega a la América. La ruptura no puede ser más confusa y violenta en la catarsis de la emancipación.

Al declarar su emancipación, el criollo tutelará en adelante, de hecho, la de los americanos de origen americano y africano, o se enfrentará a ellos, en una historia que no ha concluido.

[52] El texto entrecomillado en José Gil Fortoul, *op. cit.*, tomo I, p. 101. Los documentos se pueden multiplicar.

4

LAS DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA
NUEVA GRANADA

Nos hemos referido a dos declaraciones de independencia, las del Perú y de las Provincias Unidas de Venezuela, y ambas referencias han sido menos que someras aunque esperamos no del todo superficiales en cuanto a su significado. El solo suceso de las declaraciones de independencia en América, sea en el virreinato del Plata, en el de Nueva Granada, en las capitanías generales de Venezuela o Chile, en la presidencia de Quito, o en el Perú, obliga a un examen que revelaría lo unívoco de los acontecimientos, lo que no es descubrimiento alguno.

Revelaría más. La ruptura en las Américas y la metrópoli se produce, para decirlo en un término matemático y objetable, en la ecuación entre una entidad conocida —la metrópoli— y varias posibles que se despejarán a sí mismas, porque en tanto no se produzca la ruptura, el ser de ellas es un ente indefinido o, en todo caso, ancilar.

En la negación de la total negación —encarnada en el monarca— de la soberanía en la nación, se funda la subversión revolucionaria que legitima toda declaración de independencia. No debemos olvidar que en España se pretende, al formular el discurso de la negación, *restaurar*, reasumir, la primitiva soberanía de la nación, reconocida por sus antiguas leyes fundamentales, usurpada y negada por los Austrias y los Borbones. Análogo discurso oímos a través del juntismo americano que precede a la definición revolucionaria de la independencia.

Un joven revolucionario de nuestros días comienza su ensayo sobre la revolución con estas palabras: "Jamás somos completamente contemporáneos de nuestro presente. La historia avanza enmascarada: entra al escenario con la máscara de la escena precedente... Vemos el pasado superpuesto al presente, aunque ese presente sea una revolución".[53] No pretendemos ajustar la revolución de independencia a concepción alguna del siglo XX, en las que el análisis del suceso revolucionario se hace con una inteligencia más cabal de la experiencia histórica, aunque limitado muchas veces por una preocupación, y casi diríamos por una enajenación actual. Las palabras de Debray convienen puntualmente a lo ocurrido en el primer cuarto del XIX, en los días en que la historia se precipita sobre y en América. Veámoslo una vez más.

Cuando se conoce en Cartagena de Indias el decreto de las Cortes españolas de 24 de septiembre de 1810, por el que declaran "que reside en ellas la soberanía nacional", en Cartagena rechazarán a las Cortes, aunque poco antes las reconocían "como soberanía interna —se dice en el Acta de Independencia de 11 de noviembre de 1811—, mientras que se constituían legalmente conforme a los principios que proclaman, reservándonos siempre la administración interior y gobierno económico de la provincia". La desigualdad de representación

[53] Régis Debray, *¿Revolución en la revolución?*, La Habana, 1967, p. 15.

de las Américas en las Cortes la descalificación por las autoridades metropolitanas y coloniales a las juntas ultramarinas, demuestran "que las mismas Cortes no están exentas del carácter falaz de los gobiernos revolucionarios de España", que ofrecían la participación disminuida en el ejercicio de una soberanía mediatizada.[54]

En Cartagena se motiva circunstancialmente el acto de ruptura, al llevar a su consecuencia americana la asunción de la soberanía —en Cartagena asumiéndola la provincia—, al declarar: "nosotros los representantes del buen pueblo de Cartagena de Indias, con su expreso y público consentimiento, poniendo por testigo al ser supremo de la rectitud de nuestros procederes, y por árbitro al mundo imparcial de la justicia de nuestra causa, declaramos solemnemente a la faz del mundo: que la provincia de Cartagena de Indias es desde hoy de hecho y de derecho, *estado libre soberano e independiente*, que se halla absuelto de toda sumisión, vasallaje, obediencia y de todo vínculo de cualquier clase que fuese, que anteriormente lo ligase con la corona y gobierno de España...".

* * *

En las *Actas de Independencia de América*, editadas por la Unión Panamericana, y a las que ya nos referimos, se publica como la de Colombia el Acta del Cabildo Abierto de 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. En el documento consta la creación de una junta que, presidida por el virrey Antonio Amar, ejercería el *Supremo Gobierno del Reino*, integrada por los individuos del Cabildo y otros cuya aprobación se sometió al pueblo reunido, una multitud "que pasa de nueve mil personas que se hallan armadas", según la propia acta.

De acuerdo con el Acta de Santa Fe el gobierno se deposita en la Junta, "interinamente, mientras la misma Junta forma la Constitución que afiance la felicidad pública, contando con las nobles provincias, a las que en el instante se les pedirán sus Diputados, formando este cuerpo el reglamento de elecciones en dichas provincias, y tanto éste como la Constitución de Gobierno debieran formarse sobre las bases de libertad, independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo, cuya representación deberá residir en esta capital, para que vele por la seguridad de Nueva Granada, que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto Monarca Don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo Gobierno a la Superior Junta de Regencia ínterin exista en la Península, y sobre la Constitución que le dé el pueblo".[55]

La fecha del acta es conmemorable, como los días de mayo de 1810 en Buenos Aires. Mas en Buenos Aires no se consideran las actas de los cabildos abiertos como los documentos de la declaración de independencia de las Provincias del Plata. En México conmemoramos el 16 de septiembre, pero "el grito de independencia" del padre Hidalgo en Dolores es el de la insurgencia que todavía no adopta la forma de una declaración de independencia absoluta, como en el Acta Solemne del Congreso de Anáhuac de 6 de noviembre de 1813.

[54] El Acta de la Independencia de Cartagena de Indias, de 11 de noviembre de 1811, se reproduce en *El Grito del Sud*, los días 17, 24 de noviembre y 8 de diciembre de 1812, al igual que sesiones del Congreso de Venezuela, como modelo a la emancipación de las Provincias del Plata.

[55] *Actas de Independencia de América*. Washington, 1955, pp. 25-28.

La insurgencia emancipadora es un proceso que tiene un sentido, pero que en los acontecimientos que se suceden, a partir de 1808 y 1810, se va desentrañando en sus mismas contradicciones y conflictos internos. En Santa Fe, como en Buenos Aires —no podemos extendernos a mencionar, por ejemplo, Quito, Santiago o el Alto Perú—, el pueblo está presente y da su adhesión a las fórmulas criollas de la inicial emancipación. "El pueblo de Santa Fe al que se había lisonjeado con las ideas de libertad que no entendía, y con el título de *Soberano*, tuvo el mando por algunos días", escribe Juan Manuel Restrepo de los días de julio de 1810.

La fórmula del día 20 se mudaría muy pronto. El 25 de julio se toma preso al virrey y el 26 la Junta desconoce el Consejo de Regencia, declarando nulo el juramento del 20, mas reiterando su fidelidad a Fernando VII, en cuyo nombre y hasta su libertad gobernaría la Junta. El 29 de julio la Junta invita a las provincias de Nueva Granada a enviar diputados para formar el gobierno provisional que, a su vez, convocará a unas Cortes del virreinato, manteniendo la fidelidad al rey y a la religión. Cada junta provincial fijaría su propio procedimiento electoral, aunque la Junta propone ahora un régimen central abandonando el *federativo* de que se hablaba en el acta del 20 de ese mismo mes de julio.

El 15 de agosto el virrey Amar sale hacia España por acuerdo de la Junta.

No se ha declarado la independencia absoluta, mas el proceso hacia ella parecería corresponder a una deliberada estrategia revolucionaria. No lo es, pero la revolución impone su propio sentido.

A ejemplo de Santa Fe, las provincias, y aun ciudades por sí mismas, crean sus propias juntas, y algunas niegan su reconocimiento a la de la capital del virreinato. Los conatos de guerra civil entre provincias y ciudades son ya un estado de anarquía. El vacío de la autoridad metropolitana no lo ha llenado la revolución.

El 19 de septiembre, Cartagena convoca a las provincias a elegir diputados a un Congreso federal. "Es mucho mejor —expresa Cartagena— establecer desde ahora un sistema federal en que se hallen divididos los poderes, pues sin esta división no puede existir la libertad". Santa Fe, denuncia Cartagena, tiene el propósito de "formar una junta central como en España, gobierno monstruoso que atraería grandes males...".[56]

El Congreso se reuniría en Medellín.

Bajo el fidelismo a Fernando VII se produce el enfrentamiento entre centralistas y federales. "El sistema federativo es el único que puede ser adaptable en un reino de población tan dispersa, y de una extensión mucho mayor que toda España", expone Cartagena. "Cada provincia medirá sus deseos y sus necesidades con sus medios y arbitrios, y éstos se multiplicarán con la presencia de la necesidad e importancia del pensamiento proyectado, y sobre todo con la facultad de examinar, deliberar y ejecutar que tendrá cada una".[57] La polémica está abierta. No es nuestro tema. Sólo señalamos el hecho.

Ante la situación, la Junta de Santa Fe convocó a diputados elegidos por los padres de familia de la provincia de Cundinamarca, que se reunieron con el título de "Colegio Constituyente y Electoral de esta Provincia de Cundinamarca". El 30 de marzo de 1811 el Colegio

[56] Citado por José Manuel Restrepo, *op. cit.*, tomo I, p. 89.

[57] Citado por J. de la Vega, *La Federación en Colombia (1810-1812)*, Bogotá, 1952, p. 39.

Constituyente firmó la Constitución de Cundinamarca. "Don Fernando VII —expresa el decreto de promulgación de 4 de abril— por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento del pueblo, legítima y constitucionalmente representado, Rey de los cundinamarqueses, etc., y a su Real nombre, don Jorge Tadeo Lozano, Presidente constitucional del Estado de Cundinamarca, a todos los moradores estantes y habitantes de él. Sabed: que reunido por medio de representantes libre, pacífica y legalmente el pueblo soberano que la habita en esta capital de Santa Fe de Bogotá, con el fin de acordar la forma de gobierno que considerase más propia para hacer la felicidad pública; usando de la facultad que concedió Dios al hombre de reunirse en sociedad con sus semejantes, bajo pactos y condiciones que le afiancen el goce y conservación de los sagrados e imprescriptibles derechos de libertad, seguridad y propiedad; ha dictado, convenido y sancionado las leyes fundamentales del Estado o Código constitucional que se ha publicado...".[58]

Suprimida la apelación a Fernando VII, el decreto de promulgación puede ser el preámbulo a una declaración de independencia absoluta de Cundinamarca. El artículo 1 de la Constitución expresa: "La representación, libre y legítimamente constituida por elección y consentimiento del pueblo de esta provincia, que con su libertad ha recuperado, adopta y desea conservar su primitivo y original nombre de Cundinamarca, convencida y cierta de que el pueblo a quien representa ha reasumido su soberanía, recobrando la plenitud de sus derechos, lo mismo que todos los que son parte de la Monarquía española, desde el momento en que fue cautivado por el emperador de los franceses el señor don Fernando VII, Rey legítimo de España y de las Indias, llamado al trono por los votos de la nación...". El mismo artículo 1 explica la necesidad de la Constitución, "que siendo una barrera contra el despotismo, sea al mismo tiempo el mejor garante de los derechos imprescriptibles del hombre y del ciudadano, estableciendo el Trono de la Justicia...".

Las redundancias en las citas de los documentos americanos son la más explícita corroboración de la unidad en el significado único de las ocurrencias. En la Constitución de 30 de marzo se vuelve sobre los sucesos del 20 de julio del año anterior, en el mismo artículo 1 de ella, para reorientar su sentido al hablar de que ese día "fueron depuestas las autoridades que constantemente le habían impedido este precioso goce", el de ejercer el pueblo los derechos de su soberanía.

Todo sigue ocurriendo dentro del fidelismo a Fernando VII. El fidelismo, auténtico o no, a partir de 1808 es el interregno entre el acceso de la proposición de una soberanía de la que es titular en América el reino, la nación o el pueblo —no importa la palabra—, y la asunción plena de ella al declarar la ruptura con el antiguo régimen y con la metrópoli. La soberanía, una vez subvertida, no puede ser en América una donación metropolitana sujeta al ejercicio que se le prescriba.

No vamos a seguir las narraciones de los sucesos en Nueva Granada, la proliferación de las juntas provinciales y de las que se creaban con pretensiones de constituir nuevas provincias.

[58] Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, *Constituciones de Colombia*, Bogotá, 1911. La obra reproduce en el tomo I, los textos constitucionales que se citan.

* * *

En Cundinamarca el Poder Ejecutivo quedó a cargo de José Tadeo Lozano, presidente de la Representación Nacional en ausencia de Fernando VII. Pronto, el precursor de la independencia y antifederalista beligerante, Antonio Nariño, interviene en el derrocamiento de Lozano, el 19 de septiembre de 1811, y es nombrado por la misma Representación presidente del Poder Ejecutivo. Para entonces se encuentran reunidos en Santa Fe diputados de nueve provincias, quienes continúan sus sesiones preparatorias para instalar el Congreso de las provincias de Nueva Granada. El Congreso inicia sus debates sobre la forma de gobierno, examinando la de Estados Unidos de América, y comisiona al doctor Camilo Torres para redactarla. El documento aprobado con el título de Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada se promulgó el 27 de noviembre de 1811, 26 días después de la declaración de independencia absoluta de Cartagena.

El Acta de Federación es un pacto que norma las atribuciones y deberes del Congreso de las Provincias Unidas, "conservador de los derechos de los pueblos, y director de sus medios y recursos" (art. 9), sin crearse en el acta el poder ejecutivo de la federación. Nos importa señalar el preámbulo en el que se reitera una vez más la fórmula: "Nos los representantes de las provincias de Nueva Granada... convenidos en virtud de los plenos poderes que al efecto hemos sido autorizados... considerando la larga serie de sucesos en la península de España, nuestra antigua metrópoli... y últimamente los derechos indisputables que tiene el gran pueblo de estas provincias, como todos los demás del universo, para mirar por su propia conservación, y darse para ella la forma de gobierno que más le acomode, siguiendo el espíritu, las instrucciones y la expresa y terminante voluntad de todas nuestras dichas provincias, que general, formal y solemnemente han proclamado sus deseos de unirse a una autoridad federativa, que remitiendo a la totalidad del Gobierno General las facultades propias y privativas de un solo cuerpo de nación reserve para cada una de las provincias su libertad, su soberanía y su independencia en lo que no sea del interés común... y reservando para mejor ocasión o tiempos más tranquilos la Constitución que arreglará definitivamente los intereses de este gran pueblo...".

Por la influencia antifederal de Nariño el diputado por Cundinamarca y otros no firmaron el acta.

Si en algún documento consta en Nueva Granada el ejercicio independiente de la potestad constitutiva de un pueblo, no de una provincia aislada, sin aludir siquiera al nombre de Fernando, es en el Acta de Federación de 27 de noviembre de 1811. Según José de la Vega, el acta "era en el fondo copia del pacto que con el nombre de *Artículos de la Confederación* suscribieron los trece Estados de la Unión Americana".[59]

La adopción del modelo impone la de su significado.

* * *

Después de tres siglos de absolutismo central personificado en el monarca, al producirse en el imperio la ruptura de la tensión, racionalizada en esa hora por la subversión de la soberanía,

[59] J. de la Vega, *op. cit.*, p. 52.

los pueblos se proyectan en un movimiento centrífugo, tanto más acentuado cuanto más sólida había sido la cohesión del poder metropolitano que se repudia.

La dispersión en Nueva Granada se acelera acuciada por los intereses y motivos más accesorios e inmediatos, y por rivalidades como la de Cartagena y Santa Fe. En 1811 se promulgan documentos constitucionales como los de las provincias de Cundinamarca (30 de marzo), y de Tunja (9 de diciembre) ; y en 1812, las de Antioquia (21 de marzo), de Cartagena (14 de junio), y de Cundinamarca (17 de abril).

Nuevos diputados a la "Representación Nacional" de Cundinamarca se habían elegido con expresos poderes para revisar la Constitución de 30 de marzo de 1811. La nueva Constitución de 1812 se inicia con una declaración de los *Derechos del Hombre y sus Deberes*. "La soberanía, residiendo en la universalidad de los ciudadanos, es una, indivisible e inenajenable", expresa el artículo 10 de ella. El título II de la Constitución, "De la forma de gobierno", establece en su artículo 1, "El Estado de Cundinamarca es una República cuyo gobierno es popular representativo". El 2 instituye la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No nos referiremos a las peculiaridades de la parte orgánica, consignando únicamente que el Ejecutivo se compone de "un Presidente y dos consejeros, todos tres con voto deliberativo" (art. 1 del título V), renovándose cada año uno de sus individuos (art. 30) por elección del Colegio Electoral, cuerpo que se integra a través de una elección de dos grados, y cuyas únicas funciones son las de elegir al poder ejecutivo, a los senadores, a los miembros del Tribunal de Residencia, y revisar la Constitución (título IX *passim*, y arts. 44 a 45 del mismo título).

La Constitución republicana de Cundinamarca de 12 de abril de 1812 consuma el desprendimiento total de la metrópoli. No obstante, con retraso y a través de la guerra civil, Cundinamarca cumplirá también con el ritual de una formal declaración de independencia absoluta de España. Ante una ofensiva realista y a iniciativa del general Nariño, ya legalmente dictador del estado, se aprobó el 16 de julio de 1813 por el Colegio Electoral. La fórmula se repite una vez más: "Nos, los representantes del pueblo de Cundinamarca, legítima y legalmente congregados para tratar y resolver lo concerniente a su felicidad, habiendo tomado en consideración el importante punto de si era ya llegado el caso de proclamar solemnemente nuestra absoluta y entera independencia de la corona y gobierno de España, por la emancipación en que naturalmente hemos quedado después de los acontecimientos y disolución de la Península y gobierno de que dependíamos...".

No se historian ampliamente los acontecimientos en España, pero se mencionan "los solemnes juramentos que nos unían a la madre patria", los "tres años en que hemos mantenido un estado de expectación y de neutralidad respecto a los sucesos de la España europea", la amenaza de una invasión de Nueva Granada por fuerzas realistas, el abandono de España por las abdicaciones de los Borbones en Napoleón, y la ocupación francesa de la península. Todos, hechos por los que "las Américas se han visto en la precisión de proveer a su seguridad interior dándose un gobierno provisional, entretanto que con el transcurso del tiempo y el curso de los sucesos deliberaban el partido definitivo que debían tomar, y que habiendo pasado ya el tiempo de tres años sin que esta moderada conducta les haya valido para que los españoles peninsulares, desconociendo en las Américas los mismos principios que ellos han proclamado en Europa, no sólo hayan dejado de molestarles, sino que, declarándoles una guerra abierta, las han tratado a todas partes como insurgentes... manchando el suelo americano con la sangre de los

mismos españoles americanos y europeos:.. ya que estos males se acercan ya sobre la Provincia de Cundinamarca, que no sólo no había hecho un formal desconocimiento del Rey Fernando, sino que era asilo de cuantos españoles europeos se veían perseguidos en otras partes, y a lo impolítico y bárbaro que sería seguir en el mismo estado", han resuelto obrar.

"En consecuencia de todo esto —se declara—, y en atención, finalmente, al derecho incontestable e imprescriptible que tienen todos los pueblos de la tierra de proveer a su seguridad y de darse la forma de gobierno que crean más conveniente a labrar su felicidad; nosotros los representantes del pueblo de Cundinamarca, usando de este derecho y compelidos a adelantar este paso por los esfuerzos de nuestros impolíticos y crueles opresores, declaramos pública y solemnemente, en nombre del pueblo, en presencia del Supremo Ser, y bajo los auspicios de la Inmaculada Concepción de María Santísima, patrona nuestra, que de hoy en adelante, Cundinamarca es un estado libre e independiente, que queda separado para siempre de la corona y gobierno de España, y de toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o de sus representantes; que toda unión política de dependencia con la Metrópoli está rota enteramente...".[60]

* * *

Un mes antes de la firma del Acta de Independencia, y ante la división de las provincias entre federalistas y centralistas, y su enfrentamiento a Camilo Torres, cedió Nariño el 13 de junio y propuso al Congreso de Cundinamarca entrar a la federación, "no porque éste sea el mejor sistema —aclaró— sino porque es el único camino que nos queda para no concluir inmediatamente con nuestra libertad y nuestra independencia".[61]

La historia del periodo de la "patria boba" concluye con el intento de crear una autoridad central en los ramos de Hacienda y Guerra, por la reforma de 25 de septiembre de 1814 al Acta Federal; y las reformas al ejecutivo de 21 de octubre de 1814 y 15 de diciembre de 1815. La solución, si lo era, llegaba tardía. El centralismo de Cundinamarca y el Congreso Federal habían dividido la Nueva Granada. El 15 de marzo de 1813 el general Nariño había caído en poder de las fuerzas realistas, después de separarse del Poder Ejecutivo para entrar en campaña contra ellas, y de frustrarse la unión de los partidos colombianos.

No es nuestro tema la historia constitucional ni la guerra civil ni la de independencia en contra de los españoles, sino la sola referencia a los documentos en los que se declara la independencia.

A siglo y medio de la emancipación, un autor colombiano, entre otros americanos, se duele de que "el repudio, ya inconsciente ya deliberado de la tradición católica e hispánica que durante tres siglos presidió toda la vida colonial, nos hizo adoptar el sistema liberal imperante en Europa al asumir Latinoamérica su autonomía política", sistema propio de una evolución que pasó del feudalismo al absolutismo, y de éste al triunfo de la burguesía. El estado burgués liberal de derecho desvertebra a Iberoamérica, "lanzándola prematuramente del coherente y firme ordenamiento político-administrativo de la etapa colonial a la aventura revo-

[60] Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, *op. cit.*, pp. 486-494.

[61] J. de la Vega, *op. cit.*, p. 63.

lucionaria de cambiar lo propio, lo ya experimentado y reconocido como conveniente, por lo exótico, desatando la guerra civil crónica...". Los tres siglos coloniales son "prueba irrefragable de la bondad de aquella administración".[62]

Hacemos la cita no para intentar una improcedente refutación, tan anacrónica como la emotividad ideológica que dicta aquélla.

* * *

Sin aludir siquiera a las causas de la independencia, los pronósticos de ella venían de muy atrás. Entre los más recientes, dos coinciden sorprendentemente: el dictamen reservado de 1783, del conde de Aranda a Carlos III, y la representación del intendente del Ejército y la Real Hacienda en Venezuela, José de Ávalos, de 24 de septiembre de 1781, dirigido también a Carlos III. Son dos las perspectivas que los orientan, la europea de Aranda cuando se firma el Tratado de París, haciendo la paz entre Inglaterra y Francia y España, y sancionando la independencia de Estados Unidos de América, y la perspectiva americana de un funcionario colonial ante las rebeliones comuneras de Nueva Granada y de Tupac-Amaru en el Perú, y la lejana guerra de independencia de los anglosajones del norte. En "el vehemente deseo de la independencia y, siempre que las cosas permanezcan bajo el actual sistema —advierte Ávalos al rey—, estoy convencido con bastante dolor mío el que sin tardar largo tiempo se verificaría el intento de conseguirla, para lo que no cesarían de influir los enemigos de la Corona".[63]

Si Ávalos era uno de los "pequeños ilustrados", como lo califica Muñoz Oraá, el conde de Aranda fue uno de los más distinguidos, jefe del partido aragonés y amigo de los enciclopedistas. Ninguno de los dos un liberal, aunque 30 años más tarde tal vez hubieran podido serlo. La división de América en monarquías borbónicas independientes, ligadas por otro "pacto de familia", o bajo la tutela de un emperador —el rey de España en el dictamen de Aranda—, no significaba un acontecimiento revolucionario, en el sentido que ya lo tenía la independencia de Estados Unidos, sino la consolidación del antiguo régimen del despotismo ilustrado de España dentro de una forma nueva de integración, salvando los intereses borbónicos.

Cuando hoy Sachica habla del firme ordenamiento político-administrativo de la etapa colonial, ya experimentado y reconocido como conveniente, y de la tradición católica e hispánica *que se repudió*, la pregunta obligada es cuáles eran esa tradición católica e hispánica y ese ordenamiento conveniente que se abandonaron al emanciparse la América, y qué de ambos debió o podía conservarse, porque, por ejemplo, la ortodoxia católica nunca fue repudiada. Según Sachica, "una ampliación moderada de la autonomía local y el otorgamiento de un tratamiento igual entre las provincias americanas y la metrópoli, como el sugerido por Torres (Camilo)", era cuanto se requería para mantener la unidad del imperio y evitar la revolución. Esto es, una limitada reforma en el régimen colonial lo haría sobrevivir. Pero esto es ignorar la revolución liberal española. Además, ¿el antiguo régimen del despotismo ilustrado, o el ab-

[62] Luis Carlos Sachica, *Constitucionalismo colombiano*, Bogotá, 1966, pp. 28-29.

[63] El documento de Ávalos en *La independencia de América. Pronóstico y proyecto de monarquía*, por Carlos E. Muñoz Oraá, Mérida, Venezuela, 1962, pp. 27-36.

solutista de los Austrias, son la tradición católica hispánica a la que es verbalmente tan fiel la tradición conservadora? ¿O bien, como los autores del proyecto español de Constitución en 1811, debemos remontarnos a la *edad de oro* de las leyes fundamentales del reino, a los Trastámara, y aun a los siglos góticos?

Más que la defensa de una tradición se trata de un rechazo de liberalismo, sin proponer una opción contemporánea a la revolución, opción que tampoco existía para la insurgencia en la que el idioma ideológico fue, y no podía ser históricamente otro, el mismo que el de la revolución europea. Análogo suceso al de la revolución del siglo XX, cuando en la descolonización de África y Asia se emplea el mismo lenguaje revolucionario de las metrópolis europeas. Incluso cuando la China, con una cultura milenaria propia, lleva a cabo su revolución adoptando y adaptando una ideología revolucionaria tan occidental como la marxista. El problema es más amplio, permanente y profundo. Hoy se habla de que un tercer mundo vive bajo una dependencia tecnológica. Hemos vivido y vivimos también bajo una ideológica, en la que comenzamos a elaborar limitadamente, o a desear hacerlo, fórmulas y soluciones emancipadas.

En los años diez de nuestra primera emancipación se declara una doble ruptura, con el poder metropolitano y con el antiguo régimen. La primera estaba prevista de tiempo atrás, la segunda se debatiría entre lo que niega y el que debe ser su proyecto revolucionario, avanzando, en las palabras de Debray, "con la máscara de la escena precedente", la del fidelismo al monarca cautivo, por ello mismo hipotético. Frente al suceso americano, la revolución liberal española a través de sus proclamaciones subversivas enmascara, a su vez, al nada insólito revolucionario colonialista. Más de un siglo y medio después la izquierda y los liberales franceses adoptarán el mismo expediente que los liberales de España, declarando a Argelia parte integrante de la república, con derecho a diputados al cuerpo legislativo nacional, escamoteando la independencia y mediatizando, al tutelarla, la revolución en la colonia.

La revolución de independencia en América se produce además en una instancia histórica. La revolución está predeterminada, escribe H. Arendt refiriéndose a la francesa, "por el tipo de gobierno que viene a derrocar; nada por tanto más plausible como explicar el nuevo principio absoluto, la revolución absoluta, en función de la monarquía absoluta que le precedió, y llegar así a la conclusión de que cuanto más absoluto sea el gobierno más absoluta será la revolución que le remplaza". Y pone el ejemplo de la Revolución rusa de nuestro siglo.[64] "La ruptura entre el rey y el parlamento arrojó a toda la nación francesa —escribe también— a un *estado de naturaleza*, disolvió automáticamente la estructura política del país, así como los vínculos que unían a sus habitantes, los cuales no dependían de promesas mutuas, sino de los diversos privilegios conferidos a cada orden y estamento de la sociedad".[65]

En ningún territorio de América esa virtualidad se proyecta en una mayor dispersión que en Nueva Granada al producirse la inicial ruptura con el poder metropolitano. La asunción de la soberanía no se lleva a cabo reconociendo siquiera el centro regional del poder colonial. Habrá tantas soberanías cuantas sean las comunidades que las proclamen. Pero lo utópico debe ceder frente a la realidad, y a través de penosos esfuerzos se restaura la unidad territorial y

[64] Hanna Arendt, *op. cit.*, p. 166.
[65] *Ibid.*, p. 192.

política preexistente, la que ciertamente se había integrado en el régimen colonial de tres siglos, y que como tal entidad proclama su independencia. Esa unidad debe ser restaurada, pactada y conformada en términos conciliadores que son, y el antifederalista Nariño lo acepta, los de una federación. Otros problemas son los de su viabilidad, y la de las instituciones liberales y democráticas, una vez declarada la ruptura con la metrópoli y en guerra con ella.

Mas lo que debe señalarse aquí no es tanto la dispersión en las primeras horas en las que se va proponiendo la emancipación, la polémica sobre las formas de gobierno, "la anarquía" como se le ha calificado, sino la sustancial identidad en el proceso de la ruptura, en los desconciertos y en los conflictos internos —en Nueva Granada y en la América española toda—, y la identidad en las proclamaciones sobre el ente histórico que se emancipa.

Parte cuarta

LA INDEPENDENCIA MONÁRQUICA

1

LAS CORTES ANTE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

En tanto en México se consuma la independencia con el Tratado de Córdoba y la ocupación de la ciudad de México, instalándose la que a sí misma se tituló Soberana Junta Provisional Gubernativa con los individuos designados por el general Iturbide, llegan a España noticias de los sucesos cuando están reunidas las Cortes Extraordinarias.

El 30 de junio de 1821 las Cortes habían clausurado su periodo ordinario de sesiones, sin tomar, ni ellas ni el gobierno, ningún acuerdo definitivo sobre las Américas. En su discurso de clausura el rey comentó, entre convencionales y nada convincentes declaraciones sobre las bondades y la estabilidad de la Constitución, que el "tratado con los Estados Unidos que termina nuestras diferencias con aquel gobierno, y comprende la cesión de las Floridas", se aprobó en Norteamérica y se canjearon las ratificaciones, restando sólo la fijación de límites que realizaría una comisión, "por lo que me lisonjeo —expresa Fernando— de que nuestras relaciones con aquel país no sufrirán ya en lo sucesivo la menor alteración". Concluye así, con el decreto de las Cortes de 23 de mayo de 1821, la segunda expansión de Estados Unidos en territorios de la América española continental, expansión a la que había dado formal aceptación Fernando VII, como rey absoluto, en el Tratado de 22 de febrero de 1819 firmado en Washington por Luis de Onís, embajador español, y John Quincy Adams, secretario de Estado, aceptando España la pérdida de las Floridas y renunciando a toda futura reclamación sobre la Luisiana.[1]

En lo sucesivo las alteraciones que menciona el rey las sufriría el México independiente.

Fernando VII ofrece en su discurso de clausura que hará "todo género de esfuerzos para conseguir el restablecimiento del orden en las provincias de Ultramar..., excitado últimamente por las Cortes, para que, tomando en consideración el estado de aquellos países, proponga las medidas que considere oportunas para su bien..., porque deben estar ciertos los Españoles de ambos hemisferios, de que nada anhelo tanto como su felicidad, fundada en la integridad de la monarquía, y en la observancia de la Constitución".[2]

Los diez años de guerra en América no merecieron más que esas vagas y lacónicas frases del monarca.

El 13 de agosto, y obligado, el rey pide a la diputación permanente un periodo extraordinario de sesiones para tratar de la división del territorio español y su gobierno político, del proyecto sobre establecimientos de beneficencia, "de las medidas que el gobierno proponga a

[1] *Colección de órdenes y decretos de las Cortes*, tomo VII, p. 112.

[2] Maximiano García Venero, *op. cit.*, pp. 42-413.

las Cortes a fin de conseguir la tranquilidad y promover el bien de las Américas", del proyecto del código criminal, de la reforma de aranceles, y otros asuntos.[3]

El 28 de septiembre se efectuó la sesión de apertura de las Cortes Extraordinarias, en una situación de clara y mutua desconfianza, y aun de conflicto entre ellas y el rey, y de las ininterrumpidas conspiraciones absolutistas y la agitación de los radicales enemigos del ministerio.

En el periodo extraordinario, y habiéndose incorporado a las Cortes diputados americanos, aunque no todos los elegidos, las Cortes acordaron, en contra de la inconformidad de ellos, que cesaran los diputados suplentes que se habían nombrado en Madrid en 1820. Así cesaron los siete diputados por Nueva España entre los que figuraban Miguel Ramos Arizpe, José María Couto, Juan de Dios Cañedo, Mariano Michelena y Francisco Fagoaga.

Lucas Alamán, que había llegado a Madrid como diputado por Guanajuato, expone la situación, sin precisar fechas. Habla de cartas de Iturbide a Gómez Navarrete y a otros diputados amigos suyos pidiéndoles que promuevan la aprobación del Tratado de Córdoba, pero sin darles un "encargo público", dejando el resultado a los informes de O'Donojú y de sus comisionados. Los diputados que recibían las comunicaciones de Iturbide, persuadidos de la oposición de Fernando VII a reconocer la independencia de México, entraban en relaciones con los infantes españoles, directamente con Francisco de Paula, y "se trató de que éste, evadiéndose de Madrid, partiese ocultamente a Lisboa para embarcarse de allí y pasar a México". El rey, informado, prohibió la entrada de los mexicanos a palacio. En la intriga tomaba parte el general Quiroga en favor de las gestiones mexicanas. Alamán, partícipe o no —él no lo aclara—, cuenta una anécdota de los diputados eclesiásticos y monarquistas que mencionaban al infante con el título de emperador. En una entrevista con Franciso de Paula uno de ellos consideró desacato tocarle la mano y se cubrió la suya "con el manteo" al tomársela.[4]

Mas los diputados mexicanos están divididos entre monarquistas y republicanos. "Esta diferencia de opinión —escribe Alamán— produjo desazones que vinieron a ser andando el tiempo enemistades personales".[5] Alamán no nos dice cuál partido tomaba, y si con "el fuego de la juventud y una imaginación viva... incurrió en algunas especies que no sostendría ahora", como cuando años después escribe en su *Historia* al referirse a la representación de los diputados americanos que redactó y se presentó a las Cortes el 25 de junio de ese año de 1821.

A esa representación no atenderemos aquí, pero no debiendo ignorarla la incluimos como anexo 1. Atendemos al solo desenlace que suscitaron en España el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Sigamos el relato de Alamán, partícipe de los sucesos en las Cortes. Las diversas opiniones entre los diputados mexicanos "llegó a ser un verdadero rompimiento —continúa—, habiéndose formado entre aquel corto número... los mismos partidos que dividirían la opinión en el Congreso mexicano".[6]

[3] *Ibid.*, p. 418.
[4] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo v, p. 519.
[5] *Ibid.*, p. 518-519.
[6] *Ibid.*, p. 519.

* * *

El Plan de Iguala y el progreso de la insurrección iturbidista son conocidos en España. El 26 de octubre, el diputado por Caracas, Felipe Fermín Paul —que fuera diputado en el Congreso de Venezuela y firmante del Acta de Independencia de 5 de julio de 1811—, toma la palabra en las Cortes y pide se trate el problema de América. La obra de las Cortes es admirable, dice, mas si un diputado americano vuelve los ojos a su país "sumergido en los horrores de una guerra civil... no puede menos de manifestar su grande sentimiento. Yo me veo en la necesidad o de interrumpir las graves tareas del Congreso o de cargar con toda la ignominia de mis comitentes". El gobierno ofreció que propondría a las Cortes las medidas de pacificación que debían tomarse. En cuatro meses no lo ha hecho. Llegó el tiempo que debe hacerlo a través del secretario de la Gobernación de Ultramar.[7]

Después de su representación de junio anterior, los diputados mexicanos, según Alamán, con noticias de los progresos de la independencia en México, "no querían que se tomase medida alguna hasta que ella estuviese consumada". Pero Alamán, que no menciona su intervención en el debate, habla en contra de la proposición de Paul, "porque creo que la que su señoría propone no es oportuna en estas circunstancias. Las Cortes, a mi entender —manifiesta—, han hecho todo lo que está en sus facultades con respecto a esta materia". Una comisión especial de ellas, de la que forma parte Toreno, acordó un plan —en esencia el de los diputados americanos presentado en junio—, que al no ser aprobado por el gobierno tuvo por resultado la proposición de medidas únicamente generales, y una de ellas, que las Cortes excitasen al gobierno para que, a su vez, les expusiese lo conveniente sobre el plan que debía adoptarse. Las Cortes ya excitaron al ministerio en dos ocasiones, aclara Alamán, y no se ve el objeto de hacerlo de nuevo. En la intervención de Alamán el propósito de demorar toda resolución es tan claro como su ironía. "El triste resultado de la última campaña de Costafirme —continúa Alamán—, y el rápido progreso de la revolución de Nueva España, progreso que era tan fácil de prever desde un principio, y que con tanta claridad anunció el virrey de México, debe haberle demostrado (al gobierno) que los momentos son preciosos; que las dificultades crecen día a día, de tal manera que si hace seis meses eran como uno, hoy son como doscientos, y que cualquiera que sean las medidas que hayan de tomarse, podría muy bien ser que dentro de poco sean ya fuera de tiempo, y que no produzcan fruto alguno. Cuando todas estas razones no estuviesen al alcance del gobierno –agrega– la voz pública habría indicado este negocio como uno de los primeros que debían someterse a la consideración de las Cortes... Por lo tanto yo creo que las Cortes han hecho por su parte cuanto han debido hacer: Fundado en estos principios no creo —termina— que las Cortes deban dar paso alguno sobre los ya dados...".

Pero la ironía más extraordinaria e involuntaria es la del secretario de Guerra, presente en la sesión, y quien después de escuchar a Alamán informa a las Cortes, "que por lo que pertenecía a su ramo podía asegurar haberse tomado cuantas medidas había creído conducentes, habiendo ya más de 500 voluntarios para reemplazar a los cumplidos en América", y opinan-

[7] Diario de las actas y discusiones de las Cortes Extraordinarias del año de 1821, tomo tercero, Madrid, 1821, sesión del día.

do que, en todo caso, sería conveniente que asistiese al debate el secretario de la Gobernación de Ultramar.

Los sucesos de América eran conocidos: el 24 de junio de 1821, Bolívar había derrotado en Carabobo al ejército realista y recuperado Caracas. El 6 de mayo de 1821 se había instalado el Congreso de Cúcuta, que promulgaría el 6 de octubre siguiente la Constitución que unió hasta 1830 a Colombia y Venezuela. El armisticio de Bolívar y Morillo de 25 de noviembre de 1820 fue fugaz. Morillo salió de regreso a España el 17 de diciembre, y llegó a Madrid el 13 de abril de 1821. El 18 de julio de ese año, San Martín declara desde Lima la independencia del Perú. El 24 de febrero del mismo año de 1821, Iturbide proclama el Plan de Iguala, y el 24 de agosto firma con O'Donojú el Tratado de Córdoba, entrando a la ciudad de México el 27 de septiembre.

Excepto la noticia sobre el Tratado de Córdoba, las de América no pueden ser más concluyentes en su desahucio para España.

El debate en las Cortes continúa. Juan Esteban Milla, diputado por Guatemala, considera que si el secretario de ultramar tuviese algo que comunicar a las Cortes ya lo hubiese hecho, por tratarse de uno de los asuntos para las que fueron convocadas. Los acontecimientos en México, el progreso de la insurrección, "y especialmente el carácter seductor que ésta presenta, muy distinto del de sangre y horror con que apareció en el año 10, hacen temer tristes resultados", reflexiona Milla. No entramos en los detalles del discurso, que apoya la proposición de Paul. "Iturbide ofrece conveniencias, presenta bases muy liberales, ofrece que todos entrarán en el goce de los derechos; y promete a los eclesiásticos dejarlos en pacífica posesión de sus bienes, y en fin presenta las bases más interesantes. Esto —observa Milla para concluir—, hace más urgente y gravísimo el mal...".

La inanidad del debate en sí, y la del gobierno, son más alarmantes para España que los mismos sucesos de América. Una mezcla de ceguera y malicia la hallamos en el conde de Toreno. No es asunto de las Cortes sino de la diputación permanente —manifiesta— excitar al gobierno para que trate el asunto, del que no deben ellas ocuparse más. Su argumento es asombroso: "si se quiere anticipar esta cuestión antes que llegue la ocasión oportuna, me parece que no se hará más que prevenir los ánimos, irritarlos, y que el resultado sea menos favorable para la América y para la Europa". Pero al beligerante liberal colonialista que es Toreno le importa precisar algo sobre "el carácter halagüeño de la insurrección de Nueva España", del que habla Milla. "Yo, si fuera americano —declara—, no quisiera que se me presentara la independencia como la presenta Iturbide; pues cuando en Europa estamos tratando de destruir todos los errores y preocupaciones de la antigüedad, veo que algunas de las bases del señor Iturbide no se dirigen más que a consolidar lo que verdaderamente ha hecho la desgracia de la España europea y ultramarina, que son los privilegios; porque, aun prescindiendo del restablecimiento de la inquisición, que se dice que ofrece, lo que no sé con toda certeza, una de las bases que se anuncian es que se conservarán todos los privilegios del clero secular y regular, esto es, que quedarán el clero, los frailes y los monacales como estaban, y todos estos establecimientos, aunque respetables, tratando de que queden como están en Europa, serán perjudicialísimos". Las Cortes se ocupan de la división del territorio, y según Toreno es el asunto que deben atender. Invita a Paul a que, como individuo que es de la diputación permanente, lleve a ella el asunto al concluir el periodo extraordinario de las Cortes.

Juan Antonio Yandoila, diputado por Vizcaya, apoya a Paul: "para mí no sería extraño que los *disidentes* concluyeran su obra antes que el ministerio haya podido, no digo tomar, sino proponer medidas al cuerpo legislativo", y agrega: "es cosa dura, durísima... el ver al frente de este asunto, y en las circunstancias más críticas y delicadas, a personas de talento tal vez y de conocida inteligencia en otras materias, pero por desgracia ignorantes en las de América... Voy a callar antes de desligarme; pero antes llamaré la atención del congreso hacia un hecho muy notable, y que ha pasado a su vista. En una de las sesiones que tuvo la comisión nombrada por las Cortes para entender en el modo de concluir las disensiones de las Américas, dijo uno de los señores ministros que en aquellos países no existían los elementos necesarios para verificar las innovaciones que proponía la diputación americana; que allí no había más que un puñado de facciosos miserables; y lo cierto es que la comisión nada pudo proponer a las Cortes por haber asegurado el ministerio *que la opinión no se hallaba preparada para una resolución definitiva.* ¿Y en qué tiempo pronunció este fallo el ministerio? Cuando se estaba verificando la revolución más asombrosa en Nueva España; cuando las tropas que habían batido en todas partes a los *insurgentes* abrazaban su partido; cuando los mismos jefes criollos y europeos se ponían a su cabeza... Pregunto: ¿ puede esto suceder si no es a impulso del irresistible torrente de la opinión pública?" Apoya a Paul, y concluyo, dice, "que si es posible pido se haga también una insinuación, a fin de que el enfermo de que hablo (las Américas) sea puesto en manos de médicos más experimentados".

Sometida a votación la propuesta de Paul se aprobó por 78 contra 77 votos,[8] "no habiéndose notado en ninguna otra votación en uno u otro sentido —señala Alamán—, tanta mezcla de diputados europeos y americanos y de los diversos partidos que prevalecían en las Cortes".[9]

* * *

Cuatro meses después el gobierno no había presentado aún a las Cortes ningún plan sobre América. Las Cortes continuaron sus debates ocupándose de los restantes asuntos de la convocatoria, y al tratar la llegada a Bilbao de un cargamento de cacao de Guayaquil en un buque norteamericano, se suscitó de nuevo, el 17 de enero de 1822, la cuestión de América a propósito de los derechos que debían pagarse o no. Alamán cita al diputado mexicano, Pablo La Llave: "Tratar de comercio, de aranceles y materias análogas de ultramar, sin saber el estado de aquellas provincias, es a mi ver lo mismo que si un médico recetase sin tomar el pulso ni saber el achaque de que el enfermo adolece... Las ocurrencias de ultramar tiempo ha que son notorias hasta en los ángulos más oscuros y remotos del universo. La Francia, la Inglaterra y las potencias todas europeas se ocupan con esmero y solicitud: en España, ni aun los niños las ignoran; sábenlas por supuesto los diputados en particular, pero el congreso como congreso de nada de esto tiene noticia... No se diga que el gobierno no tiene medidas que proponer: hay una y una sola que es conocida hasta del último de los peninsulares, que es digna de proponerse en este lugar, digna de la sensatez y generosidad de la nación, digna de la hu-

[8] *Ibid.* En el debate se continuará remitiendo únicamente a la sesión del día que corresponda.

[9] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 521.

manidad y benevolencia del jefe que la preside, y correspondiente en fin y adecuada a los sentimientos amistosos y fraternales de los ultramarinos". Trátase de ella y no de accidentes de comercio. El lenguaje de La Llave no puede ser más claro. No pronuncia la palabra *independencia*, que está en la mente de todos, la aprueben o no.

Pero las palabras quedaron en el aire. Las Cortes, sin resolver siquiera sobre el asunto del cacao, continuaron ese día su debate del código penal.[10]

Siete días después, el 24 de enero, se leyó en las Cortes el dictamen de la comisión de ultramar "sobre las medidas que deberían tomarse con respecto a aquellas provincias", en consideración a las propuestas por el gobierno previa consulta con el Consejo de Estado.

En los primeros párrafos se habla del derramamiento de sangre, de extinguir los odios, de las persecuciones y furores, de "impedir la ruina que pueden hacer algunos gobiernos, fríos espectadores de la lucha... causas muy poderosas para que se piense seriamente en poner término a tantos y tamaños males". Pero las divergencias de los gobiernos en ultramar, sus vicisitudes, los partidos, la incertidumbre de cualquiera medida que se tome, sin oír "las pretensiones de cada uno" y ajustarlas a posibles convenios, impiden que los representantes de la nación arriesguen una ley aplicable a todas las Américas. Por otra parte, las medidas propuestas por el gobierno no satisfacen a la comisión y no las analiza siquiera. Bien sea de ultramar o que se hallen en España, sujetos de inteligencia e integridad deben presentarse en varios puntos de América en donde existan gobiernos, y "oír y recibir por escrito todas las proposiciones que aquéllos hicieren", trasladándolas con su opinión al gobierno. La comisión concluye proponiendo que el gobierno nombre urgentemente los comisionados.

Las Cortes oyeron el dictamen, para debatirlo el 27 de enero, y continuaron tratando del código penal.

"Parece rasgo característico de la raza española en uno y otro hemisferio —escribiría Alamán refiriéndose a la morosidad y las conclusiones en "el negocio más importante que la monarquía tenía"—, excusar ocuparse de los negocios desagradables... o tomar en ellos medidas que en un tiempo pudieron ser útiles, pero que cuando se llegan a dictar son ya fuera de sazón: el silencio parece que se considera el mejor remedio en los casos arduos, o se cree que las cosas han dejado de suceder por no decirlas".[11]

En esos días, la hora de España en América no es ya la del desistimiento, en la que al menos hay una renuncia, sea de sí mismo o de lo que se deja de tener por propio. De sí mismo no lo es en verdad en los hombres que penosamente habían logrado restaurar la Constitución liberal, y que aún avanzaban en su revolución. De lo que tenían por propio, el imperio de América, no se desiste, simplemente se excusan de dar la cara y enfrentarse a una historia que había sido suya. Tres siglos imperiales abruman y fatigan, desconciertan, a los mismos hombres que se proponen arrasar el antiguo régimen español. De éste sobrevive en ellos, los revolucionarios liberales para no mencionar a los absolutistas, no el viejo descubridor, conquistador y poblador, sino su gratuito beneficiario peninsular encerrado en una obstinada y sorda conciencia colonialista.

Jaime Delgado, tan atento y justo en los asuntos de América, contesta el reproche de que

[10] *Ibid.*, pp. 522-523, y en la sesión de Cortes del día 17 de enero de 1822.
[11] *Ibid.*, p. 516.

ni el gobierno ni las Cortes se ocupaban del problema; ambos, dice, "continuaban excitando a todos los organismos estatales a ocuparse del problema americano, y proponen medios para solucionarlo", en tanto el Consejo de Estado no podía rendir el dictamen que se le había pedido por real orden de 10 de agosto de 1821, "sobre las medidas fundamentales para la pacificación de América, *por carecer de los antecedentes necesarios*".[12]

Carecer de antecedentes necesarios y excitar a todos los organismos estatales a proponer medidas para solucionar la cuestión americana, cuando en esa fecha en la América continental se combate por España únicamente en el Alto Perú y en parte del Perú, después de más de diez años de insurgencia, es en los hombres del gobierno la más fantástica de las evasiones de la historia que los cerca.

Lo tratado en el Consejo de Estado, entre el 29 de septiembre y el 3 de noviembre de 1821, lo expone puntualmente Jaime Delgado acudiendo a las actas inéditas de sus sesiones.[13] En el Consejo, el eminente matemático y liberal Gabriel Ciscar propone, en voto particular que es rechazado, el inmediato reconocimiento de la independencia a los países de América. Todavía el 7 de noviembre y ante nueva consulta del gobierno al Consejo, trasmitiéndose los documentos enviados por O'Donojú, Ciscar reitera su voto: "no queda que tomar más partido —expresa— que el de acceder a lo que no hay fuerza ni razón para estorbar... cooperar al establecimiento y consolidación de la independencia de nuestros hermanos ultramarinos, cimentando por medio de federación los únicos enlaces que pueden subsistir entre los habitantes de ambos hemisferios".[14]

* * *

Frente al hecho simple de no poder ignorar los acontecimientos de América y su irresistible consecuencia, rehuir enfrentarse a ellos es la actitud de absolutistas y liberales, ya sólo hipotéticos legatarios de una historia imperial. Uno de los hombres más indisputados en la revolución liberal, José Manuel Quintana, el 8 de febrero de 1824, y en el exilio, escribiría a lord Holland, que muchos atribuyen al gobierno liberal un anhelo "de completar la independencia y emancipación de la América. Esto último ha sido más ostensible —afirma—, así por lo que se deja traslucir en la discusión parlamentaria, así como en las pretensiones que se han visto planteadas inmediatamente después de la restauración del poder absoluto. Yo ignoro si el Rey de España tendría particularmente ofrecida en este punto alguna cosa con anterioridad para tener favorables a los ministros ingleses. Pero después ha hecho bien en negarse a legitimar con su condescendencia la escisión de aquellos dominios, porque es una contradicción bien repugnante querer que el rey consienta en la rebelión de sus vasallos de América y no consienta con los deseos constitucionales de sus vasallos de España".[15] La razón última aparente la da el hombre a quien se acusó de escamotear el proyecto de convocatoria de la Junta Central a Cortes en 1810, sustituyendo los tres brazos tradicionales por un cuerpo único. En

[12] Jaime Delgado, *op. cit.*, tomo I, p. 110.
[13] *Ibid.*, pp. 125-138.
[14] *Ibid.*, pp. 141-142.
[15] Manuel José Quintana, *Obras completas*, Madrid, 1946, pp. 566-567.

1824 el lenguaje de Quintana se modifica hasta el punto de hablar de "aquellos dominios" y de "vasallos".

Desde muy temprano en la restauración constitucional, los siete diputados suplentes por Nueva España habían presentado, fechada el 22 de enero de 1821, la representación que ya citamos pidiendo al secretario de Estado y al Despacho de Guerra el relevo de los jefes españoles en América: "si por una fatalidad inconcebible —se dice en ella— España sigue obrando respecto de la América, sin una notoria justicia y sin una franca y general igualdad... la América por su enorme masa de población, de luces y de riquezas, proponiendo ahora felizmente y dándose por bastante satisfecha con una libertad justa y con una independencia que concilie del modo más interesante y glorioso los verdaderos intereses de ambas Españas; forzada a obrar sí se inclinará fácilmente, siguiendo los pasos de la naturaleza, a una libertad y a una independencia absoluta, sin que España empobrecida, reducida a diez millones de habitantes, dividida dentro de sí, amenazada de fuera y no más ilustrada que la América, pueda con éxito feliz detener los esfuerzos de un continente enorme de dieciocho millones de hombres conocedores de sus derechos... que situados más allá de los mares y poseyendo más los elementos, más preciosos de prosperidad, sólo pueden permanecer unidos por un reconocimiento franco de los principios prácticos de una justicia".

Ese 22 de enero de 1821 la Nueva España era la única parte de América "pacificada", por más que hombres como Odoardo y el mismo Ruiz de Apodaca consideraran precaria la situación.

Las demandas que los diputados americanos hacen en favor de sus países tienen un carácter provisional. Los siete diputados mexicanos son más explícitos en un párrafo anterior: "el Gobierno... debía desplegar toda su sabiduría, y elevándose hasta donde sólo es dado llegar al carácter grande y generoso de los españoles, preparar a esta nación, maestra en sólido saber de todo el universo, la gloria singular y ciertamente inaudita de hacer feliz a medio mundo en un día. Mientras llega ese momento, a que nos aproximan demasiado la naturaleza y las luces del presente siglo... insistiremos en hablar por ahora de medidas subalternas...".

Entre halagos y arrogancias los diputados mexicanos no disimulaban el proyecto final y único de la independencia. Nadie puede ser llamado a engaño por el fidelismo americano. No es ya el insurgente que combate con las armas a los ejércitos realistas de ultramar. Ciertamente el enemigo está en casa, en las bancas de las Cortes, monarquistas o republicanos están ahí, enmascarados en la representación constitucional de sus países y en su inmunidad parlamentaria. Que los diputados americanos, propietarios o suplentes, sean todos partidarios de una independencia absoluta, es menos que aventurado suponerlo. Mas no importa porque, lo sean o no, su presencia se funda en la subversión revolucionaria proclamada en España misma. Y llega la fecha en la que España no podrá eludir más su definición última frente a las Américas.

2

EL DESENLACE EN ESPAÑA

El 27 de enero de 1822 las Cortes tratan el dictamen que su comisión especial presentó el 24. El primero en hablar es Francisco Fernández Golfín, diputado por Badajoz, haciendo suyo un proyecto de Miguel Cabrera de Nevárez, comerciante que ha vivido en Buenos Aires, y fue testigo de la anarquía del año 1820. El dictamen de la comisión propone el envío de comisionados a América para oír y recibir proposiciones de los gobiernos que existan, y transmitirlas al gobierno de España para que resuelvan sobre ellas las Cortes, pudiendo "el gobierno *desde ahora*, tomar providencias, oír las proposiciones que le hicieren personas autorizadas por aquellos gobiernos y pasarlas a las Cortes". Cabrera de Nevárez califica de *ineficaz y perjudicial* el dictamen. Las Américas, dice, hace "once años que están pidiendo su *independencia*: este grito ha resonado en todo el mundo... ¿a qué fin enviar comisionados que lo pregunten? ¿Podemos esperar que su respuesta sea otra que *independencia absoluta*?", se pregunta. "Es indudable que los americanos no entrarán en ningún acomodamiento con nosotros, mientras la base de todo tratado no sea el reconocimiento de su emancipación. Éste ha de ser el término infalible de esta guerra sangrienta y desigual, por mejor decirlo, este término ha llegado... el sistema americano ha llegado al máximo de sus efectos", afirma. Todos los gobiernos de "ambas Américas han jurado no entrar en ningún género de transacción con España, ni recibir ningún enviado que no vaya autorizado expresamente para reconocer su independencia", y como los propuestos no tienen tal facultad es probable que no sean recibidos, como ocurrió en Buenos Aires. Se les verá con desconfianza, se les supondrán miras ocultas, ganar tiempo, y aun promover guerras civiles. No concibe que estando ya en las Cortes los tratados concertados por O'Donojú se piense en enviar comisionados a México a "preguntar qué desean". Cabrera es terminante: "la misión *sin la independencia declarada* es ineficaz para producir el pronto remedio que exige nuestra situación". Y concreta su proposición a las Cortes en 15 bases como *bosquejo de tratado*: "1a. Las Cortes reconocen en general la independencia de las provincias continentales de las dos Américas españolas en las cuales se halle establecida de hecho. 2o. Desde la fecha de este reconocimiento cesarán las hostilidades entre ambas partes por mar, y tierra. 3a. Desde este día para siempre habrá paz y perfecta unión y fraternidad entre los naturales americanos y españoles, y una alianza perpetua e inalterable entre los gobiernos establecidos en ambos hemisferios. 4a. Los españoles en América, y los americanos en España, gozarán de iguales derechos y de la misma protección que para los naturales conceden las leyes en cada país respectivo". Un punto de las bases, el 5, trata de las relaciones de comercio y franquicias mutuas. La base sexta resulta extraña: "El gobierno enviará —se propone— con la posible brevedad comisionados hábiles a cada uno de los di-

ferentes gobiernos establecidos en aquellos países, para que auxiliados por sus gobernantes, puedan informarse de la voluntad de los pueblos, haciendo que para el efecto se convoquen congresos representativos; cuyas peticiones serán mandadas por dichos comisionados, acompañadas de sus informes y observaciones al gobierno para que las Cortes las examinen; quedando entre tanto cada país respectivo gobernado por las mismas autoridades, leyes, estatutos y reglamentos que estén vigentes...".

¿Cabrera, tan evidente en las bases primeras, condesciende con opiniones divididas y confusas en España, proponiendo esta tutela liberal a países cuya independencia se reconoce? ¿Preocupan a Cabrera, por una parte, el carácter del protectorado de San Martín en el Perú, y por otra la anarquía del año 1820 en Buenos Aires, de la que fue testigo?

La condescendencia continúa en las bases 9 y 11 al proponer que en tratados bilaterales se fijarán los subsidios que cada gobierno americano pagará a España, su duración, y las plazas y puntos que se conservarán en ultramar como garantía de los tratados. Cabrera recoge los puntos 11 y 12 del proyecto de los diputados americanos presentado a las Cortes el 25 de junio del año anterior, en los que se hablaba de que Nueva España pagaría a la metrópoli 200 millones de reales en seis años para contribuir al pago de la deuda extranjera, y 40 millones más anuales destinados a la marina española. Los restantes países de América, según el punto 13 del 25 de junio, contribuirían con cantidades que se fijarían en el futuro.

Las bases 14 y 15 del proyecto de Cabrera se refieren al establecimiento de "una confederación compuesta de los diversos estados americanos y la España, y se titulará Confederación Hispano-Americana; debiendo ponerse a su cabeza el señor don Fernando VII con el título de *Protector*... y siguiendo sus sucesores por el orden prescrito en la Constitución de la Monarquía". Dentro de un plazo de dos años se reunirá en Madrid "un congreso federal, compuesto de representantes de cada uno de los diversos gobiernos español y americanos, debiéndose tratar en dicho congreso todos los años sobre los asuntos generales de la confederación, sin perjuicio de la constitución particular de cada uno".

El proyecto de Cabrera de Nevárez es mucho *más laxo* que el de los diputados americanos del 25 de junio, pero menos lúcido y audaz que el del Conde de Aranda de 1783. Por otra parte, no resuelve el problema de una federación de repúblicas con un monarca como *Protector*.

* * *

El mismo día surge en las Cortes el Tratado de Córdoba. A pregunta de un diputado sobre novedades de América no conocidas aún, el secretario de gobernación de ultramar contesta que no se sabe de ninguna que no sea ya notoria, como "el tratado firmado por O'Donojú, que vino auténtico al gobierno, y es el que se ha pasado a las Cortes: que este tratado —explica Pelegrín— se remitió inmediatamente al Consejo de Estado, respecto al cual nada añadió en su consulta a lo que tenía expuesto; y que el gobierno, si había adoptado algunas medidas, eran reservadas, por lo que no había creído oportuno dar noticia a las Cortes".

Marcial Antonio López, diputado por Aragón y quien había formulado la pregunta, se irrita y protesta por el envío del tratado sin acompañar la consulta del Consejo de Estado. López señala: "Ahí se nos envía un tratado que ha hecho el señor O'Donojú: ¿pero constan los motivos? ¿Se sabe si el gobierno ha aprobado esta conducta?... Si no la ha aprobado, ¿por qué

no lo dice a las Cortes?... ¿Cómo las Cortes actuales podrán tomar una medida, no digo cual la ha propuesto el señor Golfín, sino otra cualquiera...? Se propone enviar comisionados a América para conocer la opinión pública y recibir proposiciones que enviarán al gobierno y éste pasará a las Cortes, esperando los comisionados en América lo resuelto. ¿Por qué no toma las medidas el gobierno, son sus facultades, y por qué se obliga a las Cortes a intervenir? Al cabo de veinte meses que estamos reunidos, en los cuales se ha estado deseando oír hablar de las cosas de América —advierte—, se oye ahora por segunda vez este importante asunto... y ¿será posible que haya estado (el gobierno) tan falto de datos que no haya podido presentarle en el transcurso de los meses que hemos estado reunidos, y se haya esperado a los últimos días de las sesiones para remitirle?" Hoy se informa "por un expediente que no se haya competentemente instruido". López no acepta las medidas propuestas por la comisión; su ejecución se demorará más de un año para que las Cortes acuerden algo. El expediente enviado por el gobierno debe ser devuelto, y en cuanto a las infracciones de la Constitución en que haya incurrido el ministerio, que se le exijan responsabilidades.

Toreno, individuo de la comisión, defiende el dictamen en un extenso discurso. "Si es poco decoroso para la España la medida que propone la comisión, no me parece mucho más decoroso lo que propone su señoría —dice dirigiéndose a Fernández Golfín—... (al) decir que se reconoce la independencia de los países continentales de ambas Américas... tendríamos luego que decidir cuáles eran estos países, y entrar en las razones porque reconocíamos la independencia de unos y la de otros no...". Al reconocimiento de la independencia siempre se opondrá "por varias razones que no son de la cuestión, y porque creo que en lugar de traer alguna utilidad a la nación, le sería muy perjudicial". Toreno acude a un argumento de autoridad, en el que ésta es su propia persona.

A López contesta defendiendo el dictamen de la comisión por ser "indispensable tomar algunas providencias, y que las únicas medidas que pueden adoptarse son las de conciliación o las de fuerza... Para las medidas de la fuerza —declara— yo no sé si estamos en el caso de desplegar toda la que se necesita, así para el Río de la Plata, como para Nueva España y Lima; y aun en caso de estarlo, esto sería para después, porque éstas son medidas siempre muy perjudiciales". Sólo restan la conciliación, y únicamente pueden tomarse oyendo a los gobiernos de hecho en América, "sea para sujetarlos, o para tratar de reconciliación con ellos". Toreno se refiere a México, con alusión a la opinión posible del Consejo de Estado, y expresa: "prescindiendo del espíritu que pudo animar a los americanos, el individuo que ha faltado a sus deberes, como el señor O'Donojú, ha merecido y merece altamente su desaprobación; pues aunque la felicidad de la América consistiera en esto, el español que va enviado por su gobierno nunca debe vender a su nación, nunca debe vender al gobierno, y es una acción indigna de un español... sintiendo que las grandes acciones de un Cortés pudieran ser borradas por un O'Donojú. Así que la comisión, no ha encontrado otro medio, ha creído que debía aprobarse esto, y entrar en un tratado que es el interés de España y de la América". Toreno no explica más el punto.

No aludiremos a las reflexiones de Toreno sobre los errores en el gobierno de la América, que "si no ha sido a la España tan útil como pudiera serle, a lo menos no ha sido su ruina, como lo han creído tantos...". Solicita la aprobación del dictamen, distinguiendo entre los comisionados enviados antes a América, "que no podían oír nada relativo a la independencia,

mientras que los que ahora se envíen irán autorizados para oír toda clase de proposiciones que se les hagan; y aun dado el caso de que, como lo ha dicho el señor Golfín, tratásemos de reconocer la independencia, era preciso establecer ciertas condiciones", lo que se logrará por medio del cumplimiento de las comisiones.

Fernández Golfín habla para aclarar su proposición, contenida en varios artículos, pero que "forman un solo todo, que es reconocer la independencia de América y disponer las ventajas posibles a nuestro comercio", creando una confederación con un congreso, y con Fernando VII a la cabeza "para que de este modo se conserve en la nación esta especie de superioridad".

El debate se confunde. Un diputado, Antonio de la Cuesta, pide se apruebe el dictamen, que "es preliminar y no estorba que si nosotros nos hallamos con bastante fuerza, el gobierno pueda usar de ella para reducir a los disidentes de América".

Lucas Alamán interviene calificando la cuestión como "la más importante de cuantas se han presentado en el congreso, (y) si no creyese que tanto como tiene de importancia el asunto, otro tanto tiene de fácil su solución". Porque "si se ha dudado de esto es porque se ha desconocido la cuestión: ...y nadie la ha desconocido tanto como el gobierno. Aquí no se trata ya de resolver lo que han de ser las Américas: esto está ya decidido irrevocablemente". La única cuestión es "¿cuál es el partido que debe tomarse?" No nos importan aquí las censuras minuciosas de Alamán al dictamen del gobierno, que la misma comisión de Cortes no aceptaba. Interesa, sí, el juicio sobre los acontecimientos en México: "No se diga tampoco —expresa Alamán en las Cortes—, como ha dicho el Consejo de Estado y ha repetido el gobierno, que la revolución de Nueva España ha sido excitada por clases determinadas; que ha sido movida por tales o cuales sujetos, por tal o cual causa. La revolución estaba ya hecha antes de la época en que se quiere hacer referencia, y no ha sido movimiento de una clase. En Nueva España se levantó simultáneamente una voz igual para la revolución actual, que no se levantó en la anterior, porque los jefes de entonces, llevando hasta la inhumanidad la falta de política, excitaron la división de los ánimos; pero actualmente las medidas que se han tomado han reunido todos los partidos". La revolución ya estaba hecha, como lo informó claramente Ruiz de Apodaca.

Alamán apoya ahora el dictamen de la comisión. Los comisionados actuales no van pedir el sometimiento, como los anteriores, a los que "aquellos pueblos respondieron que no se habían separado porque el gobierno fuese absoluto o moderado, sino porque convenía gobernarse independientemente de la metrópoli, y que sin esta consideración no entrarían jamás en ningún otro trato". Los comisionados propuestos pueden oír toda proposición. Reconocer la independencia "debe ser efecto de un tratado, y para celebrarlo es menester comenzar por entenderse; cosa que hasta ahora no se ha hecho, pues no se ha pensado más que en tirar balazos". Se ha calificado el envío de comisionados como indecoroso; "lo único que encuentro indecoroso —manifiesta— es que se haya continuado por once años una guerra que desde, el principio debió preverse que no podía tener sino un funesto resultado".

Alamán apoya el dictamen de la comisión como el medio para que se convenga la independencia en América concertando tratados. No menciona los de Córdoba y no compromete su opinión sobre ellos en ese momento.

En la imposibilidad de publicar el debate de esos últimos días de enero, del que se im-

primieron en México amplios extractos en 1822, con el título *La España se opone a la Independencia de las Américas*, nos hemos detenido en él.

* * *

Se dijo que el debate confunde propósitos. Lo que para Alamán es un medio razonable para llegar al reconocimiento de la independencia de América, para otros es, y se dice, un procedimiento dilatorio para preparar la reconquista, y aun para no definir la situación de España frente a las Américas.

El debate se prolonga y decae, y aunque la palabra independencia se pronuncie por los diputados americanos y ella parece incontenible, los españoles la rehúsan o rehúyen sin negar la realidad americana. Preocupa la suerte de los españoles que son fieles a España en América. Para el brigadier Juan Palarea, "por el artículo 15 de ese tratado nulo por todas sus circunstancias, celebrado entre O'Donojú e Iturbide... quedan surcos a la arbitrariedad de aquellos mandones", y espera que el gobierno haya declarado su nulidad. Que se envíen los comisionados, entendido que no se excluyen otras medidas, "y menos la principal y más segura que es la de preparar la fuerza".

Toreno reprocha a los diputados americanos censurar de continuo al régimen colonial y a los españoles realistas, pues "es de notar que los que más se quejan y levantan el grito, no son los de la sangre de Moctezuma y Xicontencatl, no son, no, indígenas: es la sangre española mezclada con los naturales, y si allí ha habido males, no deben atribuirse a otros que a los mismos y a sus padres que tanto ahora gritan". Toreno da la versión apologética de la conquista y la colonia. Quienes censuran, repiten a los extranjeros mal intencionados, y siguen "lo que dijo un mal español desde el principio de la conquista, Bartolomé de las Casas", quien falsificó la historia, y era *hijo de extranjero y español por casualidad.* Por otra parte, la independencia de los Estados Unidos no puede compararse con la de la América española, pues aquéllos tenían ligas diversas con la metrópoli y estaban constituidos desde el origen de su revolución. En Nueva España, y mencionando a Hidalgo, "¿cuáles eran sus banderas?", pregunta. "Véanse los principios con que se excitó a la revolución. La teocracia más injusta". Y de Morelos, aunque no recuerda bien, "adoptó principios los más teocráticos". Iturbide, agrega, no proclama principios liberales. Sin transición, Toreno pide que se apruebe el dictamen de la comisión.

Pablo La Llave apoya el dictamen desde la perspectiva americana. "El dictamen de que se trata se apoya y versa —dice— sobre un hecho: las Américas se han puesto en actitud de proveer por sí solas a su engrandecimiento y prosperidad... Diez años de hostilidades ¡pero qué hostilidades! no han bastado a dimoverlas de su propósito. En unos puntos sin táctica, sin armas, sin moneda, sin gobierno, a todo ha suplido el instinto de independencia... Pero en fin el árbito de los destinos ha fallado: las Américas se emanciparon de hecho: les irá bien o mal en su nuevo estado, pero están resueltas a seguir su suerte, y lo único que esperan es el reconocimiento y la bendición de su madre... Este tiempo ha llegado: así lo exije la justicia, la política, la conveniencia, la necesidad". Es lo que se propone en el dictamen de la comisión: "oírse y ponerse en contacto". Toreno presenta "con negro colorido la imagen de O'Donojú; él, La Llave, dirá algo: "se ha creído que el general O'Donojú ha hecho la Independencia de

México, y esto no es así... ahí está la carta que escribe al gobierno, y en ella se verán los servicios que ha hecho y la situación en que se hallaba". Toreno dijo que "las glorias de Cortés han sido mancilladas por O'Donojú —y La Llave responde—: a los ojos de los filósofos y del filántropo, el primero no es más que un conquistador, el segundo un benéfico conciliador". Se arguye la falta de datos para aprobar el dictamen. Diez años de guerra en todo el continente, los estados que aparecieron, las repúblicas que se crean, el imperio que se funda en México, no son suficientes, pregunta. ¿Se quiere "que falte y que se acabe medio mundo para mandar comisionados a la América?".

Para dar fin al debate se exige al secretario de ultramar que exponga la opinión del gobierno sobre el dictamen de la comisión de las Cortes. Pelegrín no la puede dar antes de que el dictamen se examine en consejo de ministros con el rey. Se fija el día 30 para volver sobre el asunto.

El 30, el secretario de ultramar expresa la conformidad del gobierno respecto al dictamen, agregándose a éste que se entiende como *medidas de pacificación*, para evitar todo equívoco en América en el sentido de que se dan pasos al reconocimiento de la independencia además de que ni el gobierno ni las Cortes están facultadas para autorizarla. Por otro lado —aclara Pelegrín—, es preciso desvanecer lo sentado por el general O'Donojú, que tal vez ha sido creído en aquel país, y que equivale a lo dicho por Bolívar en Costa-firme, a saber, "que las Cortes de España y su gobierno estaban conformes con sus principios...".

La adición solicitada pasó a la comisión, después de una acalorada objeción de Gómez Navarrete.

* * *

El documento de la Comisión, considerando el honor nacional parte "del seguro principio de que abriéndose esta nueva grande y legítima senda de comunicaciones pacíficas, se estimen de ningún valor ni eficacia todos los tratados que se hayan celebrado entre los jefes españoles y gobiernos de América, que deben conceptuarse nulos, según lo han sido desde su origen, relativamente al reconocimiento de la independencia, para que no estaban autorizados...". No es relevante aquí el punto sobre la libertad total que debe establecerse para que recíprocamente los americanos y europeos que residen fuera de sus países puedan retornar a ellos con todos sus bienes. El dictamen así reformado lo firman los siete miembros de la comisión: Espiga, Álvarez Guerra, Toreno, Moscoso, Oliver, Murphy, Gómez Navarrete y Paul.

En el voto particular de Oliver se hace historia de la creación de la comisión en mayo de 1821 para dictaminar sobre la situación de América.

Menciona que en las reuniones de la comisión con "los ministros de S.M., al *principio convinieron* éstos enteramente con los dictámentes, que en general se sostuvieron; pero que circunstancias *particulares* los obligaron a suspender en alguna manera su juicio, creyendo que la opinión *no se hallaba preparada* para una resolución definitiva, y que por consiguiente la comisión no podía hacer otra cosa que limitarse a excitar el celo de los ministros a fin de que aceleraran tan deseado momento", y que el gobierno presentase a las Cortes "*con mayor brevedad* las medidas fundamentales que creyese conveniente" para la pacificación de

América, asegurando su felicidad. La comisión se conforma y así lo dictaminó en las Cortes el 24 de junio de 1821. El 25 se leyó la representación de los diputados americanos contenida en 15 proposiciones. Habiéndose clausurado el periodo ordinario de las Cortes, no se resolvió nada. Las proposiciones las habían conocido la comisión y los Ministros, y aunque la situación de América se agravaba día a día, el ministerio no hizo proposición alguna a las Cortes, hasta que Paul promovió el asunto en octubre. El Ministerio continuó sordo a las excitativas de las Cortes hasta enero, cuando lleva a ellas el asunto, como hemos visto en páginas anteriores.

Para concluir el periodo extraordinario de sesiones de las Cortes "¿qué había de hacer la comisión —se pregunta Oliver— sino evitar a las Cortes y a la nación entera el mortal dolor que a la menor reflexión sobre tan triste cuadro había de sentir todo buen español?", el que ofrece de la situación en América. El dictamen de la comisión sobre enviar comisionados pareció el más apropiado, pero el secretario de ultramar, al votarse en las Cortes, interviene promoviendo "una dificultad que deprime la facultad del gobierno... y que frustró en mi concepto —declara Oliver— lo mejor de aquel dictamen". Oliver se enfrenta al gobierno, al que "de los solos documentos que obran en el expediente; resultan cargos gravísimos...", que deben exigirse a quienes resulten responsables de acciones u omisiones que "han contribuido a poner en el mal estado en que se hallan las Españas".

En su voto particular, Oliver, que solicita la aprobación del dictamen de la comisión, no dice una palabra sobre cualquiera esperanza que ve en el envío de los comisionados a América, y le preocupan únicamente las responsabilidades de quienes causaron el mal estado de las Españas, sin mirar más lejos que el mes de mayo de 1821.

Moscoso, Toreno y Espiga, arzobispo electo de Sevilla, en su voto van directamente al asunto que polariza el conflicto. Cualquiera que sea la resolución de las futuras Cortes importa a las actuales "manifestar su modo de pensar acerca del llamado tratado de Córdoba... El silencio de éstas en aquel punto tendría el aspecto de la sanción de un acto enteramente ilegal", no autorizado O'Donojú para reconocer la independencia de Nueva España. El tratado, nulo, no puede obligar al gobierno. Supone O'Donojú en su carta al general Dávila, gobernador de Veracruz, que desde antes de su salida de España, una comisión de las Cortes "con asistencia de secretarios del despacho, se propusieron aprobar las bases de la independencia mejicana, y que antes de cerrar las Cortes ordinarias sus sesiones, quedaría concluido este negocio". Falso, porque las proposiciones de los diputados americanos —las del 25 de junio de 1821—, "ni aun quedaron admitidas a discusión". Lo declarado por O'Donojú, según el voto, decidió a muchos jefes a abrazar la causa de la independencia. O'Donojú no obró "como un agente que se propusiese conmover la adhesión a la madre patria de tantos honrados españoles europeos y americanos".

Será perjudicial, agregan Moscoso y Toreno, anunciar la independencia de algunas provincias "antes de que a favor de tratados con los gobiernos de ellas o por otros medios se hayan asegurado las ventajas políticas y comerciales que debe obtener la madre patria respecto a las naciones extranjeras. Los gobiernos de éstas no pueden, sin faltar a todos los principios del derecho público y de gentes, entrometerse en los negocios de las Américas españolas, ni reconocer su existencia como estados independientes mientras que el de la metrópoli se ocupa de pacificarlas o de entablar con ellas relaciones que afianzan la unión en-

tre hijos de una misma familia". El lenguaje de Toreno, Moscoso y Espiga altera sus matices. Las ventajas políticas y comerciales se introducen sin sutilezas: el reconocimiento de la independencia "(en los casos que convenga verificarse) no debe preceder —aclaran—, y sí hacerse de una manera simultánea con los tratados que aseguren sólidamente y con todas las garantías necesarias en favor de la España aquella preferencia y aquellas ventajas respecto a las naciones extranjeras, a cuyos gobiernos debe dirigir el español un manifiesto que al mismo tiempo que acredite que la España no ha renunciado hasta ahora a los derechos que puede tener sobre ninguna de las provincias de ultramar, como puntos integrantes de su territorio, contenga los proyectos ambiciosos que puedan formar sobre ellas, algunos de los mismos gobiernos...".

Por vez primera se habla en las Corte de la restauración constitucional de los derechos de España sobre las Américas, fundándolos en que ellas son partes integrantes de su territorio, esto es, en la declaración de la Constitución de 1812, no en los títulos de la corona de Castilla, que como tal han dejado de existir. Pero cuando se menciona la carta de O'Donojú al general Dávila, el insospechable liberal que es Toreno olvida que O'Donojú, además de referirse al proyecto que supone aprobarían las Cortes sobre América, escribió: "Hé, V.S. aquí... las reflexiones que me habrían arrebatado a firmar el tratado que servirá de cimiento a la eterna alianza de dos Naciones... aun cuando no hubiese estado como estoy convencido de la justicia que asiste a toda sociedad para pronunciar su libertad y defenderla al par que la vida de sus individuos; de la inutilidad de cuantos esfuerzos se hagan, de cuantos diques se opongan para contener este sagrado torrente...; de que es imposible contener y aun alterar el orden de la naturaleza, ella puso límites a las Naciones... nos dio en la virilidad razón y fuerza para ser independiente, y no vivir sujetados a tutela...".

Toreno, Espiga y Moscoso afirman en su voto que un reconocimiento anticipado de la independencia significa que "la nación española renuncie al derecho de supremacía que tiene sobre cualquiera parte de las que forman su territorio según la ley fundamental de la monarquía". La supremacía de la nación, representada en las Cortes, es la formada por una mayoría de diputados peninsulares, impugnada desde Cádiz por los americanos.

Mas el voto de Toreno, Espiga y Moscoso no puede sostenerse sobre esa base doctrinaria e institucional. "La conducta de la nación y del gobierno español respecto a varias provincias de ultramar, debe ser tan diferente como lo es el carácter de sus revoluciones. En algunas pueden ser éstas efecto de la voluntad general de sus habitantes o de causas igualmente respetables, y por consiguiente merecen otra consideración que las turbulencias promovidas en otros parajes por aventureros u hombres ambiciosos tan enemigos de los naturales del país que dominan por la fuerza de las armas..." a los que sólo se puede mirar como "invasores de los territorios que ocupan, pero no como jefes legítimos de los pueblos o de los gobiernos". Así, los comisionados se presentarán "en unas partes con el carácter de negociadores pacíficos, y en otras con el de libertadores de los oprimidos españoles europeos y americanos...". Y antes de concluir la exposición expresa que las provincias de América que han declarado su independencia carecen del derecho a participar "en la formación de las leyes que deben regir a la metrópoli. La legitimidad de los representantes de ésta, como las de todas las naciones, no tiene otra base que la voluntad de sus comitentes y expresada del modo que determine su constitución; y estando manifestada en contrario la de los habitantes de varias provincias de ultramar, no pueden los

diputados de las que se hallen en este caso ser admitidos en las Cortes, a lo menos mientras los pueblos a quienes representan no vuelvan a reconocer la supremacía del gobierno de la nación..." además de que su presencia viciaría la legalidad de las resoluciones de las Cortes.

El voto se resume proponiendo: 1o. Que las Cortes declaren la nulidad del Tratado de Córdoba, y cualquiera otro acto de O'Donojú, en reconocimiento de la independencia de México. 2o. Que por manifiesto se comunique a las naciones que España considerará como violación de los tratados existentes todo acto de reconocimiento total o parcial de la independencia de sus provincias ultramarinas, y 4o. Que se apruebe que las provincias que han declarado su independencia "no deben tener diputados en las Cortes, mientras permanezcan en ese estado".

Los autores del voto no advierten, o no les importa dejar de advertir, que en él niegan la representación de los diputados americanos porque los comitentes no reconocen la autoridad metropolitana, sin volver sobre las distinciones que habían hecho entre las provincias.

El voto particular de Murphy, Gómez de Navarrete y Paul lo presentan, aclaran ellos, porque los votos adicionales pueden frustrar el objeto del dictamen. Como individuos de la comisión, lo habían suscrito con repugnancia, "porque hubiéramos querido se manifestase clara y expresamente a los gobiernos establecidos en las provincias de ultramar, que la España estaría dispuesta a convenir en su emancipación siempre que las bases en que ésta se fundase, ofreciesen la garantía necesaria y el recíproco interés de unos y otros pueblos". Si las Cortes aprueban el dictamen, solicitan que no se haga igual aprobación de los votos adicionales.

* * *

El mismo día 12 se debate el dictamen. Se reiteran las objeciones y se ataca, por los americanos Alamán, Paul y La Llave el voto adicional de Moscoso, Toreno y Espiga. Alamán arguye contra la declaración de nulidad del Tratado de Córdoba, *que no trata de legitimar*, pero que ha tenido el efecto de "asegurar y proteger la fortuna y las personas de los españoles establecidos en aquellas provincias". La declaración de nulidad alarmaría a México y a su gobierno, cuya legalidad no examina, pero que está formado, como el ejército, por muchos españoles. Declarar que los comisionados irán como negociadores pacíficos a unas partes, y a otras como libertadores, agrega, es destruir todo buen efecto que pudiera lograrse. Alamán se pronuncia por la aprobación del primer dictamen de la comisión.

Ante la reiteración de quienes ven en el dictamen un tácito reconocimiento de independencia, como el aragonés Marcial López, y las dubitaciones en la actitud de Toreno, que pasó del primer dictamen hasta su voto particular, el debate se torna confuso.

Al día siguiente se vuelve sobre el asunto. Se leen de nuevo los votos adicionales de Oliver y el de Toreno, Moscoso y Espiga. De pronto Oliver expresa que no ve la necesidad de declarar la nulidad del Tratado de Córdoba, dando lugar a que se suponga que otros arreglos en América, al no ser calificados expresamente, se toleran. Y agrega: "caso de hacer una distinción, la haría en razón inversa, porque en el de Córdoba, sin dejar de considerarlo por esto nulo, observo algunas circunstancias dignas de atención como la de que en él no se ha atropellado como en otros todos los respetos, ni se ha desconocido la autoridad del rey, faltándole el juramento de fidelidad que tienen prestados los pueblos, y rompiendo todos los lazos que los

han unido con la metrópoli. Así, me parece que —termina diciendo—, debe omitirse esta declaración". El desconcierto no se oculta. Oliver se refiere a los trabajos de la comisión de Cortes del año 1821, y a la afirmación de Toreno de que las medidas examinadas entonces no se veían con ánimo de reconocer la independencia de América. Para él, Oliver, "de lo único que se ha tratado y trata es, como he dicho, de dar a aquellas provincias una nueva forma de gobierno con arreglo al artículo 13 de la Constitución...".

Alamán aborda el tema en este punto, y lee parte del dictamen de 1821. "Yo hubiera querido saber entonces —dice—, y lo deseo todavía, cuáles fueron los fundamentos que tuvo el ministerio para afirmar que la opinión no estaba aún preparada en ultramar para una medida definitiva. Si hemos de atender a los hechos, estaba tan preparada como que al mismo tiempo que se dudaba de esta preparación en Europa, se estaba verificando allí una revolución prodigiosa, que sólo podía ser efecto de una disposición general". No se presentó enemigo en México, y las mismas tropas realistas "se pusieron a la cabeza de la revolución", con la mayoría de sus jefes dirigiéndolas. Esa misma opinión americana es la de Santa Fe, Venezuela, Quito, Perú, Buenos Aires y Chile. El gobierno portugués ya entró en relaciones con los dos últimos gobiernos. Es cierto que las Cortes no han sido informadas suficientemente por el gobierno; "se sabe públicamente que los señores Apodaca y Novella han informado largamente al gobierno desde La Habana sobre los sucesos de México..." y las Cortes desconocen los documentos. (Nosotros a siglo y medio los desconocemos también, y seguramente en ellos, como en otros inéditos, se aclaran los sucesos de 1820 y 1821 en México).

Alamán maniobra insistiendo en que para resolver deben pedirse al gobierno los documentos que integren el expediente, aprobando por ahora el voto de Oliver favorable al dictamen de la comisión, y debiéndose exigir responsabilidades a quienes las tengan por las omisiones en informar a las Cortes.

El debate se encuentra en un punto muerto. Se da lectura una vez más al voto adicional de Toreno, Moscoso y Espiga. José Antonio Yandiola lo objeta. Si el dictamen de la comisión se aprobó la víspera, nada debe agregarse. Lo propuesto en el voto corresponde a las atribuciones del gobierno. Los últimos vínculos de España con América están rotos. Defiende a O'Donojú y lee la carta que dirigió al general Dávila. El proyecto de 1821, al ser examinado por el Ministerio de Ultramar pareció ser aprobado, y no mintió O'Donojú en esto, afirma Yandiola. En su conducta, "¿quizá en vez de crímenes podremos encontrar amor a la humanidad, nobleza de alma, y el único arbitrio que adaptarse en su situación?", se pregunta Yandiola.

Él, Yandiola, ha vivido en México y ha mantenido relaciones constantes desde el año 1810. Su breve versión de los acontecimientos recientes lo prueba: tiene "datos para saber que (ellos) son efectos de las maniobras de los enemigos del sistema. Sí, y no sólo los que existían en México, sino aquí, aquí en Madrid están. No han sido los antiguos insurgentes, cuya impotencia y falta de opinión era notoriamente conocida, los que han avanzado las cosas al estado actual; son los hijos espurios de la patria, combinados acaso con autoridades a quienes la imprevisión del gobierno constitucional dejó en sus antiguos destinos —declara— los que han creído dar un golpe fatal al sistema procurando la segregación de las Américas". Nada se previno, y el gobierno sólo envió un *libro*, la Constitución, "sin remover las autoridades, a quienes el despotismo confiara el gobierno de aquellos países", nombrando a liberales que no

hubieran perdido "tan ricas y hermosas posesiones, no para restablecer un gobierno incompatible con la ilustración política de nuestros días, sino para verificar una *conciliación* de intereses recíprocos...".

La nulidad del Tratado de Córdoba, advierte Yandiola, no la pueden examinar las Cortes, que sólo tienen facultades constitucionales para conocer de tratados de alianza y de comercio. Si se trata de la responsabilidad de un funcionario público, el gobierno debe turnar el expediente o un diputado promoverla. A la exclusión de los diputados americanos se opone. Hacerla, "sería un acto de reconocimiento de la independencia". Toca a las juntas preparatorias de las Cortes siguientes examinar los poderes de los nuevos diputados y resolver sobre ellos.

Yandiola apoya el dictamen de la comisión, aunque su perspectiva no coincida con la de Toreno: "a las Cortes sólo compete autorizar al gobierno para oír y tratar; pero en manera alguna deben descender a los detalles. Yo creo que antes de la absoluta emancipación puede haber medidas recíprocamente admisibles; mas si fuese necesario consentir en la *independencia* —declara—, no pronunciemos con susto esta palabra. Ya otra nación que defendió con no menos calor sus provincias ultramarinas, nos demuestra que no por eso ha disminuido su prosperidad. Seamos libres; mantengamos la Constitución que hemos jurado, y preparémonos a todo; nuestro bien peculiar no excluye el de otros pueblos y naciones; y si hay que sacrificar algo para aliviar la suerte del género humano, sacrifíquelo la nación que poco hace lo ha redimido del despotismo...; pero no aprobemos unas adiciones que nada significan, o que si algo quieren decir, ya ha debido preverlo el gobierno".

Toreno contesta a Yandiola, y no acepta mitigar la responsabilidad de O'Donojú al convenir con Iturbide el Tratado de Córdoba, faltando a sus expresas instrucciones. España, "con el desenvolvimiento de sus facultades morales y físicas llegará al punto, y acaso no será tarde —expresa Toreno—, de hacerse respetar". Si no se hubiesen vertido en las Cortes especies que extravían la opinión, y se hubiese aun hablado de independencia, no se hubiera propuesto la declaratoria de nulidad del Tratado de Córdoba, pertinente y necesaria después de ellas. En cuanto a la exclusión de los diputados americanos —concluye—, está dispuesto a retirar la proposición.

* * *

Alamán habla por última vez ese día en el que termina el periodo extraordinario de sesiones, oponiéndose de nuevo a la declaración de nulidad del Tratado de Córdoba, la que sólo aumentaría la hostilidad de América y la de México que no se ha manifestado. Refiriéndose a la independencia de las Américas hace una declaración que es una profesión de fe, que olvida aludir cuando en su *Historia* se refiere a ese día. "Hay una causa fundamental la más poderosa —declara—: Desde el momento en que se dio tal amplitud al comercio de América, que comparado con el sistema de las flotas de épocas anteriores, merecía llamarse comercio libre; desde que al ergotismo de las aulas se substituyeron los principios sólidos de las matemáticas y de la física; desde que se comenzaron a leer las obras de los grandes hombres del siglo anterior, desde entonces empezó la revolución: cada aumento de luces ha sido un aumento de deseos de emancipación; cada progreso que ha hecho el espíritu humano, ha dado a aquélla un

nuevo impulso. Estas luces no pueden volver atrás, porque yo creo que los principios liberales están bastante bien establecidos en España para que en cualquiera suposición lleve con gusto esta nación la gloriosa tacha que se dijo ayer —lo había dicho Toreno—, que se oponía a la política de los últimos años del siglo pasado, de excesivamente filantrópica".

"Esta opinión podrá ser muy bien la de algunos individuos del lado derecho de la cámara de diputados de Francia —continúa Alamán—, que descontentos de las luces del siglo pasado, quieren volver al 12 o 13, para lo que dan grandes pasos; pero nunca será la de las Cortes de España: las luces se aumentarán cada día, y con ellas el deseo de emancipación de las provincias de ultramar".

¿Hasta dónde llega el liberalismo del Alamán de esos días? Al menos a lo que tan expresamente declara el 13 de febrero de 1822 en las Cortes de Madrid. Pero no se trata aquí de la persona Lucas Alamán, sino de las Cortes españolas cuando no pueden eludir más el pronunciarse sobre la independencia de América. La palabra pacificación se desvanece, como ya lo están los títulos de España sobre América, y no puede ser más el rubro de una política en el hipotético imperio, liberal o absolutista. Toreno, uno de los hombres más eminentes en la subversión de Cádiz, es quien más rehúsa admitir la consecuencia liberal de ella: la nación —España y ultramar— es una y soberana, sí, pero su potestad debe ser tutelada en la metrópoli.

Todavía Pablo La Llave, diputado por Veracruz, impugnará el voto de Toreno, Moscoso y Espiga, al que se han adherido más diputados. Los argumentos ya no importan. La Llave se despide: "la diputación americana va a disolverse, y parte de la península tal vez para siempre, pero parte con el consuelo de haber procurado constantemente el bien de su madre; sí, de su madre, digan lo que quieran los enemigos de alegorías y metáforas; la diputación americana parte, pero parte con la gloria de haber cooperado constantemente a lo que tienen de más liberal las instituciones que rigen... parte con el proyecto de ir a preparar un asilo y días sabrosos a los hombres liberales y benéficos de todos los países...".

* * *

En estas páginas hemos intentado tan sólo una ilación del debate, incompleta pero extensa por ser casi desconocida en nuestras obras de historia.

La aprobación del voto adicional de Toreno, Moscoso y Espiga no incluyó, como asienta Alamán en su *Historia*,[16] el punto de exclusión en las Cortes de los diputados por las *provincias americanas* que hubiesen declarado su independencia. Extractos de las sesiones del 12 y 13 de febrero se publicaron en México en *La Aurora de la Mañana.*

En el debate no intervinieron, y quizá deba señalarse, los mexicanos, José Miguel Ramírez, Molinos del Campo, Fagoaga, Couto, Cañedo y Gómez Pedraza, para mencionar algunos; ni españoles liberales como Martínez de la Rosa, Flores Estrada —autor de un *Examen imparcial de las disenciones de la América con la España*, con tres ediciones entre 1811 y 1812—, Muñoz Torrero, Villanueva, Puigblanch, el general Quiroga y Calatrava.

El 14 de febrero se efectuó la sesión solemne de clausura de las Cortes Extraordinarias, y el rey, en su brevísimo discurso de cinco párrafos, no mencionó la palabra América.

[16] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 530.

Los jefes de los ejércitos realistas en el Perú y el Alto Perú todavía combatirían, ciertamente con denuedo, por la más inválida de las causas, aun después de que el absolutismo se restauró en España por el ejército francés de los *cien mil hijos de San Luis.*

En las Cortes, reducidas como años antes a la ciudad de Cádiz, el 2 de agosto de 1823 la comisión de ellas para ocuparse de los asuntos de ultramar presentaba un dictamen, para que se invitara a los *gobiernos de hecho* de América a enviar representantes "con plenos poderes" a un punto neutral de Europa o a la misma España, para convenir un armisticio. Los plenipotenciarios españoles podrían estipular toda clase de tratados sobre las bases que se estimaran convenientes, "sin excluir las de independencia, en caso necesario". José Antonio Yandiola, en esas fechas ministro de Hacienda, opinó que en las circunstancias ya no se podía mantener ningún espíritu de dominación. El dictamen fue desaprobado por 53 votos contra 43.

El 1 de octubre de ese año de 1823, desde el Puerto de Santa María, Fernando VII promulgaba un decreto cuyo artículo 1 declaraba: "Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional... que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de marzo de 1820 hasta hoy 1 de octubre de 1823, declarando, como declaro, (que) en toda esta época he carecido de libertad...".[17]

Un año después, el 9 de diciembre de 1824, el general Antonio José de Sucre derrotaba en Ayacucho al ejército realista del Perú y recibía la espada del virrey La Serna.

Pero en las Cortes liberales la historia de América en España había concluido en aquellos días de febrero de 1822, en la frustración de una a veces lúcida y casi siempre empecinada y difusa retórica.

[17] Maximiano García Venero, *op. cit.*, p. 504.

3

MÉXICO. AMBIGÜEDAD Y DESCONCIERTO

Las noticias de lo ocurrido en España no tardan en llegar a México. Cuando la *Gaceta Imperial* anuncia el 21 de mayo de 1822 la venta de *La Aurora de la Mañana*, conteniendo extractos de las sesiones de las Cortes de 12 y 13 de febrero anterior, únicamente hace públicos detalles sobre la declaración ya conocida de la nulidad del Tratado de Córdoba, en evidente apoyo a la proclamación de Iturbide como emperador dos días antes, el 19 de mayo.

El 23 de marzo la *Gaceta* daba la noticia de que en La Habana se imprimió el oficio del ministro Pelegrín al jefe político de Cuba comunicándole el real decreto de 7 de diciembre de 1821, declarando que O'Donojú carecía de facultades "para transigir ni celebrar convenios en que pudiera estipularse o reconocerse la independencia de Provincia alguna de ultramar...", como consta en el texto que la misma *Gaceta Imperial* reprodujo el 28 de marzo. El decreto lo circula Pelegrín a las autoridades civiles y eclesiásticas de América.

La *Gaceta Imperial* denuncia la actitud metropolitana remontándose a 1808 cuando España proclamó su libertad frente a la usurpación napoleónica, sin que de hecho América llegara a disfrutarla. Se menciona la restauración absolutista del año 1814, y la constitucional de 1820. La *Gaceta* hace la extraña declaración de que se aceptó el Tratado de Córdoba por magnanimidad, sabiendo que O'Donojú carecía de poderes para concertarlo. La desautorización española no afecta la independencia, fundada en la fuerza y opinión de México.

También, y con anterioridad a la proclamación de Agustín I, se habían publicado en México extractos de las sesiones de las Cortes de los días 27, 28 y 30 de enero, que no ofrecían dudas sobre cuál sería la resolución definitiva de ellas sobre la independencia.[18]

Mas debemos volver a los anteriores sucesos de México.

Consumada la independencia con el Tratado de Córdoba y la ocupación de la capital, las provincias "atónitas por el cambio inesperado de suerte —escribe Bustamante—, estaban como un hombre embriagado de placer que no acierta a contemplar su actual posición, ni la suerte futura que le espera...".[19]

El gobierno previsto en el Plan de Iguala y en el Tratado de Córdoba se integrará con diligencia.

La Soberana Junta Provisional Gubernativa tiene su segunda sesión el 28 de septiembre de 1821, después de cumplidas las ceremonias religiosas en la catedral. La junta procede a la

[18] *La España se opone a la independencia de las Américas*, México, 1822.

[19] Carlos María de Bustamante, *Continuación del cuadro histórico de la Revolución mexicana*, México, 1953, tomo I, p. 12.

elección de la Regencia del Imperio, conforme a lo previsto por el artículo 11 del Tratado de Córdoba. Los señores que ajustaron el tratado, dice el acta, o sea O'Donojú e Iturbide, manifestaron que se convino entre ellos que los individuos de la Regencia fuesen cinco y no tres, lo que se discute y finalmente se aprueba. Los regentes elegidos fueron: Iturbide, que ya era presidente de la Junta, y O'Donojú. Los candidatos a los tres puestos restantes son el arzobispo de México, Pedro Fonte, el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, el gobernador de la Mitra de Valladolid, Manuel de la Bárcena, el general Guerrero, el conde de Regla, José Isidro Yáñez, José María Fagoaga, José Mariano de Almanza, Manuel Vázquez de León, Miguel Guridi y Alcocer, Guadalupe Victoria, Manuel de la Sotarriba y Manuel Martínez Mancilla. Entre los candidatos figuran sólo dos insurgentes, Victoria y Guerrero, y un antiguo diputado a las Cortes de Cádiz, Guridi y Alcocer. Los elegidos fueron Bárcena, Yáñez y Velázquez de León.

Se plantea el problema de si el presidente de la Regencia, Iturbide, podía continuar como presidente de la Junta, y se acuerda que se nombrará presidente de la Junta, pero que cuando Iturbide, presidente de la Regencia, asistiera a las sesiones de la Junta, ocuparía el primer lugar. También se aprueba la compatibilidad de la presidencia de la Regencia con el mando del ejército.

Para la presidencia vacante de la Junta son candidatos, Monteagudo, el obispo de Puebla, el conde de Heras Soto, Guridi y Alcocer y Almanza. El viejo conspirador de La Profesa, Monteagudo, es desplazado, y resulta presidente de la Junta el conspicuo don Antonio Joaquín Pérez. Monteagudo lo sustituye en la comisión de reglamentos de la Regencia y de la Junta.

Miguel Bataller, otro de los hombres prominentes en La Profesa, ha desaparecido, y en las actas no consta por qué no fue elegido individuo de la Regencia don Pedro Fonte, arzobispo de México, realista y hombre de reconocidas virtudes, como lo confirma hasta Vicente Rocafuerte.

* * *

Es la hora de Iturbide. "Festejos, loores, alabanzas, aclamación y aplausos se constituyen en la nota más característica del día", escribe Javier Ocampo, el más minucioso investigador de las ideas de esos días.[20] Ocampo realizó si no el más exhaustivo examen de los papeles contemporáneos, sí la más completa y satisfactoria investigación de ellos y de las manifestaciones por la consumación de la independencia. En siete meses el antiguo realista criollo, bien conocido y no tan bien acreditado, aparecía ante la nación como el autor y protagonista de la obra de su independencia.

El clero lo alaba desde el púlpito, y la prosopopeya se derrama en la exaltación del defensor de la fe: "Dios ha escogido el 24 de febrero, día de San Martín apóstol, año de la Encarnación del Divino Verbo, el undécimo del grito de la independencia y el primero de independencia sistemada", predica el entusiasta cronólogo sacristán de Zimapán al jurarse la independencia en el pueblo. La adulación o la euforia dictan el anagrama *Tu vir Dei.* Se pa-

[20] Javier Ocampo, *Las ideas de un día*, México, 1969, p. 15.

rafrasean las oraciones de la Salve y el Credo: "Creo en la Junta suprema... en el señor Iturbide su único Presidente que nació para liberar a su pueblo, quien padeció bajo el poder de los tiranos... Descendió con su Ejército a muchos pueblos sacándolos del envilecimiento. Resucitó en los Tratados de Córdoba... Subió a la Corte Mexicana, y está sentado a la diestra de la Patria", escribe quien se oculta en el seudónimo de Mora de Taranquera.

En las alegorías aparecen la del imperio prehispánico, la de la opulencia de la América Septentrional, las cadenas que se rompen, etc. Iturbide es el héroe epónimo. Se escriben himnos, poemas, dramas. Iturbide es Moisés, Macabeo, Napoleón, Tito, César, Alejandro, Washington, San Agustín, etc., registra Ocampo.[21] No obstante, el recuerdo de los héroes de la insurgencia está presente en el mismo olvido del pasado realista de Iturbide. A partir de octubre, aparecen en 1821 los ocho primeros números de *La Abispa de Chilpancingo*, "escrita —por Carlos María de Bustamante— para perpetuar la memoria del Primer Congreso instalado allí el 12 de septiembre de 1813 por el señor D. José María Morelos". El periódico, y su autor, no pueden resultar más incómodos a Iturbide y a la mayoría de los vocales de la Junta y de los jefes realistas que al frente del ejército, habían combatido y condenado al Congreso y a Morelos.

El 11 de octubre Iturbide se dirige a la Regencia pidiendo se aprueben los grados que propone en favor de quienes se declararon abiertamente por la independencia "en circunstancias en que su triunfo era un problema", o que "desde los lugares oprimidos, que no estaba en su arbitrio abandonar, supieron ser útiles a su patria y conservar en su beneficio los puestos mismos que debían servir para subyugarla". Entre los 13 grados que propone sólo incluye a dos antiguos insurgentes, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Los 11 restantes son antiguos jefes realistas, americanos y españoles.[22]

Iturbide se aleja de los antiguos insurgentes pero gana la adhesión de los obispos españoles de México que los habían condenado. Fray Bernardo del Espíritu Santo, español y obispo de Sonora, gira el 21 de septiembre una circular a sus párrocos ordenando que no se opongan al juramento de la independencia, y escribe a Iturbide hacia el 10 de octubre: "desde que se publicó la constitución —le dice—, estoy pidiendo sin cesar al Señor nos concediese en este reino un gobierno *Independiente* que nos precaviese de la ruina que amenazaban los irreligiosos principios constitucionales...".[23] Cuando se instale en Arizpe la diputación provincial, el 22 de febrero de 1822, el obispo será su presidente.

Pérez Memén registra las adhesiones episcopales a la independencia. Agustín Estévez y Ugarte, obispo de Yucatán, quien resistía la secularización de los regulares, el 5 de septiembre y en unión de las autoridades civiles, decidió apoyarla y proclamarla. Ruiz Cabañas, obispo de Guadalajara, que había rechazado la diócesis de Santiago Compostela, dio su apoyo al general Negrete desde que éste se adhirió al Plan de Iguala. Manuel Isidro Pérez, de Oaxaca, se une también. Juan Francisco Castañiza, de Durango, a través de iniciales resistencias, cuando capitula el general José de la Cruz ante Negrete concluye por no oponerse a obedecer un gobierno americano. Al abrir sus sesiones el primer Congreso Constituyente, Castañiza figura como diputado por Durango. En las diócesis donde no existía obispo, los cabildos eclesiás-

[21] *Ibid.*, pp. 13-15, 69-91, 331-332, sobre la imagen sublime del héroe.

[22] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 268-269.

[23] Fernando Pérez Memén, *op. cit.*, cap. IV.

ticos apoyan la declaración de independencia. La actitud de las autoridades religiosas la expone Fernando Pérez Memén en su tesis de grado en El Colegio de México, *El Episcopado y la Independencia de México (1810-1836).* Pérez Memén atiende a la del arzobispo de México, quien se opuso al Plan de Iguala, y cuando Iturbide entra a México sigue en su cargo "sin hacer ningún compromiso que afectara su lealtad a la corona" en tanto se conocía la decisión del gobierno español, no aceptando la presidencia de la Junta Gubernativa a la que se reeligió el 13 de octubre siguiente. El arzobispo Fonte se explicará ante León XII en carta de 25 de marzo de 1825, desde el convento de Puig, en Valencia, a donde se retiró después de salir de México.

Ante la consumación de la independencia, "fue puesto el exponente —escribe Fonte— ...en la alternativa de adherirse, reconocer y jurar obediencia al nuevo Gobierno, o de quedar expatriado de aquel territorio. Abrazó este segundo extremo, persuadido de que la fidelidad que debía por los comunes y muy especiales motivos a S.M.C. no le permitían admitir el primero sin un escándalo gravísimo". Había permanecido en México en espera de que el rey aprobase o desaprobase el tratado, como lo manifestó al gobierno independiente. Fernando VII lo desaprobó. Y como "Agustín Iturbide, arrogándose la autoridad suprema con el título de Emperador, solicitase ser ungido en la Iglesia Catedral de México" ofreciendo su protección a la Iglesia, muchos creyeron que así "la vengaba en alguna manera de los insultos que en otras partes recibía". Su situación era distinta a la de los obispos que se adhirieron a la independencia sin la condición de su aprobación por España. No zahiere esa conducta, pues le constan las benévolas intenciones de los obispos. Pero él no pudiendo "santificar una evidente usurpación" manifestó al gobierno "que, enemigo de aumentar las discordias públicas, se abstendría de disputar sobre las facultades anexas al ejercicio de la potestad civil, esperando también que ésta no usurpase las que eran peculiares del sacerdocio". Delegaría sus facultades, como lo hizo, en personas que no tuviesen "el obstáculo involuntario en que se hallaba su persona". Fonte abandonó México el 23 de febrero de 1823. En España, dice, informó de todo a Roma y al rey. La carta se refiere luego a circunstancias personales de Fonte y a la encíclica *Etsi iam Dieu* de León XII, de 24 de septiembre de 1824, que no importa a los días que nos ocupan. Sí, llamamos la atención sobre los informes del arzobispo Fonte, por todo lo que pueden revelar sobre los sucesos a partir de 1820 de los que fue testigo tan preocupado y próximo.[24]

La versión que da Fonte de su actitud es la aceptada en nuestras obras de historia. Pero Fonte omite informar a Pío VII que el 18 de abril de 1822 se presentó ante el Congreso y prestó el juramento en los términos del decreto de 24 de febrero de 1822, reconociendo "la soberanía de la nación mexicana representada por los diputados que ha nombrado para este Congreso Constituyente", y "obedecer sus decretos, leyes, órdenes y constitución que establezca conforme al objeto para que se ha convocado", sin manifestar reservas, como consta en el acta del día. La actitud general de Fonte fue elusiva, retirándose a Cuernavaca, y no como la expone al papa, pues si no se prestó a ungir a Iturbide como emperador, sí reconoció expresamente la independencia en su juramento ante el Congreso.

[24] La carta de Fonte en L. Ascencio Medina, *México y el Vaticano*, tomo I; *La Santa Sede y la emancipación mexicana*, México, 1965, pp. 228-232.

Excepto ese acto de Fonte, la actitud de los obispos viene a fortificar la posición de Iturbide frente a los antiguos insurgentes, los primeros liberales y los partidarios de España. La influencia creciente del activo y versátil ex diputado a Cádiz, don Antonio Joaquín Pérez, y la de Ruiz Cabañas, se extienden por las provincias más pobladas e importantes del país. Si en Madrid, como informa Alamán, los diputados mexicanos están divididos en republicanos y monárquicos, en México los insurgentes son relegados y los borbonistas se debilitan al ganar Iturbide para sí la adhesión de los obispos, enmascarada con el nombre de Fernando VII. De nuevo, como en 1820 y hasta septiembre de 1821, Iturbide puede ser el factótum de los privilegios corporativos de la Iglesia, bajo el signo de la independencia absoluta, y el baluarte contra la herejía y la disolución.

"De las tres garantías —escribe Ocampo—, la que recibe mayor atención de los escritores es la religión".[25]

La *Gaceta de Guadalajara* había publicado desde el 11 de julio de 1821 una representación de poblanos al general Ciriaco de Llano. "Excelentísimo señor: en favor de la independencia no podemos hacer mayor apología —le dicen— que la de asegurar que con ella se salva en este Reino la Religión Católica Apostólica Romana, vulnerada en los Diarios de las Cortes últimas de 1820, puesto que el Ser Supremo y sus adorables misterios revelados se han visto blasfemados en aquel salón y toda la península lo mismo que en Ginebra...", lo que es evidentemente falso, como consta por los diarios de debates que se conocen en México.

* * *

La muerte de O'Donojú, el 8 de octubre, desembaraza a Iturbide, y a las jerarquías eclesiásticas, de una presencia perturbadora.

La monarquía moderada análoga al país, con gobierno representativo, es el centro de la ambigüedad entre la abolición liberal del antiguo régimen y el preservativo en un país, México, contra el virus de la revolución. Jesús Reyes Heroles califica el periodo de 1824 y 1856 como el de la *sociedad fluctuante*, y al anterior como el de *los orígenes del liberalismo*. Muy concretamente podemos considerar también el de los años 1821 a 1823 como el de la ambigüedad y el desconcierto, cuando la declaración de independencia suma pero no concilia los más diversos y más contradictorios motivos.

Desde 1821, aunque no hemos precisado la fecha de su publicación, circula en México la carta de Pío VII, de 15 de septiembre de 1820, dirigida a Fernando VII, contestando la de éste informándole sobre el decreto de las Cortes que suprimió la Compañía de Jesús. El texto publicado en México es traducción directa del italiano, por lo que difiere verbalmente, no en el contenido, del conocido en España.

Importan en la carta pontificia expresiones como la de que "no hemos podido saber sin un vivo disgusto, la noticia que nos da V.M. sobre su extinción", la de la Compañía de Jesús, y el elogio de la orden. Pero importan más otros puntos. "Un torrente de libros muy perniciosos inunda a la España con daño de la Religión, y de las buenas costumbres; se empieza ya

[25] Javier Ocampo, *op. cit.*, p. 24.

a buscar pretexto para disminuir y envilecer el clero...se viola la inmunidad sagrada de las personas eclesiásticas... se trata de total abolición de diezmos; se busca prescindir de la autoridad de la Santa Sede, en los objetos que dependen de ella; en una palabra, se causan continuas heridas a la disciplina eclesiástica y a las máximas conservadoras de la unidad católica...". Ha ordenado Pío VII al nuncio en España que dirija con respetuosa libertad representaciones sobre estos puntos, "pero hasta hoy —expresa el pontífice— tenemos el disgusto de no haber visto el éxito que teníamos razón de esperar, de una Nación que reconoce y profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana, como la única verdadera; y que no admite en su seno el ejercicio de ningún culto falso".

Pío VII pide al rey, no creyendo que él, ni el gobierno, ni las Cortes estén animados de un espíritu contra la Iglesia, que "use de los remedios más eficaces que estén a su alcance" en favor de ella. "Mas si a pesar de nuestros avisos y nuestros ruegos, nos viésemos en la precisión de ser testigos de las peligrosas innovaciones en las cosas eclesiásticas, e introducidas falsas doctrinas que corrompan la pureza de la fe y la santidad de las costumbres, y trastornen la disciplina de la Iglesia. Nos —declara—, debiendo cumplir el más sagrado deber que nos incumbe... no podemos dejar de reclamar con apostólico celo cerca de S.M. tan benemérita de la Iglesia, para alejar de ella los peligros a que los enemigos de Dios y del orden, exponen la salud espiritual de nuestros pueblos".[26]

La mesura en las expresiones pontificias no ocultan en manera alguna la claridad de los juicios, incluso la excitación última al rey. El documento dirigido a Fernando VII da la consigna sobre lo que debe mantenerse como esencial por los hombres de Iglesia y el nuevo poder civil independiente. En cuanto el pontífice no cuestiona las formas representativas, es mediante ellas como se puede cumplir con los deseos de Roma, y aun congraciarse con ella en favor de la emancipación frente a una metrópoli tan poco grata.

El gran peso de la influencia eclesiástica está ahora en la balanza sobre el platillo de la independencia. Los escrúpulos se salvan con habilidad dialéctica. Desde 1821 corre impreso el *Dictamen sobre el juramento de fidelidad al Imperio Mexicano. Carta de un religioso Carmelita descalzo europeo, a otro de la* misma religión. El principal motivo para resistir el juramento al gobierno independiente, dice el carmelita, es el prestado al de España. Acude a la doctrina en la Epístola a los romanos de San Pablo, y expone su propio discurso. Si los príncipes, advierte el carmelita, "no tienen poder para hacer ejecutar sus órdenes, para defender y premiar a los buenos, y castigar a los malos, tampoco estamos obligados a reconocer su autoridad". Si España sigue legislando sobre América, será "mofa y escarnio de todas las naciones", pues sólo puede acudir a la reconquista, y en tanto "quedan suspensas todas las facultades del gobieron español". Se juró guardar la Constitución, "juramos observarla sin impedimento físico o moral; pero si no podemos, no nos obliga tal juramento, porque ya se sabe que *ad impossibile neme tenetur*". Desobedecer al gobierno mexicano es introducir una completa anarquía. La apelación bíblica es de autoridad. "Jerobán, que no era de la tribu de Judá, se sublevó contra Salomón que era legítimo rey, y arrebató en tiempo de su hijo Roboán las otras diez tribus, estableciendo un reino separado, donde florecieron, bajo las leyes de unos reyes usurpadores,

[26] Copia de la carta que con fecha 15 de septiembre dirigió el papa Pío VII al rey católico Fernando VII en idioma latino, México, 1821.

varones santos y religiosos", como los profetas Elías, Eliseo y otros. Las historias de Israel y Roma continúan ilustrando el argumento. Muy recientemente Pío VII, arrojado de Roma por Napoleón, ordenó que no se negara el juramento al emperador, hombre impío. En México "¿qué diría —se pregunta—, qué nos amonestaría que hiciésemos respecto de uno que ha establecido por sólido fundamento la religión... el conservar al clero secular y regular en todos sus fueros y preeminencias?".

Se juró la Constitución, pero no se observa para América cuando se le niega a ésta la debida representación en las Cortes, como se protestó públicamente por los diputados americanos. Así, ante las leyes dictadas "sin la debida representación de las Américas: ¿no podremos decir que el gobierno *ipso facto* renunció a sus derechos sobre ellas?" ignorando su voluntad. La libertad de imprenta abrió los ojos de los americanos, al no cumplirse lo pactado en la Constitución. Frente a una próxima sublevación anárquica, Iturbide "procedió con orden y regularidad, hasta conseguir la total independencia". Además de que, como demuestra fray Antonio de San José, en su *Resulta Salmanticense*, "obligan en conciencia las leyes impuestas por el gobierno o príncipe, aunque tirano por usurpación del reino, si está ya en pacífica posesión de él: porque entonces goza ya de legítima potestad...". Se produce en el alegato del carmelita una sorprendente mutación en el fin que se proponen los argumentos en favor del absolutismo monárquico, para orientarlos por la independencia.

La sorpresa no es única. El carmelita atacará a los religiosos que han salido de México o que se lo proponen. "Hablemos claro —escribe—, tanto los que se han fugado, como los que piensan fugarse, unos lo hacen por soberbios, pues estando acostumbrados a mirar con desprecio a los americanos, les repugna sujetarse a ellos; otros porque profesan un amor desordenado por exceso a su país nativo... les duele esta separación, y más bien prefieren con desorden e irreligiosamente irse a su tierra, y a sus parientes, contra el evangelio y su profesión, debiendo estar enteramente desprendidos de lo terreno, y dejar a los muertos que entierren a sus muertos, como nos lo enseñó Jesucristo...". Y llega aún más lejos, pues ve a los que huyen "cometiendo pecado de apostasía, e incurriendo en excomunión..." cuando en México se les necesita, y se "ha conservado a los prelados provinciales, y jerarquía regular, que destruyó impolíticamente la España...". Extrañamente, en el documento no se menciona el nombre de Fernando VII, y sí, como ejemplo de hasta dónde obliga la obediencia a la autoridad civil, se menciona la del pueblo de Israel al usurpador Jeroboán.

El *Dictamen* del carmelita, aparecido en 1821, contiene más implicaciones que las que sus inmediatos lectores pudieron suponer. La cita es más que reveladora.

* * *

El Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba, la suprema autoridad de la carta de Pío VII a Fernando VII, las adhesiones de los antiguos obispos antinsurgentes, como el dictamen del carmelita, señalan el oriente hacia donde se dirige Iturbide, o hacia dónde puede dirigirse.

Otro documento autorizado para él es el *Manifiesto al mundo. La justicia y la necesidad de la independencia de la Nueva España*, del arcediano de la catedral de Valladolid, Manuel de la Bárcena, español, antiguo amigo de la familia Iturbide e individuo de la Junta Gubernativa y de la primera Regencia nombrada el 28 de septiembre. Cuevas lo cita elogiosamente, a

partir de la metáfora de la hija que llega a la mayoría de edad "y quiere ser madre". "Verdad es —según Bárcena— que muchas veces una colonia, o por gratitud o por amor, o por conveniencia, no efectúa su emancipación tan pronto como pudiera; pero siempre le queda su derecho a salvo, para usar de él cuando le convenga y se le ofrezca ocasión oportuna: no pudo ser ésa mejor que la que se nos presentó el año de ocho..." cuando por la renuncia de los Borbones "se disolvió la monarquía, y aun cuando el pueblo español hubiera conservado su unidad, siempre quedaron rotos los lazos de la dependencia de este Reino, pues él no estaba sujeto al pueblo español, sino al Rey de España". Varió el Estado español, escribe Bárcena, "de casi despótico a casi democrático: hubo nuevo pacto en el cual cada parte pudo entrar o no entrar", y fue presuntuosa calificar a la Junta de Sevilla como soberana de España e Indias, "porque éstas quedaron en libertad de constituirse a sí mismas".

La referencia de Bárcena a la primera insurgencia se mantiene en la ortodoxia iturbidista —llamémosla así, aunque Iturbide no haya sido su autor sino sólo el *brazo ejecutor* de ella. Hidalgo obró "con sólo las armas que el furor ministraba; no aprobamos su política, fue impolítica y sanguinaria, y no se le halla disculpa —reflexiona Bárcena— sino en la misma desesperación que le arrebató, viendo repelidos, y abandonados los derechos de su patria...". Faltaba a México el hombre, y ya lo tiene; "ahora ya es otro el sistema y los medios...". El siguiente punto del *Manifiesto* funda la necesidad de la independencia en la imposibilidad de que una monarquía constitucional se extienda desde España a las Américas y las Filipinas, "mil veces más difícil de realizar que la república de Platón... un delirio que sólo puede tener lugar en la cabeza de algún político febricitante...". Quienes lo sostienen "me parecen tan locos como aquellos jacobinos que el año de 1793 querían establecer la república universal del género humano".

Dios dividió la tierra en regiones proporcionadas para diferentes estados. Nueva España, dice, es una de ellas, aunque muy extensa para una monarquía moderada; "tiempo vendrá en que el Nuevo México requiera y necesite segunda independencia". La cita se apoya en Montesquieu y su opinión sobre la gran extensión de los estados despóticos y la pequeña de las repúblicas, en las que ninguna puede engrandecerse demasiado.

Bárcena toca otro punto. La no aplicación de la constitución en México ha sido constante; la libertad de imprenta se ha suspendido como en tiempos del virrey Venegas; la autoridad militar sigue unida a la política inconstitucionalmente; "la decantada unión —con España—, no es unión, sino encadenamiento". Bárcena repite los agravios que se suceden durante el periodo colonial. "Todos estos males no tienen más remedio —declara— que una dinastía mexicana...". La expresión se refiere a una dinastía propia y no a Iturbide en el trono. A continuación hace una manifestación doctrinaria, que por cierto Cuevas no cita... "¿Qué es un Estado? Es una sociedad en la cual los individuos que la componen pueden retirarse, o por mutuo consentimiento, o sin él, habiendo causas justas; ¿y qué más justas?...".

Un sólido Montesquieu y un perturbador Rousseau animan el *Manifiesto* de Bárcena.

No criticará la Constitución, pero ella es injusta con México pues "violando los derechos del hombre" excluye de la ciudadanía a las castas. El sistema representativo es ficticio e inaplicable. Los diputados americanos están impedidos, en gran número, para viajar a España, y ello no suspende las Cortes, que seguirán legislando para ultramar. Ante el problema todo, la solución es una: "divídase el infante, y llévese cada uno su parte... divídase la mo-

narquía, o por mejor decir, sepárense las dos monarquías, y vuelva cada una a su antiguo y natural estado".

El arcediano gobernador de la diócesis de Michoacán, amigo de Abad y Queipo y de don Miguel Hidalgo en Valladolid, la capital de provincia más ilustrada de Nueva España, es en verdad un hombre distinto a don Antonio Joaquín Pérez, cuya influencia sobre Iturbide está en ascenso.

Ya se tiró el dado frente a España, escribe Bárcena: "Nada se conseguiría con destruir nuestro ejército, sería necesario destruir nuestra generación". España, lo dice el santanderino, es ya sólo una factoría de Europa. Bárcena es monarquista; "nosotros no conspiramos contra nuestro Rey, sino contra su ausencia". Invoca los nombres de Quiroga, Riego, Arco Agüero, Argüelles, Flores Estrada, Herreros: "antorchas y columnas de la Constitución española, vosotros nos habéis enseñado a ser libres, no neguéis vuestra doctrina...".

El *Manifiesto*, elogiado por Cuevas, contiene más expresiones que él no cita, y que muestran con claridad el pensamiento de Bárcena. La conquista de México es juzgada: "jamás vieron los siglos una tan injusta y repugnante unión de reinos... parecería increíble que estado tan violento hubiese podido durar trescientos años; ...pero ya gastados por el tiempo, y por la tirantez se rompieron los fierros con que la injusticia había encadenado a la inocencia". Hernán Cortés "era un alzado por sí, y ante sí...", y "no es mi ánimo infamarlo —escribe—, admiro sus virtudes políticas, y militares, mas en cuanto a las morales fue otra cosa". Lo condena con palabras de Montesquieu. Bárcena desconoce expresamente el título de la donación pontificia, y cita a Atahualpa respondiendo al padre Valverde: "Yo no sé, yo no concibo cómo ese Pontífice que dices, pudo dar a otro lo que no era suyo".

El título fundado en la cesión de Moctezuma en favor de Carlos I "fue tan legal —afirma—, como la de un caminante que cede su bolsa a los salteadores".

Acudiendo a Grocio refuta los derechos de conquista y de prescripción, y discurre sobre la nulidad de los juramentos de fidelidad para concluir su invalidez.

Las autoridades de Grocio y Montesquieu, en las que se va apoyando Bárcena en su discurso, figuran en los expurgatorios pontificios. *De iuri belli ac pacis*, libro tercero, a que él remite, por decreto de 4 de febrero de 1637, no derogado, y *El espíritu de las leyes*, por decreto de 2 de marzo de 1752, también vigente.

Pérez Memén hace un acucioso y certero examen del *Manifiesto* de Bárcena en el capítulo IV-4 de su tesis *El Episcopado y la Independencia de México.*

El *Manifiesto* de Bárcena es en su día el más avanzado de los alegatos por la independencia, venido de un hombre de Iglesia del antiguo régimen ilustrado que accede a las ideas liberales, más allá de lo que José Gaos llamó la *modernidad cristiana.*

Desde el irascible colonialismo de un hombre eminente por más de un título como Abad y Queipo, hasta el aventurerismo oportunista de un Antonio Joaquín Pérez, Bárcena era la instancia ecuánime a la que pudo acudir Iturbide. Mas frente a ese monarquismo liberal, y el mismo año de 1821, se formula el gran alegato republicano de uno de los hombres más sugestivos de su época, fray Servando Teresa de Mier.

4

DESCONCIERTO E INDEFINICIÓN

La publicación del Acta de Independencia, cuyo texto definitivo se aprueba el 2 de octubre; el decreto por el que la Junta Provisional Gubernativa asume para sí las facultades que la Constitución española daba a las Cortes y el título de Soberana con el tratamiento de Majestad, y el nombramiento que hace la Junta de los individuos de la Regencia, son los actos inaugurales del gobierno independiente en México.

El 1 de octubre la junta adopta dos reglamentos españoles: el de las Cortes de 24 de septiembre de 1810 para la Junta, y el de 8 de abril de 1813 para la Regencia. Por decreto de 9 de octubre se ordena la publicación del reglamento de libertad de imprenta de 22 de octubre de 1820, que se había aprobado por las Cortes con el inicial propósito de restringir las actividades de las sociedades patrióticas y los clubes, en la rivalidad de los exaltados y los doceañistas.

Los primeros actos de la Junta adoptan el modelo liberal español.

El 8 de octubre muere O'Donojú. Sus funerales son con todos los honores de virrey, los civiles y los eclesiásticos, y se le da sepultura en la catedral de México. La muerte de O'Donojú lleva a suplirlo en la Regencia al obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, después de que el arzobispo Fonte se excusó de aceptar la elección que la Junta hiciera en su favor.

El 4 de octubre se nombran los cuatro ministros que auxiliarán a la Regencia. Por vez primera aparece un antiguo insurgente, el diputado por Chilpancingo, José Manuel de Herrera, como ministro de Relaciones Exteriores. Para Justicia y Negocios Eclesiásticos se nombra a José Domínguez; para Guerra y Marina a Antonio Medina, y para Hacienda a Rafael Pérez Maldonado. Zavala hace el retrato más desfavorable de ellos, retrato que por cierto aprueba Alamán.[27]

La Junta comienza a ejercer los poderes que se arrogó frente a Iturbide, quien desde Liorna se quejará de ello.

Zavala escribe que en ella, en la Junta, había "personas que no podían sufrir que Iturbide se atribuyera la gloria y quisiera recoger el fruto de la empresa...". Celos, deseo desinteresado de impedir que se establezca un poder arbitrario, opinión en favor de una dinastía extranjera, "entusiasmo ciego y sincero por la libertad", animan a los que ya son enemigos de Iturbide: José María Fagoaga, español liberal, honorable y acaudalado; Francisco Sánchez de Tagle, regidor del ayuntamiento; Hipólito Odoardo, de quien ya hablamos; el coronel Juan Horbegoso, y el conde de Heras, son los que Zavala menciona como los primeros opositores en la Junta. Oposición a la que se sumarán los militares españoles que se pronunciaron por la

[27] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 100; Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 341-342.

independencia, los propietarios y comerciantes también españoles, los borbonistas, y los republicanos que ya existían, en confusa coalición.[28]

Los antiguos insurgentes parecen relegados. Carlos María de Bustamante mantiene, frente a las nuevas autoridades su culto por la antigua insurgencia, al generalísimo José María Morelos y al Congreso de Anáhuac desde *La Abispa de Chilpancingo.*

La situación es incongruente en apariencia al iniciarse la oposición a Iturbide entre los nominalmente designados por él mismo para formar el primer órgano del gobierno independiente. Si en éste están representados, como declara Iturbide que fue su propósito, las diversas opiniones, intereses y partidos, su hegemonía, la de Iturbide, sólo puede fundarse en una actitud de reconocimiento personal de los elegidos por él, de reconocimiento por su actividad en la consumación de la independencia, o en la adhesión al hombre y a su proyecto. Los motivos de reconocimiento son válidos pero endebles cuando está involucrado el futuro político de la nación, en el que los individuos de la Junta son llamados a influir comprometiendo sus intereses y convicciones, y cuando por vez primera el poder público puede ser ejercido a título propio por ellos. La adhesión al hombre y a su proyecto resulta más aleatoria. El hombre es un criollo realista que de pronto, en menos de un año, aparece suplantando a la insurgencia de 11 años y al secular poder metropolitano al que sirvió, y que desconoce en una suerte de escamoteo.

De los hombres de La Profesa, los de mayo de 1820 y los posteriores, Bataller y el inquisidor Tirado —entre los conocidos— no figuran en la Junta, como probablemente otros. Monteagudo y el obispo Antonio Joaquín Pérez se incorporan al éxito iturbidista, con los obispos y los seculares y religiosos antiliberales, al mantenerse sus privilegios corporativos. Los motivos de los jefes españoles, liberales o no, que se pronunciaron por el Plan de Iguala, no se han indagado. Los españoles comerciantes, los liberales de Veracruz, y los antinsurgentes de México, Puebla y Guadalajara, en donde dominan los consulados, aceptan el hecho, aunque irá emigrando un número apreciable de ellos. Hasta ese año de 1821, sus intereses están ligados a los del comercio metropolitano. ¿La libertad de comercio los inclina por la independencia, aun en el riesgo de que surjan en México intereses extranjeros más activos? Frente a ellos, la libertad de fábricas y de cultivos beneficiará más directamente a los opulentos criollos que siempre la han demandado. No se ha investigado la actitud de los mineros, quienes en todo caso no quedarán sujetos a las antiguas restricciones y dependencias. Tampoco se ha estudiado la abolición en México del régimen señorial, los vínculos y mayorazgos, la de los contratos de arrendamientos rústicos y la del régimen gremial.

Si en América del Sur, excepto en el Perú, la legislación liberal no fue vigente, pudo ser inspiradora de los gobiernos independientes, en México, su presunta vigencia incide en los intereses de los hombres que presencian o participan en la consumación de la independencia, y que con ésta llegan al poder.

Entre estos intereses, como consta en los memoriales y representaciones coloniales, están las demandas criollas a participar, al menos equitativamente, en el gobierno civil y eclesiástico de los países de América. Para la mayoría de los descontentos americanos sus intereses visibles y predominantes son los políticos de gobernarse a sí mismos, y decidir su propia histo-

[28] *Ibid.*, p. 101.

ria, su ser histórico como dice O'Gorman. Es entre ellos en donde emerge "la clase media ilustrada" de México —eclesiásticos, letrados, funcionarios, empleados, etc.—, *la inteligencia* que le dará su expresión ideológica desertando, como lo viene haciendo desde fines del siglo XVIII y no de manera ajena a la de España, de las ortodoxias tradicionales. Un amplio estrato de la sociedad es el que va apareciendo sin ser titular de los intereses económicos. establecidos.

Si la revolución de independencia tuvo un acento y aun una orientación populista, el episodio de la consumación —1820-1821— es deliberadamente contradictorio de la historia precedente. El proyecto inicial de mantener a México incontaminado de liberalismo se frustra. El segundo, que se formula en el Plan de Iguala, con el solo ofrecimiento de convocar a un congreso representativo de la nación que daría la Constitución del imperio, es una alentadora expectativa para quienes se hubieran opuesto al primer plan, y a Iturbide en lo personal.

La insurgencia y la restauración constitucional en España, como sucesos revolucionarios condicionan el reformismo del proyecto de 1821. Se puede intentar desviar la revolución, mediatizarla, pero no abolirla o ignorarla. Para ello se recurre a la ambigüedad. En ésta, el colonialista español que acepta la independencia y los hombres del antiguo régimen se mudan en México en tutores de la nación. La historia se precipitará entre 1820 y 1823.

* * *

Entre la ambigüedad pública del iturbidismo y el desconcierto de los inconformes, no es predecible en esos días conducta alguna. En la Revolución francesa, en junio de 1792 el club de los jacobinos todavía es monárquico y se intenta la expulsión de Billaud-Verennes que duda de la legitimidad. Robespierre pregunta: "¿qué es la república?", y desde su periódico, *Le défenseur de la Constitution*, el 10 de agosto defiende la constitución monárquica. "He oído hablar de república a hombres que no supieron sino calumniar al pueblo y combatir la igualdad. Prefiero ver una constitución representativa popular y ciudadanos libres y respetados, con un rey —escribe—, que ver un pueblo esclavo y envilecido bajo el poder de un senado aristocrático o de un dictador. ¿Acaso la gran solución del problema social consiste sólo en las palabras república o monarquía?"[29] Quinet llama la atención sobre la impreparación de los mismos jefes de la revolución frente a los grandes cambios. La caída del trono y la proclamación de la república "estallan sin haber sido anunciados en los ánimos".

Diríamos que los hombres en México están menos preparados para dirigir los acontecimientos aunque no pueden esquivarlos, y tampoco desean hacerlo.

La Junta Provisional de México no es análoga a la Junta Central de España, menos a los Estados Generales o a la Asamblea de Francia, menos a los congresos continentales de las 13 colonias inglesas de 1774 y 1775, como cuerpo representativo. La Junta "compuesta de los primeros hombres del imperio", tiene por funciones explicar la independencia en un manifiesto, establecer el modo de elegir diputados a *las Cortes* que deben reunirse, nombrar una Regencia, ejerciendo provisionalmente facultades legislativas en los casos urgentes, de acuerdo con la Regencia, de la que es también cuerpo consultivo, como se estableció en el Tratado de Córdoba.

[29] Mario Mazzuchelli, *Robespierre*, México, 1959, p. 127.

* * *

Los "primeros hombres del imperio" comienzan el ejercicio de su comisión aprobando para la Junta el título de *Soberana* y el tratamiento de *Majestad*, y arrogándose "el ejercicio de la representación nacional", con las facultades que la Constitución española da a las Cortes, en un principio de derogación del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba por los que existe. Podríamos preguntarnos si entre los individuos de la Junta ello es un acto de mimetismo, un obstáculo a la influencia y el poder de Iturbide o un inicial acto revolucionario. Quizá y confusamente es todo.

Frente a sus opositores, los inconformes borbonistas, liberales y no, que aceptan el suceso, y la *inteligencia criolla* que hace acto de presencia, Iturbide es un indisputado "héroe popular".

Fechado el 29 de septiembre y cuando aún no se publica el Acta de Independencia, aparece el papel *El Pensador Mejicano al Exmo. Señor general del Ejército Imperial D. Agustín de Iturbide.* El más perseverante periodista y folletista de su tiempo, el apologista de la Constitución en 1820 desde *El Conductor Eléctrico*, no es un hombre de "los principales de México", ni de la alta clase media intelectual. Es una especie de francotirador liberal, vocero y en su momento orientador de opiniones populares. Su papel dirigido a Iturbide es desembozado: "Cuando por un momento crece la opinión en favor de V.E. deseando sentarlo en el trono de Anáhuac —son sus primeras palabras—, cuando se oye V.E. proclamar en todas partes: *Agustín I. Emperador de la América...* es puntualmente cuando quiere hacernos desgraciados, anunciándonos que desea separarse del gobierno... si mi patria no te pone en el trono de Moctezuma, ella será la parte más ingrata del globo habitado... yo os pronostico: si V.E. no es el Emperador de la América, la anarquía o el despotismo nos acechan...".[30]

Javier Ocampo cita otro papel, *Realizado en Puebla el importante voto de un ciudadano*: "no fue la voz de los grandes siempre sospechosa de adulación, diré yo ahora con un sabio: la voz libre y sencilla del pueblo... que no sigue otros movimientos que los de su ingenuidad y de su ternura, la voz del pueblo el que por las calles gritó: Viva Agustín Primero..." cuando en Puebla, el 7 y el 8 de octubre se pasearon por las calles los retratos de Iturbide y del obispo Antonio Joaquín Pérez.[31]

Ante estas manifestaciones, y otras diversas, se publica un *Breve Manifiesto del Exmo. Sr. D. Agustín de Iturbide*, en el que habla de los talentos que puede poseer, mismos que lo hacen eludir la corona. "El trono para Iturbide —escribe Javier Ocampo— es la solicitud más ahincada en las masas populares", y documenta su juicio.[32]

* * *

En un hecho revolucionario, el de una vigente y activa libertad de imprenta, se confunden las más contrarias opiniones. Una superficial consulta de ficheros, por ejemplo el de la Colección Lafragua de nuestra Biblioteca Nacional, es más reveladora que una larga disertación.

[30] *El Pensador Mejicano al Excmo. Señor general del Ejército Imperial Americano D. Agustín de Iturbide*, México, 1821.

[31] *Realizado en Puebla el importante voto de un ciudadano*, Puebla, 1821.

[32] Javier Ocampo, *op. cit.*, pp. 72-73.

Pero de la libertad de imprenta se beneficia la minoría alfabetizada del país, y en ella las minorías urbanas, que son testigos o participan en el que es ya un debate político. La imprenta no es, no lo será en mucho tiempo, el medio de comunicación masiva. Éste lo es el púlpito, y "la jerarquía eclesiástica mexicana —señala Pérez Memén—, y aun los obispos y prelados españoles —y los cabildos y el clero americanos, agregamos nosotros—, para coronar sus esfuerzos de salvar sus fueros y privilegios" garantizados desde el Plan de Iguala, trabajan en favor de la monarquía, pero "no con un príncipe extranjero, como se estableció en aquel Plan, sino con el generalísimo al frente", en el caso de no aceptar el trono los Borbones de España.[33]

Las cartas de Iturbide a los obispos ofrecían conservar los fueros y privilegios eclesiásticos, y aunque no se han investigado las instrucciones de ellos, ni las de los prelados de las órdenes religiosas en sus jurisdicciones, no es aventurado suponer su sentido y su alcance después de su adhesión a la independencia.

En tanto en México y en las principales ciudades de provincia la imprenta divulga los asuntos del día, en la población dispersa e iletrada del país y también en todas las poblaciones, el clero orienta la opinión exaltando la figura del "defensor de la fe", "héroe de la religión", "victorioso David", "enviado de Dios", "Nuevo Abraham", etc., títulos que la imprenta acuña, y el púlpito difunde y multiplica. Javier Ocampo hace un catálogo de ellos.[34]

La consagración mítica del súbito héroe es más que una incitación a la respuesta crítica de *la inteligencia*, de sus antiguos compañeros realistas y de los insurgentes, sus antiguos adversarios.

Al explicar Iturbide en Liorna por qué no asumió el mando total frente a la primera oposición que encontró en la Junta, como considera que pudo y debió hacerlo, escribiría: "Era preciso chocar con la oposición favorita del mundo culto y hacerme por algún tiempo objeto de la execración de una porción de hombres infatuados por una quimera, que no saben o no se acuerdan de que la república más celosa de su libertad tuvo también sus dictadores". El planteamiento no puede ser más claro en su reconocimiento, en palabras del propio Iturbide.

Pero él tiene partidarios y consejeros no desprovistos de malicias políticas, aunque sí de prudencia, y se logra de la Junta, que le ha otorgado el grado de Generalísimo Almirante, la aprobación de las facultades y deberes del cargo, en el decreto de 14 de noviembre. El poder que se le concede, a iniciativa del mismo Iturbide, comprende el mando de las fuerzas de mar y tierra, y su gobierno administrativo; dirigir la instrucción de los colegios militares; distribuir las fuerzas en el territorio y el mar. Iturbide será protector del comercio, navegación, policía y obras de los puertos; nombrará en los grados "de brigadier inclusive arriba", y conservará "el estado mayor del ejército bajo la planta que se apruebe, según propuesta del mismo generalísimo". Tendrá *el tratamiento de Alteza*, "que suele ser señal de ruina —comentaría Alamán— para todos aquellos a quienes se les da sin haber nacido en las gradas del trono". En la corte del emperador se harán al Generalísimo Almirante los honores correspondientes.[35]

5100

[33] Fernando Pérez Memén, *op. cit.*, cap. v.

[34] Javier Ocampo, *op. cit.*, pp. 73-82, 231-232.

[35] *Colección de órdenes y decretos de la soberana Junta Provisional Gubernativa y de los Soberanos Congresos...* tomo I, pp. 29-31.

El cargo conferido, vitalicio por orden de la junta de 20 de octubre, le confía poder tal, escribe Alamán, "que el emperador cuando hubiese venido, tenía que estar bajo su dependencia en todo lo relativo al ejército". Desde esos días, al tener Iturbide "la fuerza y con ella la única autoridad efectiva", como también reflexiona Alamán, "había necesariamente de ponerse en choque con la Junta y la Regencia".[36]

Por su parte, la Junta comienza a ejercer las facultades que a sí misma se acordó. No seguiremos en detalle la obra de la Junta. Mencionemos únicamente algunas resoluciones significativas en cuanto manifiestan y alientan actitudes ideológicas. Por orden de 14 de noviembre autoriza que profesen los novicios y novicias que se hallen en el caso de hacerlo; que los noviciados queden abiertos en todos los conventos, y que "las prelacías de las religiones *existentes* continúen en el mismo estado en que se hallaban a la fecha en que se recibieron órdenes de España sobre el particular".

Por decreto de 15 de diciembre, y a instancia de la Diputación Provincial de México, se autoriza al ayuntamiento de la capital para que "entre en la administración de los bienes y rentas que estaban designados por sus fundadores para la subsistencia de los hospitales y de los religiosos que los servían", cumpliéndose con los pagos aprobados a los regulares exclaustrados. El 8 de febrero de 1822 se resuelve la petición del jefe político, el ayuntamiento y la Diputación Provincial de Guadalajara, dejando al próximo congreso el restablecimiento de la orden de betlemitas y la restitución de su hospital, acatando la Junta como vigentes la Constitución española y los decretos de las Cortes.

En la Junta se debate, con diversos motivos, los días 13, 14, 15 y 19 de noviembre, y el 8 de febrero, la cuestión del restablecimiento de la Compañía de Jesús y de las demás órdenes, que aprobaba el dictamen de la comisión de la Junta. Juan José Espinosa apoya el dictamen "no obstante la orden contraria de las Cortes". Mas los liberales votan en el sentido de los decretos moratorios, sin entrar al fondo del asunto, amparándose en la legislación española vigente. En el debate se pronuncian por el restablecimiento inmediato de las órdenes religiosas, Monteagudo, Juan Francisco Azcárate, el marqués de Salvatierra, Juan José Espinosa, Suárez Peralta y José María Sánchez, y en contra, Fagoaga, Jáuregui, Raz Guzmán y Sánchez de Tagle.

Iturbide y la Regencia no parecen comprometidos en el asunto, mas por los decretos y la polémica, dentro y fuera de la Junta, "el clero pudo ver que nada había adelantado con promover tan eficazmente la independencia, y que con ella acaso no había conseguido otra cosa —escribirá Alamán—, que acercar más el peligro y hacerlo por esto mismo más inminente. Los partidos políticos que se manifestaron en esta discusión, fueron el principio de los que siguieron después dividiendo, pero como éstos mudaron de carácter y los individuos pasaron de unos a otros según las circunstancias, será menester dar razón conforme fueron variando". La oposición siguió formándose en torno a Fagoaga.[37]

A la escisión desconcertada contribuye Iturbide con la iniciativa del 7 de diciembre consultando a la Regencia los ascensos por méritos en el ejército que consumó la independencia. En su consulta propone únicamente a los que figuran a partir de su adhesión al Plan

[36] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 351-352.
[37] *Ibid.*, pp. 366-367.

de Iguala en acciones, a los que se premiará con dos o más grados, y a los que lograron deserciones en el ejército español a favor de la independencia, con ascensos de dos a cuatro grados, así como premios por otros méritos. En el punto 10 de su petición se refiere a los insurgentes del sur que se adhirieron al Plan de Iguala, a quienes debe considerarse en la clase patriotas, o sea "un grado menor que los provinciales" a los que clasificaba a su vez "menos que los del ejército". Los insurgentes del sur quedan relegados a la última clase de los considerados para ascensos. El argumento de Iturbide merece recogerse: "El Exmo. Sr. Guerrero, y lo mismo, acaso, los demás caudillos, faltos de alicientes y recursos para sus tropas, los contentaban con grados imaginarios, y de allí era que a los capitanes no les daba ni aun el sueldo de un sargento, y con esta proporción el pago de las demás clases. Por estas consideraciones, y deseando que tuvieran en el Gobierno una prueba generosa de aprecio, y de que no se ha querido hacer distinción perjudicial a ellos desde que se adhirieron a nuestra causa, les dejé en sus mismos grados, aun con la consideración de veteranos, arrostrando graves inconvenientes".[38]

La Regencia aprueba sin modificaciones la petición de Iturbide.

* * *

Frente a la oposición que se va manifestando, Iturbide busca reforzar el apoyo del clero con el del antiguo ejército realista sumado a la independencia, incluso manifestando un desprecio indiscreto hacia los insurgentes que le habían dado su adhesión. Si la Junta aparece dividida, Iturbide continúa ligando a su persona dos brazos del sistema colonial, el eclesiástico y el militar. La falta de más satisfacciones y beneficios al ejército no será obra suya, sino imputada a la Junta, y más tarde al Congreso. La unión ofrecida en Iguala se va convirtiendo en torno a él en la de los hombres del antiguo régimen, aunque sin la opción legitimista de poder restaurarlo, como lo había hecho Fernando VII en 1814, lo que lo obliga aún más a la ambigüedad.

Pero los borbonistas, absolutistas o constitucionales, no pueden confiar en el hombre al que se solicita para ocupar el trono. Los republicanos, elusivos y minoritarios, recibirán la *Memoria* del doctor Mier rubricada por su legendario prestigio.

La Arcadia republicana de Estados Unidos, que posee la única Constitución sobreviviente en más de 40 años, está presente en México como en el resto de la América española. Parece existir una fórmula política para la felicidad y la libertad. En México se traducen y publican por Francisco Molinos las *Declaraciones de Derechos* de varios estados de la Unión norteamericana, y sus autores, y los de la Constitución Federal, no fueron revolucionarios frenéticos y enemigos de Dios, sino hombres piadosos y libres. Bustamante desde *La Abispa de Chilpancingo* señala el modelo. No deja de existir el de la Constitución inglesa, pero lo admirable de sus libertades, conquistadas en un largo proceso tan acusadamente insular, su carácter de metrópoli colonial, el hecho de no constar en un documento unitario, lo torna vago y de imposible adopción en México y en el resto de América. Los mismos norteamericanos no lo hicieron suyo, crearon su propia forma, y ésta fue republicana. Excepto en el punto de re-

[38] *Gaceta...*, 13 de diciembre de 1821; Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 294-296.

ligión, frente a la América del Sur los anglosajones como ningún otro pueblo han acertado en la historia con la fórmula republicana de su felicidad.

El hecho de que en México se siga escribiendo sobre los derechos a ser independientes implica no sólo el repudio de una sujeción política en sí, en la que se involucra la corona, sino también un repudio de España y lo español al insistir en la naturaleza usurpadora de la conquista y en los agravios acumulados durante siglos, y en el abatimiento moral e intelectual de las Américas. Sin que atienda al tema mismo de lo antiespañol, Javier Ocampo recoge testimonios de esa actitud en el capítulo IV de *Las ideas de un día.* La declarada admiración por la revolución liberal española va unida al reproche violento por la falta de igualdad que se impuso a la representación americana en las Cortes, y no tanto en la supletoria sino por la exclusión de las castas en el derecho de voto, lo que la disminuía inequitativamente. Se sigue reclamando por la condenación y la represión de la insurgencia, negando a las Américas los derechos proclamados en la propia España.

Los papeles, polémicos o simplemente expositivos, los registra metódicamente Ocampo en su obra, la de más imprescindible consulta y lectura para conocer las ideas del día en la consumación de nuestra independencia.

En un vacío, la figura de Iturbide se yergue e impone. No existiendo partidos y ni siquiera grupos ideológicos definidos, ni caudillos militares y civiles que expresen y conjuguen opiniones, éstas se manifiestan espontáneas y desconcertadas. Sólo los antiguos fidelistas antiliberales permanecen unidos apoyándose en la jerarquía eclesiástica, su aliada más eficaz, e identificándose con la independencia "cuando los mismos hechos causan posiciones contrarias causantes a su vez de un mismo efecto", en un ocurrir dialéctico que apunta y discierne agudamente Javier Ocampo.[39]

* * *

Un monarquista, Luis de Mendizábal, de familia de ricos mineros del Real de Catorce en San Luis Potosí, doctor en teología y vicerrector del Colegio de San Ildefonso, escribe y publica en 1821, con el pseudónimo de Ludovico de Latomonte, un *Catecismo de la Independencia* dedicado a Iturbide, generalísimo de mar y tierra y presidente de la Regencia. El *Catecismo* puede considerarse un ideario criollo *del régimen establecido.* Mendizábal previene contra las novedades, porque "dirigir a un pueblo contra el espíritu que lo anima, es... machacar en fierro frío... (y pedir) a la naturaleza toda que trastorne y mude sus leyes". Le preocupa que bajo la libertad de imprenta "no se publiquen aquí ni se introduzcan de fuera libros sobre religión" sin la aprobación de los obispos, como ocurre en España. Tales obras que ahora circulan son seductoras en su estilo y en su misma tipografía, enardeciendo las pasiones y provocando disputas, que además distraen de ocuparse de cuestiones de interés como el comercio, la agricultura, etcétera.

Su argumento contra la república coincide con el que se hace valer en el resto de América por los monarquistas. Los mexicanos, "han sido esclavos por tres siglos, y no pueden pasar sin violencia del extremo de la esclavitud al de la república". Todas las repúblicas tuvieron an-

[39] Javier Ocampo, *op. cit.*, pp. 153 ss.

tes reyes, y no podemos comenzar por donde ellas terminan. La monarquía moderada garantiza la libertad, y en el trono de México un príncipe Borbón es el deseable por las tradicionales ligas de religión con su casa, y "porque si se habla de derecho ninguno lo tiene igual". Mas se pregunta si se puede elegir un monarca mexicano. "Sería el paso más difícil —responde— y el más funesto para el imperio". Los candidatos serían numerosos y se formarían partidos y disturbios; "considerad también —agrega— que subir al trono de un golpe, es el salto más peligroso que lleva hasta el despotismo". ¿Mendizábal formula una advertencia a Iturbide?

El conservadurismo monárquico de Mendizábal lo lleva a proponer, acudiendo a la autoridad de Jovellanos y de Filangeri, un sistema legislativo de dos cámaras, la alta integrada por el clero y la nobleza y la baja por "el estado llano". Mas su monarquismo tiene fisuras visibles frente a la república. El cristianismo, escribe, "con su divina moral produce necesariamente todas las virtudes cívicas que convienen a una república; pero no basta que se hallen como aisladas en el cuerpo de la religión, si reducidas a la práctica, no se generalizan en el pueblo, mediante la buena educación, el celo de los gobernantes, y los influjos del tiempo y las costumbres". El discurso propone, y no puede evitarse la conclusión, que el régimen cristiano óptimo es el republicano, y que la monarquía misma es la que prepara su advenimiento.

El conservadurismo de Mendizábal continúa en su discurso. Las prerrogativas eclesiásticas deben ser intocables, sus fueros, las de sus bienes; el Estado no puede intervenir en la materia de exclaustraciones, clausurar noviciados. Tocar estos puntos "no es reformar sino destruir abiertamente". La verdadera reforma del clero la deben dictar concilios provinciales y diocesanos. En las cortes constituyentes, los obispos serán los jueces en la materia, y los diputados seglares sus asesores en cuestiones de la Iglesia, y lo contrario en las civiles. Con este arbitrio se resolvería todo "sin reclamo de parte alguna. Sin tener un clero muy rico (dice el mismo Montesquieu) nunca puede prosperar un estado católico", afirma Mendizábal.

Frente a un Manuel de la Bárcena, el *Catecismo* de Mendizábal es un corolario de la carta de Pío VII a Fernando VII.

En esta grave cuestión, el monarquismo independiente avanza en otro sentido: el de la abolición del regalismo español. La cuestión del patronato de la Iglesia, que no tocaremos, replanteará el problema.

La complejidad del desconcierto se proyecta hacia el congreso constituyente que debe convocarse.

5

LA DEFINICIÓN REPUBLICANA DEL DOCTOR MIER

En su prólogo a una breve selección de escritos de fray Servando Teresa de Mier, previene Edmundo O'Gorman a no ver en él únicamente "al pintoresco perseguido sobre el que tanto gustan insistir sus biógrafos".[40] Entre los mexicanos que por falta de iniciativa, oportunidad o medios, crecieron y se formaron en el ámbito mediterráneo de la Nueva España, y los pocos que viajaron a España y a Europa, Mier es una excepción. Desde 1795 sale de México hacia Cádiz como consecuencia de la causa que se le abrió por el sermón predicado ante el propio virrey, en la Colegiata de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1794. Quien desee conocer los detalles del singular sermón y de la causa, puede consultarlos en el tomo tercero de la *Colección de Documentos para la Historia de la Guerra de Independencia de México coleccionados por J.E. Hernández y Dávalos* (pp.4-223).

España, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, México —como compañero de Javier Mina en 1816—, prisión en México y San Juan de Ulúa, La Habana, Filadelfia, y su regreso final a México en 1822, es su deambular durante 27 años, conociendo cárceles de España y América.

No podemos demorarnos en los episodios de su vida, y ni siquiera en los escritos que a partir de 1811 va dejando a favor de la independencia. Atenderemos únicamente a su *Memoria político-instructiva enviada desde Filadelfia en agosto de 1821 a los jefes independientes del Anáhuac, llamada por los españoles Nueva-España.*

La primera versión de la *Memoria* la envió, dice Mier, desde fines de 1820 al general Guadalupe Victoria, mas los graves acontecimientos que sobrevinieron lo impulsan y obligan a exponer a los jefes libertadores del Anáhuac lo que "juzga ahora conveniente para asegurar su completa independencia...". Sigamos la exposición de Mier en su documento, sin intentar en manera alguna sistematizarla.

Las potencias de Europa, para lograr la cooperación de los pueblos americanos, "los paladearon —escribe— con promesas de gobiernos representativos o reinos constitucionales". Hoy, después de la derrota de Napoleón, los olvidan y se alían desde el Congreso de Viena en favor del absolutismo, declarando que "cuantas variaciones o modificaciones de gobierno intenten las naciones... son turbulencias del espíritu revolucionario del siglo, sediciones y rebeliones que castigará la santa alianza, en Júpiter tonante". La Alianza, erigida en poder supremo, distribuye los pueblos entre los monarcas. A Inglaterra se le conceden los puntos necesarios

[40] *Servando Teresa de Mier, Escritos y memorias*, prólogo y selección de Edmundo O'Gorman, México, 1945, p. 10.

"para redondear su sistema de encadenar la navegación del mundo". Las repúblicas desaparecen en Europa, y los aliados reconocen la soberanía de España en ultramar. Ningún país de Europa auxiliará a las Américas, pero tampoco pueden obrar en favor de España.

La cesión española de la Luisiana a Napoleón, y su venta posterior a Estados Unidos; y la de las Floridas también a éste, "envuelven nuestras fronteras internas de oriente a poniente, amenazando —los angloamericanos— absorbernos con su Población que crece asombrosamente... Todas estas cuestiones —reflexiona Mier— son agravios nuestros, no sólo por los derechos de nuestras madres que fueron todas Indias, sino por los pactos de nuestros padres los conquistadores (que todo lo ganaron a su cuenta y riesgo)...".

La insurgencia americana lleva 11 años. En Europa, el ex arzobispo de Malinas, Pradt, en su obra *De las colonias y la actual Revolución de la América española*, propone a los monarcas de la Alianza el reconocimiento de la independencia de las colonias españolas con reyes de sus dinastías, antes de que la opinión americana se declare por la república, procurando mantener para Europa los beneficios del comercio.

Instigados por Francia, el Congreso y el gobierno de Buenos Aires, "cansados de sus ambiciones y vergonzosas divisiones, y a excusas del pueblo que no se ha batido para darse un amo, trataban de recibir por rey al Principillo de Luca...". Todo se hizo público, y el pueblo sublevado procesó a los gobernantes, y la república se consolidó.

En tanto, Bolívar convoca en Colombia un congreso republicano, y la Constitución de Cúcuta se promulga. La información de Mier sobre América es reciente y completa. El continente está emancipado, y es necesario "ver ya en grande la libertad de la América". Ésta indica, dice, "el establecimiento de tres repúblicas poderosas (o como algunos quisieran, una con tres grandes federaciones). La primera compondría México desde el istmo de Panamá hasta Californias, Texas y Nuevo México. La segunda, Venezuela y Nueva Granada, en toda la extensión de su antiguo virreinato. Y la tercera Buenos-Aires, Chile y el Perú". Era el plan de Mejía y de los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, y el que él demostró, afirma, a Blanco-White en su *Segunda carta al español*.

Dentro de esta concepción continental ve las campañas de San Martín en Chile y el Perú.

Según Mier, la lectura de la obra de Pradt por los diputados mexicanos reunidos en Veracruz para viajar a España, inspiró el proyecto de un infante para regente de México con el voto disidente de Miguel Ramos Arizpe. Las noticias de Mier no llegan a la representación de 25 de junio de ese año de 1821. Pero está suficientemente informado de las reuniones de diputados y ministros españoles hasta mayo, y sobre la conformidad de crear regentes y cuerpos legislativos en América, según noticias de Londres.

Mier condena a fondo el proyecto. Un Borbón regente: "tendremos un déspota mayor que los virreyes —exclama— y mucho más caro sin comparación", y rodeado de una corte importada: "¡Brava ganancia hemos hecho después de once años de guerra a muerte!".

Los diputados mexicanos ignoran en Madrid el estado de México, "su juramento general de independencia... y el plan del general Iturbide. No es de extrañar —explica Mier—, que para concluir la efusión de sangre y suavizar tal vez la esclavitud, pidiesen, o hayan convenido en el desatino que se dice".

De la parte historiada pasa a su definición política ocupándose del Plan de Iguala, proclamado por Iturbide "para resucitar el antiguo Imperio Mexicano, (que) es mucho más fino,

y más aliciente para los intereses particulares y las preocupaciones. Me da tanto más cuidado —escribe—, cuanto no me parece solamente obra suya. Está demasiado combinado con la rapidez de los sucesos, la propuesta de los diputados, el espíritu de la santa alianza y las ideas de Inglaterra. Como Apodaca ha estado en ella de ministro plenipotenciario, estaba yo por creer lo que dicen los españoles, que Iturbide procede de acuerdo con S.E.".

Mier no puede evitar discurrir entre agudas malicias y fábulas. Desde meses antes de proclamarse el plan, Mier sabía, preso en San Juan de Ulúa, de "la convención secreta entre Iturbide y Guerrero, y de lo que se trabajaba para concordar con ella a los demás jefes militares". Pero cabría la pregunta de si la fábula es total, conociéndose como hoy se conoce la gestión de Guerrero ante Moya el 17 de agosto de 1820, de la que bien pudo informarse a jefes militares realistas para advertirlos y también para desacreditar a Guerrero. Entre esos jefes figuraría en un primer lugar el general Dávila al mando en Veracruz, el puerto más importante del país. En su prisión en San Juan de Ulúa ciertamente Mier disfrutaba de privilegios que le permitían leer y escribir con desenvoltura, y su trato con los oficiales españoles pudo ser más familiar que lo que podríamos suponer. Mas dejemos las conjeturas.

Violando la amnistía liberal de 28 de septiembre de 1820, Mier es enviado a España por las autoridades coloniales. En La Habana, donde tiene la noticia de la proclamación de Iguala, fray Servando se fuga hacia Estados Unidos y llega a Filadelfia. La opinión sobre el monarquismo del Plan de Iguala es desfavorable ahí.

Pero Mier advierte que "el héroe de Iguala ha reconocido en todos sus tratados y principios el principio inconcuso de la soberanía popular", y el derecho de la nación a darse su Constitución, sometiéndose a la Junta Provisional que él mismo crea, lo que lo salva de "las interpretaciones de la malignidad".

En Filadelfia, con Manuel Torres, "Ministro de Colombia", escribieron en la prensa haciendo ver "que la independencia absoluta era el objeto y la base del plan, y el resto una estratagema política inspirada por las circunstancias para meter en la red a todos los partidos..." Fernando VII no puede ausentarse de España sin abdicar, y no viniendo a México, tocará al Congreso decidir. No concibe Mier que se pueda llamar a otro Borbón o a un Austria, "cuya sangre está amalgamada con el despotismo", como la de todas las dinastías.

El ataque a la monarquía se inicia con palabras airadas. "Los reyes son verdaderamente unos ídolos manufacturados por el orgullo y la adulación..." y como "decía el Papa Clemente XIV, sólo saben la verdad cuando oyen predicar el evangelio". Rodeados de parásitos, "cada pimpollo que brotaba de la mata real, abrigaba otra infinidad de reptiles consumidores en semejanza del ídolo principal. Una mujer liviana pierde una casa opulenta, una prostituta real arruina un reino entero...". La mezcla de sangre entre las solas dinastías las lleva a degenerar, "hasta no producir sino vasos de contumelia en locos e imbéciles". El panfletario gusto de Mier no se excusa de solazarse en los dicterios a la monarquía, para pasar a la apología de la independencia republicana.

"No, no —exclama—: el Congreso de Chilpancingo, que no era menos legítimo para nosotros que el de Cádiz para los españoles... declaró nuestra emancipación y la independencia de México desde el 6 de noviembre de 1813, y dio una constitución republicana, que aunque la hayan censurado los necios inquisidores u otros satélites del despotismo, y en realidad peque por fanática lejos de ser irreligiosa (pero) sus bases son republicanas y muy buenas. Des-

de entonces data la libertad del Anáhuac, y la independencia de la República... A ningún particular le es lícito variar el pacto social decretado por un Congreso constituyente, y menos, cuando lo hemos estado rubricando con nuestra sangre nueve años...".

La reivindicación insurgente, la de la declaración de independencia de 1813 y de la Constitución de Apatzingán, en la pluma del legendario doctor Mier es la primera y más determinada impugnación al significado que se propone en México al Plan de Iguala, y obviamente, aunque Mier no los conoce, al Tratado de Córdoba y al Acta de Independencia de 28 de septiembre.

"El que se obstine en doblarnos bajo el yugo de un monarca, que ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar, será él mismo, como en Buenos Aires —previene—, víctima del enojo de los pueblos que han conocido sus derechos muy a su costa...". La ingratitud de los monarcas persigue a quienes les sirven, como Fernando "con los héroes que salvaron el trono"; y remontándose en la historia recuerda a Cristóbal Colón engrillado.

El monarca es por naturaleza agresor. El único contemporáneo en América era el de Portugal en Brasil, y se lanzó a una guerra con la república de Buenos Aires. El que poseyera la corona de México se propondría destruir a Estados Unidos, que tendría a su favor las repúblicas sudamericanas. "Todos estos gobiernos —afirma Mier— están en inmediata comunicación, y con ánimo decidido de completar en ambas Américas un sistema general republicano".

* * *

De la admiración por Inglaterra, por las libertades inglesas, en su *Historia de la Revolución de Nueva España*, publicada en Londres en 1813, el doctor Mier pasa en la *Memoria* de 1821 a la de las instituciones republicanas de América. Para O'Gorman, antes de su llegada a Estados Unidos, "no había aún republicanismo declarado en el Padre Mier". La influencia norteamericana y la inminencia de la monarquía proclamada en Iguala dictan la impugnación de Mier. "Construye, acumulando argumentos —apunta O'Gorman—, toda una teoría de Derecho Divino a favor del sistema republicano", semejante a la vieja doctrina del derecho divino de los reyes.[41]

Mier se dirige en su *Memoria* a un pueblo profunda y fanáticamente religioso, tan religioso aunque bajo otra denominación y menos coherente como sociedad, que el de las 13 colonias inglesas al que se dirigió en 1776 Thomas Paine en su *Common Sense*. El argumento bíblico de autoridad, de ser demostrado, puede ser el más impresionante. La relación de los documentos de Mier y Paine es visible. La execración absoluta de la monarquía, y el discurso sobre la *República de derecho divino* son más que coincidencias. Veamos este último.

En Paine la referencia bíblica es más extensa, comprende la petición de los israelitas a Gedeón para instaurar una monarquía hereditaria, y la que hicieron a Samuel para que les diera un rey. En Mier la referencia se limita al último suceso. "La monarquía es considerada en la Escritura —escribió Paine— como uno de aquellos pecados de los judíos por los cuales se declaró sobre ellos una maldición reservada". "Yo daré los reyes en mi furor, dijo Dios por Oseas, y los quitaré en mi cólera", cita Mier. Cuando Samuel consulta con Jehová la petición de los

[41] *Ibid.*, p. 15.

israelitas, aquél le contesta: "No te han deseado a ti sino a mí para que yo reine sobre ellos", en el texto de Mier. En el de Paine varían las palabras pero no el sentido de las admoniciones de Samuel al pueblo sobre las depredaciones que le esperan bajo la monarquía.

Jehová, Dios en Mier, concedió finalmente "un rey constitucional, y el pacto jurado o constitución lo puso el profeta Samuel ante el arca del Señor para testimonio sempiterno de la obligación del rey", escribe Mier, y advierte que en la serie de los monarcas de Israel, las Escrituras "no cuenta sino tres buenos, no tanto por sus obras cuanto por la penitencia que hicieron de sus crímenes contra Dios y su pueblo".

En su fértil imaginación Mier va más lejos que Paine. "Dios mismo dio a su pueblo escogido un gobierno republicano, con un presidente que se llamaba Juez, un senado que se llamaba Sanedrín nombrado por las tribus, y asambleas generales de la nación".

El argumento histórico-biblico tiene otra corroboración que no puede dejar de mencionar: "una pastoral del actual Papa Pío VII, dirigida en 1797 al pueblo de Inmola, del que era obispo, en favor del sistema republicano, demostrando que éste es el más conforme al Evangelio". La referencia la hace Mier sin tener el documento a la vista para citarlo con fructuosa amplitud. Se trata de la *Homilía* de Domingo Testa, cardenal Chiaromonti, obispo de Inmola y futuro Pío VII, en la que hizo profesión de fe republicana el día de la fundación de la República Cisalpina, el 25 de diciembre de 1797. La *Homilía* se publicó por vez primera en castellano en Gerona en 1800. En Venezuela la tradujo del francés en 1818 Juan Germán Roscio, confrontándola para refutar la pastoral de 30 de enero de 1816, del mismo Pío VII a los cuerpos eclesiásticos de América, llamándolos a "desarraigar y destruir completamente la funesta cizaña de alborotos y sediciones que el hombre enemigo sembró en esos países".[42] La *Homilía* de Inmola también está en conflicto con la carta de Pío VII a Fernando, del 15 de septiembre de 1820.

El argumento religioso de autoridad gravita fatalmente en la historia de la emancipación americana, y frente al de las jerarquías eclesiásticas, contradictorio en la propia persona del pontífice, debe prevalecer el de las Escrituras. Mier no puede prescindir del discurso ejemplar de Paine. Conviene recordar que desde 1811 Manuel Gracia de Sena había traducido, también en Filadelfia, partes del *Common Sense*, destinadas a los "habitantes de la *Costa Firme*", como un "documento que servirá a justificar la que tarde o temprano ha de venir a ser (en América) una misma causa".[43]

En ese año de 1821 Mier coincide en Filadelfia con Vicente Rocafuerte, quien también traduce partes de la obra de Paine. Santiago Felipe Puglía, "mexicano" (?) residente en Filadelfia, firma el 20 de julio de 1821 una traducción parcial de Paine con el título *El derecho del hombre para uso y provecho del género humano*, que se publicaría el año siguiente. El mismo Puglía es autor de *El desengaño del hombre* —publicado en 1794, y reeditado en 1822—, una apasionada alegación religiosa, anticlerical y republicana por la independencia, cuya inspiración en Paine es inmediata. La obra había dado lugar a un edicto de la Inquisición de Méxi-

[42] Juan Germán Roscio, *Obras*, Caracas, 1953, tomo II, pp. 103-131; *Homilía del cardenal Chiaromonti, obispo de Inmola, dirigida al pueblo de su diócesis en la República Cisalpina el día del nacimiento de J.C. Año de 1797*, Gerona, 1800; *Carta pastoral que a continuación de otra del Santísimo Padre el Señor Pío VII dirige a sus diocesanos el Arzobispo de México*, México, 1816. (La pastoral de Pío VII de 30 de enero de 1816 en las pp. 3-6).

[43] *La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha*, reimpresión con prólogo de Pedro Grases, Caracas, 1949, p. 33.

co, de 24 de octubre del mismo año de 1794, prohibiéndola y apercibiendo de excomunión a sus lectores, poseedores y a quienes no la denunciaran.

La breve estancia de Mier en Estados Unidos no ha sido investigada, ni la influencia de Paine en su *Memoria* se ha verificado con la atención que merece, y que en esta página sólo apuntamos.

La presencia de Paine había llegado hasta Buenos Aires, y en el *Grito del Sud* se le cita traduciendo párrafos suyos.

La obra de Paine, y muy concretamente el *Common Sense*, fue el gran manifiesto en la "proclamación de la nueva filosofía del republicanismo", en Estados Unidos.[44] "Es imposible llegar a medir la influencia que ejerció este extraordinario libelo —escriben Morrison y Commanger. Entre los creadores de la nueva nación pocos desempeñaron un papel más dinámico que Thomas Paine...".[45]

* * *

La autoridad revolucionaria y republicana de Paine, y su discuso escriturario, son para Mier el modelo más conforme para hablar a México. Él lo adopta, lo amplía e ilustra con los sucesos próximos en América y Europa. Lo sigue en la denuncia de las falacias del sistema constitucional inglés, con ejemplos a los que en México deben ser más sensibles: "En 300 años la profesión del catolicismo ha sido un crimen de muerte. Irlanda padece tal opresión, que existe allí una insurrección perpetua, y como los españoles hacían en nuestra América, los ingleses tampoco permiten a los extranjeros penetrar en Irlanda".

Mier se rectifica a sí: "yo mismo, escribiendo allí mi *Historia de la revolución de Nueva España*, me vi en la necesidad de anglicanizar mis ideas". Ahora, en plena libertad puede formular su requisitoria en contra de la corona y de las monarquías de la Santa Alianza, que han intervenido con las armas en los países que en Europa se dieron constituciones liberales.

Mier se vuelve a Fernando VII: "Su corazón es sangriento, no ama sino el despotismo... ¿Y éste es el Emperador que nos quiere dar el señor Iturbide? —se pregunta— ¿O al conspirador D. Carlos? ¿O a los archiduques de Austria, empeñada en una guerra inicua para privar a las naciones independientes de constituirse y (de) congresos representativos?... ¿Qué derechos tienen en la América los reyes de Europa sino los de los ladrones y salteadores?".

En su profuso discurrir casi no hay extremo que Mier no toque, incurriendo en esas fantasías que tanto han distraído, con su estilo, de la perspicacia de su pensamiento. Conforme a lo proclamado en el Congreso de Viena, es la antigüedad de las dinastías la que las legitima: "descendientes hay en Nueva España de las 20 familias reales, de entre las cuales se elegía Emperador o Hueitlatoani en México. Yo mismo —revela Mier— desciendo del último y muy digno de serlo, que fue Quatemozin. Ésta es la verdadera causa porque se me desterró a España ha 26 años..." y por la que se le alejó de nuevo en 1820, a pesar del indulto decretado.

El *leitmotiv* de la condenación de las monarquías reaparece: no puede pensarse en limitaciones constitucionales a la corona. En España los diversos reinos las tuvieron admirables,

[44] Vernon Louis Parrington, *El desarrollo de las ideas en Estados Unidos*, Buenos Aires, 1959, tomo I, p. 288.

[45] S.E. Morrison y H.S. Commager, *Historia de los Estados Unidos de Norteamérica*, México, 1951, tomo I, p. 193.

"pero las hollaron los reyes a pesar de los memorabilísimos esfuerzos que hizo la nación en las guerras... Sus héroes, Padillas, Lanza, etc. pararon en los cadalsos". Lo mismo ocurrió a la América, en donde "conmovidos por las razones y vehemencia patética de Casas", se declaró que los reinos de América "son independientes de España: que deben permanecer a sus reyes naturales; y al de Castilla sólo podía convenir el título de Emperador de las Indias, para proteger en ellas la predicación del Evangelio...", como consta en las Leyes de Indias. "Pero de la cuna pasó nuestra Constitución al sepulcro, luego que el despotismo enterró las de España". El mal no está, como se dice, en la distancia, está en la monarquía que "siempre está pugnando por romper las barreras y extender los límites de su autoridad". Un rey "a quien rodean de pompas, placeres palaciegos, cortesanos, aduladores y bayonetas, apenas puede uno acercarse sino temblando de un balido real... sin poder decirle la verdad sino en emblemas, por temor de desagradar a su sacra o cesárea Majestad... ¿será más a propósito para gobernar un país extenso que una reunión de sabios escogidos por los pueblos... a quien todo el mundo puede instruir de la verdad?".

"Lo contrario prueba la rapidez con que crecen y prosperan las repúblicas," escribe mostrando a la de Estados Unidos, que "han asombrado al mundo con su fuerza y su prosperidad. Parece un encanto; pero es un encanto anexo en todas partes y tiempo al gobierno republicano, a la verdadera y completa libertad, que sólo en él se goza". Los estados monárquicos que prosperan es por lo que tienen de republicanos "en sus cortes y parlamentos que representan a la nación. Y el empeño con que se ve luchar a estos mismos cuerpos contra los proyectos de la autoridad real, acaba de demostrar que ella es perjudicial". Las mismas Escrituras elogian la república romana. Sin preocuparse mucho por su propia lógica, Mier afirma que nada puede concluirse sobre la extensión y duración de las federaciones, pues los gobiernos representativos no han existido en la historia. Se apoya en la autoridad de Samuel Adams, gran amigo de Paine y "probablemente el norteamericano más completamente demócrata de su generación", la de la independencia, como se le califica por algunos.

Angustia a Mier prevenir a México en contra de la monarquía, y en su discurso desahoga su pasión republicana. "Decía el ministro Gálvez, que en América dominaba el planeta oveja, y el rey de las ovejas no puede ser más que un lobo", escribe, para agregar: "Escarmentados ya tres siglos de reyes, ¿por qué comenzar como los pueblos decrépitos y corrompidos...? Pero ¿no es el extremo de la locura, que estando libres a tanta costa, y remotos del alcance de los sultanes, vayamos a pedirles que se dignen venir a regirnos con su cimitarra?" Y de nuevo acude a las Escrituras, cuando Samuel, después de la elección de Saúl como rey, le dijo a los hebreos: "aguardaos ahora, y veréis el grande crimen que habéis cometido en pedir un Rey". Él, Mier, ruega a Dios "no continúe a castigar sobre nosotros el reato inmenso de los conquistadores nuestros padres, sino que acordándose de su infinita misericordia, se dé por satisfecha la cólera de su justicia con 300 años de esclavitud bajo los reyes de España, y once años de guerra a muerte a su nombre y por sus órdenes, y no permita verificar el plan propuesto para darnos un monarca, y menos europeo".

Escribe cuando recibe noticias de España, por medio de los papeles de París, sobre la resolución de Fernando VII y las Cortes de enviar infantes a las Américas, de acuerdo con el proyecto de los diputados americanos que fue finalmente desechado por la oposición del rey, después de ser admitido, como lo informaba el embajador francés Montmorency-Laval el 18

de mayo de 1821 al Ministerio de Negocios Extranjeros, y como era público aun en la prensa española.[46] Las noticias del 24 y 25 de junio de ese año no las recibía aún nuestro doctor Mier, quien se exalta en contra del proyecto, lo refuta en detalle y exclama: "...desearía tener el poder de Elías para hacer llover fuego del cielo sobre los insensatos que han osado insultarnos con un decreto tan mentecato: y sobre los Americanos mismos, si fuesen capaces de aceptarlo". "No olvidemos un instante —escribe— aquella célebre sentencia de Cromwell: que cuando se ha tirado una vez la espada contra el rey, es menester también arrojar la vaina de una vez para siempre".

La noticia lo incita a seguir escribiendo acumulando agravios en contra de la España absolutista, y de la constitucional que burló en América las leyes liberales. En España "siempre han sido y serán tiranos, porque necesitan serlo. Ni pueden deshacerse de la idea radicada en tres siglos de que la América debe ser sacrificada a su metrópoli barataria, y nosotros destinados a trabajar exclusivamente para su provecho. Hagámosles ver que la mina, que han estado cargando con tres siglos de agravios, reventó ya para enviar nuestros opresores al demonio".

"La América es nuestra, porque nuestros padres la ganaron si para ello hubo un derecho; porque era de nuestras madres, y porque hemos nacido en ella. Éste es el derecho natural de los pueblos..." Mier reitera su antigua tesis, y llega al fin de su *Memoria* increpando a Iturbide: "¡ Mueran los asesinos! ¡Viva la independencia! ¡Iturbide! ¿Qué sería de ti y tus compañeros de armas si no se verificase? Tú la has jurado... Estás en la obligación de mantenérsela, y jamás envainar la espada una vez tirada contra el rey, según aconsejaba el protector de Inglaterra... Él no paró hasta no colgar a Carlos I. Tú debes colgar hasta la idea de darnos un Emperador... Así es como únicamente borrarás hasta la memoria de los males inmensos, que en 10 años hiciste a tus compatriotas por un error de opinión. Abjura de nuevo, que es otro error no menos pernicioso. Sostén la independencia; pero la *independencia absoluta, la independencia* sin nuevo amo, la *independencia republicana.* Entonces coronado con un laurel inmarcesible subirás a ocupar un asiento en el templo de la gloria con Guillermo Tell, con Washington, con Bolívar, con San Martín".

En la América anglosajona también se vivieron incertidumbres para establecer la independencia, pero "el célebre Tomás Paine los hizo resolver apelando al *sentido común,* que dio título a su obra. Yo traduje su alocución —dice—, acomodándola a nosotros en el libro 14 de mi historia de nuestra revolución...", y Mier hace una cita de su propia obra.

Para O'Gorman, la *Memoria* de Mier inaugura plenamente la gran etapa republicana de su pensamiento. El documento, reiterativo, no es un discurso sistemático, ni sigue en esto el ejemplo de Paine. Obsesionado por la declaración monárquica de independencia escribe una arenga denigratoria de ella y exalta la república. No importa aquí si el republicanismo de Mier es súbito. Es cierto, como él dice, que en el libro XIV de su *Historia* citó, sin mencionar el nombre de Paine, su *Sentido común,* adaptándolo muy libremente a la América española, y también que elogió y propuso el modelo constitucional inglés, *anglicanizando* su pensamiento.

No podemos ocuparnos aquí de la cuestión, pero el disimulo con que cita a Paine en Londres, en 1813, no deja de ser significativo de una previa afinidad con él.

[46] Carlos A. Villanueva, *Fernando VII y los nuevos estados,* París, s.f., pp. 60-81.

La *Memoria* de 1821 es el último discurso político fundado en la autoridad de las Escrituras. La república será la definitiva secularización del poder público. En adelante, conservadores y liberales, monarquistas y republicanos, polemizarán atenidos a otros argumentos, abandonando los religiosos de autoridad sobre el fundamento del poder civil en América. El hecho mismo de la independencia absoluta sólo es posible como ruptura con los fundamentos doctrinarios de la autoridad del antiguo régimen metropolitano, cualquiera que sean los motivos de quienes la realicen, incluso los de rescatar a México de la revolución liberal.

Si Mier acude a las Escrituras, lo hace para dirigirse circunstancialmente *ad hominem* a creyentes míticamente religiosos. Baste recordar que él es un galicanista y no un regalista, y que fue el galicanismo el que nutrió al clero constitucional francés.

La *Memoria* de Mier llega a México, y su primera reimpresión la hace Severo Maldonado, individuo de la Junta Gubernativa y uno de los hombres más singulares en la época, iniciando el tomo primero de *El Fanal del Imperio Mexicano* el 15 de mayo de 1822, cinco días antes de la proclamación de Iturbide como emperador, y siendo ya Mier diputado electo por Monterrey al primer Congreso Constituyente, al que se incorporaría el 15 de julio.

Toda la autoridad del legendario fray Servando precede a su profesión de fe republicana entre la ambigüedad y el desconcierto de esos días. El conflicto está planteado expresamente. Diríamos que su *Memoria* es la que lo plantea.

Parte quinta
EL PROYECTO MONÁRQUICO

1

LA CONVOCATORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

La Junta Provisional Gubernativa se había concebido y se instauró con el fin determinado de que estableciera el ejecutivo provisional en la Regencia del imperio y formara la convocatoria a Cortes. Integrada por Iturbide con hombres del antiguo régimen, la independencia se consuma con la deliberada exclusión de los que habían combatido por ella. Quizá en la Junta había algunos independentistas del grupo de Los Guadalupes, organización secreta que colaboraba con el general Morelos, de la que se ha ocupado Ernesto de la Torre, dando a conocer una documentación inédita, aunque imposibilitado de identificar a los diligentes conspiradores que trabajaban en la ciudad de México y otras de provincia.[1]

La cuestión de la convocatoria daría lugar a que Iturbide escribiera en Liorna acres censuras, pues la Junta "desempeñó este deber más tarde de lo que convenía e incurrió en faltas muy considerables. La convocatoria —escribe— era defectuosísima; pero con todos sus defectos fue aprobada, y yo no podía más que conocer el mal y sentir".[2]

Alamán hace suyo el juicio adverso de Iturbide.[3] Zavala ve en la convocatoria probada la "más monstruosa amalgama de elementos heterogéneos...".[4]

La convocatoria se publica en la *Gaceta Imperial* de 27 de noviembre, o sea, dos meses después de instalada la Junta. El 30 de septiembre, como ya vimos, se había integrado la comisión de convocatoria con Monteagudo, Martínez Mansilla —oidor de la Audiencia—, el coronel Juan Horbegoso y el capitán retirado Manuel Velázquez de la Cadena. El 8 de octubre la comisión consulta a la Junta si debía exponer separadas las variaciones que se consideraran necesarias al sistema de elecciones de la Constitución española, o si ellas debían presentarse todas *a un tiempo*, aprobándose esto último.[5]

El 30 de octubre la comisión presenta su dictamen. El secretario de Relaciones solicita que se suspenda el asunto hasta que se conozca *un papel* que la Regencia presentará el siguiente día 3. Severo Maldonado opina que el debate debe ser prolongado, "y que en su concepto debía adoptar esta Soberana Junta otros principios y bases para la Convocatotía de Cortes, distintos y aun contrarios a los que proponía la Constitución Española". Se aprueba esperar la exposición de la Regencia, pero se sigue tratando el asunto, con opiniones de "separarse lo me-

[1] Ernesto de la Torre Villar, *Los "Guadalupes" y la independencia*, México, 1966.

[2] *Manifiesto de Liorna*, p. 249.

[3] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo v, pp. 249.

[4] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 102.

[5] En las referencias a lo tratado en la Junta Provisional Gubernativa remitimos a las sesiones de los días que se citan, en el Diario de sesiones de ella.

nos posible de la Constitución" como lo hace la comisión conforme a lo *determinado* por la Junta, según expresa Icaza, o bien como opina Monteagudo, coincidiendo con Maldonado y con la mayoría de la comisión, adoptando "otros principios contrarios al sistema que hoy rige", lo que no se ha hecho por no ser ésa la opinión de la Junta.

En tanto llega *el papel* de la Regencia se aprueba continuar el examen del proyecto de la comisión.

Según Alamán, ese día 30 Monteagudo opinó que se formara el constituyente con dos cámaras, lo que no consta en el acta.

Excepto cuando la Junta se declaró a sí misma soberana, sin explicar el sentido y alcance de la expresión, la palabra no ha surgido de nuevo. Mas al tratar de la convocatoria a Cortes constituyentes se está aceptando plenamente lo declarado en todas las constituciones de la emancipación americana, y en la española de 1812, que "la soberanía reside originalmente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos...", como consta, por ejemplo, en la Constitución insurgente de 22 de octubre de 1814. Iturbide y los hombres del antiguo régimen no pueden negar, e incluso aceptan y fundan la autoridad del órgano constituyente en el supuesto subversivo de la revolución liberal. No podríamos decir que la consecuencia es predecible entre ellos, pero sí que, en todo caso, el conflicto continúa. El propósito mediatizador de la revolución es el que se pone a prueba.

El 31 de octubre continúa el debate sobre la convocatoria, sin que en el acta de la sesión conste algo más que los nombres de quienes hablaron.

El 2 de noviembre se incorporan a la comisión de convocatoria Francisco Severo Maldonado, José Manuel Sartorio, Isidro Ignacio Icaza. Maldonado, el versátil proyectista, que para don Miguel Hidalgo dirigió el insurgente *Despertador Americano* —diciembre de 1810 y enero de 1811—, y el antinsurgente *Telégrafo de Guadalajara* —1811-1812— después de la derrota en el Puente de Calderón, es, en opinión de la doctora Benson, quien más probablemente influye en la convocatoria definitiva que se aprueba. Sartorio, famoso orador, viene a consolidar la opinión de la comisión en el sentido de apartarse del modelo electoral español. Sobre el doctor Icaza, ex jesuita, resulta aventurado opinar.

En el debate de ese día 2, Sánchez de Tagle reclama porque en el proyecto se excluya a los extranjeros, entre los que se cuentan tantos beneméritos en el ejército. Juan Francisco Azcárate, autor de los votos del Cabildo Civil en 1808 para reunir un congreso o junta del reino por vacar la soberanía en España, opina que la convocatoria debe "separarse en mucha parte de la Constitución Española".

El día 3, en el que no se trató de la convocatoria, se debatió sobre el desafuero de eclesiásticos en los términos del artículo 74 del Reglamento de Libertad de Imprenta, aprobando la Junta que el artículo no se aplicara en el imperio.

Sartorio presentó un voto "sobre pronta restitución de las religiones suprimidas y continuación de noviciadas", que se turnó a la comisión respectiva.

Una fisura aparece en el punto de fueros, en este caso el militar, al leerse una representación de militares, encabezada por Luis Quintanar, Nicolás Bravo, Melchor Álvarez y José Joaquín Herrera, expresando que "cuando se trate de la felicidad pública no sea obstáculo nuestro fuero, de que gustosamente nos desprendemos en su obsequio".

El 6 de noviembre se presenta a la Junta el proyecto de la Regencia sobre convocatoria, y se fija el 7 para su discusión.

El 7 se da cuenta con una cuestión planteada por Juan Bautista Raz y Guzmán, sobre si la Junta "está facultada para convocar un Congreso distinto en lo substancial de lo que previene la Constitución...". Se aprueba que la Junta "no tiene tal facultad para convocar un Congreso distinto en lo substancial del que previene la Constitución española", aunque puede hacer "variaciones en la parte reglamentaria". Severo Maldonado, por su parte, presenta un proyecto de convocatoria cuyo texto desconocemos.

Se aprueba discutir en primer lugar el proyecto de la comisión.

El día 8, no obstante lo aprobado el día anterior, Juan José Espinosa propone que se trate primero el proyecto de convocatoria de la Regencia, lo que no se aprueba.

Después de leerse un proyecto del doctor José Eustaquio Fernández, se recibe oficio de la Regencia solicitando concurrir al debate. Se discute y aprueba oír a la Regencia pero no que intervenga en el debate, declarándose la Junta en sesión permanente en el asunto de la convocatoria.

La Regencia concurre, e Iturbide objeta que no puedan reunirse la Junta y la Regencia, pues el reglamento de aquélla —el de las Cortes— no ha sido pasado a la Regencia y es nulo por contradecir el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Habiendo jurado el ejército el plan y el tratado, continúa Iturbide, es preciso "tener presente que residiendo la Soberanía en el Pueblo, las Cortes serían sostenidas por el ejército, como ahora y hasta su instalación lo serían estas bases insinuadas". El acta no es clara al resumir la intervención de Iturbide, pero no oculta el carácter de enfrentamiento que su presencia tiene. Iturbide presenta "un proyecto propio suyo formado la noche anterior".

De nuevo el acta es confusa al reseñar las intervenciones, que tocan puntos diversos: si Regencia y Junta pueden debatir unidas la convocatoria, si ésta se puede apartar de la Constitución española, si debe discutirse un proyecto u otro, para concluir que la convocatoria puede variar el modo establecido en la Constitución.

Monteagudo, apoyado por Maldonado, propone que se nombre una comisión que dictamine sobre el último proyecto, sin aclarar el acta cuál es éste.

Iturbide nombra la comisión, de la que formarían parte el marqués de Rayas, por los mineros; Sánchez Enciso por los eclesiásticos; Velázquez de la Cadena, por los labradores; Almanza, por los comerciantes; el marqués de Salvatierra por los literatos; Sotarriva por los militares, Lobo, por los artesanos; Raz Guzmán por la Audiencia; Suárez Pereda por la Universidad, y Gama por el pueblo.

Entre el 30 de septiembre y el 8 de noviembre se han integrado tres comisiones para dictaminar sobre la convocatoria, y se han presentado a la Junta dos proyectos oficiales, el de la Junta y el de la Regencia; y tres privados, el de Maldonado y el de José Eustaquio Fernández, y el personal de Iturbide.

El 10 de noviembre se inicia el debate con asistencia de la Regencia, considerando el proyecto de la comisión que resulta aprobado con modificaciones que no lo afectan en su sustancia. Queda también aprobada la división del Congreso en dos salas "por sorteo en cada una de las respectivas clases". La sesión concluyó con discursos de Guridi y Alcocer, Antonio Joaquín Pérez, e Iturbide, felicitándose y elogiándose mutuamente por la concordia entre la Junta y la Regencia.

* * *

El 11 de noviembre se aprueba que "subsistan las Diputaciones Provinciales donde ya están establecidas; y que además se establezcan en las Intendencias que no las tengan, renovadas en su totalidad aquéllas con vecinos de las mismas Provincias, y pudiendo recaer la nueva elección en los mismos individuos que no hayan cumplido su tiempo".

La comisión de Convocatoria presenta la redacción de ésta, incorporando las observaciones que se hicieron, que se aprueban al igual que la forma de los poderes a los diputados.

El 15 de noviembre se ponen en la mesa los artículos de la convocatoria para que los individuos de la Junta se impongan mejor de ellos.

El registro de las sesiones en que se trató la convocatoria a Cortes o congreso constituyente no puede ser más revelador de la confusión que impera en la Junta y en la Regencia, al no adoptarse el modelo español y vacilar sobre lo que debe aprobarse.

La convocatoria es la presentada en su dictamen por la comisión de la Junta. A ella nos referiremos después.

El proyecto de la Regencia, de 6 de noviembre, que firma Iturbide como su presidente, se circula impreso con el título de *Indicación dirigida por la Regencia del Imperio a S.M. la Soberana Junta Provisional.* "Poco habría que meditar en este negocio si los principios liberales de la Constitución Española, en la que ciertamente se percibe el glorioso esfuerzo de la filosofía por afianzar la libertad del hombre —se dice en el documento—, no fueran susceptibles de combinaciones más felices que... reciban una aplicación más propia a las circunstancias", diversas a las de España en su tiempo.

El lenguaje de la Regencia nos seguirá sorprendiendo cuando lo rubrican las firmas de Iturbide y don Antonio Joaquín Pérez. En España "subsistían aún en toda su fuerza los monstruosos abusos del poder arbitrario... la ruina de los fueros que antiguamente disfrutaban las jerarquías privilegiadas habían reducido a éstas a la ignominiosa necesidad de buscar el favor del monarca al precario apoyo de su existencia, y convertidas así en viles apoyos del despotismo, era natural que los reformadores de las leyes ocupados de la idea y el sentimiento de los males, se esforzasen en atacarlos donde se presentaban a primera vista, confundiendo... los efectos de la tiranía con las causas que la habían producido. De aquí el descrédito de las clases privilegiadas y la ruina de su influjo en el cuerpo legislativo, cuya formación no podía adaptarse a las nociones de sus autores, sin destruir el equilibrio político que asegurase la permanencia del poder al mismo tiempo que le impide degenerar en arbitrario". Vino la división que impidió a España "disfrutar de los inmensos bienes de su excelente Constitución si se mejorasen algunas de sus leyes concernientes a la organización del poder legislativo", reforma que se puede intentar en México. Se debe contener todo poder, dividiéndolo, y "reconociendo los principios liberales consagrados en la Constitución", de la manera más conveniente.

Los principios que expone la Regencia se apoyan en la razón y en "el ejemplo de nuestros vecinos los republicanos del norte, constituidos más libremente que la monarquía de España", con el contrapeso de un senado "cuyas funciones tienen por objeto contener los arrebatos de la representación popular, tan fácil de extraviarse en perjuicio del mismo pueblo, cuando no hay en las constituciones un cuerpo intermedio que revea y pese sus determinacio-

nes". Es el camino trazado por "los dos únicos pueblos de la tierra que gozan de ese beneficio: los Estados Unidos del norte y la Gran Bretaña. Ambas naciones deben su asombrosa prosperidad a la división del cuerpo legislativo en dos salas o cámaras compuestas diversamente según las respectivas circunstancias de su población, todo sin perjuicio de los sagrados derechos de la representación nacional, que no puede conservarse de otro modo que poniendo un dique al torrente de abusos en que degeneran las juntas populares dejadas a su propia dirección".

El proyecto de la comisión de la Junta prevé un solo cuerpo al no apartarse de la Constitución española. Para sólo aplicar la Constitución, se arguye, no era necesario crear la Junta con facultades para convocar al Congreso.

La proposición de la Regencia se concreta: se deben convocar dos salas, "una de representantes del clero en número que no exceda de quince, ni sea menor de doce: igual número de militares: un procurador de cada uno de los Ayuntamientos de las ciudades, y un apoderado de cada Audiencia territorial". La otra cámara se formará por diputados "elegidos inmediatamente por el pueblo a razón de uno por cada cincuenta mil", aboliendo la elección en grados, "que destruye la sensible relación entre el pueblo y los elegidos, no menos que el influjo de opinión de la masa de los habitantes... Éste es —concluye— el verdadero liberalismo que procura para la nación la Regencia del Imperio", para "establecer francamente los fundamentos de la verdadera libertad".

¿En la especiosa proposición de la Regencia, las apelaciones liberales, los modelos de Estados Unidos y la Gran Bretaña, significan un viraje ideológico, aun con las reservas que ella misma hace?

* * *

Consumada la independencia, el acceso al poder de los americanos y de los españoles que se les unen, cualquiera que sea su origen y sus ideas, no puede proponerse la rehabilitación del antiguo régimen como posibilidad que en verdad no existe. La única opción, verbal y estructural, es la del constitucionalismo, esto es, la creada por la revolución. Y es dentro de ella donde deben preservarse los intereses del antiguo régimen. En dos meses, el desconcierto sobre la forma de elegir e integrar el órgano constituyente se acentúa.

El proyecto personal de Iturbide, de 8 de noviembre, merece esbozarse. "Las clases en que está distribuido el Pueblo —se dice—, y a que se reduce todo él, vienen a ser: primera eclesiásticos: segunda labradores: tercera mineros: cuarta artesanos: quinta comerciantes: sexta militares: séptima marinos: octava empleados de Hacienda, gobierno y Administración de Justicia: novena literatos: décima títulos: undécima pueblo". En el pueblo se comprenden los que no pertenezcan a ninguna otra. La elección que cada clase haga de sus diputados será la más apropiada, al conocerlos en sus virtudes, probidad, etcétera.

Para fijar el número de diputados a cada clase "debe atenderse no tanto a lo más o menos numerosa de ella, cuanto a la influencia que tenga en el estado, el interés que tome en su felicidad...". Así, se podrían distribuir los 120 diputados que propone de la siguiente manera: "18 a los eclesiásticos: 10 a los labradores: 10 a los mineros: 10 a los artesanos: 10 a los comerciantes: 9 al ejército y la marina: 24 a los empleados...: 18 a los literatos: 2 a los títulos:

y los 9 restantes al Pueblo". Se puede acordar disminuir una representación en beneficio de otras, sin que exista preponderancia de alguna.

La manera de elección la propone Iturbide para cada clase. Los diputados eclesiásticos los elegirían, uno el cabildo y otro los curas en cada diócesis. Los mineros elegirían del mismo modo que hacen las elecciones ordinarias en sus cuerpos. Los consulados pueden elegir los diputados de los comerciantes como eligen al prior y a su cónsules, correspondiendo dos al de México, al de Veracruz, al de Puebla y al de Guadalajara, y concediéndose dos a Campeche. Los diputados militares los elegirán los estados mayores de infantería, caballería, dragones, artillería e ingenieros, y los oficiales de marina de los apostaderos de Veracruz y San Blas; y en Campeche un diputado el ejército y otro la marina, como lo permitan las circunstancias. Los diputados artesanos se elegirán conforme a la Constitución, pero votando sólo los maestros con casa abierta, "los verdaderos interesados en el arreglo de su departamento". Los labradores elegirán también conforme a la Constitución, considerándose labradores a los propietarios rústicos, agregándose los jornaleros a la clase del pueblo para elegir. Los diputados literatos se distribuyen en el proyecto: "4 elegirá la Universidad de México: 2 su Colegio de Abogados: otros 2 de Guadalajara: otros 2 la casa de Estudios de Campeche: y otros 2 el Proto-Medicato". Los seis restantes podrían nombrarse por los prelados y jefes políticos. En la elección de los títulos sólo votarían los del imperio. Los diputados por los empleados se nombrarían dos en cada provincia, uno por el jefe político y otro por el intendente de Hacienda; por la Administración de Justicia, las audiencias de México y la de Guadalajara nombrarían tres. En la elección de diputados del pueblo concurrirán todos los que no pertenezcan a alguna de las clases de acuerdo con el sistema de la Constitución.

Iturbide aclara que su plan se puede conciliar con el de la Regencia, con el establecimiento de las dos Cámaras, distribuyendo la representación en ellas, aunque sin aclarar la manera de hacerlo.

No nos detendremos en glosar los proyectos de la Regencia y de Iturbide. La primera se inspira en la convocatoria original a las Cortes de España, de 29 de enero de 1810, que las establecía por estamentos, con una cámara de prelados y grandes del reino, y otra popular. Jovellanos en su *Consulta sobre la convocación de las Cortes por estamentos*, de 21 de mayo de 1809, coincidió con la convocatoria, aunque en su posterior exposición sobre la organización de las Cortes incorporó a la nobleza y a la representación eclesiástica, la del brazo militar.[6] La defensa que hizo Jovellanos de la Junta Central se reimprimió en Puebla en 1821, y su autoridad es generalmente reconocida. La Regencia sustituye en su proyecto a la nobleza por los diputados de los ayuntamientos y de las audiencias.

Iturbide, por su parte, atiende a una representación de *clases*, considerándolas en cuanto a su influencia en el Estado y no a su número, y divide el constituyente en dos salas en las que las clases figurarán indiscriminadas. La forma de elección tiene un carácter corporativo pero no igualitario en las diversas *clases*. Iturbide en su Manifiesto de Liorna, censura la convocatoria aprobada por la Junta pero no dice una palabra sobre su proyecto.

[6] Gaspar de Jovellanos, *Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta Central y se da razón de la conducta y opiniones del autor desde que recuperó la libertad*, con notas y apéndices, reimpresión en Puebla, 1821, pp. 109-110 de los Apéndices y notas.

* * *

La convocatoria, que se promulga el 17 de noviembre, establece una elección en dos grados. El primero es el de electores que nombren alcaldes, regidores y síndicos, "conforme al reglamento de las Cortes de España de 23 de mayo de 1812". De haberse efectuado ya elecciones de ayuntamientos conforme a la Constitución, se harán de nuevo ajustándose a lo aprobado en la Junta. Tienen derecho a voto todos los ciudadanos de todas las clases y castas, si han cumplido 18 años de edad. El ayuntamiento elegido nombrará, de entre sus individuos, un elector de partido que se reunirá con los restantes en la cabecera del partido, donde nombrarán a los electores de provincia unidos al ayuntamiento de la cabecera. Estos electores se reunirán en la capital de la provincia y, también unidos a su ayuntamiento elegirán los diputados al congreso que correspondan en el cupo que se fija en el plan anexo a la convocatoria. Las "provincias de México, Guadalajara, Veracruz, Puebla, Nueva Vizcaya, Sonora, Valladolid, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán, elegirán diputados, y de ellos han de ser tres precisa e indispensablemente, uno eclesiástico del clero secular, otro militar natural o extranjero, y otro magistrado...". Por cada tres partidos de la provincia se elegirá un diputado. Mas siendo de interés que concurran al Congreso diputados "instruidos en las ramas más importantes", en la provincia de México deben elegirse también un minero, un título y un mayorazgo; en Guadalajara un comerciante, en Puebla un artesano, en Nueva Vizcaya un labrador, en San Luis Potosí un empleado, en Guanajuato un minero, en Yucatán un empleado. Para el resto de los diputados se puede elegir libremente, siempre que no sean eclesiásticos, magistrados, letrados y militares. Los extranjeros que se elijan deben ser propietarios y casados con mexicanos. En las provincias en donde su cupo no da para elegir de varias clases, la elección será libre. El número de diputados para cada provincia, sin relación con la población, corresponde a dos diputados por cada distrito, "entendiéndose por tales las subdelegaciones" como precisa Alamán, o sea una división territorial establecida por las circunstancias más diversas.

Los diputados electos deben estar reunidos en la ciudad de México el 13 de febrero de 1822, para que, examinados sus poderes, el Congreso se instale el día 24 siguiente.

El artículo 14 de la convocatoria establece que las diputaciones provinciales existentes subsistirán, removiéndose sus individuos y pudiendo reelegirse la mitad de sus diputados (art. 15). En las provincias en que no se hubiesen instalado, se elegirán inmediatamente los diputados de ellas, separándose de las otras provincias a que estuvieron unidas.

Las elecciones de diputados a las provinciales se harán al día siguiente de las de diputados al Congreso, en los términos del reglamento respectivo. Cada diputación provincial constaría así de siete individuos.

Los diputados que posean patrimonio o rentas no disfrutarán de dietas, y a los que carezcan de ellos, las diputaciones provinciales los habilitarán.

Al reunirse el Congreso, se dividirá en dos salas "con igual número y facultades dependientes en consecuencia una de otra", revisando una sala lo propuesto en la otra.[7]

La extraña convocatoria es una manifestación más del desconcierto en el acto mismo de convocar al Congreso que debe constituir a la nación.

[7] *Colección de órdenes y decretos de la Soberana Junta Provisional Gubernativa...* tomo I, pp. 31-36.

El *cupo* señalado a cada provincia en la elección de diputados es el siguiente:

Intendencias	*Partidos*	*Diputados*	*Suplentes*
México	43	28	4
Guadalajara	28	17	2
Puebla	21	14	2
Veracruz	11	7	1
Mérida	16	11	1
Oaxaca	22	14	2
Guanajuato	10	7	1
Valladolid	21	14	2
San Luis Potosí	10	7	1
Zacatecas	6	4	1
Gobierno de Tlaxcala	1	1	1
Provincias Internas de Oriente			
Gobierno del N. Reino de León	1	1	1
Id. del Nuevo Santander	1	1	1
Id. de Coahuila	1	1	1
Id. de Texas	1	1	1
Provincias Internas de Occidente			
Durango	34	23	3
Arizpe	12	8	1
Nuevo México	1	1	1
Californias			
Gobierno de la antigua o baja	1	1	1
Id. de la nueva o alta	1	1	1
Total	242	162	29

La *Credencial de diputados a Cortes* aprobada por la Junta expresará que los electores "trasladan en su persona —la del diputado— la facultad y poder que les confirieron los ciudadanos que componen los pueblos y partidos de ella —la provincia— por medio de sus respectivos Ayuntamientos... para que con los demás diputados de Cortes, en representación de la Nación Mexicana... y ciudadanos de todas clases, sin distinción alguna... y en uso de las facultades que les han concedido, constituyan el Gobierno del Imperio bajo las bases fundamentales del Plan de Iguala, y Tratado de la Villa de Córdoba, estableciendo la separación absoluta del poder legislativo, del ejecutivo, y judicial, para que nunca puedan reunirse en una sola persona...".[8]

La convocatoria, según Iturbide, puso la elección real en manos de los ayuntamientos, formados "a su placer —el de los que intrigaron en las elecciones—, y por consiguiente viciados", con injuria del pueblo.[9]

Lorenzo de Zavala enjuicia la convocatoria aprobada por la Junta: "La más monstruosa

[8] *Gaceta Imperial...*, 29 de noviembre de 1821.

[9] *Manifiesto de Liorna*, p. 251.

amalgama de elementos heterogéneos fue el principio de sus operaciones. Primeramente —señala— no era proporcionado el número de diputados de las provincias a su población. Durango por ejemplo, que tenía doscientos mil habitantes eligió doce diputados (Zavala no advierte que en el plan anexo a la convocatoria a Durango se le asignan 23) y Oaxaca o Guadalajara que tenían triple población nombraron seis" (en el anexo citado aparecen con 14 y 17). Zavala censura que, por ejemplo, no se adoptara como base la propiedad y se aprobara "el extravagante medio de hacer nombrar por clases y oficios... creyendo sin duda muy neciamente representar por este medio los diversos intereses de la sociedad, y haciendo una parodia ridícula de los estamentos de España, o de los Estados Generales de Francia en una sola cámara". Unido a esto el juramento del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, se introdujo en la convocatoria "el germen de la destrucción del Congreso y de la guerra civil".[10]

No es imaginable el pensamiento que dictó la convocatoria, ni el de quienes la aprobaron. Rehuyendo adoptar, aun modificado, el sistema constitucional español, que acepta en un principio la Junta para abandonarlo después por el dictamen de su comisión, no se llega a dar forma a un procedimiento electoral al menos coherente en sí mismo. En la convocatoria se aplican el reglamento español de 23 de mayo de 1812 para elección de ayuntamientos, y el artículo 328 de la Constitución y el decreto de 23 de mayo de 1812 sobre el establecimiento de diputaciones provinciales para la elección de éstas, aunque ahora los electores de provincia deben unirse al ayuntamiento de la capital provincial en el acto de elegir.

Si no se puede imaginar el criterio que preside la convocatoria, menos fácil resulta suponer el fin que se propone y los intereses que pudiera servir. Quiénes y cómo pudieran influir en las elecciones con ánimo contrario a Iturbide, resulta también inescrutable. El hecho cierto es que Iturbide no puede imponer ni influir en la convocatoria en los días en que su popularidad es cenital y se propaga por el país.

Empleando una expresión actual podemos decir que comienza a ser visible que Iturbide llega a su *límite de incompetencia.* En esos días es cuando se publica el *Breve manifiesto del Excmo. Sr. D. Agustín de Iturbide generalísimo del ejército imperial mexicano.* Iturbide se siente obligado a explicarse porque en el entusiasmo "fácilmente degeneran los afectos patrióticos", y ha notado "que en algunos impresos la gratitud se ha excedido a invitarme con la diadema de este Imperio; y (se) arguye al mismo tiempo que no tuve investidura alguna concedida por la Nación", por lo que los documentos de Iguala y Córdoba no la obligan. Se le atribuyó, dice, la ambición del trono desde antes de entrar a México. No puede acallar murmuraciones, "pero sí puedo afirmar de mí mismo —declara—, que cuando la Nación mexicana disponiendo legítimamente del cetro de su imperio llegase a ofrecérmelo, como a Wamba ofreció el suyo la Nación española, sería necesario para que corriese la paridad del ejemplo, que por tercera vez se repitiese el prodigio de la vara de Aarón que según algunos autores fue el que hizo que ese dignísimo príncipe cediese a la instancia de los electores; y que aplicándome en el figurado caso alguna parte de lo que contestó Numa a los embajadores que le presentaban la corona, no cesaré de responder, que si en mi persona se reconocen algunas prendas apreciables, serán puntualmente las que más me deben alejar del Trono: esto es, el amor al reposo y una vida retirada".

El comentario sobre el documento es ocioso.

[10] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 102-103.

2

HACIA EL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE

Al realizarse las elecciones de diputados al primer Congreso Constituyente existen, desde 1820, seis diputaciones provinciales instaladas, habiendo Iturbide autorizado en Puebla la instalación de la séptima en agosto de 1821. Por decreto de 8 de mayo del mismo año, las Cortes españolas aprobaron que se estableciera "una Diputación Provincial en cada una de todas las Intendencias de provincia de la España ultramarina en que no esté ya establecida". Serían individuos de las nuevas diputaciones los ya elegidos para las existentes que comprendían los territorios que ahora se les segregaban. Los diputados que debían completar el número de siete en las nuevas diputaciones, los designarían los electores de partido para las elecciones de diputados a Cortes por los años de 1822-1823.[11]

El decreto lo trajo O'Donojú a México. Los sucesos impidieron su aplicación inmediata. Mas el 1 de febrero de 1822, y en los términos de la convocatoria de la Junta Provisional, de 17 de noviembre anterior, se instaló la Diputación Provincial de Michoacán. Con anterioridad, el 18 de octubre de 1820 y después de declarar su independencia de Guatemala, la Intendencia de Chiapas instaló su diputación. En cuanto se trata de las diputaciones provinciales seguimos a Nettie Lee Benson en su obra *La diputación provincial y el federalismo mexicano*, la aportación más original al estudio de nuestro federalismo. En relación con el periodo 1820-1823 remitimos a su acuciosa exposición en el capítulo III de la obra. En 1822, al establecerse el Congreso Constituyente, el número de las diputaciones provinciales llega a 14. Ellas son: Nueva Vizcaya, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Provincias Internas de Oriente, Zacatecas, Nueva Galicia, Guanajuato, Michoacán, México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, y Yucatán y Chiapas.

Por ahora dejemos constancia de la existencia de las diputaciones provinciales en México en 1822. Conforme a lo originalmente establecido en la Constitución española de 1812, su número en el primer periodo constitucional fue de seis: México, San Luis Potosí, Nueva Galicia, Provincias Internas de Oriente, Provincias Internas de Occidente y Yucatán. Las provincias habían demandado constantemente el derecho a elegir cada una su diputación provincial. A través del tiempo, un tiempo breve en verdad, del 29 de octubre de 1812, cuando se estableció la primera en Yucatán, hasta el 14 de septiembre de 1814, cuando por bando del virrey Calleja se publicó con la real orden de 4 de mayo el real decreto del mismo día, por el que Fernando VII derogó el régimen constitucional, se habían elegido e instalado las seis primeras diputaciones provinciales de México. Y en el más breve lapso de 31 de mayo de 1820 a 24

[11] *Colección de los decretos y órdenes de las Cortes...*, tomo VII, pp. 72-73.

de febrero de 1822, día de la instalación del Congreso Constituyente, las diputaciones provinciales llegan a 14. Ya en las Cortes de Cádiz al pedir los diputados americanos el establecimiento de ellas en América, Argüelles advirtió que tenderían a ampliar sus funciones y que al multiplicarse estos pequeños gobiernos propenderían de hecho a una especie de federación.

No se ha realizado en México un estudio de la acción de las provinciales en sus jurisdicciones. Habiéndose creado en el marco del sistema constitucional metropolitano, y subsistiendo por el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, son con los ayuntamientos constitucionales, las únicas instituciones de origen electivo, primero en extensas regiones y después en los límites de las provincias en que se van erigiendo. Más adelante atenderemos a sus atribuciones. Bermúdez Zozaya lo advirtió a Iturbide cuando le propuso que los individuos de la Junta Provisional fueran designados por las diputaciones provinciales para "darle cierto aire de popularidad", según versión de Alamán. Los argumentos de Bermúdez Zozaya no podían menos que importunar la imagen que de sí mismo iba figurando Iturbide.

Por su origen electivo, las diputaciones no pueden dejar de ser, aun dentro de sus atribuciones formales, expectativas de gobierno propio en las provincias. Al consumarse la independencia y al adherirse a ella, unidas a los ayuntamientos constitucionales, mantienen con ese carácter la cohesión del antiguo virreinato en la nación independiente. El gobierno provisional no perturba su existencia, y ellas no oponen reservas al Plan de Iguala y al Tratado de Córdoba.

* * *

Será de Puebla, en donde en octubre de 1821 se paseó el retrato de Iturbide por las calles y se le aclamó, de la que partirá uno de los primeros impresos republicanos, *Sueño de un republicano, o sea reflexiones de un anciano sobre la república federada*, firmado en los primeros días de 1822 por M.F. del Z. En lenguaje medido repite las censuras del doctor Mier al sistema monárquico, que aun moderado perpetúa los vicios del régimen. "El establecimiento de la mejor forma de gobierno, es antes que todas las leyes la primera base que debe meditar el que como tú —le dice el espíritu del sueño— se encargue de constituir su patria, independiente y libre". En un país como México cuál es ese gobierno, se pregunta: el federado y republicano del norte o el monárquico. La extensión del territorio hace inefectiva la representación de cada provincia en la capital. ¿Qué toca de la soberanía a Texas, Coahuila, Tlaxcala misma, que sólo enviarán un diputado al Congreso?, "...convengamos sin repugnancia que sola la república federada es aquella forma de gobierno que participando muy poco en los vicios de las otras, proporcionará a la América muchas ventajas que aquéllas repugnan esencialmente". Concilia las distancias al dar a cada provincia su propio congreso, atento a las necesidades que conoce, con leyes conformes a las circunstancias. Bajo el régimen republicano se procura la igualdad de arbitrios y fortunas y la práctica de las virtudes sencillas. En una república central, arguye, un intrigante audaz puede dominar al congreso y al país; en una federal no.

Que España sea monarquía constitucional lo explica porque ya se tenía el rey. México no conoce el suyo. Además, nos hallamos entre las repúblicas del sur y la de Estados Unidos, en un continente republicano. Existe el Plan de Iguala, pero, ¿a qué nos obliga? El juramento que se hizo fue condicional y se proponía la felicidad común, que no dará la monarquía. No hay

obligación de guardarlo. Que se pregunte a todos, y cada uno estará por la república, concluye el autor del *Sueño.*

* * *

En tanto, en Guatemala se jura la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821, al llegar las noticias de que se juró en las principales ciudades de Chiapas por sus ayuntamientos constitucionales. La independencia la declaran la Diputación Provincial reunida con el arzobispo Casus Torres, el Cabildo Eclesiástico, el Ayuntamiento, el Consulado, el Colegio de Abogados, los prelados regulares, y los jefes militares y funcionarios públicos. Desde luego, se dispone en el artículo 2 de la declaración, se deben elegir diputados al Congreso por las mismas juntas electorales de provincia que se formaron para elegir diputados a las Cortes españolas. El Congreso "debe decidir el punto de independencia general y absoluta y fijar en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que debe regir".[12]

Por un escrutinio que se verifica el 5 de enero de 1822, la mayoría de los ayuntamientos aprueban la anexión de las cinco provincias de Guatemala a México.[13] La Junta Provisional de Guatemala aprueba, anticipándose, la unión a México el 2 de enero.

Hacemos la anterior referencia para relacionarla con dos documentos. El último, reimpreso en Puebla y en México en los primeros días de 1822 con el título de *El genio de la libertad,* proclama anónima fechada en Guatemala el 8 de octubre de 1821. "¡Provincias de Guatemala! Ved en los Estados Unidos el modelo de un gobierno libre y la égida de la independencia absoluta. Ellos vendrán en nuestro socorro —se dice— si la ambición de un Imperio inmediato intentase arrebatarnos nuestra libertad, y hacernos provincias de un monarca mexicano. Nosotros tenemos su voto y el de las repúblicas del Sur, nuestras hermanas. Colombia, Chile, Buenos Aires, saben el precio de la libertad, saben que las monarquías no son compatibles con las luces... ni con circunstancia alguna de los pueblos americanos... y sabrían en su caso prestar su fuerza victoriosa a nuestra república, y protejerla contra un emperador español". La proclamación republicana se opone a la unión a México, en cuyas *cortes imperiales, seríais una minoría insignificante, y os hallaríais* —se recuerda a los guatemaltecos— "como los americanos en España. El plan del señor Iturbide —se declara— va atrasado doce años en nuestra marcha política". La reimpresión del papel en Puebla y México, sin refutarlo, es significativa.

El republicanismo desde los primeros días se comienza a postular federal, y recoge expresiones tan lejanas en el área como el papel de Guatemala. El 28 de diciembre de 1821, y antes de que en Guatemala se apruebe la unión con México, Iturbide escribe a Gabino Gainza, jefe político de Guatemala, en funciones hasta que el Congreso se reúna, que tiene noticias sobre *el partido republicano* que rompiendo los límites de la moderación hostiliza a los guatemaltecos partidarios de la unión. El furor democrático llega a escandalosas explosiones ignorando los derechos humanos, según Iturbide, para disolver los vínculos de la sociedad y destruir el orden. Él, Iturbide, no puede ver con indiferencia los sucesos y se dispone a proteger las

[12] *Las Actas de Independencia de América,* Washington, 1955, pp. 64-65.

[13] Pedro Joaquín Chamorro, *Historia de la Federación de la América Central, 1823-1840,* Madrid, 1951, p. 38.

provincias. Las fuerzas que envía no serán conquistadoras, y si una provincia desea la república, no debe oponerse a las que se pronuncien por la monarquía.[14]

Cuando las elecciones de diputados al Congreso Constituyente y a las diputaciones provinciales se realizan en México, las declaraciones republicanas las van precediendo, y aunque minoritarias ante el monarquismo, no pueden sino influir la opinión de quienes ven al coronel realista de dos años antes reclamado para coronarse en el imperio independiente. La cuestión planteada la expone Javier Ocampo examinando papeles monarquistas y republicanos en el capítulo v de su obra.[15]

* * *

En los días en que se realizan las elecciones de diputados entran en crisis los tradicionales poderes reales, de grupos y personas, ante el incentivo de ejercer libremente un derecho en una nación que por primera vez es libre. Es la posibilidad y la coyuntura para disentir de la autoridad. Así se cuestiona públicamente la validez del juramento al Plan de Iguala, no importa sea a favor de Iturbide siempre que se acepte la invalidez. En el Congreso se proyectará virtualmente ese amplio conato de libertad que excita el suceso de la independencia y el hecho de elegir diputados que constituirán a la nación. Mítica o racionalizado en mayor o menor grado, los mexicanos deben hacer acto de presencia para decidir por sí mismos su propia historia. La incitación invita también a romper con lo que subsiste del antiguo régimen y de lo que se puede prescindir, como la monarquía, símbolo secular de la opresión, al ofrecerse la alternativa revolucionaria de la república. Alternativa que, por otra parte, no existe para la religión, profesada por la antigua insurgencia y por sus mártires más ilustres, Hidalgo y Morelos, y proclamada en todos sus documentos. Una cuestión distinta es la de los privilegios corporativos eclesiásticos, sancionados en el Plan de Iguala, sobre los que la Junta Provisional se niega a pronunciarse. El conflicto entre el poder público y la Iglesia en el punto de sus privilegios es secular, pero su expresión ilustrada se hereda del siglo XVIII, y la revolución liberal lo agudiza. En este conflicto, lo hemos visto, se gesta el episodio de la consumación de la independencia. Iturbide es el hombre que se presenta como el protector de la Iglesia, el *Nuevo Macabeo, Defensor constante de la Religión, el Rey y la Patria*, o *Tu vir Dei* como lo titula un papel de Guadalajara en 1821.

Antes de la reunión del Congreso se tiene conocimiento de la primera "conspiración" republicana, en la que participan antiguos insurgentes, mirados con tanto desprecio por Iturbide. Los "conspiradores" se reúnen en la casa del antiguo corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y conociendo las ideas liberales del general Negrete lo invitan a participar. Negrete envía a Iturbide desde Guadalajara las cartas que recibe. Se aprehende a 17 personas, entre ellas a los generales Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, y a Juan Bautista Morales, que sería uno de los periodistas liberales más, combativos, y a varios jefes y oficiales. En la causa que se les sigue, que no se ha publicado, no aparece mayor cosa que "hablillas entre los que la habían formado", informa Alamán, cuyas noticias son las de la versión que le hizo Manuel Baranda,

[14] Citado por William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 147.

[15] Javier Ocampo, *op. cit.*, cap. v. Aunque Ocampo no se plantea propiamente el conflicto.

encargado de formular los extractos de ella. Los presos son liberados, menos el general Victoria, quien sería elegido diputado por Durango al Constituyente. Así concluye la conspiración, "cuyos elementos desconcertados por entonces —escribirá Alamán—, quedaron dispuestos a manifestarse y obrar en mejor ocasión".[16]

Aunque no aludamos siquiera a ella, en los sucesos influirá la crítica situación económica en que se encuentra el nuevo gobierno, "confiado indiscretamente en la riqueza del país", como señala Alamán. Un esbozo de ella lo hace él mismo en los capítulos III y IV del tomo V de su *Historia*, así como de las disposiciones adoptadas por la Junta Provisional.

El juicio de Alamán sobre la Junta es tan adverso a ella como el de Iturbide aunque, entre otros, por motivos contrarios: "los premios concedidos a Iturbide, que no eran ni urgentes ni podían tener el carácter de interinos, y lo que peor fue, la naturaleza de estos premios, que fue causa de que Iturbide, que debía haber quedado sometido a la Regencia como todos los demás ciudadanos, o ser un individuo de ella como sus méritos lo requerían, vino a ser superior a la Regencia misma y a todo poder constituido, y por la altura a que se elevó, haciendo incompatible su autoridad con la de ningún gobierno y todavía más con el monárquico, se le puso entonces en la disyuntiva de ser emperador o proscrito".[17]

El juicio de Iturbide es también adverso contra aquellos "diputados idólatras de su pasión... que habían adquirido algún concepto por acciones generosas... que me odiaban —escribirá en Liorna— porque mi reputación hacía sombra a su vanidad (y) a formar dos partidos irreconciliables que son conocidos después con los nombres de republicanos y borbonistas; unos y otros tenían por objeto principal destruirse. Aquéllos fueron mis enemigos porque estaban convencidos de que jamás me reducirían a contribuir al establecimiento de un gobierno que, a pesar de todos sus atractivos, no conviene a los mexicanos". Los borbonistas, porque desconocido en España el Tratado de Córdoba, quedaba éste vigente y la nación "en plena libertad de elegir por monarca a quien considerase más digno". Los borbonistas se proponían, sigue escribiendo Iturbide, "que volviésemos a la antigua dependencia: retrogradación imposible atendida la impotencia de los españoles y la decisión de los americanos; y de aquí es que yo quedaba hecho el blanco de ambas facciones, porque teniendo en mi mano la fuerza, y siendo el centro de la opinión, para que cualquiera de ellos prepondera-se era preciso que yo no existiese".[18]

Iturbide no distingue a los individuos de la Junta Provisional de los diputados al Congreso, o mejor aún, los confunde intencionalmente. Pero hay algo que no disimula siquiera, su convicción monárquica y, lo más inquietante, la certidumbre de que la nación independiente dependía de su persona y de su juicio. Consumada la independencia Iturbide niega la república, a los insurgentes y a quienes no le son adictos. Pero excepto que admite una "monarquía moderada" —término ambiguo en sí— y que se propone mantener los privilegios corporativos de la Iglesia, ignoramos *su proyecto*, si en verdad lo llegó a concebir, más allá de su hegemonía personal, bajo la influencia que en él tuvieran personas como Antonio Joaquín Pérez, u otros que pudieran formularlo.

[16] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 385-386.
[17] *Ibid.*, p. 451.
[18] *Manifiesto de Liorna*, pp. 247-249.

Al dejar de existir la Junta Provisional había promulgado en cinco meses 40 decretos sobre las más diversas materias, y un número mayor de órdenes. Entre aquéllos, el Reglamento de Libertad de Imprenta de 13 de diciembre, reiterando en él como bases fundamentales del imperio las del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. En el decreto se imponían penas de hasta seis años de prisión al escritor o editor que atacara cualquiera de las bases, juzgándoseles de acuerdo con la ley española de libertad de imprenta de 12 de noviembre de 1820. Los eclesiásticos que incurriesen en el delito, en consideración a su estado, únicamente perderían sus honores y destinos. La ineficacia de la prohibición resulta pronto evidente, como lo comprueban los infructuosos resultados de las denuncias contra los impresos "sediciosos".

* * *

La Junta Provisional llega al fin de su ejercicio el 24 de febrero de 1822, al declararse instalado el Congreso Constituyente, entre la ambigüedad y el desconcierto de las ideas.

Al instalarse el Congreso con 98 diputados cumple, como todos los congresos contemporáneos en la América emancipada, con los ritos religiosos para que "se verificase con la dignidad propia de un acto tan augusto", como se dice en el acta de instalación. Después del sermón del doctor Agustín Iglesias, antinsurgente, cuyo nombre no se consigna, los diputados prestaron el juramento: "¿Juráis defender y conservar la Religión Católica Apostólica Romana sin admitir otra alguna en el Imperio? ¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la independencia de la nación Mexicana? ¿Juráis formar la Constitución política de la nación Mexicana bajo las bases fundamentales del plan de Iguala y el tratado de Córdoba, jurados por la Nación... estableciendo la separación absoluta del poder legislativo, ejecutivo y judicial para que nunca pueda reunirse en una sola persona ni corporación?".

El arzobispo de México no concurre.

Después de las ceremonias en la catedral, los diputados se dirigen al salón de San Pedro y San Pablo designado por la Regencia como sede del Congreso.

Iturbide, como presidente de la Regencia, se dirige al Congreso. Se felicita por su instalación. "Por fortuna está uniformado el espíritu de nuestras provincias: ellas espontáneamente han sancionado por sí mismas las bases de la regeneración, únicas capaces de hacer nuestra independencia, y ya dan por concluida, conforme a sus votos, la constitución del sistema benéfico que ha de poner el sello a nuestra prosperidad; no faltan con todo genios turbulentos, que arrebatados del furor de sus pasiones, trabajan activamente por dividir los ánimos... ¿Quién hay —se pregunta— que pueda ni se atreva a renovar el sistema de la dominación absoluta, ni en un hombre solo, ni en muchos, ni en todos? ¿Quién será el temerario que pretenda reconciliarnos con las máximas aborrecidas de la superstición?" Se habla y escribe contra el servilismo, "se exagera su poder; y tal vez se añade por una audaz mala intención, que el Gobierno lo favorece. Por el contrario: ¡qué de invectivas contra el liberalismo exaltado! se persigue, se ataca... como si estuviésemos envueltos en los funestos horrores de una tumultuosa democracia... Se cree minado el solio augusto de la Religión, y entronizada la impiedad... Así se siembra el descontento, se provoca la desunión... se fomentan las facciones y se buscan las trágicas escenas de la anarquía". Son las miras de los perturbadores que en los trastornos "se prometen ocupar puestos que en el orden no pueden obtener".

El discurso de Iturbide no es doctrinario, ni en algunas de sus declaraciones como cuando emplea la palabra *superstición*, que en su vaga enunciación podría halagar a los hipotéticos exaltados a que alude. El Congreso, anuncia, consolidará la unión, sin la que no existen las sociedades; "establecerá la igualdad ante la ley justa; conciliará los deseos e intereses de las diversas clases... V.M. será el antemural de nuestra independencia, que se aventuraría manifiestamente destruida la unidad de sentimentos"; protejerá los derechos en los límites de la justicia, para que la libertad no sucumba al despotismo o la licencia.

Después de Iturbide se dirige al Congreso José María Fagoaga, como presidente de la Junta Provisional. "Nuestra conocida docilidad está muy distante de la ruda obstinación con que en otros países, que se llaman libres, se sostiene el yugo de las preocupaciones políticas: ni aun tuvimos gobierno que fuera nuestro —expresa Fagoaga—, para que las falsas instituciones contrarias al bien público pudiesen echar profundas raíces; no existen entre vosotros esos privilegios odiosos... cuyos títulos arrancados por la fuerza en los tiempos de oscuridad y desorden, han servido de pretexto para oponer la resistencia más injusta a las reformas saludables; ni establecimientos góticos, en que el egoísmo y espíritu de cuerpo entorpecen la marcha de las luces y su progresivo aumento". Fagoaga no se reserva de cumplir con un elogio de Iturbide, "el héroe que ha sabido vencer dificultades que se creyeron insuperables".

Retiradas la Regencia y la Junta, se nombró como primer presidente provisional del Congreso a Carlos María de Bustamante, editor de *La Abispa de Chilpancingo*, cuyo número 5 denunció Iturbide a la Regencia el 12 de diciembre anterior. Bustamante fue aprehendido el 20 de diciembre siendo liberado el mismo día por orden de la Junta Provisional, y más tarde absuelto por el jurado de libertad de imprenta. Según Bustamante, la acusación se había hecho para impedir que, como procesado, se le erigiese diputado al Congreso.[19]

El Congreso elige como su primer presidente definitivo a Hipólito Odoardo, integrando la mesa con el presidente y dos secretarios.

Sin debate, y a proposición de Odoardo se aprueba el primer decreto.

> Los diputados que componen este congreso y que representan la nación mexicana, se declaran legítimamente constituidos, y que reside en él la soberanía nacional.
>
> En consecuencia declaran que la religión católica apostólica romana será la única del Estado, con exclusión de otra alguna.
>
> Que adopta para su gobierno la monarquía moderada constitucional con la denominación de imperio mexicano.
>
> El soberano congreso llama al trono del imperio, conforme a la voluntad general, a las personas designadas en el Tratado de Córdoba.
>
> No conviniendo queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declara el congreso, que se reserva el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión, delegando interinamente el poder ejecutivo en las personas que componen la actual regencia, y el judiciario en los tribunales que actualmente existen, o que se nombraron en adelante, quedando unos y otros cuerpos responsables a la nación por el tiempo de su administración con arreglo a las leyes.

[19] Carlos María de Bustamante, *Continuación del cuadro histórico...*, tomo I, p. 15.

El congreso soberano declara la igualdad de derechos civiles en todos los habitantes libres del imperio, sea el que quiera su origen en las cuatro partes del mundo.

La regencia para entrar en el ejercicio de sus funciones hará el juramento siguiente:

¿Reconocéis la soberanía de la nación mexicana, representada por los diputados que ha nombrado para este congreso constituyente? —Sí reconozco— ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes, órdenes y constitución que éste establezca, conforme al objeto para que se ha convocado? ¿Y mandarlos observar y ejecutar? ¿Conservar la independencia, libertad e integridad de la nación, la religión católica apostólica romana, con intolerancia de otra alguna, conservar el gobierno monárquico moderado del imperio, y reconocer los llamamientos al trono, conforme al Tratado de Córdoba y promover en todo el bien del imperio? —Sí juro.— Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si no, os lo demande.[20]

No podemos demorarnos en verificar la casi literal versión que el primer decreto del Congreso mexicano es del primero de las Cortes españolas de 24 de septiembre de 1812 en los diez iniciales párrafos de éste, adaptado al Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, y agregando la declaración "de igualdad de derechos civiles en todos los habitantes libres del imperio, sea el que quiera su origen en las cuatro partes del mundo", como se había demandado por los diputados americanos desde Cádiz. Una variante inexplicada ofrece el final del juramento que se impone a la Regencia. En el texto español se dice: "Si así lo hiciéreis, Dios os ayude; y si no, seréis responsables a la Nación con arreglo a las leyes". Los diputados mexicanos quedan responsables sólo ante Dios.

Por diverso decreto del mismo día, el Congreso declara la inviolabilidad de los diputados, contra los que no se podrá intentar "demanda, ni procedimiento alguno en ningún tiempo y por ninguna autoridad, de cualquiera clase que sea, por sus opiniones o dictámenes", adaptando la primera parte del artículo 128 de la Constitución española. Después de leer el decreto de las Cortes de Cádiz de 28 de noviembre de 1810 sobre la inviolabilidad general de los diputados, el Congreso deja para otra sesión "el arreglo de las otras partes de dicha ley".

Por decreto de 26 de febrero se confirman a los tribunales, justicias y autoridades, civiles y militares, ordenando el juramento de obediencia al Congreso de todas las clases de civiles y eclesiásticas.[21]

El proyecto de la independencia de México, en el episodio de su consumación que se inicia en abril de 1820 y las juntas de La Profesa en mayo, se dirige en círculo al punto en que se inició. El plan de mayo de 1820 para declarar la Nueva España independiente de la metrópoli en la que se restauró la Constitución liberal, se propuso preservar a México de toda contaminación revolucionaria, bajo sus antiguas leyes y fiel a Fernando VII esperando a que recobrase "su libertad". No vamos a repetir la incierta frase de que la historia impone sus leyes. Las metamorfosis del proyecto las hemos seguido hasta el 24 de febrero de 1822 al instalarse el Congreso Constituyente.

Iturbide, el escogido por los hombres de La Profesa en 1820 para ser ejecutor militar del

[20] *Colección de decretos y órdenes...*, tomo II, pp. 1-2.

[21] En los decretos del Congreso, remitimos a la colección de ellos citada, sin necesidad de referirnos a su paginación y tomo.

plan, comparece el 24 de febrero del año 1822 ante el Congreso como presidente de la Regencia y en compañía de "su ilustrísima" don Antonio Joaquín Pérez, inveteradamente ubicuo, presta el juramento de que *reconoce la soberanía de la nación mexicana, representada por los diputados que ha nombrado para este Congreso Constituyente.* El juramento repite la fórmula sacramental consagrada en la emancipación americana desde Caracas, y en Cádiz: la de la subversión revolucionaria del antiguo régimen. Los diputados mexicanos discurren con los diarios de las Cortes en las manos. Ciertamente, "en cada periodo histórico la lucha por las reformas se lleva a cabo solamente dentro del marco de la forma social creada por la última revolución; y continúa en tanto que el impulso de ella sigue haciéndose sentir".

Si no nos atrevemos a decir que la historia impone sus leyes —leyes que no sabríamos enunciar—, sabemos que ciertamente los hombres no pueden evadirse de la historia.

3

EL CONGRESO CONSTITUYENTE
EL CONFLICTO

La instalación del Congreso Constituyente ocurre, podemos decir, en la tierra de nadie, entre una contrarrevolución actual y la revolución liberal que se proyecta en los sucesos. La revolución no posee partido ni caudillos propios en México. El Congreso Constituyente no es en 1822 la primera forma institucional de una revolución preconstituyente que toma el poder. Mas la sola declaración de una independencia absoluta obliga a proclamarla en el marco de la revolución, legitimándola en el postulado fundamental de la subversión revolucionaria de la titularidad de la soberanía, y en la convocatoria a un Constituyente elegido que la representará.

La independencia, frente a un colonialismo monárquico absoluto y secular, será la ruptura "predeterminada por el tipo de gobierno que viene a derrocar; y —como lo plantea H. Arendt— nada por tanto más plausible que explicar el nuevo principio absoluto, la revolución absoluta, en función de la monarquía absoluta que la precedió". Aunque la independencia no se consuma como una acción revolucionaria a e inmediata, ocurre dentro de ese marco en el área colonial. La revolución liberal y la Constitución española fueron para las Américas el escamoteo colonialista de la misma revolución, su irritante frustración y también el incentivo.

En México la existencia y subsistencia de los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales, es la de órganos representativos creados por la revolución metropolitana en el territorio que se declarará independiente. Como tales órganos deben ser mantenidos, satisfaciendo las demandas de las provincias.

La vigencia provisional de la Constitución liberal y de la legislación españolas en cuanto no se oponen al Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, es más que un expediente transitorio de emergencia en tanto México se da su propia constitución y sus propias leyes. Es la *recepción* de instituciones revolucionarias, no importa la provisionalidad formal de su adopción.

El problema al que se enfrentan Iturbide y los antiliberales es simple en su planteamiento: ¿pueden lograr que el Congreso Constituyente anule la *recepción* del liberalismo, o lo mediatice, y cómo? ¿Pueden aislar a México en el área de la revolución de independencia en América? Ello frente a un liberalismo difuso pero activo, propagado y alentado en el acceso a la libertad de imprenta por una minoría criolla de clase media que no ha encontrado aún su centro de gravedad.

Es la cuestión que importa en esos días, gravitando en el Congreso que se reúne para constituir la nación.

El proyecto, los proyectos ideológicos, cualquiera que sea su origen, tendrán su expresión más concreta en los de las constituciones que se propongan. En sí, todo proyecto de constitución es la fórmula que se considera posible, y no la expresión pura de una ideología al enfrentarse a la realidad.

Volvamos al Congreso.

El 27 de febrero Iturbide, autorizado por el Congreso, le presenta sus respetos en compañía de los generales y jefes del ejército. "Arengó el Sr. Almirante —consta en el acta— ofreciendo, por sí y por sus dignos compañeros, sus respetos y obediencia al soberano Congreso, y llenó ciertamente la expectación de todos; y el Sr. *Presidente* correspondió con la mejor oportunidad" en un amplio elogio del ejército. En el acto, no obligado pero inobjetable, participan los generales y jefes realistas que se pronunciaron por la independencia, o sea, el brazo militar del antiguo régimen a las órdenes del generalísimo almirante presidente de la Regencia.

* * *

Si Iturbide parece contar con la adhesión del ejército, y la del clero que cubre la totalidad del territorio, en el Congreso la situación es confusa. José María Bocanegra, diputado por Zacatecas, concluirá en 1862 sus *Memorias para la historia de México independiente. 1822-1846*, y se referirá a ella. Como en toda recapitulación sobre los sucesos en que se participa, Bocanegra rehace sus propios juicios y los interpreta. "Preciso es confesar —escribirá— que los diputados de las provincias fuimos víctimas de nuestra inexperiencia y falta de conocimiento en la táctica de asambleas; de nuestra buena fe, y por otra parte, de la combinación parcial y meditada de los que componían el partido llamado borbonista". Bocanegra habla del control ejercido en el Congreso por los *escoceses*, que existían de tiempo atrás, y que en sus logias deciden lo que el Congreso debe aprobar. Frente a los *escoceses*, "los de contraria opinión, que formaban el partido popular —continúa Bocanegra—, se oponían" en una contienda "que sin embargo de ser muy animada entre sí, dejó en aquellas circunstancias el camino libre a los escoceses", quienes con su unidad y por su residencia en México y sus viajes al extranjero, tenían "más conocimiento del mundo".[22]

La versión, aunque no idéntica, la da Zavala en su *Historia*, mencionando los opositores a Iturbide que "formaron un partido que adquirió mayor fuerza con el establecimiento de logias masónicas que bajo el título de *rito escocés se* establecieron...". Un ánimo beligerante, frecuente en Zavala, lo lleva a afirmar que la oposición a Iturbide es el origen de las logias escocesas, y que entre octubre de 1821 y enero de 1822, se afiliaron la "porción de gentes" que esperaban beneficiarse con empleos y ser elegidos como diputados. O sea, la afiliación ocurre en el territorio del país en menos de cuatro meses, para oponerse al hombre que en esos días puede dispensar mayores favores. Según Zavala, la afiliación reunió a republicanos y borbonistas, a los españoles de la Junta Provisional, y a los militares también españoles que se sumaron a la independencia.[23]

[22] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, tomo I, pp. 38-39.

[23] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 101.

Alamán, nada condescendiente en este punto como en tantos, se refiere, con más objetividad, al regreso de los diputados mexicanos en las Cortes de Madrid. La "presencia de varios de ellos —escribe—, y de algunos oficiales que habían servido en España, acabó de consolidar el establecimiento de los masones escoceses, que llegaron a formar casi la mayoría del congreso y se fueron extendiendo en las provincias y sobre todo en el ejército".[24]

La importancia de las logias, primero escocesas y después yorkinas, es señalada invariablemente en los acontecimientos de esos años. Que ellas sean puntos de unión de quienes desconfían o están contra Iturbide, es más que explicable no existiendo, como se ha dicho, ningún centro de gravedad para la oposición y la inconformidad. Las logias están, además, aureoladas por el prestigio de su participación decisiva en la restauración liberal española del año 1820. Y también por las proscripciones civiles y eclesiásticas entre 1814 y 1820, cuando, como en la insurgencia de México, héroes de la guerra de independencia española contra Napoleón son ajusticiados como conspiradores liberales. Los nombres de Portier y Lacy son familiares en México.

En verdad, sólo en las logias podía aglutinarse la dispersa e informe oposición, confundiéndose inicialmente en ellas borbonistas y republicanos.

Ante este hecho, la proclividad antiliberal incurre en la simplista interpretación conspirativa de los acontecimientos, endémica en la historiografía de las revoluciones. Lo incomprobable de las afirmaciones, o su parcial probabilidad, satisface emotivamente la frustración antiliberal en una historia casi de víctimas y victimarios. El *Comentario... a las revoluciones de México* de Gibaja y Patrón es la más obsesiva de estas obras. Incluso el plan de La Profesa y de Ruiz de Apodaca, en mayo de 1820, es para Gibaja y Patrón sugerido por "el jefe del partido liberal", tortuoso personaje cuyo nombre calla.[25] En las logias se origina el Plan de Iguala, y los mismos colores de la bandera tienen un significado esotérico. Iturbide y el *bondadoso Monteagudo* son ciegos instrumentos en tan siniestra historia. Los capítulos XVI a XXII de la obra son recomendables ejemplos de esa imaginación.

Como ilustración extrema al riesgo de la interpretación conspirativa, es más que satisfactoria la alusión a Gibaja y Patrón, una de varias que pueden hacerse.

* * *

Si el Congreso no es el órgano constituyente de una revolución que toma el poder como tal revolución, sí es el primero de origen electivo no designado por Iturbide, cualquiera que sean las incoherencias de la convocatoria.

Es también el primer foro institucional para disentir, a nombre y en representación de la nación y por sí, salvaguardados los diputados por la inmunidad parlamentaria.

El Congreso continúa sus tareas.

El 28 de febrero, el presidente Odoardo propuso que se designase una comisión para opinar si en San Pedro y San Pablo "el otro salón es más acomodado para las sesiones". La proposición suscita una cuestión de fondo, al advertir Guridi y Alcocer "que esto ya es determi-

[24] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 548.

[25] Antonio Gibaja y Patrón, *Comentario crítico histórico auténtico a las revoluciones sociales de México*, México, 1926, tomo II, pp. 352-353.

nar que sea una sala la del Congreso, habiendo prevenido dos la convocatoria". Se estuvo de acuerdo "que este asunto se deje para después".[26]

El mismo día se nombra la comisión que redacte el ofrecimiento de la corona a Fernando VII y a los príncipes mencionados en el Tratado de Córdoba: tres diputados por la provincia de México, y uno por la de Veracruz.

También se presenta la iniciativa de Fagoaga para decretar como días de festividad nacional el 24 de febrero, el 2 de marzo y el 27 de septiembre. En un breve debate se considera y pasa a una comisión una iniciativa para que se "proponga el modo de honrar la memoria de los primeros defensores de la patria, y la de los jefes principales, que proclamando el Plan de Iguala la consumaron". En el debate se mencionan el Grito de Dolores, y a Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo y Morelos, cuyo mérito "quedó sacrificado en los cadalsos", agregándose los nombres de Javier Mina y O'Donojú.

El mismo día en el que se plantean estas cuestiones, se aprueba la orden a la Regencia "para que disponga que desde luego se instalen las diputaciones provinciales donde no las ha habido, y se renueven donde las había y no se han renovado, exigiendo que se dé cuenta de haberse verificado, y la regencia la de haberse cumplido este acuerdo en todo su efecto".

En el acta de 1 de marzo constan las comisiones del Congreso nombradas por su presidente. La de Constitución la forman Fagoaga, Guridi y Alcocer, Toribio González, el canónigo Castillo, Sánchez de Tagle, Godoy, Cantarines, San Martín, Esteva e Ibarra.

El 5 de marzo el Congreso aprueba trasladarse al salón recomendado por la comisión dejando sin resolver "si había de obrar o no la división de salas en el decreto de convocatoria".

Ese día prestan el juramento aprobado por el Congreso los generales Bustamante, Quintanar, García Conde, Torres Valdivia, el marqués de Vivanco y Vicente Guerrero.

La división del Congreso en dos salas no volverá a tocarse en él, y tampoco será reclamada por la Regencia. El reglamento interior del Congreso debería, en todo caso, plantearla, mas a pesar de la insistencia con que es solicitado por Marín el 16 de abril, por José María Bocanegra el 24 de abril, y por Carlos María de Bustamante y Bocanegra el 7 de mayo, el Congreso no apremia a la comisión para que lo presente. Sin resolución expresa del Congreso, éste continúa reunido en una sola cámara.

Si como dice Bocanegra había inexperiencia y falta de conocimientos en la táctica de las asambleas en la gran mayoría de los diputados, también es cierto que desde 1811 llegaban a México con las noticias de las Cortes de Cádiz el *Diario de las discusiones y actas* de ellas, y a partir de septiembre de 1820 las de las Cortes reunidas en Madrid. Existe el modelo más satisfactorio del parlamento revolucionario único y más importante de Europa en el primer cuarto del siglo XIX. En el Congreso mexicano están varios de los antiguos diputados de Cádiz, y se incorporarán otros que regresan de las Cortes de Madrid. La simbiosis ambivalente entre los revolucionarios colonialistas de Madrid y los colonizados que se emancipan no sólo se produce en ese ámbito. Reyes Heroles la ilustra desde 1820 revelando sus vicisitudes desde la restauración liberal que es para muchos, en una primera *euforia constitucional*, el remedio de todos los males y la consagración de las libertades y la igualdad, si se cumple escrupulosa-

[26] En las referencias a las sesiones del Congreso remitimos a las actas correspondientes, o a las crónicas publicadas en los periódicos *El Sol* y *El Águila Mexicana* posteriormente. En estas últimas citaremos las fechas de su ubicación.

mente el código. En tanto otros, adheridos a los mismos principios liberales, únicamente conciben la libertad en la independencia absoluta.[27]

El Congreso será el catalizador de las opiniones y los intereses, los previos a su instalación y los que se gestan con la consumación de la independencia. Se señaló cómo en la Junta Provisional no se aprobó el restablecimiento de las órdenes religiosas suprimidas, que el Plan de Iguala en su base 14 ofrecía mantener en sus fueros y propiedadades. El Congreso se desentenderá también del asunto.

* * *

El 16 de marzo, y tratando la proposición de la comisión de Hacienda para vender las temporalidades de los jesuitas, Carlos María de Bustamante propuso que antes de enajenar esos bienes se vendieran "los pertenecientes a los duques de Terranova y Veragua; pues éstos percibiendo de ellos cantidades crecidas, estaba en el orden que viendo justa la emancipación de esta América de España, fuese también la pérdida de bienes de los que habían sido remunerados como autores y agentes de la conquista, y tales eran los descendientes de Cristóbal Colón y Hernán Cortés". Otro diputado, Riesgo, opina que "las temporalidadades, sean de los jesuitas, o sean de las demás órdenes religiosas extinguidas, no pueden llamarse del gobierno, ínterin no se decida si estas extinciones fueron legítimas, e ínterin acerca de este particular no se sepa cuál es la voluntad de los pueblos... Las disposiciones de la España en este particular, estoy cierto de que lejos de haberse venerado se detestan...". Por su parte, Riesgo se apoya en lo que es público, y declara: "Esta misma providencia dio impulso a la nación en febrero de 1821 para proclamar su independencia...". No decidiéndose estos puntos, el gobierno no puede llamar suyos los bienes de temporalidad, aunque bien puede pedir "una parte de contribución" proporcionada al valor de los bienes, comprendiendo los de las órdenes de dominicos, agustinos, carmelitas, mercedarios, las monjas, las cofradías, etcétera.

Otro diputado, Argüelles, propone se concerten empréstitos, se hipotequen bienes, y se reanime la renta del tabaco, cuyo monopolio "es quizá el único recurso de la nación". Se debe pagar a los cosecheros "cuyas propiedades no menos sagradas que las del comercio de México, y las de los ex jesuitas, han pasado enteramente al erario público". Pagar a los cosecheros "que tan poderosamente han contribuido a emancipación del imperio", es justo. "Pero mientras haya otros arbitrios —concluye Argüelles—, es cosa muy dura acabar de raíz con dos hermosos e interesantes partidos del imperio". El discurso de Argüelles, no favorable a la venta de las temporalidades, contiene, no obstante, una de las radicales afirmaciones liberales, la de que las propiedades de los cosecheros de tabaco "son no menos sagradas que las del comercio de México, y las de los ex jesuitas". Se está en el meollo de un conflicto que se prolongará en el México independiente.

El planteamiento económico-doctrinario del problema lo hace Reyes Heroles en los capítulos III y IV del tomo I de su obra citada, comprendiendo el tema general de la economía, propiedad, comercio, agricultura, impuestos y empréstitos. Nuestras referencias se orientan limitada y exclusivamente a señalar una instancia en las motivaciones que presidieron el episo-

[27] Jesús Reyes Heroles, *op. cit.*, tomo I, cap. II.

dio de la consumación de nuestra independencia, como lo declaró sin eufemismos José Manuel Riesgo, diputado por Sonora.

El dictamen de la comisión es aprobado para que la Regencia pague al ejército con lo colectado en el préstamo que por un millón y medio se le había autorizado "para fomentar la renta del tabaco", y que de no ser suficiente se saquen a remate "las fincas de temporalidades, admitiendo posturas hasta en dos terceras partes del valor y reciba redenciones de capitales del mismo fondo hasta con rebaja de un treinta por ciento".

Los argumentos ideológicos ceden a la exigencia concreta de pagar al ejército, que Iturbide y una junta de generales se proponen mantener con 35 900 hombres en el permanente, además de la formación de la milicia local y el restablecimiento de la provincial.

El 23 de marzo vuelve al Congreso el asunto de las pagas al ejército.

La cuestión es compleja, y está implicada la parte que corresponde a la Hacienda en los préstamos solicitados a las mitras de México, Valladolid, Puebla y Guadalajara —60 000 pesos cada una—, que podrían cambiarse de destino para cubrir las necesidades del ejército. Por otra parte, la mitra de Oaxaca se niega a dar la suma que se le asignó, la de Sonora no puede contribuir con cantidad alguna, y las de Puebla y México piden imposiciones sobre sus fincas, en tanto que los carmelitas y agustinos tratan de vender las suyas. Además, es necesario valuar las temporalidades, examinar sus gravámenes, haciéndose notar que no hay compradores, como no los ha habido en 50 años, "menos en la actual escasez de numerario".

Carlos María de Bustamante propone que las fincas grandes para las que no hay compradores, se dividan, "y si es necesario se subdividan, y así se vendan a los mejores postores".

Como lo consigna Reyes Heroles, ya no sólo es la facultad de disponer de las temporalidades de órdenes religiosas, sino el criterio sobre el dominio eminente del Estado sobre las formas de la propiedad el que se involucra y expresa, no importando lo incipiente de su manifestación.[28]

En la emergencia se acude a tales expedientes. Pero una vez aprobados, el precedente los justifica. Un interés público secularizado priva, y el Congreso ordena a la Regencia llevar a efecto el decreto del 16, y "que sin excusa ni dilación alguna proceda a darle cumplimiento, procurando activar su ejecución por todos los medios que estén a su alcance, y publicarlo el día de mañana por bando: que si dentro de ocho días no pudiere colectar cantidad alguna del préstamo de millón y medio, convoque inmediatamente postores para las fincas que se han mandado enajenar, emplazándolos para celebrar la almoneda dentro de quince días", dando cuenta al Congreso, y pudiendo "dividir y subdividir en suertes las fincas, se haga al momento".

La *orden* del Congreso a la Regencia, sus términos verbales, exhiben el carácter de ésta, la Regencia, como ejecutora de la potestad legislativa plena asumida por el Congreso, tocando punto tan grave como el disponer de temporalidades eclesiásticas.

* * *

Desde Liorna escribirá Iturbide que en las elecciones de diputados no se buscaron a los hombres más dignos o más decididos por un partido; "bastaba que el que habla de elegirse fuese mi enemigo, o tan ignorante que pudiese ser persuadido con facilidad...". Los diputados dig-

[28] *Ibid.*, p. 130.

nos y virtuosos "fueron confundidos con una multitud de intrigantes, presumidos y de intenciones siniestras. En el país más rico del mundo, el erario estaba exhausto, no había con qué pagar al ejército, ni a los empleados"; el régimen de hacienda español se abolió sin sustituirlo, y el Congreso "no quiso ocuparse del negocio tan importante a pesar de las reclamaciones repetidas y urgentes que hice de palabra y por medio de los secretarios de Estado". La acritud de Iturbide se exacerba; nada se trató de importancia en el Congreso, y cuando se hizo "fue a lo menos impertinente... ¿Qué honores fúnebres debían hacerse a los jefes de la insurrección que ya habían fallecido? ¿Cómo había de jurar el arzobispo? ¿Quién había de nombrar al Supremo Tribunal de Justicia y reclamar un fraile apóstata preso (fray Servando Teresa de Mier) en el Castillo de San Juan de Ulúa?...".[29] Aludiremos a tres de estos puntos.

* * *

Alamán expone la situación en sus términos políticos. "Estas contestaciones —entre la Regencia y el Congreso sobre arbitrios para el gobierno— habían puesto en menos de un mes, al Congreso y la Regencia, o más bien a Iturbide, en declarada hostilidad: éste pedía lo que era imposible que el Congreso le diese momentáneamente, y el Congreso contestaba a las urgentes exposiciones de Iturbide con inculpaciones y reprimendas".[30]

Diríamos que estos asuntos u otros habían planteado la cuestión de fondo sobre la hegemonía y la legitimidad del poder entre "el libertador" Iturbide y el Congreso en quien, desde el 24 de febrero y por el decreto jurado por aquél y la Regencia, se reconoció que residía la representación de la soberanía nacional. Cuando Iturbide apura al Congreso en sus instancias a favor del ejército, y el Congreso, sin otros recursos, se atreve a tocar privilegios corporativos eclesiásticos, el ejército y el clero, dos factores reales de poder, deben reagruparse en torno a su jefe supremo y su defensor. Frente a Iturbide y la Regencia, los hombres del Congreso, aunque divididos, ejercen la representación única de la soberanía nacional, sobre la que poseen una documentada ilustración en los debates y decretos de las Cortes españolas, circulando además entre ellos una de las más impresionantes expresiones de su naturaleza, en la *Representación hecha a S.M.C. el señor don Fernando VII, en defensa de las Cortes*, por Álvaro Flores Estrada, reimpresa en Puebla en 1820.

La discordia entre Iturbide y el Congreso da lugar, según Alamán, a la contrarrevolución que intentan las tropas españolas capituladas que esperan su regreso a España, y que ya se habían agitado en Toluca. El general Dávila, conocedor del conflicto entre Iturbide y el Congreso, le escribe el 23 de marzo una carta invitándolo, en resumen, a salvar al país de la ruina a que se precipitaba con la suya propia, proclamando el reconocimiento de España. No se oculta a Iturbide, escribe Dávila, "la preparación que se aumenta de día en día contra su persona... porque la existencia política de Ud. está en contradicción con la de las Cortes, así como con las de otras personas que por celos han de coadyuvar a que desaparezca... de (lo) que estoy penetrado por seguras noticias..." Dávila gira en tanto instrucciones a los jefes españoles de las fuerzas capituladas para iniciar las operaciones contra México. No entraremos en detalles. Aludamos sólo a la

[29] *Manifiesto de Liorna*, pp. 252-253.
[30] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 491.

sesión secreta de 29 de marzo en la que el diputado Paz denunció al Congreso que el general José de la Cruz tenía en la ciudad "tertulias nocturnas" conspirando contra la independencia. El Congreso resolvió que la Regencia lo expulsara de la capital para que se embarcara a España.

Iturbide dicta las órdenes necesarias a las fuerzas imperiales, y en la madrugada del 3 de abril cita al Congreso con urgencia a sesión secreta para informar de una situación que inquieta al país.

Bustamante narra lo ocurrido en la sesión secreta. Alamán lo sigue, corroborado con los informes de otros diputados.[31]

Reunido el Congreso y leída la comunicación de Iturbide, se discute si él puede presentarse solo o acompañado de la Regencia, "teniendo presentes las disposiciones de las Cortes de España", como se aprueba. Mas Iturbide está a las puertas del Congreso, y se le autoriza a entrar, notificándole el acuerdo. Iturbide pide se forme una comisión del Congreso para informar las medidas tomadas, que siendo militares no había comunicado a la Regencia. Los miembros de la Regencia, informados de que el Congreso está reunido, se presentan. El Congreso pasa a sesión secreta, en la que repitiendo Iturbide que las medidas tomadas son "asunto puramente militar", y no habían sido por ello notificadas a la Regencia, da lugar a que el regente Yáñez manifieste su irritada extrañeza por la ignorancia en que se mantiene a la Regencia en asunto tan importante. Se produce entonces el incidente. "Porque hay traidores en la regencia y en el Congreso, como lo manifiestan estos documentos", responde Iturbide poniendo sobre la mesa unos papeles. Yáñez, a quien contesta Iturbide, en la versión de Bustamante reclama: "¿Cómo es eso de traidores?... Si U. no lo fuese que se me corte la cabeza". Iturbide comienza a increparlo; el presidente del Congreso lo interrumpe. Se produce un conato de tumultuoso debate. El presidente del Congreso impone el orden. Iturbide y la Regencia se retiran del Congreso, en el que se da lectura a la carta del general Dávila a Iturbide.

El Congreso no halla sino insidias, aunque se observa que no está autorizado Iturbide a tener correspondencia con Dávila a sus espaldas. Cuando la calma se restablece Odoardo exclama: "¡Sr., César ha pasado el rubicón!" Se comisiona a dos diputados para que reciban de Iturbide los documentos que estimase pertinentes sobre el asunto. Iturbide regresa al Congreso y da "los nombres de los que a su juicio eran reos de traición," mencionando a Fagoaga, Odoardo, Echarte, Lombardo y otros, hasta 11, entre "los hombres más considerados del Congreso", como asienta Alamán. Iturbide declara ante el Congreso que reitera su decisión ya demostrada de no aceptar la corona que muchos le ofrecen. Después de que Iturbide se retira, Melchor Múzquiz, diputado por Coahuila, pide que se le declare traidor, lo que apoyan muchos diputados poniéndose de pie. Fagoaga desde la tribuna impugna la proposición manifestando "los inconvenientes que se seguirían de semejante declaración", y obtiene que los diputados que apoyan a Múzquiz retiren sus votos y se espere al día siguiente, jueves santo, para tratar de las acusaciones formuladas por Iturbide.

A las siete y media de la noche del mismo día se abre la sesión pública "para imponer al inmenso pueblo, que esperaba con ansia... que estaba asegurada la tranquilidad pública", de la que respondería el Congreso, según el acta.

El día 4 se abre la sesión con la iniciativa de San Martín para que se llame desde luego al

[31] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 48-53; Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 496-501; Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 115-117; J.M. Bocanegra, *op. cit.*, reproduce la carta de Dávila a Iturbide y la contestación de éste, pp. 41-49.

ministro de la Guerra a informar sobre las providencias tomadas en contra de las fuerzas españolas rebeldes. Fagoaga pide que se informe sobre los arbitrios de que se dispone en la campaña. Se pide que asista al Congreso también el Ministerio de Relaciones. En tanto concurren los ministros, el Congreso trata en sesión secreta las acusaciones de Iturbide contra 11 diputados. Zavala es quien más se extiende en su obra narrando la sesión, pero sin agregar datos a los registrados por Bustamante. En la sesión se lee el dictamen de la comisión nombrada la víspera para conocer las acusaciones contra los diputados, en el que se declara que no hay cargos fundados contra ninguno. El Congreso aprueba por unanimidad el dictamen, lo que se hace público en la sesión que se abre inmediatamente. Los informes sobre los arbitrios para pagar el ejército son satisfactorios de momento. En el acta de la sesión se hace constar que "no pudiendo ya ignorar persona alguna que el gobierno nada sabe de los acontecimientos que ocupan hoy la atención del Congreso, ni menos de las medidas tomadas por el Generalísimo, podían retirarse los ministros...".

El conflicto entre Iturbide y el Congreso se resuelve en una clara escisión. El irreflexivo ímpetu intimidatorio de Iturbide se frustra, y la primera victoria favorece a los borbonistas a cuyo frente están Fagoaga, Odoardo, Sánchez de Tagle y Mangino. Pero Fagoaga mismo evita el enfrentamiento inmediato cuando Iturbide cuenta aún con el apoyo del ejército y el clero, y disfruta de una amplia popularidad en la gran masa del pueblo, aunque "para todos los hombres respetables de la sociedad... el prestigio de su persona estaba destruido", afirma Alamán.[32]

Dos días después, el 6 de abril, Bustamante escribirá a Iturbide, enviándole una publicación de Madrid en la que se le elogia. "Señor mío: *Unión* al Congreso —le dice—, ésta sea la divisa con que se presente V.A. al mundo para hacerse feliz, y para dar cumplimiento a su gloria".[33] Iturbide le contesta pretendiendo justificarse y reiterando que son algunos diputados los que le atacan.[34]

* * *

Los diputados, cuya elección no se fraguó por los malévolos supuestos enemigos de quienes se quejará Iturbide en Liorna, y sí se debió a la diligencia de los elegidos o a la estimación o influencia de que gozaban en sus provincias, llegaron al Congreso, como lo confiesa Bocanegra, más ciertos de su inexperiencia y de su buena fe que de una definida convicción política.

Los diputados, la gran mayoría, en un desconcierto inicial y cualesquiera que hubiesen sido sus ideas previas, al llegar al Congreso deben obrar, consumada la independencia, como representantes de la nación en cuyo nombre ejercerán la potestad soberana de constituirla formalmente. Ello sólo obliga a una toma de conciencia de que no existe título ni más original ni más legítimo que el suyo, ni potestad temporal superior a la de ellos.

Ver en los sucesos una lucha por el poder entre Iturbide y quienes le son contrarios, entre iturbidistas y borbonistas y los republicanos primeros, incluso en términos de las ideas po-

[32] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 386.

[33] Emilio del Castillo Negrete, *México en el siglo XIX*, México, 1975-1991, tomo XV, pp. 33-34.

[34] *Ibid.*, pp. 76-78.

líticas de esa hora y de los intereses, es desatender o ignorar un proceso subyacente, el de la toma de conciencia de los hombres que, dentro y fuera del Congreso, forman esa nación cuyos derechos son originales, imprescriptibles e inenajenables para asumir su propio ser y su propia historia. En este proceso se produce una ruptura del mexicano consigo mismo, con *el que era*, para decidir por primera vez *quién debe ser*. La desenajenación impuesta por los acontecimientos es un hecho revolucionario primario en sí, que se manifiesta y se racionalizará en los acontecimientos, y entra en conflicto con la presencia del *libertador*, del hombre providencial, del caudillo, atenido a su propio genio carismático o seductor. Mas todo ocurre en la minoría activa de la minoría que domina tradicionalmente a la nación que continuará tutelada aunque bajo diverso signo, ahora en su nombre y representación.

La distancia entre esta toma de conciencia y la supervivencia pasiva pero profunda en la masa —no sólo en la iletrada— de la *nación antigua*, no podrá desaparecer por el exorcismo de una proclamación revolucionaria. Refiriéndose a la revolución marxista, Michael Lowy escribe que "hay que subrayar que el intelectual introduce en su teoría práctica elementos totalmente extraños a las preocupaciones habituales de la clase, y que la absorción de la doctrina por esta última no es inmediata, unánime ni completa".[35]

En 1821 y 1822, los intelectuales y quienes hacen sus veces, se debatirán tratando apenas de formular su *teoría práctica* sobre el ser futuro de la nación. Los sucesos los veremos esquemática y únicamente en cuanto son significativos y se manifiestan en el Congreso.

[35] Michael Lowy, *La teoría de la revolución en el joven Marx*, México, 1972, p. 12.

4

EL CONGRESO
OPOSICIÓN Y DESCONCIERTO

La pública escisión entre Iturbide y el Congreso, *en el que reside el ejercicio de la soberanía nacional,* obligará el sentido de los futuros acontecimientos. Zavala, quien presta su juramento como diputado por Yucatán el 30 de marzo de 1822, ve la situación de esos días. A los republicanos no importa que los borbonistas hablen y escriban a favor de Fernando VII, "*si el mal suyo* —el de los borbonistas— *consiste en que los mismos que son llamados, no quieren ni querrán nunca venir. Unámonos con éstos para evitar que Iturbide usurpe el poder supremo y establezca una monarquía, y después de triunfar de este obstáculo haremos desaparecer la soñada dinastía de los Borbones* (Zavala lo subraya). Esto lo oía yo frecuentemente —dirá Zavala— entre los que después han figurado como los primeros motores de la federación". El mismo Zavala señala a los más prominentes iturbidistas y a sus adversarios. Anastasio Bustamante, Luis Quintanar, Manuel Sota Riva, Zenón Fernández, Manuel y José Rincón, Francisco Calderón, Antonio López de Santa Anna, José Antonio Echávarri, Luis Cortázar y Vicente Filisola, figuran entre los iturbidistas declarados. Miguel Barragán, José Horbegoso, Guadalupe Victoria, Celestino Negrete, el marqués de Vivanco —José Morán—, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Joaquín Parres, "y unos cuantos oficiales de menor graduación", en contra "aunque no abiertamente". Pero "estoy seguro —agrega Zavala— de que la conducta de todos estos generales no estaba fundada en ningún sistema fijo y arreglado".[36]

A los republicanos, según Zavala, no inquieta la rebelión de las fuerzas realistas, por considerar imposible un resultado favorable a ellas. Reprimidas por Bustamante y Echávarri —español—, concluye la alarma. Ningún jefe español de los pronunciados por el Plan de Iguala defecciona, pero ya no todos son iturbidistas.

Desde el 21 de marzo, cuando se recibe en el Congreso una instancia del Ayuntamiento de Nuevo México solicitando se autorice una diputación provincial, Bustamante "hizo una moción sobre honrar la memoria de los primeros héroes de la patria, y para que se derogue el decreto del generalísimo en que se previene no se admitan los méritos contraídos en la primera revolución; y declarándose de preferencia, se mandó a la comisión de premios", como consta en el acta. La proposición de Bustamante la motiva el decreto aprobado el mismo día sobre premios a los servicios en favor de la independencia desde el 24 de febrero de 1821, en cuyo artículo 18 se concedía a las tropas del general Guerrero el abono de tiempo doble de campaña hasta el 27 de septiembre del año de 1821, quedando comprendidas en las de línea, pero sin aludir siquiera a la anterior insurgencia.

[36] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 109-110.

El 22 de marzo presenta en el Congreso una instancia el general Bravo para "que se declaren meritorios sus servicios hechos en el antiguo sistema de independencia", y se turna a la misma comisión de Premios.

Los partidos, o tendencias, reciben refuerzos importantes en el Congreso. El 12 de marzo jura como diputado por Guadalajara, Prisciliano Sánchez, liberal y uno de los futuros federalistas. El 10 de abril lo haría el obispo de Durango, marqués de Castañiza, converso al iturbidismo.

A partir del 28 de marzo se sabe, por la *Gaceta Imperial*, que el Tratado de Córdoba está desautorizado por el gobierno de España, en la circular del 7 de diciembre de 1821 dirigida a todas las autoridades civiles y eclesiásticas de las Américas.

Después de los incidentes del 3 y el 4 de abril, el Congreso se reúne a partir del día 10, y en sesión secreta del día 11, Iturralde propone se varíen los individuos de la Regencia. En un debate que se prolonga hasta la medianoche, se aprueba sustituir a los regentes Bárcena, al obispo de Puebla y a Velázquez de León, adictos a Iturbide, por el conde de Casa Heras, el general Bravo y Miguel Valentín, cura de Huamantla. El día 12 se abre la sesión pública para dar a conocer el decreto en que designan los nuevos regentes, que habían prestado el juramento de su cargo, excepto Valentín, ausente de la capital. En la madrugada de ese día Iturbide acepta convencionalmente la resolución del Congreso.

El 13 de abril el ministro de Guerra informa al Congreso noticias de Cádiz sobre la salida de varios navíos con comisionados hacia América para tratar con los gobiernos establecidos, y pide instrucciones del Congreso para el caso de que lleguen a Veracruz. El presidente del Congreso propone se turne el asunto a la comisión de Relaciones.

Bustamante interviene observando que debe temerse "alguna intriga del gobierno español, si se atendía a la declaración hecha por el rey Fernando VII de no haber autorizado al general O'Donojú para hacer tratados con Iturbide". Odoardo, por su parte, contesta "que nada probaba esa declaración, pues el rey había debido hacerla para sincerarse con las Cortes de no haber contribuido a la emancipación, en cuyo caso habrían entendido aquéllas (que) abdicaba la corona, conforme a un artículo de la constitución", aunque se debía estar prevenidos para cualquier evento.

El asunto pasa a la comisión de Relaciones.

Entre los borbonistas las noticias no pueden ser más adversas, desamparando su causa frente a Iturbide y en una situación sin alternativas. Para los republicanos las mismas noticias son favorables, mas los obligan al enfrentamiento con el mismo enemigo interno que es el iturbidismo.

El mismo día 13, el secretario de Relaciones acusa recibo y ofrece el cumplimiento del decreto de 15 de diciembre anterior, por el que la Junta Provisional ordenó la devolución de los bienes que se hubiesen confiscado a los adictos a la primera insurgencia, ratificado por la orden del Congreso de 28 de marzo. La orden es más expresiva que el decreto de diciembre, pues se consideran "los que no permanecen ya embargados, porque los comandantes del gobierno pasado se les aplicaron en propia utilidad, o los vendieron aprovechándose de ellos... (por lo que) los comandantes están obligados a la restitución de cuanto con este motivo percibieron".

* * *

Los borbonistas maniobran diestros, y a proposición de Fagoaga, Odoardo y Castillo, se aprueba una *felicitación a la Regencia* manifestando la satisfacción del Congreso por el celo del gobierno y el "brillante comportamiento de las tropas imperiales" frente a la contrarrevolución de las fuerzas españolas, sin mencionar el nombre de Iturbide.

El mismo día se presenta por la comisión de Constitución el proyecto de Reglamento de la Regencia, que debe circularse impreso antes de su debate.

El nombramiento de los nuevos regentes y el proyecto de reglamento, según Bustamante y Alamán, apremió la resolución de Iturbide para coronarse.[37]

La comisión de Constitución, integrada para entonces por Fagoaga, Mendiola, Guridi y Alcocer, Toribio González, San Martín, García Cantarines, Del Castillo, Sánchez de Tagle, Esteva, Godoy, Ibarra y Odoardo, firman el proyecto de Reglamento de la Regencia. La exposición de motivos es breve y se expresa que las facultades concedidas por la Junta Provisional, en el decreto de 14 de noviembre anterior, al *Generalísimo de mar y tierra* son incompatibles con el cargo de regente. No tanto por los embarazos de los negocios, sino porque al desaparecer la Junta y siendo el Congreso "único representante de la nación (cesaron) los peligros que hacían necesaria aquella Magistratura tan formidable a la libertad pública, como conveniente en los tiempos de vértigo y anarquía, en que eran de temer se desplegaran los errores políticos y pasiones de los hombres en direcciones muy varias y encontradas, antes de establecerse sólidamente el nuevo gobierno del Imperio sobre las bases que apetecía la mayoría de la nación, y se proclamaron con solemnidad en Iguala". De la opinión disienten cuatro miembros de la comisión que dan un voto particular, pero la mayoría opina con el dictamen por varias razones, la final, "porque en los casos extraordinarios de conmociones intestinas, o de invasiones extranjeras, o en que la nación puede necesitar el influjo inmediato y prendas relevantes del Generalísimo, se autoriza a la Regencia para que le encargue el mando de las fuerzas del Imperio, del modo, y por el tiempo que crea necesario o conveniente con conocimiento del Congreso".

La inconsistencia del primer argumento es obvia cuando desvaneciéndose la influencia de Iturbide sobre los americanos y los españoles que forman "la opinión pública", ésta se divide ya "en direcciones muy varias y contrarias", y en el desconcierto les une tan sólo *el peligro de Iturbide*. El enemigo, el advenedizo usurpador de la insurgencia, apoyado aún por el clero y el ejército, y disfrutando de un prestigio difuso y mítico en las "ciegas masas", parece invalidar con su presencia las contradicciones internas en la oposición. Los borbonistas dictan aún las fórmulas de ésta, hablando de "las bases que apetecía la mayoría de la nación, y se proclamaron en el Plan de Iguala". ¿La declaración borbonista puede atraer al clero a la oposición?

Los modelos del liberalismo español siguen inspirando las promulgaciones de la nación independiente. "Otras pequeñas alteraciones ha hecho la Comisión —se declara en los motivos— al reglamento del año 13, porque las considera adaptables a la situación...".

En el articulado del proyecto se conserva a Iturbide como presidente de la Regencia, "por

[37] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 54; Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 508.

una particular consideración" (art. 2). Ratificando su carácter de ejecutivo provisional debe la Regencia aplicar "la Constitución y las leyes vigentes en todo lo que no se opongan a los decretos del Congreso, protegiendo la libertad individual de los ciudadanos"; conservando el orden público y la seguridad exterior (art. 9). Se establece una Junta Provisional Consultiva de Estado, integrada por nueve individuos: dos eclesiásticos, dos letrados, un militar, un empleado de la hacienda pública, un minero, un propietario y un comerciante, que la servirán graciosamente y serán elegidos por el Congreso (arts. 51 a 55). Las resoluciones de la Regencia se tomarán "oyendo antes a la Junta Consultiva de Estado, y remitiendo estos últimos para noticia del Congreso" (art. 13). La Regencia nombrará, a propuesta de la Junta Consultiva, los magistrados de los tribunales y los jueces letrados de partido (art. 17). "Nombrará los generales de mar y tierra, poniendo en noticia del Congreso el nombramiento antes de su publicación; pero ningún individuo de la Regencia podrá mandar por sí fuerza armada de una ni otra clase. Dispondrá de la fuerza armada de continuo servicio, distribuyéndola como más convenga, y lo hará también de las milicias nacionales conforme al artículo 365 de la Constitución española" (arts. 21 y 22). Si es necesario movilizar al ejército "contra enemigos interiores o exteriores, podrá dar el mando de él a su actual Presidente; y en este caso se pondrá a la cabeza, y obrará con sujeción a las órdenes que la Regencia le comunique por el Ministerio de la Guerra" (art. 23).

"El Congreso depuso tres regentes —escribirá Iturbide en Liorna—, dejando sólo uno, reputado enemigo mío, para reducir mi voto a la nulidad en el poder ejecutivo; no se atrevieron a deponerme, temiendo ser desobedecidos por el ejército y el pueblo...". A sus adversarios "les tenía recelosos —seguirá escribiendo Iturbide— tuviese a mi disposición las ballonetas; era muy natural en hombres de su especie", y por ello propusieron en el reglamento la incompatibilidad del mando del ejército con el cargo de regente. Y "aunque no se llegó a aprobar por falta de tiempo, no dejó duda de los tiros que me asestaban, y fue el que apresuró el suceso de 18 de mayo".[38]

* * *

Iturbide ignora en su autojustificación el significado de los acontecimientos atribuyéndolos a la animosidad más inmediata, a presuntas o reales conspiraciones de los borbonistas y a hombres recelosos y de ideas extraviadas, para que "volviéramos a la antigua dependencia", o para alucinar con una república; hombres "que me odiaban porque mi reputación —escribe en el destierro— hacía sombra a su vanidad". Todos, "unos y otros tenían por objeto principal destruirme". Y se retrata a sí mismo: "Formé mi plan conocido por el de Iguala, mío porque sólo yo lo concebí, lo publiqué y lo ejecuté; me propuse hacer independiente a mi patria, porque éste era el voto general de los americanos... Todo el imperio se dirigió por mi voz; no había más fuerzas que las que yo mandaba; era el primer jefe del ejército; no había un soldado a mis órdenes contra su voluntad; todos me amaban y los pueblos me llamaban su libertador...".[39]

[38] *Manifiesto de Liorna*, p. 254.
[39] *Ibid.*, pp. 243, 258.

Aún en Liorna, y en su manifiesto dirigido en verdad no a los mexicanos sino a los ingleses —primero lo dio a Blanco-White en Londres y después lo dejó, antes de su regreso a México, a Michel J. Quinn para su publicación en inglés—, Iturbide se presenta a sí mismo como el solo protagonista de la independencia de México, el libertador sobre el que se acumulan ingratitudes y enconos aviesos. En el conflicto manifiesto entre Iturbide y los que son y serán sus adversarios, borbonistas y republicanos, y los que obran celosos —por qué no— de su súbita exaltación, él no ve, y no es el único, sino lo que es más obvio en los sucesos, incluso en la interpretación conspirativa de éstos. No advierte que se ha producido una ruptura con el *statu* secular de sujeción a la autoridad ni la toma de conciencia de que la nación está presente en el Congreso que a su nombre ejerce sus derechos. El título de Libertador obliga al reconocimiento, no a la obediencia, y ese título Iturbide mismo lo banaliza al solicitar el de Generalísimo Almirante, cuyas evocaciones no podían estar más desacreditadas. La suma de todo el poder militar en sus manos es un propósito al menos más consecuente con sus ambiciones, y no sólo con las suyas en la historia americana.

Ciertamente, el hecho solo de intentar desposeerlo de ese poder y aislarlo en la honorífica presidencia de la Regencia, como Iturbide lo confiesa, "apresuró el suceso de 18 de mayo".

El proyecto de Reglamento de la Regencia contiene además una previsión admonitoria en su artículo 29. "No podrá —la Regencia— embarazar las sesiones del Congreso, y los Regentes y los que les aconsejaren o auxiliaren en cualquier tentativa para este acto, son declarados traidores, y serán perseguidos como tales".

El proyecto de Reglamento se fecha el 13 de abril, día de su presentación al Congreso. El voto particular de Guridi y Alcocer, Castillo y González lo firman el 15, proponiendo que Iturbide continúe "en el ejercicio y goce de las funciones de Generalísimo Almirante" bajo las órdenes de la Regencia, "por la aceptación y opinión de los pueblos y de las tropas, altamente penetradas de su idoneidad, y de la importancia y grandeza de sus patrióticos desvelos y servicios", como argumento principal.

El día 15 se propone al Congreso que la comisión de Constitución se desentienda de todo asunto para dedicarse exclusivamente a formar el proyecto de ella. Bocanegra reitera su reclamo a la Comisión de Reglamento Interior del Congreso a fin de que lo presente en el plazo de 20 días.

Se recibe en el Congreso una iniciativa del diputado Martínez Zurita, "a fin de que la libertad de imprenta sea extensiva a las varias formas de gobierno adaptables a la nación".

De Mérida llega otra para "que se declare abolida la contribución general que los llamados indios están pagando a sus párrocos con el nombre de obvenciones".

El 16 de abril se trata de nuevo de apremiar a la comisión de Constitución, que se supone "detenida hasta saber qué príncipe se ha de llamar al trono". El diputado Marín contesta que no es tan urgente, pues hay asuntos de más importancia en el día, tales como la milicia nacional y el reglamento del Congreso. Odoardo opina que no hay demora en la comisión, "pues (por) el Tratado de Córdoba, poder de cada diputado, y juramento prestado por todos está prevenido aquel asunto".

Los asuntos en el Congreso se tratan en incierto compás de espera.

En esos días se insiste ante el Congreso sobre la situación del general Guadalupe Victoria, diputado electo por Durango, quien no puede incorporarse por estar procesado. Los di-

putados Echarte y Bustamante excitan al Congreso, sin éxito, para que pida la causa y se exijan las responsabilidades que aparezcan por infracciones a la Constitución.

El 17 se acepta el dictamen aprobando la credencial del doctor Servando Teresa de Mier, quien está preso en San Juan de Ulúa como diputado por Monterrey.

Bustamante propone que se interpele al general Dávila "por la persona del Sr. Servando Mier y Noriega, aprovechando las circunstancias de estar a discreción del imperio los oficiales y jefes de las tropas expedicionarias, que trataban de alterar su inquietud e independencia". Se aprueba hacer la gestión a través del general Luaces.

El mismo 17 el Congreso acuerda que el gobierno le pase los documentos que acreditan al enviado de Colombia para resolver si se le reconoce como nación independiente.

El 18 se reciben en el Congreso los documentos del enviado y la Constitución de la República de Colombia.

* * *

No hacemos un guión de los trabajos del Congreso. Las referencias a ellos son menos que sumarias. Por las actas consta que se acude al Congreso desde los más diversos puntos del país solicitando sus decisiones en los asuntos más variados; se piden excepciones a la prohibición de proveer empleos alegando méritos; que se suspenda el remate de unos potreros; la Villa de Parras pide que se sustituya al diputado suplente Antonio Elozúa por Miguel Ramos Arizpe, "por ser conforme al voto general de los pueblos"; se piden dispensas de edad o tiempo para optar a grados universitarios; de Durango se queja un capitán por no haberse concluido un proceso en su contra; el alcalde de un pueblo se queja contra la Diputación Provincial de Guanajuato por infracciones a la Constitución —las reclamaciones por infracciones a la Constitución se acumulan en el Congreso—, se reciben proyectos para establecer loterías; se reciben las actas de poblaciones y corporaciones del país que siguen llegando con el juramento prestado al Congreso; que se habiliten puertos al comercio; el gobierno pide que se nombre un fiscal de la audiencia territorial; la Regencia consulta "si el alcalde lo. y el tesorero de caja de Oaxaca, supliendo aquél por el jefe político y éste por el intendente, han de tener voto y cuál asiento en la Diputación Provincial"; de los puertos se dan noticias al Congreso de los navíos que llegan; le consulta cómo debe prestar juramento tal o cual funcionario o corporación; se reciben proyectos de ciudadanos sobre cuestiones de hacienda, minas, comercio, tribunales, etc. Nos referimos y con ejemplos aislados, a no más de cinco sesiones en los días críticos de abril, cuando los habitantes y las autoridades acuden a la representación nacional como instancia decisoria.

En tanto, el Congreso se ocupa de disponer sobre el manejo de caudales de la nación, sobre la salida de personas y caudales del país, sobre la cesación e inversión del préstamo forzoso, sobre el reglamento de planas mayores, sobre donativos y préstamos voluntarios, sobre las credenciales de diputados que siguen incorporándose al Congreso, sobre cobro y depuración de créditos de la hacienda pública, sobre la renta del tabaco, sobre las reglas para proveer o restituir empleos civiles y militares, sobre la reglamentación de las milicias. Ocupan también al Congreso los detalles del embarque a España de las tropas expedicionarias.

El 18 de abril en el debate sobre el reglamento de la milicia nacional un diputado expre-

sa: "son dos los objetos que se han propuesto los gobiernos libres en el establecimiento de las milicias cívicas; uno resistir con ellas a los enemigos exteriores, y el otro sostener la libertad contra el déspota, que valiéndose de la tropa veterana intente atacarla; convengo en que no habrá en el imperio un militar que no sea amante de la libertad; pero Señor —expresa— el sistema y no el hombre es quien debe inspirar confianza...". La aclaración funda el rechazo a la propuesta del general Luaces para que las milicias nacionales estén bajo las órdenes de oficiales de línea.

El 19 de abril se suscita una cuestión menor pero significativa. El ministro de Relaciones consulta al Congreso la solicitud de Manuel López Constante, diputado por Yucatán, para que se le autorice a usar el título de *Conde Palatino* "y condecoración con espuela de oro con que le había agraciado su Santidad, y cuyo uso decía haberle concedido el gobierno español por real orden de 20 de julio de 1821". Carlos María de Bustamante pide que no se autorice la condecoración por "opuesta al sistema liberal y de sobriedad que debía adoptar S.M. en los primeros pasos de nuestra regeneración política... concluyendo con pedir se prohibiese aun el uso indecoroso de la Cruz de Bendé, que aún traían algunos colgada en el pecho". García Cantarines lo apoya, acompañando "la indicación que tenía hecha sobre prohibirse el uso de la cruz de Isabel la Católica, que bien analizada, no era más que un premio concedido al vicio, y un distintivo de asesinos condecorados". El asunto se turna a la comisión de Gobernación. García Cantarines, veracruzano, quien como diputado electo a las Cortes de Madrid en 1820 renunció al viaje después de las juntas en Veracruz, había sido secretario de cámara y gobierno en el Arzobispado de La Plata, y sería obispo pontificio de Hypen.

* *. *

Si el Reglamento de la Regencia no se llega a aprobar, no por ello puede evitarse la impugnación tangencial a veces pero constante del proyecto monárquico en sí.

Otro motivo de conflicto es la continua demanda de arbitrios por parte del gobierno, y la imposibilidad del Congreso para proporcionarlos, culpándose al ministro de Hacienda por carecer la comisión de Hacienda de los datos más necesarios para dictaminar las medidas apropiadas. El 19 de abril se advierte por el diptuado Sebastián Camacho que aún no se han sacado a subasta los bienes de temporalidades, como lo había aprobado el Congreso. La insatisfacción del ejército se atribuye a la demora del Congreso en atender sus necesidades.

En el Congreso se expresa que incluso con los ingresos normalmente previstos se pueden cumplir las obligaciones del gobierno, y que la negligencia de funcionarios y empleados públicos en aplicar las leyes y órdenes es causa de la falta de recaudaciones completas y oportunas. Debe privarse de sus destinos, se aprueba, a los empleados que dentro de tres días de recibida una orden no la cumplan. El obispo marqués de Castañiza reclama la inmunidad del clero, al que no debe comprenderse en la orden aprobada. Después de un acalorado debate —los eclesiásticos deben "quedar sujetos a la soberanía y a sus respectivos jueces, como lo había quedado a Pilatos Jesucristo voluntariamente", se llega a alegar—, se resuelve no incluirlos en la orden.

Al día siguiente Bustamante obtiene una pequeña victoria: que se suspendiesen los envíos de cualquier cantidad al canónigo Cortina de la catedral de México, "que vivía en Ma-

drid opípara y lujosamente, como también las grandes que se hacen para el Sr. Abad y Queipo, padrastro de América y enemigo capital de todo americano, contra quienes no cesaba de proyectar".

Cuando la Regencia se presenta al Congreso el 22 de abril para que preste juramento como regente el doctor Miguel Valentín, que había sido diputado electo a las Cortes de 1820, Iturbide informa que Estados Unidos reconoce la independencia de México, y que está próxima la llegada de la escuadra que adquirió su enviado Eugenio Cortés "para tomar como se tomará sin tardanza S. Juan de Ulúa". Recomienda que se preparen arbitrios para pagar ese crédito y al ejército "sin esperar a saber con exactitud cuánto es el ingreso y cuántos los gastos", pues nada se resuelve atendiendo sólo las necesidades inmediatas. El ímpetu de Iturbide cabe a una tácita confrontación en favor del ejército.

El mismo día, Martínez de los Ríos, Andrade y Valdés, urgen a la comisión de Constitución "se exonere de todo otro trabajo que no sea el de la Constitución misma".

En relación con un dictamen de la comisión de Hacienda sobre empleos de absoluta necesidad en nuevas aduanas marítimas, civiles y militares, y para el manejo de caudales, el 24 Múzquiz pide no se admitan "méritos contraídos en el gobierno del antiguo tirano de las Indias, y actual de la España". Al presentarse el acta para su aprobación el día siguiente, un diputado solicita se suprima la expresión de Múzquiz sobre Fernando VII, a quien el Congreso ha jurado y reconocido como rey constitucional. El secretario se explica por la fidelidad que debe guardarse en la redacción de las actas, y por haber pedido Múzquiz que "la estampase a la letra". Zavala, Anaya y Bustamante lo apoyan, y Múzquiz "reprodujo, como fundamento de su exposición, los muchos periódicos y papeles públicos de España en que Fernando VII aparece atentando contra la Constitución que ha jurado, y de consiguiente contra la libertad de la patria". García Cantarines, presidente del Congreso, salva el conflicto sugiriendo que al fin del acta se consigne en nota "que el voto de un solo individuo, no forma la opinión del Congreso".

El Congreso recibe la comunicación del ministro de Guerra informando que se ordenó al general Luaces "que interpele a D. José Dávila... a fin de que entregue a la brevedad posible al Sr. diputado Mier, conminándolo con la represalia de que podrá usar el imperio en toda su extensión con los oficiales de los cuerpos expedicionarios que existan en su seno...".

El 8 de mayo, cuando se ha distribuido entre los diputados el acta impresa del 24 de febrero, se observa que consta en ella el incidente a que dio lugar la presencia de Iturbide en la instalación del Congreso, en la que se le negó el asiento principal. El incidente lo narra Bustamante, testigo de él, y su versión es la que todos siguen. Se reclama en el Congreso el acuerdo tomado de que no se mencione en las actas "la ocurrencia desagradable sobre el asiento del Sr. generalísimo", resolviéndose que se recogiera el acta impresa. Más nos interesa la reclamación de Melchor Múzquiz, y merece recordarse, de que en el acta no constan "sus discursos, oponiéndose a las bases de gobierno adoptadas por S.M. —el Congreso—, pues estaba creído de que la nación se hallaba enteramente libre para entablar el sistema de gobierno que más conviniera a sus circunstancias; que del mismo modo hizo ver el mismo día otro Sr. diputado que su provincia sólo apetecía el gobierno republicano, y de nada de esto se hace mención...". El acta se redactará de nuevo, pero no registrará la oposición *a las bases de gobierno*, prevaleciendo el interés borbonista.

* * *

Intencionalmente reservamos la versión de Bustamante sobre lo ocurrido aquel 24 de febrero Los cinco puntos del juramento que se debía prestar por los diputados "produjeron discusiones reñidísimas... Era muy duro a los diputados adoptar un gobierno monárquico, teniendo a la vista el tipo de los que son casi todos los de su clase, y cuyo peso de autoridad despótico ya sentían, y muy más duro les era reconocer los llamamientos de los Borbones al imperio de México; oyéronse por tanto declamaciones fuertes, y cuando estábamos en el calor de ellas, me dijo al oído el presidente Odoardo... *es preciso ceder, porque hay pretensiones...* Luego conocí —escribe Bustamante— todo el sentido de estas palabras. En fin, todo se aprobó cual se propuso para evitar grandes males, dejando por supuesto al tiempo que proporcionase a la nación ocasión favorable de alterar la forma de gobierno...".[40]

Debemos precavernos de la inclinación casi sin excepciones en la historia de las ideas filosóficas, políticas, estéticas, y de los mismos sucesos a volver sobre el pasado para descubrir o crear precursores, lo que es distinto a indagar el origen, los antecedentes del suceso y de las ideas. El precursor profesa una idea, se propone una acción anticipándose a su tiempo y a su posibilidad. Francisco de Miranda y fray Melchor de Talamantes son precursores de la independencia; el generalísimo Morelos, el doctor Mier y Melchor Múzquiz lo son de la república en México.

Bustamante, antiturbidista, olvida que Hipólito Odoardo, "joven de tanta sabiduría como discreción", obra como borbonista. La sola oposición a Iturbide confunde más que alía al borbonismo ortodoxo y al desconcertado desafecto en la oposición a Iturbide, de cuya exaltación popular y mítica son testigos. Bustamante verá más tarde, escribe, el sentido de las palabras de Odoardo, pero sólo referidas a Iturbide, olvidando de nuevo el interés borbonista que las dictó. Los mexicanos irán discerniendo por sí mismos el sentido de su propia emancipación.

[40] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 29.

5

EL PRIMER DESENLACE DEL CONFLICTO

El 27 de marzo de ese año de 1822, Iturbide circuló un cuestionario a las autoridades de las poblaciones del país. "Las contestaciones a estas preguntas —instruye—, será por ahora lo que conviene en verdad, pero como las cosas varían, se podría sucesivamente avisar con relación a lo mismo que contienen y según la variedad que sufran". Las preguntas ameritan ser reproducidas:

¿Cuál es el sistema de gobierno que desea tomar la parte más sana del pueblo?

¿Qué se dice de la Regencia actual? ¿Hay muchos partidarios del gobierno Republicano, y qué clase de personas son sus adictos?

¿Se desea nueva Regencia?

¿Si se tratase de nombrar otra Regencia, de cuántas personas se considera deberá constar, y cuáles son las designadas por la opinión pública?

¿Se cree que el ejército debe permanecer con la fuerza que tiene, o se debe aumentar, o disminuir?

¿El establecimiento de la Milicia Nacional ha sido bien recibido, se considera útil o perjudicial?

¿Se habla de haber partidos en el Congreso... y por cuál está la opinión general?

¿Qué concepto se tiene del Ministerio, y de los empleados en los primeros destinos?

¿Qué hombres hay en la actualidad en esa Provincia, que sobresalen por sus talentos, virtudes e importancia, y qué conducta observan, obscura o popular?

¿Quiénes son los más distinguidos por sus opiniones, cuáles son éstas, y si tienen o no muchos seguidores, y a qué clase de la sociedad pertenecen?

¿En materia de gobierno cuál es la opinión más general del clero secular y regular?

¿ Cómo se administra en esa Provincia la Hacienda pública?

¿La tropa está en disciplina, o se observan desórdenes ocasionados por ella?

¿Cuál es el estado en la ilustración?

¿ Qué opinión se tiene de los Europeos?

¿Qué se dice en España?

¿Se forman comparaciones entre el gobierno anterior y el actual, y en tal caso, a favor de cuál es la opinión general?

¿Qué ramos de administración son los más descuidados, cuáles mejor servidos?

¿Qué providencias del gobierno necesita esa Provincia con más urgencia para su prosperidad actual, y empezar a aumentar la futura?

El cuestionario llevó anexo un ejemplo de posibles respuestas:

> No está dividida la opinión en el congreso; se nota divergencia en los pareceres, disimulo y misterio por parte de varios diputados, cuyas ideas eran conocidas antes, y reservan con cuidado, que no carece de afectación ahora, se han observado indicaciones que denotan que están bien con la conducta de la Regencia. La armonía entre los dos poderes está vacilante. Se mina por rebajar el concepto del Generalísimo. Se cree que no hay necesidad de Ejército. Éste está incomodado por falta de sus pagos y haberes. La escasez de metálico se aumenta, y no se toman providencias para remediarlo. El pueblo está en expectativa: y los díscolos no dejan de aprovechar los momentos para intrigar. Las noticias de España son poco gratas, algunos periodistas acaloran a los peninsulares, con exclamaciones y recuerdos de insurrección.

Con extrañeza pero no inexplicablemente a posteriori, advertimos que en el cuestionario la primera pregunta es sobre la forma de gobierno que prefiere "la parte sana del pueblo", y la segunda sobre los partidarios de la república, omitiéndose averiguar la opinión sobre Fernando VII y los Borbones llamados al trono y jurados solemnemente por Iturbide. La manera de referirse al rey es oblicua y diríamos que casi denegatoria del juramento, aunque esta actitud la toma la víspera de que la *Gaceta Imperial* informe de la desautorización del gobierno español al Tratado de Córdoba. "El rey está dando destinos del Imperio —informa Iturbide al final del cuestionario—, no obstante haber recibido los tratados de Córdoba, y si (no) llega el caso a hostilizarnos, será por impotencia no por falta de deseos; sin embargo conserva aún el Castillo de San Juan de Ulúa, y lo menos malo que hay que temer es que no se reconozca la independencia del Imperio".[41]

La *encuesta Iturbide*, despachada el 27 de marzo es tardía aunque no gratuita. No conocemos las respuestas a ella.

* * *

Pero otras noticias que llegan a Iturbide le preocupan o alientan. Juan María de Azcárate, agradeciéndole el cargo de jefe político le escribe desde San Luis Potosí el 7 de febrero: "Esta provincia está en opinión por el gobierno monárquico moderado, siendo V.A. el Emperador, pues de ningún modo conviene que venga de España. Si en las elecciones hubiese observado tendían hacia el republicanismo, sería un hombre criminal, indigno de la confianza de V.A.S. si no hubiese adoptado medidas a contener el único mal que podía anegarnos en sangre y con las armas hubiera concluido todo".[42]

El 23 de febrero, José María Troncoso escribe a Iturbide desde Puebla: "por lo que he podido trascender de uno que otro juicioso que han venido a verme —Troncoso está enfermo— entiendo que propenden al Republicanismo". Espera "desentrañar más y más sus intenciones para poderlas referir a V.A., sin zozobra de equivocación". Quienes así piensan odiaban el anterior gobierno constitucional por ser contrario a sus ideas, "conspiraron contra él y predicaron la independencia. Y ahora —escribe Troncoso—, porque han creído que V.A. se ha subrogado al monarca constitucional que tan poco o nada favorecía sus miras, hablan con desafecto

[41] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 325-326.

[42] Emilio del Castillo Negrete, *op. cit.*, p. 45.

de sus disposiciones, y aun se atreven a proteger el republicanismo...". Acaba de visitarlo un *clubista*, quien le dijo que el Congreso estaba dividido en dos, "y pronto parece que habrá una contrarrevolución".[43]

Desde Jalapa, Santa Anna escribe a Iturbide, el 1 de abril, que tiene noticias "de que las cortes constituyentes del Imperio no se han conducido con V.A. bajo aquellos principios que exigía imperiosamente la gratitud... Esta nueva me ha causado el más acerbo sentimiento... quisiera verla enteramente falsificada, pues de lo contrario y sin duda (es) la más notoria impolítica y negro olvido de un reconocimiento, a que por tantos motivos es acreedor V.A...".[44] Antes, el 9 de febrero había informado a Iturbide, a solicitud de éste, sobre las elecciones de diputados, y el 11 reitera noticias de partidas levantadas por Huatusco "que se apellidan Republicanos; y siendo así que esto comprueba el fomento que van tomando tales ideas, se lo noticio a V.A." Agrega: "Considero prudente cortar en su origen estas maquinaciones... pues es claro el escándalo que resultaría a todas las naciones semejante volubilidad...".[45]

Las verificaciones del desconcierto se pueden acumular, ilustrándolas con los *papeles impresos* que se multiplican. Debemos centrarnos en el Congreso que es el catalizador de las ideas y los conflictos.

* * *

A partir del 28 de marzo el Congreso puede obrar sin sujetarse al Tratado de Córdoba, informado de su desaprobación por el gobierno de España, y así reconoce el 2 de mayo al gobierno independiente de Colombia.

Es pública la respuesta de Iturbide al general Dávila desde el 3 de abril. En ella Iturbide declara: "Si a este suelo amenazan algunas desgracias no serán otras que las que prepare en la Península el Gobierno Español, y aquí algún insensato de sus partidarios...". La imputación de Iturbide aunque no menciona el nombre del rey, lo involucra tácita y públicamente entre los enemigos de la independencia, como en la circular de 27 de marzo.

En la ya no tan confusa situación los republicanos hacen un acto inesperado de presencia. El 6 de mayo el Congreso recibe la felicitación del regimiento de caballería número 11, del que es jefe el general Nicolás Bravo ya designado regente. La felicitación la encabeza el teniente coronel español Mirangolarra, y se supone que lo hace con la anuencia de Bravo. Citemos el acta de la sesión:

> [la felicitación] se comenzó a leer, y llegando al periodo en que se dice *que la América del septentrión detesta a los monarcas, porque los conoce, y que debe seguirse en el sistema de gobierno que ha de instalarse, el de las repúblicas de Colombia, Chile y Buenos Aires*, el señor Alcocer en voz alta dijo que se suspendiese la lectura de aquel papel, apoyando esto el señor Mangino con la pregunta de si previamente había pasado a la comisión de memoriales. Entonces el señor Cabrera —continúa el acta— dijo: que ya no había peligro en continuarlo leyendo, porque todo lo duro que pudiera decirse en

[43] *Ibid.*, p. 64.
[44] *Ibid.*, p. 51.
[45] *Ibid.*, p. 78.

aquella felicitación, ya estaba dicho, y que el pueblo tenía derecho a oírla en su conclusión. Levantóse un susurro y aclamación general en los señores vocales para que continuase leyéndose la exposición. Hallándose presente el Sr. Presidente del Congreso, y sin duda con el murmullo del pueblo se excitó a venir a ocupar su puesto, dijo: que de ninguna manera convenía se leyese la exposición, porque sería causa de graves daños. Continuó el susurro del pueblo, y los señores diputados se atravesaron en sus razonamientos. Tocóse la campanilla por varias veces; pero siguiendo el desorden, en un momento de pausa que hubo, se dirigió el Sr. Presidente al pueblo y le dijo: que estaba en su arbitrio para hacerse obedecer siempre que continuara aquel desorden. El Sr. *Bustamante* (don Carlos) dijo: que esta exposición era una felicitación particular que se hacía a S.M. por un cuerpo del ejército, y que si se dignaba escuchar la de un particular ¿con cuánta razón no debía la de unos militares que pertenecen a la clase privilegiada, que han expuesto su vida por nuestra libertad, y que con sus armas sostienen la que S.M. goza? Que el sábado se había publicado un papel del Lic. D. Andrés Quintana (Roo) en que se pronuncia explícitamente por el gobierno monárquico y corre sin contradicción; que no había, pues, justicia para que se sofocase la exposición de dichos militares por ser de opinión contraria, fuera de que se hacía muy poco favor en suponer que este Soberano Congreso fuese capaz de dejarse seducir por ella, y que sus vocales carezcan del fondo necesario de sabiduría, prudencia y probidad para pronunciarse en tan delicada materia, lo que no haría sin examinarla con delicadeza, oyendo a sus comitentes en asunto que va a decidir de la suerte de este pueblo.

Bocanegra apoya a Bustamante: "observe S.M. que pues todo el Congreso, o su mayoría, clama la lectura de este papel, parece que lo hace suyo para su lectura, y es menester condescender con S.M.".

Antonio José Valdés, cubano, diputado por Guadalajara, futuro editor de *El Águila Mexicana* y de *El Iris de Jalisco*, iturbidista y futuro federalista, declara "que por aquella aclamación no presumía que S.M. hubiese hecho suyo aquel papel". Mangino reclama que a ningún memorial debe darse curso sin aprobación de la comisión respectiva. Lombardo reprocha a Mangino su inasistencia a la comisión de la que forma parte.

Bustamante habla de nuevo: "dijo que parecía —consta en el acta— que había empeño en sofocar la voz de todo el que no opinaba conforme con la mente de cierta clase de personas; que era necesario oírlas a todas, y de ninguna manera ponerles trabas, porque entonces podríamos con justicia lamentar la desgracia en que han caído otros pueblos".

Santiago Baca Ortiz, diputado por Durango, "se adhirió en todo a la felicitación suscrita por los oficiales del regimiento núm. 11, resolviéndose al fin S.M. el que continuase su lectura". A petición de Pedro Terrazo se aprueba transcribirla en el acta del día. En sesión secreta se revoca el acuerdo. Al día siguiente salvan expresamente su voto por este último acuerdo, Gómez Farías, Cañedo, Rejón, Francisco García, Zavala, Múzquiz, y siete diputados más.

En la sesión el ánimo liberal se expresará aún. Varios diputados de Durango proponen que al obispo Castañiza se le reclame la tercera parte de los beneficios de su mitra, que estaba reservada al rey. Otro diputado pide que "se quiten los huesos de Cortés y demás insignias de nuestros opresores, del templo de Jesús". Se propone que los individuos de la Regencia no entren al Congreso con espada, ni los diputados con bastón. Martínez de los Ríos, "que se substituyan a las lápidas, de constitución, la de independencia".

* * *

En los debates del Congreso la iniciativa es de la minoría adversa a Iturbide, y las expresiones republicanas no se recatan por diputados que han jurado la monarquía en los términos del Tratado de Córdoba, sin que se cuestione siquiera tal violación. Y no podemos dejar de observar que las actas son una versión convencional y atenuada de lo que ocurre en el Congreso.

El *impasse* de las relaciones entre Iturbide y el Congreso se acentúa, y el 13 de mayo hace crisis al presentar la comisión de Guerra su dictamen sobre el aumento del ejército solicitado por Iturbide, cuyo debate se prolongará hasta el 17.

El primero en hablar es Carlos María de Bustamante. Su largo discurso, como los de quienes le siguieron, los reproducen las actas. El de Bustamante lo ilustran inicialmente las apelaciones históricas, y aparecen en él Lúculo derrotando a Mitriadates, después de aprender el arte de la guerra en Polibio, para luego, metodizando sus ideas, ocuparse del estado de España para hacer la guerra a las Américas, y de las disposiciones que deben tomarse para el evento, considerando otros peligros exteriores. Desecha la amenaza por parte de Inglaterra, aunque ésta "no ha excluido de su cálculo nuestra conquista", ocupando la isla de Trinidad como base de operaciones. Es fácil trascribir el discurso de Bustamante, "que contiene ideas luminosas que nos pueden guiar en todos tiempos, y porque puede llegar un día en que la América se vea invadida por la Europa según las muchas locuras que hacemos", como dirá en 1832 cuando lo trascriba en la Carta segunda del tomo I de la *Continuación del cuadro histórico de la Revolución mexicana.* Es más fácil trascribir el discurso que seguirlo. La independencia de Estados Unidos nos salvó del peligro inglés, y por ello Floridablanca la alentó en secreto. Pero a una amenaza se sucede otra. Hoy se sabe que Estados Unidos introduce hasta 16 compañías "por el punto de Nacogdoches: ¿con qué objeto? —se pregunta Bustamante, y contesta— Sin duda no será otro que el de invadirnos", y sin transición propone: "Tornemos a considerar a la España", cuyo gobierno se opone a la independencia, como "consta por la real orden ya citada, y que se ha circulado a todas nuestras primeras corporaciones, que el rey no ha aprobado la conducta del general O'Donojú".

La *Gaceta Imperial,* recordemos, daba noticia el 28 de marzo de la circular del gobierno de Madrid de 7 de diciembre de 1821, dirigida a todas las autoridades civiles y eclesiásticas de las Américas, comunicando que ni el rey ni las Cortes "han dado a O'Donojú ni a otro alguno facultad para transigir ni celebrar convenios en que pudiera estipularse o reconocerse la independencia de provincia alguna de Ultramar". La noticia desampara a los borbonistas al menos oficialmente, dando lugar a que el mismo Iturbide se expresara de Fernando VII con la libertad que lo hizo en su *cuestionario* de 27 de marzo, e implícitamente en su carta al general Dávila en los primeros días de abril. La situación respecto a España se define, pero el conflicto interno en el país independiente está aún más desconcertado, aunque ya los republicanos se expresan en el Congreso.

El debate sobre el aumento del ejército que solicitan Iturbide y la anterior Regencia —35 900 hombres en las fuerzas de línea, y además 20 000 en las milicias provinciales—, es el fortalecimiento de un poder de hecho en manos del hombre autorizado a disponer de él con las facultades que tiene como generalísimo almirante. La derogación de éstas, en el proyecto de Reglamento de la Regencia, es más que una amenaza después de la sustitución de los regentes iturbidistas.

La confusión es manifiesta en el discurso de Bustamante. En las Cortes de Madrid, los discursos y el voto de Toreno son contrarios a la independencia de México y las Américas. Mas si España no puede emprender la reconquista, existen otros medios de comprometernos. Se atribuye al ministro Onís el plan de que España venda partes del territorio americano a otras potencias, lo que nos llevaría a una guerra con países extraños. Al general Dávila se le envían armas a San Juan de Ulúa, y ya intentó la insurrección de las fuerzas españolas capituladas. Bustamante ve una invasión próxima. "¿Qué número de tropas necesitamos...?" se pregunta. Veinte mil hombres son suficientes, concluye después de sus alarmas. Más que las fuerzas veteranas serán los milicianos los que contengan al enemigo. Los ejemplos de Buenos Aires en 1806 y 1807, y la derrota inglesa en Nueva Orleáns en 1815 lo demuestran.

Sostener un grande ejército de línea es imposible en la desastrosa situación económica del imperio. "La vaca de América se ha ordeñado sin piedad; hánsele secado las ubres...; el pasto jugoso que la hará producir, será facilitar el comercio, minorando todo lo posible los derechos —como se ha hecho—, amparando la industria, y protegiendo la propiedad. Si obráis de un modo opuesto —afirma—, nuestra pérdida será indefectible...".[46]

El debate es extenso. El regente Yáñez hace llegar al Congreso un voto en el que opina que con 10 000 hombres se sostiene la independencia.

Odoardo está en contra del aumento del ejército. Nada debe temerse de Inglaterra, que ha auxiliado con dinero, armas "y con sus aventureros y soldados" a los insurgentes del sur, y que en el año de 1790, después de promover la independencia del Perú en 1780, llevó "a Londres jesuitas americanos de los residentes en Italia, para propagarla en sus respectivas provincias por medio de escritos que publicaron sobre la emancipación". La tentativa se frustra por la necesidad inglesa de aliarse con España para "resistir las novedades de la revolución francesa", y se renueva en 1798 y 1804 apoyando los proyectos de Miranda. Francia, explica Odoardo, está más preocupada en mantener sus colonias que se le escapan por las mismas razones que a España las suyas. El peligro ruso es una quimera, y lo explica por las distancias. Estados Unidos, antes de serlo debe poblar la Luisiana y ambas Floridas, lo que le ocupará tres siglos. España es impotente, y "las máximas de Smith y Say y otros varios economistas... prueban hasta la evidencia ser perjudiciales a su matriz las colonias muy distantes de ella y no cubrir los derechos del señorío ni los productos del monopolio los gastos necesarios para su conservación...". Nada funda aumentar el ejército. Estados Unidos, con tres millones de habitantes y sin milicia permanente, derrotó a la nación que dominaba los mares. Odoardo se extiende en inexactitudes de hechos ciertos, y los que intervienen en el debate inciden en variaciones de los mismos argumentos.

Odoardo volverá a impugnar la solicitud, atacando a los gobiernos absolutos y haciendo alusiones a sus arbitrariedades, para volverse contra la administración de la Regencia, la anterior, que tuvo y hereda abandonados todos los ramos de la administración, multiplicando los empleos, con la ruina de los establecimientos públicos.

Entre el debate surge una proposición de Valle, Zavala y Rejón "para que se separen los mandos militar y político en todas las provincias".

[46] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 55-60.

* * *

En el Congreso toma forma la doble amenaza a la hegemonía de Iturbide, de no aprobarse el aumento del ejército, y de desposeerlo de su mando si se aprueba el proyecto de Reglamento de la Regencia. Iturbide se enfrenta a la situación expresa y públicamente en un documento que se publica después del 18 de mayo con el título de *Papel de S.M. Imperial dirigido al Supremo Consejo de Regencia en 15 del corriente mes de mayo.* Robertson advierte que el texto del impreso difiere del que publica Cuevas en *El Libertador*, y del que, como de "muchos otros documentos incluidos en su colección, se niega a decir dónde los obtuvo".[47]

"La mayor parte de las piezas que aquí se publican —declara Cuevas— provienen del Archivo del Congreso Naval de Washington",[48] o sea, de los Iturbide Papers de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, adquiridos de los descendientes de Iturbide, documentación de la que Cuevas reproduce con preferencia, "la que corre desde 1821 a 1824". Por el contenido del documento puede presumirse sin dudas que es el texto dirigido a la Regencia el 15 de mayo, cuando en el Congreso se objeta el aumento del ejército solicitado por la primera Regencia.

Peligra la patria "que por todas partes está amenazada, que tiene enemigos dentro y fuera de sus términos, que son asesinos los que la adulan, queriendo persuadirla que nada hay que temer, y que su libertad e independencia está asegurada". El lenguaje de Iturbide es iracundo desde sus primeras palabras, y la alusión a quienes en el Congreso se oponen a su proyecto es inequívoca. "¿A quién no excitará —sigue Iturbide— la orgullosa vanidad de los que, sin haber profesado la milicia ni haber hecho la guerra, sin conocer el país ni los puntos fortificables, ni los que puedan ser invadidos, sin correspondencias, sin noticias, se oponen sólo por su capricho a lo que opinan los maestros de la guerra, los que han dado prueba de su adhesión a la libertad... los que han recorrido el territorio del Imperio y examinado como interesados e inteligentes?" Explica la situación militar y los peligros en las fronteras con los ingleses, y las de Texas por la que "se interesan nuestros vecinos"; las Californias amenazadas por los rusos; las provincias de Guatemala ante la anarquía; Veracruz frente a los españoles; la guerra civil pronta en las provincias; "y en todas partes las naciones de Europa".

No importa en sí la magnificación de peligros ciertos e imaginarios, sino el planteamiento del conflicto que hace, dirigiéndose a una Regencia que no le es adicta: "si no se decreta el ejército pedido, se destina a los puntos explicados, y se sistema la Hacienda muy pronto, para que el mismo ejército esté alimentado y provisto de cuanto necesita, en cuyo caso respondo de la disciplina de las tropas y de la seguridad del Estado, puede procederse por quien crea tener autoridad de hacerlo, a nombrar general que mande, y Presidente de la Regencia, pues yo doy por admitida mi renuncia en el mero hecho de no ver el remedio, o de que no se me conteste; esta renuncia la hago, y verificaré mi separación de todo mando, penetrado de que es un deber no dilatarlo; es imposible que haya quien no esté íntimamente convencido de las razones en que me fundo... y si no se decreta —declara sin eufemismos—

[47] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 170.

[48] Mariano Cuevas, *op. cit.*, p. 10.

es sólo porque se recela de que yo lo mande; causo sospechas y se me cree con propenciones a la tiranía... Tuve en mis manos el cetro, y el pueblo se empeñó en poner en mis sienes la corona; notorio es que rehusé ésta, costándome no pocos esfuerzos, y que aquél lo solté sin que nadie me lo quitara...".[49]

Iturbide renuncia a convencer y opta por intimidar, cuando los mexicanos tienen por primera vez acceso al debate para decidir sobre sí mismos, y sin más fuerza que sus propios razonamientos. Que esto no sea del todo exacto no desvirtúa el hecho de que es así. Los diputados reunidos en el Congreso quizá se entregan a profusiones oratorias; quizá, sin proponérselo, van descubriéndose a sí mismos, y en una suerte de ensayo de acierto y error —no existe otra posibilidad— tratan de ejercitarse en el uso de una libertad desconocida. Difícil, muy difícilmente, abdicarán de ella para fortalecer en manos de un hombre, cuyos títulos de libertador aún no niegan, un instrumento de sujeción como el ejército.

Odoardo lo denuncia el mismo 15 de mayo. Si el ejército ha estado unido a la nación y promovido la independencia, evitando convulsiones, "no debía por eso olvidar el Congreso que con el tiempo podría degenerar de sus patrióticos y loables sentimientos, y ser un instrumento en manos del gobierno para destruir las libertades de los pueblos; y entre nosotros decía subsistir ese sentimiento —agrega Odoardo—, mientras no se variase la organización del ejército, y se arreglase la constitución política, haciéndole menos dependiente del poder ejecutivo, como se acaba de hacer en España, y se verifica en todos los pueblos libres y naciones representadas". El soldado, educado en la obediencia pasiva, es "temible mientras no encuentre en la opinión de los pueblos una masa de resistencia, que no puede esperarse en nuestra tierna y naciente libertad". No debe limitarse a los gobiernos absolutos "dividiendo la nación en dos clases: la una de exentos y privilegiados, y la otra de contribuyentes; la una de personas interesadas en sostener las agresiones a que propenden más o menos todos los gobiernos, y la otra de ciudadanos productivos, a quienes se arrebata los frutos de su industria, para mantener la indefinida creación de parásitos y veteranos innecesarios".

Los argumentos fundados en consideraciones sobre la defensa de las costas, de las fronteras, y la guarda del territorio interior, discutidos también, con ejemplos de la resistencia española, de la de Buenos Aires a los ingleses, y de la Revolución francesa, en las que las milicias por sí o incorporadas a fuerzas de líneas demostraron que eran menos costosas y más efectivas, no nos interesan directamente. Como los más atendibles e inmediatos sobre el mantenimiento del ejército, en esa hora son accesorios de la cuestión de fondo planteada por Odoardo: el ejército como instrumento de sujeción.

Resulta extraño que Iturbide no perciba que puede confiar más en las milicias reclutadas en la masa del pueblo, en el que se mantiene su imagen de libertador providencial, que en un ejército cuyos jefes y oficiales pueden estar también y precisamente celosos de la súbita exaltación del coronel realista todavía en el retiro dos años antes. Quizá un arraigado prejuicio de oficial realista que combatió a los insurgentes, en realidad guerrilleros milicianos que discrimina, y su obstinado antiliberalismo, repugnan a cuanto tenga una imaplicación revolucionaria.

[49] *Ibid.*, pp. 340-342.

Dejemos la posible oportunidad de estas disgresiones para atender al primer desenlace del conflicto.

Se llega así al día 17 cuando deben aprobarse o no las solicitudes de la antigua Regencia sobre el ejército. El debate es breve. Se aprueba un ejército de 20 000 en línea, y una milicia activa de 30 000. Pero los diputados ceden, y a proposición de Joaquín Herrera se autoriza "al gobierno para que de los 30 000 hombres ponga sobre las armas el número que falta al completo de los 35 900 que tiene pedido, sin perjuicio del reglamento que se apruebe por este Congreso".

* * *

La sesión pública del día 28 de marzo anterior no fue relevante. Impresa, después del suceso del día 19, es lógica la supresión del episodio. Ni Alamán, ni Bustamante, ni Zavala, ni Iturbide, mencionan el hecho significativo, registrado por Bocanegra, "que acabó de precipitar las cosas, violentó los sucesos...". La comisión encargada de formular el ofrecimiento de la corona a los Borbones lo dictó "inesperadamente por la afirmativa, y quiso que presentado se discutiese en aquellos mismos días", con preferencia a todo asunto. La pretensión da lugar a "altercados desagradables en lo privado, y después en lo público", sobre si debía leerse el dictamen en sesión pública o secreta —lo que se omite en las actas. Se logra suspender el debate. El asunto produce encono entre borbonistas y republicanos, que parecía obraban unidos frente a Iturbide. Múzquiz y Fagoaga "tuvieron en esos momentos un fuerte choque en la antesala del Congreso —cuenta Bocanegra—, y llegaron a insultarse acremente con motivo de dicho dictamen".

Los borbonistas "descubrieron sus fines claramente... y los republicanos conocieron que aquéllos obraban contra sus promesas, y contra las doctrinas que publicaban en sus escritos, para sólo mantenerlos alucinados y unidos a sus maniobras políticas". Bocanegra se duele de no poder reproducir el documento, "en razón de que sucediéndose los acontecimientos rápidamente, y no queriendo los comprometidos aparecer tales como eran, se aprovecharon de las ocurrencias, y por cuantos medios pudieron, principalmente por la ocultación, hicieron desaparecer éstos y otros documentos interesantes, de tal modo, que en ningún archivo público ni aun en lo particular se han conservado, ni se pueden ver ni en original ni en copias".[50]

Bocanegra, testigo, repite sobre este episodio lo dicho por Alamán al referirse a las juntas de La Profesa en mayo de 1820. Un poco o un mucho, tal vez más que en una investigación intencionada, será al azar como se encuentren documentos de los dos sucesos. Bocanegra menciona como individuos de la comisión a Pablo Obregón y a Guridi y Alcocer. Los nombrados el 28 de febrero fueron Fagoaga, José Ignacio Espinosa, Horbegoso y Echenique. ¿Cuál era el propósito del dictamen después de la pública desaprobación del Tratado de Córdoba por el gobierno y las Cortes de España, y de la fracasada rebelión de las fuerzas españolas capituladas? ¿Cuáles *documentos interesantes* se hicieron desaparecer?

Alamán escribe que el 18 de mayo, en sesión secreta, pues no lo registra el acta de la pública, se comenzó a discutir el Reglamento de la Regencia, "e iba a aprobarse el artículo por

[50] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, pp. 56-57.

el cual se prohibía que los individuos de ella pudiesen tener mando de armas: esto fue lo que decidió el movimiento".[51] Según Zavala, presente en el Congreso, *estaba pendiente* el debate del reglamento,[52] lo que no excluye que se iniciara el 18.

El primer desenlace del conflicto se precipitará esa noche, cuando "el pueblo bajo de México, y casi toda la guarnición con los generales al frente, proclamaron emperador al generalísimo Iturbide", como lo narra lacónicamente Bocanegra.[53]

[51] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 548.
[52] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 124.
[53] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, p. 58.

6

LA PROCLAMACIÓN DE AGUSTÍN I

Días antes del 15 de mayo está fechado el tomo I de *El fanal del Imperio Mexicano, o Miscelánea política, extractada y redactada de las mejores fuentes, por el autor del Pacto Social, el Dr. Severo Maldonado,* autor de varios proyectos de constituciones entre 1820 y 1823, y fundador y redactor de *El Despertador Americano,* primer periódico insurgente que publicó para don Miguel Hidalgo. Algo diremos más adelante sobre el doctor Maldonado, a quien Iturbide nombró individuo de la Junta Provisional Gubernativa, no desde luego por su antecedente como redactor de *El Despertador,* y sí muy probablemente por los de redactor de *El Telégrafo de Guadalajara,* periódico realista que comenzó a aparecer el 27 de mayo de 1811, cuatro meses después de la derrota insurgente en el Puente de Calderón, y por sus capacidades de proyectista. El doctor Maldonado es diputado al Congreso Constituyente por Nueva Galicia, y se afilia al iturbidismo. En el primer tomo de *El Fanal* se publica como primer texto político de los que se propone divulgar, el explosivo alegato republicano que es la *Memoria político-instructiva del Sr. Dr. Servando Mier, Diputado al Supremo Congreso Mexicano por el Nuevo Reino de León, y atrapado a su arribo a Veracruz y despachado a España por el español D. José Dávila, impresa en Filadelfia en Agosto de 1821.*

A una de las excitaciones del doctor Mier para tomar el modelo republicano de Estados Unidos, Maldonado pone una nota: "Por más que el Sr. Mier pondere las ventajas del gobierno republicano, nosotros estamos demostrasndo en nuestro Pacto Social que todas las formas, hasta aquí inventadas por los políticos, están en una contradicción evidente con los designios del ser supremo relativamente a la creación y conservación del hombre, pues que en ninguna de ellas logra disfrutar de todos los derechos que Dios le dio", y cita a Helvecio quien no conoce más que dos gobiernos, "los buenos y los malos...".[54] A la reflexión de Mier sobre el Plan de Iguala "demasiado combinado con la rapidez de los sucesos, la propuesta de los diputados (en las Cortes de Madrid), el espíritu de la santa alianza y las ideas de Inglaterra", y el posible acuerdo con Ruiz de Apodaca, Maldonado pone otra nota: "El héroe de Iguala ha reconocido en todos sus tratados el principio inconcuso de la soberanía popular, y el derecho que tiene la nación a formar por sí misma su constitución política. Así es —agrega Maldonado—, que no solamente ha manifestado la más profunda resignación a todas las determinaciones del Congreso; sino que ya antes se sujetó en todo a la Junta Provisional... aun en puntos en que las decisiones de ésta no eran conformes con su dictamen. Esto basta para poner enteramente a cubierto contra todas las interpretaciones de la malignidad o de la envidia

[54] F.S. Maldonado, *El fanal del Imperio...*, p. 32.

la rectitud y sanidad de sus intenciones. ¡Viva el genio de la conciliación! ¡Viva el restaurador del Anáhuac!"[55]

La apología del iturbidista doctor Maldonado sólo presume su ignorancia más que la ocultación del suceso que se prepara. Pero presume también, y diríamos que demuestra, la aceptación del "principio inconcuso de la soberanía popular" entre los mismos iturbidistas que, como Maldonado, elogian en Iturbide "su profunda resignación a todas las determinaciones del Congreso".

Desde Liorna, en 1824 Iturbide se explicará en su invariable denuncia: "A pesar de la astucia que emplearon y la disimulación con que —los diputados sus enemigos— procuraron manejarse, el pueblo y el ejército traslucieron sus intenciones; éstos no querían dependencia ni república, ni que aun se me expusiese a un desaire...". El proyecto de Reglamento de la Regencia apresuró, al iniciar su debate, el acontecimiento del 18 de mayo. "A las diez de la noche de aquel día memorable me aclamó el pueblo de México, y su guarnición, emperador. *Viva Agustín primero* fue el grito universal que me asombró...".[56]

Hay un hecho, entre tantos, que Iturbide no menciona. Fechada el 16 de mayo se dirigió una representación al Congreso por el general Felipe de la Garza, desde Soto La Marina en Nuevo Santander. La representación no se registra como recibida en las actas del Congreso, al llegar después de la proclamación de Agustín I, y se reproduce como apéndice 4 en la edición mexicana de 1871 del *Manifiesto del General D. Agustín Libertador de México, escrito en Liorna.*

"Cuando va de por medio la salud de la patria, el silencio es un crimen", declara De la Garza, para continuar manifestando que al pronunciarse las Provincias Internas de Oriente por la independencia, "aspiraron a sustraerse para siempre a la dominación real, que tan omina fue... Así juraron el Plan de Iguala que garantiza las bases esenciales de Independencia, Religión y Unión, sin dudar un momento por el gobierno monárquico, establecido en él, y (que) el llamamiento a los Borbones no podía ser con más fin que el político de unir la opinión de un número considerable de gentes; que espantadiza de cualquier otra forma que no se hubiese proclamado por un nimio apego a aquella institución, podrían haber retardado por más tiempo el general pronunciamiento de las provincias... Ni podía creer otra cosa —agrega De la Garza—, cuando saben muy bien que facultad tan delicada sólo puede ejercerse legislativamente por V.M. que representa la soberanía nacional, sea cual fuere el mérito y las circunstancias en que se vio el héroe libertador de la patria". Se esperaba que el Congreso decidiera la aprobación del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, y que con absoluta libertad resolviera "la forma de gobierno más análoga y útil a la nación; forma que se acomodase también a la establecida generalmente en todos los Estados independientes de ambas Américas; forma que asegurase para siempre nuestra libertad y la soberanía del pueblo; forma, en fin, republicana...". Fue el voto trasmitido por el diputado por Nuevo Santander.

Mas el Congreso, sigue De la Garza, aprobó la monarquía moderada. Estos pueblos consideraron "que para esto se coartó la libertad de V.M. con juramento previo, que mudó la esencia de V.M., de constituyente en constituido". Se recordó también que las elecciones de

[55] *Ibid.*, p. 17.

[56] *Manifiesto de Liorna*, p. 254.

diputados al Congreso se previeron "de una manera contraria a los sencillos elementos de elección popular, circunscribiendo a los pueblos, y sus poderes a formas violentas". Y "todos habrían hecho un sacudimiento, si no los hubiese contenido la firme seguridad que presagiaron de que aún era tiempo para que V.M. aguardase un momento favorable en que pronunciarse por sus más caros intereses".

El tiempo ha llegado con el desconocimiento por España del Tratado de Córdoba. "El Congreso recobra su libertad para entrar en nueva sanción y declarar la forma de gobierno que más convenga... Ninguna consideración puede retraer a V.M. de tan urgente como importante declaración". Si al Congreso le falta fuerza armada, él, De la Garza, se pone a sus órdenes con la provincia y 2 000 caballos para sostenerlo.

No podemos presumir que De la Garza ignorara la existencia de un partido en favor de la coronación de Iturbide, tan notorio ya como la pugna entre el Congreso y el Generalísimo Almirante.

* * *

Ciertamente existe un monarquismo en favor de Iturbide, pero es mucho menos que universal, como él lo pretende. Y en esos días, cuando el deterioro de la imagen de Iturbide parece difícil de restaurar, al monarquismo le queda únicamente confiar al éxito de un golpe de mano.

El hecho de que Iturbide se atribuya el papel de protagonista de la independencia de México, y la monótona imputación a *sus enemigos* y de que es su persona la que los inspira y da sentido a los hechos, es la expresión de una gran penuria en la inteligencia de los sucesos en que participa, más que una penosa autojustificación.

Rafael Heliodoro Valle, tan perspicaz, acepta no obstante, al no ponerla en duda, la versión que del 18 de mayo daría Pío Marcha —catalán y sargento primero del primer regimiento de infantería de línea en la guarnición de México—, presentándose a sí mismo como el inesperado y espontáneo autor de la proclamación de Agustín I.[57]

Alamán narra que "un sargento..., llamado Pío Marcha, hizo tomar las armas en la noche del 18 de mayo, a la tropa recogida después de la retreta —en el antiguo convento San Hipólito—, y proclamando el nombre de Agustín I, salieron algunas partidas haciendo igual aclamación por las calles, al mismo tiempo que en los demás cuarteles se efectuaba lo mismo". Un ayudante de Iturbide, el coronel Rivero, entra al teatro y lo hace proclamar, "mientras que se esparcían por todas las calles de México pelotones de aquella clase de gente, que en México se conoce con el nombre de *léperos*, semejantes a los *lazaroni* de Nápoles, aclamando a Agustín I, y haciendo que iluminasen las calles". Se oyen cohetes, disparos de fusil, cañones y repiques. Las puertas de las casas se aseguran temiendo un saqueo. Los diputados "que se habían manifestado más contrarios a Iturbide, recelando ser asesinados o insultados en medio del desorden, se ocultaron..." Odoardo pasa la noche "en la recámara misma del arzobispo Fonte, en compañía de éste".[58]

[57] R.H. Valle, *Iturbide. Varón de Dios*, México, 1971, pp. 60-67.

[58] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 548-549.

Las manifestaciones ocurren mientras Iturbide juega al tresillo con el general Negrete y otros acompañantes en su residencia provisional, la casa de los condes de Moncada.

En un curioso documento firmado el 26 de junio de ese año de 1822, Pío Marcha *certifica* que el teniente coronel Sixto Vicente Paredes conocía desde enero su plan de proclamar emperador a Iturbide, plan "que me amplió él mismo —escribe Marcha— luego que le consulté esta determinación...". La empresa se demora por haber salido ambos a Toluca, para volver sobre ella a su regreso a la capital, "a pesar de los obstáculos que se presentaban poderosos a nuestra situación...". Mas ante la "variedad de opiniones en nuestro gobierno, perjuicios que podían originarse con que la dinastía de los Borbones ocuparan el Solio Mexicano... nos resignamos este otro jefe y yo a perder las vidas o colmar nuestro intento, ofreciéndome este comandante protejerme con los pueblos comarcanos —los de barlovento—, con sus oficiales y con cuantos arbitrios le fueran posibles, hasta darle fin a nuestra digna empresa: Por tanto en la noche del 18 de mayo cooperaron este jefe y sus oficiales en la proclamación de nuestro Monarca, y en cuanto he considerado necesario, en cuya certificación le dejo la presente para los usos y fines que le convengan".[59]

En la anecdótica versión que recoge Valle, y que Pío Marcha dicta anciano y como "capitán retirado a dispersos", en la que no se alude a planes anteriores al día 18 de mayo, el sargento se presenta dictando en su celda a un compañero, el sargento Mariano Otero, el texto de la proclamación: "En vista de que el Plan de Iguala ha sido desconocido por España, la nación Mexicana está libre de nombrar un gobernante que rija los destinos de ella; en tal virtud siendo el Generalísimo la persona más ilustre... etc.... ninguno debe ser más digno y más a propósito para el Solio Mexicano que el denodado D. Agustín de Iturbide". Un movimiento de sargentos es seguido por generales, jefes y oficiales, en la narración de Pío Marcha.[60]

No hay historiador que no mencione a Pío Marcha y no hay historiador que dé una sola noticia sobre el singular personaje que inicia públicamente la proclamación de Agustín I. Ni el minucioso W.S. Robertson parece interesado en él, aunque es el único que hace referencia a la certificación de 26 de junio de 1822, que titula *memoria*. Mas ¿quién es este sargento catalán que ya en enero propone conspiraciones, al menos y como consta, a un teniente coronel, y no es denunciado, o si lo es, la denuncia es ignorada, y que certifica méritos de jefes militares en la proclamación? A los adeptos a las interpretaciones conspirativas sería sugestivo investigar una especie de *congregación apostólica* en el México de esos días.

* * *

Vicente Fuentes Díaz se refiere al suceso del 18 de mayo: "El entusiasmo cundió como epidemia... el ensayo infantil de un pueblo quería comprobar y sentir su independencia —y sentirla era entonces designar un gobernante...— que le daba al pueblo la sensación de que era él mismo sin imposiciones de nadie...".[61] El juicio no puede ser más exacto.

Lorenzo de Zavala lo narra, acudiendo a Iturbide y citándolo: "Mi primer deseo fue el

[59] Original manuscrito en la Colección Latinoamericana de la Universidad de Texas.

[60] Emilio del Castillo Negrete, *op. cit.*, pp. 235-236.

[61] Vicente Fuentes Díaz, *Gómez Farías. Padre de la Reforma*, México, 1948, p. 42.

de presentarme —al pueblo y las tropas— y declarar mi determinación de no ceder a los votos del pueblo. Si me abstuve de hacer esto, fue únicamente porque me pareció prudente deferir a los consejos de un amigo que estaba en aquellos momentos conmigo —José Manuel de Herrera, según Zavala. Apenas tuvo tiempo para decirme: Se considerará vuestro no consentimiento como un insulto, y el pueblo no conoce límites cuando está irritado. Debéis hacer este nuevo sacrificio al bien público... un rato más de indecisión por vuestra parte, bastaría para convertir en gritos de muerte estas aclamaciones".[62]

Bustamante consigna que esa noche acude un grupo de frailes franciscanos, vecinos a la casa, y a sus pies lo saludan como *Protector de la religión.*

No podemos pasar por alto la discreción de Iturbide sobre cualquier punto que pudiera referirse a la preparación interna de su proclamación. La misma que guarda sobre las juntas de La Profesa, en la que no involucra a persona alguna.

Ante la proclamación tumultuosa de Iturbide sus enemigos se acobardan. "Habían visto a Iturbide cruel e inexorable cuando hizo la guerra a los insurgentes, y temían que armado ahora de un poder absoluto resucitase su antigua ferocidad y tomase una venganza ruidosa y sanguinaria. El sistema de lenidad que habla adoptado este caudillo... —escribirá Zavala—, no les daba suficientes garantías para lo sucesivo. Debemos decir en obsequio a la verdad —declara—, que jamás desmintió por ningún acto de crueldad las protestas que había hecho de respetar la sangre de sus conciudadanos".[63] Zavala es veraz, y emplea las palabras exactas al hablar *de respetar la sangre de sus conciudadanos* y no de otros respetos.

Al segundo Iturbide se rescata a sí mismo en su nueva imagen de *libertador*, que debe redimir la del criollo coronel realista hasta ser digno de su propia estima, tanto, que es ante sí árbitro de la felicidad de México. La ilusoria o real metamorfosis ocurrida en 15 meses se consagrará en el trono.

Ante la proclamación en las calles, Iturbide convoca a la Regencia, a generales "y otros sujetos de su confianza", y se resuelve convocar al Congreso para las siete de la mañana del día siguiente, a lo que se aviene García Cantarines su presidente. Iturbide redacta una proclama: "El ejército y el pueblo de esta capital acaban de tomar un partido; al resto de la nación corresponde aprobarle o reprobarle; yo en estos momentos, no puedo más que agradecer la resolución, y rogarles, sí, mis conciudadanos, rogaros, pues los Mexicanos no necesitan que yo los mande, que no se dé lugar a la exaltación de las pasiones, que se olviden resentimientos, que respetemos las autoridades... Que dejemos para momentos de tranquilidad la decisión de nuestro sistema y de nuestra suerte... La Nación es la Patria; la representan hoy sus diputados; oigámoslos... la ley es la voluntad del Pueblo; nada hay sobre ella; entendedme, y dadme la última prueba de amor que es cuanto deseo, y lo que colma mi ambición".[64]

Robertson menciona una carta que a las tres de la mañana le dirigen los regimientos de caballería e infantería de la capital, adhiriéndose unánimes a su proclamación.[65]

El Congreso se reúne en la mañana del día 19, y García Cantarines lee un oficio del mi-

[62] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 124-125.
[63] *Ibid.*, p. 127.
[64] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 342-343.
[65] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 173.

nistro de la Guerra, fechado a las cuatro y media de la mañana, acompañando con acuerdo de la Regencia "las representaciones de los generales, jefes y oficiales, regimientos de infantería y caballería del ejército", para que se comuniquen al Congreso.

El acta del día reproduce los documentos. "Los generales, jefes y oficiales que suscriben, ruegan a V.A.S. se digne enviar al Soberano Congreso Mexicano, la adjunta manifestación que han creído debe hacerse en las presentes circunstancias con el informe que V.A.S. tenga a bien añadir sobre el particular". Las firmas las encabeza el general Pedro Celestino Negrete, y le siguen más de 60, todas de antiguos realistas. La manifestación es breve: "Los regimientos de infantería y caballería del ejército imperial Mexicano existentes en esta capital, en masa y con absoluta unanimidad, han proclamado al serenísimo Sr. Generalísimo Almirante, Presidente de la suprema Regencia D. Agustín de Iturbide, Emperador de la América Mexicana. Este pronunciamiento se ha seguido con las demostraciones más vivas de alegría y entusiasmo por el pueblo de esta capital, reunido en sus calles. Los generales, jefes y oficiales que suscriben, se ocupan en conservar el orden y tranquilidad pública; y al mismo tiempo han creído de su deber manifestar a V.M. esta ocurrencia, para que tomándola en consideración, delibere sobre punto de tanta importancia".

Después se lee la proclama de Iturbide redactada esa madrugada.

* * *

Iturbide al frente de un cuerpo de ejército proclama en Iguala la independencia. En la ciudad de México, generales y jefes del ejército lo proclaman emperador. El modelo resulta eficaz y se perpetuará. El Congreso, en el que reside la soberanía del pueblo, es notificado de una resolución que no contiene una sola palabra que la motive. El ejército, se afirma, ha hecho la proclamación "con absoluta unanimidad", y lo comunican al Congreso para que "delibere sobre punto de tanta importancia".

El margen real para deliberar se limita de hecho a prescribir la sola forma y los términos de la proclamación.

A la sesión no asisten Manuel Crescencio Rejón, Francisco Antonio y Pedro Terrazo, Fagoaga, Sánchez de Tagle y Odoardo, entre los enemigos de Iturbide cuya ausencia menciona Zavala. El acta de la sesión contiene un relato más vivo que el de testigos como Zavala, Bocanegra y Bustamante.

Se plantea si existe quórum, y se dan por presentes a más de 90 diputados. No puede resolverse si la sesión será secreta o pública cuando "desde antes se hallaba el edificio rodeado de un inmenso pueblo que gritaba *¡viva el emperador!* y deseaba penetrar en las galerías". Debe calmarse la inquietud, y se designa a cuatro diputados para que soliciten de la Regencia "medidas oportunas, a fin de asegurar la tranquilidad pública, y la libertad de la deliberación. Esta comisión —continúa el acta— regresó sin una respuesta capaz de satisfacer las miras del Congreso. Seguidamente se creyó como medio más a propósito, que viniese el Sr. Generalísimo con los generales al seno del Congreso...". Se interrumpe la sesión en espera de Iturbide, quien llega "en compañía de sus generales, y en brazos del pueblo que lo proclamaba, con cuyo motivo se hizo la sesión pública", invadiendo el pueblo el salón del Congreso.

García Cantarines pide a Iturbide que serene la agitación, "a fin de que el Congreso de-

liberase, con la calma, libertad y circunspección que demandaba la gravedad del negocio..." Iturbide contesta "recordando sus esfuerzos anteriores para eludir el entusiasmo con que el agradecimiento público había intentado elevarle a la dignidad que jamás apeteció, siendo así, que todo su ardor y su conato se había limitado a libertar de la esclavitud a su cara patria, cumpliendo en todo sus ofrecimientos", y tratando desde la víspera de "calmar esta nueva manifestación de entusiasmo...". "Entonces —sigue el acta— se dirigió al pueblo exhortándole enérgica y expresivamente a resignar su voluntad en la deliberación del soberano Congreso... Pero el pueblo, interrumpiéndole reiteradas veces manifestaba que era su deseo la inmediata proclamación de S.A.S.".

Guridi y Alcocer habla; elogia la docilidad del pueblo y la prudencia de los generales, la ilustración y virtud de los diputados. Expone, consta en el acta, "que los poderes de éstos están limitados, y tanto, que no podrían sancionar la aclamación que anoche hizo el ejército y el pueblo... sin exponerse a que se quiera anular por esta falta, por lo que suplico encarecidamente, se tenga una poca de espera, ínterin se ocurre respectivamente a las provincias".

Se presenta un voto firmado por los diputados José de San Martín, José Ignacio Gutiérrez, Manuel Terán y José Mariano Anzorena, antiguos insurgentes, y Francisco Rivas. Como particulares convienen con la exposición de los generales, mas como diputados "hacemos presente a V.M. —declaran—, que la soberanía reside radicalmente en el pueblo americano; que éste no se compone de sólo los habitantes de México; y que de los representantes de las otras provincias, tenemos unos poderes limitados". Para no faltar a ellos proponen: "1. Que para dictaminar en tan importante asunto, suspenda V.M. su resolución, hasta que a lo menos, dos terceras partes de las provincias hayan ampliado sus poderes, y dado una instrucción sobre la forma de gobierno que se ha de adoptar. 2. Que entre tanto, el Sr. Iturbide quede de único regente depositándose en su sola persona todo el poder ejecutivo". 3. Que se nombre una comisión del Congreso que forme en término perentorio "un estatuto, que deberán observar las potestades constituidas", en tanto reciben las instrucciones los diputados.

Registremos únicamente la modalidad propuesta de consultar a las provincias y esperar a que dos terceras partes de ellas den sus instrucciones y poderes "sobre la forma de gobierno que se ha de adoptar", lo que se aparta de la Constitución española, presuntamente vigente. En ésta, en toda reforma a la Constitución se requerirá que los diputados estén autorizados para aprobarla, y el proyecto de reforma se debe publicar en todas las provincias (arts. 376 y 381). En la Constitución de Estados Unidos, las reformas pueden ser propuestas por los dos tercios de las legislaturas de los estados o los dos tercios de ambas cámaras (art. V).

En el voto de los cinco diputados está implícita una concepción federal de inspiración norteamericana, incluso para proclamar emperador a Iturbide, al acudirse a las provincias como entidades con voto igual.

Las dos proposiciones son desechadas "en medio de un debate interrumpido y ruidoso".

García Cantarines dispone la lectura de otra "presentada por el Sr. Gómez Farías y firmada por más de cuarenta señores. El grande y memorable acontecimiento que se nos ha comunicado el día de hoy —se dice en ella—, lo tenía preparado el mérito singular del héroe de Iguala. Su valor y sus virtudes lo llamaban al trono...". Si la España hubiese aceptado el Tratado de Córdoba, y no hubiese hecho la guerra, Fernando VII sería el emperador; "pero rotos ya el plan de Iguala y tratados de Córdoba como es bien constante por documentos indubi-

tables; yo me creo con poder, conforme al art. 3 de los mismos tratados, para votar porque se corone el grande Iturbide, y entiendo que V.M. se halla igualmente autorizado", declara Gómez Farías, cuyo voto está redactado en primera persona, adhiriéndose a él los demás firmantes. El documento concluye: "Este voto que suscriben conmigo otros señores diputados, y que es el general de nuestras provincias, lo damos con la precisa e indispensable condición de que nuestro Generalísimo Almirante se ha de obligar en el juramento que preste a obedecer la constitución, leyes, órdenes, y decretos que emanen del soberano Congreso Mexicano".[66]

Antonio José Valdés explica una proposición concreta que coincide con el contenido del decreto que aprobará el Congreso, aunque Valdés, después de la declaración sobre la libertad en que se halla el imperio por el desconocimiento del Tratado de Córdoba en España, expone que México está libre para resolver lo que convenga, "ya sea con la misma dinastía por medio de un nuevo pacto, o de otro modo conforme a nuestras bases fundamentales", lo que demoraría la proclamación de Iturbide y lleva a Valdés a concluir dando su adhesión al voto de Gómez Farías.

En el debate son interrumpidos quienes expresan algún escrúpulo sobre la proclamación inmediata. Incluso el mismo Iturbide, cuando trata de hablar y se refiere a reflexiones "que son justas e hijas de la prudencia, y del buen juicio de...", es acallado sin dejarlo terminar la frase.

Pedro Lanuza plantea la situación *ad hominem*, podríamos decir: "La consecuencia de una sana y estricta lógica es la ingratitud con que nos desprecian —España y las potencias de Europa— creyendo que el vasto imperio mexicano mendiga quién debe ser su emperador...". Lanuza ha viajado hasta Guatemala "en la misión que hice...; para lograr su independencia que conseguí de la provincia de Chiapa, y en todas las poblaciones del camino deseaban tener emperador del seno del imperio". La proclamación de Iturbide, concluye, no debe aplazarse.

El debate es más amplio que lo asegurado por los historiadores. El acta registra las intervenciones de Lanuza, Aranda, Covarrubias, Argandar e Iriarte, por la inmediata proclamación; y las de Portugal, Paz, Lombardo, Vea, Múzquiz y Gutiérrez, por examinar los poderes de los diputados y consultar a las provincias.

Surgen en él puntos insospechados. Covarrubias, iturbidista, al afirmar que ni el Plan de Iguala ni el Tratado de Córdoba desautorizan la inmediata elección de emperador, agrega: "Uno y otro nos dejan en libertad a constituir este pueblo en república, uno y otro, y nuestras provincias nos precisan a constituirlo en monarquía...".

Francisco Argandar, doctor en teología y firmante de la Constitución de Apatzingán en 1814 se declara en favor de la proclamación inmediata.

A otro diputado, Francisco Lombardo, lo interrumpe el pueblo al declarar que no es el día en que puede deliberarse. Antes, recuerda al Congreso: "he tenido el honor de desaprobar las pretendidas bases sancionadas por el Congreso en el día de su deseada instalación; tuve presente, Señor, aquel día, cuál era la voluntad expresa de la nación que nos había colocado en el seno de V.M. como diputados a su Congreso constituyente, concepto incompatible a mi ver con los límites que pusiera otra potestad que no fuese la nación misma...".

Melchor Múzquiz no se opone a la coronación de Iturbide, pero la pide decorosa, por lo

[66] El voto se reproduce además, en J.M. Bocanegra, *op. cit.*, pp. 59-60; Fuentes Díaz, *op. cit.*, pp. 43-44; Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 69.

que el Congreso debe ocuparse "del modo de uniformar la voluntad de las provincias, para lo que —manifiesta— creo indispensable consultarlas". Como Lombardo, recuerda al Congreso que ha "opinado en contra del llamamiento de los Borbones desde el día en que V.M. declaró la instalación del Congreso", por lo que ha sido insultado por uno de los diputados que hoy hace proposiciones "que acaso no haría, si no fuese por los aplausos de las mayorías". El aludido es Antonio José Valdés, que se justifica por el juramento que lo ligaba. Mas España rompe el vínculo, y es libre para opinar en otro sentido. Ha combatido, por los mismos motivos "los embates del republicanismo. Conozco la excelencia de ese sistema social —declara Valdés—, y el mérito distinguido de algunos de sus apreciables defensores; pero debo decir con franqueza, que semejante especie de gobierno no la considero adecuada a los elementos, ni físicos, ni morales que nos presentan los pueblos". Todo está predispuesto a la monarquía moderada, y la elección de Iturbide es justa e imperiosa para Valdés.

Entre la agitación del público se resuelve que está suficientemente discutido el asunto. Iturbide habla de nuevo para pedir al pueblo "que si amaba a su persona, le prometiese someterse respetuosamente a la deliberación del soberano Congreso, sea cual fuese el resultado, siendo que en aquella asamblea residía la voluntad reunida de la nación representada por sus diputados".

La votación se referirá a si es o no necesario consultar a las provincias.

Se aprueba la inmediata proclamación por 67 votos contra 15.

"Publicada la votación, el Sr. Presidente cedió a S.M.I. el asiento que le correspondía bajo el solio, y la satisfacción pública fue tan pronunciada, que en más de un cuarto de hora, no se oyó más que, viva el Emperador, viva el soberano Congreso...". A las cuatro de la tarde se levanta la sesión.

El acta termina con una *Nota*: "Los votos recogidos que por todos hacen ochenta y dos, no son los de todos los diputados que se hallaron presentes, porque algunos salieron antes de la votación, unos fiados en que habían firmado la proposición leída por el Sr. Farías, lo que creyeron suficiente para expresar su voluntad, y otros porque se hallaban esparcidos en los gabinetes de distracción".

El decreto aprobado el día 21 expresa que reunido el Congreso "por las ocurrencias de la noche anterior y parte que de ellas dio el generalísimo almirante...; teniendo en consideración que las Cortes de España, por decreto inserto en la *Gaceta* de Madrid de 13 y 14 de febrero último, han declarado nulo el Tratado de Córdoba, y que por lo mismo es llegado el caso que no obligue su cumplimiento a la nación mexicana, quedando ésta con la libertad que el artículo 3o. de dicho tratado concede al soberano Congreso constituyente de este imperio, para nombrar emperador por la renuncia o no admisión de los allí llamados: ha tenido a bien elegir emperador constitucional del imperio mexicano al Sr. D. Agustín de Iturbide, primero de este nombre, bajo las bases proclamadas en el Plan de Iguala y aceptadas con generalidad por la nación, las cuales se detallan en la fórmula del juramento que debe prestar ante el Congreso el día 21 del corriente".

El texto ha sido revisado y corregido, a proposición de García Cantarines, para que "se omitiesen algunas expresiones en que aparecía ser alguna violencia la que había obligado a dar este paso al soberano Congreso...".[67]

[67] Una transcripción íntegra del acta de la sesión en Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 65-82.

Nos hemos referido a la sesión de ese día 19 no sin cierta morosidad. Demos fin a esta reseña con el juramento que se aprueba debe prestar y presta el día 21 el emperador elegido, cuya redacción se encarga a la comisión de 24 diputados, que menciona el artículo 130 del reglamento de las Cortes españolas del año 1813.

> *Agustín, por la Divina Providencia* y por nombramiento del Congreso de representantes de la nación, *emperador de México, juro por Dios y los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el imperio; que guardaré y haré guardar la Constitución* que formare dicho Congreso, y entre tanto la española en la parte que está vigente, y así mismo las leyes, órdenes y decretos que ha dado, y en lo sucesivo diere el repetido Congreso, *no mirando en cuanto hiciere, sino el bien y provecho de la nación; que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del imperio; que no exigiré jamás parte alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubiere decretado el Congreso; que no tomaré jamás a nadie sus propiedades; que respetaré sobre todo la libertad política de la nación, y la personal de cada individuo; y si en lo jurado o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, antes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude, y sea mi defensa, y si no me lo demande.*[68]

El texto del juramento es literalmente idéntico, en lo que está en cursivas, al que la Constitución española imponía al rey en su artículo 173.

Iturbide parece arrastrado en un impulso circular o espiral de la historia que vuelve, o pasa fatalmente sobre el mismo punto tensor en el que se inició el suceso para anularlo. Desde mayo de 1820 se había conspirado para preservar a México de la contaminación revolucionaria. Iturbide había salido a combatir la última insurgencia en una segunda instancia del proyecto. Hoy, el súbito emperador jura de nuevo, como el 24 de febrero, guardar la constitución, la española liberal y la que dicte el Congreso en el que reside la soberanía nacional. Su exaltación al trono es también otra abdicación pública aunque paradójica de los principios por los que se inició en esta historia, aunque él proclamará el mismo día los que fundan sus propios títulos.

[68] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, pp. 63-64.

Parte sexta

LA PERTURBACIÓN MONÁRQUICA

1

LA FRUSTRACIÓN DESCONCERTADA Y AGUSTÍN I

¿Pudo pensarse, y se creyó así, que Iturbide y el Congreso llegarían a un término conciliatorio? El conflicto y el desenlace súbito pero no imprevisible de la proclamación se centran en el Congreso, después de que la independencia se consuma por tan oblicuos caminos exaltando la sola figura de Iturbide. La insurgencia hereda mártires, y los sobrevivientes de ella, excepto Guadalupe Victoria, no excusan su adhesión al *libertador*.

Desde el sur, el general Guerrero no desaprueba la proclamación de Agustín I, y el 28 de mayo escribe a Iturbide manifestando la confianza de los mexicanos en que no se convertirá en un tirano. La *Gaceta Imperial* del 18 de junio publica otra carta de Guerrero del día 4 en la que reitera su acatamiento e informa de las celebraciones en Tixtla.[1]

A Iturbide le importa publicar la adhesión de Guerrero frente a los insurgentes, los inquietos *amnistiados*, y frente al país, como un testimonio inobjetable de la unión en torno a su persona.

Otro insurgente, el general Guadalupe Victoria, según las noticias que tiene Iturbide, es el rebelde. Luaces le informa, desde el 16 de febrero, que va hacia la costa de sotavento, y recomienda que se le persiga, indicando a Santa Anna para ello, hombre, Santa Anna, que "es además joven, con ambición de gloria y de emplearse en misiones que le hagan honor".[2] Santa Anna es por entonces un agente iturbidista en Jalapa que le da noticias, el 9 de febrero, sobre las elecciones de diputados, concluyendo obsequioso: "Es por demás reproducir a V.A. que por el bien de la Patria y en defensa de su persona y opinión, me sacrificaría con mi regimiento...".[3] El 11 de febrero Santa Anna le informa de partidas de alzados "que se apellidan republicanos; y siendo así que esto comprueba el fomento que van tomando tales ideas, se lo noticio a V.A." para agregar: "considero prudente cortar en su origen estas maquinaciones en honor nuestro...". El 15 de abril le manifiesta lo sensible que le son las desavenencias de Iturbide y el Congreso, "debiendo repetirle que mi persona siempre se halla enteramente dispuesta a emplearse en el servicio de V.A. como apetezco comprobarlo, en todo caso con obras...".[4] La *Gaceta del Gobierno Imperial* del 15 de junio publica la arenga de Santa Anna a sus soldados por la proclamación, y la carta que dirige desde Jalapa a Iturbide: "...yo en unión del Re-

[1] Extractos de las cartas en Alamán, *op. cit.*, pp. 564-565. Alamán califica las adhesiones que recibía Iturbide de "carrera de humillaciones y abatimiento en que todos parecían haberse lanzado en una especie de competencia". En R.H. Valle, *op. cit.*, pp. 68-69.

[2] Emilio del Castillo Negrete, *op. cit.*, pp. 73-74.

[3] *Ibid.*, p. 67.

[4] *Ibid.*, p. 51.

gimiento de Infantería de línea No. 8 que mando, y quien bajo mi dirección estaba prontísimo a dar tan político como glorioso paso, mucho tiempo antes de ahora, sintiendo no hayamos sido los motores de tan digna exaltación...".

Citamos las efusiones de Santa Anna, cinco meses después firmante del Plan de Veracruz, tres décadas más tarde Alteza Serenísima, y en esos días coronel aspirante a los favores de Iturbide.

La *Gaceta* de 30 de mayo reproduce la felicitación episcopal de don Antonio Joaquín Pérez. La *Gaceta* de mayo y junio registran diariamente las adhesiones que de todo el país van llegando por la proclamación.

Según Robertson, en lo ocurrido el 18 y 19 de mayo "no existe evidencia a la mano para probar que (Iturbide) haya instado al populacho para que lo proclamara emperador". Mas no es el populacho el que proclama a Iturbide, la proclamación la hace el ejército y el pueblo es comparsa tumultuaria. El mismo Robertson concluye que la elección por el Congreso, "sin embargo, no fue libre ni técnicamente legal".[5]

Carlos Olmedilla, pseudónimo que usa nuestro más distinguido filólogo cuando se ocupa de asuntos ajenos a su magisterio, rescata de un catálogo español de manuscritos sobre América párrafos de las *Apuntaciones que en sus viajes a Ultramar ha tomado el Oficial de infantería Modesto de la Torre,* que llega a México en la comitiva de O'Donojú. De ellos nos interesa uno sobre una función de teatro a la que asiste, coincidiendo con el todavía Generalísimo Almirante que ocupa el palco destinado a los virreyes. El palco opuesto "lo ocupaba la famosa Güera Rodríguez, mujer de historia y de travesura... Los que presumen de estar en la cuerda de la revolución actual de México, ven en la Güera la reguladora de la conducta de Iturbide, y la mano suave que pulsa y mueve las teclas que suenan de cuando en cuando... Los zaragotes o léperos (que de los dos modos llaman aquí a la pillería) gritaron durante el intermedio de la representación, y a veces en ella misma —nos cuenta De la Torre—, pidiendo que se coronase Iturbide, y proclamando a Agustín lo. La Güera parecía en sus ademanes, no sorprenderla esta novedad; al contrario, redoblar el entusiasmo de los bullanguistas y prodigar sonrisas de aprobación era su contento, interrumpido sólo por las expresivas miradas con que se correspondían ella e Iturbide. Éste sin volver la cabeza hacia sus proclamadores, les reprochaba con la mano la afección que en aquel acto le manifestaban, pero como sabían que lo decía de burletas, no le hacían el mayor caso. Por fin cuando les parecía callaban, y nos dejaron divertir a los que habíamos ido al teatro, no a tratar de la elección de Emperador Mexicano, sino a ver cómo se las había Felipe el Hermoso Rey de Francia con los Templarios".[6]

La maliciosa y aun maledicente crónica del capitán De la Torre no desautoriza el sobrio juicio de Robertson, pero corrobora en parte las noticias que tiene Vicente Rocafuerte sobre los manejos de *la rubia Aspasia,* Los riesgos de la anécdota no la invalidan. Volvamos a los hombres que se comprometen en la historia.

El doctor Mier, liberado de Ulúa por el general Dávila el 21 de mayo, llega al Congreso como diputado por Monterrey el 21 de junio. El 17 de julio escribe al Ayuntamiento de Monte-

[5] William Spence Robertson, p. 182.

[6] Carlos Olmedilla, "México, 1808-1821. Algunas aportaciones históricas", en *Historia Mexicana,* abril-junio, 1960, pp. 595-600.

rrey sobre el suceso del 19 de mayo: "Cuando todos esperábamos una declaración de estar constituidos en república, según el voto, que parecía general, sobrevino la de haberse proclamado Emperador a Don Agustín Iturbide, pero al mismo tiempo se aseguraba, que ésta no era sino una borrachera de algún populacho y tropa, pues con ésta ya desde el 3 de abril se había intentado disolver la representación nacional a título de que la patria estaba en peligro". Con tales noticias Mier se acercó a México "muy poco a poco", pues se le vigilaba.[7] El 21 de agosto, y escribiendo de nuevo al Ayuntamiento dirá: "Esto va malo. Extravían al E. y temo una catástrofe... Pienso que al fin se nos disolverá; pero creo que tampoco quedará el promotor en su puesto. Nuestra fortuna es que hay tropas a favor del Congreso, cuyo concepto se ha procurado arruinar... Hemos comenzado —escribe— por donde acaban las Cortes opulentas y corrompidas", y aun hay quienes desean un *emperador absoluto*.[8] El republicano doctor Mier es algo más que indiscreto.

La proclamación se proyecta hacia el sur del continente. El enviado de Colombia, el mexicano Miguel Santa María, comunica a su gobierno que juzga prudente suspender sus negociaciones en México por lo extraordinario de la proclamación, haciendo notar que el gran número de diputados que no votaron por ella, y que las circunstancias en que se aprobó en el Congreso podrían tornar dudoso el acto.[9]

Un juicio contemporáneo lo hace Bolívar en carta de 23 de septiembre al general Santander. "He visto los papeles de México —escribe—, y ellos dicen que Iturbide es emperador, por la gracia del sargento Pío... Parece que el Congreso ni aun los oficiales y jefes han querido tal emperador. Si así es no doy un cuarto por el Imperio de Iturbide. Es muy posible que los españoles pierdan toda esperanza de ocupar aquel trono; y también es muy posible que la anarquía suceda al imperio español. ¡Qué locura la de estos señores, que quieren coronas contra la opinión del día, sin mérito, sin talento, sin virtudes! ¿Quieren coronas para justificar a nuestros enemigos...?"[10]

Tres días después, el 26 de septiembre, Bolívar escribe a Fernando Peñalver. "Chile ha instalado ya su Congreso y Lima habrá hecho lo mismo; los gobiernos de estos dos estados son realistas y los pueblos republicanos, así es que hay una lucha cruel y quién sabe si injusta por parte de los jefes. Iturbide ya sabrá Ud. que se hizo emperador por la gracia de Pío, primer sargento; sin duda será muy buen emperador; su imperio será muy grande y muy dichoso, porque sus derechos son legítimos, según Voltaire, por aquello que dice: El primero que fue rey fue un soldado feliz, aludiendo, sin duda, al buen Nemrod. Mucho temo que las cuatro planchas cubiertas de carmesí que llaman trono cuesten más sangre que lágrimas... Están creyendo algunos que es muy fácil ponerse una corona y que todos la adoren; y yo creo que el tiempo de las monarquías fue, y que, hasta que la corrupción de los hombres no llegue a ahogar el amor de los hombres a la libertad, los tronos no volverán a ser de moda en la opinión. Ud. dirá que toda la tierra tiene tronos y altares; pero yo responderé que estos monumentos antiguos están todos minados por la pólvora moderna y que las mechas encendidas las tienen los furiosos, que poco caso hacen de los estragos".[11]

[7] Alfonso Junco, *op. cit.*, pp. 83-88.
[8] *Ibid.*, pp. 89-94.
[9] Citada por William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 182.
[10] Simón Bolívar, *op. cit.*, tomo I, p. 687.
[11] *Ibid.*, pp. 688-689.

No es tarea muy difícil acumular desaprobaciones para concluir con argumentos de autoridad. Nuestra perspectiva es otra, la de la emancipación americana en sí. Bolívar en esa hora, en las entrevistas con San Martín el 26 y el 27 de julio en Guayaquil, definió su desacuerdo con el proyecto monárquico para el Perú. En realidad, lo había manifestado desde antes, cuando escribió a San Martín el 16 de noviembre de 1821, comunicándole la firma del Tratado de Córdoba, carta a la que ya nos referimos. O'Higgins había negado la participación de Chile en el proyecto de San Martín desde febrero de ese año de 1822, al recibir a los comisionados Juan García del Río y Diego Paroissien, que en nombre de San Martín solicitaban su apoyo para negociar la coronación de un príncipe europeo en América. Los proyectos monárquicos de Buenos Aires estaban sepultados desde el triunfo federal en 1820 al firmarse el Pacto del Pilar el 23 de febrero. Rivadavia, que con Belgrano y Sarratea había iniciado en Europa en 1815 una negociación para obtener un príncipe que ocupara el trono en Buenos Aires, y cuyas últimas gestiones para que se reconociese la independencia de las Provincias del Plata concluyeron en 1820, en 1822 como ministro de la provincia de Buenos Aires se negó también a colaborar en la gestión encomendada a García del Río y a Paroissien.

El episodio de la consumación de nuestra independencia, la de México, no únicamente tiene un origen ajeno a la insurgencia. El proyecto monárquico es tardío, y aunque coincida con el de San Martín en el Perú, su desenlace en la proclamación de Iturbide es excéntrico en el proceso emancipador. Para ello no importa la explicación contingente, que se anula a sí misma.

* * *

Zavala afirma que "no hubo libertad en aquel acto —el del Congreso—, y que fue únicamente obra de la violencia y de la fuerza". Lo que no quiere decir, agrega, "que la nación no hubiera nombrado en aquellas circunstancias emperador a don Agustín de Iturbide mejor que a otro alguno. Las ideas republicanas estaban en su cuna; todos parecían contentos con una monarquía constitucional. De consiguiente —según Zavala— no hubiera sido antinacional la elección de Iturbide para el trono si se hubiese hecho por otros medios", después de que la Casa de España había rechazado el Tratado de Córdoba, "hallándose los mexicanos libres del pacto contraído al tiempo de hacerse la independencia". Más esclarecedora que este planteamiento es la confesión que hace Zavala inmediatamente: "Yo por mi parte, hablando de buena fe, no sé qué era lo que más convenía a una nación nueva que no tenía hábitos republicanos ni tampoco elementos monárquicos. Todos debían ser ensayos y experimentos hasta encontrar una forma que fuese adaptable a las necesidades y nuevas emergencias de la nación".[12]

El desconcierto es el signo del día, pero no lo es ni propio ni limitado a México en la emergencia de la América española. Citamos en alguna página al Robespierre monárquico en la Revolución francesa. Los ejemplos se pueden multiplicar. A. Schlesinger se refiere a Estados Unidos: "Cuatro meses después del derramamiento de sangre en Lexington y Concord, Thomas Jefferson, que habla de redactar la Declaración de Independencia el año siguiente, dijo que 'prefería continuar dependiendo de la soberanía británica, debidamente limitada, an-

[12] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 128-129.

tes que de la de cualquiera otra nación, o no depender de ninguna'. John Adams... escribió algunas semanas después: 'No podemos concebir en este país que haya en Inglaterra hombres tan infatuados como para sospechar seriamente que el Congreso o el pueblo de aquí deseen erigirse en un estado independiente". Y suma lo escrito por Samuel Adams en diciembre de 1775: "Debemos contentarnos con esperar a que el fruto madure antes de recogerlo".[13]

Zavala confiesa el desconcierto en "una nación nueva que no tenía hábitos republicanos ni tampoco monárquicos". "La corte de nuestros reyes, más sagrada mientras más distante se hallaba de nosotros, se nos figuraba la mansión de la infalibidad, desde donde el oráculo se dejaba oír de cuando en cuando... Adorábamos como los atenienses un Dios no conocido..." se dijo en el Manifiesto del Congreso de Chilpancingo que presentaba la Declaración de Independencia de la América Septentrional, de 6 de noviembre de 1813.

Andrés Quintana Roo, vicepresidente del Congreso en Chilpancingo y firmante del acta y del manifiesto, publicaría a fines de 1821 o principio de 1822 —no consta la fecha— unas *Indicaciones sobre gobierno.* Elogia el Plan de Iguala, "inspirado en el más puro y acendrado patriotismo". Si Fernando VII y su casa no aceptan el trono de México, se podrá elegir a otro, evitando a la nación "ser víctima de las facciones democráticas, y su libertad juguete de los caprichos de un rey absoluto...". Es lo que debe inculcarse, predica Quintana Roo, "porque las teorías republicanas tan hermosas en los libros que nos bosquejan sus ventajas al lado de los triunfos militares de Grecia y Roma, se desvanecen fácilmente... en vivísimos deseos de ver restablecido un orden de cosas incompatible con nuestras costumbres". En México siempre hemos tenido la falsa imagen de la monarquía en la de los abusos de los virreyes. En España "una democracia tumultuaria sucedió repentinamente al dominio más absoluto", y "los vicios de su Constitución han influido poderosamente en los vicios de nuestras costumbres" distinguiendo las castas y sembrando el odio.

Los testimonios no dejan de ser reveladores.

Iturbide se quejará desde el destierro en Liorna que el Congreso, cuyo objeto primero era preparar y promulgar la Constitución del imperio, en los tres meses de estar reunido no llegó a ocuparse del proyecto de ella, lo que no es cierto. Cabe preguntar sobre el interés del propio Iturbide en esa Constitución, y cuáles son sus ideas más allá de las genéricas bases del Plan de Iguala. Porque si es general el desconcierto entre los diputados que llegan y continúan llegando de las provincias, y que tienen menos de 90 días de comenzar a reunirse, no podemos suponer, o es difícil hacerlo, que Iturbide y sus consejeros más cercanos no hayan concebido la futura Constitución.

* * *

El 19 de mayo, después de prestar el juramento aprobado por el Congreso, Iturbide lee un discurso: "Cuando pronuncié en Iguala la independencia del Imperio... además de proponerme romper las cadenas con que un mundo sujetó a otro mundo, sin otra razón que la violencia y el terror, autorizada en los tiempos sombríos de la ignorancia, tuve por principal objeto salvar a la Patria de una horrorosa anarquía en cuyos bordes ya se balanceaba... con voz tan sen-

[13] Arthur M. Schlesinger, *Rumbos de la historia norteamericana,* Buenos Aires, 1964, pp. 223-224.

tida como majestuosa reclamaba auxilio de sus hijos; corrí a extenderle una mano protectora...". Las oscilaciones de los juicios sobre los tres siglos coloniales ya no sorprenden. Tampoco el papel de protagonista que se atribuye Iturbide. Ante los riesgos, "a mí sin embargo —revela— quizo la Providencia darme serenidad bastante para no ser sorprendido por el peligro; creo que poco olvidé de lo que convenía tener presente. El éxito es garantía de mi aserción; pero sobre todo cuidé de respetar la voluntad de los pueblos, acallada entonces, sofocada, diré mejor, enmudecida...; tiempo vendría en que por su naturaleza misma recobrase sus derechos y los pusiese en ejercicio. Es el principal la elección de un hombre que puesto a su cabeza la dirigiese, la amase, la defendiese; éste es el Príncipe, éstas sus virtudes. Era preciso reunir la opinión a un centro, era preciso dejar a salvo la voluntad general cuando pudiese libremente pronunciarse... Llamé, no había otro medio, a reinar en México a la dinastía de la segunda rama de Hugo Capeto, con tal de que su advenimiento al trono fuese precedido de la constitución de la monarquía, así los Padres de la Patria remediarían los inconvenientes que trae consigo poner el cetro en manos acostumbradas a manejarlo a su placer sin más ley que su antojo y la corona en quien tal vez no profesa a los Americanos todo el amor que un Príncipe debe a sus pueblos: si la Constitución no evitaba estos males me quedaba al menos el consuelo aunque triste, de que no era obra mía". Por ello trabajó, pero "el orden de los sucesos la fue atrayendo (a la patria) después a otro abismo no menos fatal que el en que se viera cuando resucitó en Iguala, y estos mismos exigían de mí nuevos esfuerzos, nuevos sacrificios: acaba de exigirme el mayor, yo cedo a la necesidad y miro mi destino como su bien, porque él lo proporciona a mis conciudadanos... Sí, pueblos, admito la suprema dignidad a que me eleváis, después de haberla rehusado por tres veces, porque creo seros así más útil; de otro modo, preferiría morir a ocupar el trono. ¿Qué aliciente tiene éste para un hombre que ve las cosas a su verdadera luz?".

El discurso concluye: "El peso que habéis puesto sobre mis hombros no puede soportarlo un hombre solo...; pero cuento con las luces de los sabios, con los deseos de los buenos, con la docilidad del pueblo, con la fortuna de los opulentos, con los robustos brazos del ejército libertador, y con las preces de los ministros del Santuario. Padres de la Patria, la Constitución y las leyes son los fundamentos de la sociedad, unas y otras son obras de vuestra sabiduría, también lo es ayudarme a conducir a nuestros súbditos a la felicidad, ellos os harían el más grave cargo si me abandonáis".[14]

Es más clara, definida, la imagen del hombre que surge de la crisis proclamado emperador, que cualquiera de las ideas que discurren en su aceptación del trono, excepto la que de sí mismo, exhibe.

"¿Qué aliciente tiene (el trono) para un hombre que ve las cosas a su verdadera luz?"; "a mí sin embargo quiso la Providencia darme serenidad bastante para no ser sorprendido por el peligro"; "yo cedo a la necesidad y miro mi destino como su bien (el de la patria) porque él lo proporciona a nuestros ciudadanos", no son expresiones casuales. El rey por derecho divino es sustituido por el hombre providencial. Así puede demandar de los Padres de la Patria ayudarlo "a conducir a nuestros súbditos a la felicidad (porque) *ellos os harían el más grave cargo si me abandonáis*", subrayamos.

[14] *Gaceta Imperial de México*, 25 de mayo de 1822.

Quizá después de tan expresa confesión carece de sentido preguntar por el proyecto constitucional que pudiera tener Iturbide.

El 20 de mayo nombra el Congreso para la comisión que prepare el manifiesto que se debe dirigir al imperio a Marín, Godoy, Portugal, Valdés, Fernández y Bocanegra.

En el acta se reproduce el voto de Martínez de los Ríos, del 15 de mayo, para fundar la aprobación del ejército pedido por la antigua Regencia, por Iturbide y los jefes de él. "Sabe V.M. —declaró Martínez de los Ríos— que hablaba del serenísimo Sr. Iturbide; de ese genio sublime y benéfico, que Dios en la efusión de sus misericordias, destinó para romper nuestras cadenas; de un Negrete enviado por la Providencia...; de un Guerrero, de un Bustamante, de un Echávarri...". Es lenguaje de la época, pero entre *los libertadores* sólo figuran dos insurgentes.

García Cantarines, presidente del Congreso, considera necesario exhortar a la unión de los diputados, "debiendo sujetarse a la mayoría los que difieren en la votación del domingo (y) sostener la elección del emperador en el Sr. Iturbide, si fuese preciso, aun con la vida, supuesto que era un deber hacer este sacrificio a la patria...".

En la misma sesión se aprueba el manifiesto formado por la comisión nombrada. Conocido en México el desconocimiento del Tratado de Córdoba por las Cortes de España en sus sesiones del 12 y 13 de febrero, se dice "rompiendo el silencio el Ejército y Pueblo Mexicano, a las once de la noche del día 18, saludaron Emperador al Sr. Generalísimo Don Agustín de Iturbide...". El Congreso se reunió el día 19 y "procuró preparase de todos los modos para deliberación tan importante, pero las reclamaciones vehementes y cada vez más inflamadas le convencieron de la necesidad de tomar en consideración la dignidad y derechos imprescriptibles de la Nación Mexicana...". Así que, libre del ofrecimiento del trono a los Borbones, el Congreso no podía atender "sino aquel que fuere proclamado por la voluntad nacional", como lo era Iturbide, "que habiendo sido su libertador, sería el mejor apoyo para su defensa". Si Iturbide por fidelidad a los tratados había rechazado el trono, el día 19 no podía hacerlo más. El manifiesto llega a su fin elogiando las virtudes del emperador, y asegurando una monarquía moderada por la Constitución y las leyes que el Congreso apruebe.[15]

No se oculta la alusión a los sucesos del 18 y 19 de mayo, y a su significado, como tampoco la mención de la *voluntad general*, tan precariamente expresada. En la exaltación verbal del día, el manifiesto es elocuente en su parquedad.

Pero en la hora de la proclamación no es el Congreso, que cede a la imposición, el que replantea el conflicto. Son las palabras expresas de Iturbide en su autovindicación las que proponen sus términos, ante el Congreso en quien había jurado reconocer la soberanía nacional.

[15] *Ibid.*

2

EL IMPERIO DE AGUSTÍN I

En la *Gaceta Extraordinaria* del 2 de mayo se había publicado el mensaje que el 8 de marzo dirigiera al Congreso de Estados Unidos el presidente James Monroe. No es todavía el mensaje de 2 de diciembre de 1823, que daría título a una doctrina.

"La revolución de las provincias españolas de este hemisferio ocupó desde el principio la atención, y excitó la simpatía de nuestros conciudadanos", expresó Monroe, para continuar: "Luego que la revolución adquirió tal consistencia que las Provincias pudieron lisonjearse con la probabilidad del éxito entraron en el derecho que la ley de las naciones concede a partidos iguales en una guerra civil. A los dos se les permitió la entrada a nuestros puertos, ya en buques públicos, ya en particulares", permitiéndoles comerciar. Las Provincias del Plata declararon, su independencia en 1816, y lo eran de hecho desde 1810; las provincias de Colombia "se unieron en virtud del pacto fundamental de 17 de diciembre de 1819". Chile se declaró independiente en 1818, y con auxilio de Buenos Aires "la revolución se ha dilatado al Perú. Por lo que respecta a México —informa el presidente— nuestros datos no son tan auténticos; pero sin embargo se sabe claramente que el gobierno ha declarado su independencia, y que allí no hay ahora oposición a ella, ni fuerzas tampoco que puedan contrarrestarla. En los últimos tres años el gobierno Español no ha enviado un solo cuerpo de tropas, ni es probable que lo verifique en lo sucesivo. Esto manifiesta evidentemente que aquellas Provincias gozan de su independencia sin el más remoto temor de que puedan ser despojadas de ella. Cuando el resultado de semejantes contiendas afianza la estabilidad de los nuevos Gobiernos, tienen éstos un derecho para ser reconocidos sin resistencia por los antiguos".

Monroe hace una profesión de fe antintervencionista, y declara atenerse únicamente "a los derechos de las Naciones". Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha mirado con interés los acontecimientos pero no ha prestado auxilios a ninguna de las partes. Ignora cuáles sean los proyectos de España sobre las Américas, "pero es de presumir que los felices progresos de la revolución, durante tan larga serie de años, ganando fuerza... abrazando por los últimos acontecimientos casi todos los dominios de España al sur de los Estados Unidos..., y aposesionándose los Pueblos de su soberanía, obligará a la madre patria a entrar en convenios cimentados sobre la base de la independencia que no ha querido reconocer". Las demás potencias, opina Monroe, "parece que no están preparadas en orden a este negocio". La medida que propone, de reconocer la independencia de las antiguas colonias españolas, no variará las "relaciones amigables con todos los partidos, sino que al contrario hemos de observar una neutralidad perfecta de continuar las disensiones".

La *Gaceta*, que publica el discurso, termina su información con el dictamen de la Comisión de Negocios Extranjeros del Congreso, proponiendo que se resuelva: "que la Cámara de los representantes concurre en la opinión expresada por el Presidente..., sobre que las Provincias Españolas Americanas, que han declarado su independencia, y están en el goce de ella, sean reconocidas por los Estados Unidos como naciones independientes".

La noticia del mensaje del presidente Monroe al Congreso lo comenta Carlos María de Bustamante en los número 16 y 17 —anteriores al 18 de mayo de 1822— de *La Abispa de Chilpancingo*. "Nada dijo de México —escribe—, porque el Plan del Imperio ha sido recibido allí como en toda Europa con irrespetuosidad y escarnio; así como el del Emperador de Haití, Cristóbal, que acabó por darse un pistoletazo, y todo él es hoy República...". En el número 17 da cuenta del entusiasmo con que se recibió en México la noticia del mensaje, publicado el 2 de mayo en la *Gaceta*: "salva de artillería y un general repique de campanas... y se me asegura que los Estados Unidos han reconocido nuestra independencia, aunque ignoro si bajo las bases de una república (como es regular) o bajo las del imperialismo proyectado". El estilo de Bustamante se inflama. "¡Mexicanos! estrechad vuestros vínculos con un pueblo hermano que existe en vuestro continente... Uniformémonos cuanto más sea posible en todo lo que puede producir nuestra felicidad, y nada temeremos...".

El reconocimiento tardará aún, pero la sola noticia del dictamen de la Comisión del Congreso norteamericano, si por una parte alienta las seguridades de una independencia reconocida, por otra no puede menos que perturbar a Iturbide y a los monarquistas, al ver aliada la independencia a una república que se viene proponiendo como ejemplo para la nación. Los borbonistas precipitan en el Congreso el extemporáneo ofrecimiento de la corona a los Borbones de la Casa de España, y los iturbidistas la proclamación del emperador mexicano, apremiados por los sucesos internos y externos.

* * *

Según Alamán, los partidos "quedaron por entonces reducidos a los iturbidistas... y sus contrarios, ya republicanos, ya borbonistas, que sin tener por entonces plan ni proyecto combinado no aspiraban a otra cosa que echar por tierra lo existente, dejando a los acontecimientos señalar lo que había de ponerse en su lugar....".[16]

Quizá eran los republicanos, minoritarios, los que no tenían ni coherencia ni proyecto definido. Pero respecto a los borbonistas no puede ignorarse que en el Tratado de Córdoba se menciona a un Carlos Luis, infante de España y heredero de Luca —sobrino de Fernando VII— no consultado aún y no sujeto, como príncipe independiente, a las decisiones de las Cortes de España. La expectativa, supuesta la vigencia del Tratado de Córdoba que funda la licitud de la proclamación de Iturbide, mantiene una legitimidad que se omite pero que no ha sido negada formalmente.

Bocanegra publica la comunicación que dirigen los diputados por Zacatecas el 22 de mayo al Ayuntamiento de su capital. Conocida la nulidad del Tratado de Córdoba declarada por las Cortes españolas, en México "se conmovieron los ánimos, y procuraban explicarse —es-

[16] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 557.

criben los diputados— dando cada uno un fuerte impulso a sus ideas... De aquí era que ya se entrevefa divergencia no muy lisonjera, y sí muy próxima a precipitarnos a un estado de gravísimos males, y a una desastrosa anarquía". En esas circunstancias ocurre la proclamación de Iturbide el día 19, explicarán el día 20 los diputados a sus comitentes, "en vista de lo que se le pedía y por quiénes, y con presencia de cuanto había ocurrido y ocurría con urgencia... La salud de la patria fue la guía que nos ha conducido en este asunto, y buscar aquel bien, que alejando todo espíritu de partido, hará nuestra felicidad...". La comunicación a Zacatecas la firman Bocanegra, Gómez Farías y el doctor Iriarte.[17]

El elogio a Iturbide se aplica en una sola frase que resulta convencional. La referencia a "las aclamaciones del pueblo mexicano, y de los valientes generales y de los oficiales y soldados beneméritos" que se hace en el voto de Gómez Farías el día 19, se transforma en la comunicación más meditada del 22, al hablar de una determinación tomada "en vista de lo que se pedía y por quiénes, y con presencia de cuanto había ocurrido y ocurría con urgencia...".

En el autor del voto del día 19, la comunicación del 22 revela más un juicio entre líneas que un simple laconismo informativo.

Carlos María de Bustamante, que no asiste a la sesión del 19 de mayo, dirige al Congreso el mismo día un voto personal al que se adhieren tres diputados por Oaxaca, Martínez Zurita, Javier Bustamante y Antonio León: "Yo por mi parte estoy pronto a sufragar por el sistema que la generalidad adopte por medio de sus órganos legítimos; pero no los hallo en la guarnición y plebe de México. Esta capital es la primera ciudad del continente, y no más; no es todo el continente mexicano, ni en sus resoluciones goza el derecho de atraer irrevocablemente a las demás provincias. Consultémoslas...". Al día siguiente Bustamante y los tres diputados envían copia del voto a la Diputación Provincial de Oaxaca dando la noticia de la proclamación. "Quedo esperando de V.E. —se dice— la aprobación o reprobación de ella, es decir, si he de ratificar lo que se acordó por 62 votos contra 15, o si me he de retirar del Congreso... Para evitar todo escándalo, e impedir que mi separación del Congreso se tenga como un rompimiento y sedición, estoy decidido a asistir a él con mi persona; pero no con mi voluntad y corazón... y no mezclarme en nada hasta que V.E. me diga si se conforma con el reconocimiento del Emperador, o me retira sus poderes".

Al no tener respuesta, Bustamante regresa al Congreso. Y en octubre de ese año, cuando se le procese con otros diputados, de Oaxaca se enviarán al gobierno copias de su comunicación.[18]

Contemporáneos a la proclamación, como Alamán y Zavala, verifican la falta de libertad en el Congreso, y el propio Gómez Farías la alude, y convienen en que "la nación no hubiese nombrado en aquellas circunstancias emperador a don Agustín de Iturbide mejor que a otro cualquiera. Las ideas republicanas estaban en su cuna: todos parecían contentos con una monarquía constitucional". La proclamación se realizó "como se nombraban los emperadores de Roma y Constantinopla en la decadencia de aquellos imperios, por la sublevación de un ejército o por los gritos de la plebe congregada en el circo, aprobando la elección un senado atemorizado o corrompido", escribirá Alamán. Mas Iturbide debió, opina Alamán, impo-

[17] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, pp. 65-66.

[18] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 64.

ner la consulta a las provincias "seguro como entonces estaba, de que en las provincias no se haría más que lo que él quisiese... y de esta manera su elevación al trono, en vez de aparecer efecto de un motín de la plebe de la capital, hubiera tomado el carácter de un grande acto de la voluntad general que ejercía para este caso importante la soberanía de la nación.[19]

Las felicitaciones al Congreso y a Agustín I vienen de los ayuntamientos, los cuerpos de ejército, los cabildos eclesiásticos, etc. Las diputaciones provinciales se unen, presididas por los jefes políticos nombrados por Iturbide. La aparente unanimidad no extraña cuando para los habitantes de las provincias la exaltación de Iturbide es "una substitución de una familia por otra; y es natural que el sentimiento de nacionalidad hablase en favor del hijo del país", según lo ve Zavala.[20] Las adhesiones llenarán la *Gaceta* de esos meses, con noticias de las sublevaciones absolutistas y la agitación liberal en España.

La *Gaceta* del 9 de junio publica la proclama que el 25 de mayo dirige Santa Anna a la Provincia de Veracruz. El inquieto coronel es en cierta manera verazmente explícito e indiscreto: "Ya por fin el cielo benigno, accediendo a los ruegos de los Ministros del Santuario que clamaban por el acierto de nuestros dignos Diputados, en ocasión en que conjuradas las pasiones todas para hacer zozobrar la nave del Estado, les presentó en el Sr. D. Agustín de Iturbide el iris de la paz... Un decreto celestial en un momento dichoso destruyó hasta la semilla del mal...".

* * *

Mas el Congreso debe continuar sus sesiones, ocupándose de los asuntos pendientes y de los que se le sometan.

Los días 22 y 23 de mayo se aumenta el número de diputados en la comisión de Constitución, incorporando a ella a Camacho, Argandar y Valdés.

Toribio González presenta al Congreso, como diputado por Nueva Vizcaya, proyectos para instituir un Senado Conservador, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de Estado y organizar el ejército. No conocemos el proyecto.

La proclamación imperial lleva a Lanuza a proponer el día 24, que al heredero de Iturbide se le declare príncipe de Michoacán, a don Joaquín, padre del emperador, infante y duque de Iguala, y a doña María Nicolasa, hermana de Agustín I, condesa de Córdoba y Orizaba. El propio Iturbide pide a Lanuza que retire su iniciativa.

El 29 de mayo se recibe la noticia de que el general Dávila liberó al doctor Mier.

Al tratarse el establecimiento de un Consejo de Estado se suscitan cuestiones como la de que debe integrarse nombrando un consejero cada provincia, o bien que cada grupo de diputados de una provincia nombre un consejero. Aunque no se aprueba, la iniciativa reitera la tesis de una igualdad política entre las provincias como tales.

El 31 de mayo se recibe una solicitud para que el Congreso ordene la restitución a sus herederos de los bienes confiscados a Ignacio Allende, "uno de los primeros mártires de la libertad americana", y se turna a la comisión de Justicia.

[19] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 553, 556.

[20] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 128.

El mismo día se aprueba la formación de un Tribunal Superior de Justicia con dos salas. El dictamen original se inspira, declara un diputado de la comisión, en la Constitución de Colombia, y considerando el carácter constituyente del Congreso establece que éste debe nombrar a los ministros del tribunal. El tribunal debe regirse, se aprueba, por los artículos del título 4, y 1 del 5 de la Constitución española, formándose con dos salas en lugar de una como lo proponía la comisión.

Un singular acuerdo toma el Congreso cuando resuelve que, como cuerpo, no asistirá a la procesión de *Corpus* en la catedral.

* * *

Desde la proclamación de Iturbide dejan de asistir al Congreso Fagoaga y Sánchez de Tagle. El arzobispo Fonte discretamente se aleja de México y se embarca a La Habana por Tuxpan. Hipólito Odoardo también se embarca a Cuba, para regresar después de la caída de Iturbide. El éxodo de españoles es tan importante que Iturbide informa al Congreso a través del ministro de Hacienda, "que existen en la actualidad en La Habana 60 millones de pesos en moneda y pasta, sacados del imperio en esta última época; y cree S.M.I. que esta considerable extracción merece toda la atención del Congreso", según el acta de 24 de mayo. La comunicación del gobierno se turna a la comisión de Hacienda. Mas el hecho es efecto del artículo 15 del Tratado de Córdoba, en el que rousseaunianamente se estableció, conviene recordar: "Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno o pasado el país a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna a donde le convenga, sin que haya derecho para privarle de esta libertad, a menos que tenga contraída alguna deuda con la sociedad... o por delito o de otro de los modos que conocen los publicistas; en este caso están los europeos avecindados en Nueva España y los residentes americanos en la Península...".

Ante el hecho consumado la impotencia del Congreso es total, aunque se podría observar que el principio sancionado en el artículo no funda la conclusión, pues el país no había alterado su forma de gobierno ni pasó, al menos hasta el rechazo del Tratado de Córdoba por España, a poder de otro príncipe. El día anterior el Congreso había ratificado la libertad de las fuerzas españolas sublevadas en Tlatlanquitepec y Juchi, para que se embarcaran a España. Mantener como rehenes fuerzas españolas es también la más riesgosa de las soluciones para negociar el hipotético reintegro de los fabulosos 60 millones, agravada la situación una vez proclamado Iturbide. Pasar el insoluble asunto al Congreso es crear otro punto de tensión.

Alamán califica de exagerada la cantidad de 60 millones. Quizá Iturbide la difunde para justificar las medidas que propondrá. Exagerada o no, él prohíbe la extracción de dinero, y ordena que se deposite el que ya existe en Veracruz. El Congreso debate en los últimos días de mayo y los primeros de junio el destino que debe darse a esas cantidades, concluyendo por aprobar que antes de tocarlas se exija un préstamo de 600 000 pesos a los consulados de México, Veracruz y Guadalajara, y de no obtenerlos por carecer de ellos los consulados, se repartiesen entre particulares con fortunas y corporaciones religiosas y civiles, prefiriendo afectar los caudales secuestrados en Veracruz. Mientras se debate el asunto se autoriza a los propietarios del dinero detenido en Veracruz que lo retirasen, y cuando se pretende disponer de él ya no existe.

* * *

En tanto emigraban numerosos españoles, regresaron a México diputados a las Cortes de Madrid. Alguno, como Lorenzo de Zavala, a tiempo de ser elegido diputado por su provincia. Otro, Miguel Ramos Arizpe, intentando infructuosamente ser admitido previa anulación de una elección, o como suplente.

Fechada el 18 de marzo, mas circulando poco antes de la proclamación de Iturbide, aparece impresa en México la *Idea general sobre la conducta política de D. Miguel Ramos de Arizpe, natural de la provincia de Coahuila, como diputado que ha sido por esta provincia en las Cortes generales y extraordinarias, y en las ordinarias de la Monarquía española desde el año de 1810 hasta el de 1821*, de la que es autor él mismo pero que firma un supuesto D.V.L.A.

Un antecedente, entre tantos, le precede y prestigia. Por real orden de 4 de mayo de 1814 el ministro Pedro Macanaz había instruido al general Francisco Eguía que "sin pérdida de tiempo ni diligencia... sean arrestados simultáneamente y puestos sin comunicación los sujetos cuya lista acompaño". Como consignamos en la Parte primera, en la lista figuraba, al lado de los más ilustres liberales, el nombre de Miguel Ramos Arizpe. En la *Idea*, Ramos Arizpe menciona el suceso. Pero aquí interesa su referencia a los días de la consumación de la independencia. En mayo de 1821 están en Madrid la mayoría de los diputados mexicanos, "de quienes exigió Ramos Arizpe le comunicasen todos los conocimientos de que por su ausencia de once años... debía carecer". Es entonces cuando "llegó la noticia de haber dado el noble grito de Iguala el *hijo predilecto* de México Don Agustín de Iturbide". Para fijar la opinión pública confundida Ramos Arizpe escribió la *Carta a un americano sobre la forma de gobierno de Nueva España*—que se reproducirla en México en ese mismo año de 1821. La *Idea* contiene amplios párrafos de ella.

La *Carta*, escrita y publicada *por un diputado a Cortes en Madrid*, no podía proponer la independencia absoluta, menos la republicana, si Ramos Arizpe lo era ya. Tampoco menciona Ramos Arizpe el voto particular que adicionó a la *Exposición de los diputados de Ultramar* presentada a las Cortes el 25 de julio de 1821, y en el que unido a José María Couto proponía que las delegaciones del Poder Ejecutivo real en América "se depositara en personas distinguidas... y que merezcan la plena confianza de S.M., excluyendo por ahora las personas de su real familia...". La *Idea* se escribe y publica cuando la independencia se ha consumado y se presume la vigencia del Tratado de Córdoba con un emperador Borbón.

Tratándose de Ramos Arizpe conviene recordar la carta que dirigió el 15 de septiembre de 1821 desde París a Lucas Alamán, negando estar vinculado con la intriga de Alfonso Mancilla de Teruel, conde de Moctezuma, para intentar su coronación en México. "En las actas de las Cortes consta —escribió— que no quiero que vayan los Sres. infantes de delegados —a las Américas—; ¿y había de llevar a un Moctezuma de emperador? Yo no juro por dos. Por lo que V. me dice, que pretenderá derivar sus derechos de su abuelo Moctezuma, digo por decir algo: que de éstas y de peores partes han querido deducir derechos semejantes en todos tiempos. El mundo ha de ser mundo, y el hombre que piense liberarlo de todos los males antes de la segunda venida del Mesías, se engaña; a lo más que podemos aspirar es a disminuir los que existen... Esto he procurado yo en cuarenta y siete años de edad... y más los once que he tenido por obligación hacerlo... Puede V. asegurar a todos, que si no bastan las pruebas que les

he dado de consideración a la opinión de la mayoría, que me exijan lo que quieran, pues siempre obraré por lo que la mayoría con conocimiento y libertad opine".[21]

La profesión de fe liberal no está exenta de un peyorativo matiz antimonárquico que cede a una contraria opinión mayoritaria.

Ramos Arizpe es consecuente en su actitud, y en la *Carta* de 1821 a un americano se refiere a quienes proponen la independencia absoluta: "La idea de independencia de un país respecto de otro es fácilmente conocida y apetecida hasta del más ignorante de sus habitantes; mas la idea de libertad civil no está igualmente al alcance de todos. De aquí nace que muchos se alucinen con la idea brillante de dependencia sin detenerse a examinar si al conseguir ésta aseguran aquélla sin la cual nada importa la independencia. Tú no te alucines; sin la libertad nada aprovecha la independencia". En Europa muchas naciones son independientes, "pero casi siempre esclavas. Para que Nueva España no sufra igual suerte, es necesario que sus buenos hijos se apliquen a adquirir y alimentar los conocimientos...: que mediten y trabajen sobre el estado de civilización de su país, haciéndose cargo de los hábitos aun de las preocupaciones de sus habitantes; que tomen en cuenta las relaciones que Nueva España tiene y debe conservar con el resto del continente americano, con la Europa y todo el mundo..." y concluye: "Temo que la política española rehuyendo como siempre entrar en las grandes cuestiones de política práctica y ocupándose en meras teorías, dé lugar a que Nueva España le excuse el trabajo y le arrebate como de las manos, la gloria de haber mejorado su forma de gobierno según lo exigen la naturaleza, su población, su riqueza y su ilustración. Iturbide ha lanzado el grito de independencia. Aún no sabemos los resultados de su empresa...".

Dentro de España una obligada ambigüedad recata la opinión última de Ramos Arizpe, y a su regreso a México, en la *Idea* y escribiendo en tercera persona expone su conducta, en la que tuvo "por único objeto de todos sus afanes y trabajos el verla —a Nueva España— independiente... de suerte que jamás haya en América otra ley que la voluntad de su Patria".

No obstante su declaración a Alamán de que siempre aceptará la opinión de la mayoría, no elogia el desenlace monárquico de la independencia de México. La reticencia de Ramos Arizpe no contribuye ni al iturbidismo ni al borbonismo que se enfrentan, ni a la exaltación de Agustín I.

Santa Anna, ya lo citamos, había escrito a Iturbide sobre su proclamación en la que por fin *el cielo benigno*, accedió "a los ruegos de los Ministros del Santuario que clamaban por el acierto de nuestros dignos Diputados", y había presentado a Iturbide como *el iris de la paz*. Pérez Memén registra minucioso las adhesiones del clero a la proclamación, y su apoyo a la consolidación del imperio.[22]

A la consagración solemne del emperador el 21 de julio asistirían, como consagrante el obispo de Guadalajara, Ruiz de Cabañas, acompañándole en los oficios los de Puebla, Oaxaca y Durango.

El liberal Ramos Arizpe, los borbonistas constitucionales y los republicanos como Múzquiz y el doctor Mier, deben enfrentarse al emperador apoyado por los brazos religioso y militar del antiguo régimen que subsisten en la nación independiente.

[21] Reproducida por Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 955-956.

[22] Fernando Pérez Memén, *op. cit.*, cap. IV.

3

EL CONGRESO FRENTE A AGUSTÍN I

El 24 de mayo comienza el Congreso a ocuparse del ceremonial de la coronación. La *Gaceta* lo publicará el 16 y 17 de junio, adicionándolo el 20.

El 25 de mayo se discute el nuevo cuño de la moneda, si debe llevar una orla de tulipán o de magueyes, su peso y ley, y si el emperador debe esculpirse con el torso desnudo o no.

No nos demoraremos en esos días que parecen ser un paréntesis en el conflicto y en el desconcierto acentuado ante la proclamación. La creación de la Orden de Guadalupe, aprobada por la Junta Provisional, somete sus estatutos al Congreso, que la ratifica. Son nombrados Prelados Grandes Cruces de ella cinco obispos y el arzobispo que, incluso de Centroamérica, dieron su adhesión a la independencia. La distinción no alcanza al doctor Pedro Fonte. Entre los Caballeros Grandes Cruces, el general Guerrero figura al lado del general García Conde. Entre los de número, Nicolás Bravo y Santa Anna. La lista es larga y aparece en la *Gaceta* del 25 de junio.

Para precaver las ambiciones de una monarquía electiva se decreta el 22 de junio la sucesión hereditaria en la familia de Iturbide.

La adición al ceremonial, aparecida en la *Gaceta* el 20 de junio, contiene la lista de quienes forman la *familia imperial*; ayudantes de S.M.I., capellán mayor, predicadores, limosnero mayor, gentiles hombres de cámara, médicos, caballeros pajes de S.M.I., camarera mayor de la emperatriz, damas honorarias, etcétera.

En las comisiones aprobadas en el Congreso para acompañar a los emperadores a la coronación figuran iturbidistas y borbonistas, y hasta Melchor Múzquiz y Carlos María de Bustamante.

Rafael Heliodoro Valle hace una viva reseña de la celebración del 27 de julio recogiendo las noticias contemporáneas. Entre la concurrencia andaba el general D'Alvimar, agente francés recién liberado de la prisión, y quien tuviera relaciones con don Miguel Hidalgo antes de iniciarse la guerra de independencia en 1810. La ausencia del ministro de Colombia, Miguel Santa María, es notoria.[23]

Las vestiduras imperiales "se imitaron de las estampas que pudieron haberse de la coronación de Napoleón, y una modista francesa, que se decía baronesa, se encargó de hacerlas", informa Alamán.[24] Se tradujo, adaptándolo, el ritual romano de las coronaciones.

Miguel Beruete cuenta en su *Diario* que Iturbide, con uniforme de su regimiento de

[23] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 586; R.H. Valle, *op. cit.*, p. 75.

[24] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 579.

Celaya y no con el de Generalísimo Almirante, se trasladó a la catedral en carruaje.[25] El *petite caporal* de la revolución es figurado por el antiguo coronel realista. Napoleón había muerto un año antes, el 5 de mayo de 1821, en el peñón de Santa Elena, pero los "*Cien Días*, el *Memorial de Santa Elena*, las *Memorias del Emperador*... eran las obras que dirigían la política del nuevo gabinete; éstas eran el Manual de los Cortesanos", escribe Zavala. En el espejismo, Pío VII será representado por el obispo de Guadalajara, el doctor Juan Cruz Ruiz de Cabañas.

Para la ceremonia de la coronación se solicitan en préstamo joyas empeñadas en el Montepío de México, a lo que su director no accede. Otros las facilitarían, y al ser devueltas, escribe epigramático Alamán, "las coronas se desbarataron antes que el imperio".[26]

No nos demoraremos en el episodio, que puede embelesar al pueblo y a los criollos adictos que participan en la fundación de un imperio ostentosamente menesteroso.

"Daba mucha importancia a la celebración de este acto el clero para el cual la proclamación de Iturbide era el segundo esfuerzo después de frustrado el de la independencia —escribe Alamán—, y creía asegurarlo sancionando la religión lo que había sido obra de un levantamiento, aunque después confirmada por tantas disposiciones del Congreso...". El primer esfuerzo frustrado de independencia al que alude Alamán, no es sino el fraguado en La Profesa y proclamado en el Plan de Iguala. Pero ya en este segundo esfuerzo, el de la proclamación, Monteagudo "y casi todos los eclesiásticos de aquella nación —España— no tomaban parte", excepto el clero regular y las jerarquías eclesiásticas.[27]

* * *

Pocos días antes de la coronación, el 15 de julio, el doctor Mier ocupa su lugar en el Congreso como diputado por Monterrey. Según Bustamante, desde la salida de Mier de Veracruz, y por sus indiscretas manifestaciones sobre la proclamación de Iturbide, se le comenzó a formar secretamente una causa que se envió al emperador. "Un gran bien recibió la patria en este día por el Dr. Mier, sin saberlo éste", escribirá Bustamante de ese 15 de julio en su *Diario*.

¡Una leyenda viva está presente.

Después de ser recibido en el Congreso, el doctor Mier dice su primer discurso: "Doy gracias al cielo por haberme restituido al seno de la patria al cabo de 27 años de una persecución la más atroz, y de trabajos inmensos". Agradece su elección al Nuevo Reino de León, y al Congreso el haber obtenido su libertad. "Lo que ciertamente poseo —declara—, es un patriotismo acendrado: mis escritos dan testimonio, y mi diestra estropeada es una prueba... Temo haber llegado tarde, y que los remedios sean tan difíciles como los males son graves. No obstante, el emperador se ha servido oírme dos horas y media, y me ha prometido que cooperaría con todo su esfuerzo a cuantos medios se le propusieron para el bien de nuestra patria. Yo estaba alarmado sobre la existencia de la representación nacional; pero me aseguro, que cuanto se decía contra ella era una calumnia, y que estaba resuelto a sostener el Congre-

[25] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 134.
[26] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 579.
[27] *Ibid.*, p. 578.

so... Yo no pude ocultarle mis sentimientos patentes en mis escritos, de que el gobierno que nos convenía era el republicano, bajo el cual está constituida toda la América del Sur, y el resto de la del Norte; pero también le dije que ni podía ni quería oponerme a lo que ya estaba hecho, siempre que se nos conservase el gobierno representativo, y se nos rigiese con moderación y equidad. De otra suerte, él se perdería, y yo sería su enemigo irreconciliable; porque no está en mi mano el dejar de serlo contra los déspotas y los tiranos. Sabría morir, pero no obedecerlos".

El legendario prestigio, las erudiciones y la candoroso osadía de fray Servando pudieron o no impresionar a Iturbide en su larga entrevista, en la que éste debió usar sus mejores dotes persuasivas para atraerse o tranquilizar al autor de la beligerante *Memoria político-instructiva.* "Me oía con mucho gusto, y me hubiese concedido cuanto le hubiese pedido..." informa Mier al Ayuntamiento de Monterrey en su carta del 21 de agosto. Iturbide ciertamente no le dejó imaginar siquiera que había recibido de Veracruz documentos en su contra.

El doctor Mier regresa a México como diputado al Congreso que debe constituir a la nación en ejercicio de su soberanía, Congreso cuyo reconocimiento juró de nuevo Iturbide el día de su proclamación. Mas qué puede significar ello a un hombre que al prestar ese juramento como emperador demandaba el apoyo del Congreso para "conducir nuestros súbditos a la felicidad (porque) ellos os harían el más grave cargo si me abandonáis".

Las palabras del doctor Mier en el Congreso no impugnan pero no reconocen la legitimidad de la proclamación. Le había dicho al emperador, declara públicamente, "que no podía ni quería oponerme a lo que estaba hecho". El futuro es condicional y conminatorio. "Nosotros no hemos estado once años tiñendo con nuestra sangre los campos de Anáhuac por conseguir una independencia inútil; la libertad es la que queremos; y si no se nos cumple, la guerra no está concluida; todos los héroes no han muerto...".

El discurso de Mier está concluido. El resto de lo que diga será anecdótico, desde su batallar por la independencia en Londres y acompañando a Javier Mina en su expedición insurgente a México —anécdotas ilustres—, hasta su siempre reiterada narración y justificación del sermón de 12 de diciembre de 1794 —origen de sus persecuciones y desgracias—, sobre la aparición guadalupana y la predicación del Evangelio en América por Santo Tomás.

"Jamás se había oído un razonamiento de esta clase —escribirá Bustamante—, por el bello modo de decirlo, por la variedad de asuntos que en él se mezclaron, y por la compasión que naturalmente inspira un hombre de bien, hecho el juguete de la fortuna...".[28]

En el acta de la sesión consta que "el pueblo, del cual estaban llenas las galerías, aplaudió el discurso del Dr. Mier, de la misma manera que lo había vitoreado a su entrada al Congreso".

"Este eclesiástico había adquirido cierta celebridad por sus padecimientos y por algunos escritos indigestos que había publicado en Londres sobre la revolución de Nueva España", escribe Zavala, tan poco afecto a Mier. Pero da fe de su actitud. "Desde el momento de su llegada a México se declaró públicamente enemigo de Iturbide... No faltaron quienes dijeron que Dávila le había dejado en libertad con el objeto de lanzar este elemento más de revolu-

[28] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 98-99.

ción entre los mexicanos. En efecto —reflexiona—, por tal debe reputarse este hombre cuya actividad era igual a su fecundia y osadía. Hablaba del emperador con tanto desacato, ponía tan en ridículo al gobierno que el tolerarle hubiera sido un principio de destrucción más entre tantos como existían. Declamaba en el Congreso, en las plazas, en las tertulias y predicaba sin embozo provocando la revolución contra la forma adoptada".[29]

* * *

En el Congreso se presenta en esos días, antes y después de la coronación, el proyecto de Reglamento Interior del Congreso, cuyo debate se iniciará el 3 de julio.

Además, el Congreso ha venido tratando asuntos que no pueden ser gratos al emperador. El 2 de julio se da cuenta con una exposición del brigadier don Nicolás Bravo solicitando al Congreso que declare "que en sus operaciones anteriores contrajo méritos para la patria, porque no manchó su conducta con acciones degradantes, y porque fueron dirigidas a la libertad y emancipación de la América". El dictamen de la comisión es favorable: primero: "Que se calificasen de buenos los servicios hechos por el brigadier Bravo desde el año de 1810; segundo: Que se (le) declarara, en consecuencia por benemérito de la patria".

Ningún diputado se opone. Mas Argandar expresa que "es necesario no se olvide de los contraídos por los Guadalupes Victorias, Guerreros, Hidalgos, Morelos y demás beneméritos caudillos de la independencia". Andrade, en apoyo del dictamen menciona la libertad que dio Bravo a cautivos de las fuerzas españolas, entre los que estaba un hijo suyo, cuando recibió la noticia de la ejecución de su padre don Leonardo por orden del virrey Venegas. Bustamante exalta la misma acción.

Múzquiz informa por la comisión que en pocos días se presentará el dictamen sobre los "caudillos a quienes el merecimiento hacía acreedores".

Llave "recomendó también la memoria de Morelos y demás jefes de la independencia, expresando que era tanto más digna de consagrarse su memoria, cuanto que fueron los primeros que hicieron resonar el grito de la libertad; rompieron contra un gobierno entonces más poderoso, y que tuvieron que luchar contra el tribunal de la inquisición". Y si se manifestó la independencia "informe y monstruosa, eso está en el orden de las cosas... Así que me parece —expresa—, que no pudiendo ser la revolución en su principio, sino lo que debía, los héroes que la acaudillaron no son por eso menos dignos de la gratitud nacional". El dictamen en favor de Bravo se aprueba, y también que el decreto "se entregue al interesado por el presidente del Congreso, presentándose (Bravo) en su seno, sin embargo de darse su curso por el gobierno".

En la sesión de 3 de julio se urge a la comisión de Constitución que termine sus trabajos.

La reivindicación de la insurgencia es más que una implícita o tangencial actitud del Congreso frente al trono ocupado por un hombre que la combatió y que no disimula ni excusa su desdén por ella.

No obstante, la *Gaceta* no omite el dictamen de la comisión de Premios del Congreso,

[29] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 135.

y el 13 de agosto publica el firmado el 7 de julio, "sobre los que corresponden a los primeros caudillos de la libertad de este Imperio, y a cuantos hicieron verdaderos servicios en favor de ella desde su proclamación en el pueblo de Dolores". A la comisión se le había pedido que en el reglamento de premios se les mencionase honoríficamente y se les premiase. La comisión convendría en ello, expresa, "si no temiera exponer su dictamen a la censura de los que mirando la primera revolución como distinta de la segunda en sus objetos y motivos, desconocen el influjo que tuvo en los rápidos progresos y éxito glorioso de ésta, a cuyos autores atribuyen exclusivamente todo el mérito de haber hecho la libertad de la patria...". A los que intervinieron en la primera, por considerarlos algunos "perturbadores del orden público", se les descalifica para merecer "que la patria decrete a su memoria los honores con que premia las acciones heroicas de sus ciudadanos...". La comisión los examinará con imparcialidad.

Debe verse si en aquel tiempo era justo hacer la guerra y si ésta era el único medio "de obtener las mejoras que exigía la situación de la patria...". La comisión hace historia. Al año de 1810 precedió una disolución de los lazos con España, al desaparecer el poder real por la renuncia del rey y los príncipes en Napoleón. En España "se creyeron autorizados a resistir a Bonaparte". Pero lo que en la península era un derecho "se miraba en América como un crimen de rebelión". Se elogia al virrey Iturrigaray que proyectó reunir un Congreso del reino de Nueva España, y a quien depusieron con violencia los españoles. Frente a la violencia española la guerra era justa.

La idea de la revolución en sí y su formulación verbal son de una modernidad insospechada: "...el mayor, el más precioso beneficio de la guerra fue el sacudimiento general que excitó en los espíritus adormecidos... Todas las nociones sociales, todos los sentimientos generosos que después se han desarrollado tan portentosamente, deben su origen a aquel impulso que recibió la nación en el estado de su mayor inercia".

Y ante el emperador que se ha proclamado a sí mismo autor y protagonista de la independencia, la comisión declara: "Sin las innumerables batallas en que mil veces vimos abatido el orgullo español, ¿habríamos con tanta confianza intimado al Conde de Venadito que reconociera a nuestra independencia?".

La comisión concluye proponiendo al Congreso: "Se exhumarán las cenizas de los beneméritos expresados —Hidalgo, Allende—, añadiendo las del Sr. Aldama, que serán conducidas y depositadas juntamente con las de los señores Morelos y D. Leonardo Bravo en una caja, cuya llave se custodiará en el archivo del Congreso". El lugar en donde fueron sacrificados se cerrará con una verja y se erigirá "una sencilla pirámide que trasmita a la posteridad la memoria de su heroísmo. La caja que encierre los venerables restos de los Padres de nuestra santa Independencia se trasladarán el 17 de septiembre próximo con toda publicidad y pompa dignas de un acto tan solemne, a la Catedral, en donde se celebrará un oficio de difuntos con oración fúnebre". Las tropas de la guarnición de México les rendirán honores. Se premiará un cuadro con los jefes de la emancipación para ser colocado en el Congreso. Sus nombres se escribirán con letras de oro en el salón de éste. El dictamen se presenta al Congreso y se aprueba imprimirlo, agregando los nombres de Mariano Abasolo y Mariano Jiménez.

La reivindicación de la insurgencia es la de la revolución americana en un no soslayado

enfrentamiento con el emperador cuyo prestigio militar se ganó combatiéndola. La comisión no prescribe cuál será la participación de Iturbide en las ceremonias, con las que implícitamente lo desafían.

El proceso reivindicatorio en el Congreso no se limitará a este punto aunque toque otros ya resueltos.

El 14 de agosto, la comisión de Asuntos Eclesiásticos del Congreso presenta un dictamen sobre la proposición del canónigo José de San Martín —quien se había unido a Morelos en Oaxaca y había sido nombrado vicario general del ejército insurgente—, para que, en resumen, "se den las providencias convenientes a fin de que se quiten de los templos los antiguos edictos de la extinguida inquisición, en que se condena por herética la sentencia de que en el pueblo reside la Soberanía nacional, y que se diga al gobierno que excite a la potestad eclesiástica, para que haga quitar así mismo otros edictos prohibitivos de muchos libros que no se conformaban con la política del gobierno español, y que se arregle cuáles deban permanecer prohibidos en nuestro actual sistema".

Es el doctor Mier quien primero habla apoyando el dictamen. Una reserva hace respecto a los libros notoriamente antirreligiosos, aunque observa que son bien conocidos "y que no por prohibir éstos, se había de privar a la nación de la lectura de otros muchos, que sin mérito se hayan prohibidos en los referidos edictos".

El debate se ocupa de los libros prohibidos "por espíritu de partido", como señala Bustamante.

Nos interesa más la cuestión sobre la soberanía, en la que se propone que no sólo se quiten los edictos sino que se mande "que en las escuelas, colegios, y universidades se hiciese que sus alumnos jurasen el sostener siempre la soberanía del pueblo; que por este método se conseguiría afianzar más y más a los hombres desde su juventud en esta importante verdad", según lo expresa La Llave.

José del Valle, centroamericano, objeta porque es "más dañosa todavía la intolerancia política que la plena libertad"; la causa de los trastornos y las guerras es, dice, el "que el sistema reinante prohibía el que se hablase y escribiese en otro idioma que no fuese el conforme a sus ideas". Exceptúa las obras antirreligiosas. El artículo se aprueba en los términos propuestos: "Que se quiten todos los edictos insultantes que bárbaramente condenaron como herética la sentencia o axioma de que la soberanía reside en el pueblo".

* * *

Desde Liorna, Iturbide se quejará con amargura del Congreso, en el que si había "hombres verdaderamente dignos, sabios, virtuosos", estaban confundidos con "una multitud de intrigantes, presumidos y de intenciones siniestras". En ocho meses, desde su instalación hasta su reforma, no se ocupó de su objeto principal que era "formar la Constitución del imperio: ni un solo renglón se escribió de ella". Se ocupaba, censura, de asuntos sin importancia, "y si alguno versó sobre materia digna, fue a lo menos impertinente... ¿Qué honores fúnebres debían hacerse a jefes de la insurrección que ya habían fallecido? ¿Cómo había de jurar el arzobispo? ¿Quién había de nombrar el Supremo Tribunal de Justicia y reclamar un fraile apóstata preso en el castillo de San Juan de Ulúa? ...Ni reglamento interior se formó;

de aquí es que llegó a ser el oprobio del pueblo y a caer en un estado de abyección y abatimiento".[30]

Excepto el juramento del arzobispo, menciona tres de los asuntos "impertinentes" que más le herían, de los que sólo uno demandaría un amplio debate —el del nombramiento de los ministros del Tribunal Superior de Justicia.

En cambio, Iturbide no menciona su iniciativa de 4 de agosto dirigida al Congreso para crear, en la ciudad de México y en las capitales de las provincias, tribunales especiales, integrados por dos oficiales del ejército y un letrado, nombrados por el emperador, para conocer de los delitos "de sedición y conspiración contra el estado, según se determine por el soberano Congreso". La iniciativa va acompañada de una consulta del Consejo de Estado fechada el día anterior, y la motiva la amnistía decretada por el Congreso "en favor de los que por cualquier modo habían manifestado opiniones contrarias a la legitimidad de la augusta proclamación de V.M.", según expresa el Consejo de Estado. Mas las noticias dadas a éste por Iturbide, "y las agitaciones en que se ha visto la capital en estos últimos días, le han hecho ver (al Consejo) los males terribles que amenazan a la patria, y que la publicación de la amnistía decretada sería un embarazo para evitarlos, si al mismo tiempo no se toman medidas enérgicas, extraordinarias y eficaces". El Consejo se extiende en consideraciones: "el soberano Congreso —dice— tiene demasiadas luces para comprender, que cuando la sociedad peligra, las instituciones liberales, la libertad individual, la propiedad y todos los derechos más preciosos son anonadados, y un gobierno despótico y tiránico vendrá a reemplazar al moderado constitucional...". En la consulta se menciona "ese partido sordo, que con mano oculta trabaja en volvernos a atar al carro español...". El actual sistema es impotente "para corregir desórdenes y detener el torrente de desgracias que amenazan al estado", y de aquí la necesidad de crear "un tribunal especial más autorizado, para defender con más suceso la libertad de todos...". Los tribunales especiales ya existen en el comercio, la minería, en guerra y marina, aun después de promulgada la Constitución, cuyo artículo 308 autoriza al Congreso a suspender las formalidades judiciales que en ella se establecen. Por todo, el Consejo estima prudente que simultánea a la publicación de la amnistía se haga la del establecimiento del tribunal especial, con la suspensión de los artículos del capítulo 3 del título 5 de la Constitución.

El artículo 3 de la iniciativa establece: "Son reos de sedición todos aquellos que maquinen contra la independencia y libertad política de la nación, contra el Gobierno establecido, contra el emperador, contra el congreso nacional, y contra la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones". En el artículo 5 se dispone que las apelaciones contra los tribunales especiales se harán ante el capitán general de la provincia, quien "fallará la sentencia". Si confirma la primera instancia será firme la dictada por el capitán general, y si no, la conocerá en última instancia el tribunal de guerra. El emperador designará en la ciudad de México "un jefe encargado únicamente de velar la seguridad pública y ejercer la más activa policía".

La consulta de Consejo de Estado la firma en primer lugar el general Pedro Celestino Negrete.

La iniciativa la recibe el Congreso el 7 de agosto. Inmediatamente después de su lectura el doctor Mier declara que "se andaban reuniendo firmas, y provocando a los ciudadanos pa-

[30] *Manifiesto de Liorna*, pp. 252-253.

ra disolver el Congreso, y que sabía que el *marqués del bodegón* con una cuadrilla maquinaba el asesinato de doce individuos". Portugal ratifica a Mier.

La iniciativa pasa a las comisiones reunidas de Constitución y Legislación. El 14 de agosto las comisiones presentan su dictamen desfavorable, y el diputado Argandar, antiguo insurgente, felicita a la comisión y al Congreso "por la entereza con que estos dignos diputados sostenían los justos derechos del pueblo".

* * *

El 27 de agosto, el presidente del Congreso, José Cirilo Gómez de Anaya, informa en sesión secreta de las medidas que tomó "con motivo de las ocurrencias de la noche anterior", cuando fuerzas militares dirigidas por el general Echávarri aprehendieron a varios diputados. Gómez de Anaya pidió "a la una y tres cuartos de la madrugada", explicaciones por escrito al capitán general de la provincia, general Luis Quintanar. Esa misma mañana del 27, Quintanar contestó que habiendo recibido órdenes del emperador por conducto del ministro de Estado y Relaciones Exteriores, le turna a éste el oficio de Gómez de Anaya. Por su parte, el antiguo diputado al Congreso de Chilpancingo, José Manuel Herrera, secretario de Estado, contesta al presidente del Congreso que en efecto se han verificado arrestos de diputados "con arreglo a los artículo 170 y 171 de la Constitución, como complicados en la conspiración que estaba al estallar contra el actual sistema de gobierno, según resulta evidentemente comprobado en la causa formada con que se dará cuenta al soberano Congreso... luego que se concluyan las diligencias que activamente se están practicando...".

Los diputados reunidos en ese momento son 80. Los diputados presos la noche del 26 eran Fagoaga, Echenique, Obregón, Carrasco, Sánchez de Tagle, Lombardo, C.M. Bustamante, Echarte, Terrazo, J.J. de Herrera, el doctor Mier, y los centroamericanos Valle, Mayorga y Zebadúa. Ese mismo día se tomará preso a Milla. Días después se aprehende a Juan Pablo Anaya, y entre los que no son diputados a Juan B. Morales, Anastasio Zerecero e Iturribarría. De los diputados, cuatro son españoles.

* * *

Aludimos al hecho para dejar constancia de él en el cuadro de esos días. El dictamen de las comisiones de Constitución y Legislación sobre la iniciativa del gobierno para crear los tribunales especiales, que se presentó al Congreso el 24 de agosto, volverá al Congreso el 13 de septiembre, reproduciéndose en el acta de este día. De los firmantes del dictamen, Bustamante y Valle están presos.

Las comisiones "reconocen el celo que ha promovido" la iniciativa, pero examinándola y meditándola, "el proyecto de ley que se propone parece: 1. Contrario a los principios luminosos de los autores que han escrito con más filosofía. 2. Contrario a la opinión pública que deben respetar los gobiernos. 3. Contrario a la Constitución española que se ha mandado observar hasta que se publique la del Imperio. 4. Contrario a la razón que debe ser la legisladora de los pueblos. 5. Contrario a los intereses de la nación mexicana en la posición actual en que se halla".

Las comisiones adelantan la conclusión del dictamen que pasan a fundar, primero en la autoridad de Montesquieu y Constant. "Privar a un ciudadano del beneficio de sus jueces naturales, es imponerles una pena... Las fórmulas son una salvaguardia, el abreviar o destruir esta salvaguardia es una pena, y si se impone a un acusado, se da a entender que es criminal antes del juicio... Cuando se crearon en Francia comisiones militares para juzgar a los conspiradores no hubo en la sucesión de las circunstancias individuo alguno con poder bastante para creerse a cubierto... Los terroristas fueron obligados a comparecer en mayo de 1795, los realistas en octubre del mismo, y la misma escena se repitió en el año siguiente...". Las citas de Constant se presentan apodícticas.

"Las Constituciones de Francia —se expresa en el dictamen— declararon como artículo fundamental que ningún ciudadano puede ser privado del derecho de ser juzgado por sus jueces ordinarios; y cuando Bonaparte estableció tribunales especiales, la nación entera reclamó (contra) su establecimiento".

En España un artículo constitucional "prohíbe juzgar a un ciudadano por comisiones, y manda que todos sean sentenciados por el tribunal competente, designado previamente por la ley. Las circunstancias de España han sido más críticas que las de México", el sistema constitucional amenazado en lo interno y por naciones extranjeras. No obstante, en dos ocasiones las Cortes negaron la suspensión de las formalidades prescritas para el arresto de ciudadanos. Las constituciones de América no establecen tribunales especiales. Se acude a la Constitución española, que rige, citando los artículos que establecen las garantías del proceso legal. El fuero de los ciudadanos es uno, excepto para militares y eclesiásticos en los límites de sus jurisdicciones.

El dictamen compara la iniciativa del gobierno con el sistema constitucional, fijando la contradicción de ambos y desarrollando una argumentación contra los tribunales especiales.

"La existencia misma del gobierno, su conservación y crédito, exigen que no se apruebe el proyecto de ley que propone. Las comisiones opinan así —concluyen—, porque desean que se asegure la causa justa de la independencia de esta América: porque desean que el gobierno tenga la opinión que necesita para consolidarse; porque desean que este Congreso sea protector de los derechos de la nación que lo ha elegido". El Congreso se ocupa ya, en sus comisiones, de preparar un proyecto útil "para el escarmiento del crimen y conservación del orden".

Más que los argumentos son los puntos que los inician los que proponen el enfrentamiento con Iturbide, al desautorizar su iniciativa en términos de ostensible menosprecio, y aprobando el dictamen después de que han sido aprehendidos varios de los diputados. Ya no la reconciliación, sino el lograr un temporal *modus vivendi* de hecho entre Iturbide y el Congreso es la cuestión inmediata, previa a la más inquietante de la Constitución que se llegue a sancionar y respecto a la que el emperador no tendrá derecho alguno de veto.

4

LOS PROYECTOS DE CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA
ANTONIO JOSÉ VALDÉS. MIGUEL GURIDI Y ALCOCER

En su manifiesto de 1823 desde Liorna, su verdadero memorial de agravios, Iturbide acusa al Congreso de que siendo su objeto la formación de la Constitución "ni un solo renglón se escribió de ella". Como en algunos otros puntos del documento, no se trata de opiniones sino de hechos, Y la afirmación de Iturbide no es cierta.

Bustamante, refiriéndose a la creación, en mayo de ese año 1822, del Consejo de Estado y del Tribunal Superior de Justicia, los califica de "armazón o esqueleto del imperio que se fundaba para darle un carácter de tal, y consultar su permanencia... Sin embargo —registra—, vio la luz (aunque demasiado tarde) un proyecto de Constitución presentado a la comisión de ella por uno de los individuos que la componían, que si inmediatamente se hubiera adoptado aunque con carácter de supletorio, habría dado alguna duración al imperio". Se cree, según Bustamante, que su autor fue Miguel Guridi y Alcocer, diputado que fue en las Cortes de Cádiz, y uno de los más distinguidos entre los americanos. Bustamante no refuta la afirmación de Iturbide, pero dice "que en este proyecto hay buenas ideas, y que si Iturbide hubiera aplicado el mismo conato para realizarlo que aplicó para crear tribunales que castigaran a los que atentaran contra la seguridad de su persona, habría hecho un gran bien a los mexicanos, y su caída se habría retrasado".[31]

El juicio de Bustamante en 1832 es una recapitulación sobre los acontecimientos, y no el del diputado al Congreso en 1822. Dice sin precisiones que el proyecto se presentó demasiado tarde, lo que no es exacto. El Congreso se reunió el 24 de febrero, y verificamos que el proyecto es anterior al 22 de junio —cuando se aprueba la sucesión hereditaria de la corona en la familia de Iturbide—, con una sola cita de su prospecto o discurso preliminar: "¿A qué fin abrir ahora, por ejemplo —se expresa—, una larga disertación de la conveniencia de la monarquía hereditaria sobre la electiva, cuando al discutirse los artículos concernientes, podrán explanarse difusamente?" La misma cita plantea otra cuestión que se relaciona con el tiempo en que se concluyó el proyecto. ¿Si se consideraba vigente el Tratado de Córdoba, podía considerarse sujeta a una resolución posterior del Congreso Constituyente si la monarquía, a que se llamaba a los Borbones o a quien el Congreso eligiese, sería en el futuro hereditaria o electiva? La cuestión no puede plantearse sino cuando está desechada por la casa de España la aceptación del trono de México. Esto, al menos, data la conclusión del proyecto en el mes de mayo, y antes del día 19 en el que se proclamó a Iturbide, si atendemos a otra anomalía ostensible en él.

[31] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 85.

En el discurso preámbulo se omite toda alusión al hecho de la proclamación de Agustín I. No obstante, el texto del artículo 47, con el que se inicia el capítulo tercero del título tercero, parece ser una modificación de su versión original al expresar: "El Emperador es el señor don Agustín lo. a quien a solicitud de la tropa y el pueblo nombró el Congreso nacional y han ratificado con señaladas demostraciones de gozo las Provincias, y en lo sucesivo sus herederos legítimos. Extinguida una dinastía la Nación constituirá la que más le convenga para imperar". La redacción anecdótica de la proclamación de Iturbide es evidentemente dictada por el suceso reciente. En el artículo 48 se titula al heredero de la corona *Príncipe del Imperio*, coincidiendo casi con el decreto de 22 de junio que lo llama *Príncipe Imperial*, lo que corrobora que su redacción es anterior a esa fecha.

Mas si el proyecto se modifica después del 19 de mayo para su impresión, resulta menos fácil precisar cuándo se elaboró. Sin embargo una fecha nos orienta. El 28 de marzo anterior la *Gaceta* publicó la noticia de que en La Habana estaba publicada la real orden de 7 de diciembre de 1821, y la circular que la enviaba a las autoridades civiles y eclesiásticas de ultramar, declarando que O'Donojú carecía de toda facultad para convenir en cualquier forma la independencia de Nueva España.

No es una conjetura estimar que Guridi elaboró su proyecto en abril y principios de mayo. No es éste el único proyecto cuyo texto se conoce.

Otro diputado, Antonio José Valdés, publica por su parte un *Proyecto de organización del Poder Legislativo*, cuya fecha tampoco consta en él. La ausencia de referencias a la proclamación de Iturbide, obligada después de ocurrir llevaría a presumir que es anterior a ella. En nota al fin del documento Valdés consigna: "Parece que otros señores han presentado fragmentos, tales como el poder electoral, el ejecutivo, el judicial, los que, discutidos, combinados y acordados por la comisión, formarán el proyecto de constitución del imperio".

Ciertamente se escribió más de un renglón, y no de uno sino de varios proyectos. A los aludidos por Valdés deben sumarse los restantes a que se refiere Gómez Farías en el Congreso el 3 de septiembre, cuando pide que se fije el plazo de un mes a la comisión de Constitución para presentar el definitivo. Debiendo recordarse además los parciales leídos en el Congreso el 23 de mayo por Simón Elías González: sobre un Consejo de Estado, el Tribunal Supremo de Justicia, y un Senado conservador, cuyos textos ignoramos, al igual que el primero que llegó al Congreso, el 1 de marzo, de Baltasar Ruiz, vecino de Puebla.

El que la comisión de Constitución en 1822 no llegase a formar y presentar al Congreso un proyecto definitivo lo explica la rápida sucesión de noticias y acontecimientos: el 24 de febrero se instala el Congreso; el 1 de marzo se nombra la comisión de Constitución; el 28 de marzo la *Gaceta* publica la real orden de Fernando VII desconociendo el Tratado de Córdoba; un día antes, el 27, Iturbide circula su extraña encuesta sobre forma de gobierno; un mes transcurre ya en abiertos desacuerdos entre Iturbide y el Congreso; el 30 de abril se presenta Iturbide ante el Congreso denunciando que existen traidores en él.

En la situación de emergencia que se vive, la comisión de Constitución presenta el proyecto de Reglamento de la Regencia, que no llega a debatirse por la proclamación del día 19 de mayo.

No nos preguntamos por qué Iturbide pretende ignorar la existencia del proyecto de Guridi y Alcocer, el de Valdés, y los aludidos por éste y Gómez Farías, cuando los primeros co-

rrían impresos. Sí, nos preguntaríamos por qué no manifestó interés, mediante partidarios suyos —Mendiola, Ibarra, Valdés, dentro de la misma comisión del Congreso—, no promovió un proyecto. Cualquiera conjetura, exceptó la de que el mismo Iturbide no hubiese llegado a definir su proyecto, parece incierta.

* * *

Aludamos al proyecto de Guridi y Alcocer, el primero que se conoce para México después de consumada su independencia, y consultemos algunas de las *buenas ideas* que le reconoce Bustamante, las que lo fundan. Guridi Alcocer —no tenemos motivos para no aceptarlo como autor—, comienza declarando "que no se trata de adaptar para acomodarle —a la nueva nación independiente— la Constitución de otra... Esto no carecería de olor, cuando menos —dice él—, de plegio, aunque muy disculpable en asunto en que es preciso coincidir con los demás pueblos del orbe, por ser unos mismos los derechos de todos los hombres, y unos mismos los principios de razón por que deben gobernarse". Mas conviene formar un código peculiar. Para ello "es necesario remontarse hasta el origen del derecho público... El pacto social —explica— que se supone celebrado entre la sociedad y sus miembros es el primer principio de que se deducen comúnmente las máximas del derecho público". La tesis rousseauniana no es única; otros "deducen de la semejanza de la autoridad paterna la suprema de un estado, considerando a cada nación como una gran familia y al jefe o cabeza de ella como un padre encargado de su régimen y cuidado". Sin postular cualquiera de ambas tesis es preciso, para Guridi, aceptar ciertas relaciones entre la autoridad y los individuos. "El pacto social causa en la potestad suprema su dignidad... su facultad de mandar", pues se supone que los individuos "se han despojado de su libertad natural" en beneficio de su felicidad, obligándose a obedecer la autoridad.

"La cultura del siglo ve como el origen de la legislación el pacto social, al que han acomodado sus constituciones las naciones ilustradas", para proteger sus libertades, "reduciéndolo todo a organizar los poderes con tal enlace y equilibrio entre sí", que se auxilien y no embaracen, tal como aparecen en las constituciones inglesa, francesa y española, en las de Nápoles y Portugal que las imitan, "y en las del Norte y Sur de América que han llegado a nuestras manos".

El proyecto en su primera parte, conforme a sus supuestos doctrinarios, trata de la sociedad y de sus derechos y deberes, y de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La segunda parte del proyecto se refiere a los miembros de la sociedad, y a sus derechos y deberes.

Importa en la Constitución, "que debe andar en las manos de todos y ser a un mismo tiempo código y cartilla", su claridad y brevedad, dejando para leyes especiales lo reglamentario, como por ejemplo, lo relativo a los procesos electorales, al Consejo de Estado, a los ministros del Despacho, a las juntas provinciales y ayuntamientos. como se hace en la francesa. La Constitución debe contener "lo que le es característico que son las máximas primordiales y fundamentales de la legislación y la felicidad, como por ejemplo, que las elecciones han de ser populares, dejando a los reglamentos los días y modos en que han de hacerse", y lo que no es de la sustancia de la materia. No son secundarias las calidades para elegir y ser electos, y éstas se establecen en la Constitución, considerándose la de propietarios "para afianzar el acier-

to en las elecciones, porque no hay duda que quien nada posee, no tendrá embarazo en elegir, a cualquiera, y si él mismo sale electo, sobre que no será muy grande su patriotismo, poco le importará una ley gravosa... porque nada tiene que perder". Iguala al propietario "el pobre de vasta erudición en quien sus conocimientos y raciocinio producen el efecto que sus intereses en el rico para amar a la patria...".

A esta prevención en el concurso electoral, Guridi agrega la de establecer una segunda cámara, *de revisión*, en la que "se desvaneciese la ilusión de una elocuencia seductora y se estrellase el espíritu de parcialidad o facción de los diputados" siguiendo el ejemplo de otras constituciones, la francesa y la inglesa. Pero "no conviniendo entre nosotros ni aprobándose generalmente la división de cámaras alta y baja por componerse la primera de individuos natos por razón de sus clases en las que tiene tanto influjo el gobierno, se ha tenido por más acertado que los miembros de dicha sala se elijan popularmente de entre los hombres maduros de cuarenta años para arriba, que son los que están menos sujetos a las pasiones comunes...".

Guridi arguye contra la representación por estamentos, porque el monarca influiría en ellos, y además repugnan "con la naturaleza misma del gobierno representativo" al representar algunos derechos de otros "sin su voluntad". El monarca, además puede "hacer grandes o prelados a algunos perversos que serían hechuras con que contaría". El moderado liberal que es Guridi respira en México el aire del Cádiz de las Cortes en que fuera diputado. Una vez proclamado Iturbide, estas cautas palabras del discurso preámbulo no contribuían a atenuar siquiera la falta de confianza entre el emperador y el Congreso, menos aún a suponer desaparecida la discordia.

No haremos el examen del articulado del proyecto, que es el segundo que reproducimos en el volumen de los textos de ellos. Registremos, relacionado con los sucesos del día, su artículo 17 que establece, recogiendo una disposición consagrada en todas las constituciones liberales previas de América y Europa, que los diputados no pueden "durante su diputación, ser demandados civil ni criminalmente sino ante el Tribunal del Congreso, de que habla el reglamento de su gobierno interior".

El proyecto declara, atenuándolo verbalmente, que la nación, el conjunto y reunión de los habitantes de su territorio, es "la autoridad suprema o soberana del Estado, de la que participan como miembros de ella, todos los ciudadanos que la componen, y a las que sin distinción se sujeta cada uno como súbdito, por ser inferior a ella" (artículos 1 y, 2). El doctrinario que es Guridi y Alcocer hace una pulcra distinción de los derechos individuales en el artículo 95: "Los derechos civiles son los que corresponden al hombre en razón de las leyes, así como los políticos le vienen de la sociedad y los naturales de la naturaleza". Los derechos naturales, coincidiendo con los códigos franceses de 1791 y 1793, con la Constitución de Apatzingán de 1814, y con las de Venezuela de 1811 y 1819, y la de Cúcuta de 1821, son expresamente los de igualdad, libertad, seguridad y propiedad, apartándose de la declaración francesa de 1793, de la de Aptzingán y de las venezolanas, igualitarias, al admitir "diferencias y jerarquías que exige el buen régimen de la sociedad".

Mas no vamos a demorarnos en el cotejo del proyecto mexicano con los textos que pudieron inspirarle.

Únicamente registremos el singular artículo 46: "La persona del Emperador es inviola-

ble, por lo que en ningún caso incurre en pena aflictiva del cuerpo, ni se sujeta por la falta que tenga en su gobierno obrando contra las leyes, a responsabilidad alguna, la que recae toda en los ministros que firman sus órdenes. Si las faltas fueren de omisión e insistiere en ellas después de tres recuerdos del Congreso, se entenderá que ha abdicado la corona". El artículo resulta más significativo si consideramos que Guridi modificó el proyecto después de la proclamación de Iturbide.

Viniendo de cualquier diputado, y más viniendo de un doctor en teología y cánones, antiguo provisor y vicario general en el Arzobispado de México, la precaución no puede menos que causar estupor en el recién proclamado Agustín I, estupor y después sentimientos menos confusos.

Por más que Iturbide se queje de que no se escribiera una línea de la futura Constitución, no sólo conocía los proyectos impresos de Valdés y de Guridi, sino que debió estar bien informado de los otros documentos presentados a la comisión del Congreso. Y quizá, y aun seguramente, es el mismo Iturbide el primer interesado en que no se lleve al Congreso, adverso a él, un proyecto definitivo en el que no puede influir y cuya aprobación tampoco puede evitar.

* * *

El *Proyecto de organización del Poder Legislativo* de Antonio José Valdés conviene más en su estructura a los intereses manifiestos de Iturbide, aunque no puede eludir declarar en su primer artículo: "La soberanía, fuente de toda legislación, reside radical e imprescriptiblemente en la nación, y su ejercicio en sus representantes, según prescribe la Constitución". El Congreso en el que reside la representación se compondrá de un senado y una cámara de representantes, y el pueblo únicamente ejerce la soberanía en el acto de elegir sus diputados.

Las modalidades en la formación de leyes no ameritan atención especial. Sí, consignar la facultad del emperador para disolver la cámara de representantes, aunque la nueva cámara que se elija no puede ser disuelta en el primer año de sus funciones.

El senado se integra, inspirado en los senados consular e imperial franceses, de la manera siguiente: "1. de los príncipes del imperio que tengan veinticinco años cumplidos; 2. de todos los arzobispos del imperio; 3. de veinticuatro individuos nombrados por el emperador entre los secretarios del despacho, los consejeros de estado, los obispos, los embajadores, los generales del imperio, los títulos, los intendentes, y los ministros togados; 4. de un senador por cada provincia nombrado cada quinquenio por la diputación provincial, entre los hacendados, comerciantes, mineros, letrados, eclesiásticos" (art. 28). La dignidad de senador es vitalicia, excepto para los senadores por las provincias (art. 50).

Una evidente penuria monárquica imposibilita concebir una cámara de pares, según el modelo de la carta francesa de 1814, sin desechar la conveniencia en México de incorporar al senado intereses más amplios dentro de la hegemonía imperial.

La institución confunde en el senado individuos en ejercicio de cargos en los poderes Ejecutivo y Judicial, apartándose de la consagrada división de poderes aun en relación a las personas que los ejerzan o sirvan. Confusión en la que no se incurre en el proyecto de Guridi Alcocer. Valdés en el suyo adopta en esto el modelo del senado-consulto de 2 de agosto de 1802

que estableció el Consulado Vitalicio en favor de Napoleón, y no la Constitución consular de 13 de diciembre de 1799. Mas de esta última toma, aunque únicamente, la inspiración de que el senado vele por la "observancia de la Constitución", creando a ese fin la primera de sus seis comisiones especiales (art. 34), aunque sin establecer la manera de cumplir la función. En cambio, confía al senado "velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de imprenta".

Valdés se aproxima en este punto a la Constitución imperial francesa de 18 de mayo de 1804, en la que se instituyó una "comisión senatorial de la libertad individual" (art. 60). Pero la función queda sólo enunciada en el proyecto mexicano.

Son ciertas las relaciones del proyecto con los documentos constitucionales franceses, mas no diríamos que son su fuente única. Citemos tan sólo dos americanas que pueden ser conocidas por Valdés. La Constitución republicana de Cundinamarca —provincia de la que es capital Santa Fe de Bogotá— de 17 de abril de 1812, en su artículo 62 atribuyó al Senado velar por el cumplimiento de la Constitución, como "conservador de ella, e impedir que se atropellen los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano en particular", pudiendo recibir las quejas de cualquier poder, funcionario o ciudadano (art. 62). En 14 artículos, la Constitución de Cundinamarca establece el procedimiento para hacer efectiva la atribución. Otro documento de Nueva Granada, la Constitución de Cartagena de 14 de junio de 1812, instituye un *senado conservador*, y en el artículo primero de la sección primera de su título séptimo expresa: "El objeto primario del Senado Conservador es mantener en su vigor y fuerza la Constitución, los derechos del hombre y del ciudadano". Dieciséis artículos norman las atribuciones del senado conservador y su ejercicio.

A las fuentes que registra Alfonso Noriega para el Supremo Poder Conservador instaurado en México en la segunda de las siete Leyes Constitucionales de 1836, podrán sumarse, como antecedentes mexicanos, el proyecto de Valdés y el que leyó en el Congreso el 23 de mayo de 1822 Simón Elías González sobre un senado conservador, que aunque desconocido por nosotros no lo era para Manuel Sánchez de Tagle, diputado en el primer Constituyente, ni para Miguel Valentín, nombrado individuo de la Regencia el 10 de abril de 1822, y muy probablemente no lo ignoraban los demás individuos de la comisión autores del Supremo Poder Conservador del año 1836. Los antecedentes colombianos pudieron también ser conocidos por ellos. Sobre este punto de historia constitucional el doctor Noriega hace un muy valioso y hasta ahora solitario estudio en el capítulo v de *El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano.*

No es nuestro tema, mas no podemos dejar de advertir que los primeros conatos de un senado que debe velar el cumplimiento de la Constitución y garantizar las libertades individuales y de la imprenta, se manifiestan en México en proyectos monárquicos de autores iturbidistas, aunque en 1836 los revivan dos antiturbidistas de los años 1822 y 1823, como Sánchez de Tagle y Valentín.

5

LA APREHENSIÓN DE LOS DIPUTADOS
EL PUNTO MUERTO DEL CONFLICTO

A partir del 27 de agosto, con la aprehensión de los diputados, el conflicto entre Iturbide y el Congreso se agudiza. Consignamos ya que el 14 de agosto las comisiones de Constitución y Legislación presentaron su dictamen contrario a la iniciativa de la Regencia para crear tribunales de excepción que conocieran de los delitos de sedición contra la independencia y el gobierno establecido, contra el Congreso nacional, contra el emperador y contra la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones. Los términos del dictamen, cuyos puntos iniciales transcribimos, expresan un notorio menosprecio hacia la iniciativa.

Bustamante, en *La Abispa de Chilpancingo* del 12 de agosto del mismo mes se refiere a ésta y a la "terrible sensación" que causó en su amigo el centroamericano Crescencio Malpica, en cuya boca pone un amplio y fundado alegato en contra de la iniciativa, en el que Malpica menciona los tribunales y consejos militares de la Revolución francesa, y los que estableció Bonaparte. Se remonta a la carta de 1215 del rey Juan de Inglaterra, en la que se garantizaba la libertad y los patrimonios, y el juicio ante los iguales. Existen actos que no pueden ser sancionados, y "ciertas cosas —según Malpica— sobre las cuales el legisladores no tiene derecho alguno de dar leyes. La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto; y por lo mismo los representantes de una nación tampoco tienen derecho a hacer lo que ésta tampoco tiene derecho a ejecutar por sí misma". Además, después que la nación prometió a cada uno y a todos "que no serían juzgados sino según las fórmulas establecidas, fuesen los que quisiesen los delitos que pudieran cometer; no tiene acción a privarles del beneficio de sus promesas. Negar esta proposición sería legitimar los asesinatos populares". El alegato de Malpica no será el único.

El infatigable Bustamante dedicará también el número siguiente de *La Abispa* a su propósito de objetar la iniciativa sobre tribunales militares y la suspensión de "los únicos cinco artículos de la Constitución que favorecen nuestra libertad... (que) ha sido la misma pretensión que en otros tiempos tuvieron Cromwell, Robespierre y Napoleón". Ahora transcribirá la consulta del Consejo de Castilla a Felipe V, de 16 de febrero de 1711, cuando éste lo solicitó en la guerra en contra de los que militaron de diversas maneras por la Casa de Habsburgo. La consulta del Consejo es doctrinaria y casuista a través de 64 puntos, para concluir proponiendo "por la mayor gloria de V.M. y el mayor amor a sus vasallos... el indulto general de todas estas culpas, exceptuando sólo los delincuentes comprendidos en el crimen de Lesa Majestad... que han de ser procesados y condenados en justicia". Después de promulgado el indulto, agregó el Consejo, "no ha de haber resolución alguna por gobierno, que pueda resucitar el temor que haya extinguido el indulto...". Volvamos al Congreso.

La desaprobación de la iniciativa en él es la más fundada de las presunciones. No se trata sólo de los argumentos en contra de la iniciativa. Frente a Iturbide, emperador formalmente elegido por el Congreso, permanece éste en el ejercicio de la soberanía nacional para el que fue elegido como constituyente. El sometimiento del ejecutivo monárquico al constituyente no es cuestionable.

El 5 de agosto, el mismo Bustamante, refutando un papel que menciona al general Victoria levantado contra el gobierno, se refiere en *La Abispa de Chilpancingo* al informe del ministro de Relaciones sobre la tranquilidad general del país. La noticia del levantamiento de Victoria forma parte, denuncia Bustamante, "de una misma trama... que se ha llevado al objeto de persuadir que el Estado necesitaba gobernarse militarmente... y que de consiguiente debía destruirse el Congreso... En estos días —advierte— se han reimpreso las *Máximas* de Napoleón Bonaparte, en cuyas líneas se ve entronizado el despotismo... Consiguiente a tales principios ha sido la falsa y alarmante voz de que el Emperador trataba de disipar al Congreso...". Bustamante califica a Iturbide de príncipe avisado que no desconoce sus intereses.

"Se ha celebrado un pacto solemne entre S.M. y las Provincias —sigue escribiendo Bustamante—, bajo cuyas condiciones ha empujado el cetro, y se ha ligado con terribles juramentos públicos y reiterados para observarlo". El 21 de mayo dijo al Congreso que si faltaba a las leyes *quería no ser obedecido.* Si esto ocurriese, el Estado se hundiría en la anarquía. "Una conmoción popular podría muy bien dar un golpe de mano al Congreso, y aun (lo que es más) derramar la sangre de sus vocales; pero, ¿y las provincias? ¿Se mostrarían pasivas expectadoras mirándose agraviar de una manera tan inicua en las personas de sus representantes?" No lo cree. "Pero finjamos la hipótesis por un momento de hecho, se dio el golpe; desapareció el Congreso: un cuerpo de tropas sostiene la providencia. ¿Pudiera prevalecer —se pregunta Bustamante— contra el odio de los pueblos? ¿No quedaría aislada la capital?" Vuelve los ojos a España y ve a Fernando VII cediendo a jurar la constitución. "S.M.I. es verdad que no ha publicado un manifiesto a la nación en que asegure que sostendrá al Congreso... como muchas personas desearan" pero, escribe Bustamante, él conoce una carta del emperador a un diputado —la que le dirigió a él mismo el 7 de abril. La cita: "Permítame V. le diga —escribió Iturbide— que mi delicadeza se resiente de que se me considere capaz de abrigar ideas de desconfianza con el Soberano Congreso. Respeto profundamente la voluntad general, y no haré ningún sacrificio en someterme a ella...". La carta se imprimirá y difundirá en un folleto. "Amo al Congreso; veo en él el baluarte de la libertad, la esperanza de la Patria", declara Iturbide, y Bustamante dice creerle, pero nada, ni siquiera el detalle del suceso futuro escapa a su previsión, aunque desearía —¿lo deseaban los adversarios del emperador?— evitar la última ruptura.

* * *

Volvamos a los sucesos. Antes de referirnos a la aprehensión de diputados el 26 de agosto, mencionemos una constancia que figura en el acta del Congreso del 8 de agosto, cuando se recibe un impreso, *El espejo que no adula, o carta de un oficial del núm. 4 de infantería a nombre de varios de sus compañeros de armas del mismo cuerpo.* El documento, se declara en el acta, expresa "las ideas filantrópicas y acendrado patriotismo de dicho regimiento, que no sólo

no se halló complicado en la sedición tramada contra el soberano Congreso para el 31 del último julio, sino que estaba dispuesto a sacrificarse en defensa de la representación nacional, del trono constitucional, y de los sagrados derechos de los ciudadanos del imperio".

Los días son de profundo desconcierto entre los opositores, mayoritarios en el Congreso pero sin un plan de acción definido. Se ha llamado la atención sobre los borbonistas, a quienes Alamán, Bustamante y Zavala, relegan a la sola actitud de enemigos de Iturbide una vez rechazado el Tratado de Córdoba en España, sin atender a que ello no afectaba los presuntos derechos del príncipe de Luca, cuyo nombre figura en último lugar entre los llamados al trono de México.

En el transcurso de los acontecimientos el deterioro de la figura de Iturbide es visible, y cuando en el Congreso se restaura la insurgencia ello concilia a éste con el sentido de su revolución, la que llegó a expresarse en la acción de Morelos y en la Constitución de 1814. El mexicano recupera su propia historia. El emperador es un intruso afortunado que la suplanta. Si los borbonistas pueden esperar que la destrucción de Iturbide deje el país abierto a un hipotético aspirante Borbón, para los opositores mexicanos la opción única y viable en el México independiente es la República. Ante los hombres que representan la presunta voluntad general, la autoridad del emperador se funda en el hecho de ser la suya incontenible. Existen el desacuerdo con él, y la escisión, pero es más grave la evidencia de una ambición que se declara a sí misma providencial y que no ofrece proyecto alguno al país.

Iturbide clausura *El Sol*, órgano de los borbonistas, y *El Hombre Libre*, dirigido por Juan B. Morales, de filiación republicana. *La Abispa de Chilpancingo* publicará su último número el 29 de agosto.

Una cuestión ocupa largamente al Congreso, y es la forma de designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El 31 de mayo se había aprobado que se procediera a la formación de él y a la elección de sus ministros que "deberá hacerla por sí el soberano Congreso a pluralidad absoluta de votos... reservándose el Congreso la aprobación del Reglamento que forme el Supremo Tribunal de Justicia, así como la determinación de sus sueldos". Se explica que la disposición se inspira en la Constitución de Colombia, apartándose de la española en la que se concede la facultad de nombramiento al monarca.

El 1 de julio el Congreso se ocupa del dictamen de su comisión de Constitución sobre observaciones hechas por el gobierno, apoyándolas para que fuese el gobierno el que nombrase los magistrados del Tribunal. El 7 de julio se discute el dictamen y se opina, sin resolver, que el Congreso proponga candidatos y el emperador los designe de entre ellos. El debate se prolonga hasta el día 6. Se alega que estando jurada la vigencia de la Constitución española en cuanto no se oponga a la independencia, debe seguirse el sistema de ella. El debate es arduo y se desaprueba el dictamen que propone reformar lo votado el 31 de mayo.

Frustrado el intento del gobierno, el 8 de julio se presenta al Congreso una iniciativa de 28 diputados, para que el Congreso apruebe el proponer ternas al gobierno en el nombramiento de magistrados al Tribunal Superior de Justicia. Se logra, el día 9, que la proposición pase a la comisión de Constitución. El 16 de agosto el Congreso recibe el nuevo dictamen de la comisión, haciendo suya la proposición de los diputados, o sea, reformando el decreto de 31 mayo para que el emperador nombrase a los individuos del Tribunal de las ternas propuestas por el Congreso. El debate vuelve a ser empeñoso. Aunque importan los argumentos, re-

gistremos únicamente que los partidarios del gobierno pierden la votación, y se ratifica el decreto de 31 de mayo.

La decisión del Congreso, de la mayoría de él, de restringir las facultades del emperador es manifiesta e inalterable, ante la insistencia de éste en el asunto del nombramiento de magistrados al Tribunal Superior, reiterada directa e indirectamente durante dos meses y medio, hasta el día mismo en el que se aprehende a diputados.

* * *

El enfrentamiento lo había aceptado Iturbide. El 23 de agosto el Congreso recibe un oficio del ministro de Guerra, brigadier De la Sota Riva, antiguo coronel realista e individuo de la Junta Provisional Gubernativa. Dio cuenta al emperador, dice Sota Riva, de multitud de solicitudes de viudas que dicen que sus maridos "con las armas en la mano en tiempo de la lucha anterior, o lo que es lo mismo, desde el año diez hasta febrero de 21, solicitando entrar en el goce de montepío con arreglo a las graduaciones que en aquella época afirman tuvieron sus maridos..." S.M., informa, considera que son dignos los servicios de los buenos patriotas, aunque es "inaveriguable quiénes sean éstos", excepto los muy conocidos. Existe, además, la crítica situación del erario, y el hecho de que aunque tomaran parte en la primera lucha, no trabajaron por el Plan de Iguala. Fundado en estos motivos se propone al Congreso: "1. Que los que sirvieron del año de diez en adelante, que no se incorporaron al ejército trigarante... se les considere como paisanos sin opción a los empleos que digan *o prueben haber obtenido* sea cual fuere la autoridad por quien se les confió, pues su apatía es la demostración de que no la libertad del país fue su objeto, sino contribuir y aprovechar el desorden". Los que se incorporaron al Plan de Iguala, conservaron los grados reconocidos por Iturbide. Las solicitudes a que se refiere el artículo primero "no tendrán lugar, porque en calificarlas perdería el gobierno el tiempo que necesita para asuntos de mayor importancia". Y finalmente, que a las viudas y huérfanos se les podrán conceder pensiones, conforme al reglamento vigente, "justificando que sus maridos legítimos, obtuvieron sus empleos por autoridad competente, murieron en acción de guerra o de resultas de ella, y que eran al tiempo de su fallecimiento capitanes al menos". El Congreso debe fijar "el fondo de donde se abonarán estas pensiones".

Interesan no tanto las evidentes dificultades para atender excesivas pretensiones, sino la reiterada discriminación de parte de antiguos realistas en el poder en contra de los sobrevivientes de la insurgencia.

En tanto, se presentan al Congreso las más diversas iniciativas. De Mayorga sobre división de la propiedad territorial; de Bustamante para que se impida a extranjeros colocarse en cargos militares y civiles —que se declara urgente por el Congreso—; de Lombardo, Fernando Valle, y José Gutiérrez sobre la abolición de la esclavitud individual. El Congreso llega a aprobar el artículo 98 de su reglamento interior.

* * *

El 27 de agosto, lo registramos ya, el Congreso conoce en sesión secreta la aprehensión de diputados en la noche del día anterior, y el oficio en el que Andrés Quintana Roo, subse-

cretario de Estado, justifica la medida del gobierno. En el Manifiesto de Liorna se habla de las "denuncias, quejas y reclamaciones" de las que él, Iturbide, no podía desentenderse, "ora porque veía expuesta la tranquilidad y seguridad pública, ora porque tales documentos fueron dirigidos por las secretarías; y de cualquier desgracia (que estuvieron muy próximas las mayores), yo habría sido responsable a la nación y al mundo. Me decidí, pues —escribirá Iturbide—, a proceder contra los indiciados de la manera que estaba en mis facultades".[32]

Más explícito, y próximo a los sucesos, Zavala da su versión. Iturbide tuvo noticia de que en la casa de Miguel Santa María, ministro de Colombia, "se reunían varias personas para formar un plan de revolución cuyo objeto era el de proclamar la república". Los implicados eran "el mismo padre Mier, don Luis Iturribarría, don Anastasio Zerecero, el general Juan Pablo Anaya, y el mismo Santa María, porque dos individuos llamados uno Oviedo y otro Luciano Velázquez, servían de espías...". Pero Zavala califica el plan de "ridículo y no podía —afirma— comprometer la seguridad del gobierno por la clase y número de personas que no pasaban de ocho o diez". Iturbide deseaba ocasión para un golpe de estado, en el que se advierte —escribe Zavala— "la torpeza que en esta ocasión manifestó su imbécil ministerio, lo que quizá contribuyó más que otra cosa a la caída del emperador y de la monarquía".[33]

Alamán menciona el regreso a México de José Mariano Michelena, el antiguo conspirador por la independencia, y diputado en las Cortes de la restauración constitucional en Madrid. Primero, según Alamán, se formó un plan revolucionario en Michoacán, ordenando Iturbide la prisión del general Parres. Después se formó otro de más importancia en México, para declarar que el Congreso no había obrado con libertad en la proclamación de Iturbide, apoyando con fuerzas al Congreso para trasladarse a Texcoco a continuar sus sesiones, no dudando que se declararía por la República. En el plan andaban los mencionados por Zavala. Se presumía la adhesión de Negrete, "porque conocían su opinión favorable al sistema republicano", aunque no estaba comprometido. En el plan estaban oficiales del regimiento 11 de caballería. Alamán sigue la información oficial que haría pública el gobierno y a la que nos referiremos.[34]

El presidente del Congreso, después de recibir el oficio de Quintana Roo, se dirige al general Quintanar informándole de los temores por la seguridad de los diputados, ya no sólo a ser aprehendidos, sino porque "las reuniones que bajo el pretexto de victores por la festividad de mañana —la de San Agustín—, se aumentan por momentos con demasiado escándalo por las calles de esta capital". Quintanar contesta dando seguridades.

Hacia las 11 de la mañana del 27 de agosto están reunidos 80 diputados en sesión secreta. Se acuerda que se espere a los ministros de Relaciones, Hacienda y Justicia, a los que se cita. La justificación de las medidas del gobierno la hace ante el Congreso Andrés Quintana Roo: "por haber corrido este negocio por sus manos —expresa—, que lo que podía decir era que en efecto había una conspiración contra el actual sistema", pronta a estallar, lo que obli-

[32] *Manifiesto de Liorna*, pp. 263-264.

[33] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 135.

[34] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 601-603.

gó al gobierno "a asegurar a varios individuos, entre ellos algunos señores diputados, de los que unos estaban por indicios y otros por verdaderamente complicados". Quintana Roo, según el acta, concluyó dando seguridades al Congreso sobre su permanencia.

Inmediatamente Milla, diputado por Guatemala, reclama "que aunque, haya habido alguna conspiración no ha podido el gobierno proceder al arresto de los señores diputados por ser inviolables, según el artículo de la Constitución que leyó", debiendo ellos juzgarse con arreglo al reglamento, "por lo que pedía se formase causa al Sr. Ministro por este atentado".

Desde el primer momento queda planteada la cuestión de fondo entre el Congreso e Iturbide. Al salir de la sesión Milla sería aprehendido.

En el debate los diputados iturbidistas apoyan al gobierno en lo ejecutado hasta el momento.

Múzquiz, que no opina por responsabilizar inmediatamente a los ministros, sino hasta que se tengan los antecedentes, no deja de llamar la atención sobre "la facilidad que podría tener un mal gobierno para disolver la representación nacional, pudiendo arrestar a todos los más, o la mitad de los diputados, sólo con decir que son sospechosos, cuyo caso no se halla en la Constitución".

La sesión llega a su fin con el ofrecimiento del ministro Herrera de informar al Congreso los nombres de los diputados presos.

Las actas de las sesiones secretas se publicarían por cuenta de varios diputados, desde el 27 de agosto hasta el 11 de septiembre. Según Alamán la publicación de las actas en la forma normal se interrumpió con la del 27 de agosto, pero existe ejemplar de ellas en la Biblioteca Nacional de México, en el que las actas corren hasta el día 13 de septiembre, y la del día 11 de ese mes es más completa. En las actas, que continúan la paginación normal del tomo III de ellas, se intercalan sin aclaración las de las sesiones públicas en las que, como se ha expuesto ya, consta la desaprobación del proyecto de crear los tribunales especiales para juzgar causas de sedición. Además, se llega a la aprobación del artículo 163 del reglamento interior del Congreso.

Hagamos referencia al Congreso ante la prisión de los diputados. Ya lo hicimos al día 27 de agosto, cuando se informa lo ocurrido, y a las contestaciones entre el gobierno y el Congreso. El 29 se vuelve a reunir éste. Seremos esquemáticos. A las once y tres cuartos de la mañana queda aprobado el oficio que se dirige al secretario de Estado: que de acuerdo con la Constitución se debe entregar a todo prisionero dentro del término de 48 horas al tribunal competente. El Congreso espera el cumplimiento de ello en sesión permanente.

A las dos de la tarde se recibe la respuesta de Quintana Roo, acompañando oficios del capitán general Quintanar y de Francisco de Paula Álvarez, designado fiscal. Los obstáculos para integrar la causa, se manifiesta, son invencibles y ella complicadísima. A las tres y media de la tarde nuevo oficio del Congreso a Quintana Roo: que "disponga que sin excusa ni pretexto se pongan —los diputados presos— inmediatamente a disposición de S. Soberanía, manifestándose los motivos que hubo para el arresto".

Mientras se espera contestación, el presidente Florentino Martínez informa que se repiten las noticias sobre una pronta disolución del Congreso. Javier Bustamante propone que el Congreso se traslade a Texcoco, pues las leyes no se cumplen por "autoridades corrompidas" que no informan al emperador.

A las seis y media se envían dos órdenes por el Congreso. Al ministro de Relaciones se le advierte que "son traidores a la patria todos los que de cualquier modo atentaren contra la forma de gobierno establecida, o intentaren algo contra la representación nacional, sea para disolverla o suspender el ejercicio de sus funciones, quedando el gobierno con la estrecha responsabilidad por cualquier falta aun ligera, que se note en el desempeño de sus funciones...". La segunda ordena al secretario de Guerra que mande duplicar la guardia del Congreso, a fin de contar con la seguridad necesaria.

El secretario de Estado, Herrera, contesta a la primera comunicación que no puede informar por falta de datos en tan "angustiado término". Cuando se reúnan aquéllos se podrán entregar los presos. El emperador, informado, acordará lo conducente.

Paz propone, y Gómez Farías lo apoya para que se resuelva que si el ministro no obedece las órdenes "se declare estar disuelto el Congreso", insistiéndose en exigir la responsabilidad de Herrera.

Una comisión del Consejo de Estado se presenta al Congreso. El emperador está enterado de los sucesos y activa la investigación. "S.M. sabe muy bien —expresan— que no le corresponde al gobierno formar la sumaria, y sólo se ocupa de recoger los datos indispensables en la materia". Ante la declaración, Bustamante no puede menos que declarar que los diputados fueron aprehendidos sin datos.

El Congreso designa una comisión que se entreviste con el emperador, y le entregue un pliego sobre la situación. En síntesis, se reitera la petición para que los diputados se entreguen al Congreso; si existen culpables, el Congreso "está altamente interesado en purgarse a sí mismo".

A su regreso, la comisión informa que el emperador está "dispuesto a marchar por la senda constitucional". Consultará al Consejo de Estado para contestar debidamente al Congreso. Son las tres de la mañana. El debate ha sido arduo. Se cita para las diez de la mañana del día siguiente.

El 30 de agosto se abre la sesión, y Gómez Farías, autor del voto en favor de la proclamación de Iturbide, es quien primero habla: "La razón y la ley son débiles recursos cuando están apoyadas por la fuerza; triunfarán, pero tarde; entre tanto, nosotros nos veremos obligados a ceder a la fuerza, si un temor vergonzoso aterra a mis compañeros, y los hace callar la esperanza de un vil premio". Han pasado más de las 48 horas en las que se debieron entregar los diputados presos al Congreso. El ministro debe obedecer. El Congreso carece de la fuerza. "Señor: callen las leyes entre las armas; disuélvase el Congreso antes que reducirse a una criminal condescendencia". Que se forme un manifiesto a la nación —propone Zavala—, para que ella sea quien juzgue.

* * *

El problema es simple. El artículo 128 de la Constitución española dispone: "Los diputados serán inviolables en sus opiniones... En las causas criminales que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes en el modo forma que prescriba el reglamento del gobierno interior de las mismas Cortes". La misma Constitución en su artículo 172, fracción undécima, establece: "No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni im-

ponerle pena alguna. El Secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la ejecute, serán responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual. Sólo en el caso de que el bien y la seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerle entregar a disposición del tribunal o juez competente".

El gobierno no está solo en el Congreso, atenuadamente o en términos radicales se le apoya, Simón Elías González, diputado por Durango y quien fuera vocal en la junta de guerra que condenó a muerte a don Miguel Hidalgo y sus compañeros en 1811, firma una proposición con Iriarte y Basilio para que se suspendan las sesiones del Congreso por un mes o dos, y "quitando las oscilaciones y moratorias que son consiguientes a la división de poderes, autorice al gobierno con la medida propuesta por el Consejo de Estado —esperar a que se concluyan las averiguaciones por el gobierno—, hasta tanto se quiten y destruyan enteramente los enemigos del estado". Por su parte, Simón Elías González pide se deje en libertad al gobierno "para que no tenga excusa en acabar con los enemigos todos del Estado; que persiga de muerte a republicanos y monárquicos absolutos, y conseguido el orden continuará V. Soberanía en el ejercicio augusto de sus funciones, con la calma y serenidad que tanto necesita y ahora no puede tener".

Abreviemos, aun emitiendo toda referencia al debate en el que se impone el criterio de continuar exigiendo que los diputados presos se entreguen al Congreso y que se exijan responsabilidades al secretario de Estado que giró las órdenes de aprehensión.

A las nueve de la noche se recibe un oficio personal de Iturbide. Reitera lo que dijo a la comisión del Congreso sobre que no se violó el artículo 172 de la Constitución, porque no estando el gobierno en posibilidad de "formar un cabal concepto de los motivos que dieron lugar a ella" —a la causa contra los diputados—, debía disponer del tiempo suficiente para llegar a los resultados de su investigación, y así, liberarlos o ponerlos a disposición del tribunal competente. Será fiel al sistema constitucional jurado, "hasta donde lo permita el bien del imperio".

La gravedad de la declaración de Iturbide no radica en lo dicho, que postula una presunta razón de Estado como previa a toda otra. Iturbide irá más lejos. "Mas si por los vicios de su organización —la del Congreso—, o las pasiones de sus agentes se quisiere convertir en instrumento de la anarquía, la nación misma, en uso de sus derechos soberanos, se dará una nueva representación, y yo seré el primero que la invoque, para que dándome leyes que aseguren la dicha común de sus ciudadanos, me aligere el enorme peso de la administración, que ni debo ni quiero ejercer con despotismo". Será, afirma, un *monarca constitucional*, sujeto a las leyes "que emanen de los legítimos órganos *que establezca la nación para dictarlas*". Se le ha comparado a Fernando VII "que destruyó un Congreso que encontró instalado... y, a quien en mucha parte debió su libertad...; cuando por el contrario —declara Iturbide— yo di la existencia a otro que jamás se hubiera visto formado, si la victoria no corona mis esfuerzos". Se compara "a un rey que edifica con otro que destruye". El Congreso "se empeña en una imitación rigurosa de la conducta de las Cortes de España en su primera época de inexperiencia", olvidando las de los últimos tiempos, que promulgaron el decreto de 11 de abril de 1821 "para que en los delitos de conspiración se proceda militarmente sin consideración a fueros". Se le quiere sujetar a leyes desechadas en España. "Este liberalismo no es segura-

mente el que conviene a la nación", afirma el emperador. El gobierno no ha violado disposición alguna.

No debemos olvidar que en ese día está aún pendiente en el Congreso la iniciativa del gobierno, recibida el 7 de agosto, para crear los tribunales de excepción contra la sedición, y respecto al que se había presentado dictamen contrario el 14 de agosto y que dos de los firmantes del dictamen, Bustamante y Valle, figuran entre los presos.

En su oficio, Iturbide reitera imputaciones que ya hizo. Teme que "el juicio de sus enemigos —los de la nación para él— lo aventurase al éxito de las parcialidades. Motivos para este temor existen muy fundados en las actuaciones, aunque imperfectas todavía...: y los muchos varones ilustres que honran con sus virtudes y conocimientos la actual representación nacional, no pueden hacer variar el concepto menos favorable que se tiene de la conducta de otros".

A la expresa amenaza de disolver el Congreso, suma Iturbide la personal dirigida a inominados enemigos.

Para Gómez Farías, y lo dice al Congreso, el oficio del emperador "era el último ultraje que podía hacerse al Congreso Constituyente de México".

El conflicto con Iturbide se había tornado tácito después de su proclamación. Incluso en el asunto de los diputados presos se responsabiliza al ministro, sin tocar la persona inviolable del monarca. Es el emperador el que lo torna expreso. El Congreso nombra una comisión que examine el documento, después de que se propone que nunca se discuta su contenido y se tenga por no recibido.

Sin ceder en su exigencia de que los diputados presos se pongan a su disposición y sean juzgados por el tribunal del propio Congreso, se intentan formas de avenencia, como la de que los individuos del tribunal los nombrase el Congreso de ternas de diputados propuestos por Iturbide.

No obstante lo manifestado por Iturbide el 30 de agosto sobre los vicios de la Constitución, el 31 el gobierno pasa al Congreso una consulta del Consejo de Estado en la que se pide "se declare por Constitución provisional de este imperio la española, sin derecho de los poderes para hacer ni promover variación alguna, hasta que se publique la peculiar de este suelo". Además, se comunica que Iturbide se conforma con el decreto que establece la facultad del Congreso para designar ministros del Tribunal Superior de Justicia.

Los días siguientes continúa el debate sobre la resistencia del gobierno a entregar los diputados presos. El 3 de septiembre se exige por tercera vez, con fundamento en el artículo 127 de la Constitución. A las siete de la tarde contesta el secretario Herrera por acuerdo del emperador: "que está suficientemente indicado por S.M.I. y por este ministerio las razones que convencen que la letra y el espíritu del citado artículo no prescriben la citada consignación, ni por consecuencia está el gobierno en el caso de hacerla, aunque en tiempo oportuno la verificará al tribunal competente para el ejercicio de la autoridad judicial". El Congreso es el que, según Herrera, se desvía de las leyes y parece entrar en un "choque de poderes".

Los días transcurren sin que pueda salirse del punto muerto a que se ha llegado. Del oficio de Iturbide no se vuelve a hablar. Las demandas del Congreso son desechadas ante su impotencia de hecho. Se habló en el Congreso de que es preferible disolverse a sí mismo, y es quizá lo que Iturbide espera. Pero ello sería entregarle incondicionada la totalidad del poder.

El 4 de septiembre se resuelve que el Congreso atienda los asuntos ordinarios levantando la sesión permanente.

* * *

Los días 6 y 7 se completa el número de diputados que integran el tribunal del Congreso. Para el día 9, el Congreso lleva aprobados 112 artículos de su reglamento interior.

El 10 de septiembre se llega al desenlace en el conflicto con el gobierno. La comisión nombrada el día 4 —José I. Espinosa, Zavala, Ibarra y Terán—, a la que se turnó el oficio de 3 de septiembre del ministro Herrera, con todos sus antecedentes, presenta su dictamen. El extenso documento hace historia pormenorizado de lo ocurrido, y es una fundada denuncia acusatoria de la conducta del gobierno, cuando ya es conocida la *Idea de la conspiración descubierta en la capital del Imperio Mexicano en 26 de agosto de este año*, que se publica "de orden de su gobierno", aunque anónima. El dictamen concluye proponiendo sacrificios, y no continuar haciendo acriminaciones, y ampliar por una sola vez el plazo fijado por el artículo 172 constitucional para consignar ante el Congreso a los diputados presos, o suspenderlo. Por ahora, se propone, "el Congreso está en el caso de guardar silencio".

Un diputado, Paz, sin oponerse al dictamen insiste en que se exija la responsabilidad al ministro.

Rayón es terminante: "La ley ha sido atropellada del modo más escandaloso". Si se exige la responsabilidad del ministro, el Congreso se expone a ser despreciado, y "sucedería que el emperador irritado procedería a disolver con violencia la representación nacional...". Recuerda a Carlos I de Inglaterra que "pretendió atropellar" a cinco diputados de los Comunes. La Cámara reclamó al rey. "No bastó a Carlos haber desistido de sus procedimientos para escaparse del desprecio público...: su conducta fue bastante para que con el tiempo sucediese lo que la historia nos cuenta... Quiera el cielo que este imperio, que aun todavía está regado de sangre... no tenga que representar escenas tan tristes".

Pando y Múzquiz se oponen al dictamen por carecer de fundamento legal. Gómez Farías en un amplio voto particular refuta el dictamen, pidiendo se exijan las responsabilidades al ministro.

José María Becerra, diputado electo a las Cortes de 1820, a las que no concurrió, futuro obispo de Chiapas, con expresiones más moderadas se opone también al dictamen.

La sesión se suspende, y al día siguiente concluye el debate se aprueba el dictamen: "que el Congreso está en el caso de guardar silencio por ahora en este negocio, esperando que el tiempo aclare los sucesos que no pueden quedar sepultados en el olvido, hasta que el curso de ellos indiquen, en las diferentes circunstancias, cuál es el camino que debe seguir el Congreso". A moción de Florentino Martínez se aprueba: "Que no estaban impedidos los señores diputados en el uso de sus facultades que el reglamento les concede, para exigir la responsabilidad a los Ministros".

Prisciliano Sánchez todavía reclamará al Congreso "que se fije término preciso y que no quede este acuerdo vago e indeterminado". Se ha atentado contra la división de poderes, y quien lo hizo, reitera, "es responsable a la nación y reo del crimen más atroz". Nada se resuelve.

Iturbide había amenazado el 30 de agosto: "Si por los vicios de su organización —la constitucional del Congreso— o las pasiones de sus representantes se quisiere convertir en un instrumento de la anarquía, la nación misma, en uso de sus derechos soberanos, se dará una nueva representación, y yo seré el primero que la invoque". En su impotencia de hecho, el 11 de septiembre el Congreso resuelve esperar a que "el tiempo aclare los sucesos que no pueden quedar sepultados en el olvido, hasta que el curso de ellos indiquen, en las diferentes circunstancias. cuál es el camino que debe seguir el Congreso".

Al no disolverse el Congreso por sí mismo, y no atreverse a disolverlo Iturbide, los términos expresos de ambos son los de un desafío cuyo plazo no se fija.

6

LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO

La noticia de la aprehensión de los diputados se difunde por las provincias. La *Gaceta Extraordinaria* del 27 de agosto la da, informando que el gobierno se vio obligado a tomar medidas extraordinarias ante una conspiración de la que todos hablan y existe. La primera de ellas y urgente fue proceder "en la noche de ayer contra los individuos que la opinión pública y los datos más circunstanciados señalan por autores y agentes de la revolución", en la que hay diputados implicados. Se aclara que la medida no está dirigida contra el Congreso. "El sistema representativo constitucional es el que más conviene a la Patria, y el Emperador que ha jurado sacrificarse en su servicio" no lo destruirá.

En esos días, el 22, 24 y 27 de agosto, la *Gaceta* publica el manifiesto del gobierno español sobre la independencia de América. El gobierno español no obstante ser aún constitucional, declara "que considera este asunto como íntimamente enlazado con aquellos principios conservadores, que ofrecen seguridad a todos los gobiernos, y garantías a la sociedad", manteniéndose en la más estricta línea legitimista. La nueva desautorización a los borbonistas es obvia, y oportuna para Iturbide y los republicanos.

El 31 de agosto la *Gaceta* reproduce un *Alcance del Noticioso General*, iturbidista: "La noche del 26 se ha descubierto en esta capital una meditada conspiración contra el actual Gobierno con la mira a establecer el Republicanismo, o entregar el trono a una dinastía extranjera", afirma el *Noticioso*. Están "comprendidos en ella algunos Diputados de los que desde un principio manifestaron adolecer del funesto vértigo republicano, que si bien es verdad que sería la mejor forma de gobierno para los estados de corta extensión, pero poblados, virtuosos, iguales en fortunas y situaciones políticas, y educados en los principios que son los elementos que constituyen la protección de unas formas que según el Filósofo de Ginebra *no conviene a todos los hombres*; no puede ser nunca conforme al genio y maneras de un imperio tan vasto como el nuestro, de clases desiguales, tan heterogéneas y tan propensas a una aristocracia inveterada y sostenida en esta misma desigualdad de fortunas, de luces y de principios de civilización".

En el área americana de la revolución el argumento rousseauniano de autoridad es anacrónico, después de la de Estados Unidos, de la francesa, y de la de emancipación en América. Es además una apología de la república que circunstancialmente niega. Mas la historia en América discurre por sus caminos. El 26 y 27 de julio San Martín y Bolívar se habían entrevistado en Guayaquil, y el 27 de septiembre, después de instalarse ese mismo día el Congreso Constituyente del Perú, San Martín renunciaría a todo poder y se embarcaría en Ancón hacia Chile, extinguiéndose el último proyecto monárquico en el antiguo continente español del sur. Los sucesos, lo hemos apuntado, se producen a destiempo en México.

El Noticioso vocero imperial sigue justificando las medidas del gobierno. "La diversidad de intereses que agitan a los manipulantes sólo los une para conspirar a la ruina de la Patria, separándose entre sí en razón de las propensiones para el Republicanismo, o para colocar en el Trono de Anáhuac a alguno de los tiranos de Europa". La inspiración, se dice, viene "del castillo encantado de Ulúa". Se ha aprehendido a diputados delincuentes, a los que sólo ampara el fuero legislativo, pero no si atentan contra la patria. Ellos han sembrado "*ideas subversivas* —se subraya— en el mismo santuario de las Leyes", siendo también culpables del retardo de "nuestra deseada Constitución". La unión de todos, "cualesquiera que sean por otra parte sus opiniones teóricas", es imperiosa en torno al trono *constitucional*, "para combatir y lanzar de entre nosotros un necio Republicanismo que halagando al sencillo pero ignorante vulgo con vanas esperanzas, amenazaba precipitarnos en todos los horrores que el jacobinismo arrastró a la desgraciada nación francesa, y cuyo resultado esparció por todo el universo los desastres de la desolación".

No es en verdad el hipotético príncipe europeo el que preocupa y acosa al iturbidismo, sino el republicanismo que ya halaga "al sencillo pero ignorante vulgo".

La declaración del ministro Herrera —*Gaceta* del 5 de septiembre— incide en el alegato del *Noticioso*, aunque justificando la demora en la consignación judicial de los presos por lo difícil que resulta la investigación de los hechos, "envueltos en las tenebrosas sombras de los conventículos secretos". El gobierno informa más tarde sobre lo ocurrido, y anticipa que, logrado su objeto por los conspiradores, comenzaría una lucha sangrienta entre ellos "por la preferencia del sistema, que cada uno se proponía subrogar... El furioso republicano disputaría con el partidario de los Borbones el dominio del Imperio".

Son estas noticias, las epistolares, las que recibe en el norte el general Felipe de la Garza, autor de la representación republicana que dirigió al Congreso el 16 de mayo anterior.

Fechada el 26 de septiembre en Soto La Marina, Garza dirige a Iturbide un documento que suscriben con él la Diputación Provincial de Nuevo Santander, el Ayuntamiento, los electores de provincia, el cura párroco, oficiales, milicia y vecindario. Los firmantes "penetrados del más vivo sentimiento por las providencias opresivas de la libertad política de la nación —le dicen a Iturbide—, que con escándalo universal y violación de los derechos más sagrados ha adoptado en estos días el gobierno de V.M.I. bien ciertos de que ellas no proceden de la recta intención de V.M.I. sino de las arterías e intrigas del Ministerio, vendido a los partidarios del gobierno español para dividirnos y despedazarnos; elevamos a V.M.I. con toda la dignidad de hombres libres la representación de nuestras quejas y agravios, y la sorpresa que nos ha causado la prisión de los beneméritos diputados del soberano Congreso Constituyente, con que ha quedado reducida a mera nulidad la representación nacional, y bajo la influencia del gobierno, si ya no se ha disuelto. ¿Cómo tan pronto olvídase V.M.I. del sagrado juramento que otorgó en el seno del Congreso?" Se habla de divergencias de opiniones y subversión; "pero, señor, en quien está la verdadera subversión y divergencia es en el Ministerio, cuyos intereses son irreconciliables con los de los pueblos". El Ministerio es el que instaura el despotismo.

Ellos, los firmantes, no pretenden que se adopten nuevas formas; se quiere el gobierno de la ley; "no nos guía el espíritu revolucionario ni innovador... Hemos jurado un gobierno monárquico constitucional, y no tratamos de alterarlo ni atacarlo; pero sí deseamos y pretendemos que no degenere en absoluto". Por ello terminan suplicando:

"1o. Que se sirva poner en libertad inmediatamente a los diputados del Congreso, aprehendidos en la noche del 26 de agosto, y a todos los demás que después lo hubieren sido.

2o. Que el Congreso se instale en el punto que elija, y donde delibere con absoluta libertad.

3o. Que el Ministro actual sea depuesto y juzgado con arreglo a la ley.

4o. Que se extingan y supriman esos tribunales militares de seguridad pública en donde estén ya establecidos".

Y finalmente que se libere a todos los aprehendidos en las provincias, juzgándolos con arreglo a las leyes por los tribunales establecidos por ellas, por último, que se observen las leves fundamentales que hemos adoptado interinamente".

La Constitución española en contra de la que Iturbide inició su aventura como conspirador en las juntas de La Profesa en mayo de 1820, en una historia que lo llevó a la consumación de la independencia, lo persigue como un fantasma que no puede exorcizar, y al que ahora siguen los más amenazadores del republicanismo.

La representación de Nuevo Santander continúa: "Si (lo que Dios no permita) V.M.I. desoye estas sencillas peticiones, el genio del mal y de la discordia va a lanzarse sobre el desolado Anáhuac... Nosotros a lo menos y toda esta provincia de Nuevo Santander, fieles a nuestros juramentos y justos apreciadores de la libertad, moriremos primero gloriosamente en el campo del honor que sucumbir al fiero despotismo". La seguridad de que la rebelión no atenta contra Iturbide es un débil formulismo. No se entregará, le dicen, el mando de la provincia al general Lanuza nombrado por el emperador, ni se permitirán en su territorio *tropas de fuera.*[35]

Es la primera rebelión armada a que debe enfrentarse Iturbide. El documento se recibe en México el 6 de octubre cuando, según Bocanegra, el conflicto entre Iturbide y el Congreso se agudiza más.

* * *

La *Gaceta Extraordinaria* del 20 de octubre da la noticia de la pacificación de Nuevo Santander, presentando a Garza como seducido por los conspiradores de México. Zenón Fernández, jefe militar de San Luis Potosí, informa por oficio a Anastasio Bustamante que Garza y sus fuerzas se dispersaron, "y que es regular que Garza se haya ido a Monterrey para presentarse al Sr. López, bajo el abrigo del canónigo Ramos Arizpe, que seguramente ha estado con el expresado Garza".

La intervención de Ramos Arizpe la explica el ministro Herrera en un oficio destinado a la publicidad que aparece en el *Noticioso general* de 30 de octubre, y que reproduce Bocanegra. Garza, se informa, entregó el mando al coronel Lanuza, y se dirige a México a dar razón de su conducta. En Monterrey, el brigadier Gaspar López al tener noticia de la sublevación de Garza tomó las disposiciones militares necesarias, mas "desconfiando de los conocimientos propios como hombre moderado, y deseoso de un éxito feliz, llamó a los Dres. Ramos Arizpe y Lobo para conferir con ellos...".

[35] El documento en J.M. Bocanegra, *op. cit.*, pp. 152-155.

A las disposiciones militares "faltaba una, debida a la experiencia y acreditado saber de dichos señores; ésta fue que el Sr. Ramos Arizpe fuese en persona a persuadir a Garza, a disuadir las tropas, a tranquilizar los pueblos; este digno eclesiástico, en medio de los rigores de la estación, anduvo más de cien leguas para desempeñar el encargo... antes de entrevistarse con Garza, ya éste había entregado el mando; sin embargo, la nación le es deudora de sus conatos con respecto a Garza...".[36]

En el episodio se cruzan el que sería en el segundo Congreso Constituyente el más ilustre federalista, y el hombre que fusilaría a Iturbide el 19 de julio de 1824.

Garza se dirige a México, alcanza a Iturbide en el camino a Jalapa, e Iturbide le perdona.

En octubre el gobierno se justifica de la aprehensión de los diputados en un *papel* con el título *Idea de la conspiración descubierta en la capital del Imperio Mexicano en 26 de agosto de este año.* En él se elogia la pacífica consumación de la independencia, y la política de Iturbide al crear la Junta Provisional y convocar el Congreso Constituyente. Mas desde sus primeros pasos, dice, se atacó a Iturbide, "primer representante del pueblo", y desde antes de realizarse las elecciones "se procuraba extraviar y corromper la opinión pública, sembrando doctrinas falsas...". Y aún más: "los enemigos del Estado recurrieron a otros discursos disfrazados para apoderarse de las elecciones, que en la mayor parte fueron el resultado de sus intrigas", y sólo la casualidad logró que se eligiesen diputados dignos. "Con tales elementos era imposible formar un cuerpo que, constituyendo sólidamente a la nación, llenase los altos destinos para que se había convocado". En el Congreso, "el principio de la Soberanía absoluta sirvió para autorizar las más monstruosas usurpaciones"; se declaraba el *dogma de la división de poderes*, se depuso la Regencia, "y se quitaba el veto, único freno de los congresos constituidos".

"La proclamación del Emperador, este grande acto nacional producido por el concurso de todas las voluntades, privó a los autores de la discordia —continúa *el papel*— del recurso de organizar sus planes al abrigo de la protección del Congreso, destituidos de todos los medios de dar al establecimiento de la república el aspecto de una sanción legal, acudieron a las conspiraciones y tramas ocultas para subvertir el sistema que la nación había adoptado... "Avisos circunstanciados de los progresos de la conspiración llegaban incesantemente al Gobierno por los conductos menos sospechosos". El gobierno probará con los documentos que publica en el que llama *Manifiesto*, el punto a que había llegado la conspiración el 25 de agosto. Se trataba de "trastornar el Estado proclamando los principios democráticos más inadaptables a nuestra situación", aunque sin atreverse a "sostener abiertamente la legitimidad de las conspiraciones en gracia del republicanismo. La propagación de esta doctrina subversiva de todos los gobiernos, tenía su tiempo señalado en los planes de la sublevación...".

El documento del gobierno rebasa la acusación a los solos diputados presos, al afirmar que con los diputados que resultaron elegidos "era imposible formar un cuerpo que, constituyendo a la nación, llenase los altos destinos para que se había convocado". No es la posible culpabilidad de tales o cuales personas, sino la existencia misma del Congreso la que el gobierno impugna. La supuesta conspiración resulta así un mero accidente en la cuestión de fondo.

[36] *Ibid.*, p. 157.

Diríamos que el problema deja de ser una polémica o faltas de acuerdo entre el gobierno y el Congreso, para simplificarse: si el Congreso está viciado en su origen y no es el cuerpo idóneo para constituir a la nación, aunque el gobierno no lo diga expresamente, el Congreso no debe subsistir.

Las fisuras se producen en el seno del propio gobierno. Robertson, consultando la investigación que realizó el Consejo de Estado, encontró que en éste se opinaba que de los presos, 19 debían ser liberados, que la situación de 13 aparecía dudosa, y que 27 parecían culpables de conspirar.[37]

El *Apéndice a la idea de la conspiración* se propone probar la culpabilidad de los presos y el carácter de la conspiración. Sería excesivo entrar en los detalles. Desde julio se descubrieron en Puebla las ramificaciones de la conjura para "proclamar el gobierno republicano a pretexto de sostener el Congreso", y en México "trabajaban activamente en este proyecto el Dr. D. Servando Mier y otros varios diputados", además de Luis Iturribarría, Miguel Lozano, Anastasio Zerecero, Juan Bautista Morales, varios oficiales y paisanos. Se dan fechas de reuniones en las casas de Mier, de Juan Pablo Anaya y otros, entre ellos Miguel Santa María, a quien el gobierno expidió su pasaporte el 18 de octubre para que saliera del país. "En cuanto al padre Mier —dice el gobierno—, todos los datos se reunían para condenarlo como director principal de la empresa".

La *Idea de la conspiración* publica una carta de 20 de agosto de Anastasio Zerecero al teniente del regimiento 11, Luis Segura, en la que se le dice: "sostenido el Congreso, estamos seguros de que siendo en su mayor parte liberales, se declarará por nuestro sistema y adoptará la república federada...". La carta implica a los principales presos del 26 de agosto. Los datos los amplía Zerecero en su declaración ante Francisco de Paula Álvarez, secretario de Iturbide, a quien se encargó la averiguación.

Las reuniones en México en las que se hablaba de república y de rebelión las consigna Zavala. "En realidad —escribe— el plan era ridículo y no podía comprometer la seguridad del gobierno por la clase y número de personas que no pasaban de ocho o diez. Pero Iturbide deseaba pretextos para dar un golpe de estado y esta circunstancia se lo proporcionó".[38]

A las juntas concurrían como "espiones Anastasio Zerecero y Luciano Vázquez, fingiéndose partidarios y cómplices", escribirá Bustamante en 1838.[39] Zerecero publicará en 1869 unas *Memorias para la historia de las revoluciones en México*, en las que curiosamente omite toda referencia a los sucesos en que se vio involucrado, no obstante conocer la imputación de Bustamante desde 1846, cuando se edita la *Continuación del cuadro histórico*.

La *Idea de la conspiración* termina transcribiendo una carta del doctor Mier, fechada el 7 de agosto, a un sobrino suyo en Monterrey en la que le aconseja no viajar a México: "no te venga a hallar —le advierte— una escena de sangre". Pero Mier atribuye el estar en un volcán a la política del gobierno contra el Congreso al que se propone disolver. "Se juntan firmas —según Mier— para pedir la tiranía, que eso es gobierno absoluto, por fortuna hay tropas a nuestro favor; pero si la cosa no viene de arriba a buen escapar seremos disueltos; yo voy a qui-

[37] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 208.

[38] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 135.

[39] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, tomo II, p. 68.

tar mi casa y a estarme en un agujero de donde poder volar". Como prueba de conspiración, el documento no puede ser más inconsistente en contra de Mier, que en todo caso resulta un republicano que conspiraba a toda voz.

La seriedad que niega Zavala a la presunta conspiración la reconoce en cambio el cónsul norteamericano, James S. Wilcocks, y así lo informa al secretario de Estado, Adams, el 28 de septiembre, calificándola de *formidable*.[40]

* * *

Más grave que la conspiración republicana es la pugna entre el Congreso e Iturbide, cuyas consecuencias no resultan impredecibles después de lo expresado por el gobierno en la *Idea de la conspiración*, y de lo acordado por el Congreso el 10 de septiembre. Recordemos que éste se resignó a que el tiempo aclarara los sucesos, y a esperar "en las diferentes circunstancias, cuál es el camino que debe seguir el Congreso".

Abreviemos acudiendo a testimonios documentos directos.

Lorenzo de Zavala juega un singular papel en el episodio siguiente. En su *Ensayo histórico de las revoluciones en México* juzga que, después de la prisión de los diputados, el Congreso no es en esos días más que una *sombra de representación*, y que únicamente podía desearse "o bien (que) se disolviese... o que hiciese una nueva convocatoria para llamar otro que representase, en aquellas nuevas emergencias las opiniones y la voluntad de las provincias". Iturbide temía esa convocatoria y sólo deseaba una mayoría en el Congreso. Gómez Farías, Bocanegra y otros que habían votado por su proclamación en mayo, se apartaban del gobierno desde la aprehensión de los diputados.[41]

Los principales presos estaban en conventos, entre ellos Mier, quien desde el de Santo Domingo circulaba sus epigramas en contra del gobierno y Carlos María de Bustamante, que en el de Santo Domingo comenzaría a escribir su *Diario*. Los indiferentes y muchos partidarios de Iturbide se declararon contra el emperador. Como consta en la *Idea de la conspiración*, no obstante figurar entre los presos Fagoaga, cabeza de los borbonistas, no es un príncipe extranjero sino la república, y la república federal que se menciona, el enemigo. En el transcurso de los sucesos la idea monárquica misma se deteriora con la de Iturbide, y el republicanismo es la opción frente a éste, al menos la única como posibilidad.

No decidiéndose el emperador a disolver el Congreso, como según Alamán aconsejaban los jefes del ejército, se acogió a la alternativa de reformarlo, inspirado tal vez en la iniciativa que leyó Lorenzo Zavala en el Congreso el 25 de septiembre, "en la que con muy sólidas razones presentó el estado verdadero de las cosas".[42]

La iniciativa se publica con el título de *Proyecto de Reforma al Congreso. Propuesto por el diputado Don Lorenzo de Zavala*. En su proposición, Zavala, diputado a las Cortes de Madrid en 1821, deja una muestra del idealismo institucional que prevalece en esos días. Al reflexionar "sobre las desgracias públicas, encuentro —escribe— que siempre son la mala or-

[40] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 208.

[41] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 132-133.

[42] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 612.

ganización de los poderes del Estado, y cuantas veces veo sumidos los pueblos en la opresión, o agitados por las revoluciones, fácilmente hallo el origen de estos males en su misma Constitución". Zavala alude a la historia y a la revolución que destruyó *el antiguo edificio* con el triunfo de la *filosofía.*

Mas "la mala inteligencia del más útil descubrimiento político, el de la soberanía nacional, su aplicación ilimitada, donde una autoridad sin término prescripto a la corporación o junta que se consideraba representante de la nación, condujo al pueblo al mismo escollo que quería evitar, cual era el del poder absoluto. Pero aun era tanto más temible esta autoridad despótica —agrega— cuanto que todos sus actos parecían llevar consigo la sanción nacional, y el pueblo más ilustrado de la tierra vio cometer los más grandes atentados contra la humanidad en nombre de la libertad...".

La revolución en Francia proclamó los derechos de los pueblos, los de los hombres y sus deberes; "jamás se vio un espectáculo más interesante ni seductor", exclama Zavala. "¡Pero cuán poco duró esta lisonjera esperanza!" Los hechos conocidos por todos lo excusan de narrarlos. La catástrofe de la revolución la encuentra en "la falta de límites en los poderes cualesquiera que ellos sean, y su mala organización". Las asambleas constituyentes francesas, como en Cádiz, al reasumir todos los poderes a título de la soberanía, causaron "ese trastorno que ha envuelto estas dos naciones en tan terribles convulsiones". Acude a Montesquieu: "Si el poder ejecutivo no tiene el derecho de contener las empresas del cuerpo legislativo, éste será despótico, porque como podrá darse todo el poder que quiera, destruirá todos los demás poderes". Y esto lo demuestran Constant, y Blanco-White cuando hace la crítica de las Cortes de Cádiz.

Es el mismo el origen de los males en México: "la mala organización del Congreso, en la misma convocatoria". El Congreso se declaró soberano en toda su plenitud, delegando el Ejecutivo en la Regencia, lo que era en realidad un juego de palabras. Al deponer a la Regencia, el Congreso demostró que reunía en él los tres poderes. Al emperador se le obligó a jurar la Constitución española, mas el Congreso "no se creyó obligado a circunscribirse a estos límites", y privó al monarca del veto. Como solución propone, apelando a Bentham, la creación de una segunda cámara revisora. La primitiva convocatoria la establecía, y lo único que se puede criticarle en esto es la forma de integración. También debe censurarse la manera de distribuir la representación que se desatendió de la base de la población. Pone ejemplos.

Zavala rinde un homenaje al patriotismo del Congreso, que no invalida sus críticas a la institución, y formula su reforma: "Primera. Que se reduzca la representación nacional a menor número de diputados atendidas las necesidades de las provincias. Segunda. Que verificado esto se nombre una comisión que dentro del menor término posible presente un proyecto de reglamento provisorio, en que se arregle la convocatoria de una segunda cámara, y fije sus atribuciones. Tercera. Que todo esto se haga oyendo al gobierno en conferencias con los secretarios del despacho".

La tardía reflexión de Zavala se adscribe al liberalismo doctrinario de la restauración francesa, que estará presente en la formación del mexicano. Mas la presunta solución al conflicto es híbrida y no es solución. No cura los vicios de la convocatoria y sobre ellos mismos pretende instituir un constituyente bicéfalo.

Francisco García, diputado por Zacatecas, se apresura a publicar una *Vindicación y exposición sobre el proyecto de Reforma del señor Zavala, presentada para leerse el 8 de octubre de 1822.* Guardando convenciones obligadas, García no deja de profesar un liberalismo diverso. "No es fácil decidir si la causa de los pueblos mejoró en la época memorable de la revolución francesa —escribe—, porque si los torrentes de luz que desde el seno de la Francia corrían hasta las extremidades del globo y conmovían los antiguos cimientos del despotismo, el horror de los sucesos paralizaban la marcha de la libertad, presentando a los déspotas un recurso para contener su movimiento a vista de tantas desgracias... ¿Por qué no se dice que la resistencia tenaz e inaudita de la tiranía provocó aquellos horrores? Por qué no, que un enjambre de hombres corrompidos, exaltados por la inexperiencia del pueblo en una senda desconocida, abusaron del lenguaje para substituir a los antiguos abusos el sistema anárquico que convenía a su interés particular?" García distingue y no acepta el dualismo fatal revolución-terror. Defiende, además la Constitución española y va refutando a Zavala en sus censuras al Congreso, que el "enemigo más implacable no se hubiera atrevido a estamparlas", en su notoria falsedad.

Zavala propone el modelo inglés "puesto que las bases de nuestro gobierno no son adaptables a los democráticos; si así fuere, obsérvese de paso —escribe García— que al constituirse aquella nación sufrió las mismas borrascas civiles... y que su Constitución se formó sobre elementos propios, y que repugnan a las luces del día". La Constitución inglesa para García "es una trampa complicada y monstruosa, en que se han equilibrado por cierto tiempo... los pretendidos derechos de sus gobernantes, los de sus grandes propietarios, los del estado eclesiástico en el orden civil, y los de los pueblos, a quienes tocó perder todo lo que ganaron las otras clases, ¿y sobre iguales cimientos —pregunta— formaremos nuestra Constitución? ¿Crearemos los derechos absolutos de una antigua monarquía, los feudales de un enjambre de poderosos, para concederles, a expensas del pueblo, una influencia de clases y de cuerpo repugnante a la opinión, y a las circunstancias de homogeneidad en que por fortuna nos hallamos?".

Después de la *Memoria político-instructiva* del doctor Mier, la *Vindicación del Congreso* de Francisco García es el más definido manifiesto liberal democrático en esos días. Más que la refutación en detalle a Zavala, interesa la ideología de Francisco García, expuesta dentro de las limitaciones a que le obliga su carácter de diputado, que no niega en principio la monarquía instituida. No obstante, coincidiendo con Bustamante, Múzquiz y otros, declara que todos "recibieron con indignación una convocatoria sobre bases exóticas, y extravagantes, que reunía la contradicción de convocar un Congreso constituyente al mismo tiempo que se le dictaban las bases constitucionales, y esto infringiendo la ley vigente de la materia, y atacando en su esencia los derechos imprescriptibles de la nación".

García concluye la *Vindicación*: "Yo bien veo que esta nación desgraciada difícilmente obtendrá la garantía necesaria de sus derechos. Sé que la nulidad, o disolución de V.Sob. está en el orden de los acontecimientos, que ya no es posible evitar; pero como su conducta debe arreglarse a las obligaciones en que se halla constituido yo propongo: Que se tomen las más eficaces medidas, a fin de concluir la Constitución a la mayor brevedad; y que concluida, y discutida, se abra un registro general de votos para su sanción, puesto que el consentimiento de los pueblos es la única sanción legítima". No lo menciona, pero la inspiración viene de 1793.

* * *

A nadie se oculta el futuro inmediato. La versión más desinteresada de los sucesos es la de Bocanegra, que no contradice la de sus contemporáneos Zavala, Alamán y Bustamante.

El 15 de octubre se cita por Francisco de Paula Álvarez a numerosos diputados a reunirse con el emperador. El 16 concurren a Palacio cerca de 80, el Consejo de Estado, los ministros y varios generales, figurando como principales Bustamante, Negrete, Andrade y Rayón. Gómez Navarrete, secretario del Consejo, habla del propósito de establecer las mejores relaciones entre el gobierno y el Congreso al que se trataba de mantener con la representación nacional. Hubo un debate franco, y se nombra una comisión que dictaminara sobre la situación del Congreso. En ella están los ministros Herrera y Domínguez, y varios diputados, entre éstos Zavala y Bocanegra. El juicio de Zavala fue el que guió a la mayoría de la comisión en el sentido de reformar el Congreso, reduciendo el número de diputados, "lo que realmente era dar el primer paso para su disolución", escribirá Bocanegra, que se opuso al proyecto de Zavala.

Según Bocanegra, su oposición, sin animosidad hacia Iturbide dio lugar a que el emperador le mostrara representaciones de diputaciones provinciales, corporaciones, autoridades, jefes y cuerpos de ejército, solicitando la disolución del Congreso. Como individuo de la comisión, Bocanegra da un voto particular en el sentido de remitir el asunto al Congreso para que éste resolviese sobre su posible reforma. El mismo día, en una segunda reunión se aprobó el dictamen de la mayoría, en votación que en su *Ensayo* censura Zavala por participar en ella generales, consejeros, diputados y *todo mundo.*

El dictamen aprobado se remite al Congreso, en tanto se debate de nuevo en él la cuestión del derecho de veto que reclama el emperador aun para las leyes constituyentes, que ya había sido rechazado por el Congreso, que sostiene su resolución.[43]

No llegando el Congreso a publicar las actas de las sesiones de esos días, acudamos a la versión de Zavala, que cita el mismo Bocanegra, y que, según Alamán, "refiere con exactitud y buen juicio todo lo que pasó...".[44] El Congreso nombra una comisión que dictamine sobre el asunto. La comisión "no tardó mucho tiempo en presentar su proyecto, el cual estaba reducido a que el Congreso, se sujetase a la Constitución española, teniendo el emperador el veto", y pudiendo él mismo nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El gobierno, no conforme con la última condescendencia, el 22 de octubre insiste al Congreso para que disminuya el número de sus diputados, que se adopte "el método de las Cortes españolas de 17 de abril de 1821, para juzgar los delincuentes de ciertos delitos, y que se autorizase al gobierno para formar un reglamento de policía", o sea, los tribunales especiales que reiteradamente había desechado el Congreso.

En el debate participan cuatro consejeros del gobierno. El Congreso desaprueba las tres iniciativas del gobierno, y "la irritación que causaba en este general (Iturbide) aquellas resistencias, producían por fuera efectos terribles. La plebe y alguna tropa —sigue la versión de Zavala— se explicaban contra el Congreso de una manera que anunciaba la próxima tempestad". La versión de Zavala se vuelve reflexiva. "En realidad no se sabía lo que la nación deseaba, ni

[43] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, pp. 85-96.

[44] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 615.

se podía saber mientras existan tropas permanentes ejerciendo no un influjo directo, sino un imperio absoluto sobre un pueblo acostumbrado por mucho tiempo a la servidumbre". Las publicaciones contra el Congreso se multiplican, el prestigio del Congreso se debilita, casi era una cosa ridícula su existencia".[45]

El 31 de octubre se gira la orden al general Luis Cortázar para que entregue un pliego al presidente del Congreso. Un segundo oficio a Cortázar textualmente ordena: "Si el Congreso no está disuelto en *diez minutos* después de haber V.S. entregado el adjunto oficio a su presidente, hará V.S. saber a éste, que *usará de la fuerza* para dar cumplimiento a lo prevenido. Si a pesar de esta intimación, dentro de otros diez minutos continúa reunido, procederá V.E. en efecto a disolverlo *militarmente*. Sólo permanecerán los secretarios y V.S. con su tropa, aquéllos para encargarse del edificio y de la conservación del orden".[46]

El 5 de noviembre la *Gaceta* publica el decreto de disolución del Congreso.

Agustín, por la Divina Providencia y por el congreso de la nación, primer Emperador constitucional de México, y gran Maestre de la orden imperial de Guadalupe, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Tomé a mi cargo la independencia de la patria: el término de esta empresa es verla constituida; mientras no llegue, soy responsable del éxito; éste es inasequible por no haber llenado el congreso constituyente sus deberes con la preferencia que exigen las circunstancias críticas de la nación; para libertarla de los grandes males que la amenazan, es preciso tomar medidas enérgicas con que se logre tan importante fin. De esta clase son las siguientes, que después de consultarlas con personas de ilustración, virtudes y celo patriótico, he acordado y decreto. *Primero.* Quedará disuelto el congreso en el momento en que se le haga saber este decreto. *Segundo.* Continúa la representación nacional, ínterin se reúne nuevo congreso, en una junta compuesta de dos diputados por cada provincia de las que tienen mayor número, y de uno en las que sea único, y ocho suplentes cuyas personas designaré. *Tercero.* Los trabajos a que se debe dedicar esta junta se demarcan en reglamento por separado. *Cuarto.* Los individuos que no queden en ella, para salir de esta corte darán conocimiento anticipado al gobierno por medio del jefe político, e ínterin permanezcan en ella los que no sean de su vecindad, ocurrirán a la Tesorería general a percibir sus dietas. *Quinto.* El comisionado encargado de la ejecución de este decreto, asegurará a su satisfacción la secretaría, para que, no se extraiga papel alguno, y los secretarios entregarán los que están a su cargo y recogerán los que existen en las comisiones, para entregarlos el día 2 del mes entrante a la junta con los correspondientes índices. *Sexto.* La junta se reunirá para comenzar sus funciones el día 2 del próximo noviembre, a las diez de la mañana, presidiéndola interinamente el de mayor edad, hasta que presentándome yo, se proceda a las elecciones formales conforme al reglamento. Tendreislo entendido para su cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circule. Rubricado de la imperial mano. Y de orden de S.M.I. lo comunicó a V.E. para su inteligencia, publicación, circulación y cumplimiento en la parte que le corresponde. Dios guarde a V.E. muchos años. México, 31 de octubre de 1822. A las dos de la mañana. José Manuel de Herrera.

[45] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 142-143.
[46] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 23-24.

Fechado el 31 de octubre, y sin firma, se publica una *Indicación del origen y de los extravíos del Congreso Mexicano, que ha motivado su disolución. Publícase por orden del gobierno, en la Imprenta Imperial.* Referirnos a él nos distraería, al no añadir algo a las imputaciones ya conocidas.

El 2 de noviembre, y firmada por José Manuel Herrera, secretario de Relaciones, se oficia a los que deben formar la Junta Nacional Instituyente: "El Emperador ha dispuesto que la reunión de los señores diputados propietarios y suplentes que han de componer la junta prevenida en el decreto imperial de 31 del próximo pasado, se verifique esta tarde a las cinco media, en el salón de sesiones del extinguido Congreso, donde se presentará S.M. para los efectos que expresa el artículo 6o. del mismo decreto...".

El decreto imperial fechado el 2 de noviembre, con el título de *Bases orgánicas de la Junta Nacional Instituyente*, lo consignaremos al ocuparnos de la instalación de ella.

El acto de disolución fue exactamente cumplido. El general Cortázar se presentó a las diez de la mañana del día 31 de octubre, e interrumpiendo la sesión se informó al Congreso que tenía el encargo de comunicarle un decreto del emperador. Algunos diputados, "sin experiencia de los negocios ni conocimiento de las circunstancias," escribe Zavala, reclamaron contra el conducto que usaba el emperador. El general Cortázar entró al salón de sesiones y leyó el decreto de disolución. "El presidente del Congreso nada expresó ni tuvo energía para poner a discusión varias proposiciones que se presentaron...". Los diputados se retiraron del Congreso. Los secretarios levantaron una certificación de lo ocurrido, y Cortázar "añadió de su letra estas palabras: *Dejando a salvo mis respetos y en ahorro de mayores males, he procedido*", como registra Alamán, "queriendo dejar abierto el camino para lo que pudiese ocurrir en adelante".[47]

Más que toda consideración sobre el suceso, son las palabras de Cortázar su corolario más precavido y cierto.

[47] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 615-616.

Parte séptima

LA REVOLUCIÓN REPUBLICANA

1

LA JUNTA INSTITUYENTE Y EL PLAN DE VERACRUZ

La Junta Nacional Instituyente tiene su primera sesión, la de su instalación, el 2 de noviembre. Su última será el 6 de marzo de 1823. "Quería Iturbide evitar que se le acusase de haber asumido el poder legislativo, y por esto pretendió —escribirá Alamán— conservar una sombra de éste". La designación de sus individuos la realiza él mismo, con pocos independientes y una mayoría de los que en el Congreso habían sido más adictos u "obsecuentes a su voluntad".[1]

De la terna presentada a Iturbide, éste designa como su presidente al marqués de Castañiza, obispo de Durango. Iturbide se presenta a la Junta acompañado del príncipe heredero, los secretarios del despacho, consejeros de Estado, generales residentes en México "y un inmenso concurso que le aclamaba y que quedó a la entrada del salón extendido por las galerías", según el acta del día. Iturbide se dirige a la Junta, y recuerda que él declaró la independencia: "desde entonces —expresa— mi voz por una exigencia forzosa y esencial del acto se constituyó el órgano único de la voluntad general de los habitantes de este imperio". Consideró que debía tomar "los verdaderos puntos de la voluntad que en sentido político se llama general", dio las bases para constituir la nación, y advirtió que se convocase a la representación nacional, "no por la forma demagógica anárquica de la Constitución española, sino por reglas justas y convenientes a nuestras circunstancias". Lo pudo hacer por él mismo, pero lo confió "a una junta de hombres los más sobresalientes y recomendables por su ilustración, probidad fortuna y destinos".

La Junta formó la convocatoria que tanto se ha censurado, mas el vicio mayor fue "haber dejado la elección... bajo el influjo ominoso de sus ocultos enemigos y de los enemigos también de la voluntad nacional". Lo demuestran los hechos, afirma. Hoy "ha sido necesario dar un paso retrógrado" hacia las bases del Plan de Iguala. El más grave error fue "transferir de la masa de la nación a quien exclusivamente pertenece —el sumo poder—, a un Congreso Constituyente" no sujeto por ley alguna, sino por "la que quiera a sí mismo prescribirse... y esta idea es tan característica y peculiar del despotismo como incongruente y repugnante a la de un gobierno moderado". Importa su afirmación de "que nuestro Congreso siguió el ejemplo de las Cortes españolas —y agregar—: ¿pero qué copia de un modelo deforme no traslada las imperfecciones en aumento? y a dónde iríamos a parar si siguiéramos en todo aquel ejemplo pernicioso?" Iturbide incurre en el público olvido de que el 31 de agosto el gobierno había enviado al Congreso la consulta del Consejo de Estado pidiendo "se declare por

[1] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 618.

constitución provisional de este imperio la española. sin derecho de los poderes para hacer ni promover variación alguna, hasta que se publique la peculiar de este suelo", y ello presumiblemente para resolver el conflicto con el Congreso.

Los desastres en Francia y España, señala hoy Iturbide, se debieron a la acumulación de todo el poder en el cuerpo constituyente, cuya única función debe ser la de formar la Constitución, reservándose a la autoridad provisional "el derecho de hacer mover la máquina hasta el momento de su completa renovación". "Me propuse en suma —dice Iturbide de sus primeras intenciones—, se obrase en todo con sujeción a una ley anterior; que la ley de la voluntad general fuese superior a toda autoridad; y que esta ley fuese al mismo tiempo el apoyo y el vínculo de la confianza de la nación". A ese punto regresa, supuesta esa ley en el Plan de Iguala, cuando su voz, como lo declara, "se constituyó en órgano único de la voluntad general".

Como órgano o no de esa voluntad, es hasta el 2 de noviembre cuando Iturbide expone su primer proyecto institucional en las Bases Orgánicas de la Junta Nacional Instituyente, y aunque en esa fecha pretende partir únicamente del Plan de Iguala, no puede dejar de estar condicionado por los acontecimientos posteriores. El texto de las Bases amerita consignarse en sus artículos principales:

"1a. Tendrá la iniciativa de la Constitución que ha de formarse para el Imperio; y en consecuencia acordará el plan o proyecto de ella, que le parezca más propio y conveniente a sus circunstancias, para considerar la forma de gobierno proclamado y establecido con arreglo a las bases adoptadas, ratificadas y juradas por toda la Nación.

2a. Acompañará al proyecto de Constitución la correspondiente ley orgánica, que determine el modo con que se debe discutir, decretar y sancionar la misma Constitución, y satisfaga el interesante objeto de precaver los choques y rozamiento de los poderes Legislativo y Ejecutivo en este punto, para lo cual procederá de acuerdo con el último.

3a. Aunque en el proyecto de la Constitución se haya de comprender todo lo conveniente al sistema representativo, será objeto especial de la junta formar la convocatoria para la inmediata representación nacional, prescribiendo las reglas que sean más justas y adaptables a las circunstancias del Imperio, y a la forma de su gobierno proclamado, establecido y jurado, y poniéndose para esto de acuerdo con el mismo Gobierno, conforme a lo que en idéntico caso calificó la Junta Provisional Gubernativa en cumplimiento de los artículos respectivos del Plan de Iguala y Tratado de Córdoba; y lo que en esta forma se ordenare por la convocatoria, se observará indefectiblemente (por esta sola vez) a reserva de que en la Constitución se adopte o rectifique según las luces de la experiencia.

4a. Con toda la brevedad posible procederá a organizar el plan de Hacienda pública a fin de que haya el caudal necesario para su creación con los gastos nacionales y cubrir el considerable actual deficiente: poniéndose de acuerdo con el poder ejecutivo.

5a. La Junta conservará por su representación nacional el ejercicio del poder legislativo, en todos los casos que en concepto de no poderse reservar, para que tengan la emanación y consecuencia que en todas las leyes debe procurarse de la Constitución, proponga como urgentes al poder ejecutivo (*sic*).

6a. Para la discusión del proyecto de Constitución, convocatoria de ella, reglamentos y demás leyes, se admitirán los oradores del gobierno.

7a. Por primera diligencia formará la Junta para su gobierno interior un reglamento que

sea propio, para dar al plan, orden y facilidad a todas sus operaciones, y determinar los justos límites de la inviolabilidad de los Diputados, contrayéndola precisamente a lo que se necesita para el libre ejercicio de sus funciones.

8a. Publicará un manifiesto a la Nación, inspirándole la confianza que pueda ofrecerle por el celo y actividad de las grandes funciones de su encargo".

Después de conocer las Bases, cuyo empirismo no puede ser más inmediato, los diputados prestan sobre los Evangelios el juramento que el emperador aprobó:

"¿Juráis ser fiel al Emperador, y desempeñar en beneficio general del Imperio con toda la exactitud que os sea posible las obligaciones de vuestro encargo, en esta junta Nacional Instituyente, sujetándoos a las bases orgánicas que ha prescrito S.M.I.? —Sí juramos—. Si así lo hiciéreis Dios os premie, y no os lo demande".[2]

El 6 de noviembre quedan integradas las comisiones de la Junta, y en la de Constitución y Convocatoria figuran Mendiola, Guridi y Alcocer, José Toribio González, el marqués de Rayas, Larreinaga, Carlos Espinosa, Martínez de los Ríos, Argandar y Mendizábal. En la del manifiesto que debe dirigirse a la nación, Zavala, Bocanegra y Orantes.

* * *

El 8 de noviembre el general Santa Anna escribe al ministro Herrera desde Veracruz. Le expresa su adhesión por la disolución del Congreso, "por los poderosos motivos que S.M. el emperador tuvo en consideración", y por la creación de una "Junta Nacional compuesta de los Diputados de mejor nombre y concepto: dispuse su publicación —la del decreto de disolución— en esta plaza y en la Provincia a mi cargo, para inteligencia de sus habitantes que aplaudirán la enérgica medida de S.M.I. como única que demandan las circunstancias, para dar a la felicidad de la Nación el impulso que necesita".[3]

Juan Suárez y Navarro en su *Historia de México y del general Antonio López de Santa Anna* (México, 1850), ignora éste y otros documentos de su impredecible protagonista, no obstante declarar que nadie "ha tenido a su disposición mejor que yo, los documentos oficiales más importantes, ni ninguno ha podido conocer las causas de muchos acontecimientos". En los días de la coronación, escribirá Suárez y Navarro, después de las celebraciones y juramentos, "un joven general volaba de Jalapa a Veracruz, para proclamar otra forma de gobierno, y la ruina total del sistema monárquico". Para Suárez y Navarro no fue la de Santa Anna "una sublevación semejante a la que hizo Felipe de la Garza en las Provincias Internas de Oriente; no era tampoco una sedición puramente militar, producida por la insubordinación, o por resentimientos personales". Pero no debemos anticipar el suceso, ni nuestro asunto es la figura del "personaje que desde ese instante ocupa —según la apología de Suárez y Navarro, y también en sentido contrario— las páginas de nuestra historia, y cuyos hechos llenan de principio a fin los anales de nuestros tiempos".[4] Dejemos tan sólo constancia de la carta

[2] En relación con lo tratado en las sesiones de la Junta, remitimos a las actas correspondientes en el *Diario de la Junta Nacional Instituyente del Imperio Mexicano*, 2 vols., México, 1822.

[3] Emilio del Castillo Negrete, *op. cit.*, tomo XI, p. 125.

[4] J. Suárez y Navarro, *op. cit.*, pp. 23-24.

de 8 de noviembre en la que da Santa Anna su expresa adhesión al acto de disolución del Congreso.

El 27 de octubre, el general Lemaur, que había sustituido al general Dávila al mando en el Castillo de San Juan de Ulúa, ataca el puerto de Veracruz siendo rechazado.

El 10 de noviembre Iturbide sale de México a Veracruz a atender "gravísimos negocios de la patria", según manifiesta en un documento que publica, sin ofrecer detalles sobre tales negocios. Bocanegra, diputado en la Junta Instituyente, dice que dos versiones circulan: preparar la toma de Ulúa, y "apaciguar la inquietud y tormenta que suponía como efecto del sentimiento del brigadier D. Antonio López de Santa Anna, a quien Iturbide había separado del mando de Veracruz", siendo la cierta esta última.[5]

Estamos en vísperas de acontecimientos que se sucederán contradictorios para resolverse en el mismo sentido.

Volvamos a la Junta Nacional Instituyente.

El 9 de diciembre se recibe oficio del ministro de Relaciones comunicando la salida de Iturbide a Puebla. Se aprueba que una comisión de ella se presente al emperador a cumplimentarlo "con tan interesante motivo", que el acta de la sesión no revela, y que por el ministro de Justicia "se manden hacer rogaciones públicas por la salud de S.M.I. y feliz éxito de su viaje".

La Junta, sin cuestionar el ocuparse de asuntos extraños a la convocatoria del nuevo Congreso y al proyecto de Constitución, despachará desde los primeros días los más diversos, urgentes o no: la prohibición de extraer del país dinero, frutos, etc.; el aumento de un visa en la aduana de Veracruz; aprobación de su manifiesto a la nación; su reglamento interior; que se entregue al general Bravo el decreto que lo declaró benemérito; que las elecciones de ayuntamientos se ajusten al decreto de las Cortes españolas de 27 de septiembre de 1813; que se turnen a sus comisiones solicitudes de jubilaciones; se inicia la discusión del proyecto de ley de colonización, etc. Los que la ocupan preferentemente son los de colonización y el reglamento interior.

El Manifiesto de la Junta Nacional Instituyente a la nación, fechado el 13 de noviembre, presenta "al juicio y deliberación de todas las ocurrencias notables de estos días, y causas que han obrado para haberle confiado la representación que ejerce mientras por nueva convocatoria" se llama a un nuevo Congreso. Cuando por imperio de las circunstancias el emperador disolvió el Congreso, cuidó con esmero de conservar "la forma representativa de gobierno bajo que fue emancipada la nación", declara la Junta. Iturbide "no quiere obrar ni gobernar por sí; reconoce la soberanía de la nación; se confiesa príncipe por ella; se llama constitucional"; y al desaparecer el Congreso crea la Junta integrada con individuos elegidos por la nación, por lo que se llama nacional, quedando todas las provincias representadas. La Junta formará el necesario sistema de hacienda, como uno de los tres asuntos primeros que la ocuparán.

"Trabaja y hará la Junta porque la nación vea asegurados los derechos y deberes del hombre en sociedad; procurará que sea efectivo el goce de la igualdad proporcional que le concedió la naturaleza...; y cuidará de que se disfrute la propiedad y demás derechos legítimos bajo, la égida sagrada de la ley...".

[5] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, p. 102.

* * *

Una vez proclamada y consumada la independencia no puede desconocerse ni derogarse el fundamento de ella: la titularidad de la soberanía en la nación, empleando, como se emplea por el propio Iturbide, la palabra *pueblo* ni sus más obligadas consecuencias en los postulados de la revolución liberal. En España, el antiguo régimen puede abolirlos acudiendo al principio de la legitimidad dinástica. En México, el emperador se encuentra en estado de orfandad, y su único título es la supuesta. sanción de la soberanía nacional. Iturbide y quienes lo aconsejan no pueden evadirse de la gran trampa en que han caído, y a un año de consumada la independencia está inédito, o más exactamente, informulado su proyecto sobre el país, sin atreverse a formular el de la autoridad personal del mismo Iturbide, o el de un grupo que funde su título en la decisión de asumir el poder. En América Latina, el conservadurismo, y aun el liberalismo, crean una manera propia de ejercer la autoridad personal —cuando no es la sola detentación del poder por el poder mismo—, la que un autor llamara con acierto el *cesarismo democrático.* Es la respuesta a la anarquía y, la fatiga por las asonadas endémicas, o la culminación en la vida del caudillo, o una y otra.

Si el emperador es un huérfano dinástico, también lo es en la insurgencia, mas no acepta pasar por un libertador contrito. En la hora en que llega al trono se pregunta ante el Congreso: "¿Qué aliciente tiene éste para un hombre que ve las cosas a su verdadera luz?" Su problema no es únicamente de arrogancia sino también de grave daltonismo. Con la disolución del Congreso, que sólo ofrecía una oposición tenaz y desconcertada, concibe la criatura híbrida que es la Junta Nacional Instituyente.

* * *

Entre la instalación de la Junta y el 10 de diciembre, la Junta aprueba 67 artículos de su reglamento interior y 31 de la ley de colonización. En el reglamento se aprueba que los diputados, en los delitos "de lesa Majestad Divina o humana, no gozarán de fuero privilegiado sino que serán juzgados como si no fueran diputados", manteniendo su inmunidad por sus opiniones políticas en la Junta, y el privilegio de ser juzgados en delitos comunes por el tribunal del Congreso.

El 7 de diciembre el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, José Domínguez, informa a la Junta en un largo documento en el que en Veracruz el brigadier Santa Anna "aprovecha la ocasión de la ausencia del Capitán general, la ignorancia en que las autoridades estaban de su separación del mando, y con los soldados de su cuerpo que daban la guarnición, se pronuncia... ¡Traidor! —exclama el ministro en el documento—, pues aún no se sabe el sistema que ha proclamado, ni es fácil inferirlo, porque para él todos son iguales: República, dijo, y después entró en convenios con el gobernador de San Juan de Ulúa". El informe de Domínguez se lee en la sesión de la Junta el día 10, y ella aprueba que se dirija un manifiesto a la nación, encomendando su redacción a Argandar, Larreinaga y Román.

No nos demoraremos en antecedentes episódicos de la proclamación de Santa Anna, como el frustrado y turbio plan para tomar el fuerte de Ulúa frente a Veracruz el 26 de octubre, previo un intento de sobornar oficiales españoles, cuya versión la da Bustamante y la ratifica Alamán. Plan en el que participa el general Echávarri, quien rinde un informe a Iturbide sos-

pechando de Santa Anna el propósito de que los españoles lo apresaran, resentido por su reciente nombramiento como capitán general de la provincia. Tampoco atenderemos a la ocupación de 1 297 000 pesos, propiedad de españoles, que iban a exportarse del país y de los que el gobierno dispuso para sus gastos, lo "que fue un golpe mortal para su crédito —el de Iturbide— y que acabó de enajenarse las voluntades de toda la gente sensata", juzga Alamán.[6]

Ante los sucesos de octubre en Veracruz, Iturbide, decidido a que Santa Anna se traslade a México, en su orden al ministro de Guerra lo previene que se haga "en términos honrosos... llamándolo a la Corte, adonde se necesitaban sus servicios en una comisión que debió considerar como un ascenso".[7] En Jalapa se encuentran ambos, y Santa Anna hace esfuerzos para que se revoque la orden, logrando que se le autorice a pasar a Veracruz para unirse después al emperador. Iturbide y él se ven por vez última el 1 de diciembre, cuando aquél regresa a México.

Al llegar a Veracruz, el 2 de diciembre, Santa Anna publica una proclama. Con ella se inaugura en México la vida política del más fabuloso personaje de la primera mitad del siglo. México, se dice en ella, "eligió desde los primeros pasos de su emancipación política el (gobierno) representativo, que reasumió el Soberano Congreso por la unánime voluntad de los pueblos, y en virtud de los poderes que confió a sus diputados". Todos saben que el Congreso "sucumbió al grave peso de un poder que logró disolverlo; mas el voto general de la misma Nación recobrando su libertad, ha unido los sufragios de todas sus provincias y ha proclamado en todas ellas el sistema de república que fija el gobierno en la voluntad de todos y cada uno de sus miembros, sin vincularlo en una sola voluntad absoluta. En virtud de estos generales sentimientos, y a la voz imperiosa de todos los habitantes de esta América Septentrional, hice proclamar en esta ciudad en la tarde de hoy en nombre de la misma Nación Mexicana el gobierno republicano, bajo de aquellas circunstancias en que lo establezca una asamblea representativa y con consulta de la Excelentísima Diputación provincial he adoptado provisionalmente cuantas medidas se han considerado necesarias para la común seguridad... Una de ellas es que se observen inviolablemente las Tres garantías publicadas en Iguala, que sostendrán las tropas regionales... haciéndose reo de lesa Nación cualquiera que atente contra cada una de ellas". Otra medida es lograr un armisticio con el general Lemaur, en San Juan de Ulúa, para que no haya hostilidades, acordándose que viajen a España dos comisionados "a combinar su entrega, y los tratados de comercio recíprocos que hayan de establecerse con ventaja de ambos hemisferios". Provisionalmente restablece el libre tráfico marítimo con España.

Santa Anna da fin a su manifiesto congratulándose "por este remarcable suceso que os llenará de felicidades, y de gloria a la Nación Mexicana".[8]

En su *Historia militar y política*, Santa Anna afirmará que Iturbide "sabiendo que no habla sido de los adictos a su coronación, me destituyó... y dispuso mi traslación a la capital... golpe tan rudo lastimó mi pundonor militar y quitó la venda de mis ojos: vi el absolutismo en toda su fuerza y, me sentí luego alentado para entrar en lucha con él. Decidí en ese mo-

[6] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 619-620.

[7] *Manifiesto de Liorna*, p. 269.

[8] Carlos María de Bustamante, *Diario histórico de México*, edición agregada por Elías Amador, Zacatecas, 1896, pp. 17-18.

mento ocuparme seriamente de reponer a la nación en sus justos derechos... (y) al frente de mis soldados proclamé la República el día 2 de Diciembre...".[9]

Llamar la atención sobre las contradicciones en Santa Anna sería una ardua tarea folletinesca a lo largo de más de 30 años. Santa Anna en un *Manifiesto a sus Conciudadanos*, en 1823, habla de un levantamiento que se preparaba para principios de ese, año, pero que las órdenes de trasladarse a México lo decidieron a dar su grito el 2 diciembre anterior.[10]

Según Alamán y los contemporáneos, hallándose en Veracruz Miguel Santa María, en espera de un barco que lo llevase a Colombia, fue solicitado por Santa Anna para que formase un plan y una proclama. Ésta, fechada el 2 de diciembre, acusa a Iturbide por la disolución del Congreso, y por la toma de los caudales de españoles, violando sus juramentos. El trastorno lo incitó a proclamar la república.

* * *

El 6 de diciembre se publica el Plan de Veracruz. Nettie Lee Benson con laconismo preciso se refiere al Plan: "documento mal compuesto, desmesuradamente largo, verboso... en él se describía un programa político destinado a atraer partidarios. Era una confusa mezcla del Plan de Iguala, el Memorial de De la Garza y la Proclama de Santa Anna".[11] El plan consta de 17 artículos a los que se agregan 22 bajo el título de Declaraciones del Plan, y que firman Santa Anna y el general Victoria, que se le ha unido.

No obstante su extensión, el documento merece transcribirse.

"Art. 1o. La religión C.A.R. será la única del Estado, sin tolerancia de otra alguna.

Art. 2o. La América del Septentrión es absolutamente independiente de cualquiera otra potencia, sea cual fuere.

Art. 3o. Es soberana de sí misma, y el ejercicio de esta soberanía reside únicamente en su representación nacional, que es el soberano Congreso mexicano.

Art. 4o. Es libre, y además con su actual emancipación se halla al presente en un estado natural.

Art. 5o. Como independiente y soberana y libre, y en un estado natural, tiene plena facultad para constituirse conforme le parezca que más conviene a su felicidad, por medio del soberano Congreso constituyente.

Art. 6o. A éste toca única y exclusivamente examinar el voto de las provincias, oír a los sabios y escritores públicos, y en fin, después de un maduro examen declarar la forma de su gobierno, fijar los primeros funcionarios públicos, y dictar sus leyes fundamentales, sin que persona alguna, sea de la graduación que fuese, pueda hacerlo, pues la voluntad de un individuo o de muchos sin estar legítimamente autorizados al efecto por los pueblos, jamás podrá llamarse la voz de la nación.

Art. 7o. Lo mismo es que el Congreso constituyente nada haya declarado, que el haberlo hecho con violencia y sin libertad.

[9] Antonio López de Santa Anna, *Mi historia militar y política, 1810-1874. Memorias inéditas*, México, 1905.

[10] Antonio López de Santa Anna, manifiesto citado, pp. 8-9.

[11] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 19.

Art. 8o. Según lo expuesto, es evidente que habiendo D. Agustín Iturbide atropellado con escándalo al Congreso en su mismo seno, la mañana del 12 de mayo de 1822, faltando con perfidia a sus solemnes juramentos, y prevalídose de la intriga y de la fuerza, como es público y notorio, para hacerse proclamar emperador, sin consultar tampoco con el voto general de los pueblos, la tal proclamación es a todas luces nula, de ningún valor ni efecto, y mucho más cuando para aquel acto de tanto peso, del que iba a depender la suerte de la América, no hubo Congreso por haber faltado la mayor parte de los diputados.

Art. 9o. Por tanto no debe reconocerse como tal emperador, ni obedecerse en manera alguna sus órdenes; antes bien, por tales atentados cometidos desde el 26 de agosto hasta el día, sobre todo, la escandalosa, criminal y temeraria disolución del Congreso soberano, y los posteriores que seguirá cometiendo, tendrá que responder a la nación, la que a su tiempo le hará los grandes cargos correspondientes con arreglo a las leyes, que también alcanzarán a los pueblos que gimen bajo un yugo más duro que el del anterior inicuo gobierno.

Art. 10. El cumplimiento del antecedente artículo lo reclama vigorosamente la justicia universal, el honor y la vindicta pública de la América del Septentrión, altamente ofendida por un hombre que socolor de libertarla, la ha ultrajado de todos modos, sin que valga de alegato la pretendida inviolabilidad, por suponer ésta la formal, solemne y libre declaratoria de la forma de gobierno por el soberano Congreso constituyente, y además también la formal solemne y libre declaración de la persona a quien pudiera corresponderle, y la última porque siendo base adoptada provisionalmente, aunque dicho Congreso hubiera sancionado lo primero y segundo, podría haber derogado o restringido el artículo de la constitución española que la concede.

Art. 11. Tampoco podrá servir de alegato el que dicha proclamación se ha vigorizado por los hechos posteriores, por ejemplo, con la expedición de órdenes que hasta la fecha han corrido con el nombre del pretendido emperador; porque la circulación de éstas no dan el suficiente baño de legitimidad a unos actos intrínsecamente nulos, inválidos e insuficientes, así como no da ni puede darlo la larga posesión, o llámesele en su verdadero significado, la larga usurpación de los derechos de los pueblos.

Art. 12. En los países libres, sin Congreso, que es la reunión de todos, o por lo menos, de la mayor parte de los ciudadanos diputados, precisamente nombrados por las provincias en la forma legal, no hay representación nacional ni cuerpo legislativo y sin ambos, ni constitución ni leyes que obliguen a su cumplimiento por falta de la verdadera fuente de donde deben emanar.

Art. 13. Con la disolución del Congreso se halla la nación en una tal orfandad y sin una primera autoridad legítimamente constituida; porque la que de hecho se halla al frente, tiene los substanciales vicios de invalidación anunciados en los anteriores artículos que la vuelven del todo nula, y sin más leyes que la ambición, el capricho y pasiones; en consecuencia, nos hallamos en una perfecta anarquía.

Art. 14. Para evitar la continuación de los funestos resultados de ellas será nuestro deber principal reunir por cuantos medios están al alcance humano a todos los diputados, hasta formar el soberano Congreso mexicano, que es el órgano de la verdadera voz de la nación, y el que sostenido únicamente podrá salvarnos del actual naufragio.

Art. 15. Reunido ya el número suficiente de diputados en el punto que elijan para formar el Congreso, y estando en absoluta libertad, lo harán entender así a las provincias, a fin

de inspirarles la confianza que no tienen en el día del actual gobierno. Asimismo les harán entender los vicios y nulidades de las resoluciones dictadas en México, las que no teniendo otro origen que la arbitrariedad o la fuerza, no obligan a su cumplimiento; quedando igualmente a su cargo dictar las medidas, instrucciones y providencias oportunas para continuar la empresa hasta dar el último golpe que demanda la grande obra de nuestra regeneración política que le está encomendada.

Art. 16. Libre el Congreso, y puesto en el punto que señale, procederá a nombrar una junta o regencia compuesta del número de individuos que tenga a bien, en la que depositará el poder ejecutivo, el que como tal reconocerán provisionalmente las provincias, autoridades habitantes todos de esta América, hasta que se declare la constitución permanente del Estado; delegando igualmente el supremo poder judicial con arreglo a las circunstancias, pues debe quedar también con separación.

Art. 17. Para que el Congreso pueda dar principio a sancionar las primeras bases de la constitución permanente del Estado, es necesario que además de no perder de vista lo indicado en el art. 6o., que lo haga en Congreso pleno. Así lo exigen la justicia, la política y la tranquilidad de la América; porque dependiendo indefectiblemente de estos principios y primeros pasos nada menos que el que seamos felices para siempre o para siempre desgraciados, deben darse con toda aquella solemnidad, circunspección, juicio y previsión que demanda asunto de tanta gravedad, evitando así aun la más ligera sombra de queja de las provincias.

A este plan se hicieron varias aclaraciones importantes, y son las siguientes:

Primera. Se conservará la unión, con todos los europeos y extranjeros radicados en este suelo, que no se opongan a nuestro sistema de verdadera libertad.

Segunda. Son ciudadanos todos sin distinción los nacidos en este suelo, los españoles y extranjeros radicados en él, y los extranjeros que obtuviesen del Congreso carta de ciudadano según la ley.

Tercera. Los ciudadanos gozarán de sus respectivos derechos conforme a nuestra peculiar constitución, fundada en los principios de igualdad, propiedad y libertad. conforme a nuestras leyes que los explicarán en su extensión; respetándose sobre todo sus personas y propiedades, que son las que corren más peligro en tiempo de convulsiones políticas.

Cuarta. El clero secular y regular será conservado en todos sus fueros.

Quinta. Los extranjeros transeúntes tendrán una generosa acogida en el gobierno, protegiéndose en su persona y propiedades. El congreso señalará los requisitos necesarios para que puedan radicarse en el país.

Sexta. Los ramos del Estado quedarán sin variación alguna, y todos los empleados políticos, civiles y militares se conservarán en sus empleos y destinos, menos los que se opongan al actual sistema, pues a éstos con conocimiento de causa se les suspenderá hasta la resolución del Congreso.

Séptima. Se permitirá el libre y franco comercio y demás tráfico de intereses en lo interior, sin que nadie sea molestado en sus giros y tránsitos.

Octava. Los empleos, grados y honores, de cualquiera clase que sean, que desde el presente grito de la verdadera libertad de la patria en lo de adelante, diese Iturbide, no serán reconocidos, si no es que la nación quiera aprobarlos, porque ellos seguramente no van a tener

por objeto la utilidad común, sino la de comprometer a los individuos a quienes se les confieran, para aumentar así su facción como en otro tiempo lo hizo Novella.

Novena. En las causas civiles y criminales procederán los jueces con arreglo a la constitución española, leyes y decretos vigentes expedidos hasta la temeraria extinción del Congreso en todo aquello que no se oponga a la verdadera libertad de la patria.

Décima. En las de conspiración contra la verdadera libertad de la patria se asegurarán las personas, quedando a disposición del soberano Congreso para que dicte a su tiempo la pena que debe aplicárseles, como a uno de los mayores delitos.

Undécima. Se hace especial encargo a las autoridades políticas, civiles y militares que estén a la mira con los emisarios y clase de individuos que con sus maquinaciones intenten corromper la opinión sana de los pueblos acerca de la verdadera libertad, asegurándolos en tal caso; lo que verificado, procederán los jueces a la plena averiguación; y si de ella resultaren reos de lesa nación, se obrará contra ellos conforme a lo explicado en la antecedente declaración.

Duodécima. De consiguiente, no se podrá a pretexto de diversidad de opiniones ni distinción de partidos, quitar la vida a persona alguna. La autoridad o juez, sea cual fuere el que lo hiciere, será tenido como reo de frío asesinato, y juzgado así por las leyes; no sirviendo de pretexto o excusa el que la ejecución se mande por autoridad superior, pues la que diese la orden y la que la ejecutase serán tenidos como tales, sino expresamente en acción de guerra.

Decimotercia. Cuando con obstinación se desprecian los fundados clamores de los pueblos, y se les despoja de sus más sagrados derechos por medio de la fuerza, no teniendo otro fruto de sus justas reclamaciones que redoblar los arbitrios del opresor para continuar oprimiéndolos, y sin la más remota esperanza de remedio, no les queda más recurso que repeler la fuerza con la fuerza. Éste es el doloroso caso en que nos hallamos.

Decimacuarta. En consecuencia, se creará un ejército libertador, y se compondrá de los cuerpos ya formados que se adhieran al sistema de libertad verdadera. Estas tropas observarán la más exacta disciplina, y se considerarán de línea. Todos sus jefes y oficiales se conservarán en los grados y empleos que tengan a la fecha, con opción a los de escala y a los demás a que se hagan acreedores por sus nuevos servicios; y respecto de los neutrales, el Congreso determinará de sus grados y ascensos; pero a los que se opongan con conocimiento de causa, se les suspenderá de sus empleos hasta que el mismo resuelva sobre este punto.

Decimaquinta. Las compañías de milicias nacionales, y los paisanos que entrasen a servir en ellas uniéndose al ejército, serán reputados como provinciales, y gozarán el fuero militar con arreglo a Ordenanza, sin perjuicio de las declaraciones favorables que después haga el Congreso respecto a estos cuerpos, como de algunos de sus individuos en lo particular, según los méritos que puedan adquirir.

Decimasexta. Se atenderá a los contraídos desde el grito de Iguala hasta la fecha, sin olvidarse de los buenos servicios de la primera revolución; teniéndose por muy especiales los que se hagan ahora nuevamente para reintegrar a la nación en sus derechos, que actualmente se hallan vulnerados.

Decimaséptima. Para la provisión de empleos de todas clases, se atenderá sobre todo a los méritos, talentos y virtudes públicas de los sujetos a quienes hayan de conferírseles, fijando el Congreso las reglas necesarias al efecto; pero mientras se reúne, sólo podrá darse provisionalmente aquellos que sean de absoluta necesidad o conocida conveniencia.

Decimaoctava. En el caso que algunos jefes con el resto de sus tropas, despreciando su honor, y haciéndose sordos e insensibles a los clamores de su propia conciencia y del suelo en que recibieron el ser, tratasen de batir y destruir a sus propios hermanos, que sostienen sus más caros derechos, será forzoso (aunque muy sensible) usar de las armas, y que la guerra decida lo que no pueden alcanzar, ni la justicia, ni los vínculos más sagrados, ni el dulce amor a la patria, ni aun la misma naturaleza, portándonos por nuestra parte con la mayor moderación, y guardando siempre los derechos de la guerra y de gentes, con la firme protesta ante Dios y los hombres, de que economizaremos hasta donde nos sea posible, la más leve gota de sangre; sangre que lloraría eternamente la América Septentrional.

Decimanona. Las tropas del ejército libertador se sostendrán de los ramos conocidos por de hacienda pública, y cuando los buenos patriotas hicieren espontáneamente algunos préstamos con tal objeto, serán satisfechos a su tiempo por la nación, con toda puntualidad. Nada se dice de la deuda pública, por estar este punto ya declarado por el Congreso.

Vigésima. Los intendentes, tesoreros y administradores de dichos ramos, sin orden expresa y visto bueno del jefe respectivo en cada provincia, declarado por el sistema de la libertad, no suministrarán cantidad alguna, y sí sólo podrán hacerlo en el caso de una urgencia extraordinaria, para el preciso socorro de nuestras tropas, pero aun en este caso, recogerán a la mayor brevedad el documento o constancia prescripta, sin cuyo requisito no se les pasarán en data.

Vigesimaprima. Se observarán las disposiciones publicadas por D. Antonio López de Santa Anna en nuestro glorioso grito de libertad del día 2 de este mes, las que fueren consultadas por la Exma. Diputación provincial".

La última cláusula de las adiciones firmadas por los generales Santa Anna y Victoria el 6 de diciembre, declara que "todo lo que se previene en el presente plan, ha de entenderse sin perjuicio de las altas facultades del Soberano Congreso, el que ya reconocido y libre, podrá hacer las variaciones convenientes, según lo pida la naturaleza de los asuntos que en él se refieren, pues estamos muy lejos de imitar la arbitrariedad y conducta de aquellos que se han querido arrogar lo que sólo es privativo de la soberanía nacional. ¡Viva la nación! ¡Viva el soberano Congreso libre! ¡Viva la verdadera libertad de la patria, sin admitir ni reconocer jamás las órdenes de D. Agustín Iturbide! —Veracruz 6 de Diciembre de 1822, segundo de la independencia y primero de la libertad.- Antonio López de Santa Anna.- Guadalupe Victoria.- Mariano Barbabosa, secretario".

El documento lo reproduce Bustamante en la *Continuación del cuadro histórico*, tomo II, pp.62-68, atribuyéndolo expresamente a Miguel Santa María. Su limitado conocimiento en nuestros días justifica su transcripción.

* * *

El Plan, después de la proclama del día 2, reserva la sorpresa de establecer que una vez restaurado, al Congreso le toca "después de un maduro examen declarar la forma de gobierno", pudiendo "hacer las variaciones convenientes" al mismo Plan. Se proyecta la reintegración del Congreso disuelto en el punto que sus diputados elijan, en donde se nombrará "una junta o regencia... en la que depositará el poder ejecutivo" provisional, hasta que se promulgue la Constitución definitiva. Ciertas precauciones han surgido, o las indica Santa María, cuando

después de afirmar como principios de la Constitución la igualdad, propiedad y libertad, se mantienen todos los fueros del clero secular y regular. Excepto en el frontal desconocimiento de Iturbide y la restauración del Congreso, el Plan de Veracruz incurre en las ambigüedades de la consumación de la independencia.

En el largo documento no se menciona la palabra república, mas la omisión no puede atenuar su significado. No es Santa Anna, el súbito republicano, quien ostenta los mejores créditos para la proclamación, pero la historia no prescribe personajes ideales. Son las leyendas las que los crean, y las historias en blanco y negro.

Bustamante, preso en el convento de San Francisco, recibe noticias y escribe el 16 de diciembre en su *Diario*: "Como el tiempo todo lo descubre, parece que por su virtud gastadora se ha sabido que Santa Anna no ha proclamado República, sino que sólo ha pretendido que se reúna el Congreso constituyente disuelto, que se le ponga en libertad en el lugar que éste elija, y que en él se pronuncie por el gobierno que guste la nación por sus representantes". Muchos que han visto las proclamas de Veracruz afirman que se proclamó la república, "lo que presenta muchas dificultades —reflexiona Bustamante— a los que están prevenidos contra ella y no han leído los *derechos del hombre* de Tomás Payne, cap.7, que anda en manos de todos".[12]

Desconocido el emperador, las alternativas desaparecen, y de nuevo encontramos el nombre de Paine "en las manos de todos", en la traducción libre de Santiago Felipe Puglia publicada en Filadelfia ese año de 1822. El capítulo 7 de la traducción de Puglia corresponde al III de la segunda parte de la obra de Paine, y es un alegato más contra la monarquía y en favor de la democracia. Circula también la nueva edición, de ese año, del *Desengaño del hombre* del mismo Puglia, al que ya nos referimos, pero no hallamos citas de él, tal vez por su acusado anticlericalismo.

El mismo Bustamante, en la *Continuación del cuadro histórico*, reproduce una carta de Santa Anna a Iturbide, dirigida así: "Al Sr. D. Agustín de Iturbide / del general de la república mexicana", y fechada el 6 de diciembre. "Bien sabe U. lo que trabajé y contribuí para que se coronase... —escribe— hasta el extremo de hacerme odioso a mis conciudadanos". Reiterándole "el amor que he profesado a Ud. y que juro tenerle eternamente", profesa "que mi amor a la patria me ha conducido a posponer todo otro respeto, cuando se trata de su salud y felicidad", por lo que "me he visto obligado a separarme de su obediencia, porque su gobierno absoluto va a llenar de males incalculables a nuestra cara patria, por cuya emancipación he trabajado tanto". Todos los pueblos reclaman a Iturbide por haber violado el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, "las leyes y todo lo más sagrado de la sociedad", causando la ruina de la nación; "que ha perseguido injustamente a los diputados... hasta reducir la que llaman Junta Constituyente, a unos cuantos favoritos suyos, para que sucumban a sus ideas, y se establezca una constitución formal, que haga la esclavitud de este pueblo".

Cuenta con fuerzas en una provincia rica, "auxilios aun de aquellos que, por razones *políticas*, debían *ser nuestros enemigos*; además, lo instan "hombres sensatos, justos y verdaderamente filantrópicos". Su propósito, declara, es la reinstalación del Congreso "bajo todas las re-

[12] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 16-17. En adelante, al citar el *Diario histórico* de Bustamante remitimos al lector al día correspondiente en él.

glas que prefijan los publicistas" para que sus diputados, "constituyan la forma de gobierno más conveniente y análoga a este país... (y) formen una constitución justa, benéfica y sabia bajo las apreciables bases de la religión, independencia y unión".

Santa Anna concluye moderando el texto del Plan proclamado, hasta decir a Iturbide: "Este Congreso tendrá cuidado de premiar justamente los méritos de V., tan dignos de aprecio, proporcionándole un lugar muy distinguido en la nación". Lo invita a renunciar a la corona y a no exponerse con su familia "a la terrible catástrofe que le han preparado sus aduladores...". Él, Santa Anna, asegura a Iturbide que está dispuesto a "sacrificar su existencia por defender su vida".[13]

Cuando las fuerzas del general Echávarri parecen dispuestas a atacar a Santa Anna, ante su superioridad y no viéndose "apoyado por otro *como se le había ofrecido*, propuso al general Victoria embarcarse para los Estados Unidos en un buque que tenía tomado al efecto," escribirá Zavala, a quien lo contara el propio Victoria, por cuya oposición se mantuvo Santa Anna en Veracruz.[14]

No debemos distraernos en el carácter aventurero de la ocurrencia. A través de ambigüedades y desconciertos, la historia de la emancipación se irá recuperando a sí misma.

[13] Carlos María de Bustamante, *Continuación del cuadro histórico...*, tomo II, pp. 51-52.

[14] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 153.

2

EL PROYECTO DE REGLAMENTO POLÍTICO DEL IMPERIO
EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE JOSÉ MARÍA COUTO

Iturbide recibe en Puebla la noticia de la sublevación de Santa Anna y apresura su regreso a México. Francisco de Paula Álvarez publica un manifiesto en contra del rebelde, en el que las imputaciones personales se enconan. Interesa más mencionar el fracasado intento de Iturbide para que el gobernador de la Mitra en México dicte una excomunión en contra de los republicanos.[15]

En tanto, el 19 de diciembre se presenta a la Junta Instituyente Andrés Quintana Roo, apremiándole para que apruebe una ley que abrevie los procedimientos indagatorios y judiciales en las causas penales, como único medio del gobierno "para salvar la nación de la ruina que la amenaza".

El proyecto está concluido, y se aprueban sus artículos en la misma sesión. Por el primero de ellos "se suspende la observancia de las formas acostumbradas para la aprehensión de los delincuentes en los crímenes de que trata esta ley", hasta el cabal restablecimiento del orden. Los delitos considerados son los de "conspiración o maquinación contra la Independencia o contra la forma de gobierno establecida o contra la seguridad del Estado, o contra la sagrada persona del Emperador". Con modalidades, intervendrán los consejos de guerra y la jurisdicción ordinaria, según sean aprehendidos los culpables por alguna tropa o por jefes militares comisionados, o bien por orden de los tribunales ordinarios.

El mismo día la comisión especial informa a la Junta que el proyecto de *decreto constitucional* está concluido.

El 4 de diciembre Martínez de los Ríos urge el debate del Proyecto de Reglamento Político Provisional del Imperio, cuya impresión se terminará en días.

El 31 se lee el Proyecto de Reglamento Político, que se incluye como el tercero de los proyectos constitucionales en el volumen especial de ellos.

El 7 de enero de 1823 la Junta es informada que el Perú reconoce a México como nación independiente, y el 8 se aprueba el reconocimiento del Perú "bajo la forma de gobierno que aquella nación juzgue conveniente".

En esos días se plantean a la Junta problemas creados por la circulación del papel moneda; se le cambia por menos de su valor nominal y los precios suben. Se pide a la Junta que los pagos a los soldados se hagan precisamente en moneda de metal.

Si en el Plan de Veracruz de 6 de diciembre se había suprimido la palabra república, lo que Bustamante había comentado en su *Diario*, la *Gaceta del Gobierno Imperial* del 2 de ene-

[15] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 53.

ro reproduce una carta de Santa Anna al teniente de marina Pedro Baranda, reprochándole que después de darle su adhesión haya vuelto a la obediencia del gobierno imperial. Santa Anna ofrece olvidar lo ocurrido, recordando sus méritos. Le escribe "para significarle que el gobierno Republicano es el que ha de prevalecer, y no el monárquico... Que este sistema es el único que nos conviene y el que desde un principio aclamó la Nación". Espera sus contestaciones. La carta y su publicación desautoriza el significado de la omisión en el Plan de Veracruz. Para el gobierno y los jefes que lo combaten, Santa Anna es un rebelde republicano.

El 10 de enero se pone a discusión en la Junta el Proyecto de Reglamento Político Provisional. Zavala y Bocanegra se oponen a que la Junta entre a conocer el proyecto. Desde la tribuna, Zavala arguye: "que la asamblea no podía considerarse como representación nacional para discutir leyes de aquella naturaleza; que el emperador al disolver el Congreso y reunir cierto número de diputados de las provincias les cometió el encargo de hacer una convocatoria, y que éstos no podían obrar de otro modo que como comisionados del gobierno y de ningún modo de las provincias, que habían dejado de ser representadas desde el momento de la disolución del Congreso. Que era del interés mismo del emperador cumplir la promesa que había hecho a la nación de reunir a sus representantes formando una asamblea purgada de los vicios de la anterior; que sería un delirio pretender que la Junta que sólo era un simulacro de representación nacional tuviese derecho de dar una ley constitutiva a un pueblo que había fundado su independencia sobre las bases de soberanía popular y de gobierno representativo".

Su discurso lo inicia con una referencia a la disolución del Congreso, que realizó el emperador para detener los males que amenazaban al país "por el genio republicano de muchos diputados; y usando de los derechos que le daba el título de libertador a que no podía renunciar, reasumía —explica Zavala— por un momento (sólo por un momento), un poder extraordinario para luego trasmitir a esta Junta una parte del poder legislativo". Pero no por esto la Junta es un cuerpo legislativo, que supone diputados libremente elegidos, pues aunque sus individuos lo fueron al Congreso, "cesaron de tener su representación desde la disolución de aquella asamblea, no teniendo en el día otra que aquella que ha querido concedernos el Emperador". No obstante, la Junta no es un instrumento del gobierno, lo que la colocaría "en un grado de abyección igual al de las antiguas camarillas de Madrid, o al de los Divanes Asiáticos". "Si el emperador diese a la nación una Constitución —dice Zavala— consideraría más legal este paso, que dándola la Junta".

El mismo día escribe Bustamante en su *Diario*: "Hoy se ha declamado fuertemente en la Juntilla sobre varias providencias del gobierno por los *liberales*. Este cambiamiento es un indicio claro del mal estado de las cosas, y de que cada uno de los declamadores cuida de ponerse en buen lugar, para cuando llegue la crisis a que se camina con rapidez". El 14 de enero Bustamante conoce y transcribe en el *Diario* el Plan de Veracruz.

A Zavala lo apoya Bocanegra, y ambos hacen dos proposiciones concretas. Zavala: 1o. "Que se diga al gobierno que no creyéndose la Junta con los poderes necesarios para derogar la constitución que actualmente gobierna, ni substituir otra bajo cualquiera denominación, no puede acceder a la iniciativa que se le propone sobre la formación de este reglamento. 2o. Que se inste a la comisión de constitución para que en el menor término posible presente el proyecto de la que tiene a su cargo, y de la nueva convocatoria, a fin de que reunido en la mayor brevedad el Congreso Nacional proceda a su discusión".

Bocanegra: "1o. Que continúe la observancia de la Constitución como se ha jurado. 2o. Que cuanto antes se dé la convocatoria. 3o. Que asimismo se publique el proyecto de Constitución. 4o. Que el gobierno pida cuantas dispensas necesite, para que pueda proceder sin embarazo en sostener los justos derechos de la Nación y del Trono".

En el seno de la Junta creada por Iturbide la erosión de su autoridad es también visible.

El 11 de enero, el ministro de Relaciones comunica que para el mayor acierto en el debate del Proyecto de Reglamento Político, el emperador designó cuatro oradores que concurrirán desde la sesión siguiente. El 14, el ministro solicita un plazo para que los oradores del gobierno se preparen y puedan presentarse "con el conocimiento debido".

* * *

Según Zavala, el emperador "y su malhadado ministerio formaron el proyecto de dar una *Constitución a la nación*, bajo la modesta denominación de *reglamento provisional*", lo que alarmó "al ver que se intentaba prorrogar la existencia de la *Junta instituyente* sin pensar en nueva convocatoria".[16] Robertson, en cambio, opina que el proyecto fue obra de la comisión de la Junta.[17] En todo caso, el proyecto aparece firmado por Toribio González, Antonio J. Valdés y Ramón Martínez de los Ríos, y fechado el 18 de diciembre de 1822. Es de extrañar la falta de las firmas de Mendiola, Guridi y Alcocer, Carlos Espinosa, Argandar y Mendizábal, que habían sido designados para la comisión de Constitución y Convocatoria el 6 de noviembre anterior, así como la aparición de Antonio José Valdés, ajeno a ella.

El 20 de enero se lee en la junta el Proyecto de Convocatoria al Congreso General Constituyente del Imperio, que debería reunirse en agosto.

El 24 de enero juran al emperador las autoridades y cuerpos de la capital. Los festejos resultan melancólicos.

El 30 de enero la Junta declara de urgencia el debate sobre el Proyecto de Convocatoria al Congreso Constituyente. El 3 de febrero se presentan a la Junta los oradores del gobierno para intervenir en el debate de la convocatoria. Los oradores son Quintana Roo, viceministro de Relaciones, Tomás Salgado, consejero de Estado, y los consejeros honorarios Juan Francisco Azcárate, Manuel de la Peña y Peña, y el ministro del Tribunal Superior de Justicia, Juan José Espinosa de los Monteros.

Se suscita un debate sobre si debe discutirse primero el proyecto de convocatoria o el de reglamento político. Se aprueba conocer primero éste, pero se resuelve comenzar su debate el 6 de febrero. El 6 ya se tienen en México las noticias de la proclamación del Plan de Casa Mata el 1 de ese mes, pero en las sesiones públicas de la Junta no se menciona hasta el día 9.

Atendamos por ahora al *Proyecto de Reglamento Político de Gobierno del Imperio Mexicano*. Aunque, como paréntesis, consignemos que en el sistema de hacienda que se comienza a debatir el 17 de diciembre, el 18 se aprueba el artículo 9, que establece: "Existiendo en el Imperio muchas personas, a quienes por su instituto religioso, por su estado y otras condiciones es difícil valuar el edificio que ocupan, que en la base adoptada para graduar el consumo, se

[16] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 149.

[17] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 214.

declara que todas las fincas rústicas y urbanas correspondientes al respetable clero secular y regular como bienes pertenecientes al común de sus respectivas corporaciones, e igualmente los que corresponde a cofradías, colegios, hospitales y obras pías, están sujetas al pago de cinco por ciento del valor de sus rentas o productos calculados en este año de 1822, en justa compensación del derecho de consumo". Según el artículo 10, las diputaciones provinciales unidas al ordinario diocesano o su vicario, o al cura párroco más antiguo, faltando los anteriores, harán la distribución que corresponda a los causantes.

Por el acta de la sesión parece que el artículo 9 fue aprobado sin inconvenientes dignos de mención. La ley de la necesidad, quizá más que un impacto liberal o una herencia ilustrada, lleva al iturbidismo a afectar privilegios eclesiásticos en términos impositivos. La paradoja surge cuando días antes Santa Anna y el general Victoria declaran en la cuarta aclaración al Plan de Veracruz que el clero secular y regular "será conservado en todos sus fueros". Es evidente que el término *fueros* por sí solo se presta a discusión. En todo caso, la aprobación del artículo 9 no puede ser menos satisfactoria, como precedente legal, al mantenimiento de privilegios eclesiásticos.

El 6 de febrero la sesión se inicia con la lectura de "un extenso discurso" del secretario más antiguo, Antonio Mier, dirigido a refutar el que ya consignamos de Zavala sobre la incompetencia de la Junta para aprobar el Proyecto de Reglamento. Según Alamán el proyecto "no se llegó a discutir", y no era más que "el desarrollo del Plan de Iguala".[18] En realidad se debatió en lo general seis días, entre el 6 y 18 de febrero, en que se entraba al debate de los artículos en lo particular. En su intervención inicial, Antonio Mier reconoce como autores del proyecto a los tres firmantes de él, lo que desvanece toda duda sobre este punto.

Hay quienes opinan en contra de adoptarlo y que "nos dirijamos por la que nos dio el gobierno Español, en un tiempo nuestro opresor, y hoy nuestro declarado enemigo —expresa Antonio Mier—, para que no deje de resonar siempre en la América el nombre de Constitución Española", prefiriéndola a un código americano. Parece que continúan "aquellas miras tenebrosas de algunos de nuestros diputados del anterior Congreso, para perpetuar o restablecer sobre los americanos la dominación española". Aunque no es así, pues Zavala está al frente de los opositores. Antonio Mier no regatea elogios a Zavala. Hace a sus argumentos dos objeciones: "que la representación nacional que reside en esta junta instituvente puede derogar la constitución española y substituirla con el reglamento político" que se ha presentado, y "que supuesto este legítimo poder legislativo, se debe decretar tal derogación, y admitir como interino hasta que se forme la constitución americana, el citado reglamento", discutido por la Junta.

Antonio Mier y Villagómez pretende fundar los poderes de la Junta en el decreto de 31 de octubre que la creó y en el hecho de que no hay "un solo diputado que no tenga poder de la nación", y por ello, dice, se habló en el decreto del 31 de que *continúa la representación nacional*, "ínterin se reúne un nuevo Congreso". El discurso es largo y especioso a partir de estos supuestos. Pero en un punto el argumento *ad hominem* es incisivo: "el señor Zavala que fue uno de los que expresamente juraron la observancia de dichos artículos —los de las Bases de la Junta—... debe obrar en ella con arreglo a los principios jurados". Mier expresa que no conoce el decreto que da vigencia en México a la Constitución española, y agrega el argumento de que se revoque

[18] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 670-671.

en todo caso la Constitución, "que tiene muchos errores acreditados por la experiencia", porque "así lo pide la salud del pueblo". Además, no carecemos de leyes fundamentales. "Nuestras leyes fundamentales no están sino en ese glorioso plan de Iguala, que escribieron estos dedos, y como explicativo en lo adoptable del Tratado de Córdoba, ¿puede faltar alguna?", se pregunta.

Nadie puede obligar a acatar la Constitución española. Zavala mismo la ha censurado. "Como no puede ser fácil, y, tan pronto como reclama la necesidad, la derogación de cada uno de los artículos erróneos que la Constitución comprende, se tuvo por mejor refundirla trasladando al nuevo Reglamento todo lo bueno que ella puede tener, purgándola de lo malo y estableciendo lo adaplable a nuestra constitución peculiar". El ataque de Antonio Mier a la Constitución española es acerbo, y apela a los juicios de obispos españoles que concurrieron a las Cortes de Cádiz. Mas si se duda de ellos, "¿merecerá igual tacha —pregunta— el tan suspirado y anhelado miembro de nuestro Congreso D. Servando Mier?... estoy persuadido de que lo mucho que dijo contra la Constitución Española en su historia de la revolución de esta América, bajo el nombre del Sr. D. José Guerra, bastará para enmudecer a sus defensores, y para que tanto a mí, como al señor Zavala nos crean cuando contra ella declamamos".

Después de la euforia constitucionalista de tres años y de la ambigüedad de Iturbide a partir del Plan de Iguala, ambigüedad y oscilaciones no sólo verbales, Antonio Mier reanima el espíritu que presidió su proclamación, preguntando si la Constitución española no es "deudora de todos los males que llora el reino de Francia, que lamenta la España desde que la copió, y que comenzó a causar en América desde que la adoptó interinamente". El mismo Zavala, dice Mier y Villagómez, "combate esas instituciones que han hecho la desolación sobre todos los pueblos que han tenido la desgracia de admitirla". Todos los pueblos están desengañados, "sólo la infeliz España no ha llegado al momento de quitarse la venda de los ojos... vio la perdición de la Francia, ve sus continuos descalabros, ve... ¿qué más ha de ver? Ve que se le escapan las Américas en alas de la Constitución, y nada basta a desengañarla". Nosotros, "que clamábamos en otro tiempo por la Constitución española para hacer nuestra independencia, ¿la queremos adoptar para gobernar nuestro reino independiente? ¿No sería dar armas a los descontentos, a los republicanos, a los anarquistas, para que hagan con nosotros lo que hicieron con España?" Todos los rebeldes, y menciona a Santa Anna, y a "tantos otros delincuentes, ¿qué otro apoyo tienen que el de la ilimitada libertad que encuentran en la Constitución española?"

Por lo demás, Zavala no se opuso a la iniciativa del emperador para que se formara el proyecto, ni para que éste, concluido, se imprimiese. Su oposición ahora es intempestiva. Que se pregunte a los pueblos todos, y contestarán: "Nada queremos español, pero mucho menos leyes".

En el debate surge la proposición de un diputado para que en vez de discutirse el Proyecto de Reglamento Político se discuta el de Constitución para que rija hasta que el futuro Congreso apruebe la definitiva. No hemos encontrado el texto de este segundo documento que se supone formado ya.

Quintana Roo interviene en la discusión, considerado "el absurdo monstruoso de adoptar para el gobierno de un Estado que ha recobrado su libertad el mismo Código dictado para privarlo de ella y perpetuar por siglos el influjo y ascendiente de la tiranía", a través de la desigualdad de representación entre la península y las Américas, por lo "que nunca lograríamos participar en las ventajas de la regeneración de España".

Para Quintana Roo, que profesa un implícito y moderado liberalismo frente al iturbidismo ortodoxo de Antonio Mier, el problema radica en las facultades que se niegan a la Junta para derogar en todo la Constitución española, a lo que contesta simplemente: "La legitimidad de esta junta se funda en la misma necesidad que es el origen de todas las leyes", no aboliéndose el sistema representativo por el que está pronunciada la nación, deseo del que "el emperador (es) depositario y órgano", siendo él quien reunió a la Junta Provisional que convocó al Congreso. Mas éste no correspondió a las esperanzas de la nación, "y desplegó desde sus primeros decretos la intención de envolverla en las ruinas de la anarquía a que precipitadamente era conducida por los pasos mismos que los frenéticos directores de la nación francesa llevaron a esta desgraciada nación al abismo de la tiranía". Por el clamor de los pueblos, Iturbide "reforma, pero no destruye la representación nacional, dejándola concentrada en esta junta".

La conducta de Iturbide, afirma Quintana Roo, ha recibido y recibe "testimonios de la anuencia de la nación": diputaciones provinciales, ayuntamientos, "estos órganos respetables de la voluntad de los pueblos", cabildos eclesiásticos, reverendos obispos, universidades, colegios, "cuerpo ilustre de generales, todos los que son algo en la sociedad han manifestado del modo más solemne... su más entusiasta aprobación a las medidas del gobierno".

Quintana Roo se refiere a lo que resta de la Constitución de Cádiz. "Podemos dividirla en dos partes principales: una relativa a la libertad política y otra la civil de los ciudadanos". En la primera están las disposiciones sobre forma de elecciones municipales y de diputados; en la segunda las prescripciones de los procedimientos judiciales. "En uno y otro ha hecho la junta alteraciones tan esenciales que ha quedado reducido a un descarnado esqueleto el sistema legislativo de Cádiz". Para las elecciones está pronto el nuevo plan "que poco o nada se parecerá a la algarabía de la Constitución", en tanto que para los procedimientos judiciales existe la ley de 20 de diciembre. Si se ha reformado esto, no es lógico que la Junta quiera "respetar sus escombros como para impedir que se levante otro de nuevo".

Se ha dicho contra el proyecto que aumentaría la discordia. Ve los motivos de los últimos sucesos. "La sublevación del brigadier Santa Anna, y la fuga del general Vicente Guerrero...; ambos se presentan destituidos de todos los caracteres de una guerra nacional", y no han encontrado en los pueblos apoyo. Se habla de libertad, pero "unas ideas que se hacen objeto de elogios y declamaciones vagas, con mucha más frecuencia que de estudio y raciocinio exacto", chocarán con "la naturaleza y experiencia de la vida social". Fue el error de la Francia revolucionaria. Una reflexión sobre ésta concluye el discurso de Quintana Roo.

Zavala, que ha sido impugnado por varios diputados, responde. La polémica lo orilla a más allá que defender su voto, hasta decir que "hay gobiernos de hecho y otros de derecho, perteneciendo el nuestro a la primera clase. Que la Nación no puede tener en la Junta la confianza que en su libertador, por lo que llevaría mejor una Constitución dada por el emperador que por la misma Junta". Es cierto, y Zavala lo señala, que en las Bases de la Junta se encomienda a ésta formar el proyecto de Constitución que recibirá el próximo Congreso, pero no se le faculta para aprobar un decreto como el del Proyecto de Reglamento que es una verdadera Constitución, aunque sea provisional.

* * *

Este mismo día 6, en su celda de San Francisco, el preso Bustamante a quien los diligentes frailes comunican noticias o permiten que le lleguen, escribe en su *Diario*: "Que hay grande novedad es indudable. El Sota Ministro, Quintana (conocido hoy con el honroso título del *Batallador del Imperio*) preguntado hoy por un diputado del Congreso... D.L.Z. —Zavala—... sobre el estado de las cosas públicas, le respondió: estamos muy mal... estamos perdidos... Entonces su amigo le dijo... pues si quieres salvar la vida, renuncia y espera en Dios y en el buen nombre de tu esposa que te salvará". Bustamante, compañero de Quintana Roo en el Congreso de Chilpancingo, sigue registrando las noticias. El 7 recoge la de una reunión de Iturbide con prelados franciscanos para comunicarles algunas decisiones que debían trasmitir a los de las restantes órdenes, como lo hicieron: "S.I. Majestad os pide hermanos la plata de nuestra Iglesia... Se va a hacer con ella la guerra a los republicanos que son los enemigos de la Religión". Los prelados recordaban que "hizo otro tanto el gobierno Español tan detestado. En fin, allí se dijo que la plata era del *Papa*, y el *uso de los frailes*; que se ocurriese a Roma. En la casa del Emperador se ha reunido el Cabildo Eclesiástico y todas las demás corporaciones religiosas, para oír el decreto fatal —sigue contando el cronista, seguramente informado del episodio por los propios franciscanos. El Director de su conciencia (que lo fue cuando los asesinatos del Bajío), es decir, el P. Matías Monteagudo —cuenta Bustamante—, ha apoyado con la energía y elocuencia elefantina propia de sus razonamientos, que no debe darse la plata; será dueño de la plata de catedral, y demás iglesias Iturbide —sigue escribiendo Bustamante—, pero también lo será de todo el odio y execración de este pueblo, y por los mismos principios con que se reunieron para erigirlo jefe de la independencia se reuniesen (*sic*) para destronarlo. Si tal decreto y acuerdo hubiera emanado del Congreso Constituyente. ¿Qué se le habría imputado? —se pregunta—. Herejía... Francmasonismo, un odio eterno al santuario y a sus ministros".

El paréntesis que es la cita del *Diario* de Bustamante no deja de ser expresivo.

* * *

En la Junta, el debate de la cuestión del Proyecto de Reglamento Político continuará, se dijo, hasta el 18 de febrero, después de que el 9 se presenta a ella el emperador acompañado de sus ministros y del Consejo de Estado. Iturbide hace a la Junta un relato de los sucesos desde el grito de república por Santa Anna, hasta el día 2 de febrero "en que los oficiales y jefes que lo sitiaban pronunciaron el de un Congreso a quien querían obedecer", según el Acta de Casa Mata a la que da lectura Antonio Mier.

Iturbide, que ya consultó al Consejo de Estado, desea oír la opinión del Congreso. Los diputados que hablan deploran el acontecimiento "mitigado sólo por la consideración de que quien supo darnos la libertad la sabría conservar, mucho más cuando eran tan fáciles de acallar los motivos del alzamiento en los deseos de un Congreso". La Junta dispone ya de un proyecto de convocatoria, y se aprueba que el asunto se turne a una comisión para dictaminarlo.

En la discusión del Reglamento Político las opiniones siguen divididas sobre si la Junta puede aprobarlo o no. La misma situación se prolonga, y en votación nominal del día 14 se aprueba que la junta expida el Reglamento entrando a su debate. El 18 se aprueba el exordio

al Reglamento, se desaprueba su primer artículo y el segundo se declara sin lugar a votar. A partir de este día la cuestión del Reglamento se abandona rebasada por los sucesos, recibiendo la Junta un oficio del Ministerio de Guerra comunicándole que Iturbide sale "a establecer una línea frente a las tropas disidentes".

En los llamados Iturbide Papers de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos existe un documento sin título analizando el Proyecto de Reglamento Político, documento que Robertson acepta como de Iturbide.[19] El documento, no firmado ni datado, comienza con una extraña afirmación en la pluma de Iturbide: "La Constitución Española ha sido considerada en todas las Naciones cultas de Europa, como una obra acabada en política: nosotros la hemos adoptado y seguido; por nuestro honor y por que los que saben no formen mala idea de nuestros conocimientos, yo sería de parecer que no se deprimiese, y que bastaba sólo decir, que variadas las circunstancias y debiendo cada pueblo tener una Constitución análoga a su Religión, a su posición, a sus costumbres, a las relaciones que le convenía establecer, y aun a sus preocupaciones, los mexicanos habían determinado formar otra, por lo que la Junta Instituyente presentaba el siguiente proyecto".

El documento podría tomarse, a falta de otro, como el Proyecto Iturbide en el contexto del proyecto de la Junta. No obstante, y condicionado por una situación, las observaciones son en su momento un proyecto que se pudo considerar viable. Ello, partiendo del supuesto de Robertson. No obstante su autoridad, no dudamos en cuestionar su atribución. Veamos algunas de las observaciones aceptando hipotéticamente que son obra de Iturbide.

El artículo 4 del proyecto establece que el clero regular y secular "será conservado en todos sus fueros y preeminencias", conforme al Plan de Iguala, por lo que para que las órdenes de los hospitalarios y los jesuitas llenen sus fines "el gobierno las restablecerá en aquellos lugares del imperio en que estaban puestas, y en las demás que sean convenientes, y los pueblos no lo repugnen con fundamento". Iturbide sorprende cuando observa: "Sobran frailes; es una ilusión creer que ni los que existen ni los que se restablezcan han de observar sus primitivas instituciones; el parto espiritual se administra mejor por párrocos y presbíteros seculares que se distribuyan en las parroquias con proporción al vecindario...". La religión prospera con las buenas costumbres, y éstas se consiguen con buenas leyes; "la educación prospera cuando hay celo por parte del gobierno", "y la hospitalidad se ofrece mejor por particulares sujetos a ciertos reglamentos que puede la autoridad civil hacer se lleven a efecto, que por comunidades Religiosas que a la sombra del altar se escudan contra las potestades, para que quede impune su avaricia: el hombre de mundo tiene más sensibilidad que un fraile; los corazones de éstos son ordinariamente ásperos, su carácter obscuro, y cuando la humanidad sufre exije consuelos que no sabe dar...; el amor del prójimo es un precepto de la Religión, y el amor que enseña la filosofía y los trabajos los dicta la naturaleza". Que se restablezcan las religiones que se quiera "pero no se ponga esto de Constitución, porque nos graduarán de fanáticos".

El texto, no podemos evitarlo, no se concilia en una sola palabra con la imagen de Iturbide ante sus propios contemporáneos. ¿Es un documento dictado en las circunstancias por un consejero? ¿Pudo ser éste el versátil don Antonio Joaquín Pérez? Las observaciones contradicen, en todo caso, el espíritu y el texto del Plan de Iguala. Mas continuemos.

[19] William Spence Robertson, *op. cit.*, pp. 214-215.

El artículo 5 del proyecto de la Junta expresa que el gobierno de México es "monárquico-constitucional-representativo y hereditario". La observación dice: "yo le suprimiría la palabra *representativo*: basta decir monárquico constitucional y el significado que se quiera, y lo significa de la manera que se ha significado hasta ahora por todos: ¿para qué hemos de usar de palabras que o no denotan ideas, o las denotan para confundir?" La observación no oculta en su ambigüedad aparente el propósito de omitir un término cuya conotación liberal ha sido actual y conflictiva en la insalvable discordia de Iturbide y el Congreso disuelto, representante de la soberanía nacional.

Mas el desconcierto ante las observaciones surge de nuevo. El artículo 16 del proyecto establece que "las clases del estado se conservarán en sus respectivas distinciones, sin perjuicio de las cargas públicas, comunes a todo ciudadano". Al artículo se observa que por "*conservar sus antiguas distinciones* entiendo que significa continuar cada clase gozando los fueros, privilegios y exenciones que disfrute; si es así, se destruye la igualdad civil, que ya es un dogma en política". Además, al no eximirlas de las cargas públicas queda destruida la principal de sus prerrogativas.

Los artículos 17, 18 y 19 del proyecto establecen *la libertad de pensar y manifestar las ideas*, que no debe usarse sin previa censura "en materias de religión y disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del emperador, independencia y unión, como principios fundamentales admitidos y jurados por la nación" (art. 18). Los artículos 18 y 20 designan las autoridades eclesiásticas y civiles que deben ejercer la censura, e imponen a los autores la obligación de firmar y datar todo escrito impreso. "Se conocen los principios, se establecen, y en seguida se destruyen —expresa la observación—: Ésta es una inconsecuencia... en puntos... adaptados con tanto entusiasmo, como la libertad de imprenta, no le quedan al gobierno arbitrios de usar términos medios ni paliativos; es necesario decir la imprenta es absolutamente libre sin previa censura, sujeto el autor a juicio de jurados, si después de imprimir su escrito hubiese traspasado los límites prescritos por la ley; o no hay libertad de imprenta".

Al artículo segundo, que da al emperador la facultad plena para organizar la fuerza pública, se observa que es útil en las circunstancias, "pero sería la piedra de escándalo contra que se levantaría el grito general". Que se señale "una fuerza determinada superior a la que pueda necesitarse" evitando la sátira y la murmuración.

Pero lo dudoso de la atribución a Iturbide desaparece, dando lugar a la certeza de que él no es autor, consultando la observación al artículo 34 del proyecto, en el que se fija el juramento que debe prestar la Regencia que secretamente haya nombrado el emperador para los casos de su muerte "o impotencia física o moral". Según el artículo, la Regencia debería jurar la defensa y conservación de la religión católica romana "y la disciplina eclesiástica sin permitir otra alguna en el imperio". La observación objeta que "la disciplina puede variar, siempre que la Iglesia lo determine, sin que esto tenga que ver con la pureza e infalibilidad del dogma... El clero mexicano —continúa la observación— podrá considerar útil variar algún punto de disciplina, como lo hizo el clero galicano, sin dejar por eso de ser católico...".

Otra observación es significativa, cuando se objeta que todos los arzobispos y obispos sean consejeros honorarios de Estado, admitiéndose que se les dé el solo título de consejeros privados del emperador.

Iturbide podía afectar un cierto liberalismo, lo llegó a hacer, pero resulta inconcebible presumir en él un argumento galicano. Si el doctor Mier no estuviese preso y no fuera su ad-

versario, las observaciones podrían convenir más a sus ideas. No importa conjeturar quién es el autor de ellas. Importa, sí, señalar de nuevo que aún en esas fechas, fines del año 1822 o enero de 1823, Iturbide carece de un proyecto propio, y envía oradores del gobierno a apoyar el proyecto de la comisión de la Junta.

* * *

Felipe Tena Ramírez comprende entre los documentos constitutivos promulgados por los órganos constituyentes de México, "el Reglamento Político Provisional del Imperio, de febrero de 23".[20] Como está consignado, la Junta Nacional Instituyente no llegó a debatir siquiera el articulado, aprobando únicamente, el 18 de febrero, el exordio, para ocuparse en adelante de la convocatoria a un nuevo Congreso exigido en el Plan de Casa Mata.

Hemos señalado, no sin extrañeza, el hecho de que Iturbide careciera, después de más de un año de consumada la independencia, de un proyecto constitucional, quejándose, con notoria inexactitud, de que en el Congreso no se hubiese llegado a escribir una línea de proyecto alguno. A los proyectos conocidos, incluyendo el tardío del Reglamento Político del Imperio, debe sumarse otro, de José María Couto, diputado mexicano a Cádiz y suplente en las Cortes de la restauración liberal de 1820. Couto, a quien hemos hecho alguna referencia, es mencionado por Alamán entre los diputados americanos que "no tomaban en las cuestiones que se agitaban en las Cortes otro interés que el del partido a que pertenecían, y adhiriéndose casi siempre al exaltado decidían por su número las votaciones... por la esperanza con que éstos los atraían, de declarar la independencia de América, lo que iban alargando según convenía a sus miras".[21] Couto firmó con Ramos Arizpe la reserva que ambos hicieron a la exposición de los diputados americanos a las Cortes, presentada el 25 de junio de 1821, para que se excluyera a las personas de la real familia como delegados del rey en América.

José María Couto fecha en Valladolid el 8 de enero de 1823 un proyecto de Constitución del Imperio Mexicano, original que se conserva en los Iturbide Papers. El documento se reproduce en cuarto lugar en el volumen destinado a los proyectos de constituciones.

No obstante sus vínculos con Ramos Arizpe, el proyecto de Couto no es liberal, conteniendo restricciones tan fundamentales como reservar exclusivamente al emperador la iniciativa de las leyes, y concediendo a las cámaras la posibilidad de suplicarle la proposición de alguna. La limitación no la consideraba siquiera Antonio José Valdés en su Proyecto de Organización del Poder Legislativo.

Superficialmente señalemos también que Couto concibe una Cámara del Imperio integrada por los arzobispos, obispos y vicarios capitulares de sede-vacante; por diputados eclesiásticos nombrados por los cabildos de las catedrales y colegiatas, y por los nombrados por el emperador estimando su nacimiento o virtudes, talentos y conocimientos. El número de sus individuos "es limitado". Los periodos anuales de sesiones, de tres meses, sólo el emperador puede prorrogarlos.

[20] Felipe Tena Ramírez, *Leyes fundamentales de México*, 1964, p. VIII.

[21] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 47-48.

La cámara baja, o de diputados de las provincias, cuyo ejercicio sería de dos años, se elegirá en un proceso de dos grados, correspondiendo un diputado por cada 100 000 habitantes. El antiguo diputado a las Cortes concluye su proyecto estimando que las leyes que arreglen el gobierno político de las provincias y el poder judicial no deben ser constitucionales, variando con "las costumbres y luces de los pueblos".

Si el conservador proyecto puede satisfacer a Iturbide, su hora había pasado para que éste lo promoviera. No obstante, el que llegue a formarse por un hombre como Couto, al tanto de los sucesos y con experiencia en las Cortes liberales de España, no puede menos que revelar la existencia de una opinión antiliberal calificada. Podemos suponer que el hecho de cuidar en 23 artículos, de sus 63, los detalles de elecciones de diputados, desatendiendo aun la división de poderes y sus facultades, puede inducir a tomarlo como un prospecto para la convocatoria y bases de un nuevo Congreso. Fiel a su carácter antiliberal, el proyecto omite llanamente la palabra soberanía, clave y santo y seña de la revolución.

Frente a él, el Proyecto de Reglamento Político expresa que la *nación es soberana* y su gobierno *representativo*, término éste que da lugar a los escrúpulos elusivos en las observaciones que hemos citado, contiene, además, un catálogo de derechos del hombre.

El desconcierto de la nación independiente entra en crisis, y las ambigüedades y oscilaciones contradictorias de Iturbide ceden frente a un desconcierto más acentuado aún en el hombre que ante el Congreso, después de jurar como emperador el 19 de mayo de 1822, había declarado: "he jurado por convencimiento, por obediencia, por daros ejemplo y dejar establecido para mis sucesores un acto de reconocimiento de la soberanía de la Nación, de adhesión a ella, de subordinación a sus leyes, de respeto a sus representantes..." para agregar: "la Constitución y las leyes son los fundamentos de la sociedad, unas y otras son obras de vuestra sabiduría. También lo es ayudarme a conducir a nuestros súbditos a la felicidad, ellos os harían el más grave cargo si me abandonaseis".

3

EL PLAN DE CASA MATA

El 9 de noviembre de 1822, y sin que conste en las actas de la Junta Instituyente que se le hubiese comunicado y tratado el asunto, al menos en sesión pública, Iturbide firma el decreto de la llamada declaración de guerra a España: "La última agresión del gobernador del Castillo de San Juan de Ulúa —manifiesta Iturbide—, y la conducta simulada pero pérfida del gobierno español en más de un año ... nos impulsaron a consultar a nuestro Consejo de Estado las medidas enérgicas que conviniera adoptar para el decoro y seguridad del Imperio". A continuación reproduce la consulta. En ella se menciona en primer lugar el intento de Lemaur sobre Veracruz el 27 de octubre, cuando estaba en pláticas con el Ayuntamiento del puerto, lo "que ha producido el último desengaño de que no hay que esperar que la España entre en tratados de paz, ni reconozca nuestros imprescriptibles derechos, ni que deje de tratarnos como rebeldes". No hay duda que las órdenes recibidas por Lemaur "son de aquella paz que Cortés vino a traer a los indios poniéndolos en guerra unos con otros, ocupándoles sus tierras, robándolos y sujetando este gran Imperio a la corona de Castilla".

La hostilidad de España es la respuesta "al generoso modo, con que dirigido por el inmortal héroe de Iguala, recobró este Imperio la libertad", lo que nos lleva a "usar el derecho que nos da la naturaleza para defendernos y ofender en todo lo que sea preciso para conservar nuestra independencia". El Consejo se refiere a la consumación de ella y a las proposiciones de los diputados mexicanos en las Cortes de Madrid, que fueron despreciadas, así como la corona que se ofreció en Iguala a la casa reinante después de que O'Donojú, conociendo la opinión de los americanos, firmó el Tratado de Córdoba. Dávila primero, y Lemaur después, no han cesado de impedir el comercio, intentando aun atacar a Veracruz desde San Juan de Ulúa, calificándonos de rebeldes. Los publicistas están de acuerdo en que una nación que "teme con fundamento que se le intenta ocupar su territorio y sujetarla a dominio ajeno, debe hacer la guerra para defenderse y ofender a la nación enemiga". Es ésta la situación, y sólo queda a México repeler la fuerza, por lo que el Consejo opina que se intime a Lemaur "que entregue lisa y llanamente a las armas imperiales, dentro del término de cuarenta y ocho horas, el Castillo de San Juan de Ulúa", con sus armamentos, enterándolo que de no hacerlo se cerrarán todos los puertos a los buques españoles, y que "igualmente en el mismo caso serán embargados y detenidos todos los bienes y propiedades de los súbditos del gobierno español en cualquier parte donde se encuentren, hasta que España reconociendo nuestra independencia, convenga en tratados que afiancen la paz y armonía entre las dos naciones". De no entregar Lemaur el castillo de Ulúa, el capitán general de la provincia de Veracruz, debe proceder a ocupar los bienes de los españoles, medida que se generalizará a todas las otras provincias.

La consulta y las conclusiones las hace suyas Iturbide como contenido del decreto, que firma el 9 de noviembre, y publican las *Gacetas* del 26, 28 y 30 de diciembre, con un retraso no explicado.

La singular llamada declaración de guerra que propone a la atención del país un punto de honor nacional, no dejará de suscitar conflictos internos más que despertar entusiasmo patriótico.

Menos de un mes después, el 2 de diciembre, Santa Anna hace su proclamación republicana en Veracruz. Iturbide toma medidas. Su situación financiera le obliga a solicitar donativos voluntarios, que son escasos. Las *Gacetas* de esos días los registran. Pero hay excepciones. "El colegio de franciscanos de Santiago Tlatelolco cedió toda la plata de su iglesia, que eran unos 200 marcos, manifestando el padre rector en la exposición que dirigió al gobierno —informa Alamán— que lo hacía por creer que la tolerancia religiosa sería la consecuencia precisa del establecimiento del gobierno republicano". El donativo no fue aceptado por Iturbide, pagando a la Tesorería su valor de los gastos de la casa imperial. La cantidad total reunida no llegó a 40 000 pesos.[22]

El 5 de enero se evaden de México los generales Bravo —consejero de Estado— y Guerrero, a quienes auxilia con mil pesos una dama distinguida, doña Petra Teruel de Velazco, que los reunió empeñando alhajas.[23]

Desde el sur, en Chilapa se adhieren ambos al Plan de Veracruz, reuniendo fuerzas aunque no numerosas. El general Armijo los ataca, y Guerrero resulta herido, pero no son hechos prisioneros. En México se da la falsa noticia de la muerte de Guerrero.

Desde Chilapa, el 13 de enero, lanzan un manifiesto de adhesión al Plan de Veracruz. "Penetrados de los clamores que la Nación reclama y suspira por su libertad, tenemos hoy la noble osadía de negar la obediencia al que se nombra Emperador, porque siendo nulo como es el acto y forma de su proclamación, no estamos en el caso de sostenerla. No será nuestro objeto oponernos al sistema de gobierno establecido; no pensamos en constituirnos republicanos precisamente, nada menos que eso, sólo aspiramos por nuestra libertad, por la restitución de nuestro Congreso Constituyente, que es la única legítima representación nacional, y que se halla altamente ultrajada en los más ominosos términos ... Restituido pues nuestro Congreso, y en actitud de obrar, declarará libre y espontáneamente por medio de la Constitución, la clase de gobierno que nos ha de regir".

"Protestamos —declaran— que nos sujetaremos a él sin oposición, aun en el caso de que designe por Emperador al mismo Sr. Iturbide, pues sólo queremos que la Nación use de su libertad; que ella ejerza los actos de su soberanía que le pertenecen, y que ella elija a sus gobernantes, sin que intervenga por pretexto alguno, el influjo fortuito de las armas. El ejército que hoy reclama la libertad de su Patria, es el mismo ejército trigarante que siguió el pronunciamiento de *Iguala*, y el que sabe respetar vuestros más caros derechos y propiedades ... Cúmplase lo ofrecido en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, que nos prometieron una representación nacional libre y sin trabas, y no pediremos otra cosa". En la mano de Iturbide está "reintegrar a la Nación en sus innegables derechos, desnudándose de los que le han usurpado

[22] *Ibid.*, pp. 643-644.
[23] *Ibid.*, p. 646.

por una ambición sin límites, o por un equivocado concepto ... poniéndose a disposición del Congreso, que sabrá señalarle el lugar que le corresponde, sin olvidar los servicios que en otras circunstancias ha hecho a la Patria".[24]

El lenguaje de Guerrero y Bravo, aun en sus expresiones convencionales, define claramente su proclamación: la reinstalación del Congreso y el que Iturbide obre "desnudándose de los (derechos) que ha usurpado". ¿Puede esperarse que el Congreso lo nombre de nuevo y libremente emperador? ¿Y después de la abdicación demandada cuál es la forma de gobierno por la que se puede optar?

Como señala Zavala, dos jefes insurgentes "cuyos nombres se habían hecho históricos y se hacían cada día más por el interés nacional y de partido, no era verosímil que desertasen la causa del emperador si no hubiesen tenido grandes motivos para hacerlo". Su rebelión es "más importante que los movimientos de Santa Anna, por el desconcepto que infundía al gobierno".[25]

La rebelión en Veracruz deja de ser una aventura del agitado brigadier Santa Anna cuando se suman a ella los nombres de Guadalupe Victoria, primero, y de Guerrero y Bravo después.

* * *

Iturbide confía a Echávarri batir a Santa Anna. Fechada en Jalapa el 6 de diciembre circula una proclama de Echávarri a los sublevados en Veracruz, llamándolos a rectificar su conducta. La invectiva contra Santa Anna no puede ser más violenta:

> Fijad la vista en su semblante, y no podréis dejar de ver en él retratada la agitación de una alma devorada por la envidia, un corazón roído de injustos resentimientos [...] Miente cuando ostenta valor [...] Miente cuando se dice militar [...] No tiene amigos porque a todos fue ingrato [...] Miente infamemente cuando se atreve a calumniar con sus labios sacrílegos la augusta persona del Emperador [...] si Agustín I ocupa el trono de Moctezuma, la nación y vosotros se lo dieron, repugnándolo él [...] si el Congreso dejó de existir en su totalidad, impútese a sí mismo por su apatía, por su abandono, por su intriga, por la ilegalidad de su elección, por sus miras facciosas [...] y elógiese siempre la sabiduría de un Emperador, que supo evitar los males sin destruir la representación nacional, respetando sus juramentos y la voluntad de los pueblos [...] El mismo Santa Anna que ahora quiere fascinarnos [...] se presentó mil veces al emperador espontáneamente para destruir el Congreso en lo absoluto [...] Ese Santa Anna que ahora predica república, nunca tuvo las virtudes de un republicano; vano [...] despreciador de los derechos del hombre [...] rastrero en sus pretensiones [...][26]

Alamán registra, sin objeción, que en "los apuntes que el mismo Echávarri dio a D. Carlos Bustamante, dice que esta proclama le fue remitida impresa por Iturbide".[27] No creemos

[24] Carlos María de Bustamante, *Diario histórico...*, 7 de febrero de 1823.
[25] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 155.
[26] *Gaceta Imperial*, 10 de diciembre de 1822.
[27] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 654.

que la afirmación de Echávarri pueda desecharse como una simple autojustificación a posteriori. Un desajuste existe entre Echávarri y su jefe.

El 14 de enero de 1823 Iturbide escribe a "Mi estimado amigo Echávarri". Se referirá a un oficio reservado de éste que recibió a través del ministro de la Guerra, expresándole Iturbide: "Comunicaciones de esta naturaleza no considero oportuno se hagan de otro modo que discretamente ... pues hay asuntos que pueden decirse a un amigo, y no a un Emperador". Ignoramos el contenido del oficio de Echávarri, pero la carta de Iturbide da algunas luces. Debemos advertir que para esas fechas, y desde noviembre, se sabe que saldrían a México comisionados del gobierno español, los que llegan al castillo de Ulúa el 17 de enero. La inminencia de su arribo era conocida por Echávarri. Según carta de Lemaur al secretario de Guerra español, de 22 de diciembre de 1822, se había propuesto atraer a Echávarri a la causa de España, asunto "muy delicado", escribe Lemaur, pues "antes que aquí abandonen sus ideas de independencia es forzoso que de todas las formas de gobierno hayan sufrido los males".[28]

Sin hacer conjeturas sobre la actitud de Lemaur veamos la carta de Iturbide: "No sólo dejaría de tener mucho de particular el que Lemaur protegiese a Santa Anna..." pero sólo lo haría si Santa Anna estuviera dispuesto a obrar a favor de España en una reconquista, "de otro modo —observa Iturbide—, si, ni republicanos ni Imperiales hemos de ser españoles, no veo yo en qué razones pueda apoyar su protección. Dice Ud. —agrega— que para atizar la discordia y debilitar nuestras fuerzas, pero ésta es una política reprobada e infame contra la que clama la misma naturaleza", y ninguna nación la aprobaría.

Lo que más nos interesa en la carta de Iturbide es otro punto. "Los comisionados de España, por tanto tiempo anunciados, dice Ud. que es la prueba de que aquella nación quiere entablar relaciones con este Imperio; pero ¿no es notorio —comenta— que la comisión no tiene otro objeto que pacificarnos? ¿No lo es que esta pacificación significa volvernos a subyugar?" Una paz sólida es preferible a una guerra, pero nadie la anuncia en España. Echávarri le dijo que Lemaur habla con franqueza, pero no se ha dirigido al gobierno. "Si está Ud. en correspondencias con ese jefe, no hay razón para que Ud. no nos lo manifieste, y formando juicio sobre ellas podríamos resolver". Lemaur sólo pide la seguridad y la vida de los europeos y la suspensión de hostilidades mientras llegan los comisionados. No se ha atentado aún contra aquéllos. "No me hable Ud. de los tratados de Córdoba. Sí el Gral. O'Donojú mandó con ellos a dos de sus ayudantes, y la orden de desaprobación expedida por el Rey, los rompió declarándolos nulos, ¿cuál era el compromiso en que quedaríamos nosotros?" Otros pueblos de América han enviado comisionados a España, y se les desairó y expulsó.

"Me parece haber contestado los artículos de su carta que me ha llegado al alma porque es de Ud. Encuentro ideas que nunca temí se abrigasen en el corazón de un amigo mío". Le pide que por *extraordinario violento* le comunique qué desea Lemaur. Ni la seguridad ni las propiedades de los europeos peligran. Suspenderá la declaración de guerra si Lemaur suspende las hostilidades y no permite a Santa Anna la fuga. Se esperará a los comisionados españoles tres o cuatro meses.

"Últimamente, para que nada quede por decir: si la posición que Ud. ocupa en el día le es gravosa —le dice Iturbide para concluir—... o el obrar conforme a las órdenes del gobier-

[28] Citado por Jaime Delgado, *op. cit.*, tomo I, pp. 202-203.

no se opone a sus ideas actuales, sea Ud. franco y yo seré condescendiente, no faltarán recursos para que la reputación militar de Ud. quede a cubierto, yo mismo iré si es preciso a ponerme a la cabeza de esas tropas, por la urgencia de ocupar Veracruz. Este último párrafo se refiere precisamente a las expresiones con que Ud. da fin a su carta. *Nada apetezco si ha de ser en perjuicio de esta Nación, pero tampoco quiero cosa alguna si ha de ser con compromisos que ofendan mi honradez*".[29]

¿Cuáles son en el fondo los escrúpulos de Echávarri? Iturbide vuelve a ser en su carta el hábil corresponsal del año 1821, mas a deshora, 15 días antes de que se proclame el Acta de Casa Mata. Para W.S. Robertson, Echávarri "estaba quebrantado por varias emociones": su agradecimiento a Iturbide que lo había elevado, el deseo de ganar a Santa Anna, y "compasión por sus afligidos compatriotas en México". Las preocupaciones de Echávarri lo llevan a escribir el 9 de enero al ministro español de Guerra sobre la precaria situación del país. Ciertamente Echávarri no confía a Iturbide hasta dónde llega en sus relaciones con Lemaur. Que se sepa, no informa de Lemaur ofreciéndole mediar entre él y Santa Anna, como lo oficia Lemaur al ministro López Baños el 29 de enero, diciéndole que su objeto era persuadir a Echávarri para que se levantara contra Iturbide demandando el restablecimiento del Congreso. Robertson, que investigó en los archivos españoles estas relaciones, registra una comunicación de Lemaur a López Baños el 28 de febrero, informándole que recibió a comisionados de Echávarri, quienes le habían afirmado que Echávarri "tenía muchos amigos influyentes por todas las provincias mexicanas ... (pero) que antes de dar el grito de libertad se tendrían que remover ciertos obstáculos", preguntando a Lemaur si estaba interesado en consolidar unas relaciones fraternales entre México y España.[30]

Más que quebrantado por emociones, de las que no dudamos, Echávarri parece moverse con deliberada cautela, sin llegar a comprometerse con Santa Anna y Victoria en Veracruz, y sin confiarse del todo en Lemaur.

Para Alamán, que ignora estos hechos, la posición de Santa Anna en Veracruz no es vulnerable, contando con los auxilios de Lemaur. Él y Zavala afirman, además, que la rebelión de los jefes que debían combatir a Santa Anna se había preparado en la Gran Logia de México, "cuyos directores —que no se mencionan— se entendían con Echávarri, Morán y Negrete", planeando las cosas "de manera que más pareciese una transacción hecha con Santa Anna que una traición por parte de los oficiales del emperador", en la versión de Zavala.[31] Alamán por su parte menciona e involucra a José Mariano Michelena y a Miguel Ramos Arizpe, quienes en las Cortes se habían opuesto a la designación de príncipes borbones como delegados reales en América, siendo también contrarios al Plan de Iguala.

Lo cierto es que hay una entonces inexplicada demora en las fuerzas imperiales para atacar Veracruz, e Iturbide se culpará más tarde de no haberse puesto al frente del ejército.

Para Nettie Lee Benson, Michelena y Ramos Arizpe, ya en esos días republicanos, venían acechando pacientemente la oportunidad para actuar. Ambos sabían practicar la virtud de la espera. Michelena, nacido como Iturbide en Valladolid, pero diez años mayor, había

[29] La carta en Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 363-367.

[30] William Spence Robertson, *op. cit.*, pp. 229-230.

[31] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 159-160.

sido cabeza en la conspiración insurgente en 1809, siendo enviado a España después de estar preso en Ulúa; se le libera y combate contra los franceses en los ejércitos españoles. En 1820 es diputado suplente a las Cortes de Madrid. Regresa a México, y figura desde los primeros días como opositor a Iturbide. Ramos Arizpe, diputado en Cádiz y Madrid, preso por liberal en 1814 y liberado en 1820, es el más distinguido diputado mexicano en las Cortes de España. Sin que N.L. Benson lo afirme, parece suponerlos inspiradores del Plan de Casa Mata: "Un programa cuidadosamente escrito realizaría sus propósitos sin traicionar su finalidad real —escribe—... Estaba tan bien redactado que engañó hasta a Iturbide, pero contenía todo lo necesario para garantizar a sus creadores que se harían realidad sus sueños: una forma republicana de gobierno, es más, una república federal".[32] La redacción definitiva del documento Alamán y Banegas Galván la atribuyen al coronel Gregorio López, secretario de Echávarri.

* * *

El Plan o Acta de Casa Mata, en las proximidades de Veracruz. firmado el 1 de febrero por 34 jefes y oficiales de las fuerzas sitiadoras de Veracruz, y enviado a Iturbide por Echávarri, es breve:

"Ejército de operaciones.- Exmo. señor.- Para evitar los daños que con dolor conozco se aproximan, destruyéndonos unos con otros, y por iguales ideas, que sólo entorpecen en diferencias muy obvias, reuní a los Generales y jefes del ejército de mi mando, con el interesante objeto de oírles su opinión y por voto general, acordamos lo que contiene la Acta de que acompaño a V.E. un tanto, y pondrá en sus manos el Teniente Coronel, D. Manuel Ma. Hernández.- Sírvase V.E. meditar sobre su contenido, y unir sus votos a quienes sólo apetecen la felicidad de la Patria.- Dios guarde a V.E. muchos años.- Cuartel General en Casa Mata, Febrero 1o. de 1823.- Josef Antonio Echávarri.-" Este oficio está dirigido al Ayuntamiento de Veracruz, que apoyará el Acta, cuyo texto es el siguiente:

"ACTA.– Los señores Generales de División, Jefes de cuerpos sueltos, Oficiales del estado Mayor, y uno por clase del ejército, reunidos en alojamiento del General en Jefe, para tratar sobre la toma de la plaza de Veracruz y de los peligros que amenazan a la Patria, por la falta de representación nacional (único baluarte que sostiene la libertad civil), después de haber discutido extensamente sobre su felicidad, con presencia del voto general, acordamos en este día lo siguiente:

Art. 1o. Siendo inconcuso que la soberanía reside esencialmente en la Nación, se instalará el Congreso a la mayor brevedad posible.

Art. 2o. La convocatoria para las nuevas Cortes, se hará bajo las bases prescriptas para las primeras.

Art. 3o. Respecto a que entre los señores Diputados que formaron el extinguido Congreso, hubo algunos que por sus ideas liberales y firmeza de carácter, s hicieron acreedores al aprecio público, al paso que otros no correspondieron debidamente a la confianza que en ellos se

[32] Nettie Lee Benson, "El Plan de Casa Mata", *The Hispanic American Historical Review*, XXV, febrero de 1945, pp. 44-56.

depositó; tendrán las Provincias la libre facultad de recrear los primeros, y substituir a los segundos, con sujetos más idóneos para el desempeño de sus arduas obligaciones.

Art. 4o. Luego que se reúnan los representantes de la Nación, fijarán su residencia en la ciudad o pueblo que estimen por más conveniente para dar principio a sus sesiones.

Art. 5o. Los cuerpos que componen este ejército, y los que sucesivamente se adhieran, ratificarán el solemne juramento de sostener a toda costa la representación nacional, y todas sus decisiones fundamentales.

Art. 6o. Los Jefes, oficiales y tropa que no estén conformes con sacrificarse por el bien de la Patria, podrán trasladarse a donde les convenga.

Art. 7o. Se nombrará una comisión con igual copia a la plaza de Veracruz, a proponer al Gobernador y Corporaciones de ella, lo acordado por el ejército, para ver si se adhieren a él o no.

Art. 8o. Otro a los jefes de los cuerpos dependientes de este ejército, que se hallan sitiando al Puente, y en las Villas.

Art. 9o. En el ínterin contesta el Supremo Gobierno de lo acordado por el ejército, la Diputación provincial de esta Provincia, será la que delibere en la parte administrativa, si aquella resolución fuese de acuerdo con la opinión.

Art. 10o. El Ejército nunca atentará contra la persona del Emperador, pues lo contempla decidido por la representación nacional.

Art. 11o. Aquél se situará en las Villas, o a donde las circunstancias lo exijan, y no se desmembrará por pretexto alguno hasta que lo disponga el Soberano Congreso, atendiendo a que será el que lo sostenga en sus deliberaciones. Cuartel General en Casa Mata, a 1 de Febrero de 1823".[33]

¿Echávarri emula únicamente al general Riego?

Zavala, en una de sus frecuentes acrimonias, la califica de ser "un tejido de absurdos y el mayor de todos es la última cláusula ... Si *el ejército era el único apoyo con que podía contar el Congreso para libertad de sus deliberaciones*, ¿quién era el opresor? ¿Lo sería el pueblo? ¿O tal vez otra parte del ejército? Ved aquí las facciones, y facciones militares ... Adviértase que el general Victoria no figuraba en esta transacción, y que al ruido de la fuerza armada beligerante, no quizo manchar su reputación interviniendo en actos de violencia ejercidos por jefes cuyo único deber era el de obedecer. Adviértase también que Bravo y Guerrero no tuvieron nada de común con esta acta envuelta en misterios, y nacida enmedio de personas o enemigos de la independencia o adictas a una monarquía extranjera". Las cosas no ocurren como Zavala las presenta. Por lo demás, la respuesta a Zavala, diputado en la Junta Instituyente, es obvia, pues sólo el ejército, y un ejército adverso a Iturbide, podía garantizar en principio que un Congreso se reuniera y deliberara libremente.

El 2 de febrero Santa Anna ofrece su adhesión. Echávarri envía a tratar con éste al general Cortazar, el mismo que cumpliera las órdenes de Iturbide para disolver el Congreso. Santa Anna y el Ayuntamiento de Veracruz proponen que en tanto se reúne el Congreso se consideren vigentes la Constitución española y los decretos de las Cortes, lo que altera el Plan de

[33] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, lo reproduce el 10 de febrero, tomando el texto del Alcance del *Diario de Veracruz* del día 2 anterior.

Veracruz y el de Iguala adoptado en éste, respecto a todos los fueros eclesiásticos que se prometió conservar en la cuarta de las aclaraciones al de Veracruz.[34]

El 3 de febrero Echávarri escribe al general José María Lobato, y en la postdata le dice: "En todo han convenido los de Veracruz, y hoy vinieron a cumplimentarme, y me obligaron a que fuese a presidir las corporaciones; así lo hice con tantos vivas que ya se acababa el mundo". En la carta de Echávarri hay una expresión significativa, cuando previene a Lobato sobre el viaje de Cabaleri y Cortés, que "la han tomado ahora contra los Europeos por ver si nos dividen, sin atender a que también lo son".[35] (*Cartas escritas al señor brigadier José María Lobato, y al señor coronel José Joaquín Calvo, por el señor capitán General don José Antonio de Echávarri*, Puebla, 14 de febrero, 1823).

* * *

Las relaciones con Santa Anna no pueden ser públicamente más cordiales. El 6 de febrero se firman los "*Convenios que en lo reservado y que con el previo conocimiento del gral. Sta. Anna hicieron en el Puente los generales D. Antonio Echávarri y D. Guadalupe Victoria*", como consta en el rubro de la copia manuscrita firmada por el general Victoria que existe en el Fondo Lafragua de nuestra Biblioteca Nacional. El convenio, de cuatro artículos, es el siguiente:

"1o. Que el jefe y guarnición que sostiene los fuertes del Puente están unidos en sentimientos a los de Veracruz y su guarnición por ser una toda como igualmente a los del Exmo. Ayuntamiento y junta provincial que llevan la voz de aquel benemérito vecindario.

2o. Que se nombrará una comisión con el objeto de hacer una manifestación de esto mismo al jefe militar, una junta de guerra y a otras Respetables Corporaciones manifestando ésta en su caso las Reflexiones conducentes para dar más aclaración a la materia: conformándonos siempre con la opinión general.

3o. Que respecto que el Sr. Gral. D. José Antonio Echávarri y su ejército están decididos a sostener la Representación Nacional Constituyente, y en espera de la respuesta del gobierno de México a la acta celebrada y ministrada a aquella capital que en vista de la oposición, u objeciones o alteraciones que este gobierno intente hacer, que luego que llegue a este caso, se haga una Junta General de los SS. Jefes, Oficiales y tropa unidos, a fin de resolver un asunto de tanta grandeza.

4o. Supuesto que los S.S. Generales Guerrero y Bravo, y otros jefes en distintos rumbos han adoptado de un modo solemne el Plan de Veracruz del 6 de diciembre debe tenerse presente para que si se trata de hacer alguna variación sustancial de él o de algún modo separarse de su espíritu, que en otra Junta General de Guerra se tome esto en consideración para examinar la opinión de aquellos jefes por sí, o sus comisionados para la resolución definitiva y fines consiguientes.- Febrero 6 de 1823.- Victoria".

[34] *Gaceta del Gobierno Supremo de México*, 12 de abril de 1823, publicando el texto modificado del artículo 5 del Acta sobre la observancia de la Constitución española, tal como es recibido en Yucatán, y lo señala la doctora Benson, *op. cit.*, p. 92.

[35] Carlos María de Bustamante, *Diario*, 17 de febrero.

Bravo se adhiere a Casa Mata el 7 de febrero y ocupa Oaxaca.

Para N.L. Benson el punto más importante de Casa Mata. bien meditado, es la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente sobre las bases de la primera convocatoria. Se previene que Iturbide no reaccione inmediata y violentamente, pues la misma Junta Instituyente tiene un proyecto de convocatoria para un nuevo Congreso. En todo caso, después del conflicto con el Congreso es evidente que Iturbide se ha decidido por convocar otro, y que la forma de convocatoria podrá convenirse entre las partes.

Como el acta prevé que en tanto el gobierno contesta a lo propuesto en ella la Diputación Provincial de Veracruz se encargará del gobierno administrativo y se envía el mismo día una copia del documento a las diputaciones de las 13 provincias, se ofrece un incentivo a la adhesión de todos los intereses locales. "Es muy significativo —anota N.L. Benson— que todos lo adoptaran de inmediato": Puebla el 14 de febrero; Guadalajara el 26 y 27 de febrero; Querétaro el mismo día; San Luis Potosí en los primeros días de marzo; Guanajuato y Michoacán el 8 de marzo; Yucatán y Campeche el 4 de marzo. En Oaxaca y las Provincias Internas de Oriente se formaron juntas provisionales de gobierno. En Monterrey se forma otra en tanto se reúne la diputación provincial.

N.L. Benson observa que "la inmediata adhesión al plan tiende a confirmar la idea de que el trabajo fundamental había sido bien preparado".[36] Una corroboración la ofrece la carta de C., de 12 de febrero, dirigida a Puebla el 12 de febrero, sin mencionar destinatario, que se publica con la citada de Echávarri el 14. En ella se hace referencia a lo que es una plena comunicación con la ciudad. Conviene, dice, que las cartas de Echávarri y Calvo circulen, "y podrán servir para facilitar al Sr. Flon la recaudación de las cantidades que prometieron algunos de esos Señores Comerciantes".

* * *

Todo lleva a suponer una preparación cuidadosa de la rebelión de Casa Mata contra el régimen imperial. Las solas demandas del Plan de Veracruz para que se reinstale el Congreso, y la de que se convoque uno nuevo, en Casa Mata, no pueden ser tachadas de subversivas en sí mismas. Pero los sucesos revelan que es la rebelión de Casa Mata, y no la de Santa Anna, la que recibe las adhesiones. Santa Anna, amparado al nombre de Victoria, reaparece el 23 de febrero publicando en Veracruz unas *Instrucciones o indicaciones que deben tenerse presentes para la mejor inteligencia del espíritu de la Acta fecha en Casa Mata el 1 de febrero, y conformidad de ésta con el Plan formado en Veracruz el 6 de diciembre.* En realidad se refieren al solo artículo 2 de Casa Mata sobre que "se redactará una convocatoria para el nuevo Congreso sobre las mismas bases que el precedente".

Santa Anna y Victoria ceden en el punto. "La convocatoria para el Congreso Constituyente —se expresa— se hará libremente por el Congreso que fue disuelto, quien a este fin se reunirá a la mayor brevedad en el lugar que estime más conveniente la Junta de comisionados de ambas partes", porque sólo el Congreso puede aprobar la convocatoria. De formarla el gobierno tendría un origen nulo, "pues no preexistiendo leyes constituyentes que fijen el modo

[36] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 93.

de representar a los pueblos, no está ningún poder investido del derecho de dictar las providencias que formen el principio cardinal de donde emanar aquéllas; es pues necesario ocurrir a las que son conocidas y practicadas en estos casos, a saber: debe expedirse la convocatoria por lo que más se aproxime a la expresión de la voluntad general".

De hacer el gobierno la convocatoria, llevará su influjo y no se asegura "la absoluta libertad con que deben obrar los pueblos en el primero y único acto en que por sí mismos ejercitan directamente la soberanía". Cabría considerar que la convocatoria la hiciesen "las corporaciones populares de las provincias", pero los inconvenientes serían insolubles.

Otra reflexión ocurre si las elecciones se hacen conforme a las bases de la primera convocatoria, pues "sería renovar las quejas de las provincias que las reclamaron" y que hoy no se conformarían con ellas. También se considera la posibilidad de que los generales convoquen, mas éstos están diseminados en el país y sería imposible acordar sus votos. "Al ejército, como tal, no corresponde otra cosa que sostenerla —a la Nación— en el pleno y libre goce de aquéllos —los derechos de ella— para que sin restricción ni temor alguno pueda ponerlos en ejercicio. Lo contrario sería abrogarse la milicia una parte muy esencial en las atribuciones legislativas, e intentar hacer voluntad general de la Nación la que sólo sería parcial de una clase de la sociedad, y aun no en su totalidad".

La conclusión es, así, "que se reúna inmediatamente el Congreso disuelto, con el objeto de hacer y expedir la convocatoria, concurriendo a él los miembros que fueron o se hallan aun aprisionados; como el de formar el gobierno provisional, dejando si lo estimare conveniente una diputación permanente hasta la instalación del Congreso constituyente". El actual Congreso "se halla de derecho en posesión de la voluntad Nacional —se dice—, puesto que sus miembros cesaron en sus funciones no por propia determinación, sino por la fuerza de un poder extraño que es el que mandaba las armas".

Con un lenguaje distinto a las anteriores proclamaciones en Veracruz se declara: "Puesto que no se reconoce legitimidad alguna ni debe reconocerse en el gobierno nominal de México, es claro que corresponde la convocatoria a otro a quien se le pueda dar autoridad popular por consiguiente la posible legitimidad".

Un asunto se ha planteado y debatido entre los generales de Casa Mata y Santa Anna y Victoria, sobre el que no existe información directa conocida, pero que se expresa claramente en el documento de 23 de febrero.

Si se insiste

> en la instalación de una Junta compuesta de los miembros nombrados por los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales con objeto de cumplir los mismos fines, en obsequio de evitar mayores males —declaran Santa Anna y Victoria—, deberá sostenerse que dicha Junta queda en plena libertad para deliberar si el Congreso reinstalado haya de formar la convocatoria o corresponde este acto a ella misma inmediatamente. La necesidad de este acuerdo se funda en el ningún derecho de intervención que asiste a la milicia para prescribir el modo con que debe expresarse la voluntad Nacional en materia que esencialmente lo exige. Al ejército corresponde exclusivamente sostener los derechos de la Nación sin apropiarse ninguna especie de participación en materia legislativa, lo que no puede verificarse prescribiendo a la expresada Junta popular la necesidad de formar por sí misma la convocatoria para el nuevo Congreso [...]: tanto más indispensable es este acuerdo cuan-

to que por él se evita toda divergencia de sentimientos en las diferentes secciones del ejército, que obrando en distintas provincias no puede expresar su voluntad en esta Junta; si nos propasamos a convenir en más de lo que ellos es de presumir consientan cuál es la formación de la Junta de comisionados de los Ayuntamientos [...]

Además, los comisionados de los ayuntamientos traerán sus instrucciones, y una decisión del ejército no debe contrariarles impidiendo conocer la voluntad general.

Un problema inmediato debe resolverse. "¿En quién reside el poder ejecutivo?, como quiera que mientras se instale el Congreso constituyente —se reflexiona— no reconoceremos legitimidad en el gobierno de México (sea cual fuere la denominación que se le quiera dar por ser el punto de la cuestión) hasta que dicho soberano Congreso resuelva sobre la materia, es de la mayor necesidad convengamos en quién ha de residir..., pues de lo contrario nos hallamos en el mayor riesgo de caer en una anarquía ...". Si se conviene en la inmediata reinstalación del Congreso, "éste puede nombrar una Junta o Regencia en quien provisionalmente deposite el poder ejecutivo, y de la que no podrán ser miembro ninguno de los diputados nombrados".

Las atribuciones de la Junta o Regencia podrían ser:

1a. Cuidar de llevar a efecto la convocatoria hecha por el Congreso para la formación del nuevo.

2a. Cumplir hacer cumplir las leyes vigentes excepto en lo que se ponga al plan proclamado por el ejército libertador.

3a. Conservar a los empleados públicos, militares y civiles, sin poder hacer nombramientos, excepto en casos de necesidad.

4a. En tanto se instala el nuevo Congreso, señalar el lugar de residencia de Iturbide, y sus dietas "si mientras él se abstiene y no es causa de que siga derramando más sangre", cuidando que no pueda perturbar "la causa de la libertad proclamada, procurando por supuesto poner a cubierto su persona de cualquier atentado, hasta la resolución del referido soberano Congreso constituyente".

5a. Proporcionar recursos al ejército y disponer de la fuerza armada.

6a. Instruir al pueblo sobre sus derechos y proteger la libertad de imprenta.

7a. Conocer provisionalmente de los negocios diplomáticos, sin resolver definitivamente sobre ellos hasta que el nuevo Congreso los decida.

8a. Al reunirse el nuevo Congreso, la junta o Regencia "resignará en sus manos el poder que provisionalmente se le ha conferido".

De no convenir "las partes contratantes sobre puntos tan esenciales, la comisión nombrada dará anticipado aviso a sus comitentes para que teniéndose presentes las exposiciones se resuelva por lo que a nosotros toca lo que más convenga al bien general".

En una Adición al documento se supone la necesidad de reinstalar el Congreso disuelto, y la necesidad de formar "una junta general de guerra de generales o de sus comisionados", que convocará a los diputados al lugar que se convenga. La Junta tendrá las facultades necesarias para dictar providencias y evitar todo obstáculo que demore la reunión del Congreso. El documento lo firman Victoria y López de Santa Anna el 23 de febrero y se imprime en Veracruz.

En las *Instrucciones o indicaciones* se modifica el Plan de Veracruz del día 6, en cuanto a una definitiva reinstalación del Congreso, adhiriéndose al de Casa Mata, que a su vez ha sido alterado al proyectarse reunir una junta de representantes de los ayuntamientos y diputaciones provinciales —aunque éstas se mencionan una sola vez—, para que sean esos diputados quienes dicten la convocatoria del nuevo Congreso, siendo éste el punto de desacuerdo entre los dos grupos.

En ninguno de los documentos públicos posteriores a la proclamación de Santa Anna del 2 de diciembre se menciona de nuevo la palabra república, pero es ella la que preña los sucesos. Las formulaciones ambiguas sobre la futura forma de gobierno son, paradójicamente, el término de acuerdo frente a Iturbide. Mas Echávarri y el grupo de Casa Mata no pueden dudar de que subsiste el carácter republicano del levantamiento de Veracruz, y no sólo por la carta de Santa Anna a Pedro Baranda, de 2 de enero, que seguramente no fue el único documento en el que se reiteraba.

Podría hacerse la pregunta sobre si la ambigüedad pública llegó a ser un acuerdo expreso entre el grupo de Casa Mata y el de Veracruz. También podría preguntarse qué esperaba Echávarri y quienes estaban detrás del plan de Casa Mata, de los comisionados españoles cuyo arribo se anunciaba. No podemos olvidar la carta de Iturbide a Echávarri del 14 de enero.

* * *

Si el Acta de Casa Mata es un documento bien meditado, las *Instrucciones o indicaciones* de Santa Anna y Victoria lo son más en su perspicacia sobre la situación del día y la futura. Lograr la sola reinstalación del Congreso es una derrota de Iturbide. Pero la mayoría, después de la prisión de los diputados y de mantener una actitud digna, había cedido ante el emperador por más que se declarase una reserva para obrar en el futuro como las circunstancias lo permitiesen.

El Acta de Casa Mata ofrece la convocatoria de un nuevo Congreso, y Veracruz la acepta desde luego. Pero los jefes de Casa Mata varían su plan inicial y proponen que sea convocado por diputados designados por los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Evidentemente la convocatoria se demorará hasta que esos diputados sean elegidos y se reúnan, formen la convocatoria, y después hasta que se realicen las elecciones para el nuevo Congreso. En tanto, y podemos suponer que ello está previsto, el ejército imperial —el antiguo ejército realista— dominará el país, y son sus jefes quienes pueden influir y hasta decidir las designaciones de los representantes de los ayuntamientos y de las diputaciones que aprobarán la convocatoria. Ignorando o no el proyecto subyacente del Acta de Casa Mata, el futuro es aleatorio para los republicanos.

No podemos olvidar que para los borbonistas existe, siempre que se mantenga la forma monárquica, la posibilidad de ofrecer la corona al príncipe de Luca, mencionado en el Tratado de Córdoba, o intentar una negociación, que podía ser hasta conspirativa, para traer a México al infante Francisco de Paula. Que ello sea quimérico es un juicio actual a siglo y medio, y no importa. En 1820 se conspiró, con la conformidad del virrey, para mantener la Nueva España fiel a Fernando VII e independiente de la metrópoli constitucional; en 1821 se concibió posible por varios diputados mexicanos la fuga de España de Francisco de Paula para

ocupar el trono de México; antes, en 1814, desde Londres la fraguaban Rivadavia y Belgrano para Buenos Aires, y en 1816, Belgrano propuso al Congreso de Tucumán, y se consideró la alternativa monárquica de un inca real en el trono del sur; en México, en 1822 y en menos de dos años —en 15 meses—, un coronel realista se había convertido en emperador. A ciertos proyectos hoy los juzgamos simplemente quiméricos, y a hechos consumados los juzgamos desatendiéndonos, podemos decirlo, de su quimérica realidad.

En nuestra conjetura nos apartamos de las afirmaciones de Alamán. Según él, no es cierto, "como se ha dicho, que el Plan de Casa Mata tuviese por objeto la ejecución del de Iguala, en favor de la familia de Borbón. Los que se pusieron al frente de la masonería en aquel tiempo fueron algunos de los diputados que habían estado en las Cortes de España, especialmente Michelena y Ramos Arizpe", que se oponían a los Borbones. Nos preguntamos cómo en el breve tiempo de menos de un año el fuerte grupo borbonista y los jefes del ejército se subordinan a hombres como Michelena y Ramos Arizpe, ausentes de México los 11 años anteriores. "El único aunque disimulado objeto del de Casa Mata —afirma Alamán— fue derribar a Iturbide, a lo que concurrieron aun sin entenderlo, los numerosos enemigos que éste se había hecho con la prisión de los diputados, disolución del Congreso, préstamos forzosos, ocupación de la conducta, medidas contra los españoles, proclamación y coronación de emperador y tantas otras causas que había ido acumulando materiales para el incendio... Los masones, pues, desde que preponderaron en ellos los diputados que regresaron de España, siempre quisieron una república central... y como los principios que profesaban eran respetar las propiedades y las personas, una libertad moderada, y hacer todas las reformas intentadas en las Cortes de España con prudencia y medida, nada tiene de extraño que a este centro pequeño se unieran incluso los borbonistas", quienes, "querían más una república que el Imperio de Iturbide..., por la convicción que tenían de que una dinastía de nuevo origen reúne todos los males de una república a todos los inconvenientes de una monarquía".[37]

Que los borbonistas frente a Iturbide *aceptaran* una república, es verosímil; que la *quisieran*, es improbable. ¿Podemos admitir, sin pruebas, la mutación de los jefes españoles del antiguo régimen, liberales o no, en revolucionarios republicanos? El hecho de que somos testigos en los procesos de emancipación es el de la toma de conciencia del colonizado deviniendo en revolucionario insurgente. En tanto no se investiguen el origen y el proyecto previo de Casa Mata, nuestras conjeturas, como tales, son provisionales. Alamán, hombre tan enterado y tan discreto sobre las juntas de La Profesa en 1820, lo es ahora respecto al posible proyecto de los borbonistas, "reducidos a ideas *meramente especulativas* —dice—, ya que éstas no podían realizarse, pero ideas que él no nos revela. Y son estas *ideas especulativas* las que precisamente parecen preocupar en Veracruz y dictan las *Instrucciones o indicaciones* del 23 de febrero.

La detonación ocurre en Veracruz desconociendo a Iturbide y proclamando la república. La presencia y la intervención de Miguel Santa María en el Plan de Veracruz no puede ignorarse en las *Instrucciones o indicaciones*, más perspicaces y orientadas atendiendo al Acta de Casa Mata. A Santa María se le había expedido su pasaporte por participar en México en reuniones republicanas. Su conocimiento de la situación en la capital no puede ser más satisfactorio para ponderar los intereses y las ideas que influyen en ella.

[37] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 659-660.

En estas fechas, la inmediata reinstalación del Congreso, y también la inmediata convocatoria de un nuevo Constituyente son imprescindibles para los republicanos ante una presión borbonista. El populismo de las *Instrucciones o indicaciones*, excluyendo al ejército de participar en las futuras decisiones políticas, es una reveladora precaución frente a los jefes españoles o borbonistas.

Dentro de la oposición a Iturbide existe un forcejeo disimulado en una pública ambigüedad, coincidiendo en la declaración de que "es inconcuso que la soberanía reside exclusivamente en la nación", como se expresa en Casa Mata, y su ejercicio "únicamente en una representación nacional", como se dice el 2 de diciembre en el Plan de Veracruz. Si la ambigüedad sobre la forma de gobierno es el circunstancial punto de unión, la abdicación de Iturbide impondrá la definición pública.

4

LA REINSTALACIÓN DEL CONGRESO

Dos años densos, de febrero de 1821 a marzo de 1823, son los de la consumación de la independencia y la instauración y el derrumbe de un imperio criollo en México. No es tanto el monarquismo en sí el que les da un carácter peculiar y tangencial en la revolución de la emancipación americana, sino el origen del episodio, su proyecto y las metamorfosis de éste. No cabe siquiera preguntarnos sobre lo que resta del proyecto de mayo de 1820 de los hombres de La Profesa. La orfandad dinástica lo abolió como antiutopía, y la imagen del *Libertador* es ya, para la inteligencia del país, la de un antihéroe. Pero esos mismos días nos deparan una inesperada sorpresa.

Los sucesos entre las proclamaciones de Veracruz —2 y 6 de diciembre de 1822—, el Acta de Casa Mata —1 de febrero de 1823—, el decreto de reinstalación del Congreso —4 de marzo—, y la abdicación de Iturbide —20 de marzo—, son fechas por las que la historia se precipita. Mas la historia, lo sabemos, no es una sucesión de acciones asépticas.

El mismo día que se proclama el Acta de Casa Mata, Echávarri escribe a Ignacio López Rayón, firmante del Acta de Independencia de 1813, que quienes suscribieron la de Casa Mata se proponen apoyar al Congreso y también, como un deber sagrado, sostener a Iturbide en el trono. Una vez lograda la armonía entre el emperador y el Congreso, cesando la lucha de los partidos, Iturbide reinará en el corazón de todos. La carta parece más bien destinada a la publicidad y dirigida oblicuamente a Ramón López Rayón, a quien Iturbide distingue con deferencias, y, a éste como último destinatario. El documento se conserva en los Iturbide Papers de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El 2 de febrero, Echávarri escribe a Lemaur en respuesta a sus cartas en las que le ofrece ayuda desde el momento en que él, Echávarri, se decida a obrar. Manifiesta que tiene confianza en que Lemaur cooperará para cimentar las buenas relaciones con España.[38]

En enero la *Gaceta Imperial* sigue reproduciendo noticias de la proclamación del emperador en las ciudades y pueblos del país, y las adversas a Veracruz y a los generales Guerrero y Bravo.

No atenderemos al frustrado intento de Iturbide para realizar conversaciones con los comisionados españoles llegados a Ulúa, y que son espectadores de los acontecimientos. Mas registremos lo que para algunos es una curiosidad anecdótica: el Tratado de Paz y Amistad de 13 de diciembre entre el gobierno imperial y la Nación Comanche, representada por su jefe Guonique, quien antes de partir de la capital se despide de Iturbide el 10 de enero en carta

[38] Citadas por William Spence Robertson, *op. cit.*, pp. 231-232.

que publica la *Gaceta* el día 30 siguiente. "Después de despedido de S.M.I. para regresar a mi Nación me han impuesto mis intérpretes en el suceso ocurrido el lunes de la presente semana (la evasión de México de los Generales Bravo y Guerrero). Juro a V.M.I. por el sol y por la tierra que me llenó de indignación —escribe Guonique—... porque alcanzo que él se dirige a fomentar la división en favor del gobierno español cuya furia resistió siempre la Nación Comanche...". En cumplimiento del Tratado, Guonique ofrece a Iturbide que "en la luna de marzo, pondré en la raya divisoria cuatro mil hombres armados mandados por mi compañero Barbaquieta y la persona que merezca la confianza de V.M.I. para que disponga de esta fuerza en el punto o puntos que disponga a bien. Además otro cuerpo igual o mayor en número, cuidará de las cuatro provincias de oriente para que no sean invadidas por enemigos interiores ni exteriores". La Nación Comanche es fuerte y guerrera y "desbaratarán a los enemigos del Imperio con el fusil, la lanza y la flecha, del mismo modo como lo hacen con las fieras bravas...". La carta termina: "El sol y la tierra concedan a V.M.I. la luz, la abundancia y la serenidad de los días alegres".

Los historiadores que mencionan el documento lo hacen considerándolo como anécdota curiosa. No obstante, su misma publicidad llenando casi un número de la *Gaceta* previene muy claramente a las Provincias Internas de Oriente, y al general Felipe de la Garza, quien se mostró republicano y después demandó la libertad de los diputados aprehendidos el 26 de agosto del año anterior. Iturbide amaga por la retaguardia a los inminentes rebeldes del norte. Además, según el tratado, los comanches guardarán las fronteras de las Provincias Internas —Texas, Coahuila, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander— "no permitiendo que nación alguna penetre por su territorio al de la mexicana", resistiendo y avisando al emperador.

* * *

Con independencia de las declaraciones públicas de Iturbide sobre la revolución de Veracruz, convencionales por su misma naturaleza, y de las que hará después de conocer el Acta de Casa Mata, podemos acudir a una fuente indirecta para averiguar sus ideas. En la *Gaceta Imperial* del 6 de febrero se dan noticias de América del Sur: el Congreso de Chile, con el nombre de Convención aprobó "la presidencia en el benemérito D. Bernardo O'Higgins". La *Gaceta* no lo dice, pero se trata de la Convención impuesta de hecho por el gobierno después de que O'Higgins, bajo la influencia del antiguo realista José Antonio Rodríguez Aldea, había disuelto el Senado. El título de O'Higgins continuaba siendo el de Director Supremo. El suceso resultaba un precedente grato al emperador.

La otra noticia, comentada, es más reveladora. En Colombia continúa la guerra contra los españoles, y se ha reunido el Congreso en Cúcuta, "en donde reina la divergencia de opiniones entre sus diputados —dice la *Gaceta*—, pues quieren la separación de cada provincia de aquel territorio en repúblicas o gobiernos diferentes conformes con sus costumbres, educación e intereses opuestos de cada una de ellas, pues una triste experiencia les ha enseñado que la democracia pura no conviene a la educación y costumbres de aquellos pueblos que necesitan un gobierno de concentración monárquica constitucional".

La cuestión es de qué monarquía constitucional se trata. También lo veremos en forma indirecta y a través de notas puestas en la *Gaceta* del 8 de febrero a la Proclama a los Catala-

nes que dirigió desde Urgel el 15 de agosto de 1822 el teniente general Joaquín Ibáñez, barón de Eroles, llamándolos a rebelarse contra el gobierno constitucional En las primeras líneas de la proclama se declara que la Regencia de Urgel gobernará "durante el cautiverio del Sr. D. Fernando VII", y la nota de la *Gaceta* aclara: "El segundo cautiverio del Sr. Fernando VII se ha fijado en la época de los liberales que según se advierte en esta proclama, no le han dejado más acción que la de un autómata". La proclama es una requisitoria violenta contra el gobierno liberal al que se imputan los más variados excesos. La nota de la Gaceta advierte a sus lectores: "Todas éstas son unas consecuencias precisas del democratismo exaltado de que abunda la Constitución Española; pues habiéndose dejado tanta libertad al pueblo con desprecio del poder monárquico... es necesario que todo concurra a la disolución estrepitosa de la máquina social. Con mayor violencia se agitaba el movimiento y disolución de esta máquina en las teorías que aparecieron en el Congreso mexicano, en la amarga época de su establecimiento, pues declarándose S.M. (el Congreso) *Soberano absoluto* y al Libertador un mero dependiente sujeto a los caprichos de su soberanía, el Libertador y los libertados hubieran perecido abismados en la anarquía, si no se hubiese puesto un término igual al que se puso a los opresores arrancándoles la presa desde el grito de Iguala". La declaración no puede ser más indiscreta.

En otra nota se hará una mitigación eufemística referida a los sucesos de España: la Regencia de Urgel y los constitucionales de Madrid desean "independencia, libertad y dominio exclusivo de la ley... pero si ni unos ni otros han de observar las convenciones, sino que cada partido ha de obrar por su interés y espíritu particular, ninguna constitución se acomodará jamás a esta corrupción". Dentro de esta ambigua ecuanimidad la nota señala que si la Constitución española, que se pretendió fundar en las antiguas leyes, "no se hubiera querido mezclar después con los delirios franceses para enervar la fuerza central del Monarca y confundir las virtudes españolas con el falso brillo de la absoluta igualdad popular destruyendo las jerarquías naturales, hoy estaría la España en los más altos grados de magnificencia y dignidad que la dejaron los Pelayos y García-Ximénez". La condenación de los "filósofos iluminados" es un corolario de la tesis.

No apuramos el sentido de las notas si nos pareciera oír en ellas a los hombres de mayo de 1820 en La Profesa, y también un eco de la Representación y Manifiesto dirigido a Fernando VII el 12 de abril de 1814 por los diputados "persas". Las notas de la *Gaceta del Gobierno Imperial de México* no pueden ser más autorizadas; no son una declaración de Iturbide pero sí el criterio expresado en el órgano del gobierno. No nos atreveríamos a suponer en México un proyecto como el de los diputados del año 1814 en España, que pretendía fundarse en un principio legitimista. Mas si Agustín I, huérfano dinástico, no deriva su título de un hipotético acto libremente dictado por el Congreso Constituyente en ejercicio de una soberanía absoluta, su carácter es el de un expósito usurpador.

Cuando el 11 de febrero escribe Iturbide al general Gómez Pedraza quejándose amargamente de Echávarri, le reprocha, a éste, que sabía "con evidencia que el motivo y objeto de mis anteriores providencias con respecto al Congreso extinguido no ha sido otro que librar al Imperio de la guerra civil a que lo iba a conducir una reunión formada contra todos los principios del Derecho Público y compuesta de representantes que en su mayoría no pensaban sino en la desorganización y destrucción absoluta del sistema actual para regenerar a su modo,

que es el peor que puede imaginarse". Ha enviado como representantes suyos a Negrete, a un consejero de Estado y al diputado Martínez de la Rosa, a conferenciar con los rebeldes, "para que los saquen de sus errores manifestándoles que el Gobierno Representativo existirá, que la Convocatoria para el nuevo Congreso va a dictarse por la Junta Instituyente y por mí, que tenemos la voz de la Nación para el caso, y que carece de ella una corta División del ejército cuyas atribuciones son bien marcadas y conocidas".[39]

El *impasse* es total: la voz de la nación es la de Iturbide y la Junta Instituyente, desmedrado resto de un Congreso formado "contra todos los principios del Derecho Público", que debe al emperador, y nada más que a él, la presunta legitimidad de su título.

* * *

Dos días antes de la carta a Gómez Pedraza, el domingo 9 de febrero la Junta Instituyente se reúne en sesión extraordinaria para que el emperador le participe graves asuntos. En la tribuna Iturbide hace historia desde el grito de república de Santa Anna el 2 de diciembre, hasta el Acta de Casa Mata de 1 de febrero, que se lee y reproduce. Los diputados, ocho de ellos, hablan y reiteran su confianza en el emperador, pues son fáciles de acallar los motivos del alzamiento que demanda un Congreso cuya convocatoria ya está presentada a la Junta. Se aprueba designar una comisión que proponga lo que estime conveniente en las circunstancias.

El 12 de febrero se conoce el dictamen de la comisión y se pasa al gobierno "para que haga sobre él las observaciones que se le ofrezcan". El gobierno lo publica sin comentarios en las *Gacetas* del 20 y 22 de febrero. El dictamen califica el documento de Casa Mata como "resultado de las artería s y maniobras de los enemigos de nuestra independencia, porque todo el tenor y contexto del acta... no se dirige a otro fin que al de atacar y desconocer el gobierno establecido, a propagar especies antisociales y subversivas, a diseminar errores políticos muy funestos, a fomentar el choque y la divergencia de opiniones tan absurdas como contrarias al orden público, y a dividir los ánimos...". La condenación de Echávarri es obvia a su conducta como militar, y por cuanto se refiere en Casa Mata a la falta de representación nacional por la disolución del Congreso, sabían los que la firmaron de la existencia del proyecto de convocatoria, cuya pronta promulgación no se demorará. El dictamen justifica la *reforma del Congreso*, fundada en "circunstancias peligrosísimas, a semejanza de lo que se practica en naciones muy sabias y libres, de conformidad con principios y doctrinas de publicistas de primer orden y en cuanto lo demandaba la salud de la patria". Por ello es "verdadera, legítima y conforme a la voluntad de los pueblos la representación provisoria nacional de la Junta Instituyente", integrada con diputados "nombrados antes con libertad por sus respectivas provincias".

El dictamen censura la convocatoria de la Junta Gubernativa y elogia el nuevo proyecto. El próximo Congreso se reunirá no "bajo la férula militar y absoluta de la división de tropas o asamblea legisladora acantonada en la Casa Mata de Veracruz, sino bajo la égida tutelar, natural, nacional y moderada del Libertador de Anáhuac".

El dictamen mismo trata de explicar por qué "se ha difundido acaso mucho en el rapto de la enajenación que la causan sucesos tan funestos...".

[39] Mariano Cuevas, *op. cit.*, p. 378.

Para concluir, se refiere al oficio del general Echávarri al Ayuntamiento de Veracruz cuando le envía el Acta, manifestando que únicamente se propone evitar que se destruyan unos a otros "por ideas en que todos son iguales, y que sólo se entorpecen por diferencias muy obvias. Es de inferir por tanto —anota el dictamen— que Echávarri se conforma en la sustancia con las ideas de Santa Anna dirigidas a destruir a nuestro emperador y a derrocar al gobierno establecido...; sustituyéndolo con el que se apellida republicano y situándolo a la legua del agua a la merced de los auxilios y pertrechos de S. Juan de Ulúa...". La comisión propone a la Junta que se apruebe su dictamen y se imprima y circule; que se publique un manifiesto a la nación, y que los diputados se dirijan a sus provincias informando a la Junta las respuestas.

El dictamen llega a manos del preso Carlos María de Bustamante, quien improvisa un exacto comentario:

> Numen tan alto invoca la preñada,
> jovial y juguetona musa mía,
> El numen tutelar de *no hacer nada*.[40]

El rapto de enajenación por el que se excusan los autores del dictamen no oculta la indigencia del discurso. Después de los debates sobre si la Junta poseía facultades para promulgar un provisional Reglamento Político, el empeño de fundar su legitimidad resulta inconcluyente, aun para expedir la convocatoria a un nuevo Congreso. Iturbide se encuentra en la misma situación que el virrey Ruiz de Apodaca en 1821, y el recuerdo no puede ser más perturbador.

El 24 de febrero de 1821 un coronel realista criollo, enviado a combatir a los insurgentes, proclamó la independencia, y logró el apoyo de la mayoría de los jefes del ejército colonial, el 1 de febrero de 1823, un español, también antiguo oficial realista, enviado por el emperador a combatir a los insurrectos generales Santa Anna y Victoria, se rebela demandando la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente. En el artículo 5 de Casa Mata se prevé: "Los cuerpos que componen este ejército y los que sucesivamente se adhieran, ratificarán el solemne juramento de sostener a toda costa la representación nacional". De nuevo es el ejército el que decidirá circunstancialmente el conflicto. Lo decidirá, pero su acción no es autónoma, y su fundamento es el expreso reconocimiento de que "la soberanía reside esencialmente en la nación", demandando la restauración del órgano que la representa. Ningún hecho, ningún proyecto, pueden producirse fuera del área liberal de la subversión revolucionaria. Si la nación, hipostática entidad soberana, está inerme, no importa. Sólo apelando a su potestad original, y en su nombre, se puede legitimar cualquiera decisión sobre ella.

A partir de la proclamación de la independencia, a lo largo de la lucha emancipadora, y en adelante, la victoria de un partido o de una facción, la de un caudillo, no crea sus títulos, los supone al menos en su origen. La ficción no puede tener una realidad más singular y actual cuando no es posible, y ni siquiera se intenta, evadirse de ella o negarla.

Pasarán años para que ello ocurra en México, 30 años, y después de que más de 40 presuntos titulares, constitucionales o anticonstitucionales, fugaces, hipotéticos, provisionales o no, ostenten el Poder Ejecutivo, y después de que la nación pierda la mitad de su territorio en el tra-

[40] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, 18 de febrero.

tado de 2 de febrero de 1848 entre México y Estados Unidos. El intento consta en la carta que Lucas Alamán dirigió el 23 de marzo de 1853 al general López de Santa Anna ofreciéndole el poder y esbozando su carácter. Pero sería falso considerar el documento como la cifra de su pensamiento, aunque sea, ante el desastre de la nación, una expresión última y desahuciada. A los 59 años de edad, y 68 días después de firmada la carta, Alamán moriría el 2 de junio.

* * *

A principios de 1823, ante la frustración de la primera monarquía y el fracaso de la primera contrarrevolución, las proclamaciones de Veracruz y Casa Mata, cualesquiera que sean sus orígenes y motivos, llevan a la ruptura con la condicionalidad que presidió y animó el episodio de la consumación de nuestra independencia.

El doctor Mier en su republicana *Memoria político-instructiva* escribía:

> Los que están acostumbrados al silencio que reina en las monarquías al derredor de la tumba de la libertad, se escandalizan de la inquietud y divisiones que hay en una república, especialmente al principio cuando se están zanjando sus cimientos. No consideran que tales deben ser los síntomas de la libertad naciente en lucha con los humores de la esclavitud, que están haciendo crisis. Intente andar sin andaderas el que estaba ceñido con las fajas de la infancia, y se dará mil golpes, hasta que se robustezca con el ejercicio [...] Las inquietudes posteriores, si las hubiere, son efectos de la misma libertad. Los hombres no cantan unísonos sino solfeando bajo la vara del despotismo. Yo digo lo que aquel político insigne, Tácito: más quiero la libertad peligrosa que la servidumbre tranquila.

La romántica y previsora profesión de fe del doctor Mier será vigente en nuestra historia republicana.

El dictamen de la comisión de la Junta condena el Acta de Casa Mata por "propagar especies antisociales y subversivas... diseminar errores políticos muy funestos... fomentar el choque y la divergencia de opiniones tan absurdas como contrarias al orden público, y... dividir los ánimos". El exceso de las censuras es más que notorio, pero la reinstalación del Congreso, la convocatoria de uno nuevo, es reasumir una libertad por quienes pueden ejercerla en México.

Según Zavala, Iturbide interpreta el último artículo del Acta de Casa Mata, sobre que el ejército nunca atentaría "contra la persona del emperador, pues lo contempla decidido por la representación nacional", como una declaración de que subsista la monarquía.[41] Mas el emperador publica el 9 de febrero un manifiesto en el que expresa su conformidad para convocar un nuevo Congreso, como lo había aprobado también la Junta Instituyente. No obstante usa un duro lenguaje. "Se me quiere imponer con la fuerza armada, y yo haré ver que no se ha debilitado el brazo que conquistó la independencia...".[42]

El proyecto de convocatoria no comienza a ser debatido en la Junta hasta el 19 de febrero, y el 22 se aprueba el artículo 50.

[41] Zavala, *op. cit.*, p. 162.

[42] Agustín de Iturbide, *Manifiesto del Emperador a los habitantes del Imperio*, México, 1823.

Es tarde.

Desde Liorna, Iturbide escribirá: "Celebrada el Acta de Casa Mata, unidos, sitiados y sitiadores, se precipitaron como un torrente por las provincias de Veracruz y Puebla, sin contar para nada con el gobierno y sin ninguna consideración para mí", pues sólo se le envió un oficial que le hizo entrega del documento, "cuando el ejército todo estaba en movimiento, ocupando todos los puntos a que les alcanzó el tiempo y sin esperar contestación".

El 10 de febrero, el secretario de Estado, José Manuel de Herrera da instrucciones a los comisionados que deben conferenciar con los firmantes del Acta de Casa Mata, asegurándoles que el emperador favorecía la monarquía constitucional limitada. reuniendo un nuevo Congreso, aunque no de acuerdo con la primera convocatoria por la desigual representación que en ella tenían las provincias. Debían lograr que el *ejército libertador* no avanzara más allá en Jalapa, Orizaba y Córdoba en dirección a México. Debían convenir con prudencia en el reconocimiento del gobierno imperial.[43]

Los comisionados son el general Negrete, el canónigo Mariano Nicolás Robles, consejero de Estado, Juan José Espinosa de los Monteros, Martínez de los Ríos —diputado en la Junta Instituyente—, y el jefe político de Puebla, Carlos García.

El 11 de febrero, el marqués de Vivanco dirigie una proclama a la provincia de Puebla: "A la Excma. Diputación Provincial y a mí, excitó el Sr. Mariscal de Campo D. José Antonio Echávarri a que abrazásemos el plan, que su ejército sobre Veracruz y toda aquella provincia han abrazado, dirigido a dar a la Nación un Congreso que la represente, sostenerla y sostener sus leyes fundamentales, no atentando contra la persona del Emperador, y hoy... hemos sabido que no pocos jefes, muchos oficiales y tropa de esta guarnición, desean con ansia seguirle". Vivanco consultó al Ayuntamiento, y unánimemente sus individuos aprobaron la adhesión a Casa Mata. "De acuerdo, pues, con la Excma. Diputación y Excmo. Ayuntamiento, declaro: que con esta Provincia me adhiero a lo acordado por el ejército del Sr. Echávarri", y que la diputación provincial ejercerá el gobierno provisional.[44]

La resolución de Vivanco y de las autoridades de Puebla, en donde en agosto de 1821 se aclamó anticipadamente a Agustín es un suceso decisivo.

El mismo día que Vivanco fecha su proclama, Iturbide dirige otra al Ejército Trigarante: "mi suerte y la vuestra están hoy íntimamente unidas a la de la Patria...". Cuando en el Congreso, recuerda, algunos diputados llamaron al ejército "carga pesada e insoportable, asesinos pagados y se empeñaban en hacer desaparecer el ejército, yo fui quien lo sostuvo a todo trance...".[45] Iturbide negocia y públicamente se prepara a combatir.

En tanto la *Gaceta del Gobierno Imperial* continúa publicando noticias de las proclamaciones del emperador en las provincias más lejanas, y las listas de préstamos y donativos voluntarios que, por ejemplo, al 25 de febrero apenas suman 27 066 pesos.

Las conversaciones de los comisionados con los firmantes de Casa Mata se efectúan entre el 17 y el 20 de febrero. Se llega al acuerdo de que, si los pueblos no lo objetan, el nuevo Congreso se convoque de conformidad a lo dispuesto por la Constitución española. Y por lo

[43] William Spence Robertson, *op. cit.*, p. 237.

[44] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, 18 de febrero.

[45] *Gaceta...*, 15 de febrero de 1823.

que toca a línea divisoria entre el ejército imperial y el libertador, se fijaría posteriormente en Puebla, que estaba ya pronunciada por Casa Mata.[46]

El 22 de febrero la *Gaceta* informa que el emperador ha establecido su cuartel general el día 20 en Ixtapaluca.

El 26 de febrero una *Gaceta Extraordinaria* publica la comunicación del día anterior, dirigida por Francisco de Paula Álvarez al ministro de Relaciones informándole que, por nota oficial de los comisionados ante los jefes de Casa Mata, se sabe que está *próxima* la terminación de los puntos de desacuerdo sobre la convocatoria del nuevo Congreso, El mismo día 26 la Junta Instituyente acuerda que se envíe a la Junta General de Guerra y a los que apoyan el Acta del 1 de febrero, la convocatoria aprobada para el nuevo Congreso, estableciendo "bases más liberales que las de la Constitución Española y las que decretó la Junta Gubernativa, indicándoles que en las circunstancias en que se halla el Imperio ninguna persona ni corporación, puede decirse que deposita en manera alguna la voz de las provincias, como la misma Junta Instituyente, compuesta como está por los sujetos que le merecieron su confianza". A los comisionados se les faculta para que, si no llegan a un acuerdo con la que ya se llama Junta General de Guerra, propongan a ésta que nombre representantes que expongan a la Instituyente sus opiniones y tomen "parte en la discusión, a fin de que se resuelva lo más conveniente al bien general de la Nación, sea adoptando la convocatoria acordada por la Junta Gubernativa extinguida, o bien la que se forme con presencia de las tres", la mexicana de 1822, la de la Constitución española o la de la Junta Instituyente.

La actitud de la Junta es conciliadora una vez resuelta la convocatoria de un nuevo Congreso. Lo inadmisible es la reinstalación del Congreso disuelto que volvería a sumar, después de los sucesivos conflictos con Iturbide, una mayoría opositora y triunfante. Iturbide mismo lo confesará implícitamente en Liorna. "El Acta de Casa Mata acabó de justificar mis determinaciones tomadas en agosto y octubre con respecto al Congreso; el último trastorno no ha sido más que la realización del plan de aquellos conspiradores; no han dado un paso que no sea conforme a lo que resultó de la sumaria formada en aquel tiempo".[47]

Iturbide falsea la relación de los sucesos. Como Javier Ocampo advierte al referirse a los de 1821, causas y motivos diversos y hasta contradictorios llevan al mismo desenlace. Aunque en México existan republicanos colaboradores desde su origen en el plan que se hará público en Casa Mata, no hay indicio o presunción conocidos que lo definan como republicano. Duda que no ofrece la rebelión de Veracruz. Pero Casa Mata "había reunido a los republicanos borbonistas —dirá Iturbide esta vez objetivamente—, que jamás pueden conciliarse sin otro objeto que destruirme ...".[48]

* * *

Es el propio gobierno el que califica al movimiento. El 24 de febrero aparece un papel con el título de *Batalla dada por los imperiales a los republicanos*, refiriéndose a una pequeña acción

[46] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 666-667.
[47] *Manifiesto de Liorna*, p. 275.
[48] *Ibid.*, p. 276.

en la que se engañó a una fuerza de 60 rebeldes con el grito de "¡Viva la república! ¡Viva el General Guerrero!" para lograr desarmarla.

La noticia de tres sucesos influye en la opinión expectante en la capital y en las provincias cercanas. La renuncia de José Manuel Herrera, secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, presentada el 18 de febrero y publicada en la *Gaceta* el día 27, cuando Iturbide lo sustituye con José Cecilio del Valle, diputado por Tegucigalpa. La renuncia de Herrera es para Bustamante destierro "llevando a cuestas una fuerte y muy justa reprimenda", aunque el desacertado genio tortuoso es eliminado ceremoniosamente.

Iturbide empleará por última vez y con éxito sus habilidades persuasivas. José Cecilio del Valle, preso en el convento de Santo Domingo, es conducido ante el emperador por el provincial de la orden. Iturbide "lo hizo sentar a su mesa, beber en su copa, y le prodigó las zalemas y obsequios que —escribe Bustamante— sabía emplear felizmente cuando quería agradar. De hecho aceptó el ministerio, y cierto que si lo hubiera ocupado desde que ocupó el solio Iturbide, se habría hecho amar y regido acertadamente".[49]

No es la única renuncia la de Herrera. José Domínguez había presentado la suya como secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos desde el 7 de diciembre. La reitera el 8 de febrero, día en que Iturbide la acepta, nombrándolo como señal de aprecio y a solicitud del propio Domínguez, jefe político de Querétaro. La noticia la da la *Gaceta* el día 13 siguiente.

La tercera noticia, culminando la desintegración del ministerio iturbidista, es públicamente conflictiva. Fechada el 23 de febrero se publica la opinión del "Prosecretario de Relaciones", Andrés Quintana Roo, sobre la convocatoria del nuevo Congreso aprobada por la Junta Instituyente. La opinión, dirigida a Iturbide, la publica con título de *Opinión del Gobierno sobre la Convocatoria*. Las elecciones que se prevén son "el asunto de las controversias actuales", entre el gobierno y el ejército que ha sustraído a la autoridad de la Junta. Si el gobierno aprueba la convocatoria se compromete a sostenerla antes de conciliar las opiniones. Es el primer punto. El segundo será la causa del conflicto, cuando Quintana Roo objeta el artículo 8 de la convocatoria, que expresa: "Las bases sobre que estamos ya constituidos y que el Congreso no podrá variar son las siguientes: 1a. La soberanía e independencia de la nación mexicana. 2a. La religión católica, apostólica romana sin tolerancia de otra. 3a. La unión con todos los habitantes del imperio con arreglo al Plan de Iguala. 4a. La división de los tres poderes... que no podrán reunirse en una sola persona o corporación. 5a. La monarquía moderada hereditaria. 6a. La dinastía del Sr. D. Agustín de Iturbide actual emperador".

La Junta impide desde la convocatoria que el próximo Congreso pueda discutir los puntos fundamentales, o que ha calificado de tales como los de *intolerancia religiosa, monarquía moderada*, y otros. "Es un absurdo en política —expresa Quintana Roo— prescribir esta clase de limitaciones al poder legislativo... es llevar las cosas al exceso, y confesar tácitamente el temor de que se ilustren determinadas materias. La intolerancia religiosa (por ejemplo), esta implacable enemiga de la muchedumbre evangélica, está proscrita en, todos los países, en que los progresos del cristianismo se ha combinado con los de la civilización y las luces... ¿Por qué privar al Congreso de la facultad laudable de destruir esta arma la más poderosa, que el fanatismo ha puesto en las manos de la tiranía para embrutecer y subyugar a los pueblos?" La sor-

[49] Carlos María de Bustamante, *Continuación del cuadro histórico...*, tomo II, p. 90.

prendente opinión de Quintana Roo continúa: "Lo mismo aunque en sentido distinto, debemos decir de la forma de gobierno. Yo entiendo que la nación se inclina y debe preferir la monarquía moderada, pero esto mismo me obliga a opinar que el Congreso conserve intacta la facultad de declararla: si el espíritu de partido la cegase hasta el punto de ensordecerse a los clamores de la nación, ésta no pierde su soberanía: ella se hará obedecer... La estabilidad y decoro de la dinastía del grande Agustín se interesa en esta conducta, que no podrá deslustrarse con el aspecto odioso con que ha querido denigrarse la del antiguo Congreso". Que el decreto se publique, opina Quintana Roo, pero sin sancionarlo, oyendo "el voto público, y las observaciones de los jefes que deben haberse reunido en Perote".

La reacción de Iturbide es inmediata. La *Gaceta* del 27 de febrero publica el oficio del secretario del emperador, Francisco de Paula Álvarez, al de Relaciones, José Cecillo del Valle, comunicándole la orden del día 25 destituyendo a Quintana Roo. A Iturbide, se dice, "no ha podido menos que sorprenderle que un individuo que le mereció su confianza abrigase y encubriese hipócritamente opiniones diametralmente opuestas a las bases que la nación ha adoptado... Por este motivo, y por la debilidad verdaderamente criminal con que hizo imprimir o permitió que se imprimiese su voto... si Valle no ha tomado todavía posesión de la Secretaría de Relaciones, Quintana Roo debe entregar desde luego al oficial mayor, y por inventario, todos los papeles y expedientes a su cargo". La orden imperial debe publicarse en la *Gaceta* "para que el público vea que no dura un momento en la intervención de los asuntos públicos un individuo que ha causado semejante escándalo, en concepto de que se tomarán por separado las providencias que corresponda con arreglo a las leyes".

* * *

El mismo día 27, el bien informado prisionero en el convento de San Francisco, Carlos María de Bustamante, registra en su *Diario* el retorno de los enviados a conferenciar con los jefes de Casa Mata en Jalapa. No regresan Carlos García y el general Negrete, quien desde Puebla, en donde continuaron las pláticas, escribe a Iturbide exponiéndole "el verdadero estado de las cosas, la justicia de los pueblos, la necesidad de acceder a sus pretensiones", y que "había tomado partido con el ejército como hombre privado, después de haber cumplido como hombre público".[50]

Los comisionados informan por escrito al emperador el 28 de febrero, ampliando lo que ya le comunicaron en los documentos respectivos. Estiman necesario, no obstante, dejar constancia por separado de su comisión. Lobato les dio noticias de que en Casa Mata se discutió la reinstalación del Congreso, mas "respetando los motivos que hubieron de influir en la providencia de la disolución..., y teniendo consideración al decoro de la autoridad imperial de que dimanó", adoptaron la convocatoria de un nuevo Congreso. Lo mismo expresó Echávarri.

En cuanto al punto de convocatoria, los comisionados encontraron "deferencia de la junta a que se variase aquel artículo (el 2 de Casa Mata) si los pueblos encontraban por más

[50] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, p. 120.

justo que se adoptase la convocatoria que sirve en España". Lo que comunican a Iturbide para que conozca el "espíritu con que obró el ejército para templar la opinión de los que insisten en la reinstalación del Congreso" y resolviese lo más conveniente "a fin de salir de una vez del desvelo en que ha tenido a V.M. la conservación del sistema representativo". Saben los comisionados que sólo el punto de convocatoria detiene la reunión de un nuevo Congreso. El ejército se une a Iturbide en esta preocupación, mas atendiendo a las inquietudes "no dudamos insistir oficiosamente a V.M.I. el dictamen de que para calmar tanta agitación sería el medio más pronto y eficaz la reinstalación del mismo Congreso disuelto". La resolución no podrá encontrar objeciones, dice, ni siquiera en el ejército de Casa Mata, "que sólo se propuso conciliar y templar aquella opinión". Con la reinstalación se evitan todas las demoras y riesgos, incluso se evita aprobar una convocatoria según la Constitución española.

Los comisionados, Robles, Espinosa de los Monteros y Martínez de los Ríos, sugieren que el Congreso se reúna "restituyéndole íntegramente las atribuciones en que se hallaba el día de su disolución, y que el día se señalase para la reinstalación fuese lo más corto posible".

Los comisionados no aluden siquiera al Plan de Veracruz, pero lo están adaptando, y sus argumentos no se apartan, más bien suponen, las *Instrucciones o indicaciones* de 23 de febrero de los generales Victoria y Santa Anna, para la inteligencia del Acta de Casa Mata.

Iturbide consulta al Consejo de Estado, que también, a la vista de la Representación de la Diputación Provincial de México de 1 de marzo —que citaremos adelante—, opinó por la reinstalación del Congreso. La opinión de José Cecilio del Valle, nuevo secretario de Relaciones, coincide con las anteriores.

Mas será hasta el 15 de marzo cuando el gobierno hará público el informe de los comisionados, y ello para ilustrar la reinstalación decretada el 4 y publicada en la *Gaceta Extraordinaria* del día 5.

No anticipemos el suceso.

Días antes del regreso de los comisionados, restos de dos regimientos, los 9 y 11 de infantería, salieron la noche del 23 de sus cuarteles hacia la Inquisición, de donde liberaron a los presos, excepto al diputado Iturribarría, enfermo, y a Zerecero por sospechoso, y transportando en coches a los que no podían caminar, como el doctor Mier, siguieron en formación, con los guardias y patrullas que se les sumaron. Al pasar por la calle de Puente de Alvarado, frente a la casa de Buenavista, residencia en esos días de la familia imperial, vitorearon a la libertad y a la república.[51] Al mando del coronel Eulogio Villaurrutia, aclamado como su jefe, se dirigió el grupo de más de 300 a Toluca sin ser atacado.

Los acontecimientos dejan de ser premonitorios.

El 14 de febrero el marqués de Vivanco comunica a la Diputación Provincial de México, que la de Puebla y el Ayuntamiento se habían adherido al Acta de Casa Mata, "por las razones de conveniencia, de necesidad y de justicia, que son las que han obligado a la más sana parte de la nación a dar el gran grito de verdadera libertad y rehacerse de sus derechos".

El 26 contesta la Diputación de México: "Puede V.E. estar seguro de que el deseo constante de esta Diputación y de la mayoría de individuos que componen su Provincia se dirige

[51] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 669-670; Bustamante, *op. cit.*, p. 87.

a la reunión de un Congreso Nacional hecha con toda libertad, y conforme a los sanos y reconocidos principios del derecho público, y que para conseguirlo procurará valerse de los medios que dicte la prudencia y permitan las leyes". Entre los firmantes está el nombre del doctor José María Luis Mora.

Echávarri había comunicado el Acta de Casa Mata a la Diputación de la provincia de México desde el 1 de febrero. La diputación, reunida en la capital, contesta hasta el 26 enviándole la respuesta a la Diputación de Puebla. El mismo día la Diputación de México turna los documentos al secretario de Relaciones, creyendo, se le dice, que sus respuestas son las más conformes "al voto genera de la provincia, y a los deseos y sentimientos de S.M.I.", pero "preparándole a oír —dirá en un Manifiesto del 6 de marzo— con serenidad y aquiescencia la manifestación y petición que había resuelto hacerle", y que dirigió al emperador el 1 de marzo. En ésta, la diputación expresa que la mayoría de la nación "y la totalidad de su parte ilustrada y sana, conforme con el espíritu del siglo en que vivimos, ha fijado sus miras y deseos en una representación nacional, como en único remedio de los males que han pesado sobre ellos; quiere un Congreso Constituyente, depositario de la soberanía de la Nación, que la organice, y la eleve a la dignidad a que está destinada". La demora en convocar la reunión de uno nuevo, sobre cuyos términos no hay acuerdo, deciden a la diputación a considerar "como único remedio y solo punto de reunión que ya nos queda el restablecimiento del antiguo Congreso", sea para que forme la Constitución o para que convoque el que deba hacerla, ejerciendo en tanto el Poder Legislativo en lo urgente. Los documentos los hace públicos la Diputación Provincial de México en un Manifiesto que circula sin título.

En la capital de la nación, plaza fuerte del emperador, la deserción civil agrava la militar y la Diputación Provincial adopta la fórmula de Veracruz sobre la reinstalación del Congreso disuelto.

* * *

Con demora, la *Gaceta* del 6 de marzo publica el convenio a que llegaron en Puebla los comisionados del emperador y el marqués de Vivanco el 25 de febrero. En cuatro artículos se fijan los límites que no deben pasar las fuerzas imperiales y las que se pronunciaron por Casa Mata. De hecho el Valle de México está casi sitiado. El último artículo define la situación: "Que estos artículos se entiendan —expresa— hasta que manifestada la adhesión de S.M. al plan de Casa Mata se acuerde el arreglo general". La expresión empleada en el convenio parece revelar, y lo anota N.L. Benson, que no hay un acuerdo sobre el Plan de Casa Mata, y tampoco sobre la subsistencia del imperio.

La Diputación Provincial de México toma otra iniciativa. El 1 de marzo se dirige al emperador "quejándose del armamento de los barrios —escribe en su *Diario* Bustamante—, y haciéndole responsable de la anarquía y estragos que resultarán de tan inicua medida". La actitud de la diputación rompe el *statu quo* en la capital. La diputación se refiere al decreto de 18 de febrero que citaremos más adelante.

Para el 2 de marzo la situación de Iturbide ha dejado de ser crítica para quedar resuelta. Nueve provincias se han pronunciado en favor de Casa Mata. Nettie Lee Benson, la más acuciosa investigadora de los acontecimientos precisa las fechas: Veracruz el 2 de febrero; Puebla

el 6; Oaxaca el 7; Guanajuato el 25; Guadalajara y Querétaro el 26; Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán el 2 de marzo. Sin conocimiento de los últimos sucesos, Durango lo hará el 5, Nuevo León el 6, y Coahuila, con noticia del decreto de reinstalación del Congreso, el 14. N.L. Benson advierte la consecuencia de lo que ocurre: "Al tiempo que cada una de ellas prestaba su adhesión al plan, asumía el dominio absoluto sobre sus asuntos provinciales", aunque ello no significa que exista el propósito de declararse independiente. Como el Acta de Casa Mata no prevé el carácter del gobierno nacional, que será decidido por el Congreso que se reúna, las diputaciones asumen su propia autoridad y comienzan a actuar para resolver la situación.[52]

La *Gaceta* del 4 de marzo publica por orden del emperador una circular del Ministerio de Estado, firmada por José del Valle el 28 de febrero: "La representación nacional que es el voto de los pueblos, lo es también de S.M. Desde que se decidió a sostener los derechos de esta América, se propuso trabajar en la instalación del Congreso que debía constituirla", declara Valle. "Hay disidencias en algunos pueblos y no ha hecho —el gobierno— uso de la fuerza para sofocarlas". Se envió comisionados para terminarlas en armonía y no por las armas. Se les envió la convocatoria aprobada por la Junta Instituyente. Por no haber recibido contestación de los jefes inconformes no se ha publicado. Ambos, éstos y el gobierno, desean Congreso.

No obstante que ese día 28 tiene ya Iturbide el informe escrito de los tres comisionados que regresaron de Puebla en favor de la reinstalación del Congreso, la circular de Valle es ambigua en el punto. ¿Es impertinente recordar aquí el Manifiesto de Fernando VII de 3 de marzo 1820 y su frustrado decreto del siguiente día 6, resistiéndose a aceptar la llana restauración de la Constitución de 1812? Todavía el 4 de marzo el desconcierto de Iturbide es explícito, no obstante su carta a Negrete del 27 de febrero, que citaremos.

El 5 de marzo aparece una *Gaceta Extraordinaria* con el decreto de Iturbide fechado el día anterior "a las nueve de la noche", en el cuartel general de Ixtapaluca, que no firma él pero que comunica su secretario Francisco de Paula Álvarez al secretario de Relaciones José C. del Valle: "Impuesto el Emperador del informe que con fecha 28 del anterior le presentó la sección de la Comisión que mandó al ejército... impuesto igualmente de la exposición que con fecha 1 del corriente elevó a sus manos por conducto de V.E. la Excma. Diputación Provincial de esta Corte", así como de la consulta del Consejo de Estado del día 3 anterior, "se ha dignado oír el voto de estas corporaciones...". Persuadido así de "que la voluntad de la Nación es que el Congreso se restablezca; y como el Emperador está siempre conforme con esta ley suprema, de la que nunca quiere ni quiso separarse, ha acordado y decreta: Que inmediatamente circule V.E. las órdenes convenientes para la reunión en la corte de todos los diputados, señalando el día que más próximamente pueda ser, para que reunido el número que exige la convocatoria por que fueron llamados, vuelvan a continuar sus sesiones". El Ministerio de Hacienda debe proporcionar los auxilios que necesiten a los diputados que se encuentren en sus provincias. Que los jefes del ejército los auxilien en su viaje a la capital. Que el decreto se comunique "a la sección de la comisión que se halla en Puebla, para que ésta lo haga a los generales y jefes que suscribieron el Acta de Casa Mata, y a los que se les han adherido posteriormente; y por último, que si después de reunidos los diputados en México, acordasen debe trasladarse el Congreso a otro punto del Imperio, podrá verificarlo".

[52] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 107-108.

Lo que la decisión de restaurar el Congreso significa no se oculta a Iturbide. Dos días antes, el 2 de marzo había escrito al general Negrete, refiriéndose a una carta del 27 de febrero de la que no tenía respuesta: "Sustancialmente dije a Ud. que deseaba la pronta reunión del Congreso, que podría ser muy interesante una entrevista entre los jefes y yo sobre lo que tenía hecha insinuación a Echávarri y Cortázar... y por último que en la convocatoria citada se podía suprimir la base de la dinastía de Iturbide, dejando en entera libertad a los pueblos para que eligieran otras si les acomodase, porque nada quiero con respecto a mi persona ni he querido jamás cosa alguna que pueda ser contra la voluntad general". Le expresa a Negrete que si conversa con él "aunque sea una media hora... hará Ud. —le dice— un buen servicio muy estimable a este país".[53]

Dos años antes, el 25 de enero de 1821, y un mes antes del grito de Iguala, Iturbide había escrito a Negrete enviándole "cuatro firmas en blanco por si, en razón de alguna circunstancia, exigiesen las cartas adjuntas que se enmiende o añada en alguna cosa, o para que le sirvan en cualquiera ocurrencia o momento". Hoy, el emperador le pide "aunque sea sólo media hora de conversación". La postración de Iturbide no puede ser mayor en los días en que vive el epílogo de un trono que ya es menos que ilusorio.

[53] Mariano Cuevas, *op. cit.*, p. 382.

5

LA ABDICACIÓN DE AGUSTÍN I

El decreto de Iturbide reinstalando el Congreso no es consultado y ni siquiera dado a conocer a la Junta Instituyente antes de su publicación. El día 4 de marzo, la Junta, al conocer la adhesión de la Diputación Provincial de Valladolid al Acta de Casa Mata, aprueba que se turnen a una comisión dos proposiciones: una para que se nombre una comisión "que recogiendo los datos necesarios, ponga de manifiesto el estado de opinión en todas las provincias, y proponga las medidas que le parezcan más acordadas", y otra de Zavala para que se exponga al emperador "lo gravosa que es la existencia de la Junta... el ningún fruto que se saca de su existencia, y la poca opinión que tiene en las provincias (a fin de que) se sirva disponer su disolución, luego que se haya presentado el proyecto de Constitución que debe discutir el Congreso próximo, señalándose al efecto por la Junta el término fijo a la comisión para que presente el proyecto".

En la sesión del día 6, la Junta se ocupa de algunos asuntos inocuos, y recibe el decreto que reinstala el Congreso, que se turna a "la comisión especial que está atendiendo los asuntos del día".

Son éstas las últimas palabras que constan en el acta de la sesión, y el último acuerdo de la Junta.

El 7 de marzo se reúnen los diputados del Congreso disuelto. Los asistentes son 54. A proposición de José María Becerra se aprueba que no siendo el número de diputados suficiente para que el Congreso delibere, el gobierno debe convocar a los restantes por oficios y públicamente, y en tanto, los asistentes se declaran en sesión permanente.

Se produce un debate sobre si el Congreso debe considerarse reinstalado con los presentes, y atendiendo a las circunstancias se aprueba, revocando el anterior acuerdo.

A las doce del día se presenta Iturbide al Congreso, y, lee un discurso: "Como la voluntad soberana de los pueblos reunidos en una gran sociedad, no puede ni debe tener otro objeto que el bien y la felicidad de ella misma, el órgano de esta voluntad, que es la representación nacional, no menos se debe contemplar animada del más vivo celo por la libertad política, que del cuidado más diligente por la tranquilidad y seguridad del Estado. En todo lo que conviene a la libertad de la Nación, puedo gloriarme de haber sido el primero que preparó el asiento inmutable de sus bases...". Su desvelo por la instalación del Congreso es notorio,

> y esto debe constar —dice— para que con imparcialidad se pueda formar juicio de que si en el suceso de 31 de octubre, se ha de atender a mis intenciones, decisión y, propósito, no necesitan de apología; y si la rectitud del dictamen me gobernó, la mayor acriminación sólo convencería de

> que nada es ajeno a la debilidad humana. Pero no es éste el día de cargos y exculpaciones. Éste es el día feliz de reconciliación. Día grande, glorioso y memorable, en que el primer Congreso de la Nación recobra sus augustas funciones como si jamás hubiesen sido interrumpidas: en que se vuelven a atar los vínculos de la sociedad desgraciadamente relajados, en que la representación nacional va a concentrar las voluntades de todos los que aman la independencia y la libertad de la patria [...].

Si el Congreso es restaurado, el lenguaje de quien lo disolvió no puede sorprender después de rubricar el decreto de reinstalación: "Se repone en su solio el primer Congreso nacional, porque él y no otro alguno, es el que se debía al voto de los pueblos, si su verdadero voto se propuso seguir el acta firmada en Casa Mata por los jefes y oficiales destinados a la ocupación de Veracruz". No obstante agrega: "Para obtenerlo, debió ser y hubiera sido con efecto suficiente su sencilla reclamación". De convocar otro, se pregunta, ¿cómo resolver las divergencias para ello; y quién podía "ejercer la suprema autoridad inquiriendo y declarando la voluntad de los pueblos", cuando no puede demorarse "ni aun siquiera por más días el cumplimiento del voto que desea ver en su plenitud la representación nacional? El Congreso queda en toda la libertad que el acta de Casa Mata ha indicado". Iturbide adelanta algo más que lo que escribió a Negrete el 2 de marzo, aunque implicando una tácita condición: "*A mí me bastará una insinuación de la voluntad explorada de los pueblos*, de parte de un Congreso tan justo como fiel a aquella voluntad, y en obsequio de ella y de la tranquilidad de la Nación, nada me parecerá que es costoso sacrificio".

El Congreso decidirá el lugar en donde debe continuar sus sesiones, y los de permanencia de las tropas, conforme a lo convenido en Jalapa y Puebla, sugiriendo además una amnistía "que disipe toda memoria de ofensas o errores pasados".[54]

Iturbide, que accede al Acta de Casa Mata, no menciona ni alude al Plan de Veracruz, el documento en el que se demanda precisamente la reinstalación del Congreso.

José María Becerra, como vicepresidente del Congreso, contesta en términos convencionales, felicitándose por la reinstalación.

La declaración de que en su conducta —la de Iturbide— el 31 de octubre, como en otras, "nada es ajeno a la debilidad humana", en su penuria no rescatará su prestigio mítico de 1821, y su retractación menos todavía la autoridad comprometida en el título de emperador.

El mismo día 7 aparece un papel de Fernández de Lizardi, quien el 28 de septiembre de 1821 pedía la proclamación de Agustín I, aconsejando ahora la renuncia a la corona, lo que sería un ejemplo para los monarcas europeos enemigos de la libertad.[55]

El 8 de marzo Bustamante se refiere en su *Diario* a la reinstalación del Congreso sin ningún entusiasmo. Le importa más anotar la defección de cien hombres del regimiento número 9 de caballería, en cuya persecución se mandan tropas que regresan, informando su comandante que no estaba dispuesto a combatir en contra de sus compañeros.

[54] *Gaceta Imperial...*, 7 de marzo de 1823.

[55] Por la salud de la Patria se renuncia una corona, 7 de marzo de 1823.

* * *

Llega a México el día de la reinstalación o tal vez la víspera, la publicación que el día 4 hace el general Quintanar en Guadalajara del Acta del 26 de febrero, por la que los jefes y oficiales de la guarnición declaran que la "Provincia de Guadalajara adopta en todas sus partes el convenio celebrado por el Excmo. Sr. Capitán General D. José Antonio Echávarri, y los jefes de su División, con el Excmo. Ayuntamiento de Veracruz", y que "no se obedecerán las órdenes del Emperador, ni los decretos y disposiciones de la Junta Instituyente, mientras no se convenga en el tratado referido".[56]

Antes que la de Guadalajara, se recibe la de la provincia de Querétaro del 26 de febrero. La Diputación Provincial, convocando al Ayuntamiento, al comandante general, a los señores curas, jefes militares y empleados de la Hacienda Pública, así como a algunos vecinos, se constituyó en junta, y por unanimidad se adhirieron al Acta de Casa Mata. Conformándose con las provincias que ya lo habían hecho. Querétaro, se dice, continuará en correspondencia con las demás provincias. El documento es extenso y preciso en sus censuras a Iturbide, quien en sus desaciertos olvidó el pacto jurado con la nación en su exaltación al trono, por lo que "los Pueblos quedaron libres de la obediencia al Monarca, pues él mismo rompió los vínculos que le unían a la Nación".[57]

La impugnación bajo la fórmula de que la autoridad del monarca cesa por un acto o actos suyos en los que rompe el pacto que lo liga a la nación, emplea uno de los argumentos que se vienen haciendo valer subsidiariamente en la insurgencia americana. El de fondo es la afirmación llana y subversiva de que la soberanía radica originalmente en la nación, y que ella es una potestad imprescriptible, inenajenable. Como tal potestad, es por su naturaleza incondicionada. La adhesión a Casa Mata parte de esa ausencia de condiciones como un acto libre en el Acta de Querétaro, que va más allá de lo proclamado en Casa Mata, desconociendo al emperador, cuya elección por otra parte no califica de ilegítima.

Desde el 15 de febrero circuló en Puebla una proclama firmada por *El Yucateco o amigo del pueblo*, Manuel Crecencio Rejón según Bustamante. El joven diputado —Rejón tiene 24 años de edad— preso en Puebla y liberado al adherirse Vivanco a Casa Mata, escribe: "Dad la denominación de traidores a los que presten infamemente sus brazos para sostener los proyectos de la tiranía. Llamadles satélites y cómplices de vuestro opresor; y colmad de bendiciones al ejército libertador". Vivanco no impide la circulación del impreso. Bustamante habla de una carta de Vivanco a Iturbide en la que, según él, le dice: "desengañémonos, la opinión se ha pronunciado por los republicanos, y es temeridad oponerse a este torrente". La noticia la registra el 17 de febrero en su *Diario*. No existe, que sepamos, más constancia que la de Bustamante sobre esta carta.

El acucioso *Diario* de Bustamante va registrando los sucesos y conservando los papeles que aparecen. Cuando don Elías Amador lo publica parcialmente en Zacatecas en 1896, suprime folletos, periódicos y otros impresos que "son ya conocidos y harían muy voluminosa dicha edición", aunque los cita. Infortunadamente muchos de esos impresos no existen, al me-

[56] Carlos María de Bustamante, *Diario...*, 8 de marzo de 1823.

[57] Acta de la Provincia de Querétaro en defensa de la soberanía de la Nación, Querétaro, 1823.

nos catalogados, en nuestros fondos bibliográficos. Las fantasías que en todas las crisis se propagan, y las del mismo don Carlos María, no falsean la realidad. Incluso, y frente a ciertos sucesos, la fantasía es la que les imprime una realidad más significativa. Por ejemplo cuando Bustamante habla de los movimientos de las fuerzas imperiales y las *republicanas*, refiriéndose a las que adoptan el Acta de Casa Mata.

El 18 de febrero escribe: "Parece que el reverendo Obispo de Oaxaca no se quiso conformar con el Plan de Veracruz —al que se adhirió el general Bravo—, y se viene para México: hará bien y que deje aquella Mitra para un Americano que ame la verdadera libertad de su Patria. Vamos a entrar a una nueva reacción con clérigos, frailes y visionarios, que nos ha de costar muy caro... Yo entiendo que a hora y media, Oaxaca está alarmada contra los republicanos, habiendo visto salir al Obispo, porque este prelado tiene allí el mejor concepto de virtuoso, aunque no de sabio. Lee comúnmente al *P. Parra*, a *Electo y Desiderio*... y a otra porción de esos libracos que nada enseñan sobre el modo de conducirse en las revoluciones civiles; estoy cierto de que no ha leído *el triunfo de la libertad*, del *Doctor Roscio*, donde vería que los apóstoles para desempeñar cumplidamente su ministerio, jamás inculcaron si era el gobierno de Tiberio mejor que el de Augusto... Los intereses del Clero se han consolidado con los de los Reyes", en una mutua relación de conveniencia en el ejercicio del Patronato de la Iglesia. "Sin ser profeta digo desde ahora —escribe Bustamante—, que si triunfa el partido republicano, nosotros seguimos la rutina de España; las hechuras de Iturbide forman contrarrevolución, y a ella se unen muy luego multitud de frailes y clérigos, diciendo... Que los impíos fracmasones quitaron el brazo derecho de la Iglesia y que faltando el apoyo de sus inmunidades, todo va a caer por tierra; así es que vamos a ver ejércitos llamados *de la fe*...".

La fantasía de Bustamante no es más que una lúcida previsión, y no cuestiona siquiera la permanencia de la monarquía al triunfo de la sublevación.

Volvamos al Congreso restaurado.

* * *

Los diputados se van incorporando lentamente. El 10 de marzo asisten 80, por lo que el Congreso no se puede declarar legalmente instalado. Rafael Mangino plantea el problema al que se enfrenta el Congreso: el ejercicio en plenitud de las facultades constituyentes. Para ello es necesario conocer los planes del *ejército libertador* y la opinión de la nación. Debe convencerse a ésta de que el Congreso está en libertad, y de que se obrará conforme a su voluntad.

Carlos María de Bustamante arguye en favor de la definitiva restauración del Congreso. Si no fuese así, "¿quedaría justificada la conducta del general Echávarri, y la de la provincia de Veracruz?" Las actas de las provincias se han decidido por ella. Presumir lo contrario degradaría al Congreso.

El día 11 Bustamante denuncia en el Congreso que la víspera "hombres bárbaros e insensatos, so color de pagar un tributo de homenaje a la persona en quien reconocen al libertador de México, le hicieron revolver a su palacio entre vivas y exclamaciones, mezcladas con los terribles gritos de muera el Congreso"; él los oyó y el hecho quedó impune. "¿Cómo hemos de inspirar confianza a nuestros pueblos —pregunta—, si nosotros no la tenemos de no-

sotros mismos...?" Con energía pide que se destituya al capitán general de México, quien fue "el primero que tronó —en agosto de 1822— contra la representación nacional".

Melchor Múzquiz hace ver que las provincias demandan un nuevo Congreso. Que los diputados se ocupen, propone, de formar la convocatoria, y "dejar que la revolución siga su marcha".

La seguridad del Congreso para obrar con libertad y el envío a él de la documentación relativa a lo tratado con los jefes del ejército libertador son reclamadas por el Congreso, al igual que las actas de las provincias.

La documentación se recibe durante la sesión, y José C. del Valle, nuevo secretario de Relaciones, se presenta al Congreso. Fue difícil la tarea de reunir la documentación, declara, pero está concluida y a su disposición. Se refiere al origen del disgusto en el país por la disolución del Congreso. Se ha restablecido éste, y sus derechos para dictar la Constitución son vigentes. Con esto está conforme el ejército, como los comisionados lo informaron. Los jefes en Casa Mata habían tomado el medio término de que se hicieran nuevas elecciones... por consideración al emperador que en octubre se sirvió mandar disolver el Congreso", a lo que accedió desde luego Iturbide, consultando al Consejo de Estado. "Para restablecer la unidad —manifiesta Valle—, es preciso que haya una autoridad central; y este centro de unión debe ser el Congreso", quien debe exponerlo así en un *manifiesto a las provincias.*

La exposición oficial del gobierno ante el Congreso, y lo es la de Valle, es grave y compromete a Iturbide cuando se reconoce al Congreso como único centro de unión de las provincias. No es necesario volver sobre las reiteraciones de Iturbide arrogándose *la voz de la nación*, como escribió a Gómez Pedraza el 11 de febrero. También es significativo que Valle hable de las provincias y no de la nación, lo que es un implícito reconocimiento a la entidad de ellas.

Esa mañana del día 11 la *Gaceta* publica un decreto del emperador en el que se dispone la celebración de un *Te Deum* en la catedral, solemnizando el restablecimiento del Congreso. En éste, Zavala, apoyado por Bustamante, hace notar que el decreto no aparece refrendado por alguno de los secretarios del despacho, por lo que es nulo, "y debe castigarse a los impresores, de cuyas oficinas salgan semejantes papeles, sin que lleven la firma del secretario respectivo".

La *Gaceta* del 8 de marzo había publicado un decreto de Iturbide fechado en Ixtapaluca desde el 18 de febrero, circulado en bando del día 5, por el que se encomendaba al jefe político de México, al ayuntamiento, jueces de letras, comisarios de cuarteles y a sus auxiliares, el mantenimiento del orden. El jefe político debería nombrar, consultando al ayuntamiento y, a los jueces, "un vecino de cada manzana con la denominación de primer cabo de ella", quien alistaría a los demás vecinos seculares partidarios del orden, debiendo éstos manifestar las armas y caballos de su propiedad. El decreto establece la forma de organizar a los grupos de vecinos. El propósito declarado es que el propio vecindario vigile la tranquilidad de la ciudad. El capitán general proporcionará las armas necesarias.

La proposición de Zavala, las reclamaciones porque se han formado cuerpos militares sin autorización del Congreso, uno con "la denominación del regimiento defensor de la fe, y es una impostura que lleva por objeto miras muy criminales", en palabras de Bustamante, suscitan de nuevo el conflicto con Iturbide. Y a ello se suma la indicación de que el emperador no debe salir de México hacia Tacubaya, como está anunciado.

El día 11 el Congreso acuerda suspender sus sesiones "entre tanto el gobierno disponga la disolución de esos cuerpos formados sin aprobación del mismo Congreso, tomando además las medidas de seguridad en favor de la plena libertad del propio Congreso".

El 12 se reúne el Congreso, citado por su vicepresidente a sesión extraordinaria. Se da cuenta con la renuncia de José Antonio Andrade como capitán general de la provincia de México. Iturbide nombra en su lugar al general José Joaquín Herrera, pidiendo que el Congreso lo autorice por ser diputado en él, lo que se aprueba.

El gobierno envía al Congreso, y éste los turna a la comisión que se ocupa del asunto, los documentos por los que se pronuncian en favor del Acta de Casa Mata, Guadalajara, Acapulco, San Luis Potosí y el brigadier Armijo.

El Congreso continúa reuniéndose en sesiones extraordinarias, sin que se declare aún legalmente instalado por ausencia de los diputados que den el quórum.

* * *

El día 13, la comisión integrada por cinco diputados para conocer y dictaminar sobre la situación, informa que la Diputación Provincial de Puebla no considera al Congreso en libertad, por lo que no obedecerá sus disposiciones. La comisión presenta su dictamen. De los documentos que fueron proporcionados por el gobierno no se puede concluir un juicio definitivo, y aunque hay un fin en que las provincias y los jefes están conformes, en otros puntos no están convencidos. Se quiere un gobierno representativo, pero no son unánimes sobre cuál debe ser la representación. Unos apoyan al Congreso restaurado y otros demandan uno nuevo; algunos piden que se establezca un Poder Ejecutivo provisional. La Comisión opina que la legitimidad del Congreso subsiste como en el momento de su instalación, "y que sin volver los ojos al antiguo Congreso, no hay un jefe ni provincia que haya asignado o pueda asignar autoridad competente para decir qué Congreso ha de ser éste y cómo ha de reunirse".

Por una acta de Puebla, de 9 de marzo, "a la que es de presumir —expresa la comisión— se adherían todas las demás provincias que ya se han pronunciado aunque sólo fuera para conservar con ella la unidad, y porque es depositaria de la fuerza armada... y por algunos otros impresos, ve que no han convenido en reconocer desde luego Vuestra Soberanía". Los motivos parecen ser la falta de confianza en la libertad de que disfruta el Congreso, lo que no corresponde a la verdad. La comisión propone que se designen dos comisionados del Congreso para que convenzan a los reunidos en Puebla que la única medida en favor de la paz "es concentrarse en el antiguo Congreso, sostenerlo libre, y sostener sus deliberaciones".

La Comisión concluye: "El Congreso instituyente no ha estado disuelto de derecho, y es hoy tan legítimo como lo fue en su instalación. Sólo el Congreso pudiera hacer una legítima nueva convocatoria". En todo caso, el Congreso tiene toda la autoridad para legislar.

El dictamen se debate, y se aprueba enviar comisionados a Mangino y Sánchez de Tagle.

A todos los antecedentes debemos sumar ahora lo resuelto por el Congreso, con independencia y sin informar al emperador. El 14 de marzo se comunica al Congreso que Iturbide proporciona escolta y facilidades a los comisionados.

El desenlace está a la vista. Iturbide propone el mismo día al Congreso: "1o. Que los jefes militares del ejército que se han separado de México, se retiren con la fuerza que tengan a cuarenta o cincuenta leguas de esta capital. 2o. Que el emperador se retire con su fuerza a igual distancia. 3o. Que se nombre una Regencia compuesta de tres o cinco individuos propuestos por el Congreso a quien S.M. delegará el poder ejecutivo, para que lo ejerza hasta que se forme la Constitución política de la Nación". La proposición de Iturbide la hizo suya una consulta del Consejo de Estado fechada el mismo día en Tacubaya, y publicada en la *Gaceta* el 18 de marzo.

El Congreso aprueba enviar a Puebla el documento.

Los días 15, 16 y 17 de marzo no sesiona el Congreso.

El 18 de marzo se lee en el Congreso un oficio del día 16 de los comisionados en Puebla, informando que la junta de la ciudad reconocía al Congreso, aunque dudaba de su libertad. Mas en el acalorado debate de la junta se propuso que no se obedeciera al Congreso, por no ser nacional, ni libre "ante el gobierno que lo había reunido, porque abundaba de diputados a quienes la nación tenía proscriptos". El Congreso debía reunirse fuera de la capital, o bien el gobierno debía evacuarla.[58]

El 30 de marzo, Negrete, Vivanco y Echávarri se dirigirían al Congreso, "Vuestra Soberanía", lo llaman "con el más profundo amor y respeto", para renunciar ante él una parte de sus grados aminorando así los gastos que pesan sobre el Estado.[59]

En el Congreso, ese 18 de marzo, Francisco Ortega propone que, ante la falta de reconocimiento que venía manifestando el ejército, es conveniente el traslado del Congreso a Puebla. Sin resolverse la iniciativa se levanta la sesión.

* * *

En la sesión nocturna del 19 de marzo, de la que no se conoce el acta, se presenta Juan Gómez de Navarrete, secretario de Justicia, y lee la abdicación del emperador. El examen de la abdicación se reserva para el día siguiente "por no haber competente número de diputados", anota el día 20 Bustamante en su *Diario.*

Alamán se refiere a la sesión del 19, tomando los datos de Bustamante, que asiste a ella. El texto del documento leído el día 19 sería ampliado al presentarse al Congreso el 20, incluso poniéndole esta fecha. Bustamante conserva la abdicación original del 19.

> Reconocido el soberano Congreso por la junta y tropas adheridas al Plan o Acta de Casa Mata, cesó el motivo porque yo conservé la fuerza en las inmediaciones de la capital, pues no era otro que el de sostener al mismo Soberano Congreso; acabó la división respecto de mí.
>
> Segundo. La corona la admití con suma repugnancia, sólo por servir a la patria, pero desde el momento en que entreví que su conservación podría servir si no de causa, al menos de pretexto para una guerra intestina, me resolví a dejarla. No hice yo abdicación de ella, porque no había representación nacional reconocida generalmente, y por lo mismo era inútil toda gestión sobre la

[58] Carlos María de Bustamante, *Continuación del cuadro histórico...*, tomo II, pp. 103-104.

[59] *Gaceta Imperial...*, 1 de abril de 1823.

materia, y aun habría sido tal vez perjudicial; hay ya el reconocimiento, y hago por tanto la abdicación absoluta.

Tercero. Mi presencia en el país sería siempre pretexto para desavenencias, y se me atribuirían planes en que nunca pensara. Y para evitar aun la más remota sospecha, me expatriaré gustoso, y me dirigiré a una nación extraña.

Cuarto. Diez o quince días serán suficientes para arreglar mis asuntos domésticos, y tomar medidas para conducir mi familia en unión mía.

Quinto. Sólo pediré al Congreso que pague la nación mis deudas que he contraído con algunos particulares amigos, que no son de gran consideración; pues aunque el mismo Congreso dejó a mi arbitrio que tomara para mí lo que necesitase, y la Junta me hizo una asignación, yo no podía hacer uso de lo uno ni de lo otro, cuando las necesidades de las tropas empleadas y funcionarios públicos llegaban a mi corazón.- Es copia literal de los apuntes a la letra de S.M.I. que por su orden he leído en la sesión de esta noche ante el soberano Congreso constituyente. México 19 de Marzo de 1823.- Juan Gómez Navarrete.[60]

El día 20 se presenta formalmente al Congreso la abdicación, esta vez trasmitida por Francisco de Paula Álvarez por medio del secretario de Relaciones, José Cecilio del Valle. El documento reitera el del día anterior, aunque redactado en tercera persona y un poco más extenso.

El Congreso turna la abdicación a una comisión integrada por Mangino, Becerra, Zavala, Mariano Herrera, Gómez Farías, Osores, Espinosa, Horbegoso, Múzquiz y Castro.

El primer imperio se esfuma diez meses después de su instauración y a través de un forcejeo tan confuso como su desenlace. "De ser cierto, según todavía se insinúa con frecuencia al referirse a la monarquía y a sus partidarios —escribe Edmundo O'Gorman—... que se trata de unos meros fantasmas insustanciales, nuestra historia se vaciaría de la ejemplaridad que tiene, como la de una nación que logró sobreponerse a los muy reales y formidables obstáculos procedentes de su herencia...".[61]

Si el monarquismo, más que el imperio de Iturbide, hubiera sido un fantasma, no cabe duda que fue un fantasma sobreviviente a quienes lo veneraban o lo conjuraron en los días de la consumación de la independencia de México. Sobreviviente hasta 1867, cuando el presidente Juárez, los hombres de la Reforma y la nación lo sepultaron en el Cerro de las Campanas.

No podríamos referirnos hoy y aquí a los dos monarquismos. Mas podemos señalar que a mediados del siglo XIX *existía un proyecto monárquico frente a la república.* Ello, la existencia de ese *proyecto monárquico* no lo encontramos en el episodio de la consumación de nuestra independencia, que discurrió entre ambigüedades y desconciertos. O'Gorman lo advierte cuando habla de "una lucha interna entre dos tendencias inherentes a aquella posibilidad", la del ser nacional que asumiría el México independiente.[62] Un ensayista inglés, por cierto antiguo fabiano dice que "una tendencia es siempre más fantasiosa que un plan". Y en el imperio iturbidista, lo hemos visto, no encontramos algo más que una tendencia, monárquica y

[60] Bustamante, *op. cit.*, pp. 105-106.

[61] Edmundo O'Gorman, *La supervivencia política novohispana*, p. 5.

[62] *Ibid.*, p. 13.

antiliberal ciertamente, pero que no llega a formularse en un plan para el país, es decir, en una Constitución. Iturbide acusará al Congreso de que no escribió una sola línea y no se ocupó de ella, y la imputación es falsa. Conocemos el proyecto de Guridi y Alcocer y el del Poder Legislativo, de Antonio José Valdés, ambos monárquicos y concluidos en los días de la proclamación de Iturbide. Sabemos de referencias precisas a otros parciales. No aventuramos un juicio sobre los motivos de Iturbide para ignorarlos, cuando los diputados partidarios suyos los podían promover incluso en los días más propicios, los siguientes a su proclamación. El proyecto anticonstitucional y absolutista de 1820 únicamente era concebible fundando la monarquía en la legitimidad dinástica. Consumada la independencia absoluta se produce la ruptura con aquélla y se adopta fatalmente el principio subversivo de proclamar en la nación la titularidad de la soberanía. Las motivaciones antiliberales no se abandonan, pero no llegan a dar forma a un proyecto político para la nación independiente. La desconcertada persona del emperador se erige como poder de hecho. ¿Puede ella no congregar —lo logró en un momento— sino conciliar en una nación a los hombres que se proponen decidir libremente su propio ser histórico? El doctor Mier lo prevenía desde su republicana *Memoria político-instructiva.* Los mexicanos deben asumir el riesgo, los riesgos todos de su libertad y de una inicial incertidumbre.

La emancipación no es sólo la abolición de una dependencia política de la metrópoli. En América es también la ruptura con el antiguo régimen. Lograr la abolición de la dependencia puede ser súbita, y ocurre en el proceso más amplio de la desenajenación, incluso en el episodio mexicano de la consumación de la independencia.

El proyecto de un México emancipado se fraguará en el ejercicio de una libertad condicionada por el antiguo régimen que se niega. Que ésta no deja de ser una hipótesis para la inteligencia de los sucesos, es cierto, como también es cierto que los hombres se proponen ir aún más lejos, y obrar y decidir ejerciendo una libertad incondicionada. La abdicación de Iturbide ofrece la liberación de la condicionalidad inmediata que llevó al episodio de la consumación de la independencia, en la primera posibilidad de asumir una libertad constitutiva.

* * *

Pasarán días, hasta el 7 de abril, cuando la comisión nombrada por el Congreso le presente su dictamen sobre la abdicación. Mas la cuestión de fondo está resuelta desde el 29 de marzo, cuando se decreta que cesa el Poder Ejecutivo existente desde el 19 de mayo de 1822.

En el dictamen presentado el 7 de abril se toma en consideración la iniciativa de Múzquiz, del 29 de marzo para que se declare la insubsistencia del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. El documento de la comisión es necesariamente historiado. Desde que el Congreso se reunió para constituir a la nación, se expresa, los diputados se hallaron limitados por "las restricciones arbitrarias que contenían sus poderes; se vio ahogado en su nacimiento el voto de los pueblos, y sus representantes no vinieron a este lugar a expresar su voluntad, sino más bien a redactar unas bases constitucionales que se les había obligado a reconocer, y si cabe, a sacar algunas ventajas a favor de la libertad...". El entusiasmo por la independencia ocultó a la nación que con ella "no había entrado en el goce pleno de sus derechos... (y) no entró en el examen de otras cuestiones, cuya discusión temió pudiese implicarla en una nueva revolución".

El Congreso, prudente, no atacó las restricciones, mas se ocupó "en dirigir la opinión, formar el espíritu público y fijar las verdaderas ideas de libertad que aún no estaban generalizadas... a esto tendían todas sus discusiones, y como por una especie de instinto de cada diputado, iba a parar a este centro común...". En esos días, se confiesa, la nación "aún estaba fascinada por el brillante nombre de su libertador: aún no conocía bien la diferencia entre independencia y libertad; aún no se había penetrado de lo que el Congreso trabajaba por su prosperidad, y éste abandonado a sus propias fuerzas, continuaba su marcha lenta, pero firme...".

Llegó así al 19 de mayo, "y desde entonces no quedó al Congreso más libertad que la que puede tener un hombre que a todo trance desafía los peligros por conseguir un bien". La comisión desearía olvidar el suceso, pero su encargo es dictaminar sobre ello, y su autenticidad "será en todos tiempos la que justifique la resolución que deba dar el Congreso sobre tan grave asunto. Todo México sabe —continúa el dictamen— que la noche del 18 de mayo unos cuantos revoltosos desconocidos... marcados posteriormente por la opinión, cohecharon a la ínfima plebe de uno de los barrios de esta corte para que saliese en grupos gritando: 'Viva Agustín 1o. emperador'. Se sabe igualmente que algunos oficiales poco apreciados en sus regimientos, puestos a la cabeza de esta porción imbécil, dieron un aspecto más serio a esta asonada...". En el desenfreno se llevó al señor García Cantarines "en hombros para la (casa) del Sr. Iturbide, en la que se le declaró de un modo que no pudiese resistirse, la voluntad de que se nombrase emperador al héroe de Iguala". No fueron voces de entusiasmo, "la amenaza acompañaba siempre en esta noche y día funestos a la expresión de unos deseos temerarios".

En el Congreso, unos no se presentaron, "vimos a muchos llorar ocultos sobre las ruinas de la libertad, fuimos testigos del compromiso de los más; y también hemos presenciado con asombro la heroica resistencia de unos cuantos". Fue imposible para el Congreso sesionar en secreto ante el acoso de quienes lo rodeaban, y se resolvió llamar a Iturbide "para manifestarle que aquélla no era la ocasión de deliberar sobre un asunto que debía ser el resultado de la expresión libre de los pueblos", y que los diputados no se creían autorizados para resolverlo. Mas la presencia de Iturbide excitó al tumulto, los simples ciudadanos se mezclaron con los diputados, y hombres armados gritaban "coronación o muerte".

Tal acto de violencia "no pudo de ninguna manera legitimar la aclamación hecha en el Sr. Iturbide como emperador, pues el voto emitido por los diputados privados de libertad, ha sido de derecho nulo, así por la falta de esta condición, como porque obligadas las provincias por los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, a adoptar ciertas bases que no habían convenido, no pudieron expresar su voluntad libremente sobre la forma de gobierno que les convenía".

La objeción del dictamen a la proclamación de Iturbide impugna un supuesto previo: la nulidad de la forma de gobierno postulada en Iguala y Córdoba sin la sanción de las *provincias*. En las expresiones verbales se involucra el reconocimiento de esas entidades. No pretendemos que una intención federal las dicta. Registramos tan sólo el lapsus, en el que *la nación*, se va sustituyendo por *las provincias*.

El Congreso, sigue el dictamen, "reducido a la situación del senado romano en tiempos de Tiberio", no por corrupción sino por la opresión que sufría, declaró la sucesión hereditaria de la corona en la familia de Iturbide.

La aprehensión de diputados, el 26 agosto, revela la falta de acción a que estaba someti-

do el Congreso, y "fue la mayor autorización que podía dar el gobierno a las provincias para la insurrección". De nuevo se menciona a las provincias y no a nación.

La comisión calla el acto de disolución del Congreso, y no califica a la Junta Instituyente de la que fueron individuos tantos diputados.

De la exposición se infiere que siendo la proclamación de Iturbide nula "la admisión de una renuncia o abdicación, sería contrariar los principios sentados", de que "ni el Sr. Iturbide ni ningún otro tiene derecho al gobierno de una nación", que independiente "ella sola debe libre y espontáneamente elegir la forma de gobierno que más le acomode y sea conforme a sus verdaderos intereses". Opina con Iturbide que su presencia en el país no es conveniente, y que su salida debe ser pronta. La comisión considera que corresponde al decoro de la nación, "que un hombre cuyos servicios ha reconocido anteriormente y consignado en las actas que contienen su emancipación, cualesquiera que hayan sido sus debilidades o defectos, se retire sin una asignación decente para su manutención y la de su familia". También estima la comisión que debe fijársele un país de residencia.

Los artículos propuestos por la comisión serán aprobados en su esencia, alterando su redacción. El último de ellos, sobre la insubsistencia del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, el Congreso lo aprobará en decreto especial del 8 de abril.

José María Becerra da un voto particular sobre la nulidad del Plan de Iguala, manifestando que no puede decretarla el Congreso por las limitaciones impuestas en los poderes de los diputados.

El dictamen se debate largamente el día 7, aprobándose finalmente en los términos del decreto de 8 de abril:

> 1. Que siendo la coronación de D. Agustín de Iturbide obra de la violencia y de la fuerza, y nula de derecho no ha lugar a discutir sobre la abdicación que hace de la corona.
>
> 2. De consiguiente, también declara nula la sucesión hereditaria, y títulos emanados de la coronación: y que todos los actos del gobierno pasado desde el 19 de mayo hasta 29 de marzo últimos, son ilegales, quedando sujetos a que el actual los revise para confirmarlos o revocarlos.
>
> 3. El supremo poder ejecutivo activará la pronta salida de D. Agustín de Iturbide del territorio de la nación.
>
> 4. Aquélla se verificará por uno de los puertos del golfo mexicano, fletándose por cuenta del estado un buque neutral, que lo conduzca con su familia al lugar que le acomode.
>
> 5. Se asignan a D. Agustín de Iturbide, durante su vida, veinticinco mil pesos anuales, pagaderos en esta capital, con la condición de que establezca su residencia en cualquier punto de la Italia. Después de su muerte gozará su familia de ocho mil pesos, bajo las reglas establecidas para las pensiones del rnontepío militar.
>
> 6. D. Agustín de Iturbide tendrá el tratamiento de Excelencia.

El mismo día 8 se aprueba el decreto que declara la insubsistencia del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba:

> 1. Jamás hubo derecho para sujetar a la nación mexicana a ninguna ley ni tratado, sino por sí misma o por sus representantes nombrados: según el derecho público de las naciones libres. En

consecuencia, no subsisten el plan de Iguala, tratados de Córdoba, ni el decreto de 24 de febrero de 1822 por lo respectivo a la forma de gobierno que establecen, y llamamientos que hacen a la corona; quedando la nación en absoluta libertad para constituirse como le acomode.

2. Quedan vigentes por libre voluntad de la nación, las tres garantías de religión, independencia y unión, y lo demás que contienen los mismos planes, tratados y decreto, que no se oponga al artículo anterior.[63]

[63] *Colección de órdenes y decretos...*, tomo II, pp. 91-92.

6

HACIA LA PROCLAMACIÓN REPUBLICANA

Aunque el debate de los decretos del día 8 de abril ocupó únicamente la sesión del día 7 y parte de la del 8, fue extenso. Sólo un diputado, Porras, defendió la legitimidad de la proclamación de Iturbide. "Es cierto que la nación es libre para adoptar la forma de gobierno que más le convenga; pero efectivamente —agregó Porras— es necesario que se oiga a los pueblos para que digan si la coronación fue nula...".

En el Congreso, Bustamante hace historia y censura el dictamen por su moderación.

El padre Covarrubias recuerda: "el mismo día aciago del tumulto, dije, y consta en las actas, que el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, nos impedían constituir esta nación en República, allí mismo me burlé del plan y del tratado, y si el pueblo no hubiera estado ciego con la adulación, y el motor con la ambición, bien hubieran conocido que yo era un republicano consumado, y que en sus mismas barbas le echaba en cara su tiranía... de manera que si no lo conocieron, no fue culpa mía sino de ellos". En plena libertad, y después de "trabajos continuados por dieciséis años, ahora veo —dice— el fin de unos planes que desde mi infancia medité". Covarrubias había declarado en la sesión del 19 de mayo de 1822: "Lejos de que el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba nos desautoricen para elegir hoy emperador, creo que por ellos mismos estamos obligados a hacerlo. Uno y otro nos dejan en libertad de constituir este pueblo en república; uno y otro, y nuestras provincias, nos precisan a constituirlo en monarquía". La posible sutileza de Covarrubias seguramente no fue recogida con fidelidad en el acta del 19 de mayo de 1822. Mas no importa, porque el 7 de abril de 1823 no se le desmiente. Es más significativa su profesión de fe republicana, que funda luego en una improvisada divagación bíblica.

Guridi y Alcocer objeta la declaración de nulidad de la proclamación de Iturbide, proponiendo que se consulte *a las provincias.*

El primer artículo del dictamen se aprueba por 94 votos contra siete.

En cuanto al fondo en el debate del artículo 8 sobre la insubsistencia del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, quedando "la nación en absoluta libertad para constituirse en la forma de gobierno que más le acomode", se distingue entre el contenido monárquico de ambos y las tres garantías proclamadas en Iguala. Múzquiz, autor de la iniciativa, conviene con la distinción. El artículo se aprueba modificando su texto para expresar que la insubsistencia de los documentos de Iguala y Córdoba comprende el decreto del Congreso de 24 de febrero de 1822, "por lo respectivo a la forma de gobierno que establecen, quedando la nación en absoluta libertad para constituirse", y vigentes las garantías de religión, independencia y unión.

La proscripción de Iturbide y la declaración de que la nación queda "en absoluta libertad para constituirse", es la restauración de la potestad constituyente mediatizada en la consumación de la independencia. El mismo Congreso que el 24 de febrero de 1822 juró el gobierno monárquico moderado y los llamamientos al trono conforme al Tratado de Córdoba, lleva a su consecuencia la primera parte del juramento de aquel día: reconocer "la soberanía de la nación mexicana, representada por los diputados que ha nombrado para este congreso constituyente". El acto restablece el orden lógico de la revolución, y es el Congreso el que se instaura a sí mismo como órgano de ella en una decisión original e incondicionada.

El incansable cronista Carlos María de Bustamante, como rubro de su *Diario* en ese día, 8 de abril, escribe: "Día primero de la verdadera Independencia de la libertad mexicana".

¿Los jefes del ejército adictos al Acta de Casa Mata prevén el suceso y advierten su significado? En todo caso, se produce ya una mutación, aunque sea circunstancial, en los jefes antiliberales del antiguo ejército realista.

La historia de año y medio, a través de ambigüedades, desconciertos, contradicciones y conflictos, se reintegra así a la de la revolución insurgente. Por lo demás, al mantener las tres garantías de Iguala —religión, independencia, unión— no se reanuda fuera del contexto de la independencia americana. La reasunción de la soberanía subvertida y plena es el acto en el que, una vez consumada la independencia, se inaugura la historia de la nación emancipada. En ella no desaparecen los desconciertos, las contradicciones y los conflictos, y aun las ambigüedades. Mas la *sociedad fluctuante*, como exactamente la llama Reyes Heroles, será la de una nación liberada de la condicionalidad impuesta en el episodio de la consumación de su independencia.

* * *

El 29 de marzo el Congreso se había declarado por decreto legalmente reinstalado, con la asistencia de 92 diputados.

Como artículo segundo del mismo decreto se aprueba "que ha cesado el poder ejecutivo de México, existente hasta ahora, desde el 19 de mayo del año anterior".[64]

La denominación del nuevo Poder Ejecutivo, que designará el Congreso, el número de quienes lo integran y sus atribuciones, se encomienda a una comisión de la que forman parte Gómez Farías, Fagoaga, Torrazo, López de Plata y Fernández.

El Congreso aprueba que se dirija un manifiesto a la nación sobre el significado de la reinstalación del Congreso, y se encarga su redacción a Bustamante, Sánchez de Tagle y Larreinaga.

El día 30 se recibe en el Congreso el oficio de Vivanco, Negrete y Echávarri, a que ya nos referimos, felicitándolo y renunciando a una parte de sus grados. El Congreso está reconocido por el *ejército libertador*.

[64] *Ibid.*, p. 89. En adelante se omitirán las referencias de los decretos u órdenes a la colección de ellos, pudiendo ser consultados en ésta o en el tomo I de la *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María Lozano.* México, 1876.

La forma de publicar el decreto por el que se declara la reinstalación del Congreso y la cesación "del poder ejecutivo" plantea un debate. Ningún ministro del gobierno tiene autoridad para circular el decreto después de cesar el Ejecutivo de que eran parte, por lo que se esperará a la designación del nuevo Ejecutivo. El dictamen sobre la instauración de éste se presenta. La comisión propone el título de Junta Gubernativa para él, formándolo tres individuos y dos suplentes, turnándose en la presidencia los propietarios. Su título será el de *Alteza*, para conciliar "el respeto de los extraños y la veneración de los súbditos". No puede menos de advertirse la ambigüedad superviviente en el tratamiento de *Alteza*. Sus individuos no deben ser nombrados de entre los diputados del Congreso. Sus funciones provisionales se regirán por los del Reglamento de la Regencia que se presentó al Congreso antes de su disolución, suprimiendo lo relativo al *Generalisimato*.

Se objeta la denominación. Bustamante, examinando alternativas desecha la de Regencia, "porque esto supone un monarca que no existe, o un interrengo que no hay". Aceptaría, dice, el de Directorio, "que aunque voz francesa, es muy significativa", pues se trata de "ejecutores de la voluntad suprema del cuerpo legislativo". No importa el título siempre que no sea el de Junta, "pues la primera que se instaló no nos probó bien" y su memoria no es grata.

Es el doctor Mier quien propone los nombres de "poder ejecutivo simplemente o gobernadores del estado", y Sánchez de Tagle sugiere la adición de *supremo*, previa a la de Poder Ejecutivo, como se admite.

Sin objeciones mayores el decreto se aprueba en los términos de la iniciativa.

Aunque no se toca el punto de la forma de gobierno, la exposición de Bustamante desechando el supuesto monárquico no es objetada.

Desde el día 27 el *ejército libertador* había entrado a la ciudad de México, después de firmarse el día 26 un convenio entre sus jefes y Gómez Pedraza, en el que aquéllos aceptaban que Iturbide se alejara a Tulancingo, escoltado por el general Bravo, y que las fuerzas fieles al emperador se incorporaran al ejército libertador sin discriminaciones.[65] No entraremos en los detalles del fracasado intento de Iturbide para tener una entrevista personal con los jefes del *ejército libertador*, propuesta a través de los comisionados del Congreso que tratan con ellos su entrada a la capital. El asunto consta en los documentos e informes que se transcriben en el acta de la sesión del Congreso del 25 de marzo. Robertson, acudiendo a diversas fuentes, relata pormenores de esos días que revelan un final desconcierto de Iturbide, quien llega a proponer su salida de México siguiendo la singular ruta de Acapulco-Panamá-Jamaica.[66] El itinerario no resulta tan extraño si consideramos que es un periplo que no lo aleja inmediatamente del territorio mexicano. Su sola sugestión no puede menos que suscitar sospechas.

No es el exilio de Iturbide el que nos interesa. La víspera de su partida a Tulancingo, el 29 de marzo, dirige una exposición a los diputados del Congreso, *que representan a la nación*. El tono es reflexivo.

> Subiendo al trono se deja de ser hombre: el patrimonio de éstos es el error, los monarcas no son infalibles; por el contrario, más disculpables en sus faltas, o llámeseles delitos, si cabe tal contra-

[65] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 688.

[66] William Spence Robertson, *op. cit.*, pp. 248-249; Manuel Gómez Pedraza, *op. cit.*, p. 15.

> dicción con los principios del día; sí, más disculpables, porque colocados en el centro de los movimientos [...] en que chocan todas las pasiones de los que forman los pueblos, su atención dividida en multitud innumerable de objetos, su alma aturdida fluctúa entre la verdad y la mentira, la franqueza y la hipocresía, la amistad y el interés, la adulación y el patriotismo [...] todo se presenta al príncipe con iguales apariencias; él bien podrá desear lo mejor, y este mismo deseo lo precipita al mal; pero el filósofo descansa en su conciencia, y si está expuesto a sentir, no lo está a sufrir los remordimientos del arrepentimiento [...].

No preguntamos si existe una errata de imprenta o de copia, y el final del párrafo dice simplemente "lo está a sufrir..." sin el previo *no*, para ser consecuente. Aunque la expresión la recoge idéntica Bustamante, y no la corrige Cuevas.

De los documentos conocidos de Iturbide es éste, y tal vez el párrafo citado, el más sorprendente y revelador, cuando el coronel realista de un año y medio antes, el fugaz emperador por diez meses, se explica como un príncipe agobiado. La metamorfosis no puede ser más profunda. Sólo cuatro líneas aluden a la consumación de la independencia: "conocí que esta parte rica de la América no debía estar sometida a Castilla. Presumí que ésta era la voluntad de la nación, sostuve sus derechos y proclamé su independencia". Ninguna a su proclamación como emperador y a la disolución del Congreso.

Sus consejeros, escribe, "me persuadieron que la felicidad de la patria exigía hacer lo que hice, y a lo que se atribuyen resultados que habrían sido los mismos de otro modo, con sólo la diferencia de que la causa verdadera o aparente (esto lo decidirá el tiempo) habría sido en un caso la debilidad y en otro el despotismo: ¡triste es la situación del que no puede acertar y más triste cuando está penetrado de esta importancia!" Suponemos que escribió *impotencia*. "Comenzaron las diferencias, no me era desconocido su término, ni me era dado tampoco evitar los efectos del destino; yo debía aparecer como débil o como déspota; me decidí por lo primero...".

Hace referencia a sus negociaciones con los jefes del ejército, a su espontánea abdicación para evitar la guerra civil, y al Congreso que "es la autoridad primera que va a dar dirección al movimiento de los pueblos". No hace ninguna a la forma monárquica, ni al que fue su posible proyecto político para el país.[67]

La resignación no oculta, más bien expone la inanidad política de Iturbide en el suceso mismo de su abdicación, refugiándose en la imagen que él cree suya y actual, la del príncipe víctima de una historia que lo abruma y lo destierra de ella.

Alamán se refiere al documento de Iturbide y lo descalifica por estar escrito "en estilo pedantesco y el menos a propósito para la ocasión... lleno de principios generales y máximas inoportunas", atribuyendo su redacción a José Cecilio del Valle.[68] Para Zavala es un "documento indigesto, lleno de frases generales e insignificantes".[69] El comentario de Bustamante, en cambio, no es acerbo. Al leerse el documento en el Congreso "juntáronse diversos afectos

[67] Mariano Cuevas, *op. cit.*, pp. 383-384; Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 116-118; Bustamante consigna el 29 de marzo como fecha del documento.

[68] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 693.

[69] Zavala, *op. cit.*, p. 178.

en los semblantes, sobre todo melancolía y tristeza, que causa la desgracia de un hombre colocado en la cima del poder...".[70]

En la sesión del Congreso del 7 de abril no es Bustamante tan benévolo, y el doctor Mier lo es menos. Calificando Mier a Iturbide de tirano y usurpador se pregunta: "...¿qué pena le corresponde a un tal, sino la muerte? Es doctrina de Santo Tomás, aun respecto de un rey legítimo que se hace tirano porque en el capítulo 6 del libro 1o. del Régimen de los príncipes enseña, que donde el pueblo ha elegido un monarca, tiene derecho para deponerle y castigarle por medio de la autoridad pública, no obstante haberle prestado juramento de fidelidad, porque el tirano fue el primero que faltó al pacto social y lo prueba con el ejemplo de los romanos que dieron muerte a Tarquino, y del senado romano que a puñaladas se deshizo de Domiciano, aboliendo todos sus decretos, de que resultó la libertad de San Juan Bautista".

El doctor Mier vela sus erudiciones escolásticas para proclamar su republicanismo vindicativo. No podemos sonreír del casi terrorismo verbal del doctor Mier cuando las apelaciones religiosas de autoridad son todavía impresionantes sumadas a las históricas.

En la realidad, la historia de la emancipación se recupera a sí misma y se reanuda.

* * *

El 31 de marzo el Congreso elige como individuos del Supremo Poder Ejecutivo a los generales Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, y Pedro Celestino Negrete, que deben prestar el juramento aprobado: "¿Reconocéis la soberanía de la Nación Mexicana, por los diputados que ha nombrado para este Congreso Constituyente? ¿Juráis obedecer los decretos, leyes, órdenes, que éste establezca conforme al objeto de su convocación, y mandarlos observar y ejecutar; conservar la independencia, libertad e integridad de la Nación, la religión C.A.R., con intolerancia de alguna otra; promover todo el bien general del Estado?"

Negrete declina el nombramiento pero el Congreso lo ratifica, y en la misma sesión presta el juramento.

El 1 de abril el Congreso elige como individuos suplentes del Poder Ejecutivo a José Mariano Michelena y a Miguel Domínguez.

De los tres propietarios, en el Ejecutivo dos son antiguos insurgentes, y los suplentes, ambos mexicanos, son antiguos partidarios de la independencia. Negrete es un liberal conciliador.

El mismo día propone Carlos María de Bustamante que se ordene la suspensión de hostilidades en el territorio de Guatemala; que en la ciudad de Guatemala se reúnan diputados de sus provincias para que libremente decidan "si gustan o no adscribirse al territorio mexicano, y si lo quieren así, digan bajo qué condiciones y pactos". Otra proposición, en cuanto a cesar las hostilidades y retirar las fuerzas al mando del general Filisola, se presenta por varios diputados encabezados por Gómez Farías.

El 2 de abril se aprueba que se pongan "inmediatamente en libertad a los que se hallen detenidos en prisión por sólo opiniones políticas". El mismo día varios diputados proponen que se invite a Miguel Santa María, que se encuentra en Veracruz, para que se traslade a México como ministro plenipotenciario que es de la República de Colombia.

[70] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, pp. 118-119.

El 3 de abril se reanuda el debate de los artículos del Reglamento Interior del Congreso, que antes de su disolución había aprobado los primeros 50 artículos. El reglamento se promulga el 25 de abril.

El día 11 se embarca Iturbide desde la boca del río de la antigua Veracruz rumbo a Italia.

La abdicación de Iturbide, lograda por la coacción de republicanos y borbonistas, "habiendo ya variado los intereses —como asienta Zavala— era una consecuencia necesaria que se separasen". Los borbonistas se unen al que sería partido centralista que se propone una república *una e indivisible*. A los centralistas se suman *la aristocracia del clero*, los españoles, y los generales Bravo y Negrete, el resto del Ejecutivo y los ministros, a juzgar por su posterior actitud. Quizá José Mariano Michelena, en relación con Michoacán, su provincia, es un federalista discreto. El iturbidismo por su parte se une a los federalistas republicanos, entre los que figuran los generales Bustamante, Quintanar, Guerrero y Barragán, a los que sigue Santa Anna. La integración de los partidos no es inmediata, pero no es mucho lo que se demora.

El problema surge cuando se niega al Congreso su carácter de constituyente, para únicamente obedecerlo como *convocante*.[71]

La recomposición de partidos es la misma que Alamán describe, calificando además al Congreso de centralista. Miguel Santa María toma este partido desde *El Sol*, órgano de los centralistas.

La sola abdicación de Iturbide, y los decretos sobre la insubsistencia del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, suprimen la expectativa monárquica.

Alamán, el más invariable de los centralistas, y el primer secretario de Relaciones del nuevo gobierno, escribirá: "La máquina poderosa de destrucción que se puso en movimiento contra el gobierno, fue las diputaciones provinciales".[72] La falta de confianza en muchos diputados, lo prometido en el Plan de Casa Mata —la convocatoria de un nuevo Congreso, y el encargo a las diputaciones del gobierno interior de las provincias según el Plan de Veracruz—, dan alientos para negar o regatear la obediencia al gobierno y al Congreso, aceptando a éste únicamente como convocante. Nettie Lee Benson lo señala, y registra "el hecho de que México se hallaba dividido en provincias independientes"; los jefes políticos se hacen cargo de los poderes ejecutivos provinciales, y las diputaciones asumen el legislativo. El gobierno central es precario.[73]

El más sólido apoyo que encuentra el gobierno central —el Poder Ejecutivo y el Congreso— es el de los cuerpos de ejército que lo van manifestando y que la *Gaceta del Gobierno Supremo de México* publica en esos días y los siguientes.

* * *

El 9 de abril, cuando el Congreso aprueba las minutas de los decretos sobre la abdicación y la nulidad del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, y está ocupado en el debate del dictamen sobre el papel moneda emitido por el gobierno anterior, se propone suprimir de las monedas el busto de Iturbide para sustituirlo por "el cuerno de la abundancia, el signo de la libertad u

[71] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 184-187.
[72] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 706-707.
[73] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 121-122.

otro cualquiera", o "el árbol de la libertad mexicana", como propone Elozúa. El día 12 se presenta al Congreso el dictamen de la comisión "sobre sello y colores del pabellón nacional", que consultó el Supremo Poder Ejecutivo el 10. La comisión "encuentra que siendo las armas antiquísimas de la nación las que mandó usar la Junta Provisional Gubernativa, del águila sobre un nopal naciente de un islote en la laguna, el mismo sello corresponde seguirse usando, aunque quitando al águila la corona imperial a estilo europeo, porque considera la comisión que es impropia de la antigüedad... y más impropia aún de las circunstancias en que se halla la nación". En cuanto a los colores del pabellón, que son los mismos de la República de Colombia, debe variarse éste por "el que usaron los defensores de la independencia antes del año de 1821". El pabellón se dividirá en 16 partes, las cuatro centrales blancas con el águila sobre el nopal, y las 12 restantes formando "una orla de cuadrilongos alternativamente blancos y azules", con un filete encarnado que lo destaque del cielo y el agua.

El doctor Mier, que con Bustamante es quien viene restaurando el México antiguo en la historia de la emancipación, habla en favor de los colores blanco y azul que "eran de la casa de Moctezuma". Buenos Aires los usa como símbolo de toda América. El proyecto, concluye Mier, es el "más conforme a las antigüedades de nuestra patria". El símbolo del águila se aprueba. Los colores se debaten.

En favor de los tres de Iguala se pronuncia Fagoaga con un argumento de matiz borbonista: "por más apreciable que sea el mérito de los primeros campeones de la independencia, no debe olvidarse —dice—, que el segundo grito a favor de ella fue más feliz que el primero... y que así no es extraño que la gloria de esta acción se perpetúe en la bandera tricolor bajo la cual se consiguió". Además de que ella simboliza las tres garantías.

El escudo de armas y el pabellón nacionales se aprueban, con el águila "conforme el diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la independencia", suprimiendo la corona, y como pabellón el "adoptado hasta aquí".[74]

No se ha pronunciado la palabra república, pero la supresión de la corona en el águila del escudo sólo tiene un significado que la cautela de los diputados no oculta. El escudo deja de ser monárquico.

El día 11 la comisión de imprenta presenta al Congreso su dictamen sobre la iniciativa de varios diputados para que la libertad de imprenta "se haga extensiva a todas las materias políticas, sin excepción de forma ninguna de gobierno", suprimiendo los artículos aprobados por la Junta Provisional que la limitaban. En el dictamen la comisión reconoce "que la actual situación de la sociedad mexicana en ninguna manera puede favorecer a la autoridad pública para que limite con excepciones la libertad política de los ciudadanos. Por efecto de una revolución dichosa éstos se hallan en el pleno goce de sus derechos y ocupados en celebrar su primer pacto social, antes del cual no pueden ni deben reconocer leyes políticas preexistentes". Negar "la facultad de discurrir ampliamente sobre cuanto se contiene en la esfera de la política, sería privar a un artífice de los medios con que puede concluir y perfeccionar su obra. Los que temen, señor —declara el dictamen—, que los escritos a fuerza de raciocinios debilitan los cimientos de los gobiernos, o ignoran que éstos deben apoyarse en bases tan fuertes que resistan victoriosamente todo género de ataques, o son muy tímidos para defender la causa de

[74] *Gaceta del Gobierno Supremo de México*, 17 de marzo de 1823.

la razón y de la justicia... Los gobiernos se dañan sin duda al hacer exclusivas sus máximas y principios porque llega a despreciarse cuanto pueda decirse a favor de una autoridad que no consiente se hable de otra manera...".

El dictamen sólo exceptúa los escritos "que conspiren directamente a trastornar o destruir las tres bases de Religión, Independencia y la Unión de los ciudadanos, o alguna de ellas". El dictamen es el mismo que se había formado antes de la proclamación de Iturbide, y se presenta con su fecha original: 9 de mayo de 1822. En él se propone declarar la vigencia de la Ley de Libertad de Imprenta de 22 de octubre de 1820, decretada por las Cortes españolas.

En el debate, un diputado observa que se puede entender el derecho como libertad "de escribir contra la forma de gobierno para trastornarnos y exponernos a los mayores males". Manuel Mier y Terán, antiguo insurgente, contesta: "Opino que en punto a libertad de imprenta se aparte toda restricción porque no hay una que deje de ser nociva, por cuanto desacredita al que la impone y hace presumir que, pues se ordena el silencio en alguna materia, es sin duda porque en discusión franca no hay resolución que dar a los argumentos que se hacen en contrario". Mier y Terán es explícito: "por cierto que en la actualidad nada se aventura en orden a formas de gobierno, porque —dice sin eufemismos— la nación mexicana después de la restauración de la libertad, tiene una peculiar, de la que no la privarán todos los escritores si se conjurasen para ello. Hablo de la República a cuya forma primitiva quizá para los pueblos de América, hemos sido conducidos suavemente, no obstante los obstáculos que nos quisieron poner". Pueden existir partidarios de la monarquía que sigan escribiendo en su favor. No hay por qué impedirlo. "Nos vemos felizmente libres de ambiciones y aspirantes a tronos y diademas, y hemos arribado al término de nuestro destino que es la forma adecuada de gobierno para esta nación y para todas las de América".

Mier y Terán actualiza el dictamen de la comisión. La aprobación del primer artículo es una aceptación más que tácita de que la monarquía está abolida, quedando únicamente calificados como subversivos los escritos que conspiren "a trastornar o destruir las tres bases de Religión, Independencia y la Unión de los Ciudadanos".

* * *

El 2 de mayo, con demora, se daría cuenta al Congreso con un papel titulado *Manifiesto de los liberales de Guadalajara a sus conciudadanos*, cuando se aprueba la minuta del decreto ordenando formar la convocatoria a un nuevo Congreso. El documento de Guadalajara no se impugna ni comenta. No obstante, no podemos menos que aludir a él. Fechado el 6 de abril y firmado por *El cuerpo de liberales*, es una expresa proclama republicana y federal: "Comenzamos, pues, de nuevo a constituirnos; es verdad que nos vamos a engolfar en un mar borrascoso de choques y diversidad de pareceres; es verdad que nos empeñamos en una peligrosa lid con la muchedumbre educada en el siglo 10, y con otra gran parte que vive del desorden; ¿pero de cuándo acá —se preguntan— las mudanzas no tienen dificultades?" Para evitar incluso la guerra civil, "heis aquí en acción al soberano pueblo, la parte sana de Guadalajara... que quiere hacer efectiva esa decantada soberanía", ofreciéndose "apoyar a su Diputación provincial para que con más energía obre la causa de la prosperidad publica, y no la aventure a llamamientos forasteros o convocatorias arbitrarias"; y cuando la hora sea oportuna declare "*la instalación de nues-*

tro congreso provincial, la estrecha alianza para lo exterior con las demás provincias, y la absoluta independencia de todas ellas para lo interior". Lo cursivo aparece subrayado en el manifiesto.

El bien de la humanidad es la divisa de los liberales, "y éste es el objeto de las asambleas que habéis visto reunirse en la universidad y ciudadela de esta capital".

La adhesión del 26 de febrero de los jefes y oficiales de la Guarnición de Guadalajara al Acta de Casa Mata y al convenio entre Echávarri y el Ayuntamiento de Veracruz, adicionando el artículo quinto de aquélla, para que en tanto se reúne el nuevo Congreso sea vigente la Constitución española en lo que no se oponga a los decretos del Congreso, anteriores a su disolución, es la coyuntura para los republicanos de Guadalajara. No es únicamente la República sino la República Federal la que se propone, yendo más lejos al prevenir que para hacer efectiva la *decantada soberanía* no se aventure "a llamamientos foráneos o convocatorias arbitrarias". El *Manifiesto*, no obstante estar firmado por *El cuerpo de liberales*, es más que una expresión de grupo, cuando solicita el apoyo a la diputación provincial, y habla de las asambleas que se han reunido en la Universidad y la Ciudadela. No presumimos una opinión generalizada en el sentido del manifiesto, pero sí una bien concertada en favor de la república federal, a la que no es ajena la diputación provincial, o algunos de sus siete individuos.

No puede pasarse por alto el hecho de que el general Luis Quintanar, jefe político y capitán general de la provincia, iturbidista, no reprimiera la manifestación del *Cuerpo de liberales*, ni las asambleas en la Universidad y la Ciudadela.

En la situación general se involucran la convocatoria de un nuevo Congreso y la proclamación republicana federalista, y ello ocurre a un mes del Acta de Casa Mata.

* * *

Nettie Lee Benson registra con precisión las actividades de Miguel Ramos Arizpe en las Provincias Internas de Oriente, en las que no se había reunido aún la diputación provincial por no convocarla Gaspar López, comandante general y jefe político de ellas.

Ramos Arizpe, que se encuentra en las Provincias Internas desde agosto de 1822, trabaja en contra de Iturbide como lo revela el hecho de que el 6 de marzo preside una reunión del Ayuntamiento de Monterrey, el Cabildo Eclesiástico, el gobernador provisional y ciudadanos prominentes. Por unanimidad se aprueba la adhesión al Plan de Casa Mata, y no existiendo diputación provincial se acuerda crear una junta provisional de gobierno, cuyos siete individuos se eligen para hacerse cargo del gobierno hasta la reunión del nuevo Congreso Constituyente. Ramos Arizpe es elegido presidente de la junta. Para el 16 de marzo se ha logrado la adhesión de varios ayuntamientos, y para el 15 de abril la de Texas.

La diligencia de Ramos Arizpe para eliminar la oposición de Gaspar López y lograr la unión de las Provincias Internas de Oriente la describe puntualmente N.L. Benson.[75]

Con la adhesión de Texas son 16 las pronunciadas en favor del Plan de Casa Mata. Ninguna ha hecho una declaración republicana expresa.

La ficción de Casa Mata —llamémosla así— al no desconocer a Iturbide considerando la reinstalación del Congreso al solo fin de que convoque un nuevo Constituyente, crea en el

[75] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 97-103.

centro un vacío de autoridad institucional. Las adhesiones de las provincias al documento de Casa Mata y al Congreso restaurado acentúan el carácter anómalo de la situación, quedando ellas bajo el gobierno inmediato de sus diputaciones provinciales y en el ejercicio, corno lo declaran, de sus soberanías dispersas. Es el Congreso el que se enfrenta al desconcierto de una revolución que elude reconocerse a sí misma como tal. La abdicación de Iturbide resuelta como hemos visto, y la creación del Poder Ejecutivo provisional restablecen una instancia central, y al mismo tiempo la posibilidad revolucionaria.

Los jefes del ejército libertador en Puebla muestran su desconcierto en las conversaciones con los comisionados de México, y en tanto el emperador decreta la reinstalación del Congreso, el 4 de marzo, la Diputación Provincial de Puebla envía comunicaciones a las provincias para que designen representantes a Puebla a conferenciar sobre la constitución de un gobierno provisional y el restablecimiento del Congreso o la convocatoria de uno nuevo, procedimiento al que se oponían Victoria y Santa Anna en sus *Instrucciones o indicaciones* del 23 de febrero al Acta de Casa Mata. El intento de Puebla fracasa pero incita aún más a las provincias a tomar decisiones propias. La Diputación Provincial de Michoacán nombra a Mariano Michelena para tratar la creación de un gobierno central con diputados de las provincias. Con San Luis Potosí y las Internas de Oriente, registra N.L. Benson, parece que se conviene reunir a los representantes en Querétaro. N.L. Benson registra estas iniciativas, y califica de confusa la frustración de quienes se reunieron en Puebla —oficiales del ejército, antiguos diputados del Congreso y algunos representantes de provincias—, al encontrar dificultades para ser admitidos los designados por diputaciones provinciales.[76] Las solas designaciones de representantes para acudir a Puebla son favorables a la convocatoria de un nuevo Congreso. Desde el 1 de abril, por ejemplo, la Diputación Provincial de Coahuila, Nuevo León y Texas, que nombra como sus comisionados a Múzquiz y el doctor Mier, está por la convocatoria.

Los sucesos ciertamente no corroboran la inteligencia de los jefes de Casa Mata y sus colaboradores de México con Ramos Arizpe y Michelena. Y no puede presumirse que exista un proyecto republicano en los hombres de Casa Mata.

Los propósitos de los que dirigen el movimiento en Puebla se presentan ambiguos. Es reveladora el Acta de Toluca, de 15 de marzo, sobre la remisión de un diputado a Puebla. En ella consta la reunión del Ayuntamiento con un juez eclesiástico, un cura, los prelados de las órdenes de San Francisco, El Carmen, San Juan de Dios y La Merced, y cinco vecinos principales, uno de ellos Quintana Roo. Se da cuenta con la invitación de la Diputación Provincial de Puebla para que Toluca envíe "un comisionado del partido", para "reunirse con otros que deben tratar sobre el restablecimiento del primer Congreso o convocatoria de otro nuevo, nombramiento de un supremo gobierno provisional y términos en que debían acordarse las contestaciones con el emperador sobre estas materias". No considerándose el Ayuntamiento con facultades para resolver, convocó a la junta. Se da cuenta también con el Manifiesto de la Diputación Provincial de México, de 6 de marzo, sobre la necesidad de reinstalar el Congreso en la capital.

La junta de Toluca aprueba el discurso que lee Quintana Roo para que no se envíe representante a Puebla, lo que hará "si el rumbo que han tomado los negocios públicos frustrase la

[76] *Ibid.*, pp. 119-120. Firmeza de los poblanos con la Comisión de México.

esperanza de su feliz terminación y desenlace". Y por cuanto a las contestaciones que haya con Iturbide, "este Ayuntamiento consigna sus votos en los de su Diputación Provincial —la de México— y promete conformarse con todas sus determinaciones", o sea, el pronunciamiento que ella hizo "de reconocer al extinguido Congreso por una autoridad legítima para resolver todas las cuestiones".

El discurso de Quintana Roo es hábil impugnando la "junta compuesta de comisionados, de los Ayuntamientos", no prevista en el Acta de Casa Mata, en la que se juró "sostener a toda costa a la representación nacional, y todas sus decisiones fundamentales, en cuyo concepto —señala— se comprende con especialidad la naturaleza del gobierno que ha de regirnos en lo sucesivo".

La insinuación aprobada en Toluca, cuatro días antes de la abdicación, es subversiva en términos que no lo fue el Acta de Casa Mata, por más que sus autores se propongan en esos días tratar, "si las circunstancias lo exigiesen", de un gobierno provisorio hasta que el Congreso, el reinstalado o el futuro, resuelva en lo definitivo.

Como Mier y Terán dirá el 11 de abril en el Congreso al mencionar la república, a la que "hemos sido conducidos suavemente, no obstante los obstáculos que se nos quisieron poner". La opción tácita es también única.

* * *

En el conflicto de fondo las alternativas desaparecen de hecho; el inmediato es si el Congreso restaurado lo será en el pleno de la potestad constituyente.

No es necesario demorarse en verificar los términos de las adhesiones de las provincias al Acta de Casa Mata, que proponen la convocatoria del nuevo Congreso.

Según Bocanegra, el republicanismo se manifestó resuelto desde la reinstalación del Congreso, y "formó su combinación y plan para destruir al Congreso... reduciéndolo *a convocante*, porque no sólo le temió, sino que conoció no podía dominarlo, y debía buscar un refuerzo en nuevos correligionarios", los que serían elegidos para el nuevo Congreso.[77] Bocanegra, diputado y testigo de los acontecimientos, no es muy exacto cuando da fin a sus *Memorias* en 1846. Zavala, mencionando los partidos después de la abdicación de Iturbide, escribe que el borbonista "quedó reducido a completa nulidad, y ni osaba ya hacer mención de su monarquía constitucional. Todos hablaban de *república*; pero ninguno se entendía. Ni el ejército, ni el Congreso, ni los partidos mismos sabían lo que había sucedido, ni mucho menos lo que debía suceder". La abdicación de Iturbide es también la de la monarquía en México, y ella arrastra cualquiera ilusión borbonista. El Congreso es el último lugar en donde pueden los borbonistas conservar posiciones, por más desalentadas que sean. La reunión de uno nuevo será la de su proscripción política.

Un interés no definido pero cierto y actual se va manifestando y toma forma: el de la clase media por obtener el poder, como lo advierte Zavala, aunque "era imposible balancear su número y su influencia. En realidad era lo que más se acercaba a una república".[78]

[77] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, pp. 207-208.

[78] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 187-188.

El 2 de abril, varios diputados, entre ellos Carlos María de Bustamante, Sánchez de Tagle, Gómez Farías, Herrera y Múzquiz, presentan al Congreso una iniciativa para que se forme convocatoria del nuevo Congreso que debe constituir a la nación, "bajo la forma que a la misma agrade", designándose una comisión que en ocho días presente el correspondiente proyecto. La comisión se integra con Mariano Herrera, Javier y Carlos María de Bustamante, Tagle, Beltranena y González. El mismo día el Ejecutivo da cuenta al Congreso del nombramiento de José Ignacio García Illueca como secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, y encargado interino de las otras tres secretarías. En los días siguientes se nombrarán los secretarios restantes: Lucas Alamán en Relaciones, José Joaquín Herrera en Guerra, y Francisco Arrillaga en Hacienda.

Bustamante, autor de la iniciativa para formar la comisión de convocatoria, escribe el 4 de abril en su *Diario* que esa noche se presentaron a la comisión varios *comisionados de las provincias* de Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, insistiendo en la convocatoria. "Ésta es una facción de demagogos —escribe Bustamante—, que pretenden colocar a gran porción de clérigos y serviles en la Legislatura que se prometen formar... Tenemos en sólo estos hombres, el germen de una espantosa revolución...". El Congreso debe desengañar a las provincias "con buenos escritos, y abriendo una lid literaria en que triunfe la razón. Esta América —concluye— va a ser teatro de discordias, excitadas por el clero y corporaciones de aristócratas".

Los comisionados de las provincias de Guadalajara, Valladolid, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, habían sido designados para concurrir a Puebla, mas la reinstalación del Congreso los lleva a México, y es la comisión de convocatoria la que los llama para conocer la opinión de sus provincias, que es por convocar un nuevo Congreso. Ellos mismos aclararán el punto en documento a que nos referiremos.

El 14 de abril la comisión de Convocatoria presenta su dictamen al Congreso. El dictamen, fechado el 12 de abril, concluye proponiendo: "1. Por ahora y para constituir a la nación no se debe convocar nuevo Congreso. 2. El actual, ínterin la comisión de Constitución va trabajando el proyecto de ella, se ocupará exclusivamente en la organización de la hacienda, del ejército, de la administración de justicia, etc. para que haya nación que constituir. 3. Concluido el proyecto de Constitución y al comenzar a discutirlo, se tratará y resolverá por primera cuestión, si se dejará la sanción al futuro Congreso".

Dos de los individuos de la comisión, Betranena y González, firman un voto particular sobre el artículo tercero: "concluido el proyecto de Constitución, discutida y aprobada la parte relativa a elecciones, se convocará inmediatamente el futuro Congreso, a quien se reservará la sanción de la Constitución".

Por su parte, Carlos María de Bustamante lee el mismo día 14 un voto particular.

El dictamen que funda la iniciativa de la comisión es amplio.

El Congreso no cumplió con su fin de constituir a la nación por la despótica disolución de que fue víctima, y "aunque hemos dado cabo a la revolución —se dice—, sus consecuencias próximas nos mantienen expuestos a muy graves peligros"; los partidos triunfantes, los resentidos por la derrota, dividen al país. Otros argumentos se hacen valer: "la ignorancia de la incomparable mayoría de la nación sobre los verdaderos principios y elementos del gobierno *representativo*, único que puede convenirnos y hacer feliz al Septentrión; en fin los celos infun-

dados, pero siempre subsistentes en las provincias hacia la capital, y ese irreflexivo, pero natural deseo de querer figurar tanto como ella, ser independientes y gobernarse por sí solas", son los escollos a la decisión de convocar o no un nuevo Congreso. La comisión, que se ha reunido en tres sesiones, duda su resolución y preferiría renunciar.

El dictamen se extiende en probar la legitimidad del Congreso. Las limitaciones impuestas en la convocatoria de 1821, sujetándolo al Tratado de Córdoba, y las que aparecen en sus poderes para constituir, son nulas, pues el ejercicio de la soberanía no puede ser restringido, como ya lo declaró el mismo Congreso.

Constituir es un acto primario, y la Constitución no es "el conjunto de artículos que forman un todo armonioso...; muchos, la mayor parte de ellos —se expresa con pulcritud— pueden variarse y trastornarse sin que el estado sufra alteración; no sucede lo mismo con las bases esenciales (que) variadas trastornan la sociedad, y por lo tanto ellas, y sólo ellas se pueden llamar Constitución".

De esta clara premisa, la comisión pasa a postular una tesis: si la nación "procediendo de un modo democrático, cuya posibilidad no es fácil de entender en un territorio vastísimo, fijara bases a sus representantes y ligara a ellas sus poderes, les daba ya la Constitución y cuanto más los comisionaba para ser los *redactores de ella*, y el cuerpo representativo no se podría llamar *constituyente* sin incurrir en implicancia".

La comisión, que propone en el Congreso una plena autarquía revolucionaria, se enfrenta desde las primeras líneas de su dictamen a las provincias que pretenden *ser independientes* y *gobernarse a sí mismas*. Esto es, se enfrenta, antes de postular expresamente una forma de gobierno —la cuestión de fondo en esa hora—, al nuevo hecho revolucionario en el que se proclaman los derechos de las provincias. Y comenta: "Algunos temerán que esa parte que hemos llamado aristocrática de ciertas provincias, que remitieron apoderados a Puebla (bien que en otra hipótesis y para otro caso) los cuales han manifestado ser éste (el nuevo Congreso) el deseo de las provincias y constante empeño en conseguirlo, resentida, encaprichada, etc. trabaja en fomentarlas, las revoluciones, y las haga negar la obediencia al Congreso y separarse".

La comisión es beligerante, pero no deja de ser consecuente con sus principios: "Si llega a revolucionarse la sociedad, y en su revolución lo disuelve (al Congreso), el hecho es justo —acepta—, porque la nación lo quiso inequívocamente, y queriéndolo hizo la ley y la justicia extrínseca".[79]

Aunque la comisión no espera que ocurra y argumenta empeñosamente en contra de quienes demandan el nuevo Congreso, ello ocurre dentro del suceso revolucionario, y en él se formulará el proyecto definitivo para el México independiente.

* * *

En el seno mismo de la comisión se expresa una disidencia singular y significativa. Valentín Gómez Farías fecha el 17 de abril su *Voto particular* como individuo de ella, pronunciándose por la convocatoria del nuevo Congreso. Gómez Farías recuerda que el día 2 anterior presen-

[79] Dictamen de la comisión especial de Convocatoria para un nuevo Congreso, México, 12 de abril de 1823.

tó con Múzquiz la iniciativa para que se convocara un nuevo Congreso, dando lugar a la formación de la comisión especial que debía dictaminarla. Menciona también que cinco de los individuos de la comisión, compuesta por siete, opinaban por la convocatoria. Para proceder con más acierto, dice Gómez Farías, se acordó citar a los comisionados por las provincias para asistir a la reunión a que se invitó desde Puebla a las diputaciones provinciales. Los comisionados de seis provincias que se reunieron con la comisión del Congreso opinaron en favor de la convocatoria.

En el *Voto particular* no son las referencias de Gómez Farías a los sucesos los que nos interesan aquí sino tres puntos.

El primero, en que apoya su voto, es el reconocimiento de que "las corporaciones que fueron elegidas popularmente", son las que solicitan la convocatoria del nuevo Congreso. Y pregunta: "¿qué órganos más aproximados a los de un sistema representativo, que los ayuntamientos y las diputaciones? No por esto las últimas —advierte— se han erigido ya en Congresos provinciales; darán este paso, porque si no me engaño la marcha de las Américas es inevitable; ellas como dice M. de Pradt se constituirán en repúblicas frente de la Europa dividida en tronos".

El segundo punto es la consecuencia que prevé Gómez Farías ante el ejemplo de Estados Unidos, ese modelo admirable de gobierno, que

> así como ha sido un fanal para nuestros hermanos de la otra América, lo será también para nosotros", porque "de la monarquía constitucional al gobierno americano hay una distancia que pronto se puede recorrer. ¡Qué bella perspectiva ofrece a la imaginación un territorio inmenso dividido por la misma naturaleza en grandes porciones, gobernado en cada una de ellas según sus intereses, sin sentir la opresión de otra, por hombres que conozcan sus necesidades, y que merezcan su confianza, reteniendo separadamente su soberanía, libertad e independencia, y entrando todas en una firme liga de amistad recíproca para su defensa común, la seguridad de su libertad, y de su mutua y general felicidad! En una alianza de esta naturaleza —exclama Gómez Farías— no peligra la sociedad, sino el hábito inveterado de dominar. El provincialismo de que se acusa a Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara y Valladolid, etc., bien analizado da por último resultado el deseo justísimo de evitar ese predominio.

A propósito de la convocatoria del nuevo Congreso, Gómez Farías hace una profesión de fe que no da lugar a duda alguna. A un mes de la caída de Iturbide, la república federal se anuncia en el seno del Congreso.

Un punto final y álgido en el Congreso toca Gómez Farías: la naturaleza de los poderes de los diputados. Se opina que éstos son absolutos, lo que para Gómez Farías es menos que dudoso. Acude a la autoridad de Martínez Marina.

Los poderes a los diputados, según Martínez Marina, deben ser amplios pero no *ilimitados, absolutos e irrevocables,* lo que sería privar de la libertad a los hombres y los pueblos al reducirlos a la sola obediencia. El erudito Martínez Marina supone el *pacto subjectionis* para impugnarlo referido a la elección y poderes de los legisladores. "¿Y no sería éste —pregunta— un despotismo más horroroso que el de nuestro antiguo gobierno?"

Por su parte Gómez Farías desarrolla el siguiente argumento:

> Me parece que debe distinguirse —puntualiza— una nación constituida de la que no está: la constituida ha fijado ya por medio de sus procuradores las reglas del pacto social, por las que se han ligado las partes integrantes de ella, reglas que comprenden igualmente a todas, y que se dirigen a la mutua y común felicidad; en ésta los diputados representan a todas, y respectivamente a cada una de las porciones convencionales; en la otra —la que no está constituida—, representan a solas las provincias que los mandan, y los eligieron de su seno... a fin de que conociesen sus intereses, los amasen, y por consiguiente los defendiesen, y promoviesen con mayor eficacia y acierto: éste es el caso en que nos hallamos: estamos en absoluta libertad para constituirnos y todavía no zanjamos los fundamentos de nuestra unión.

Las provincias se pronunciaron por un nuevo Congreso, y se debe convocar de acuerdo con su voluntad. "Señor —expresa Gómez Farías—, no demos ocasión a que digan algunos genios atrevidos: ese Congreso se ocupa en constituirnos y no debe hacerlo: si él se limitase a trabajar en lo necesario, en aquello que exige el orden de la sociedad y su conservación, mientras se reúne otro que con poderes más amplios e instrucciones forme la gran carta de nuestro pacto, entonces merecería nuestro reconocimiento, pero traspasando como vemos estos límites él mismo nos pone en la precisión de desobedecerlo".[80]

El argumento es pulcro. En un sistema constitucional los legisladores obran libremente dentro de sus atribuciones prescritas ya. En una situación preconstituyente y revolucionaria deben ajustarse a las instrucciones de sus electores sobre el pacto constituyente que deben concertar. La revolución no elige representantes para que instituyan la contrarrevolución. El argumento es impecable.

[80] *Voto particular del señor Gómez Farías, como individuo de la comisión especial nombrada por el soberano Congreso para examinar la cuestión, de si debe o no convocarse un nuevo Congreso*, México, 1823.

Parte octava

LA INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL

1

LA PROCLAMACIÓN REPUBLICANA

El dictamen de la Comisión Especial de Convocatoria presentado al Congreso el 14 de abril obliga y apresura la definición de las provincias. Cuatro días después, el 18, los diez apoderados de las provincias —de Guadalajara, Valladolid, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí— a los que alude la comisión, dirigen *una Representación* al Congreso. Antes de referirnos a ella mencionemos el *Voto particular* de Carlos María de Bustamante, de 4 de abril, el mismo día en el que los representantes de las provincias se reúnen con la comisión de convocatoria. Bustamante en su *Diario* los califica inmediatamente, como registramos, de "facción de demagogos, que pretenden colocar a gran porción de clérigos y serviles en la Legislatura que se prometen formar, pues saben que la actual, no tienen lugar sus desatinadas pretensiones... Esta América —anuncia— va a ser un teatro de discordias, excitadas por el Clero, y Corporaciones de Aristócratas". No es impertinente recordar las expresiones de Bustamante, que inspiran las atenuadas del dictamen.

La preocupación de Bustamante inspira el voto particular que el mismo día 4 dirige a la comisión. Las circunstancias, y la inclinación a historiar de Bustamante, lo llevan a narrar aunque sea sucintamente los acontecimientos y a justificar al Congreso con la conducta de muchos de sus diputados, que no puede desacreditar la de otros. Los movimientos de las provincias "se han interpretado de una manera violenta y peligrosa". Sus resoluciones, las de las provincias, han sido provisionales en tanto se reúne el Congreso. El ejército libertador ha reconocido al Congreso. Lo que importa es formar la Constitución. La convocatoria de uno nuevo "acaso nos expondría a organizarlo con individuos de unos principios diversos de los comúnmente adoptados, y con cierto aire de gentes ansiosas de adquirir nuevos privilegios". La contrarrevolución inquieta a Bustamante: "mientras más tardemos en constituirnos —advierte—, más se multiplicará la facción que obre por D. Agustín de Iturbide", quien tiene adictos en las provincias, y son los que denigran al Congreso. "Auxílialos otra casta de gente, empeñada en persuadirles que la religión va a perecer, y que todo ha sido obra de españoles".

"Tamaños males sólo podrá evitarlos un prontísimo pronunciamiento —asegura— por el sistema de gobierno que debemos adoptar", y que demoraría la convocatoria del nuevo Congreso. Pero Bustamante no se declara por el sistema de gobierno que aprueba.

Termina su voto proponiendo "que se aguarde a la resolución de las provincias... que en breve manifestarán su voluntad con actos de aprobación o reprobación; que las provincias amplíen a sus diputados sus instrucciones para que constituyan a la nación", y "que admitan la renuncia de los diputados que por no haber convenido con sus ideas políticas se hubiesen se-

parado de la mente de sus comitentes, quedando a salvo para deducirlo en el tribunal de Cortes". Y finalmente, que el dictamen que apruebe la comisión y su voto, se impriman y circulen antes de su debate en el Congreso.[1]

La beligerancia de Bustamante no es la radical que se expresa en el dictamen de la comisión del 12 de abril. Además, su temor a la contrarrevolución no es ficticio, y lo revela aún más el arrebato de las expresiones en su *Diario* privado.

Hecho público el dictamen de la comisión, cuatro días después, el 18 de abril, los representantes de las provincias, que se habían reunido con aquélla el día 4, dirigen una *Representación* al Congreso. Nombrados por sus diputaciones provinciales para concurrir a la junta de Puebla a invitación de los jefes del ejército libertador, sin que se hubiese llegado en ella a ninguna resolución, hoy reiteran el voto de las provincias que ya manifestaron a la comisión en "términos que no dejaban duda alguna". La mayoría de la comisión del Congreso, dicen, ha variado su opinión original en el dictamen.

Los representantes de las provincias censuran en el Congreso las limitaciones impuestas desde 1821 por la Junta Provisional Gubernativa para elegir "en número limitado de clases determinadas", y con base en la división territorial en partidos y no en la población. Además, escogidos los diputados "precisamente con el fin de crear una monarquía, y no con el de establecer la forma de gobierno más conveniente a la Nación... podrá ésta no calificarlos de igualmente aptos". Se considera también que en el Congreso "gran parte de los que lo componen han desmerecido la confianza pública", por lo que el cuerpo carece de influjo moral, aunque la mayoría ha dado pruebas de sus virtudes. Si los que desmerecieron la confianza deben ser separados, es más aconsejable convocar un nuevo Congreso, evitando la ociosidad de las discriminaciones.

La adhesión al Acta de Casa Mata no fue, dicen, sólo de las diputaciones provinciales, sino también de los ayuntamientos, corporaciones y personas de representación "que son verdaderamente las que forman opinión", en la inteligencia de que se convocaría un nuevo Congreso. Pero las diputaciones "reconcentran más que ninguna otra corporación el voto público de las provincias por la popularidad de sus elecciones", como Vivanco, Negrete y Echávarri lo reconocían al invitarlas a Puebla para consultar, "aunque fuese de modo supletorio la voluntad de las provincias". Conforme a lo expuesto, Valladolid ya solicitó por tres veces la convocatoria del nuevo Congreso.

El reconocimiento del Congreso por el ejército no invalida el pronunciamiento de las provincias por el Acta de Casa Mata. El argumento de que los poderes delegados a un Congreso Constituyente son *irrevocables e ilimitados*, es una afirmación "que quizá destruye todos los fundamentos de la sociedad, y que expone a los pueblos al más horroroso despotismo. Juzgamos por demás —declaran—, ocuparnos en desvanecer los temores que se anuncian de que partidos aristócratas se apoderen de las elecciones, y no sean éstas acertadas". A pesar de las trabas de la primera convocatoria y de los esfuerzos de Iturbide, las elecciones fueron contrarias a sus designios.[2] La *Representación* apoya así el voto de Gómez Farías del día anterior en el Congreso.

[1] Suplemento a *La Abispa de Chilpancingo* de 19 de abril de 1823.

[2] *Representación de los comisionados de las provincias al Soberano Congreso*, México, 1823.

La mesurada *Representación* concluye ratificando el voto de las provincias en favor de la convocatoria del nuevo Congreso.

* * *

La reacción de la Diputación Provincial de Valladolid ante el dictamen consta en su respuesta de 7 de mayo a los diputados que la consultaron el 23 de abril. El apoyo a la *Representación* del 18 de abril es total. Desde su principio la diputación provincial declara "que quisiera prescindir de la alta injuria que se infiere en suponer que representa como voluntad de la provincia la que sólo es de algunos individuos... y se ve obligada a manifestar la arbitrariedad, e injusticia con que se supone la existencia de una facción aristocrática, a cuyas miras torcidas se atribuye, lo que sólo es la expresión libre de los pueblos". Se conoce que los autores del dictamen no estuvieron en las provincias cuando éstas se pronunciaron por el Acta de Casa Mata y las diputaciones únicamente se pusieron "a la cabeza de la opinión pública para dirigirla, y ordenarla", pues sin su intervención hubiese sido tumultuosa y anárquica.

"Las Diputaciones, pues, se deben considerar en este caso —declara la de Valladolid—, como el órgano e intérprete de sentimientos y votos largo tiempo reprimidos, y sus operaciones todas, que sólo han llevado por objeto recuperar los usurpados derechos de nuestra libertad", no pueden atribuirse a miras privadas. Valladolid repite y amplía los argumentos de la *Representación* de los diputados de las provincias, como al censurar a los que formaron parte de la Junta Instituyente. Valladolid, como las provincias con las que obra de acuerdo, mantiene invariable su actitud demandando la convocatoria del nuevo Constituyente. Planteada así la situación, Valladolid ofrece que "aunque obedecerá gustosa al Soberano Congreso, en todo lo que sea relativo a la convocatoria, y a la decisión de aquellos asuntos que por urgentes no permitan demora, acaso no lo reconocerá en todo lo que se dirija a formar la Constitución del estado. Es sensible decirlo, pero sería un crimen imperdonable ocultarlo".

La diputación concluye y precisa: que afirmando sus principios "reclama por la convocación de un nuevo Congreso, con la plenitud de poderes que para constituir a la nación le corresponden". Por ello *suscribe* lo expuesto por los comisionados de las provincias en su representación del 18 de abril.[3]

Más próxima a México, el 23 de abril la Diputación Provincial de Puebla se dirige al Congreso. Como en gran número de documentos contemporáneos, se hace historia. En ésta nos importa la interpretación de Puebla a la reunión del Congreso conforme a la convocatoria del 17 de noviembre de 1821, que censura "por el arbitrario principio que adoptó de proporcionar el número de diputados al de los partidos", y no a la población. Mas la diputación va más lejos —en esos días todos lo hacen ya—, refiriéndose al Plan de Iguala que sólo podía ser "como la reseña que sirviera para concentrar provisionalmente los ánimos" en el punto de la independencia, y no como lo consideraron los gobernantes de entonces, "la declaración de un pacto solemne entre las provincias, pronunciado después de una madura deliberación y claro convencimiento de la conveniencia... que debía traer a todas las partes estipulantes".

Pasamos por alto los sucesos que instauraron *la tiranía*, para aludir a la proclamación de

[3] *El Águila Mexicana*, 20 de mayo de 1823.

Casa Mata por el ejército demandando un nuevo Congreso, proclamación a la que se adhieren las provincias modificando el solo punto de no convocarlo en los términos de la primera elección.

El planteamiento de Puebla es esclarecedor de la situación del día.

> Aun cuando la convocatoria de 17 de noviembre de 1821 se hubiere dado en los términos más satisfactorios a la Nación —advierte—, todavía quedaban a las provincias dos derechos indisputables: lo. el de revisar o examinar la Constitución, porque hallándose entonces cada provincia en el verdadero estado de naturaleza, sin ley preexistente que obligase a una a reconocer la superioridad en las otras, podía y debía deliberar sobre los términos de su primera estipulación, que no es otra cosa la constitución de un estado, para adherir a ella o separarse, según la conveniencia o perjuicio que le resultara sin correr el riesgo de que sus diputados al Congreso abandonaran los intereses de sus comitentes... 2o. El de poder remover cada provincia a sus respectivos diputados y reemplazarlos por otros... pues que siendo realmente unos apoderados u órganos de la voluntad de los pueblos que los nombraron, nada más regular que retirarles su confianza cuando no corresponden a ella.[4]

No es necesario señalar la filiación del primero de los derechos indisputables que Puebla declara.

Ni la palabra república ni la de federación se escriben, mas podría preguntarse qué otro significado y consecuencia tiene el documento de Puebla. Ignoramos en él las violentas expresiones en contra de un diputado de la provincia —que no nombra—, y de quienes en el Congreso han perdido la confianza pública, que dan lugar en el Congreso a airadas reclamaciones. No deja de ser significativa la demanda de Puebla, centro hasta pocos días antes del *ejército libertador* cuyos jefes reconocen y sostienen ya al Congreso.

* * *

La sola difusión del dictamen del Congreso sobre convocatoria apresura, dijimos, la definición de las provincias. Como cuerpo representativo, es el Ayuntamiento de Guadalajara el que el 5 de mayo expresamente declara la suya. El punto que primero toca en su proclamación es la adhesión al Acta de Casa Mata que demanda la convocatoria de un nuevo Congreso. El Ayuntamiento plantea un argumento análogo al de Puebla y Querétaro. "Si la nación estuviese ya constituida, tendría más fundamento el dictamen de la comisión, porque estaba establecido el pacto universal; pero cuando está al formarse, ¿se ha de desatender —pregunta el Ayuntamiento— el voto de los que deben entrar en él?" Decir que ese voto es el de la *parte aristócrata* "que llevan la voz y la opinión del pueblo, es un motivo mayor para considerarlo de más fuerza, porque esta *parte aristócrata*, que más bien puede llamarse *ilustrada*, es justamente en quien reside la fuerza moral de la sociedad, y la que forma opinión".

[4] Representación que la Diputación Provincial de Puebla dirige al soberano congreso pidiéndole se sirva expedir nueva convocatoria, Puebla, 1823. En México se reimprime con el título: *¿Ya Puebla sigue los pasos de los de Guadalajara?*.

No es sólo la idea de una minoría activa la del Ayuntamiento. En un lenguaje crudo va más lejos: "Nada puede esperarse del pueblo ignorante, que a manera de un autómata se deja arrastrar por donde se le quiere conducir". La conciencia de una tutela peyorativa no se oculta. "No se puede excitar en estas frías momias el fuego del patriotismo, porque no conocen el bien de la sociedad, ni el suyo propio; pero en su reticencia indican su consentimiento, y esto forma la *voluntad general*".

Continuemos con el documento.

El Ayuntamiento no acepta que una vez elegidos los diputados de las provincias, éstas se conviertan en *partes pasivas*. Acude a Locke y a su tesis del pacto social, para argumentar: "Si los mexicanos hasta ahora no se pueden considerar en estado de naturaleza, sólo podrá suceder por el consentimiento o convenio tácito que han dado a la ley que los regía bajo el antiguo gobierno, al adherirse al plan de Iguala, y Casa Mata; pero siempre con el objeto de una constitución" que dé forma al gobierno que ellos elijan. Sin transición lo propone.

> No pueden negarse las ventajas que presenta un gobierno federativo: un gobierno que siendo peculiar, y económico de cada provincia en su interior, sea general en lo exterior, acaso el único que la forma representativa convenga a México por la extensión de su territorio. El ejemplo lo tienen los mexicanos muy inmediato para no conocerlo, muy lisonjero para no seguirlo [...]. Ese gobierno federativo es el de Norteamérica, esa república federada de los Estados Unidos, modelo de un gobierno sabio, que por su felicidad ha excitado el celo en la Europa [...] (y que) dará a la América la norma para llevarlo hasta el cabo de-Hornos.

Esperar la *acción popular* que legitime los derechos de las provincias, como acepta la comisión, compromete la seguridad pública. "No se puede aún suponer en todos nuestros conciudadanos tal sabiduría y conocimientos —afirma el Ayuntamiento— que sean capaces de hacer estas revoluciones útiles a la sociedad".

En ejercicio de la tutela que asume, se advierte que si no se cumple con lo demandado en Casa Mata y ahora por las provincias, se "seguiría un nuevo orden de cosas: cada provincia podría decir a la Capital, lo que dijo la América toda del Septentrión a España. Tengo libertad y derechos por Naturaleza: ella me separa de ti por montañas... por largas distancias". Las provincias son libres para ejercer sus derechos, y "podrán, pues, constituirse como les convenga sin que se les pueda disputar este derecho". La adopción de la Constitución española es interina. "De aquí es que si las provincias no se ligan aún por ningún pacto, ¿por qué ese pacto no ha de ser a su modo... Cuando ellas van a ser *porciones convencionales de un gran todo*?".[5]

El documento es el primero institucional que se pronuncia expresamente por la república federal, aunque ella está implicada en el desenlace de la revolución.

Sin emplear la palabra federación, las instrucciones de 4 de abril de la Diputación Provincial de Coahuila, Texas y Nuevo León a Melchor Múzquiz y al doctor Mier, como comisionados suyos a la junta convocada en Puebla —a la que no asistirían—, al indicar que se re-

[5] Representación dirigida al Soberano Congreso por el Ayuntamiento de Guadalajara con el objeto de convocatoria para nuevo Congreso, Guadalajara, 1823.

clamara la formación de una segunda Cámara con representaciones iguales de las provincias, proponían inequívocamente una cámara o senado federal, como lo veremos en el *Voto particular* de Mier al primer plan de Constitución federal formado en el Congreso.

Volvamos al Ayuntamiento de Guadalajara que no se excusa de un ataque a la capital de la nación: "Las provincias han llegado a comprender la monstruosidad de un gobierno central compuesto de muchos individuos... y creen hallarse en peor estado que antes de su independencia, porque el despotismo de muchos es peor que el de uno solo". "México turbulenta e inquieta quiere ser todavía su señora y tirana; que ella deba ser el centro de la gracia y de la justicia, para que continúe un exhorbitante número de empleos, una monstruosa cadena de subsidios y arbitrios... y que la justicia no pueda estar muy bien servida teniendo que ocurrir tan lejos por ella". La nueva convocatoria será el centro de la opinión pública.

El Manifiesto de los liberales de Guadalajara y la Representación del Ayuntamiento, suponen que se obra en conformidad previa entre ambos y las autoridades provinciales, como lo corroboran los sucesos.

Llega a Guadalajara el decreto del Congreso de 23 de abril disponiendo: "Todas las autoridades así civiles como eclesiásticas, que no hubieren expresamente reconocido el actual gobierno, lo verificarán inmediatamente por oficio que le dirigirán a este fin".

La diputación provincial se reúne en sesión extraordinaria el 9 de mayo para conocer el decreto que le trasmite el jefe político, Luis Quintanar. Se considera que el Congreso "no ha atendido, como correspondía, el voto general de las provincias que se ha manifestado de tantos modos por la nueva convocatoria para el Congreso Constituyente". Por ello, el reconocimiento que impone el decreto se debe hacer bajo condiciones, para que no se suponga que se acepta la continuación del Congreso como Constituyente. Por lo pronto se suspende el cumplimiento del decreto, aprobándose representar de nuevo al Congreso con energía sobre la convocatoria que la comisión de él desechó, ratificándole su reconocimiento como convocante. La diputación aprueba hacer presente al Congreso "que esta provincia está decidida por la forma de gobierno representativo federado" y resuelve que para hacer oportunamente el debido pronunciamiento se encargue al diputado José de Jesús Huerta formar un manifiesto, citándose para el día 12 siguiente para acordar también las medidas necesarias en la provincia.

El día 12 se aprueba que la diputación invite al Ayuntamiento. Una comisión de éste se presenta y los reunidos expresan su conformidad con la proclama formada por el diputado Huerta y con la Representación del Ayuntamiento del día 5. Se aprueba la impresión de la proclama y que se dirija al Supremo Poder Ejecutivo y al Congreso, debatiéndose las medidas "que deben adoptarse *para verificar el pronunciamiento de República federada*, en caso de que el Soberano Congreso no convenga en la formación de nueva convocatoria. Se aprueba: Primero. Desde este día y hasta que se reciba la contestación del Soberano Congreso, y Poder Ejecutivo, se suspenden el cumplimiento de todos los decretos y órdenes que se expidan por uno y otro poder". Segundo: que en tanto, la diputación será la primera autoridad de la provincia, y última instancia en todos los recursos. Y finalmente, que se agregarán a ella tres individuos del Ayuntamiento. El acuerdo se comunicará a todas las diputaciones provinciales del país invitándolas a establecer una federación.

La Representación de Guadalajara al Congreso es de la misma fecha: "Encargada por ley

esta Diputación Provincial de velar sobre el estado de la opinión pública", comunica al Congreso su resolución sobre convocatoria.

Desde que la diputación nombró comisionados a la junta de Puebla les dio instrucciones en favor de convocar a un nuevo Congreso, coincidiendo con el Acta de Casa Mata y con lo expuesto por los generales Victoria y Santa Anna en las *Instrucciones o indicaciones* de 23 de febrero. Los comisionados de Guadalajara unidos a los de otras provincias manifestaron al Congreso su voto. Hoy se conoce el dictamen desfavorable, y la diputación manifiesta al Congreso "que dicho discurso no puede ni aun admitirse a discusión".

El Congreso mismo por su decreto de 8 de abril declaró insubsistente el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, "en cuanto a la forma de gobierno", y no obstante que el mismo Congreso duda si está facultado para constituir a la nación, por el decreto de 23 de abril demanda el reconocimiento de los poderes de la nación. Guadalajara reconoce al Congreso como convocante, y "está ya bien manifestada la opinión de la Nación —declara— sobre la necesidad y conveniencia de que el Estado Mexicano se constituya en República Federada, y ni V. Soberanía tiene los poderes necesarios para formar esta Constitución, ni muchos de sus diputados merecen la confianza necesaria de sus comitentes".[6]

* * *

El conflicto de hecho está planteado por Guadalajara llevando a su consecuencia última las proclamaciones de Veracruz y de Casa Mata. Mas estas consecuencias no eran imprevisibles. El 15 de abril y desde México, al día siguiente de que se firmara el dictamen de la comisión del Congreso, el doctor Mier escribía al Ayuntamiento de Monterrey informándole sobre la situación. Mier menciona los sucesos de las Provincias Internas de Oriente, a las que se invitaba desde Monterrey o Saltillo a formar una junta gubernativa de ellas que sólo reconociera como superior al Congreso. "Esto querría decir —escribe con perspicacia— que las cuatro provincias compondrían un estado soberano confederado de la República Mexicana. Como en esto hemos venido a parar según los pasos que van dando las provincias, aunque yo no quería sino central la República hasta de aquí a 10 años en que ya las provincias poseyesen los elementos para ser estados soberanos".

A Mier le preocupa la insistencia de los comisionados de las provincias para que se convoque un nuevo Congreso, "porque si hay serviles en el actual Congreso, no es la mayoría y podrá serlo en otro Congreso, según se agitan los serviles partidarios de Iturbide, la mayor parte del clero y los frailes empeñados en hacer creer al pueblo que República es herejía y herejes los republicanos. Así han seducido al populacho y tratan cada día de seducirnos la tropa". Mier envía a Monterrey el dictamen de la comisión de Convocatoria, con el voto disidente de Gómez Farías. "El plan de éste —el Congreso— como (el) del supremo poder ejecutivo, es irnos constituyendo en república sin decirlo por no espantar a la canalla ignorante alucinada por los fanáticos. Llamaremos a nuestro gobierno representativo popular, como han hecho los del Perú, cuyas bellas bases envío a V.S.S. Pero como al fin es necesario declarar esto república porque no hemos de admitir Borbones ni otro Iturbide, tenemos los diputados encargo del

[6] *El Águila Mexicana*, 22 de mayo de 1823.

gobierno para persuadir a nuestras provincias escriban al Congreso pidiendo gobierno republicano o república representativa. Me alegraría en el alma que esas provincias fuesen las primeras en pedirlo, correspondiendo a la opinión y crédito de su representante". Lo deben pedir, indica, la diputación provincial y los ayuntamientos. Pero en carta de 30 de abril a Bernardino Cantú, le recomendará: "no se metan en si ha de ser central o federal; lo mejor será un medio. Dígaselo usted a la Diputación".[7]

El proceso de ruptura con el antiguo régimen adelanta el paso decisivo sobre la forma de gobierno, y los hombres comprometidos en él deben intentarlo sin "espantar a la canalla ignorante alucinada por los fanáticos", "empeñados en hacer creer al pueblo que república es herejía y herejes los republicanos".

La clase media de que habla Zavala, y de ella una minoría republicana y activa, es la que hará la revolución. Frente a ésta, y lo advierten en sentidos contrarios en el Congreso y en Guadalajara, el peligro es la posible preponderancia de los *serviles* y la *canalla* —en el término de Mier, que bien se traduce en lenguaje de este siglo como *lumpen volk*—, la masa que puede sublevarse por incitaciones emotivas y *fanáticas*. La proclamación republicana, y el conflicto dentro de ella, ocurren entre quienes representan y asumen la tutela de la nación independiente. El pronunciamiento federal parecería iniciar una dispersión en soberanías locales o regionales a la manera de Nueva Granada una década antes. El Estado debe constituirse por el pacto de las provincias en un desconocimiento de la unidad política del antiguo virreinato, por más que esto sea un discurso teórico. ¿Pero es así?

El 12 de mayo, la Diputación Provincial de Nueva Galicia —Guadalajara— firma un manifiesto, que se reimprime en México con el título de *Disolución del Congreso Mexicano por el voto de los pueblos.*

> Nueva Galicia —declara— no tiene celos infundados hacia lo que se llama capital del imperio, y que de hoy en adelante sólo puede llamarse simplemente capital de la provincia de México [...] su justa pretensión se dirige a conservar la igualdad que le toca en el mismo orden y que no se le puede disputar [...]. Nueva Galicia no quiere ser una provincia parecida a los signos del Zodiaco; quiere más bien parecerse a una Pennsylvania, a una New Jersey, a una New York. Ésta es la semejanza que más le acomoda, sabe que puede tenerla.

El imperio azteca se rememora: si México "insiste en querer sostener un derecho de dominación universal sobre las provincias, sepa desde ahora que el estado libre de Jalisco concentrando su valor y sus luces en el Valle de Atemixco renovará con ventajas los tiempos heroicos de la república de Tlaxcala".

Se refuta en el manifiesto la afirmación de que los poderes de los diputados no son revocables y sus poderes ilimitados para constituir a la nación, lo que sería "el ejercicio de una soberanía absoluta que no tiene el pueblo mismo en quien esencialmente reside", y que éste no puede traspasar. A la tiranía de uno se sustituye la de muchos, sin que los pueblos puedan reclamar lo que les perjudique. El lenguaje es violento, y suma otra argumentación: si el Congre-

[7] Alfonso Junco, *El increíble Fray Servando. Psicología y epistolario*, México, 1959, pp. 102-105, 108. Junco recoge en su obra las cartas conocidas del doctor Mier, por lo que remitiremos a ella al ser la de más fácil consulta.

so cesó ilegítimamente al ser disuelto por Iturbide, "no puede decirse otro tanto de su disolución de derecho verificada luego que se generalizó en las provincias el pronunciamiento por Casa Mata". Querétaro lo expresó así desde que recibió el decreto de reinstalación del Congreso.

"¿Repugnaréis —se pregunta— la confederación de provincias estableciéndose en cada una un gobierno popular representativo, ese gobierno admirable, filantrópico, y el más digno de un pueblo libre?"

El 17 de mayo Bustamante consigna en su *Diario* que el ministro de Relaciones leyó en el Congreso "un Plan de República federada, impreso en Guadalajara", manifestando la alarma del gobierno. Bustamante atribuye los hechos al obispo iturbidista, y agrega que se le ha dicho que "el movimiento era insuflado del Istmo de Panamá". El mismo Bustamante pide que se presenten y circulen "las bases de una República federal *regulada* como entendía que se había ya formado por la comisión", para que el pueblo conozca el gobierno que se proyecta. Bustamante se refiere a la comisión designada el 14 de mayo. El plan leído por Alamán sólo pudo ser el proclamado en Guadalajara. No conocemos otro al que convenga el título usado en sentido lato por Bustamante.

El conflicto planteado lo apremiarán y resolverán las provincias ante la falta de resolución del Congreso sobre el dictamen de su comisión de Convocatoria.

* * *

En el norte, en las Provincias Internas de Oriente, Ramos Arizpe es el más diligente inspirador y conductor de los sucesos. N.L. Benson menciona la reunión en Monterrey, el 14 de abril, de la diputación provincial, el ayuntamiento, el comandante militar, el clero y prominentes ciudadanos. El Acta de Casa Mata se había adoptado desde el 6 de marzo, aprobando la proposición de Ramos Arizpe de aceptar el Congreso reinstalado únicamente como convocante del nuevo.

El 14 de abril, en la junta general de Monterrey, Ramos Arizpe propone, y se aprueba, el reconocimiento provisional del Congreso y del Supremo Poder Ejecutivo, a aquél como convocante de un nuevo constituyente.[8]

No será hasta el 30 de abril, y por informe del Ayuntamiento de Monterrey al doctor Mier, cuando se tengan noticias oficiales sobre el intento de Ramos Arizpe para que la ciudad desconozca al gobierno del centro.

El detalle de la intensa actividad de Ramos Arizpe lo da N.L. Benson en los capítulos V y VI de su obra, dentro del cuadro general que ofrece de las provincias. Su definición federal ocurrirá en los primeros días de mayo en Saltillo, pero se hará pública el 26 y 27 de mayo, como más adelante veremos.

En los días en los que *El Águila Mexicana* publica el dictamen de la comisión del Congreso sobre convocatoria —antes y después del 13 de mayo—, el periódico también publica el 14 de marzo, el Manifiesto de la Diputación Provincial de Yucatán, de 9 de abril: "su pacto explícito con el gobierno establecido en el centro del nuevo mundo fue el de constituirse —se dice en él— bajo un sistema libre y representativo... Aquél queda indubitablemente di-

[8] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 127-128.

suelto desde el aciago instante en que, violando manos traidoras el derecho natural, el de gentes, y el constitucional que regía, se extinguió el augusto Congreso". La declaración es implícitamente federal. Tan pronto se conoció en Yucatán el Acta de Casa Mata, "sin el menor detenimiento se adhirió a ella". Ese 9 de abril la diputación provincial conoció el dictamen de su comisión, en el que se recomendó esperar la convocatoria a elecciones para el nuevo Congreso, y que se oyera al Ayuntamiento, autoridades civiles, militares y eclesiásticas de Mérida para resolver sobre el gobierno administrativo provisional de la provincia.

El 10 de abril se reúne la junta propuesta para decidir sobre el gobierno provisional, y se aprueba por unanimidad el plan de la comisión: cada ayuntamiento de la provincia nombrará un elector, que se reunirá el 4 de mayo con los restantes en la cabecera del partido a que pertenezcan, para designar elector de partido. Los electores de partido se deben reunir en Mérida el 18 de mayo, y con arreglo a lo dispuesto por la Constitución española para elegir diputados a Cortes, elegirán a los individuos de la Junta Provisional Administrativa de la provincia, que serán cinco propietarios y cinco suplentes, y de ellos se podrá elegir en su oportunidad diputados a Cortes. En tanto se realizan las elecciones, la diputación provincial formará el reglamento de la junta, que ésta admitirá o reformará.

No entramos en los detalles de los sucesos en la península de Yucatán, que ciertamente no se ajustan a las primeras previsiones. El 25 de abril y al conocer la reinstalación del Congreso, la diputación provincial declara su expresa falta de confianza en él, por lo que espera se dicte inmediatamente la convocatoria del nuevo. Manifiesta en cambio su confianza en los generales Bravo, Victoria y Negrete, integrantes del Poder Ejecutivo, al que se reconoce en tanto no se varíen sus individuos. Finalmente se acuerda no admitir nombramientos expedidos desde México en tanto no exista una Constitución.

La lejanía y la irregularidad de las comunicaciones explican el retraso con el que se reciben las noticias en Yucatán, pero no alteran el sentido del proceso que se inició. El 29 de mayo la diputación provincial se reúne en sesión extraordinaria. Se da cuenta con representaciones de cuerpos de ejército, "fundadas en las más enérgicas y poderosas razones", en favor de un inmediato pronunciamiento por la república federal. La iniciativa de los militares se aprueba, y se cita a una reunión de los electores de partido, de corporaciones, jefes y autoridades, para deliberar unidos, reunión en la que se aprueba el pronunciamiento federal. También se eligen los individuos de la Junta Provisional Gubernativa de la provincia.

El día 30, constituida la Junta presta su juramento: "¿Juráis a Dios sostener el sistema adoptado de República federada en la provincia sin permitir en ella otra clase de gobierno...?".

Los puntos aprobados el 29, ratificados y ampliados el día 30, son concluyentes: "Que la unión de Yucatán será la de una república federal, y no en otra forma, y por consiguiente tendrá derecho para formar su Constitución particular y establecer las leyes que juzgue convenientes a su felicidad". Al supremo gobierno de México le corresponde: convenir los tratados de alianza y comercio; declarar la guerra y demás asuntos generales, y en cuanto a las circunstancias particulares de Yucatán, consultar en lo posible a su Senado; nombrar en el ejército "de brigadieres arriba", y en lo eclesiástico "de obispo en adelante"; nombrar a los diplomáticos, rolando los destinos entre las provincias. El Senado de Yucatán se reserva el nombramiento de las restantes autoridades "y el hacer ingresar en la tesorería general de la nación el cupo que le corresponda en los gastos generales". Puntos aprobados el 29 de mayo que se ratifican.

El 30 se aprueba que la Junta se titule Instituyente, para ejercer la facultad administrativa sustituyendo en ella a la diputación provincial. La Junta circulará la convocatoria, formada por ella misma, para elegir representantes al Senado de la provincia, uno por cada 25 000 habitantes. La Junta se disolverá al instalarse el Congreso provincial.[9]

Los documentos de Yucatán se publican con el título de *Viva la República Federada de Yucatán* en *El Águila Mexicana* de 21 de junio.

El 7 de junio la Junta Gubernativa de Yucatán se dirige a su diputado en México, Manuel Crecencio Rejón, enviándole los documentos sobre la proclamación de la República Federal. Por ellos verá "que el voto general es de federación con esos países y formar con ellos una sola y única nación siempre que establezcan la misma forma de gobierno", encargándole que, de acuerdo con los otros diputados yucatecos, persuadan al Congreso que el sistema se adopte en las restantes provincias.[10]

* * *

Volvamos al Congreso. El 19 abril se presenta un dictamen sobre la instalación en Monterrey de la Diputación Provincial de Nuevo León, Coahuila y Texas, que se aprueba el día 21. El patrocinador de la iniciativa es el doctor Mier, quien escribe en su carta de 30 de abril a Bernardino Cantú: "Cuidado con que ni Ramos Arizpe se huela nada de lo que digo contra su Saltillo. No he visto hombre más ciego por su villorrio, y es lástima; en lo demás es republicano y buen patriota... y siempre que él prevalezca el Saltillo es todo y Monterrey nada". La rivalidad entre dos ciudades matizará la polémica y la amistad de dos de los más ilustres mexicanos de esos días.

El 21 de abril se informa al Congreso que Nuevo León se adhirió a Casa Mata, y el doctor Mier aclara que ello fue resuelto en una junta de las cuatro Provincias Internas de Oriente.

El 2 de mayo Bustamante y Paz insisten en una proposición hecha el 28 de abril sobre la urgencia de formar la constitución, dirigiendo un manifiesto sobre ella a la nación, e invitando a La Habana y Puerto Rico a unirse al territorio mexicano. Temen que la Santa Alianza obligue a España, invadida por 100 000 franceses, a intentar la reconquista de México. Un país sin constitución se considera en anarquía, y así no puede negociar el auxilio de otros. Se ha debatido la convocatoria de un nuevo Congreso y ello dilata la constitución. En tal situación Bustamante propone que se haga un manifiesto a las provincias solicitando se amplíen los poderes de los diputados para formar una constitución que no sancionaría el actual Congreso. sino después de un riguroso examen.

La iniciativa se turna a la comisión de Convocatoria.

El 3 de mayo varios diputados instan al Congreso para que, con independencia de lo que resuelva sobre convocatoria, se forme un proyecto de constitución. La iniciativa pasa a la comisión especial que integran José C. del Valle, Gómez Farías, C.M. Bustamante, Prisciliano Sánchez, Fagoaga, Esteva y Juan Pablo Anaya.

[9] Eligio Ancona, *Historia de Yucatán desde la época más remota hasta el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo*, México, 1889, tomo III, pp. 204-205. El acta en las páginas 372-376.

[10] *El Sol*, 13 de junio de 1823.

El Congreso se ocupa de los más diversos asuntos, lo que presume su resolución de continuar en ejercicio.

El 14 de mayo José María Bocanegra presenta una iniciativa para que, si es posible, en ocho días "se preparen y publiquen por el Congreso las bases constitucionales que arregladas a la voluntad general y conocida de la nación, sean el apoyo en todo tiempo". Y que "sin ocuparse de otros asuntos, concluido el anteriormente propuesto, se proceda luego a la discusión del dictamen sobre nueva convocatoria". La iniciativa se aprueba y se designa una comisión especial que formarán José C. del Valle, el doctor Mier, Javier Bustamante, Zavala, Jiménez, Mayorga, Lombardo y García (Francisco).

El 17, en la sesión extraordinaria de la noche, según noticia de Bustamante en su *Diario* de ese día, la crisis se acentúa y los diputados de la provincia de México llegan a decir que se separarán del Congreso por atribuírseles formar partido "para subyugar a las demás provincias, a la capital, idea que había inspirado el canónigo D. Miguel Ramos Arizpe, llamando a México la *prostituta Babilonia*. Fagoaga llegó a proponer "que se repeliese por la fuerza el puñado de hombres que trataban de turbar la unión de las provincias", el mayor delito imaginable cuando la Santa Alianza ofrecía la reconquista de América.

Se llega así al 21 de mayo, cuando la comisión especial para proponer medidas que eviten los males que amenazan al país presenta un dictamen, que inmediatamente se admite y discute en lo particular, declarándose el Congreso en sesión permanente. Por 71 votos contra 33 se aprueba: "Que se forme desde luego convocatoria para el nuevo Congreso".

El segundo artículo encarga al Congreso que, en tanto se reúne el nuevo, se ocupe de la organización de la hacienda, del ejército y la administración de justicia. El tercero, aceptando expresamente la definición de las provincias, ordena que "se imprima y circule inmediatamente el proyecto de bases de república federativa de que estaba encargada una comisión de su seno".

Por el artículo cuarto se encarga al Poder Ejecutivo "tome todas las medidas y providencias que le dicte su celo y prudencia para restablecer la tranquilidad alterada por los movimientos y resoluciones de las primeras autoridades de Guadalajara, prefiriendo las medidas de persuasión...".

El 12 de junio el Congreso aprueba una orden: "que el gobierno puede proceder a decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de república federada, y que no lo ha decretado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para nuevo congreso que constituya a la nación".

La orden se circula pero no se publica en la prensa de la capital. La república federal es expresamente aceptada por el Congreso y el gobierno.

El acta de la sesión del día 12 no menciona la aprobación de la orden. Bustamante la calla en su *Diario*, y en el *Cuadro histórico*, al igual que Zavala en su *Ensayo*. Bocanegra es quien se refiere a ella diciendo que los federalistas del Congreso temerosos de la situación presentan dos iniciativas: una sobre la inmediata instalación de congresos o legislaturas en las provincias, firmada por Prisciliano Sánchez, Gómez Farías, Francisco García y Covarrubias, que no se resuelve, y la segunda como queda aprobada en la orden.[11] Por su parte Alamán, entonces se-

[11] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, p. 223.

cretario de Relaciones, no disimula sus juicios pero es parco en su referencia a los sucesos de esos días, y no registra esta fecha.

Al promulgar la convocatoria para el nuevo Congreso Constituyente, el 17 de junio, por más que no se imponga más limitación en los poderes de los diputados que el mantener las bases de religión, independencia y unión, el supuesto de la república federal está dado por los acontecimientos.

El 28 de mayo se había leído en el Congreso el Plan de Constitución y el voto particular del doctor Mier. Como el plan no venía redactado en artículos, Bustamante pidió se le diese forma de "un proyecto de Constitución". El plan se publicaría en su redacción original, que es como lo conocemos.

Desde el 14 de mayo el doctor Mier había escrito a Ramos Arizpe: "Señor Chato, mi querido saltillero embrollón... La semana que entra saldrán a luz las bases liberales de una república representativa federal con un congreso general, su senado y su congreso cada provincia, y cuanto usted puede apetecer, todo discutido en mi casa. Después se seguirá la convocatoria y tendrán ustedes su suspirado congreso que, según se agiten clérigos y serviles, será de servilones".[12]

Los dos, Mier y Ramos Arizpe, se encontrarán como diputados en el nuevo Congreso.

[12] Alfonso Junco, *op. cit.*, p. III.

2

LOS PRIMEROS PROYECTOS DE CONSTITUCIÓN REPUBLICANA: EL DE STEPHEN F. AUSTIN Y EL DE LA COMISIÓN DEL CONGRESO

Tres resoluciones del Congreso —las dos del 21 de mayo para que se forme desde luego la convocatoria del nuevo Congreso y que se imprima y circule inmediatamente el plan de república federal formado por su comisión, y la orden de 12 de junio para que el gobierno comunique a las provincias que el Congreso aprueba la forma federal— parecen dar una solución al conflicto con las provincias y a la demanda federalista. Un conflicto y una solución en verdad no previstos por quienes fraguaron el Plan de Casa Mata, pero que estaba en la entraña del de Veracruz. De los hombres de Veracruz, uno, el general Victoria es elegido por el Congreso como individuo del Supremo Poder Ejecutivo, y encargado para tratar con los comisionados españoles parece estar al margen del conflicto. Otro, el general Santa Anna, se lanza por iniciativa propia al centro del conflicto hasta llegar en San Luis Potosí a proclamar a sus tropas "ejército protector de la libertad", para garantizar a las provincias su pronunciamiento por la república federal. El tercero, Miguel Santa María, ya en México toma partido por la república central, y no obstante su carácter de ministro de Colombia escribe en *El Sol*, diario que sale de una imprenta importada por Lucas Alamán y al que Zavala califica de periódico ministerial.

Esta dispersión de los tres hombres que se unieran en contra de Iturbide proclamando la república, ilustra más que cualquiera consideración la de los iturbidistas y la de quienes lo combatían.

Pero un hecho es cierto en el país, la ruptura con la condicionalidad impuesta en el episodio de la consumación de nuestra independencia.

No es vacía la declaración de las provincias de que se encuentran en "estado de naturaleza" al no existir un *pacto* que las una y en el que libremente hayan convenido.

La realidad política preexistente del antiguo virreinato no es negada, aunque se le llegue a amenazar. Es ella, llámesele Nueva España —nombre desechado—, Anáhuac, América Septentrional o México, el ente histórico que se declaró independiente en ejercicio de una radical soberanía, y el que se propone elaborar el proyecto de su propio ser político.

En los días siguientes a la abdicación de Iturbide los hombres se hallan confundidos en un forcejeo por instaurar un centro de autoridad reconocido, y la primera cuestión que se plantea es la del órgano de la revolución que forme el proyecto para el país y la naturaleza de éste. Los jefes de Casa Mata, que demandan inicialmente la convocatoria de un nuevo Constituyente, desde antes de ocupar la ciudad de México reconocen la legitimidad del primer Congreso y lo sostendrán. Pero ellos, y el Congreso, carecen de un proyecto que ofrecer. El que se elabora en el Congreso está impuesto por la revolución de las provincias. Quizá en los primeros días se debía ser ajeno a los sucesos para trabajar en uno, y así ocurre.

El 19 de abril se recibe en el Congreso un proyecto de constitución del que es autor Genaro Cabañas. ¿Se trata del padre Cabañas que conspiraba por la independencia en 1811 en Jalapa? La constancia del acta de la sesión es la única conocida de que tenemos referencia.

* * *

Veinte días antes, el 29 de marzo, se fecha el primer Proyecto de Constitución para la República de México cuyo texto conocemos, y su autor es el virginiano Stephen F. Austin, quien a la muerte de su padre, en junio de 1821, continúa los planes para establecer en Texas 300 familias de colonos anglosajones. El Congreso otorgaría a Austin la ciudadanía mexicana el 13 de mayo de. 1823. En los días de la abdicación de Iturbide reside en la ciudad de México y gestiona su ciudadanía y el permiso para colonizar. Una atención especial merecen los juicios de Austin sobre los sucesos de que es testigo, estando, como consta, en relaciones con varios diputados y disfrutando de la amistad de hombres como el doctor Mier.

El antiguo estudiante de la Universidad de Transylvania en Kentucky, y ex diputado en el estado de Missouri, no es un testigo descalificado. Su proyecto de constitución de ninguna manera pudo elaborarse sino después de una detenida reflexión y un buen conocimiento de la Constitución española, de la que adopta 19 artículos directamente, el título octavo, y tres capítulos más formulando él 204 artículos.

La extensión del proyecto, que se reproduce como cuarto en el volumen especial, prueba que Austin se ocupaba en él muy antes de la abdicación de Iturbide, y presume por sí solo la certeza de la inminente desaparición del imperio.

En tanto a los mexicanos preocupan los acontecimientos que se precipitan desde diciembre de 1822, incluso en el inquieto compás de espera hasta febrero de 1823, el virginiano prevé o desea el desenlace republicano y adelanta en su proyecto. Objetivo, inserta sus ideas en el inmediato liberalismo de la Constitución española. Para ello no violenta su federalismo, o más exactamente dicho, introduce matices federales en su plan. Subsisten las diputaciones provinciales con las facultades sancionadas en la Constitución española, ampliadas en el proyecto, y considerando la posibilidad de que el Congreso les otorgue nuevas en el futuro (art. 221).

El proyecto de Austin concede a las diputaciones provinciales facultades para acusar a los gobernadores de las provincias y a los presidentes de los tribunales supremos provinciales ante la Cámara de Diputados (art. 221-1); acusar a los jueces de letras ante el Alto Tribunal de Justicia (221-222), y pedir al Presidente de la República la remoción de jueces de letras (221-223). A las limitadas facultades anteriores se suma la expectativa de otra deliberadamente genérica: "Ejercitar poderes legislativos relativos a política de asuntos internos y gobierno civil de las provincias, en la medida y en la forma como el Congreso lo prescriba por ley" (art. 221-224).

Otra facultad les da independencia y preeminencia al establecer que los gobernadores de las provincias "estarán obligados a rendir cuenta a las Diputaciones Provinciales en relación a cualquier asunto conectado con el gobierno o.los asuntos de la provincia, cuando sean llamados para esto por dichas Diputaciones, y obedecerán en todo, y publicarán las órdenes y decretos de dichas Diputaciones cuando no sean incompatibles con la Constitución o leyes de la Nación". Agregando el artículo: "Los Gobernadores de Provincia no pueden ser miembros de las Diputaciones Provinciales" (art. 212).

Una implícita concepción federal dicta la última facultad que señalaremos, cuando el Senado de la República deberá integrarse, con "dos senadores por cada provincia, elegidos por ocho años por las Diputaciones Provinciales" (art. 66).

Austin coincide en su concepción del Senado con la del doctor Mier en su *Voto particular* de 28 de mayo de 1823 al Plan de Constitución Política de la Nación Mexicana del 16 de mayo, formado por la comisión del Congreso.

En el proyecto de Austin se contienen postulaciones republicanas radicales tales como la de que "siempre que los objetivos de la sociedad se corrompan o la libertad pública se encuentre manifiestamente amenazada, y los otro cualesquiera medios de hacer justicia sean ineficaces, el pueblo puede y por derecho debe reformar el antiguo o establecer un nuevo gobierno. La doctrina de la no resistencia al poder arbitrario —se afirma— es absurda, degradante y destructiva para la felicidad de la humanidad".

¿Conoce Austin la Constitución de Apatzingán de 22 de octubre de 1814, y su artículo cuarto al que ya nos hemos referido? Es probable, pero no importa. Más próxima a él es la *Declaración de los Derechos que deben pertenecer a nosotros y a nuestra posteridad, y ser mirados como los fundamentos y la base del Gobierno de Virginia*, de 12 de junio de 1776, que en su artículo tercero establecería:

> El gobierno es, o debe ser instituido para la ventaja común, para la protección y seguridad del pueblo, de la nación o de la comunidad. De todos los diversos métodos o formas de gobierno la mejor es aquella que pueda en más alto grado procurar la felicidad y seguridad, y que se halla más asegurada contra el peligro de una mala administración; y que cuando un gobierno resulte inadecuado o contrario a estos fines, la mayoría de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e imprescriptible de reformarlo, cambiarlo o abolirlo del modo que juzgue más propio para el bien público.

La Declaración de Virginia, uno de los documentos más inspiradores en la historia constitucional es conocida en México.

Continuemos con el proyecto de Austin.

Las relaciones mexicanas y sus propias observaciones ilustran a Austin sobre el carácter del país, y son las que inspiran, por ejemplo, algunas modalidades de su proyecto, como la de incluir en el Senado a un obispo elegido por las diócesis del país, aunque excluyendo a todo eclesiástico del derecho a ser elegido senador y a ser nombrado para cualquiera cargo del gobierno (arts. 66 y 90-29). En cambio, admite la elección de eclesiásticos seculares a la Cámara de Representantes, limitando a tres el número de ellos por cada provincia (art. 42).

Austin rubrica el capítulo II de su proyecto Sobre la religión, incluyendo un solo artículo —el 30: "La religión Católica Apostólica Romana es la de la Nación Mexicana", sin establecer la intolerancia de otra, más *quod non prohibitum licitum est.*

En relación con la institución de la Iglesia va más lejos, concediendo al Presidente de la República la facultad de designar, con aprobación del Senado, a los arzobispos y obispos, y presentar a las dignidades y beneficios de las catedrales, parroquias y otras iglesias, conforme a las leyes, y permitir o negar, con el consentimiento del Congreso, la publicación de las bulas pontificias y los decretos conciliares (art. 130-15-19).

El Congreso está facultado además para "establecer o destruir cualquiera orden religiosa

y dotar a las establecidas con fondos públicos, o dividir o disponer de la propiedad de aquellas destruidas como se considere más útil al bien público" (art. 90-29). Y también para "definir y limitar el poder del Papa sobre los eclesiásticos e iglesias de esta Nación; reformar las leyes eclesiásticas y destruir todos los abusos que puedan existir en la Iglesia. Regular y fijar los salarios de los curas, canónigos, obispos y otros dignatarios de las iglesias en la Nación" (art. 90-33), y "anular o prohibir excomuniones u otras censuras de la Iglesia, o restringirlas como se considere conveniente" (art. 90-34).

El liberalismo radical de Austin, en su claro antipapismo, no se amedrenta ante otras consecuencias, como al limitar la libertad de prensa en los casos únicos de ataques escandalosos y calumnias contra las personas, y elabora un extenso artículo doctrinario, el 26:

> Los gobiernos despóticos —expresa en él— tienen empeño en mantener las mentes del pueblo a obscuras por la prohibición de introducir libros proscritos por sus principios liberales. Los gobiernos libres por el contrario tienen las puertas abiertas para su admisión sin excepción, y la experiencia ha probado totalmente los efectos beneficiosos de esta política liberal que da luz al pueblo, el que muy pronto discrimina cualquiera doctrina perversa o inmoral que tales libros pueden contener, y las puras o virtuosas, rechazando las primeras y beneficiándose de las últimas. Todas las restricciones en la introducción, venta o lectura de libros, está calculada para prevenir la difusión de la luz intelectual y el conocimiento, retardar el mejoramiento de la Nación por la perpetuación de la ignorancia, la superstición y los principios serviles, y son contrarias al genio de las instituciones libres y nunca deberán ser impuestas bajo ningún pretexto.

No extraña la relación de Austin y el doctor Mier si recordamos el republicanismo liberal de la *Memoria político-instructiva* de éste y su filiación en el *Common Sense* de Thomas Paine. Austin, más interesado que responsable en los acontecimientos, expresa con desenvoltura sus ideas. No obstante, como Mier y los primeros liberales mexicanos, ante la realidad de México no aventura el proyecto de una democracia electoral directa, y extrema la cautela de su ejercicio, primero en los derechos políticos pasivos al condicionarlos a la titularidad de alguna propiedad, y además, a poseer conocimientos de derecho, de agricultura, de minas, manufacturas o comercio, para el mejor desempeño de los elegidos al Senado y a la Cámara de Representantes (art. 41). A estas prevenciones suma las minuciosas reglas en los procesos electorales de dos grados que establece, a ejemplo de la Constitución española pero más atento a la distribución de los habitantes de las provincias.

En el capítulo I del proyecto, "Constitución y máximas fundamentales", sanciona los derechos de propiedad, de expresión, de inviolabilidad del domicilio, de reunión, de petición, de seguridad personal, juicio gratuito y ante tribunales competentes, y la abolición de privilegios especiales o exclusivos, títulos y cargos hereditarios, y de los mayorazgos.

Conforme al modelo norteamericano, el Alto Tribunal de Justicia conocería de la constitucionalidad de las leyes y de su interpretación por el Congreso, por las diputaciones provinciales o cualquiera autoridad. Declarada la inconstitucionalidad de una ley por el Alto Tribunal, el Congreso debe reconsiderarla, declarándose vigente si las dos cámaras la aprueban de nuevo por las dos terceras partes de ellas (art. 150-9).

Austin adopta en su proyecto los modelos español y norteamericano. Más que examinar-

lo sistemáticamente nos importó señalar superficialmente sus caracteres ideológicos en la formulación que su autor estimó viable. Su casuista elaboración conviene más al estilo codificador español que al precedente constitucional norteamericano, y lo corrobora la incorporación amplia de disposiciones de la Constitución de Cádiz.

Que el proyecto está destinado a los diputados amigos de Austin, y que la república es inminente cuando su autor trabaja en él, son los supuestos mismos de su elaboración, aunque Austin no prevé desde la ciudad de México que la proclamación sea federal. Quede el documento para la atención de los estudiosos como el primer proyecto de Constitución republicana para el México independiente.

* * *

El segundo proyecto republicano, fechado el 18 de mayo y leído en el Congreso el día 28, aprobándose su impresión, con la del *Voto particular* de Mier, para que se dé a conocer a las provincias, lo firman José del Valle, Juan de Dios Mayorga, el doctor Mier, Lorenzo de Zavala, José Mariano Marín, José María Jiménez, Francisco María Lombardo y José María Bocanegra.

A él se refiere el doctor Mier en su carta de 14 de mayo a Ramos Arizpe. Además le presenta la situación que ve desde México. "Si me pregunta usted de la marcha del soberano, clarito —le escribe—, no estoy contento. Fagoaga es el que manda y votó contra todo el Congreso a favor del Plan de Iguala y Tratado de Córdoba. Eulogio Villaurrutia es gobernador y comandante de Veracruz; Stávoli, un italiano, de Jalapa; Echávarri, un gachupín, de Puebla, y se han admitido a los comisionados españoles a oír y ser oídos. No está mala la escalita... Pero mi plan de Constitución le (s) va a dar en la cabeza".[13]

El doctor Mier templa sus beligerancias provincianas con Ramos Arizpe en beneficio de su preocupación antiespañola y republicana. El 2 de junio escribe Mier a su sobrino Bernardino Cantú en Monterrey: "Al señor Arroyo, rector del seminario, mi amigo, hágame usted favor de decirle de mi parte, que en república vivimos, que republicano es el gobierno, que se deje de sandeces, que este gobierno dio Dios a su pueblo, que ése dio Jesucristo a su Iglesia... por más que pese a los ultramontanos y anarquistas; que se deje de declamar contra él y de prohibir a los colegiales que lean los papeles públicos, porque si se normaliza la demanda de ellos puede costarle hasta la prebenda".[14]

Ante el general pronunciamiento de las provincias por la convocatoria de un nuevo Congreso y por la federación, la comisión del Congreso parte en su proyecto de la consideración de que "miran con celo el poder de la capital: repugnan que en ella estén acumuladas las autoridades primeras, unidos los elementos de prepotencia, y fijado el centro de todo: quieren república; la quieren federal...". Consecuente, se declara: "la nación mexicana es una República representativa y federal".

La comisión conviene con la expresa voluntad de las provincias, mas teme el federalismo llevado a su último término, que "tiende a debilitar o destruir la unión", y así da en el proyecto "la organización menos dañosa a los mismos pueblos".

[13] *Ibid.*, p. 111.
[14] *Ibid.*, p. 115.

Las ideas que presiden el plan son simples. La distribución equilibrada de las atribuciones del poder garantiza la libertad. La nación ejerce sus derechos por medio de sus representantes elegidos al Senado, a los congresos nacionales, provinciales y municipales; "de los diputados que dictan las leyes... de los individuos del cuerpo ejecutivo que las hagan cumplir: de los jueces que las apliquen... y de los senadores que se ocupen en conservarlas".

La comisión opta por el sistema de una cámara legislativa. El primer ejemplo con el que ilustra su adopción, la Constitución francesa, no puede ser más alarmante a los antiliberales, y los de España y el Perú no los tranquilizarán. Los autores acuden al argumento de autoridad citando los nombres de Condorcet, Thomas Paine, Sieyes y Destutt de Tracy. El argumento en contra de la segunda cámara, apuntado a su origen aristocrático para sujetar la voluntad general, cede ante el implícito inmediato y centralista: "que las provincias despobladas tengan tantos votos como las de mayor población", lo que "violaría el pacto social que da a la mayoría de ciudadanos por sí o sus representantes la decisión de los asuntos". La demostración es matemática, y se apoya en la estadística de población que para las provincias consigna Humboldt en las *Tablas geográficas y políticas del Reino de Nueva España.* De acuerdo con ellas, 990 100 habitantes, se dice, tendrían más senadores que 4 849 800. Las alteraciones en el número de habitantes entre 1803 y 1823 no modifican, se estima, las proporciones, por lo que el argumento es válido.

La objeción que se ha generalizado en contra de una cámara legislativa numerosa, por la impetuosidad que le es propia, la comisión la ve resuelta mediante una ley prudente que la modere con la institución del Senado que vigilará las infracciones a la Constitución, por la opinión pública que elogiará o censurará, por el pueblo testigo de sus procedimientos y por la renovación periódica de los 132 diputados.

El idealismo republicano y constitucional prevalece, y para la comisión "las administraciones que no han sido dirigidas por una Constitución bien meditada, son las que han oprimido últimamente a los pueblos..., las que han violado los derechos de los hombres: los monarcas que no han tenido otra ley que su voluntad, son los que han hecho pobres las tierras de riqueza".

La monarquía no deja de ser la institución y el símbolo secular del despotismo.

El Poder Ejecutivo, formado por tres individuos elegidos por el legislativo, al que se encarga el cumplimiento de las leyes, debe poseer las facultades precisas para gobernar: nombrar los funcionarios de la administración, disponer de la fuerza pública, dirigir las relaciones exteriores y disponer de los fondos públicos. Mas a la comisión preocupa la facultad de hacer la guerra, que en España no se niega al monarca, y la condiciona en México a la previa conformidad del Senado, respetando así los derechos de la nación sin entorpecer la energía y oportunidad de las acciones, y el secreto a veces obligado para ellas.

Por una omisión o una previsión se prescribe que el Ejecutivo dará cumplimiento a las leyes "sin modificarlas ni interpretarlas", pudiendo presumirse, al no existir disposición especial, que carece de la facultad reglamentaria.

El cuerpo ejecutivo, elegido cada cuatro años, evita las consecuencias de su perpetuación, estando sujeto además a responsabilidad y obligado a oír al Senado y al Congreso.

La peculiaridad más acusada del Plan de Constitución la ofrece la institución del Senado, que "no es invención nueva" y que ya "lo propuso uno de los publicistas más acreditados

y juiciosos". La comisión no lo nombra pero se refiere a Juan María Wenceslao Barquera, quien lo explica bajo el título de *Poder conservador* en sus *Lecciones de política y derecho público para instrucción del pueblo mexicano*, editadas en 1822.

La comisión lo concibe como un cuarto poder para garantizar los derechos de la nación, poniendo a los poderes "en la necesidad justa de no exceder" de sus atribuciones.

> Un senado compuesto de dos individuos de cada provincia, propuestos por las juntas electorales, y nombrados por los Congresos de ellas mismas, cela la conservación del sistema constitucional en todos los puntos del estado por sí y por medio de los Congresos provinciales, reúne las representaciones de éstos sobre infracciones de (la) constitución; propone los proyectos de ley que juzga necesarios para llenar su instituto; obliga al cuerpo legislativo a respetar la Constitución y obrar con el detenimiento que exigen sus altas atribuciones; reclama aquellas leyes o decretos que son contrarios a la ley fundamental, o no han sido discutidos y acordados en la forma prescrita por ella misma; juzga a los individuos del cuerpo ejecutivo, a los diputados, a los secretarios de estado, y a los ministros del tribunal supremo de justicia en los casos precisos que debe designar una ley [...] convoca a Congreso extraordinario cuando lo exija el interés general de la nación; y en casos señalados igualmente por otra ley pensando con todo el detenimiento necesario disponer de la milicia dando a los jefes de ella las órdenes correspondientes.

El procedimiento para juzgar a los individuos del Senado, sobre el que la comisión confiesa sus dudas, lo deja a la solución que dé el Congreso Constituyente. La comisión no deja de advertir que en tanto el Senado mantiene en los límites de sus atribuciones a los otros poderes, no existe una autoridad que, a su vez, lo contenga en el ejercicio de las suyas, mas no considera necesaria "la creación sucesiva de autoridades", a que llevaría a la creación de otra.

La comisión no fija el periodo de ejercicio de los senadores, mas todo el espíritu del plan supone a los que integran los poderes como temporales, por lo que el Senado no es una excepción sino se declara como tal. No suponemos que de su antecedente en el Senado Conservador de la Constitución francesa del 13 de diciembre de 1799, último código orgánico de la república, se pudiera concluir su carácter vitalicio. No relacionamos el proyecto mexicano con el Senado-Consulto de 4 de agosto de 1802, que instauró el consulado vitalicio de Napoleón por la ampliación de facultades del Senado de las que no aparecen influencias en México. Incluso, y aunque la comisión aluda a las *Lecciones de política* de Barquera, no incorpora las atribuciones que éste le considera propias, como verificar las elecciones para el cuerpo legislativo, intervenir en el nombramiento de secretarios del despacho, magistrados de los tribunales, embajadores, funcionarios y jefes militares —aconsejando y proponiendo—, y declarar cuándo hay lugar a revisar la Constitución, convocando la asamblea especial que la haga.[15]

En cierta manera, no puntualmente, la concepción del Senado Conservador de Barquera está más próxima a la institución del Supremo Poder Conservador en la Segunda de las *Leyes constitucionales* de México, de 30 de diciembre de 1836.

Lo sugestivo del tema nos induciría a complementar la ya por sí misma satisfactoria ex-

[15] Juan María Wenceslao Barquera, *Lecciones de política y derecho público para instrucción del pueblo mexicano*, México, 1822, pp. 197-201.

posición de las fuentes institucionales del Supremo Poder Conservador de 1836, que hace el doctor Alfonso Noriega en su obra *El pensamiento y el conservadurismo mexicano.*[16]

Las *Lecciones* de Barquera de 1822, y el *Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana*, son textos bien conocidos para los hombres de 1836, y desde luego para Sánchez de Tagle, padre del proyecto constitucional centralista.

Mas no es éste nuestro tema.

* * *

Antes de referirnos a los congresos provinciales, nos importa el voto particular del doctor Mier al *Plan de la Constitución Política.* Manifiesta que con Javier Bustamante y Lorenzo de Zavala se inconforma con "ese Senado de nueva invención que no se hace parte del cuerpo legislativo", y que fue aprobado en la comisión por la mayoría de un solo voto.

Mier cita en su apoyo las instrucciones de las tres provincias —Coahuila, Texas y Nuevo León— cuando lo designaron con Melchor Múzquiz comisionado suyo en la junta convocada en Puebla por los jefes del ejército libertador. Deben los comisionados, se les instruyó, cuidar "que se reconozca y ponga a cubierto para siempre la dicha igualdad política de las provincias entre sí: pues así como un hombre porque sea más rico, más ilustre, más grande que otro, no deja de ser igual a otro que no tiene esas cualidades"; así "también, aunque aparezcan semejantes diferencias entre pueblo y pueblo y entre provincia y provincia, deben ser políticamente iguales, y tener como personas morales iguales derechos; y por consiguiente igual influencia en la formación de las leyes y muy principalmente en las fundamentales, o sea en el primer pacto social, por el cual se va a constituir esta grande nación".

Para el Congreso Constituyente parece preferible, a una sola asamblea con igual número de representantes por cada provincia, el dividir los diputados en dos cámaras, elegidos "por la nación soberana, y jamás por el poder ejecutivo, ni por persona o corporación a título de privilegio alguno", lo que sería usurpación de los derechos de la nación.

A la primera cámara irán diputados elegidos con base en la población, uno por cada 60 000 habitantes o fracción mayor a la mitad, y la provincia que no alcance ese número tendrá derecho a un diputado. La segunda cámara se integrará con dos representantes elegidos por cada provincia si la primera no llega a 100 diputados, y por uno de cada provincia si pasa de los 100.

El doctor Mier aprueba y hace suyo el criterio de las *Instrucciones*, y objeta el del plan que con la sola base electoral en la población y concentrando la representación en una sola cámara, impone el sacrificio político de las provincias menos pobladas, y el predominio de otras, como la de la capital del pais con casi millón y medio de habitantes. El inconveniente, para Mier, "se remedia como lo está en los Estados Unidos de Norteamérica, con una segunda Cámara que tenga el derecho de revisar las leyes", con representaciones provinciales idénticas. Que ello signifique que una minoría pueda sobreponerse a la mayoría en la relación de ambas cámaras, es algo, aclara Mier, que depende "del contrato social que va a celebrarse, no en-

[16] Alfonso Noriega, *El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano*, México, 1972, tomo I, pp. 207-213.

tre mayor y menor, sino entre partes moral y políticamente iguales como deben considerarse nuestras provincias al establecer la Constitución".

A quienes le objetaron en la comisión el proyecto de una segunda cámara representativa de las provincias, considerándola "un resto de la aristocracia", Mier responde que es al contrario "la perfección del gobierno democrático representativo", porque asegura la igualdad posible. Es el Senado del plan, extraño al Poder Legislativo, el aristocrático. A Mier le recuerda el Consejo de Estado español, que suple el Senado y contenta en parte "a los magnates espirituales y temporales", aunque sin "componerla su nobleza, en general viciosa e ignorante, ni su alto clero en parte fanático", y ambos partidarios frecuentes del trono absoluto.

Mier no propone, y lo aclara, una cámara como en Inglaterra y Francia, sino "una igual a la que tienen los Estados Unidos y Colombia, gobiernos republicanos populares, donde no ha quedado ni sombra de aristocracia".

La función moderadora del Senado frente a la Cámara baja es la de la experiencia de sus individuos frente a la impetuosidad de la juventud, y las resoluciones aprobadas por una a veces súbita votación, como aquellas de Cádiz en que sucumbían los proyectos de los diputados americanos ante el partido adverso.

La representación igual de las provincias y el equilibrio mesurado entre las dos cámaras, que no es la fiscalía del Senado sobre la primera cámara según el plan de la comisión, son las ventajas del proyecto de Mier, quien no puede dejar de acudir al ejemplo de la Convención francesa para ilustrar los extravíos de una cámara tumultuosa y *frenética*. Y también al del Senado "que inventó Napoleón en París, con el cual sofocó al cuerpo legislativo", y fue instrumento ciego de su despotismo.

La revolución federal de las provincias obliga al Congreso a formular el primer proyecto que la reconoce y sanciona. En Mier ya se expresa con claridad la preocupación para concebir un proyecto federal equidistante del modelo norteamericano y de la república central, como la colombiana de Cúcuta de 30 de agosto de 1821 que menciona el propio Mier.

El proyecto de la comisión del Congreso plantea el gobierno de las provincias en sentido inverso al supuesto de un pacto federal. En la parte expositiva y en los apartados o bases, coincidentes y enunciativos, se centra el problema al tratar de congresos provinciales, involucrando el Ejecutivo de ellas que no trata en especial.

Los congresos provinciales se compondrán de 13 diputados en las provincias de menos de 100 000 habitantes; 15 en las que tengan entre 100 000 y 500 000; 17 en las que no lleguen a un millón, y 19 en las que rebasen el millón.

Los congresos provinciales formarán el plan de gobierno, la Constitución, de cada provincia, y el Ejecutivo lo ejercerán prefectos que serán nombrados por el Ejecutivo nacional a proposición de los congresos provinciales correspondientes.

"Todo aquello que es necesario para el gobierno interior de la provincia —prescribe el proyecto—, y que no toca al político de la nación, forma el área precisa a que deben extenderse las atribuciones de un Congreso provincial".

En la anómala concepción federal del proyecto se contiene una disposición que será conflictiva en la integración federal posterior. Los congresos provinciales podrán "formar... el sistema de contribuciones necesarias para llenar el cupo que le corresponda en los gastos nacionales y el total de los provinciales". Frente a esta facultad de los congresos provinciales, el

nacional debe "fijar los gastos de la administración nacional: (y) señalar el cupo que corresponda a cada provincia".

No hacemos un examen del proyecto sino apenas someras alusiones, en este caso a una imprevisión en su federalismo obligado. Por lo demás, el plan no ofrece novedad excepcional en el marco del constitucionalismo de esos días. Como federal, declara que la nación "es la sociedad de todas las provincias del Anáhuac o N. España, que forman un todo político". Un breve catálogo de derechos consagra la libertad "de pensar, hablar, escribir, imprimir, y hacer todo aquello que no ofenda los derechos de otro"; la igualdad ante la ley es sancionada; el derecho de propiedad, su ejercicio, únicamente tendrá las limitaciones que la ley imponga; y sólo será ley la acordada por los representantes de la nación. Como deber general se impone profesar el catolicismo romano.

Una idea roussoniana se expresa al declarar: "Los derechos de los ciudadanos son los elementos que forman los de la nación. El poder de ésta es la suma de los poderes de aquéllos".

La nación ejerce sus derechos por "los ciudadanos que eligen a los individuos del cuerpo legislativo; por éste al decretar las leyes; por los jueces que las aplican, y por el Senado que vigila el cumplimiento de la Constitución.

Al darse lectura al plan en el Congreso, el 18 de mayo, Carlos María de Bustamante hace una declaración: "La lectura de las bases de la Constitución me ha llenado de admiración...". Propone entonces que se redacten en un sistema de artículos "para darles toda la claridad de que son susceptibles", y que "el futuro Congreso que apruebe esta Constitución" la halle formada, y pueda adicionarla con facilidad. El Congreso actual, aclara Bustamante, únicamente propone el proyecto.

El ánimo de los diputados, que aprueban la impresión del plan, parece ser optimista.

Por más que las provincias se hayan declarado por la federación y, como en Guadalajara, se mencione el modelo norteamericano, de ninguna ha surgido un proyecto de constitución. ¿El plan de la comisión del Congreso satisface la demanda de una federación?

3

LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
UN PARÉNTESIS

Fechada el 24 de diciembre de 1811, la comisión de Constitución de las Cortes de Cádiz presentó la última parte de su proyecto, relativa al gobierno interior de las provincias y de los pueblos, a las contribuciones, fuerza militar, instrucción pública y a la observancia y reforma de la Constitución. De esta parte nos interesa el gobierno interior de las provincias, y en particular la institución de las diputaciones provinciales.

El proyecto se dirige desde luego a la creación de los ayuntamientos constitucionales, que por sí solos merecen la atención más especial, atención que no podemos dársela aquí. Nos referimos a las diputaciones provinciales.

Para la comisión, "el régimen económico de las provincias" se debía confiar a cuerpos "formados periódicamente por la elección libre de las mismas provincias", con los conocimientos locales para promover su prosperidad. El empeño, que se califica de funesto, "de sujetar todas las operaciones de la vida civil a reglamentos y mandatos de autoridades, ha acarreado los mismos y aun mayores males —se expresa—, que los que se intentaban evitar".

La concepción liberal plena preside la institución: "El verdadero fomento consiste en proteger la libertad individual en ejercicio de las facultades físicas y morales de cada particular según sus necesidades e inclinaciones". Para ello nada más apropiado que el sistema propuesto: que el gobierno económico de las provincias se encomiende "a una diputación compuesta de personas elegidas libremente por los pueblos de su distrito", la que se asocia a los jefes políticos y a los de la hacienda pública, a fin de que la autoridad real no sea desconocida. En los casos de abuso de las facultades de las diputaciones, o de resistencia a las órdenes del gobierno, se suspenderá a sus vocales, dando parte a las Cortes para que resuelvan en definitiva los conflictos.

Una consideración merece la situación de las provincias ultramarinas para que las diputaciones de ellas posean facultad adicional en relación a obras públicas urgentes.[17]

El capítulo II del título VI del proyecto de Constitución trata del gobierno político de las provincias, y de las diputaciones provinciales, y las Cortes lo aprobaron en sus términos originales.

El gobierno económico encomendado a las diputaciones provinciales comprendía: 1. Intervenir y aprobar el repartimiento de las contribuciones que correspondieron a la provincia. 2. Velar la inversión de los fondos públicos, examinar las cuentas y dar el visto bueno para su

[17] Continuación y conclusión del proyecto de Constitución Política de la Monarquía Española presentado a las Cortes Generales y Extraordinarias por su Comisión de Constitución, Cádiz, 24 de diciembre de 1811, pp. 5-7.

aprobación superior. 3. Atender al establecimiento de ayuntamientos de acuerdo con la Constitución. 4. Proponer al gobierno los arbitrios para obras nuevas o reparación de antiguas, y en ultramar usar de los arbitrios en caso de urgencia, informando al gobierno para su aprobación por las Cortes. 5. Promover la educación, la industria, la agricultura y el comercio, protegiendo a los inventores. 6. Informar al gobierno de los abusos de la administración en las rentas públicas. 7. Formar el censo de sus provincias. 8. Vigilar que los establecimientos piadosos y de beneficencia cumplan sus fines, y proponer su reforma. 9. Comunicar a las Cortes las infracciones de la Constitución, y 10. En ultramar velar el funcionamiento de las misiones, debiendo los encargados de éstas darles razón de sus operaciones para evitar abusos.

Los individuos de las diputaciones, siete, se renovarían cada dos años por mitad, eligiéndoseles por los electores de partido al día siguiente de hacer la elección de los diputados a Cortes.

Las diputaciones provinciales las presidiría el jefe político respectivo.

Estos cuerpos de origen electivo, idéntico al de los diputados a Cortes, en sus limitadas facultades son, como certeramente lo indica Nettie Lee Benson, "la institución más interesante" de las creadas por la Constitución de Cádiz, por el papel que representó en la evolución del Estado federal mexicano".[18]

Su origen en España, que también señala N.L. Benson, se encuentra en las juntas que se formaron en 1808 ante la invasión francesa y las abdicaciones de los Borbones en favor de Napoleón I. Las juntas provinciales que surgieron en la resistencia fueron las primeras en obrar ejerciendo una soberanía que, al vacar el monarca, era reasumida en el primer momento por el pueblo y las autoridades que se oponían a Bonaparte.

El hecho revolucionario, súbito y no previsto, convierte a las juntas desde su integración, como lo señala. Miguel Artola, en "la negación del Antiguo Régimen", al calificarse a sí mismas de *supremas*. Los órganos de aquél, que también se oponen a los franceses, ceden ante ellas, que se arrogan una plenitud de poderes, "que las afianza aún más en su opinión de ser titulares de la soberanía".[19]

Un suceso análogo y general en América fue el movimiento juntista reprimido por las autoridades españolas que, cualquiera que sean los argumentos y las motivaciones circunstanciales, no podían dejar de advertir el significado anticolonial de los acontecimientos como unánimemente lo denunciaron.

Pero en la península y ante la invasión francesa, el juntismo impone la integración de un órgano central, y a partir de la iniciativa de la Junta de Galicia, el 16 de junio de 1808, y la institución de la Junta Suprema Central Gubernativa el 27 de septiembre siguiente, integrada con diputados de las juntas provinciales, la nación es una en su guerra de independencia.

* * *

El 22 de enero de 1809 la Junta Central promulgó el decreto declarando "que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española", por

[18] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 11.

[19] Miguel Artola, *Los orígenes de la España contemporánea*, tomo I, pp. 152-153.

lo que debían estar representados en la Junta, nombrando un diputado cada virreinato y cada capitanía general independiente. La Junta prescribió el modo de elección.[20] No vamos a recapitular, y dejemos la sola constancia de la asimilación de derechos entre las partes ultramarinas de la monarquía y las provincias y reinos de la península en el órgano que se arroga la autoridad toda sobre la monarquía.

Entre ese año y la reunión de las Cortes, la consideración a la representación americana ante los órganos metropolitanos se amplía, aunque se mantiene la proscripción de todo el juntismo criollo de América.

En la península la situación es inversa, y las Cortes promulgan el 18 de marzo de 1811 el Reglamento provisional para el gobierno de las juntas de provincia. En él se previene que en cada provincia existirá una junta superior de nueve individuos, y más si el número de corregimientos o partidos es mayor, debiendo elegírseles de acuerdo con lo dispuesto para las elecciones de diputados a Cortes. Las juntas serían presididas por el capitán general de la provincia, y por conducto de ellas se comunicarían a los pueblos las órdenes del gobierno, y ejecutarían lo que éste les confiara. Las juntas cuidarán, se establece, la recaudación de las contribuciones y su inversión, nombrando interventores cuando lo juzguen conveniente, y cada vocal llevará la correspondencia de su partido. Las juntas publicarán estados mensuales del erario provincial, y uno anual que se remitirá al gobierno. Cuidarán del censo de población y la estadística de la agricultura, industria y comercio. Fomentarán la educación y establecerán escuelas. Propondrán a las Cortes sobre empleos, fomento y la formación de establecimientos convenientes. Atenderán las maneras de auxiliar al ejército y los jefes de éste deben acudir a las juntas y apoyarlas en el mantenimiento del orden.[21]

El Reglamento atiende al estado de guerra en la península, reconociendo la existencia de las juntas provinciales que iniciaron la insurgencia española.

Desde las primeras juntas españolas hasta las diputaciones provinciales, a través del Reglamento de 18 de marzo de 1811, se va configurando la institución de un nuevo órgano representativo de las provincias, que acentuará un impredecible carácter revolucionario en México. ¿Hasta dónde, lo prevé Ramos Arizpe, incorporado a las Cortes de Cádiz como diputado por Coahuila el 21 de marzo, tres días después, de la aprobación del Reglamento de 1811? Sería aventurado suponerlo. Mas es evidente su interés en el Reglamento, y como lo señala N.L. Benson "empezó inmediatamente a formar una política enderezada a la obtención de nuevos derechos para su tierra natal". Inspirado en el Reglamento, el 23 de octubre pide a las Cortes el establecimiento de una junta gubernativa para las Provincias Internas de Oriente —Coahuila, Texas, Nuevo León y Nuevo Santander—, con asiento en Saltillo, y de cuatro subalternas en cada una de éstas. Su iniciativa pasó a la comisión de Constitución, sin que al parecer se volviera a tratar de ella en las Cortes. Pero Ramos Arizpe, en una exposición más meditada, fechó el 1 de noviembre de ese mismo año su *Memoria... sobre el estado natural, político, y civil de su dicha provincia, y las del Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, y los Texas...*".

La *Memoria* es un amplio documento crítico de la situación y el gobierno de las cuatro provincias, tan alejadas de las autoridades superiores a las que debe acudirse, "y sin fortaleza

[20] Conde de Toreno, *op. cit.*, tomo I, pp. 497-498.

[21] *Colección de los decretos y órdenes de las Cortes*, Cádiz, 1811, tomo I.

alguna contra los Estados Angloamericanos". Para Ramos Arizpe *es de absoluta necesidad* "establecer dentro de ellas un gobierno superior y común, tanto para lo ejecutivo, como para lo judicial". Las Cortes, argumenta Ramos Arizpe, no pueden tener una previsión menor a la del gobierno "en tiempos de Godoy; y si éste por las razones expuestas, especialmente por la inmediación de estas provincias con los Estados Unidos, había resuelto en sus últimos años poner en ellas un gobierno independiente de México y Chihuahua, para el que estuvo nombrado de jefe D. Pedro Grimare T. ¿Cómo puede esperarse —se pregunta— que V.M. tarde un momento en adoptar una medida, acaso la única suficiente para la seguridad de tan importante territorio?"

Las mismas circunstancias subsisten, "y tan agravadas como V.M. sabe muy bien. Yo de otra suerte —declara Ramos Arizpe— no respondo de aquellas provincias, y me descargo ante V.M. de la responsabilidad que pudiera resultar contra mí, si no hiciera esta solicitud". Ciertamente la preocupación de Ramos Arizpe debió ser mayor encontrándose España invadida y no pudiendo tomar las Cortes otras medidas que las de gobierno fortaleciendo los intereses internos de provincias, que "están muy proporcionadas para existir unidas bajo un mismo superior". Y como diputado de Coahuila sugiere fijar la capital en Saltillo, que desde el gobierno anterior se consideró para residencia del Obispado de Nuevo León.[22]

Si las bases del proyecto de Constitución proclaman "la dignidad del hombre constituido en sociedad", y sus derechos de libertad, seguridad personal, propiedad e igualdad ante la ley, Ramos Arizpe habla a nombre de los 200 000 habitantes de las cuatro provincias, y pide se establezca en ellas "un cuerpo gubernativo, y otro que en grado de apelación ejerza el poder judicial: el primero con el nombre de Junta Superior Gubernativa de las cuatro Provincias Internas del Oriente de la América Septentrional, compuesta de siete individuos vecinos de las mismas provincias", uno por la de Texas y dos por cada una de las restantes.

El segundo cuerpo, tendría el nombre de Tribunal Superior de Apelaciones.

El modelo de la monarquía moderada, contemplado en el proyecto de Constitución, debe proyectarse en su primaria división de poderes en el interior de las provincias. La Junta Gubernativa correspondería al Poder Ejecutivo metropolitano, y designada por las provincias se asegura su autoridad, pues sus providencias "han de ser cumplidas por los mismos que lo han nombrado", con las ventajas del acierto al conocer las necesidades de las provincias.

Ramos Arizpe adelanta en su iniciativa, al proponer la creación en cada provincia de "una *Junta Gubernativa* o llámese *Diputación de provincia*, a cuyo cargo esté la parte gubernativa de toda ella, y en cada población un *cuerpo municipal* o *cabildo*".[23] "No serán los españoles tratados como esclavos..., sino que cooperando con su voto a la elección de las personas que los han de mandar en tan distantes provincias y pueblos, darán gracias a V.M. que los ha puesto en estado de conocer su dignidad, y gozar tranquilamente de los derechos propios de un hom-

[22] *Memoria que el Doctor D. Miguel Ramos Arizpe, cura de Borbón y diputado en las presentes Cortes Generales y Extraordinarias por la provincia de Coahuila... presenta al Augusto Congreso sobre el estado natural, político, y civil de su dicha provincia, y las del Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, y las de Texas, con exposición de los defectos del sistema general y particular de sus gobiernos, y de las reformas, y nuevos establecimientos que necesitan para su prosperidad*, Cádiz, 1812, pp. 38-39.

[23] *Ibid.*, pp. 40-42 y 43.

bre constituido en sociedad". Es el voto, afirma Ramos Arizpe, "de todas las provincias de la Monarquía", y hace valer un argumento *ad hominem*: la aprobación que desde la Junta Central y la Regencia, y últimamente las Cortes, han hecho de las juntas de la península, consolidándolas.

Ramos Arizpe vuelve los ojos a América y alude a las juntas reunidas en ella. Salva los detalles y se refiere a la Nueva España, cuyas circunstancias, dice, impidieron su formación, manifestando con simulada o genuina convicción: "yo entiendo que si oportunamente se hubiera verificado —su instalación— de orden del Supremo Gobierno Nacional, acaso se hubieran evitado los horrores de la guerra civil". Él sólo puede afirmar, con los impresos del gobierno de México, que al invadir los insurgentes la provincia de Coahuila se formó en Monclova una junta que dio el mando al coronel Simón de Herrera, quien sin más recursos que los de los habitantes batió a los insurgentes.

La necesidad de establecer las juntas en toda la monarquía tiene además "la decidida voluntad de los pueblos de toda ella". Toca a las Cortes establecerlas bajo un sistema uniforme, al igual que los ayuntamientos, aboliendo para siempre la venta de los empleos.[24]

La preocupación de Ramos Arizpe por la vecindad o cercanía de Estados Unidos se vuelve a manifestar en su proposición para que se establezca una comandancia o capitanía general de las cuatro provincias, con asiento en la capital de Texas, cuyo abandono censura a la metrópoli, recomendando su pronta colonización.

Como observa N.L. Benson, es Ramos Arizpe quien acuña o emplea públicamente por vez primera la expresión diputaciones de provincias, que reaparecerá en la Constitución como diputaciones provinciales. En la *Memoria* no se le concibe como cuerpo legislativo sino como autoridad gubernativa. No podemos desechar la suposición de una deliberada imprecisión sobre las facultades de la junta o diputación propuesta por Ramos Arizpe, anómala autoridad gubernamental de origen electivo sin precedentes, cuya jurisdicción comprendería extensos territorios en América.

* * *

Entre el 7 de noviembre, cuando Ramos Arizpe presenta su *Memoria* a las Cortes, y el 24 de diciembre en que se fechan los títulos VI a X del proyecto de Constitución, transcurre el tiempo suficiente para que su iniciativa pudiera influir en la comisión de Constitución, y que la original institución de las diputaciones provinciales, como se aprueba en las Cortes, sea también la de una autoridad gubernativa. Incluso podemos verificar que el reglamento ya citado, de 11 de marzo del mismo año, asigna a cada junta provincial nueve miembros, en tanto que en la Constitución se aprueban siete a cada diputación provincial, coincidiendo con lo propuesto en la *Memoria* de Ramos Arizpe.

No acudiremos a los debates sobre las diputaciones provinciales en el proyecto de Constitución, cuando los diputados americanos veían la posibilidad de lograr mayor autonomía en el gobierno de las provincias, ampliando las facultades de ellas y el número de sus diputados, privando además a los jefes políticos e intendentes de voz y voto. N.L. Benson lo registra en

[24] *Ibid.*, pp. 44-46.

su lúcida y minuciosa investigación. La que para los españoles era un órgano administrativo y consultivo para los americanos debía ser, como representativo de las provincias, una suerte de legislatura provincial. Toreno llega a advertir expresamente, como lo cita Benson, que lo dilatado de la monarquía la impulsa a un federalismo que, de no evitarse, se formaría en las Américas a ejemplo de Estados Unidos, terminando en la constitución de diversos estados. Agustín Argüelles ve los mismos peligros.

Toreno lo reiterará años después en su *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*, al referirse a las diputaciones provinciales cuyas funciones, análogas a las de los ayuntamientos ampliadas a las provincias, se habían extendido "hasta en la política general y más allá de lo que ordena una buena administración". Por ello sus sesiones se limitaron a 90 días anuales "para estorbar se erigiesen dichas corporaciones en pequeños Congresos, y se ladeasen al federalismo: grave perjuicio, irreparable ruina, por lo que hubiera convenido restringirlas aún más".[25]

Desde el mismo proyecto constitucional la comisión redactora cauteló las pretensiones americanas en este punto, ya manifiestas en la *Memoria* de Ramos Arizpe, previendo el establecimiento de diputaciones en cada provincia, pudiendo las futuras Cortes variar el número de sus individuos al reformarse la división territorial aprobada en el artículo 10 de la Constitución.

En principio correspondían a la América Septentrional seis diputaciones, las de Nueva España, Nueva Galicia, Yucatán, Provincias Internas de Oriente, Provincias Internas de Occidente y Guatemala, en el territorio continental.

Cuando se decreta, el 23 de mayo del mismo año de 1812, la convocatoria a elecciones de diputados a Cortes ordinarias y la formación de los ayuntamientos constitucionales, las Cortes ordenan el establecimiento de las diputaciones provinciales. La insistente demanda de los americanos logra que en México, además de en las provincias mencionadas en la Constitución, se establezca otra en San Luis Potosí incorporándose la provincia de Guanajuato, y en la América del istmo otra en León de Nicaragua. En la América del Sur se obtienen además las de Cuzco, Charcas y Quito; y en Cuba la de Santiago.

Al continente americano se conceden 19 diputaciones provinciales, en tanto que en la península las diputaciones serían 29, más las de las islas Baleares y de las Canarias.

* * *

Las facultades de las diputaciones provinciales aumentan con el tiempo. Señalemos algunas de esas nuevas atribuciones.

En el Reglamento de las audiencias y los juzgados de primera instancia, de 9 de octubre de 1812, se establecen visitas que las audiencias en pleno deben hacer a las cárceles y a cualquier sitio en donde existan presos sujetos a jurisdicción ordinaria. A estas visitas deben asistir dos individuos de las diputaciones, o de los ayuntamientos si no existiese ella o no estuviese reunida, para verificar las condiciones en que se les mantiene y sus quejas. Las audiencias deben pasar a las diputaciones los asuntos gubernativos y económicos no contenciosos para

[25] Conde de Toreno, *op. cit.*, tomo III, pp. 58-59.

que éstas, de acuerdo con los jefes políticos los examinen, dando curso a aquéllos en los que las diputaciones deben intervenir y turnando a los ayuntamientos y jefes políticos los que les correspondan.[26]

Las diputaciones, de acuerdo con las audiencias, harán la distribución provisional de los partidos de las provincias para la designación de jueces de primera instancia.[27]

Una intervención mayor se da a las diputaciones en el decreto de 4 de enero de 1813, *sobre la reducción de terrenos baldíos y realengos y de propios y arbitrios al dominio de los particulares, en beneficio de los que luchan contra los franceses y de los vecinos no propietarios.* De estas reducciones se exceptúan los ejidos de los pueblos. Las diputaciones son las que propondrán el tiempo y términos en que más convenga aplicar el decreto en sus provincias, señalando los terrenos que deben conservar los pueblos para que las Cortes resuelvan. La Regencia y las dos secretarías de Gobernación deben atender y turnar celosamente a las Cortes las proposiciones de las diputaciones.

Las solicitudes de tierras por oficiales y soldados que hayan servido en la guerra de la península "*o en la pacificación de las actuales turbulencias*" *en ultramar*, se presentarán a los ayuntamientos, los que las turnarán con su opinión a la diputación provincial respectiva "para que ésta lo apruebe, y repare cualquier agravio".

Las tierras baldías o realengas "más a propósito para el cultivo", se asignarán gratuitamente por sorteo a todo vecino de los pueblos que lo solicite y no posea tierra, cuidando sea proporcionada la repartición a la extensión de los terrenos disponibles, sin exceder de la cuarta parte de ellos. De no ser suficientes estas tierras se dispondrá de las de propios y arbitrios, pero imponiéndose una cantidad equivalente a su rendimiento en cinco años en beneficio de los fondos municipales. Los trámites de estos repartimientos serán gratuitos y deberán aprobarse por las diputaciones provinciales.[28]

Los intereses que se van congregando en torno a las diputaciones provinciales no pueden ser más ciertos y tener un significado y un arraigo más populares.

* * *

El 23 de junio de 1813 se promulga por las Cortes la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias. En ella se da intervención a las diputaciones provinciales en el empleo que hagan los ayuntamientos de caudales de propios y arbitrios para gastos públicos; en la aplicación de fondos del común en la educación. Los ayuntamientos deberán rendir cuentas anuales a las diputaciones provinciales de la recaudación e inversión de los fondos que administren. Los agravios de particulares contra los ayuntamientos en asuntos económicos y gubernativos, los resolverá el jefe político oyendo a la diputación provincial. La designación y remoción de los secretarios de los ayuntamientos se hará con el consentimiento de las diputaciones provinciales.[29]

[26] Reglamento citado, cap. I, arts. LXV y LVII.

[27] *Ibid.*, cap. II, arts. I, IV y V.

[28] Decreto citado, arts. I a XVII.

[29] Instrucción citada, cap. I, arts. XI, XIV, XVI, XVII y XXI.

La Instrucción dedica el capítulo II a las *obligaciones y cargos de las diputaciones provinciales.* Son las diputaciones las que cuidan del establecimiento de los ayuntamientos. Los repartimientos de las contribuciones que aprueben las Cortes para las provincias se distribuirá por los intendentes, fijando el cupo de cada pueblo con la aprobación de las diputaciones provinciales respectivas. Toda queja o reclamación de los pueblos por el cupo fijado la resolverá la diputación sin recurso ulterior, al igual que las de los particulares en el repartimiento que por disposición de los ayuntamientos se les hubiese fijado. La misma facultad tienen las diputaciones en reclamaciones y dudas en materia de abastos. También resolverán las diputaciones las dudas y quejas de los pueblos y los particulares sobre reclutamientos y remplazos para el ejército, oyendo a la autoridad militar.

Las cuentas de la contaduría provincial de propios y arbitrios deberán ser aprobadas por las diputaciones y por los jefes políticos.

Las diputaciones velarán la conservación de las obras públicas y el funcionamiento de los establecimientos de beneficencia, promoviendo la construcción de nuevos y la creación de los que estime útiles o necesarios. Aun en las obras que por su importancia están a cargo del gobierno y del erario nacional, las diputaciones ejercerán una vigilancia general, e intervendrán como el gobierno las autorice.

Las diputaciones tendrán un representante en las juntas de sanidad de la provincia. Las diputaciones, en tanto se aprueba la Dirección General de Estudios, dispondrá los exámenes de los aspirantes a profesores de leer, escribir y contar, y los calificará. Serán las diputaciones las que formarán los censos y estadísticas de las provincias; y serán ellas las que presenten al gobierno los planes y proyectos de fomento a la agricultura, la industria, el comercio y las artes. Cuidarán de que los habitantes dispersos se congreguen para vivir en poblados, proponiendo al gobierno las medidas para facilitarles tierras y medios de cultivarlas, de acuerdo con el decreto de 4 de enero ya citado.

Las diputaciones, para consultar al gobierno lo harán por medio de los jefes políticos correspondientes.[30]

El singular cuerpo de gobierno que son las diputaciones provinciales, cuyo origen en España lo explica el propósito de condescender con la autoridad y el prestigio de las juntas provinciales que surgieron para resistir a Napoleón, en América congrega intereses regionales no subordinados a autoridad alguna que sustituya la central del virreinato. La dependencia y la relación únicas, no por lejanas y tardías menos formales, con los órganos metropolitanos, dispersa en el extenso virreinato de Nueva España las autoridades coloniales. Si esta dispersión no llega a consumarse del todo y de hecho por la fugaz vigencia constitucional y el estado de guerra, no por ello es inexistente, y ofrece aliento a las expectativas de disfrutar de una institución representativa, y como tal de un limitado autogobierno regional e independiente del de la capital del antiguo virreinato.

La reforma gubernativa más radical que consuma la Constitución en el régimen de las provincias, desintegrando la unidad de los virreinatos, se complementa con la institución de los jefes políticos de las provincias. Nombrados por el monarca, reside en cada uno de ellos "la superior autoridad dentro de la provincia para cuidar de la tranquilidad pública, del buen

[30] *Ibid., passim.*

orden, de la seguridad de las personas y bienes de sus habitantes, de la ejecución de las leyes y órdenes del Gobierno, y en general de todo lo que pertenece al orden público y prosperidad de la provincia", con facultades para "ejecutar gubernativamente las penas impuestas por las leyes de policía y bandos de buen gobierno", e imponer multas.

Los jefes políticos presidirán las diputaciones provinciales, mas no parece tener su autoridad preeminencia en ellas.

El jefe político, que es el conducto en la comunicación de los ayuntamientos con las diputaciones, lo es también entre éstas y el gobierno metropolitano. Es el jefe político el que circulará en su provincia leyes y decretos metropolitanos.[31]

En el régimen de la administración de justicia la reforma no dispersa desde el primer momento los tribunales, y la Instrucción del 23 de junio nada dispone sobre ellos. Se mantienen las audiencias existentes hasta que se haga la división del territorio de la monarquía como lo previene el artículo 11 constitucional, por lo que en la Nueva España subsistirán hasta la consumación de la independencia las de México y Guadalajara, de acuerdo con el reglamento de ellas de 9 de octubre de 1812, con sus jurisdicciones. Las reformas son interiores, y se suprimen los juzgados de provincia y los de cuartel a cargo de los alcaldes de Corte y los del Crimen. De los numerosos fueros coloniales subsistirán únicamente los de hacienda, el eclesiástico —disminuido—, el militar, el de minería y el mercantil. Al no afectar la reforma judicial la unidad territorial anterior, los intereses regionales y provinciales se reflejarán más en los órganos representativos que son las diputaciones.

Estas diputaciones, escribirá Alamán, "venían a ser una especie de Congreso provincial, y éste es el fin que se hubiera debido tener en el arreglo del sistema de gobierno de las provincias de ultramar".[32] El sorprendente juicio de Alamán se cumpliría, aunque ya en el México independiente y al proclamarse la república.

* * *

La restauración constitucional de 1820 es la del régimen de esas autonomías regionales, ordenándose el restablecimiento de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos existentes en 1814 al abolirse la Constitución.

Las seis diputaciones provinciales concedidas a Nueva España en el primer periodo constitucional comprendían diputados elegidos a ellas por las provincias de su jurisdicción, y éstas expresa y nominalmente eran 23. N.L. Benson registra las fechas de instalación de las diputaciones, interrogándose tan sólo sobre la instalación de las de San Luis Potosí y las Provincias Internas de Occidente.[33] En el Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 1824, los 17 estados reconocidos comprenderán, también nominalmente, 22 provincias —no se menciona Campeche—, y dos territorios, los de Colima y las Californias. O sea, aparecen las mismas provincias que concurrirían con diputados a las diputaciones provinciales en 1813.

[31] *Ibid.*, cap. III.

[32] Lucas Alamán, *op. cit.*, tomo III, p. 125.

[33] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 43.

Al disponer el artículo 11 de la Constitución española que se haría "una división más conveniente del territorio español... luego que las circunstancias de la Nación lo permitan", el aliento a los intereses y las motivaciones provincianas no puede ser más claro. La restauración constitucional del año 1820 los reanima, y son los diputados de 1814 los llamados a integrar las diputaciones.

Como N.L. Benson lo va registrando en detalle, en 1820 desde la reunión de las Cortes en Madrid los diputados americanos reclaman que las provincias de América tengan la misma consideración que las de la península. Ramos Arizpe y Michelena presentan el 4 de octubre una iniciativa para que se establezcan diputaciones provinciales en Arizpe —con jurisdicción en Sonora, Sinaloa y las Californias—, y en Valladolid. Amplios párrafos del discurso de Ramos Arizpe del 2 de noviembre de 1820, argumentando en favor de las diputaciones propuestas, los reproduce la *Idea general sobre la conducta política de D. Miguel Ramos Arizpe* que publicó a su regreso a México en 1822. El 6 de noviembre de 1820 las Cortes aprueban la diputación para Valladolid.

Remitimos a la imprescindible consulta del capítulo III de la obra de N.L. Benson, quien explica puntualmente el incremento de las diputaciones provinciales entre 1820 y 1823. Las demandas de las provincias mexicanas, y el constante apoyo de sus diputados en las Cortes, obtienen para 1821 el establecimiento de 14 diputaciones en total incluyendo la de Chiapas. En 1822 las diputaciones suman en el país independiente 18, y en diciembre de 1823 llegan a 23. Ningún hecho revela con más evidencia la activa constelación de los intereses provincianos.

Desde la consumación de la independencia, Estados Unidos es un modelo idealizado de Arcadia republicana. En el *Semanario Político y Literario* —publicado por José María Luis Mora en 1821 y 1822— se traducen documentos políticos norteamericanos: su Declaración de Independencia, la Constitución y la declaración de derechos de sus artículos de enmienda. Francisco Molinos publica en 1822 las *Declaraciones de los derechos del hombre en sociedad* que precedían las constituciones de seis estados norteamericanos.

Las referencias pueden multiplicarse, y siempre como ejemplos de la más feliz y estable conciliación de derechos individuales y locales en una Constitución republicana federal.

Pero el modelo norteamericano, en su inmediata vigencia, es independiente en México, aunque coincida con las demandas de las provincias para obtener una institución de gobierno propio en las diputaciones provinciales, y ello desde antes de la consumación de la independencia y la proclamación de la República, incluso bajo el imperio de Iturbide.

La irrupción política de las provincias a partir del Acta de Casa Mata, su simultaneidad y los términos en que se expresa, haciendo suya la excitativa del Plan de Veracruz al asumir las diputaciones provinciales el gobierno de sus territorios, es un hecho más significado por sí mismo que muchas consideraciones especulativas. No podemos olvidar que de los hombres de Veracruz, Santa María se declarará centralista, el general Victoria no se involucrará en el debate, y Santa Anna tomará el partido federal en su proclama del 5 de junio siguiendo a otras proclamaciones.

Las provincias condicionan su reconocimiento del Congreso restaurado limitándolo a convocar el nuevo Constituyente, por la falta de confianza en muchos de sus diputados y su voto por la monarquía iturbidista. Las diputaciones, como gobiernos locales, amplían sus atri-

buciones y se erigen en representantes de las provincias, sin que se niegue o dude siquiera en ellas de su legitimidad, no obstante el antecedente, sin excepciones, de su adhesión a los documentos de Iguala y Córdoba y a la proclamación de Iturbide.

Sin cuestionar, y aceptando la evidencia del modelo norteamericano, acudir a él en esos días, citarlo y proponerlo es también racionalizar el desenlace de un proceso que tiene sus propias y autónomas motivaciones.

Reyes Heroles cita extensa y acertadamente la *Memoria* de 1 de noviembre de 1811 de Ramos Arizpe.[34] En las censuras de éste al centralista régimen metropolitano se recogen las reiteradas en los agravios americanos desde el siglo XVIII. Importa la conclusión en su iniciativa de reforma para las Provincias Internas de Oriente, que su autor involucra en la "decidida voluntad de los pueblos de toda ella" —la monarquía—, y que se podría calificar más de separatista que de federal, cuando menciona con elogio el proyecto de Godoy para establecer en las Provincias de Oriente "un gobierno independiente de México y de Chihuahua".

Como paréntesis podemos hacernos la pregunta sobre cuáles hubiesen sido las consecuencias, en México, si el régimen constitucional español de gobierno para las provincias hubiese sido duradero, manteniéndolas independientes entre sí y únicamente sujetas al lejano gobierno metropolitano.

* * *

"En ningún punto —dice Reyes Heroles— el Congreso fue tan obligado obedecer como en la adopción del sistema federal", y cita, entre otros documentos, el dictamen de los secretarios de Relaciones y de Justicia, presentado al Congreso el 24 de marzo sobre el vacío de la autoridad ejecutiva por la abdicación de Iturbide. El dictamen se expresa melancólicamente: "Es inconcuso que la general separación de las provincias del gobierno del Emperador ha reducido a éste al estrecho círculo de la corte, perdiendo de hecho el rango y categoría de gobierno supremo en la nación. Las provincias todas uniendo su voz al glorioso grito de libertad dado en Veracruz desconocieron al gobierno de México, y recobrando o reasumiendo la parte de libertad sacrificada en obsequio de la unión social, han proclamado unánimemente (la) representación nacional".

Ni José Cecilio del Valle, secretario de Relaciones, ni Juan Gómez Navarrete, de Justicia, son sospechosos entonces ni de republicanismo ni de federalismo. No obstante, reconocen implícitamente el carácter republicano de la que ya es una revolución al mencionar "el grito de libertad dado en Veracruz", y expresamente la entidad política de las provincias que recobran o reasumen "la parte de libertad sacrificada en obsequio a la unión social".

"En ningún tema —escribe Reyes Heroles— la voluntad general se exterioriza tanto como en el de que la República fuese federal". No son los de las provincias "simples grupos políticos locales sin raíces" con impulsos separatistas los que obran, como algunos suponen disimulando el problema. Se manifiestan, como lo ve Reyes Heroles, "fuerzas reales no carentes de profundidad".[35]

[34] Jesús Reyes Heroles, *op. cit.*, pp. 360-367.

[35] *Ibid.*, p. 358; *Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de México*, México, 1823, tomo IV, pp. 62-64.

La tesis institucionalista, aunque no limitada, de N.L. Benson, Reyes Heroles la orienta hacia la consideración de los factores sociales que presionan y dan sentido a los acontecimientos.

No disponemos de estudios particulares sobre el ejercicio de las diversas diputaciones provinciales, los hombres que las integran, sus orígenes e intereses. Estudios que deben ser complementados con los económicos, demográficos y culturales de las provincias.

Sin embargo, la afirmación de Zavala de que son las clases medias las que desean y asumen la dirección de los sucesos al tener acceso al poder, es evidente por sí misma. Una nobleza criolla que no llega a tener la coherencia de una verdadera clase, aunque sus individuos tengan influencia; una alta jerarquía eclesiástica cuya autoridad se ha deteriorado a través de los sucesivos y contradictorios juramentos de fidelidad al rey absoluto, a la Constitución, a la independencia y a la monarquía iturbidista; los españoles liberales y antiliberales, predominantemente borbonistas, que tratan de que sus intereses subsistan, son desplazados por una politizada y activa minoría de esa clase media que forma mayoría en los cuerpos representativos, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Incluso los cabildos eclesiásticos y el clero se unen a éstos, con los vecinos distinguidos, cuando son convocados a las juntas en que se da la adhesión al Acta de Casa Mata y después a la república federal.

En el ejército de origen realista, los altos mandos, con aisladas excepciones, pasan a manos de coroneles y oficiales ascendidos a partir de la consumación de la independencia. Es el ejército trigarante el que suscribe y apoya el Acta de Casa Mata. Y aunque el ejército, sus jefes y oficiales, no sean republicanos, el derrumbe iturbidista no ofrece otra alternativa. El ejército rebelde se apoya en los órganos provinciales apelando a una legitimidad representativa de la que él carece. Los jefes de Casa Mata, ocupada la ciudad de México sostienen al Congreso restaurado; los de las provincias se alían a las diputaciones provinciales. Todo el prestigio de quienes encabezaron la insurrección, con la autoridad que da la victoria, no logra mantener la unidad del ejército.

El borbonismo y el iturbidismo en su dispersión ceden ante el único proyecto posible, el republicano, y dentro de éste, al que proclaman los cuerpos representativos de las provincias, el federal, que se apresura a mediatizar el Congreso en el Plan de Constitución Política de 16 de mayo.

La un tanto morosa referencia al proceso institucional que da forma a las diputaciones provinciales, que ilustra el inesperado juicio de Alamán sobre lo que debieron ser desde su principio, y los acontecimientos del año 1823, corroboran plenamente a N.L. Benson cuando afirma que "la descentralización no ocurrió bruscamente con la adopción del sistema federal", sino gradualmente, acelerándose bajo la Constitución española con el establecimiento de las diputaciones provinciales.[36]

La sistemática y concluyente investigación e interpretación institucionales de N.L. Benson es la aportación más valiosa hasta ahora al estudio de la gestación y proclamación federal en México.

[36] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 9.

4

EL PROYECTO REPUBLICANO FEDERAL, I
LAS PROVINCIAS INTERNAS DE ORIENTE. RAMOS ARIZPE. STEPHEN F. AUSTIN

Consignar una mínima sucesión de fechas, a partir de la abdicación de Iturbide el 19 de marzo de 1823, ilustra esquemáticamente la naturaleza de los acontecimientos. El 21 de marzo el Congreso se declara legítimamente reunido, cesando el Poder Ejecutivo existente desde el 19 de mayo de 1822; el 31 de marzo el Congreso decreta que el gobierno lo ejercerá un Supremo Poder Ejecutivo y se designa para que lo integren a Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro C. Negrete; el 8 de abril se declara la nulidad de la proclamación de Iturbide y la insubsistencia del Plan de Iguala y del Tratado de Córdoba; el 21 de mayo el Congreso decreta que se forme convocatoria para un nuevo Constituyente; el 28 de mayo se lee en el Congreso el Plan de la Constitución Política formado por su comisión, y se ordena que se imprima y circule; el 12 de junio el Congreso aprueba el *Voto por el sistema de República Federal*; el 17 de junio el Congreso promulga las *Bases para las elecciones del nuevo Congreso.*

Entre la abdicación de Iturbide, el 19 de marzo, y la aceptación de la victoria federal en el voto del Congreso de 12 de junio y la promulgación el 17 de junio, de las Bases para la elección del nuevo Congreso, transcurren 90 días. "Todo demuestra que la decisión al margen del Congreso ya estaba adoptada", escribe Reyes Heroles.

Las decisiones de que se convoque un nuevo Congreso y que la nación sea una república federal se conjugan en una sola.

Si recordamos que la primera proclamación institucional expresa por la federación es la del Ayuntamiento de Guadalajara el 5 de mayo, seguida por la de la diputación provincial del día 9, y que el Congreso vota su conformidad el 12 de junio, verificamos el hecho de que la decisión se adopta, para un país de más de cuatro millones de kilómetros cuadrados, en menos de 40 días.

Es más que difícil imaginar qué proceso de simple imitación o qué plan concertado logra en esos 40 días la adopción de la república federal en México, más aún si ello ocurre en contra de lo previsto por los jefes de Casa Mata y de la oposición del Congreso. La cuestión no existe si consideramos la proclamación federal como la solución a un conflicto de intereses y aspiraciones reales de las provincias, que habían encontrado en las diputaciones provinciales, y en los ayuntamientos, las primeras instituciones propias y representativas por medio de las que se expresarán.

Las decisiones tomadas en juntas de cuerpos, con asistencia de vecinos, autorizan más la representación de las diputaciones como órganos de las provincias.

Registramos fechas de proclamaciones institucionales, mas la república federal se menciona desde antes. No nos referimos a documentos anteriores a la proclamación de Iturbide.

Recordemos aquí, entre los posteriores, el *Manifiesto de los liberales de Guadalajara*, de 6 de abril, en el que se pedía el apoyo del pueblo a la diputación provincial para que declarara "*la instalación de nuestro Congreso provincial, la estrecha alianza para el exterior con las demás provincias, y la absoluta independencia de ellas para lo interior*".

N.L Benson cita una carta del 10 de mayo de S.F. Austin a su hermano J.E.B. Austin. Desde Saltillo, Austin escribe que Ramos Arizpe le informó que Oaxaca, Guadalajara, Guatemala, Guanajuato y las Provincias Internas de Oriente "se habían declarado en favor de una república confederada, muy similar a la de los Estados Unidos", y esperaba que el Congreso daría su apoyo.[37] Según José Bravo Ugarte, las cuatro Provincias Internas de Oriente "se declararon independientes unas de otras y acordaron que se unirían a México en la forma de federación", mencionando el mes de abril como el del suceso, pero sin consignar las fuentes de su información. N.L. Benson, después de investigar en los archivos, declara que no encontró "datos completos sobre los acontecimientos" en las cuatro provincias entre el 1 de abril y el 29 de mayo, aunque sí de la diligente actividad de Ramos Arizpe para lograr "el establecimiento de alguna clase de junta", de las provincias.

La misma N.L. Benson cita otra carta de 11 de mayo de Austin al general James Wilkinson. Desde Saltillo, Austin informa: "El Congreso ha sido reconocido y el nuevo sistema completamente adoptado, con la condición de que estas cuatro provincias desean una república federada". Las diferencias que aún existen entre Saltillo y Monterrey no impedirán la unión "para sostener el Congreso y un gobierno federal", opina Austin.[38]

En esos días se efectúan las sesiones de una junta, presidida por Ramos Arizpe, con representantes de ayuntamientos de Coahuila para unificar la opinión con Monclova y Monterrey. Las sesiones concluyen el 23 de mayo al lograr su propósito, pero será hasta el día 27 cuando el Ayuntamiento de Saltillo, con la asistencia de vecinos, aprueba su pronunciamiento expreso por la república federal.[39]

En forma simultánea a las proclamaciones de Guadalajara, y evidentemente anteriores —lo comprueba la carta de Austin de 11 de mayo y la del doctor Mier de 23 de abril que citaremos—, Ramos Arizpe trabaja por la república federal en las Provincias Internas de Oriente.

En su carta de 23 de abril al Ayuntamiento de Monterrey, el doctor Mier informa, que ha pedido al Congreso la reinstalación de la Diputación de las Provincias de Oriente en Monterrey, y que cesen las juntas de gobierno que se han erigido en ellas. Cuando el Congreso se disponía a aprobar el dictamen favorable de la comisión, Mier comunicó haber recibido un oficio de una junta gubernativa —duda él si se trata de Saltillo o Monterrey— en el que se invita a las cuatro provincias a formar "un Estado soberano confederado con la República Mexicana", según sus palabras, por lo que solicitó se suspendiera la resolución para no comprometer al Congreso, pues la junta gubernativa no lo obedecería. El documento citado por Mier no se conoce, pero Mier escribe augurando: "en esto hemos de venir a parar según los pasos que van dando las provincias".

En la sesión del Congreso de 19 de abril, a la que se refiere Mier, se aprobó la reinstala-

[37] *Ibid.*, p. 167.
[38] *Ibid.*, p. 170.
[39] *Ibid.*, p. 170.

ción en Monterrey de la Diputación Provincial de Coahuila, Nuevo León y Texas, con los mismos individuos que la formaban.[40]

Mier en su carta menciona a Ramos Arizpe, "ciego como siempre por su Saltillo", a donde quiere trasladar el gobierno de las provincias.

Si no se tienen otras noticias documentadas en esas fechas sobre la supuesta proclamación federal de las Provincias de Oriente, nos podemos preguntar por qué Mier la hace pública en el Congreso, pero declarando que en sus informes no hay "*nada oficial*". De ninguna manera estimamos aventurada la suposición de que Mier posee informes privados sobre las diligencias de Ramos Arizpe en Coahuila y Nuevo León, como lo ratifica en su carta de 14 de mayo al mismo Ramos Arizpe —anterior a la proclamación federal del Ayuntamiento de Saltillo el 27 siguiente—, anunciándole la publicación de "las bases liberales de una república representativa federal", con "cuanto usted puede apetecer, todo discutido en mi casa".[41] Las corroboraciones no pueden ser más satisfactorias sobre las actividades de Ramos Arizpe.

El 9 de mayo el Ayuntamiento de Monterrey informaba a Mier que el 30 de abril se había empleado la fuerza pública para evitar que la ciudad se separase del gobierno de México, y que Ramos Arizpe había formado una nueva junta.[42]

* * *

Sigamos ahora algunos de los pasos de Ramos Arizpe.

Los acuerdos del Ayuntamiento y los vecinos de Saltillo el 26 y el 27 de mayo son: que el jefe del Poder Ejecutivo de la nación debe ser elegido nacionalmente y para un ejercicio temporal; que el gobierno de la nación sea el de una república federal, siendo los de las provincias independientes en su administración y economía interiores; que las cuatro Provincias Internas de Oriente formen un solo estado; que se circule lo aprobado a los ayuntamientos y al jefe político para que lo comunique al Supremo Poder Ejecutivo y al Congreso; que la Junta Provincial de Coahuila —que se supone no está disuelta— deberá ser informada en Parras de lo aprobado en Saltillo.[43]

Ramos Arizpe insiste en la proclamación federal, y logra que el 5 de junio se reúna en Saltillo una junta general citada por el Ayuntamiento, a la que asisten el "venerable clero secular y regular, oficialidad que se halla de guarnición en esta villa, empleados de la Hacienda Nacional y noble vecindario". Después "de una seria y detenida discusión", dice el acta, se mostró lo capcioso del Plan de Iguala de acuerdo con el que se formó la *monstruosa* Junta Provisional Gubernativa que dictó la convocatoria, tan ajena a los principios del derecho público, conforme a la que se eligió el Congreso, dividido desde el primer día en "tres Partidos inconciliables", que sólo atendieron a combatirse entre sí, olvidándose de los intereses de la nación y de las provincias.

Cuando a fines de marzo las provincias esperaban "fuese escuchada su voz y respetados

[40] *El Águila Mexicana*, 22 de abril de 1823.

[41] Alfonso Junco, *op. cit.*, p. 111.

[42] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 169.

[43] Documento en los Bexar Archives, citado por Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 171-172.

sus derechos", súbitamente fue *resucitado* el Congreso, contrariando las adhesiones al Acta de Casa Mata. Se le reconoció con prudencia como convocante de uno nuevo, pero el Congreso, olvidando el fin para que se le admitió, toma resoluciones "cuya decisión debe corresponder esencialmente a los Congresos legislativos de las provincias que van a federarse según la voluntad de ellas bastantemente manifestada, de suerte que parece querer preocupar el sistema mismo de estados federativos".

No obstante, convencidos de la necesidad de mantener la unión nacional para conservar la independencia y la libertad, los municipios de Saltillo y Nueva Tlaxcala harán todos los sacrificios, y reconocen el Supremo Poder Ejecutivo como provisional y al Congreso como convocante del nuevo constituyente "bajo los auspicios de un gobierno de República federada", conservando la religión católica con exclusión de otras. Se reconocen las autoridades de las cuatro provincias, y se "declara estar en el caso de darse un gobierno interior e independiente de las demás... pero enlazado sabiamente para sus relaciones generales y exteriores con las demás provincias mexicanas a fin de formar perpetuamente una Nación grande y poderosa". Se pide al jefe político, Felipe de la Garza, que se ponga al frente de las cuatro provincias como depositario del Poder Ejecutivo en calidad de *gobernador*, hasta que se reúna el Congreso provincial. Se le pide que desde luego promueva la convocatoria del Congreso de las provincias para que forme "una Constitución de un solo estado compuesto de las mismas cuatro".[44]

El 8 de junio, De la Garza contesta desde Monterrey al Ayuntamiento de Saltillo. Informa que "el mismo día que V.S. agitaba cuestiones tan interesantes", se reunió en Monterrey una junta general a la que asistieron la diputación provincial, el cabildo sede vacante, el vicario capitular, ciudadanos y oficiales de la guarnición. En ella se aprobó: "1o. Que estas provincias adoptan y se declaran por la forma de gobierno de República federada, componiendo uno, o más estados libres, independientes y soberanos, según acuerden entre sí las mismas provincias, que será o serán parte de las demás que compongan la gran nación mexicana, conforme a la Constitución federativa que se forme". En tanto, en el punto segundo reconocen al Congreso como convocante en los términos del artículo 2 del decreto de 21 de mayo del propio Congreso. Se reconoce también provisionalmente al Supremo Poder Ejecutivo.[45]

Como N.L. Benson lo indica, De la Garza había llegado a Monterrey el 22 de mayo, después de que el gobierno lo había nombrado en México jefe político de las Provincias Internas de Oriente, a gestiones del doctor Mier para contrarrestar la influencia de Ramos Arizpe.

No entramos en la duda sobre si hubo en Monterrey una junta el 27 de mayo. Consta el acta del 5 de junio, que se publicará en *El Sol* de 3 y 4 de julio. El documento ofrece sorpresas. A la junta del 5 asisten la diputación provincial, que invita, el ayuntamiento, el cabildo eclesiástico, el vicario capitular, el rector y catedráticos del seminario, la oficialidad de la guarnición y vecinos de la ciudad, para deliberar "sobre la necesidad de hacer un pronunciamiento solemne sobre la forma de gobierno adaptable en estas provincias, tomando en consideración las ocurrencias de la provincia de Nueva Galicia". Se tiene a la vista el decreto del Congreso de 21 de mayo ordenando la convocatoria del nuevo constituyente, y que el Congreso actual se ocupe de la organización de la hacienda, del ejército y de la administración de

[44] *El Águila Mexicana*, 1 y 2 de julio de 1823. Citada por Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 172-173.

[45] *El Águila Mexicana*, 4 de julio; Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 173.

justicia, debiendo publicarse las Bases de República Federal preparadas por su comisión. En la junta se tienen a la vista los pronunciamientos de Saltillo y otras villas de Coahuila.

Dijimos que el documento del 5 de junio ofrece sorpresas, y lo son que sus resoluciones se toman a partir de las proposiciones que hacen el chantre de la catedral y el vicario capitular para que conforme al voto conocido de los pueblos "se pronuncie solemnemente el gobierno de República federada", como el "más adaptable a las circunstancias de estas provincias". El rector del seminario presenta una extensa iniciativa en 14 puntos. En ella se habla, en el punto primero, que lo dilatado del Anáhuac impone para su felicidad que se le divida "en estados soberanos de mediana extensión", unidos y "refundiendo su soberanía en un Congreso general para todo y sólo aquello que concierna a la comunal existencia, libertad, duración, defensa interior y resolución con los otros grandes estados americanos y europeos". El rector prevé que las cuatro provincias se vean obligadas a obrar por sí, para lo que deben tomarse las medidas más apropiadas, completando la diputación provincial, organizando la milicia, comunicándose con las demás provincias y ayuntamientos para obrar unidos. Preocupa al rector la facción borbónica en México y Veracruz, y desearía al futuro Congreso ajeno a ella.

El alcalde de Monterrey menciona "que la Excma. Diputación Provincial tiene hecho acuerdo sobre la conveniencia que era hacer un pronunciamiento solemne de gobierno federado", y abunda en lo expuesto por el rector del seminario y el representante del cabildo eclesiástico.

Sin disidencias, la junta aprueba el pronunciamiento solemne por la república federal, con la que ya se conformó el Congreso, y espera conocer las bases de ella que éste ofrece. Se reconoce a las autoridades de México que no se oponen a lo resuelto.

N.L. Benson menciona otra junta en Monterrey el 8 de junio, de la que no encontró el acta pero sí referencias a ella, y al "plan sobre las nuevas bases o la constitución de aquellas provincias", las que Mier declara haber recibido.

* * *

En carta de 5 de julio a Bernardino Cantú, después de elogiar el acta de 5 de junio, Mier manifiesta su asombro al conocer una circular de la Diputación Provincial de Monterrey, "invitando a las provincias de su comprensión a un congreso o asamblea de las tres para constituirse en estado soberano, conforme a la federación de los Estados Unidos", estado según él "inventado por Ramos Arizpe". La preocupación de Mier por las actividades de Ramos Arizpe es grande. "¿Creerá usted que con el fin de sacar de esas provincias a Ramos —confía a Cantú— me lo propusieran los ministros para el Poder Ejecutivo? Primero me harían pedazos, les respondí".[46]

El desasosiego de Mier, además de los motivos de su provinciana rivalidad con Ramos Arizpe, coincide con el del gobierno de México por los sucesos en Yucatán, Guadalajara —que se proyectaron en el centro del país—, y la aventura bajo una bandera federalista del relegado e inquieto general Santa Anna en San Luis Potosí. Los pronunciamientos federales son también una lucha por el poder entre el grupo gobernante desde México, centralista y que ce-

[46] Alfonso Junco, *op. cit.*, pp. 121-123.

de obligado ante las provincias, y los grupos provincianos que aspiran a gobernar en sus territorios y a intervenir también en la autoridad nacional, a la que parecen no tener acceso. Se podría hablar de lógicas y contrarias motivaciones. Pero ello involucra legítimas y más lógicas aspiraciones a participar en el ejercicio del poder, en una concepción que rompa el molde centralista heredado del secular régimen colonial.

Lo que Mier escribe a Cantú lo reitera el mismo día a la Diputación Provincial de Monterrey: el acta de Saltillo, informa, se publicó "en el periódico senil llamado *El Águila*, redactado por Navarrete, ex ministro de Iturbide, y el cual se ha constituido en adalid de facciosos". La de la junta de Monterrey el 5 de junio, en cambio, se mandó publicar "en el juicioso periódico llamado *El Sol*". Ahora Mier se inquieta ante lo resuelto en Monterrey el 8 de junio "adoptando un gobierno tan federado como el de los Estados Unidos", reuniendo la asamblea de las provincias que retendrá la soberanía y dejando al Congreso solamente los asuntos de interés general, no puede menos que condenarlo.

El Congreso se prepara, escribe Mier, a ampliar las facultades de las diputaciones provinciales que concedía la Constitución española.[47]

El 14 de julio se promulgará el decreto que Mier anuncia el 5. Se faculta a las diputaciones para vigilar la aplicación de los caudales públicos y a suspender a los empleados de Hacienda que incurran en abusos. Podrán presentar al Supremo Poder Ejecutivo ternas de todos los empleos políticos, de Hacienda y de la judicatura, excepto para las audiencias, jefaturas políticas y sus secretarías. No podemos aludir siquiera al debate del Congreso. La medida es tardía y nada satisfactoria, cuando desde abril las diputaciones al adherirse al Acta de Casa Mata habían asumido el gobierno de las provincias.

Mier en su carta da un argumento no infundado. Si el Congreso está reconocido como convocante, no puede constituir a la nación, pero "tampoco las provincias tienen los poderes para irse constituyendo", antes que el nuevo Congreso lo haga para toda la república.

El 12 de julio escribe de nuevo Mier a Cantú. Las noticias que da son: Santa Anna se ha sometido; Querétaro, Valladolid, Zacatecas y gran parte de Guadalajara y Oaxaca no son rebeldes; en 15 días todo estará sujeto al gobierno, "y no piensen Garza y Ramos —anuncia— que sus provincias han de darnos la ley. No está el gobierno tan impotente como ellos piensan".[48]

El ardiente republicano que es Mier no percibe que se halla frente a una revolución republicana de la que él fue precursor.

Por su parte Carlos María de Bustamante, que comparte sus ideas ante la situación planteada por las provincias, escribe en su *Diario* el 25 de junio que Garza fue seducido de nuevo por Ramos Arizpe y se ha decidido en Monterrey por la federación. De Valladolid, que parecía razonable, duda Bustamante al ver en su conducta "la mano hipócrita que desde México le ha dado impulso secreto" —¿la de Michelena?—, y a Valladolid se debe "ese Congresito que aparece ahora en Celaya, de cuatro Provincias, y si nos descuidamos, lo veremos en breve pronunciarse soberano, verdadero, legítimo, federado, etc., y apoyar sus pretensiones con un ejército".

[47] *Ibid.*, pp. 124-127.
[48] *Ibid.*, p. 128.

El Congreso ha proclamado la forma federal y promulgado el 17 de junio las Bases para las elecciones del nuevo Congreso. Mas el conflicto con las provincias no queda resuelto. Desde el 25 de junio y en sesión secreta del Congreso, Pablo La Llave, secretario de Justicia, opinó que para detener la inquietud se debía adoptar "una acta federal entre ésta —la capital— y las provincias", como anota Bustamante en su *Diario.* La iniciativa pasó a la comisión encargada de examinar los orígenes y medios para contener la conmoción.

Bustamante, entre los antiguos borbonistas, los iturbidistas y los federales, escribe en su *Diario* el mismo día 25: quienes "pusieron el espantajo, van ahora a espantarse con él, como son Tagle, Fagoaga, y otros... Ahora dicen que el gobierno no debe dar impulso a la revolución, y yo opino, que cuando ésta es inevitable, debe ponerse a la cabeza de ella...".

La proposición del gobierno a través del secretario de Justicia merece recogerse. En unas líneas de exordio se reconoce que es el sistema federal al "que evidentemente tienden los estados de nuestro territorio", y en el que deben "igualarse en lo posible en cuanto a sus goces y deberes". El término *estados* se emplea por vez primera en documento institucional dentro del Congreso. Éste debe, se dice, "dar una nueva prueba y confirmación la más solemne y perentoria de que respeta y sigue el impulso de la opinión general de los pueblos", y recomienda "por vía de providencia interina" las siguientes resoluciones:

"1. Se instalará en cada provincia una legislatura, administración, o congreso provincial.

2. Se compondrá éste de trece individuos elegibles del modo siguiente.

3. Las juntas electorales que se reunirán para el nombramiento de diputados del futuro Congreso, serán las que al mismo tiempo nombren estos trece individuos a pluralidad absoluta de votos".

Los cuatro puntos siguientes coinciden con el decreto de 14 de julio siguiente a que ya nos referimos.[49]

En la iniciativa del gobierno se adelanta el establecimiento de los que llama *legislaturas o congresos para cada provincia.* Cualquiera que sea la intención mediatizadora del gobierno, no sólo se está ofreciendo multiplicar los órganos representativos a través de los que ellas se han manifestado en la que es una revolución federal. El hecho que el Congreso haga suya parcialmente la iniciativa, después de ser publicada, alienta las demandas de las provincias, reconocidas al hablar el gobierno de *legislaturas* o *congresos,* que por otra parte las frustra en el decreto del 14 de julio.

* * *

Los acontecimientos, como en toda revolución, se suceden confusamente pero ya en una dirección cierta. El gobierno nacional —Supremo Poder Ejecutivo y Congreso—, desde la capital surge súbitamente con la derrota del imperio de Iturbide, sin un proyecto para el país pero sin otra alternativa que la republicana. Tan súbitamente como él, las diputaciones provinciales, más conformes con el Plan de Veracruz que con el de Casa Mata al que se adhieren, asumen el gobierno de sus jurisdicciones, apoyadas por los cuerpos civiles, militares y eclesiásticos. La convocatoria de cuerpos y vecinos, por las diputaciones en sus capitales y por

[49] *El Sol,* 27 de junio de 1823.

los ayuntamientos en otras poblaciones, da a sus resoluciones un carácter más democrático e inmediato, ratificando además su origen representativo y ampliando sus funciones más allá de lo establecido en la Constitución que las instituyó.

Frente a las instituciones provinciales, el Congreso tiene también un origen electivo en el que funda su restablecimiento como representación nacional, aunque no debemos olvidar las censuras a su forma de elección. En todo caso, el Congreso no ha recibido esa suerte de ratificación plebiscitaria que sanciona a las diputaciones provinciales y las redime de su anterior iturbidismo. La cuestión se plantea. En los mutuos reconocimientos: Congreso a las diputaciones provinciales y diputaciones provinciales al Congreso, ¿cuál tiene una más actual representación popular, para emplear un término impreciso pero no impropio?

El Congreso no reconoce siquiera a las diputaciones, da por supuesta su existencia. Son las diputaciones las que limitan su reconocimiento del Congreso como convocante de uno nuevo, en tanto el Congreso pretende que ellas se mantengan en los límites constitucionales que las instituyeron.

Cuando el Congreso declara nula la proclamación de Iturbide e insubsistentes el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, se instaura a sí mismo como órgano revolucionario. Cuando las diputaciones provinciales se adhieren al Acta de Casa Mata, asumen el gobierno de sus jurisdicciones, restringen su reconocimiento del Congreso y proclaman la federación, se instauran también como órganos revolucionarios. En una situación preconstituyente, las múltiples legitimidades no se fundan más que en sí mismas, cualesquiera que sean sus argumentos circunstanciales.

Como en toda revolución, se plantea el conflicto de una doble soberanía pero ya no entre la monárquica y legal del antiguo régimen y la revolucionaria de la nación. Rota la condicionalidad impuesta en la consumación de la independencia, las dos soberanías en conflicto son las del Congreso, que ha desconocido la *legalidad* anterior, y las de las provincias, entes políticos que postulan como tales su participación en el acto de constituir a la nación en un pacto federal.

Ante la incorporación de iturbidistas a las proclamaciones federales —y de iturbidista se acusa a la de Guadalajara—, Reyes Heroles se hace la pregunta: "¿Quién usa a quién?" Porque si los iturbidistas animan el federalismo de Guadalajara, no son iturbidistas hombres como Prisciliano Sánchez y los autores del *Manifiesto de los liberales* de 6 de abril, acerbo documento republicano en contra del "*libertador* de antífrasis —como se le califica— que muy luego acabó en la opresión de sus hermanos".

Si en Guadalajara agitan los iturbidistas, en las cuatro Provincias Internas de Oriente Ramos Arizpe se halla frente al iturbidista brigadier Gaspar López. N.L. Benson sigue los pasos de Ramos Arizpe hasta donde lo permiten las comprobaciones documentales. Nos remitimos a las precisiones en su obra.[50]

Alamán, centralista, y coincidiendo con Zavala, contempla a los republicanos divididos en centralistas y federalistas, y sumados a éstos los borbonistas y en el Ejecutivo, Michelena, señalamos nosotros. Los iturbidistas se unen a los federales "por odio a los que habían hecho bajar del trono a Iturbide, y por esta causa —afirma Alamán— vinieron a

[50] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 97, 103, 169-176, principalmente, y *passim*.

incorporarse en el partido liberal más exagerado, los que profesaban las opiniones más contrarias a él". Pero el mismo Alamán acusatoriamente dirá: "La máquina poderosa de destrucción —repetimos la cita— que se puso en movimiento contra el gobierno, fue las Diputaciones Provinciales, alentadas con el estímulo que se les había prestado en Puebla".[51] Si los iturbidistas esperaban que la revolución daría oportunidad al regreso de Iturbide, como Alamán lo denuncia, evidentemente no son ellos los autores del proyecto republicano federal.

* * *

El segundo proyecto constitucional se formará lejos de toda influencia iturbidista, y su autor, interesado pero no involucrado en los sucesos, será el virginiano S.F. Austin, que como testigo dispone de tiempo para elaborarlo. El documento lo fecha simplemente en mayo y en la ciudad de Monterrey. Austin redacta el documento después de hablar con Ramos Arizpe el 8 y 10 de mayo, como precisa N.L. Benson, sin que antes de esos días hubiese "mencionado una república federada".[52] El proyecto es muy probablemente de junio, como se presume en nota puesta al documento en la edición de *The Austin Papers*, y de una carta de Austin fechada el 28 de mayo.[53] N.L. Benson también considera el proyecto de junio.

Inspirado por Ramos Arizpe, no podemos conjeturar hasta dónde Austin se propone en su proyecto coincidir con aquél.

Para Jorge Gaxiola la influencia de Austin en México comenzó desde su primer proyecto, que se tradujo parcialmente según sus archivos, inclinándolo a pensar "que cuando menos esa versión castellana fue utilizada por los diputados mexicanos de la época". Gaxiola va aún más lejos. "Es indudable —escribe— que una de las fuentes de inspiración de Don Miguel Ramos Arizpe fue el trabajo que presentara Austin".[54]

Reyes Heroles en la satisfactoria verificación que hace de los precedentes documentales, en primer término el del *Pacto Federal de Anáhuac* de Prisciliano Sánchez y las *Reflexiones sobre el Acta Constitutiva de la Federación* de Francisco García, y la del proceso de elaboración colectiva de ésta, concluye que tales precedentes desvirtúan "por sí aquellas explicaciones que ven el origen del Acta Constitutiva en Austin".[55] La rigurosa aportación de Reyes Heroles en este punto, como en otros, replantea el examen de nuestra historia institucional y de las ideas políticas y económicas.

Gaxiola ve en el proyecto de Austin una fuente de inspiración de Ramos Arizpe, pero no considera lo que a su vez pudo alentar y sugerir Ramos Arizpe a Austin, recién naturalizado como mexicano, y quien va a las Provincias de Oriente después de conocer y recomendado por el doctor Mier. En la ciudad de México, Austin prevé una república central y trabaja un detallado proyecto de constitución, al que ante la abdicación de Iturbide no da fin en su de-

[51] Lucas Alamán, *op.cit.*, pp. 706-707.

[52] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 167-168.

[53] E. Barker, *op. cit.*, tomo I, p. 656.

[54] F. Jorge Gaxiola, *La crisis del pensamiento político*, México, 1956, pp. 140, 144.

[55] Jesús Reyes Heroles, *op. cit.*, p. 389.

talle. En el norte y después de hablar con Ramos Arizpe elabora su segundo proyecto, ahora para una república federal, más conforme a su formación y a sus ideas.

El documento de Austin, como los de las comisiones del Congreso y el de Prisciliano Sánchez, no es la exposición puramente teórica de sus convicciones, sino el proyecto de una república federal *posible* en México. Como preámbulo reproduce gran parte de una carta fechada el 28 de mayo en Monterrey, sin destinatario nominal e iniciada con el plural "Amigos míos", a los que informa su llegada y narra reflexivamente su viaje, haciendo censuras a la herencia colonial en el México independiente.

El texto que recibe Ramos Arizpe es una incompleta traducción del original en inglés que hace Sebastián Mercado, hermano del insurgente José María Mercado, cura de Ahualulco, muerto el 31 de enero de 1811 en el puerto de San Blas, después de la derrota de don Miguel Hidalgo en Puente de Calderón. El hermano de Mercado regresa de su exilio en Nueva Orleáns, y Austin lo presenta y recomienda.

En nota previa se consigna que el proyecto fue entregado a Ramos Arizpe y a Felipe de la Garza. Austin se siente obligado a opinar sobre la forma de gobierno que debe adaptarse, y sus *bases generales* las toma del sistema de Estados Unidos, "cuyos benéficos resultados son ya evidentes por la feliz experiencia de muchos años". Los mismos bienes pueden disfrutarse en México, que ha luchado "para romper el velo especioso, con que una política pérfida quería cubrir el sistema de monarquía moderada, el más absoluto abominable despotismo".

Ninguna forma de gobierno existe más simple que la federal, en la que *la ley gobierna*, fundada en el consentimiento general de los pueblos, y en la que "la responsabilidad de los agentes públicos es absoluta y efectiva; y el recurso para reparar abusos y agravios, es directo y pronto, sin los enredos de aquel laberinto sin fin de consejos de Estado, Ministros, favoritos, ayudantes imperiales, y todos los ridículos apéndices de un tren asiático...".

Para Austin, monarquía y despotismo son uno. La nación se ha pronunciado por la república y sólo se debate si será central o federal. En la polémica, como en su apología republicana, Austin no aporta argumentos nuevos. El centralismo, afirma, es por su naturaleza aristocrático al unir todos los poderes en un punto y en pocas manos, bajo la influencia de los cuerpos privilegiados de la capital. La ciudad de México sería lo que Roma en su república, "Señora absoluta de las provincias", en una "coalición entre el clero, los capitalistas de México, y el partido que se halle apoderado del gobierno". No vamos a resumir siquiera la exposición de Austin, que precede a su proyecto en el segundo volumen en que se reproduce su original manuscrito.

Austin coincide o recoge argumentos expresados ya por las provincias: la nación "por lo que hace a su pacto social —afirma—, se halla en el estado natural, y por lo tanto libre para constituirse". El primer paso es atender las *necesidades locales y urgentes*, lo que únicamente se puede lograr "estableciendo un gobierno interior en cada provincia como un Estado independiente", y al mismo tiempo instituir el general de la nación. Su proyecto satisface, según él, ambos requerimientos. Adoptado por las provincias y comunicado al gobierno de México, el Congreso obrará de acuerdo con las nuevas instrucciones, y al declarar la nueva forma del Estado lo hará también sobre la organización de cada provincia conforme al proyecto. Aceptado el proyecto, "las constituciones internas de cada provincia convendrían por lo regular en los poderes que se delegasen al gobierno Nacional y así —para Austin— no habría sobre esta

materia divergencias de opiniones". El próximo Congreso al reunirse estaría "absolutamente sujeto a las instrucciones que éstos —los pueblos— le hayan dado".

Austin no concibe al Congreso ejerciendo facultades ilimitadas, y la voluntad de los pueblos no puede expresarse mejor que en las constituciones de las provincias, como lo propone en su *Plan de las bases orgánicas y fundamentales para el establecimiento de una República federada en el Anáhuac.*

El plan traducido se expone en 25 artículos. El concepto de federación es claro y radical: cada provincia —estado— es libre e independiente con todas las facultades propias de su soberanía (art. 2). Para su prosperidad y defensa las provincias se unen bajo el sistema de república federada formando una nación. La religión de ésta es y será la Católica Romana, que, se protegerá por las leyes sin permitir otras (art. 3). Cada provincia "delega una parte de su propia soberanía" como se especificará en la Constitución, encargando el ejercicio de los poderes a representantes elegidos por el pueblo para integrar el gobierno nacional (art. 5). Cada provincia conserva los poderes no delegados en el acta de confederación (art. 6). Los poderes delegados se dividirán en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes y coordinados entre sí (art. 7).

Los párrafos dos, tres, cuatro, cinco, siete y once del artículo 9 del proyecto están directamente tomados de las secciones 2 y 3 del artículo II de la Constitución de Estados Unidos, en la que se enumeran las facultades del Presidente de la República. El veto suspensivo a las leyes —párrafo sexto del mismo artículo del proyecto—, del párrafo tercero de la sección 6 del artículo I de la misma Constitución. El párrafo octavo del artículo del proyecto sobre la facultad ejecutiva para declarar la guerra, hacer la paz y concertar tratados de alianza con otros países, es una versión de las fracciones tercera y décima del artículo 171, en relación con la séptima del 131 y la quinta del 172 de la Constitución española. El párrafo noveno del proyecto corresponde a las fracciones octava y novena del artículo 171 de la misma Constitución, en la que se concede al rey facultad para mandar las fuerzas terrestres y marítimas. El párrafo doce lo toma Austin de las fracciones undécima y duodécima también del artículo 171 español. La fracción once del proyecto es versión de la fracción decimotercia del mismo artículo 171.

En la institución del Ejecutivo republicano, Austin no deja de acudir a una fuente como la española.

No obstante el bicamerismo federal del proyecto de Austin, la enumeración de facultades del Congreso, sin apartarse del modelo anglosajón podríamos considerarla en sus 25 párrafos —frente a los 18 de la Constitución norteamericacana— más próxima al detallismo de la española. Incluso adopta algunas disposiciones de ésta, como al establecer que las contribuciones y derechos decretados por el Congreso se prorrateen entre las provincias, sistema sancionado en las fracciones decimotercia y decimoquinta del artículo 131 de la Constitución española. Coincide también en alguna tan peculiar como al facultar al Congreso para dictar "todas las medidas necesarias para conservar la salubridad, seguridad y tranquilidad Nacional", que en el código español se expresa así: "Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del reino".

En esta parte relativa a las facultades del Congreso, Ramos Arizpe anota al margen: "me parece que se omitan estos artículos". Los artículos —párrafos— atribuyen al Congreso la fa-

cultad de "declarar, definir y limitar el poder que el Papa y los concilios eclesiásticos puedan ejercer sobre las Iglesias y clero de esta Nación"; corregir los abusos de la Iglesia y fijar salarios de los obispos y arzobispos. Comprende en la omisión la facultad de presentar para los obispados y arzobispados, suprimir cualquiera sociedad religiosa, y dotar a las que estableciere con fondos públicos, así como disponer de fondos y fincas eclesiásticos para destinarlos a usos públicos, facultad nada extraña al liberalismo español y sí ajena al norteamericano, al igual que la de "reformar los abusos" del clero.

Las atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia de la nación proceden directamente de la Constitución de Estados Unidos, esbozando Austin el principio del juicio constitucional reiterando lo expuesto en su proyecto de marzo.

Es al tratar del régimen de las provincias donde Austin acentúa su federalismo.

> Hay ciertos poderes y derechos naturales pertenecientes al Pueblo de cada Provincia que no se pueden confiar al gobierno general —expresa en una declaración—, como son el derecho de formar una constitución y leyes para el gobierno interior [...] el derecho de elegir su gobernador y a todos los oficiales civiles y de la milicia de la Provincia; de establecer los tribunales que juzga necesario [...] la libertad absoluta de imprenta y de palabra; el derecho de cultivar y vender sin restricción alguna todas las producciones [...] el derecho de admitir la emigración y establecimiento de extranjeros en la provincia sin ninguna limitación.

Ramos Arizpe en nota al margen incluye "el derecho de hacer todas las leyes así civiles como criminales que sean necesarias para el mejor gobierno y adelantamiento de la provincia". Y de los derechos provinciales suprime el "de presentar para todos los empleos eclesiásticos de las provincias excepto para obispos y arzobispos", escribiendo al margen: "omítase el paréntesis", que pone al texto de Austin.

Austin propone que se declaren *propiedad absoluta* de las provincias las tierras vacantes, las que pueden ser vendidas por los cuerpos legislativos provinciales, pero reconoce al gobierno general el derecho a disponer de las necesarias para fortificaciones y otros fines de interés nacional.

Para Austin las constituciones de los estados deben contener: una declaración de derechos; que el gobierno es democrático representativo; la división de poderes, el Ejecutivo y el Legislativo —dividido en dos cámaras—, de origen electoral, y el Judicial elegido por el Legislativo. Al Ejecutivo le concede el veto suspensivo a las leyes locales. Adopta en el gobierno de las provincias el modelo del nacional.[56] Esta parte del proyecto de Austin no aparece en la traducción de Mercado anotada por Ramos Arizpe.

La posibilidad considerada por Austin para que se puedan unir una o más provincias formando un estado, sin perder su derecho para separarse en el futuro con el mismo carácter de estados, es una versión del párrafo segundo de la sección 3 del artículo IV norteamericano. Austin parte en México del hecho de que las diputaciones provinciales se integran con diputados de varias provincias, y que éstas reclaman tener diputaciones propias, o bien, como en Coahuila, que se intenta reunir un Congreso de las cuatro de Oriente.

[56] E. Barker, *op. cit.*, pp. 665-666.

En esta parte del proyecto Ramos Arizpe anota al margen: "juzgo muy importante la pronta impresiva de este plan". El interés de Ramos Arizpe en el proyecto de Austin consta. Y que además estima a S.F. Austin calificado para opinar sobre la situación, como muy atento testigo que fue de ella en México. No es necesario conjeturar que Austin le comunicó su proyecto de marzo para una república central. Pero lo que en mayo y junio urge no es una Constitución acabada, sino las bases de una federal, y Austin trabaja en ellas.

En su proyecto, en realidad *Bases* como su autor lo titula, se propone que las provincias que lo aprueben lo informarán al Supremo Poder Ejecutivo para que éste comunique los documentos al Congreso. Ramos Arizpe agrega al margen que las provincias "procederán luego a formar su gobierno y Constitución interior observando las bases indicadas en este plan lo que se considerará provisional hasta que se publique y apruebe la Constitución Nacional".

Las *Bases* de Austin prevén que el Congreso al conocer la voluntad de las provincias confirmará la forma de gobierno elegida, decretando que lo que hubieren hecho para formar sus constituciones y gobiernos propios expresa la voluntad general si las constituciones se uniforman en cuanto ve el plan. Las constituciones se presentarán al nuevo Congreso Constituyente "para su inteligencia y gobierno en la formación de la Constitución nacional". Una vez aprobada por el Congreso, la Constitución deberá ser sancionada a su vez por cuando menos las dos terceras partes de las provincias para ser vigente. Austin adopta en esto el modelo histórico que sancionó la Constitución de Estados Unidos, y Ramos Arizpe se aparta de él, como hemos visto, considerando a los gobiernos y constituciones de las provincias como provisionales.

Austin concluye sus *Bases* con una exhortación a emplear medios persuasivos y no la fuerza, por lo que ninguna provincia que se adhiera al plan reclutará tropas ni empleará procedimientos hostiles. Únicamente en el caso de resultar inútiles las *medidas pacíficas y de reconciliación*, será "justo y muy necesario —a las provincias— la defensa según los principios incontestables de la ley de la naturaleza". Ramos Arizpe no hace al margen observación alguna. ¿Significa que aprueba el texto? Quizá no debemos olvidar que las notas de Ramos Arizpe se refieren sólo a la parte orgánica de las *Bases*.

Más bien debemos preguntarnos qué aporta Austin, como principios fundamentales, al federalismo del Acta de Saltillo de 5 de junio, e incluso hasta dónde las proclamaciones de Saltillo de 26 y 27 de mayo y la de 5 de junio en Monterrey alentaron a Austin en su documento.

En todo caso, los pronunciamientos federales en las Provincias Internas de Oriente no aparecen como secesionistas, lo que sí podemos decir de la conclusión de Austin.

5

EL PROYECTO REPUBLICANO FEDERAL, II
GUADALAJARA. PRISCILIANO SÁNCHEZ

Las adhesiones de 16 provincias al Acta de Casa Mata, entre el 2 de febrero —Veracruz— y el 15 de abril —Texas—, se suceden apenas en diez semanas. Cuando el Congreso acuerda que se imprima y circule el Plan de la Constitución Política, primer esbozo federal el 28 de mayo, únicamente en Guadalajara se ha proclamado expresamente la república federal. La noticia de la proclamación de Saltillo el día 27 llegará después. Pero consta que ya el 23 de abril el doctor Mier, desde México, comunica al Ayuntamiento de Monterrey que deben cesar las juntas que se forman en las Provincias Internas de Oriente, y que tiene noticias de que se proyecta formar en ellas "un estado soberano confederado con la República Mexicana".

Los informes que se reciben en México y la interpretación de las adhesiones a Casa Mata, y de las demandas para que se convoque un nuevo Congreso, son coincidentes y llevan al Congreso a aprobar el 28 de mayo que se imprima y circule el Plan de Constitución Política formado por su comisión, y el 12 de junio el voto por el sistema de república federada, la que "no se había declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para un nuevo Congreso que constituye a la nación", como se dice en él.

Citamos ya la resolución de la Diputación Provincial de Yucatán de 9 de abril por la convocatoria de un nuevo Congreso, y la representación de los comisionados de las provincias al Congreso del 18 siguiente. A ellas se suman, de las citadas, la de la diputación provincial de Puebla de 23 de abril, la de 7 de mayo de Valladolid, y la del Ayuntamiento de Querétaro a su Diputación Provincial el 13 de mayo, todas en favor de la convocatoria de un nuevo Congreso y no influidas por la proclamación federal de Guadalajara del 12 de mayo.

Como lo expresa la representación de la Diputación Provincial de Puebla, las provincias poseen derechos indisputables: "revisar o examinar la Constitución, porque hallándose entonces —en 1821 como ahora— cada provincia en estado de naturaleza, sin ley preexistente que obligase a una a reconocer superioridad en las otras, podía y debía deliberar sobre los términos de su primera estipulación, que no es otra cosa la estipulación de un estado, para adherirse a ella o separarse...".

No se escribe la palabra federación, pero interpretar con otro sentido lo que Puebla expresa es desnaturalizar lo más directo y obvio de sus palabras. Los términos en los que las provincias demandan la convocatoria de un nuevo Congreso son unánimes. El pacto constitutivo de la nación debe ser concertado por ellas como entidades políticas preexistentes. Como tales, son las provincias, no los individuos, quienes están en *estado de naturaleza.* Cualquier argumento sobre que esto es una ficción será lo que menos importa. La ficción es adoptada y los acontecimientos, presididos por ella, se sucederán hasta integrarse en la for-

ma que les es propia. Guadalajara, Saltillo, Oaxaca y Yucatán nominarán esa forma sin previo acuerdo.

En el Congreso no es la proclamación de Guadalajara la que se atiende. El evidente significado de las representaciones en favor de un nuevo constituyente, los informes recibidos, y el federalismo que profesan muchos de sus diputados, son los que obligan a la adopción de él.

Al referirnos a la institución de las diputaciones provinciales señalamos cómo las seis concedidas a la Nueva España en el primer periodo constitucional aumentaron, a partir de la restauración liberal de 1820, hasta 18 en 1822. También señalamos que en la integración de las diputaciones se eligen diputados por cada una de las 23 provincias que se mencionan como tales desde 1813, y que en el Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 1824, se mencionarán 22 provincias como partes de los 17 estados, y además los territorios de Colima y las Californias.

En 1820, al restaurarse la Constitución española, la Diputación Provincial de Nueva España, con residencia en la ciudad de México, se integra con diputados elegidos por siete provincias: México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, y Querétaro. Para noviembre de 1822, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz, han sido reconocidas con derecho a tener diputaciones provinciales.

No cabe preguntar si se ha venido creando bajo el régimen constitucional una conveniente división del territorio para fines de administración, o si en ella la existencia real de las provincias ha sido reconocida. Las diputaciones provinciales, instituciones de gobierno limitado pero propio, satisfacen, también limitadamente, los intereses de las provincias, los alientan y se convierten en su primer órgano representativo.

Después del Acta de Casa Mata los jefes militares acuden invariablemente a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales para legitimar sus proclamaciones. Una vez adoptada el Acta de Casa Mata no son los jefes militares —excepto en Oaxaca— los que demandan la convocatoria de un nuevo Congreso y los que proclaman la república federal. La iniciativa, al reunirse las juntas de cuerpos y vecinos —y desde antes—, pasa a los cuerpos civiles, y de éstos los que ratifican y mantienen su carácter representativo y dirigen los acontecimientos son las diputaciones provinciales. El hecho de que las diputaciones están inermes y de que las fuerzas militares apoyan sus decisiones corrobora el origen y la conducción civil de la revolución federal. El antiguo ejército trigarante está al servicio de ella. Es entonces cuando la revolución rompe "la máscara —monárquica— de la escena precedente" y aparece su rostro reconocible.

Uno de los más incisivos autores de nuestros días escribe que "en realidad, la conciencia revolucionaria siempre se ha manifestado solamente en situaciones revolucionarias".[57] En la consumación de la independencia política esa *situación* se mediatiza al suplantarse la insurgencia. En Veracruz y Casa Mata —aunque no sea el propósito en ésta— *la situación* se restaura, y el colonizado ya independiente se enfrenta a su primera posibilidad revolucionaria. Es cierto, la conciencia revolucionaria se manifiesta en la situación revolucionaria, o en ella se toma conciencia y el hombre descubre sus propias posibilidades como posibilidades comunes. Su historia deja de ser individual y sus convicciones dejan también de ser privadas.

[57] Herbert Marcuse, *Contrarrevolución y revuelta*, México, 1973, p. 16.

¿Cuál es ésa o cuáles son esas posibilidades? Decir que la posibilidad la verifican los acontecimientos mismos no es en sí falso, pero su verdad parcial es engañosa porque el significado de los sucesos no es unívoco. Los hombres participan en la revolución por motivos y proponiéndose fines a veces contradictorios, cuando no son los más simples y neutros de subsistir o ingresar en el poder. No son los motivos y fines de Ramos Arizpe en el norte los mismos del general Luis Quintanar en Guadalajara, como no son los mismos en el Congreso los de Antonio José Valdés y los de Gómez Farías y de Prisciliano Sánchez. El punto de república federal enfrenta al doctor Mier y a Ramos Arizpe, más próximos entre sí que de los borbonistas y de los iturbidistas que llegan a apoyarlos. Un ilustre liberal y federalista, Valentín Gómez Farías, había sido el autor del *voto* para la proclamación de Iturbide. Lorenzo de Zavala deambula en el primer Congreso como lo hemos visto.

La revolución federal no podemos preescribirla, ni sus autores podían hacerlo. Nos limitamos a registrar y glosar algunos testimonios y su suceder.

Volvamos a ella.

* * *

Las proclamaciones de Guadalajara, por la importancia de la provincia y su proximidad a México, es la que preocupa más al gobierno nacional. Luis Pérez Verdía escribe que por su anterior adhesión a Iturbide se le tomó como una reacción iturbidista, aunque los documentos de ella no lo funden. Según Pérez Verdía se trata de una deslealtad más de hombres "sin principios políticos", como Quintanar, que debían su grado y su cargo al depuesto emperador al que habían elogiado sin reservas. Es cierto de Quintanar y de otros, pero no del cuerpo de liberales que se definió por la federación el 6 de abril.

Por su anterior iturbidismo o por la proclamación federal, el Supremo Poder Ejecutivo separó el 24 de mayo los mandos políticos y militar de la provincia nombrando al general José Joaquín Herrera jefe político y manteniendo a Quintanar únicamente en el militar.[58]

Quintanar había dirigido el 13 de mayo una *Proclama a los habitantes de Nueva Galicia sobre la separación del Congreso Mexicano*, reiterando la proclamación de la diputación provincial y el ayuntamiento por la república federal. Denuncia que una facción del Congreso se propone una república central en contra de la voluntad de la provincia y de los intereses de las demás. Por lo pronto apoya el acuerdo de la diputación para no enviar caudales a México, como lo informó al Supremo Poder Ejecutivo. Espera que el Congreso se conforme con la voluntad general, "pero si por desgracia dejándose poseer de pasiones exaltadas, o siniestras miras nos amagase con agresiones, nada sería en este caso más santo —declara Quintanar— que oponerle nuestro entusiasmo con la fuerza de que es susceptible el número de habitantes de este distrito. Las provincias limítrofes y demás hermanas es de esperar ejecuten otro tanto...".

El mismo día 13 Quintanar envía una circular a las autoridades de los pueblos comunicándoles el pronunciamiento de la Diputación Provincial de Guadalajara por la república federal, haciendo una argumentación en favor del sistema federal.[59]

[58] Luis Pérez Verdía, *Historia particular del Estado de Jalisco*, Guadalajara, 1910, tomo II, pp. 204-205.

[59] *El Águila Mexicana*, 23 de mayo de 1823.

La resolución del gobierno destituyendo a Quintanar del mando político es la respuesta a su actitud.

De Guadalajara se expiden a las provincias los documentos de sus proclamaciones, práctica que es común en las restantes diputaciones provinciales, conservándose en los distantes archivos de Béxar en Texas.

Después de la orden de separación de Quintanar del mando político, la diputación provincial promulga el 5 de junio un decreto por el que expresa que "mientras no se forme el Congreso General de los Estados Mexicanos, se reconoce por centro de unión de todos ellos la capital de México"; también se reconoce de nuevo al Congreso sólo como convocante, acatando la convocatoria que expida y las disposiciones generales como *providencias*, así como las órdenes del Poder Ejecutivo. Pero, se aclara, las que "interesen a este Estado de Jalisco —se suspenderán o no según convenga al mismo Estado". Los empleados actuales se mantendrán, y no se creará empleo nuevo ni se proveerán los que vaquen sino a propuesta del mismo estado. Toda propuesta de empleo recaerá en nativo del estado o en residente con siete años de vecindad.

La resolución se circulará a *los demás estados de la Nación*. El último artículo del decreto concluye como proclama: "Jaliscienses... Vuestra suerte está decidida... Ya estáis erigidos en Estado libre e independiente. Vuestra Diputación Provincial os presenta el plan de gobierno que debe regiros, mientras vosotros mismos formáis la Constitución particular del Estado".[60]

El mismo 5 de junio el general José Joaquín de Herrera se dirige a Quintanar desde San Pedro de Piedra Gorda. Espera le conteste para llegar a Guadalajara a hacerse cargo de la jefatura política en la provincia. Le habla de la mejor disposición del gobierno de México para el establecimiento del sistema federal representativo. Debe esperarse con confianza que el nuevo Congreso constituya a la nación. Quintanar contesta el día 8 informándole que la diputación provincial conoció su oficio, y se ha confirmado la equivocación en que está el Gobierno Supremo de México sobre la actitud de Jalisco. La diputación espera la respuesta de México a sus últimas comunicaciones sobre las resoluciones del día 5. Por éstas, en las que se reconoce a las autoridades de México, como hemos consignado, se decretó que siguiesen en sus cargos los que están al frente de ellos, y sólo se pueden proveer a propuesta del estado. También el día 8 la diputación provincial se dirige a Herrera en los mismos términos que Quintanar.[61]

Herrera no llega a Guadalajara y la diputación provincial avanza otro paso. En sesión extraordinaria de 16 de junio, la víspera de que el Congreso publique en México las *Bases para las elecciones del nuevo Congreso*, la diputación aprueba el plan *de gobierno provisional del estado de Jalisco*. En su artículo 1 se declara que la provincia se llamará en adelante Estado Libre de Jalisco, enumerándose en el 2 los 28 partidos que formaban la intendencia. En el artículo 3 se declara: "El Estado de Jalisco es libre, independiente y soberano de sí mismo, y no reconocerá otras relaciones con los demás Estados o Provincias, que las de la fraternidad y confederación". En los siguientes se declara como única y con exclusión de toda otra la religión católica romana, el gobierno popular representativo, y que corresponde al estado formar su

[60] Luis Pérez Verdía, *op. cit.*, pp. 206-207; *Gaceta del Gobierno Supremo de México*, 14 de junio de 1823.

[61] *El Águila Mexicana*, 25 y 26 de junio.

propia Constitución, y "arreglar, en unión de los demás Estados que se confederen, las relaciones generales de todos ellos". La ciudadanía se concede a todos los habitantes del estado para elegir diputados al Congreso Provincial Constituyente. Se declaran imprescriptibles los derechos de libertad, seguridad, igualdad y propiedad, que el estado debe garantizar. Se ratifica la separación de los tres poderes.

La diputación provincial asume formalmente el Poder Legislativo mientras se instala el Congreso Provincial Constituyente. reduciéndose a convocar éste y a dictar providencias para observar las leyes vigentes. El Poder Ejecutivo se encomienda al jefe político —Quintanar— con el título de Gobernador del Estado de Jalisco y con el mando de las armas. El Poder Judicial se ratifica sin modificaciones, al igual que los ayuntamientos.

El artículo 18 establece: "El Estado se gobernará por la Constitución Española y leyes vigentes en todo aquello que no pugne con el presente plan".

El último artículo, el 20, dispone que toda persona o autoridad "que resista la observancia de este plan, pedirá dentro del tercer día, después de su publicación, el correspondiente pasaporte para salir del territorio del Estado".[62]

El 21 de junio el general Quintanar firma un manifiesto a los habitantes del estado libre de Jalisco. "Doce años de lucha sangrienta contra nuestros opresores y tiranos —escribe el antiguo coronel realista y español—, han dado testimonio al mundo entero de que la Nación Mexicana... ha sabido por fin seguir con valor y constancia la senda de la libertad... Colocada en el rango de las Naciones libres y soberanas, su mira principal fue constituirse en la forma de gobierno más análoga a su situación; pero huyendo siempre del sistema monárquico... aun con la traba de un legislativo poder, pensó seriamente a favor de un gobierno popular representativo...".

Quintanar hace historia. El Plan de Iguala, pasado el primer entusiasmo, al llamar a los Borbones hizo que se viera "ya muy de cerca el despotismo que antes sufrían de lejos" los mexicanos. Se reunió un Congreso por medio de "una monstruosa convocatoria", cuando ya Iturbide concebía la idea de coronarse y preparaba la opinión *con escritores asalariados.* Pío Marcha es para Quintanar un "monstruo abortado del abismo". Quintanar, como todos los desatados del pasado inmediato, condena los sucesos en los que de una u otra manera participó. Para él, al llegar Iturbide al trono "sus principales miras fueron las de extinguir toda idea sobre República", y no desconociendo que en el Congreso estaba generalizada esa idea concibió la de destruirlo.

Ante la tiranía impuesta por Iturbide el patriotismo hizo su explosión en Veracruz, y después el ejército que sitiaba al puerto proclamó el Plan de Casa Mata demandando un nuevo Congreso. Las provincias dan su adhesión a Casa Mata y el Congreso se reinstala dominado por la fracción aristocrática de él. Las provincias se rebelan, y Jalisco proclama la república federada. El Congreso había cedido ofreciendo una convocatoria, "pero Guadalajara no estaba ya en el caso de aguardar este paso tardío". Proclamado el federalismo "quedaron virtualmente revocados los poderes de los Diputados, y de consiguiente la Nación llegó a ponerse en su estado natural para poder constituirse...".

[62] *Colección de los decretos y órdenes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.* tomo I, Guadalajara, 1874, pp. 39-42.

Quintanar sostiene la revocabilidad de los poderes a los diputados, "si se considera que no hay ley fundamental en el Estado que no pueda revocarse, y aun el mismo pacto social", si todos los ciudadanos se reúnen para ello.

Si el gobierno en México está falsificado, "la nación quedó en su estado natural... y en este caso las Diputaciones Provinciales respectivas, cuyos miembros fueron electos de un modo popular, están competentemente autorizadas por los Pueblos para designarles la marcha que deben seguir".[63]

Más amplio que el documento de Quintanar es el *Manifiesto que hace la Diputación Provincial del Estado libre de Jalisco, del derecho y conveniencia de su pronunciamiento en República Federada.* Menos historiado, su discurso es doctrinario. Se reitera la tesis que corre en los documentos de las provincias desde que demandan la convocatoria de un nuevo Congreso: todo pacto está disuelto quedando ellas en estado natural y con derechos iguales. A ellas corresponde decidir el modo de constituirse, y la autoridad surgida por necesidad al abdicar Iturbide sólo puede legitimarse por una nueva convención. Existe un derecho primario para reformar y abolir una forma de gobierno que atente contra el bien, común y los derechos primarios. Hoy, para la diputación provincial, se pretende que los pueblos renuncien a sus derechos en favor de "una pretendida metrópoli que se alce en déspota de sus hermanas".

El Congreso restaurado en México, se dice, no cuenta con la aprobación de los pueblos, y así, los poderes de los diputados caducaron, aceptándose que únicamente convoquen uno nuevo. La voluntad de la nación es distinta a la de 1821, por lo que los poderes de sus diputados deben ser otros. Careciendo México de poderes, Guadalajara es libre para manifestar su voluntad general, misma que deben expresar sus diputados. En el actual estado de naturaleza toca a la voluntad general de la nación decidir si se forma una república central o federativa. El idealismo teórico se revela radical: si "la voluntad general es *siempre* recta, y camina siempre a la utilidad pública," y consta que esa voluntad general "del Anáhuac se pronuncia por una República y federación", no se puede poner en duda la primera verdad, pues sería suponer a la voluntad general injusta y desconocida y echar "por tierra el santo dogma de la Soberanía esencial de la Nación". El supuesto de la voluntad general es que "ninguno puede ser injusto consigo mismo".

Si la soberanía es una potestad esencial de la nación, y se habla de que está también en el Congreso, habría dos soberanías o voluntades supremas en el Estado obrando independientes y aun opuestas, lo que lleva a la ruina a la sociedad, como ya ocurrió en Francia donde la representación se erigió soberana y tirana de la nación.

En una república central, sigue la exposición de la diputación, el centro ejerce "todas las funciones de la soberanía, una e indivisible a todas las Provincias". En una federación les conserva sus bienes y derechos privativos, y "las compromete en cuanto a Estados federados, a no ejercer sino de común consentimiento ciertos atributos de la soberanía", como la defensa común frente al exterior y aquello que importa también en común a todas.

"Es llegada la ocasión de celebrar nuestro pacto de sociedad —expresa la diputación, y pregunta—, ¿aguardaremos a que una pretendida metrópoli nos lo diga así?" El lenguaje se extrema: "¿Se creerá más ventajoso —pregunta— por los jaliscienses encomendar a la Madre Te-

[63] *Ibid.*, pp. 22-32.

nochtitlan el derecho de regirlos con leyes, acaso repugnadas por ellas, pero sancionadas por la mayoridad prepotente de otra Provincia, o gobernarse ellos por sí mismos? Provincias todas de Anáhuac —exhorta—, decidid, y haced hoy justicia a Jalisco para que Jalisco os la haga a vosotros mañana".[64]

El largo discurso de la diputación provincial dirigido a los habitantes de Jalisco es en realidad un manifiesto a las provincias, y deslinda más los campos.

* * *

La promulgación por el Congreso el 17 de junio de las *Bases para las elecciones del nuevo Congreso constituyente*, inspiradas en el sistema electoral español, contiene una disposición cuya ambigüedad no es consecuente con el *voto* del mismo Congreso el 1 de junio por la república federal. El artículo 73 de las *Bases* establece el texto de los poderes para los diputados que se elijan al nuevo Congreso. Los poderes serán "amplísimos, para que constituyan a la nación mexicana del modo que entiendan ser más conforme a la felicidad general, afirmando las bases, religión, independencia y unión, que deben ser inalterables; y los otorgantes por sí y en nombre de todos los vecinos de esta provincia en virtud de las facultades que como a electores secundarios les han sido conferidas, se obligan a tener por válido, obedecer y cumplir cuanto como diputados del soberano Congreso resolvieren o decretaren...". El texto aprobado es el mismo del proyecto de la comisión que lo preparó, con la alteración de una sola palabra que afecta su significado. En el proyecto, los poderes de los diputados para constituir a la nación se deben ejercer "del modo que sea más conforme a la voluntad general".

La expresión *voluntad general* fue inmediatamente objetada en la sesión del 14 de junio por Marín, Sánchez de Tagle y Becerra. Según Martín, porque los diputados no podrán conocer esa *voluntad* en todas sus resoluciones por la división de opiniones en ciertas materias. Según Sánchez de Tagle, porque esa voluntad sólo podría conocerse si los pueblos se reunieran a discutir sus intereses, lo que es imposible, o por el arbitrio de las juntas electorales, que sólo están autorizadas a elegir. La extensión de la voluntad general en los publicistas anteriores a la Revolución francesa la califica de insignificante, pero fue la que acaso, dice, originó los desórdenes en Francia.

Prisciliano Sánchez plantea, como individuo de la comisión redactora del proyecto, una pregunta: "¿El Congreso debe seguir la voluntad de la Nación, o la Nación debe seguir la voluntad del Congreso?" Lo primero es un axioma político, y la comisión la adoptó como *verdad evidente*. José Cecilio del Valle lo apoya. La cuestión es simple: "los diputados debían constituir a la Nación conforme a la voluntad general de ella misma, o contra la voluntad de la Nación; si ésta había manifestado su voluntad de un modo inequívoco, los diputados debían respetarla", y si no, tocaba a los diputados calificarla en su nombre. No se ocupa de los sucesos, pero ellos están cuestionados en el debate. Fagoaga objeta el proyecto y Guridi y Alcocer lo defiende. El artículo es rechazado.

El 17 volverá el artículo al Congreso, ahora expresando que los diputados ejercerán sus poderes de la manera más conforme "a la felicidad y voluntad general de la Nación".

[64] *Ibid.*, pp. 5-22.

Sánchez de Tagle vuelve a objetar se imponga que "obrasen los diputados conforme a la voluntad general", pues ésta se ha dicho muchas veces que es "sólo el grito de las pasiones, o un partido preponderante que ahogaba los verdaderos intereses de la nación, mucho menos cuando están en efervescencia; que la verdadera voluntad general se manifiesta muy pocas veces y —para concluir— que obligar a los diputados a seguir este ente imaginativo era ponerlos en tortura".

Hemos transcrito casi íntegro el texto de la intervención según el acta.

Prisciliano Sánchez contesta inmediatamente: "que debiendo hacer la calificación de esta voluntad general el Congreso, éste debería ser el que decidiese si sus determinaciones eran o no conformes a la voluntad general; de consiguiente quedaba el Congreso en absoluta libertad para poder obrar, no pudiendo negar al señor preopinante que jamás podía estar autorizado el Congreso para votar contra la voluntad de los pueblos". En el acta se resume así la intervención.

Becerra insiste este día: "que no podía concebir de qué modo podía conocerse la voluntad general, pues que no había reglas fijas para este conocimiento; que los pueblos no siempre querían lo que era más conveniente a sus intereses, y que si los diputados más ilustrados que la masa del pueblo veían que la voluntad de éste era contrario a su felicidad, de qué manera —se pregunta— podían aquéllos emitir su opinión contra sus mismos sentimientos".

Estas citas reproducen el breve debate, en el que Zavala niega significado a la misma expresión de *voluntad general.* Pregunta Zavala cuál era la voluntad general antes de 1808, y si un Congreso hubiese podido declarar la independencia conformándose a ella.[65]

El artículo se aprueba suprimiendo la referencia a la voluntad general en los poderes a los diputados para el nuevo Congreso. El debate involucra la cuestión del mandato imperativo, pero ella misma no parece ser tratada. La aceptación o no del mandato imperativo es ajena al reconocimiento de la voluntad general, más aún en el acto constitutivo de la nación. Fagoaga, Sánchez de Tagle, Becerra, que no la habían negado, lo hacen hoy frente a la proclamación federal en las provincias. La aprobación del artículo 73 de las Bases de convocatoria suprimiendo la referencia a la *voluntad general,* que se sustituye por la de *felicidad general,* y los argumentos de quienes desechan la voluntad general, presenta al Congreso en una definida actitud desautorizando esa voluntad general en la que legitiman las provincias sus demandas y proclamaciones.

Los acontecimientos se van sucediendo en una relación de incitación-respuesta en la que los federales se radicalizan y el gobierno de México —Supremo Poder Ejecutivo y Congreso— cede ante las presiones revolucionarias por una parte, y por otra, en las ambigüedades del Congreso parece confiar a las elecciones del nuevo constituyente la derrota del federalismo. El debate y los términos en los que se aprueba el artículo 73 de la convocatoria son casi implícita provocación.

* * *

Prisciliano Sánchez no apura, al menos en lo que consta en las actas, la polémica, y su proyecto de Constitución será una respuesta a lo aprobado en el Congreso. Un hombre recatado, bachiller de leyes, que había vivido desde 1813 hasta 1822 en la lejana *Compostela,* "en un án-

[65] Véase la crónica de la sesión en *El Águila Mexicana,* 18 y 20 de junio de 1823.

gulo remoto de Nueva Galicia", como él dice, es elegido diputado al Congreso, y será el autor del primer proyecto mexicano de una definida federación, al que Reyes Heroles califica de *políticamente magistral*.

Días antes, el 12 de junio, seis diputados —Francisco García, Valentín Gómez Farías, Antonio José Valdés, José María Covarrubias, Manuel Crecencio Rejón y Prisciliano Sánchez—, presentaron al Congreso una iniciativa para que a "la mayor brevedad se nombraran en las provincias congresos o legislaturas provinciales en el número y forma que proponga la comisión y apruebe V. Soberanía". La iniciativa parte de considerar "las críticas circunstancias en que nos hallamos", y la necesidad de que el Congreso "no contradiga la opinión de los pueblos, sino que colocándose al frente de ella la dirija". En dos revoluciones que ha vivido la nación las formas de gobierno surgidas le han sido *gravosas y perjudiciales*. Ahora se desea otra que haga su felicidad, y ella es la república federada, a la que se adhieren los seis diputados. Las provincias, dos, que se han sustraído a la obediencia del gobierno "no han proclamado su absoluta separación, quieren solamente confederarse en todo el rigor de la palabra". El paso que han dado Oaxaca y Jalisco "es por los padecimientos y engaños que han sufrido otras veces". Se acuerda resolver en la sesión siguiente, lo que no ocurrirá. Al parecer no ha llegado la noticia de los sucesos del 29 de mayo en Mérida, que se harán públicos el 21 de junio en *El Águila Mexicana*.

En la sesión secreta del Congreso de 25 de junio el gobierno presenta a través del secretario de Justicia una iniciativa: "Persuadido el gobierno de que en el sistema de federación a que evidentemente tienden los estados de nuestro territorio deben éstos igualarse en lo posible en cuanto a sus goces y deberes; queriendo además dar una nueva prueba y confirmación la más solemne y perentoria de que respeta y sigue el impulso de la opinión general de los pueblos". Y para desvanecer los motivos de agitación de los que sólo se proponen la disolución del gobierno, se propone al Congreso "las ideas siguientes que son conformes a la voluntad tácita o expresa de los pueblos...".

"1. Se instalará en cada provincia una legislatura, administración, o congreso provincial.

2. Se compondrá éste de trece individuos elegibles del modo siguiente.

3. Las juntas electorales que se reunirán para el nombramiento de diputados del futuro Congreso, serán las que al mismo tiempo nombren estos trece individuos...

4. Ínterin esto no se verifica, el congreso provincial constará de los individuos que actualmente componen las Diputaciones Provinciales, aumentándose hasta el número de trece que nombrarán las últimas juntas electorales...".

"Las facultades de estos Congresos —se dice en el punto 6— serán: 1. Velar escrupulosamente sobre el manejo y administración de los caudales públicos, pudiendo suspender a los que no cumplan con sus deberes, dando cuenta inmediatamente al Poder Ejecutivo". 2. Los congresos tendrán todas las facultades constitucionales de las diputaciones provinciales. El punto 3 muestra un desconcierto en el Poder Ejecutivo después de haberse promulgado días antes, el 17 de julio, las *Bases para las elecciones del nuevo Congreso*, al proponer: "ínterin no se instale el senado, o consejo equivalente, que proponga para los destinos, los congresos provinciales presentarán ternas al Poder Ejecutivo para todos los empleos de orden político, de rentas y justicia, excepto las audiencias...".[66]

[66] *El Sol*, 27 de junio de 1823.

Evidentemente el Ejecutivo presume la instauración de un senado análogo o no al proyecto de la comisión del Congreso de 18 de mayo.

La iniciativa del Ejecutivo, y su antecedente el 12 de junio en la de los seis diputados, llevan al Congreso a promulgar un decreto el 14 de julio concediendo nuevas atribuciones a las diputaciones provinciales, aunque únicamente de carácter administrativo, conforme a la iniciativa del gobierno.

La resolución es un paliativo extemporáneo ante las demandas de las provincias en donde las diputaciones ejercen de hecho amplias atribuciones.

Desde el 12 de junio, y en sesión secreta, el Congreso es informado de la autoproclamación del general Santa Anna en San Luis Potosí, el día 5 anterior, como *Protector de la federación de las provincias.* También se informa que la Diputación Provincial de Valladolid ha convocado a Guanajuato, Querétaro y San Luis para que envíen diputados a fin "de instalar un *Congreso* que tome las riendas del estado en el caso *de que falte el de México*", según versión de Bustamante en su *Diario* de ese día.

El 13 de junio se vuelve sobre la iniciativa del 12 de los seis diputados, y se acuerda no admitirla a discusión.

La frustración federal dentro del Congreso la corroboraba días después el debate sobre los poderes a los diputados del que se convocaría, a pesar del *voto,* por la república federal del 12 de junio.

* * *

Prisciliano Sánchez apresura la formación de su proyecto que titulará *El Pacto Federal de Anáhuac,* fechándolo el 28 de julio. El que viene a ser preámbulo en el documento es una optimista visión del futuro posible: "Las reliquias del imperio son impotentes, y las pretensiones de los centralistas quedarán reducidas —anuncia— a la órbita que les prescribe la carta de nuestra federación si todas las provincias obran de consuno con circunspección y con firmeza". Los pronunciamientos por la federación son los que garantizarán la libertad verdadera. Es ella "el invento feliz de la política, indicado en los sentimientos de la naturaleza, siempre constantes y nunca resistibles". Todos los bienes, y su enumeración es entusiasta, los proporcionará la sola forma de gobierno. Previene que la federación no divide sino que enlaza con mayor acierto a las provincias. El paso que han dado algunas provincias "pronunciando su separación, ha sido intempestivo, peligroso y expuesto; pero si ellas se han anticipado a darlo, nunca serán culpables —declara Sánchez—, porque lo han hecho con el mayor orden, circunspección y decoro, temiendo quizá con razón, que se les escape de las manos una ocasión favorable".

Para Prisciliano Sánchez el centralismo reúne al que "abriga esperanzas monárquicas" por ser un sistema más análogo; al ambicioso, al funcionario déspota, al borbonista, a todos los que tienen miras siniestras. El tono es polémico. Refuta las afirmaciones de que se vaya a una anarquía, y la debilidad frente a una amenaza exterior, la califica de irreal.

La dificultad única no es sobre la federación sino sobre los medios para constituirla y las bases de ella. Las diputaciones provinciales, verifica Prisciliano Sánchez, han asumido funciones no previstas bajo el régimen de la Constitución española, así su carácter es por necesidad

distinto, y son "el órgano de la voz de la nación". Aprobaron el Acta de Casa Mata y la convocatoria de un nuevo Congreso; hoy se pronuncian por el sistema federal, que ya existiría "sin la menor contradicción, si el Congreso hubiera coadyuvado a sus deseos, como lo pedíamos seis diputados", en la proposición del 12 de junio para establecer congresos en las provincias y que no se admitió a debate. Ello y el Plan de Constitución de la comisión del Congreso no comprueban que el Congreso desee la federación. No obstante, cree necesario que las provincias acepten la convocatoria aprobada, aunque se recele de la decisión del futuro Congreso. Oaxaca, Guadalajara, Yucatán, Zacatecas y las Provincias Internas de Oriente han resuelto gobernarse separadas y darse sus propias constituciones, pero deseando federarse con las restantes. Querétaro, Valladolid, Guanajuato y San Luis Potosí en términos más moderados se adhieren a la federación, y las restantes provincias "no han contradicho la opinión general".

En favor de la convocatoria, que objetó en el punto de los poderes como vimos, advierte que no pone trabas. Así, deben elegirse como diputados a "los de mejor carácter para llevar adelante la empresa del federalismo. Ellos deben arreglarse a la voluntad general, que es la soberana y no como se os quiere persuadir, que la nación debe quedar sujeta a sus dictámenes y opiniones singulares". Se debatirán en el futuro Congreso los detalles de la Constitución, pero dentro de una carta federal. Adelanta las bases que estima aconsejables para ella, precedidas de unas indicaciones previas. En las *Indicaciones* se propone el reconocimiento del Supremo Poder Ejecutivo como centro de uinión, obedeciéndolo provisionalmente en cuanto tienda a mantener el orden público y a resolver las desavenencias entre las provincias, y entre éstas y sus pueblos, sujetando la resolución final al futuro Congreso. Mas si llega a dictarse una ley o providencia "dirigida a entorpecer el pacto federal... no debe ser admitida porque tiende a la anarquía contrariando el voto general de los pueblos", se expresa en el punto 3 de las *Indicaciones*. El punto 6 deja al futuro Congreso la separación de los estados que están reunidos bajo las diputaciones provinciales, resolviendo las cuestiones de límites y otros casos que se susciten entre ellos. En tanto no se reúna el nuevo Constituyente, las legislaturas, propone el punto 7, no sancionarán constituciones provinciales.

La definición federalista de Prisciliano Sánchez, diputado en el Congreso, es ya claramente revolucionaria. La indicación de que las legislaturas no sancionen constituciones locales no atenúa la invitación a desobedecer las leyes y providencia dictadas desde México que impidan o entorpezcan el pacto federal Es notorio que en tanto se menciona al Supremo Poder Ejecutivo como centro de unión, no se alude siquiera al Congreso.

Las Bases para la Constitución General que forma Prisciliano Sánchez contienen 38 artículos, dos menos que el Acta Constitucional de 20 de noviembre de 1823 —proyecto de la que será Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 1824, con 36 artículos.

Dentro de la estructura federal del proyecto se acentúan ciertos aspectos. Por ejemplo, en la base 17 se establece que toda ley o providencia que se refiera a "intereses individuales de los estados", después de ser aprobada en la forma normal será sometida a votación especial en la que se votará por estados cualquiera que sea su número de diputados. En la base 24 se previene que una vez aprobada la Constitución por el nuevo Congreso, éste resolverá si ella debe someterse a la revisión y sanción del Congreso siguiente o a las legislaturas de los estados.

En la sesión del Congreso el 11 de junio y en el debate sobre el proyecto de convocatoria en general, Prisciliano Sánchez observó que la comisión no estimaba consecuente con la

formación del actual Congreso integrar el nuevo con dos cámaras. No obstante, se propuso la elección de individuos a un senado a fin de que el Congreso elegido decidiese si lo incorporaba a él. El doctor Mier también apoyó la convocatoria de una segunda cámara.

No podemos demorarnos más en el punto. Consignemos tan sólo que Prisciliano Sánchez incorpora a su proyecto constitucional la institución del Senado, como "parte del Poder Ejecutivo", con la facultad, entre otras, de "velar sobre la observancia de la Constitución, para que se mantenga el orden tanto en la federación como en la independencia recíproca de los Estados, dando cuenta al Congreso de las infracciones que advierta para que disponga lo conveniente". Los senadores, elegidos popularmente, serían uno o dos por cada estado y su duración temporal en los términos que fije la Constitución.

El senado concebido por Prisciliano Sánchez no es el que se esbozó en el Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana del 16 de mayo anterior, al que ya nos referimos. A Prisciliano Sánchez le preocupa garantizar el sistema federal más que crear un órgano que vele por la observancia de la Constitución en general, y con funciones de tribunal constitucional. Basta repasar los dos textos y lo expuesto al referirnos al Plan de Constitución de 18 de mayo, que sí contiene el de un *cuarto poder* expreso.

Que no exista una pulcra concepción del senado en Prisciliano Sánchez lo explica la presión de los sucesos circunstanciales que lo preocupan en primer término y lo llevan a concebir garantías a la federación que se va a constituir. En sí, y con facultades propias como cuerpo representativo con un anómalo conato de limitación a las del Presidente de la República, parece más inspirado en el Consejo de Estado instituido en la Constitución española que en el Senado Conservador de origen francés, cuya influencia se recibe más directamente en Colombia durante el primer periodo de la emancipación, y en México en 1836.

Las Bases se inician declarando: "La nación de Anáhuac es la reunión de todas sus provincias que forman el estado general. Es una, es soberana, es indivisible, y es independiente... Las provincias que la componen son las que en el fin del último gobierno se hallaban en el rango de tales sujetas al virreinato de la Nueva España".

* * *

Prisciliano Sánchez advierte que el pacto federal restaurará, bajo otra forma, la unidad política establecida en los siglos de la colonia y dispersada por el sistema constitucional en su régimen de gobierno de provincias. Por lo demás, y ya lo vimos, provincias reconocidas como preexistentes al instituirse las diputaciones provinciales son las que surgen con la proclamación federal. El plan restituye también la unidad del país que se había mantenido bajo otro supuesto a partir de la consumación de la independencia, al sustituir el Congreso y el fugaz imperio a la autoridad metropolitana. En la confusa situación que producen las adhesiones a Casa Mata, el ejercicio inmediato de la soberanía subvertida en la revolución liberal y en la proclamación de la independencia, la asumen los órganos representativos regionales de origen electivo en disputa con el Congreso restablecido.

Podemos discernir la naturaleza revolucionaria de los sucesos en el conflicto planteado entre las dos soberanías: la del que puede llamarse régimen establecido —el de la ciudad de México que se torna precario día a día—, y la revolucionaria federal proclamada en las pro-

vincias. La Diputación Provincial de Jalisco lo expresó en el manifiesto que ya citamos. La revolución declara que la nación debe *constituirse* por un pacto entre las provincias ante la inexistencia de todo otro previo.

Prisciliano Sánchez en una parte especial expone las Bases para las Constituciones particulares de los estados. Reitera que cada uno será "soberano e independiente en todo lo respectivo a su régimen interior" (art. 1). Lo que es consecuente con la base 1 para la Constitución general: "La nación de Anáhuac es la reunión de todas las provincias que forman el estado general".

La estructura orgánica de la Constitución conforme a la división de poderes ofrece algunas peculiaridades en su federalismo: las legislaturas de los estados normarán lo relativo a adquirir, perder, suspender y readquirir la ciudadanía; impondrán contribuciones directas e indirectas aprobando los presupuestos locales y el cupo que se asigne a los gastos generales de la nación; proveerán todos los empleos en los estados "previo informe del gobernador"; presentarán para los beneficios eclesiásticos, y ratificarán "la Constitución general y todo punto relativo a ella, si se acordare así por el Congreso" (6 y 7). La singularidad se acentúa al proponer el carácter amovible de los diputados "en el modo y periodo que ella misma disponga" (5) en una expresión imprecisa en su sentido.

Los gobernadores de los estados además de las facultades normales dentro de un régimen federal tendrían, como jefes de la milicia nacional en su territorio, la de "disponer de su fuerza como mejor convenga a la seguridad del estado" en cada uno de ellos.

Reyes Heroles señala, el primero, que las Bases de Prisciliano Sánchez "influyeron decisivamente, sobre todo en las facultades del Poder Legislativo" del proyecto de Acta Constitutiva, y lo puntualiza en un preciso cotejo.[67]

La publicación de *El Pacto Federal de Anáhuac*, del que es autor un diputado al Congreso que sería el primer gobernador del estado de Jalisco, no lo consideramos sistemáticamente, sino en el significado explícito en su hora. El texto de él, en el segundo volumen [tomo 2] de esta obra, se reimprimió en 1952 por el Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara como apéndice a las *Biografías* de fray Antonio Alcalde y Prisciliano Sánchez, de que es autor Luis Pérez Verdía. Nosotros transcribimos la edición del proyecto de 1823. Su texto, como los de los restantes proyectos que se reproducen incita a un estudio amplio de los antecedentes en nuestra historia constitucional en la instauración de la república federal.

[67] Jesús Reyes Heroles, *op. cit.*, pp. 388-389.

6

LAS PROVINCIAS FEDERALES
OAXACA, YUCATÁN, JALISCO, ZACATECAS, DURANGO. LAS JUNTAS DE CELAYA

El 28 de julio, cuando Prisciliano Sánchez data *El Pacto Federal del Anáhuac*, el enfrentamiento entre las provincias y el Congreso de México parece irreversible a pesar de la aceptación formal de la federación por el Congreso. El gobierno y el Congreso ante la presión acceden a una reforma —no es otra cosa su condescendencia en la declaración federal—, y simultáneamente se proponen reformar la revolución. Lo más significativo en la situación es la generalidad de los pronunciamientos federales sin previo concierto: esa *voluntad general* de las provincias que tanto preocupa y que se niega expresamente en el Congreso, hasta el punto de no aceptar ni la mención de ella. No podemos acudir a los documentos disponibles para ilustrar la situación con algún detalle. Ello merece un estudio monográfico, en realidad tantos estudios como fueron las proclamaciones en las provincias. Refirámonos al menos a algunos de los que ilustran mejor la situación. Nos limitamos a seguir la investigación de N.L. Benson.[68]

Oaxaca es la primera provincia que manifiesta su resolución de crear su propio Congreso.

Desde el 24 de febrero el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, presididos por el general Bravo, resuelven crear una Junta Provisional Gubernativa de la que formarán parte los siete diputados de la Provincial. La Junta se instala diez días después. Bustamante escribe en su *Diario* el 11 de marzo: "Este establecimiento... tiende a formar una república federada", para la que no están preparados los pueblos. La duración de la Junta es breve y la Diputación Provincial se restaura como autoridad local. El 24 de abril el mismo Bustamante se refiere sin comentarios a la diputación "plagada de serviles".

Los acontecimientos de abril y mayo en Oaxaca no son bien conocidos, como N.L. Benson lo asienta.

El 22 de junio, al día siguiente de publicar el Acta de Yucatán de 29 de mayo, se comienza a publicar en *El Águila Mexicana* el Acta de la Ciudad de Oaxaca de 1 de junio. Según ella la Diputación Provincial convocó a la Junta Provisional Gubernativa por tratarse de un caso extraordinario. El mismo 1 de junio se reunieron en la casa del coronel Antonio de León, jefe político y comandante general de la provincia, los jefes y oficiales de la guarnición y los cuerpos civiles. León los invitó a dar su voto particular y por cuerpos "acerca de la libre natural, espontánea y entusiasta proclamación de República Federada que ha hecho el pueblo de esta ciudad en la plaza principal... para que desde luego se establezca por las actuales autoridades de ella". Los cuerpos militares se declaran por la federación, que el gobierno de México no acepta "desoyendo la opinión general demostrada por las enérgicas representaciones de

[68] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 151-154.

varias provincias", por lo que es preciso, se dice, declarar la independencia del gobierno central. Así, Oaxaca está en aptitud, expresó el Ayuntamiento, "de constituirnos por nosotros mismos; sin que por esto se entienda que tal acto nos separe de las imprescriptibles relaciones con que la madre naturaleza nos ha tenido unidos como ciudadanos de una nación...".[69]

Después de un debate, que parece fue acalorado, se da cuenta con lo resuelto en el Ayuntamiento por unanimidad: "que Oaxaca independiente, y libre absolutamente", se constituye en "República Federada con todas las demás provincias del Imperio". El empleo de la palabra imperio no puede más que referirse a la extensión territorial de la nación.

En la Junta se nombra una comisión que redacte las *Bases del sistema* que se aprueba.[70]

Desde el 11 de junio *El Águila Mexicana* había publicado bajo el titulo de *Bases provisionales con que se emancipó la provincia de Oaxaca* lo resuelto en Oaxaca el 2 de junio. Las bases constan en 15 puntos: "1. La Religión C.A.R. como única verdadera, es y será constantemente la que profese esta provincia. 2. En orden a su Soberanía la ejerce exclusiva y federadamente. 3. Para el ejercicio de tales funciones instalará un Congreso Provincial que la constituya sobre las bases precisas de libertad, igualdad, propiedad y seguridad". Las elecciones de diputados al Congreso se harán por los electores de partido "en la forma que designa la convocatoria" —podemos presumir que se trata de la española para diputados a Cortes—, pero los elegidos serían 14. El gobierno se ejercerá interinamente por el comandante general y la Junta Superior Gubernativa restaurada, que cesará al reunirse el Congreso. El punto 9 establece: "las providencias que emanen de México, ya no regirán, y a los actuales diputados que ahí residen, se les mandarán órdenes para que se retiren. Se crea un Consejo de Guerra que tendrá a su cargo las fuerzas, que sólo se emplearán para conservar el orden interior" y la defensa de las agresiones exteriores, cuya calificación hará la junta. Se declara una "amnistía general en materia de opinión".

El 18 de junio Bustamante, irritado, escribe en su *Diario* que ya se conoce en detalle lo ocurrido en Oaxaca. Señala como autor de ello al "subdiácono D. Ignacio Ordoño, hombre de una inmoralidad escandalosa, que ha consumido sus días en las prisiones más estrechas, y que el año de 1821 llegó de España, a donde fue confinado el año de 1818". Es Ordoño quien maneja a León. Se ha expedido ya la convocatoria de elecciones al Congreso de Oaxaca. El enojo de Bustamante lo hace olvidar que Ignacio Ordoño había sido preso y procesado en 1811 en Oaxaca acusado de conspirador, y que Morelos lo puso en libertad al ocupar Oaxaca en noviembre de 1812, incorporándose Ordoño a los insurgentes. Olvida que en 1814 fue preso de nuevo, hasta su indulto en 1818, según el *Diccionario de insurgentes* elaborado bajo la dirección de José María Miquel i Vergés que no consigna el que hubiese sido enviado a España, aunque Bustamante debió saberlo con más precisión.

El 6 de julio se instala el Congreso de Oaxaca. El 28 de julio el Congreso aprueba las *Bases para el Gobierno provincial de este estado ínterin se da la Constitución general de la Nación y particular de él:* la religión del Estado es la católica sin tolerar otra; la provincia se denominará Estado Libre de Oaxaca; "su gobierno será popular, representativo y federado"; le corresponde al estado darse su propia Constitución en consonancia con la general; la Constitución

[69] *El Águila Mexicana*, 23 de junio de 1823.
[70] *Ibid.*, 24 de junio.

particular se aprobará hasta después de promulgarse la de la nación; el estado sólo reconoce con los demás de la Nación "las relaciones de fraternidad, amistad y confederación que determine la Constitución general". En tanto se reúne el "Congreso de los Estados Mexicanos federados" se reconoce como punto de unión la *Capital de México.* Se reconoce al Supremo Poder Ejecutivo y al Congreso, a éste como convocante. Se obedecerán las leyes y órdenes que tiendan al bien de los estados y no se opongan a la federación, en tanto se reúne el nuevo Congreso y se instala el Supremo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos federados. Siguen vigentes la Constitución —la española— y las leyes en lo que no se oponen a la independencia y la federación. Se confirma a las autoridades existentes. Se configuren los tres futuros poderes; el Ejecutivo provisional lo ejercerán tres individuos, con las facultades normales a él. El Poder Judicial subsiste, con modificaciones menores y circunstanciales. Se confirma la amnistía por opiniones políticas ya aprobada, "a fin de que ni ahora, ni en ningún tiempo pueda hacerse cargo alguno a los ciudadanos por lo que por escrito, de palabra, o de hecho, hayan manifestado hasta la instalación del Congreso; pues el estado no puede menos que verlos como a sus hijos, a pesar de sus extravíos que espera enmienden".[71]

Es Oaxaca la que primero emplea la expresión Estados Unidos Mexicanos.

Bustamante, atento a su provincia, escribe el 8 de julio en su *Diario* que Oaxaca ha devuelto la convocatoria, y ha procedido a la elección de los diputados "a su Congresito, recayendo ésta en varios eclesiásticos", que aceptaron para impedir represalias en su contra. Da la lista, y entre los 14 diputados sólo aparecen cuatro eclesiásticos, entre ellos Ordoño. "He aquí la lista de los de uno como Congreso, que en una como ciudad, unos como monos, dizque hicieron", escribe el irritado diputado por Oaxaca.

El mismo día registra en su *Diario* que Guadalajara se niega a elegir diputados según su población y ha resuelto enviar sólo tres.

El 18 de julio Bustamante transcribe el oficio de 8 de julio del Congreso de Oaxaca al Supremo Poder Ejecutivo comunicándole su instalación. En el oficio se dice al Poder Ejecutivo "que no debe dejar de existir ni un solo día, un gobierno central", por el bien general y para evitar la anarquía y "disolución de todos los Estados asociados". Cuando Oaxaca concluya la elaboración de un plan, se anuncia, lo dirigirá al gobierno de México. No existiendo "diferencia substancial sobre la forma de gobierno, cualquiera otra que ocurra —asegura Oaxaca—, se compondrá fácilmente por la razón, la justicia y la conveniencia pública".[72]

Promulgada la convocatoria para el nuevo Congreso desde el 17 de junio, y no obstante conocerse el debate sobre los términos en que se aprobó el artículo de ella sobre los poderes a los diputados, en Oaxaca se coincide con lo expuesto por Prisciliano Sánchez en *El Pacto Federal de Anáhuac* datado el 28 de julio.

* * *

El incansable diputado por Oaxaca, Carlos María de Bustamante, se apresura a publicar su *Carta primera a un oaxaqueño,* que se publicó bajo el título de *Examen crítico sobre la federa-*

[71] *Ibid.*, 13 de agosto.

[72] Además en *El Águila Mexicana* de 19 de julio.

ción de las provincias del territorio mexicano. La carta se fecha el 10 de junio. "Todas las locuras tienen su época, estamos en la de federación", escribe el impugnador, y pregunta: "¿No será una cosa muy linda, muy pomposa, muy altisonante decir, la soberana república de Jalisco, de Oaxaca, etc. y poder datar un dictamen de comisión e imprimirlo... diciendo... Oaxaca libre a 2 de junio de 1823, 2o. de la libertad 3o. de la independencia...?"

La beligerante pluma de Bustamante no puede ser ignorada. Sus argumentos se reiterarán por el centralismo de la primera mitad del siglo XIX, y aun después. Bustamante hace historia, referencias a la del imperio español y las colonias anglosajonas. En el antiguo imperio de España el origen es uno; en el norte se distinguen los orígenes franceses, holandeses, ingleses, etc., con diversas costumbres y religiones. Las circunstancias de México no son las de Estados Unidos para formar una federación. La unión que en el norte sólo podía lograrse federándose, en México existe desde hace tres siglos. "Vuestros seductores —dice a Oaxaca—... os han engendrado tedio contra la capital de México, comparándola con la soberbia y prostituida Babilonia, como una tarasca deforme que siempre ha procurado tragaros, y sojuzgaros a su capricho". El discurso sigue. Estados Unidos trabajó por unirse; las provincias federalistas de México por desunirse cuando la necesidad de la unión es más imperiosa. El Congreso provincial que se pide está concedido, arguye Bustamante, desde el 28 de mayo, mencionando el proyecto de Constitución de la comisión del Congreso. El proyecto lo conocemos, y las provincias no se ocupan siquiera de censurarlo. Las proclamaciones federales son directas, aunque la actitud de cada provincia se matice en su mayor o menor radicalismo en relación con las autoridades centrales. Como veremos más adelante, el mismo Bustamante, propondrá en el Congreso que los diputados al nuevo presenten juramento por la federación.

* * *

La segunda provincia que establece su Congreso Constituyente es Yucatán. Ya nos referimos a los sucesos en la península hasta el 7 de junio. Este día, la Junta Gubernativa de Yucatán envía al diputado Manuel Crecencio Rejón, con un oficio que ya citamos, los documentos en que constan las resoluciones tomadas a partir del 29 de mayo proclamando el gobierno republicano. Yucatán —se le dice— no fía "su constitución y leyes particulares a la mayoría de un Congreso, que con dificultad puede penetrarse de los votos y necesidades de un país lejano, ni su gobierno a otras manos que a las de personas conocidas de cerca por los gobernados". Por ello "verá V.S. —continúa el oficio— que el voto general es el de federarse con esos países y formar con ellos una sola y única nación". Los votos de Yucatán, con los de las provincias, "contribuirán poderosamente a consolidar su unión". Se encarga a Rejón que persuada a los demás diputados yucatecos trabajen para que el sistema se adopte en las restantes provincias.[73]

El Sol del 14 de julio publica la convocatoria, del mismo 7 de junio, de la *Junta Provisional Gubernativa de la República* —de Yucatán— *para elegir diputados al Congreso que debe formar la Constitución.* La convocatoria, en diez artículos, se inspira inmediatamente en el modelo español. Realizadas las elecciones, el Congreso se reunió el 20 de agosto, de lo que da noticia *El Sol* de 24 de septiembre. El 11 de septiembre el Congreso Provincial de Yucatán

[73] *El Sol,* 13 de julio de 1823.

promulga un decreto ordenando que se circule en toda la provincia la convocatoria del Congreso de México, de 17 de junio, para elegir diputados al nuevo Constituyente.

Lo dispuesto en el decreto se reitera en el *Reglamento* de 15 de septiembre que lo adiciona, y que en su artículo 6 fija los términos de los poderes que se otorgarán a los diputados:

> 1o. Religión, independencia y unión.
>
> 2o. Que sólo pueden constituir a la nación mexicana en forma de gobierno republicano, representativo y federal, pronunciado ya por la voluntad general.
>
> 3o. Que la Constitución federativa que acuerden y formen con los demás diputados reunidos en Congreso constituyente, no tendrá fuerza de ley en la nación hasta que los estados federados por una mayoría que deberá determinarse en la misma Constitución, no presten su espontánea ratificación.
>
> 4o. Que la organización y régimen interior de los estados federados se reserva privativamente a sus Congresos particulares, siendo atribución precisa y exclusiva de los supremos poderes centrales, el arreglo y dirección de las relaciones e intereses comunes de la nación.[74]

El 18 de septiembre el Congreso de Yucatán se dirige a Lucas Alamán, secretario de Relaciones, asegurando que Yucatán "no ha pensado jamás en separar su suerte de las demás provincias de la nación, sino por el contrario, sus propósitos han sido, son y serán los de federarse con ellas, por medio de convenios, de justicia y equidad, y bajo de las órdenes y reconocimiento de un Supremo Poder Ejecutivo Central". Rechazan que se les hubiese calificado de "inmaduros, incircunspectos y anárquicos". Al contrario, la determinación de Yucatán tiende a evitar esa anarquía a que precipitaba "un Congreso que atento al interés particular de sus componentes se había hecho sospechoso por la parte que tomó en el alzamiento de Iturbide, o por el empeño que manifestaba en sostener una representación de que lo iban despojando sucesivamente las provincias cuyos clamores se desoían".

Yucatán adopta la forma federal que ni el Supremo Poder Ejecutivo ni el Congreso de México contrarían, con lo que la provincia no hace más que seguir la voluntad de los pueblos. Su pronunciamiento, se afirma, guardó toda la circunspección que el asunto exige, y no puede ser censurada "por no haber esperado el permiso de las autoridades supremas para usar del derecho de proveer a su conservación", cuando más necesaria es. Yucatán no falta al pacto de federación que ha adoptado "bajo de las bases que este Congreso ha acordado en 27 de agosto último".

El decreto del Congreso de Yucatán de 27 de agosto es breve:

> 1o. Que el estado de Yucatán es soberano e Independiente de la dominación de cualquiera otro, sea el que fuere.
>
> 2o. Que la soberanía, resultado de todos los derechos individuales, residiendo esencial y colectivamente en los pueblos que componen este estado, a ellos toca exclusivamente el derecho de formar su régimen interior, y el acordar y establecer por medios constitucionales, sus leyes políticas, civiles y criminales.

[74] *Ibid.*, 12 de octubre.

3o. Que para proveer más eficazmente a su defensa exterior, así como para estrechar más los vínculos de fraternidad, es su voluntad confederarse sobre bases de relativa equidad y con pactos de absoluta justicia con los demás estados independientes que componen la nación mexicana.

Se ratifica la división de los tres poderes, y que el gobierno es *popular, representativo y federal.* La base 6a. declara que todos los funcionarios "son delegados y agentes del pueblo", sujetos a responsabilidad. La 7a. y última, que el territorio del estado "es un asilo inviolable" para los extranjeros, con las mismas garantías de que disfrutan los nacionales.[75]

A partir de sus iniciales proclamaciones la concepción federal se va precisando, y ello en los mismos términos en las provincias más distantes entre sí. Las alarmas sobre una disgregación del país pueden ser sinceras entre quienes las propagan, pero es cierto y consta que no corresponden a la intención de los federalistas. Si puede producirse una ruptura será muy precisamente por la imposición de un régimen central. El argumento antifederal es válido en sentido inverso.

* * *

Atendamos a Guadalajara, en donde se lanzó la primera proclamación federal. El 25 de junio se recibe la convocatoria a elecciones para el nuevo Congreso. El 27 de junio, una comisión de la Diputación Provincial dictamina que se obedezca, de acuerdo con lo aprobado por la misma Diputación el 5 de junio, bajo la condición "de que el gobierno de la Nación mexicana ha de ser popular representativo federado, conforme a su voluntad general" y al pronunciamiento del estado de Jalisco. Las elecciones se realizarán con las siguientes variaciones:

Art. 1. Los diputados que se nombren en este Estado para el Congreso general constituyente mexicano, deben constituir a la grande Nación del Anáhuac bajo el sistema de República Federada conforme a su voluntad uniforme y general.

Art. 2. Consecuentemente, deben proceder inmediatamente a arreglar las bases de la federación general de los Estados mexicanos y a formar su Constitución general de todos ellos. A este objeto únicamente se han de contraer los poderes que se les otorgan.

Art. 3. Las indicadas bases de la federación y la Constitución general de los Estados federados, no se publicarán como ley hasta que se ratifiquen por los Congresos provinciales de los propios Estados.

Art. 4. Como en el sistema de gobierno federativo cada Estado federado no puede tener más que un voto en el Congreso general, para evitar gastos inútiles a este Estado, sólo se elegirán en él tres diputados en propiedad y otros tantos suplentes para el Congreso general constituyente mexicano.

Art. 5. Los poderes de estos diputados serán revocables a juicio del Congreso provincial en los términos que él determinare luego que se haya instalado.

Art. 6. Al día siguiente de la elección de diputados para el Congreso general constituyente mexicano se nombrarán los individuos que han de formar el Congreso provincial constituyente de este Estado, que deberán ser quince propietarios y cinco suplentes.

[75] *El Águila Mexicana,* 25 de octubre.

Art. 7. Los individuos de este Congreso provincial deben ser mayores de 25 años, nacidos en el Estado o avecindados en él con residencia de siete años, ya sean del estado seglar ya del eclesiástico secular, pero no podrán ser nombrados más que tres eclesiásticos en la clase de propietarios y uno en la de suplentes.

Art. 8. Luego que se verifique la elección de los individuos del Congreso provincial constituyente, se les pasarán los correspondientes avisos para que a la mayor brevedad posible se trasladen a esta capital, a fin de que se proceda a la instalación del Congreso.

Art. 9. Ésta se hará en el momento en que estén reunidas las dos terceras partes de los individuos del Congreso en los términos que disponga un decreto particular relativo a este punto.

Art. 10. Verificada que sea la instalación del Congreso, se disolverá la Diputación provincial actual, y el mismo Congreso determinará lo que estime conveniente en cuanto a la autoridad que deba desempeñar las funciones que están cometidas a la Diputación.

Art. 11. El Congreso provincial constituyente se encargará principalmente de formar la Constitución particular del Estado bajo el sistema de gobierno popular, representativo, federado, que se ha pronunciado con tanta decisión como firmeza por todos los pueblos del mismo Estado.

Art. 12. A todos los individuos del Congreso provincial se les abonará por razón de viático, un peso cada legua de venida y vuelta y por razón de dietas se abonarán 150 pesos mensuales a todos los que no sean empleados, ya civiles, ya militares, ya eclesiásticos, y si estos empleados tuvieren de renta una cantidad menor que la expresada, se les completará lo que falte.[76]

El dictamen es aprobado y se imprime y circula. Las elecciones se efectúan y el Congreso de Jalisco se instalará el 14 de septiembre, e iniciará sus sesiones el 18. La Diputación Provincial cesa en sus funciones por decreto de 18 de septiembre.[77]

* * *

En el intenso mes de junio es cuando el general Santa Anna, quien por mar se había trasladado en marzo desde Veracruz a Tampico a fortalecer, decía, las Provincias Internas de Oriente en su adhesión a Casa Mata, llega sin un plan determinado a San Luis Potosí. Pero el versátil general está atento a la situación, y el 5 de junio lanza una proclama y un plan que llegan a México el día 12 y que se publica en *El Águila Mexicana* del 15. Recuerda su grito del 2 de diciembre del año anterior en Veracruz. Aprueba que el Congreso convoque uno nuevo como lo solicitan las provincias. Mas a nadie se oculta, dice, que en el intervalo de su reunión pueden obrar los antiliberales, y en unión de las fuerzas a sus órdenes resolvió adoptar el plan en el que propone, en su artículo primero, la formación de un *Ejército Protector de la Libertad.*

El artículo 2 reitera lo declarado en el Plan de Veracruz sobre sostener la religión católica romana y las otras dos garantías de Iguala ya juradas.

En los artículos siguientes expresa Santa Anna que solicitará la activación de la convocatoria al nuevo Congreso para que sin restricciones los diputados obren de conformidad con las

[76] *Ibid.*, 15 de julio; Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 148-149; J.M. Bocanegra, *op. cit.*, pp. 266-267.

[77] *El Águila Mexicana*, 13 de octubre.

instrucciones de las provincias. Las fuerzas de Santa Anna sostendrán "a las provincias que por su espontánea voluntad tengan a bien pronunciarse por la República federada" si lo hacen por el voto general de sus pueblos. "El ejército se situará donde mejor convenga a su objeto —manifiesta Santa Anna—, y sin mezclarse para nada en ninguna operación hostil sólo le será lícito, como es de derecho natural, repeler la fuerza con la fuerza, en caso de ser atacado, u osen atentar contra la sagrada libertad de los pueblos". Se comunicará al gobierno y al Congreso el plan a fin de que no dicte órdenes "que tengan tendencia a la opresión de aquellos que quieran proporcionarse su bienestar según se ha dicho", ni contra las fuerzas a sus órdenes.

Un artículo, el 8, es más conminatorio: "Siempre que haya una fuerza armada con dirección a Guadalajara u otro punto que desee ser libre, se oficiará al jefe que la mande con copia de este plan, haciéndolo responsable ante Dios y los hombres de los males que pudieran suscitarse, si persistiese en su designio". Los que hostilicen a los pueblos libres serán considerados "reos de atentados contra la libertad", y "a su tiempo serán juzgados por las autoridades respectivas", agrega el artículo 10. Quienes trabajen "contra las ideas de este plan, ya sea con las armas, o con la seducción, se les formará causa...".

Las prolijas redundancias del inquieto general, y su oportunismo, prefiguran al hombre que durante 25 años tergiversará nuestra historia. Pero en esos días su pronunciamiento no es más que un acto de aventurerismo personal al insertarse en la proclamación federal. Santa Anna es acosado por el general Armijo, enviado por el gobierno a reducirlo, y por otra parte la Diputación Provincial y el jefe político de San Luis Potosí no lo apoyan. No nos demoraremos en la frustración de Santa Anna para acaudillar la revolución federal, que concluyó en sus comunicaciones de fidelidad al Congreso y al Supremo Poder Ejecutivo. En la comunicación al Congreso, de 3 de julio, se felicita por la promulgación de la convocatoria y porque está "impuesto que ninguna hostilidad amenaza a Guadalajara ni a ninguna otra provincia". Santa Anna concluye asegurando al Congreso una "obediencia —afirma— que jamás he negado, ínterin tengo la satisfacción de presentarme a V. Sob. a recibir sus preceptos".[78]

N.L. Benson narra y precisa los detalles de esta primera aventura federal del desasosegado personaje.[79]

* * *

Es Guadalajara la que plantea formalmente la crisis y es el punto neurálgico de ella. José María Bocanegra escribe en *Memorias* que el gobierno de México "tuvo noticia, según se dijo, de que los generales Bustamante y Quintanar, bajo la enseña de federalismo, formaron en el nuevo Estado de Jalisco un partido a favor de Iturbide, para restituirlo a su país y al trono".[80] Zavala también califica a Quintanar y Bustamante de "adictos y apasionados al ex emperador", y los acusa de tener proyectos ocultos "que cubrían bajo las apariencias de federación", para restaurar el trono de Iturbide.[81] Alamán coincide con Bocanegra y Zavala y va más lejos. Pa-

[78] *El Sol*, 13 de julio.
[79] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 180-189.
[80] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, p. 225.
[81] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 169.

ra él, después de que se promulga la convocatoria y Santa Anna vuelve a la obediencia del gobierno, otras provincias en las que "sólo se consideraba la federación como medio del restablecimiento de Iturbide, no se aquietaron con esto y aunque protestaron obedecer, seguían en oposición al gobierno y preparándose para una resistencia formal, especialmente Guadalajara", con Quintanar y Bustamante calificados como iturbidistas.[82] Menciona especialmente a Guadalajara, pero no da un indicio de cuáles son esas otras provincias iturbidistas que preparan la resistencia formal. Cuando escribe a un cuarto de siglo, el Alamán conservador y centralista todavía acude a los recursos polémicas del año 1823, y lo hace pocas páginas después de que opinó, refiriéndose al federalismo de Ramos Arizpe en el norte, que el sistema federal "ocurre naturalmente cuando hay cuerpos constituidos, como las Diputaciones Provinciales, en los que nacen con facilidad pretensiones de independencia —agregando—: en materia de instituciones políticas, basta crear las cosas y despertar los intereses locales; ellos se desarrollan después por sí mismos".[83]

El iturbidismo de Quintanar y Bustamante no se pone en duda, ni tampoco la existencia de sus proyectos ocultos. Sabemos del proyecto conspirativo de La Profesa en 1820; no conocemos el de Casa Mata. Ambos precipitan los acontecimientos y éstos los rebasan —al de La Profesa lo contrarían y el de Casa Mata parece frustráneo. El no precisado proyecto iturbidista de Guadalajara no rebasa el expreso federalismo republicano que se proclama y al que concurren las provincias. El primero es un propósito y el segundo un suceso objetivo, tan real que se impone a los mismos republicanos centralistas. Esta realidad es la que prevalece. Ella es la que Alamán reconoce e impugna, y en su momento juró.

* * *

El último documento que citamos de Guadalajara es el decreto de 27 de junio de su Diputación Provincial sobre elecciones de diputados al Congreso Constituyente de la nación y al Constituyente del estado de Jalisco. Los acontecimientos de Guadalajara se relacionan directamente con los de Zacatecas.

El 18 de junio se reúne la Diputación Provincial de Zacatecas. La falta de atención del Congreso de México a las demandas generales de las provincias "ha suscitado convulsiones peligrosas —se señala en el Acta de Zacatecas— dirigidas a conseguir por medios violentos lo que debiera haberse logrado por la razón". En Valladolid se trata de una junta de representantes con Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí; en San Luis Potosí se formó un ejército protector de la libertad de las provincias; en Saltillo se proclama la república federal; Guadalajara "toma una actitud hostil respetable", y en Zacatecas los jefes del ejército están en comunicación con Guadalajara "para auxiliarse mutuamente".

Zacatecas considera ante los peligros que es necesario conservar un centro de unión que concilie "el interés particular de las provincias con el general de la Nación". De acuerdo la Diputación con el Ayuntamiento, en sus sesiones de los días 12, 13, 16 y 17 de junio y con asistencia de tres regidores aprueba:

[82] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 708.
[83] *Ibid.*, pp. 684-685.

1o. Por ahora y con el solo objeto de conservar un centro de unidad, se reconoce al Congreso actual, Supremo Poder Ejecutivo de México, como a las primeras autoridades del Estado, sin que el Congreso tenga otro carácter que el de convocante.

2o. Las órdenes que uno y otro poder expidan para el bien general de la Nación, serán escrupulosamente observadas, sin más calidad que el de providencias, y lo será también la ley de convocatoria para el Congreso que debe constituir a la Nación.

3o. Las que interesen particularmente a esta provincia serán obedecidas o se suspenderá su cumplimiento a juicio de la Diputación.

4o. Ésta será provisionalmente, y hasta que se forme la Constitución del Estado, la primera autoridad de la provincia en los términos que expresará el reglamento de gobierno provisional de ella.

5o. Si por algún motivo inesperado se dejaré de formar el Congreso general, se federará esta provincia con la de Guadalajara y con las demás que quieran hacerlo.

Lo resuelto se comunicará a las diputaciones provinciales y al Congreso y gobierno de México.[84]

El 12 de julio la Diputación Provincial aprueba un plan provisional de gobierno y la convocatoria del Congreso Constituyente del estado. N.L. Benson cita el documento existente en copia manuscrita en la Colección Hernández y Dávalos de la Colección Latinoamericana de la Universidad de Texas. El plan de gobierno prevé que el orden interno y las relaciones con las demás provincias al igual que las medidas que corresponden al Poder Ejecutivo, se encomiendan a una Junta Provisional de Gobierno, de la que son individuos el jefe político, Domingo Velázquez, el comandante general, Pedro Iriarte, y el comandante local, Juan Paredo. El artículo 78 de la convocatoria expedida por el Congreso sobre la renovación de las diputaciones provinciales no se aplicará en Zacatecas, continuando la actual Diputación hasta la reunión de su Congreso Constituyente.[85]

Desde el 20 de junio la Diputación de Zacatecas comunica sus resoluciones del día 18 a las provincias. El 4 de julio contesta la Diputación de Durango que, al igual que las demás provincias, "sólo desea ser constituida en república federada", y ha "formado un plan con que invitar a las provincias de Sonora, Sinaloa y Nuevo México con quienes cree le conviene federarse". Al tener sus respuestas, si aceptan la proposición, puede estar cierto el estado de Zacatecas "que se tomarán las mismas o semejantes medidas que en ése, para que quede formado el Estado". Si Durango no puede auxiliar desde luego a Zacatecas, "no se opondrá en manera alguna a sus determinaciones, pues que sabe no tiene otro objeto que llevar a cabo la voluntad manifiesta de la grande Nación mexicana".[86]

* * *

El 30 de junio se aprueba por la Diputación Provincial de Durango el Acta de Federación de la Provincia. La Diputación considera que aunque la desigualdad de los estados no es un obs-

[84] *El Águila Mexicana*, 3 y 4 de julio.
[85] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 159-160.
[86] *El Águila Mexicana*, 2 de agosto.

táculo para constituir una federación, como lo demuestra la de Estados Unidos, será más estable la Constitución comprendiendo estados proporcionados. Las Provincias de Occidente no exceden en población a las de Oriente que han propuesto federarse. Conviene así que las cuatro de Oriente se unan y formen un gobierno común, conforme al plan que propone Durango: las cuatro provincias —Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa y Nuevo México— se unirán para formar el Estado Interno Occidental de la Federación Mexicana, que libre y *soberano de sí mismo* se unirá a los demás estados en relaciones de confederación. Se reconocerá al Supremo Poder Ejecutivo y al Congreso —a éste como convocante. Se acatará la convocatoria que se expida para el nuevo constituyente de la nación. Se cumplirá con las órdenes del Supremo Poder Ejecutivo que no se opongan a este plan y a las providencias del gobierno interno del estado. El gobierno de México no proveerá empleos sino a propuesta del estado, y sólo podrá nombrarse a hijos del estado o avecindados en él por más de siete años. En tanto se reúne el nuevo Congreso de los Estados Mexicanos Federados y se dan las bases de federación de cada uno, el nuevo estado se gobernará como lo establezca una junta compuesta de dos diputados de cada una de las diputaciones de las cuatro provincias, "y del vocal que para la misma diputen los comandantes generales" de ellas y el gobernador de Nuevo México. La Junta se reunirá en Chihuahua, y designará el lugar de su residencia y la del gobierno que establezca. La Junta y el gobierno fijarán la fuerza armada del estado, que estará a las órdenes del gobierno. Mientras se forma la Constitución del estado estarán vigentes la Constitución española y las leyes actuales en cuanto no se opongan al plan. Se circulará éste a las Provincias de Occidente para que libremente resuelvan su adhesión a él.[87]

El 2 de julio la Diputación Provincial de Durango dirige un Manifiesto a los habitantes de la provincia: "si vuestra Diputación Provincial tan luego como deseaba no correspondió al noble grito de los jalisqueños —explica—... creed que dolorosamente se vio precisada a sofocar sus unísonos sentimientos...". Se debatió en ella considerando no sólo a la provincia, sino a todas las de occidente. Únicamente anhela que se unan a ella en un pacto, Sonora, Sinaloa y Nuevo México para formar el Estado de Occidente. La distancia demora las respuestas. No obstante, "ya todos han conocido sus derechos y con la velocidad del rayo se han propagado las luces: ya la lucha no es expuesta, y vuestra Diputación os asegura que podéis entrar en ella con los mejores anuncios de una gloriosa empresa. Consumémosla pues —invita la Diputación—... penetrados por la más noble emulación al ver que un solo espíritu anima a Jalisco y Zacatecas, a Saltillo y Guanajuato, a Querétaro y Valladolid, a Oaxaca y a Campeche, gobierno federal han clamado ellas y gobierno federal han repetido las Provincias Internas de Oriente".[88]

Los documentos se hacen públicos con retraso, cuando *El Águila Mexicana* recibe copias de ellos, pero el gobierno los conoce con más oportunidad. Las proclamaciones de las provincias se van orientando hacia la formación de ligas federales entre ellas.

* * *

En *El Águila Mexicana* de 31 de julio se Publican dos oficios de la Diputación Provincial de

[87] *Ibid.*, 15 de agosto.
[88] *Ibid.*, 17 de agosto.

Zacatecas, ambos del 15 del mismo mes. En el primero, dirigido a los generales Negrete y Bravo, se les informa que el Supremo Poder Ejecutivo de México ordenó el día 4 anterior auxiliar en todo lo posible a la división a sus órdenes que se dirige en apariencia a San Luis Potosí a proteger, según declaró Bravo, el sistema de federación adoptado. La Diputación Provincial no duda del patriotismo de los generales ni del federalismo del Supremo Poder Ejecutivo. La Diputación manifiesta que en Zacatecas, decidida por la federación, no hay inquietud y no se requieren operaciones militares, además de que no puede recibir en su territorio cuerpo alguno de tropas por estar imposibilitada para auxiliarlo.

El mismo día 15 la Diputación de Zacatecas se dirige a la de Jalisco enviándole copia del oficio anterior. Se dice algo más: que en Zacatecas se recibió con el más alto aprecio el Plan de Gobierno Provisional de Jalisco y "las justas variaciones" hechas a la convocatoria al nuevo Congreso, adoptándolas Zacatecas *casi en todo*, y procurando uniformar sus resoluciones con el Plan de Jalisco. La causa de los dos estados es una, se declara, y ambos deben "prestarse también todo género de auxilios y obrar de total conformidad".

Sobre la expedición de Bravo, a quien no acompaña Negrete, volveremos más adelante.

* * *

Atendamos a otro suceso. El 1 de julio se reúnen en Celaya los generales Pedro de Otero, Luis de Cortázar, Miguel Barragán —además con la representación del general Armijo—, José María del Toro —como representante de Santa Anna—, y el coronel José María Márquez. El acta de su reunión manifiesta su propósito: buscar la salud de la patria y uniformar la opinión, como lo expresa Barragán, "proclamado comandante de Valladolid, Querétaro y Guanajuato así por los ciudadanos libres que componen aquellas provincias como por el Supremo Poder Ejecutivo". Barragán consideró indispensable convocar a los jefes de las provincias y a los generales que se encuentran en San Luis Potosí para reunirse en Celaya, en donde, después "de una larga, sostenida y escrupulosa discusión", se aprueban los siguientes puntos:

> 1o. Para evitar la anarquía se reconoce como punto central de unión al Supremo Poder Ejecutivo, mereciendo sus individuos la confianza de la nación, sin que se haya pensado nunca substraerse a su obediencia.
>
> 2o. Las tropas de dichos jefes reunidos, se obligan a sostener a toda costa la opinión de las provincias en que se hallan, explicadas por sus comisionados nombrados ya al efecto.
>
> 3o. La resolución se comunicará a dichos comisionados de Valladolid, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, "para que reunidos a la mayor brevedad manifiesten con toda libertad, cual sea la opinión de sus comitentes.
>
> 4o. Se reconoce en la junta "como general en jefe de las tropas residentes en las citadas cuatro provincias, al ciudadano Brigadier Miguel Barragán".[89]

Atendamos ahora a la reunión de los comisionados de las provincias, que se menciona en la junta de los generales.

[89] *Ibid.*, 12 de julio; *El Sol*, 12 de julio.

Aunque no conocemos los términos de la invitación que hizo la Diputación Provincial de Valladolid a las de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí para tratar sobre la convocatoria del nuevo Congreso y el establecimiento de la federación, disponemos de las actas de la reunión de sus representantes en Celaya.

Antes del 11 de junio, registra N.L. Benson, Querétaro acepta la invitación. La Diputación y el Ayuntamiento de Querétaro se reúnen los días 11 y 12. N.L Benson reproduce los puntos aprobados: que se manifieste al Congreso de México: 1) "Que la morosidad en expedir la convocatoria, ha originado los males en que nos vemos envueltos. 2) Que éstos nos han obligado a tomar providencias que demandan ejecutarse prontamente para precavernos de cualesquiera agresión y evitar al mismo tiempo la anarquía". 3) Sólo se reconoce al Congreso como convocante, pero se obedecerán sus órdenes y las del Supremo Poder Ejecutivo, cuando resulten en beneficio de la provincia. 4) Se informará lo acordado a las diputaciones de Guanajuato y Valladolid, "invitándolas con la unión, y ofreciéndoles conservar su tranquilidad con el ejército".[90]

El 23 de junio, cuando la Diputación Provincial de Valladolid ya conoce la convocatoria para el nuevo Congreso, se dirige a la de San Luis Potosí. Considera que están destruidos los recelos y asegurada la confianza conforme al *voto de los pueblos.* Debe observarse la convocatoria, "sin que esto sirva de embarazo —se dice a San Luis Potosí— para que se verifique la junta de nuestros comisionados, cuyo único objeto debe ser ya procurar desde ahora la estrecha unión de estas provincias para que constituyan un estado en el sistema federal y que todas arreglen a estos principios las instrucciones que den a sus respectivos diputados". El mismo día la Diputación de Valladolid comunica al secretario de Estado y Relaciones, Lucas Alamán, que aprueba la convocatoria.[91]

El 3 de julio la Diputación de Valladolid da instrucciones a Martín García de Carrasquedo, su representante a la junta de Celaya. La convocatoria promulgada por el Congreso tiende a "satisfacer el voto de los pueblos", y el gobierno, le dice, da pruebas de su celo por el bien público. Se debe desvanecer la opinión de que las provincias se proponen negar su obediencia a las supremas autoridades. García de Carrasquedo debe proponer a las cuatro provincias una solemne declaración reconociendo al Supremo Poder Ejecutivo y al Congreso.[92]

El 10 de julio se reúnen en Celaya los representantes de las diputaciones de las cuatro provincias, "con el objeto de meditar arbitrios, que uniformando la opinión evitasen los funestos resultados de la anarquía". La reciente promulgación del decreto de convocatoria, opina el prebendado de la catedral de Valladolid, Martín García de Carrasquedo, varió, "aunque no en toda su extensión, el objeto de esta reunión", por lo que presenta algunas proposiciones en "beneficio común de las provincias unidas". Ellas son: la declaración de que el gobierno de México no debe extrañar la reunión, "que no tiene la calidad de central gubernativa como había entendido: que jamás han pensado las provincias en sustraerse de dicho gobierno", pues sólo se ha tratado de ayudarlo a formar la unión. Preocupa al comisionado de Valladolid que en las elecciones "se nombrasen sujetos notoriamente adictos a la libertad interior y ex-

[90] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 137; *El Águila Mexicana*, 20 de junio.

[91] *El Sol*, 9 de julio.

[92] *Ibid.*, 12 de julio.

terior de la nación". El mismo día en la noche se realiza la segunda sesión, en la que se aprueban siete puntos: "1o. Se reconoce como punto de unidad al Supremo Poder Ejecutivo. 2o. La opinión de las cuatro provincias es que se les constituya en República Federada, en los términos que el futuro Congreso determine. 3o. Aunque se podrían observar algunos artículos de convocatoria, se admite ésta 'para evitar mayores males'. 4o. Se aprueba que tengan efecto los artículos del acta de los generales del 1 de julio. 5o. Se reconoce como general en jefe de las provincias al general Miguel Barragán, 'salvas siempre las disposiciones del gobierno'". El punto 6o. es de reconocimiento a la conducta del general Barragán.

Después de aprobarse los puntos anteriores, Joaquín de Oteiza, representante de Querétaro, y Tomás Vargas, de San Luis Potosí, propusieron: "Que en el exento de que de hecho se disolviera el gobierno por alguna de las causas ordinarias en una revolución (caso remoto, pero posible), se unan estas cuatro provincias para reprimir cualquier ataque exterior". En todo caso, proponen, "las provincias debían auxiliarse mutuamente, y no tomar resolución alguna en negocio grave, trascendental a todas, sin acuerdo de las demás". Se reserva tratar la iniciativa en la sesión que se realiza al día siguiente.

La sesión del 11 se inicia comunicando a los representantes un oficio del día 9 de la Diputación Provincial de Guanajuato, con la orden del Supremo Poder Ejecutivo sobre la disolución de la junta. La Diputación da instrucciones a su representante, Benigno Bustamante, de que se retire de la junta, manifestando la disposición de Guanajuato de estrechar aún más las relaciones entre las cuatro provincias. Como la misma prevención hizo el gobierno de México a las demás provincias, se resuelve que la junta cese y que se turnen a las diputaciones copias de las actas para que "hagan el uso conveniente" de ellas.[93]

La junta se da por terminada, pero no obstante que se acatan las órdenes de México a través de la Diputación Provincial de Guanajuato, no se declaran insubsistentes los acuerdos aprobados el día 10, y cuando las actas se publican en México en *El Sol* el 24 de julio, el gobierno no hace aclaración alguna sobre ellas.

El Águila Mexicana publica el 14 de agosto la exposición que el 26 de julio dirigió al Supremo Poder Ejecutivo la Diputación Provincial de Querétaro. La Diputación justifica lo moderado de su conducta y sus relaciones con Valladolid, Guanajuato y San Luis Potosí. Como prueba reproduce los puntos aprobados en Celaya el 10 de julio, que da por vigentes.

La cesación de la junta de Celaya no altera la proclamación de las cuatro provincias, que confían ahora en las elecciones de diputados al nuevo Congreso la instauración federal.

* * *

Extrañamente, en apariencia, no se relaciona con el federalismo, ni por el gobierno y el Congreso de México ni por las provincias, la separación de Guatemala que en esos días se ventila. Las proclamaciones federales, las más radicales, pueden llegar a declarar su separación de la obediencia a las autoridades de México —una separación siempre condicional—, pero ninguna llega a proponer una secesión.

Concluyamos esta página con una nota en paréntesis.

[93] *El Águila Mexicana*, 23 y 24 de julio.

La independencia la consumó el antiguo virreinato de Nueva España, la América Septentrional, el Anáhuac, la América Mexicana, como lo van llamando los insurgentes en busca de su propio nombre. Al imperio independiente se suman las provincias de la América Central, y al separarse éstas no ejercen un derecho siquiera dudoso.

Se había buscado un nombre para la nación independiente, mas la conciencia de que ella existe en su entidad es manifiesta en todos y cada uno de los pronunciamientos federales, como lo fue en la insurgencia.

En la emancipación se van relegando nombres significativos del pasado colonial. El Nuevo Reino de León será simplemente la provincia de Nuevo León; Nueva Galicia será Jalisco; Nuevo Santander será Tamaulipas; Nueva Vizcaya será Durango y Chihuahua, en la búsqueda de nombres propios que correspondan a su nueva identidad. Nueva España será México, y ello por sí es un hecho que sin discursos probatorios revela la unidad de la nación. Como Andrés Lira observa en su estudio sobre la creación del Distrito Federal, México es un país cuyo nombre lo da su capital. En la América del istmo, Guatemala, Panamá y San Salvador son provincias que desde la colonia llevan los nombres de sus capitales, pero ninguna de éstas tiene el origen y el significado histórico que la de México.

Si el nombre mismo de México es un signo de metropolitanismo interno —el que denuncian las provincias—, es también una verificación de la unidad de la nación que reconoce a la capital como su centro y la repudia en cuanto subroga a la lejana metrópoli colonial.

La ciudad, México, es un hecho sustantivo. La ciudad se erige sobre el solar de Meshico-Tenochtitlan, la metrópoli arrasada del imperio prehispánico, y desde ella se continuó la aventura de la conquista por los territorios de la América Septentrional. México es el asiento de las fundaciones. Los pueblos del antiguo imperio dejan de ser sus tributarios para convertirse en patrimonio de la corona de Castilla, y con los de la América Septentrional se integran en la unidad política del reino de Nueva España.

La capital hegemónica del virreinato se ostenta, al igual que Lima en el Perú, corno la más prestigiosa del Nuevo Mundo. Se invoca el imperio de Moctezuma en la guerra de independencia, y se invoca en 1823, frente a México-metrópoli, la república de Tlaxcala. México-ciudad es un símbolo de México-nación y el recinto consagrado que los pueblos asedian para ocuparlo y hacerlo propio.

Ningún interés, ninguna racionalización, pueden ignorar ni eximir a la nación de esta mítica realidad que subyace en el origen y conjunción de las contradicciones y del conflicto.

Pero México-nación es el único territorio del imperio español en el que la independencia no se proclama en su capital. Se proclama en Chilpancingo y se consuma en la ocupación de México. El imperio de Iturbide se proclama en México; la República en las provincias. Las batallas no se ganan o pierden en México-ciudad, pero ella es el trofeo la victoria.

La nación soberana debe hacer suyo al México-ciudad, y por vez primera entra en él con sus diputados al Congreso que la constituirá. La ciudad subyuga al Congreso, y frente y contra ella, las proclamaciones federales rescatan la soberanía de la nación, y México-ciudad debe renunciar a su legado metropolitano de dominio. Todo esto puede enunciarse en un satisfactorio y formal proceso dialéctico, mas nos desviaríamos de seguir los acontecimientos en sí.

Parte novena

EL DESENLACE. LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL

1

HACIA.LA REUNIÓN DEL NUEVO CONGRESO CONSTITUYENTE

A lo largo de algunas páginas hemos señalado el proceso que en la revolución liberal dio su primera forma representativa, con las diputaciones provinciales, a la entidad de las provincias. Mediante todas ellas nos propusimos esbozar, en una incompleta ilación documental, el arduo empeño de la nación a partir de la consumación de su independencia para dar forma al proyecto revolucionario de su identidad, hasta llegar en el conflicto a la víspera de su desenlace.

Edmundo O'Gorman acierta en su eficacia conceptual y verbal cuando reflexiona sobre el México que se encuentra ante sí mismo como nación independiente y vive un "subterráneo forcejeo ontológico". Un forcejeo entre una secular pesantez histórica y la conciencia de una libertad actual para decidir por sí y para sí su ser y su manera de ser, inaugurando su propia historia. Esto es, constituyéndose en un acto primario de fundación.

Veámoslo desde otra perspectiva.

En la Revolución francesa *se fundó la República francesa,* y por más que en ella se declaren como universales los Derechos del Hombre, y se inicie con un nuevo calendario una nueva Era, la Gran Revolución es un suceso en *la historia de Francia* cuya identidad se exalta. Todo cuanto ella inspira en el mundo europeo y atlántico lo protagoniza la Francia histórica. En México, la unidad política ha sido impuesta por limitaciones geográficas y por razones metropolitanas. La América Septentrional, el virreinato de Nueva España, *es un objeto histórico.* Mas a lo largo de tres siglos los descendientes de los conquistadores, los pobladores y los emigrantes, van tomando conciencia de sus singulares derechos como españoles americanos, primero, y finalmente de su ser de americanos como sujetos de su propia identidad a la que incorporan la de los descendientes de los antiguos pobladores del Nuevo Mundo. La negación de la negación de esa identidad es la *última ratio* de la revolución de independencia.

La decisión de inaugurar nuestra propia historia es, diciéndolo en la más simple acepción de diccionario, la de constituirnos en cierta calidad y condición conforme a nuestra voluntad expresa y comunitaria, una vez subvertida la titularidad de la soberanía.

Consumada la independencia, los sucesos entre 1821 y 1823 ocurren en el desconcierto y en el forcejeo inicial de que hemos sido testigos. Sabemos quiénes somos y la cuestión es qué vamos a hacer de nosotros mismos. Ciertamente la respuesta a la pregunta no puede darse en un acto de revelación.

También es cierto un hecho singular: al país no lo domina la figura de un hombre, o la de varios cuyo prestigio de caudillos les permita arrogarse o que se les reconozca la tutoría revolucionaria de la nación. Don Vicente Guerrero y don Guadalupe Victoria, los dos jefes no amnistiados durante la insurgencia, aceptan el liderazgo de Iturbide, aunque Victoria se apar-

te pronto de él. El general Guerrero acepta el exilio político como Comandante General del Sur y es condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe. Guerrero y Nicolás Bravo aceptan o no se oponen públicamente a la proclamación imperial de Agustín I aunque Bravo está involucrado en una previa conspiración republicana. La insurgencia hereda mártires y no caudillos nacionales, y quienes pudieran serlo se retraen y no disputan el primer lugar a Iturbide. En el vacío, Iturbide crece desde la conspiración de La Profesa a factótum en el episodio de la consumación de la independencia y a emperador de México. El antiguo régimen y sus hombres se debaten por subsistir en la nación independiente sobre los supuestos mismos de la revolución. La rebelión de Casa Mata es también la de los jefes y oficiales del antiguo ejército realista desconcertados ante los acontecimientos que los irán relegando a su propia inanidad.

Fechada el 16 de mayo de ese año de 1823 aparece un *Manifiesto del ciudadano Vicente Guerrero a sus conciudadanos*, haciendo historia. El documento es sobrio. Después de 11 años de insurgencia y cuando Iturbide se decidió por la independencia proponiéndole el que sería Plan de Iguala, "me adhería a él —escribe Guerrero— y me puse a las órdenes de aquel caudillo, porque llegué a entender, que era el camino menos peligroso para lograr nuestra emancipación". Advirtió desde entonces, continúa

> hasta qué grado pudiera extenderse el espíritu que lo animaba, y aunque repugnaba dicho plan a mis ideas, porque le daba una fuerza de ley, y contenía los fundamentos del estado, no me costó violencia aceptarlo, fundado en que la nación cuando se viese libre, tendría un derecho para desecharlo, negando a Iturbide la facultad de legislar, puesto que no tenía poderes para ello, y cuantos actos ejerciese en nombre de la nación, sólo comprometían su voluntad presunta. Testigo es su comisionado D. Antonio Mier y Villagómez a quien manifesté mi decisión y las nulidades que padecía el plan no pudiendo menos que confesarlo sin resistir a mis exposiciones.

Ni siquiera después de la ominosa ejecución del general Guerrero, en febrero de 1831, fue rectificado o desmentido su dicho por Mier y Villagómez.

De las dos expectativas —independencia y revolución—, la primera es la que tuvo prioridad. Los historiadores y testigos contemporáneos lo verifican, y la carta del general Guerrero a Iturbide el 20 de enero de 1821 lo ratifica, mas condicionándola expresamente al declararle: "porque ni me ha de convencer nunca a que abrace el partido del rey, sea el que fuere...".

Alamán en su elogio al Plan de Iguala lo corrobora cuando escribe que bajo la sola bandera de la independencia se unieron "los hombres de todas las opiniones, conformándose aparentemente con los principios que aquel plan establecía, dejando para después combatirlos y atacarlos...".

La oposición surgió, lo hemos visto, bien pronto, y llegó hasta la pugna entre el Congreso e Iturbide, y a los "ruidosos y violentos acontecimientos de su proclamación", como escribe Guerrero en su *Manifiesto.*

Mas la oposición evita llevar al país a la guerra civil, y con ella comprometer la independencia apenas consumada. Y un hecho es cierto y público: no son los adversario de Iturbide quienes rompen el statu preconstituyente. Con una gran probidad el general Guerrero reconoce hasta dónde se cedió ante Iturbide: "no sería tan costoso —escribe— que Iturbide imperara en el Anáhuac, si gobernara por el sendero que le demarcaran las leyes". Pero la monar-

quía incluso se declara hereditaria cuando es general la repugnancia a ella, y el súbito emperador atenta contra todo, apresa diputados, disuelve el Congreso, crea la Junta Instituyente a la que dicta sus facultades, y se reserva la iniciativa de las leyes.

"Hasta aquí fuimos fríos espectadores" escribe el general Guerrero sin excusarse, y agrega: "conocí que los males se acercaban al extremo (y) no me detuve más en pronunciarme por la causa de la libertad, cuya voz acababa de resonar en Veracruz". En compañía del general Bravo sale de México hacia Chilapa. No están en inteligencia con los jefes que fraguan la ambigua rebelión de Casa Mata. Su adhesión es a la proclamación republicana en la que está comprometido el otro insurgente, Guadalupe Victoria.

El imperio no existe, la monarquía se desvanece, y el general Guerrero previene: "Cuidado, Mexicanos... no consideréis otros amos que os vuelvan a aprisionar, ni una gratitud indiscreta os llegue a persuadir que vuestros defensores merecen divinizarse... no exageremos por un mérito extraordinario los servicios que de obligación debemos a la patria".

La probidad del antiguo insurgente excluye cualquiera vana y superflua justificación.

Después de que el 3 de julio el Congreso designa al general Guerrero individuo suplente del Supremo Poder Ejecutivo, Carlos María de Bustamante, el irreductible enemigo de Iturbide, registra en su *Diario* el día 6 siguiente su visita para felicitarlo: "Rodeábanlo muchas personas de mediana esfera, atraídas del cariño general que se había granjeado... y parece que se leía en sus semblantes estas palabras... *yo te visito porque te amo*... No puede oírsele sin interés... y (Guerrero) es la historia de la revolución andando por lo respectivo al sur".

* * *

La monarquía iturbidista no formuló siquiera su proyecto. Un conato fue el del *Reglamento político provisional* que no se llegó a aprobar. Su mismo título de provisional revela su inconsistencia. A dos años de consumada la independencia los hechos se suceden en una situación preconstituyente.

Según Carlos María de Bustamante se descubrió, después de su salida de México, "que Iturbide había mandado formar una Constitución que se prometía dar a la Nación por sí mismo, al Lic. D. Fernando Pérez Marañón su compadre, Intendente que fue de Guanajuato (y gran pieza), al Lic. Espinosa, D. Juan José de los Monteros (alias) D. Fidel, buena pieza, al Dr. López de Irapuato, al ciego Dr. D. Francisco Severo Maldonado, gran calabaza, y que nos había engañado con su pacto social escrito en Guadalajara". Bustamante registra la noticia en su *Diario* el 5 de mayo. De existir, éste sería el primero y único proyecto promovido por Iturbide, lo que le daría un grande interés, y más andando en él la mano del doctor Maldonado. Pero la sola referencia no altera en manera alguna el hecho de su afasia constitucional.

La proclamación de la república federal en las provincias es la primera definición revolucionaria sobre el que *debe ser* el proyecto constitutivo de la nación. Se acusa de iturbidismo a Quintanar y a Bustamante (Anastasio), pero también lo es Gaspar López que se opone a Ramos Arizpe en Coahuila. Frente al Congreso y al Supremo Poder Ejecutivo de México, los antiguos jefes y oficiales realistas, aliados a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos, proclaman la federación. ¿Hasta qué punto hay en ellos una conciencia revolucionaria —liberal— que se manifiesta en la situación revolucionaria? No ha sido dilucidado. Como tam-

poco cuál es la participación que tienen en los acontecimientos los dispersos insurgentes amnistiados que agitaban en el año 1820, como lo informaban Ruiz de Apodaca y Odoardo. Sabemos, por la irritada pluma de Bustamante, del subdiácono insurgente Ignacio María Ordoño que revoluciona en Oaxaca. ¿Cuántos Ordoños inquietan en el país?

Las preguntas pueden multiplicarse. Mas el hecho evidente es que las provincias se pronuncian por la república federal, y que en la ciudad de México, el Congreso —dividido— y el Supremo Poder Ejecutivo van cediendo ante los pronunciamientos federales.

Registremos uno de los últimos episodios en el que ya es un desenlace.

* * *

Mencionamos las últimas resoluciones de Guadalajara en el mes de julio y la adhesión de Zacatecas a ellas. También la comunicación de Durango a Zacatecas, y el manifiesto de la Diputación Provincial de Durango, el 2 de julio, proponiendo la formación de otra liga federal en las Provincias Internas de Occidente.

Las resoluciones de Zacatecas y Guadalajara en los días en que Santa Anna se mueve como *protector de la federación* en San Luis Potosí y cuando el general De la Garza obra de acuerdo con Ramos Arizpe en Nuevo León y Tamaulipas, crea una frontera federal insurreccionada desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Las provincias que adoptan actitudes menos radicales no dejan de ser federalistas.

En la situación, el gobierno de México resuelve enviar fuerzas al mando del general Bravo, a quien acompaña Negrete, aparentemente en contra de Santa Anna, pero dirigidas hacia Guadalajara. Jalisco y Zacatecas se disponen a resistir. La prudencia de Bravo evita el choque, y desde Irapuato conviene en conferenciar con los representantes de Jalisco y Zacatecas. Se conviene una reunión en la villa de Lagos.

Los comisionados de Jalisco llevan la representación de la Diputación Provincial, y son Luis Quintanar, gobernador de Jalisco, Pedro Vélez y Juan Cayetano Portugal. La de Zacatecas nombra a Pedro Iriarte, Juan José Román y Santos Vélez. El general Bravo nombra como los suyos a José Domínguez y Mariano Villaurrutia. Las sesiones de los representantes se inician el 8 de agosto. N.L. Benson resume lo tratado.[1]

No nos demoraremos en el detalle conocido de las conversaciones y del primer acuerdo entre los comisionados el día 9, desaprobado por el general Bravo, para registrar únicamente el convenio del día 14, reiterando en sustancia el acuerdo del 9. Tampoco nos referimos a las numerosas contestaciones entre los generales Quintanar, Negrete y Bravo, y con los jefes políticos de otras provincias, que no alteran la situación planteada por Jalisco y Zacatecas.

En la última reunión de Lagos, el día 14, se consideran las adiciones propuestas por Bravo al acta del día 9. Los representantes de las provincias mantienen sus puntos pero ven "con la mayor satisfacción que substancialmente son unos mismos los sentimientos e ideas del Supremo Gobierno de México con los de estos estados en todo cuanto dice relación al bien general de la nación, y que entienden que las pequeñas diferencias que todavía aparecen, no tienen otro origen más que algunas equivocaciones que se han padecido en el asunto", creen

[1] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 162-164.

desvanecerlas con las modificaciones que hacen a varios artículos acordados el día 9 y a los que Bravo hace observaciones. Los representantes convienen en que los artículos queden en los siguientes términos:

1o. Los estados de Jalisco y Zacatecas repiten de nuevo que reconocen al Congreso y Supremo Gobierno de México como centro de unión de todos los estados de Anáhuac.

2o. Se obedecerán las órdenes de México en todo lo que se dirija a la felicidad general de la nación.

3o. Los estados contribuirán a los gastos generales de la nación, y cooperarán con sus fuerzas a sostener la independencia.

4o. Las providencias que emanen del Soberano Congreso y Supremo Poder Ejecutivo de la nación que sólo interesen a los estados de Jalisco y Zacatecas serán puntualmente obedecidas, siempre que no se opongan al sistema de república federada, y a la felicidad de los nuevos estados, teniéndose por interinas hasta la revisión del nuevo Congreso Constituyente.

5o. Los diputados al futuro Congreso no podrán constituir a la nación en otra clase de gobierno que el de república federada, por ser conforme a la voluntad general que no debe contrariarse.

6o. Aunque el objeto del nuevo Congreso sea formar la Constitución de la nación, podrá aprobar providencias en casos urgentes, en tanto se reúne el primer Congreso Constitucional.

7o. La ley de convocatoria será cumplida en toda su extensión en lo que respecta al Congreso futuro general; pero no podrá éste constituir a la nación sino en la forma que prescribe el artículo 5o., y los artículos adicionales sobre la ratificación de las bases de federación y constitución de los estados federados por los Congresos provinciales sobre que cada estado no tenga más que un voto en el Congreso, y sobre la revocabilidad de los poderes de los diputados, no se deben estimar como leyes para toda la nación, que no podían dar los estados de Jalisco y Zacatecas, sino con unas instrucciones para sus respectivos diputados, a fin de que pidan al Soberano Congreso general la debida declaración en la materia (*sic*).

8o. Los Congresos provinciales se formarán como ya está previsto para Jalisco y Zacatecas y promulgarán sus constituciones particulares, y en lo que interese al bien general de la nación se ajustarán a la Constitución Federal.

9o. Los reglamentos provisionales de gobierno de Jalisco y Zacatecas, de 16 de junio y 12 de julio, seguirán vigentes, hasta que no los varíen los constituyentes locales o el nuevo Constituyente en cuanto se refiera a la nación en general.

10o. Formando parte del ejército nacional las fuerzas al mando de Bravo y Quintanar, se retirarán a donde indiquen sus jefes "con arreglo a las órdenes del supremo gobierno, sin conservar uno respecto del otro ninguna actitud hostil.

11o. No se hará cargos a quienes creyendo que estaban en oposición al gobierno de México y las provincias los auxiliaron.[2]

El general Bravo no está de acuerdo con lo convenido por sus representantes y los de Jalisco y Zacatecas, pero suspende toda hostilidad e informa al gobierno de México. El 27 de agos-

[2] *El Sol*, 1 de septiembre de 1823.

to el secretario de Relaciones, Lucas Alamán, dirige a Bravo un oficio con observaciones sobre el Acta de Lagos, para que las comunique a los representantes de las provincias. Para Alamán no se deben adelantar en los estados resoluciones que corresponden al futuro Congreso que se reunirá en dos meses. Examina detalladamente los artículos del acta formulando sus objeciones. Entrar en los detalles no es necesario. Aludamos a alguna. Si se reconoce que los congresos provinciales se conformarán a las bases de federación que apruebe el Congreso nacional, "¿cómo podrán —los provinciales, se pregunta— proceder a nada pues que deben subordinar a ellas sus providencias?" No se justifica formar cuerpos cuyas atribuciones son desconocidas. Preocupa también a Alamán el problema de reducir a la práctica la contribución de los estados a los gastos de la nación: "Es regular que entiendan que las dos provincias en cuestión —advierte Alamán—, sometiéndose a las leyes generales de impuestos y reclutas, contribuirán a los gastos de la nación *con el sobrante de las rentas* y con el número de hombres que en virtud de dichas leyes les corresponden". El punto será álgido entre Jalisco y México a lo largo de 1824.

Sobre el artículo 5 del Acta de Lagos, Alamán hace suyo y elogia lo manifestado por la Diputación Provincial de Valladolid a la de Jalisco, que supone conocen los comisionados y de la que envía copia.[3]

El día anterior a la publicación del Acta de Lagos, en *El Sol* de 31 de agosto se reproduce la Exposición de Valladolid a Quintanar —no a la Diputación Provincial—, de la que se dirige copia el 21 de agosto a Alamán, sin constar la fecha del documento. La Diputación de Valladolid acusa recibo de todas las resoluciones aprobadas en Guadalajara "en el nuevo sistema de gobierno que ha adoptado", estando convencida de la rectitud de las intenciones de Jalisco. Atendiendo al bien público en situación tan delicada, Valladolid se siente obligada a hacer algunas observaciones. No supone que las medidas del gobierno de México sean para romper hostilidades con Jalisco y Zacatecas, "sino en el último e inevitable caso de creer que es el último remedio para salvar la patria". El conflicto radica en las adiciones de Guadalajara a la convocatoria para el nuevo Congreso, las que no examinará Valladolid. Considera que las provincias deben marchar para constituir la federación, "uniformes al punto de reunión". Por ello Valladolid aceptó la convocatoria sin restricciones, "pues siempre que se disminuya el número de diputados que corresponden según la población, que se les prescriban condiciones que restrinjan sus facultades, no autorizándolos bastantemente para aprobar la Constitución", se demorará la instalación del Congreso o se obstaculizarán sus trabajos.

En el caso, no imaginable, de que el futuro Congreso "desatendiendo el voto universal se opusiera al sistema de una federación verdadera, esta declaración —dice Valladolid— sería la voz de alarma para todas las provincias que en tal evento era justo y necesario obraran de un modo enérgico para darse aquella forma de gobierno que han creído ser lo único que puede hacerlas felices". El futuro es otro, porque "no habrá provincia que deje de dar a sus representantes instrucciones particulares sobre este objeto". Valladolid ruega a Jalisco que sacrifique su opinión respecto a la convocatoria en bien de todas las provincias y de su unión federal. Valladolid pide al gobierno de México, anuncia, que se suspendan las disposiciones contrarias a Jalisco.

Si Alamán, y con él el Supremo Poder Ejecutivo hacen suya la exposición de Valladolid, la cuestión de fondo está resuelta al admitir la elección de diputados compromisarios al Con-

[3] *Ibid.*

greso Constituyente. No debemos olvidar que desde el 2 de julio el Congreso había nombrado individuo suplente del Supremo Poder Ejecutivo a José Mariano Michelena, opositor a Iturbide, antiguo diputado a las Cortes de Madrid con Ramos Arizpe y Alamán, y a quien éste atribuye ideas republicanas y federales, aunque incurra en la inexactitud de decir que las manifestó en las juntas de Puebla, en marzo, como diputado por Michoacán.[4]

* * *

Desde el 2 de agosto, y atentos a las medidas que tomaba el Ejecutivo en relación con Guadalajara, Antonio José Valdés, Santiago Alcocer y Prisciliano Sánchez, se dirigen al Congreso expresando la difícil situación en que se encuentran como diputados por Jalisco cuando saben que fuerzas militares se aproximan a su estado en vísperas de las elecciones. El Ejecutivo al enviarlas se funda en lo aprobado por el Congreso, el 21 de mayo, al tomar "medidas y providencias para restablecer la tranquilidad alterada por los movimientos y resoluciones de las primeras autoridades de Guadalajara, prefiriendo las medidas de persuasión", según el artículo 4 del decreto, en el que también se ordenó la impresión y circulación del proyecto de Bases de República federativa de la Comisión.

Los generales al mando de las fuerzas inspiran confianza a los diputados de Jalisco, como también el Supremo Poder Ejecutivo. No obstante, temen la guerra civil, por lo que llaman la atención del Congreso sobre el asunto.

Gómez Farías y Francisco García, diputados por Zacatecas, manifiestan los mismos temores, y piden "que el Congreso se sirva determinar que el artículo 4o. del decreto de 21 de mayo... no tenga efecto por ser aquella disposición el único apoyo en que pueden fundarse las operaciones del gobierno".[5]

Según Bustamante, el propósito de los diputados "era enervar las operaciones del gobierno... comprometiendo la autoridad del Congreso... Yo preveo —escribe en su *Diario* el 2 de agosto— que tendremos toros y cañas la semana próxima".

El día 6 el Congreso turna a la comisión especial una nueva proposición de Gómez Farías, Prisciliano Sánchez y Francisco García para que se derogue el artículo 4o. del decreto de 21 de mayo.

El 8 de agosto Prisciliano Sánchez solicita permiso para retirarse a su estado por razones de salud.

En sesión extraordinaria del Congreso, solicitada por el gobierno, el 15 de agosto se da cuenta con un informe del general Bravo y los documentos de las juntas de Lagos. Inmediatamente Zavala llama la atención sobre la cuestión de las instrucciones a los futuros diputados, que para Jalisco es condición del arreglo. Zavala no acepta "que los representantes del pueblo lo constituyesen según la voluntad de algunos comitentes, sino arreglándose a lo que les dictaba su prudencia, pues que muy raras veces podía tenerse conocimiento de la voluntad general". La proposición de los comisionados en Lagos es para Zavala "inadmisible en política", y pide que una comisión dictamine sobre los documentos. En Zavala siempre hallaremos una nota

[4] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 684.

[5] *El Águila Mexicana*, 4 de agosto.

discordante o poco consecuente en los instantes críticos, al menos con la imagen de *Profeta del Liberalismo* en la expresión que acuña Raymond Estep desatendiéndose de sus manifestaciones.

Según Antonio José Valdés lo convenido en Lagos está sujeto a la aprobación o desaprobación del Congreso. Se debate lo confuso de la situación por no tener un informe escrito del gobierno para satisfacer el juicio del Congreso. Finalmente se aprueba la proposición de Zavala y Bocanegra para que se forme una nueva comisión que dictamine en 24 horas sobre los documentos. Para la comisión se nombran a Tarraso, Becerra y Osores.[6]

El día 16 se presenta al Congreso el dictamen que concluye proponiendo como resolución: "que el Congreso queda enterado de las contestaciones entabladas por el general D. Nicolás Bravo en los asuntos de Guadalajara y Zacatecas, que continuará bajo las instrucciones que le mande el gobierno, quien las dará según sus facultades, reservándose tomarlo todo en consideración en cuanto venga el último resultado que espera se le comunicará a la mayor brevedad; aprobando desde luego el olvido general que propone sobre lo ocurrido con motivo de las presentes políticas diferencias".

En la que podemos calificar de elusiva conclusión no se propone derogar el artículo 4o. del decreto de 21 de mayo y se considera el conflicto en suspenso, concediendo olvido general en las disensiones de los estados.

Antonio José Valdés estima "que el dictamen de la comisión se había extendido con el mayor tino y prudencia; que en esta virtud lo aprobaba". Bustamante pide al Congreso que la amnistía se extienda a Oaxaca. Varios diputados apoyan la amnistía general. Para José María Covarrubias la amnistía se decreta tarde y no producirá efectos Pues "las provincias que se han decidido por el gobierno republicano federativo no retrogradarán... Yucatán, Guadalajara, Zacatecas y Oaxaca, caminarán adelante". Yucatán ha instalado su Congreso desde el 1 de agosto, y otras provincias, como Puebla, no han seguido el ejemplo, afirma Covarrubias, "por la imposibilidad de hacerlo".

El dictamen se aprueba en sus términos.[7]

Lorenzo de Zavala publicará un alegato sobre "la naturaleza de los poderes dados por los comitentes a sus diputados", impugnando las instrucciones imperativas y sosteniendo la libertad de los diputados para decidir su voto. Zavala sin tocar el tema de federación adopta en esto la posición de los centralistas.[8]

Los argumentos no consideran en ningún momento la distinción entre Congreso Constituyente y constituido, ni Zavala advierte que el Constituyente es el primer órgano institucional de la revolución, el que formará el proyecto constitucional de ella de acuerdo con su pronunciamiento político, como lo había planteado Gómez Farías el 17 de abril.

* * *

El conflicto con Guadalajara entra en punto muerto. Bravo se retira a Celaya y Quintanar a Guadalajara. Jalisco continúa obrando conforme a sus planes internos. El 3 de septiembre la

[6] *El Sol*, 18 de agosto.
[7] *Ibid.*, 17 de agosto.
[8] *Ibid.*, 26 y 30 de agosto.

Diputación Provincial aprueba los artículos que disponen la instalación de su Congreso Constituyente, lo que se realizará, como ya se dijo, el día 14 siguiente.[9] Quintanar dirige el mismo día 14 una proclama a los jaliscienses en la que únicamente es de notarse la ausencia de ataques al gobierno de México.[10]

Con la elección de diputados al Constituyente de Jalisco se realiza la de los que irán al Congreso nacional. Jalisco, adoptando la convocatoria elige diez diputados entre los que están Gómez Farías y José María Covarrubias —reelectos—; Juan de Dios Cañedo y José Miguel Ramírez —diputados en las Cortes de Madrid en 1821-1822—, y José de Jesús Huerta, autor del Plan de Gobierno Provisional de Jalisco. Los nombres de los elegidos se publican en *El Sol* de 19 de septiembre. De acuerdo con el artículo 1o. de las adiciones a la convocatoria, aprobadas por la Diputación Provincial el 27 de junio, deberán constituir a la nación como república federada, y no consta que se mantenga la pretensión de que una vez aprobadas las bases y la Constitución deberán ellas ser sometidas a la ratificación de los congresos de los estados. Tampoco consta que se pretenda que se vote en el Congreso por estados. Sin convenios formales, Jalisco y México aceptan tácitamente un camino intermedio para llegar a la reunión del nuevo Congreso manteniendo un *statu quo*.

* * *

Las elecciones se realizan en todas las provincias. Significativas son las de Miguel Ramos Arizpe como diputado por Coahuila, la del doctor Servando Teresa de Mier por Nuevo León, la de Carlos María de Bustamante por México, las de Manuel Crecencio Rejón y Lorenzo Zavala por Yucatán, la de Miguel Guridi y Alcocer por Tlaxcala, las de Valentín Gómez Farías, Francisco García y Santos Vélez por Zacatecas.

El 16 de agosto el general Felipe de la Garza, jefe superior político y comandante general de Nuevo León y Nuevo Santander, seducido por Ramos Arizpe según el doctor Mier, se dirige a Lucas Alamán. Desde la consumación de la independencia, afirma, las Provincias Internas de Oriente estaban decididas por la república federal. Recelosas "de volver a ser encadenadas bajo otra forma de gobierno", se propusieron formar unidas un solo estado con gobierno propio. "Mas no por esto propendieron sus autoridades —afirma Garza— a formar un Estado absolutamente libre e independiente de la nación mexicana: muy al contrario, estas autoridades que se pronunciaron por el sistema federado en circunstancias muy delicadas, tales como la moratoria del decreto de convocatoria y el plan anárquico del brigadier D. Antonio López de Santa Anna, protestaron su obediencia y reconocimiento a los poderes supremos de la nación", como lo prueban las actas de los pronunciamientos federales. No obstante el voto general para establecer el gobierno de las provincias, se suspendió lo acordado en la seguridad de que el próximo Congreso "decretará la formación de los estados de la confederación mexicana bajo el sistema republicano".[11]

Las juntas formadas en el norte quedan disueltas, y el futuro de la federación se confía al

[9] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, p. 165; *El Águila Mexicana*, 21 de septiembre.

[10] *El Águila Mexicana*, 25 de septiembre.

[11] *El Sol*, 5 de septiembre.

nuevo Congreso. Las bases para elecciones del nuevo Congreso, de 17 de junio. son la plena abdicación del primero en sus propósitos de subsistir frente a los pronunciamientos federales. El artículo 78 de las bases establecía que al día siguiente de la elección de diputados al Congreso se procedería a la de los que integrarían las diputaciones provinciales. Por decreto de 16 de septiembre se fija para la instalación de las diputaciones provinciales el 31 de octubre, o antes si están reunidos la mitad más uno de sus diputados.

La guerra civil está conjurada por el momento.

* * *

Por caminos y con propósitos diversos se llega al desenlace. Por ejemplo, en la lucha en que se empeña desde México el doctor Mier en contra de Ramos Arizpe en Coahuila y Monterrey, cuando el Congreso aprueba el 14 de julio la división del territorio de Nueva Vizcaya en las provincias de Durango y Chihuahua, Mier intenta por su parte dividir a los federales de las Provincias Internas de Oriente. Mier propone que se establezcan diputaciones provinciales "en todas las más provincias de Oriente".[12] El 19 de julio escribe al Ayuntamiento de Monterrey que la víspera se informó al Congreso de la reunión de una Junta Suprema Gubernativa de las cuatro Provincias de Oriente: "¿dónde iremos a parar —se pregunta— si a cada provincia se le antojase constituirse sin que el Congreso Constituyente de la nación señalase las bases para uniformar el sistema? La consecuencia sería la anarquía...". Ya el gobierno ordenó a Garza impedir o disolver la junta "de que es el verdadero autor, prefiriendo las ideas del señor Ramos a las de aquel a quien debe su puesto y que tuvo la sencillez de responder por su conducta". Líneas antes manifiesta al Ayuntamiento que le pareció muy bien, por su moderación, su declaración federal.[13]

El 18 de agosto el Congreso aprueba: "Que se verifique el establecimiento de Diputaciones Provinciales del Nuevo Reino de León, Coahuila y Texas". El 20 de agosto lo informa Mier al Ayuntamiento de Monterrey.[14] Desde el 19 de julio, en carta a Bernardino Cantú y previendo que se apruebe su iniciativa para establecer diputaciones provinciales en las Provincias de Oriente, Mier escribía: "así quedaremos libres de saltilleros, que optarán a empleos de su patria y nada más".[15] El 25 de junio Mier había escrito a Bernardino Cantú: "Cuidado con Ramos (Arizpe). Ese chato nos pierde".[16]

Los dos ilustres republicanos se encontrarían en el nuevo Congreso Constituyente.

* * *

¿En el conflicto podía el Congreso formar el proyecto que diera satisfacción a las proclamaciones federales de las provincias? Conocemos el *Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana* del 16 de mayo, presentado por la comisión del Congreso. Las provincias se desen-

[12] *El Águila Mexicana*, 16 de julio.
[13] Alfonso Junco, *op. cit.*, p. 133.
[14] *Ibid.*, p. 146.
[15] *Ibid.*, p. 135.
[16] *Ibid.*, p. 120.

tendieron de él en sus reiteradas demandas de un nuevo Congreso. Un testimonio implícito pero concluyente lo da el propio doctor Mier, coautor del plan de mayo y decidido defensor del Congreso. El 30 de julio escribe a Bernardino Cantú: "Una gran novedad tengo que avisarle a usted. La facción, en el Congreso, de Tagle y Fagoaga, se ha reanimado con una prepotencia que todo lo arrolla y un descaro que nada respeta. A mí especialmente me han oprimido de tal suerte, que les he dejado el campo y ya no asisto al Congreso. Lo defendí y asistí mientras fue tal; cuando ya es una facción, no tengo que ver con él, y vamos a ver ahora si logramos disolverlo, quedando una diputación permanente, hasta el inmediato Congreso".[17]

Los motivos inmediatos del enojo, como casi siempre en el doctor Mier, son anecdóticos y Bustamante los ironiza, pero la influencia de Tagle y Fagoaga es cierta.

En tanto se van realizando las elecciones primarias, las secundarias y provinciales de diputados al nuevo Constituyente, el Congreso sigue ocupándose de los más diversos asuntos y promulga 56 decretos entre agosto y el último de octubre. Se resuelve sobre la forma de la moneda, sobre bienes vinculados, sobre el establecimiento de nuevas diputaciones provinciales —las de Nuevo León, Coahuila, Texas y la del Istmo de Tehuantepec—, sobre el territorio de la provincia de Querétaro, sobre un empréstito de 20 millones en Londres, sobre diversas materias castrenses —comandancias generales, tribunales, Estado Mayor, etc.—, se aprueba el Reglamento de Comisos, se da un decreto especial para juzgar militarmente a salteadores, se autoriza la participación de extranjeros en la explotación minera, etc. Se concede facultad para establecer cátedras de derecho natural, civil y canónico en todos los colegios de la nación, y que entre tanto se aprueba el plan general de estudios se use como texto el *Derecho natural y de gentes* de Heinecio —incluido en los Expurgatorios desde 1745—, y esto a solicitud del rector del Seminario Tridentino de Valladolid. La legislación del Congreso es liberal.

En octubre *El Sol* publica la Constitución de la República de Colombia aprobada en Cúcuta el 28 de agosto de 1821, después de publicar en septiembre la provisional de Grecia de 13 de enero de 1822.

Como diputados al nuevo Constituyente es elegida una mayoría federalista. Fagoaga y Tagle no irán al Congreso. El 20 de agosto el doctor Mier da noticias al Ayuntamiento de Monterrey: "las elecciones primarias y secundarias en México y provincias contiguas las han ganado enteramente los liberales". El mismo 20 de agosto se dirige Mier a la Diputación Provincial de Nuevo León aclarando una mala inteligencia de ésta sobre la convocatoria, y refiriéndose a que pudiera suponerse que Ramos Arizpe no fuese elegido: "Yo lo sentiría ciertamente —escribe—, porque es muy benemérito, y la elección haría honor a la provincia de Coahuila. Yo no soy de su opinión, en orden a las *soberanías parciales* que ha intentado establecer antes que el Congreso constituya a la nación bajo un sistema uniforme; pero no es eso desconocer su mérito, los muchos que contrajo en España para toda la América, ni olvido nuestra amistad y su beneficencia para conmigo". Y rubrica con un latín: *Diversa sentire duos de rebus eisdem incolume licuit semper amicita.*[18]

El 15 de septiembre se pone a debate en el Congreso el dictamen sobre ceremonial para la apertura del futuro Congreso. El artículo primero fija fechas para la reunión de las juntas

[17] *Ibid.*, p. 137.
[18] *Ibid.*, pp. 147, 153-154.

preparatorias "en la forma que la Constitución —española— previene". El artículo tercero establece que los diputados jurarán en la última junta preparatoria "estar al código español hasta que den el nuevo del estado".

Inmediatamente Osores, diputado reelecto por Querétaro al nuevo Congreso, se opone al artículo, pues el juramento debe decidirlo el propio Congreso después de reunido como Constituyente. Rejón apoya a Osores, pues "repugnaba que un Congreso Constituyente quedase ligado por las disposiciones de uno que no tenía tan sublimes atribuciones". Rejón objeta también que el Congreso deba sujetarse a la Constitución española, la que el nuevo Congreso puede modificar con toda libertad.

Sorpresivamente el beligerante antifederal Carlos María de Bustamante interviene manifestando: "que si se había de dar alguna fórmula bajo la que debían prestar el juramento los diputados del futuro Congreso, debía ser precisamente sobre un objeto en que estuviese descubierta la voluntad general; mas como estaba decidida por el gobierno republicano federado, opinaba que la fórmula debía ser esta: ¿Juráis establecer el gobierno republicano federado?"

Pero el artículo se aprueba finalmente en estos términos: "El juramento —de los diputados— será el que previene la Constitución, omitiendo la segunda parte".[19] Aún en esa fecha el regateo sobre el federalismo continúa.

En la junta preparatoria del nuevo Congreso, el 5 de noviembre, se presta el juramento previsto, declarándose legalmente constituido el Congreso.[20]

Desde las sesiones preparatorias la intervención de Ramos Arizpe, con su larga experiencia parlamentaria, es cada día más influyente.

El día 4 de noviembre se presenta al Congreso el dictamen de la comisión de poderes sobre los del estado de Jalisco: "Se aprueba el nombramiento y poderes de los Sres. Covarrubias, Aldrete, Romero, Montenegro, Sierra, Gómez Farías y García; pues aunque sus poderes no cubren plenamente la ley, no se halla fuera de ella".

El problema se plantea en el debate sobre la naturaleza compromisaria de los diputados elegidos. Defienden el dictamen dos diputados por la provincia de México, dos por Puebla, y uno por Guanajuato. Francisco Lombardo, por Puebla e individuo de la comisión, sostiene que si bien los poderes se apartan de la letra de la ley, la comisión al proponer su aprobación "sin embargo de las restricciones que tienen, quiso evitar la revolución que de lo contrario estallaría... Que no propone que se apruebe todo lo que hay en los poderes, sino que se prescinda de lo que no se opone a la ley aunque esté dentro de ella, como es la determinación de un sistema de gobierno, sistema que tiene a su favor los deseos de los pueblos".

Covarrubias, diputado electo por Jalisco. sostiene "que no era restricción lo que contenía sus poderes sino una declaración de lo que conviene a la felicidad general: que las provincias de Guadalajara, Zacatecas, Guanajuato, y Yucatán, que han opinado por la restricción, comprenden cuatro millones de habitantes que son la mayoría de la nación".

Ramos Arizpe lamenta "que se han tocado puntos muy delicados en circunstancia que conviene guardar silencio sobre ellos y votar como correspondiese". Apoya el dictamen porque los poderes no se oponen a la ley, y "que siendo inconcuso que Jalisco pudo expresar su

[19] *El Sol*, 17 de septiembre.

[20] J.A. Mateos, *op. cit.*, tomo II, p. 572.

voluntad en orden a la forma de gobierno, es cosa accidental que lo haya hecho en los poderes".

El dictamen se aprueba salvando sus votos, "en cuanto a la causal", únicamente 12 diputados, entre ellos el doctor Mier. Bustamante no registra en su *Diario* el sentido de su voto.

La aprobación de los poderes de los diputados por Jalisco, compromisarios para constituir a la nación en república federal, a través de un debate reñido —así lo califica Bustamante— pero eufemístico, es el tránsito, aunque no último, hacia el federalismo en el órgano constituyente de la revolución.

El 7 de noviembre, día en que inicia solemnemente sus sesiones el Congreso, el Supremo Poder Ejecutivo dirige un *Manifiesto a la Nación.* No se pronuncia la palabra federación, pero se pregunta: "¿quién la ha visto —a la nación— pasar por alternativas y transiciones tan violentas, como las que han ocurrido entre nosotros, sin derramarse una gota de sangre? ¿quién ha visto, finalmente, desarrollarse en un país síntomas de escisión fraternal sin disparar siquiera un tiro?" Mas la alusión al federalismo es clara. "El hombre para disfrutar de las conveniencias de la sociedad, tiene que desprenderse de una gran fracción de sus naturales derechos; y las provincias para subsistir y mantenerse como tales, necesitan proporcionalmente hacer los mismos sacrificios. Que las provincias todas se reúnan —continúa el Manifiesto— y estrechen con indestructible lazo de fraternidad, que la nación se constituya...".[21]

En el proceso de estos días la proclamación federal es preconstituyente y se legitima a sí misma en la voluntad general de las provincias que, como citamos en alguna de las páginas de la parte primera, llega al Congreso cuando tiene "la *fuerza* de constituir".

Toda otra consideración, favorable o adversa a la federación de las provincias, cede ante la evidencia del hecho.

[21] *El Sol,* 8 de noviembre.

2

LA INSTAURACIÓN FEDERAL
EL PROYECTO DE ACTA CONSTITUCIONAL

Una historia cuyo conflicto se inicia en México expresamente en 1808 con el frustrado proyecto de reunir una junta o Congreso del Reino de Nueva España que ejerciera los derechos de soberanía, al vacar en la metrópoli por las abdicaciones borbónicas en Napoleón I y la cautividad de Fernando VII, llega a su desenlace en 1823. Han transcurrido 13 años desde que una conspiración por la independencia lleva a don Miguel Hidalgo al *grito* de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y al patíbulo en Chihuahua el 30 de julio de 1811, como caudillo de la que el doctor Mier llama en 1813 la *Revolución de Nueva España.* Una revolución que formula su primer proyecto en la *Declaración de Independencia* de 6 de noviembre de 1813 y en el republicano *Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana* de 22 de octubre de 1814, inspirado y decidido por don José María Morelos.

Con la derrota y la ejecución de Morelos el 22 de diciembre de 1815 concluye el ímpetu de la primera insurgencia, pero está fundada la tradición populista de la revolución.

Ni *el grito* del señor Hidalgo ni la Declaración de Independencia y el Decreto Constitucional se dan en la capital colonial, ni desde ésta se propaga la revolución. No son los criollos opulentos o nobles ilustrados de la ciudad de México o de las capitales de provincia los que se ponen al frente de la insurgencia. El primer caudillo será un antiguo rector del Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Valladolid bajo el gobierno del ilustrado obispo San Miguel; amigo de José Pérez Calamas, el futuro reformador obispo de Quito, y de Manuel Abad y Queipo —una de las figuras más sugestivas intelectualmente y más ingratas en la insurgencia—, quien promulgara el primer edicto de excomunión en contra suya. Miguel Hidalgo, cura relegado al pueblo de Dolores, lector de enciclopedistas y devoto de Racine, señor de la casa parroquial, aviesa pero no del todo injustamente llamada "la Francia chiquita", es quien desde el 16 de septiembre de 1810 acaudilla las "hordas de la indiada" insurgente que llegan a la vista de la ciudad de México. Y ahí, en la batalla de Las Cruces, el 30 de octubre de 1810 el joven oficial realista Agustín de Iturbide se distingue en sus primeras armas contra los insurgentes.

Un caudillo de origen más popular sucede a Hidalgo. José María Morelos, quien desde los 14 años de edad trabaja en una hacienda, a los 25 entra a la carrera eclesiástica en el Colegio de San Nicolás siendo rector el señor Hidalgo. Al ordenarse se le designa cura de Cuarácuaro, de donde sale a unirse con Hidalgo en la insurgencia. El nombre de Morelos, hasta su ejecución en 1815, protagoniza una leyenda épica y hereda el proyecto republicano de la revolución de independencia.

A los nombres epónimos de nuestra guerra de emancipación siguen los de todos los que batallan 11 años por ella. La historia los recoge con sus proezas y conflictos. El *Diccionario de*

insurgentes de José María Miquel i Vergés, republicano español exiliado en México, registra en un minucioso catálogo a los ilustres y a los humildes patriotas: letrados menores, empleados, curas de pueblos, modestos clérigos, oficiales, comerciantes, rancheros y campesinos, lo nutren. Un catálogo en el que no figuran los patricios de la ciudad de México y de las capitales provincianas, por más que algunos, o muchos, simpatizaran y aun auxiliaran a los insurgentes. Los *mantuanos* y los *patricios* figurarán a partir del episodio de la consumación de nuestra independencia.

La ciudad de México es la metrópoli virreinal a conquistar por la insurgencia nunca la capital de ella. La leyenda y el hecho cierto es el de una revolución populista, con la carga de preocupaciones también populares, a la que los letrados y clérigos en armas dan expresión y conjugan con las de la revolución liberal en América y España.

En el episodio de la consumación de nuestra independencia la tradición insurgente se niega. Mas frente a Iturbide emperador, el Congreso, formado con diputados de las provincias, la reivindica en julio de 1822 cuando se dictamina la exhumación de los restos de Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos y Leonardo Bravo, para que sean sepultados solemnemente en la Catedral de México el siguiente 16 de septiembre.

A un año, el 19 de julio de 1823, el Congreso recoge el dictamen y promulga el decreto de *Declaración de honor a los primeros héroes libertadores de la nación.* Se reconoce el mérito de los antiguos insurgentes para optar a empleos, excepto a los indultados que después "prestaron servicios de cualquier clase a la causa de España". Se reconocerán los grados obtenidos antes de 1821. El artículo 13 declara "beneméritos de la patria en grado heroico" a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales.

El artículo 14 declara y ordena: "Y respecto a que el honor mismo reclama el desagravio de las cenizas de los héroes consagrados a su defensa, se exhumarán las de los beneméritos en grado heroico..., y serán depositadas en una caja que se conducirá a esta capital, cuya llave se custodiará en el archivo del Congreso".

Los últimos siete artículos merecen su reproducción.

18. La caja que encierre los venerables restos de los héroes expresados, se trasladará a esta catedral el 17 del próximo septiembre con la publicidad y pompa dignas de un acto tan solemne.

19. Una diputación del Congreso autorizará la traslación.

20. El Supremo Poder Ejecutivo, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, el Estado Mayor General de los ejércitos, y todas las autoridades eclesiásticas, militares y políticas residentes en esta capital asistirán a solemnizar el acto.

21. Las tropas de la guarnición harán los honores que previene la ordenanza para los Capitanes Generales con mando en jefe, y que fallecen en plaza.

22. En la catedral se levantará un sepulcro, en que se depositará la caja con la inscripción que proponga la Universidad, y apruebe el gobierno.

23. La diputación del Congreso recogerá la llave, y la entregará al Congreso en sesión pública.

24. El presidente anunciará que la nación ha acordado por medio de sus representantes, que

se escriban con letras de oro en el salón de cortes, los nombres de estos héroes que se sacrificaron por la independencia y libertad nacional.

La presencia de los generales Victoria, Bravo y Guerrero en el Supremo Poder Ejecutivo "fue efecto —escribirá Alamán— del cambio favorable para los antiguos insurgentes, que produjo el triunfo de la revolución contra Iturbide" Y agrega: "Tal fue el origen de la grande importancia que desde entonces se comenzó a dar a la fiesta del 16 de septiembre, haciendo caer en desuso la del 27... siendo cosa verdaderamente prodigiosa que el ejército que había hecho la independencia, abjurase por espíritu de partido su gloria, hasta dejar que se trasladase a los enemigos que había combatido, y que la misma generación que vio pasar todos estos sucesos, pudiese ser engañada de esta manera, que haya llegado a creer lo contrario de lo que vio".[22] Alamán dice más en su rapto de inquina. Pero el entonces secretario de Relaciones participa ceremonialmente en los actos que desagravian y que honran a los insurgentes, y el diario *El Sol*, calificado de ministerial, va dando las noticias de los honores que se rinde a sus restos a lo largo de su camino a México, hasta ser depositados el 17 de septiembre en la bóveda del Altar de los Reyes en la Catedral Metropolitana. A este acto concurren, como el mismo Alamán registra, "muchos de los que los habían hecho fusilar".

* * *

La irritación polémica de Alamán hablando del "cambio favorable para los antiguos insurgentes, que produjo el triunfo de la revolución contra Iturbide", simplifica y desvía el significado del suceso. El Acta de Casa Mata no la firma un solo antiguo insurgente. El primer jefe que se menciona en Puebla para el ejército libertador es Pedro Celestino Negrete, español, quien no acepta y propone a un mexicano, el marqués de Vivanco, incorporado al Plan de Iguala en agosto de 1821 y conocido como antiliberal.

La adhesión de los tres generales insurgentes, Guerrero, Bravo y Victoria —éste firmándolo— fue al Plan de Veracruz, mas el antiguo ejército realista se pronuncia por Casa Mata. Es entonces cuando las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales, como órganos representativos de origen electivo legitiman la revolución y demandan la convocatoria del nuevo Congreso, exigencia abandonada por los jefes de Casa Mata. Y son las mismas diputaciones, ayuntamientos, y las juntas a que convocan, quienes legitiman las proclamaciones federales y la entidad de las provincias en ejercicio de su soberanía. En el desconcertado antiguo ejército realista sus jefes y oficiales criollos se alían a quienes por primera vez proponen una decisión libre sobre el ser político de la nación. Y es el hecho de asumir la libertad lo que estrecha más a las provincias frente al gobierno de México, en el que figuran Bravo y Victoria desde el 31 de marzo.

Mas la historia no es lineal y su sentido se va decidiendo, ante las opciones posibles, por quienes participan en ella. En 1823 la opción y la decisión son "republicanas en el ámbito de la revolución de América y en la tradición insurgente". Alamán invierte los términos. No es el derrumbe de la monarquía iturbidista causa de un cambio favorable a la insurgencia. Con

[22] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 710.

la consumación de la independencia se impuso al país un interregno negando el pasado insurgente, sin llegar a constituir a la nación y ni siquiera a formular un proyecto de la monarquía aceptado por Iturbide. El aura del "Libertador" no ocultó la inanidad del hombre y en la leyenda viva insurgente dan un testimonio ominoso para él los huesos de aquéllos a quienes combatió.

No es a la caída de Iturbide cuando se inicia el culto a la insurgencia. Cuarenta y nueve días después de su proclamación como emperador se firmó el dictamen de desagravio a los antiguos insurgentes. La opinión no cambia en 1823. Entre quienes manipulan el poder y quienes libremente tomaron las armas y empeñaron su vida por la independencia durante 11 años, el pueblo en su más amplia acepción reconoce como suyos a éstos. El ejercicio de la libertad insurgente es el que se reanuda. El pasado, el antiguo régimen, es el de la monarquía, la metropolitana y la iturbidista. El presente es el de la historia insurgente recuperada para fundar a la nación como república federal.

* * *

La aceptación por el nuevo Congreso de los diputados por Jalisco, soslayando su carácter de compromisarios, no es ya una resolución ambigua. Bustamante, antifederalista, había propuesto que se jurase la república federal por los nuevos diputados. Pero el mismo Bustamante escribe en su *Diario* el día 1 de noviembre: "Nada bueno nos proponemos de la primera junta preparatoria... pues están nombrados para la revisión de Poderes, Ramos Arizpe y Huerta, el de Guadalajara... ambos están marcados con nota de federalistas derechos. Los Ministros han manifestado a sus amigos mucho temor, y creen que es inevitable la ruina de la nación con semejante sistema". El día 2 continúa con su preocupación, ahora atento a Guadalajara en donde parece que han discutido Quintanar y el cabildo eclesiástico. Éste ha entendido, según Bustamante, "que si se declara la federación de los Estados, pierden los diezmos, pues las Provincias se hallan decididas a invertirlos en los gastos de su clero local... he aquí al clero de puntas, y que los mismos canónigos que pretendieron en mayo, como Martín García Carrasquedo de Valladolid, la federación ciegamente, hoy se oponen con vigor a ella, y claman por el centralismo. ¡Qué motivos tan poderosos —exclama Bustamante— para impedir por su parte la federación concebida!"

El doctor Mier escribe a Bernardino Cantú el 12 de noviembre que el Congreso está instalado, pero "*mala facies*: la mitad clérigos y la mitad abogados: si con teología y cánones se constituye una nación está hecha". Ramos Arizpe, informa Mier, "ya ha hecho correr un plan de Acta Constitucional insistiendo en la soberanía e independencia de cada provincia en sólo su gobierno interior. Ya está muy rebajado en sus opiniones después que le ha visto las astas al toro. Lo mismo sucede a los demás exaltados que venían con instrucciones para mudar el gobierno y sacar de México al Congreso".[23]

Por su parte Bustamante escribe el mismo día en su *Diario*: "No es sufrible el orgullo del P. Ramos Arizpe, todo lo replica, y de todo habla en el Congreso... con decir que ha opacado al P. Mier".

[23] Alfonso Junco, *op. cit.*, pp. 169-170.

Si el radical federalismo de Guadalajara y Zacatecas, por su proximidad a México fue el que más preocupó al gobierno, hoy es un hombre, Miguel Ramos Arizpe, quien centra la atención en el Congreso.

Lorenzo de Zavala hace el retrato de Ramos Arizpe años después en el *Ensayo crítico de las revoluciones en México.* "Sin conocimientos profundos en ningún género, este eclesiástico con un talento claro y mucha actividad, ha sabido ganarse mucha influencia entre los liberales. Se decía de él que conocía la intriga, y que en la maniobra de los salones y de las juntas era muy diestro. Quizá en esto empleaba toda su actividad; lo cierto es que tenía sus subordinados a quienes empleaba como le convenía, y entre los cuales deben ocupar un lugar los señores Pablo Llave, don Mariano Michelena, don F. Vargas y el canónigo Couto que en España y después en América sirvieron mucho a sus miras. Tenía un carácter dominante que no sufría contradicción, y esto le daba ventajas sobre los hombres medianos; pero sabía muy bien plegarse cuando veía que no podía sacar partido con la obstinación. Ninguno sostuvo con más calor y celo la independencia de América", y en el proyecto de 1821 en las Cortes se negó a que Borbón alguno fuese a América como delegado real. "Su alma republicana repugnaba al nombre de monarquía en su patria".[24]

Citamos a Zavala y no a un apologista directo, porque aun en su reticente falta de simpatía ofrece una imagen fiel del diestro y avezado parlamentario que es Ramos Arizpe, y da un testimonio de sus convicciones.

Desde antes y después de la instalación del Congreso se suceden en varias provincias, y hasta en la capital, la agitación y las conspiraciones bajo el pretexto federal o simplemente contra el Supremo Poder Ejecutivo, como en las rebeliones de Echávarri en Puebla y de Lobato en México. Mas los movimientos no se dirigen en contra del Congreso, al que debemos atender.

En la sesión secreta del Congreso del 14 de noviembre, de la que da noticia Bustamante en su *Diario* de ese día, Alamán informa de otra conspiración descubierta, y La Llave, secretario de Justicia, pide al Congreso que se proceda urgentemente a precisar "el sistema de gobierno que deberá adoptarse, para fijar la seguridad de los pueblos, que sin esto están fluctuando..." Ramos Arizpe ofrece presentar el lunes —tres días después— un proyecto de ley orgánica.

La comisión de Constitución la forman con Ramos Arizpe, José de Jesús Huerta, Manuel Argüelles, Rafael Mangino y Tomás Vargas.

El 17 Ramos Arizpe informa al Congreso que la comisión "ha multiplicado sus sesiones por mañana, tarde y noche; deseaba con este trabajo asiduo presentar a la patria por medio de sus representantes, una Acta Constitutiva, que... formase una verdadera patria y constituyéndola al mismo tiempo y dándole toda la energía que es necesario al gobierno nacional", mostrase a México como una nación fuerte. No fue posible llevar en el día el proyecto, pero cree poderla presentar en tres o cuatro más.

Recordemos que el día 12 anterior el doctor Mier informaba a Cantú que Ramos Arizpe había hecho correr "un plan de acta constitucional", cuyo texto desconocemos. Es casi evidente que ese plan se está discutiendo en la comisión, y que después de varios días no se ha llegado a la redacción definitiva del que se presentará al Congreso. Reyes Heroles justamente

[24] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 114.

señala la elaboración colectiva del proyecto, pues a los trabajos de la comisión asisten los secretarios del despacho con la opinión del gobierno, como se expresa en el *Discurso preliminar* del proyecto, hecho que Alamán, el más influyente de ellos, calla en su *Historia.*

El día 17 Bustamante propone que Jacobo Villaurrutia, autor en 1808 como alcalde de Corte de un *voto* en favor de la reunión de una junta del reino, se incorpore a la comisión de Constitución, lo que no se acepta.

El 20 de noviembre Ramos Arizpe da lectura al proyecto de acta constitutiva. Se observa que en ella no figuran las provincias de Chiapas y del Istmo. Mier apoya la expresa inclusión de Chiapas que se unió espontáneamente a México y así lo reconoció el anterior Congreso. Ramos Arizpe conviene en la incorporación de Chiapas, pero sobre la del Istmo advierte que "no puede subsistir por sí", a pesar del decreto del anterior Congreso creándola.

Sin mayores debates se aprueba publicar el proyecto y el *Voto particular* de Mangino sobre algunos artículos,[25] al que se agrega otro de Alejandro Carpio presentado el día 21.

El Sol inicia el 21 de noviembre la publicación del discurso preliminar y del proyecto, y los concluye el 22, al igual que *El Águila Mexicana.*

Bustamante escribe el 20 de noviembre en su *Diario* que el proyecto, "trabajado con mucho empeño, no desagradó al Congreso ni al auditorio en lo pronto".

El 23 circula entre los diputados el proyecto impreso.

* * *

El *Discurso preliminar* es breve. La comisión debatió el proyecto confiando "además, una gran parte del acierto —se dice— a la concurrencia de las luces y consejo del gobierno comunicados por medio de sus Secretarios del Despacho, quienes en efecto han asistido desde el principio de las sesiones diurnas y nocturnas de la comisión y también de las de otros patriotas que aunque fuera del Congreso y difundidos en las provincias, por su ilustración y sus virtudes hacen el ornamento más ilustre de la nación mexicana". En la alusión no puede dejar de estar comprendido Prisciliano Sánchez, para esa fecha diputado en el Congreso Constituyente de Jalisco.

La comisión hubiese deseado, se expresa, formar desde luego el proyecto de Constitución, mas, en primer término, "la necesidad imperiosa de dar vida y salvar de una vez a la nación casi disuelta, y ya sin un movimiento regular, la han conducido al caso de decidirse a proponer este proyecto al Congreso... una Acta Constitutiva de la nación mexicana, que sirviéndole de base para sus ulteriores trabajos, diese desde luego a las provincias, a los pueblos y a lo hombres que las habitan, una garantía firme del goce de sus derechos naturales y civiles, por la adopción definitiva de una forma determinada del gobierno...".

La premura que las circunstancias imponen releva a la comisión de una amplia exposición de motivos, no tan necesaria cuando la forma de república representativa popular federada es por la que ya está manifiesta la voluntad de las provincias. Conforme a los principios de derecho público aceptados por las naciones, la comisión propone "la convocación inmediata de un senado constituyente".

[25] *El Sol,* 21 de noviembre.

Abrumada la comisión por la dificultad de fijar el número de estados, "se fijó un principio general: a saber, que ni fuesen tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen en breves años aspirar a constituirse en naciones independientes, ni tantos que por falta de hombres y recursos viniese a ser impracticable el sistema". Por ello deja abierta la posibilidad de que la Constitución general resuelva definitivamente el punto.

En el *Discurso preliminar* no se atiende a los poderes Legislativo y Judicial, supuesta la división ya clásica de los tres, pero se explica sobre el Ejecutivo. Respecto a las facultades de éste "ha creído la comisión de su deber el conceder algunas que no se encuentran dadas al Ejecutivo aun en algún sistema central, y tal vez ni al de monarquías moderadas. Tal es el imperio de las circunstancias, nacidas de la ignorancia y de la corrupción de tres siglos...".

El *Discurso* toca el punto de los gobiernos de los estados: "no ha querido la comisión —se expresa— sino fijar y reducir a la práctica los principios genuinos de la forma de gobierno general ya adoptado, dejando que los poderes de los Estados se muevan en su territorio para su bien interior en todo aquello que no pueda perturbar el bien general, ni impedir la marcha rápida y majestuosa de los supremos poderes de la nación".

Como el fin de la comisión es dar con el Acta "un punto de unión general", se concluye proponiendo al Congreso alguna resolución para manifestar que el interés de todos los estados exige "que de la suma de sus derechos, depositados en el actual Congreso, cedan a los poderes supremos los necesarios para hacer el bien general, conservando los demás para procurarse la felicidad interior". Otras resoluciones tienden a afirmar la estabilidad del Acta a fin de que, "prescindiendo de teorías y haciendo aplicaciones prácticas de los más sólidos principios de derecho público en verdad se dé un *Acta Constitutiva* de la nación mexicana".

Un primer punto, anómalo, es el de incluir en el proyecto un Senado constituyente sin fundar su convocación. El artículo 15 del proyecto de Acta simplemente expresa que el Congreso "sin perjuicio del lleno de sus facultades perfeccionando su organización según parece más conforme a la voluntad general, convoca un senado también constituyente, compuesto de dos senadores nombrados por cada estado, para que a nombre de éstos revise y sancione la Constitución general; una ley que se dará luego, arreglará el modo de nombrar a los senadores, el de ejercer dichas funciones, y las demás atribuciones del senado".

El Senado evidentemente no tiene relación con el propuesto en el Plan de Constitución de mayo, y corresponde a la cámara federal en el Legislativo. El 28 de diciembre, cuando se debate el artículo 12 que se refiere al Poder Legislativo ordinario formado por dos cámaras, Ramos Arizpe lo explica a nombre de la comisión. El número de senadores, dos por cada estado, "quita toda preponderancia y derecho que provenga de la población, pues la confederación se celebra entre los Estados que para ello se reputan como personas morales... (y) la segunda cámara subsana —aclara— la desigualdad que induce la población respecto a los Estados".

Luis Gordoa objeta que "siendo éstos —los estados— independientes para su gobierno interior, no había necesidad de esa igualdad que pretende el artículo". Ramos Arizpe agrega a sus argumentos el de que "las funciones de los poderes generales de la nación no se dirigen a los individuos sino a los Estados".[26]

[26] *Ibid.*, 29 de diciembre.

El 30 de diciembre continúa tratándose del Senado.

Zavala habla en favor del Senado cuyo carácter "es el de un cuerpo correctivo de los defectos en que la primera cámara pudiera incurrir en la formación de las leyes, y si se formara sobre la misma base —observa—, resultaría que una y otra cámara serían proporcionalmente iguales, y en la segunda cámara cabría la misma preponderancia de unos estados sobre otros, que puede haber en la primera".

Juan de Dios Cañedo, que fuera diputado a las Cortes de Madrid, apoya el Senado federal, cuyos beneficios están demostrados en Estados Unidos.

El artículo 12 se aprueba en que serán dos senadores por cada estado, pero no para un Senado constituyente.

En la sesión ordinaria del 2 de enero de 1824 la comisión propone suspender el debate sobre el Senado constituyente.[27] La comisión no llevará de nuevo la iniciativa del Senado constituyente y el proyecto se esfuma sin que nadie insista en él.

* * *

El segundo punto que atenderemos, de los que destaca la comisión en el *Discurso preliminar* del proyecto, es el de las facultades que propone para el Poder Ejecutivo y que no se otorgan, según ella, ni en los sistemas centralistas o monárquicos moderados.

A la vista del artículo 18 del proyecto podemos verificar algunas relaciones con la Constitución española de 1812, con la de Colombia de 1821, con la de Estados Unidos, y con los proyectos federales de Prisciliano Sánchez y de Stephen F. Austin, relaciones que por sí mismas son más reveladoras. Haremos simples alusiones, disponiendo de sus textos en el volumen segundo de esta obra.

Una primera observación se impone. El proyecto deposita el Poder Ejecutivo en un presidente de la federación mexicana. El Acta constitutiva se apartará de él, depositándolo "en el individuo o individuos" que señale la Constitución. Atendamos a las atribuciones del Ejecutivo.

La fracción primera del artículo 18 del proyecto de Acta Constitucional, que faculta y obliga al Ejecutivo para "poner en ejecución las leyes dirigidas a conservar y consolidar más y más la integridad de la federación mexicana, y a sostener su independencia en lo exterior y su unión y libertad en lo interior", es una variación verbal del artículo 170 español en la circunstancia mexicana.

La fracción segunda transcribe la decimosexta del artículo 171 del código español, facultando al Ejecutivo para "nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho". La facultad se considera en el artículo 19 del Pacto Federal de Anáhuac, en el 9 del proyecto de Austin.

La fracción tercera —recaudar y decretar la distribución de los fondos públicos provenientes de contribuciones nacionales decretadas por el Congreso general, con arreglo a las leyes—, resume la duodécima del mismo artículo 171 español. La facultad se encuentra en los proyectos de Sánchez y de Austin.

[27] J.A. Mateos, *op. cit.*, p. 634.

La fracción cuarta establece la facultad concreta de nombrar a los empleados de la hacienda pública, de acuerdo con la Constitución y las leyes, y no la de proveer todos los empleos civiles y militares como en la fracción quinta del artículo 171 español, y en el 123 de la Constitución colombiana. En la Constitución de Estados Unidos la facultad —establecida en el párrafo segundo de la sección 2 del artículo II— se concede para nombrar los empleados gubernamentales de acuerdo con el Senado, cuando no lo autoricen la Constitución u otra ley de manera distinta. La facultad general de nombrar los empleados del gobierno la proponen Prisciliano Sánchez y Austin en sus proyectos.

En la fracción quinta se otorga al Ejecutivo la facultad expresa de deponer a los empleados del gobierno y de la hacienda pública "con solo acuerdo de los Secretarios del Despacho formados en consejo", especificación que no existe en la Constitución española.

En la fraccción sexta se establece la de declarar la guerra previa la aprobación del Congreso, o como lo prevenga la Constitución de no estar reunido éste, coincidiendo con la fracción tercera del artículo 171 español y el 119 de la Constitución de Colombia. Para la declaración de guerra, Prisciliano Sánchez requiere la aprobación del Senado, y Austin la del Congreso.

La fracción séptima, sobre la disposición de las fuerzas de mar y tierra y de la milicia activa para la defensa exterior y la seguridad interior, conviene con las fracciones octava y novena del citado artículo español, excepto en la mención de la milicia. El mando supremo del Ejecutivo sobre las fuerzas de mar y tierra lo establece el artículo 117 colombiano, y el párrafo primero de la sección 2 del artículo II de la Constitución norteamericana. Para la disposición de las fuerzas, Prisciliano Sánchez requiere la aprobación del Senado. Austin reconoce el mando supremo del Ejecutivo, y la facultad de disponer de ellas para la defensa del país.

La fracción octava facultando al Ejecutivo para disponer de las milicias locales fuera de sus estados, previo el consentimiento del Congreso, coincide con el artículo 365 de la Constitución española, y con lo establecido en el párrafo citado de la Constitución de Estados Unidos.

La fracción novena sobre nombramiento en los empleos del ejército y la milicia, excepto en la mención de esta última, coincide con la fracción quinta del artículo 171 español, que comprende los empleos civiles y militares, al igual que en el 123 colombiano. La facultad la incluye Prisciliano Sánchez en su proyecto. Austin la comprende en la general de nombramiento para empleos en el gobierno, expidiendo los despachos con aprobación del Senado.

La facultad de conceder retiros y licencias no se establece en los proyectos y códigos que citamos.

La de nombrar agentes diplomáticos y cónsules con aprobación del Senado, coincide con el párrafo segundo de la sección 2 del artículo II norteamericano, y con el 121 de la Constitución de Colombia. Prisciliano Sánchez incluye la misma disposición en el artículo 9 de su proyecto.

La facultad de dirigir las negociaciones diplomáticas, negociar y celebrar tratados de paz, amistad, federación, tregua, neutralidad armada, comercio y cualquiera otro, sujetos a la aprobación del Congreso para su ratificación, conviene con el artículo 120 de la Constitución colombiana, el 9 del Pacto Federal de Anáhuac, y 9 del proyecto de Austin. En la Constitución de Estados Unidos los tratados requieren la aprobación del Senado, y en la española la aprobación de las Cortes, aunque el rey tiene la facultad de dirigir las negociaciones diplomáticas y comerciales.

La obligación de cuidar que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los tribunales y que se ejecuten las sentencias conforme a la ley, coincide con el artículo 124 de Colombia.

En la fracción decimocuarta del proyecto mexicano se ordena al Ejecutivo publicar, circular, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, facultándolo —en la decimaquinta— para dar decretos, órdenes y formar y publicar reglamentos para el mejor cumplimiento de la Constitución. La redacción es similar a la del artículo 114 colombiano, aunque la obligación de promulgar las leyes y la facultad reglamentaria son las primeras que establece el artículo 171 español. Prisciliano Sánchez propone únicamente: "promulgar las leyes generales, y mandarlas circular a todas las autoridades". En el proyecto de Austin se dice: "Publicar y hacer ejecutar las leyes".

El veto suspensivo del Ejecutivo a las leyes aprobadas por el Congreso se debe ejercer, de acuerdo con el proyecto del Acta, una sola vez y dentro del término de diez días, coincidiendo con el artículo 46 de Colombia, y con el párrafo segundo de la sección 7 del artículo 1 de la Constitución norteamericana. En la Constitución española el veto suspensivo debe ejercerlo el rey en un plazo de 30 días, y su efecto es que la ley sólo puede tratarse por las Cortes hasta el año siguiente, pudiendo el rey usar el veto por segunda vez y con los mismos efectos de artículos 144 a 148. En el proyecto de Austin no se señala término para ejercer el veto.

La facultad del Ejecutivo para suspender a los empleados del gobierno y privarlos de la mitad de sus rentas hasta por tres meses, por incumplimiento de leyes y órdenes, consignando ante los tribunales los casos en que debe abrirse causa, coincide con el artículo 125 de la Constitución de Colombia, excepto en la suspensión temporal y la aplicación de pena pecuniaria administrativa.

La facultad del Ejecutivo para conceder indultos y conmutaciones de penas por causas graves, oyendo a los jueces correspondientes con consulta de los secretarios del despacho reunidos en consejo, amplía con esta consulta los términos del artículo 127 colombiano. La sola facultad de indulto la establece la Constitución española en la fracción decimotercia del artículo 171. La Constitución norteamericana la establece, excepto en los casos de juicio político (*impeachment*). Prisciliano Sánchez la incluye en su proyecto, y Austin la adopta en el suyo como gracia ante decisiones de los tribunales militares y de guerra.

El Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824 recogerá las atribuciones que el proyecto da al Poder Ejecutivo, excepto las de la fracción quinta del artículo 18 y la última para conceder indultos y conmutar penas.

El proyecto de Acta en su artículo 19 impone el refrendo de los secretarios del despacho a los decretos y órdenes del Ejecutivo para su obligatoriedad, que se recoge también en el Acta Constitutiva.

El Poder Ejecutivo lo deposita el proyecto en un presidente de la República y un vicepresidente, que ejercerán sus cargos durante el tiempo que fije la Constitución, la que también reglará el modo de elección. Los individuos del Ejecutivo y los secretarios del despacho están sujetos al juicio político hasta un año después de cesar en sus cargos, por conducta manifiestamente contraria a la Constitución o las leyes, o al bien general de la República.

La preocupación expresada por la comisión en el *Discurso preliminar* sobre crear un Ejecutivo con facultades que no existen ni en los sistemas centrales ni en las monarquías mode-

radas, "por las circunstancias nacidas de la ignorancia y la corrupción de tres siglos", no la hallamos satisfecha en el proyecto. Las fuentes o analogías que verificamos no muestran singularidad alguna, aunque la preocupación por sí misma es significativa. A hombres como Ramos Arizpe, Huerta y Vargas que vienen de las proclamaciones federales en Coahuila, Jalisco San Luis Potosí —en éste con la experiencia aventurera de Santa Anna—, inquieta que el centro de unión en el gobierno federal, y en concreto el Poder Ejecutivo, quede a merced de partidos o facciones que dominen en el Congreso, influyendo en la gran masa del país y en la marcha del gobierno. La preocupación es la misma en el resto de la América emancipada. El hecho de que no lleguen a dar forma a ese Ejecutivo deseable no invalida la preocupación. La solución de equilibrio no puede improvisarse, y finalmente la comisión atiende a los modelos que se enfrentan al conflicto —el despotismo de muchos o de uno—, en el tránsito del desconcierto a lo que Reyes Heroles llama justamente *la sociedad fluctuante*. La historia independiente se precipitará en América como en México en esa fluctuación entre las ideas, y las instituciones y el caudillismo.

La concepción federal en el proyecto de Acta Constitucional se resume en pocos artículos. El doctor Mier había escrito el 12 de noviembre a Bernardino Cantú sobre el plan de Acta Constitucional que había hecho correr Ramos Arizpe insistiendo en la soberanía e independencia de cada provincia, pero ya "muy rebajado en sus opiniones". Ramos Arizpe, como Huerta y los federalistas, dan el paso de la beligerante proclamación revolucionaria a la formulación de su proyecto posible, que no es otro que el del órgano constituyente del país. Todo el *Discurso preliminar* está animado de un espíritu reflexivo y de la solicitud para acertar al "dar estabilidad, fuerza y energía al gobierno nacional", y "desde luego a las provincias, a los pueblos y a los hombres que las habitan, una garantía firme de sus derechos naturales y civiles, por la adopción definitiva de una forma determinada del gobierno".

La revolución tiene el poder de constituir y la moderación preside el acto de su ejercicio.

En el establecimiento de los gobiernos estatales únicamente se reducen a la práctica los principios de la forma de gobierno adoptada, "dejando que los poderes de los mismos estados se muevan en su territorio para su bien interior en todo aquello que no pueda perturbar el orden general, ni impedir la marcha rápida y majestuosa de los poderes supremos de la federación", como expresa la comisión en el *Discurso preliminar*.

* * *

En el artículo 5 del proyecto se declara que la nación "adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal". Y en el artículo anterior que la soberanía "reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar la forma de gobierno que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad; de establecerse por medio de sus representantes sus leyes fundamentales; y de mejorarlas, o variarlas según ella crea convenirle más".

Rafael Mangino, individuo de la comisión de Constitución, emite su *voto particular* sobre el artículo 4: "La soberanía reside esencialmente en la reunión de los estados que componen la nación mexicana; y la facultad de hacer ejecutar y aplicar las leyes será ejercida por los cuerpos o personas que se designen en el *Acta* y en la Constitución". El 21 de noviembre, Ale-

jandro Carpio, diputado por Puebla como Mangino, da el voto particular que recoge Reyes Heroles, sobre que "la soberanía no puede residir en los Estados tomados distributivamente, sino en toda la Nación".[28]

El artículo 6 establece: "Sus partes integrantes son estados libres, soberanos e independientes en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta Acta y en la Constitución general".

Los artículos anteriores del proyecto se aprobarán en sus términos y recogerán en el Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824.

El artículo 1 del proyecto señala al territorio de la nación que comprende el antiguo virreinato de Nueva España, la Capitanía General de Yucatán y las comandancias generales de las Provincias Internas de Oriente y Occidente, como en el artículo 10 de la Constitución española, aunque en éste se menciona el de Nueva Galicia.

Es el artículo 7 el que enumera cada uno de los estados que forman la federación: Chiapas, Guanajuato, el Interno de Occidente —"compuesto de las provincias de Sonora, Sinaloa y ambas Californias"—, el Interno de Oriente —"compuesto de las provincias de Coahuila, Nuevo León, Texas y Nuevo Santander"—, el de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla —con Tlaxcala—, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas.

Como observa N.L. Benson, esta división en estados "coincidía con el plan que Ramos Arizpe y Michelena propusieron en 1820 y 1821 en España, cuando pedían el establecimiento de Diputaciones Provinciales en cada intendencia", estableciendo una en Arizpe para Sonora, Sinaloa y las Californias; otra en Durango para Chihuahua, Durango y Nuevo México, y la tercera para las Provincias Internas de Oriente. Mas en 1822 y 1823 se concederían diputaciones provinciales a Coahuila y Texas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, instalándose sin previa autorización las de Nuevo México y Nuevo Santander.[29]

Pero el mismo proyecto prevé que el Congreso podrá aumentar o disminuir el número de estados con datos más conformes a "la voluntad general y felicidad de los pueblos".

Lo que nos importa en el desenlace de la revolución republicana es la decisión federal de ella.

El sistema republicano se proyecta en el régimen interior de cada estado con la división de poderes, que no podrán reunirse en una persona o corporación (art. 25). El Poder Legislativo se integrará en un Congreso con los diputados que fije la Constitución de cada estado, debiendo elegirse popularmente "y amovibles en el tiempo y modo que ella misma disponga" (art. 26).

El artículo 28 dispone únicamente que el Ejecutivo se confiará temporalmente de acuerdo con la Constitución estatal.

El Poder Judicial se ejercerá por los tribunales que establezca la Constitución local, y dentro del estado se concluirán las últimas instancias de los juicios, excepto en los que la Constitución general reserve a la Suprema Corte de Justicia de la nación o a otros tribunales (arts. 28 y 29).

El artículo 30 establece que las constituciones de los estados "no podrán oponerse en mo-

[28] Jesús Reyes Heroles, *op. cit.*, p. 390.

[29] Nettie Lee Benson, *op. cit.*, pp. 200-201.

do alguno a esta Acta Constitutiva, ni a lo que se establezca en la Constitución general, por tanto no podrán sancionarse hasta que esté sancionada, circulada y publicada esta última".

No obstante, el artículo 32 autoriza que en los estados se establezcan gobiernos provisionales por las legislaturas ya instaladas, y que se continuarán observando las leyes vigentes.

* * *

El esquema del régimen interior de los estados no puede ser más sumario. Ni Huerta ni Ramos Arizpe, los dos federalistas radicales de la comisión redactora, comprometen en el proyecto los detalles que pueden llevar a un debate incierto. Si en el punto no se avanza tanto como en el proyecto de Prisciliano Sánchez, y se está más lejos aún del que va conocemos de S.F. Austin, ciertamente no es menos explícito que la Constitución de Estados Unidos. Sin conocer los documentos en los que constan los trabajos de la comisión, o referencias de sus individuos sobre el planteamiento interno del proyecto, sólo aventuramos las más mesuradas conjeturas. La influencia de Ramos Arizpe en el proyecto, en cuya elaboración interviene con la voz del gobierno Alamán, es indiscutida. Y si recordarnos el retrato que hace de él Zavala, sobre sus talentos, actividad, su destreza en las maniobras y que, aunque no sufría contradicción sabía plegarse cuando veía que no podía sacar partido con la obstinación, comprendemos que asegurado el triunfo federal, la experiencia de Ramos Arizpe dicta su cautela en el punto más inmediatamente conflictivo.

El supuesto del pacto federal, como lo enuncia la enmienda x de la Constitución norteamericana —"Los poderes no delegados a los Estados Unidos por esta Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, quedan reservados a los Estados o al pueblo respectivamente"—, y como lo venían proclamando las provincias, preside la concepción del proyecto mexicano. En él se fundan las limitaciones que se establecen, como otras señaladas, para que los estados no puedan imponer contribuciones o derechos sobre la exportación e importación, y sobre tonelaje, perteneciendo éstos a la tesorería de la federación. A estas limitaciones se agregan las de que los estados no dispondrán, sin consentimiento del Congreso, de tropas y navíos de guerra en tiempo de paz, ni podrán celebrar contratos entre sí, o con países extranjeros, ni entrar en guerra sino ante una invasión actual (arts. 34 y 35).

El diseño federal está propuesto y garantizado en el Acta, y con ésta en la futura Constitución, "obligado cada Estado a sostener a toda costa la unión general de todos" (art. 38).

La concepción del Poder Legislativo merece una atención especial, en la que no profundizaremos por cuanto se formula como ha subsistido hasta nuestros días.

3

LA INSTAURACIÓN FEDERAL
EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN. EL VOTO PARTICULAR DE JOSÉ MARÍA BECERRA

La influencia de Prisciliano Sánchez en el proyecto de Acta Constitucional la señala por vez primera Reyes Heroles cotejando textos. Sin reproducirlos consignémoslos: las fracciones primera, tercera, segunda y cuarta del artículo 11 y el 13 del Pacto Federal de Anáhuac, corresponden en ese orden a las I, III, IV, V, y VII del artículo 13 del proyecto de Acta Constitucional, referidos a las facultades del Poder Ejecutivo.

Se puede verificar también la atención que se tuvo a otros documentos constitucionales al aprobar el Acta, con relación al Poder Legislativo. Antes consignemos que de las atribuciones proyectadas para el Legislativo, el Congreso aprobaría las establecidas en las fracciones I a XV, que pasan, con afinaciones en la redacción de algunas, al Acta Constitutiva de la Federación. En ésta se suprimen la decimosexta —para conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias por tiempo limitado—, y la decimoséptima, sobre las facultades implícitas del Legislativo para hacer efectivas las que el Acta y la Constitución concedan a los poderes federales.

Entre las facultades legislativas no previstas en el proyecto pero aprobadas en el Congreso e incorporadas al Acta Constitutiva de 31 de enero de 1823, hallamos tres inspiradas inmediatamente en la Constitución española del año 1812: la de proteger y arreglar la libertad de imprenta (art. 13, frac. IV), que corresponde a la fracción trigesimacuarta del artículo 131 español; la de "arreglar y, uniformar el peso, valor, tipo, ley denominación de las monedas" (frac. XVIII del mismo artículo), reproduce la decimonona del mismo artículo español; y la de "conceder o negar la entrada de tropas extranjeras" al país (frac. XIX siguiente), que trascribe la fracción octava del citado artículo español.

Otro documento constitucional que se tuvo a la vista por los legisladores mexicanos fue, como ya se señaló, el colombiano de 30 de agosto de 1821. Desde el proyecto podemos verificar las siguientes coincidencias: "fijar cada año los gastos generales de la nación, en vista de los presupuestos que le presentará el Poder Ejecutivo" (art. 13, frac. séptima), reproducción textual de la fracción primera del artículo 55 de Colombia; "decretar la guerra en vista de los datos que le presente el Poder Ejecutivo" (frac. duodécima del mismo artículo) idéntica a la fracción decimosexta del mismo artículo 55 colombiano; "aprobar los *tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad* armada *y cualquiera otro que celebre el Poder Ejecutivo*" (frac. decimoquinta del mismo artículo 13), que en lo cursivo reproduce la fracción decimoctava del artículo colombiano.

Es cierto que en las atribuciones señaladas no existe novedad especial dentro del constitucionalismo latinoamericano, pero las solas identidades verbales revelan el interés con el que

el legislador mexicano atiende al menos a dos constituciones como la española y la colombiana, con preferencia a la federal de Estados Unidos cuyo modelo formal es más próximo. La misma observación, aunque general, conviene a las constituciones federalistas de la América del Sur.

Cuando en 1862 escribe José María Bocanegra, diputado en el primer Constituyente, que el Plan de Constitución Política formado por la comisión del Congreso en mayo de 1823 "sirvió después a los que formaron la Acta Constitutiva de 1824",[30] incurre en una notoria inexactitud.

Concluyamos con una referencia al Poder Judicial en el proyecto de Acta Constitutiva.

El artículo 23 declara: "Todo hombre que habite en el territorio de la federación mexicana tiene derecho a que se le administre pronta, fácil, completa e imparcialmente justicia en orden a las injurias o perjuicios que se le infieran contra su vida, su persona, su honor, su libertad y propiedades, y con este objeto la federación deposita para su ejercicio el Poder Judicial en una Suprema Corte de Justicia, y en los tribunales y juzgados que se establecerán en cada Estado. Ningún hombre será juzgado en el territorio de los estados de la federación mexicana —continúa el artículo 24—, sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto, por el cual se le juzgue: en consecuencia queda para siempre abolido todo juicio por comisión especial, y toda ley *ex post facto*".

Los dos artículos los recoge el Acta Constitutiva afinando su redacción y dejando a la Constitución el fijar la organización y atribuciones del Poder Judicial. Sin precisión se da a éste la competencia para proteger *los derechos de todo hombre* que enuncia el artículo 23.

En el proceso por liberarse de la condicionalidad impuesta en el episodio de la consumación de nuestra independencia, la revolución republicana da forma a su proyecto en su órgano constituyente.

* * *

En la sesión del Congreso del 26 de noviembre, Ramos Arizpe urge el debate general sobre el proyecto de Acta Constitucional. No están aún reunidos, se argumenta, los diputados que forman las dos terceras partes de los que deben integrar el Congreso, cuyo total, según él, sería de 114. Pero en el Congreso están acreditados 75 que asisten, y dos más que han sido aprobados y se encuentran en México. Bustamante apoya a Ramos Arizpe, y el punto se gana.

Se señala el día 29 siguiente para iniciar el debate en lo general.[31]

El 29 se aprueban los poderes de Miguel Gordoa, diputado por Zacatecas, y de Juan de Dios Cañedo, por Guadalajara.

No será sino hasta el 1 de diciembre cuando el Congreso entre al debate del proyecto de Acta. Se comienza por tratar la conveniencia de que los secretarios del despacho asistan al debate. Ramos Arizpe se opone diplomáticamente a su presencia, pero Juan Ignacio Godoy, diputado por Guanajuato, argumenta que no deben concurrir al Congreso "porque estando la

[30] J.M. Bocanegra, *op. cit.*, p. 219.

[31] *El Sol*, 28 de noviembre.

nación inconstituida, sólo existen los apoderados que van a formar su pacto, del cual resultará el gobierno y las demás autoridades". Puede oírse a los ministros, acepta, en algún punto y previo acuerdo del Congreso. Mier apoya a Ramos Arizpe y a Godoy, agregando que los secretarios de Relaciones y de Justicia le manifestaron que no deseaban ser llamados.

Se aprueba que no se invite a los ministros.

Después de que se lee de nuevo el proyecto de Acta, José María Becerra da lectura a su voto particular como individuo de la comisión redactora que no firmó el proyecto. Se aprueba su impresión, pero Becerra declara "que no desea que se imprima, ni menos lo ha formado con otro objeto que el de manifestar su opinión en fuerza de sus deberes..., porque le parecía que el gobierno federal no era el remedio de nuestros males".[32] No obstante será para los antifederalistas un documento principal y *El Sol* lo reproducirá los días 13, 14 y 15 de diciembre.

El Sol, diario que es calificado de ministerial y que se imprime en las prensas importadas por Alamán, comienza a publicar el 2 de diciembre la *Declaración de los Derechos y de los Deberes del Hombre y del Ciudadano*, de la Convención Nacional francesa de 1793, con comentarios acerbos. Aunque no consta el autor de los comentarios, por su significado y la influencia de Alamán en el periódico, es uno de los testimonios que inician la formulación de la ideología conservadora. Mas no es éste nuestro tema.

El 1 de diciembre se resuelve que el proyecto de Acta Constitucional se discuta incluso en sesiones extraordinarias los domingos y días festivos.

El día 2 se recibe en el Congreso una representación de Tlaxcala, que reitera otras para que se le reconozca como estado. Alejandro Carpio pide leer un nuevo voto particular suyo sobre el proyecto de Acta, a lo que se opone Ramos Arizpe. En la misma sesión se recibe una comunicación del general Victoria pasando al Congreso la del capitán de la fragata *Rawlins* notificando que Iturbide desembarcó en Liorna el 2 de octubre anterior. El secretario de Relaciones, Alamán, informa que varias provincias han recibido el proyecto de Acta Constitucional con aplauso, "por lo que el Supremo Poder Ejecutivo era de opinión que convenía saliera el *Acta* sin demora", y el de Justicia, Pablo La Llave, lo apoya. No obstante, se insiste por algunos diputados en no apresurar el debate del proyecto de Acta.[33]

El día 3 de diciembre se inicia el debate del proyecto en lo general.

Ramos Arizpe expone la necesidad que tiene la nación del documento constitutivo, haciendo notar que el proyecto "sólo se contrae a lo más urgente y del momento, sin desarrollar ni tocar cosas que se reservan para la Constitución... porque se perdería el tiempo que tanto se necesita para lo más importante y que no sufre demora".

A la observación de que en el proyecto no se trataba desde un principio de las juntas electorales, Vargas, individuo de la comisión, contesta "que no había duda en que primero se había de establecer la forma de gobierno, como que éste es el principio que arregla toda la organización de la sociedad y no las juntas electorales".

La forma de gobierno, la de república federal, es la proclamación revolucionaria por la que se reúne el nuevo Congreso, y su instauración es el primer objeto de éste en el acto de la fundación republicana que es también el del Estado independiente.

[32] *Ibid.*, 2 de diciembre.

[33] *Ibid.*, 3 de diciembre.

Es en ese momento cuando Carlos María de Bustamante inicia en el Congreso su ataque contra el proyecto: "podía suceder —dice— que el clamor de federalismo suscitado entre nosotros, no tuviese otro origen que el deseo de imitar a los Estados Unidos, sin consideración a la diferencia de circunstancias". El clamor no es unánime, pues "innumerables personas y corporaciones muy respetables se han opuesto a esa forma de gobierno, y podía asegurarse que la opinión general no estaba por ella". Su argumentación apunta a que las provincias, en el estado de miseria nacional, no podrán sostener los muy numerosos funcionarios que demanda el sistema, ni podrían dar los auxilios necesarios en la defensa del país, como había ocurrido en Estados Unidos. Colombia, observa, después de establecer la federación fue subyugada por Morillo, y cuando recobró su libertad abandonó el régimen federal adoptando el actual.

El argumento doble de Bustamante se viene proponiendo en la polémica. Pero consignamos que ésta se abre como consecuencia de las proclamaciones federales. El federalismo irrumpe como un hecho que lleva a su consecuencia la subversión revolucionaria de la titularidad de la soberanía. Frente a la hegemonía de la antigua capital virreinal, las provincias que accedieron con la Constitución española a una autonomía que fue más que una expectativa formal, como lo revelan las diputaciones provinciales, órganos de los pronunciamientos, asumen cada una las que el doctor Mier llama "soberanías parciales". La ejemplaridad de la república de Estados Unidos está presente desde los años de la insurgencia como en el resto de América. Esta ejemplaridad no la hemos investigado ni en su extensión ni en su profundidad. ¿Mas ella podía *dar origen* a las proclamaciones federales en México? ¿Lo fue acaso en el arduo federalismo de la Argentina?

En el federalismo mexicano no figuran un José Artigas, un Estanislao López, un Francisco Ramírez, ni ningún caudillo de la guerra de independencia o de su provincia. Ciertamente el federalismo en México no puede triunfar sin el apoyo militar, mas Quintanar y Bustamante, oficiales realistas hasta 1821, no son ni llegarán a convertirse en caudillos, aunque Bustamante alcance la Presidencia de la República, y en 1836 inaugure el primer régimen centralista. El republicano y terrateniente Felipe de la Garza, en Tamaulipas y Nuevo León sigue los dictados federales de Ramos Arizpe. El federalismo mexicano es obra de ideólogos a los que en su momento se subordinan —el término es válido— los jefes militares. Si podemos hablar de un caudillismo federal, éste es el civil. Y no podemos ignorar que en la crisis última de la forma federal, entre 1858 y 1867, frente a los conservadores y el segundo imperio, el caudillo republicano y federal será también un civil: el presidente Juárez.

* * *

Volvamos al Congreso.

La opinión antifederalista de Bustamante la contradice Mariano Barbosa, diputado por Puebla, poniendo además como ejemplo de mejor sistema de gobierno el federal de Estados Unidos.

No obstante haberse adoptado formalmente la federación desde el Voto del primer Congreso el 12 de junio, la oposición se sigue manifestando. En el debate general sobre el proyecto de Acta, que se prolonga los días 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre, cinco diputados por la pro-

vincia de México —Bustamante, Castorena, Ibarra, Paz y Espinosa— impugnan la federación, y tres —Rodríguez, Hernández Chico y De las Piedras— lo apoyan. En favor del Acta hablan Ramos Arizpe, por Coahuila; Vargas por San Luis Potosí; Huerta por Guadalajara; Barbosa, Llave y Marín por Puebla; Santos Vélez por Zacatecas y Osores por Querétaro. De los diputados de las provincias intervienen en el debate en contra del proyecto, Martínez Vea, de Sinaloa; Martínez, de Chihuahua, y Becerra, de Veracruz. El doctor Mier no interviene en el debate general. Su obsesión es otra sobre el federalismo. La intervención de José María Covarrubias, diputado de Jalisco, según Bustamante fue contraria al proyecto. En la crónica de la sesión del día 3, publicada en *El Sol* del día siguiente, Covarrubias apoya la federación y sólo observa que no se trata el sistema electoral en el proyecto.

Bustamante se refiere al debate del día 3 en su *Diario*: "Los que han hablado en contra, han sensibilizado los inconvenientes de la federación, (y) perderán la votación —predice— pues hay más de cuarenta coludidos de los que se sabe, estando a su cabeza Ramos Arizpe".

El día 4 Bustamante continúa su crónica: "el Sr. Marín ha hablado hoy con el más alto desprecio de las doctrinas de Rousseau... No tengo por muy cuerdo al que hace esta calificación del filósofo de Ginebra, sin haberlo entendido". Marín no sólo citó en su discurso a Rousseau, apoyando en la existencia de una voluntad general el pronunciamiento federal. Citó en el punto a Suárez y Belarmino. Su objeción a Rousseau apunta a la contradicción de presentar los derechos del hombre y hacer "que éste se despoje de todos a disposición de la sociedad quedando así reducido a la esclavitud", negando este supuesto, según la crónica de la sesión. En la polémica los juicios desproporcionados abundan, y Bustamante no los regatea.

Finalmente, el día 7 de diciembre se resuelve en el Congreso que el proyecto está suficientemente discutido en lo general, y por una votación de 44 votos favorables contra 22 se aprueba pasar a su debate en lo particular. La crónica de las sesiones de los días 3 a 7 aparece en *El Sol* del 4 al 8 de diciembre.

En lugar de atender al debate, del que se hacen resúmenes en la crónica que publican *El Águila Mexicana* y *El Sol*, nos referiremos a algunos de los documentos polémicos más significativos.

* * *

El 8 de diciembre toma posesión del cargo de jefe político de México Melchor Múzquiz, diputado republicano y federalista en el primer Congreso, por enfermedad de Francisco Molinos del Campo. La designación de Múzquiz es otra victoria federal.

En el Congreso, los cuatro primeros artículos del proyecto de Acta Constitucional se aprueban con variaciones que no afectan su significado.

El día 9, cuando se trata el artículo 3 —"La religión de la Nación Mexicana es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana. La Nación la proteje por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra"—, se suscita el debate.

Juan de Dios Cañedo, diputado por Jalisco en el Congreso y antes por México en las Cortes de 1820-1822, lo objeta. Después de aclarar que no está en contra de la religión católica que profesa, advierte que el tema debe tratarse "bajo el aspecto político". En primer término señala que si nadie ataca la religión que reconoce como la de la nación, y que si no exis-

ten quienes soliciten otro culto, el artículo es superfluo e inoportuno. "Que además éste decía que la religión de la nación no sólo es, sino que *será perpetuamente* la Católica, lo cual —declara Cañedo— era impropio de un legislador, que no debe referirse a sus futuros indefinidos". Los buenos deseos de que permanezca la religión "no deben expresarse en una ley". Sobre la intolerancia que propone el artículo también dijo —registra la crónica—, que convenía callar en este punto, porque la intolerancia era hija del fanatismo, y contraria a la religión. Dijo que Austria, Nápoles y Roma eran tolerantes, de suerte que a la vista del Sumo Pontífice, cabeza visible de la Iglesia, se permitían los cultos de los protestantes, y de los israelitas. Llamó la atención a que en los países tolerantes como en Estados Unidos, se observa con más exactitud la moral que en los intolerantes. Habló de los males políticos que podía causar la intolerancia, como retraer a los extranjeros protestantes de venir a establecerse entre nosotros, trayéndonos sus conocimientos en las artes y en todos los ramos de la industria. Concluyó diciendo que "o se omitiera el artículo, o sólo se pusiera que la religión Católica, Apostólica, Romana es la de la República; sin tocar cosa alguna de intolerancia".

Es Juan de Dios Cañedo el primer diputado que en un Congreso mexicano se pronuncia por la tolerancia religiosa.

Bustamante defiende el artículo. La crónica en *El Sol* es menos que sumaria: "dijo que las naciones tenían sus caracteres, y el de la mexicana era su catolicismo. Que podrá venir tiempo en que nuestros pueblos pueden tratar sin peligro con los protestantes; pero que en el día la tolerancia sobre ser peligrosa sería impolítica". El último en hablar, antes de que el artículo se aprobara en los términos del proyecto, fue Llave.[34]

El discurso de Llave lo publica *El Sol* del día 11. Para él, la religión católica es "una medicina eficaz para curar las llagas envejecidas del espíritu", y es "una base que facilitará el cumplimiento de las leyes y la prosperidad del pueblo. La prosperidad de los Estados Unidos —señala Llave— no depende de la tolerancia religiosa, sino del celo y prontitud con que se castiga el hurto y el homicidio, de las buenas leyes que protejen la industria fabril, mercantil y agricultura, de la repartición de terrenos, y de la libertad civil, como también de los pocos gravámenes que facilitan la circulación del comercio". Sobre la inmigración de maestros en industrias y artes, ellos también los hay católicos; además, "sería cosa muy dura —reflexiona—, que un legislador por conservar lo accesorio, desatendiese lo principal, pues la felicidad eterna, que promete la religión Católica, es el principal fin que se proponen los hombres, y la prosperidad temporal solamente es un medio para conseguir aquélla; y el legislador no debe sumergir a innumerables generaciones que nos han de suceder en las tinieblas del Deísmo". Acude a San Pablo para débilmente enunciar el tradicional postulado de que "jamás puede una verdad acompañarse de la mentira".

Es cuanto nos resta del debate sobre la tolerancia, que fue, en el lenguaje pintoresco de Bustamante, "una gran zambra en el Congreso, y cual no era de esperarse", como escribe en su *Diario* el 9 de diciembre. La crónica de la sesión disimula los discursos.

No podemos dejar de observar que el incansable Ramos Arizpe no defiende el punto, dejándolo a la suerte, por otra parte no dudosa, del debate y la votación. Estaba lejos aún el día en el que se declarara la tolerancia religiosa.

[34] *Ibid.*, 10 de diciembre.

* * *

Antes de referirnos al debate central en el Congreso sobre la federación, atenderemos al voto particular de José María Becerra sobre el proyecto de Acta Constitucional, leído en el Congreso el 1 de diciembre.

Para Becerra no hay asunto de mayor importancia que el de la aprobación o no del proyecto. Rinde un homenaje a sus autores por sus luces y actividad. No concurrió a la primera sesión de la comisión por no habérsele citado, y cuando asistió a seis de ellas "una irritación simpática me privó del gusto de presenciar las demás". Pero está obligado a presentar su voto particular.

Reyes Heroles es quien por vez primera lo considera puntualmente.[35] Como indica, la mayor parte del *Voto* se propone demostrar que la voluntad general "no se ha expresado por la forma federal, recurriendo a Paley, Bentham, Blanco-White y, desde luego, a Rousseau.

Becerra previene que su juicio no se tome como el de un abogado de la provincia de México que lo eligió —Becerra firmará el Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824 como diputado por Veracruz, la otra provincia no federalista, y desde la sesión del 30 de octubre de la diputación permanente consta que había presentado sus poderes como diputado por Veracruz.[36] El equívoco, inexplicable, no importa.

El *principio principal* en que se funda el proyecto, y "el que he oído alegar con generalidad —manifiesta Becerra—, es el de que la voluntad general de la nación es la de constituirse en República Federada".

Becerra plantea el tema: "Cuatro son las proposiciones que se encierran en el principio referido: 1. Que hay voluntad general en la nación para constituirse en República Federada. 2. Que la manera en que esta voluntad se ha manifestado, es la suficiente para conocerla sin equívoco. 3. Que hay precisión de seguirla y conformarse con ella, y 4 y última. Que la ley es la expresión de la voluntad general que es el principio corriente. Todas estas proposiciones son absolutamente falsas o cuando menos muy dudosas" para levantar el edificio de la nación, "teniendo una de verdad eterna sobre qué construirlo, que es la de que en materia de gobierno todo debe dirigirse al mayor bien y felicidad de la nación".

El discurso de Becerra es extenso y minucioso, aun como intervención parlamentaria.

Entra a impugnar el primer supuesto, el de la voluntad general para constituir una república federal, planteando la concepción de voluntad general en Rousseau quien "dio el nombre de ley a su expresión". La voluntad general se manifiesta, y remite al *Contrato social*, cuando el pueblo suficientemente informado delibera, "cuando opine cada uno por sí mismo, y, cuando no haya ninguna sociedad parcial en el Estado". La voluntad general no la hay cuando existen diversos partidos, porque "sólo lo será la de cada uno, con respecto a sus miembros, quedando particular respecto al Estado" siendo el voto del partido que prevalezca un voto particular. Hace una cita de Rousseau en su apoyo. En las circunstancias de la nación, declara Becerra, no se encuentra esa voluntad general, siendo falsa su existencia, lo que

[35] Jesús Reyes Heroles, *op. cit.*, pp. 398-401.

[36] J.A. Mateos, *op. cit.*, p. 369.

desautoriza la afirmación de que ella está manifestada para conocerla sin equívoco en favor de la federación.

El tercer postulado de los federalistas, de que es preciso seguir la voluntad general y conformarse a ella, preocupa más a Becerra, quien parte de que esa voluntad general no es en sí un ente de razón. Los gobiernos deben atender siempre la opinión pública "para neutralizarla, si así fuere conveniente..., para dirigirla, ilustrarla, y no chocar de frente con ella, es una verdad que nadie duda, pero que deba seguirse precisa e indispensablemente —afirma Becerra—, es una falsedad, que se infiere hasta de los principios de Rousseau. Los pueblos no tienen instrucción en materias políticas, y por lo mismo su opinión en ellas no debe servir de guía". Los hombres de talento opinan por la federación, se dice. Los pueblos, "¿...será preciso que sean de su opinión? ¿no es más natural que no sean? ¿les merecen o deben merecerles tanta confianza como sus representantes? Si así fuera, ellos y no éstos hubieran sido nombrados, y entonces confesaría yo —continúa Becerra— que la de aquéllos y no la de éstos fuera su opinión". El dictamen que obliga es el de los representantes elegidos por el pueblo.

La opinión en las provincias está dispersa y no tiene *las luces del debate*, lo "que es puntualmente una de las razones porque las provincias no deben dar instrucciones preceptivas a sus diputados, porque —afirma Becerra— ninguna de ellas en particular tiene opinión fija, ni sabe si la variará en la conferencia con otras. Se cumple con el pueblo respecto a lo que se le debe por su soberanía, dice Bentham, con sólo que se conceda la libre elección de sus representantes, y hacer proposiciones, teniendo aquéllos sus sesiones públicas para que por medio de la imprenta libre y en el tribunal del público reporten el descrédito o buen nombre a que se hicieron acreedores. Éste es el gran estímulo y el único freno que se les puede aplicar". Existen también para ellos, los representantes, otros límites, ocurriendo a los "medios pacíficos y legales que se prescriben siempre en las Constituciones para la variación de las leyes aun Constitucionales, como por la corta duración de los representantes. Hemos visto —continúa— que el público muy a menudo se engaña, por lo que sujetándose las leyes y los representantes a algún juicio o revisión, se hallaría el Estado expuesto a continuas convulsiones".

Pretende comparar "las leyes con lo que se llama la voluntad común, y la variación y separación del juicio de los representantes... sería —para Becerra— el semillero más fecundo de las mayores desgracias". Becerra apela a la autoridad de Paley y Blanco-White.

Acudiendo a autores ingleses Becerra va adaptando, sin mencionarlo, un tradicionalismo escolástico al hecho que advierte y repugna. "No lo dudemos Sr. —dice al Congreso—, fomentamos las revoluciones si vamos contra estas ideas, y si deseamos evitarlas es necesario que nos opongamos a ellas".

Becerra acepta el hecho, y su licitud, de ser diputado a un Congreso que es el primer órgano nacional de la revolución republicana federal, el órgano que debe constituir a la nación, y desde él desautoriza la legitimidad del pronunciamiento revolucionario y propone la ruptura con éste. No sólo ello. Discurre en el Constituyente ignorando su naturaleza y subrogándola a la de un Estado constituido. La tesis y el lenguaje son explícitos: "solamente es permitido separarse de lo que prescribe el superior, cuando sus preceptos son contrarios abierta y evidentemente al derecho divino o natural, debiendo obedecer cuando sea dudoso; y en lo po-

lítico... solamente será lícito separarse del sentir de los representantes y de sus leyes, cuando éstas se opongan con toda evidencia al fin único que deben tener los legisladores al dictarlas, que es el mayor bien general o la mayor felicidad de la nación". Becerra revive la tesis del *pacto subjetionis* ahora en favor de los representantes temporales de origen electivo.

"Pero hablemos francamente, y digamos todo lo que debemos decir —decide Becerra—. El pacto social, la soberanía de la nación en la manera que se entiende vulgarmente, la voluntad general, la libertad y otros principios semejantes ¿son más que puras teorías respecto de los cuerpos políticos, como lo son para los físicos los vórtices de Descartes, la atracción de Newton, el sistema corpuscular... ? No se encuentra más diferencia sino que éstas en nada influyen en los cuerpos físicos que no se formaron según ellas sino según las reglas incomprensibles de la sabiduría divina, y aquéllas contagian con su debilidad e imperfecciones a los que se forman según ellas". Mas estas ideas están abandonadas por los grandes hombres de Europa, "con los autores que los enseñaron, Rousseau, Pen (¿Paine?) y otros de la misma clase, que por desgracia son tal vez los únicos que se leen en nuestros pueblos". Y son ésos los principios que fundan el proyecto de Acta Constitucional que se propone examinar.

La república federal, con estados libres, soberanos e independientes amenaza ruina. Es una *máquina complicada* con tantas ruedas como congresos provinciales. El deterioro de una puede causar hasta la destrucción del todo. El ejemplo que pone es sorprendente: la república francesa, central, derrotando a las coaliciones que la combatían. La impaciencia de sujeción del que se considera soberano, la disposición a extender la autoridad, las ambiciones del poder, los resentimientos particulares, la busca del aplauso, moverán a los congresos provinciales a contrariar al general y al gobierno, obstaculizando los negocios públicos. Ya ocurrió con las diputaciones provinciales. La federación creará rivalidades y aumentará las existentes. Frente al enemigo exterior, el ejemplo de Caracas, a cuyo sistema federal se atribuye su reconquista por el general Morillo, lo propone de nuevo Becerra.

El ejemplo de Estados Unidos no lo acepta por sus notorias disensiones. Su progreso no se origina en la federación "sino en otras sabias leyes que tienen cabida en los gobiernos centrales y aun en las monarquías".

En su impugnación del proyecto federal acude una vez más al planteamiento teórico. Se trata del pacto social y sus cláusulas que se reducen —y cita a Rousseau—, "a saber (en) la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad", enajenación por la que la sociedad consuma su unión más perfecta. La reserva de algunos derechos por los particulares sin que exista un superior sobre ellos, "y siendo cada uno en cualquier punto su propio juez —en palabras de Rousseau—, pretendería bien pronto (ese cada uno) serlo de todos; y entonces subsistirá otra vez el estado de naturaleza, y la asociación vendría a ser tiránica o vana". La federación de estados libres, soberanos e independientes, concluye, dejaría sin efecto el pacto entre ellos subsistiendo el estado de naturaleza.

Las citas de Rousseau inciden en su derivación autoritarista, y aun totalitaria, al servicio de la polémica inmediata. Becerra plantea la cuestión en términos de dilema teórico sin aludir siquiera, ni por una sola vez al proyecto orgánico del Acta Constitucional. Apelando a la autoridad de un autor que repugna, refuta el proyecto partiendo de la petición de principio que se funda en aquél. En sus restantes censuras coincide con las que más elocuentemente formulará el doctor Mier en contra del artículo 5 del Acta Constitucional.

El voto de Becerra, no obstante su carácter casi de mero escrúpulo como lo manifestó el 1 de diciembre, se imprime por acuerdo del Congreso.[37]

El prestigio personal del autor es reconocido: "es uno de los Diputados más celosos de la libertad de la patria, y tiene tan zanjada su reputación entre los conocedores de los hombres de bien, que no titubean en adherirse a su voto cuando se hallan sin luces para pronunciarse por sí mismos", escribe Bustamante en su *Diario* el 1 de diciembre después de conocer el voto en contra de la federación.

Pero en esa hora los diputados tienen pronunciada su opinión, y los autores del proyecto no comprometen éste. El voto de Becerra en el debate sobre la federación adelanta el deslinde entre el pensamiento conservador —centralista— y el liberal que adopta la federación.

[37] José María Becerra, *Voto particular del señor Becerra diputado por la provincia de Veracruz, sobre el Proyecto de Acta Constitutiva leído en la sesión del día 2 de noviembre de 1823, y mandado imprimir de orden del Soberano Congreso*, México, 1823.

4

EL DEBATE DEL PROYECTO DE ACTA CONSTITUCIONAL
EL DISCURSO DEL DOCTOR MIER

La sola reunión del Congreso verifica la victoria de la revolución federal, y la polémica su naturaleza liberal.

La experimentada habilidad de Ramos Arizpe elude distraerse en puntos que son subsidiarios de la cuestión de fondo: la instauración del federalismo. El debate de los cuatro primeros artículos del proyecto no demora su aprobación. Nos importaría cómo se trató el artículo 2 que declaraba: "*La Nación* Mexicana *es libre*, es soberana de sí misma y es *independiente* para siempre de España y de cualquiera otra potencia; *y no es, ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona*", reproduciendo en lo cursivo el artículo 1 de la Constitución española.

Lorenzo de Zavala objeta el artículo porque, dice, "desde que se hizo manía entre los pueblos darse constituciones, se han insertado en ellas artículos doctrinales, que no surten efecto alguno legal, y de esta clase es el presente. Que además el decir que la nación es soberana de sí misma, es como decir que ella se manda y obedece a un mismo tiempo. Que tales principios metafísicos e impracticables han sido victoriosamente impugnados por Paley, Bentham, y el *Censor* europeo...; de suerte que aunque el mismo Sr. Zavala proclamó con furor esos principios —se dice en la crónica de *El Sol*—, lo cual le costó una prisión, se ha desengañado que no tiene efectos prácticos. Concluyó diciendo que lo que importa a los pueblos es gozar de su libertad". La versión en la crónica de la sesión resume únicamente el juicio de Zavala. Mas debemos conformarnos con tan sumaria fuente.

Ramos Arizpe responde a Zavala. No acepta que se llamen manía los esfuerzos de los pueblos para darse constituciones. Esos deseos y esfuerzos, "y la proclamación y defensa de la soberanía nacional, liberaron a España del yugo de Bonaparte y de la tiranía doméstica, y a nosotros nos dieron la independencia y libertad. Que la exageración de principios es la que produce los horrores de la guerra civil y la anarquía, y por eso es necesario usar moderación en aplicarlos...". Y en cuanto a la final objeción de Zavala, responde: "que o las naciones no habían de ser soberanas, o lo habían de ser de sí mismas... porque eso importa tanto como darse las leyes que ella misma ha de obedecer y reasumir los derechos en cuyo ejercicio consiste la soberanía, para disponer de ellos del modo que le convenga".

Covarrubias apoya a Ramos Arizpe.[38]

Los discursos debieron ser extensos. Desconociéndolos, sólo registramos la extraña intervención de Zavala.

[38] *El Sol*, 9 de diciembre.

El día 9 continúa el debate del artículo segundo y finalmente, y sin polémica mayor, se aprueba, suprimiendo la expresión *de sí* misma.[39]

En el Congreso se vuelve sobre el tema de la soberanía al debatirse el día 10 el artículo 4 del proyecto: "*La Soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente* a ésta *el derecho de adoptar la forma de gobierno que le parezca más conveniente* para su conservación y mayor prosperidad; *de establecer* por medio de sus representantes *sus leyes fundamentales* y de mejorarlas o variarlas, según ella crea convenirle más". Las cursivas corresponden al contenido del artículo tercero del proyecto de Constitución española, al que ya nos hemos referido.

Guridi y Alcocer recuerda que en las Cortes de Cádiz propuso sustituir el *término esencialmente* por *radicalmente*, lo que acepta la comisión.

En el debate, Vargas contesta a Cañedo que sugiere la supresión del artículo, "porque si se adopta el gobierno republicano federal, y cada estado es soberano, como se asienta en un artículo posterior, no se puede concebir cómo la soberanía que es el principio y fuente del poder y que por lo mismo es una, se divida en tantas cuantos sean los estados". Es la razón por la que en la Constitución de Estados Unidos no se habla de la soberanía de la nación. Es cierto que en la Constitución no se habla de soberanía, pero el artículo II de los artículos de confederación y unión perpetua de los Estados, de 9 de julio de 1778, expresaba: "Cada estado conserva su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho, que por esta confederación no sea expresamente delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso".

Vargas responde a Cañedo "que los Estados Unidos procedieron de la circunferencia al centro, porque estando separados se unieron, y nosotros procedimos del centro a la circunferencia, porque estando unidos y con un gobierno central, vamos a distribuirlo en los estados... por lo cual, y porque tenemos intereses comunes, en que no podemos separarnos, podemos llamarnos con propiedad *nación*, de la cual emanan los supremos poderes, y, en la cual reside la suma de derechos, que son la soberanía. Que el llamar soberanos a los estados —explica—, es porque a ellos compete exclusivamente todo lo respectivo a su gobierno interior".

Mier se aparta de las opiniones expresadas: "ningún individuo puede tener ni más talento ni más fuerza que todos lo que componen la nación, y como en aquella superioridad absoluta consiste la soberanía, de ahí es que sólo la nación puede tenerla; pero que la soberanía convencional se halla en las personas o cuerpos a quienes la nación confía su poder". Mier concluye "Pidiendo que se aprobara el *Voto* del Sr. Mangino, que salva todas las dificultades".[40] El voto de Mangino, recordemos, proponía declarar: "La soberanía reside esencialmente en la reunión de los Estados que componen la Nación Mexicana; y la facultad de hacer, ejecutar y aplicar las leyes, será ejercida por los cuerpos o personas que se designen en esta Acta y en la Constitución".

La penuria de los que son apenas resúmenes del debate en las crónicas de las sesiones que se publican en *El Sol* y *El Águila Mexicana*, nos limitan a registrar el solo sentido de las intervenciones.

[39] J.A. Mateos, *op. cit.*, p. 611.

[40] *El Sol*, 11 de diciembre.

* * *

Los artículos 5 y 6 del proyecto, en los que se centra el debate sobre la federación, declaran: "Art. 5o. La Nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal. Art. 6o. Sus partes integrante son estados libres, soberanos e independientes, en lo que exclusivamente toca a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta Acta y en la Constitución general".

El primero en hablar es el doctor Mier, "peroró más de una hora, pero lo hizo con tanta energía, solidez y elocuencia, que dejó atónito al Congreso —escribe ese día Bustamante en su *Diario*— ... pero inútiles esfuerzos. El partido contrario está tan prevenido contra su opinión, como Festo contra las doctrinas de Pablo, a quien solamente admiró y exclamó lamentándose de que tan bella cabeza estuviese atacada con una lastimosa locura y frenesí". Bustamante le rinde tributo obligado. El discurso de Mier lo califica Alamán en 1852 de *profético*, repitiendo la calificación que hiciera Bustamante en 1843. La historia lo recoge.

El debate sobre el artículo 5 se prolonga los días 13 a 16 de diciembre; el 6, del 17 al 19.

Antes de iniciar la lectura de su discurso Mier declara: "Voy a impugnar el artículo 5o. de la República federada en el sentido del 6o., que la propone compuesta de estados *soberanos e independientes*".

"Son conocidos mis escritos en favor de la independencia y la libertad de América; son públicos mis largos padecimientos, y llevo las cicatrices en mi cuerpo", declara Mier como preámbulo. Viejo, "después de 50 años, ¿qué tengo que esperar sino el sepulcro? Me asiste, pues, para que cuando voy a hablar de lo que debe decidir la suerte de mi patria, se me crea desinteresado e imparcial. Puedo errar en mis opiniones; éste es el patrimonio del hombre...".

El hombre legendario surge de nuevo con elocuencia, mas el pronóstico sobre el resultado lo hace el centralista Bustamante.

Mier recuerda su republicanismo, y la acusación de corifeo de él que se le hizo por el iturbidismo. Menciona su *Memoria político-instructiva*, que en 6 000 ejemplares lo difundió. Apenas derribado Iturbide, manifiesta, "convoqué a mi casa una junta numerosa de diputados, y les propuse, que declarando la forma de gobierno republicano, como ya se habían adelantado a pedirla varios diputados en proposiciones formales, y dejando en torno del gobierno para que lo dirigiese un senado provisional de la flor de los liberales, los demás nos retirásemos, convocando un nuevo Congreso". N.L. Benson recuerda en su ensayo que en realidad fue Gómez Farías, apoyado por Múzquiz, quien pidió al Congreso el 2 de abril la convocatoria de un nuevo Congreso para que organizara a la nación en la forma más conveniente, lo que fue rechazado por el Congreso. En el Congreso hay varios testigos, afirma Mier. Mas el gobierno temió verse desamparado por el Congreso, y así se resolvió trabajar en el proyecto de bases constitucionales que mostrara al país que si el Congreso había resistido formar una Constitución fue para no consolidar el trono. El proyecto que se presentó en mayo al Congreso se trabajó durante 18 días, y no se comenzó a debatir "porque las provincias comenzaron a gritar que carecíamos de facultades para constituir a la Nación. Dígase lo que se quiera —afirma Mier—, en aquel proyecto hay mucha sabiduría y sensatez". Se le critica que bajo el nombre de federal se propuso un régimen central. Él ha oído la misma censura contra el proyecto actual.

Los modos de federarse son muchos. Hay federación en Alemania, en Holanda, en Suiza, en Estados Unidos, y pueden formarse más. "¿Cuál es la que a nosotros convenga?... Sobre este objeto va a girar mi discurso".

En su ensayo, *Servando Teresa de Mier, federalista*, N.L. Benson es quien primero y lúcidamente cuestiona el calificativo de antifederalista al discurso de Mier, heredado como lugar común.[41] Y en verdad el discurso ha sido más mencionado que examinado textualmente. No ha sido poca la contribución de los centralistas elogiando el discurso para perpetuar el juicio.

"La antigua comisión opinaba —continúa Mier—, y yo creo todavía, que la federación a los principios debe ser muy compacta, por ser así más análoga a nuestra educación y costumbres, y más oportuna para la guerra que nos amaga, hasta que pasadas estas circunstancias en que necesitamos *mucha unión*, y progresando en la carrera de la libertad, podamos sin peligro, ir soltando las andaderas de nuestra infancia política, hasta llegar al colmo de la perfección social, que tanto nos ha arrebatado la atención en los Estados Unidos". La prosperidad de ellos es "el disparador de nuestras Américas", sin atender a las diferencias. Mier reitera el argumento de que en el norte se federaron estados separados e independientes, en tanto que "federados nosotros, estando unidos, es dividirnos". Además, Estados Unidos vivía "bajo una Constitución que con sólo suprimir el nombre de Rey es la de una República", y nosotros durante 300 años hemos vivido bajo un monarca absoluto. Las comparaciones siguen: "Aquél era un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre; nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigo del trabajo, y queriendo vivir de empleos como los españoles, tan ignorantes en la masa general como nuestros padres".

Estados Unidos, con los puertos necesarios, se extiende sobre litorales; nosotros posemos pocos puertos o fondeaderos, "y la naturaleza misma, por decirlo así, nos ha centralizado".

Mier también atribuye la reconquista española de Venezuela y Colombia al federalismo de sus provincias, y la pérdida de la Banda Oriental por Buenos Aires al mismo origen. La experiencia los decidió a centralizarse, afirma.

Los argumentos en su momento pueden impresionar. ¿Pero la reconquista española en la antigua Tierra Firme se debió a la federación adoptada? ¿Y acaso en Nueva Granada no fue la división de las provincias la que dio origen a la federación, único medio de unirlas como lo aceptó Nariño? ¿Y no fueron acaso gobiernos directoriales de Buenos Aires los que abandonaron al federalista Artigas?

Los argumentos pueden proponerse en sentidos contradictorios. El problema de las guerras civiles y la anarquía es otro.

Causa extrañeza que Mier no acuda a la autoridad de Bolívar, tanto al referirse a Colombia como a Venezuela para impugnar el federalismo del proyecto constitucional, a no ser que desconociera su antifederalismo, supuesto desechado pues Mier sale de Londres a América con Francisco Javier Mina en 1816, cuando los documentos son públicos y conocidos. Su actitud la ratifica Bolívar en Angostura y Cúcuta, y Mier se referirá a la Constitución de agosto de 1821 promulgada en Cúcuta y a la del Perú de 17 de diciembre de 1822. Mier calla el

[41] Nettie Lee Benson, "Servando Teresa de Mier, Federalist", *The Hispanic American Historical Review*, noviembre de 1948, pp. 514-525.

nombre de Bolívar porque ciertamente no coincide con los términos de su antifederalismo y con los de su autoritarismo.

Mas volvamos al discurso.

Mier se refiere a circunstancias reales como la pobreza de las provincias. "¡No alcanzan... a pagar sus diputados al Congreso general, y quieren echarse a cuestas todo el tren y peso enorme de los empleados de una soberanía!" Pero se alega que así lo quieran las provincias. "Al pueblo se le ha de conducir —declara—, no obedecer: sus diputados no somos sus mandaderos que hemos venido aquí a tanta costa... Para tan bajo encargo sobraban lacayos en las provincias, o procuradores en México. Si los pueblos han escogido hombres de estudio e integridad para mandarlos a deliberar... es para que, acopiando luces en la reunión de tantos sabios decidamos lo mejor que les convenga; no para que sigamos servilmente los cortos alcances de los provincianos circunscriptos en sus territorios".

Mier propone después el argumento doctrinario: la soberanía reside en la nación y para elegir diputados se atiende a su distribución en provincias, pero los elegidos son representantes de toda la nación. Por ello ninguna fracción de ésta puede limitar los poderes de un *diputado general.* Es regla de derecho que toda condición absurda o contradictoria es ilegal y anula el contrato. En el Congreso Constituyente se implican "bases ya constituidas", además de que en la convocatoria está prohibida toda restricción a los diputados, como las impuestas por Guadalajara y Oaxaca.

El revolucionario autor de la *Memoria político-instructiva* soslaya, para no decir que ignora, el supuesto mismo de la proclamación revolucionaria federal por la que finalmente se convocó y reunió el Congreso.

Después de esta amplia exposición Mier apunta a su objeto anunciando: "¿es cierto —pregunta— que la nación quiere república federada *en los términos* que intenta dársenos en el artículo 6o.?"

No desea ofender, aclara, pero supone que algunos en las provincias ven en la federación el medio para tener los mandos y el gobierno de ellas. En el Congreso hay empeño en demostrar que las provincias quieren federación mas no se probará jamás, afirma, "que quieran tal especie de federación angloamericana, y más que angloamericana. ¿Cómo han de querer los pueblos lo que no conocen?", pregunta al Congreso.

El apremio polémico lo empuja. "Pregúntese a cien —dice en su desenfadado estilo—, qué casta de animal es la *república federada;* aun en estas mismas galerías que nos oyen, y doy mi pescuezo si no responden mil desatinos. ¡Y ésa es la pretendida voluntad general...!", exclama. Es la voluntad general que alegaba Iturbide: vítores, fiestas, aclamaciones, juramentos, los títulos que se le daban...

Frente a una voluntad general que desautoriza, Mier propone la voluntad *legal,* la de los representantes en un Congreso deliberante. La voluntad general numérica, el estado natural de que hablan los políticos de las provincias, "no son —para él— sino los principios ya rancios, carcomidos y detestados con que los jacobinos perdieron la Francia, han perdido la Europa y cuantas partes de nuestra América han abrazado sus principios". Y sigue con una confesión: "yo también fui jacobino, como consta en mis dos *Cartas de un americano al español de Londres,* porque en España no sabíamos más que lo que habíamos aprendido en los libros revolucionarios de Francia". Él fue testigo, afirma, de su convulsión perpetua.

Pero llegó a Inglaterra —"un navío sentado en medio de una borrasca general"—, y leyó a Burke, Paley, Bentham, y a otros, y quedó "desengañado de que el daño provenía de los principios jacobinos", y, como su amigo Blanco-White, cantó la palinodia. Se vuelve ahora a Rousseau, quien desde los primeros capítulos del *Contrato social* "irrita contra todo gobierno, como contra una usurpación de sus derechos", que pone al hombre "trabas indignas de su soberanía". Mier se vuelve contra Rousseau pero no contra Paine, a quien no menciona y a quien combatió Burke.

Un gran temor, el mismo de otros ilustres americanos, dicta el apasionado alegato. Los seducidos "por la brillantez de los principios y la belleza de las teorías jacobinas" piensan que se pueda contener a los pueblos después del primer paso, aunque está demostrado "que una vez puestos los principios, las pasiones sacan las consecuencias, y los mismos conductores del pueblo, que rehúsan acompañarlo en el exceso de sus extravíos, cargados de nombres oprobiosos, como desertores y apóstatas del liberalismo y de la buena causa, son los primeros que perecen ahogados... Cuántos grandes sabios y excelentes hombres expiraron en la guillotina, levantada por el pueblo francés, después de haber sido sus jefes y sus ídolos".

Mier identifica *voluntad general* y *jacobinismo*, y en la identificación involucra el *terror*.

No hemos investigado la proyección de la imagen del *terror* francés en la emancipación de América, ni la de la revolución negra de Santo Domingo. No sólo Mier se lanza contra esas sombras que el día mostrará como molinos de viento. Un hecho es cierto: cuando fundamos la república, y en nuestras más cruentas guerras civiles, no encontramos los patíbulos del terror ideológico. ¿Pero a qué jacobinismo se enfrenta Mier cuando impugna el proyecto constitucional? Su pasión lo arrebata y él mismo crea el enemigo que combate.

Mier retorna a su asunto contestando la pregunta que se le puede hacer:

> ¿Quiere U. que nos constituyamos en una República central? —y responde—: No. Yo siempre he estado por la federación; pero una federación razonable y moderada; una federación conveniente a nuestra poca ilustración, y a las circunstancias de una guerra inminente, que debe hallarnos muy unidos. Yo siempre he opinado por un medio entre la confederación laxa de los Estados Unidos, cuyos defectos han patentizado muchos escritores, y que allá mismo tiene muchos antagonistas, pues el pueblo está dividido entre federalistas y demócratas; un medio, digo, entre la federación laxa y la concentración peligrosa de Colombia y del Perú; un medio en que dejando a las provincias las facultades muy precisas para proveer a las necesidades de su interior, y, promover su felicidad, no se destruya la unidad, ahora más que nunca indispensable, para hacernos respetables y temibles a la Santa Alianza, ni enerve la acción del gobierno, que ahora más que nunca debe ser enérgica para hacer obrar simultánea y prontamente todas las fuerzas y recursos de la nación [...] Éste es mi voto y mi testamento político.

El largo discurso y su pasión polémica no corresponden, en verdad, a su profesión de fe ante el proyecto constitucional. Su pugna provinciana con Ramos Arizpe, que no menciona, su preocupación por infortunios inminentes y el temor a las facciones y a la división, lo obsesionan. "Dése a cada una —de las provincias— esa soberanía parcial, y por lo mismo ridícula, que se propone en el artículo 6o., y ellas se la tomarán muy de veras. Cogido el cetro en las manos, ellas sabrán de *diestro a diestro* burlarse de las trabas con que en otros artículos se

pretende volvérsela ilusoria". Ya en Guadalajara y en Zacatecas instalaron sus congresos constituyentes, y Yucatán seguirá sus pasos. El pueblo "se atiene a los nombres, y la idea de que el nuestro tiene el nombre de soberanía. es la de un poder supremo y absoluto, porque no ha conocido otra alguna; con eso basta para que los demagogos lo embrollen todo" y lleven al pueblo a la insubordinación y la anarquía. Limitar la soberanía de los estados a lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior "tiene una significación tan vaga como incierta", y en los congresos locales no faltará quienes la amplíen y confundan al gobierno nacional. Enumera facultades que se arrogarán las provincias.

Mier se declara en favor del proyecto de mayo, que satisface los intereses de los pueblos sin atribuirse las provincias la soberanía que repudia en el artículo 6o. "Señor, por Dios —exclama—, ya que queremos imitar a los Estados Unidos en la federación, imitémoslos en la cordura con que suprimieron el artículo de Estados soberanos en su segunda constitución".

Apunta en seguida a la desigualdad entre las provincias y a la posibilidad de aumentarlas y modificar sus territorios, preguntando cuál se conformaría a su disminución, y cuál a ser incorporada a otra para formar un estado. Torna Mier a los ejemplos de Colombia y Venezuela y a la guerra civil en el Plata.

Ante la aprobación del proyecto, de la que no puede dudar, Mier propone que se demore la promulgación de la Constitución. Estados Unidos lo hizo hasta después de concluida su guerra con la Gran Bretaña. México puede regirse por la Constitución española, los decretos de sus Cortes hasta el año 1820, y los que dicte el Congreso conformándose a nuestras circunstancias. Basta que el Congreso lo decrete así para que el Estado no se disuelva. Ahora teme a las constituciones, que como en Francia fueron el almanaque de su revolución.

El fantasma de la Santa Alianza lo persigue, y ante él "necesitamos fuerza, y toda federación es débil por naturaleza". A las provincias las han seducido "para que pidan lo que no saben ni entienden y preveo la división, las emulaciones, el desorden, la ruina el trastorno de nuestra tierra hasta sus cimientos".[42]

Mier concluye su discurso *con lágrimas*, escribirá Bustamante después de transcribirlo en 1843 en la *Continuación del cuadro histórico,* cuando "los que lo oímos y hemos presenciado los resultados de la federación, —éstos— nos han demostrado la exactitud de sus vaticinios".[43] Alamán, el más autorizado hombre del centralismo conservador, coincidirá con Bustamante diez años más tarde cuando en su *Historia* califica el discurso de profético pues "pintó tan al vivo todas las consecuencias que iban a dimanar de aquel principio —el federal—, que después ha sido reimpreso y citado frecuentemente, a medida que han ido cumpliéndose sus anuncios".[44]

* * *

El documento más célebre en la polémica lo hereda el autor del alegato republicano más radical en la hora de la consumación de la independencia. Cuando se vota el artículo quinto del ||

[42] Servando Teresa de Mier. *Discurso que el día 13 de diciembre del presente año de 1823 pronunció el Dr. diputado por Nuevo León, sobre el artículo 5o. del Acta Constitutiva,* México, 1823.

[43] Carlos María de Bustamante, *op. cit.*, p. 194, después de transcribir el discurso del doctor Mier —pp. 180-194—, lo que no hace Bustamante con el voto de Becerra.

[44] Lucas Alamán, *op. cit.*, p. 718.

proyecto el 16 de diciembre, y la votación se hace nominal, la palabra *federación* se aprueba con los votos en contra de sólo diez diputados, entre ellos Carlos María de Bustamante, quien escribe ese día en su *Diario* que el doctor Mier "no quiso votar, y se metió en un socucho de los de descanso... El gato escondido y la cola de fuera, hay hombres exóticos, y éste es uno de ellos". Pero en la crónica de la sesión, publicada en *El Sol*—centralista— el día 17 de diciembre, consta el voto de Mier precisamente en favor del término *federal*, al igual que en el acta que recoge y publica Juan A. Mateos.[45] Y Mier no es hombre negligente en asuntos que le incumben para no dejar de aclarar un dato falso y público en el asunto más grave de la hora.

N.L. Benson examina el discurso de Mier relacionándolo con su actuación toda en el Congreso. "Adoptarlo como portaestandarte fue —escribe— una medida inteligente de parte de los verdaderos centralistas... a pesar de su reiteración constante de que era federalista y quería una República federal". Esta adopción polémica por parte de los centralistas ha oscurecido su propia definición expresa —la de Mier— a los estudiosos de nuestra historia y a los hombres de su tiempo, como Bustamante que omite su voto y califica a Mier de *exótico*.[46]

N.L. Benson verifica con acuciosa precisión los testimonios de Mier, dentro y fuera del Congreso, para desvanecer la imputación de centralista que se ha perpetuado sin contradicción. Sin incurrir en afán alguno reivindicatorio coincidimos con la doctora Benson. Pero el propio Mier en su arrebato polémico, impugnando *la soberanía* atribuida a los estados y la *federación laxa*, es quien da armas a federalistas y centralistas para que el discurso sea en su momento, y después, considerado como el más elocuente de los alegatos en contra del proyecto federal. Ante éste, Mier se deja arrastrar paradójicamente por sus apasionadas preocupaciones hacia un difícil equilibrio que no corresponde a su exaltación verbal.

Para la inteligencia de la verdadera convicción de Mier, y sin eludir sus manifiestas incongruencias, no podemos ignorar que el 10 de diciembre, y cuando se debatía el artículo 2 del proyecto constitucional tratando el punto de la soberanía, se adhirió expresamente al voto particular de Mangino que para él *salvaba todas las dificultades* al proponer: "La soberanía reside esencialmente en la reunión de los estados que componen la Nación Mexicana; y la facultad de hacer, ejecutar y aplicar las leyes, será ejercida por los cuerpos o personas que se designen en esta Acta y en la Constitución".

No eximimos al beligerante republicano de sus contradicciones, pero sí lo recobramos en la genealogía legítima de nuestra historia.

El 3 de diciembre de 1827, el infatigable fray Servando Teresa de Mier moriría en una habitación del Palacio Nacional como huésped de Guadalupe Victoria, el primer Presidente de la república federal.

[45] J.A. Mateos, *op. cit.*, p. 617.
[46] Nettie Lee Benson, *op. cit.*

5

LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL

El debate del artículo 5 del proyecto de Acta Constitucional ocupa en el Congreso los días 11 a 16 de diciembre. El día 13 se inicia su impugnación por los diputados antifederales.

Alejandro Carpio, de Puebla, acude a lo ocurrido en Caracas para atribuir la derrota insurgente a la desunión federal, y afirma, además, que en Estados Unidos se va centralizando el gobierno. Sobre la existencia de una opinión federal mayoritaria, arguye que en un país de seis millones de habitantes, si se descuentan a "las mujeres, los niños y los hombres que no piensan en materia de gobierno y los iturbidistas, centralistas y borbonistas, quedarán doscientos mil que estén por la federación", los que no forman una mayoría.

Ramos Arizpe parece no demorarse en largos discursos y únicamente refuta la referencia a Caracas, por constar los sucesos en documentos públicos como la capitulación con el general Monteverde.

Otro diputado por Puebla, Mariano Barbosa, se declara por la federación. Para él "la voluntad general se forma por medio de la parte ilustrada de la nación, a la cual sigue el resto no servilmente sino por convencimiento", y es aquella parte la que sostiene el federalismo. A esa parte ilustrada no se le puede imputar el móvil de la ambición. Menciona las provincias que se han pronunciado por la federación, y que forman la mayoría. Las provincias, observa, quedarán enlazadas para su mutua defensa, lo que no lleva a la división en manera alguna. A la afirmación de que la mayoría del pueblo ignora lo que es la federación responde: "sabe lo que basta para apetecerle y desearlo y no se le puede exigir más, así como en materia de religión no se le exige lo que a un doctor teólogo, sin que por eso sea más cristiano éste que aquél".

Aun acudiendo únicamente a las crónicas del debate que se publican en *El Sol* y *El Águila Mexicana*, más amplia que las actas directas del Congreso, disponemos de una fuente sumaria que resume las intervenciones de los diputados. No obstante, el sentido de ellas es revelador de los planteamientos.

Para Covarrubias, la causa de "los males que nuestro país sufrió en su ilustración y en su comercio bajo el gobierno español, fue de que España deseaba centralizarlo todo, y que esta centralización es interesante a los que quieran percibir sólo las utilidades, que por el federalismo se han de distribuir entre muchos".

Carlos María de Bustamante se desentiende de este argumento e insiste en lo ocurrido en Colombia, en la desunión frente a la amenaza de la Santa Alianza, y en el peligro de que las provincias sean dominadas por ambiciosos.

El poblano José Mariano Marín se apoya en la voluntad general que debe atenderse en todo lo que sea justo, como lo es el federalismo que proclaman los pueblos.

Becerra, por su parte, vuelve sobre los argumentos de su voto particular.

Juan de Dios Cañedo atiende a quienes han hablado en contra de la federación fundándose en la heterogeneidad de la población. Si ello fuera un obstáculo, argumenta, lo hubiera sido en Estados Unidos, con dos millones de esclavos y descendientes y emigrantes de diversas naciones de Europa. El alegar la falta de ilustración es tomar el efecto por la causa, "pues la ilustración se forma por un buen sistema liberal". La falta de luces para el federalismo es la misma para una república central. Cañedo refuta el argumento de los gastos públicos que aumentarán: mientras México padece penurias, Jalisco no. El centralismo atenta además contra el buen gobierno de las provincias y tiende al despotismo; la federación a la libertad y la prosperidad de ellas.[47]

El debate continúa en la sesión extraordinaria del día 14.

Guridi y Alcocer sugiere que en el artículo se sustituya el término *federal* por el de *mixto*, que conviene a un gobierno "que participe de las ventajas del central, sin romper ni aflojar los vínculos de la sociedad. Que cada provincia sea independiente por lo respectivo a lo económico y de policía, salvo siempre lo que corresponda al gobierno y Congreso generales para el bien de toda la nación". El ejemplo lo halla en la familia en la que el padre ejerce el gobierno doméstico, pero sujeto a la autoridad en lo que toca al bien de la sociedad.

Gómez Farías hace ver "que las provincias tienen manifestada su opinión de muchos modos, que no dejan duda que están decididas por el federalismo", y cómo Jalisco consultó la voluntad de los pueblos. Gómez Farías dispone de la publicación hecha del *Voto general de los pueblos de la Provincia Libre de Xalisco, denominada hasta ahora Guadalajara sobre constituir su forma de gobierno en República Federada.* En la publicación se reproducen más de 100 votos de corporaciones, congregaciones, pueblos, ayuntamientos, etc., en favor de la federación. El argumento de Gómez Farías se apoya en un hecho: "considérese a las provincias como que están separadas y van a unirse y no al contrario, faltando como falta un pacto fundamental". La separación no es la escisión de las provincias que han declarado unánimemente formar parte de la nación y, reconocer al gobierno de México, como centro de unión preconstituyente, supuesta la proclamación federal de ellas y la reunión del Congreso que constituya la nación bajo esa forma.

El antifederalista Cayetano Ibarra plantea ahora el debate tácticamente: "La cuestión del día es puramente nominal —expresa—, pues que la forma de gobierno ha de resultar de la organización que se dé a los poderes del Estado, y que todo el celo y sabiduría del Congreso se debe dirigir a que esa organización sea buena y acomodada a nuestras circunstancias, y logrado eso, poco importa que se le llame central, federal o con cualquier otro nombre". El Congreso debe ocuparse del resto del proyecto. Ibarra no puede pasar por alto algunos supuestos. En el debate unos impugnan y otros apoyan el proyecto de federación "sin aprobarlo o desaprobarlo en todas sus partes", lo que justifica que se reserve el artículo para examinarlo al fin del proyecto.

Juan Bautista Morales se extiende refutando los argumentos antifederales: "las conmociones son indispensables —señala— en toda transición política", y las padece España por su Constitución sin que nadie niegue la conveniencia de que exista una Constitución. En Mé-

[47] *El Sol*, 14 de diciembre.

xico no existe aún el pacto por la falta de Constitución y se vive en estado de provisionalidad. Si la nación no sabe lo que es la federación, tampoco sabe lo que es la república central ni la monarquía; y si ello es razón para no concederla lo será para no dar ningún gobierno. Mas la nación desea la federación, y ello basta. La ilustración será efecto y no causa del sistema; no obstante, existe esa voluntad como lo demuestran las proclamaciones federales mismas. La amenaza de los iturbidistas, los borbonistas y los ambiciosos, es mayor en un gobierno central al que pueden dominar.

Morales repasa en su discurso las objeciones. Al igual que los hombres ceden parte de sus derechos a la sociedad, "los pueblos ceden una parte de su soberanía, la necesaria para la felicidad general, quedando ellos con otra parte". La "voz federación denota unión", afirma Morales, y no podrá ella causar los males que vendrían si durante diez años permanecemos disueltos sin Constitución. Si se alegan "los hábitos y costumbres de trescientos años, será necesario —advierte Morales— que venga un Borbón a regirnos bajo el gobierno absoluto, porque en él nacimos y nos educamos". Sólo la nación puede calificar cuánto hemos adelantado hacia la federación, y la nación misma es la que la proclama. El tránsito no ha sido violento. Ya en el preámbulo del proyecto de Constitución del anterior Congreso se reconoce el respeto a la voluntad general y el que ella está decidida por el federalismo. La república mixta sería causa de complicaciones y choques.[48]

El discurso de Morales resume en buena parte la polémica, que continúa los días 16 y 17.

El predominio de la capital; el aumento o disminución del ejército y la burocracia y los gastos públicos; si las diputaciones provinciales y los ayuntamientos son órganos que expresan o no la voluntad general; la falta de ilustración; las oligarquías, facciones y aspirantes a los que se atribuye el clamor federal; las divisiones que aumentarían, se van alegando en pro y en contra del sistema.

Manuel Diego Solórzano, de Valladolid, propone la cuestión: "Basta saber cuál es la voluntad de los pueblos, y ésta es una cuestión de hecho... (y) para conocer esa voluntad general no es necesario preguntar a cada uno de los que componen la nación, y basta saber cómo opinan los hombres sensatos e ilustrados, y esa opinión la conocen los Sres. diputados, a lo menos por lo respectivo a la provincia de cada uno". Es público que los pueblos se han pronunciado así por la federación.

El día 16, y después de que el artículo se declara suficientemente discutido, Carlos María de Bustamante propone que, de aprobarse, "no se ponga en ejecución la forma federal hasta que sea reconocida nuestra independencia", lo que se reserva resolver más tarde, aunque no se tratará de nuevo.

Votado el artículo 5 del proyecto, se aprueba por unanimidad que el gobierno sea *república popular*. Contra la expresión *representativa* votan Guridi y Alcocer y Martínez Vea, que la estiman redundante con *popular*. Por la palabra federal votan 72 diputados, entre ellos el doctor Mier. En contra diez, y con ellos Carlos María de Bustamante. De los diez diputados que votan en contra, cinco lo son por la provincia de México, uno por Tlaxcala, uno por Chihuahua, uno por Sinaloa, uno por Puebla y el último por Veracruz.[49]

[48] *Ibid.*, 15 de diciembre.

[49] *Ibid.*, 16 y 17 de diciembre; J.A. Mateos, *op. cit.*, p. 617.

Nueve diputados proponen que se publique inmediatamente el artículo aprobado "con las solemnidades y salvas de artillería, repiques y demás demostraciones de regocijo", comunicándose a las provincias. La iniciativa se aprueba con una adición propuesta por Marín: "sin que por esto se entienda que en el momento se haya de dar paso en los pueblos a hacer novedad, sino que se espere a la publicación del *Acta* y de la ley constitutiva de los estados".

La aprobación del artículo quinto del proyecto es el acto de fundación constitucional de la federación. México, para decirlo en palabras de Edmundo O'Gorman, define "el ser que le corresponde de acuerdo con la vertiente democrática y moderna de su posibilidad histórica".[50] La lucha no está concluida entre centralistas y federales, y ni siquiera el monarquismo queda abolido como alternativa para los conservadores. Pero la nación inaugura su historia constitucional como república federal.

* * *

El postulado político fundamental aprobado en el artículo 5 se complementa con el 6: "Sus partes integrantes —de la Nación— son estados libres, soberanos e independientes, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta Acta y en la Constitución".

El debate gravita sobre el término *soberanos* y se prolonga los días 17, 18 y 19 de diciembre.[51]

El 17, nuestro cronista Bustamante registra en su *Diario*: "Hoy se ha publicado por bando con salvas de artillería y repiques el artículo quinto de la Acta Constitucional, en la noche ha habido iluminación en la Diputación, y la habrá en las dos noches siguientes". Nada dice sobre el debate de ese día.

El primero en hablar y en defender el artículo 6 es Juan Rodríguez, diputado por México. Previene los argumentos sobre la impropiedad de la palabra *soberanos*, pues en el proyecto se limitan sin confundirse las órbitas del gobierno general y las de los estados. También toca el reiterado sobre las disensiones, que no pueden ser imputadas al federalismo, con el que se evitan, conocida como está la voluntad general por él.

En contra de la palabra *soberanos* hablan Florentino Martínez y Cabrera. Sus argumentos se fundan en que la soberanía, siendo la omnipotencia política, no se puede aplicar a los estados por no radicar en ellos el origen de la autoridad (Martínez), y porque siendo una e indivisible no conviene con la que se atribuye a los estados (Cabrera).

En favor del artículo se pronuncian Rejón y Cañedo. Los estados poseen un poder independiente y supremo, y en cuanto lo ejerzan en sus propios negocios son soberanos (Rejón). Para Cañedo no era necesario emplear el término soberanía, pero una vez aprobado en otro artículo es necesario aceptarlo en el artículo 6. Así como la nación se llama soberana "sin embargo de que no le toca el gobierno interior de los estados —argumenta Cañedo—, así éstos pueden llamarse soberanos, aunque han cedido parte de su soberanía en obsequio del bien general de la confederación".

[50] Edmundo O'Gorman, *op. cit.*, p. 20.

[51] *El Sol*, 18 a 20 de diciembre.

Por su parte, González Caralmuro, Castillero, Paz y Becerra, centralistas que negaban la voluntad general, o al menos las maneras de conocerla, arguyen que "esa supremacía de la voluntad general, esa suma de los poderes, esa fuente y origen de toda autoridad y poder, sólo puede hallarse en la nación, de ninguna manera en cada una de sus partes integrantes". Llamar soberanía a las facultades que se den a los estados para su gobierno interior es una impropiedad, y serviría para alentar abusos. También se objeta la palabra *independientes.*

Santos Vélez, diputado por Zacatecas, Gómez Farías y Juan José Romero, por Jalisco, argumentan "que la soberanía de la nación tiene órbita separada de las de los estados, y no es incompatible, ni aun puede rozarse con ésta. Que todas las cualidades que se atribuyen a la soberanía de la nación se hallan en la soberanía de los estados, limitada la última a su gobierno interior de ellos... Que es un equívoco decir que la soberanía de los estados no les viene de ellos mismos, sino de la Constitución general, pues que ésta no será más que el pacto en que todos los estados soberanos expresen por medio de sus representantes los derechos que ceden a la confederación para el bien general de ella, y los que cada uno se reserva". Una buena Constitución prevé los abusos que se temen, y en el proyecto están detalladas las facultades del Ejecutivo y el Legislativo.

El día 19 se aprueba el artículo en sus términos, votándose por partes. La primera parte, sobre que los estados son *libres e independientes,* se aprueba por 62 votos contra siete, entre éstos el de Mangino. Mier vota a favor de que los estados sean *libres e independientes.* La segunda parte del artículo, o sea, la palabra *soberanos,* se aprueba por 41 votos contra 27, y con éstos Mier.[52] Carlos María de Bustamante no aparece entre los votantes, pero en su *Diario* escribe: "La aprobación del artículo 5o. del Acta Constitucional fue un delirio; no es menos el que hoy se ha cometido, aprobando el Congreso el artículo 6o.".

En el debate no se objetan las atribuciones que el proyecto concede a los poderes Legislativo y Ejecutivo, y ni siquiera a las que se proponen para los estados. El desacuerdo se centra en la palabra *soberanía,* y Ramos Arizpe no parece interesarse demasiado en la discusión pública. El ambivalente retrato que hace de él Lorenzo de Zavala lo explica: "talento claro y mucha actividad, conoce la intriga y es diestro en las juntas, carácter tenaz y dominante que sabe plegarse cuando no saca partido de la obstinación, alma republicana". Todo hace de Ramos Arizpe el hombre del Constituyente y el rector de la instauración federal. El proyecto de ésta, trabajado sobre aquel "plan de Acta Constitucional insistiendo en la soberanía e independencia de cada provincia... muy rebajado en sus opiniones", que Ramos Arizpe circuló entre los diputados, como el doctor Mier lo informa a Cantú desde el 12 de noviembre, es la formulación de la federación posible que una a las provincias y evite la guerra civil.

Después de participar en la revolución liberal española y regresar para entregarse a la del México independiente, Ramos Arizpe emplea el nominalismo político fiel a una convicción republicana.

[52] *El Sol,* 20 de diciembre.

* * *

Históricamente se ha llevado a una de sus consecuencias la subversión del fundamento del poder público, y la nación es independiente, mas la hegemonía metropolitana de la península es sustituida por la de la antigua capital virreinal. El breve proceso tiene un doble y contrario significado: la revolución "entra al escenario con la máscara —la monárquica— de la escena precedente", y, el antiguo régimen sigue en él con la de la subversión revolucionaria. En torno de la ciudad de México, en la que se proclama emperador Iturbide y en donde se fragua la rebelión de Casa Mata, las provincias son meras comparsas de los acontecimientos. Muy pronto la situación se invierte. Frente a la capital, las provincias hacen suya la subversión de la soberanía y desconociendo su metropolitanismo sucedáneo proclaman la república federal.

Desde los primeros y precipitados documentos de las proclamaciones federales el planteamiento es claro, y, se adelanta la respuesta a la impugnación centralista, a la de fondo. La federación no divide lo que estaba unido. A partir de la subversión de la soberanía la capital se erige en tutora de la nación, y las provincias la desautorizan. La consideración de las provincias desde la capital es peyorativa; la de la capital por ellas es acusatoria. La unidad debe restaurarse reconociendo la entidad de las provincias, entre éstas la de México, en el ejercicio de su soberanía interna y la de la nación. Ello sólo puede lograrse mediante un pacto. Como en todo conflicto, las expresiones polémicas se extreman, pero la ruptura de la unidad sólo puede provocarla en ese momento una imposición centralista.

La ciudad de México continúa siendo la indisputada capital como residencia de los poderes nacionales. Cuando se establezca el Distrito Federal, si bien se sigue el modelo norteamericano, se rescata a la ciudad de su carácter de capital de un estado para reintegrarla al patrimonio de la nación toda.

Con la aprobación del artículo quinto del proyecto de Acta Constitucional, y su promulgación solemne, la federación está instaurada. A partir del suceso se inicia la historia constitucional del México independiente.

A través del forcejeo y entre las confusiones y los desconciertos de que hemos sido testigos, la nación ha decidido su ser histórico como república federal. El hecho es concluyente. El proyecto de Acta Constitucional es la *prima forma.*

Volviendo al Congreso podríamos atender al debate del proyecto de Acta Constitucional. Mas al conmemorarse los 150 años de la instauración de la república federal en México, la crónica conocida de los debates se publicará, así como estudios monográficos sobre el Congreso, la polémica fuera de él, el Acta Constitutiva de 31 de enero y la Constitución Federal de 4 de octubre de 1824. Ello nos releva de un examen que sería aquí muy incompleto.

Dijimos que Ramos Arizpe emplea un nominalismo político al servicio de su convicción republicana. Podemos agregar que aplica también su más prudente objetividad, al igual que los individuos de la comisión, al dar forma al proyecto constitucional.

Ramos Arizpe y los hombres de la comisión trabajan su proyecto, podríamos decir, sin distracciones teóricas y a partir de una realidad inmediata: la voluntad de las provincias declarada por los únicos que la podían informar y expresar. Una "voluntad general" que no es sino la consecuencia, también real, de la subversión de la soberanía y del centralismo de la ca-

pital que la ejerce y usufructúa y en contra del que se rebelan las provincias. La soberanía que se atribuye a ellas no se ajusta a una proposición puramente especulativa, sino a la posibilidad y exigencia de autogobierno dentro del sistema. Autogobierno que se gestaba institucionalmente desde el constitucionalismo español.

La facultad que el proyecto propone para que el Congreso en la Constitución pueda aumentar el número de estados, dividiendo y modificando a los que se mencionan en el artículo séptimo, no da lugar, según la crónica, a un debate mayor. Los diputados se interesan sólo en que varias provincias se reconozcan como estados, y en que tal o cual pueblo o distrito pertenezca a determinado estado.

De nuevo la actitud es nominalista: la soberanía de los estados es la que se reconoce, moderando los pronunciamientos más radicales de ellos; la federación se constituye en los términos que se propone por una exigencia actual de las provincias. A *contrario senso*, la mesura del proyecto la pone de relieve Rejón el 9 de enero de 1824, al objetar su artículo 39 que propone: "Esta Acta Constitutiva no podrá variarse sino en el tiempo y términos que prescriba la Constitución general de la Federación".

Rejón observa que de la simple lectura parecería que el Acta "era invariable aun por la misma Constitución". Varios artículos, opina, son estrictamente constitucionales y no pueden suponerse invariables, antes de recibir la sanción de los estados. Cita Rejón las restricciones que sobre este punto contienen sus poderes como diputado por Yucatán, sumando argumentos en favor de que la Constitución se someta a la aprobación de las legislaturas de los estados, e "insistiendo principalmente —consigna la crónica de la sesión— en que sólo de este modo podrán reformarse algunas disposiciones del Acta que casi casi hacen desaparecer la federación centralizando mucho el gobierno".

El artículo se aprueba con la insustancial modificación de decir "sólo podrá variarse" en vez de "no podrá variarse".[53]

El combativo doctor Mier lo es más en su correspondencia que en los debates dentro del Congreso. Su pendencia provinciana contra Ramos Arizpe lo obsesiona y no omite ataques por más que, por ejemplo, el 17 de abril y después de aprobada el Acta Constitutiva, escriba a Bernardino Cantú que Ramos Arizpe "está en plena retractación; pero nadie se fía de él y absolutamente carece de todo influjo".[54]

Ni el joven diputado por Yucatán ni el ilustre y beligerante anciano reconocen la meditada prudencia del federalista Ramos Arizpe.

El Acta Constitutiva queda aprobada el 30 de enero, citándose a los diputados para que la firmen el día siguiente. El día 31 se aprueba que el Supremo Poder Ejecutivo determine la solemnidad con que debe publicarse "en todos los estados y pueblos de la federación". También se aprueba la fórmula del juramento que prestarán las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, las corporaciones, los empleados, jefes de la milicia, oficialidad y tropa.

El 1 de febrero el Supremo Poder Ejecutivo promulga el decreto ordenando que el bando para la publicación del Acta Constitutiva sea solemne, y entrando en los detalles de las ceremonias y en los del juramento que deben prestar las autoridades y el pueblo.

[53] *El Águila Mexicana*, 11 de enero de 1824.

[54] Alfonso Junco, *op. cit.*, p. 182.

El 3 de febrero, y después de hacerlo los diputados los individuos del Supremo Poder Ejecutivo, Mariano Michelena, Miguel Domínguez y el general Vicente Guerrero, juran el Acta ante el Congreso.

* * *

Lucas Alamán que jura el Acta Constitutiva de la Federación después de concurrir a las reuniones de la comisión redactora, hará su juicio de ella un cuarto de siglo más tarde: "Venía a ser una traducción de la Constitución de los Estados Unidos del Norte, con una aplicación inversa de la que en aquéllos había tenido, pues allí sirvió para ligar entre sí partes distintas que desde su origen estaban separadas... y en México tuvo por objeto dividir lo que está unido, y hacer naciones diversas de la que era y debía ser una sola". Alamán suscribe el lugar común en la impugnación del federalismo. El primer punto —que el Acta Constitutiva sea una traducción de la Constitución norteamericana—, lo hemos, satisfecho antes. El segundo, la historia lo ha desacreditado. Mas el juicio de Alamán no parece ser el de 1823 y 1824, y corresponde al de su último conservadurismo radical.

Sin transición, y punto y seguido después, Alamán escribe: "Esta —el Acta Constitutiva— debió haber sido la Constitución de la República, pues contenía las bases fundamentales del gobierno, dejando todo lo concerniente a su ejecución para establecerlo por leyes, cuya variación no hubiera estado sujeta a las mismas formas requeridas para modificar aquélla, la que habría sido de esta manera más subsistente, facilitándose su observancia por las mejoras que sin tocar en sus partes esenciales, podrían haberse introducido en las accesorias".[55]

Dejemos al lector las reflexiones que suscita el texto de Alamán.

Registremos otro juicio de un contemporáneo y partícipe en los sucesos, el en esos días incansable Lorenzo de Zavala. "El Acta Constitutiva fue recibida con entusiasmo por los que en los nuevos estados representaban la opinión publica. El nombre mismo de federación era nuevo para muchos de ellos —los encargados de los poderes—; no tenían —agrega— ni podían tener ideas sobre una forma de gobierno de la que no se habían ocupado los libros políticos franceses y españoles... No habiendo sido la consecuencia de doctrinas abstractas ni de discusiones metafísicas", su aparición en Estados Unidos se originó en una situación real desde antes de su independencia, y así las autoridades de ellos y las leyes sucesivas han alterado poco. En cambio, observa Zavala, "en muchas naciones de Europa y América las constituciones y las leyes orgánicas han creado y dado existencia a un estado de cosas que no había ni hubiera venido por el curso natural de los acontecimientos". Ello explica los obstáculos que encuentran estas naciones para conciliar su realidad a las instituciones creadas, por lo que se ven obligadas a veces a volver atrás, detenerse y aun a "apelar a antiguas tradiciones o usos establecidos, (y) al auxilio mismo de la superstición para hacer marchar el Estado constituido sobre sus nuevos teoremas políticos".[56]

Habla Zavala de ajustar la realidad a las instituciones creadas. El propósito de los constituyentes es formular el proyecto del ser político de la nación, como *proyecto posible*, y la rea-

[55] Lucas Alamán, *op. cit.*, pp. 718-719.

[56] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, pp. 198-199.

lidad primera que se atiende es la de una expresa voluntad de la nación sobre ese ser político. No vamos a recapitular sobre la que ha sido una exposición reiterativa de las manifestaciones federales.

Otra realidad diversa es a la que se refiere Alamán: la preexistente unidad política colonial que la federación vendría a dividir. Tampoco es necesario recapitular sobre el suceso de la revolución liberal española en la que se instituyeron las diputaciones provinciales y se desmembró el antiguo régimen virreinal, al crearse el nuevo sistema de gobierno económico-político de las provincias, reglamentado el 23 de junio de 1813. La aportación de N.L. Benson sobre el significado institucional y la acción de las diputaciones provinciales replanteó el examen de la formación del federalismo mexicano. El caudillismo del sur de América es sustituido en México por el civil de quienes en los órganos representativos se pronuncian por la federación. La realidad de las provincias y de las proclamaciones es más que evidente y se impone al centralismo de la capital.

Reyes Heroles confirma que "el Congreso sólo legitimó una situación de facto", y se interesa por "el mecanismo intelectual, y el camino teórico que llevó a la mayoría de los liberales mexicanos al federalismo". Según Zavala, citado por Reyes Heroles, los diputados elegidos al nuevo Congreso Constituyente llegan entusiasmados con el federalismo, y su manual es la Constitución de Estados Unidos en "una mala traducción publicada en Puebla".[57] Cuando se escribe atenido a la memoria de los sucesos en que se participa se suele incurrir, como Zavala, en simplificaciones y notorias inexactitudes. Antes de la edición de Puebla, el doctor José María Luis Mora edita el *Semanario Político y Literario*, y publica el 12 y 19 de diciembre de 1821 buenas traducciones de los *Artículos de Confederación*, de la Constitución de los Estados Unidos de América y de sus diez primeras enmiendas conocidas como Declaración de Derechos. Mencionamos una sola traducción, la más inmediata a la consumación de la independencia. Lo que no consta es la difusión que pudo tener *El Federalista*, aunque en un artículo titulado "Federación", publicado en *El Sol* de 4 de agosto de 1823, Antonio José Valdés cita los números 5 y 6 al polemizar con los centralistas y escribir: "Querer preferir las instituciones de Colombia a las Norteamericanas, yo no sé en qué juicio quepa". Podemos suponer que si Valdés dispone de *El Federalista*, no es el único en los días en que más se agita la cuestión. Diputado por Nueva Galicia en el primer Congreso, Valdés fundará en Guadalajara, en diciembre de 1823, *El Iris de Jalisco*, federalista radical acusado de iturbidismo.

Si Antonio José Valdés menciona *El Federalista* en agosto de 1823, es lógico suponer, dijimos, que no es el único que lo conoce. Es más, a Valdés le interesa propagarlo, primero en México y después en Guadalajara. No se ha intentado verificar la posible influencia de *El Federalista* en el debate en el Congreso y fuera de él.

Reyes Heroles señala que el 24 de mayo de 1828 *El Correo de la Federación Mexicana* ofrece publicar por suscripción *El Federalista* y reproduce el primer ensayo de éste, y después verifica la traducción de los ensayos IX y X en *El Atleta* en 1829.[58] Pero Reyes Heroles no lo supone desconocido antes.

Según Charles A. Hale hay "pocos indicios de que los escritos constitucionales norteame-

[57] Jesús Reyes Heroles, *op. cit.*, p. 418; Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 188.

[58] Jesús Reyes Heroles, *op. cit.*, tomo III, pp. 344-345.

ricanos, por ejemplo los *Federalist Papers*, hayan circulado ampliamente en México" en los días de la instauración federal, calificando de superficial la incorporación "del modelo norteamericano en el liberalismo constitucional de México".[59] Referido el *modelo norteamericano* al *liberalismo constitucional de México*, ciertamente Hale tiene la razón.

El Acta Constitutiva la juzga Zavala "como si hubiera sido preciso hacer un gran esfuerzo para copiar artículos de la Constitución española y de la de los Estados Unidos del Norte, y darles una forma regular y ordenada".[60]

El modelo constitucional norteamericano es formal, la ideología liberal no. Ni el pasado lejano ni el inmediato —el del absolutismo español y el de la insurgencia y la revolución liberal de España proyectada en México— pueden abolirse en la historia cuyo proceso llega con la emancipación a la proclamación republicana.

El Congreso, en su Manifiesto de 31 de enero de 1824 presentando el Acta Constitutiva declara:

> Una vasta nación que por tantos años ha estado concentrada bajo la acción del más absoluto despotismo, no puede dividirse en el sentido de la federación, sin roce y colisión de las partes que se separan; mas éstos son males inevitables, desde el momento en que nos decidimos por aquella forma de gobierno. Si en todos nuestros pasos nos hemos propuesto por modelo la república feliz de los Estados Unidos del Norte —continúa—, imitémoslos en la prudencia, con que se han conducido en posición muy parecida a la nuestra, pero es necesario entender, que nosotros necesitamos de mayor esfuerzo para conseguir el mismo objeto; nuestros hábitos, la corrupción que nos dejaron por herencia nuestros anteriores gobiernos, la naturaleza de nuestra organización política, de nuestra legislación, y la gran masa de hombres que hoy no encuentran la precisa subsistencia [...] constituyen otras tantas diferencias esenciales, que hacen más peligrosa nuestra situación [...]

Es el propio Congreso el que previene sobre la adopción indiscriminada del modelo norteamericano.

Y volviéndose a España, "esa nación desventurada —se dice en el Manifiesto—, vaga al arbitrio de reacciones horrorosas, provocada por una Constitución muy inferior a la que hemos adoptado". Mas, "los principios con que en la Península se sostenían los derechos de la libertad contra el tirano que la oprimiera, debían ser aplicados en circunstancias análogas, y los que se sancionaban en la Constitución española, no podían ser exclusivos de aquel pueblo", expresa el Congreso. La simbiosis es bien meditada.

[59] Charles A. Hale, *El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853*.
[60] Lorenzo de Zavala, *op. cit.*, p. 197.

6

LA EMANCIPACIÓN REPUBLICANA

El pasado, el lejano y el inmediato, no pueden negarse como la condición misma que son del suceso revolucionario. En los días en los que el Congreso se dirige a la nación, el pasado metropolitano se levanta de nuevo con la restauración absolutista en España. El 18 de enero, y cuando el Congreso debate el proyecto constitucional, *El Águila Mexicana* publica el decreto de Fernando VII del 3 de octubre anterior. El documento obliga a su cita.

> Restituido por la divina misericordia al trono de mis augustos antecesores y libre al fin del amargo cautiverio que he sufrido, el primer cuidado de mi paternal corazón —declara el rey—, ha sido destruir un sistema odioso, introducido por algunos militares cobardes e insubordinados [...] Tan fatales instituciones, merecían sólo regir a los malvados que intentaron defenderlas. Los impotentes esfuerzos y atroces crímenes con que lo pretendieran aprisionando escandalosamente mi real persona y familia, no fueron, gracias a la Divina Providencia, suficientes contra los generosos auxilios de mi augusto tío el rey de Francia, de los demás soberanos de Europa, y el grito unánime, firme y espontánea de mis amados vasallos que se alzaron en masa reclamando las sabias y antiguas leyes con que mis antepasados llevaron muchos siglos el nombre español de poder y de grandeza. Al restablecerlas en mis dominios no descansa sin embargo mi real ánimo sin que haciendo cesar aquellos desastres, experimenten iguales beneficios las inmensas colonias que concedió la providencia al triunfo de mis gloriosas armas. Parte de aquellas vastas y ricas posesiones entregadas todavía a los horrores de la guerra civil y desastrosa por la traición del poderoso ejército que destinaba a pacificarlas, recobrarán, lo espero, la calma y la prosperidad, volviendo al seno de un gobierno justo, paternal y celoso de sus intereses; mientras me ocupo de determinar los medios enérgicos que conviene a tan importante objeto, he resuelto que mi real y legítima autoridad sea inmediatamente restablecida en todos mis dominios ultramarinos al mismo ser y estado, y con las mismas prerrogativas que tenía antes del fatal 9 de marzo de 1820 en que fui despojado de ella con violencia y privado de libertad con mi real familia.

Dos días antes, el 1 de octubre, el rey declaraba por decreto "nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno constitucional".

El 17 de octubre Fernando promulgaba otro decreto acentuando lo inequívoco de la restauración absolutista. "Con el fin de que desaparezca para siempre del suelo español hasta la más remota idea de que la soberanía reside en otro que en mi real persona; con el justo fin de que mis pueblos conozcan que jamás entraré en la más pequeña alteración de las leyes de es-

ta monarquía —declara el rey—, encargué al Consejo me consultara lo conveniente a evitar la popularidad de las elecciones de justicia y de ayuntamientos...".[61]

En el mismo mes de octubre y, ante las resoluciones de Fernando, Luis XVIII le escribiría: "Si no tuviera como jefe de mi casa el derecho de hablar a V.M. sinceramente, mis años, mi experiencia y mis dilatados infortunios me impondrían este deber. Como V.M. he recobrado mi poder después de, una revolución...". Los títulos de Luis XVIII, cuyos Cien Mil Hijos de San Luis habían "liberado" a Fernando, no podían ser mayores. "Os conviene deliberar con prudencia, y en plenitud de vuestros derechos, pero os debo decir —amonesta al rey de España—: un despotismo ciego lejos de aumentar el poder de los reyes los debilita, porque si su poderío no tiene reglas, si no reconoce ley alguna, pronto sucumbe bajo el peso de sus propios caprichos... y los pueblos, inquietos y atormentados, se precipitan en las revoluciones".[62]

El 15 de octubre el duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón, generalísimo del ejército francés, se dirigía a Fernando: "Mi señor hermano y primo... Todos los esfuerzos de Francia serían inútiles si V.M. continuase fiel al pernicioso sistema de gobierno que provocó las desgracias de 1820... V.M. ha recobrado su autoridad y aún no se conoce de V.M. sino detenciones y decretos arbitrarios... Yo pedí a V.M. que se concediese una amnistía y diese a su pueblo alguna garantía para el futuro. V.M. no ha realizado ni una cosa ni otra".[63]

En México, el 24 de enero *El Águila Mexicana* da la noticia de la ejecución del general Rafael de Riego el 7 de noviembre anterior en Sevilla, siendo "conducido arrastrado por todas las calles del tránsito" hasta el patíbulo, como lo ordenó la sentencia. En México no se conoce, o no se publica, la penosa retractación de Riego.[64]

No es nuestro asunto la restauración absolutista en España, que excede el mismo proyecto antirrevolucionario de Francia, cuyos gabinetes habían negociado sinuosamente la coronación de un Orleáns o un Borbón en las Provincias del Plata. Acudimos a los textos citados por cuanto revelan hasta dónde Fernando VII polariza de nuevo el conflicto en el área del idioma, decidiendo por sí y en los términos más explícitos el *ou topos* del antiguo régimen colonial.

* * *

Los propósitos que inspiraron la conspiración con la que se inició el episodio de la consumación de nuestra independencia, que tan contrario desenlace tuviera, parecerían satisfacerse cuando ésta y la subversión revolucionaria en América son ya irreversibles. En la negación de esa negación, el Constituyente mexicano volviéndose a España expresa: "Los principios con que en la Península se sostenían los derechos de la libertad contra el tirano que la oprimiera, debían ser aplicados en circunstancias análogas, y los que se sancionaban en la Constitución española, no podían ser exclusivos de aquel pueblo".

Los principios y derechos así aludidos se pueden enunciar: la nación es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona; ella es titular de la so-

[61] Estanislao de Koska Bayo, *op. cit.*, tomo III, p. 451.
[62] *Ibid.*, pp. 169-170.
[63] Miguel Artola, *op. cit.*, pp. 846-847.
[64] Estanislao de Koska Bayo, *op. cit.*, p. 179.

beranía y le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, su forma de gobierno. Esta potestad es imprescriptible e inenajenable, y a través de una revolución constituyente la nación la ejerce eligiendo mandatarios temporales; los tres poderes públicos se dividen sin poder reunirse en una persona o cuerpo, y se ejercerán dentro de los límites prescritos en la Constitución. México al constituirse lo hace como república federal conforme a la proclamación de las provincias, y los titulares del Poder Ejecutivo, elegidos por tiempo limitado, son responsables de su ejercicio.

El proyecto de Acta Constitucional y el Acta Constitutiva no van precedidas, siguiendo los modelos español y norteamericano, de una formal Declaración de Derechos del Hombre. Pero ni el proyecto ni el Acta son omisos. El artículo 23 de aquél establece: "Todo hombre que habite en el territorio de la Federación mexicana, tiene derecho a que se le administre pronta, *fácil*, completa e imparcialmente justicia *en orden a las injurias o perjuicios que se le infieran en contra de su vida, su persona, su honor, su libertad y propiedad*; y con este objeto la Federación deposita para su ejercicio el Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales y juzgados que se establecerán en cada estado". El artículo aparece como el 18 del Acta Constitutiva con la supresión de las expresiones en cursivas. Pero el artículo 30 del Acta Constitutiva declara: "La nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano", suprimiendo la sumaria mención de "la libertad civil, la seguridad personal, la propiedad, la igualdad ante la ley y los demás derechos de los individuos que la componen", que se hacía en el artículo 36 del proyecto, al que corresponde.

En el acta de la sesión del Congreso del día 9 de enero que publica Juan A. Mateos en su *Historia parlamentaria* no se menciona siquiera la aprobación de los artículos. La referencia consta en la crónica de *El Águila Mexicana* de 11 de enero, registrando la aprobación sin modificaciones del artículo del proyecto.

Las alteraciones en la redacción no eliminan los derechos del hombre y del ciudadano que la nación está obligada a proteger; simplemente se suprime la mínima enunciación de ellos. Por otra parte se esfuma el conato para que el objeto del Poder Judicial sea la protección de tales derechos.

Sin la forma de Declaración de Derechos, varios se integran en la Constitución federal de 4 de octubre de 1824. El artículo 50, fracción III de ella establece como facultad del Congreso la de "proteger y arreglar la libertad política de imprenta de modo que jamás pueda suspenderse su ejercicio; y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados y Territorios de la federación". El 161, fracción IV, entre las obligaciones de los estados comprende la de "proteger a sus habitantes en el uso que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a su publicación, cuidando siempre que se observen las leyes generales de la materia".

El artículo 112, fracción II, de la misma Constitución, incluye entre las limitaciones a las facultades del Presidente de la República la de que no podrá "privar a ninguno de su libertad, ni imponer pena alguna; pero cuando lo exija el bien y la seguridad de la federación, podrá arrestar, debiendo poner a las personas arrestadas en el término de cuarenta y ocho horas, a disposición del tribunal o juez competente". La fracción III impone la de que "no podrá ocupar la propiedad de ningún particular, ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso o aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario para un objeto de reconocida utilidad

general tomar la propiedad de un particular o corporación, no lo podrá hacer sin previa aprobación del Senado, y en sus recesos, del Consejo de gobierno, indemnizando siempre a la parte interesada".

En los artículos de la Constitución relativos a la administración de justicia en los estados y territorios se prohíbe para siempre "la pena de confiscación de bienes" (art. 147) y "todo juicio por comisión, y toda ley retroactiva" (art. 148). Queda abolida la pena de tormento (art. 149), y el que alguien sea detenido "sin que haya semiplena prueba o indicio de que sea delincuente" (art. 150), sin que la detención por indicios pueda prolongarse por más de sesenta horas (art. 151). Ninguna autoridad podrá ordenar "el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la República, si no es en los casos expresamente dispuestos por la ley" (art. 152). "A ningún habitante de la República se le tomará juramento sobre hechos propios al declarar en materias criminales" (art. 153).

El artículo 3 del Acta Constitutiva que declara la titularidad de la soberanía en la nación, y el exclusivo derecho de ésta para establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y las leyes fundamentales, tiene un correctivo en el 171 de la Constitución que dispone: "jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de poderes supremos de la federación y de los Estados".

Una precaución se toma en la Constitución respecto al Ejecutivo disponiendo su artículo 112 en la fracción IV que el presidente "no podrá impedir las elecciones", ni el que las cámaras del Legislativo ejerzan sus funciones de gran jurado en los juicios políticos contra funcionarios públicos.

Un artículo, el 165, atribuye al Congreso la facultad de "resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los artículos" de la Constitución y el Acta Constitutiva.

El 14 de enero el Congreso inicia el debate sobre el Dictamen para prohibir el comercio de esclavos, aprobando los tres primeros artículos. El 1 prohíbe en el territorio de la federación todo comercio de esclavos procedentes del extranjero. El 2 establece que todo esclavo que se introduzca al país será libre al pisar el territorio nacional. El 3 ordena que todo buque que transporte e introduzca esclavos a México "será irremisiblemente confiscado con el resto de su cargamento, y el dueño y el comprador, el capitán, el maestre y el piloto sufrirán pena de diez años de prisión". Rechazados los artículos siguientes que permitirían la inmigración de colonos con esclavos, se aprueba la publicación inmediata de los tres artículos aprobados.[65] Pero éstos no se promulgarían hasta el 15 de julio.

De nuevo el liberalismo se retrae ante uno de sus postulados y la tradición insurgente. Mas los principios de la libertad contra la tiranía y los sancionados en la Constitución española, "que no podían ser exclusivos de aquel pueblo", la república independiente los consagra cuando han sido abolidos en España. La revolución liberal se refugia en el Nuevo Mundo emancipado.

Una formal Declaración de Derechos como las francesas —las revolucionarias y la de la Carta otorgada—, la venezolana y la contenida en las enmiendas a la Constitución norteamericana, parecería imprescindible. Mas si partimos de la titularidad de la soberanía en el pue-

[65] *El Águila Mexicana*, 16 de enero de 1824.

Instalación de los congresos constituyentes estatales en México

Denominación	*Fecha de instalación*	*Fecha de la erección en estado*
Oaxaca	1 de julio de 1823	21 de diciembre de 1823
Yucatán	20 de agosto de 1823	23 de diciembre de 1823
Jalisco	14 de septiembre de 1823	23 de diciembre de 1823
Zacatecas	19 de octubre de 1823	23 de diciembre de 1823
Querétaro	17 de febrero de 1824	23 de diciembre de 1823
México	2 de marzo de 1824	20 de diciembre de 1823
Puebla	19 de marzo de 1824	21 de diciembre de 1823
Guanajuato	25 de marzo de 1824	20 de diciembre de 1823
Michoacán	6 de abril de 1824	20 de diciembre de 1823
San Luis Potosí	21 de abril de 1824	22 de diciembre de 1823
Tabasco	3 de mayo de 1824	7 de febrero de 1824
Tamaulipas	7 de mayo de 1824	7 de febrero de 1824
Veracruz	9 de mayo de 1824	22 de diciembre de 1823
Nuevo León	1 de agosto de 1824	7 de mayo de 1824
Coahuila y Texas	15 de agosto de 1824	7 de mayo de 1824
Chihuahua	8 de septiembre de 1824	6 de julio de 1824
Durango	8 de septiembre de 1824	22 de mayo de 1824
Estado Interno del Occidente	12 de septiembre de 1824	10 de enero de 1824
Chiapas	5 de enero de 1825	26 de mayo de 1824

blo o la nación, de la división de los poderes, de su naturaleza representativa —la del Legislativo en especial—, de la temporalidad de los mandatarios y de sus facultades limitadas en la Constitución, las libertades civiles, expresas o implícitas en ella están sancionadas, y las políticas son el fundamento mismo del sistema. Un problema distinto es el de los modos e instancias para garantizarlas o restaurarlas en casos de violación. Los Derechos del Hombre y del Ciudadano —en la expresión consagrada— son el contexto de la revolución liberal en la subversión de la soberanía, y su mayor amplitud, sus especificaciones, tienen una manifestación histórica en cada país.

* * *

La publicación del decreto de 8 de enero de 1824 "para establecer las legislaturas constituyentes" en los estados que no los hubiesen reunido consolida el sistema. El artículo 8 del decreto dispone: "Instaladas las legislaturas de los Estados, tendrán por base de sus operaciones, y regla de sus poderes, el Acta Constitutiva, que para entonces estará circulada". Para el proceso electoral se adopta la ley de 17 de junio de 1823.

N.L. Benson registra puntualmente la elección de los constituyentes estatales, la elección de provincias en nuevos estados, y cómo en el Congreso fracasan los intentos para desconocer a los congresos de Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, reunidos con anterioridad por su propia decisión. Reproducimos el cuadro formado por la doctora Benson con las fechas de erección de los estados y las de instalación de sus constituyentes.

Con la promulgación del Acta Constitutiva el 31 de enero de 1824, la nación independiente que se debatía informe se funda como república federal.

La peculiar condicionalidad en el episodio de la consumación de nuestra independencia nos vincula más que otros países de América con la revolución liberal de la metrópoli. Por otra parte, la coyuntura y la peculiaridad de la revolución española no la aíslan de la revolución occidental y atlántica, en la que es el acontecimiento capital en el primer cuarto del siglo XIX europeo.

La sola independencia de un continente colonizado, y la de México, es un acontecimiento geográfico, podemos decir, pero el fundamento de su legitimidad en el ámbito de la revolución frente al antiguo régimen —el metropolitano o el nacional— es el mismo desde Grecia, en el extremo oriental del Mediterráneo, hasta Chile, sobre el océano Pacífico en el austral de América. Los más diversos antecedentes y motivaciones —evitamos la palabra causas— se concilian, se debaten y se confunde en la postulación subversiva de la titularidad de la soberanía como acontecimiento actual.

El Constituyente mexicano en su Manifiesto de 31 de enero de 1824 presentando el Acta Constitutiva, expresa: "Una revolución que se generaliza en un gran pueblo, necesariamente se dirige contra un orden de cosas, que no puede bastar ya a las necesidades de una sociedad, mas como ésta no puede subsistir sin bases, es necesario substituirle otras nuevas, al paso que se destruyen las antiguas; sin esta operación el edificio social se desploma; he aquí en pocas palabras el secreto de las revoluciones". Y agrega: "entre dos poderosas repúblicas (Colombia y Estados Unidos) no puede haber más legitimidad que la del pueblo; las ideas debían desarrollarse, según los modelos que herían con más viveza la imaginación, y éstos eran sistemas republicanos". La nación proclama la federación y elige a sus representantes para que la constituyan, ellos "desde luego os presentan un Acta federal, que si es por una parte el principio de sus trabajos... es por otra el término de la resolución. *Sí* —declara el Congreso— *la revolución está terminada... Más allá de la federación sólo se descubre la anarquía; el retroceso conduce al despotismo*".

La alternativa que preocupa y obsesiona es la misma en la América emancipada al inaugurar su historia y la República. Bolívar y O'Higgins en el sur proponen la solución del autoritarismo presidencial. Pero todo el prestigio épico de Bolívar no haría prevalecer ni su autoridad ni sus proyectos. En México, los generales Guerrero, Victoria y Bravo, que representan a la insurgencia, no aspiran al caudillismo nacional, un caudillismo además desacreditado por la aventura iturbidista. De los pronunciamientos federales no surge ningún caudillo militar. La hegemonía política es civil y doctrinaria, se ejerce en las provincias y desde el Congreso, y el ejército y ellas la acatan. La pugna entre Guadalajara y México es de personas e intenciones una vez adoptada la federación. La agitación y las rebeliones del mes de enero, como la de Puebla —que relega al general Echávarri a su propia irrelevancia—, la de Cuernavaca, y la de la ciudad de México encabezada por el general Lobato, son dominadas y consolidan el reconocimiento a la autoridad del Congreso.

La promulgación del Acta Constitutiva no es, como declara el Congreso, el término de la revolución. Es la instauración de la república federal en la que calificamos de *prima forma* del proyecto histórico posible para el México independiente. El propio Congreso lo advierte así: "Sería un error peligroso persuadirse —expresa en el Manifiesto de 31 de enero— que en el sistema de federación deben las instituciones elevarse de un golpe al más alto grado de perfección posible", en un pueblo en el que "los efectos de la tiranía se sienten mucho tiempo

después de que ha sido destruida". Los elementos del despotismo los alude condenando el pasado colonial:

> las instituciones encadenaban aun el pensamiento más escondido; la acumulación inmensa de la propiedad territorial, si por una parte prescribía un círculo demasiado estrecho a los progresos de la agricultura, y de consiguiente a la población, por otra reducía a la nación mexicana a una nación de jornaleros y mendigos [...] el comercio sistemado bajo el modelo de un vasto estanco, al paso que empobrecía a la nación, la privaba de toda comunicación con los extranjeros; el sistema de educación era el de máximas más propias para sostener la opresión, la superstición y el fanatismo; el de legislación, el más adecuado para apartar al hombre del conocimiento de sus derechos, intrincándolos en un oscuro laberinto [...] el de rentas era el mejor combinado, para corromper y empobrecer a los pueblos [...] intervenidos constantemente por una aristocracia poderosa, ramificada por todas las fracciones y empleos del estado, y cuyo vigor y carácter sólo pueden ser conocidos en los países coloniales, parecía imposible que bajo la inmensurable mole de tantos obstáculos físicos y morales, pudiesen germinar algunos principios de libertad; sin embargo, el memorable 16 de septiembre de 1810 descubrió al mundo, que no sólo germinaban, sino que crecían, y se robustecían.

* * *

La ruptura política con el antiguo régimen está consumada, ¿pero un acto de decisión puede abolir la herencia subyacente y secular? Más de seis millones de habitantes —cerca de siete según Humboldt para 1823— forman la nación emancipada, dispersos en 4 146 463 km cuadrados, y divididos en los tres grandes grupos de criollos y españoles —1 230 000—, indios —3 700 000—, y castas —1 860 000. El número de españoles siempre se fija en desacuerdos: 75 000 según Humboldt; 15 000 para Navarro y Noriega. Mas su importancia no radica en el número sino en el usufructo de los altos cargos civiles, militares y eclesiásticos, en el comercio y hasta en las alianzas conyugales. La exactitud de las cifras no altera su significado.

El antiguo virreinato se constituye como república independiente, y en ella subsisten aunque no conviven, pueblos que después de tres siglos aún no se integran al idioma del conquistador castellano, ni siquiera en el mismo valle de México. Millones —la abrumadora mayoría—, no ha alcanzado el alfabeto y muchos ni el bautismo. Las edades del hombre son contemporáneas, y las más antiguas, desde las de los recolectores, habitan territorios en los que las polvorientas ruinas prehispánicas se suceden deshabitadas hasta el sur en la suntuosidad de las perdidas en las selvas del Usumacinta. La historia no transcurre para ellos desde hace siglos. La de los viejos imperios y sus cosmogonías y sus dioses se perpetúa en reminiscencias míticas y mutiladas tradiciones orales y en las devociones católicas a sus dioses y poderes ocultos y al nuevo Dios que les ofrece un paraíso en el más allá. En tres siglos el mestizaje religioso es más amplio que el racial. Los descendientes de los antiguos pobladores, asentados en comunidades propias bajo las leyes coloniales, o como jornaleros de criollos y peninsulares y de la Iglesia en haciendas, minas y ciudades, son la multitud amorfa y dispersa de la que salieron los seguidores de don Miguel Hidalgo en 1810, y después de don José María Morelos, des-

pertados del abatimiento a la ordalía, para retomar con la derrota a la indiferencia o el desahucio. Pero son ellos los que mueren en las batallas perdidas o ganadas, y son los agavillados de la insurgencia que combaten hasta 1821.

Y entre ellos y los peninsulares, el millón o más de criollos y acriollados, y la minoría de éstos que se agita y piensa, despojados por la metrópoli —como lo denunciaba el doctor Mier— de sus derechos de descendientes de los antiguos señores de la tierra, los de los conquistados y los conquistadores. O como más cierta y crudamente lo confiesa Bolívar ante el Congreso de Angostura: "No somos europeos, no somos indios, sino una especie intermedia entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales sus títulos de posesión... y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores... Todavía hay más... porque no solamente se nos había robado la libertad, sino también la tiranía activa y pasiva".

Bolívar y los revolucionarios de América, los de México, hablan en el único idioma de la liberación del continente, el castellano del colonizador, y la revolución del colonizado es la de la subversión contra el antiguo régimen en la Europa metropolitana. Irrumpimos en la historia cuando ésta es ya la de la revolución, y la República es su creación.

Ante la república central, imagen virtual del poder metropolitano subrogado, proclamamos la federación. En su Manifiesto de 4 de octubre, al promulgarse la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso dirá: "¿Qué relaciones de conveniencia y uniformidad puede haber entre el tostado suelo de Veracruz, y las heladas montañas de Nuevo México? ¿Cómo pueden regir a los habitantes de la California, las mismas instituciones que a los de Yucatán y Tamaulipas...? Los tamaulipecos y coahuileños, reducirán sus códigos a 100 artículos, mientras los mexicanos y jaliscienses, se nivelarán a los pueblos grandes que han avanzado en la carrera del orden social. He aquí las ventajas del sistema de federación. Darse cada pueblo a sí mismo leyes análogas a sus costumbres, localidad y demás circunstancias". Los pueblos pueden así procurar su prosperidad, confiar su gobierno a ciudadanos ligados a ellos, proteger sus derechos y "terminar sus asuntos domésticos sin salir de los límites de su Estado: en una palabra, entrar en el pleno goce de los derechos de hombres libres".

Octavio A. Hernández, a quien citamos contrariando sus reservas personales, en su ensayo sobre *La lucha del pueblo mexicano por sus derechos constitucionales*, con el que se presentó en 1967 la obra monumental *Los derechos del pueblo mexicano*, escribe: "El federalismo fue la respuesta adecuada a las circunstancias prevalecientes en las primeras décadas del siglo pasado, y su significado ahondó tanto en la vida social de México, que la antinomia federalismo-centralismo se trasformó hasta 1857, en una permanente batalla entre liberales y conservadores".

Si la soberanía reside en el pueblo y el ejercicio del Poder Legislativo federal en los representantes elegidos popularmente, siendo los congresos de los estados los que elegirán, a su vez, a los titulares del Poder Ejecutivo nacional y a los individuos de la Corte Suprema de Justicia, y si el sistema se proyecta en los estados. los poderes locales obrarán además a la vista del pueblo de cada provincia y no como delegados de la lejana capital de la nación. Lo simple de la sola proposición es convincente en sus términos inmediatos, y más conforme a los intereses locales y al supuesto liberal del régimen representativo.

Ante la realidad, Octavio A. Hernández observa que aunque es cierto que la distribución de poderes podía originar "tantas pequeñas tiranías como entidades federativas se crearan, este extremo era preferible al de admitir la convalidación del despotismo en su poder único". Mas cabe agregar que ni el caudillismo ni el caciquismo son hijos de la federación, como no es la guerra civil. Cualquiera que hubiese sido la forma adoptada, la colisión histórica entre liberales y conservadores sería un hecho no condicionado por ella. Se puede formar un concluyente catálogo de caciques y aun de caudillos conservadores y centralistas.

El riesgo de la disgregación del país, argumento que impresiona en su hora y caro al centralismo, no tiene más vigencia que la de una amenaza fantasmal. El argumento federalista en contra del centralismo del poder y sus consecuencias autoritarias tiene una comprobación histórica, hasta cuando ocurre detrás de la máscara federal. Pero si el caudillismo y el autoritarismo tienen en México, y en América, orígenes más profundos y ajenos a las formas constitucionales, el centralismo los institucionaliza nacionalmente. Su existencia, la del autoritarismo y el caudillismo, es una frustración fatal no una consecuencia del liberalismo federal.

Emilio Rabasa, a quien hemos tenido presente en estas páginas propone la simbiosis: "un sistema que cambia de nombre —escribe— comienza a cambiar ya de esencia". Las proclamaciones federales y el Acta Constitutiva daban nombre y forma inéditos en México al proyecto más consecuente con la voluntad y la realidad de las provincias y de las ideas.

La objetiva y liberal mesura del Constituyente preside el proyecto histórico para la nación y dicta el Manifiesto de 31 de enero: "... la perfección no es dada a las obras de los hombres... el sistema federal no está atado a un punto fijo, del cual no puede pasarse...; la mayor de sus ventajas consiste en la facilidad de desplegarse en proporción a los progresos que el espíritu humano hiciere en la obra de la legislación...".

Ninguna herencia del pasado altera el hecho de que una nueva historia se inicia, y el significado de la ruptura con el antiguo régimen colonial.

* * *

El título original de la corona de España sobre el Nuevo Mundo consta en varios documentos pontificios. El 3 de mayo de 1493, para mencionar la primera bula *Inter Cetera*, el sumo pontífice Alejandro VI declaró: "por nuestra mera liberalidad de ciencia cierta y con plenitud de nuestra potestad apostólica, por la autoridad de Dios Omnipotente concedida a Nos..., a vosotros y a vuestros herederos y sucesores los reyes de Castilla y León, para siempre por autoridad apostólica... donamos, concedemos y asignamos todas y cada una de las tierras e islas supradichas, así las desconocidas como las hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y las que han de descubrir que no se hallen sujetas al dominio actual de algunos señores cristianos... con todos los dominios de las mismas, con ciudades, fortalezas, lugares y villas, derechos, jurisdicciones y todas sus pertenencias". El fin de la donación fue "adoctrinar a los indígenas y habitantes (de las tierras e islas)... en la fe católica e imponerlos en las buenas costumbres, poniendo toda la debida diligencia en todo lo antedicho".

Pero la misión evangelizadora contenía una cláusula retributiva en favor de la corona de Castilla y León, al prohibir indiscriminadamente el pasar "a las islas y tierras predichas, una vez que sean descubiertas y poseídas por vuestros enviados o mandados para ello, para gran-

jear mercaderías o por cualquier causa, sin especial licencia vuestra y de vuestros herederos y sucesores".[66]

Los títulos misionales inauguran un *novus orbis clausus* para la salvación de almas y para el tráfico en beneficio de la corona de Castilla y León. La legitimidad de los títulos y el ejercicio de la donación se cuestionarían bien pronto en algunos de los debates y, documentos más ejemplares en la historia de España. Fray Bartolomé de las Casas ilustra el coraje español más justiciero. Pero no es éste nuestro asunto. Aludimos apenas a la instancia que fundó los títulos del imperio cuando a más de tres siglos las Américas se emancipan, y ellos no son ya historia antigua sino prehistoria en la conciencia americana.

A través de la revolución última que ocurre en el pensamiento del siglo XVIII y a la que da su nombre al despotismo ilustrado español, frente al mundo colonial se manipulan en la metrópoli desde el derecho divino de los reyes, el pacto de sumisión, la prescripción adquisitiva, el consentimiento tácito y confirmado, la soberanía de la autoridad civil *per se*, desde un poder ya secularizado y en conflicto con los privilegios corporativos de la Iglesia y con la misma potestad jurisdiccional de Roma. Aunque durante los años de la insurgencia, y después, Roma prescriba la obediencia de América a la corona de España, la literatura realista, la civil y la eclesiástica, incide y abunda en sus discursos y condenaciones de los insurgentes, aún bajo el liberalismo.

No para nosotros a siglo y medio, sino para los hombres de esos días, los títulos y el mismo lenguaje metropolitano son anacrónicos cuando fundamos la república. La subversión y la ruptura con el antiguo régimen están consumadas. El Congreso en su Manifiesto de 4 de octubre de 1824 podrá decir: "El nuevo mundo en sus instituciones ofrece un orden desconocido y nuevo, como él mismo, en la historia de los sucesos grandes que alteran la marcha ordinaria de las cosas...".

En el ejercicio de la soberanía constituyente México adviene al *novus ordo secularis*. El acontecimiento revolucionario tiene entre otras una simple corroboración significativa: el Manifiesto del Congreso del 31 de enero de 1824 no emplea en su lenguaje directo un solo argumento religioso ni hace apelación alguna trascendente y el Acta Constitutiva —no la Constitución del 4 de octubre siguiente— omite la fórmula previa: "En el nombre de Dios...". La historia y los poderes de la nación, que profesan la religión católica con intolerancia de toda otra, se secularizan para que el mexicano los asuma como su responsabilidad y su obra propias.

Después de una insurgencia de 11 años y, consumada la independencia, las armas se volvieron a mostrar, pero la victoria republicana se gana sin una sola batalla. Sin idealizarlo, verificamos un hecho revelador más que todo otro de la naturaleza del suceso: la revolución federal entra a la capital de la nación sin un hombre armado y únicamente con sus diputados elegidos al Congreso Constituyente, y el último combate se libra desde su tribuna al fundar la república federal.

[66] Manuel Giménez Fernández, *Las Bulas Alejandrinas de 1493 referentes a las Indias. Nuevas consideraciones sobre la historia y el sentido de las letras alejandrinas de 1493 referentes a las Indias*, Sevilla, 1944, pp. 183-191.

Apéndices

EXPOSICIÓN PRESENTADA A LAS CORTES POR LOS DIPUTADOS DE ULTRAMAR EN LA SESIÓN DE 25 DE JUNIO DE 1821, SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS PROVINCIAS DE QUE SON REPRESENTANTES, Y MEDIOS CONVENIENTES PARA SU DEFINITIVA PACIFICACIÓN; CON UNA NOTICIA DE LOS TRÁMITES QUE LA PRECEDIERON Y MOTIVARON

MADRID, 1821
IMPRENTA DE DON DIEGO GARCÍA Y CAMPOY

Los diputados de las provincias de ultramar han visto con el mayor dolor desvanecerse las halagüeñas esperanzas que sobre la suerte futura de las provincias que representan, les había hecho concebir la indicación del señor conde de Toreno, que las Cortes tuvieron a bien aprobar. Del dictamen que se ha leído ayer de la comisión especial que con este motivo se formó, se concluye únicamente que las circunstancias de la América son las más críticas, y que ha llegado el caso de tomar medidas que, saliendo del orden regular, puedan curar los graves males que ahora se sufren, y precaver los males aun mayores que amenazan. Bien persuadidos de esta verdad los diputados de ultramar creerían faltar a la confianza que en ellos depositaron sus comitentes, y a las obligaciones sagradas que les impone su honor y su conciencia, si dejasen pasar los pocos días que restan de la presente legislatura sin instruir al Congreso del estado de las provincias que tienen el honor de representar, y proponerle las únicas medidas capaces de restablecer la tranquilidad y asegurar la conservación y bienestar de aquella grande e interesante parte de la monarquía, manteniendo la integridad de ésta.

No renovaremos ahora la memoria de las causas, principio y progreso de una guerra que de once años a esta parte devasta aquellos hermosos países; pero diremos sí, que después de tantos y tan costosos esfuerzos hechos por el gobierno para mantener aquellas regiones bajo la dependencia, después de tanta sangre y desolación nada se ha logrado: Buenos Aires, Chile, Santa Fe y una gran parte de Venezuela están emancipados de hecho, el Perú invadido, Quito turbado, y una nueva revolución de un carácter mucho más temible que la anterior se ha estallado últimamente en México. Es pues cierto que los medios de violencia de que hasta ahora se ha hecho uso, no han producido el efecto deseado, y lo es también que aun cuando fuese posible continuarlos, tampoco lo producirían, dése por supuesto que se lograse la pacificación absoluta de todo el vasto continente de la América, si no se extingue el motivo del descontento, éste se mostrará siempre que encuentre ocasión; una conspiración sucederá a otra; nunca habrá verdadera tranquilidad, y los tesoros de la nación deberán emplearse todos en mantener ejércitos numerosos, única garantía de esa paz forzada y efímera. Muy lejos de nosotros la idea inmoral e irreligiosa de dejar consumir a nuestros hermanos con sus discordias, de fomentar éstas, y de esperar se sometan a fuerza de ruinas. La nación entera está obligada a la conservación y felicidad de su mayoría, protegerla y llevarla a efecto es su primera obligación, la del Congreso que la representa y del gobierno que la rige. Nos toca pues sola-

mente, como testigos de los sucesos, presentar a su examen los obstáculos que se oponen a que la disfrute.

Ninguno parece que debiera encontrarse después de restablecido tan gloriosamente en las Españas el régimen constitucional. Éste asegura la felicidad de la península como de las provincias de ultramar; nada parece que queda que desear a éstas: sin embargo el efecto prueba que no sólo no se han pacificado las que estaban con las armas en la mano, sino que aun se han armado las que se tenían ya por tranquilas. ¿Qué desean pues? Nosotros lo diremos, señor: desean esa misma Constitución que debe hacerlas felices, pero que en el estado actual de cosas consideran como una bellísima teoría que sólo en la península puede relucirse a práctica. Los americanos son hombres libres: son españoles: tienen los mismos derechos que los peninsulares, los conocen y tienen bastante virtud y recursos para sostenerlos: ¿cómo pues podrá esperarse que prescindan de ellos y que permanezcan en paz sin su posesión? ¿Cómo se podrá exigir que arranquen de su corazón las semillas que han sembrado y propagan con gloria sus padres y sus hermanos, con el estímulo más poderoso que es el ejemplo? Proporcionar a los americanos los mismos goces que a los peninsulares para conseguirla, es el único arbitrio que hay para terminar la guerra civil: ¿y puede esto hacerse por los medios que están en práctica? Nosotros creemos que no. Es necesario confesar que la Constitución no puede practicarse en aquellos países si no se toman medidas nuevas y eficaces para que los tres poderes puedan obrar en su esfera con la energía y prontitud que exige la necesidad y conveniencia del Estado. Es evidente que una de las principales partes de la armonía y artificio de este código consiste en la inmediata responsabilidad de los empleados públicos, por lo abusos que cometan en el ejercicio de su autoridad; porque es indisputable que teniendo el hombre una tendencia poderosa a sobreponerse a las leyes, necesita un freno continuo que lo tenga reducido a la esfera que éstas le trazan. Inútil fue en todos tiempos y en todos los países dar leyes filantrópicas, cuando no se proveía a su observancia por un poder enérgico que velase sobre sus ejecutores: todos los códigos abundaban más o menos de leyes protectoras de la humanidad, y en todas partes se vieron los más horrorosos abusos del poder. Así que mientras un empleado de cualquiera naturaleza que sea, no tema una inmediata responsabilidad, cuando se desvía de la senda de la ley, nada se ha hecho en favor de los pueblos: ¡cuánto pudiéramos decir sobre este particular! Convencidos por una triste experiencia de lo que hemos visto en las provincias de América, recordaríamos a las Cortes las repetidas quejas que han venido contra los jefes, que no hacían más caso de la Constitución que de las leyes de Indias, y que hollaban con el mayor descaro sus principales artículos: llamaríamos su atención sobre el desprecio con que han mirado la división de poderes, la libertad política de la imprenta, el exclusivo derecho de la representación nacional para la imposición de contribuciones, el respeto religioso con que debe conservarse el sagrado derecho de libertad individual, y todas las consecuencias que emanan de estos principios. Éstas, señor, no son relaciones de viajeros ni declamaciones de políticos exaltados: son los clamores de quince millones de habitantes que hablan al cuerpo legislativo de las Españas de donde esperan el remedio de sus males: porque en fin es preciso decirlo francamente, las Américas gimen bajo el enorme peso del despotismo no menos ahora que en el sistema anterior; con esta diferencia, que entonces sabían los pueblos que con dormir tranquilamente bajo el mortífero árbol de la arbitrariedad, que con mirarse como un rebaño de ovejas pertenecientes a uno o muchos propietarios, o como esclavos que debían obe-

decer ciegamente a su señor en cuanto les mandase, estaban seguros de los ataques del poder, pero ahora que se les anuncia pomposamente que son libres, que se les insta a que publiquen con franqueza sus pensamientos e ideas, que se les asegura que no serán molestados mientras no obren contra ley expresa, se dejan arrastrar de estas hermosas apariencias, dan a su genio una parte del vuelo de que es susceptible y al momento cae sobre ellos la hacha del poder. ¿Qué recurso señor queda a estas desgraciadas víctimas de su credulidad? ¿Ocurrir a la metrópoli, a dos o tres mil leguas, a quejarse contra el déspota? ¡Triste sobre vano recurso!

El sistema de elecciones establecido en la Constitución y la remisión bienal de diputados de América a la metrópoli es otro de los inconvenientes que no podemos dejar de manifestar: muy cerca de doscientos diputados deberán salir de los diversos puntos de América y venir desde una larga distancia cada dos años a formar un congreso en Madrid: ocioso es entrar en los pormenores de esta gravosísima peregrinación; tan impracticable parece a primera vista, que es inútil manifestarlo; tampoco hablaremos de los enormes gastos que es necesario erogar para verificarla; pero no podemos menos de hacer presente al congreso algunas reflexiones interesantes. Al tiempo de hacerse la elecciones en la península, ¿qué consideraciones hay que guardar respecto de los sujetos que se crean a propósito para tan difícil encargo? Nada más que la de una imposibilidad absoluta. En América como que se trata de que se separen los electos por tres años de su patria, de que atraviesen los mares y de que dejen abandonadas sus familias e intereses, es menester contar con una edad y una salud robusta; es necesario excluir a los grandes propietarios y comerciantes, cuyas casas y negocios faltando la cabeza se perderían en lo absoluto, o se trastornarían con grave perjuicio suyo y del Estado; es menester prescindir de los casados que tengan hijos y necesidad de educarlos por sí, pues faltándoles su padre tres años, resentirán todos los efectos que son consiguientes a una educación descuidada que tanto daña a la sociedad; es justo guardar consideración con los abogados que estando atraídos para subsistir a sólo su bufete, cuando vuelvan de la diputación pasarán años para ponerse de nuevo al corriente, y entre tanto carecerán aun de lo más preciso para alimentarse; es necesario en fin economizar aun respecto de los eclesiásticos que acaso podrían considerarse los menos perjudicados, principalmente en cuanto a los curas, porque es muy pernicioso que las ovejas estén tanto tiempo sin oír la voz de su legítimo pastor y sin que las gobierne y cuide aquel a quien por sus méritos y circunstancias personales fueron encomendadas: además de todo esto, en América sería injusto y gravosísimo reelegir varias veces a las mismas personas, pues si se verificase, se les constituiría en la necesidad de pasar su vida en viajes continuos de uno a otro continente resultando de todo que el congreso queda privado de la asistencia de los sujetos más distinguidos. En la península cuando se impida por fallecimiento o enfermedad algún diputado se puede llamar al suplente, pero en ultramar es inútil la elección de éstos y debe tenerse por no escrita en la Constitución, porque sólo podría tener efecto para la segunda legislatura, en el caso de que faltase el diputado en los principios de la primera, si se libraba la orden con la mayor eficacia, si el suplente podía disponer su viaje en el mismo momento, si encontraba buque que lo condujese, y si éste llegaba oportuna y felizmente; circunstancias todas cuya concurrencia es absolutamente inverosímil.

Examinemos ahora a qué vienen estos diputados. Esta cuestión es más interesante de lo que parece: vienen a concurrir con los de la España europea para formar un cuerpo legislativo que dé leyes a pueblos distantes entre sí cuatro o cinco mil leguas. Agraviaríamos la no-

toria ilustración del Congreso si nos pusiésemos ahora a demostrar que las mismas disposiciones que son buenas para la península no lo serán tal vez para cada una de las Américas. No habría cosa más fácil que legislar, si se pudiesen dar unas mismas leyes a todos los países; pero desgraciadamente no puede ser así, y sabemos que las instituciones de Solón, Minos, Licurgo y Pen eran entre sí tan desemejantes como las costumbres y locación de los pueblos a que se dieron ¿se harán leyes diferentes para estas tan distantes partes de la monarquía? He aquí otro inconveniente: ¿cómo pueden los diputados de Nueva España por ejemplo dar leyes a provincias que no conocen ni han visto ni saben sus costumbres, sus virtudes, sus vicios, sus usos, sus preocupaciones, su situación, las relaciones que tienen o pueden tener, ni el carácter de sus habitantes? ¿Se querrá que los diputados de las Américas formen los proyectos de ley de sus respectivas provincias?, en este caso o el resto del congreso seguiría ciegamente el dictamen que se le propusiese o no: si lo primero ¿para qué hacerlos venir a España, separarlos de su patria, y aislarlos de sus conciudadanos de los que deberían adquirir los conocimientos más interesantes? Si lo segundo, la propuesta de los proyectos es verdaderamente ilusoria.

Para hacer evidente lo que acabamos de decir, no tenemos más que recordar la marcha de estas dos últimas legislaturas. ¿Qué proyecto de ley ha podido hacerse extensivo a aquellos países? Si se presenta el de las milicias, si el plan de la organización del ejército, si sobre reforma del clero, si sobre hacienda, jamás se ha creído que podrían servir para las Américas: siempre se hallaron inconvenientes enormes y repugnantes, de manera que se creyó necesario hacerlas diferentes para aquellos países: se mandaba agregar algunos americanos para que éstos suministrasen las noticias que se juzgaban necesarias, para hacerlas análogas a las costumbres y circunstancias del nuevo mundo. ¿Pero qué dirán las Cortes si se les demuestra que estos mismos diputados no están en disposición de legislar a sus provincias? Para demostrar esta verdad no se necesitan muchas reflexiones. Cuando se propone algún proyecto de ley deben por la Constitución verificarse tres lecturas antes de su discusión: en este intervalo las provincias hacen por los papeles públicos las observaciones que juzgan oportunas y se apresuran a dar claridad a la materia una porción de sabios escritores que dan regularmente a los diputados toda la luz necesaria para poder deliberar con acierto: de manera que se puede decir con verdad que las leyes que hacen las Cortes son la expresión de la voluntad general pronunciada por los representantes del pueblo: así se vieron venir de todos los cuerpos y secciones del ejército multitud de observaciones que se tuvieron presentes para la discusión de la ley constitutiva del ejército: así vimos también repartir a los diputados varios impresos en que se profundizaba la cuestión de señoríos, poniéndola bajo diversos puntos de vista, según las ideas y opiniones de los escritores, y así finalmente vemos que no hay proyecto de ley presentado a las Cortes sobre el que no se publiquen más o menos reflexiones; añádase que todas las provincias de la península tienen completa su representación, que cada cuatro días pueden recibir los diputados noticias e instrucciones de sus poderdantes, salir de las dudas que les ocurran y al tiempo de la discusión hablar y promover las cuestiones con aquellos datos que son necesarios para el acierto: tienen también a mano los archivos y oficinas para proveerse de las constancias y documentos que necesiten: al paso que los de ultramar se miran aislados a miles de leguas de sus comitentes y al proponer o votar una ley proceden con la dura incertidumbre de si harán un mal en lugar de un beneficio.

Además de estos grandes inconvenientes hay otros no menos graves que se presentan para la ejecución de varios artículos constitucionales: nosotros sólo indicaremos algunos de los más principales. El artículo 308 de la Constitución previene que cuando la seguridad del Estado lo exija, podrán las Cortes suspender las formalidades prescritas para el arresto de los delincuentes, formalidades que son la salvaguardia de la seguridad personal. Supongamos que llega este caso en América como efectivamente ha llegado, en un peligro inminente de romper una nueva revolución ¿se ocurrirá a las Cortes para que usen de esta facultad delicadísima, o se dejarán correr las cosas como vayan, o se usará de este recurso por alguna autoridad de América, a quien se le autorice para que haga las veces de las Cortes en un asunto de tanta consecuencia? No hay medio entre estos tres caminos y no es fácil discernir cuál de ellos será menos ruinoso: ocurrir a las Cortes es inútil: es lo mismo que dejar venir todo el mal que destruya el Estado: el remedio en estos casos debe ser momentáneo. ¿De qué serviría que al cabo de dos años otorgasen las Cortes la suspensión necesaria si ya se estaría regularmente fuera del caso, y la revolución no sólo se habría comenzado, sino tal vez concluido? Si en circunstancias tan peligrosas no se toman esta clase de providencias, se destruye de hecho una de las armas más poderosas de que puede valerse el gobierno en los últimos recursos, y se constituye a los pueblos en la triste necesidad de estar viendo venir el golpe destructor y no poderlo evitar: dejar que se tomen como de hecho se han tomado los jefes políticos el uso de esta facultad, es entregar los ciudadanos al despotismo más atroz, es privarles de todas las ventajas del sistema constitucional, y es finalmente establecer un poder el más propio para destruir en muy poco tiempo todas las autoridades establecidas, todos los ciudadanos principales, y en resumen capaz de ponerlo todo en la anarquía y trastorno más espantoso a que sólo puede sobrevivir el Estado existiendo a la vista de los pueblos la representación nacional, sólo con ella al frente puede dejar de perecer el sistema constitucional en una convulsión de esta naturaleza.

Fijada por las Cortes la fuerza militar que se considere necesaria en América como debe hacerse anualmente, conforme a los artículos 357 y 358, y no pudiéndose disponer ni aun por el Rey mismo de las milicias, sino dentro de su provincia, según el artículo 365, en el caso de una invasión interior o exterior, ¿qué podrá hacerse? ¿Se acudirá a las Cortes para que otorguen permiso para sacar las milicias de su provincia, o se autorizará a alguna persona para que en tales circunstancias pueda darlo en México, o levantar nuevos cuerpos? Lo primero ya se ve que traería daños irreparables, y contra lo segundo hay todas las razones que movieron a las Cortes constituyentes a reservarse estas facultades.

Si entramos a analizar el punto de hacienda, tal vez sacaremos un convencimiento hasta la evidencia de que el poder legislativo no puede llenar desde aquí sus funciones, respecto de la América, porque es necesario a la vista de los mismos objetos adquirir y considerar los datos convenientes para establecer y fijar los gastos y contribuciones: las Cortes están mirando que en dos legislaturas no se ha podido dar un solo paso para el arreglo de la hacienda de América. La comisión ha dicho que no tiene los conocimientos que son necesarios, y nosotros añadimos que ni los tendrá, y que aunque los tuviese, servirían de bien poco: aquí mismo en España con dolor vemos que teniendo a la mano todo cuanto puede desearse, se examinaron los presupuestos en la legislatura pasada: se fijaron las contribuciones, y se llenó el déficit superabundantemente. ¿Cuál ha sido el resultado? Las obligaciones no se han cumplido: la vigilancia de las Cortes, y actividad del gobierno, no ha sido suficiente para que se lograse el objeto

que las Cortes se propusieron y en que trabajaron con tanto detenimiento, siendo de advertir que no se ha presentado un gasto extraordinario que duplicase o triplicase las atenciones. ¿Pues qué sucederá en América, cuyos presupuestos serán formados con un año a lo menos de anticipación, cuyos datos no pueden tenerse a la vista, y cuando de hecho están variando continuamente las circunstancias políticas del país? Parece imposible un buen resultado.

Con bastante dolor estamos viendo a la América privada de uno de los mayores beneficios del sistema, que es el establecimiento de los jefes políticos en cada provincia, y esto porque el gobierno ha creído que esta especie de aislamiento sin una autoridad suprema inmediata que uniforme la marcha de estas autoridades, que por la Constitución son iguales entre sí, causaría necesariamente divergencia en sus resoluciones, y se perjudicaría la unión y la armonía tan necesarias en un Estado. Con esto hecho el gobierno ha confesado que no considera practicable esta parte del sistema en las Américas, y ha dejado los mismos virreyes con otro nombre si que quiere, pero con la misma autoridad en toda la vasta extensión de Nueva España donde no hay cosa que pueda equilibrar o templar este poder terrible. Sería fatigar demasiado la atención del congreso referir los excesos que se cometen por esta causa: sólo indicaremos dos bastante notables. Un virrey de Nueva España por solo un dictamen de la Audiencia suspendió la libertad de imprenta, y puso en prisión a los escritores que habían usado de ella: el mismo porque el pueblo manifestó su regocijo la primera vez que usó de su derecho en la elección del ayuntamiento de México, mandó que éste no se nombrase y quedó sin observarse la Constitución en esta parte meses enteros, hasta que su sucesor ofreció como por favor, que se observaría. A la vista de estos hechos que quedaron impunes por alegarse circunstancias, o por otros principios, no debe dudarse que lo mismo harán y alegarán siempre que les parezca los gobernantes sucesivos.

En el ejercicio del poder judicial ocurren no menores dificultades, bastará sólo poner en consideración de las Cortes la necesidad que a cada paso ocurre de resolver dudas de ley para la decisión de causas civiles y criminales que siempre exigen un pronto despacho. ¿Y quién ha de resolver estas dudas en América? ¿Quién ha de interpretar las leyes? ¿Se fiará esta facultad a los jefes superiores, o a los tribunales? Ambas cosas son absurdas y destructoras del sistema: además de esto el magistrado que cometa las infracciones de ley más escandalosas, no puede ser removido sino después de dos o más años, después de recursos a la península y de pasos bastante difíciles para aquellos habitantes que no tendrán más remedio que sufrir los efectos de sus atentados.

Sobre todas estas reflexiones que manifiestan el grande embarazo o por mejor decir imposibilidad en que se hallan los poderes para obrar en América como conviene al Estado: hay otras consideraciones que a nuestro parecer convencen la necesidad de variar la marcha que llevamos. En la actualidad las partes de la monarquía tienden naturalmente a la mutua separación: las Américas bajo el pie en que están, no pueden subsistir en paz, y se puede asegurar por todo lo que hemos dicho e insinuado que es imposible la tengan: caminan velozmente a su desolación siendo como es inasequible apagar el espíritu que dan las luces del siglo, principalmente en aquel suelo que aun en los tiempos de su barbarie produjo a millares héroes entusiastas de su libertad; y a millones soldados valientes que murieron por sostener los derechos de su patria. Los americanos de esta clase no retrocederán ni renunciarán a sus deseos de sacudir un despotismo ominoso aunque vean evidente el peligro en que están de aniquilarse a

sí mismos, o de caer en las manos de un déspota nacional o extranjero, y nosotros no podemos ver sin estremecernos que se les deje entregados a la ruina y desolación total. Por otra parte los españoles peninsulares que meditan y conocen sus verdaderos intereses, ven en las Américas un escollo en que se estrella su felicidad: un manantial abundante de pérdidas en todos sentidos; y finalmente una carga pesadísima que siguiendo la marcha que ha llevado hasta aquí, concluirá por debilitar al exceso el cuerpo político o cuando menos entorpecerá todos sus progresos. Esta verdad se toca ya por los gravísimos perjuicios que sufre nuestro comercio sin protección, y perseguido por una multitud extraordinaria de corsarios, mal que no sólo trae las fatales consecuencias presentes, sino también la de que los habitantes de América impuestos al consuno de los géneros peninsulares, faltando éstos por mucho tiempo en los mercados, perderán los compradores la costumbre y las mercancías de España, no podrán tener ya la misma salida que hasta aquí. América pues conoce que su unión a la península en los términos en que está, no le es ventajosa: igual concepto debe tener España, respecto de la América, y de consiguiente ambas propenden a la separación. Volvamos este cuadro, y supongamos por un momento, puesto en práctica el plan que se propone, ¿pueden los americanos apetecer un sistema de gobierno más liberal, más bien constituido, más económico, más análogo a las ideas del siglo y al genio americano? Parece que no se puede perfeccionar más una monarquía moderada. Por el hecho de arreglarse Nueva España bajo el plan que deseamos queda en aptitud para desplegar todos sus recursos sin el menor embarazo, y para caminar al alto grado de prosperidad de que es susceptible; no queda respuesta a las convulsiones de una república y aparece precavida por todos los medios imaginables de los avances de un poder ejecutivo, que teniendo sobre sí la censura del Rey y en caso preciso también la de las Cortes, no puede durar sino en tanto que sea bueno: por estas razones pues debe creerse que los americanos tendrán un interés por conservar esta clase de gobierno: no es ésta una mera teoría: a la vista del Congreso está el ejemplo del Canadá, que teniendo en su mano ligarse con los Estados Unidos, no lo ha intentado, porque ha juzgado mejor el gobierno de que ahora tratamos, aunque no lo posee en tanta perfección, como aquí se propone: los mismos Estados Unidos no se hubieran separado de la metrópoli, si ésta no los hubiera atacado injustamente en los derechos que aquí se aseguran a las Américas. Pero cuando todo esto no fuese así, de hecho se presenta a éstas un gobierno que da todas las ventajas de la liga, y de la libertad. ¿No es evidente que cambiando de marcha, y accediendo a los deseos de los americanos, se cambian sus intereses, y que por el mismo hecho quedan también igualmente cambiados los de los peninsulares? Éstos en tal caso recibirán de las Américas todos los bienes que deben esperar de ellas, verán allí una segunda patria, se interesarán por consiguiente en su liga y conservación, de donde resultará que ambas partes de la monarquía propenderán naturalmente a una eterna unión. En nuestras manos está poner los fundamentos de esta grande obra. ¿No sería un cargo tremendo el que nos haría la posteridad si lo omitiésemos o si rehusamos adoptar unas medidas que dicta la razón universal, la verdadera política, la justicia y conveniencia pública? ¿No seremos responsables a las generaciones futuras y presentes de la sangre de nuestros hermanos, de la desolación de los pueblos, y de la escisión de la monarquía? No [se] nos ocurre a verdad cómo indemnizarnos de cargos tan graves.

Los diputados de ultramar estamos persuadidos de que para nuestras peticiones debemos consultar únicamente a las imperiosas necesidades de los pueblos, y a restablecer por los me-

dios más eficaces su tranquilidad perdida, porque entendemos que a la salvación de la patria, a la prosperidad y bien de la asociación política, es decir, al primer objeto que se ha de proponer todo gobierno para ser justo, permanente y respetable, deben ceder cualesquiera inconvenientes o embarazos: felizmente pasaron ya los tiempos en que las naciones eran conducidas a ser víctimas de principios aislados o teorías; ya no se escuchan sin horror las opiniones de los que quieren salvar los principios aunque perezca el Estado, y en su lugar se ha sustituido con verdadera sabiduría el axioma liberal y filantrópico, de que las leyes se han formado para la felicidad de los pueblos, y no éstos para sacrificarse a las instituciones; pero nuestra situación no es tan terrible que nos ponga en este último caso que habríamos sufrido con resignación si no hubiésemos podido combinar las medidas capaces de salvar nuestra patria, con las bases de una Constitución, con cuyos principios estamos identificados; y en el que nos hubiéramos dejado conducir, manifestando al universo que sabemos perecer y perecer serenamente, por llenar los deberes que nos impuso la patria al depositar en nuestras manos su libertad, vinculada en la observancia exacta de los principios fundamentales de la Constitución: es verdad que las medidas que proponemos no están marcadas en ella, ¿pero podrían acaso preverse al tiempo de formar este inestimable código todos los casos y circunstancias en que podía hallarse la nación? Esto no es dado a los hombres ni posible presumir que la intención de los legisladores fuese despojar a la nación del derecho imprescriptible que tiene a conservarse y de la soberana autoridad para tomar a este fin todas las providencias, cualesquiera que sean, en los casos urgentes, perentorios y extraordinarios: el glorioso alzamiento que nos ha restituido la libertad y la vida, no está prescrito en la Constitución: y las Cortes en la enajenación de las Floridas y en algún otro punto semejante han reconocido la fuerza de este principio del derecho natural que ninguna ley puede derogar: ¿cuántos artículos de la Constitución no se hicieron a un lado para acelerar como convenía la instalación del actual Congreso? viose en efecto hacer en la península las elecciones de representantes del nuevo mundo, y desde que hay Cortes han existido en ellas diputados elegidos de un modo que no conoce la Constitución, ni se puede conciliar con las bases elementales que adopta; con todo nadie reclama estos hechos tan notables porque estamos convencidos de que es un deber posponerlo todo al bien general de la patria que así lo ha exigido: la cuestión pues sólo consiste y debe reducirse a la resolución de este problema. ¿El bien del Estado pide con urgencia que se tomen medidas grandes y extraordinarias? Nosotros creemos que sí, y hemos expuesto ya algunos de los fundamentos de nuestra opinión, omitiendo los demás por no cansar demasiado la atención del Congreso a cuya vista no se oculta que la mayoría de la nación se está despedazando: que la sangre de nuestros hermanos corre sin intermisión, y que nuestros pueblos afligidos levantan sus ojos y sus manos hacia nosotros, implorando del modo más tierno el remedio de sus males: nosotros no queremos lastimar al Congreso presentando a su vista ese melancólico cuadro, ni detenernos por lo mismo en la pintura de las escenas que al fin explica aquel triste silencio con que se habla a los corazones sensibles.

Nosotros nos hemos creído estrechamente obligados a manifestar con franqueza y sinceridad el verdadero estado de nuestros países, convencidos de que nada sería más perjudicial a la nación que ocultárselo; y enseñados por la funesta experiencia de nuestros días de los efectos que producen falsas protestas y ofrecimientos insignificantes, hemos creído que debíamos presentar medidas que en vez de contrariar los principios esenciales de la Constitución, no tie-

nen otro objeto que remover los embarazos que impiden su establecimiento en América, y que dejando intactos los fundamentos del sistema, lo hagan efectivo en aquella gran parte de la monarquía: juzgamos que demandando el cumplimiento efectivo del artículo 13 en todo su sentido y extensión, y pidiéndolo con arreglo al mismo código a que pertenece, llenaremos nuestro deberes y los deseos de nuestro comitentes: entendemos finalmente que careciendo la América en la realidad de los beneficios constitucionales, y que no siendo posible al gobierno hacerlos ejecutar sin adoptar medidas a propósito para establecerlos y hacer la felicidad de la sociedad, nada era más justo, nada más urgente, nada más constitucional que proponer los medios de lograr estos objetos, salvando así las bases sustanciales de nuestro código, aun cuando para ello sea preciso tocar en algo su parte reglamentaria, porque a la verdad, señor, puestos como lo estamos en el estrecho inevitable de sacrificar algunos accidentes, o mucho de lo esencial ¿podrá ser dudosa la elección? ¿podrá decirse contrariado el código precioso de la libertad, sino siendo posible en el orden de la naturaleza salvar sus primeros elementos, sin aventurar algo de lo reglamentario nos decidimos a la conservación de los primeros? ¿Haremos por ventura más mérito de las palabras que de las cosas, y despreciaremos los objetos más sublimes, los más grandes intereses por respetar la exterioridad sola del lenguaje? Procediendo de tal modo ¿podremos tener la gloria de decir [que] hemos defendido, hemos salvado las leyes fundamentales de la monarquía? Si aventuramos la seguridad del Estado, si la libertad individual no queda asegurada, si el goce de estos preciosos bienes luchan recíproca y constantemente entre sí mismos, si el ciudadano en América no puede ser libre sin que peligre el Estado, o éste no puede afirmarse sobre bases sólidas, sin que nuestros compatriotas entreguen en manos del despotismo, de la arbitrariedad y de la tiranía sus más preciosos derechos, si no adoptamos los recursos para unir estos extremos principales, si desatendemos los principios por fijarnos en consecuencias remotas ¿qué dirá el mundo de nosotros, viéndonos sacrificar la esencia de la ley, su objeto y resultados benéficos en obsequio de los accidentes, de la exterioridad y las palabras?

La diputación ultramarina daría a estas verdades toda la amplitud de que ellas son susceptibles, y las pondría en un estado de claridad tal que pudieran decirse propiamente demostradas si lo creyese del día, pero se reserva a hacerlo en su respectivo tiempo, concluyendo con presentar al Congreso las proposiciones principales que incluyen las medidas que en su concepto deben adoptarse: el Congreso con su acostumbrada sabiduría y justificación determinará a su tiempo si deben o no discutirse, moderarse, ampliarse, o lo que tenga por más conveniente: los diputados que suscriben han cumplido sus deberes con dar este paso último que está en sus facultades, y descargan desde luego todo el peso de su responsabilidad, hablando en este augusto Congreso lo que les dicta su celo por la gloria y felicidad de la nación. Estas mismas proposiciones fueron presentadas a la comisión especial encargada de proponer medidas conciliatorias para todas las Américas, y por esta razón están concebidas en términos que las comprenden todas; pero no siendo la intención de los que suscriben, ni estando en sus principios comprometer por este hecho sin conocimiento a la América meridional, cuya situación política y modo de pensar no les consta por faltar un número competente de diputados de aquellas provincias, que habiéndolas visto últimamente tengan los datos necesarios para determinar en asunto de tanta consecuencia, las proposiciones se concretan a sólo la América septentrional, no variando ahora en ellas palabra alguna por haber ya corrido así por muchas manos, y juzgarse con esta nota bastante aclarado el límite que les dan sus autores, dejando lo

perteneciente a la América meridional a la ilustrada consideración del Congreso, y a los conocimientos y patriotismo de los diputados correspondientes.

Proposiciones

1ª Habrá tres secciones de Cortes en América, una en la septentrional y dos en la meridional: la primera se compondrá de los diputados de toda la Nueva España, inclusas las Provincias Internas y Guatemala. Las dos secciones de la América meridional comprenderán una de ellas el Nuevo Reino de Granada, y las provincias de Tierra Firme, y la otra el Perú, Buenos Aires y Chile.

2ª Estas secciones se reunirán en los tiempos señalados por la Constitución para las Cortes ordinarias, gobernándose en todo con arreglo a lo prescrito para éstas, y tendrán en su territorio la misma representación legal, y todas las facultades que ellas, exceptuando la 1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª, que se reservan a las Cortes generales; la parte de la 7ª relativa a aprobar los tratados de alianza ofensiva y la 2ª parte de la facultad 22.

3ª Las capitales en donde por ahora se reunirán estas secciones serán las siguientes: la sección de Nueva España se juntará en México; la del Nuevo Reino de Granada y Tierra Firme en Santa Fe, y la del Perú, Buenos Aires y Chile en Lima: si las secciones, de acuerdo con el poder ejecutivo de aquellos países tuvieren por conveniente mudar el asiento de gobierno, podrán escoger el punto que les parezca más conveniente.

4ª Habrá en cada una de estas divisiones una delegación, que ejercerá a nombre del Rey el poder ejecutivo.

5ª Estas delegaciones se depositarán cada una de ellas en un sujeto nombrado libremente por S.M. entre los más distinguidos por sus relevantes cualidades, sin que se excluyan las personas de la familia real: este delegado será removido a voluntad de S.M.; será inviolable respecto de las secciones de Cortes de aquellos países, y sólo responderá de su conducta a S.M. y a las Corte generales: los ministros de esta delegación serán responsables a las secciones de Cortes respectivas con arreglo a la Constitución.

6ª Habrá cuatro ministerios: gobernación, hacienda, gracia y justicia, guerra y marina, pudiendo reunirse algunos de éstos según pareciere oportuno por medio de una ley.

7ª Habrá tres secciones del tribunal supremo de justicia, compuestas de un presidente, ocho ministros y un fiscal.

8ª Habrá tres secciones del consejo de Estado compuestas de siete individuos cada una, sin perjuicio de que las secciones legislativas puedan reducir su número a cinco.

9ª El comercio entre la península y las Américas será considerado como interior de una provincia a otra de la monarquía, y por consiguiente los españoles de ambos hemisferios disfrutarán recíprocamente en ellos las mismas ventajas que los naturales respectivos.

10ª De la misma manera tendrán recíprocamente en ellos los mismos derechos civiles y la misma opción a los empleos y cargos públicos que los naturales respectivos.

11ª La Nueva España y demás países que se comprenden en el territorio de su sección legislativa, se obligan a entregar a la península la suma de 200 millones de reales en el espacio de seis años que se empezarán a contar desde el día 1 de enero de 1823, con el objeto de contri-

buir al pago de la deuda extranjera, sirviendo de hipoteca las rentas del Estado y las fincas que le pertenecen o puedan pertenecerle en la misma Nueva España y territorio indicado: se pagarán por plazos dichos 200 millones de reales: el primero se pagará en 1 de enero de 1823, y así sucesivamente en los seis años posteriores hasta su total complemento, que se verificará en 1 de enero de 1828, para lo que en cada uno de los primeros cuatro años se pagarán 30 millones de reales, y en los dos últimos años se pagarán 40 millones de reales. Estos plazos podrán abreviarse poniéndose de acuerdo con la sección legislativa que se establece en Nueva España.

12ª Igualmente se compromete la Nueva España y demás países que se comprenden en el territorio de su sección legislativa a contribuir a los gastos de la península, con destino a la marina, con la suma de 40 millones de reales anuales: se empezará a pagar dicha cantidad desde el primer año que se junte la sección legislativa, y se entregará a más tardar el primer pago al cumplirse el año de la primera reunión de dicha sección legislativa. Esta suma se aumentará desde el momento en que la situación de Nueva España lo permita: así esta cantidad como las demás incluidas en el artículo anterior, se pondrán a la disposición de la península en uno de los puertos que tiene la Nueva España en el golfo de México.

13ª Los demás países de América que se comprenden en las otras dos secciones legislativas contribuirán a la península del modo que después se arreglará, y conforme lo permitan sus circunstancias.

14ª La Nueva España se hace cargo de pagar toda la deuda pública contraída en su territorio por el gobierno o sus agentes, a nombre suyo, debidamente autorizados, quedando a su favor las fincas y rentas, derechos y demás bienes del Estado de cualquiera naturaleza que sean, sin perjuicio de lo acordado en el artículo 11, con el objeto de que sirvan de hipoteca para el pago de las cantidades estipuladas en el mismo artículo.

15ª Los diputados de las respectivas secciones al tiempo de otorgar el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución de la monarquía, añadirán el de cumplir y hacer ejecutar esta ley.

Madrid 24 de junio de 1821. José Mariano de Michelena. Manuel Gómez Pedraza. José María Quirós y Millán. Francisco Molinos del Campo. Tomás Vargas. Antonio María Uraga. Manuel de Cortázar. Juan Bautista Valdés. Francisco Fagoaga. Lorenzo de Zavala. Andrés del Río. Juan Gómez de Navarrete. José Francisco Arroyo. José María Montoya. El marqués del Apartado. José Miguel Ramírez. José Francisco Guerra. José Domingo Sánchez. José Joaquín de Ayestarán. José Mariano Méndez. Fernando Antonio Dávila. Eusebio Sánchez Pareja. Luciano Castorena. José Antonio del Cristo y Conde. Toribio Argüello. José María Castro. Bernardino Amati. José María Puchet. Lucas Alamán. Ventura Obregón. Tomás Murphy. Juan Esteban Milla. Ignacio de Mora. José Hernández Chico Condarco. Miguel de Lastarria. Felipe Fermín de Paul. Matías Martín de Aguirre. Félix Quio Tecuanhuey. Juan López Constante. Luis Hermosilla. Nicolás Fernández de Pierola. Antonio Javier de Moya. José Mariano Moreno. Patricio López. Manuel García Sosa. Juan Nepomuceno de San Juan. El conde de Alcaraz. Pablo de la Llave. Miguel Ramos Arizpe.

NOTA. Terminada la lectura de esta exposición, notó el señor Ramírez que estaba arrancada una firma del último pliego, y el señor Ramos Arizpe dijo que sustituía la suya, reservándose a hacer alguna modificación en el artículo 5º.

En efecto, en la sesión del 26 presentó un proyecto de ley firmado por el mismo señor y por el señor Couto, el cual está esencialmente contenido en las proposiciones con que concluye esta exposición, sin más diferencia que estar contraído exclusivamente a la América española del Norte, y la de concebir su artículo 5° en los términos siguientes: "Esta delegación se depositará en personas distinguidas, por sus virtudes y cualidades, y que merezcan la plena confianza de S.M., excluyendo por ahora las personas de su real familia, para más asegurar la integridad de la monarquía, y los derechos constitucionales del señor don Fernando VII; y el delegado será nombrado libremente por S.M. y removido a su libre voluntad: será inviolable respecto de la sección de Cortes de México; y sólo responsable de su conducta al Rey y a las Cortes generales, con arreglo a la Constitución y a las leyes". Los mismos señores han manifestado estar unidos siempre en principios y en fines, y aun en lo sustancial de los medios con los demás señores que suscriben esta exposición.

PROYECTO PRESENTADO A LAS CORTES POR MIGUEL RAMOS ARIZPE Y JOSÉ MARÍA COUTO,

DIPUTADOS MEXICANOS, EN LA SESIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 1821.

TEXTO DEL *DIARIO DE LAS ACTAS Y DISCUSIONES DE LAS CORTES, LEGISLATURA DE LOS AÑOS DE 1820 Y 1821.*
TOMO XXIII, MADRID, 1821

El señor *Ramos Arizpe* leyó el siguiente proyecto de decreto que se tuvo por primera lectura.

Las Cortes han oído por primera vez la exposición que la diputación americana se ha visto obligada a hacerles sobre el estado de sus provincias, sobre las necesidades de éstas, y sobre los medios de proveer a ellas, adoptando medidas para hacer cumplir exactamente allá la Constitución española, pues su observancia puntual mejorará la situacion de aquellas vastas provincias.

Unidos siempre en principios y en fines con nuestros compañeros, lo estamos también sustancialmente en los medios que se proponen para ver cumplido en nuestra patria el grande principio que comprende el artículo 13 de la citada Constitución. Mas la importancia de este grave negocio, y el deseo vivo y sincero de acertar aun en el modo de presentar los medios, y en la aplicación de estos mismos con más o menos extensión, nos ha obligado a diferir accidentalmente algún tanto en el modo y extensión de las proposiciones que se han leido.

Sensible nos es aún esta pequeña y accidental divergencia, y prescindiríamos gustosos de expresarla, si concibiésemos que de ello podía venir el menor perjuicio a la causa de nuestra patria; mas convencidos, después de serias meditaciones, de que la expresión exacta de nuestras ideas en el modo, y con la extensión que las concebimos, no es otra cosa que una consecuencia del proceder francamente libre que hemos usado por tantos años como hombres públicos, hemos resuelto presentarlas bajo un proyecto de ley que sujetamos a la deliberacion sabia y prudente de las Cortes.

Artículo 1o. Habrá en México una sección de Cortes compuesta de los diputados que según la Constitución corresponden a Nueva-España, Nueva-Galicia, Península de Yucatán, Guatemala, Provincias Internas de Oriente, y Provincias Internas de Occidente, con ambas Californias.

Art. 2o. De los diputados nombrados según la Constitución en los expresados territorios, vendrán siempre a lo menos cinco a asistir en las Cortes generales, arreglándose su número definitivo y el modo de designarlos en la primera reunión de la sesión de Cortes de México.

Art. 3o. Esta sesión de Cortes se reunirá en los tiempos y casos en que según la Constitución se reúnen las Cortes generales, gobernándose en todo con arreglo a lo que la misma Constitución prescribe para el gobierno de éstas: tendrá y ejercerá libremente la misma representación legal, y todas las facultades que por la Constitución tienen y ejercen las Cortes generales, exceptuando la 2a., 3a., 4a., 5a. y 6a; la parte de la 7a. relativa a aprobar los tratados de alianza ofensiva, y la segunda parte de la 22a., cuyo ejercicio se reserva a las Cortes generales.

Art. 4o. Residirá en México una delegación que ejercerá con arreglo a la Constitucion a nombre del señor don Fernando 7o., rey de las Españas, el poder gubernativo en los territorios expresados en el artículo 1o.

Art. 5o. Esta delegación se depositará en personas distinguidas por sus virtudes y cualidades, y que merezcan la plena confianza de S. M., excluyendo por ahora las personas de su real familia, para más asegurar la integridad de la monarquía y derechos constitucionales del señor don Fernando 7o. El delegado será nombrado libremente por S.M., y removido a su libre voluntad: será inviolable respecto de la sección de Cortes de México, y será responsable de su conducta al Rey y a las Cortes generales con arreglo a la Constitución y a las leyes.

Art. 6o. Para el despacho de los negocios correspondientes a la delegación de México se establecen cuatro secretarías: de gobernación, de hacienda, de gracia y justicia, y de guerra y marina; pudiendo reunirse algunas de ellas por una ley según pareciere oportuno a la sección de Cortes y delegación. Los individuos que sirvan estas secretarías serán nombrados y removidos por el delegado de S. M., responsables de su conducta a la sección de Cortes, lo mismo que lo son a las Cortes generales según la Constitución y leyes los secretarios del despacho del Rey.

Art. 7o. Habrá en México una sección del consejo de estado, compuesta de siete individuos, la que desempeñará las funciones que la Constitución y leyes señalan a dicho consejo. La sección legislativa podrá aumentar o disminuir dicho número de consejeros.

Art. 8o. Habrá tambien en México una sección del tribunal supremo de justicia, compuesta de un presidente, ocho ministros y un fiscal, que dividiéndose en dos salas, ejercerá en los territorios expresados en el artículo 1o. las facultades que la Constitución y las leyes señalan a dicho tribunal supremo.

Art. 9o. Los españoles de ambos hemisferios tendrán respectiva y recíprocamente en ellos los mismos derechos civiles, y la misma opción a los empleos y cargos públicos, que los naturales respectivos, y disfrutarán recíproca y respectivamente las mismas ventajas en todo orden y sentido.

Art. 10. Por consiguiente el comercio entre la península y la América española del Norte será considerado como interior de una provincia a otra de la monarquía.

Art. 11. Nueva España y los demás territorios comprendidos en el artículo 1o., contribuirán para el pago de la deuda extranjera con la suma de 200 millones de reales vellón, hipotecando para su seguridad las rentas públicas, y las fincas que pertenecen y puedan pertenecer a la misma Nueva España, y demás países citados.

Art. 12. El pago de estos 200 millones se realizará por partes y en seis años, a saber: en cada día 1o. de enero de 1823, 1824, 1825 y 1826, se entregarán 30 millones de reales de vellón, y en cada día 1o. de enero de los años siguientes de 1827 y 1828, 40 millones: de suerte que en esta última fecha deben quedar completamente cubiertos dichos 200 millones. Estos plazos se podrán abreviar de acuerdo con la sección de Cortes de México.

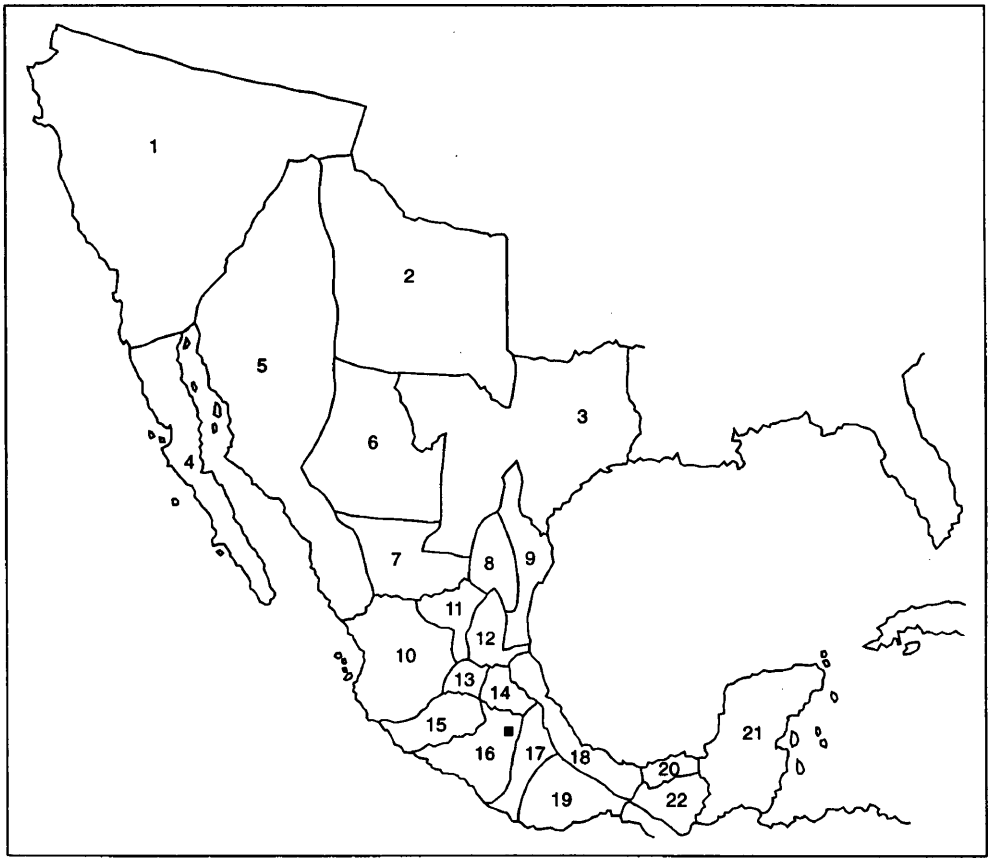
Art. 13. También contribuirá Nueva España y demás territorios expresados en el artículo 1o., con destino a la marina y demas gastos generales de la península, con la suma anual de 40 millones de reales vellón, comenzando esta obligación desde el día en que la sección de Cortes abra su primera legislatura, y de suerte que el pago del primer año quede verificado antes de cumplirse el año, contado desde el día de dicha apertura, y así en lo sucesivo. Esta suma se aumentará desde el momento en que la situación de Nueva España lo permita.

Art. 14. Las sumas de que tratan los artículos anteriores, se pondrán oportunamente a disposición del gobierno de S. M. en uno de los puertos que pertenecen sobre el mar Atlántico a los territorios expresados en el artículo 1o.

Art. 15. Nueva España y demás países de que se compone la sección de Cortes de México, se hacen cargo de pagar toda la deuda pública contraída en sus respectivos territorios a favor de personas particulares por el gobierno o sus agentes legalmente autorizados; quedando a su favor las fincas, rentas y derechos del estado, de cualquiera naturaleza que sean, sin reconocer sobre todas ellas, respecto de España, más obligación que la que se impone por el artículo 11, en razón de la hipoteca para el pago de las cantidades estipuladas en el mismo artículo.

Art. 16. Los diputados de la sección de Cortes de México, al tiempo de otorgar el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución de la monarquía española, añadirán el de cumplir y hacer ejecutar esta ley. Madrid 24 de junio de 1821.

Esquema de la división territorial de acuerdo con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824



1. Alta California
2. Nuevo México
3. Coahuila y Texas
4. Baja California
5. Sonora y Sinaloa
6. Chihuahua
7. Durango
8. Nuevo León
9. Tamaulipas
10. Jalisco
11. Zacatecas
12. San Luis Potosí
13. Guanajuato
14. Querétaro
15. Michoacán
16. México
17. Puebla
18. Veracruz
19. Oaxaca
20. Tabasco
21. Yucatán
22. Chiapas

■ Ciudad de México, Distrito Federal

El esquema está tomado del *Mapa de los Estados Unidos de México* publicado en 1828 por la editorial J. Disturnell de Nueva York, consultando también los ejemplares existentes en el Centro de Estudios Históricos de Condumex, y en la Dirección General de Geografía y Meteorología de la Secretaría de Agricultura, y fue cotejado con el reproducido en 1949 por el ingeniero Jorge L. Tamayo en su *Atlas geográfico general de México*. Este último lo había publicado también la casa J. Disturnell en 1847, y es el mismo de 1828 con las modificaciones territoriales ocurridas hasta aquella fecha. Como advierte el ingeniero Tamayo, el mapa adolece de inexactitudes, mas refleja en todo caso la idea que se tenía de la división territorial del país.

Tomo 2

LOS PROYECTOS DE CONSTITUCIÓN PARA MÉXICO, 1822-1824

[DOCUMENTOS]

ÍNDICE DEL TOMO 2

Nota previa 611

I. CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO O PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO,
por Antonio José Valdés, individuo de la Comisión de Constitución del Congreso.
México, 1822 619

II. PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
presentado a la comisión de ella por uno de los individuos que la componen.
[Atribuido a Miguel Guridi y Alcocer]. México, 1822 627

III. PROYECTO DE REGLAMENTO POLÍTICO DE GOBIERNO DEL IMPERIO MEXICANO
presentado a la Junta Nacional Instituyente, y leído en la sesión ordinaria
de 31 de diciembre de 1822. Por la comisión especial.
México, 18 de diciembre de 1822 649

IV. CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO MEXICANO.
Proyecto de José María Couto. Valladolid, 8 de enero de 1823.
(Reproducción del original existente en los *Iturbide Papers*
en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos) 667

V. PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LA REPÚBLICA DE MÉXICO
formado por Stephen F. Austin, de Texas. Ciudad de México, 29 de marzo de 1823 675

VI. PLAN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN MEXICANA.
Por la comisión de constitución del Congreso. México, 16 de mayo de 1823 701

VII. PLAN DE LAS BASES ORGÁNICAS O FUNDAMENTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA REPÚBLICA FEDERADA EN EL ANÁHUAC
propuesto por el ciudadano Esteban Austin. Monterrey, mayo o junio de 1823 725

VIII. EL PACTO FEDERAL DE ANÁHUAC.
Por Prisciliano Sánchez, México, 28 de julio de 1823 737

IX. CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL ANÁHUAC.
Por un ciudadano del estado de Jalisco.
Segunda edición, por el doctor Severo Maldonado. Guadalajara, 1823 753

X. ACTA CONSTITUCIONAL
presentada al Soberano Congreso Constituyente por su comisión,
el día 20 de noviembre de 1823 831

XI. ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN,
31 de enero de 1824 843

XII. CONSTITUCIÓN FEDERATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Proyecto de la comisión de Constitución del Congreso,
fechado los días 6, 16 y 20 de marzo de 1824.
(Reproducción del ejemplar facilitado por el bibliófilo mexicano, señor Manuel Porrúa) 853

XIII. CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
de 4 de octubre de 1824 877

NOTA PREVIA

En este segundo tomo de nuestro ensayo *La consumación de la independencia y la instauración de la república federal,* nos limitamos a reproducir los proyectos de constitución que se hicieron para México entre 1822 y 1824. Publicamos 11 proyectos, aunque los que se formaron y llegaron al primer Congreso Constituyente fueron más, como consta en las referencias que se hacen a ellos en el propio Congreso. Pero los documentos son desconocidos, al menos hasta hoy.

De los textos que publicamos, ocho circularon impresos en sus días. Otro, el monárquico de José María Couto —diputado por Nueva España en las Cortes de Cádiz en 1810 y en las de Madrid en 1820-1821—, es inédito y se conserva en los *Iturbide Papers* de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, a la que agradecemos la autorización para reproducirlo. Dos proyectos, los republicanos de Stephen F. Austin, publicados por Eugene C. Barker en el tomo I de *The Austin Papers,* Washington, 1924, no se habían reproducido en México. Ambos proyectos se conservan originales en la Eugene C. Barker Library de la Universidad de Texas. La traducción del proyecto de 29 de marzo de 1823 fue revisada por la señorita Margarita Álvarez Franco. El de mayo o junio de 1823 —aceptamos con N.L. Benson que fue elaborado o concluido en junio—, se reproduce en la traducción que hizo de él Sebastián Mercado, hermano del cura insurgente José María Mercado, asesinado en San Blas el 31 de enero de 1811. Mercado, quien regresaba del exilio en Nueva Orleáns, lo tradujo parcialmente para Miguel Ramos Arizpe y el general Felipe de la Garza, que habían iniciado la revolución federal en las Provincias Internas de Oriente. En el documento aparecen las anotaciones manuscritas que hizo al margen Miguel Ramos Arizpe.

Agradecemos a la Universidad de Texas, y a su vicerrector, el doctor Stanley R. Ross, la autorización para reproducir el original manuscrito de la traducción del proyecto de Austin*.

También dejamos constancia de nuestro reconocimiento al bibliófilo mexicano don Manuel Porrúa Venero, quien nos facilitó y autorizó la reproducción de su ejemplar del proyecto de *Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos.*

Una especial gratitud nos obliga con el doctor Ernesto de la Torre, director de la Biblioteca Nacional de México, por autorizar la reproducción de los restantes proyectos impresos, y los del *Acta Constitutiva de la Federación* y de la *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos,* así como por las excepcionales facilidades de consulta que nos concedió.

De los proyectos que publicamos, cuatro son monárquicos y siete republicanos. De éstos, uno, el primero de S.F. Austin, de 29 de marzo de 1823, es para una república central, y seis para una federal.

* No incluido en esta edición [N. del E.].

El examen de los proyectos obliga a un amplio estudio, que no intentamos. Remitimos a sus textos como incitación a él, limitándonos a las someras referencias que en el primer tomo hacemos para situarlos en su momento. En todo caso, ellos revelan cuál fue, primero, el monarquismo que se concibió, y después, cuál era la república posible que se iba fraguando en los días en que se constituía la nación.

Entre el 19 de marzo de 1823, día de la abdicación de Iturbide, y el 21 de mayo, para mencionar únicamente fechas formales en el seno del Congreso Constituyente, transcurren 63 días para que el mismo Congreso que votó la monarquía iturbidista acepte la república federal, ordenando que se circule "el proyecto de bases de república federativa" formado por su comisión especial. El significado de la resolución lo confirma el propio Congreso por decreto de 12 de junio, autorizando al Supremo Poder Ejecutivo para que proceda "a decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de República Federada".

Las fechas solas revelan la evidencia del suceso, pero ocultan el intenso forcejeo en la nación para llegar a constituirse como república federal, un forcejeo que se prolonga aun en el nuevo Congreso Constituyente y en el debate del proyecto de Acta Constitucional. Cuando en el Constituyente se aprueba el artículo 5 del proyecto, el 16 de diciembre de 1823, la nación independiente se funda como república federal.

A partir de la declaración de ese postulado fundamental constituyente se formula el proyecto político de la nación en el Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 1824, y en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de ese año, que lo integran en sus términos definitivos y vigentes hasta nuestros días.

En nuestro primer tomo no hemos aludido siquiera a uno de los proyectos constitucionales, el del doctor Francisco Severo Maldonado. Un capítulo especial, y más de uno, demandaría la atención al Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac, "fruto de treinta años de estudios, desvelos y meditaciones profundas", según manifiesta *El autor a sus compatriotas* en las páginas que son el preámbulo de su proyecto.

Llamaremos apenas la atención sobre él.

Maldonado, doctor en teología por la Universidad de Guadalajara en 1802, bibliófilo y cura de Mascota en Nueva Galicia, se incorpora a don Miguel Hidalgo en noviembre de 1810. El señor Hidalgo le encarga la publicación de *El Despertador Americano*, primer periódico insurgente del que se imprimen siete números entre el 20 de diciembre de 1810 y el 17 de enero de 1811. Después de la derrota insurgente en el Puente de Calderón y de que los realistas ocupan Guadalajara, Maldonado es preso y se le abre causa. Antonio Pompa y Pompa en su reimpresión de *El Despertador Americano* consigna que en el secuestro que se hizo de sus papeles se encontró el manuscrito de una "Constitución Orgánica para el régimen de México", que sería el primer proyecto constitucional insurgente para el país. No obstante el empeño de los investigadores, el documento sigue desconocido.

Maldonado logra el indulto ofreciendo publicar un periódico realista. Dirige así *El Telégrafo de Guadalajara*, del que aparecen 82 números, el último el 24 de febrero.

La vida del doctor Maldonado es oscura durante los siguientes años de la insurgencia. Reaparece en 1821 cuando es elegido diputado a las Cortes de Madrid, a las que no concurre. Iturbide lo nombra individuo de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, y resulta diputado por Nueva Galicia al primer Congreso Constituyente.

El hombre que formó el primer proyecto constitucional insurgente, fecha el 9 de abril de 1821 su Nuevo Pacto Social propuesto a la Nación Española para discutirse en las próximas Cortes de 1822 y 1823. No podemos aludir siquiera al contenido del extenso documento.

En 1822 Maldonado publica los dos tomos de *El Fanal del Imperio Mexicano, o Miscelánea Política, extractada y redactada de las mejores fuentes por el autor del Pacto Social.* El tomo primero de *El Fanal* aparece fechado el 15 de mayo, y el primer documento que ofrece es una reimpresión de la *Memoria político-instructiva* publicada por el doctor Mier en Filadelfia en 1821.

No nos ocuparemos de los documentos ajenos que publica Maldonado en *El Fanal*, y mencionamos únicamente dos ensayos suyos: el Bosquejo de un plan de hacienda, capaz de cubrir todos los gastos del servicio público, y el Plan para crear un Banco Nacional que recoge en sus proyectos constitucionales. Reproduce también el Nuevo Pacto Social propuesto a la Nación Española.

Maldonado, entregado a sus afanes de proyectista, publica también en *El Fanal* una Constitución Política de la República Mexicana, que precede sin gran preocupación de una portada con el título de Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac, con pie de imprenta en Guadalajara, 1823. En una nota previa al documento el autor se refiere a su proyecto. "Todas las formas de gobierno —escribe—, despojadas de todo lo que tienen de injusto, absurdo, bárbaro y arbitrario, se encuentran reducidas a una sola. Tal es la que el autor presenta a sus compatriotas, y una demostración práctica de esta verdad es el que la misma constitución que se había compuesto para el gobierno monárquico constitucional de Iturbide, es la misma que hoy se propone para una forma, la más republicana que puede imaginarse, y que reúne todas las ventajas y caracteres de central y federada".

No es aventurado suponer que el perseverante autor de proyectos haya presentado el suyo a Iturbide, quien durante los diez meses de su imperio no acepta ninguno de los que se formularon.

En la página 6, en la que comienza el articulado, pone otra nota, esta vez al pie. "Los dos pliegos siguientes —se dice en ella—, se imprimieron antes de la abdicación del Emperador; pero como la forma de gobierno adoptada en este código es eminentemente republicana, para que el nuestro tome el carácter evidente de tal, no es preciso hacer ninguna mudanza especial en lo impreso, pues aun los artículos relativos a la sucesión hereditaria tienen su correctivo en los que inmediatamente le siguen". De los 448 artículos del proyecto, los 242 a 248 son los que se refieren a la sucesión hereditaria de la corona.

Al final de su proyecto Maldonado ofrece que aparecerá, en 10 o 12 semanas, una nueva edición reduciéndolo a la mitad. Esta segunda edición es la que reproducimos.

No son en verdad las peculiaridades, inconstancias políticas y los desenfados los que llaman la atención en los proyectos del doctor Maldonado. Su singularidad es otra. Nos hallamos ante el primer utopista del México independiente.

La forma de gobierno que propone, expresa el doctor Maldonado en el prólogo, "es la única, capaz de dar a las sociedades aquel estado de reposo y consistencia, que hasta ahora no han bastado a darles todos esos reformadores superficiales y rutineros de las naciones modernas, que copiándose unos a los otros y reproduciendo unos mismos errores, siempre anunciados con énfasis como principios de reformas saludables, y siempre rebatidos por la experien-

cia, no parece sino que han formado un pacto de perpetuar sin fin sobre la tierra un germen eterno de lucha y de discordia entre sus pueblos y sus conductores". La forma que propone es la única, según su autor, que puede dar la felicidad a los hombres.

Maldonado, que vivió el impulso de lanzarse a la guerra insurgente para retractarse, en apariencia sin mayores escrúpulos, y vivir los años anteriores a la consumación de la independencia como cura de Jalostotitlán, tiene vivas preocupaciones por una realidad más inmediata, que no es extraña a la de una felicidad general. "Esta Constitución —escribe— contiene medios seguros e infalibles de enriquecer a todos los pobres, en tales términos que si dentro de pocos meses se encuentran un solo mendigo que no estuviese suficientemente abastecido de todos los medios de subsistir sin desahogo, será únicamente porque los individuos del Congreso nacional y provinciales querrán más bien ceñirse al afán miserable de copiar los errores de rutina consignados en las legislaciones de otros pueblos, que cimentar la máquina política según las reglas eternas e invariables del arte de la asociación, descubiertas y aclaradas por uno de sus compatriotas".

En verdad, quien posee las fórmulas de la felicidad universal las puede proponer, y las propone sin distingos, a la metrópoli española, al imperio iturbidista, y finalmente a la república federal, proclamada en Guadalajara en donde escribe.

Los medios para desterrar la miseria son varios. Llamamos la atención sobre uno.

En el Apéndice IV del documento proyecta una ley agraria para dar medios de subsistir a todos los que carecen de ellos o para enriquecer a los pobres. El lector lo examinará con más interés que curiosidad. No nos demoramos en él, pero sí nos planteamos la pregunta sobre las convicciones no declaradas de Maldonado, quien llega a escribir que en tanto no se adopte su sistema de reparto de tierras no se logrará su mejor producción, "ni se conseguirá formar con solidez un buen restablecimiento republicano". La ruina de los que conocemos en la historia tuvo su origen, dice, en "la acumulación de la propiedad en pocas manos, como lo ha demostrado el sabio naturalista Bernardino de S. Pedro, con testimonios claros y precisos de Plinio y Estrabón". Maldonado delata la influencia de Saint-Pierre, a quien atribuye el título de naturalista y no otros que convienen más al proyectista que también fue. No lo cita, ¿pero desconoce Maldonado el interés de Rousseau por Saint-Pierre, y su comentario a la *Polysnodie*, y las cartas de 1864 del mismo Rousseau a M. Butta-Foco sobre la legislación de Córcega, exponiendo sus ideas sobre una democracia agraria? Maldonado tampoco menciona el nombre de Jovellanos, cuya autoridad es más próxima.

Mas la presencia de Rousseau la delata el mismo título de su proyecto, y como Reyes Heroles lo advierte, ve "el pacto federal como una continuación o proyección del contrato social, origen de la sociedad política". También señala Reyes Heroles la influencia de Maldonado en Prisciliano Sánchez.[1] ¿Era Maldonado uno de los liberales de Guadalajara, autores del manifiesto federal del 6 de abril de 1823, a que nos referimos en el primer tomo?

En sus preocupaciones sociales Maldonado va más lejos que sus contemporáneos de México y escribe: "aun cuando el territorio de una nación estuviese extremadamente subdividido entre un crecido número de ciudadanos, y aun cuando el sistema de arrendamiento vitalicio encontrare en un gobierno sabio e ilustrado toda la protección enérgica y vigorosa que

[1] Jesús Reyes Heroles, *El liberalismo mexicano*, tomo I, *Los orígenes*, México, 1957, pp. 421-422.

encuentra en el de Inglaterra, no por eso se logrará establecer una buena democracia..., mientras se conservare y no tratare de abolirse por medios suaves y pausados el derecho horrible de la propiedad territorial, perpetua, hereditaria y exclusiva: porque es tal la influencia de este ominoso derecho en el exterminio de la libertad o en la opresión de la clase mercenaria de que se compone la inmensa mayoría de las naciones", que aun la Constitución inglesa, la más admirada, "se ha encontrado ser tiránica o aristocrática, tanto en la alta cámara, como en la baja, por el poderoso influjo que en ella ejercen los propietarios territoriales".

Los intereses de Maldonado exceden en su hora a los que se debaten en la nación y en el Congreso, pero un impacto suyo llegará al Manifiesto de 31 de enero de 1824, en el que el Congreso presenta el Acta Constitutiva de la Federación, aunque involucrado con los precedentes españoles, los ilustrados y los liberales. Si en Maldonado la genealogía de sus ideas es ilustrada, más de una se adelanta en México a su tiempo.

Dejamos en manos del lector el proyecto del doctor Maldonado, que no atendimos en el primer tomo por su carácter excéntrico a los acontecimientos. Pero no podemos ignorarlo como uno de los documentos más singulares de su época. Dos estudiosos, Alfonso Noriega y Ernesto de la Torre, se ocupan del sugestivo proyectista. Sus trabajos, después de los de Paulino Machorro Narváez —1938—, y Alfredo Corona Ibarra —1960— serán los que a siglo y medio se ocuparán de su obra.

Concebimos los proyectos y las constituciones revolucionarias como los programas ideológicos posibles de sus autores. En la condición de posibilidad va implícita la reserva que impone ésta a las convicciones últimas de los autores ante una realidad, y no otra, que se proponen revolucionar.

¿Cuáles son esas convicciones últimas de Francisco Severo Maldonado, las que dictan entre otros sus juicios sobre la propiedad territorial? ¿En los proyectos federales, y concretamente en el del Acta Constitutiva, cuáles son, nos preguntamos, las de un Lucas Alamán que concurre con la opinión del gobierno a las sesiones de su comisión redactora? Podemos multiplicar las preguntas.

La relación entre la convicción revolucionaria liberal y la realidad la ve Miguel Ramos Arizpe y la expone a Lucas Alamán en su carta de 13 de septiembre de 1821 desde París: "Puede V. asegurar a todos, que si no bastan las pruebas que les he dado de consideración y deferencia a la opinión de la mayoría, que me exijan las que quieran, pues siempre obraré por lo que la mayoría con *conocimiento y libertad opine*". Las cursivas son nuestras. La profesión de fe liberal se complementa con una confesión. Repetimos una cita. "El mundo ha de ser mundo —escribe dos líneas antes Ramos Arizpe—, y el hombre que piensa en librarlo de todos los males antes de la segunda venida del Mesías, se engaña: a lo más que podemos aspirar es a disminuir los que existen y evitar que se multipliquen. Esto he procurado yo en cuarenta y siete años de edad para todos los hombres, particularmente españoles, y más los once años que he tenido por obligación hacerlo de un modo tan obligante".[2]

Ramos Arizpe escribe al salir de la aleccionadora experiencia de la revolución liberal en España, y de la gran frustración de los diputados americanos. Con la independencia america-

[2] Lucas Alamán, *Historia de México*, México, 1942, p. 956.

na, y la de México, la historia ofrece una nueva posibilidad inédita, la de inaugurar un nuevo mundo. La nación, México, sea cualquiera la objeción teórica, como entidad política titular de su soberanía se halla en estado de naturaleza. La coyuntura revolucionaria para constituirla es original, y así lo van declarando los pronunciamientos republicanos federales. La moderación de Ramos Arizpe ya no sólo le dicta aspirar a "disminuir (los males) y evitar que se multipliquen". Mas los intereses, las preocupaciones, los hábitos inveterados del antiguo régimen colonial, los partidos que se gestan, las facciones que se combaten y alían confusamente, no pueden desaparecer por un exorcismo.

No obstante, la nación debe y puede fundarse. "El Congreso no puede reunir las ideas —se expresa en su Manifiesto de 31 de enero que presenta el Acta Constitutiva a la nación—, que separan catorce años de revolución, sin asombrarse de haber llegado a su término, a que apenas podía aspirar el deseo más atrevido". Yacía la nación en un letargo mortal, continúa el Manifiesto; "los elementos del despotismo amalgamados con los de su existencia, constituían su naturaleza, de manera que parecía imposible separarlos sin destruirla: las instituciones encadenaban aun el pensamiento más escondido: la acumulación inmensa de la propiedad territorial, si por una parte prescribía un círculo demasiado estrecho a los progresos de la agricultura, y de consiguiente a la población, por otra reducía a la nación mexicana a una nación de jornaleros y mendigos... el sistema de educación era el de máximas más propias para sostener la opresión, la superstición y el fanatismo". El manifiesto reitera la condenación del régimen colonial, contra el que en "un pueblo antes desconocido, y ahora célebre en los fastos del Anáhuac se lanza un grito sonoro de libertad", que se propaga por toda la nación.

Pero "los efectos de la tiranía se sienten mucho tiempo después de que ha sido destruida". Ella es la que intentó sobrevivir bajo el imperio. La nación se decide entonces por la república federal. Sus nuevos diputados "se han reunido, desde luego os presentan una Acta Federal, que si es por una parte la primicia de sus trabajos y la prenda de su fidelidad, es por otra el término de la revolución. *Sí* —dice y subraya el Manifiesto—, *la revolución está terminada*... Más allá de la federación sólo se descubre la anarquía; el retroceso conduce al despotismo".

"Sería un error peligroso persuadirse —advierte el documento—, que en el sistema de federación deben las instituciones elevarse de un golpe al más alto grado de perfección posible; no, este sistema en razón de federado es adoptable con más o menos propiedad, desde una colección de monarcas absolutos, como el de Alemania, hasta una república, que hayan llegado al grado más elevado de ilustración y de virtud, de que sea capaz la humana naturaleza. Al Congreso general y a los particulares toca elegir el más adaptable a nuestro estado actual de patriotismo, de virtudes y de civilización".

La revolución funda la república como federal, pero el Constituyente no dogmatiza. La victoria está animada de una radical prudencia. Previniendo contra *los enemigos de la libertad*, el Congreso llama la atención sobre *los más astutos* que "se encubrirán con la capa de federalismo, (y) os dirán que el Acta está muy imperfecta, reclamarán los derechos de los Estados, os analizará de varias maneras la federación; pero todos sus argumentos pueden desvanecerse con una sola indicación: mostradles a los Estados Unidos del Norte: decidles que habéis quedado satisfechos de veros elevados al nivel de esa floreciente república: que la perfección no es dada a las obras de los hombres; que el sistema federal no está atado a un punto fijo, del cual

no puede pasarse: que la mayor de sus ventajas consiste en la facilidad de desplegarse en proporción de los progresos que el espíritu humano hiciere en la obra de la legislación...".

El proyecto definitivo del Acta Constitucional, del que Ramos Arizpe circula un plan previo "muy rebajado en sus opiniones" desde antes del 12 de noviembre de 1823, según el testimonio del doctor Mier, se concluye en un trabajo colectivo de elaboración para someterlo al debate del Constituyente. Que la fórmula es feliz lo corroboran, como lo exponemos en el primer tomo, los términos en que subsiste en su aprobación.

Las convicciones últimas de Ramos Arizpe, las de los federalistas victoriosos, al fundar la república dejan el debate abierto en la historia para "desplegarse en proporción de los progresos que el espíritu humano hiciere en la obra de la legislación".

No acudiremos a un juicio apologético.

El más autorizado impugnador del liberalismo y la federación, Lucas Alamán, escribirá en 1853, 30 años más tarde: "Justo es decir, en elogio del constituyente, que de cuantos Congresos ha tenido la nación, no sólo fue el único que hizo mucho en poco tiempo, sino también que supuesta la base de federación que se vio obligado a admitir, es el que ha obrado con más tino que el que han mostrado el que le precedió y los que le han seguido".[3] ¿Alamán rinde tributo malicioso a lo que el Congreso no hizo? En todo caso no lo regatea a lo que concluyó.

La subversión definitiva del principio de legitimidad del antiguo régimen se consuma en el ejercicio de la soberanía por la nación al constituir la república federal. Su inauguración es la liberación, también definitiva, de la condicionalidad impuesta en el episodio de la consumación de nuestra independencia.

El proyecto que decidió el ser político de México, a siglo y medio y como lo declaró el Congreso, es vigente para "desplegarse en proporción a los progresos que el espíritu humano hiciere en la obra de la legislación".

[3] *Ibid.*, p. 753.

I

CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO O PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO

POR ANTONIO JOSÉ VALDÉS,
INDIVIDUO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONGRESO.

MÉXICO, 1822

CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO O PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO,

presentado a la comisión actual de constitución por el Sr. Valdés, como individuo de dicha comisión. Publícase con el fin de excitar el patriotismo de los hombres ilustrados en asunto tan interesante.

TÍTULO I
Del poder legislativo y su organización

CAPÍTULO I
Del poder legislativo en general

ART. 1. La soberanía, fuente de toda legislación, reside radical e imprescriptiblemente en la nación, y su ejercicio en sus representantes, según prescribe la constitución.

ART. 2. Siendo representativa la constitución del imperio, el poder legislativo reside en un congreso, compuesto de un senado y una cámara de representantes, y en la sanción del emperador.

ART. 3. El pueblo mexicano no puede ejercer por sí otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones con arreglo a constitución.

ART. 4. Ninguna ley tendrá autoridad constitucional, ni deberá ser obedecida, sin la aprobación del senado, de la cámara de representantes, y la sanción del monarca.

ART. 5. Un proyecto de ley propuesto por el emperador podrá ser presentado en el senado, o en la cámara de representantes; pero si es sobre imposiciones, deberá presentarse necesariamente en esta última.

ART. 6. Un proyecto de ley sobre contribuciones, aprobado en la cámara de representantes, no podrá ser alterado por el senado; éste se limitará a adoptarle o desecharle simplemente.

ART. 7. Ninguna contribución, sea directa o indirecta, o de cualesquiera otra denominación, deberá pagarse por ningún individuo del imperio, sin el previo consentimiento de la cámara de representantes; y ésta no podrá acordarla sino por seis años a lo más, siendo necesario un nuevo acuerdo de la cámara, para que las contribuciones puedan tener efecto.

ART. 8. Ninguna ley sobre contribuciones podrá ser presentada por el senado.

ART. 9. Cualquier proyecto de ley, que no sea sobre impuestos, podrá ser presentado por el senado o por la cámara de representantes; pero una vez aprobado por cualesquiera de esas

dos secciones de la legislatura, deberá pasar a la otra, para obtener igual aprobación, antes de que se envíe a la sanción del monarca.

ART. 10. Si una ley es desechada por el senado, o por la cámara de representantes, o no sancionada por el monarca, no podrá ser propuesta nuevamente hasta otra legislatura.

ART. 11. Cada legislatura será por el término de dos años, y las sesiones durarán tres meses consecutivos en cada uno de los dos años; a no ser que el emperador tenga a bien prorrogarlas uno o dos meses a lo más.

ART. 12. Cada cámara tiene la facultad de calificar las elecciones, derechos y títulos de sus miembros.

ART. 13. Cada cámara está autorizada para exigir la asistencia de sus miembros ausentes, bajo de áquellas penas que juzgue conveniente imponerles.

ART. 14. Durante el tiempo prescrito en el artículo 11, ninguna cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin el consentimiento de la otra y del emperador.

ART. 15. Las sesiones del senado y de la cámara de representantes serán públicas; pero a petición de diez miembros podrán convertirse en sesión secreta.

ART. 16. Toda petición o representación hecha por un individuo o corporación a cualquiera de las dos cámaras, será necesariamente por escrito.

CAPÍTULO II
Del emperador

ART. 17. El emperador, como jefe supremo y conservador del estado, es una parte esencial del poder legislativo.

ART. 18. El emperador tiene la iniciativa de la ley, lo mismo que las otras dos secciones de la legislatura

ART. 19. Toca al emperador formar los reglamentos y órdenes necesarias para la ejecución de las leyes y la seguridad del estado, oyendo previamente al consejo de estado.

ART. 20. Sólo el emperador sanciona y promulga la ley.

ART. 21. El emperador deberá sancionar o volver una ley dentro de treinta días contados desde la fecha en que se le presentó.

ART. 22. Da el emperador la sanción por esta fórmula: *publíquese como ley.* La niega por esta otra: *vuelva al congreso.* Y se devolverá a la cámara donde tuvo su origen, con los fundamentos que apoyen la negativa.

ART. 23. El emperador promulgará las leyes bajo la fórmula siguiente: N. (aquí el nombre del monarca) por la Divina Providencia y por la constitución del imperio, emperador de Méjico, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed, que el senado y cámara de representantes han decretado, y nos sancionamos lo siguiente: (aquí el texto íntegro de la ley). Por tanto es nuestra voluntad que se publique, circule y observe como ley del imperio (aquí la fecha, la firma, y la dirección al secretario respectivo.)

ART. 24. El emperador convoca anualmente las dos cámaras, las prorroga, según el artículo 11, y puede disolver la de representantes. Pero en este caso debe llamar otra nueva para el año subsecuente, y ésta no podrá ser disuelta en el primer año de su legislatura.

ART. 25. Si alguno le aconsejare contra las dos últimas disposiciones antecedentes, será tenido por traidor y perseguido como tal.

CAPÍTULO III
Del senado

ART. 26. El senado es un cuerpo permanente, esencial en el poder legislativo, y sus individuos son llamados por sus clases, oficios o elecciones, como se expresa en el artículo siguiente.

ART. 27. Se compondrá el senado: 1. de los príncipes del imperio que tengan veinte y cinco años cumplidos; 2. de todos los arzobispos del imperio; 3. de veinte y cuatro individuos nombrados por el emperador entre los secretarios del despacho, los consejeros de estado, los obispos, los embajadores, los generales del imperio, los títulos, los intendentes, y los ministros togados; 4. de un senador por cada provincia nombrado cada quinquenio por la diputación provincial, entre los hacendados, comerciantes, mineros, letrados y eclesiásticos.

ART. 28. Para ser senador de provincia, además de las calidades expresadas, es necesario ser ciudadano del imperio, con residencia por lo menos de cinco años, y gozar de una renta suficiente para vivir decorosamente.

ART. 29. Nadie podrá ser nombrado senador, si no tiene treinta años cumplidos.

ART. 30. Excepto los senadores de provincia, esta dignidad será vitalicia, y no se podrá privar a ningún senador del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de sentencia legalmente pronunciada.

ART. 31. El presidente del senado será nombrado por el emperador, sobre una lista de doce senadores, que le presentará el senado en cada legislatura.

ART. 32. Habrá dos vicepresidentes elegidos a pluralidad absoluta en cada legislatura de entre el número total de los senadores.

ART. 33. Habrá cuatro secretarios nombrados a pluralidad absoluta en la primera sesión de cada año.

ART. 34. El senado se dividirá en seis grandes secciones, que se denominarán:

De observancia de la constitución.

De justicia y negocios eclesiásticos.

De lo interior y relaciones exteriores.

De hacienda y estadística.

De guerra y marina.

De instrucción pública.

ART. 35. El tratamiento del senado será impersonal, y sus individuos tendrá el de excelencia, sin perjuicio de otro mayor que gocen por otro título.

ART. 36. El senado no podrá tener sesiones cuando se halle disuelta la cámara de representantes, excepto si se convoca de orden del emperador. Cualesquiera acuerdo en contravención de este artículo es absolutamente nulo.

ART. 37. Toca al senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de la im[prenta].

ART. 38. En caso de sublevación a mano armada, o de inquietud que comprometa la seguridad del estado, el senado, a propuesta del emperador, podrá suspender por seis meses a lo más alguno o algunos artículos de la constitución, sea en todo el imperio o en lugares determinados.

ART. 39. El senado conoce exclusivamente de las causas de las personas imperiales, de las de los ministros, de las de los consejeros de estado, de las de los individuos del supremo tribunal de justicia, de las de sus propios miembros, y de las de los representantes de las provincias.

CAPÍTULO IV
De la cámara de representantes

ART. 40. La cámara de representantes se compone de los diputados de las provincias, elegidos a razón de un representante por cada cien mil habitantes.

ART. 41. Si después de hecha la elección en razón del artículo anterior, sobraren más de cincuenta mil habitantes, se nombrará otro representante.

ART. 42. La cámara se renovará cada dos años en su totalidad.

ART. 43. Para ser individuo de la cámara de representantes es menester ser ciudadano mexicano, haber cumplido veinte y cinco años de edad, haber sido durante cinco años vecino del imperio, ser en la actualidad vecino de la provincia de la elección, y gozar de un capital que no baje de diez mil pesos, o de un sueldo de dos mil pesos a lo menos, pagado por el estado, o bien de una profesión científica, capaz de producir la suma indicada.

ART. 44. Si no se encontraren en la provincia sujetos idóneos de la edad prescrita, que gocen del capital de diez mil pesos, el número se completará con los sujetos mas hábiles bajo el capital señalado.

ART. 45. Los representantes gozarán, sin embargo, de una compensación pagada por sus provincias, a juicio de la diputación provincial.

ART. 46. Los electores de provincia deberán gozar de un capital de mil pesos a lo menos, para tener derecho de sufragio, o de un sueldo de más de quinientos pesos pagado por el estado, o bien de una profesión, industria o arte, que les produzca la suma requerida.

ART. 47. Ningún individuo podrá ser reelegido, hasta seis años después de haber desempeñado el cargo de representante.

ART. 48. En la primera sesión de cada legislatura, la cámara de representantes presentará al emperador una terna triple, para que de ella elija un presidente y dos vicepresidentes, que lo serán para todo el tiempo de la legislatura.

ART. 49. La cámara elegirá en la primera sesión de cada año cuatro secretarios y cuatro vicesecretarios a pluralidad absoluta,

ART. 50. La cámara se dividirá en las mismas seis sesiones que se divide el senado.

ART. 51. El tratamiento de la cámara de representantes será impersonal, su presidente tendrá el de excelencia, y sus demás miembros el de señoría.

ART. 52. Desde el momento de la elección y dos meses después de cada legislatura, ningún representante podrá ser demandado por causas civiles, ni ejecutado por deudas.

ART. 53. Los representantes son inviolables por sus opiniones, y en causas criminales no podrán ser juzgados sino por el senado.

ART. 54. Durante el tiempo de su diputación, ningún representante podrá admitir para sí ni solicitar para otro empleo alguno de provisión del gobierno, como no sea de escala en su respectiva carrera.

ART. 55. La cámara de representantes tiene el derecho exclusivo de acusación, en los términos prescritos en los siguientes artículos.

ART. 56. La cámara no podrá declarar a ningún funcionario público en estado de acusación, si no concurren las dos terceras partes de los diputados presentes.

ART. 57. Cualesquier funcionario que sea declarado en estado de acusación, se suspenderá por el emperador del empleo u oficio público que ejerza, y la acusación fundada pasará en el acto al juicio del senado.

ART. 58. La cámara no puede acusar a ningún funcionario público, sino por crímenes de traición o de concusión.

NOTA

Parece que otros señores han presentado otros fragmentos, tales como el poder electoral, el ejecutivo, el judicial, los que, discutidos, combinados y acordados por la comision, formarán el proyecto de constitución del imperio.

México, 1822.
Imprenta Imperial del Sr. D. Alejandro Valdés.

II

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

PRESENTADO A LA COMISIÓN DE ELLA POR UNO DE LOS INDIVIDUOS QUE LA COMPONEN

[ATRIBUIDO A MIGUEL GURIDI Y ALCOCER].

MÉXICO, 1822

Oficina de D. José María Ramos Palomera

PROSPECTO O DISCURSO PREÁMBULO

Cuando se quiere formar la Constitución de México, Imperio que se presenta de nuevo con este nombre y carácter, claro está que no se trata de adaptar para acomodarle la Constitución de otra nación: porque así como un hombre no quedaría desnudo si se le apropiase el vestido ageno alargándolo o acortándolo, ensanchándolo o restringiéndolo con proporción a sus dimensiones; pero sería lo mejor y aparecería más decente con el que se hiciese destinadamente para él desde su principio: del mismo modo será mejor y se tendrá por más decorosa al Imperio una Constitución que se forme de nuevo como corresponde al aspecto con que ahora aparece a la faz del mundo, que no cualquiera otra acomodaticia que se le aplicase.

Esto no carecería del olor, cuando menos, de plagio, aunque muy disculpable en asunto en que es preciso coincidir con los demás pueblos del orbe, por ser unos mismos los derechos de todos los hombres, y unos mismos los principios de razón por que deben gobernarse. Con todo siempre pareció conveniente formar una Constitución peculiar del Imperio, que aunque coincida con las demás en la substancia, esta conveniencia será lo que la conformidad de un vestido con la moda de los otros, circunstancia que no destruye la cualidad de nuevo, ni se dice por eso que no se hizo para el que lo estrena aunque se asemeje al que usan otros.

Para llenar en nuestra Constitución semejante designio, es necesario remontarse hasta el origen del derecho público y conducir desde la fuente primordial las aguas puras que han de regar nuestro plantel de legislación. El pacto social que se supone celebrado entre la sociedad y sus miembros es el primer principio de que se deducen comúnmente las máximas del derecho público. Otros que no se allanan a esas ideas o suposiciones, que para explicarse han adoptado los jurisconsultos, deducen de la semejanza de la autoridad paterna la suprema de un estado, considerando a cada nación como una gran familia y al jefe o cabeza de ella como a un padre encargado de su régimen y cuidado.

Pero en cualquiera de los dos modos de expresarse que se elija, es preciso admitir ciertas relaciones entre la potestad suprema del estado y los individuos de él, que los enlazan con obligaciones recíprocas y les producen sus respectivos derechos. El pacto social causa en la potestad suprema su dignidad, primacía y facultad de mandar con la obligación de hacer la felicidad común de los individuos, pues se supone que éstos se han despojado de su libertad natural y sujetádose a ella con el fin de que procurase su prosperidad. Por la misma razón y en virtud del pacto nace en ellos la obligación de obedecer y el derecho de que se cuide de su conservación y tranquilidad. La semejanza de la autoridad paterna tiene los mismos efectos, pues si el padre es quien rige y lleva la voz en la familia, es también el que la sustenta y educa, disponiendo a cada uno de los hijos el giro y destino que le conviene o para que lo concibe proporcionado.

Es, pues, muy natural conforme a lo expuesto, y siendo la Constitución el semillero de las demás leyes, las columnas sobre que se levanta el cuerpo de la legislación, los cimientos de todo el edificio y como un prontuario de las reglas de derecho de que deben ser consecuencias más o menos largas a proporción de sus distancias cuantas leyes formen nuestros códigos, es natural, repito, tener siempre a la vista los insinuados principios de que debemos partir, y coordinar conforme a ellos las ideas. Según este método y para abarcar en una breve Constitución, que por sentado no debe ser difusa, los grandes objetos a que se dirige, pareció dividirla tratando primero de la sociedad en la que reside la autoridad suprema o soberanía, y después de sus miembros detallando los respectivos derechos y deberes de éstos y de aquélla.

Esta división pareció la más acomodada a la ilustración del día y a la materia de que se trata. Porque, si otras divisiones, como la del derecho canónico en jueces, juicios, clero, esponsales y delitos; la del derecho romano en personas, cosas y acciones; la de las siete partidas en lo perteneciente a Dios y lo perteneciente a los hombres, con otras muchas que se omiten por evitar prolijidad, y que en substancia se reducen a ellas, son muy buenas para las leyes comunes cuyos cuerpos forzosamente deben ser abultados, no pueden adaptarse a las fundamentales, cuya brevedad debe añadirse a su consistencia, exigiendo una y otra remontarse a los primeros principios de derecho que son los más robustos al mismo tiempo que los más sencillos.

La cultura del siglo ve como origen de la legislación al pacto social, al que han acomodado sus respectivas constituciones las naciones ilustradas, mirándolas como murallas que ponen a cubierto las libertades de los pueblos contra el despotismo y tiranía y reduciéndolo todo a organizar los poderes con tal enlace y equilibrio entre sí, que ayudándose mutuamente para obrar la prosperidad, se embaracen los unos a los otros para producir el mal. Su división general viene, pues, a consistir en la de los poderes, como aparece en las constituciones inglesa, francesa y española con las de Nápoles y Portugal que la han imitado, y en las del Norte y Sur de América que han llegado a nuestras manos.

De aquí se deduce que siendo el principio dicho pacto y el fin la prosperidad pública, la división más propia es la que se tome del pacto mismo con relación al término insinuado. Tal es la que nos hemos propuesto, porque los pactantes que son la sociedad y sus individuos, tienen sus derechos y sus obligaciones naciendo de la observancia de éstas y de la conservación y defensa de aquéllos la felicidad a que se aspira, y habiendo tal enlace entre unas y otras, que los derechos de uno de los pactantes tienen por correlativas las obligaciones del otro. Si la sociedad tiene derecho a mandar, es preciso que los individuos estén obligados a obedecer y si éstos tienen derecho a que no se dañen sus personas y sus bienes, se obliga la sociedad a defenderlos. De manera que los derechos y poderes de la soberanía exigen las contribuciones y servicios de los súbditos, y los derechos de éstos demandan la tuición de la potestad suprema que ellos mismos constituyen con ese fin cediendo cada uno lo que corresponde para su consecución. Y he aquí el fundamento por qué se ha dividido la Constitución conforme a los pactantes, de cuyo contrato social se deriva todo.

En las dos partes expresadas se resume cuanto concierne a las leyes fundamentales y guardan entre sí la mayor armonía. La primera se intitula de la sociedad y se parte en cuatro títulos, reduciéndose el primero a sus derechos y deberes, y los tres restantes a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La segunda parte es de los miembros de la sociedad y se divide en

cuatro títulos; el primero de los ciudadanos y sus derechos; los restantes comprenden sus deberes que son sostener las cargas del Estado contribuyendo para ellas, defenderlo con las armas y tener la instrucción necesaria para llenar sus obligaciones, por lo que se intitularán de hacienda, de la fuerza armada y de la instrucción pública. Los títulos se dividen en capítulos y éstos en artículos guardando una enumeración constante desde el principio hasta el fin de ellos para ahorrar en las citas las referencias a los capítulos y títulos, los que sólo sirven para mayor claridad de la materia.

Decididos a la planta y división que habíamos de seguir, era indispensable comenzar por la invocación de Dios tan recomendada en las Santas Escrituras al principio de cualquiera obra; y que se ordena a protestar nuestra religión, a tributar al Señor el homenaje de nuestro reconocimiento y a implorar sus auxilios para el acierto. Por los dos primeros respetos de protesta y reconocimiento se expresó el mayor, o por mejor decir, el misterio de los misterios con la brevedad de palabras conveniente a la majestad de la obra, y por el último de atraernos los auxilios, de conformidad con la práctica de la Iglesia de mencionar en sus oraciones el atributo o hecho que tiene conexión con lo que se implora, se expresó ser Dios el autor de la sociedad, de los derechos y del discernimiento de lo justo, a cuyo fin se imploran sus luces para constituir nuestro gobierno y afianzar nuestro derecho.

El exordio para sacarse de las entrañas del asunto y que lo designase de un golpe, debía tomarse de la materia misma que se trata, aludiendo a la sazón en que se hace que es cuando se ha conseguido la independencia, y al fin a que se dirige y reconocen en la legislación los publicistas, que lo son la conservación y tranquilidad.

Las razones que se han tenido para extender el proyecto en la forma que se presenta y las que apoyan sus artículos, ministran materia a un prolijo discurso con que no debe por ahora cansarse la atención, mayormente cuando será necesario vaciarlas en la discusión; pero es preciso para obviar ésta en mucha parte anticipar algunas de lo que puede extrañarse a primera vista.

Tal es el tono doctrinal con que se vierten algunas cosas explicándolas o definiéndolas, lo que parecerá a algunos ser propio del estilo didascálico. Pero a más de los innumerables ejemplares que ministran todas las leyes, en especial las de partida y que recomiendan su claridad e inteligencia. Pareció convenir a la Constitución que debe andar en las manos de todos y ser a un mismo tiempo código y cartilla, lo primero para el régimen y lo segundo para la instrucción.

La brevedad que demanda por estas razones y la de que se aprenda por todos, persuadió a separar de ella lo puramente reglamentario, como es el modo de hacer las elecciones populares, el de regirse el Consejo de Estado, Juntas provinciales y Ayuntamientos con otras que se citan en sus artículos. Esto no carece tampoco de ejemplar, pues en la constitución francesa se separó de ella la ley sobre elecciones que corre a su continuación, y en la española se formaron por separado el reglamento del Consejo de Estado, el de los Ministros del Despacho, el de las Juntas Provinciales y Ayuntamientos, etc. Esto trae además la ventaja de que no siendo artículos constitucionales los de los reglamentos, no necesitan para derogarse de todos los requisitos que aquéllos; pero la principal es que no se lea en la Constitución sino lo que la es característico que son las máximas primordiales y fundamentales de la legislación y la felicidad, como por ejemplo, que las elecciones han de ser populares, dejando a los reglamentos los

días y modo en que han de hacerse, con lo demás que pertenece a los accidentes más que a la substancia de la materia.

No son así los requisitos que se han expresado en los electores y los que se elijan para Diputados. En unos y otros se exige alguna propiedad para afianzar el acierto en las elecciones; porque no hay duda que quien nada posee, no tendrá embarazo en elegir a cualquiera, y si el mismo sale electo, sobre que no será muy grande su patriotismo, poco le importará una ley gravosa o una contribución pesada porque nada tiene que perder. No así el pobre de vasta erudición, en quien sus conocimientos y raciocinio producen el efecto que sus intereses en el rico para amar a la patria y puede aprovecharla mucho con sus luces.

Con el mismo designio de evitar esa facilidad que pueden tener algunos para elegir a cualquiera y que da lugar a las intrigas que no será mucho se promuevan por intereses privados, se han suspendido los derechos de ciudadano a los deudores, sirvientes domésticos, vagos y mal entretenidos como gente que es fácil corromper y atraer a un partido que se forme, si tuvieran voto en las elecciones.

Mas como puede suceder que a pesar de las precauciones insinuadas prevalezca en las elecciones alguna intriga o partido, pues siempre es más fecunda la malicia que la provisión; para que no dañe él ni cualquiera otro que se forme en el Congreso mismo, pareció indispensable una sala de revisión en la que se templase el ardor de una discusión acalorada, se desvaneciese la ilusión de una elocuencia seductora y se estrellase el espíritu de parcialidad o facción de los diputados. Igual medida está adoptada en otras constituciones, especialmente en la inglesa y francesa, mas no conviniendo entre nosotros ni aprobándose generalmente la división de cámaras alta y baja por componerse la primera de individuos natos por razón de sus clases en las que tiene tanto influjo el Gobierno, se ha tenido por más acertado que los miembros de dicha sala se elijan popularmente de entre hombres maduros de edad de cuarenta años para arriba, que son los que están menos sujetos a las pasiones comunes, y que en caso de dañar, no tendrán de qué quejarse los pueblos que los ponen a su arbitrio.

Los estamentos o brazos del Estado, sean cuales fueren las bases sobre que se monten de nobleza, empleos o jerarquías, tienen contra sí para el efecto de incluirse indistintamente por solos esos títulos en el poder legislativo, a más de la razón insinuada del influjo del Gobierno, pudiendo el Monarca hacer grandes o prelados a algunos perversos que serían hechuras con que contaría, el pugnar con la naturaleza misma del gobierno representativo. ¿Qué cosa más contraria a él como que represente alguno los derechos de otros sin su voluntad, la que sólo podrá verificarse en el método de elecciones? Ellas al mismo tiempo estimulan al desempeño a los electos por la confianza que se hace de sus personas, y por otra parte a nadie se perjudica, cuando todos los pertenecientes a los estamentos se comprenden en la masa de la nación en donde disfrutan de la voz activa y pasiva que recaerá en ellos teniendo a juicio de sus conciudadanos la ilustración, probidad, patriotismo y demás dotes que recomiendan a los representantes. Nosotros no hemos exigido para la sala de revisión sobre aquéllas, sino la madurez de edad que ha hecho tan apreciable al Consejo de los ancianos adoptado en varias naciones en lo antiguo y lo moderno.

Si se ha añadido que tengan con qué subsistir sin necesidad de dietas, ha sido con la mira de no gravar a los pueblos y por parecernos no es su trabajo tan grande como el de los Diputados. Y a fin de reducir su número al menor posible dentro de la esfera de lo bastante, se

ha arreglado al de las provincias, bastándole a cada una un individuo instruido en sus intereses para que reclame la ley que pueda perjudicarle. Las instrucciones que cada una dé a su respectivo nombrado, lo pondrán en aptitud de calificar lo que la dañe, decidiéndolo a obrar en su beneficio la insinuada confianza, la que por la satisfacción que precisamente causa, producirá también la remuneración de sus tareas. Pareció igualmente justo que el Gobierno también nombrase algunos vocales de la sala por la parte que le toca en las leyes, y no debiendo él ceñirse a las calidades de nacimiento o vecindad en esta o en la otra provincia, se prescindió de semejantes trabas en lo general, por lo que cada junta electoral podrá escoger de los mejores sujetos del Imperio, y tal vez, si le conviniere, de los radicados en la Capital, lo que facilitará su desempeño.

La distinción de ley, decreto y orden en que se han partido las resoluciones del Congreso y que es otra de las especies que pueden extrañarse a primera vista, se creyó conveniente y conforme a los principios jurídicos y a las ideas de la legislación. Reducirlas todas a una clase siendo diversas entre sí sería un absurdo, cuando menos, opuesto a la claridad y al buen régimen. Los romanos, como saben todos, daban diferentes nombres a las resoluciones que dimanaban de la autoridad de su república, ejemplo que indemniza de éxotico el partido que abrazamos, y que se hará aun más perceptible con la siguiente reflexión.

Además de la diferencia de los objetos, como que una resolución se verse sobre hacienda o sobre delitos o hay otra transcendental a todas las materias y que es preciso no perderla de vista aunque no sea sino para el efecto del modo de establecerse y derogarse. Hay unas resoluciones que se extienden a todas las personas, y otras que sólo tomará una porción de ellas. Hay unas que se establecen para siempre o por un tiempo indefinido y deben durar hasta que se deroguen; y otras que se dictan para tiempo determinado el que concluido cesan. Son, pues, unas generales y otras parciales, unas perpetuas y otras temporales, y no es bien confundirlas, cuando es indudable exige más cuidado y solemnidad lo que toca a todos que lo que no se extiende a tanto, y más lo que ha de durar siempre, que lo pasajero y transitorio.

En esta atención aunque se llame ley la resolución general y perpetua, no conviene con igual propiedad semejante nombre a la que se ciñe a mucho menor número de personas como la que se dicta para una universidad o colegio, o para una sola junta o ayuntamiento, en cuyo caso aunque sea perpetua, pareció bastante el nombre de decreto que expresa la determinación de una autoridad suprema sin que signifique la calidad de común o universal que es más propia de la ley aun por sola su etimología de leer o de ligar según diversas opiniones, pues debe leerse por más y liga a muchos más. Si falta a la resolución la perpetuidad aunque tal vez sea general, sobrará llamarla orden, que significa un mandato que debe obedecerse mientras dura. De suerte que para simplificar las ideas puede asentarse que la resolución a la cual falta la perpetuidad, sea general o parcial, se llame *orden*, si le falta la generalidad, o sea perpetua o temporal, se llame *decreto*, y si tiene las dos calidades de generalidad, y perpetuidad, se llame ley.

En orden a las milicias no se ha conservado el apelativo nacionales usado hasta aquí, lo que tal vez chocará a primera vista, por ser común a las que es indispensable adoptar. Supuesto no se ha de mantener en tiempo de paz todo el número de tropa de línea que se necesita en el de guerra, sino que se ha de disolver en milicias de donde se vuelva a formar cuando sea precisa, y supuesto ha de haber además milicias en cada pueblo, no deben con-

fundirse éstas con aquéllas, pues de las primeras podrá disponer el Emperador absolutamente, y de las segundas no podrá hacerlo fuera de su provincia sin el consentimiento del Congreso. Dándoles a éstas el nombre de nacionales, no se distinguirían de las otras a las que también les conviene como que son todas de la nación. Se llamó, pues, a las primeras imperiales por pertenecer a todo el Imperio, y a las segundas cívicas por ser peculiares de cada ciudad o pueblo.

Con esta explicación de lo que sin ella podía notarse al primer aspecto, es excusado vaciar los fundamentos de cada artículo, que ministran el pacto social, el derecho público, el género de gobierno a que nos hemos contraído y la misma Constitución que nos rige provisionalmente y a que estamos habituados. ¿A qué fin abrir ahora, por ejemplo, una larga disertación de la conveniencia de la monarquía hereditaria sobre la electiva, cuando al discutirse los artículos concernientes, podrán explanarse difusamente? Reservando, pues, para la discusión lo que es propio de ella y lo que dará lugar a cada uno de los Diputados para ejercitar su discurso y aplicar las ideas liberales que animan a todos, no resta a este discurso sino la súplica de que se reciba benignamente un proyecto en que si no se ha conseguido, se ha deseado sobremanera el acierto. Esto es lo único que puede exigirse, no estando lo primero en las manos de todos y pudiendo suplirse por la sabiduría y sobresalientes luces de los miembros del Congreso.

EN EL NOMBRE DE DIOS UNO Y TRINO, AUTOR DE LAS SOCIEDADES Y DERECHOS DEL HOMBRE, Y POR QUIEN LOS LEGISLADORES DISCIERNEN LO JUSTO, EL CONGRESO NACIONAL MEXICANO DECRETA LA SIGUIENTE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL IMPERIO MEXICANO

Como el fin de la sociedad es el bien común que no puede conseguirse sin arreglar el orden y relaciones entre ella y sus individuos, esto es a lo que se terminan nuestras leyes fundamentales lograda nuestra independencia que queremos conservar con tranquilidad.

PARTE PRIMERA
De la sociedad

TÍTULO PRIMERO
De sus derechos y deberes

ARTÍCULO. 1. La Nación mexicana es la sociedad que resulta del conjunto y reunión de los habitantes del territorio de México.

2. Esta sociedad es la autoridad suprema o soberana del Estado, de la que participan como miembros de ella, todos los ciudadanos que la componen, y a la que sin distinción se sujeta cada uno como súbdito, por ser inferior a ella.

3. Esta sociedad es independiente de las demás naciones, como que no recibe de ellas sino de sus propios miembros su autoridad cediéndole cada uno su libertad natural, para que ella se dedique a la felicidad común que debe ser su fin y es la razón de la cesión.

4. Para llenar el fin de la felicidad común debe proteger la religión, gobernar dividiendo sus poderes y conservar los derechos legítimos de los individuos de que consta.

5. La religión del Estado, base fundamental de su felicidad, es la católica, apostólica, romana sin tolerancia de otra alguna en su territorio.

6. El territorio mexicano es el que se comprende bajos los nombres que se han usado hasta ahora de Nueva España, Reyno de Guatemala, Península de Yucatán y Provincias Internas de oriente y occidente, de cuyos partidos, cuando se haga la división conveniente, se hará mención por menor en una ley constitucional.

7. El Gobierno es representativo y la forma de él es una Monarquía moderada hereditaria con el nombre de Imperio.

8. Los poderes de la sociedad, en los que consiste su soberanía, son el legislativo, ejecutivo y judicial, los que no deberá ejercer uniéndolos en una persona o corporación.

TÍTULO SEGUNDO
Del poder legislativo

CAPÍTULO PRIMERO
De los diputados

9. El poder legislativo, que es la facultad de hacer las leyes, se ejercerá por el Congreso nacional, compuesto de los Diputados de los pueblos.

10. Los Diputados se nombrarán por elecciones populares de parroquias, de partidos y de provincias, en la forma que previene el reglamento que irá a continuación.

11. Nadie podrá sufragar en las elecciones para Diputados sin ser ciudadano, estar avecindado en el territorio que elige y poseer allí alguna propiedad raíz del valor de cien pesos lo menos, u oficio, empleo o renta que rinda siquiera trescientos pesos anuales. En los indios basta su profesión de trabajadores del campo, y en todo artesano el ejercicio de su arte.

12. Nadie podrá ser nombrado Diputado sin ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, haber nacido o estar avecindado en la provincia que elige, y poseer una propiedad de valor de quinientos pesos para arriba, u oficio, empleo o renta que le produzca anualmente la misma cantidad, o que haya seguido alguna carrera de letras, en la que se haya distinguido.

13. La vecindad que se requiere para ser elegido Diputado, ha de ser de siete años lo menos.

14. Tampoco podrán ser diputados los Ministros del Despacho ni los Consejeros de Estado, ni los dependientes del Emperador, ni los empleados públicos de nombramiento del Gobierno por la provincia en que lo están, ni los que hayan sido diputados, hasta que no pasen dos años de haber cesado.

15. Cincuenta mil almas es el cupo a que corresponde un diputado, el cual podrá aumentar o disminuir el Congreso, cuando le parezca exigirlo el aumento o disminución de la población, u otra causa.

16. Los Diputados en ningún tiempo ni ante tribunal alguno, son responsables ni pueden ser reconvenidos por sus opiniones políticas expresadas en el Congreso.

17. No pueden igualmente durante su diputación, ser demandados civil ni criminalmente sino ante el tribunal del Congreso, de que habla el reglamento de su gobierno interior.

18. Tampoco pueden obtener empleo, pensión ni gracia alguna del Gobierno en el mismo tiempo y un año después, excepto el que les corresponda por escala, o en que dispense el Congreso por premio de particular mérito, o por utilidad pública.

19. Los Diputados aunque los elijan sus provincias, lo son de la Nación, sin que esto obste el que informen o aleguen por ellas lo que las convenga.

20. Nadie podrá excusarse del encargo de Diputado sin causa legítima de imposibilidad física o moral de servirlo.

21. Si recayesen en una misma persona la elección de la provincia de su nacimiento y la de la provincia de su vecindad, prevalecerá ésta, y por la primera entrará el suplente a quien corresponda.

22. Las provincias, de los fondos públicos de ellas deben expensar a sus Diputados los gastos del viático al lugar del Congreso y retorno a su domicilio, y las dietas para su manutención mientras ejerzan su encargo, las que señalará el Congreso mismo al fin de cada legislatura para la subsecuente. El viático lo regularán las Diputaciones provinciales respectivas.

23. Cada dos años se renovarán en su totalidad los Diputados.

24. El Congreso residirá en la capital del Imperio salvos los casos en que por particulares circunstancias u ocurrencias determine el mismo la residencia temporal en otro lugar.

25. El Congreso no se tendrá por formado sin la concurrencia de más de la mitad de los Diputados que le corresponden, sin cuyo requisito nada podrá resolver.

CAPÍTULO SEGUNDO
De las leyes

26. La iniciativa de las leyes la tienen los Diputados, pues cualquiera puede hacer la proposición que le parezca, la que admitida a discusión y aprobada en los términos que expresan los artículos siguientes, será ley, decreto u orden conforme a su naturaleza: lo primero si es general y perpetua, lo segundo si no es general, y lo tercero si es transitoria.

27. Tiene también dicha iniciativa el Gobierno que como encargado de la administración pública, puede proponer lo que juzgue conveniente al bien de la sociedad, lo que por el mismo hecho de proponerlo se entenderá admitido a discusión de la que resultará su utilidad o conveniencia.

28. Lo que represente cualquiera otro que no sea el Gobierno o alguno de los Diputados, si se diese cuenta al Congreso a juicio de su comisión encargada de este objeto y por su gravedad e importancia lo juzgase digno de consideración, servirá esto de iniciativa para proceder a los trámites ulteriores de una resolución.

29. Lo que votare la pluralidad de los Diputados del Congreso se tendrá por su resolución y pasará a la Sala de revisión.

30. Esta se compondrá de tantos individuos cuantas son las provincias, los que ellas mismas nombrarán sea cual fuere su población, uno cada una y además de otros cuatro nombrados por el Emperador de entre doce que le [pro]pondrá el Consejo de Estado, todos los cuales deben ser ciudadanos de edad de cuarenta años para arriba, con bienes o rentas suficientes para mantenerse pues no han de llevar dietas, a lo menos mientras no las sufran los fondos públicos, y sin necesidad de haber nacido ni estar avecindados en esta o la otra provincia, los que podrán ser reelegidos hasta dos ocasiones sucesivas, después de las cuales deberá pasar el intervalo de dos años. Bien que ellos en las reelecciones cuando no ha pasado dicho intervalo, podrán excusarse por esta sola razón. Cada dos años se harán elecciones de dos vocales de esta Sala, los que estarán obligados a admitir fuera del caso dicho de reelección y del de imposibilidad física o moral de servir. En el evento de recaer en un mismo individuo varias elecciones, estése a lo provenido en el reglamento de ellas.

31. Dicha Sala tiene también la iniciativa de las leyes y podrá proponer al Congreso la que juzgue conveniente.

32. La resolución que pasare a esta Sala, se discutirá en ella y si fuere aprobada por su mayoría, con la constancia de ello se volverá al Congreso el que con la misma constancia la remitirá al Emperador para su sanción, que se extenderá con esta fórmula: *publíquese como ley* y la publicación con ésta: N. por la divina providencia y por la Constitución de la nación Emperador de México, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que el Congreso nacional mexicano ha decretado y nos sancionado lo siguiente (aquí el texto literal de la ley). Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles, como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

33. La resolución que fuere desaprobada por la Sala de revisión, o a la que el emperador no diere la sanción volviéndola con exposición de las razones que ha tenido para ello, no se volverá a reproducir ni tratar de su asunto en el mismo año; pero podrá hacerse en el siguiente si sólo le faltare la sanción del Emperador, y en la próxima legislatura si no tuviere la aprobación de la Sala de revisión.

34. El Emperador podrá negarse a la sanción por dos veces lo que hará en cada una dentro del término de 30 días: pero repitiéndose por tercera ocasión, ya no podrá negarse y la dará en efecto, teniéndose también por concedida en la primera y segunda ocasión si no la devolviese dentro de los 30 días señalados. La Sala de revisión puede desaprobar una resolución del Congreso por dos veces con tal que en cada una discuta de nuevo el asunto. Por la tercera vez sin necesidad de pasarla a la Sala se remitirá al Emperador para su sanción. Tanto la ley como el decreto y orden necesitan de la aprobación de la Sala de revisión; pero solamente la primera requiere la sanción del Emperador. Lo dicho en cuanto a la segunda y tercera ocasión de producirse un proyecto, se entiende siendo cuando más en las dos legislaturas inmediatas a la en que se produjo, pues después de ellas aunque se reproduzca en los propios términos, se tendrá por nuevo en cuanto a los efectos indicados tanto para la aprobación como para la sanción.

35. La interpretación de las leyes y su derogación se hacen de la misma manera que se establecen. Pero si fuere artículo de la constitución el que se tratare derogar, es necesario cuando se proponga, firmen la proposición, lo menos 20 Diputados: que admitida a discusión se declare por dos terceras partes del Congreso haber lugar a tratarse el punto en la legislatura próxima o en la inmediata a ésta, trayendo los Diputados poder especial para ello que les darán las juntas electorales previo mandato del Congreso que circulará a las provincias, y la decisión final requiere también dos terceras partes de los votos y la sanción imperial a más de la aprobación de la Sala de revisión.

CAPÍTULO TERCERO
De la duración del congreso

36. Los dos años en que deben permanecer unos mismos Diputados, componen una legislatura, y el término de sus sesiones en cada año son 3 meses; sin que puedan prolongarse

sino tan sólo otro más cuando lo pida el Emperador, o lo determine el mismo Congreso por una resolución de las dos terceras partes de sus votos.

37. En los intervalos de unas sesiones a otras habrá una Diputación permanente compuesta de 7 individuos del Congreso, nombrados por el mismo a pluralidad absoluta que residirán en la Corte y de que será presidente el primer nombrado y secretario el último. Al fin de las sesiones de cada año se harán estas elecciones y la de dos suplentes que tampoco podrán separarse de la Corte para que remplacen a los que se imposibiliten, debiendo entenderse el remplazo en cuanto a la cualidad de Diputado: pues imposibilitándose el presidente, lo será el segundo nombrado propietario, y si se imposibilita el secretario, pasará este encargo al penúltimo de los propietarios, y así sucesivamente en ambos destinos.

38. La Diputación permanente velará sobre la observancia de la constitución y las leyes para dar cuenta de las infracciones al futuro Congreso. Lo convocará extraordinario, que se compondrá de los mismos individuos del ordinario y que no entenderá sino en los asuntos para que se convoca, cuando por circunstancias críticas o negocios arduos lo pidiere el Emperador, cuando éste se imposibilitare para el gobierno o quisiere abdicar la corona, o ella vacare.

39. A la Diputación permanente se deben presentar los Diputados de la siguiente legislatura y aquélla celebrará las juntas preparatorias que previene el reglamento y abrirá el nuevo Congreso, con lo que concluirá sus funciones dejando el informe sobre infracciones que previene el artículo anterior.

TÍTULO TERCERO
Del poder ejecutivo

CAPÍTULO PRIMERO
Del gobierno político

40. El poder ejecutivo que es la potestad de hacer efectivas o de que se cumplan las leyes, reside en el Gobierno y éste en el Emperador y los subalternos que deben auxiliarlo.

41. Habrá Ministros del Despacho sin cuya autorización no se dará cumplimiento a orden alguna del Emperador.

42. El número de ministros, los negociados que les corresponden, su sueldo y todo lo demás que pertenece a este asunto será materia de un reglamento que por ley separada formará el Congreso.

43. Habrá también un Consejo de Estado con el que consulte el Emperador en los negocios graves y en la provisión de empleos, compuesto de los mayores hombres de la Monarquía, cuyo número, calidades, sueldos, honores y atribuciones constarán en el reglamento que formará igualmente el Congreso.

44. Habrá finalmente un Jefe político en cada provincia para su régimen, que será en ella el agente del gobierno y el órgano de su comunicación con los pueblos. Este Jefe será distin-

to del militar no debiendo unirse ambos encargos en una misma persona si no es en casos extraordinarios en que lo exija la seguridad del Estado a juicio del Emperador de consentimiento del Congreso.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del emperador

45. El Emperador es el Jefe supremo de la Monarquía a quien se subordinan todos los agentes del Gobierno y en quien principalmente brilla la Majestad de la Nación y el esplendor de su pabellón, por lo que le corresponden las preminencias y facultades siguientes.

Primera. Tiene el tratamiento de Majestad Imperial. Segunda. Se graba su busto y nombre en las monedas. Tercera. Se distingue su familia nombrándose Príncipe del Imperio a su inmediato sucesor, y Príncipes mexicanos a sus demás hijos y hermanos, disfrutando todos del tratamiento de Alteza. Cuarta. Se dota su casa señalándose a S.M. y a cada uno de los Príncipes por el Congreso la cantidad anual correspondiente a su alta dignidad. Quinta. Sanciona y promulga las leyes y tiene la iniciativa de ellas. Sexta. Se administra a su nombre la justicia y cuida de que ésta se haga. Séptima. Nombra a su arbitrio los Ministros del Despacho, y a propuesta del Congreso los Consejeros de Estado. Octava. Expide los decretos, reglamentos e instrucciones que juzga conducentes para la ejecución de las leyes. Novena. Nombra los Magistrados y Jueces a consulta del Consejo de Estado. Décima. Presenta para los Obispados, Dignidades y Beneficios eclesiásticos del patronato de la Corona también a propuesta del Consejo de Estado. Undécima. Nombra los Generales y provee las plazas militares del ejército de línea y las de hacienda de todas las oficinas. Décima segunda. Nombra los Jefes políticos, y concede honores y distinciones de toda clase con arreglo a las leyes. Décima tercia. Manda los ejércitos y armadas, y dispone de su fuerza distribuyéndola como mejor le plazca. Décima cuarta. Indulta a los delincuentes. Décima quinta. Concede el pase o retiene los decretos conciliares o bulas pontificias con el consentimiento del Congreso si se versan sobre asuntos generales: si sobre particulares o gubernativos oyendo al Consejo de Estado; y si sobre contenciosos al Tribunal Supremo de justicia. Décima sexta. Nombra los embajadores y enviados y dirige las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias. Décima séptima. Declara la guerra y hace la paz de consentimiento del Congreso. Décima octava. Y con él mismo concede o niega el tránsito o estancia en el Imperio a tropas extranjeras.

Todo lo que no se comprenda en las facultades de este Artículo será un abuso de la autoridad que se precave en varios artículos diseminados y en la fórmula del juramento del Emperador en su advenimiento al trono.

46. La persona del Emperador es inviolable, por lo que en ningún caso incurre en pena aflictiva del cuerpo, ni se sujeta por la falta que tenga en su gobierno obrando contra las leyes, a responsabilidad alguna, la que recae toda en los ministros que firman sus órdenes. Si las faltas fueren de omisión e insistiere en ellas después de tres recuerdos del Congreso, se entenderá que ha abdicado la corona.

CAPÍTULO TERCERO
De la dinastía, sucesión y minoridad del emperador y de los interregnos

47. El Emperador es el Señor Don AGUSTÍN 1o. a quien a solicitud de la tropa y el pueblo nombró el Congreso nacional y han ratificado con señaladas demostraciones de gozo las Provincias, y en lo sucesivo sus herederos legítimos. Extinguida una dinastía la Nación constituirá la que más le convenga para imperar.

48. Luego que nazca el que tenga derecho a suceder en la corona, se reconocerá como Príncipe del Imperio en las primeras sesiones del Congreso que se celebren después del nacimiento. Los hijos del Príncipe del Imperio son también Príncipes mexicanos y se les debe señalar dotación decorosa para su sustento luego que cumplan siete años, lo que se hará igualmente con todo Príncipe, y cuando alguna Princesa case se le asignará en calidad de dote la cantidad que se juzgue decorosa. Dicha dotación es vitalicia con tal que los dotados residan en el Imperio y no casen sin consentimiento del Congreso; pero cesa en las Princesas luego que se las entregue la dote expresada. Se asignará también dotación a la Emperatriz viuda mientras permanezca tal y resida en el Imperio. El Príncipe del Imperio y los demás en cuanto cumplan catorce años, jurarán ante el Congreso la observancia de la Constitución y las leyes y no saldrán del Imperio sin el permiso de aquél, bajo la pena de perder la dotación y el derecho de suceder en el trono, en la que incurrirán saliendo con permiso, si a más del tiempo de él se prolongare la ausencia.

49. La sucesión al trono será por orden regular de primogenitura y representación entre los agnados legítimos de la línea preferente, sin pasar a las posteriores hasta que no se extinga aquélla aunque la falten varones; pues en este caso sucederán las hembras hasta volverse a suscitar la agnación. El marido de la heredera de la corona no tendrá parte alguna en el gobierno.

50. Mientras subsista el matrimonio del Emperador y la esperanza de heredero varón, no se hará el reconocimiento del principado del Imperio en la hembra mayor. Y si en este estado muriere el Emperador, se reconocerá entonces a la hembra heredera por Emperatriz, sin que obste no haberla antes reconocido Princesa.

51. Cuando el Emperador se halle en la menor edad que dura hasta los diez y ocho años, se nombrará por el Congreso para que gobierne una Regencia de cinco individuos cuando más, o de tres cuando menos, siendo su presidente el primer nombrado o turnándose en la presidencia los individuos que la compongan, según disponga el Congreso. Interin se nombra esta Regencia, gobernará la Emperatriz madre y en su defecto el pariente más cercano del Emperador de los que sean mayores de edad, en consorcio de los dos Consejeros de Estado más antiguos.

52. El tutor del Emperador menor será el que hubiere nombrado en su testamento el Emperador difunto: si no lo hubiere nombrado, será la tutora la Emperatriz madre, en cuyo defecto nombrará el Congreso al tutor.

53. En los casos en que se declare por el Congreso imposibilitado el Emperador para gobernar o que hubiere abdicado la corona, y en los interregnos se pondrá igualmente una Regencia en los términos expresados, y podrá también y aun convendrá para el caso de imposibilidad ponerse de regente al sucesor si ya tuviere diez y ocho años.

CAPÍTULO CUARTO
Del gobierno municipal

54. Habrá en cada capital de provincia una junta o diputación provincial para promover su prosperidad, compuesta del Jefe político quien será el presidente, del Intendente y siete vocales elegidos popularmente como se previene en el reglamento sobre elecciones.

55. Habrá también en los pueblos para su gobierno interior, Ayuntamientos compuestos de alcaldes, regidores y síndicos elegidos por el vecindario, los que estarán bajo la inspección de las Diputaciones provinciales. Una ley particular expresará el gobierno y facultades de las Diputaciones y Ayuntamientos con todo lo demás conducente a éstos y aquéllas.

TÍTULO CUARTO
Del poder judicial

56. El poder judicial, que es la potestad de aplicar las leyes a los casos en particular, se ejercerá por los tribunales establecidos por la ley.

CAPÍTULO PRIMERO
De los tribunales

57. En cada partido habrá un Juez de letras, en cada distrito de varias provincias que al Congreso parezca proporcionado por su extensión y población, habrá una Audiencia, y en la capital del Imperio un Tribunal Supremo de Justicia.

58. Los Jueces de letras lo serán de la primera instancia, las Audiencias serán los juzgados de apelación, y el Tribunal Supremo de Justicia del último recurso.

59. Habrá además en cada pueblo, aun el mas pequeño, un teniente de Juez de letras o encargado de justicia para los casos fragantes y de poca cuantía, el que será un juez pedáneo dependiente de aquél enteramente.

60. Los tenientes serán nombrados por los jueces de letras como sus dependientes, procurando sean vecinos del mismo pueblo y sujetos acomodados pues no han de tener sueldo ni más estímulo que el honor y el mérito.

61. Los Jueces de letras, los Magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo de Justicia, se han de dotar suficientemente de los fondos de la Nación para que ejerzan rectamente sus cargos, de los que no podrán ser removidos sino por causa legalmente sentenciada.

62. Todos los expresados en el artículo anterior se limitarán precisamente a lo contencioso sin intervenir en lo político ni económico.

63. A su jurisdicción se sujetan todos sin haber fuero alguno que los exima, excepto el eclesiástico y militar, ni habrá tampoco más tribunales que los suyos, cesando los especiales que hasta ahora ha habido.

64. Los tenientes muy a menudo darán cuenta a los Jueces de letras de cuanto les ocurra: dichos jueces la darán a su respectiva Audiencia dentro de tercero día de los procesos que se formen por delitos cometidos en su distrito, la que continuarán dando de su estado en las épocas que las Audiencias les prescriban, sin perjuicio de las listas que cada tres meses enviarán de todas las causas criminales, y cada seis de las civiles pendientes ante ellos con expresión del estado en que se hallen, y de las fenecidas: las Audiencias con la misma expresión remitirán cada seis meses listas de las causas criminales y cada año de las civiles al Tribunal Supremo de Justicia y éste al Emperador, quien lo hará al Congreso, todo con el fin de que cada cual promueva respecto de sus inferiores la pronta y recta administración de justicia.

65. A principios de cada año toda Audiencia mandará imprimir de las penas de cámara, y en su defecto del fondo que designará el Gobierno, lista de cuantas causas se han ventilado en ella en el año anterior con expresión del estado en que se hallen las que aún queden pendientes. Si hubiere en el distrito gaceta de gobierno, en ella podrá imprimirse dicha lista.

66. Las leyes demarcarán las facultades de los Tribunales, y las calidades de los magistrados y jueces.

67. Cualquiera prevaricación de los funcionarios de justicia en el ejercicio de sus oficios, especialmente el soborno y el cohecho, los hacen responsables a la Nación y a las partes, y producen contra ellos en cuanto a la vindicta pública acción popular.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la administración de justicia

68. Solos los tribunales con exclusión del Emperador y del Congreso ejercerán las funciones judiciales, y nadie podrá avocarse causa alguna perteneciente al inferior, ni pedir los autos aun para el efecto de verlos, sino únicamente para la apelación que le corresponda, recurso de nulidad, o hacer efectiva la responsabilidad del inferior.

69. Podrán las partes terminar cualquiera causa civil o de injurias por medio de árbitros o arbitradores conforme a las leyes.

70. Ningún pleito de los expresados se admitirá en tribunal alguno sin la certificación de haberse intentado la conciliación.

71. Ésta toca al alcalde del Ayuntamiento de la residencia del demandado, quien oyendo a las partes en consorcio de dos hombres buenos designados uno por cada una, y escuchando el dictamen de éstos, dictará la providencia que juzgue oportuna para cortar el litigio: y no bastando a aquietar a los contrincantes, dará la certificación que debe acompañar a la demanda judicial.

72. Nadie debe ser preso, ni aun detenido en la cárcel sin previa sumaria u otra constancia del hecho a que corresponda algún castigo, sin mandamiento del juez, que todos deben obedecer, y sin auto motivado, cuya copia se entregará al alcalde para que la inserte en el libro de arrestados.

73. La desobediencia al mandamiento de arresto, y la admisión por el alcalde en la cárcel de cualquiera arrestado sin la copia del auto motivado para la prisión o detención son delitos graves que como tales se comprenderán en el código criminal.

74. No se usará de la fuerza para el arresto sino en caso de resistencia o de que se tema la fuga.

75. En fraganti cualquiera puede arrestar al delincuente conduciéndolo inmediatamente al juez.

76. Dentro de veinte y cuatro horas se manifestará al reo la causa de su prisión y se le tomará su declaración, si no hubiere podido hacerse antes de entrar en la cárcel, que es cuando debe practicarse.

77. La declaración se le tomará sin juramento, que a nadie debe exigirse sobre hecho propio en materias criminales, y al tiempo de la confesión se le manifestarán íntegramente todos los documentos y declaraciones de los testigos con cuantas circunstancias conduzcan a que venga en conocimiento de ellos.

78. A nadie, dando fianza, se le arrestará por hecho a que no corresponda pena corporal, y ya arrestado en cualquiera estado de la causa en que aparezca no puede imponérsele dicha pena, se pondrá en libertad dando fianza.

79. No habrá calabozos, y mucho menos subterráneos ni mal sanos, ni nada que conduzca a molestar a los presos, debiendo ser la cárcel puramente para su custodia y seguridad; sin que esto se oponga a tener en separación a los que el juez mande mantener incomunicados.

80. Se visitarán frecuentemente las cárceles en los tiempos y modo que prevengan las leyes y en ningún caso se usará de tormentos ni de apremios.

81. Jamás se impondrá la pena de confiscación de bienes, ni se hará embargo de éstos sino en los casos de responsabilidad pecuniaria en la parte que baste a cubrirla. Lo dicho no se opone a las multas y decomisos que prevengan las leyes.

82. Ninguna pena será trascendental a la familia del delincuente, ciñéndose precisamente al que la mereció.

83. Ninguna casa podrá allanarse sin previa sumaria u otra constancia del hecho que la exija.

84. Las leyes dispondrán en lo posible que se eviten los excesos o abusos en la cobranza de derechos del juez, abogado, escribano y demás ministros de justicia, y que a nadie se pague en el todo o en parte hasta la conclusión de la instancia, para que todos anhelen y trabajen por ella.

PARTE SEGUNDA
De los individuos de la sociedad

TÍTULO PRIMERO
De sus derechos

CAPÍTULO PRIMERO
De los derechos naturales

85. Los derechos que corresponden al hombre en cuanto tal y le da la naturaleza, son la libertad, igualdad, seguridad y propiedad, los que está obligada la sociedad a defender a cada uno.

86. La libertad consiste en ser uno dueño de su persona y acciones en cuanto no perjudique a otro ni contravenga a la razón y la ley, que son los límites que la circunscriben.

87. La igualdad, que no debe entenderse absoluta, física o de hecho, lo que sería una quimera incompatible con el orden, sino de derecho, consiste en que unos mismos son los derechos que da a todos la naturaleza, lo que no impide las diferencias y jerarquías que exige para su buen régimen la sociedad.

88. La seguridad consiste en que así como a nadie le es permitido dañar a otros, debe también cada uno estar a cubierto de que los demás lo perjudiquen.

89. La propiedad consiste en que cada uno se mantenga tranquilo en la posesión y goce de los bienes adquiridos justamente y disponga de ellos a su arbitrio que no condene el derecho.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los derechos políticos

90. Los derechos políticos son los que corresponden al hombre como ciudadano, cualidad que dan el origen y vecindad, y concede el Congreso.

91. Son, pues, ciudadanos mexicanos: Primero. Los nacidos en el Imperio de individuos avecindados en él. Segundo. Los que en país extranjero accidentalmente nacen de ciudadanos mexicanos residentes en él por comisión o servicio de la patria, o con licencia temporal de ella. Tercero. Los extranjeros que llevan diez años de avecindados en el Imperio. Cuarto. Los que obtienen, carta de ciudadanos por el Congreso, el que para concederla atenderá a los servicios que hayan hecho a la Patria, la invención o industria que la atraigan, el casamiento con mexicana, o la utilidad que por su admisión resulte en el comercio, agricultura o artes, o finalmente sus particulares talentos y cualidades.

92. La cualidad de ciudadano se pierde: Primero. Por el establecimiento de vecindad en país extranjero. Segundo. Por haber sido sentenciado a pena corporal o infamante, si no es que se obtenga rehabilitación.

93. Los derechos de ciudadano se suspenden: Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad fisica o moral. Segundo. Por el estado de deudor quebrado o de deudor a los caudales públicos. Tercero. Por ser sirviente doméstico dedicado a la persona del amo y no a la negociación o ejercicio, que son los criados que se llaman de escalera abajo. Cuarto. Por ser vagos y mal entretenidos, y por carecer de oficio o modo de subsistir conocido. Quinto. Por andar desnudos o descubiertas las carnes. Sexto. Por estar procesados criminalmente. Séptimo. Por no haber salido de la minoridad, o salir en adelante mientras no se sepa leer y escribir.

94. Los derechos de ciudadano se reducen a participar del régimen de la sociedad de que son miembros perfectos, y el participio consiste en la voz activa que se tiene en las elecciones populares establecidas por ella, y en la pasiva pudiendo ser elegidos para los encargos y empleos municipales y obtener todos los demás si a la cualidad de ciudadano se añaden las otras que para ellos prescriba la ley, como la edad, instrucción, etc., pues la igualdad política no hace que todos los ciudadanos sean para todo, sino que nadie se excluya de aquello para que es apto.

CAPÍTULO TERCERO
De los derechos civiles

95. Los derechos civiles son los que corresponden al hombre por razón de las leyes, así como los políticos le vienen de la sociedad y los naturales de la naturaleza.

96. En substancia los derechos civiles no son sino los naturales en cuanto garantidos por las leyes, las que en virtud de la cesión de cada uno sujetándose a la sociedad, los modifican como conviene al bien general a que todos deben atemperarse.

97. La libertad sin tal temperamento, o si no tuviese restricción alguna en la sociedad, la sería perjudicial, y así la libertad civil consiste en el ejercicio de las acciones en cuanto no prohíba la ley.

98. Ésta permite a todos el libre uso de pensar y de consiguiente el de imprimir sus escritos sin previa licencia para ello, pero con sujeción al reglamento que rige o en adelante rigiere en la materia en obvio de perjudicar con dicha libertad.

99. La igualdad civil se considera a la presencia de la ley haciéndose a todos justicia sin excepción de personas; pero no quita los respetos de súbditos a los superiores, ni las diferencias y distinciones de unos individuos respecto de otros, ni da para los empleos otra opción que la del mérito y aptitud.

100. La seguridad civil consiste en que las leyes y los jueces protegen la persona de cualquiera individuo de que otro la ofenda, y que aun los últimos no pueden castigar ni prender a nadie, sino en los casos y forma que las primeras prescriben.

101. La propiedad garantida por la sociedad con sus leyes pone a cada uno a cubierto de que lo despoje de sus bienes otro más fuerte, pues lo es más que cualquiera la sociedad en que se reúne el poder de todos.

TÍTULO SEGUNDO
De las contribuciones

102. Todo miembro de la sociedad está obligado a contribuir para los gastos que en ella exige el desempeño de sus funciones.

103. Es privativo del Congreso el decretar impuestos o designar las contribuciones así generales como municipales.

104. La cantidad de cualquiera contribución se ha de nivelar a la necesidad que la exige.

105. La cuota de cada individuo se ha de proporcionar a sus haberes, y ha de ser igual entre los que disfrutan de iguales facultades; de suerte que a nadie ha de exigirse más de lo que pueda, ni ha de haber excepción ni privilegio alguno en esta materia.

106. Habrá en cada provincia una tesorería y en la capital una general a que se subordinarán las provinciales, y en las que pasando de éstas a aquélla, entrarán todos los caudales que se colecten.

107. Las provincias pequeñas que no demanden una tesorería peculiar, se agregarán en cuanto a este efecto a la más cercana, de suerte que cada tesorería comprenderá una o más provincias según lo juzgare el Congreso, el que resolverá el número de las que haya de haber y el reglamento porque hayan de gobernarse.

108. Al principio de cada año darán cuenta del anterior las tesorerías provinciales a la general y ésta al Gobierno, el que con su respectivo informe las pasará al Congreso para su calificación, publicándose antes por la imprenta las de cada tesorería en su respectivo distrito a fin de que el público pueda hacer sobre ellas las observaciones que crea oportunas, y publicarlas por la prensa o representarlas al Congreso.

TÍTULO TERCERO
De la fuerza armada

109. Los individuos de la sociedad están obligados a tomar las armas en defensa y servicio de la patria, siempre que los llame la ley para alguna de las tres clases de fuerza armada, que son tropa de línea, cívica y naval.

CAPÍTULO PRIMERO
De la tropa de línea

110. De la tropa de línea que es la que se mantiene acuartelada y a sueldo, sólo habrá de continuo servicio la precisamente necesaria para él, cuyo pie o número toca al Congreso señalar en cada legislatura.

111. Las milicias imperiales son el plantel y semillero de la tropa de línea, de donde deben sacarse los regimientos y escuadrones que se necesiten para la guerra, y en las que debe disolverse el ejército en tiempo de paz, excepto el pie de que habla el artículo anterior.

112. Los milicianos vivirán en sus casas, dedicados a sus ocupaciones u oficios, con sólo la obligación de asistir de cuando en cuando en el día que se les señale a las revistas e instrucción del ejercicio de sus armas respectivas y evoluciones militares, y no disfrutarán sueldo sino cuando se pongan sobre las armas.

113. Habrá no obstante en sus cuerpos algunos sargentos y oficiales encargados de dar la instrucción de que se ha hablado antes, quienes siempre tendrán sueldo por dicho encargo, lo que proporcionará dar colocación a algunos que se hayan hecho acreedores a ella.

114. A nadie se precisará a los alojamientos de la tropa sino por tres días cuando más, siendo de cuenta de los mismos alojados su mantención sin gravar a los alojantes. Y las ordenanzas dispondrán el punto de bagajes de la manera que sea menos gravosa al público.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la tropa cívica y naval

115. A más de las Milicias imperiales comunes a todo el Imperio, habrá en cada pueblo un cuerpo de Milicias cívicas, compuesto de los habitantes de su comarca, proporcionado a su población.

116. De estas milicias no podrá disponer el Emperador fuera de la provincia respectiva de ellas sin otorgamiento del Congreso.

117. El reglamento a que se han ajustado hasta ahora, las regirá en adelante mientras no se varíe por el Congreso.

118. Habrá también para resguardo de las costas, fomento del comercio y comunicación con las demás naciones, un pie de marina armada que señalará el Congreso conforme a las circunstancias de las épocas en que lo haga, proporcionando al mismo tiempo los medios, y excitando a los particulares para que se forme una marina mercantil considerable.

119. Todo lo concerniente a la tropa de tierra y mar, y aun a los buques mercantes como que están bajo el resguardo y protección de la última, se comprenderá en el código militar y de marina con la debida distinción de cada uno de estos objetos, incluyéndose, por lo mismo, cuanto contiene el reglamento que se ha llamado de milicias nacionales y es relativo a la tropa cívica.

TÍTULO CUARTO
De la instrucción pública

120. Es obligación de los individuos de la sociedad y de la que en gran parte dependen las demás, el estar impuestos en sus derechos y deberes, y en el ramo en que cada uno la sirve, a cuyo fin debe promoverse la instrucción pública tan interesante al bien común.

121. Se establecerán en todos los pueblos escuelas de leer, escribir y contar, en las que se enseñará también el catecismo de la Doctrina cristiana, con otro breve de las obligaciones civiles que se formará por el Congreso.

122. A todos los cabezas de familia, especialmente a los indios, se les estrechará a que envien a los niños a la escuela de primeras letras, sobre lo que velarán los Ayuntamientos de los pueblos.

123. Se creará y arreglará un número competente de Universidades y otros establecimientos para la enseñanza de las ciencias y artes.

124. Un código o plan de instrucción pública abarcará cuanto concierne a tan importante objeto, debiendo uniformarse en todo el Imperio el plan que se adopte.

125. Cuando las circunstancias del Erario lo permitan, o sin detrimento de él se pueda crear una dirección general de instrucción pública, compuesta de los hombres más instruidos, se creará en efecto para que corra a su cargo, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza común.

III

PROYECTO DE REGLAMENTO POLÍTICO DE GOBIERNO DEL IMPERIO MEXICANO

PRESENTADO A LA JUNTA NACIONAL INSTITUYENTE, Y LEÍDO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1822. POR LA COMISIÓN ESPECIAL

MÉXICO, 18 DE DICIEMBRE DE 1822

La comisión especial encargada de la formación del reglamento provisional de gobierno del imperio a que se contraen los oficios del ministerio de relaciones de 25 del próximo pasado noviembre y 3 del corriente, ha extendido y presenta a la deliberación de la junta nacional el siguiente:

PROYECTO DE REGLAMENTO PROVISIONAL POLÍTICO DEL IMPERIO MEXICANO

Porque la constitución española es un código peculiar de la nación de que nos hemos emancipado: porque aun respecto de ella ha sido el origen y fomento de las horribles turbulencias y agitaciones políticas en que de presente se halla envuelta: porque la experiencia ha demostrado que sus disposiciones en general son inadaptables a nuestros intereses y costumbres, y especialmente a nuestras circunstancias; y porque con tan sólidos fundamentos el emperador ha manifestado la urgentísima necesidad que tenemos de un reglamento propio para la administración, buen orden y seguridad interna y externa del estado, mientras que se forma y sanciona la constitución política que ha de ser la base fundamental de nuestra felicidad y la suma de nuestros derechos sociales: la junta nacional instituyente acuerda sustituir a la expresada constitución española el reglamento político que sigue:

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales

CAPÍTULO ÚNICO

ART. 1. Desde la fecha en que se publique el presente reglamento, queda abolida la constitución española en toda la extensión del imperio.

ART. 2. Quedan, sin embargo, en su fuerza y vigor las leyes, órdenes y decretos promulgados anteriormente en el territorio del imperio hasta el 24 de febrero de 1821, en cuanto no pugnen con el presente reglamento, y con las leyes, órdenes y decretos expedidos, o que se expidieren en consecuencia de nuestra independencia.

Y porque entre las leyes dictadas por las cortes españolas hay muchas tan inadaptables como la constitución, que aquí sería embarazoso expresar, se nombrará una comisión de dentro o fuera de la junta que las redacte, y haciendo sobre ellas las observaciones que le ocurran, las presente a la misma junta o al futuro congreso, para que se desechen las que se tengan por inoportunas.

ART. 3. La nación mexicana y todos los individuos que la forman y formarán en lo sucesivo profesan la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra. El gobierno como protector de la misma religión la sostiene y sostendrá contra sus enemigos. Reconocen por consiguiente la autoridad de la santa iglesia, su disciplina y disposiciones conciliares, sin perjuicio de las prerrogativas propias de la potestad suprema del estado.

ART. 4. El clero secular y regular, será conservado en todos sus fueros y preeminencias, conforme al artículo 14 del plan de Iguala. Por tanto, para que las órdenes de jesuitas y hospitalarios puedan llenar en pro-comunal los importantes fines de su institución, el gobierno las restablecerá en aquellos lugares del imperio en que estaban puestas, y en los demás en que sean convenientes, y los pueblos no lo repugnen con fundamento.

ART. 5. La nación mexicana es libre, independiente y soberana: reconoce iguales derechos en las demás que habitan el globo: y su gobierno es monárquico-constitucional-representativo y hereditario, con el nombre de *imperio mexicano.*

ART. 6. Es uno e indivisible, porque se rige por unas mismas leyes en toda la extensión de su territorio, para la paz y armonía de sus miembros, que mutuamente deben auxiliarse, a fin de conspirar a la común felicidad.

ART. 7. Son mexicanos sin distinción de origen todos los habitantes del imperio, que en consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia; y los extranjeros que vinieren en lo sucesivo, desde que con conocimiento y aprobación del gobierno se presenten al ayuntamiento del pueblo que elijan para su residencia, y juren fidelidad al emperador y a las leyes.

ART. 8. Los extranjeros que hagan, o hayan hecho servicios importantes al imperio; los que puedan serle útiles por sus talentos, invenciones o industria, y los que formen grandes establecimientos, o adquieran propiedad territorial por la que paguen contribución al estado, podrán ser admitidos al derecho de sufragio. El emperador concede este derecho, informado del ayuntamiento respectivo, del ministro de relaciones, y oyendo al consejo de estado.

ART. 9. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del estado y sus individuos, garantiendo los derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos.

ART. 10. La casa de todo ciudadano, es un asilo inviolable. No podrá ser allanada sin consentimiento del dueño, o de la persona que en el momento haga veces de tal, que no podrá negar a la autoridad pública para el desempeño de sus oficios. Esto se entiende en los casos comunes; pero en los delitos de lesa-majestad divina y humana, o contra las garantías, y generalmente en todos aquellos en que el juez, bajo su responsabilidad, califique que la ligera tardanza que demandan estas contestaciones puede frustrar la diligencia, procederá al allanamiento del modo que estime más seguro; pero aun en esta calificación quedará sujeto a la misma responsabilidad.

ART. 11. La libertad personal es igualmente respetada. Nadie puede ser preso ni arrestado, sino conforme a lo establecido por ley anterior, o en los casos señalados en este reglamento.

ART. 12. La propiedad es inviolable, y la seguridad, como resultado de ésta y de la libertad.

ART. 13. El estado puede exigir el sacrificio de una propiedad particular para el interés común legalmente justificado; pero con la debida indemnización.

ART. 14. La deuda pública queda garantida. Toda especie de empeño o contrato entre el gobierno y sus acreedores o interesados es inviolable.

ART. 15. Todos los habitantes del imperio deben contribuir en razón de sus proporciones a cubrir las urgencias del estado.

ART. 16. Las diferentes clases del estado se conservan con sus respectivas distinciones, sin perjuicio de las cargas públicas, comunes a todo ciudadano. Las virtudes, servicios, talentos y aptitud, son los únicos medios que disponen para los empleos públicos de cualquiera especie.

ART. 17. Nada más conforme a los derechos del hombre que la libertad de pensar y manifestar sus ideas: por tanto, así como se debe hacer un racional sacrificio de esta facultad no atacando directa ni indirectamente, ni haciendo, sin previa censura, uso de la pluma en materias de religión y disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del emperador, independencia y unión, como principios fundamentales admitidos y jurados por toda la nación desde el pronunciamiento del plan de Iguala, así también en todo lo demás el gobierno debe proteger y protegerá sin excepción la libertad de pensar, escribir y expresar por la imprenta cualquiera conceptos o dictámenes, y empeña todo su poder y celo en alejar cuantos impedimentos puedan ofender este derecho que mira como sagrado.

ART. 18. La censura en los escritos que traten de religión o disciplina eclesiástica toca al juez ordinario eclesiástico, que deberá darla dentro de veinte y cuatro horas, si el papel no llegare a tres pliegos, o dentro de seis días si pasare de ellos. Y si algún libro o papel sobre dichas materias se imprimiese sin la licencia indicada, podrá dicho juez eclesiástico recogerla y castigar al autor e impresor con arreglo a las leyes canónicas. En los demás puntos del artículo anterior, la censura la hará cualquiera juez de letras a quien se pida la licencia, en los mismos tiempos; pero bajo su responsabilidad, tanto al gobierno, si fuere aprobatoria, como a la parte si fuere condenatoria.

ART. 19. Como quiera que el ocultar el nombre en un escrito es ya una presunción contra él, y las leyes han detestado siempre esta conducta, no se opone a la libertad de imprenta la obligación que tendrán todos los escritores de firmar sus producciones con expresión de fecha, lo que también es utilísimo a la nación, pues así no se darán a luz muchas inepcias que la deshonran a la faz de las naciones cultas.

ART. 20. Se organizará la fuerza pública hasta el estado en que el emperador la juzgue conveniente para la defensa y seguridad interna y externa.

ART. 21. Ningún mexicano, excepto los eclesiásticos, puede excusarse del servicio militar, siempre que la patria necesite de sus brazos para su defensa y conservación; pero en caso de impedimento justo, deberá dar un equivalente.

ART. 22. La fuerza pública es esencialmente obediente.

ART. 23. El sistema del gobierno político del imperio mexicano se compone de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que son incompatibles en una misma persona o corporación.

SECCIÓN SEGUNDA
De las elecciones

CAPÍTULO ÚNICO

ART. 24. Las elecciones de ayuntamientos para el año de 1823, se harán con arreglo al decreto de la junta nacional instituyente de 13 del próximo pasado noviembre, y éstas y las de diputados y demás que deben hacerse en lo sucesivo, se sujetarán a la ley de elecciones que se está formando por la misma junta, y circulará el gobierno oportunamente.

SECCIÓN TERCERA
Del poder legislativo

CAPÍTULO ÚNICO

ART. 25. El poder legislativo reside ahora en la junta nacional instituyente, que lo ejercerá de conformidad con el reglamento de 2 del pasado noviembre, cuyo tenor es el siguiente:

Bases orgánicas de la junta nacional instituyente

1a. Tendrá la iniciativa de la constitución que ha de formarse para el imperio; y en consecuencia acordará el plan o proyecto de ella que le parezca más propio y conveniente a sus circunstancias para consolidar la forma del gobierno proclamado y establecido con arreglo a las bases adoptadas, ratificadas y juradas por toda la nación.

2a. Acompañará al proyecto de constitución la correspondiente ley orgánica, que determine el modo con que se debe discutir, decretar y sancionar la misma constitución, y satisfaga al interesante objeto de preservar los choques y rozamiento de los poderes legislativo y ejecutivo en este punto, para lo cual procederá de acuerdo con el último.

3a. Aunque en el proyecto de la constitución se haya de comprender todo lo concerniente al sistema representativo, será objeto especial de la junta formar la convocatoria para la inmediata representación nacional, prescribiendo las reglas que sean más justas y adaptables a las circunstancias del imperio, y a la forma de su gobierno proclamado, establecido y jurado, y poniéndose para esto de acuerdo con el mismo gobierno, conforme a lo que en idéntico caso calificó la junta provisional gubernativa, en cumplimiento de los artículos respectivos del plan de Iguala y tratados de Córdova: y lo que en esta forma se ordenare por la convocatoria, se observará indefectiblemente (por esta vez), a reserva de que en la constitución se adopte o rectifique, según las luces de la experiencia.

4a. Con toda la brevedad mayor posible procederá a organizar el plan de la hacienda pública, a fin de que haya el caudal necesario para su ejecución con los gastos nacionales y cubrir el considerable actual deficiente, poniéndose de acuerdo con el poder ejecutivo.

5a. La junta conservará por su representación nacional el ejercicio del poder legislativo en todos los casos que, en concepto de no poderse reservar para que tengan la emanación y consecuencia que en todas las leyes debe procurarse de la constitución, proponga como urgentes el poder ejecutivo.

6a. Para la discusión del proyecto de constitución, convocatoria de ella, reglamentos y demás leyes, se admitirán los oradores del gobierno.

7a. Por primera diligencia formará la junta para su gobierno interior un reglamento que sea propio para dar el plan, orden y facilidad a todas sus operaciones, y determinar los justos límites de la inviolabilidad de los diputados, contrayéndola precisamente a lo que se necesita para el libre ejercicio de sus funciones.

8a. Publicará un manifiesto a la nación, inspirándole la confianza que pueda ofrecerle, por el celo y actividad de las grandes funciones de su encargo.

9a. La junta tendrá un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios.

10a. Por esta vez y hasta la formación y adopción del reglamento, en el que se tendrá presente la conveniencia de la perpetuidad de estos oficios, para la uniforme expedición de los objetos de sus respectivas funciones, se me propondrán ternas para las elecciones de los individuos que hayan de desempeñarlos.

11a. El tratamiento de la junta será *impersonal*, el del presidente de *excelencia*, y el de los vocales de *señoría*.

12a. Los suplentes podrán ser elegidos para vicepresidentes y secretarios.

13a. Si hubiere algunas actas del congreso disuelto que no estén engrosadas ni autorizadas, la junta subsanará este defecto por un acuerdo relativo a lo que quedó resuelto por el mismo congreso, y comunicará al gobierno su resolución, para que haga las observaciones y réplicas que exige el interés de la causa pública.

14a. Si se encontraren en la secretaría del congreso, asuntos ajenos del conocimiento del poder legislativo, la junta mandará se devuelvan a sus interesados, para que los giren por donde corresponda.

15a. El comisionado que ha recibido los papeles de la secretaría del congreso disuelto, los entregará a los secretarios de la junta con los índices y por el inventario correspondiente.

Palacio imperial de México 2 de noviembre de 1822, año segundo de la independencia.— Rubricado de la imperial mano.— *José Manuel Herrera.*

Leídas estas bases añadió S.M. de palabra la siguiente:

Los diputados suplentes asistirán a las sesiones de la junta, y tomarán parte en las discusiones; pero no tendrán voto sino cuando ocupen el lugar de los propietarios. —México 5 de noviembre de 1822. —*Antonio de Mier* —diputado secretario.

ART. 26. El futuro congreso reasumirá el poder legislativo con arreglo a la ley de su convocatoria, y a la orgánica que se está formando para la discusión, sanción y promulgación de la constitución.

ART. 27. Los vocales de la junta nacional instituyente son inviolables por las opiniones políticas que manifiesten en el ejercicio de sus funciones, y no podrán ser perseguidos por ellas en ningún tiempo, ni ante autoridad alguna.

ART. 28. De las causas civiles o criminales que contra los expresados vocales se intentaren durante su comisión, toca el conocimiento al tribunal supremo de justicia.

SECCIÓN CUARTA
Del poder ejecutivo

CAPÍTULO PRIMERO
Del emperador

ART. 29. El poder ejecutivo reside exclusivamente en el emperador, como jefe supremo del estado. Su persona es sagrada e inviolable, y sólo sus ministros son responsables de los actos de su gobierno, que autorizarán necesaria y respectivamente, para que tengan efecto.

ART. 30. Toca al emperador, primero: proteger la religión católica, apostólica, romana, y disciplina eclesiástica, conforme al plan de Iguala. Segundo: hacer cumplir la ley, sancionarla y promulgarla. Tercero: defender la patria, su independencia y unión, según el mismo plan. Cuarto: conservar el orden interior y la seguridad exterior, por todos los medios que en las circunstancias de la guerra, antes sorda, y en la actualidad ostensible con que temerariamente se nos ataca, estén a su discreción , y puedan hacer sentir a los enemigos el poder de la nación, y la firmeza con que sostendrá sus derechos pronunciados, su gobierno establecido, y el rango a que se ha elevado. Quinto: mandar las fuerzas de mar y tierra. Sexto: declarar la guerra y hacer tratados de paz y alianza. Séptimo: dirigir las relaciones diplomáticas y de comercio con las demás naciones. Octavo: formar los reglamentos, órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de las leyes y seguridad del imperio. Noveno: establecer conforme a la ley, los tribunales que sean necesarios, y nombrar los jueces a propuesta del consejo de estado. Décimo: cuidar de que se administre pronta y cumplidamente la justicia. Undécimo: ejercer en su caso y en forma legal y canónica las funciones del patronato, debidas a la suprema dignidad del estado. Duodécimo: conceder pase o retener los decretos conciliares y bulas pontificias que contengan disposiciones generales, oyendo al cuerpo legislativo, o hacer lo mismo, oyendo al consejo de estado, cuando se versen sobre negocios particulares o gubernativos; o pasándolos, cuando son contenciosos, al tribunal supremo de justicia. Decimotercio: proveer a todos los empleos civiles y militares. Decimocuarto: conceder toda clase de honores y distinciones. Decimoquinto: indultar a los delincuentes conforme a las leyes. Decimosexto: cuidar de la fabricación de la moneda. Decimoséptimo: decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos públicos. Decimoctavo: nombrar y separar libremente los ministros.

ART. 31. No puede el emperador, primero: disolver la junta nacional antes de la reunión del congreso, ni embarazar sus sesiones. Segundo: no puede salir de las fronteras del imperio, sin consentimiento de la misma junta. Tercero: no puede enajenar ni traspasar a otro la autoridad imperial. Cuarto: no puede hacer alianza ofensiva ni tratados de comercio y de subsidios a favor de potencias extranjeras sin el consentimiento del cuerpo legislativo. El efecto de este artículo se suspende hasta que la España reconozca nuestra independencia. Quinto: no puede ceder o enajenar el territorio o bienes nacionales. Sexto: no puede conceder privilegios exclusivos. Séptimo: no puede privar a nadie de su libertad, siendo los ministros responsables de esta disposición, a menos que el bien y seguridad del estado exijan el arresto de alguna persona, en cuyo caso podrá el emperador expedir órdenes al efecto, con tal que dentro de quince días a lo más, la haga entregar a tribunal competente.

En caso de convulsiones intestinas, como las que actualmente asoman, se autoriza al emperador, por el bien de la patria, con todo el poder de la ley, que se pondrá por apéndice a este reglamento.*

CAPÍTULO SEGUNDO
De los ministros

ART. 32. Habrá cuatro ministros por este orden.
Del interior y de relaciones exteriores.
De justicia y negocios eclesiásticos.
De hacienda.
De guerra y marina.
Y además un secretario de estampilla.

ART. 33. Los ministros formarán los presupuestos de gastos, que acordará la junta, y le rendirán cuenta de los que hicieren.

CAPÍTULO TERCERO
De la regencia

ART. 34. Luego que el emperador sancione el presente reglamento, nombrará con el mayor secreto, para el caso de su muerte o de notoria impotencia física o moral legalmente justificada, una regencia de uno a tres individuos de su alta confianza e igual número de suplentes. Estos nombramientos se guardarán en una caja de hierro de tres llaves, la que se meterá dentro de otra de la misma materia y con igual número de llaves distintas. Esta arca existirá siempre en el lugar que el emperador designe, de que dará noticia a los tenedores de las llaves, que serán: de una del arca interior, el emperador mismo; de otra el decano del consejo de estado, y de la tercera el presidente del supremo tribunal de justicia. De las exteriores tendrá una el príncipe heredero, que ya pasa de los doce años de edad, y en su defecto el arzobispo de esta corte; otra el jefe político de la misma, y otra el confesor del emperador.

La impotencia se calificará por el cuerpo legislativo, oyendo previamente una comisión de nueve individuos de su seno, de los cuatro secretarios de estado y del despacho, y de los dos consejeros que sigan en el orden de antigüedad al decano del de estado. Las arcas se abrirán a su tiempo en presencia de una junta presidida por el príncipe heredero, convocada por el ministerio de relaciones, y compuesta de una comisión del cuerpo legislativo, de los cuatro secretarios de estado y del despacho, de los dos consejeros arriba dichos, y de los tenedores respectivos de las llaves de las arcas. En seguida de este acto se reunirá la regencia sin pérdida de tiempo en el palacio imperial, y los individuos otorgarán ante el cuerpo legislativo el juramento siguiente:

N.N. (aquí los nombres) juramos por Dios y por los santos evangelios: que defenderemos y conservaremos la religión, católica, apostólica, romana, y la disciplina eclesiástica sin

* La ley contra conspiradores y otros crímenes ya publicada.

permitir otra alguna en el imperio: que seremos fieles al emperador: que guardaremos y haremos guardar el reglamento político y leyes de la monarquía mexicana, no mirando en cuanto hiciéremos sino al bien y provecho de ella: que no enajenaremos, cederemos ni desmembraremos parte alguna del imperio: que no exigiremos jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubiere decretado el cuerpo legislativo: que no tomaremos jamás a nadie su propiedad: que respetaremos sobre todo la libertad política de la nación, y la personal de cada individuo: que cuando llegue el emperador a ser mayor (en caso de impotencia se dirá *que cuando cese la imposibilidad del emperador*) le entregaremos el gobierno del imperio, bajo la pena, si un momento lo dilatamos, de ser habidos y tratados como traidores; y si en lo que hemos jurado o parte de ello, lo contrario hiciéremos, no debemos ser obedecidos: antes aquello en que contraviniéremos será nulo y de ningún valor. Así Dios nos ayude y sea en nuestra defensa; si no, nos lo demande.

ART. 35. La regencia será presidida necesariamente por el príncipe heredero, aunque sin voto hasta la edad de diez y ocho años, en que comienza a reinar; pero una vez instalada ejercerá las funciones del poder ejecutivo, en cuanto no se le restrinja por las leyes, y encabezará sus providencias con el nombre de emperador.

ART. 36. Será tutor del emperador menor la persona que hubiere nombrado en su testamento su difunto padre. Si no le hubiere nombrado, le nombrará la regencia. Y a falta de ambos le nombrará la junta nacional, o cuerpo legislativo.

ART. 37. Ningún extranjero podrá ser tutor del emperador menor, aunque tenga carta de naturaleza.

CAPÍTULO CUARTO
Del emperador menor y de la familia imperial

ART. 38. El emperador menor no puede contraer matrimonio, ni salir del imperio, sin consentimiento del cuerpo legislativo, bajo la calidad de ser excluido del llamamiento a la corona.

ART. 39. De las partidas de bautismo, matrimonio y muerte de las personas de la familia imperial, se remitirá una copia auténtica a la junta nacional.

ART. 40. Ésta para el año de 1823, y el venidero congreso para lo sucesivo, señalarán la dotación de la casa y personas de la familia imperial.

CAPÍTULO QUINTO
Del consejo de estado

ART. 41. Subsistirá el actual consejo de estado en la forma y con el número de individuos que lo estableció el congreso, para dar dictamen al emperador en los asuntos en que se lo pida: para hacerle por ternas las propuestas de las plazas de judicatura, y para consultarle del mismo modo sobre la presentación a beneficios eclesiásticos y obispados en su caso.

ART. 42. En el de vacante, o vacantes de los consejeros actuales, y necesidad de su provisión, el gobierno pasará una lista de elegibles beneméritos de toda la extensión del imperio al

cuerpo legislativo. Éste formará y remitirá al gobierno las ternas respectivas, y el emperador nombrará indistintamente uno de los tres propuestos en ellas.

ART. 43. Todos los arzobispos y obispos del imperio son consejeros honorarios de estado.

CAPÍTULO SEXTO
Del gobierno supremo con relación a las provincias y pueblos del imperio

ART. 44. En cada capital de provincia habrá un jefe superior político nombrado por el emperador.

ART. 45. Reside en el jefe político la autoridad superior de la provincia, que la ejercerá conforme a las leyes, instrucciones y reglamentos vigentes.

ART. 46. Por ahora y mientras la independencia nacional se halle amagada por enemigos exteriores, los mandos político y militar de las provincias se reunirán en una sola persona.

ART. 47. El jefe superior político se entenderá directa e inmediatamente con el ministro del interior en cuanto concierna al gobierno político de la provincia de su mando.

ART. 48. Hacer lo que prohíben, o no hacer lo que ordenan las leyes es un delito. El jefe político, cuyo principal objeto es el sostén del orden social y de la tranquilidad pública, usará de todas sus facultades para prevenir el crimen y sostener la libertad, la propiedad y la seguridad individual.

ART. 49. A objeto tan importante podrá imponer penas correccionales en todos los delitos que no induzcan pena infamante o aflictiva corporal, en cuyos casos entregará los reos al tribunal que designe la ley.

ART. 50. Las penas correccionales se reducen a multas, arrestos y confiscación de efectos en contravención de ley. Las multas en ningún caso pasarán de cien pesos, ni los arrestos de un mes.

ART. 51. Si el jefe político tuviere noticia de que se trama alguna conspiración contra el estado, procederá al arresto de los indiciados, y según el mérito de la instrucción sumaria, que formará con intervención de asesor, los pondrá en libertad, o a disposición de tribunal competente dentro de diez días a lo más.

ART. 52. En los puertos de mar que no sean capitales de provincia, o en las cabeceras de partidos muy dilatados o poblados, podrá haber un jefe político subalterno al de la provincia. En las demás cabeceras o pueblos subalternos el alcalde primer nombrado será el jefe político; pero en el caso de que habla el artículo antecedente, los primeros alcaldes de pueblos subalternos pasarán al conocimiento del jefe político de su partido las causas o motivos que hayan provocado el arresto.

ART. 53. En todos los casos que ocurran donde fuere necesaria la fuerza pública para el ejercicio de las autoridades políticas, los comandantes militares la prestarán inmediatamente bajo la responsabilidad de la autoridad que la exija.

ART. 54. Los jefes políticos exigirán de los ayuntamientos el cumplimiento exacto de sus obligaciones, detalladas en la instrucción de 23 de junio de 1813, para el gobierno económico político de las provincias, y vigilarán muy particularmente sobre la policía de la imprenta,

y de las casas de prisión o de corrección: sobre la dedicación de todos a alguna ocupación o industria, extirpando la ociosidad, vagancia, mendicidad y juegos prohibidos: velarán sobre la introducción de personas extrañas y sospechosas: sobre el respeto debido al culto y buenas costumbres: sobre la seguridad de los caminos y del comercio: sobre el porte de armas prohibidas, embriaguez, riñas, atropellamientos y tumultos: sobre la salubridad de las poblaciones, su limpieza y alumbrado: sobre el buen régimen de los establecimientos de beneficencia y educación: sobre el buen orden de los mercados, legitimidad de la moneda, peso, medida y calidad de las provisiones, y generalmente sobre cuanto conduzca al fomento, comodidad y esplendor de los pueblos.

SECCIÓN QUINTA
Del poder judicial

CAPÍTULO PRIMERO
De los tribunales de primera y segunda instancia

ART. 55. La facultad de aplicar las leyes a los casos particulares que se controvierten en juicio, corresponde exclusivamente a los tribunales erigidos por ley.

ART. 56. Ningún mexicano podrá ser juzgado en ningún caso por comisión alguna, sino por el tribunal correspondiente designado por leyes anteriores.

ART. 57. Subsisten los juzgados y fueros militares y eclesiásticos, para los objetos de su atribución; como los peculiares de minería y de hacienda pública, que procederán como hasta aquí, según la ordenanza y leyes respectivas.

ART. 58. Los consulados, mientras subsistan, sólo deberán ejercer el oficio de jueces conciliadores en asuntos mercantiles; y podrán también hacer el de árbitros por convenio de las partes.

ART. 59. En los juicios civiles particulares y en los criminales por delitos comunes, serán juzgados los militares y eclesiásticos por sus respectivos jueces.

ART. 60. En el delito de lesa-majestad humana, conjuración contra la patria, o forma de gobierno establecido, nadie goza de fuero privilegiado. Los militares quedan desaforados por el mismo hecho, y los eclesiásticos serán juzgados por las jurisdicciones secular y eclesiástica unidas, procurando todos los jueces abreviar sin omitir las formas y trámites del juicio.

ART. 61. Para ser juez o magistrado se requiere en lo sucesivo ser ciudadano del imperio, de 30 años de edad, casado o viudo, no haber sido condenado por delito alguno, gozar de buena reputación, luces e integridad para administrar justicia.

ART. 62. Cualquier mexicano puede acusar el soborno, el cohecho, y el prevaricato de los magistrados y jueces.

ART. 63. Los jueces o magistrados no podrán ser suspendidos de sus destinos, ya sean temporales o perpetuos, sino por acusación legítimamente probada, ni separados de ellos, sino por sentencia que cause ejecutoria.

ART. 64. Si al emperador se diese queja contra un magistrado podrá formar expediente informativo, y resultando fundada, suspenderle con dictamen del consejo de estado, remitiendo inmediatamente el proceso al tribunal de justicia, para que juzgue con arreglo a derecho.

ART. 65. La justicia se administrará en nombre del emperador, y en el mismo se encabezarán las ejecutorias y provisiones de los tribunales superiores.

ART. 66. Para la pronta y fácil administración de justicia en todos sus ramos, continuarán los alcaldes, los jueces de letras que puedan ser pagados cómodamente, y las audiencias territoriales que están establecidas; y además podrá nombrar el gobierno otros jueces de letras y establecer dos o tres audiencias nuevas, en aquellos lugares en que a discreción del mismo gobierno se estimen oportunas, para evitar a las partes, los perjuicios que hoy experimentan por las enormes distancias en que se hallan las audiencias territoriales.

ART. 67. Estas nuevas audiencias se compondrán de competente número de ministros, tendrán las mismas atribuciones que las actuales, y las ejercerán en todo el territorio que se les designe por el gobierno.

ART. 68. En todo pleito por grande que sea su interés, habrá tres instancias no más y tres sentencias definitivas. Dos sentencias conformes de toda conformidad causan ejecutoria. Cuando la segunda revoca o altera la primera, ha lugar a suplicación que se interpondrá en el mismo tribunal; y no habiendo copia de ministros, para que otras distintas conozcan y juzgen de la tercera instancia, se instruirá ésta ante los mismos que fallaron la segunda, y puesta en estado de sentencia se remitirán los autos a la audiencia más cercana (citadas las partes y a costa del suplicante) para que con la sola vista de ellos, sin otro trámite, pronuncie la sentencia: contra la cual no habrá más recurso que el de nulidad para ante el tribunal supremo de justicia.

ART. 69. Así como se vayan instalando las nuevas audiencias, les pasarán las actuales los procesos civiles y criminales ante ellas pendientes, y que toquen al territorio que el gobierno les haya demarcado.

ART. 70. Todos los jueces y magistrados propietarios o suplentes jurarán el ingreso en su destino ser fieles al emperador, observar las leyes y administrar recta y pronta justicia.

ART. 71. A toda demanda civil o criminal debe preceder la junta conciliatoria en los términos que hasta aquí se ha practicado. Y para que sea más eficaz tan interesante institución, se previene que los hombres buenos presentados por las partes, o no sean abogados, o si lo fueren no se admitan después en el tribunal para defender a las mismas partes, en caso de seguir el pleito materia de la conciliación.

ART. 72. Ningún mexicano podrá ser preso por queja de otro: sino cuando el delito merezca pena corporal y conste en el mismo acto, o el quejoso le obligue a probarlo dentro de seis días, y en su defecto a satisfacer al arrestado los atrasos y perjuicios que se le sigan de aquella providencia.

ART. 73. En caso de denuncia, que el que la diere no se ofrezca a probar, el juez pesando atentamente las circunstancias de aquél y del denunciado, la gravedad y trascendencia del delito, y el fundamento de la denuncia, formará proceso instructivo. Si de éste resulta semiplena prueba o vehemente sospecha, procederá al arresto; así como si obrando de oficio teme fundadamente que se fugue el presunto reo antes de averiguar el hecho. En *fraganti* todo delincuente debe ser preso y todos pueden arrestarle conduciéndole a la presencia del juez.

ART. 74. Nunca será arrestado el que de fiador en los casos en que la ley no prohíbe admi-

tir fianza; y este recurso quedará expedito para cualquiera estado del proceso en que conste no haber lugar a la imposición de pena corporal.

ART. 75. No se hará embargo de bienes, sino cuando el delito induzca responsabilidad pecuniaria, y sólo en proporción a la cantidad a que deba extenderse.

ART. 76. Tampoco se podrá usar del tormento en ningún caso, imponerse la pena de confiscación absoluta de bienes, ni la de infamia transmisible a la posteridad o familia del que la mereció.

ART. 77. En todo lo relativo al orden, sustanciación y trámites del juicio (desde la conciliación en adelante) se arreglarán los alcaldes, jueces de letras y tribunales de segunda instancia a la ley de 9 de octubre de 1812, excepto la publicación que ordena el artículo 16 capítulo 2o. en cuanto al examen de testigos, que se hará como se acostumbraba antes de dicha ley, y sin ministrar a quien no sea parte legítima ni tenga interés en las causas, los testimonios de que habla el artículo 23 del mismo capítulo 2o.: tampoco conocerán las audiencias de las nulidades a que se refieren los artículos 48 y siguientes del capítulo 1o.: ni harán cosa alguna, aun conforme a la citada ley, que sea contraria al sistema de independencia, gobierno establecido y leyes sancionadas por el mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del tribunal supremo de justicia

ART. 78. El supremo tribunal de justicia residirá en la capital del imperio: se compondrá por ahora de nueve ministros con renta cada uno de seis mil pesos anuales. El tratamiento de dicho tribunal será impersonal y el de sus ministros excelencia.

ART. 79. Observará también este tribunal en lo que le toca la citada ley de 9 de octubre, y además:

Primero: dirimirá todas las competencias de las audiencias.

Segundo: juzgará a los secretarios de estado y del despacho, cuando por queja de parte se declare haber lugar a exigir la responsabilidad en la forma que se dirá después.

Tercero: conocerá de todas las causas de suspensión y separación de los consejeros de estado y de los magistrados de las audiencias.

Cuarto: juzgará las criminales de los secretarios de estado y del despacho, de los consejeros de estado y de los magistrados de las audiencias, cuyo proceso instruirá el jefe político más inmediato para remitirlo a este tribunal.

Quinto: igualmente conocerá de todas las causas criminales y civiles de los individuos del cuerpo legislativo, con arreglo al artículo 28 de este reglamento, y con suplicación al mismo tribunal.

Sexto: conocerá de la residencia de todo funcionario público sujeto a ella por las leyes; de todos los asuntos contenciosos de patronato imperial, y de todos los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos superiores de la corte.

Séptimo: de los de nulidad que se interpongan contra sentencias pronunciadas en última instancia, para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y de hacer efectiva la responsabilidad de los magistrados que la pronunciaron.

Octavo: oirá las dudas de los demás tribunales sobre la genuina inteligencia de alguna ley consultando al emperador con los fundamentos de que nazcan para que provoque la conveniente declaración del poder legislativo.

Nono: examinará las listas que le deben remitir las audiencias para promover la pronta administración de justicia, pasando copia de ellas al gobierno con las observaciones que estime convenientes, y disponiendo su publicación por la imprenta.

Décimo: cuando de orden del emperador se proceda al arresto de alguno, en el caso que designa el artículo 31 de este reglamento, y no se suelte ni entregue a tribunal competente en los quince días que allí mismo se expresa, podrá el arrestado ocurrir a este tribunal, que si calificare justo y conveniente tal arresto por el interés del estado, pronunciará el siguiente decreto: *Queda a esta parte salvo el segundo recurso en el término de la ley*, y el arrestado podrá usar de él ante el mismo tribunal, si pasados quince días no se ha hecho la consignación a su juez respectivo.

Undécimo: en este caso, o cuando en virtud del primer ocurso, el tribunal estime que la salud pública no exige la prisión, oficiará al ministro que comunicó la orden de arresto, invitándole a la libertad o consignación del arrestado. Si el ministro no ejecuta uno u otro dentro de quince días, ni expone motivos justos de la demora, el tribunal dará segundo decreto en esta forma: *Hay vehemente presunción de detención arbitraria contra el ministro N. por la prisión de N.*: y desde este acto seguirá el propio tribunal en el conocimiento de la causa de responsabilidad por los trámites señalados en las leyes, oyendo al ministro, a la parte y al fiscal, y determinando lo más conforme a justicia.

ART. 80. En caso de acusación o queja criminal contra individuos de este tribunal, se ocurrirá al emperador, que dará orden de que se reúna luego otro tribunal compuesto del letrado de más edad que hubiere en el cuerpo letrado más antiguo: del regente o decano de la audiencia de esta corte: del rector del colegio de abogados, y del letrado de más edad que hubiere en la diputación provincial. Si no hay alguno, del catedrático jubilado o profesor de derecho más antiguo de la universidad de esta corte que no sea eclesiástico.

SECCIÓN SEXTA
De la hacienda pública

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 81. Los intendentes en las provincias son exclusivamente los jefes de la hacienda pública, que dirigirán conforme a las ordenanzas y reglamentos vigentes, y se entenderán directa e inmediatamente con el ministro de hacienda.

ART. 82. Respecto de cajas, aduanas marítimas e interiores, correos, loterías, consulados y demás oficinas en que ingresen o se manejen caudales de la hacienda pública, los intendentes son jefes privativos en su provincia.

ART. 83. También estarán a la mira de que los factores, administradores y demás empleados en la renta del tabaco, cumplan con los deberes de sus respectivos encargos; y vigilarán pa-

ra que no distraigan los caudales que manejan a otros objetos que los de su instituto, asistiendo en los primeros días del mes al corte de caja y razón de existencias que tengan aquellas oficinas; pero en la parte económica y directiva sólo tendrán conocimiento cuando los jefes principales de la renta necesiten de su autoridad.

ART. 84. Los intendentes reunirán a su empleo el mando superior político de las provincias, por defecto del jefe político militar. También presidirán las diputaciones provinciales, por la no asistencia del jefe político a las mismas.

ART. 85. Los intendentes gozarán de un sueldo fijo y de una cantidad determinada para gastos de su secretaría.

ART. 86. Los intendentes enviarán al gobierno supremo en el principio de cada mes un estado general del ingreso y egreso de las cajas de su provincia, para que se publique en la gaceta del propio gobierno.

SECCIÓN SÉPTIMA
Del gobierno particular de las provincias y pueblos con relación al supremo del imperio

CAPÍTULO ÚNICO
De las diputaciones provinciales, ayuntamientos y alcaldes

ART. 87. Permanecerán las diputaciones provinciales con las atribuciones que hoy tienen, y que seguirán desempeñando con arreglo a la instrucción de 23 de junio de 1813.

ART. 88. Se comunicarán con los ayuntamientos y pueblos del distrito de su inspección y con el gobierno supremo, necesariamente por conducto de su respectivo jefe político, exceptos los casos en que tengan que dirigir contra el mismo alguna queja fundada.

ART. 89. Ayudarán a los jefes políticos, cuan eficazmente puedan, en el cumplimiento de las obligaciones que se les han impuesto en el artículo 45 y siguientes hasta el 54, y también a los intendentes en lo que respectivamente puedan auxiliarlos.

ART. 90. No omitirán diligencia, primero: para formar y remitir cuanto antes al gobierno supremo el censo y estadística de su distrito. Segundo: para extirpar la ociosidad y promover la instrucción, ocupación y moral pública. Tercero: para formar de acuerdo con el jefe político y enviar al gobierno supremo para su aprobación planes juiciosos, según los cuales pueda hacerse efectivo en plena propiedad, entre los ciudadanos indígenas y entre los beneméritos e industriosos, el repartimiento de tierras comunes o realengas, salvos los ejidos precisos a cada población.

ART. 91. Subsistirán también con sus actuales atribuciones, y serán elegidos como se dijo en el artículo 24 los ayuntamientos de las capitales de provincia, los de cabezas de partido, y los de aquellas poblaciones considerables, en que a juicio de las diputaciones provinciales y jefes políticos superiores, haya competente número de sujetos idóneos, para alternar en los oficios de ayuntamiento, y llenar debidamente los objetos de su institución.

ART. 92. En las poblaciones que carezcan de la idoneidad requerida, habrá sin embargo a discreción de las mismas diputaciones y jefes políticos, uno o dos alcaldes, uno o dos regidores, y un síndico elegidos a pluralidad de su vecindario.

ART. 93. Los jefes políticos y diputaciones en cuanto reciban este reglamento harán calificación y discernimiento de las poblaciones en que han de tener efecto los dos artículos precedentes. Y los jefes políticos circularán sus órdenes para el caso a los subalternos de que se habló en el artículo 52.

ART. 94. Las elecciones en los pueblos que hayan de tener dos alcaldes, dos regidores y un síndico, se harán con asistencia del cura o su vicario, presididas por el jefe político subalterno, o por el regidor del ayuntamiento más inmediato que vaya en lugar de dicho jefe. Y las de los pueblos en que sólo ha de haber un alcalde, un regidor y un síndico, serán presididas del propio modo, con asistencia del cura o su vicario, que certificarán la moralidad y aptitud de los que pueden ser elegidos.

ART. 95. Los alcaldes, regidores y síndicos de que hablan los precedentes artículos, estarán sujetos a la inspección del jefe político subalterno más inmediato del propio partido, y a un reglamento provisional que les darán a consulta de las diputaciones provinciales los jefes políticos superiores, sin perjuicio de remitirlo al gobierno supremo para su aprobación.

ART. 96. Se adaptará dicho reglamento a la situación y circunstancias de cada pueblo, a fin de conservar en todos el orden público y promover el bien, autorizando a los alcaldes para conciliar desavenencias, despachar demandas de poca entidad, evitar desórdenes de toda especie, imponer arrestos y correcciones ligeras; y obligándolos a aprehender a los delincuentes y ponerlos a disposición del jefe político de su partido, o del juez de primera instancia más inmediato a quien toque conocer de esta especie de causas, como de las civiles de más entidad que los indicados alcaldes no hayan dirimido por sí, ni terminado por conciliación.

ART. 97. Las diputaciones y jefes políticos acordarán también un reglamento análogo al indicado, para que no falte algún gobierno en las rancherías y haciendas.

ART. 98. Y los jefes políticos superiores, a consulta de las diputaciones, demarcarán los límites y terrenos de la inspección de los ayuntamientos de las cabezas de provincia y de partido, de las poblaciones considerables en que subsistan dichos ayuntamientos en todas sus atribuciones, de los jefes políticos subalternos, y de los alcaldes de que habla el artículo 92.

SECCIÓN OCTAVA
De la instrucción y moral pública

CAPÍTULO ÚNICO

ART. 99. El gobierno con el celo que demandan los primeros intereses de la nación, y con la energía que es propia de sus altas facultades expedirá reglamentos y órdenes oportunas conforme a las leyes, para promover y hacer que los establecimientos de instrucción y moral pú-

blica existentes hoy, llenen los objetos de su institución, debida y provechosamente, en consonancia con el actual sistema político.

ART. 100. El presente reglamento se pasará al emperador para su sanción y promulgación.

México, diciembre 18 de 1822.— *Toribio González.— Antonio J. Valdés.— Ramón Martínez de los Ríos.*

IV

CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO MEXICANO

PROYECTO DE JOSÉ MARÍA COUTO

VALLADOLID, 8 DE ENERO DE 1823

Reproducción del original existente en los Iturbide Papers
en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO MEXICANO

CAPÍTULO PRIMERO
Derecho público de los mexicanos

ART. 1o. Todos los mexicanos son iguales delante de la ley, cualesquiera que sean sus títulos, clases y dignidades.

2o. Todos los mexicanos, sin distinción alguna, están obligados a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

3o. Están obligados asimismo a defender la Patria con las armas, cuando sean llamados por la ley.

4o. Todos los mexicanos son igualmente admisibles a los emplos civiles y militares.

5o. Ningún mexicano podrá ser perseguido ni arrestado sino en los casos previstos por la ley, y en la forma que ella prescriba.

6o. La religión del imperio mexicano es la católica, apostólica romana. El gobierno la protegerá siempre según las leyes e impedirá el ejercicio de cualquiera otra.

7o. Los ministros de esta religión gozarán del fuero eclesiástico, conforme a las leyes del imperio.

8o. Los mexicanos tienen el derecho de imprimir y publicar sus ideas políticas, sujetándose sin embargo, a las leyes que deben reprimir el abuso de esta libertad.

9o. Son inviolables las propiedades de todos los habitantes del imperio.

10. El estado puede exigir el sacrificio de una propiedad por causa de un interés público legalmente probado, pero con una indemnización anticipada.

11. Son mexicanos, 1o. todos los nacidos en el territorio del imperio de padres mexicanos: 2o. los ciudadanos españoles europeos, o americanos que quieran sujetarse a la presente Constitución: 3o. los extranjeros católicos que llevando ocho años de vecindad, estando casados con mujer mexicana adquieran de la Cámara del imperio carta de naturaleza.

CAPÍTULO SEGUNDO
Forma del gobierno del imperio

12. La persona del emperador es sagrada e inviolable, sus ministros son responsables.

13. Al emperador solamente pertenece el poder ejecutivo.

14. El emperador es el jefe supremo del estado, manda las fuerzas de mar y tierra, declara la guerra, hace los tratados de paz, de alianza y de comercio: nombra todos los empleados de la administración pública y forma los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes y seguridad del estado.

15. El poder legislativo se ejerce colectivamente por el emperador, la cámara del imperio, y la cámara de los diputados de las provincias.

16. Al emperador corresponde privativamente proponer la ley.

17. La proposición de la ley se hace según parezca al emperador o a la cámara del imperio o a la de los diputados de las provincias, a excepción de la ley de impuestos o contribuciones que debe dirigirse en derechura a la Cámara de los diputados.

18. Toda ley debe ser examinada en las dos cámaras, discutida y votada libremente por la mayoría absoluta de cada una de ellas.

19. Las cámaras tienen la facultad de suplicar al emperador el que proponga una ley sobre cualquier objeto.

20. Esta súplica no se dirigirá al emperador sino después de haberse discutido y votado en sesión secreta por la Cámara que se hace.

21. Si el emperador accediendo a la súplica hiciese la proposición de la ley la pasará a las dos cámaras para que se examine, discuta y vote libremente, como si la iniciativa se hubiese hecho por él mismo.

22. Votada una ley por cualquiera de las dos cámaras debe remitirse a la otra para que la discuta y vote; si fuese aprobada por ésta se presentará al emperador para que la sancione, mas si fuese rechazada no volverá a tratarse de ella en aquel año.

23. El emperador solamente es quien sanciona y promulga las leyes.

CAPÍTULO TERCERO
Cámara del imperio

24. La cámara del imperio es una parte esencial del poder legislativo.

25. Debe comenzar y cerrar sus sesiones un mes después que la cámara de los diputados de las provincias.

26. Son miembros de la cámara del imperio 1o. Los M.R.R. arzobispos y R.R. obispos y los vicarios capitulares en sede vacante: 2o. El diputado eclesiástico que nombre cada uno de los cabildos de las iglesias catedrales y colegiatas: 3o. Todos los ciudanos a quienes el emperador conceda este privilegio por lo ilustre de su nacimiento o por estar adornados de las virtudes, talento y conocimientos necesarios, o en recompensa de algunos señalados servicios.

27. Los M.R.R. arzobispos y R.R. obispos que por motivos graves a juicio del emperador no puedan asistir a las sesiones de la cámara, podrán nombrar un delegado que haga sus veces en ella.

28. El número de los individuos de la cámara del imperio es ilimitado.

29. El emperador nombra el presidente y secretarios de esta cámara de entre los mismos individuos que la componen.

30. Ningún individuo de la cámara del imperio podrá por este título, gozar dietas, pensiones o sobresueldo de cualquiera naturaleza que sea.

CAPÍTULO IV

§ I

Cámara de los diputados

31. La cámara de los diputados es la reunión de todos los que para este efecto fuesen nombrados por las provincias del impero en la forma que se dirá.

32. La base para esta cámara es la población compuesta de todos los ciudadanos del imperio.

33. Para el cómputo de la población servirá el censo que se haya formado últimamente mientras que pueda hacerse otro nuevo.

34. Por cada cien mil almas de la población compuesta como se ha dicho en el artículo 32, se nombrará un diputado.

35. En el caso de que la población de alguna provincia no llegue a cien mil almas, nombrará sin embargo, un diputado con tal que no baje de cincuenta mil.

§ II

Juntas electorales de parroquia

36. Para la elección de los diputados de Provincia se celebrarán juntas electorales de Parroquia.

37. Estas juntas se celebrarán siempre el primer domingo del mes de octubre del año anterior al de la celebración de las cortes en la respectiva parroquia.

38. Para ser elector de parroquia se requiere estar avencindado y residir en la misma, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, tener casa abierta y una renta anual que no baje de trescientos pesos.

39. Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los que se presentan como electores concurren las calidades requeridas en el artículo anterior para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca y lo que se decidiere se ejecutará sin recurso alguno, para este solo acto.

40. Las juntas de parroquia serán presididas o por el Alcalde de la ciudad, villa o pueblo con asistencia del cura párroco; y si en un mismo pueblo hubiese varias parroquias, presidirá una junta el jefe político o alcalde, otra el otro alcalde y los regidores por suerte presidirán las demás.

41. Llegada la hora de la reunión, que se hará en las casas consistoriales, se dará principio a la junta nombrando dos escrutadores y un secretario de entre los ciudadanos presentes.

42. Se procederá inmediatamente al nombramiento de tres individuos para diputados de la cámara de provincia, lo que se hará designando cada elector en tres personas, para lo que se acercará a la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y el secretario y éste la escribirá en una lista a su presencia, y en esta elección nadie podrá votarse a sí mismo.

43. Para ser nombrado diputado de provincia se requiere ser ciudadano que esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de treinta años, casado o viudo que haya nacido en la provincia, o esté avencindado en ella con residencia al menos de siete años y que tenga una renta anual que no baje de quinientos pesos procedentes de bienes propios.

44. Concluido este acto el presidente, los escrutadores y el secretario reconocerán las listas y aquél publicará en otra lista el nombre de los tres ciudadanos que hayan recibido mayor número de votos.

45. El secretario extenderá el acta que con él firmarán el presidente y los escrutadores y se remitirá copia de ésta al jefe político, gobernador o presidente de la provincia.

§ III
Juntas electorales de provincia

46. Las juntas electorales de provincia se compondrán del jefe político de la misma, de los alcaldes, regidores y cura o curas de la capital, y de diez hombres buenos en quienes concurran las mismas circunstancias que conforme al artículo 38, se requieren para ser elector de parroquia.

47. Estos hombres buenos se nombrarán por el jefe político, ayuntamiento y curas párrocos de entre los vecinos de la misma capital.

48. Reunida esta junta el domingo segundo del mes de noviembre del año anterior al de la reunión de las cámaras, se procederá inmediatamente a nombrar, de entre sus individuos, dos escrutadores y un secretario.

49. Enseguida se abrirán las listas que se hayan remitido de las parroquias y leyendo en voz alta los nombres de todos los comprendidos en ellas, se irán apuntando por el secretario en presencia de los escrutadores.

50. Concluida esta operación se procederá por la junta a nombrar de entre los mismos individuos que hayan tenido puestos en las listas de parroquias aquel diputado o diputados que según el censo de la población correspondan a la provincia en la forma siguiente:

51. Si algún individuo viniere puesto en la mayor parte absoluta de las listas de parroquia en el mismo hecho recaerá en él el nombramiento de diputado de provincia.

52. Si ninguno tuviese esta mayoría se procederá por la junta a la elección del diputado o diputados, y quedarán nombraros los que reúnan la mayoría absoluta de los votos de la misma.

53. Las dudas que se susciten sobre si alguno de los individuos propuestos por las parroquias concurren las circunstancias que según el artículo 43 se requieren para ser diputado de provincia se resolverán en el acto por la misma junta y lo que resolviere se ejecutará sin recurso alguno.

54. El secretario extenderá el acta de las elecciones, que con él firmarán el presidente y todos los electores, los cuales enseguida otorgarán sin excusa alguna sus poderes a los diputados nombrados, según la forma siguiente:

En la ciudad o villa de... a... días del mes de noviembre del año de... en las salas de... hallándose congregados los señores (aquí se pondrán los nombres del presidente y de todos los electores que forman la junta de provincias) fijaron ante mí el infrascripto escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido con arreglo a la Constitución del imperio mexicano al nombramiento de diputados de la cámara de las provincias, con todas las solemnidades prescritas por la misma Constitución, habían hecho el nombramiento de los diputados que en nombre y representación de esta provincia han de concurrir a la cámara y

que fueron electos por diputados para ella por esta provincia los señores N.N.N. como resulta de la acta extendida y firmada por N.N.: que en su consecuencia les otorgan poderes amplios a todos juntos y a cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo dentro de los límites que la constitución prescribe, sin poder derogar, alterar o variar en manera alguna ninguno de sus artículos bajo ningún pretexto, y que los otorgantes se obligan por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia a tener por válido y obedecer y cumplir cuando como tales diputados de la cámara hicieren con arreglo a la Constitución del imperio mexicano. Así lo expresaron y otorgaron hallándose presentes como testigos N.N. que con los señores otorgantes lo firmaron: de que doy fe.

55. Para la indemnización de los diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con las dietas que el gobierno les señalare a propuesta de la cámara del imperio.

56. Los diputados así de la cámara del imperio como de la de las provincias serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal que se establezca en el modo y forma que se prescribirá en el reglamento del gobierno interior de las mismas cámaras.

57. Este reglamento, lo mismo que las demás leyes, debe ser propuesto por el emperador, examinado, discutido y votado libremente por las dos cámaras.

§ IV
De la celebración de las cámaras

58. Se reunirá la cámara de los diputados de provincia todos los años en la capital del reino, en edificio destinado a este solo efecto en el día primero de febrero.

59. Las sesiones de la cámara durarán en cada año tres meses consecutivos y sólo podrán prorrogar sus sesiones por otro mes más si el emperador lo determinara así.

60. Los diputados se renovarán en su totalidad cada dos años y no podrán volver a ser elegidos sino mediando otra diputación.

61. En el reglamento interior de las cámaras se prescribirán las formalidades con que se han de examinar los poderes que presenten los diputados y el juramento que éstos deben prestar para el desempeño de su encargo.

62. El presidente de esta cámara será el que nombre el emperador y su encargo durará todo el tiempo de las sesiones de la misma.

63. La cámara nombrará de entre sus individuos a pluralidad absoluta de votos, cuatro secrearios cuyas atribuciones se especificarán en el reglamento del gobierno interior de la misma cámara.

Nota primera: para el arreglo constitucional de la sucesión a la corona del imperio me parecen muy juiciosas las determinaciones de la constitución española desde el artículo 174 hasta el 200 que podrán ponerse en el lugar que le corresponda *mutatis mutandis.*

Nota segunda: las leyes que deben arreglar el gobierno interior político de las provincias no deben a mi juicio ser constitucionales porque deben variarse según se alteren o varíen las costumbres y luces de nuestros pueblos.

Nota tercera: el arreglo del poder judicial y el de los tribunales de justicia del imperio por la misma razón que el gobierno político de las provincias no debe ser constitucional. El tiempo y las luces fijarán de un modo estable lo que sea más conveniente y justo sobre este particular. Unas leyes particulares podrán servir por ahora a fin de conciliar la justicia y libertad de los ciudadanos con la seguridad de un estado naciente y poco consolidado. Valladolid 8 de enero de 1823.

José María Couto

V

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LA REPÚBLICA DE MÉXICO

FORMADO POR STEPHEN F. AUSTIN, DE TEXAS

CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE MARZO DE 1823

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LA REPÚBLICA DE MÉXICO

Nosotros, el pueblo de la Nación Mexicana, habiendo asumido aquellos derechos naturales e imprescriptibles que nos pertenecen como miembros de la gran familia humana, por lo tanto nos declaramos una nación independiente; y estando deseosos del establecimiento de un sistema de gobierno fundado en las bases sólidas de la Justicia Natural, de los derechos iguales y del bien común, con el objeto de asegurar la unión, fuerza, armonía, igualdad y las bendiciones de la libertad para nosotros y la posteridad, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para el Gobierno de la Nación Mexicana.

CAPÍTULO I
Constitución y máximas fundamentales

ARTÍCULO 1. El pueblo de la Nación Mexicana es independiente de España y de cualesquiera otros poderes, y posee el exclusivo derecho de gobernarse a sí mismo como Soberano y Nación independiente.

ARTÍCULO 2. Todos los hombres como individuos tienen derechos ciertos, naturales, esenciales, que les son inherentes; entre los cuales están el goce y la defensa de la vida y la libertad, el de la posesión y la protección de la propiedad, y en una palabra el de la búsqueda y obtención de la felicidad.

ARTÍCULO 3. Cuando los hombres entran en la sociedad del Estado someten algunos de sus derechos naturales a esa Sociedad, con el objeto de asegurar la protección de otros; y sin tales compensaciones la sumisión es inválida.

ARTÍCULO 4. La sumisión de tales derechos debe ser libre, voluntaria y sin ninguna coerción, o la misma es inválida.

ARTÍCULO 5. Los derechos así sometidos son depositados en las manos de los representantes del Pueblo, para ejercerse por la seguridad y el bien común, y para la felicidad general de todos.

ARTÍCULO 6. Estos representantes constituyen y administran el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 7. La soberanía reside original y esencialmente en el pueblo, y por su naturaleza es inalienable, imprescriptible e indivisible; los representantes nacionales son por lo tanto y en todo momento responsables ante el pueblo.

ARTÍCULO 8. El gobierno es instituido para el beneficio común, protección y felicidad de toda la comunidad y no para los intereses privados o el engrandecimiento de cualquier hombre, familia o clase de hombres; por lo tanto, siempre que los objetivos de la sociedad se co-

rrompan o la libertad pública se encuentre manifiestamente amenazada, y los otros cualesquiera medios de hacer justicia sean ineficaces, el pueblo puede y por derecho debe reformar el antiguo o establecer un nuevo Gobierno. La doctrina de la no resistencia al poder arbitrario es absurda, degradante y destructiva para la felicidad de la humanidad.

ARTÍCULO 9. El pueblo tiene derecho de reunirse en asamblea en forma ordenada y pacífica, para consultar sobre el bienestar público, dar instruciones a sus diputados y solicitar del Congreso reparaciones por injusticias.

ARTÍCULO 10. Una bien regulada Milicia Nacional es la propia y natural defensa de una Nación, y los extranjeros deberán ser privados del derecho de conservar y portar armas, excepto en aquellos casos que se encuentren especificados por una ley y en los cuales por la tranquilidad pública pueda considerarse necesario.

ARTÍCULO 11. Todas las elecciones deben ser libres y todo habitante de la nación, teniendo las calificaciones requeridas por ley, tiene igual derecho de elegir y de ser electo a un cargo público.

ARTÍCULO 12. Todo ciudadano tiene derecho a recurrir legalmente por todos los daños que pudiera sufrir en su persona, propiedad o carácter, obteniendo libremente se le haga justicia, sin verse obligado a pagarla.

ARTÍCULO 13. Toda persona tiene el derecho de estar asegurado contra investigaciones ilegales y detenciones de su persona, propiedades, papeles y posesiones, ninguna de las cuales deben ser afectadas excepto en los casos y con las formalidades que prescribe la ley.

ARTÍCULO 14. Ninguna parte de las propiedades de los hombres deberán ser expropiadas para uso público, excepto por su propio consentimiento, o en virtud de una ley regulada y promulgada por el Congreso; y ningún impuesto o contribución deberá ser exigido o cobrado sin contar con la autoridad de una ley expedida por el Congreso.

ARTÍCULO 15. La libertad de Prensa y Expresión es tan esencial a la libertad para el mejoramiento de la Nación, que no debe ser violada, y puede ser únicamente restringida por el Congreso para prevenir ataques escandalosos de carácter privado.

ARTÍCULO 16. Las leyes retroactivas o *Ex post facto* son opresivas e injustas, y tales leyes no deben ser aprobadas.

ARTÍCULO 17. En todos los casos y en todos los tiempos los Militantes deben estar bajo estricta subordinación al poder civil, excepto en los casos previstos en la ley en tiempo de guerra o invasión.

ARTÍCULO 18. Ningún soldado en tiempo de paz podrá ser acuartelado en ninguna casa o hacienda sin el consentimiento del propietario, y en tiempo de guerra tales acuartelamientos deben de hacerse en la forma prescrita por la ley.

ARTÍCULO 19. Ninguna persona deberá estar sujeta a corte marcial, excepto los empleados en el ejército o en la marina o en la milicia durante su servicio.

ARTÍCULO 20. La base de la representación nacional es la población, incluyendo todos los nativos nacidos libres cualquiera que sea su ascendencia, ya sean americanos, europeos o africanos, y los extranjeros que son considerados como ciudadanos.

ARTÍCULO 21. Los monopolios y privilegios especiales o exclusivos, ya sean a favor de un individuo, o de una asociación, o eclesiásticos, son perjudiciales a los intereses verdaderos de la nación, contrarios a la justicia natural, y están absolutamente prohibidos, excepto cuando

son concedidos de acuerdo con las formalidades de la ley, por un periodo limitado, como una compensación por inventos nuevos y mejoramientos en las artes o las ciencias.

ARTÍCULO 22. No hay cargos hereditarios, honorarios o títulos de nobleza o títulos de cualquier clase, excepto aquellos que la administración conceda.

ARTÍCULO 23. Ninguna cantidad de dinero podrá ser retirada del tesoro y de ninguna manera apropiarse por alguien, excepto en virtud de una ley del Congreso, y el Presidente de México, Ministros o cualquiera otra persona que viole este artículo será culpable de alto crimen y castigado de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 24. El poder de suspender las leyes o la ejecución de las mismas será ejercido sólo por el Congreso.

ARTÍCULO 25. La perpetuación de bienes por primogenitura con la exclusión de los hijos más jóvenes, está calculada arbitrariamente para prevenir la distribución de la propiedad, por lo tanto, como violación de la justicia para enriquecer a los pocos y empobrecer a los muchos. La creación y perpetuación de la aristocracia y la engendración de la indolencia, arrogancia, vicio y corrupción, es destructiva de la felicidad individual, subversiva de la prosperidad nacional, contraria a los principios de un Gobierno libre y peligrosa para las libertades del pueblo; todos estos privilegios deberán ser destruidos, y un sistema equitativo de legados hereditarios deberá ser establecido, fundado en bases de justicia equitativa y prosperidad nacional.

ARTÍCULO 26. Los Gobiernos Despóticos tienen empeño en mantener las mentes del pueblo a oscuras por la prohibición de introducir libros proscritos por sus principios liberales. Los Gobiernos Libres, por el contrario, tienen las puertas abiertas para su admisión sin excepción, y la experiencia ha probado totalmente los efectos beneficiosos de esta política liberal que da luz al pueblo, el que muy pronto discrimina cualquiera doctrina perversa o inmoral que tales libros puedan contener, y las puras o virtuosas, rechazando las primeras y beneficiándose con las últimas. Todas las restricciones o prohibiciones en la introducción, venta o lectura de libros, están calculadas para prevenir la difusión de la luz intelectual y el conocimiento, retardar el mejoramiento de la Nación por la perpetuación de la ignorancia, la superstición y los principios serviles, y son contrarias al genio de las instituciones libres y nunca deberán ser impuestas bajo ningún pretexto.

ARTÍCULO 27. Una nación sólo puede ser libre, feliz y grande, en proporción a la virtud e inteligencia del pueblo; la propagación del conocimiento útil y de las artes y ciencias es por lo tanto de primaria importancia para la libertad y prosperidad nacional, y para este gran objetivo será deber del Congreso el proveer por todos los medios en su poder el pronto establecimiento de escuelas, academias y colegios a lo largo de toda la nación, para la instrucción de los jóvenes y niños.

ARTÍCULO 28. Con el objeto de prevenir que aquellos investidos de autoridad se conviertan en opresores, el pueblo tiene el derecho, en los momentos y en la manera como se encuentra establecido por la forma de gobierno, para removerlos de los puestos públicos y reintegrarlos a la vida privada, y llenar las vacantes por medio de elecciones regulares y de nombramientos.

ARTÍCULO 29. El frecuente recurso a los principios fundamentales de la Constitución; una rígida obediencia a las leyes; y una estricta adhesión a la justicia, temperancia, industriosidad,

frugalidad y todas las virtudes sociales y civiles, son necesarias para preservar las bendiciones de la libertad y del buen gobierno.

Artículo adicional

Las deudas del Gobierno contraídas en nombre de la Nación por sus representantes legales, para la causa de la independencia desde su declaración en el año de 1810, deberán ser reconocidas como parte de la deuda Nacional de la República de México, en la forma que el Congreso lo determine por ley.

Todos los oficiales y soldados que hayan luchado por la causa de la independencia desde su primera época, y las viudas e hijos de aquellos que hayan muerto por la misma, merecen la gratitud de la nación y deben ser recompensados tanto como sea consecuente con la justicia y el estado financiero de la nación.

CAPÍTULO II
Sobre religión

ARTÍCULO 30. La religión Romana Católica Apostólica es la religión de la Nación Mexicana.

CAPÍTULO III
Sobre el territorio de la nación mexicana y sus ciudadanos

ARTÍCULO 31. El territorio de la Nación Mexicana está compuesto de todo el país, extendiéndose desde la línea divisoria establecida en el Norte por los Estados Unidos y España en el tratado de límites negociado por don Luis de Onís, hasta el istmo de Darién en el Sur, incluyendo todas las islas, las bahías, y los puertos pertenecientes a las costas del Atlántico o del Pacífico dentro de dichos límites.

ARTÍCULO 32. Todas las personas nacidas libres en esta nación, cualesquiera que sea su origen, son ciudadanos y también los extranjeros naturalizados de acuerdo con la ley.

Adición del artículo 32

Todo mexicano será fiel a la Constitución, obediente de las leyes y respetuoso de las autoridades legales establecidas; contribuirá en proporción a sus medios al gasto público, y tomará las armas en defensa de su país cuando sea llamado de acuerdo con la ley; también estará obligado a servir en cualesquier cargo al cual pueda ser electo por votación del pueblo.

ARTÍCULO 33. El derecho de ciudadanía puede perderse por expatriación voluntaria, por adquirir una nueva ciudadanía, por crímenes penados por la ley, y por no ser capaz de leer y escribir a la edad de 20 años.

CAPÍTULO IV
Sobre el gobierno y forma de la nación

ARTÍCULO 34. El carácter de esta comunidad será el de República de México.

ARTÍCULO 35. El Gobierno es una república representativa.

ARTÍCULO 36. Los poderes del gobierno, definidos y concedidos en esta Constitución, estarán establecidos en tres ramas distintas y separadas, cada una se mantendrá separada e independiente de cualquier otra; la consistencia de su conexión vincula toda la fábrica de la Constitución.

CAPÍTULO V
Sobre la legislatura

ARTÍCULO 37. Los poderes legislativos aquí concedidos radicarán en un Congreso compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado.

Cámara de diputados

ARTÍCULO 38. La Cámara de Diputados estará compuesta por miembros electos por el pueblo cada dos años.

ARTÍCULO 39. El número de diputados será de uno por cada 30 000 habitantes; pero cada provincia tendrá cuando menos un diputado.

ARTÍCULO 40. El Congreso tiene el poder de alterar la proporción establecida en el artículo anterior cuando lo considere apropiado.

ARTÍCULO 41. Para ser Diputado se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, nativo o vecino de la Provincia por la cual es elegido; poseer una sólida moralidad, buena reputación, acreditado patriotismo, en posesión de reales y suficientes propiedades para una decente manutención, instruido en los principios del derecho nacional, o en elementos de agricultura, minas, manufacturas o comercio, para un mayor éxito en el desempeño de los altos y sagrados deberes de la nación.

ARTÍCULO 42. Las Provincias que envíen no más de 10 diputados pueden elegir un eclesiástico secular; las Provincias que envíen más de diez y menos de veinte diputados, pueden elegir dos eclesiásticos seculares. Las Provincias que envíen más de veinte y menos de treinta diputados, pueden elegir tres eclesiásticos seculares; y así sucesivamente en la misma proporción, pero ninguna Provincia podrá enviar un número mayor a éste de diputados eclesiásticos.

ARTÍCULO 43. Eligiéndose un mayor número de eclesiásticos que el permitido en el artículo anterior, la Cámara de Diputados decidirá cuál deberá ser relevado, para ajustarse al número prescrito. Los correspondientes suplentes deberán de ocupar las vacantes así ocasionadas; pero siendo el suplente también un eclesiástico, la Cámara ordenará una nueva elección para el distrito que quedó sin representación, declarando en dicha orden que no deberá ser electo un eclesiástico por dicho distrito para el Congreso.

ARTÍCULO 44. Si ocurriera que una persona es elegida por la Provincia en que nació y también por la de su residencia, deberá el elegido representar la última y el correspondiente suplente representará la primera. Lo mismo deberá de hacerse en caso que una persona fuese elegida por dos distritos de la misma Provincia cuando resida en uno de ellos; pero si no reside en ninguno de los dos distritos en los que es elegido, puede optar por el que desea representar, notificando al correspondiente suplente.

ARTÍCULO 45. Las calificaciones para los suplentes deberán ser las mismas que para los propietarios.

Elección de diputados

ARTÍCULO 46. Las Diputaciones Provinciales deberán de tiempo en tiempo censar los habitantes de sus respectivas provincias en la forma prescrita por la ley. A los habitantes deberán dividirlos entre tantos distritos como tengan derecho a diputados en el Congreso, de manera que incluyan de la manera más apropiada posible y practicable 30 000 habitantes para cada distrito. Tales distritos deberán designarlos por número cuando hay más de uno en la Provincia; como el primero, segundo o tercer distrito de tal Provincia.

ARTÍCULO 47. Los límites de los distritos electorales establecidos en el artículo precedente, deberán ser claramente definidos y hacerlos conocidos por bando del Jefe Político de la provincia, anunciado en los lugares públicos más visibles en cada parroquia. Cada bando deberá designar también la capital de cada distrito, o el lugar donde las juntas Electorales aquí mencionadas tienen lugar.

ARTÍCULO 48. Después de dividir la población de cada Provincia en distritos, como se estableció, quedando una fracción permanente de más de 20 000, deberán formar un distrito separado y elegir un diputado como los otros, pero fracciones de menos de 20 000 deberán de sumarse a otros distritos.

ARTÍCULO 49. Deberá haber un diputado a la Cámara de este nombre y un suplente elegido para cada uno de los distritos.

ARTÍCULO 50. Con objeto de dar cumplimiento al artículo anterior, cuando una elección es requerida ya sea por la Constitución o por una orden para una elección especial para llenar una vacante, los Jefes Políticos de las Provincias darán noticia pública por conducto de un bando en todas las parroquias y lugares públicos de la parroquia, designando el día o días de la elección, los que deberán ser los mismos en toda la Provincia. En cada bando los objetos de la elección deberán ser declarados, y mencionada la parte de la Constitución que prescribe las calificaciones para los diputados; también se nombrará un Alcalde y dos asistentes para presidir como jueces la elección en cada Parroquia, y un Alcalde para presidir la Junta electoral del distrito.

ARTÍCULO 51. El bando que se menciona en el artículo anterior, debe ser impreso y publicado tres meses antes a la fecha de las elecciones normales, y un mes antes de las especiales.

ARTÍCULO 52. En el día fijado, el Alcalde y asistentes designados para presidir las elecciones en la Parroquia, deberán reunirse en el lugar más conveniente y central; tal lugar debe ser designado por ellos y hecho del conocimiento público por un bando colocado cuando menos

15 días antes del día de la elección. Una vez reunidos, deberán designar tres secretarios para que registren los procedimientos de la elección.

ARTÍCULO 53. En la elección el nombre de cada votante será registrado por los secretarios; las elecciones deben de comenzar a las 9 y terminar a las 6 pm. La Ley determinará si los votos deberán darse a viva voz o por papeletas, y regulará todas las formalidades necesarias y no previstas aquí.

ARTÍCULO 54. Cada uno de los secretarios hará un completo registro de la elección, el que será firmado por el Alcalde, por los dos asistentes y testigos, y por todos los secretarios.

ARTÍCULO 55. En el encabezamiento de los registros mencionados en el último artículo se consignarán el nombre de la Parroquia, número de distrito de la Provincia, tiempo y objeto de la elección, nombres del presidente, alcalde y asistentes, y nombre del secretario que los redactó.

ARTÍCULO 56. Dos de los mencionados registros deberán de sellarse en la presencia del Alcalde por dos de los asistentes y los empleados; un registro deberá ser enviado a la Secretaría de la Diputación Provincial o al Jefe Político de la Provincia, y el otro será llevado por el Alcalde o por alguno de sus asistentes al Presidente de la Junta Electoral del Distrito; el registro restante deberá ser depositado en los archivos de la Parroquia para ser inspeccionado por cualquier persona.

ARTÍCULO 57. Cinco días después al de la elección, la Junta electoral del distrito se reunirá en el lugar designado como capital de distrito de acuerdo con el artículo 47, y en la casa que el Presidente de la Junta elija.

ARTÍCULO 58. Las Juntas electorales de los distritos deberán integrarse con los alcaldes o uno de los asistentes en cada una de las elecciones en las parroquias, y el alcalde designado de acuerdo con la última cláusula del artículo 50, para presidirla.

ARTÍCULO 59. Estando reunida la Junta Electoral del Distrito, el Presidente en presencia de la Junta deberá abrir los registros y contar los votos de las elecciones en las parroquias del distrito, y la persona que haya recibido un mayor número de votos en el distrito, será Miembro de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 60. Los certificados de la elección se harán por triplicado por la Junta electoral, consignando el nombre de la Provincia, número del distrito, fecha y objeto de la elección, y nombre de la persona elegida; el certificado será firmado por todos los miembros presentes de la Junta y testificado por el Presidente.

ARTÍCULO 61. Dos de los certificados mencionados en el artículo anterior deberán sellarse en presencia de la Junta, constando en la parte posterior "certificado de la elección para diputado en el... Distrito de la Provincia de...". Cada constancia deberá ser firmada por el Presidente de la Junta. Uno de ellos se dirigirá al Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de México, y el otro será dirigido al Jefe Político de la Provincia a quien deberán enviarse ambos. El tercer certificado deberá ser depositado en los archivos de la iglesia del lugar, para su inspección por cualquiera.

ARTÍCULO 62. El Jefe Político de la provincia, una vez que reciba los certificados mencionados, inmediatamente enviará uno directamente al Presidente de la Cámara de Diputados por medio del Secretario de Estado del Interior, para ser entregado el primer día que dicha Cámara se reúna después de su recibo, y se comunicará sin demora oficialmente el contenido a la persona electa, depositando el original en los archivos de la Provincia.

ARTÍCULO 63. Cuando ocurran algunas vacantes en cualquier Provincia, el Jefe Político, siendo oficialmente notificado, dará órdenes para una elección en el correspondiente distrito para llenar tal vacante.

ARTÍCULO 64. La Cámara de Diputados elegirá su Presidente, secretarios y otros oficiales, y los removerá cuando lo considere conveniente.

ARTÍCULO 65. La Cámara de Diputados tendrá el solo derecho de *impeachment* o acusación en contra del Presidente y Vicepresidente de México; de los Jueces del Supremo Tribunal de Justicia; de los Secretarios de despacho; de los embajadores en cortes extranjeras, Arzobispos y Obispos; de los Generales de Ejército, Gobernadores, Jueces del Supremo Tribunal de Justicia de Provincia y de otros funcionarios de no menor rango que los mencionados. Se requerirá una mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Representantes para formular una acusación, la que siendo ordenada se notificará al Senado y a la parte acusada. La Cámara nombrará una comisión para conducir y manejar la prosecución de la causa ante el Senado.

El senado

ARTÍCULO 66. El Senado deberá estar compuesto de dos Senadores por cada Provincia, elegidos por ocho años por las Diputaciones Provinciales, y de un obispo que debe ser elegido, con un suplente, por las diócesis de la Nación en la forma prescrita por la ley.

ARTÍCULO 67. El obispo más antiguo será el primer senador hasta que otro sea electo de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 68. Ningún otro eclesiástico, excepto el obispo o su suplente, será Senador.

ARTÍCULO 69. Para ser Senador se requiere, en adición a las calificaciones para diputado a la Cámara de Diputados, ser mayor de 35 años.

ARTÍCULO 70. Deberá haber un senador Suplente elegido por las Diputaciones Provinciales de cada provincia.

ARTÍCULO 71. En la primera sesión del Senado sus miembros se dividirán en cuatro clases; las sillas de los senadores de la primera clase estarán vacantes al final del segundo año; las sillas de los de segunda clase al final del cuarto año; las de la tercera clase al final del sexto año, y las de la cuarta clase al final del octavo año, de tal manera de que una cuarta parte deberán ser escogidos cada dos años.

ARTÍCULO 72. El Senado tendrá la facultad de conocer de todas las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados. Cuando el Presidente o Vicepresidente de México estén ausentes, el Presidente del Tribunal de Justicia presidirá. Ninguna persona será convicta a menos que la condene una mayoría de las dos terceras partes de los Senadores presentes.

ARTÍCULO 73. La sentencia dictada conforme al último artículo puede remover del cargo administrativo, descalificar para cualquier puesto gubernamental, ser de destierro o muerte; pero nunca decretará la confiscación de la propiedad, ni afectará a su familia, hijos o amigos del condenado, a menos que pudieran ser cómplices, y en tal caso ellos estarán sujetos a juicio y condena por un tribunal competente. Los bienes podrán ser confiscados si en el juicio se ventilara el delito de peculado.

ARTÍCULO 74. El condenado por el delito a que se refiere el artículo anterior, puede ser acu-

sado por daños a terceros afectados, y puede ser juzgado y castigado de acuerdo con las leyes por los tribunales de justicia.

ARTÍCULO 75. El Vicepresidente de México será Presidente del Senado, y tendrá voto de calidad en caso de empate. En ausencia del Vicepresidente y cuando él esté actuando como Presidente de México, el senado escogerá un subpresidente para que presida.

ARTÍCULO 76. El Senado elegirá sus secretarios y otros oficiales.

Sobre las dos cámaras del congreso

ARTÍCULO 77. No podrá ser Diputado o Senador en el Congreso quien tenga algún cargo administrativo, excepto en la Milicia. Ningún Diputado o Senador podrá recibir nombramiento del Ejecutivo durante el periodo para el que fue electo sin obtener previamente el consentimiento del Congreso.

ARTÍCULO 78. Cada Cámara será juez de las elecciones, resultados y calificaciones de sus miembros, y con una mayoría de dos tercios pueden expulsar a cualquiera de ellos. En el despacho de los asuntos ordinarios se requiere un quórum de la mitad más uno de los individuos de cada Cámara.

ARTÍCULO 79. Cada miembro llevará un diario de sus actividades, que será publicado, excepto en aquellas partes de carácter reservado.

ARTÍCULO 80. Cada Cámara puede determinar las reglas de sus procedimientos, castigar a sus miembros por conducta desordenada e impropia, y con una mayoría de las dos terceras partes expulsar a un miembro.

ARTÍCULO 81. Ninguna Cámara podrá durante el periodo de sesiones del Congreso suspenderlas por más de tres días seguidos sin el consentimiento de la otra.

ARTÍCULO 82. Las sesiones de las dos Cámaras deberán efectuarse en recintos separados y deberán ser públicas, excepto cuando sea requerido el secreto.

ARTÍCULO 83. Las dos Cámaras podrán reunirse en un recinto para recibir las comunicaciones del Ejecutivo en la sesión inaugural, para elegir los jueces del Supremo Tribunal de Justicia, o para cualquier otro propósito extraordinario con el solo objeto de consulta, pero ninguna ley será aprobada cuando las cámaras sesionen juntas.

ARTÍCULO 84. Deberá haber, cuando menos, un periodo de sesiones del Congreso cada dos años; y el presidente de México puede convocar al Congreso por decreto cuando lo considere conveniente.

ARTÍCULO 85. En la elección de Diputados y Senadores para el Congreso deberá de haber una debida proporción de abogados, agricultores, mineros, artistas y comerciantes, elegidos para combinar en la legislatura nacional los talentos y las experiencias, fuentes y fundamentos de la independencia, prosperidad y riqueza de las naciones.

ARTÍCULO 86. Los miembros de cada Cámara al tomar posesión de su cargo jurarán sostener y defender la Constitución de México y desempeñar sus deberes fielmente de acuerdo con su leal saber y entender.

ARTÍCULO 87. Cada Cámara tendrá el poder de castigar los desprecios o insultos que se le hagan.

ARTÍCULO 88. La libertad de expresión y de discusión en el Congreso será absolutamente ilimitada e inviolable, y ningún Diputado o Senador podrá ser responsabilizado por cuanto diga o haga en el Congreso. Sin embargo están expuestos a ser arrestados y juzgados por traición, corrupción o cualquier otro crimen de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 89. Los Senadores y Diputados recibirán una compensación fijada por ley, la que será pagada del Tesoro Nacional.

Sobre los poderes del congreso

ARTÍCULO 90. Los poderes del Congreso son:

1. Decretar, reformar y rechazar leyes.
2. Fijar y recaudar contribuciones e impuestos de cualquier clase.
3. Declarar la guerra y dictar las bases e instrucciones para hacer la paz.
4. Otorgar o denegar la admisión de tropas extranjeras dentro de la nación.
5. Levantar y sostener el ejército y la armada, y declarar la fuerza militar y naval que debe mantenerse en servicio durante la guerra o la paz.
6. Declarar el grado y paga de los oficiales, marinos y tropa en servicio, y establecer las reglas y reglamentos para su gobierno.
7. Obtener dinero sobre el crédito de la nación y prescribir la forma de examinar, y reconocer las deudas contraídas en el nombre de la nación por los representantes legales del gobierno independiente de México, desde la proclamación de su independencia en el año de 1810.
8. Regular el comercio con las naciones extranjeras y aprobar los tratados y alianzas, antes de su ratificación.
9. Establecer y regular el correo.
10. Acuñar dinero, regular su valor y el de cambio con la moneda extranjera, y establecer penas por falsificación de moneda.
11. Regular pesos y medidas.
12. Establecer por ley la forma de obtener la naturalización y adquisición de los derechos ciudadanos.
13. Promover el progreso de las artes y las ciencias, asegurando por un tiempo limitado a los autores el exclusivo privilegio de sus respectivos escritos y descubrimientos.
14. Establecer cualesquiera tribunales u oficinas que no estén especialmente previstas en esta Constitución; regular y establecer los procedimientos judiciales; y establecer la forma de juicio conocido en los Estados Unidos de Norte América por el nombre de juicio por "Jurado" bajo los reglamentos que se consideren apropiados.
15. Definir y castigar piraterías y felonías cometidas en alta mar, y las ofensas en contra de los derechos públicos de las naciones.
16. Definir y fijar penas a los delitos de traición y sedición.
17. Limitar la libertad de prensa para evitar ataques escandalosos y calumnias a las personas.
18. Tomar las medidas para armar, organizar y disciplinar las milicias.

19. Reglamentar los gastos de la administración en todas sus ramas.

20. Conceder pensiones por servicios hechos a la Nación.

21. Aprobar las leyes necesarias para ceder, vender, rentar o utilizar en cualquiera otra forma las tierras públicas, minas u otra propiedad pública.

22. Adoptar las medidas necesarias y equitativas para mantener en explotación las minas actualmente en posesión de particulares.

23. Establecer los puertos de entrada y oficinas aduanales.

24. Promover y estimular cualquier especie de industria y mejoramiento.

25. Establecer un sistema general de educación, y asignar los fondos públicos o cualquiera propiedad pública para dotar y sostener las escuelas, academias y colegios u otras instituciones literarias.

26. Asignar fondos públicos para mejoramientos de carreteras, canales, u otros trabajos de utilidad pública.

27. Otorgar concesiones, por periodos limitados, a Compañías, ciudades, pueblos o individuos para realizar actividades de Comercio, Banca, servicios municipales, o cualquier otro objeto útil; previniendo que ninguna concesión contravendrá el Artículo 21 de esta Constitución.

28. Adoptar todas las medidas necesarias para la preservación de la salud, la tranquilidad y seguridad públicas.

29. Excluir a todos los eclesiásticos de cualquier Cámara del Congreso y de cualquier empleo gubernamental. Establecer o destruir cualquier orden religiosa y dotar a las establecidas con fondos públicos, o dividir o disponer de la propiedad de aquellas destruidas como se considere más útil del bien público.

30. Conceder poderes legislativos u otros a las Diputaciones Provinciales para los asuntos internos de las provincias.

31. Hacer tal división del territorio de la Nación Mexicana en Provincias y partidos como sea estimado más conveniente y justo. Cuando tales divisiones sean hechas deberán ser permanentes y respetadas las Provincias.

32. Suspender por un tiempo limitado ciertas partes de esta Constitución, cuando se considere absolutamente necesario para la seguridad pública en caso de invasión, traición u otro peligro inminente para el Estado; previendo que tal suspensión cesará en el momento que la causa cese, siempre que las tres cuartas partes de cada Cámara de Congreso convengan en ello.

33. Declarar, definir y limitar el poder del Papa sobre los eclesiásticos e iglesias de esta Nación; reformar las leyes eclesiásticas y destruir todos los abusos que puedan existir en la Iglesia. Regular y fijar los salarios de los curas, canónigos, obispos y otros dignatarios o empleados de las iglesias en la Nación.

34. Anular o prohibir excomuniones u otras censuras de la Iglesia, o restringirlas como se considere conveniente.

35. Hacer todas aquellas leyes que se considere necesarias y apropiadas para llevar a efecto los poderes precedentes y las previsiones de esta Constitución.

CAPÍTULO VI
De la formación de las leyes

ARTÍCULO 91. El poder de formar las leyes reside en las dos Cámaras del Congreso.

ARTÍCULO 92. Cualquier diputado o senador tiene el derecho de iniciar un proyecto de ley, que debe presentarse por escrito y explicando las razones que lo fundan.

ARTÍCULO 93. Tomar el 133 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 94. Tomar el 134 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 95. Tomar el 135 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 96. Tomar el 136 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 97. Tomar el 137 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 98. Tomar el 138 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 99. Tomar el 139 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 100. Si cualquiera de las Cámaras rechazara un proyecto de ley en cualquiera de sus etapas, dicho proyecto no podrá ser propuesto nuevamente ese mismo año.

ARTÍCULO 101. Si el proyecto fuera adoptado, deberá incluir todas las enmiendas y adiciones que se le hubiesen hecho; deberá ser leído en la Cámara por última vez, y si se encuentra que ha sido correctamente redactado, lo firmarán los secretarios para enviarlo a la otra Cámara.

ARTÍCULO 102. Cuando el proyecto llegue a la otra cámara deberá pasar por las mismas formalidades que en la primera, y si es aprobado sin enmiendas o alteración, deberá ser firmado por el Presidente de cada Cámara, e inmediatamente presentado para su aprobación al Presidente de México.

ARTÍCULO 103. Pero si el proyecto hubiere sido reformado en la otra Cámara, deberá regresarse con las enmiendas a la Cámara de origen. Dichas enmiendas deberán de examinarse y aprobarse o rechazarse, como decida la mayoría.

ARTÍCULO 104. Siendo aprobadas las enmiendas, el proyecto deberá reextenderse en tal forma que las incluya, pero si estas mismas enmiendas fueran a su vez enmendadas o rechazadas, deberán de regresarse a la Cámara donde fueron propuestas, con solicitud de que sean admitidas aquéllas o que se acepte el proyecto original.

ARTÍCULO 105. En caso de una total falta de acuerdo entre las dos Cámaras, cada una de ellas designará una comisión para examinar el desacuerdo, debiendo las comisiones informar a sus respectivas Cámaras, adoptándose las medidas que la mayoría de cada Cámara apruebe. (?).

ARTÍCULO 106. Todo proyecto de ley, resolución, orden u ordenanzas, que requiera la aprobación del Senado y de la Cámara de diputados deberá ser sometido al Presidente de México para su aprobación antes de que el mismo entre en vigor; si él lo aprueba, escribirá al calce "aprobado", con la fecha y su firma; pero en caso que lo desapruebe lo regresará con sus objeciones a la Cámara donde se originó, misma que incluirá las objeciones en su diario y procederá a reconsiderarlo.

ARTÍCULO 107. Si después de tales reconsideraciones dos terceras partes de la Cámara donde se originó lo aprueban de nuevo en su forma original, será enviado a la otra Cámara, y si es aprobado también por las dos terceras partes de esa Cámara, se convertirá en ley, y el Presidente de México lo firmará y lo publicará.

ARTÍCULO 108. Si cualquier proyecto de ley no es regresado por el Presidente de México

dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha que le fue presentado, se convertirá en ley e inmediatamente se publicará.

ARTÍCULO 109. Las leyes después de ser firmadas por el Presidente de México deberán ser certificadas por el Secretario de Estado para las Relaciones Interiores y Exteriores, e inmediatamente publicadas en toda la Nación con las formalidades que el Congreso prescriba.

CAPÍTULO VII
Sobre el ejecutivo

ARTÍCULO 110. El Poder Ejecutivo deberá ser ejercido por el Presidente de México.

ARTÍCULO 111. Deberá haber también un Vice-presidente de México, quien en caso de muerte, retiro de su cargo, renuncia o incapacidad del Presidente, lo suplirá en su ejercicio.

ARTÍCULO 112. El Congreso declarará por ley quién ejercerá el poder ejecutivo en caso de muerte, renuncia, retiro o incapacidad de actuar del Presidente y Vice-presidente al mismo tiempo; previendo en tal caso que el ejercicio de tal poder será únicamente *pro tempore* y hasta que una nueva elección sea ordenada por el Congreso tan pronto sea practicable, para llenar las vacantes ocasionadas en los dos puestos. Tales elecciones serán llevadas a cabo de igual manera a la prescrita para una elección Presidencial regular, y las personas elegidas ejercerán su cargo por el tiempo que faltaba al periodo presidencial.

ARTÍCULO 113. Las personas elegidas para llenar las vacantes mencionadas en el artículo anterior pueden ser reelegidas para el mismo cargo en una elección presidencial regular, siempre que no hubiesen ocupado los cargos más de cuatro años.

ARTÍCULO 114. El Congreso establecerá por ley el tratamiento oficial del Presidente y Vice-presidente de México, y de todas las dependencias y departamentos del Gobierno en todas sus ramas.

ARTÍCULO 115. El Presidente y vice-presidente de México serán elegidos por un término de ocho años en la forma siguiente.

ARTÍCULO 116. Las Diputaciones Provinciales darán tantos votos para Presidente y Vice-presidente de México, como tengan derecho para Diputados y Senadores en el Congreso.

ARTÍCULO 117. La mitad más uno de todos los diputados deberán estar presentes a fin de que la diputación Provincial sea competente para votar por el Presidente o Vice-presidente de México, para elegir Senadores, para pasar peticiones para la remoción o enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales, para ejercer poderes legislativos y para todo otro asunto de importancia. Sin embargo, el Congreso podrá por ley autorizar a un número inferior para despachar asuntos de menos importancia. (Esto es igual a lo dispuesto en el Art. 220 sobre el Gobierno de las Provincias).

ARTÍCULO 118. Una vez que los votos para Presidente y Vice-presidente hayan sido emitidos, se extenderán cuatro certificaciones que serán firmadas por el Presidente de la Diputación y el secretario, y a la vez selladas, todo lo cual deberá hacerse en sesión pública y deberá concluirse antes de permitir cualquier aplazamiento.

ARTÍCULO 119. Uno de los certificados mencionados en el último artículo será enviado al Secretario de Estado de Relaciones Interiores, otro al Presidente del Senado, otro al Presiden-

te de la Cámara de Diputados, y el cuarto será depositado en el archivo de la respectiva Diputación Provincial para los fines que más adelante se mencionan.

ARTÍCULO 120. Los resultados enviados como se indica en el último artículo irán anexos a una carta oficial, que no deberá ser abierta sino como más adelante se prescribe.

ARTÍCULO 121. Las elecciones efectuadas por las Diputaciones Provinciales se realizarán exactamente seis meses antes a la expiración del periodo presidencial.

ARTÍCULO 122. En un día que será exactamente seis meses antes de la expiración del periodo presidencial, el Senado y la Cámara de Diputados se reunirán en una Cámara, y los Secretarios del despacho y Jueces del Tribunal Superior de Justicia deberán asistir. El Secretario de Estado de Relaciones, en presencia de las dos Cámaras, de los otros Ministros de Estado, de los Jueces y de los espectadores en las galerías, mostrará en alto los resultados de las elecciones recibidas por él, para que todos puedan ver que están sellados y no han sido abiertos; después los abrirá y declarará el contenido, que será registrado por los secretarios y se incluirá en las Actas de ambas Cámaras. El Presidente del Senado procederá entonces en igual forma con los resultados recibidos por él, y el Presidente de la Cámara de los Diputados hará lo mismo.

ARTÍCULO 123. Todos los resultados recibidos, establecida su coincidencia, serán sumados, y la persona que haya recibido el mayor número de votos para Presidente de México será declarado debidamente electo, y la persona que haya recibido el mayor número de votos para Vice-presidente de México será declarado debidamente electo, para los ocho años siguientes al periodo del Presidente actual.

ARTÍCULO 124. Si los tres resultados remitidos al Secretario de Estado, a los Presidentes del Senado y de los Diputados, no estuvieran de acuerdo entre sí, se enviará un emisario a la provincia respectiva para que recoja el original depositado en los archivos de la Diputación, como se fijó en el Art. 119. Las dos Cámaras decidirán sobre la base de un examen qué resultado deberá ser admitido, y cuáles diferencias proceden de un accidente, negligencia o intención, y tomarán las medidas del caso para castigar a la persona o personas responsables de la negligencia o de la alteración intencional.

ARTÍCULO 125. Concluida la elección, las dos Cámaras acompañadas por los jueces del Supremo Tribunal de Justicia, y Secretarios de Estado se dirigirán a la catedral o iglesia principal, y el Presidente de México, los miembros de las Diputaciones Provinciales, Generales y otros oficiales de rango que estén en la ciudad, serán notificados para que asistan al acto en la iglesia, donde será de nuevo proclamado el resultado de la elección y se oficiará un solemne Tedéum.

ARTÍCULO 126. En caso de que haya un empate en la elección del Presidente y Vice-presidente de México, las dos Cámaras del Congreso decidirán quién será electo.

ARTÍCULO 127. Para ser Presidente o Vice-presidente de México se requiere ser nativo de la Nación Mexicana, o ciudadano desde la declaración de Independencia en Iguala el 24 de febrero de 1821; haber sido residente cuando menos diez años antes al de la elección; tener la edad de cuarenta años y haberse distinguido y ser bien conocido por su patriotismo, su virtud y su inteligencia.

ARTÍCULO 128. Ningún eclesiástico será Presidente o Vice-presidente de México, y tampoco la misma persona será electa en cualquiera de los dos cargos dos veces, excepto en el caso mencionado en el Art. 113.

ARTÍCULO 129. Antes de asumir su cargo, el Presidente prestará ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en la principal iglesia de la capital, el siguiente juramento: Solemnemente juro por Dios Nuestro Señor y sobre los santos evangelios que defenderé, cumpliré y apoyaré la Constitución de México, y en tanto esté en mi poder, haré que todos los demás hagan lo mismo, y desempeñaré con veracidad las tareas de Presidente de México, de acuerdo con mi leal saber y entender, y que Dios me lo demande.

Sobre los poderes del ejecutivo

ARTÍCULO 130. Los poderes del Presidente de México son los siguientes:

1. Es el comandante en jefe del ejército, armada y milicia de la República de México.

2. Nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, a todos los Generales y oficiales de las fuerzas de tierra y mar, a los Secretarios de Despacho, a los Embajadores, enviados, cónsules y otros funcionarios públicos, Jueces de los Tribunales, Supremo, Provinciales e inferiores, y a todos los demás funcionarios del Gobierno de México no previstos aquí. Pero el Congreso puede por ley autorizar el nombramiento de tales oficiales inferiores al Presidente solamente, o a los Gobernadores y Diputaciones Provinciales, o a los Tribunales de Justicia.

3. Tendrá autoridad para llenar todas las vacantes, durante el receso del Senado, sujetando el nombramiento a su aprobación o rechazo en la primera sesión.

4. Abrirá las sesiones del Congreso durante los periodos de renovación de la Cámara de Diputados, y rendirá un informe del estado de la Nación, sugiriendo las nuevas leyes y enmiendas que considere necesarias, proporcionando toda clase de información relativa a los asuntos nacionales que pueda ser dada a conocer públicamente. Todo esto será consignado en las Actas y publicado por la prensa para la información del pueblo. Los asuntos que requieran secreto serán comunicados en informes especiales.

5. Publicará y ejecutará las leyes.

6. Puede convocar una reunión extraordinaria del Congreso cuando lo considere conveniente.

7. Publicará las declaraciones de guerra o paz.

8. Dará la dirección y destino de las fuerzas de tierra y mar para defender a la nación de invasiones extranjeras, conmociones internas y cualquier otro peligro que amenace la tranquilidad, así como para la protección del comercio, dando cuenta al Congreso.

9. Podrá reprimir insurrecciones y conspiraciones en contra de la nación o la tranquilidad pública, y arrestar a los conspiradores y alteradores de la paz pública, observando todas las formalidades de las leyes, rindiendo cuenta a cualquiera de las Cámaras del Congreso de todas las medidas adoptadas en virtud de este poder.

10. Puede convocar a los Secretarios de despacho con el propósito de consultarlos en relación con el bien público; y puede requerir su opinión por escrito en relación con cualquier asunto de importancia conectado con sus respectivos departamentos.

11. Puede requerir la opinión de la Diputación Provincial de cualquier Provincia en relación con cualquier asunto de interés para ella.

12. Puede conceder el perdón de la pena capital u otras por crímenes, o mitigar las sentencias cuando razones de equidad o política nacional lo justifiquen, excepto en sentencias dictadas por el Senado o el Tribunal Superior de Justicia en los casos de *impeachment* o juicio político en contra de funcionarios públicos.

13. Aprobará o revocará sentencias de la corte marcial, de acuerdo con las previsiones de las leyes que regulen esos tribunales.

14. Todo lo concerniente al ingreso público, a la economía política de la nación; a las instituciones científicas, de caridad, y otras instituciones públicas fundadas y sostenidas con los fondos públicos. Las casas de moneda, caminos nacionales, canales y minas nacionales, correos y otras propiedades públicas, deberán estar bajo la vigilancia y protección del Presidente de México, de acuerdo con las leyes, ordenanzas y reglamentos en vigor, o de aquellas que puedan decretarse en adelante.

15. Con el consejo y consentimiento del Senado designará a los Arzobispos y Obispos, y presentará a todos las dignidades y beneficios de las catedrales, parroquias y otras iglesias, conforme a las leyes.

16. Hará tratados con las naciones extranjeras, los que después de haber sido aprobados por las dos Cámaras del Congreso, ratificará y publicará.

17. Recibirá a todos los Embajadores, ministros públicos y agentes, y dirigirá todas las relaciones y correspondencia diplomática, rindiendo cuenta al Congreso de tiempo en tiempo.

18. Comisionará a todos los funcionarios de la Nación Mexicana, y los retirará del cargo libremente, excepto en los casos establecidos en esta Constitución, y otros previstos por la ley.

19. Con el consentimiento del Congreso permitirá o prohibirá la publicación de las Bulas Papales y decretos de Concilios Eclesiásticos.

ARTÍCULO 131. El Presidente de México comunicará al Congreso toda la información que esté en su poder relativa a cualquier asunto, cuando así lo pida alguna de las Cámaras. Y es su deber hacer que la Constitución y las leyes sean fielmente obedecidas en toda la nación.

ARTÍCULO 132. El Presidente y Vicepresidente y los otros funcionarios de la Nación Mexicana pueden ser removidos de su cargo y castigados si son acusados ante un tribunal competente, y quedan convictos de traición, soborno, violación de la Constitución o las leyes, peculado o dilapidación fraudulenta de fondos públicos u otros delitos graves, de acuerdo con las leyes.

ARTÍCULO 133. Todo funcionario de la Nación Mexicana de rango inferior al de Vicepresidente de México, será removido de su cargo por el Presidente a la petición de las dos terceras partes de cada Cámara del Congreso, en la que deberá manifestarse las causas de la petición.

ARTÍCULO 134. Todo funcionario de la Nación Mexicana perteneciente ya sea al Gobierno general, al de las Provincias o pueblos, antes de tomar posesión de sus tareas, prestará ante el Juez, Gobernador, u otro funcionario debidamente autorizado para este propósito, el juramento de defender, observar y apoyar la Constitución de México, y desempeñar fielmente los deberes de su cargo, de acuerdo con la ley y con su leal saber y entender.

ARTÍCULO 135. Cualquier persona será descalificada para desempeñar el cargo de Presidente, Vicepresidente de México, Senador o Diputado al Congreso, miembro de las Diputaciones Provinciales, o para cualquier otro cargo público, si ha sido convicto de haber ofrecido o dado un soborno o recompensa de cualquier clase para procurar su elección o nombramiento.

CAPÍTULO VIII
Sobre los secretarios de estado y del despacho

ARTÍCULO 136. Deberá haber cinco Secretarios de despacho, a saber:
El Secretario de Estado para Relaciones Interiores y Exteriores.
El Secretario de Estado para el Tesoro (Hacienda).
El Secretario de Estado para Gracia y Justicia.
El Secretario de Estado del Departamento de Guerra.
El Secretario de Estado de la Marina.

ARTÍCULO 137. El Congreso puede variar este sistema de despacho como las circunstancias y experiencias lo requieran.

ARTÍCULO 138. Para ser Secretario de Estado de despacho se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y mayor de treinta años de edad.

ARTÍCULO 139. Ningún eclesiástico podrá ser Secretario de despacho, ni persona alguna ligada al Presidente o Vicepresidente de México con parentesco más cercano que el de tercer grado.

ARTÍCULO 140. El Congreso designará por ley y fijará las tareas y clase de negocios que serán de la competencia de cada una de las Secretarías y definirá la naturaleza y extensión de sus responsabilidades.

ARTÍCULO 141. X tomar el Art. 225 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 142. X tomar el Art. 226 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 143. X tomar el Art. 227 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 144. X Las estimaciones del gasto público hechas de conformidad con el último artículo serán consolidadas y comunicadas al Congreso por el Secretario del Tesoro (Hacienda), quien además dará la información y hará las sugestiones que estime convenientes en cuanto a las formas de recaudación.

ARTÍCULO 145. Los Secretarios de despacho serán removidos de su cargo por solicitud que las tres cuartas partes de los miembros de cada Cámara del Congreso presenten al Presidente para tal efecto, sin que sea necesario señalar ninguna razón.

(En nota marginal dice Austin, en relación a los artículos 141-145, "los marcados con X se omiten en la copia"; refiriéndose tal vez a una copia que pudo haber dado a algún miembro del Congreso Constituyente).

ARTÍCULO 146. Los Secretarios de despacho, o una mayoría de ellos, tienen el poder de convocar a una reunión extraordinaria del Congreso en caso de ausencia del poder Ejecutivo durante el receso de tal cuerpo.

CAPÍTULO IX
Sobre el poder judicial

ARTÍCULO 147. El poder Judicial de México lo ejercerá un Supremo Tribunal de Justicia, localizado en la capital de la Nación, un Supremo Tribunal de Justicia para cada Provincia, localizado en las capitales de Provincias, y otros tribunales que el Congreso pueda por ley establecer.

ARTÍCULO ADICIONAL. Los jueces del Supremo Tribunal de Justicia serán electos por una votación conjunta de las Cámaras del Congreso a proposición del Presidente de México.

ARTÍCULO 148. Para ser Juez del Supremo Tribunal de Justicia, o de los Tribunales Supremos Provinciales, es necesario ser ciudadano en el completo ejercicio de sus derechos, con más de treinta y cinco años de edad, y ser abogado titulado con cuando menos seis años de práctica profesional.

ARTÍCULO 149. El Congreso determinará por ley el número de Jueces y otros oficiales del Supremo Tribunal de Justicia, la forma de elegir su Presidente, y establecerá las reglas y procedimientos que puedan extender o modificar sus poderes.

ARTÍCULO 150. El Supremo Tribunal de Justicia tendrá jurisdicción:

1. En todas las causas que afecten a embajadores u otros ministros públicos o agentes.

2. En todas las causas del almirantazgo y derecho marítimo, e infracciones de la ley de ingresos.

3. En todas las causas por crímenes cometidos contra las leyes de las Naciones.

4. En todas las causas que emanen de los tratados públicos.

5. En todas las causas en que la Nación o una Provincia esté involucrada, o entre una Provincia y otra, o entre ciudades o pueblos de la misma o diferente Provincia, relativos a límites u otro asunto de litigio.

6. En todas las causas criminales en contra de cualquier funcionario de la Nación por una violación en sus tareas oficiales.

7. En todas las causas de apelación del Supremo Tribunal Provincial o de las Cortes Provinciales del almirantazgo.

8. Tendrá una inspección general sobre todos los tribunales de la Nación; en el modo y de acuerdo con las formas prescritas por ley.

9. Decidirá sobre la constitucionalidad de las leyes del Congreso, y en todos los casos de duda sobre la constitucionalidad o interpretación de cualquier ley u otro acto del Congreso o de las diputaciones provinciales, o de cualquier funcionario o departamento del Gobierno, y en el supuesto de que declare anticonstitucional cualquier ley del Congreso, tal ley deberá ser enviada a la Cámara de Diputados junto con las razones de la decisión, para ser reconsiderada, y si las dos Cámaras la aprobaran de nuevo por una mayoría de las dos terceras partes de ellas, será vigente no obstante la opinión del Supremo Tribunal.

Sobre los tribunales supremos provinciales

ARTÍCULO 151. Los Tribunales Supremos Provinciales se integrarán por un Juez Supremo para cada Provincia, y los Jueces de Letras de la Provincia.

ARTÍCULO 152. Este Tribunal tendrá jurisdicción de apelación en todos los casos enviados por los Jueces de letras u otros tribunales inferiores, y ejercerá una inspección general y Dirección sobre los procedimientos de todos los Tribunales inferiores de la Provincia, con objeto de ver que la justicia se administre imparcial, rápida y equitativamente.

ARTÍCULO 153. La ley prescribirá las formas y manera de la inspección y dirección que se menciona en el anterior artículo y también determinará las reglas de procedimientos de este

Tribunal, el número, nombres y poderes de los funcionarios asignados, y la forma de hacer su nombramiento.

ARTÍCULO 154. Deben estar presentes cuando menos cinco Jueces de Letras para que el Tribunal sea competente y actúe. No teniendo una Provincia suficiente población que le dé derecho a tal número de Jueces de Letras, el Congreso aprobará cuáles Jueces de Letras de dos o más Provincias se unan para integrar el Tribunal, en cuyo caso habrá sólo un Juez Provincial Supremo para las Provincias así unidas.

ARTÍCULO 155. Este Tribunal efectuará cuando menos dos sesiones cada año, y tantas como el Congreso fije por ley, en las fechas y lugares, y con las formalidades que la ley requiera.

ARTÍCULO 156. Los Jueces de Letras que conozcan en primera instancia una causa llevada ante este Tribunal, se retirarán de su asiento durante la revisión de dicha causa.

ARTÍCULO 157. El Juez Supremo de los Tribunales Provinciales será también Juez de causas sobre derecho marítimo y renta pública que puedan ocurrir dentro de su jurisdicción territorial.

ARTÍCULO 158. El número, nombres, poderes y emolumentos de los funcionarios agregados a las Cortes Provinciales del Almirantazgo serán determinados por ley; también las fechas y formalidades para sus sesiones, y las reglas generales de sus procedimientos.

ARTÍCULO 159. En las provincias donde no exista un Juez Supremo Provincial, el Congreso puede por ley facultar a un Juez de Letras, o establecer algún otro tribunal especial para conocer de los casos de derecho marítimo y renta pública de tal Provincia, bajo las normas que dicte el propio Congreso.

ARTÍCULO 160. Las sentencias del Supremo Provincial y de los Tribunales del Almirantazgo se pueden apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con las formalidades y restricciones que el Congreso determine por ley.

ARTÍCULO 161. El Congreso puede extender o modificar los poderes de los Supremos Tribunales Provinciales y de los tribunales de derecho marítimo.

Sobre los jueces de letras

ARTÍCULO 162. Deberá haber tantos Jueces de Letras en cada Provincia como sean necesarios para prestar una pronta y conveniente administración de justicia al pueblo.

ARTÍCULO 163. Para llevar a efecto el artículo anterior, el Congreso determinará el número de habitantes que tendrán derecho a demandar el nombramiento de un Juez de Letras, y tal número no excederá de 5 000.

ARTÍCULO 164. La jurisdicción de los Jueces de Letras deberá fijarse en la forma que sea prescrita por ley, y formará un partido judicial.

ARTÍCULO 165. En la formación de los partidos judiciales mencionados en el anterior artículo deberá tenerse cuidado en no dividir las Parroquias, si se puede evitar.

ARTÍCULO 166. Los Jueces de Letras formarán los tribunales de primera instancia en sus respectivos partidos, y tendrán la inspección y dirección generales de la administración de justicia por los Alcaldes, en la forma que la ley prescriba.

ARTÍCULO 167. El Congreso determinará por ley los poderes de este tribunal, nombres y emolumentos de sus funcionarios, y establecerá las reglas generales de sus procedimientos.

ARTÍCULO 168. Las sentencias de este tribunal pueden apelarse ante el Supremo Tribunal Provincial, con las formalidades requeridas por ley.

ARTÍCULO 169. Los jueces del Supremo Tribunal de Justicia, los del Supremo Tribunal provincial, y los Jueces de Letras serán designados atendiendo a su buena conducta.

Sobre alcaldes

ARTÍCULO 170. Los alcaldes serán electos en cada pueblo en la misma forma establecida por la Constitución Española y las leyes existentes.

ARTÍCULO 171. Los poderes y deberes de los Alcaldes serán los mismos prescritos por la Constitución Española y leyes existentes.

ARTÍCULO 172. Las Diputaciones pueden por ley extender o modificar los poderes de los alcaldes cuando lo consideren conveniente.

Sobre administración de justicia

ARTÍCULO 173. Tomar el artículo 242 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 174. Tomar el artículo 243 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 175. Tomar el artículo 244 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 176. Tomar el artículo 245 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 177. Tomar el artículo 246 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 178. Tomar el artículo 247 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 179. Tomar el artículo 248 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 180. Tomar el artículo 249 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 181. Tomar el artículo 250 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 182. Tomar el artículo 254 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 183. Tomar el artículo 255 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 184. Tomar el artículo 257 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 185. Tomar el artículo 258 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 186. Tomar el artículo 280 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 187. Tomar el artículo 281 de la Constitución Española.

Sobre la administración de justicia en casos criminales

ARTÍCULO ADICIONAL. Que el juicio de los hechos se efectúe en la vecindad donde ocurrieron es tan esencial para la seguridad de la vida, libertad y propiedad, que ninguna ofensa o crimen deberá ser juzgado en otra provincia, excepto en casos sujetos a cortes militares y en los casos en que la seguridad pública y una evidente y justa razón de política o equidad, requieran de un juicio en alguna otra parte.

Tomar todo el capítulo 3o. del título v de la Constitución Española: 23 artículos.

CAPÍTULO X
Sobre el gobierno interior de las provincias y pueblos

ARTÍCULO 211. El Gobierno político de las Provincias estará encargado a un Gobernador o Jefe Político que es nombrado en cada Provincia por cuatro años; y a las Diputaciones Provinciales.

ARTÍCULO 212. Los Gobernadores de Provincias son los Comandantes en Jefe de la Milicia, conservadores de la paz pública e intendentes en sus Provincias respectivas, y sus deberes y poderes serán particularmente detallados por la ley. Ellos estarán obligados a rendir cuenta a las Diputaciones Provinciales en relación a cualquier asunto conectado con el Gobierno o los asuntos de la provincia, cuando sean llamados para esto por dichas Diputaciones, y obedecerán en todo, y publicarán las órdenes y decretos de dichas Diputaciones cuando no sean incompatibles con la Constitución o leyes de la nación. Los gobernadores de Provincia no pueden ser miembros de las Diputaciones Provinciales.

ARTÍCULO 213. Deberá haber una Diputación Provincial en cada Provincia compuesta de un miembro por cada 5 000 habitantes, previendo que el número de miembros no excederá de 51, cualquiera que sea la población de la Provincia.

ARTÍCULO 214. Los miembros de las Diputaciones Provinciales serán electos por el pueblo cada dos años, al mismo tiempo y de igual manera que los diputados al Congreso. Los registros de votos en cada caso serán llevados por uno de los jueces asistentes para cada Parroquia, y el Juez de Letras del Partido unido a sus asistentes formarán la Junta electoral de Partido, en la cual los votos para miembros de las Diputaciones Provinciales serán abiertos, observándose las mismas formalidades previstas para las Juntas electorales de los distritos, excepto que en este caso uno de los certificados de la elección será enviado al secretario de la Diputación Provincial, otro a la persona elegida, y el tercero depositado en los archivos de la iglesia en el lugar en donde la Junta de Partido se reúna.

ARTÍCULO 215. Las Juntas electorales de Partido mencionadas en el último artículo se reunirán en la población principal o cabeza de partido, y no habiendo ningún Juez de Letras que asista a la Junta, el Cura o Alcalde del lugar, o cualquier otra persona designada por la Diputación Provincial, suplirá la deficiencia.

ARTÍCULO 216. Los límites y fronteras de los partidos electorales serán fijados por las Diputaciones Provinciales de la misma manera prescrita para los distritos electorales, de tal manera que incluya en lo posible 5 000 habitantes en cada partido.

ARTÍCULO 217. Teniendo una Provincia por su población derecho a más de 51 miembros, las Diputaciones Provinciales se dividirán en 51 partidos electorales, tan iguales como sea posible, y cada partido elegirá un miembro a la Diputación.

ARTÍCULO 218. Para ser miembro de las Provinciales es necesario ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, con más de 25 años de edad, en posesión de bienes raíces para un sostenimiento decente, y residir en la Provincia en la cual es elegido.

ARTÍCULO 219. Ninguna persona que tenga algún puesto en el Gobierno (excepto en la Milicia) será miembro de la Diputación Provincial, y no más de una décima parte de sus miembros pueden ser eclesiásticos.

ARTÍCULO 220. La mitad más uno de todos los miembros deben estar presentes para que la diputación pueda votar por Presidente y Vicepresidente de México; para elegir Senadores;

para aprobar peticiones de remoción o acusaciones de funcionarios; para ejercitar poderes legislativos y para otros asuntos de importancia; pero el Congreso por ley puede autorizar un número inferior para despachar asuntos de menor consecuencia.

ARTÍCULO 221. En adición a los poderes y deberes asignados a ellas por esta Constitución y por la Constitución Española, y por leyes ahora en vigor, y por aquellas que de aquí en adelante se aprueben por el Congreso, las Diputaciones Provinciales tendrán el poder de:

1. Hacer denuncias a la Cámara de Diputados en contra del Gobernador, o el Presidente del Tribunal Supremo Provincial por mala conducta en su trabajo, y con base en dicha denuncia la Cámara puede proceder a la acusación, o recomendar al Presidente la remoción de la persona o personas acusadas, de acuerdo con la naturaleza de la ofensa; dicha recomendación deberá ejecutarse por el Presidente sin ninguna demora.

2. Acusar a los Jueces de Letras por mala conducta en su empleo o negligencia en sus deberes, para ser juzgados por el Alto Tribunal de Justicia.

3. Pedir al Presidente de México que remueva de su empleo a cualquier Juez de Letras por mala conducta en su trabajo, negligencia en sus deberes, incapacidad o cualquier otra causa que no se haya considerado de suficiente magnitud para fundar una acusación. El Presidente al recibir tal petición la presentará desde luego al Senado, y si la mayoría del cuerpo la encuentra bien fundada, tendrá efecto inmediato y se hará un nuevo nombramiento para llenar la vacante.

4. Ejercitar poderes legislativos relativos a política de asuntos internos y gobierno civil de las Provincias, en la medida y en la forma como el Congreso lo prescriba por ley.

ARTÍCULO (*sic*). Las Diputaciones Provinciales elegirán su propio Presidente, Secretario y otros funcionarios, juzgando para la elección las cualidades de sus miembros, fijando las reglas de sus procedimientos.

ARTÍCULO 222. A la toma de posesión de sus cargos, los individuos de las diputaciones prestarán el juramento de defender, observar y apoyar la Constitución de México, y desempeñar fielmente los deberes de su cargo de acuerdo con su leal saber y entender.

ARTÍCULO 223. Los miembros de las Diputaciones Provinciales, secretarios y otros empleados, recibirán una compensación que se fijará por ley del Congreso, la que será pagada por las Provincias.

ARTÍCULO 224. Toda Provincia que tenga 20 000 habitantes tendrá derecho a una Diputación Provincial a petición de la mayoría de los Ayuntamientos. El Presidente de México dará órdenes inmediatamente a través del Jefe Político de la Provincia para la elección de los diputados y se adoptarán todas las medidas necesarias para establecer sin demora la Diputación.

ARTÍCULO 225. El Congreso por ley puede establecer Diputaciones Especiales en provincias que tengan menos de 20 000 habitantes, o puede establecer una Diputación para dos o más provincias.

CAPÍTULO XI
Sobre la milicia

Tomar el capítulo 2o., título VIII completo de la Constitución Española.

CAPÍTULO XII
SOBRE LA INSTRUCCIÓN (O EDUCACIÓN) PÚBLICA

Tomar el título IX completo de la Constitución Española.

CAPÍTULO XIII
SOBRE ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN[1]

[1] El original sólo contiene el rubro del capítulo. Es de suponer que adopta el capítulo único del título X de la Constitución Española.

VI

PLAN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN MEXICANA

POR LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONGRESO

MÉXICO, 16 DE MAYO DE 1823

SEÑOR

La comisión nombrada para fijar las bases de la constitución presenta al fin a V. Sob. el resultado de sus discusiones.

Los trabajos legislativos son los más difíciles y delicados porque son de trascendencia más lata y de influjo más duradero. Una sola ley: un artículo de decreto: una línea para abrir o cerrar un puerto, para aumentar o disminuir un derecho, exige cálculos que embarazan al talento más ejercitado en abrazar relaciones.

Los trabajos constitucionales son entre los legislativos los de mayor complicación y trabajo: los que exijen combinaciones más profundas, y se extienden a espacios más dilatados. Una constitución bien o mal meditada decide los destinos desgraciados o felices de una nación: asegura su libertad, o prepara su esclavitud: la eleva al poder, o la hunde en el abatimiento.

La comisión convencida por una parte de esta verdad, deseosa por otra del bien de la nación ha buscado luces donde ha esperado encontrarlas: ha examinado las constituciones modernas de más créditos: ha procurado penetrar el espíritu de las antiguas. No han sido sin embargo lisonjeras sus esperanzas. Ha deducido por el contrario un resultado triste; pero cierto y capaz de demostrarse. *Una constitución perfecta es problema que todavía no se ha resuelto.* En todas las que se han meditado hasta ahora: en las que parecen más bien combinadas y con influencia más benéfica en la suerte de las naciones, descubrirá defectos quien se detenga a analizarlas.

Han pasado multitud de siglos: se han creado en los que han corrido multitud de gobiernos: han sido diversas las combinaciones de las autoridades: y se han visto en todas los resultados. Pero la experiencia de igual tiempo que ha bastado para crear otras ciencias experimentales, ha sido insuficiente para dar igual grado de perfección a la que interesa más a los pueblos. Se traza con el compás la línea que un astro estará describiendo en los siglos. No puede predecirse con igual exactitud el movimiento de una nación impelida por una ley.

La comisión no puede presentar, ni V. Sob., esperar un plan de perfección en lo que menos puede haberla. Aun teniendo la voluntad más decidida por el bien: aun poseyendo todos los principios y abrazando todos los descubrimientos, un legislador no puede en caso alguno dar en abstracto la mejor constitución posible. Debe acomodarla a la posición de los pueblos, respetar sus votos, mirar las circunstancias.

Los hombres, y las naciones, compuestas de hombres, son como los demás seres de la naturaleza. Arrastrados por la fuerza del movimiento se van poniendo en aptitudes distintas, y colocándose en estados absolutamente diversos. Desde el pueblo que sufre al sultán de Turquía, hasta el pueblo que condenó a Luis XVI, hay una escala que apenas puede seguir el pensamiento, y esta escala sin embargo, es la que debe observarse si no hay voluntad de trastornar el orden y violentar la naturaleza.

Lo primero que ocupó a la comisión fue el estado actual a que ha llegado por el movimiento del tiempo, la sociedad grande a que debe darse constitución. Examinando su posición presente ha descubierto una verdad que sirve de base primera para levantar sobre ella el plan de la constitución.

La nación Mexicana no es ya un pueblo de aztecas dispuestos a sufrir un Moctezuma o adorar un Cortés. En la extensión de este vasto continente desde los Alleghanys hasta los Andes no ve en una y otra América más que repúblicas y constituciones liberales. Los Estados Unidos son sus vecinos: admira la rapidez de sus progresos; y cree que la forma libre de su gobierno es la causa que los produce. Luchó once años por proclamarse independiente de la monarquía Española. Sus fuerzas se pusieron en acción para que cesase la última que se había establecido. El movimiento del siglo la arrastra a instituciones libres; y la marcha de este Congreso le ha dado igual dirección. Gobernado por monarcas que se han sucedido unos a otros, ha sufrido en todas las dinastías y no olvida sus sufrimientos. Tiene experiencias dolorosas del gobierno monárquico: no la tiene del republicano; y son siempre lisonjeras las perspectivas de aquello que no se ha visto o sentido.

No posee los principios o no sabe aplicar los que tenga, quien crea que en estas circunstancias podría darse a México una constitución monárquica. El genio mismo de la oratoria sería impotente para el convencimiento. Hablaría por una parte la elocuencia de los hechos: sólo hablaría por otra la del raciocinio; y los pueblos más que por pensamientos son movidos por sensaciones. Sufriendo la arbitrariedad de un monarca ven con horror las monarquías: prefieren entre las especies de república la que les promete más libertades: y exigen una constitución que las garantice. Sufriendo las convulsiones de una república, ven con espanto este gobierno: se abandonan a la voluntad de un monarca, y el despotismo vuelve a hacer sentir sus horrores.

La comisión no juzga necesario hacer paralelos de gobiernos. Los han hecho talentos dignos de formarlos: y es necesario respetar la voluntad de los pueblos. Las provincias aborrecen todo sistema monárquico: miran con celo el poder de la capital: repugnan que en ella estén acumuladas las autoridades primeras, unidos los elementos de prepotencia, y fijado el centro de todo: quieren república: la quieren federal: ven en este gobierno la forma que asegura la igualdad de todos. Pero el federalismo que visto en un aspecto presenta este bien, examinado en otro puede ser origen de males.

A la época en que una nación destruye el gobierno que la regía, y establece otro provisorio que lo subrogue, los pueblos viendo que son obra suya las creaciones políticas, comienzan a sentir sus fuerzas, se exaltan y vuelven difíciles en su administración. Las voluntades adquieren un grado asombroso de energía, cada uno quiere lo que juzga más útil: todo tiende a la división, todo amenaza destruir la unidad.

En estas circunstancias el federalismo que parte un estado en varios estados sería, llevándolo a su último término, institución muy peligrosa. Facilitaría la disolución del mismo estado: debilitaría sus fuerzas: cortaría el vínculo de la unidad: crearía emulaciones y rivalidades: sembraría el germen destructor de la discordia. Los hombres sólo son fuertes por la unión; y el federalismo tiende a debilitar o destruir la unión.

Si la especie humana dividida en naciones que no reconocen un poder central de bastante fuerza para hacerles respetar sus derechos recíprocos, es constantemente atormentada por

guerras desoladoras; una nación subdividida en naciones que sólo tengan un vínculo débil de unión, será proporcionalmente afligida por males de igual clase.

La comisión respetando la voluntad de los pueblos ha establecido por base, que el gobierno de la nación mexicana será una república representativa y federal; pero siguiendo la misma guía, le ha dado la organización menos daños a los mismos pueblos.

La comisión no reconoce otro poder y soberanía que la de la nación. El que se llama poder legislativo es el poder de la nación que dicta leyes: el que se denomina poder ejecutivo, es el poder de la nación que las hace cumplir.

Cuando los hombres vean claro este principio: cuando los funcionarios tengan noción exacta de él: cuando no haya hombres que lo combatan, entonces se verá con igual evidencia que toda autoridad de cualquier clase o especie, es una emanación de la soberanía o poder nacional.

Una nación derramada sobre la área vasta de 118 478 leguas cuadradas no puede unirse en un campo para dictar leyes a sus individuos, o hacerles cumplir las que dicte.

Tampoco sería prudente que ejerciese su poder por la mano de un solo hombre. La experiencia de los siglos atesta que al fin llega a ser déspota quien reúne todas las autoridades: la historia de los pueblos manifiesta que el hombre que todo lo puede quiere aun lo que no puede.

Toda acumulación excesiva es peligrosa. Toda distribución justa es útil.

La aglomeración en un individuo de autoridades, oprime a los pueblos: la de fuerzas oprime al débil: la de riquezas oprime al pobre; y aun la de luces, estancadas en una clase o persona, puede ser origen de abusos.

Que una ley sabia divida las autoridades: equilibre las fuerzas: distribuya las riquezas; y difunda los conocimientos. Entonces no serán los pueblos víctimas de una administración arbitaria; entonces no será el *maximum* sacrificado por el *minimum*. Serán las naciones verdadera compañía de ciudadanos unidos para partir los bienes y los males, para cooperar a felicidad común y gozar en proporción de su mérito.

La nación mexicana no puede querer que se vuelvan contra ella los funcionarios que mantiene para que trabajen en su bien general, o que las autoridades creadas para garantir sus derechos, sean destructoras de esos mismos derechos. Quiere ejercer los que tiene por diversas autoridades, y que las atribuciones de cada autoridad se combinen de tal manera, que vigilándose unas a otras no sea ninguna opresora de los pueblos.

La nación mexicana ejercerá sus derechos por medio de los ciudadanos que elijan a los individuos del Senado y de los Congresos nacional, provinciales, y municipales: de los diputados que dicten las leyes en el Congreso nacional: de los individuos del cuerpo ejecutivo que las hagan cumplir: de los jueces que las apliquen a los negocios civiles y criminales: y de los senadores que se ocupen en conservarlas.

CUERPO LEGISLATIVO

Todos los ciudadanos que no exceptúe la ley tienen derecho para elegir a sus representantes, y estos representantes elegidos según la población respectiva son los que forman el Congreso nacional.

La organización de este cuerpo ha dividido la opinión por razones de especie muy diversa. Unos quieren que se componga de dos cámaras: compuestas la primera de representantes elegidos según la base de la población, y la segunda de igual número de diputados por cada provincia, sin atender a aquella base. Otros opinan que el Congreso debe ser uno como la nación que representa; y la mayoría de la comisión ha preferido la unidad.

No es ella la primera que ha opinado así. La comisión que trabajó para la república francesa, la constitución de 93: la asamblea que la aprobó: la comisión que formó la constitución española: las cortes que la decretaron: los autores de las bases constitucionales de la república Peruana: el congreso que las acordó; y diversos publicistas dignos del nombre que tienen, han pensado como piensa la mayoría de la comisión. (a)

Las cámaras se han creado en unos países para que haya un poder que embarace las reformas útiles al pueblo. Se han establecido en otros por el orgullo de la aristocracia que no ha querido que la voluntad particular de una clase esté sujeta a la voluntad general; y se pretenden ahora para que las provincias despobladas tengan tantos votos como las de mayor población. El primer origen de aquella institución ha sido vicioso, y sus efectos serían muy funestos.

Debilitaría al cuerpo legislativo dividiéndolo en dos salas: daría a la intriga de los que temen reformas el poder de paralizarlo: haría que en el Congreso una parte combatiese a la otra al mismo tiempo que el cuerpo ejecutivo conservase la unidad que le da energía: sujetaría al *minimum* de la representación nacional el *maximum* de ella misma; atropellaría las leyes de la justicia, haciendo que el mayor número estuviese subordinado a la voluntad del menor: violaría el pacto social que da a la mayoría de ciudadanos por sí o sus representantes la decisión de los asuntos; destruiría la base de la población, única que debe serlo de la representación nacional.

El cuadro de N.E. presenta en la población comparativa de las provincias una variedad tan grande que parece tocar en extremos. Según los cálculos de Humboldt, hay:

En la provincia de México	1 511 800
En la de Puebla	813 300
En la de Guadalajara	630 500
En la de Guanajuato	517 300
En la de Oaxaca	534 800
En la de Mérida	465 800
En la de Valladolid	376 400
Total	**4 849 900**
En la de Zacatecas	153 300
En la de Veracruz	156 000
En la de S. Luis	334 900
En la de Durango	159 700
En la de Sonora	121 400
En la de Nuevo México	40 200
En la Alta California	9 000
En la Nueva California	15 600
Total	**990 100**

Suponiendo la segunda cámara compuesta como se quiere de dos o tres representantes por cada provincia, resultaría que 900 100 individuos tendrían más diputados que 4 849 800: resultaría que un quinto de la población tendría más votos que cuatro quintos de ella misma: resultaría que el máximo de ciudadanos estaría sometido al mínimo cuando los diputados de las provincias menos pobladas opinasen de diverso modo que los representantes de las de mayor población.

Desde 1803, en que Humboldt hizo sus cálculos ha habido sin duda mutaciones grandes en la población, pero si se ha aumentado la de unas provincias debe haber crecido la de otras; y los resultados serán siempre demostrativos de la injusticia escandalosa de dar a la minoría más sufragios que a la mayoría.

Si en N. España hay ocho millones de almas y se elige un diputado por [cada] 60 000, habrá en la primera cámara 133: y si para la otra da 3 cada provincia, habrá 45 en la segunda. Supóngase que veinte y tres diputados de la segunda reprueban un proyecto admitido por los 133 de la primera, en este caso 23 votos triunfarían de 155 y las leyes más benéficas acordadas por la mayoría podrían ser repelidas por el menor número.

El carácter de impetuosidad que se supone en un Congreso numeroso, se modera por una ley sabia que le obligue a una marcha circunspecta y detenida, por el Senado que tiene derecho para reclamar las infracciones de la constitución, por la opinión pública que elogia o censura los aciertos y errores: por el pueblo que presenciando sus sesiones da o niega su confianza a los que la merecen, o son indignos de ella; y últimamente por la renovación periódica del Congreso.

Ciento treinta y dos hombres elegidos por la voluntad libre de los pueblos no deben ser deprimidos hasta el grado de suponerlos juguete de la elocuencia de un orador sofista. No son los Congresos los que han hecho la infelicidad de las naciones, ni es posible concebir que dejen de balancearse unas a otras las voluntades de tantos individuos. Los gobiernos fiados a una sola mano son los que moderados al principio y despóticos después, han oprimido últimamente a los pueblos; las administraciones que no han sido dirigidas por una constitución bien meditada, son las que han violado los derechos de los hombres: los monarcas que no han tenido otra ley que su voluntad, son los que han hecho pobres las tierras de riqueza.

El Congreso, uno en su organización, es el legislador de los pueblos. Dicta las leyes, determina las fuerzas y fija los gastos que exige la administración nacional. Forma el Plan de lo que se ha de hacer: designa las manos primeras que lo han de ejecutar: señala la cantidad y fuerza precisas para la ejecución. Pero no ejecuta él mismo porque si en un aspecto los ejecutores más ilustrados de un plan son los mismos que lo han formado, en otro sería peligroso que el ejecutor de una ley tuviese facultad para modificarla o alterarla a su placer.

CUERPO EJECUTIVO

El cuerpo legislativo es la voluntad: el ejecutivo es la mano de la nación. El primero manifiesta el voto general de los pueblos: el segundo da el impulso primero al movimiento: dirige las acciones necesarias para cumplirlo.

Hacer que en todos los puntos del estado sea observada la ley, es el objeto grande de su institución. Para llenarlo debe nombrar los funcionarios que han de cumplir sus órdenes, disponer de la fuerza, dirigir las relaciones y tener la administración suprema de los fondos nacionales. Todo gobernador debe tener las facultades precisas para gobernar; y sería en caso contrario injusticia muy clara hacerle por una parte responsable de la mala administración y negarle por otra las atribuciones que exige el sistema mismo de la administración.

La facultad tremenda de declarar la guerra ha dividido a los publicistas. Unos la creen propia del cuerpo legislativo, y otros juzgan que corresponde al ejecutivo.

El derecho de guerra y de paz, dicen los primeros, es la expresión del voto general de la nación, y el acto de pronunciarlo sólo puede corresponder a sus representantes.

Por no haberse dado a los Congresos aquella facultad, los pueblos han sido muchas veces víctimas sacrificadas al interés de una familia. Que el cuerpo legislativo declare y el ejecutivo haga la guerra. Esto es lo que exige la razón y lo que conviene a los intereses de la nación.

El despotismo y la libertad, dicen los segundos, hacen males de igual magnitud. Los pueblos libres han declarado guerras injustas como los reyes déspotas. En las monarquías donde un hombre, solo y sagrado, es el que manda, parece más peligroso dar a la autoridad ejecutiva el derecho de la guerra que en una república representativa donde son tres los que tienen el gobierno supremo. En la monarquía se confía sin embargo aquel derecho a los reyes: se les concede aun en los países más celosos de su libertad: se les dio en Aragón: se les da en Inglaterra; y no se les ha quitado en España.

El secreto que en algunos casos es afectación risible, en otros es necesidad verdadera. Muchas ocasiones es necesario prevenir a un enemigo astuto que fingiendo planes diversos prepara el de la agresión más injusta. La actividad, la energía son decisivas en este punto. El que combina más pronto el que obra con más rapidez: el que vela y sorprende, es en lo general el que triunfa. En un Congreso numeroso es muy difícil el secreto: es necesaria la lentitud; y no puede haber igual actividad. El Congreso no es permanente ni conviene que lo sea. Si se disuelve concluido el bienio; y en el periodo de su disolución declara guerra un enemigo poderoso, logrará ventajas sensibles mientras el Senado convoca y se reúnen los diputados.

En medio de estas razones la comisión impelida por ellas a extremos contrarios ha elegido un medio que parece conciliarlos.

El cuerpo ejecutivo declara la guerra y hace la paz, con previa consulta del Senado y de conformidad con su dictamen. De esta manera se respetan los derechos de la nación, oyendo a un Senado elegido por ella misma: se reúnen las luces de dos cuerpos que deben haberlas: no se deja a merced del ejecutivo la declaratoria que puede comprometer más a los pueblos: se asegura el secreto, y no se entorpece la actividad.

Es aun de este modo atribución delicada, la de declarar la guerra y hacer la paz: son grandes y de trascendencia las demás que se señalan al cuerpo ejecutivo. Pero los pueblos no deben temer abusos iguales a los sufridos en otros tiempos y países. El ejercicio de aquellas facultades no se encarga a un individuo, que por ser único podría abusar de ellas en daño de la nación; no se encomienda a muchos que embarazándose por su misma multitud, no podrían obrar con la actividad y energía que debe ser el carácter de un gobierno. Se da a tres solamente y todos ellos son elegidos por los representantes de la nación: se les renueva cada cuatro años, porque la perpetuidad inclina a formar sistemas funestos a las naciones: sus personas no

son sagradas e inviolables como la de los reyes: se les sujeta a responsabilidad y se les obliga a oír la voz del Senado y Congresos.

CONGRESOS PROVINCIALES

Los que debe haber en las provincias son conformes a la naturaleza del gobierno a que se inclinan ellas mismas. Si el cuerpo ejecutivo se reproduce en los jefes que nombra, el espíritu del legislativo debe reproducirse en las corporaciones de las provincias.

El Congreso nacional forma el plan legislativo del gobierno político de la nación, y el cuerpo ejecutivo, limitándose a este título, lo ejecuta y hace cumplir.

Los Congresos provinciales forman el plan del gobierno respectivo de sus provincias y sus prefectos son ejecutores de él.

Todo aquello que es necesario para el gobierno interior de la provincia, y no toca al político de la nación, forma la área precisa a que deben extenderse las atribuciones de un Congreso provincial. No puede éste abrir relaciones diplomáticas ni comerciales con potencias extranjeras; no puede celebrar tratados ni hacer alianzas con ellas, no puede disponer de la fuerza armada de la nación aun existiendo en la provincia; no puede dictar leyes, propias del cuerpo legislativo, pero tiene facultad para formar los reglamentos, acordar las providencias, fijar los gastos, e imponer las contribuciones que exija el gobierno de la provincia. La tiene para proponer a quien ha de ser ejecutor de sus acuerdos; para celar la observancia de la constitución; para nombrar al jefe de la milicia propia de la misma provincia; a los individuos del Senado, y a los del instituto que ha de dirigir la educación física, moral y literaria.

EDUCACIÓN

Este punto, el más descuidado en América, es para su bien general el de necesidad más absoluta. La educación es la que da al hombre la forma que debe tener según la del gobierno que le rija.

Una administración arbitraria atropella los derechos de la humanidad, oculta el conocimiento de ellos, embaraza la instrucción que los descubre, enseña las facultades de los monarcas, y la obediencia pasiva de los pueblos. Un gobierno que se funda en los derechos del ciudadano, debe perfeccionar sus facultades para ponerle en aptitud de conocerlos; extender la ilustración por todas las clases para que no exista una sola que por su ignorancia sea víctima de otra; enseñar los principios que sirven de base a la constitución, y dar la moralidad precisa para conservarla.

Hombres formados por la educación de los gobiernos despóticos, trabajarán siempre para que no haya instituciones liberales. Ciudadanos instruidos en sus derechos lucharán eternamente contra el despotismo.

Los pueblos que quieran ser libres es necesario que aprendan a serlo; y estas lecciones sólo puede darlas un sistema nuevo de educación.

Son hermosos los que han trabajado los amigos de la ilustración general; y modificados como exige la diversidad de circunstancias harían el bien de esta América.

Conociendo los vicios del sistema actual de instrucción pública, deseando la circulación de conocimientos, la igualdad de las provincias, y la conservación de un centro de unidad que dé impulso activo a las ciencias y artes, la comisión ha propuesto que haya en cada provincia un instituto provincial, y en el lugar que señale el Congreso un instituto nacional; les ha designado las atribuciones principales para influir en los progresos de la razón; les ha dado la representación que merecen unos cuerpos depositarios de las ciencias directoras de la educación; los ha puesto bajo la protección de los Congresos nacional y provinciales interesados en la ilustración de la nación y provincias.

Una experiencia tan larga como dolorosa, ha manifestado que los gobiernos no han sido siempre celosos de la ilustración, o no han tomado interés activo en sus progresos, o han embarazado los que podía hacer la razón. En toda sociedad los que están colocados en posición ventajosa aman el sistema que los ha elevado a ella; temen las innovaciones; son enemigos de las reformas. Un gobierno, dice un publicista, cualquiera que sea su forma, en todas sus divisiones como en todos sus grados, procurará siempre conservar y por consiguiente favorecer la perpetuidad de las opiniones; y su influencia sobre la enseñanza tenderá a suspender los progresos y alejar de los espíritus las ideas de perfección.

Los institutos compuestos de sabios que la buscan en el sistema de conocimientos, son los que deben determinar la enseñanza y variarla según los progresos de la razón. Los Congresos que marchan según el movimiento del siglo, son los que deben poner bajo su protección a los institutos que deben moverse con él.

Entonces no se verá la educación uno o dos siglos distante del punto a que se ha elevado la razón; los establecimientos literarios no serán como unos puntos fijos que han quedado atrás para medir desde ellos todo lo que han adelantado las ciencias; la instrucción avanzará progresivamente, y generalizándose en diversos grados por todas las clases, será México una sociedad de hombres que conozcan sus intereses, y sepan sostener sus derechos.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Uno de los más preciosos es el que tiene a la administración recta de justicia. Son diversos los sistemas que se han meditado, u organizaciones que se han dado al poder judicial. En los siglos oscuros, cuando el espíritu de aristocracia influía casi en todas las instituciones, los juzgados eran propiedad de hombres que no poseían los principios necesarios para juzgar. Los pueblos sufrían injusticias dolorosas, y era preciso las sufriesen especialmente en diferencias de individuos de una clase con los de otra. Se oyó al fin su voz; se capituló con los propietarios de los juzgados; se les dejó la autoridad y honores de jueces; y se les obligó a pedir consejo a un letrado y conformarse con su dictamen. Posteriormente se dió un paso más a la razón. Se acordó que fuesen jueces los que tuviesen las luces necesarias para serlo; se prometió el establecimiento de jurados cuando el cuerpo legislativo lo juzgase conveniente; se dividieron en dos salas las autoridades para que no fuesen en súplica jueces los mismos que lo habían sido en apelación; y se demarcó la área de sus atribuciones limitándola, a lo judicial.

A este punto se llegó después de sacrificios sufridos en siglos por los pueblos infelices. Todavía no se ha subido al grado a que puede llegarse; hay imperfecciones en lo mismo que se ha mejorado.

El sistema de jueces ignorantes y asesores letrados es dilatorio, gravoso y contrario a lo que dicta la razón. Los empleos deben darse a quien tenga las virtudes y talentos precisos para servirlos. Si el juez ha de sentenciar con arreglo a la ley, parece necesario que lo sea aquel que sepa la ley.

El de jueces de letras es conforme a este principio. Mientras los códigos civil y criminal no tengan el grado de sencillez y claridad que deben tener; mientras no se generalice la instrucción, al menos en sus primeros elementos, será necesario dar a letrados las judicaturas.

El de jurados, sublime en el objeto de su establecimiento, parece preciso en unos países, innecesario en otros, útil en un tiempo, peligroso en otro. En Inglaterra donde el rey sólo nombra a los jueces, y estando la autoridad judicial en funcionarios u oficiales suyos, puede atacar la libertad; donde no hay en los condados corporaciones elegidas por el pueblo para celar las infracciones de constitución, y falta por consiguiente esta medida útil para contener a los jueces, la institución de jurados u otra que la subrogue es sin duda necesaria. Pero en un sistema en que no hay reyes, y el poder ejecutivo está en manos de tres individuos nombrados por los representantes de la nación; donde la provisión de judicaturas y magistraturas se hace a propuesta de un Senado elegido por los pueblos; donde los jueces y magistrados no ejercen solos sus funciones, sino asociados de colegas propuestos por las partes; y donde hay finalmente Congresos elegidos por las provincias para celar las infracciones de constitución, el establecimiento de jurados parecerá innecesario a quien sepa abrazar el plan de la comisión en su totalidad y partes. En un pueblo culto donde hubiese civilización y moralidad y el código fuese un sistema de leyes claras, precisas y sencillas, darle la facultad de elegir jueces a los más dignos de su confianza, sería hacerle, sin mayor peligro, centro inmediato de un poder que influye tanto en la suerte de sus hijos. En una nación donde más de la mitad de su población se compone de indios estúpidos o ignorantes; donde otro cuarto de ella se forma de infelices que ocupados en el trabajo penoso de su subsistencia no han podido cultivar su razón; donde las leyes son oscuras, complicadas y hacinadas unas sobre otras sin orden ni concatenación, la teoría de jurados no correspondería en la práctica a las miras de sus autores. En la misma Inglaterra, donde son tan diversas las circunstancias, los que han observado de cerca su administración judicial no han encontrado, dice un publicista, esa excelencia tan preconizada por algunos de sus escritores. Paley, uno de ellos, confiesa sus imperfecciones manifestando la poca justicia que se advierte en las diferencias en que hay alguna pasión o preocupación popular; en aquellos casos en que pone demandas un orden particular de hombres, como cuando el clero litiga sus diezmos; en aquéllos en que accionan funcionarios que sirven empleos odiosos como el de exactores de rentas; en aquéllos en que hay contestaciones entre propietarios y arrendantes; en aquéllos en que los espíritus están inflamados por disenciones políticas o religiosas.

El sistema de audiencias, noble en el objeto que tuvo el legislador, no es para decidir las segundas instancias la mejor combinación. Hay ahora y ha habido antes magistrados dignos de serlo; pero la ley debe imponer a todos los empleados la necesidad precisa de ser exactos en sus deberes; y esta medida fue olvidada respecto de las audiencias. Los frenos que contienen

a un juez son cuatro: la residencia, la recusación, la opinión pública y la revisión del superior. La ley ha eximido de residencia a los magistrados; la recusación es medida poco eficaz, porque recusándose a un oidor deciden sus compañeros; la opinión no tiene objeto fijo para sus censuras porque son secretas las votaciones; y las sentencias de revista son pronunciadas por compañeros de los que fallaron la de vista. La institución de no ver el proceso los jueces que han de determinarlo da sobrada extensión al arbitrio de un relator, y disminuye las ventajas que se propuso el legislador componiendo de muchos magistrados al tribunal. El espíritu de corporación en una audiencia compuesta de magistrados perpetuos es necesario que exista; y todo espíritu de cuerpo es dañoso a la sociedad. Si se establece una audiencia en cada provincia, la suma de sueldos sería muy gravosa a los pueblos. Si no se pone en cada una la que corresponde, las provincias serán privadas de los tribunales que debe haber en su territorio.

El sistema que propone la comisión es sencillo y poco dispendioso. Un juez de talento y virtud decide en cada partido las primeras instancias: magistados nombrados por el poder ejecutivo y colegas propuestos por las partes determinan las segundas y terceras en cada provincia; un tribunal supremo vela la conducta judicial de los magistrados y jueces; y un senado juzga a los individuos del tribunal supremo.

Este sistema da a las provincias los juzgados que deben tener; concede a las partes el derecho de proponer a sus jueces; reúne en las luces de un magistrado, que las ha adquirido con el estudio y despacho de los asuntos, la confianza que merecen colegas propuestos por los interesados; obliga al magistrado a ser recto poniéndole en medio de dos conjueces designados por las partes y observadores de su conducta; no grava a los pueblos con los gastos crecidos de tribunales compuestos de muchos funcionarios; asegura las ventajas que tendría una institución en que los interesados mismos eligiesen arbitros para terminar sus diferencias, y una autoridad imparcial nombrase tercero para dirimir la discordia de los arbitros.

Si el poder judicial abraza casi todas las acciones del ciudadano, y ejerce en ellas una influencia decisiva de su propiedad y existencia, organizado con sencillez, sometido a la ley y obligado a respetar los derechos, la nación podrá al fin prometerse todos los bienes que son consiguientes. La justicia es la primera necesidad de los pueblos; y esta virtud es el objeto del sistema propuesto.

SENADO

No es invención nueva el Senado que se propone. Antes que hubiera Congreso en México, lo propuso uno de los publicistas más acreditados y juiciosos.

La comisión ha indicado la organización que debe darse a cada poder para que los pueblos reciban de ellos todo el bien que pueden hacerles; pero no ha creído bastantes estas líneas primeras. Los derechos de la nación son a sus ojos muy preciosos para que no haya meditado nuevas garantías en su favor.

Una constitución, extendiéndose a todos los futuros, debe ser previsoria. No basta dividir los poderes y designar a cada uno sus atribuciones: es necesario ponerlos en la necesidad justa de no exceder de ellas; y éste es el objeto que la comisión ha tenido presente en el Senado que propone. Debe haber, dice un publicista, un cuerpo que quiera, otro que obre, y otro

que conserve. Sin la existencia simultánea de los tres sería incompleta la organización de la sociedad.

Un Senado compuesto de dos individuos de cada provincia, propuestos por las juntas electorales, y nombrados por los Congresos de ellas mismas, cela la conservación del sistema constitucional en todos los puntos del estado, por sí y por medio de los congresos provinciales; reúne las representaciones de éstos sobre infracciones de constitución; propone los proyectos de ley que juzga necesarios para llenar su instituto; obliga al cuerpo legislativo a respetar la constitución y obrar con el detenimiento que exigen sus altas atribuciones; reclama aquellas leyes y decretos que son contrarios a la ley fundamental, o no han sido discutidos y acordados en la forma prescrita por ella misma, juzga a los individuos del cuerpo ejecutivo, a los diputados, a los secretarios de estado, y a los ministros del tribunal supremo de justicia en los casos precisos que debe designar una ley meditada con toda la circunspección posible; convoca a Congreso extraordinario cuando lo exija el interés general de la nación; y en casos señalados igualmente por otra ley pensada con todo el detenimiento necesario, dispone de la milicia dando a los jefes de ella las órdenes correspondientes.

Un cuerpo de tantas atribuciones se dirá que exije otro que lo equilibre. Si para mantener a los demás poderes en el círculo preciso de sus atribuciones se ha juzgado necesaria la creación de un Senado, para sujetar a éste en el ejercicio de las suyas, podría creerse preciso el establecimiento de otra autoridad suprema.

No ha escapado este punto a las discusiones de la comisión. Examinó primero si sería útil que los Senadores fuesen juzgados por un tribunal nombrado por el Congreso y compuesto de individuos de su seno; pero le embarazó en sus pensamientos la consideración de que si el Senado juzgaba a los individuos del Congreso y el Congreso a los del Senado, esta reciprocidad de juicios haría ilusorios los efectos de su institución. Meditó después si convendría crear un tribunal de jurados elegidos por los Congresos provinciales; y en este pensamiento que ofrece bienes por una parte, encontró males por otra. Observó posteriormente que el Senado no puede juzgar a los individuos del cuerpo ejecutivo ni a los magistrados del tribunal de justicia, sin que el Congreso declare haber lugar a la formación de causa. Consideró que la ley puede restringir con sabiduría la facultad de disponer de la milicia. Tuvo presente que sus atribuciones relativas al cuerpo legislativo se limitan a proponer proyectos de leyes, reclamar las inconstitucionales, y hacer de este modo que las revise el Congreso. Infirió de aquí que sus atribuciones, no son tan altas como se piensa. Consideró últimamente que no debe ser infinita la creación sucesiva de autoridades, y dejó a la deliberación de V. Sob. este punto importante.

Así es como ha examinado y fijado los que deben ocupar la atención de este Congreso. No se ha limitado a los que se miran en una constitución como principios de donde se derivan los demás. Ha formado el plan de ella, y le ha dado extensión para hacerlo más perceptible.

En todos ellos no ha tenido otro objeto que el mayor número posible. Superior a los intereses de clases, familias e individuos, la comisión ha separado la vista de todo para fijarla únicamente en la nación. En ella ha reconocido el único poder o soberanía de donde emanan todas las autoridades, y en los ciudadanos que la componen ha respetado el derecho de elegir, a los individuos de los ayuntamientos que gobiernan a los pueblos: a los diputados provinciales que gobiernan a las provincias y nombran a los Senadores, a los diputados nacionales que dictan las leyes y nombran a los individuos del cuerpo que gobierna a la nación.

Levantado el plan sobre estas bases, la comisión ignora sin embargo los futuros. Las oscilaciones políticas, dice un filósofo, imprimen a sus nuevas creaciones un carácter de debilidad. Para que las instituciones puedan tener vigor y solidez es necesario que las semillas de disención y discordia sean sofocadas: que los hombres sientan la necesidad del reposo: que la calma sea restablecida, y que la paz, reparadora de tantos males, consuele al fin a la patria.

Pero la comisión ha cumplido el acuerdo de V. Sob.: presenta a la nación verdades que no debe olvidar cuando los enemigos de ella quieran sofocarle sus derechos; y coopera a la unión de las provincias, procurando la igualdad de todas.

México, 16 de mayo de 1823.— *José del Valle.— Juan de Dios Mayorga.— Dr. Mier.— Lorenzo de Zavala.— Lic. José Mariano Marín— José María Jiménez.— Francisco María Lombardo.— José María de Bocanegra.*

NOTAS

[a] *El marqués de Condorcet, Tomás Payne, Sieyes, Destuit de Tracy, y otros publicistas apoyan con su opinión la que ha preferido la mayoría de la comisión. "La combinación de dos cámaras, dice el primero, no es obra de una teoría política nacida en un siglo ilustrado; porque sin hablar de algunas Constituciones fundadas en la preocupación de que los hombres pueden reunirse en una misma sociedad para tener derechos desiguales, esa institución debe su origen a pueblos que no habían por ley sino las costumbres antiguas, donde toda mutación o reforma era vista con el temor que sigue siempre a la ignorancia, donde la administración, casi nula, o tenía necesidad de tomar determinaciones nuevas. Se buscaba no tanto en poder que pudiese obrar, cuanto un poder que impidiese* [ilegible]... *Donde la reforma de las leyes existentes, establecimiento de un nuevo sistema de legislación, es uno de los primeros deberes de los representantes del pueblo; donde tantas pérdidas que reparar, tantas instituciones que crear, hacen sentir la necesidad de una autoridad activa que obre sin cesar no pueden convenir dos cámaras que se embarazarían una a otra".*

[b] *En todos los cálculos de población hechos hasta ahora, hay errores o equivocaciones. Las hay en el censo de Revillagigedo, en las tablas de Humboldt, en el estado de Navarra. Pero cualquiera que se elija servirá de base para igual raciocinio. Será siempre cierto que México, Puebla, Guadalajara, Guanajuato, Oaxaca, Mérida y Valladolid tienen población más grande que Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Sonora, Nuevo México y las Californias; será verdad que estableciendo las cámaras que se pretenden, las segundas provincias, siendo menos pobladas, tendrían más diputados que las primeras, siendo de mayor población. La voz del mayor número, dice el autor del contrato social, es la que debe obligar siempre a todos los demás, es una consecuencia del mismo pacto social. Querer formar una sociedad política y pretender que el mínimo tenga más votos que el máximo es pretensión injusta, que probablemente repugnarían las provincias más pobladas. Naciones soberanas mandan a una dieta ministros en igual número, para tratar asuntos determinados; pero provincias que forman una sociedad política deben regirse por diversos principios. Un federalismo en que cada provincia sea verdadero estado, o cuerpo político independiente; es institución que no nos conviene en las actuales circunstancias. El interés mismo de los pueblos exige que no se lleve su último término el federalismo: su mismo bien demanda que se modere.*

PLAN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA NACIÓN MEXICANA

El Congreso de diputados elegidos por la nación mexicana, reconociendo que ningún hombre tiene derecho sobre otro hombre, si él mismo no se lo ha dado: que ninguna nación puede tenerlo sobre otra nación, si ella misma no se lo otorga: que la mexicana es por consecuencia independiente de la española y de todas las demás, y por serlo tiene potestad para constituir el gobierno que asegure más su bien general, decreta las bases siguientes de la constitución política.

1.

La nación mexicana es la sociedad de todas las provincias del Anáhuac o N. España, que forman un todo político.

Los ciudadanos que la componen tienen derechos y están sometidos a deberes.

Sus derechos son: 1o. el de libertad que es el de pensar, hablar, escribir, imprimir y hacer todo aquello que no ofenda los derechos de otro; 2o. el de igualdad que es el de ser regidos por una misma ley sin otras distinciones que las establecidas por ella misma; 3o. el de propiedad, que es el de consumir, donar, vender, conservar o exportar lo que sea suyo, sin más limitaciones que las que designe la ley; 4o. el de no haber por ley, sino aquella que fuere acordada por el Congreso de sus representantes.

Sus deberes son: 1o. profesar la religión católica apostólica romana como única del estado; 2o. respetar las autoridades legítimamente establecidas; 3o. no ofender a sus semejantes; 4o. cooperar al bien general de la nación.

Los derechos de los ciudadanos son los elementos que forman los de la nación. El poder de ésta es la suma de los poderes de aquéllos.

La soberanía de la nación, única, inalienable e imprescriptible, puede ejercer sus derechos de diverso modo, y de esta diversidad resultan las varias formas de gobierno.

El de la nación mexicana es una República representativa y federal.

La nación ejerce sus derechos por medio: 1o. de los ciudadanos que eligen a los individuos del cuerpo legislativo; 2o. del cuerpo legislativo que decreta las leyes; 3o. del ejecutivo que las hace cumplir a los ciudadanos; 4o. de los jueces que las aplican en las causas civiles y criminales; 5o. de los senadores que las hacen respetar a los primeros funcionarios.

2.

Los ciudadanos deben elegir a los individuos del cuerpo legislativo o Congreso nacional, del Senado, de los Congresos provinciales, y de los Ayuntamientos.

La elección no será por ahora directa. Se hará por medio de electores en la forma que prescriba la ley.

Las bases son:

Para el cuerpo legislativo un individuo por cada 60 000 almas. Para el Senado tres individuos propuestos por cada junta electoral de provincia.

Para los Congresos provinciales 13 en las provincias de menos de 100 000 almas, 15 en las de más de 100 000, 17 en las de más de 500 000, 19 en las de más de un millón.

Para los Ayuntamientos, 1 alcalde, 2 regidores y 1 síndico en los pueblos de menos de 1 000 almas; 2 alcaldes, 4 regidores, 1 síndico en los de más de 3 000; 2 alcaldes, 6 regidores y 2 síndicos en los de más de 6 000; 2 alcaldes, 8 regidores y 2 síndicos en los de más de 16 000; 3 alcaldes, 10 regidores y 2 síndicos en los de más de 24 000; 1 alcalde, 12 regidores y 2 síndicos en los de más de 40 000; 4 alcaldes, 14 regidores y 2 síndicos en los de más de 60 000.

3.

El cuerpo legislativo o Congreso nacional se compone de diputados, inviolables por sus opiniones. Debe instalarse y disolverse el día preciso que señale la constitución: discutir y acordar en la forma que prescriba ella misma: dictar por la iniciativa de sus individuos o de los Senadores las leyes y decretos generales que exija el bien nacional: revisar aquéllas contra las cuales represente el cuerpo ejecutivo y confirmarlas por pluralidad, o revocarlas por las dos terceras partes de votos: volver a discutir las que reclame el Senado y no ratificarlas ni derogarlas sino estando acordes los dos tercios de sufragios: decretar las ordenanzas del ejército, armada y milicia constitucional, hacer la división de provincias y partidos teniendo por base la razón compuesta del territorio y la población: nombrar cada cuatro años a los individuos del cuerpo ejecutivo: declarar si ha lugar a la formación de causa contra ellos, los secretarios de estado, y los magistrados del tribunal supremo de justicia: determinar la fuerza de mar y tierra: fijar los gastos de la administración nacional: señalar el cupo que corresponda a cada provincia; aprobar los tratados de alianza y comercio; formar el plan general de educación: proteger al instituto nacional y nombrar a los profesores que deben componerlo: distribuir las autoridades supremas en diversas provincias para que se acerquen éstas al equilibrio posible, y no se acumulen en una sola los elementos de prepotencia: formar dos escalas graduales una de acciones interesantes al bien general, y otra de honores o distinciones para que el cuerpo ejecutivo premie el mérito con arreglo a ellas: crear un tribunal compuesto de individuos de su seno para juzgar a los Diputados de los Congresos provinciales en los casos precisos que determinará una ley clara y bien meditada: limitarse al ejercicio de las atribuciones que le designe la constitución.

4.

El cuerpo ejecutivo se compone de tres individuos. Debe residir en el lugar que señale el legislativo: representar a éste dentro de quince días los inconvenientes que pueda producir una ley: circular las que se le comuniquen y hacerlas ejecutar sin modificarlas ni interpretarlas: nombrar y remover a los secretarios de estado: nombrar todos los jueces y magistrados, los empleados civiles de la nación, y los embajadores, cónsules o ministros públicos a propuesta del Senado: proveer los empleos políticos y de hacienda de cada provincia, a propuesta de los Congresos provinciales y los militares por sí mismo sin consulta o propuesta: conceder con arreglo a la ley los honores o distinciones que designe ella misma: decretar la inversión de los fondos nacionales según mande la ley; presentar cada año al cuerpo legislativo por medio de los secretarios respectivos cuenta documentada de las rentas y gastos de la nación: disponer de la fuerza armada como exija el bien de la misma nación: declarar la guerra y hacer la paz con previa consulta del Senado, de conformidad con su dictamen, y dando después cuenta al Congreso: dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con parecer del mismo Senado y dando también cuenta al Congreso: manifestar a la apertura de cada legislatura el estado de la nación: ceñirse a sus atribuciones y no ejercer en caso alguno las legislativas ni judiciales.

5.

Habrá un Congreso provincial y un prefecto en cada una de las provincias en que el Congreso nacional divida el Estado.

El Congreso se compondrá de los individuos que expresa el artículo 2o. y será presidido por ellos mismos alternando según el orden de su elección. Debe nombrar para el Senado dos de cada terna hecha por cada junta electoral de provincia: proponer tres sujetos para los empleos políticos y otros tantos para los de hacienda de la provincia, nombrar al jefe de la milicia nacional de ella; proteger al instituto provincial; elegir a los profesores que deben formarlo; comunicar al prefecto las leyes y decretos que acuerde el Congreso y circule el cuerpo ejecutivo: aprobar o reformar los arbitrios que deben proponer los Ayuntamientos para las necesidades de los pueblos: fijar los gastos de la administración provincial: formar el plan de gobierno de la provincia y el sistema de contribuciones necesarias para llenar el cupo que le corresponda en los gastos nacionales y el total de los provinciales: presentar uno y otro al cuerpo legislativo para su conocimiento: no imponer derecho de exportación o importación sin aprobación previa del Congreso nacional: hacer los reglamentos y acordar las providencias que exija el gobierno de la provincia: dar parte al Senado de las infracciones de constitución, y al cuerpo ejecutivo de las omisiones o vicios de los funcionarios.

El Prefecto ejecutará y hará ejecutar las leyes y decretos que le comunique el Congreso provincial, y el plan de gobierno y sistema de contribuciones formados por él: será responsable en caso contrario, y se le exigirá la responsabilidad en la forma que prescriba la ley.

6.

La ilustración es el origen de todo bien individual y social. Para difundirla y adelantarla, todos los ciudadanos pueden formar establecimientos particulares de educación.

A más de los que formen los ciudadanos habrá institutos públicos: uno nacional en el lugar que designe el cuerpo legislativo y otro provincial en cada provincia.

El nacional se compondrá de profesores nombrados por el cuerpo legislativo e instruidos en las cuatro clases de ciencias físicas, exactas, morales y políticas. Celará la observancia del plan general de educación formado por el cuerpo legislativo: hará los reglamentos e instrucciones precisas para su cumplimiento: circulará a los institutos provinciales las leyes y decretos, relaciones a instrucción pública que debe comunicarle el cuerpo ejecutivo: determinará los métodos de enseñanza, y los variará según los progresos de la razón: protegerá los establecimientos que fomenten las artes y ciencias: abrirá correspondencia con las Academias de las naciones más ilustradas para reunir los descubrimientos más útiles y comunicarlos a los institutos de cada provincia. Ordenará los ensayos o experimentos que interesen más al bien de la nación; presentará anualmente al cuerpo legislativo cuatro memorias respectivas a las cuatro clases de ciencias manifestando su atraso o progresos y las medidas más útiles para su adelantamiento.

Los institutos provinciales celarán el cumplimiento del plan de educación en su provincia respectiva, procurarán la ilustración de los ciudadanos; y mandarán cada año al instituto nacional, las memorias sobre el estado de la instrucción pública y providencias convenientes para sus progresos.

7.

Los individuos de la nación mexicana no deben ser juzgados por ninguna comisión. Deben serlo por los jueces que haya designado la ley. Tienen derecho para recusar a los que fueren sospechosos. Lo tienen para pedir la responsabilidad de los que demoren el despacho de sus causas de los que no las sustancien como mande la ley: de los que no las sentencien como declare ella misma. Lo tienen para comprometer sus diferencias al juicio de arbitros o arbitradores.

Simplificados los códigos civil y criminal: adelantada la civilización y mejorada la moralidad de los pueblos, se establecerán jurados en lo civil y en lo criminal.

Entretanto habrá en cada pueblo los alcaldes que expresa el artículo 2o., en cada partido un juez de letras, en cada provincia dos magistrados, y en el lugar que señale el Congreso un tribunal supremo de justicia.

El alcalde y dos vecinos nombrados uno por cada parte ejercerán funciones de conciliadores en las diferencias civiles.

El juez de letras sustanciará las causas en primera instancia, y sentenciará por sí solo todas las criminales y las civiles en que haya apelación. Las civiles en que no la hubiere según la ley, serán determinadas por él y dos colegas que nombrará, eligiendo uno de la terna que debe proponer cada parte. Las criminales en que haya imposición de pena, no serán ejecutoriadas sin la aprobación del magistrado y colegas.

La segunda instancia será en lo civil y criminal sustanciada por el magistrado de la provincia, y sentenciada por él y dos colegas que elegirá de las ternas que deben proponer en lo civil los dos contendores, y en lo criminal el reo, o su defensor y el síndico del Ayuntamiento.

No habrá tercera instancia si la sentencia de la segunda fuere confirmatoria de la primera. La habrá en caso contrario, y entonces será decidida por otro magistrado que residirá también en la provincia, y por dos recolegas nombrados como los anteriores.

El tribunal supremo de justicia compuesto de siete magistrados conocerá de las causas de nulidad contra sentencias dadas en última instancia y de las criminales contra los magistrados de provincia: decidirá las competencias de éstos: celará la más pronta administración de justicia: y juzgará a los jueces y magistrados que demoren el despacho de las causas o no la sustancien con arreglo a derecho, o las sentencien contra ley expresa.

8.

El Senado se compondrá de individuos elegidos por los Congresos provinciales a propuesta de las juntas electorales de provincia. Debe residir en el lugar que señale el Congreso nacional: celar la conservación del sistema constitucional: proponer al cuerpo legislativo los proyectos de ley que juzgue necesarios para llenar este objeto: reclamar al mismo las leyes que sean contrarias a la constitución, o no fueren discutidas o acordadas en la forma que prescriba ella misma: juzgar a los individuos del cuerpo ejecutivo, a los diputados del legislativo, a los magistrados del tribunal supremo de justicia, y a los secretarios de estado en los casos precisos que designará una ley clara y bien pensada: convocar a Congreso extraordinario en los casos que prescriba la constitución: disponer de la milicia constitucional, dando a los jefes de ella las órdenes correspondientes en los casos precisos que también designará la constitución.

México, mayo 16 de 1823. *José del Valle.— Juan de Dios Mayorga.— Dr. Mier.— Lic. José Mariano Marín.— Lorenzo de Zavala.— José María Jiménez.— José María de Bocanegra.— Francisco María Lombardo.*

VOTO PARTICULAR DEL DR. MIER

En el proyecto de bases para la constitución de la república federal del Anáhuac, me separé del dictamen de la comisión con los señores Bustamante (D. Xavier) Lombardo García y Gómez Farías, acerca de ese Senado de nueva invención que no hace parte del cuerpo legislativo. Y como la comisión era de once individuos, por un solo voto resultó la mayoría. Pero me congratulo, señor, que el de la minoría haya sido conforme a las instrucciones que me enviaron tres provincias, desde que tuve el honor de que me nombrasen comisionado suyo para la Junta general indicada en Puebla. Permítaseme leerlas sobre este punto.

"En atención, dicen, a que los mayores males sufridos por estas Provincias en los dos últimos años han provenido de la injusta preponderancia que contra los derechos de igualdad respectiva entre provincia y provincia, entre pueblo y pueblo, y entre hombre y hombre, se han ejercitado descaradamente en México, tanto en la Junta provisional, en el extinguido Congreso, en la llamada Junta instituyente como principalmente en el gobierno supremo, será el primer cuidado de los señores diputados de estas provincias procurar eficazmente por todos medios, el que en la convocatoria y en cualquier otro acto, que de a ello lugar, de los de la Junta

general de que van a ser miembros, se reconozca y ponga a cubierto para siempre la dicha igualdad política de las provincias entre sí: pues así como un hombre, porque sea más rico, más ilustre, más grande que otro, no deja de ser igual a otro que no tiene esas cualidades; así también, aunque aparezcan semejantes diferencias entre pueblo y pueblo y entre provincia y provincia, deben ser políticamente iguales y tener como personas morales iguales derechos; y por consiguiente igual influencia en la formulación de las leyes y muy principalmente en las fundamentales, o sea el primer pacto social, por el cual se va a constituir esta grande nación".

"Para reducir a práctica estos principios inconcusos parece preferible al medio de una convención general compuesta de igual número de representantes por cada provincia, el de dividir para sus deliberaciones el número total de representantes en dos cámaras o salas, compuestas ambas de diputados nombrados todos única y exclusivamente por la nación soberana, y jamás por el poder ejecutivo, ni por persona o corporación a título de privilegio alguno, que en todo caso se reputaría por una usurpación de los derechos de la nación".

"El cuerpo de los representantes en su totalidad será tan numeroso, que en él se hallen las luces y virtudes necesarias para hacer buenas leyes, y una fuerza moral bastante para que sea verdaderamente el baluarte inexpugnable de la libertad nacional contra los embates constantes del poder ejecutivo y de cualquier otro poder, de dentro o fuera de la nación: enemigo de sus libertades y derechos imprescriptibles: pareciendo por tanto, que dicho número total debe ser sobre poco más o menos especialmente en el presente caso de constituirse la nación, no menos que de ciento cuarenta diputados".

"La primera cámara se compondrá de representantes nombrados por la base de la población de las provincias, no pudiendo ser ésta mayor de 60 000 almas para dar un diputado, y debiendo darse uno por un quebrado que exceda su mitad, y siempre uno por cualquiera provincia que teniendo hoy el rango político de tal, no tenga el numero de 60 000 almas".

"Los representantes de la nación que han de componer la segunda cámara, serán nombrados por la base, no ya de la población de cada provincia, sino por la base del número de provincias que tienen hoy el rango político de tales en todo nuestro territorio; debiendo nombrar cada provincia un representante siempre que el número de los de la primera sala llegue al de ciento; pero si éste fuere menor, cada provincia nombrará para dicha segunda cámara dos representantes".

Tales son las instrucciones que sobre el punto en cuestión me envió desde el 4 de abril del presente año la diputación reunida en Monterrey de las provincias de Nuevo Reino de León, Coahuila y Texas; y yo juzgo que opinaron con acierto. Puntualmente señor, las quejas que continuamente estamos oyendo de éstas y otras provincias rolan sobre la preponderancia de México: y no componiéndose el Congreso en el dictamen de la comisión más que de una sola cámara, que precisamente ha de formarse por la base de la población, la cual en la provincia Mexicana asciende a casi millón y medio, continuarán gritando las provincias, que las quiere dominar la capital por el influjo de su numerosa representación. Y cierto, que uniéndosele, como es regular por la analogía de intereses, la representación de una o dos provincias contiguas y tan pobladas como Puebla, puede sofocar la de las provincias menores y dar la ley en el Congreso. Este inconveniente chocante; pero necesaria en el sistema de una cámara, se remedia, como lo está en los Estados Unidos de Norte América, con una segunda cámara que tenga el derecho de revisar las leyes. Porque como para ella cada provincia por pequeña que

sea nombra tantos Senadores como la grande, quedamos entonces iguales y no pasará ley alguna que pueda perjudicarnos.

El argumento que se objeta, de que por el derecho de rechazar las leyes en la segunda cámara, vendría la minoría a triunfar de la mayoridad en la primera cámara, es un argumento más especioso que sólido. Desde luego no es un inconveniente que el voto de pocos hombres sesudos prevalezca al de la multitud. *No sigas la turba para obrar mal,* dice el Espíritu Santo, *ni sujetes tu juicio a la sentencia de muchos para desviarte de lo verdadero.* Muchas veces el voto de un representante será contrario al de la pluralidad de sus comitentes; pero ellos se comprometieron en su sufragio como toda la nación admitiendo una sala de Senadores puede convenir, en que para enviar mayores inconvenientes que después se dirán, la minoría de aquéllos obste a la pluralidad de sus representantes. Todo depende del contrato social que va a celebrarse, no entre mayor y menor, sino entre partes moral y políticamente iguales, como deben considerarse nuestras provincias al establecerse la constitución.

Se me dijo en la discusión por los señores del dictamen contrario, que la segunda cámara es un resto de la aristocracia y yo respondo que es al contrario, la perfección del gobierno democrático representativo, porque exigiendo éste la igualdad en lo posible, sólo así se consigue. Más bien diría yo, que esa introducción de un Senado aislado, sin hacer parte del cuerpo legislativo, es una imitación del Consejo aristocrático de Estado en España, que tan malamente nos ha probado en México. Los españoles conociendo la necesidad de una segunda cámara, y no queriendo llamar a componerla su nobleza en general viciosa e ignorante, ni su alto clero en parte fanático, y ambos amigos frecuentes en aquel país de un trono absoluto y opresor, inventaron ese Consejo de Estado que supliese la segunda cámara, y por ser aristocrático contentase en algún modo a los magnates espirituales y temporales.

No es una segunda cámara de nobles o pares como en Inglaterra y Francia, por la que yo litigo, sino por una igual a la que tienen los Estados Unidos y Colombia, gobiernos republicanos, populares, donde no ha quedado sombra de aristocracia. Yo quiero una segunda cámara de Senadores, ciudadanos y nada más; pero que posean ciertos haberes para que no estén tan expuestos como los pobres y menesterosos a la tentación de dejarse ganar por las promesas del gobierno, o por las dádivas de los aspirantes a empleos que deben consultarle: ciudadanos, que pasando de los treinta y cinco años puedan con la madurez de su edad, su circunspección y experiencia moderar la impetuosidad de los jóvenes representantes de la primera cámara, corregir la precipitación de sus acuerdos por falta de discusión o maniobras de los partidos, y servir de freno y de consejo nato al gobierno, que poco puede hacer sin su consulta o propuesta.

Efectivamente. Señor, cuando es uno solo el cuerpo deliberante, un orador vehemente o artificioso suele arrastrarlo consigo, porque el privilegio del talento y la elocuencia es dominar la multitud. Cualquiera facción o partido que a su sombra se forma dentro del seno de una asamblea acostumbra decidir el más grave asunto a su favor: y por más reglamentos que se le opongan, los elude con la urgencia de las circunstancias, y supera con la autoridad suprema de la misma corporación, quedando así expuesta muchas veces la suerte de la nación a una votación sola, facciosa e inmatura. Esto se observa a cada paso en todos los Congresos del mundo, donde yo me he hallado, a pesar de los más bellos cánones reglamentarios para evitar este mal.

La ley misma *hace la trampa.* Es sabida y vulgar la de echar los negocios cuando faltan los oradores contrarios al partido. Es conocido aquel estratagema frecuentísimo con que los diputados americanos perdieron en las Cortes de Cádiz las votaciones más interesantes a nuestra patria. Tal es el de preguntar o hacer preguntar si el asunto está ya suficientemente discutido en acabando de perorar algún orador verboso reservado a propósito para fascinar, aunque otros muchos oradores que disienten tengan pedida la palabra para responder a sus argumentos, trillar su paja o deshacer sus sofismas. El partido se pone en pie para afirmar la pregunta, lo siguen los diputados de reata que abundan en todo Congreso, el presidente repica la campana contra las reclamaciones, la trampa es legal porque conforme al reglamento la tal pregunta corta discusión, y se vota un desatino.

Muchas otras veces, sin intriga ni segunda intención, los ánimos se exaltan con el calor de la disputa, o las cabezas estan fatigadas, no ocurren algunas reflexiones importantes, se equivocan las especies, faltan datos y resulta una resolución tan defectuosa, que ya hemos tenido que corregir en sesión secreta lo que habíamos determinado en la pública. Y gracias a la prudencia de un cuerpo que ha tenido la de cejar sobre un acuerdo pernicioso: otro se obstinará por vergüeza, o por no comprometer su autoridad, y la nación lo paga.

En otras ocasiones se reúne todo lo dicho, y tenemos la prueba recientísima en el decreto de convocatoria para un nuevo Congreso. ¿Lo habríamos dado por la tarde después de haber oído a los oradores a quienes por la mañana no cupo la palabra, y que deploraron con razón la desgracia de la patria abandonada a su suerte, a la inexperiencia de hombres nuevos y a un albur en todo sentido peligroso? El torrente de lágrimas que en esta vez interrumpió mi discurso no fue sino la expresión de los tristes presagios que me dictaba el corazón, guiado por la experiencia. También disputaban a las Cortes de Cádiz y a la asamblea constituyente de Francia los poderes para constituir a la nación. Las Cortes de Cádiz cerraron sus oídos, dieron una constitución, y salvaron su patria, que en el naufragio de su libertad, tuvo esta tabla de que agarrarse. Y así la asamblea constituyente de Francia, que cediendo a la voz imprudente de los pueblos agitados por aspirantes, *ultras*, o demagogos aunque trabajó una constitución, reservó sanción a una convención nacional, que convocó. Pero ésta la rechazó, trastornó el gobierno, tocó a degüello, y los que escapan de aquel diluvio de sangre, recibieron las cadenas de la esclavitud. La identidad del caso me hace estremecer... Quiera Dios que el nuevo Congreso no resienta el mal ejemplo de haber condescendido los verdaderos comisionados de la nación, y únicos órganos legales de su voluntad a gritos tumultuosos y anárquicos.

Aprovechémonos de nuestra propia experiencia para reconocer la necesidad de una segunda cámara que revea las leyes y sea como un tribunal de apelación en primer juicio. Los hombres que obran largo tiempo juntos, contraen ligazones y cierta manera de ver los objetos, un espíritu de cuerpo y de rutina, cuyo correctivo natural está en una otra asociación. El temor de ser desairada por esta la primera cámara, la hará más cauta para decretar, y una u otra se ilustrarán con la luz que despida el choque de sus diferentes discusiones.

Esto es verdad que causará demora; pero esta misma calma los espíritus, da lugar a nuevas reflexiones, a que la cuestión sea examinada en todas sus fases, a que los sabios de fuera del cuerpo lo ayuden con sus luces, y salga la decisión más perfecta y sazonada. No habrá muchas leyes; pero tampoco se hará una y decretará en media hora. Se podrá errar, éste es el patrimo-

nio de nuestra flaqueza: pero quedará el consuelo de haber apurado todos los medios de evitar el error.

Cuando hay dos cámaras diferentemente compuestas, la una sirve naturalmente de freno a la otra, dice un grande político, "el peligro de la demagogia se debilita" porque no es tan fácil que un individuo pueda ejercer en los dos cuerpos la misma influencia. Habrá entre ellos una emulación de crédito y de talentos; el mismo celo de una sala viene a ser la salvaguardia contra las usurpaciones de la otra, y la constitución se sostiene por las mismas pasiones que obran en sentido contrario. En una palabra, la nave del estado asegurada sobre dos cámaras como sobre dos anclas podrá resistir mejor las tempestades políticas.

Yo descubro aun otra ventaja en la segunda sala, y es que aunque los representantes se ausenten concluido el tiempo de sus sesiones, o se renueve cada dos o tres años su cámara, queda siempre la de Senadores en torno del Gobierno, le aconseja, lo observa, lo dirige y lo contiene. Y como variándose por partes, no cierra el periodo de su existencia sino a los cinco años, se impone en los negocios de la Nación, y el estado político del mundo, instruye al Poder Ejecutivo que a los cuatro años se muda, guía a los nuevos representantes, bisoños, inexpertos, azorados con la novedad de la escena, y nunca se apaga el fanal que conduce la Nación al puerto de la felicidad.

Bien sé que tampoco faltan inconvenientes en el sistema de las dos cámaras. Bentham en su táctica de las asambleas legislativas expende los de una cámara como los de dos, sin atreverse enteramente a decidir la mejoría. Y por eso la mayoría de la comisión ha inventado ese nuevo Senado conservador. Pero en la balanza de mi pobre juicio ni resarce las ventajas de la división de cámaras, ni remedia los inconvenientes de una, antes puede crearlos mayores. Ese nuevo Ariopago separado del cuerpo legislativo está tan revestido de prerrogativas y funciones, que me hace temblar como el antiguo a los atenienses. Ese fiscal eterno del cuerpo legislativo, cuyos individuos juzgan, y él sólo puede ser juzgado con mucha dificultad, que examina sus acuerdos, nota sus faltas, espía sus acciones, y reprueba las leyes, porque no se guardó en la discusión el reglamento, o no se discutió suficientemente el asunto, ha de ser un censor tanto más odioso al primer cuerpo de la Nación, cuanto es un rival extraño. Se va a soltar entre ellos la manzana de la discordia, y yo no sé si la animosidad, que pueda encenderse entre cuerpos tan poderosos, acabará su pleito con la ruina de la república. El uno tiene la espada de la ley que todo lo puede; el otro puede conciliarse la del gobierno, que a cada paso lo necesita demasiado, y no le faltará el apoyo de la inmensidad de creaturas, que ha de granjearse con la propuesta de los empleos.

Yo, en conclusión, cuando se trata del destino de una nación, me guardaré bien de embarcarme en teorías nuevas, cuya futura experiencia puede sumergir la libertad para siglos, o sumergirnos en un océano de calamidades y de sangre. Caro y muy caro costaron a los franceses las nuevas teorías constitucionales. En esta materia mientras menos invención, más seguridad. Camino carretero, sr. Todas las naciones que han reducido el cuerpo legislativo a una sola cámara, naufragaron: testigo Francia en su asamblea constituyente, y su convención nacional: testigo España, de cuya constitución, dice el sabio arzobispo de Malinas, que el gran defecto es una sola cámara. Lo ha conocido así Flores Estrada, y cuantos dignos diputados españoles conocí fugitivos en Inglaterra.

El nombre mismo de Senado conservador me alarma y espanta. Así se llamaba el que in-

ventó Napoleón en París, con el cual sofocó al cuerpo legislativo, y no sirvió de otra cosa que de instrumento ciego a los caprichos de aquel déspota asombroso. Los estados que han prosperado y prosperan en la libertad, como Inglaterra, los Estados Unidos y Colombia, tienen dos cámaras. Y yo vuelvo a decir sr. que jamás abandonaré mi Nación, cuya libertad me ha costado 30 años de persecusión y 13 de prisiones, al albur de una teoría nueva desconocida e inexperimentada. Hasta el particular que aventura toda su fortuna a un naipe, es un insensato. Ningún viajero que sea cuerdo, dejará un camino trillado y conocido, que con certeza le ha de conducir al término deseado, por ensayar una senda nueva, incógnita e incierta, a pique de tener que desandar lo andado o perderse sin salida.

Yo voto por las dos cámaras en el cuerpo legislativo, una de representantes y otra de senadores en la manera que dejo indicado, y conforme a las instrucciones que tengo de tres provincias; y pido que así conste en las Actas del Congreso, y que este voto se imprima y circule con el Proyecto de las bases constitucionales para satisfacción de aquellas provincias y conocimiento de la Nación.

México, 28 de mayo de 1823
Dr. Servando Teresa de Mier

VII

PLAN DE LAS BASES ORGÁNICAS O FUNDAMENTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA REPÚBLICA FEDERADA EN EL ANÁHUAC

PROPUESTO POR EL CIUDADANO ESTEBAN AUSTIN

MONTERREY, MAYO O JUNIO DE 1823

Movido por el deseo innato de la felicidad de mi Patria, y considerando, no tan sólo como un derecho, sino también como un deber, el contribuir en cuanto mis cortas luces lo permitan a aclarar la importante discusión que se halla pendiente sobre la forma de gobierno que por la Nación Mexicana debe adoptarse, me he tomado la libertad de presentar a ésta mis ideas sobre tan delicado y grave asunto.

Las bases generales se han tomado principalmente del Gobierno de Estados Unidos de América, cuyos benéficos resultados son ya evidentes por la feliz experiencia de muchos años. El admirable adelanto de aquella Nación, así en población como en artes, ciencias, comercio y riqueza, y en la felicidad del común de sus habitanes, presenta un monumento luminoso de los saludables efectos del sistema federado: ¿y por qué no podemos esperar que en este país produzca iguales efectos?, ¿por qué no gozará del mismo beneficio el pueblo de Anáhuac?, ¿un pueblo que en la última y gloriosa lucha por su verdadera libertad, ha manifestado a la faz de todo el mundo, que no tan sólo ha tenido heroísmo para concluir la grandiosa obra de su independencia sino también sabiduría y talento para romper el velo especioso, con que una política pérfida quería cubrir bajo el sistema de Monarquía moderada, al más absoluto abominable despotismo; y virtud bastante para derrocar el trono usurpado, a este monstruo del género humano, recobrando plenamente sus más sagrados e imprescriptibles derechos?

El sistema federado es simple y de fácil comprensión: su solo objeto es la felicidad del pueblo. Es un Gobierno en que la ley gobierna. Es un gobierno fundado en el consentimiento general de los pueblos, y dirigido por la justicia, el bien común, y en el cual la responsabilidad de los agentes públicos es absoluta y efectiva, y el recurso para reparar abusos y agravios es directo y pronto, sin los enredos y rodeos de aquel laberinto sin fin de Consejos de Estado, Ministros, favoritos, ayudantes imperiales, y todos los ridículos apéndices de un tren asiático y numeroso, compuesto de cortesanos, aduladores galoneados, de viles sicofantas que cual nube de pestilentes harpías, circundan los tronos y oscurecen u obstruyen los rayos de justicia que podían emanar de las virtudes personales del Monarca. ¿Mas para qué nombrar aun la Monarquía? La experiencia ha probado en el año último al pueblo mexicano, lo que la historia del mundo había hecho patente muchos años antes, esto es que una monarquía ya sea investida con el poder absoluto del zar de la Rusia, o enmascarada con alguna constitución, no es otra cosa más que el propio despotismo. La voz unánime de Anáhuac es de República: la opinión sólo difiere entre federada y central. Un gobierno central establecido en México ha de ser por su misma naturaleza aristocrático, porque es la unión de todos los poderes de la Nación en pocas manos y en un solo punto, y aunque los agentes públicos sean removidos frecuentemente por elecciones, si consideramos aun la influencia de los cuerpos aristocráticos apoyados por las preocupaciones existentes; unida a la de los capitalistas de México hayan de tener en las elecciones; creo que es casi evidente que semejantes cambios serían cuando más de personas, pero no de partidos ni de principios, y que sería en efecto la Ciudad de México lo que la de Roma fue en tiempo de la República, es decir, señora absoluta de las provincias y

por consiguiente de toda la nación. Establecido el Sistema central, y supuesta una coalición entre el clero, los capitalistas de México, y el partido que se halle apoderado del gobierno, ¿quién lo contendría? Con el Ejército a su disposición, con todos los gobernadores de las provincias, y otros oficiales, y empleados de todas clases nombrados por él ¿quién sería capaz de sujetarlos? ¿El Congreso?, ya hemos visto que no pudo contra un tirano: ¿qué haría pues contra cientos de ellos? ¿La opinión pública?, la opinión corrompida por la astucia aristocrática, se haría nula por medio de la división.

¿Las provincias?, su poder político y su influencia se vería absorbido por el gobierno general, y paralizado por un poder gigantesco y predominante: de suerte que admitido el sistema central, éste no tiene obstáculo en algo que pueda contener su inclinación a la opresión de las provincias.

El triunvirato de César, Pompeyo y Craso en Roma, gobernó despóticamente aquella ciudad y todo el Imperio, y hecho los cimientos de las disidencias políticas, y partidos que desolaron el país con la guerra civil, y establecieron el trono sobre las ruinas de la república. Esto sucedería a los mexicanos bajo el gobierno central puesto que causas iguales producen por lo general iguales efectos; o los obligaría a procurar la destrucción de semejante gobierno por medio de la insurrección siempre peligrosa, de modo que un gobierno central sería de hecho una aristocracia que sin duda es el peor de los gobiernos conocidos, y sin duda un buen tiempo nos obligaría a destruirlo con una guerra ruinosa; o él nos reduciría a la esclavitud consolidando el más feroz despotismo. Además ¿cómo podría abrazar este sistema todos los diversos intereses locales, y administrar una justicia igual a cada individuo en una Nación que ocupa un territorio tan extenso? A proporción que nos alejamos de la fuente, sus aguas son menos puras. En tiempo del gobierno Español, Madrid era el manantial y la pasada esclavitud y miseria del Anáhuac prueban la consecuencia. Bajo un sistema central la fuente estaría en México y de aquí se distribuiría al pueblo por entre las manos de Ministros, Capitanes Generales, Gobernadores, etc., etc., y los efectos serían a proporción los mismos en este caso, que en el antencedente. Florecería México estando situado en el mismo manantial: México sería el centro del poder y de las riquezas, mientras que las provincias extenuadas y lánguidas padecerían en un estado lamentable de dependencia y abyección. Más bajo el sistema federado será todo lo contrario, teniendo cada provincia su propio manantial dentro de sí misma. La libertad nacional así como la de los individuos tendrán un ángel custodio en los cuerpos legislativos de cada provincia, siempre alerta para dar él alarma cuando peligre la libertad y seguridad de la Patria, y siempre vigilantes sobre los intereses locales e individuales del pueblo.

Por estas razones y otras muchas que se podrían exponer me parece cierto y concluyente, que el sistema federado es el más adaptable, para la Nación Mexicana. Concedido esto, la única dificultad que se presenta, es la de ponerlo en ejecución, sin que se originen u ocasionen conmociones intestinas, o que la nación se precipite en la anarquía; y sobre esto se traslucen algunos obstáculos que este Plan se empeña en vencer y disipar.

El Congreso actual por un decreto de 21 de mayo último ha declarado que se limitarán sus facultades a convocar otro nuevo, ocupándose entre tanto a organizar la hacienda pública, al Ejército, y otras cosas que por su importancia urgente no admitan demora; declaración que sin duda hizo el congreso convencido de que obraba en ella de conformidad con la voluntad general de la nación.

Por tanto no puede ya el congreso actual declarar la forma de gobierno, ni organizar sus bases fundamentales; pero el dilatar esta declaración hasta que se reúna el nuevo Congreso es inconveniente, y muy peligroso. Inconveniente porque cada provincia requiere la pronta e inmediata aplicación de las leyes para su gobierno interior, para remediar los males y desordenes infinitos que podrían provenir de la falta de policía, y la general relajación de las riendas del gobierno. Las diputaciones provinciales se rigen aún por la constitución española, y sus facultades son enteramente inadecuadas a este objeto; sin que el congreso, después de la publicación de dicho Decreto, pueda ampliarlas a la extensión que se requiere, porque esto sería establecer una de las bases fundamentales del gobierno. Por estas razones la dilación de que hemos hablado es inconveniente, y también es peligrosa, poque una nación no puede, sin correr el riesgo más inminente de caer en la anarquía, o dejarse encadenar por la ambición individual, o aristocrática, permanecer mucho tiempo en el estado de fermentación general y destituida de hecho de un gobierno legalmente constituido. Asentando pues, que una declaración inmediata de la forma de Gobierno, es absolutamente necesaria a la nación y que el congreso existente no tiene facultades para hacerla, ¿a dónde encontraremos el poder capaz de ella? La respuesta es bien sencilla. EN EL PUEBLO. El pueblo de la nación mexicana por lo que hace a su pacto social, se halla en el estado natural y por lo tanto libre para constituirse como le parezca mejor, el primer paso natural hacia este objeto, es el de proveer a sus necesidades locales y urgentes, y esto sólo se puede ejecutar estableciendo un gobierno interior en cada provincia como un Estado independiente. Pero hay también necesidades de una naturaleza general,y que siendo comunes a todas, debe proveerse a ellas por leyes generales, igualmente aplicables; y de aquí es la necesidad de establecer al mismo tiempo un gobierno nacional. Para lograr ambos fines de un modo... es necesario que cada provincia en la formación de su gobierno local tenga a la vista un Plan general de confederación entre todas ellas y de reconocimiento a un centro común de Unidad. Estos particulares procuran abrazar el Plan que presento. En primer lugar establecer el principio cierto de que cada provincia tiene el derecho de constituirse a sí misma; en segundo lugar indica las bases que deben servir para la creación del gobierno nacional, a fin de que cada provincia forme su gobierno interior o local de modo que guarde armonía con los poderes que haya de delegar al gobierno nacional, y en tercer lugar considera como de el deber de cada provincia que adopte este plan, el informar de ello al supremo poder Ejecutivo para que el Congreso actual obrando según las nuevas instrucciones que de este modo se hayan dado por el pueblo, declare la forma de gobierno elegida por la NACIÓN: y también que la organización interior de cada provincia como se dice en el artículo... de este Plan, es de conformidad con la voluntad de todas. Esta declaración así hecha, es importante para evitar la rivalidad entre las provincias, porque en tal caso la acta de cada una, se aprobará mutuamente por todas, y declarada por este medio la forma de gobierno, cada provincia hará su constitución local observando las condiciones prescritas en el referido artículo y la comunicará al nuevo congreso para que de acuerdo con estas constituciones provinciales se forme la Nacional de la confederación que aprobada por las dos terceras partes de los cuerpos legislativos de las provincias que estén representadas en dicho Congreso será obligatoria para todas las demás.

De conformidad con este Plan se reconocen como centro de unión el Supremo poder ejecutivo y Congreso Nacional; y la forma de gobierno se declara por el Pueblo de cada pro-

vincia obrando en concierto de tal manera que nada haya que temer de la anarquía o guerra civil, a menos que el Poder Ejecutivo, y el Congreso o una o más de las provincias amenacen a establecer un gobierno por fuerza de armas, contrario al deseo declarado de la mayoría de los pueblos, lo que no es ciertamente de esperar, y si este Plan mereciese la aceptación general, las Constituciones internas de cada provincia convendrían por lo regular en los poderes que se delegasen al gobierno Nacional y así no habría sobre esta materia divergencia de opiniones. Además el nuevo congreso cuando se reúna no debe ser más que el órgano de la voluntad de los pueblos y estar absolutamente sujeto a las instrucciones que éstos le hayan remitido. La Doctrina de que es ilimitado el poder del Congreso y que no está sujeto a la voluntad e instrucciones que se le hayan dado por sus comitentes, es establecer un despotismo aristocrático y es igualmente degradante, injusto y peligroso. ¿Y cómo se podrá expresar con más claridad esta voluntad de los pueblos sino por la exhibición de la constitución interior de cada provincia como se previene en este Plan?

Esta materia es la más importante y grave que haya jamás llamado la atención de los pueblos. Se trata de constituirnos, de dar a la Nación un código fundamental y arreglar los pormenores de nuestro pacto social, por lo cual es ciertamente el deber de cada ciudadano elucidar este asunto expresando sus opiniones franca y abiertamente, para que el cuerpo político que se forme, no contenga en los principios mismos de su establecimiento mezclados los de su ruina, porque estos principios semejantes a los elementos ocultos de un volcán producirían tarde o temprano la más violenta erupción acompañada de aquellas convulsiones y estragos consecuentes a estos desastrosos sacudimientos. Los materiales fatales de un sistema Central son la aristocracia, poder que cual un fluido eléctrico se insinúa y discurre por todo el cuerpo político con una influencia que aunque oculta es siempre peligrosa y muchas veces irresistible.

Plan de las bases orgánicas y fundamentales para el establecimiento de una República federada en el Anáhuac propuesto por el ciudadano Esteban Austin.

ART. 1o. El pueblo de las provincias llamadas antes Nueva España y Guatemala se halla libre e independiente de la dominación y poder de la Nación Española o de cualquier otra potencia, y tiene el derecho exclusivo y absoluto de gobernarse como un pueblo independiente, libre y soberano habiendo recobrado su estado natural para constituirse en la forma de gobierno que más le convenga y que libremente elija.

ART. 2o. Cada una de estas provincias se considera, y es de hecho un estado libre e independiente, y por tanto tienen facultad para ejercer todas las funciones que pertenecen a la soberanía.

ART. 3o. Para proveer con más seguridad a la defensa, prosperidad y bien común las provincias se unen mutuamente por el más estrecho vínculo de unión y fraternidad bajo el Sistema Republicano federado para formar una grande nación cuya religión dominante es y será precisamente la Católica Apostólica Romana sin que Estado alguno pueda proclamar otra, y todos y cada uno de por sí se obligan a protegerla por medio de leyes sabias y justas.

ART. 4o. La confederación compuesta por dicha unión se llamará la República Mexicana.

ART. 5o. Para que se lleve a efecto lo expresado en los dos últimos Artículos, el Pueblo de cada una de las provincias delega una parte de su propia soberanía, la cual se designará y especificará con plenitud en la Constitución de dicha federación; y estos poderes se confiarán en manos de agentes públicos electos por el pueblo, los cuales han de formar el gobierno general de la República.

ART. 6o. Cada provincia se reserva y queda en posesión de todos los poderes y facultades que no se hayan delegado con especialidad en la Acta de confederación.

ART. 7o. Los poderes que se hubiesen de delegar por cada provincia al gobierno general se dividirán y organizarán en tres ramos distintos y separados, como son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial los cuales han de ser tan independientes entre sí cuanto lo permitan y sea consistente con los lazos que hayan de unir la máquina política de todo el gobierno.

ART. 8o. El poder Ejecutivo del gobierno general se ejercerá por un Presidente y un vicepresidente a falta del primero, los cuales serán electos por el pueblo por el espacio de ocho años; y así el Presidente como los demás funcionarios públicos de la República Mexicana podrán ser removidos de sus empleos antes de la expiración del tiempo prescrito, en caso que sean acusados y condenados ante tribunales competentes por no haber cumplido con exactitud y fidelidad con sus deberes.

ART. 9o. Se especificarán y enumerarán en la Constitución de la Federación los poderes del Presidente, los cuales se circunscribirán a los puntos siguientes.

Será de su incumbencia el mando del Ejército de tierra y de la armada Naval: el nombrar los oficiales del gobierno general y expedirles sus despachos con consentimiento y aprobación del Senado.

Abrir las sesiones del Congreso, y hacer patente el Estado de la Nación, y proponer aquellas medidas que crea necesarias para la seguridad y felicidad común.

Recibir todos los agentes públicos de otras Naciones y Embajadores extranjeros y dirigir las correspondencias diplomáticas dando cuenta de ellas al Congreso.

Publicar y hacer ejecutar las leyes.

Tener un veto en las leyes, con tal que este veto no tenga efecto si las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso aprueban la segunda vez una ley que haya sido repulsada por el Presidente.

Convocar el Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente.

Publicar todas las declaraciones de guerra y de paz y hacer entrar en tratados de alianzas con las naciones extranjeras bajo la inspección y dirección del congreso.

El dar dirección y colocar las fuerzas terrestres y marítimas para la defensa del país.

El preservar la tranquilidad pública y arrestar conspiradores y perturbadores de ella conforme a las leyes.

Conceder gracias en todos los casos criminales en que lo crea propio, y aprobar o desaprobar las decisiones de los tribunales militares o consejos de guerra.

Todo lo concerniente al Ramo de Hacienda, casa de Moneda, Correos, Instituciones y Fincas Nacionales que se hallen situadas en toda la extensión del territorio de la República estarán bajo el cuidado y dirección del Presidente según las leyes sobre estas materias.

ART. 10. El poder legislativo del gobierno general se conferirá a un congreso libremente electo por el Pueblo en tiempo determinado, y se dividirá en dos cámaras separadas, una de las cuales tendrá la denominación de Senado y la otra de Cámara de Diputados.

ART. 11. El pueblo podrá elegir dos senadores por cada Provincia del modo que determine el cuerpo legislativo de él, los cuales desempeñarán este encargo por el espacio de seis años, una tercera parte de los senadores se reeligirá cada dos años; los Diputados se elegirán también por el pueblo por dos años, para cuyo efecto los cuerpos legislativos de cada Provincia di-

vidirán sus respectivas provincias en tantos municipios electorales cuantos sean los Diputados, que la provincia haya de elegir de modo que cada municipio elegirá un Diputado.

ART. 12. El Congreso designará el número de habitantes necesarios para poder nombrar un Diputado.

ART. 13. Para ser electo Senador del congreso se requieren treinta y cinco años de edad, ser ciudadano de la Nación Mexicana con residencia en ella a lo menos de cinco años, nativo o vecino de la provincia de donde sea electo, y gozar una renta proveniente de bienes raíces o de alguna industria, u oficio literario.

ART. 14. Para ser electo Diputado serán necesarios a lo menos treinta años de edad y además poseer las mismas cualidades que se exigen para la elección de Senadores.

ART. 15. Los Senadores y Diputados serán electos directamente por el pueblo en elecciones populares y será de la Inspección del Congreso el estatuir quienes tengan derecho de votación.

ART. 16. Será atributo del congreso determinar el número y clase de eclesiásticos que podrán ser electos Senadores y Diputados en el Congreso.

ART. 17. Las facultades del congreso se limitarán a los puntos siguientes.

Imponer derechos y contribuciones de toda clase para el bien y el uso de la Nación, diviendo y prorrateando las contribuciones igualmente entre las provincias a proporción de su riqueza, en cuanto sea practicable.

El declarar la guerra y aprobar la paz.

Levantar y sostener el ejército y la armada naval.

Establecer el modo de obtener los derechos de ciudadanía.

Tomar empréstitos bajo el crédito de la Nación y pagar todas las deudas y reclamaciones justas contraídas desde la Declaración de Independencia en el año de 1810.

Aprobar tratados y alianzas con las naciones extranjeras.

Establecer o arreglar los Correos y acuñar monedas y crear casas para este efecto.

Hacer leyes generales sobre el Ramo de minería y arreglar pesos y medidas.

Establecer y uniformar reglas para los trámites judiciales que se ha de observar en los tribunales nacionales.

Hacer leyes para la mejor dirección del Comercio, Consulados y Bancarrotas.

Decretar ordenanzas generales para la Milicia Nacional.

Aplicar cantidades de los fondos públicos para Caminos, canales u obras de utilidad general.

Establecer Bancos u otras corporaciones útiles.

Establecer o destruir cualesquier especie de tribunales que no esté especialmente establecido o prohibido por la Constitución.

Calificar y castigar los crímenes de traición y Sedición.

Calificar y castigar piratería y delitos contra el derecho público de las Naciones.

Arreglar los gastos del gobierno general en todos los ramos.

Conceder pensiones y recompensas por servicios actualmente hechos.

Conceder, vender o disponer las fincas y fondos nacionales para el mayor adelanto y beneficio de la Nación.

Habilitar puertos y establecer Aduanas Marítimas, alentar las artes y ciencias concediendo privilegios por tiempos limitados a los descubridores o inventores de alguna máquina nue-

va, o al autor de alguna obra o libro que no se hubiese conocido ni publicado antes para el uso exclusivo de su descubrimiento o Libro.

Adoptar todas las medidas necesarias para conservar la salubridad, seguridad y tranquilidad Nacional.

Declarar, definir y limitar el poder que el Papa y los concilios Ecuménicos puedan ejercer sobre las iglesias y el Clero de esta Nación.

Corregir y reformar todos los abusos que existen en la Iglesia y fijar los salarios de los obispos y arzobispos.

Presentar para los obispos y Arzobispos y establecer o abolir cualquiera convento, hermandad o sociedad religiosa y dotar las que se hayan establecido de los fondos públicos y apropiar los fondos y fincas de las que se hayan abolido a usos públicos.*

Y finalmente decretar aquellas leyes que sean necesarias y propias para el mejor cumplimiento de estos poderes y de lo que prescriba la constitución.

ART. [18]. El Poder Judicial nacional se compondrá de un Supremo tribunal de Justicia, el cual se nombrará por el Congreso y otros tribunales inferiores que el Congreso establezca por ley expresa.

ART. [19]. Se entenderán los poderes del Supremo tribunal de Justicia a todos aquellos casos que comprendan lo concerniente a embajadores y otros agentes extranjeros; a todos los casos que provengan de tratados; a todos los casos a donde la Nación o un estado se consideran como partes, o entre ciudades, villas e individuos de diferentes Estados; a todos los casos de duda por lo que respecta a la interpretación oral; a todos los casos de apelación de los tribunales inferiores según las leyes en esta materia; a todos los casos de duda por lo que respecta la interpretación o legalidad constitucional de cualquiera Ley del Congreso o de un estado, con tal que si el dicho tribunal decidiese que alguna ley del congreso es ilegal será de la atribución de éste examinar por segunda vez dicha ley y si ésta merece aún la aprobación de ambas cámaras será y pasará por ley no obstante la opinión del Supremo tribunal.

Y será de su incumbencia el dirimir las competencias que pueden suscitarse entre los tribunales que estén sujetos al gobierno general.

ART. [20]. Hay ciertos poderes y derechos naturales pertenecientes al Pueblo de cada Provincia que no se pueden confiar al gobierno general, como son el derecho de formar una constitución y leyes para el gobierno interior y Municipal de la Provincia; el derecho de elegir su gobernador y a todos los oficiales civiles y de la milicia de la Provincia; de establecer los tribunales que juzga necesaria para la administración de Justicia y la preservación de la tranquilidad interior; *el derecho de hacer todas leyes así civiles como criminales que sean necesarias para el mejor Gobierno y adelantamiento de la Provincia*; la libertad absoluta de la imprenta y de la palabra; el derecho de plantar, cultivar y vender sin restricción alguna todas las producciones de la agricultura del país; el derecho de admitir la emigración y establecimiento de extranjeros en la provincia sin ninguna limitación.

Las tierras vacantes en cada Provincia deben ser la propiedad absoluta de la provincia y pueden ser cedidas o vendidas por el cuerpo legislativo de la Provincia, pero el gobierno general tendrá el derecho de retener o apropiar las tierras vacantes que sean necesarias para for-

* (Me parece que se omitan estos Arts. —los tres párrafos anteriores— anota Ramos Arizpe).

tificaciones u otros objetos que tienden a la prosperidad o bien de la Nación, y también no tendrá poder ninguna Provincia para vender ni enajenar tierras a ninguna Nación extranjera o de otro modo disponer de ellas con agravio de la seguridad pública.

ART. [21]. Cualquier Provincia que no quiera por sí sola formar una parte distinta de la confederación puede unirse con cualquiera otra Provincia o provincias las cuales formarán por este medio un Estado de la confederación; cada una de estas Provincias unidas para este objeto retienen el derecho de formar un Estado separado en lo venidero cuando lo permita su situación y lo apetezca la mayoría del pueblo y entrará en la Confederación gozando de los mismos derechos y bajo el mismo pie que las otras.

ART. [22]. La Acta de la confederación entre algunas Provincias que se hayan unido por el fin indicado en el último artículo debe designar y especificar con particularidad las condiciones y objeto de dicha unión y se formará esta Acta de confederación y la constitución del estado así compuesto por una Junta general libremente elegida por el Pueblo de cada una de las referidas provincias; en dicha Junta se debe votar por Provincias cada una teniendo un voto.

(Juzgo muy importante la pronta impresiva de este plan, anota Ramos Arizpe).

ART. [23]. Las provincias que este plan aprueben informarán al Supremo poder ejecutivo de México de dicha medida acompañándola con una Copia de la Acta en que conste su aprobación para que éste pase los Documentos al Congreso actual de México, y procederán luego a formar su Gobierno y constitución interior observando las bases indicadas en este plan, lo que se considere provisional hasta que se publique y apruebe la constitución Nacional.

El Congreso actual de México instruido por dichas manifestaciones de la voluntad de las provincias puede declarar la forma de gobierno elegido por ellas y decretar que lo hecho por cada una tocante a la formación de su gobierno y constitución interior se hallen en conformidad con la voluntad general; con tal que las constituciones particulares han de uniformarse al plan adoptado por la mayoría en todo lo tocante a la cesión de poderes al Gobierno General, las cuales constituciones serán presentadas al Congreso constituyente convocado por el Congreso actual para su inteligencia y gobierno en la formación de la constitución nacional.

ART. [24]. El nuevo congreso constituyente con la opinión de las provincias manifestadas así para guiarlos formará la constitución Nacional la que se enviará a cada provincia para su aprobación, y si ésta se hallase aprobada por las dos terceras partes de ellas, será obligatoria para todas las otras provincias que estuviesen representadas en el dicho congreso.

ART. [25]. El objeto de este plan siendo el de establecer una República federada sentada sobre las bases sólidas de la justicia y Ley natural, y de unir el pueblo de esta América con los vínculos sagrados de la fraternidad y protección mutua, interés recíproco y bien común y la prosperidad así individual como nacional; y el restaurar a las vastas y desoladas llanuras del Anáhuac aquella paz y felicidad que habían desterrado diez años de una guerra sangrienta y feroz que hizo el despotismo contra los derechos del hombre; no se emplearán para sostenerlo otras armas que las de la persuasión, el convencimiento y las fuerzas de la razón y la justicia. Demasiado ha corrido ya la sangre preciosa del Americano derramada aun por sus mismas manos. ¡Oh extraño y terrible delirio de las pasiones humanas!, derramar el hermano la sangre de su hermano.

¿No es independencia, libertad, paz, unión, felicidad y prosperidad lo que buscamos? ¿Y se ha de obtener tan estimables dones con nuestra ruina y desolación en una guerra intestina?

No: el que pretende uniformar la opinión o establecer un gobierno por fuerza de armas, en su corazón es un enemigo del bien común de la Patria.

Por lo mismo ninguna provincia de las que adopten este plan deberá reclutar Tropas o hacer preparativos hostiles contra otras que no lo sigan; ni tampoco tomar las armas en su propia defensa en caso que el gobierno general o cualquier otra provincia intentasen forzarlas a que adoptasen otro sistema diferente que no sea aprobado por la mayoría; a menos que no hayan sido inútiles y sin efecto todas las medidas pacíficas y de reconciliación; en cuyo caso será justa y muy necesaria la defensa según los principios incontestables de la ley de la naturaleza.

VIII

EL PACTO FEDERAL DE ANÁHUAC

POR PRISCILIANO SÁNCHEZ

MÉXICO, 28 DE JULIO DE 1823

EL PACTO FEDERAL DE ANÁHUAC

¡Deplorable sin duda es la constitución humana a vista de lo que por ella pasa! Nada más innato al hombre que el deseo de su libertad: pero ninguna cosa le es más inaccesible. Por ella sacrifica su quietud, su reposo, su existencia misma y después de tan caro precio muchas veces se encuentra burlado. La sangre se ha vertido a torrentes sobre las aras de esta deidad; mas no por eso han conseguido poseerla tantas naciones desgraciadas que en último resultado transigieron con sus déspotas. Testigo sea la Francia de esta verdad.

De siglos en siglos suele aparecer para consuelo de la humanidad un momento feliz que pasa muy breve y no vuelve a asomar jamás. ¡Desventurados los pueblos que dejan escaparlo inútilmente! Tal es el que en la presente ocasión ofrece el cielo en sus misericordias a la nación de Anáhuac. Santa libertad, joya inestimable, dulce consuelo del mortal afligido ¿qué, dejarás para siempre eludidas nuestras esperanzas? No ocultes tras de densas nubes esa faz preciosa, que ya nos has mostrado pasajeramente, dígnate establecer entre los mexicanos que te adoran, coloca su solio en medio de nosotros, que una vez elevado juramos sostenerlo a costa de nuestras propias vidas.

Conciudadanos, nuestra época es singular: venturosamente nos hallamos en la mejor ocasión para ser felices si acertamos a constituirnos de un modo digno y correspondiente a las luces del siglo en que vivimos. Quizá otro pueblo no se ha visto en coyuntura tan favorable. Ninguna potencia nos amenaza, no hay una sola que nos perturbe. Nuestras vecinas de contacto, antes nos presentan motivos de confianza que de sospecha. Las sordas tentativas que puedan hacer los que nos sean de afectos serán inútiles si nosotros no las fomentamos con rivalidades necias. Las reliquias del Imperio son impotentes, y las pretensiones de los centralistas quedarán reducidas a la órbita que les prescriba la carta de nuestra federación, si todas las provincias obran de consuno con sabiduría, con circunspección, y con firmeza.

La nación se ha pronunciado suficientemente por el sistema de república federada: no podían ser otros sus votos puesto que quiere ser libre en toda la extensión de la palabra. Este invento feliz de la política, indicado por los sentimientos de la naturaleza, siempre iguales, siempre constantes, y nunca resistibles: este gobierno, quizás el único exclusivamente capaz de proveer enteramente a las necesidades del hombre, es sin duda alguna el que nos debe hacer felices. Su influjo benéfico desarrollará muy pronto el germen de la verdadera riqueza que la naturaleza depositó en nuestro fértil suelo. Él será el taller de la moralidad, el plantel de la filantropía, el foco de la ilustración, y el seminario de las virtudes sociales. Él multiplicará en breves años nuestra población, asegurará nuestra paz, será el escudo impenetrable de nuestras libertades, hará pulular hacia todas partes la heroicidad, y colocará a los americanos en el distinguido rango que son llamados a ocupar entre las naciones ilustres. Perspectiva es ésta de

mucho embeleso, y objeto demasiado lisonjero para no llevar a la exaltación el patriotismo que es connatural al genio ardoroso de los mexicanos.

Compatriotas, ¿Qué deseo más noble, qué interés más puro, qué ambición más heroica puede tener el ciudadano, que vivir bajo un gobierno equitativo y protector de sus derechos imprescriptibles, garantido por una constitución liberal, justa y benéfica? Tal es pues el que nos presenta el sistema de república federada porque suspiramos. Cobremos aliento, trabajemos constantemente, y no desmayemos a vista de las dificultades, que son casi ningunas. Unamos nuestros votos, concordemos nuestros sentimientos y la empresa es ya conseguida.

Las ventajas de este gobierno celestial son evidentemente conocidas, están consagradas por una experiencia que tenemos a la vista, las confiesan sus mismos adversarios, que no pudiendo reprobarlas, sólo pretenden contraponerles dificultades ponderadas, como si hubiese sistema que no ofreciera tropiezos en sus principios. Otras tantas oponían para establecer la Constitución española en América, y ella se estableció en gran parte. Muchas más para pronunciar su independencia de la metrópoli, y ella se verificó. Infinitas para constituirnos en república, y ya de hecho estamos en ella. Ved aquí en poco más de tres años fallidos sus pronósticos y desmentidos sus cálculos: ya se ve, como que no eran fruto de una previsión política, sino de la más refinada malicia. La intriga de los malos ha ido perdiendo terreno sucesivamente a proporción que los pueblos se han ido ilustrando: la causa de nuestra libertad sigue en sus avances, las luces jamás retroceden, el término deseado se aproxima por momentos. ¡Insensatos! desistid de una empresa tan imposible como ridícula. ¿Cómo queréis poner diques al impetuoso torrente de toda una nación que corre presurosa a su felicidad? ¿Quién es capaz de contrariar la voluntad de seis o más millones de hombres, que exasperados en la esclavitud han jurado ser libres?

La principal dificultad y la más favorita con que se nos quiere espantar como a niños medrosos, es la imbecilidad en que suponen va a quedar la nación para resistir las agresiones extranjeras, por la separación gubernativa de sus provincias; pero esto tiene más de ilusión o de malicia, que de solidez. Es verdad que en el sistema federado se divide la nación en estados pequeños e independientes entre sí para todo aquello que les conviene, a fin de ocurrir a sus necesidades políticas y domésticas; más inmediatamente, a menor costa, con mejor conocimiento y con mayor interés que el que pueda tomar por ellos una providencia lejana y extraña, cuya autoridad las más veces obra ignorante, o mal informada, y de consiguiente sin tino ni justicia. Pero esta independencia recíproca de los estados en nada debilita la fuerza nacional, porque ella en virtud de la federación rueda siempre sobre un solo eje, y se mueve por un resorte central y común. Permítaseme explicar con símiles familiares en obsequio de la claridad. Una compañía de comercio gira felizmente con estos solos elementos: estipulaciones justas entre los compañeros, capital competente, y factores fieles, instruidos y bastantemente autorizados. Cuanto mayores sean estas cualidades, tanto más ventajosos serán los progresos de la sociedad, y ésta subsistirá vigorosa, mientras aquellos elementos no se debiliten. ¿Mas a qué conduciría que los compañeros se obligaran a vivir bajo de un mismo techo, no tener más de un solo hogar, una mesa común, y a vestir promiscuamente una misma ropa? ¿Para qué conferir los intereses personalísimos y domésticos, que sin hacer por eso más poderosa ni lucrativa a la compañía sólo les acarreaba a los socios una incomodidad insoportable, inútil y fastidiosa?

El objeto de las asociaciones civiles fue la comodidad y el bienestar de los ciudadanos, no el privarlos de su libertad, ni comprometerlos a sacrificios estériles que para nada contribuyen a hacerlos felices. Siempre que la seguridad y el buen orden de una nación se pueda obtener sin encadenar a los pueblos, dicta la naturaleza que se prefiera el medio suave y se economice el desperdicio de la libertad, por razones de humanidad, de justicia y de conveniencia; porque nada es más contrario a la dignidad y gusto del hombre, a su voto general y a la subsistencia del pacto social, que el que se le exija más parte de libertad que aquella necesaria para asegurar la otra porción que se reserva. Un estado bien constituido no debe dar a los gobernantes más autoridad sobre los súbditos que la que sea bastante para mantener el instituto social. Todo cuanto sea excederse de estos límites es abuso, es tiranía, es usurpación porque nunca el hombre se despoja por voluntad más que de lo muy preciso, para darlo en cambio de otro mayor bien; y de aquí es que el ánimo de donar nunca se presume.

A un magistrado o jefe encargado de la seguridad de un lugar le basta la autoridad competente sobre los ciudadanos que lo componen para obligarlos a cumplir con un deber procomunal, ya con sus personas, ya con sus caudales ¿Pero podrá indicarse una sola razón para que su inspección y conocimiento se quisiera extender al gobierno interior de sus casas, de sus familias, de sus negociados y de sus más privativos intereses? ¿No sería ésta una opresión insufrible, y un vejamen atroz, aunque se vistiera de los colores y pretextos más especiosos? Pues aplíquese esto a las provincias como a las familias que componen el todo de la nación, y forzosamente se sacará la misma consecuencia.

El fútil argumento que se hace, de que igual pretensión harán los partidos y pueblos más pequeños para substraerse de sus capitales, así como las provincias de su metrópoli, no tiene fundamento en que apoyarse, porque semejante solicitud no la dicta la razón, la naturaleza, ni la necesidad, que sólo hace apetecer al hombre lo posible, lo útil y lo conveniente. Las pasiones y deseos del individuo moral, así como los del físico, no se excitan ni despiertan, sino cuando su fuerza y vigor se halla en estado de satisfacerlos. Así vemos que la joven de diez años no tiene la inclinación al enlace conyugal, como lo tiene la de veinte; con que bien puede ser que las provincias, como bastante capaces de gobernarse por sí mismas, tengan una justa y natural tendencia a su separación, sin que por eso los partidos entren en la menor tentación de hacer otro tanto, pues no son tan insensatos que no conozcan la falta de elementos para emanciparse: pero sí deben gozar, y de facto gozan toda aquella independencia mutua de que son capaces, teniendo cada pueblo su autoridad privada, y su ordenanza municipal.

No se separan las provincias para ser otras tantas naciones independientes en lo absoluto: ninguna ha pensado en semejante delirio, sino que respecto a su gobierno interior se han pronunciado estados soberanos, porque quieren ejercer éste sin subordinación a otra autoridad. Se independen mutuamente para administrarse y regirse por sí mismas, puesto que nadie mejor que ellas puede hacerlo con más interés, con mayor economía, ni con mejor acierto, y para esto tiene un derecho incontestable, así como lo tiene cada ciudadano para ser el Señor de su casa, y sistemar su régimen doméstico como mejor le acomode. Pero sin embargo, ellas aseguran que quieren permanecer siempre partes integrantes del gran todo de la nación de que son miembros, unidas por el vínculo insoluble de federación, bajo de una autoridad central que dirija la fuerza en masa, tanto para asegurar a todas y a cada una de las agresiones extranjeras, como para garantizar su independencia recíproca.

Puede suceder que se hayan confundido por algunos escritores las teorías del federalismo, con las de una alianza entre potencias absolutamente separadas y soberanas en todo sentido: ¿pero qué hay que extrañar en esto, atendida la novedad del objeto, y las ningunas lecciones que sobre esta materia hemos recibido? En ellos siempre será laudable su decidido amor por la libertad, y sus sanas intenciones para recomendarnos esta bella forma de gobierno. Podrá decirse que el paso dado por algunas provincias, pronunciando su separación, ha sido intempestivo, peligroso y expuesto; pero si ellas se han anticipado a darlo, nunca serán culpables, porque lo han hecho con el mayor orden, circunspección y decoro, temiendo y quizá con razón, que se les escape de entre las manos una ocasión favorable. Si esto pudiera decirse un mal, no consistiría el remedio en retraerlas de su intento, porque esto es imposible, y su resistencia inevitable; sino aunar sus opiniones, poniéndose de parte de sus justos deseos.

Ellas conocen muy bien, que si este sistema es halagüeño para el ciudadano pacífico y amante de su patria, es detestable para todos aquellos que intentan sobreponer sus intereses aislados y mezquinos a la felicidad de sus semejantes. Un militar ambicioso de gloria, el empleado prostituido, y aquel magistrado venal son otros tantos enemigos, que secreta o descaradamente, según les favorezcan las circunstancias, pondrán todo el embarazo posible a su consecución, porque nada esperan, y sí, por el contrario, todo lo temen del arreglo, austeridad, y buen orden, que son inseparables del federalismo: no de otra suerte que los asalariados de una hacienda mal impuestos en su manejo, tiemblan al verla administrada por su propio dueño, a quien su propio interés debe dictarle toda clase de reformas. El que aún abriga esperanzas monárquicas, quisiera el centralismo como más análogo a aquella forma, de la que dista muy pocos pasos. El genio emprendedor y atrevido quisiera el centralismo, porque todo el teatro de su ambición lo vería concretado en un punto a donde asestar sus tiros. El insulso aspirante quisiera el centralismo, para tener un campo más abierto a sus deseos y no tributar inciensos sino a unas pocas deidades. El funcionario déspota o infiel quisiera el centralismo, porque así sería más remota y embrollada su responsabilidad. El que todavía considera posible anudar las rotas cadenas de los dos mundos quisiera el centralismo, y abomina altamente la federación porque en el primer caso, fascinada la capital, era menos difícil el triunfar del todo; mas en el segundo son necesarios tantos triunfos, cuantos sean los estados que se interesan en su conservación. No basta entonces contrahacer una llave, sino que es indispensable forzar todas las cerraduras. En suma, todos los que tienen sobre la patria miras siniestras, y los que no se han fijado más norte que su interés individual, sostendrán el centralismo contra la deseada federación, porque ésta desvanece sus proyectos tenebrosos, y burla para siempre sus depravadas esperanzas.

Nos suponen ya en medio de la más desastrosa anarquía: pero ¿dónde está ese desorden tan ponderado? Nos pintan formidables escuadras que pueden invadirnos, y a las que no seremos capaces de resistir por la debilidad en que nos va a poner la separación. ¡Ah! cuán ignorantes nos figuran, y cuán espantadizos nos creen los que de este modo nos asustan. Tememos, es verdad, destrozarnos en una espantosa anarquía; pero a ésta dará principio el primer tiro que se dispare para contrariar la voluntad general. No es imposible que alguna potencia insista en subyugarnos de cualquier modo; pero sabemos que nunca podrá hacerlo con fuerzas competentes, ni con expediciones formidables, sino con intrigas y arterías, fomentando nuestras rivalidades para hacernos la guerra, si posible fuere, con nuestras propias armas, y estamos ya persuadidos que semejantes supercherías no se resisten con ejércitos numerosos, ni

con caudales inmensos, que en ellos forzosamente se consumirían, sino con opinión decidida, con virtudes sociales, con el más acendrado patriotismo, y por decirlo en cuatro palabras, *con una buena constitución*, que todo esto debe producir.

Ciudadanos: tiempo es ya de abrir los ojos y examinar a mejor luz nuestros verdaderos intereses. Estáis convencidos de que una República federada, que lo sea en la realidad y no en el nombre, es la que solamente nos lo puede proporcionar: pues manos a la obra, y no apartemos el dedo del renglón. Entonces está la patria más defendida, cuando el ciudadano está más seguro de sus derechos, y más bien hallado y contento con el gobierno y leyes que se los garantiza: sean éstas buenas, y necesariamente el estado tendrá defensores, porque el interés bien entendido es el productor de la heroicidad, del valor, y de las virtudes marciales. Ved si no a la España oponer una resistencia denodada contra un coloso formidable, en defensa de la libertad que apenas principiaba a gustar.

Una sola dificultad puede retardar nuestra gloriosa empresa, y es la divergencia de opinión en las provincias no respecto del federalismo que todas apetecen, sino en cuanto a los medios de establecerlo, y acerca de las bases o puntos cardinales en que todas deben convenir para proceder con uniformidad. Las Diputaciones provinciales que desde el grito dado en Casa Mata, y en virutd de la revolución, tomaron por necesidad y conveniencia pública para hacer la salud de la patria (ley superior a todas las escritas) un carácter muy distinto de aquel con que se hallaban investidas por la Constitución española, son las que han dirigido la opinión de sus provincias, y puestas todas de acuerdo, han sido el órgano de la voz de la nación. Ellas estuvieron conformes en adherirse a las proposiciones del ejército, y desbarataron el trono con un débil soplo. Lo estuvieron asimismo para pedir la convocatoria de un nuevo Congreso, y a pesar de la comisión que lo resistía, se consiguió en menos de cuatro horas. También lo están para querer república federada, y de hecho ya estaríamos en ella sin la menor contradicción, si el Congreso actual hubiera coadyuvado a sus deseos, como se lo pedíamos seis Diputados.[1] Mas dejemos a la posteridad imparcial que haga la justa crítica de un proceder en que se pudo haber uniformado la opinión, y salvado a la patria de todo peligro con un decreto de pocos renglones, sin que por eso se dijera que en él se trataba de constituir a la nación, sino sólo de impedir el extravío y el desorden, preparando de antemano los medios para la federación, supuesto que no cabe duda que éste es el voto nacional, y que el Congreso también asegura que se halla decidido por este sistema, a pesar de que las bases impresas son mal comprobante de esta aserción. No sucedió así, porque no es dado al hombre acertarlo todo. Respeto la autoridad de un Congreso, pero lamento la pérdida de un lance que nos pudo haber excusado mil tropiezos acercándonos al deseado fin por un camino muy breve.

La convocatoria para el nuevo Congreso circula ya por todas las provincias: su admisión es enteramente necesaria, porque nada urge más que un Congreso legítimamente autorizado para entender en los negocios grandes del estado general; las elecciones se verificarán, y en el día señalado se reunirá el Congreso para constituir a la nación mexicana, ¿pero bajo qué forma de gobierno? Ved aquí todo el motivo de los recelos de unas provincias, y no sabré decir, si la única esperanza de la capital de Guadalajara, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas, y las Internas de Oriente, deseosas del federalismo, e impacientes de que se les retarde este bien, ayudadas de la

[1] Proposición hecha en 12 de junio, impresa en el núm. 60 de *El Águila Mexicana*.

localidad y de sus circunstancias, no considerándose ligadas por el antiguo pacto ya disuelto, se han anticipado a darse por sí mismas lo que acaso desconfían obtener por mano ajena, y se han declarado independientes de toda autoridad para darse su Constitución peculiar, y gobernarse con entera separación de las demás, a las que no obstante quieren permanecer unidas con los vínculos fraternales de una justa federación que les garantice su tranquilidad mutua y su seguridad externa. Querétaro, Valladolid, Guanajuato y San Luis Potosí, han manifestado iguales sentimientos, aunque no han dado pasos tan acelerados como las primeras. Las demás no han contradicho la opinión general, y todas ciertamente quieren la federación; mas con la diferencia que estas últimas esperan obtenerla por la decisión del Congreso general, porque temen que la desmembración intempestiva y no asegurada por una preexistente garantía, pueda acarrear el desorden, faltando un centro de autoridad competentemente facultado para deliberar en las dificultades y las dudas que serán consiguientes a su separación. Temor que yo no puedo menos de confesar justo, y conducta bastante prudente; mas no por eso diré que carecen de fundamentos los recelos de las primeras, porque hablemos de buena fe: si ellas ciegamente se comprometiesen en la decisión del futuro Congreso, para que éste las constituyera como mejor lo tuviese por conveniente, entendidas de que diferiría a sus ya manifestados deseos por el federalismo, ¿no les quedarían todavía motivos grandes para sospechar que sus esperanzas pudieran quedar burladas? Pues ¿qué, no saben que el presente Congreso el primer día de su instalación fue sorprendido y ganado como por asalto para sancionar la monarquía moderada? Pues ¿qué han olvidado las ansiedades que padeció en el miércoles santo? ¿Qué no tienen presentes los escandalosos sucesos del diez y nueve de Mayo? ¿Qué no vieron que un decreto gloriosamente sostenido contra tres ataques fue miserablemente revocado, no pudiendo ya resistir al cuarto? Es verdad que hasta el día no descuella un ambicioso tan astuto ni de tanto prestigio como el que entonces nos perturbaba; pero siempre temerán las arterías y las intrigas que puedan corromper, fascinar o comprometer a unos Diputados que aunque sean los más selectos, peligra su virtud aislada y sin recursos en la Babilonia de México. ¿Qué remedio pues para precaver este peligro y calmar todo recelo? Ved aquí, ciudadanos, mi pensamiento, que si no fuere acertado, ni mereciere vuestra aprobación, yo tendré la dulce complacencia de haberlo propuesto a mi cara patria como un tributo de que le son deudores mis cortos alcances.

Vosotros estáis en tiempo de elegir Diputados para el nuevo Congreso: lo podéis hacer con toda libertad, y sin las trabas injustas de la antigua convocatoria. Sean éstos, pues, los ciudadanos más desinteresados, los menos comprometidos al anterior y al actual gobierno, los más instruidos, y los de mejor carácter para llevar adelante la empresa del federalismo. No os son desconocidos los sujetos más adictos al sistema federal, y por eso los más a propósito para tamaña comisión. Ellos deben arreglarse a la voluntad general, que es la soberana y no como se os quiere persuadir, que la nación debe quedar sujeta a sus dictámenes y opiniones singulares. Resta pues, que ellos conozcan de un modo infalible cuáles son vuestros votos en orden a la forma de gobierno que apetecéis, para que teniendo por norte vuestra voluntad, nunca se vean en el caso de contrariarla. A las provincias toca darles sobre esto a sus Diputados las instrucciones competentes; sean éstas unas, sean del todo conformes, todas sean iguales, y lo serán necesariamente las decisiones de vuestros representantes.

Discutirá en hora buena el futuro Congreso las condiciones y los pormenores de la Constitución general que os debe dar; tendrá sus debates sobre cada uno de sus artículos; les dará

más o menos extensión; pero nunca hará otra cosa que daros una carta federal, siempre que ésta sea vuestra constante voluntad. Nuevos padres de la patria, venid persuadidos de que la opinión general es la que sostiene a las autoridades en un gobierno libre: muy fresca tenéis la memoria de Iturbide, que por haberla contrariado pasó de ídolo de los corazones a objeto de ira y abominación de sus mismos amigos. Está bien que cada estado proceda a darse su Constitución y leyes peculiares que sean más conformes a su localidad, constumbres, y demás circunstancias; pero nunca pasará los límites de su objeto interior, quedando en todo sujeto a las leyes de federación, y sus consecuencias prevenidas y consagradas en la Constitución general.

Yo pues, con el interesante fin de que sea una la opinión, tengo la noble osadía de presentaros ciertos objetos de coincidencia que las provincias no pueden dejar de aceptar por ser análogos a su tendencia, o llámese si se quiere las bases de la Constitución federal, y de las privativas de cada estado. Ciudadanos, esta grandiosa empresa demandaba meditaciones más profundas en la ciencia difícil de los gobiernos, y conocimientos más prácticos del estado presente de la nación que los que yo puedo tener: confieso mi insuficiencia para llenar debidamente objeto tan sublime; pero el celo me anima, y la llama patriótica me inflama por el bien de mi adorada patria. Fijemos por unánimes votos en las instrucciones de nuestros representantes la esfera de la legislatura central, y queda puesta ya la piedra angular de nuestra federación.

La nación queda una, indivisible, independiente, y absolutamente soberana en todo sentido, porque bajo de ningún respecto político reconoce superioridad sobre la tierra. Sus intereses generales los administra la autoridad central dividida en tres poderes supremos. El Congreso general representando a la nación, dictará las leyes más sabias y convenientes para conservar la mutua separación de los estados y mantener la unión federal. El Supremo Poder Ejecutivo será el resorte de la autoridad práctica, el timonel de la nave, y el gobernalle de toda la fuerza nacional, ya para oponerla al enemigo común, ya para contraponerla a la ambición de algún estado que quiera invadir o perturbar los derechos de otro, manteniendo el equilibrio mutuo entre todos ellos. El Supremo Poder Judicial será el que termine las discordias y oposiciones de un estado con otro en lo contencioso: su fallo será el que deba contenerlos dentro de los límites de lo racional y justo, y evitará de este modo que descuelle el germen de la anarquía. Será asimismo el que juzgue y haga efectiva la responsabilidad de los funcionarios generales, y la de todos los infractores del pacto federal.

Cada estado es independiente de los otros en todo lo concerniente a su gobierno interior, bajo cuyo respeto se dice soberano de sí mismo. Tiene su legislatura, su gobierno, y sus tribunales competentes para darse por sí las leyes que mejor le convengan, ejecutarlas, aplicarlas, y administrarse justicia, sin tener necesidad de recurrir a otra autoridad externa, pues dentro de sí tiene toda la que ha menester.

Conciudadanos, mi espíritu se dilata, el corazón no cabe en el pecho, y dos torrentes de lágrimas me inundan en el más puro gozo, al considerar que no son éstas unas vanas teorías, sino la práctica más fácil y sencilla, con sólo que vosotros lo queráis eficazmente.

Excelentísimas Diputaciones provinciales, que ya sois el simulacro de las futuras asambleas, y que tenéis a la vista el termómetro de la opinión pública, dirigiéndola y rectificándola en sus justos deseos, delante de vosotras está el bien: no lo dejéis escapar de vuestras manos; continuad en aquella unión fraternal y uniformidad de sentimientos con que comenzasteis a obrar nuestra felicidad; sea una sola vuestra voz, que ella será terrible, y hará desgajarse las so-

berbias murallas del despotismo central. La nación del Anáhuac os debe en mucha parte la libertad que goza, porque trabajasteis de consuno con el ejército, uniendo la opinión, y por eso los buenos os tributan mil bendiciones. Ilustres generales del ejército Libertador, dad este último testimonio de filantropía, y poned un nuevo trofeo al escudo de vuestras heroicas virtudes, completando la obra que entonces comenzasteis. Jefes, oficiales y soldados despreocupados, que no habéis querido desenvainar la espada ni teñiros en la sangre de vuestros hermanos para conciliar opiniones encontradas, porque vuestra sensibilidad e ilustración os han desengañado de que no hay triunfo más completo que el de la razón y el convencimiento, continuad en esa máxima filosófica y humana, que os colmará para siempre de honor y de gloria. Acordaos que aunque militares, no dejáis por eso de ser una parte selecta de los ciudadanos que componen el estado, cuyo carácter os debe ser muy agradable; tenéis amorosas consortes, tenéis hijos queridos, y tenéis otras caras prendas que os enlazan con el resto de la sociedad; no os opongáis a sus justos deseos, no violentéis la marcha que lleva hasta aquí nuestra feliz revolución; poneos de parte de la justicia con que las provincias reclaman y defienden un derecho tan sagrado como lo es el de la verdadera libertad. Mis indicaciones llevan consigo el carácter de imparcialidad, y el sello del desinterés. No os puede ser sospechoso de ambición un simple ciudadano que por la desconfianza que tiene de sí mismo jamás ha figurado en público, si no es cuando su provincia lo arrancó del seno de su familia, donde vivía contento en un ángulo remoto de la Nueva Galicia. De muy poco he servido en la asamblea legislativa; pero tengo la satisfacción de haberme puesto siempre al lado de la libertad, a que genialmente propendo. Alma patria, sé feliz por siglos indefinidos, que yo no aspiro a otra cosa, que a veros bien constituida, y puesta en el goce de tus más preciosos derechos. Vean esto mis ojos y ciérrense para siempre.

INDICACIONES PREVIAS AL PACTO FEDERAL

1. Ínterin se reúne el nuevo Congreso, será reconocido el presente y el actual Supremo Poder Ejecutivo, como centro de unión de todas las provincias.

2. Toda providencia que emanare de su autoridad para mantener el orden público, e impedir las desavenencias de provincias con provincias, y de éstas con sus partidos y pueblos serán puntualmente obedecidas en calidad de interinas, y sujetas a la revisión del nuevo Congreso.

3. En el remoto e inesperado caso de que se dicte una ley, o se tome alguna providencia dirigida a impedir o entorpecer el pacto federal a que la nación aspira, no debe ser admitida porque tiende a la anarquía contrariando el voto general de los pueblos.

4. Todos los empleos que en el tiempo intermedio se confieran por el Supremo Poder Ejecutivo, aunque sea a propuesta de las Diputaciones Provinciales, se estimarán por interinos y amovibles a juicio de las legislaturas de los estados.

5. Los gastos comunes que se impendan en los funcionarios generales mientras se verifica la separación de todos los estados, serán satisfechos por las provincias, ministrando oportunamente las cantidades que se les asignen sin que sea necesario un prorrateo exacto; pues basta llevar cuenta de las cantidades con que cada uno contribuya para que entren a colación

y se devenguen a su tiempo del cupo anual que les corresponda satisfacer, quedando de este modo indemnizadas.

6. El nuevo Congreso verificará la separación de los estados que de hecho no están divididos, y terminará las discordias que tanto en estos como en los demás puedan suscitarse sobre la integridad de su terreno, demarcación de sus límites, y demás puntos consiguientes a la separación.

7. Mientras no se verifiquen estos precisos antecedentes, no se procederá por las legislaturas a sancionar la Constitución de sus estados, aunque se hallen reunidas.

8. Las disputas en el fuero contencioso que en el entretanto puedan originarse por causa de la separación entre particulares contra una provincia, ésta contra particulares, o provincia con provincia serán terminantes por el Supremo Tribunal de Justicia, que se ha mandado establecer.

9. Las causas y negocios pendientes en las audiencias serán terminados por ellas; y lo mismo las apelaciones, y demás recursos que se hagan de los juzgados inferiores de sus antiguos distritos, mientras no se establezcan los superiores de cada estado.

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN GENERAL

1. La nación de Anáhuac es la reunión de todas sus provincias que forman el estado general.

2. Es una, es soberana, es indivisible, y es independiente, tanto de la antigua dominación española, como de cualquiera otra potencia de dentro y fuera de su continente.

3. Las provincias que la componen son las que en el fin del último gobierno se hallaban en el rango de tales, sujetas al virreinato de la Nueva España.

4. Las que actualmente se hallan con una población de doscientas mil personas arriba serán estados, soberanos e independientes para todo lo relativo a su gobierno interior.

5. Las que no lleguen a esta población se unirán con otra u otras de sus inmediatos vecinos que mejor les acomode para formar con ellas un estado independiente y llegado el caso de que cada una tenga la referida población quedarán por el hecho separadas para formar estados distintos.

6. Las naciones bárbaras, a quienes la ilustración y el tiempo vaya dando a conocer las ventajas de la vida social, y se las haga desear, se admitirán a la agregación voluntaria en el estado que la pretendan y teniendo la población antes dicha, y la capacidad bastante para gobernarse por sí mismos, formarán estado distinto.

7. La religión de todos los estados será la Católica Apostólica Romana, única verdadera con exclusión de otro culto.

8. Su gobierno será popular, representativo federado.

DE LA AUTORIDAD CENTRAL

9. Ésta consistirá en los tres supremos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que se establecerán en el estado que designe la Constitución.

PODER LEGISLATIVO

10. Éste residirá en el Congreso de diputados enviados por los estados con arreglo a su población electos popularmente en el modo y bajo las circunstancias que prevenga la Constitución, y serán inviolables por sus opiniones.

11. La legislación central tendrá por objeto *primero*: la seguridad y el bien de la nación en todo lo concerniente a sus relaciones exteriores.

Segundo: Conservar la unión federal de todos los estados que la componen, dictando las providencias necesarias para que ésta no padezca relajación.

Tercero: Mantener la separación e independencia de los estados entre sí en todo lo respectivo a su gobierno interior.

Cuarto: Mantener la igualdad de obligaciones y derechos que todos los estados deben tener para conservar la tranquilidad recíproca de unos y otros.

12. Toca al Congreso general reconocer la deuda pública y sistemar su amortización.

13. Le toca asimismo aprobar el presupuesto anual de todos los gastos de la administración federal.

14. Éstos se cubrirán con el producto líquido de las aduanas marítimas, y de otras contribuciones que por su naturaleza deban ser generales y el déficit que resulte lo cubrirán los estados particulares, asignándosele por el Congreso general a cada uno el cupo correspondiente con arreglo a su población y riqueza.

15. Le toca al Congreso central sistemar el modo de juzgar a los funcionarios generales, y establecer las penas correspondientes a las infracciones de la federación.

16. Le corresponde decretar las ordenanzas del ejército, de la armada, de la marina mercantil, de las aduanas marítimas, de los correos, de las casas de moneda; un reglamento común de pesos y medidas, de contribuciones sobre importación y exportación marítima, de fe pública de los instrumentos, el concordato con Roma, y el plan general de estudios.

17. Toda ley o providencia en que se versen intereses individuales de los estados, aprobada que sea por la mayoría de los representantes del Congreso, pasará a segunda votación, en la que sólo tendrán un voto los Diputados de cada estado sean los que fueren, y no podrá sancionarse si no la confirma la mayoría en este segundo caso.

PODER EJECUTIVO

18. Residirá éste en uno o tres individuos electos popularmente, y amovibles por tiempo. Sus cualidades, el modo de elegirlos, y su duración, se determinará por la ley constitucional.

19. Sus principales atribuciones serán: promulgar las leyes generales, y mandarlas circular a todas las autoridades. Proveer los empleos militares del ejército permanente y la armada, en el modo que disponga la Constitución. Nombrar los generales y dirigir sus expediciones. Distribuir la fuerza armada en las fronteras y en los puertos, como mejor convenga a la seguridad externa; y en las provincias mediterráneas con acuerdo del Senado. Declarar la guerra y hacer la paz con acuerdo del mismo Senado, ratificándose después por

el Congreso. Nombrar y separar los secretarios del despacho bajo su responsabilidad. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales, nombrando los embajadores, ministros y Cónsules con acuerdo del Senado. Proveer a los empleos generales a propuesta del mismo. Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias en el modo que disponga la Constitución. Indultar a los delincuentes cuando la ley se lo permita.

DEL SENADO

20. Éste es parte del Poder Ejecutivo: se compondrá de uno o dos senadores por cada estado, nombrados popularmente, y amovibles por mitad en el Periodo que disponga la Constitución.

21. Sus atribuciones serán: Acordar la guerra y la paz para que pueda declararla el Poder Ejecutivo. Dar dictamen en todos los asuntos diplomáticos y ratificar el nombramiento de ministros y sus respectivas instrucciones. Hacer propuesta por ternas al Poder Ejecutivo para todos los empleos generales. Velar sobre la observancia de la Constitución, para que se mantenga el orden tanto en la federación como en la independencia recíproca de los estados, dando cuenta al Congreso de las infracciones que advierta para que disponga lo conveniente. Convocar a Congreso extraordinario en los casos que la Constitución prevenga.

PODER JUDICIAL

22. Éste será compuesto de un competente número de letrados nombrados a propuesta del Senado en los términos que la Constitución disponga, en la que se determinará si conviene renovarlos periódicamente.

23. Sus atribuciones serán: Conocer en los negocios contenciosos de unos estados con otros, particulares contra un estado, o viceversa. Dirimir las competencias de los tribunales de un estado con los de otro. Juzgar a los secretarios del despacho. Conocer en las causas de separación, suspensión y responsabilidad de los funcionarios generales. Juzgar todo delito contra la federación y contra la seguridad nacional.

23. Aprobada que sea la Constitución por el Congreso general, se discutirá por éste si conviene reservar la revisión y la sanción al Congreso general siguiente, o a las legislaturas particulares de los estados.

BASES PARA LAS CONSTITUCIONES PARTICULARES DE LOS ESTADOS

1. Cada estado es soberano e independiente en todo lo respectivo a su gobierno interior.

2. Será diócesis de un obispado, y se dividirá en más a proporción que se vaya aumentando su población; pero mientras esto no pueda ser por falta de relaciones con Roma, habrá

en los estados que no tengan obispo un vicario general con facultades amplias para proporcionar comodidad a los diocesanos.

3. Todo estado se dividirá en partidos proporcionales según su extensión y población, y cada partido en municipalidades, que no podrán dejar de ser todos los pueblos que con su comarca lleguen a mil almas. Cada municipalidad será una parroquia, excepto las capitales y pueblos numerosos que se dividirán en más según sea su población.

4. El gobierno de cada estado se dividirá en tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que se establecerán en la capital de cada uno, y a la asamblea particular le toca designar cuál ha de ser ésta.

PODER LEGISLATIVO

5. Éste residirá en una asamblea compuesta de un número suficiente de individuos que determinará su particular Constitución, electos popularmente, y amovibles en el modo y periodo que ella misma disponga.

6. El objeto de la legislación particular será: *primero*: La seguridad interna del estado, proporcionando a los individuos por leyes justas la garantía de sus derechos sociales; exigiéndoles sus deberes con igualdad; y declarando el modo de adquirir la ciudadanía, perderla, suspenderla y reasumirla. *Segundo*: La protección y fomento de la población, comercio, agricultura, y toda clase de industria dictando cuantas leyes y providencias sean necesarias para hacerlas progresar *Tercero*: La beneficiencia pública, proporcionando toda clase de establecimientos para comodidad, provecho, y consuelo de la humanidad. *Cuarto*: La economía del estado, imponiendo contribuciones directas o indirectas para formar la hacienda pública, y decretando su inversión para cubrir sus gastos particulares, y el cupo que se le asignase para los generales de la nación.

7. Tocará también a las legislaturas particulares: Resolver terminantemente las dudas y competencias que ocurran en el gobierno de las mùnicipalidades. Proveer por sí todos los empleos en cualquiera ramo del estado, previo informe del Gobernador. Representar al Congreso general sobre el cupo de gastos comunes que se le haya asignado si lo juzgare excesivo y por circunstancias particulares no pueda llenarlo. Fijar anualmente los gastos de su gobierno. Examinar y aprobar las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos. Proteger la libertad política de la imprenta. Suspender al Gobernador en caso necesario, previa declaración de haber lugar a la formación de causa. Disponer que se haga efectiva la responsabilidad de todo funcionario público que falte al cumplimiento de su deber. Presentar para los beneficios eclesiásticos. Ratificar la Constitución general, y todo punto relativo a ella, si se acordare así por el Congreso.

GOBERNADORES

8. Habrá uno en cada estado, que será el jefe del Poder Ejecutivo, electo popularmente según disponga la Constitución; será amovible dentro del periodo que ésta señale, y podrá ser reelegido después de un intervalo, si el estado lo tiene a bien.

9. Sus atribuciones serán: Recibir las leyes y decretos que emanen del Congreso general y de la legislatura del estado, pudiendo representar en contra de las últimas los inconvenientes que juzgue para su observancia en la práctica, dentro del término que le señale la Constitución del estado. Formar reglamento de policía y buen gobierno, presentándolos a la asamblea para su aprobación. Cuidar de que se administre justicia prontamente, excitando a los tribunales al efecto, y dando cuenta a la asamblea con las morosidades que note. Suspender al funcionario que falte al cumplimiento de su deber, mandándole formar la competente sumaria, y dando cuenta con ella a la asamblea. Anunciar al público la vacante de todo empleo en cualquiera ramo, para que el que se considere con derecho a obtenerlo, reúna y le presente sus documentos, para que agregando su informe los presente a la asamblea. Será el jefe superior de la Milicia nacional, pudiendo disponer de su fuerza como mejor convenga a la seguridad del estado.

TRIBUNALES DE JUSTICIA

10. Todo negocio sea de la naturaleza o cuantía que fuere, se terminará dentro del estado, y al efecto, se establecerán en él tribunales inferiores y superiores para la primera y segundas instancias.

11. En cada partido habrá un Juez inferior letrado si puede ser; o lego, para que con dictamen de asesor determine las primeras instancias.

12. En las capitales habrá un tribunal superior de tres individuos letrados y un fiscal, para conocer en todas las apelaciones que se hagan de la primera instancia: En los recursos de nulidad que se interpongan de los juzgados inferiores. Para los de fuerza que se hagan contra los tribunales eclesiásticos, y para dirimir las competencias de los jueces inferiores entre sí.

13. Las terceras instancias, y las nulidades interpuestas de los tribunales superiores se juzgarán por un Magistrado nombrado con anterioridad por la asamblea, acompañado de dos colegas que él mismo nombre de un número duplo que le presentarán las partes.

14. Las causas mandadas formar por la asamblea a los funcionarios públicos por faltas en sus obligaciones tendrá principio en el tribunal superior de segunda instancia y de sus apelaciones conocerá un tribunal momentáneo que nombrará la asamblea para cada caso, en los términos que la Constitución disponga.

México, julio 28 de 1823. 3. 2. y 1.

Prisciliano Sánchez

México, 1823. Reimpreso en Guadalajara en la oficina del ciudadano Mariano Rodríguez, impresor del gobierno.

IX

CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL ANÁHUAC

POR UN CIUDADANO DEL ESTADO DE JALISCO.
SEGUNDA EDICIÓN, POR EL DOCTOR SEVERO MALDONADO

GUADALAJARA, 1823

EL AUTOR A SUS COMPATRIOTAS

Pueblos del Anáhuac: las leyes no tienen otro objeto que el de la felicidad de los hombres; y yo creo que un código no puede proporcionar otra mayor a un pueblo, corrompido muchos siglos por el despotismo y plagado de los inveterados hábitos del desorden en todos los ramos de su organización política, que la de mejorar notablemente la suerte de todos los individuos que actualmente existen, sin causar a ninguno de ellos el perjuicio más ligero, refundiendo el orden social sin convulsiones, ni fracasos, por medios tanto más enérgicos e indefectibles en sus resultados, cuanto sean más suaves, lentos, progresivos y acomodados al temple del corazón humano. No es otro el modelo que, en su manera de obrar, nos presenta la causa universal, creadora y conservadora de todo cuanto existe, en toda la marcha y economía de sus admirables producciones.

Así es que no entrare en contestación con ninguno de los publicistas que gustaren honrarme con sus impugnaciones, a menos que no se ciñan a demostrar que hay un solo individuo de la generación presente a quien este código no le garantice en toda su extensión el goce de todos sus derechos naturales, o que hay uno solo a quien le despoje con violencia del grado más pequeño de felicidad real o imaginaria que actualmente disfrute; o bien, que hay uno solo de todos los beneficios posibles del orden social que el mismo código no asegure, o por lo menos, no prepare para todos y cada uno de los ciudadanos, o que hay uno solo de los males radicales que mantienen extenuado al cuerpo político, que no esté perentoriamente atacado en sus fuentes.

Por lo que toca a las imperfecciones, inexactitudes y aun errores de detalle, que forzosamente deben de ser muchos, atendiendo a lo vasto de la materia y a la insuficiencia de un solo hombre privado para llenarla, tampoco perderé el tiempo en contiendas, ni disputas, porque el mismo código lleva en sí mismo el germen de su corrección y perfección, contenido en la solución del siguiente problema. *Hallar la forma de asociación, en que toda la masa de un pueblo, por numeroso que sea, y por más vasto territorio que ocupe sobre la superficie del globo, pueda desarrollarse completa, gradual y progresivamente, para concurrir a la formación de todas y cada una de las leyes, y corregir las aberraciones del poder legislativo, origen de las aberraciones de los otros.*

La falta de solución de este problema fundamental es la que ha mantenido, y mantiene aún, estacionaria la política, la que ha sofocado el arte de la asociación en la cuna de su infancia, la que ha contenido los progresos de las sociedades humanas hacia el fin de su natural institución, que es la felicidad de todos y cada uno de los socios, en fin, la que ha dado margen a todos los inconvenientes y defectos que, a juicio unánime de todos los publicistas antiguos y modernos, se encuentran en todas las formas conocidas de gobierno. Por el contrario, la resolución de este solo problema radical da o facilita la de cuantos hay que desatar en la ciencia

del derecho público, rompe de un golpe todas las trabas y allana todos los obstáculos para la marcha libre de la asociación por el camino de la perfectibilidad, desembrolla el caos de todos los misterios, hace desaparecer las inconsecuencias y contradicciones de que están erizadas las obras de todos los políticos, en una palabra, ella sola ministra las bases y la clave de todos los arcos del edificio social.

Al auxilio de esta sola palanca debemos hoy la satisfacción de poder consolar al universo, presentándole una forma de gobierno digna de los seres inteligentes y libres, la única que está en la más perfecta y admirable consonancia con el inconcuso dogma de la soberanía nacional; la única en que el resorte de la autoridad no comprime el de la acción popular, sofocada por todas las constituciones europeas y americanas; la única que busca la prosperidad social en la concurrencia universal de todas las luces y de todos los talentos; la única que fija los poderes sociales, no sobre bases caprichosas y arbitrarias, sino sobre los quicios marcados a cada uno de ellos por la naturaleza de sus atribuciones respectivas; la única que deslinda sus verdaderos límites, haciéndolos tomar la marcha enérgica y armoniosa que deben emprender de concierto para llegar al fin de su común institución, sin que jamás el uno pueda estorbar ni paralizar la acción del otro, la única, en fin, que reuniendo todas las ventajas y excelencias de todas las combinaciones trilladas, no se resiente de los resabios de servilismo que las hacen a todas detestables, sin exceptuar las mismas republicanas, tan neciamente aplaudidas por el eco de la ignorancia y la rutina.

Sí, mexicanos, la forma de gobierno que os presento, es la mejor de todas las democracias, porque en ella, lejos de quedar el pueblo reducido al estado miserable de minoridad y de tutela, a que le tienen condenado los modernos demagogos, que no parecen halagarle con el principio de su soberanía, sino para tornar contra él esta arma las más veces, y dejarle adormecer en la inacción, siempre conserva su carácter incomunicable de agente principal y de dueño de la autoridad, siempre mantiene su cualidad augusta de verdadero soberano, y siempre está montado sobre el pie del *¿quién vive?* con respecto a todos sus mandaderos, cualquiera que sea el poder cuyo ejercicio les confía. Pero la ventaja distintiva de esta forma singular de democracia, y que constituye, por decirlo así, su carácter y divisa, es que haciendo concurrir a millones de individuos a la formación de todas y cada una de las leyes, esta concurrencia siempre se efectúa en el seno de la calma y del orden más inalterable, sin faltar jamás a las reglas más exactas de la más severa circunspección y del decoro, y sin dar lugar a las reuniones numerosas y tumultuarias, tan expuestas a las convulsiones de la anarquía, que tan fatales fueron en otro tiempo a la libertad de los antiguos pueblos de Atenas y de Roma.

Es la mejor de todas las aristocracias, porque la nobleza de los ciudadanos más remarcables por su virtud y patriotismo, llamados por la ley a ocupar con preferencia las dignidades y los empleos, es la nobleza del mérito personal, nobleza que siempre principia y fenece con el sujeto en quien reside, nobleza cuya puerta siempre está franca para todos los individuos que quieren adquirirla, nobleza, en fin, que en nada simpatiza con la bárbara y ultrajante, introducida por el feudalismo, dada desde luego en recompensa por los conquistadores a los cómplices de sus atentados en la efusión de sangre humana y en el exterminio de los pueblos, fundada en una pureza de linaje imaginaria, que teniendo anexo el derecho horrible de la primogenitura, no sólo priva a todos los individuos de una misma familia, sino a todos los miem-

bros de la asociación, de la libre circulación de los bienes, sin la cual es tan imposible que haya salud y robustez en el cuerpo político, como el que haya vigor y sanidad en el cuerpo humano sin la libre circulación de la sangre.

En fin, es la mejor de todas las monarquías, porque en ella el supremo jefe del poder ejecutivo estando reducido a la dichosa imposibilidad de abusar del poderío, tiene los brazos enteramente sueltos y libres y a su disposición todos los medios que haya menester, para obrar todo el bien a que la misma naturaleza de su institución le llama. La suprema magistratura del estado, abierta en su primer resorte para todos los ciudadanos que se hicieren acreedores a obtenerla por un derecho generalmente reconocido de aptitud y de escala, sobre ser la institución más digna de una sociedad de hombres ilustrados y libres, que conozcan toda la extensión de sus derechos, tiene todas las ventajas que los políticos se han propuesto conseguir, y ninguno de los inconvenientes que han tratado de evitar, con el sistema de las sucesiones hereditarias y electivas. El orden de escala rigurosa da incomparablemente mayor número de sucesores para el trono que las más fecundas dinastías, no está expuesto a las borrascas de los interregnos que asuelan a veces a las monarquías hereditarias, como le sucedió a la española en principios del siglo 18, ni a la debilidad y convulsiones de las minoridades, ni al inconveniente todavía mucho mayor de dar casi siempre reyes estafermos y sin talento, que no se heredan por el nacimiento, como los bienes. Mucho menos está expuesto a las maquinaciones de la intriga y a las preferencias injustas, caprichosas y arbitrarias de las elecciones, obra las más veces de los errores y extravíos de las pasiones humanas. La dignidad de supremo jefe del estado, reservada indistintamente para todos los ciudadanos, empleados en los diferentes grados de las escalas del servicio nacional, sin más palanca que la del mérito y la progresión del tiempo, es el estímulo más eficaz para excitarlos al cumplimiento de sus deberes; y este incentivo, unido al temor de ser removidos de sus empleos, en cualesquiera grados de la escala, siempre que los desempeñen a disgusto de sus comitentes, a quienes, como a propietarios de la autoridad, les debe siempre quedar a salvo este derecho, garantiza la estabilidad del orden social y asegura la consistencia de la máquina política por medio de los dos más poderosos resortes que obran sobre el corazón del hombre, la esperanza de un gran bien y el temor de un gran mal, la aversión al dolor y el amor del placer.

Americanos: se ha dicho que hay muchas formas de gobierno, y éste es uno de aquellos grandes desatinos que, para mengua de las pretendidas luces del siglo y desgracia de la humanidad abatida, se siguen todavía repitiendo de memoria, sin examen ni reflexión. Así como no hay, ni puede haber más que un solo buen gobierno, tampoco hay, ni puede haber más que una sola buena forma, y es aquélla en que todos y cada uno de los socios disfrutan a la par, sin más excepción que la del mérito personal marcado por la ley, todas las ventajas de la asociación y de la soberanía, con el menor sacrificio posible de impuestos y contribuciones. La política es una ciencia tan invariable en sus principios como la geometría; y así como sería un absurdo decir que cada pueblo debe tener su geometría particular, también lo es el decir que cada uno debe tener su política o su constitución particular. Todas estas expresiones prueban la general ignorancia que se padece de los principios netos y precisos de la ciencia de la asociación, y lo identificados que están hasta los literatos con las doctrinas que abren la puerta a la arbitrariedad, y por consiguiente a la tiranía. Todas las formas de gobierno, despojadas de todo lo que tienen de injusto, absurdo, bárbaro y arbitrario, se en-

cuentran reducidas a una sola. Tal es la que presento a mis compatriotas, y una demostración práctica de esta verdad es que la misma constitución que se había compuesto para un gobierno monárquico constitucional, esa misma se ofrece hoy como un modelo de una forma eminentemente republicana y que reúne todas las ventajas y caracteres de central y federada.

Sí, Americanos, la forma de gobierno que os propongo, es la más eminentemente republicana que puede imaginarse y realizarse. En ella se ve al despotismo universal descubierto, perseguido y exterminado en todas sus fuentes y ramificaciones. Ella es la única capaz de dar a las sociedades aquel estado de reposo y consistencia que hasta ahora no han bastado a darles todos esos reformadores superficiales y rutineros de las naciones modernas, que copiándose los unos a los otros y reproduciendo unos mismos errores, siempre anunciados con énfasis como principios de reformas saludables, y siempre rebatidos por la experiencia, no parece sino que han formado un pacto de perpetuar sin fin sobre la tierra un germen eterno de lucha y de discordia entre los pueblos y sus conductores, provocando a los tiranos para nuevas y copiosas efusiones de sangre humana. Ella es la única que puede libertaros a vosotros y a los pueblos que tuvieren bastante dosis de sentido común para adoptarla, de la terrible alternativa en que hoy fluctúa la sociedad, o de las explosiones reiteradas de un despotismo siempre mal reprimido y siempre renaciente, o de las convulsiones anárquicas de unas representaciones tumultuarias, frecuentemente renovadas, y por lo mismo siempre compuestas de políticos bisoños y de estadistas aprendices, muy inferiores en las luces de la experiencia a los grandes maestros de la ciencia de la opresión y tiranía. En fin, ella sola, y no otra, es el único baluarte inexpugnable en que se estrellarán todos los esfuerzos de esa liga formidable de déspotas poderosos y opulentos, conjurados en Europa contra la regeneración de la especie humana, y resueltos a exterminar a todo país en que ligeramente asome o repunte el arbusto de la libertad.

Americanos: la constitución que os presento, es fruto de treinta años de estudios, desvelos y meditaciones profundas: en ella están perfectamente bien conciliados los intereses de todos los individuos de la sociedad, aun los de las clases que parecen entre sí más opuestas e inconciliables según las ideas mezquinas de los políticos del día. Ella proporciona desde luego un ascenso general, y rentas incomparablemente más cuantiosas que las que hasta ahora disfrutan, a todos los jefes, oficiales y soldados del ejército, a todos los oidores, abogados, médicos y literatos de profesión, a todos los obispos, canónigos, curas y ministros del culto, y a todos los empleados en los diferentes ramos de la administración pública.

Esta constitución contiene medios seguros e infalibles de enriquecer a todos los pobres, en tales términos que si dentro de pocos meses se encontrare un solo mendigo que no estuviere suficientemente abastecido de todos los medios de subsistir con desahogo, será únicamente porque los individuos del congreso nacional y provinciales querrán más bien ceñirse al afán miserable de copiar los errores de rutina consignados en las legislaciones de otros pueblos, que cimentar la máquina política según las reglas eternas e invariables del arte de la asociación, descubiertas o aclaradas por uno de sus compatriotas.

Esta constitución contiene medios igualmente seguros e infalibles de pacificar a la patria, acallando todas las facciones y partidos que tienen desgarrado su seno, llamando a todos los ciudadanos al reposo por medio del resorte omnipotente de su interés individual, haciendo

que cada uno se ocupe solamente de la fortuna que se le prepara, sin dejarle tiempo, ocasión o motivo de pensar, ni aún remotamente, en turbar la paz de los demás.

Esta constitución interesa a todas las naciones extranjeras en la prosperidad e independencia del Anáhuac, invitándolas a comerciar en todos sus puertos sin ningún pago de derechos.

En fin, esta constitución es como el sol, de cuya luz y benéficas influencias no hay ninguno que no participe: ella hace bien a todos, no hace daño a nadie, parece que no se puede esperar más de un legislador que bajase de los cielos, encargado de la misión de constituirnos.

CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL ANÁHUAC

Nos los habitantes de la República de los estados unidos del Anáhuac, a saber, los de México, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa, Antigua y Nueva California, Sonora, Durango, Chihuahua, Nuevo México, Texas, Nuevo Reino de León, Coahuila, Nuevo Santander, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Guatemala, Quezaltenango, San Salvador, Nicaragua y Honduras, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que para ponernos a cubierto de todos los ataques de la tiranía, asegurar el goce de los naturales e imprescriptibles derechos que todos recibimos al nacer, de la bondad del ser supremo, y conseguir todos los fines de nuestra asociación política, hemos estipulado, y estipulamos, observar, guardar y cumplir como las bases sagradas y solemnes de nuestro futuro pacto social, todos y cada uno de los artículos contenidos en los títulos siguientes.

TÍTULO I
De las bases de la regeneración social

CAPÍTULO I
De la organización del cuerpo político

ARTÍCULO 1. Para formar de todos los ciudadanos un cuerpo político, estrechamente unido y bien ordenado en todos sus miembros, de la manera más propia y conducente para facilitar su régimen y defensa, es de primera necesidad el clasificarlos, y ningún medio se presenta desde luego más obvio, natural y sencillo de practicar esta clasificación con arreglo al fin de la institución social, que el de dividirlos en corporaciones político-militares, compuestas de todos los individuos de un mismo estado, profesión o modo de vivir.

Por tanto, en cada lugar o grupo de la población nacional se formará una corporación de todos los labradores, sean propietarios, arrendatarios o jornaleros, debiendo pertenecer las dos primeras clases a las fuerzas de caballería; otra se formará de todos los mineros, sean propietarios o dependientes empleados, de cualquiera manera que sea, en la explotación y beneficio de los metales; otra, de todos los mercaderes; otra, de todos los artesanos que profesen un mismo arte u oficio; y otra, en fin, de todos los ciudadanos que por su pobreza se vieren en la necesidad de prestar servicio en las casas de sus conciudadanos. Los que no tuvieren oficio ni beneficio, como también los que estuvieren impedidos por la naturaleza de poder dar servicio

militar en tiempo de guerra, se agregarán a la corporación que quisieren, para recibir del seno de ella los beneficios del orden social.

ART. 2. Todas estas corporaciones, a semejanza de las militares, se distribuirán en centurias, batallones, regimientos, brigadas, etcétera.

ART. 3. Cuando los individuos de una corporación fueren tan pocos que no bastaren para componer una centuria, se agregarán a otros de la del arte u oficio más análogo, para formarla; mas no por eso dejará uno de ellos de ser nombrado comandante de su pequeña corporación, aunque en la centuria o compañía de su agregación sólo ocupare el rango de un simple soldado raso.

ART. 4. En cada lugar habrá un edificio o casa-cuartel destinado para cada una de estas corporaciones, donde se reunirán sus individuos, siempre que lo exijan los intereses comunes de la misma corporación, o la salvación de la patria, o meros objetos de placer, cuando quisieren juntarse para estrechar los lazos del vínculo social.

CAPÍTULO II
De la soberanía

ART. 5. La soberanía, o la suprema autoridad de regir a una asociación, reside naturalmente en los mismos asociados, así como la facultad de arreglar las condiciones de una compañía de comercio reside en los mismos negociantes reunidos para formarla.

ART. 6. Esta suprema autoridad abraza tres poderes distintos, el de formar las leyes por las cuales se ha de regir la asociación, el de mandar ejecutar estas leyes puntualmente, y el de aplicarlas a los casos en que asomaren desavenencias entre los individuos de la misma asociación.

ART. 7. El arte de acumular estos tres poderes en una sola mano, física o moral, o el de dar más preponderancia al uno que a los otros, es el arte infalible de la tiranía; así como el dividirlos y equilibrarlos, de manera que todos se auxilien sin estorbarse para llegar al fin de su común institución, que es el buen servicio de toda la asociación, es el medio seguro de hacer libres y venturosos a los pueblos, o el arte de formar asociaciones dignas de los seres inteligentes y libres.

TÍTULO II
De la primera rama de la soberanía

CAPÍTULO I
De la organización y ramificación del poder legislativo

ART. 8. Para que todos los individuos de la asociación puedan disfrutar de la primera, más preciosa e importante rama de la soberanía, que es la facultad de legislar, y para que los mandaderos encargados del ejercicio de esta facultad puedan precaver o corregir las aberraciones de los agentes del poder ejecutivo y judicial, siempre propensos a traspasar las órbitas en que

los circunscriben las leyes, es indispensable que el poder legislativo esté ramificado por todas las poblaciones del territorio nacional, así como lo están los agentes de dichos poderes ejecutivo y judicial.

ART. 9. Estando clasificada toda la población de cada lugar en corporaciones político-militares, compuestas de todos los ciudadanos de un mismo estado, profesión o modo de vivir, cada corporación nombrará un individuo de su seno para que represente sus derechos, y la reunión de los representantes de todas las corporaciones se llamará *congreso municipal.*

ART. 10. Los congresos municipales de los pueblos cabeceras de distrito se llamarán *distritales,* y a ellos tendrán derecho de concurrir un representante de cada uno de los congresos municipales de todos los pueblos comprendidos en la demarcación del distrito, siempre que lo exigieren los intereses comunes de los habitantes del mismo distrito.

ART. 11. En todas las ciudades capitales de provincia, habrá un congreso compuesto de un representante de cada uno de los distritos comprendidos en la demarcación de su territorio; pero mientras no se organizare un erario capaz de cubrir las dotaciones de todos estos representantes, sin aumentar los gravámenes que hoy pesan sobre el pueblo, el congreso provincial de la capital central de la república sólo se compondrá de 15 diputados; los congresos de las provincias de primer orden o cuya población llegare a 500 000 almas, de 12; los de las de segundo orden o cuya población llegare a 300 000, de 9; los de las de tercer orden o cuya población llegare a 100 000, de 7, y los de las de cuarto orden o cuya población bajare de este último número, de 5.

ART. 12. En la capital central de la república habrá un congreso nacional, compuesto de tantos representantes cuantos fueren los estados libres o provincias del territorio republicano.

CAPÍTULO II
De las palancas del poder legislativo

ART. 13. Todo congreso municipal tendrá para el desempeño de su ministerio una biblioteca abundantemente surtida de todos los códigos constitucionales y civiles de los pueblos antiguos y modernos, y de las obras más clásicas escritas en materia de derecho, y de ciencias naturales, artes y oficios, cuyo estudio es el fundamental de la ciencia de la legislación.

ART. 14. Los congresos provinciales, a más de biblioteca, tendrán una imprenta, para comunicar al pueblo por medio de ella los resultados de sus tareas.

ART. 15. El congreso nacional, a más de imprenta y biblioteca, tendrá un colegio de nueve taquígrafos, que asistirán a las sesiones alternándose de tres en tres, para copiar los discursos verbales de los diputados.

CAPÍTULO III
De la policía de los congresos legislativos

ART. 16. Teniendo en la sociedad tantos derechos un solo individuo como todos los demás, y siendo por consiguiente iguales en derechos los estados más poblados de la República, como los de menos población, deben ser también perfectamente iguales todos los representan-

tes de ellos. En esta virtud, para los asientos que hayan de ocupar en el congreso, precederá un sorteo de estos asientos, ocupará cada uno el que le tocare por suerte, y sobre la parte superior del respaldo de la silla que le hubiere tocado se escribirá con grandes caracteres el nombre de la provincia que representare.

El asiento que por esta vez le tocare por suerte al diputado de una provincia, ese mismo será ocupado por todos los diputados de la misma provincia que después le fueren sucediendo.

ART. 17. La silla del presidente se colocará en medio de las dos alas o filas de los diputados, teniendo a su frente una mesa, a cuyas cabeceras derecha e izquierda se pondrán la del secretario y pro-secretario.

ART. 18. Para reparar estas desigualdades de la suerte en la distribución de los asientos, aquél a quien le hubiere tocado el último por el lado izquierdo de la silla del presidente, comenzará a desempeñar este oficio, permaneciendo en él por tres meses, al cabo de los cuales le sucederá el que ocupare el último asiento por el lado derecho, quien hará de vice-presidente. Del mismo modo se irán turnando los demás diputados en los oficios de presidente y vice-presidente, según el orden de sus asientos, de abajo para arriba, a izquierda y derecha, de manera que siempre haga de vice-presidente en un trimestre el que ha de presidir al congreso en el siguiente.

ART. 19. Con el mismo fin de reparar la referida desigualdad, comenzará desempeñando el oficio más penoso del congreso, que es el de secretario, aquél a quien hubiere tocado el primer asiento al lado derecho del presidente, y de pro-secretario, aquél a quien hubiere tocado el primero al lado izquierdo, y de este mismo modo seguirán turnando en cada trimestre los demás diputados para los oficios de secretario y pro-secretario, según el orden de sus asientos de arriba para abajo, a derecha e izquierda del presidente.

ART. 20. Las atribuciones del presidente son, *primera*: presidir todas las sesiones ordinarias del congreso que se tendrán en los días martes, jueves y sábados de cada semana.

Segunda. Presidir igualmente las extraordinarias y convocar para ellas al congreso, siempre que lo pidiere algún representante a nombre de su provincia, o alguno de los secretarios del despacho, a nombre del primer magistrado.

Tercera. Reclamar el orden, imponiendo silencio con el toque de campanilla, siempre que advirtiere que se quebranta, *por extravío de la cuestión; por algún descomedimiento; por susurro de conversaciones secretas; por intervención de tercera persona en la disputa que por vía de riguroso diálogo deberá únicamente sostenerse entre dos diputados; por la precipitación con que uno o los dos dialogantes se apresuraren a hablar, interrumpiéndose antes que cada uno respectivamente haya acabado de exponer cuanto tuviere que decir; o por demasiada terquedad en la disputa, cuando por una u otra parte nada se añadiere de nuevo a lo que ya se hubiere repetido anteriormente.*

ART. 21. Todas las disputas que se suscitaren en el congreso, se decidirán a pluralidad absoluta de votos.

ART. 22. Sobre todos los asuntos que se ventilaren en el congreso, sean de la naturaleza que fuesen, de grande o pequeña importancia, hablarán forzosamente todos los diputados sucesivamente y según el orden de sus asientos.

ART. 23. Luego que hayan acabado de hablar por su orden todos los diputados de las dos alas derecha e izquierda, hablarán el pro-secretario y el secretario y al fin de todos el presidente.

ART. 24. Todo diputado que al llegarle su turno de usar del derecho de la palabra no quisiere hacer uso de ella, lo expresará con esta fórmula: *pase la palabra*; pero si el motivo de no querer hablar fuere por no tener sobre el punto en cuestión la instrucción suficiente, y deseare adquirirla oyendo primero a los demás diputados, será árbitro a usar de su derecho después que todos hayan hablado, y en este caso se expresará con esta otra fórmula: *pase por ahora la palabra.*

ART. 25. Toda decisión del congreso sobre un asunto, cualquiera que sea, en que no hubiere hablado un solo diputado, o renunciado expresamente el derecho de la palabra bajo alguna de las dos fórmulas contenidas en el artículo antecedente, será nula y de ningún valor como que faltara el consentimiento de la provincia a quien dicho diputado representare.

ART. 26. Durante esta circulación general, sucesiva y forzosa del derecho de la palabra por todos los asientos de los diputados, ninguno será árbitro a tomarla más que una sola vez, cuando le llegare su turno, sin poder hablar segunda vez, por más que en su concepto se virtieren los errores más perjudiciales, o las equivocaciones más groseras sobre lo que él mismo hubiere dicho en su turno.

ART. 27. Durante esta primera circulación general del derecho de la palabra, ningún diputado, por ningún motivo, será jamás interrumpido, impugnado o interpelado por otro.

ART. 28. Luego que hubieren acabado de hablar los diputados que hayan usado del derecho de la palabra, comenzarán a hacerlo los que se hubieren reservado para después, precediendo esta fórmula que pronunciará en alta voz el secretario: *los señores que han reservado el derecho de la palabra para usarlo en esta vez, son árbitros a hacerlo, según el orden de sus asientos.*

ART. 29. Luego que hubiere acabado de hablar el último de los diputados reservados, o fenecido el acto de la *exposición*, el secretario pronunciará en alta voz la fórmula siguiente: *los señores que quisieren pedir explicaciones, deshacer equívocos o impugnar las opiniones que se han vertido sobre el asunto en cuestión, son árbitros a hacerlo, según el orden de sus asientos.*

ART. 30. Cuando sólo se tratare de deshacer algún equívoco, o de dar o pedir alguna explicación, tanto el que la reclamare como el que hubiere de satisfacerla, se contestarán desde sus asientos respectivos; pero si se tratare de impugnar alguna opinión, sosteniendo sobre la materia una disputa formal, el impugnador dirá en alta voz: *pido el derecho de la tribuna*; y respondiendo luego el presidente *en hora buena*, montará luego a la que estuviere tras de la fila donde se hallare su asiento, pasándose a la de enfrente el autor de la opinión para contestar.

ART. 31. Concluida la disputa entre los dos primeros diputados que hubieren usado del derecho de la tribuna, todos los demás serán árbitros según el orden riguroso de sus asientos a usar del mismo derecho, ya continuando uno después de otro sucesivamente la misma disputa con el campeón que hubiere quedado en la palestra, ya emprendiendo otra sucesivamente con otros, cuyas opiniones quisieren impugnar o defender.

ART. 32. Concluidas todas las disputas o fenecido enteramente el acto de la *discusión*, se procederá luego inmediatamente al de la *decisión*, para lo cual preguntará en alta voz el secretario: *¿si la materia está suficientemente discutida?*, y se tendrá por tal si las dos terceras partes de los diputados, uno más, lo afirmaren así.

ART. 33. Si el diputado o diputados que sobre el contenido del artículo precedente hubieren opinado por la negativa, quisiesen fundar su dictamen, exponiendo por escrito los motivos en que se apoyaren, se prorrogará la decisión hasta la sesión del día próximo siguiente; y

en este caso, leída la memoria en el congreso, se procederá segunda vez a votar *¿si la materia está, o no, suficientemente discutida?*, y se tendrá definitivamente por discutida si las dos terceras partes de los diputados, uno más, insistieren aún por la afirmativa.

ART. 34. La *decisión* se hará por medio de pequeños signos de metal del tamaño y figura de una peseta en que se habrán grabado las cifras *Sí* y *No*, tomando el primero los diputados que resolvieren en pro, y el segundo los que resolvieren en contra, echándolo sucesivamente según el orden riguroso de sus asientos en la urna que para el efecto se habrá colocado sobre la mesa y dejando enseguida sobre ella el signo de que no se hubieren servido, con la cifra vuelta hacia abajo y formando todos un solo montón.

ART. 35. Concluido este acto, y abierta y volcada la urna sobre la mesa para vaciar los signos contenidos en ella, el secretario se pondrá en pie y contará los signos afirmativos y los negativos a presencia del presidente, del pro-secretario, y de los dos primeros diputados que estuvieren a derecha e izquierda del presidente que para el efecto se acercarán a la mesa; y el mismo secretario proclamará en seguida el número de votos en pro y en contra, pronunciando la siguiente fórmula: *los señores que quisieren enterarse de la realidad de la proclamación que acaba de hacerse de los votos afirmativos y negativos sobre la materia discutida, son árbitros a usar de este derecho, acercándose a la mesa sucesivamente y según el orden de sus asientos.* Verificado esto, si el número de los signos afirmativos llegare al de las dos terceras partes de los diputados, uno más, el asunto se tendrá por resuelto afirmativamente, y si no llegare a dicha suma, se tendrá por resuelto en contra.

ART. 36. Todos los artículos expresados sobre la *exposición, discusión* y *decisión* de los asuntos ventilados en el congreso, regirán en todos los casos aislados en que el mismo congreso en su cualidad eminente de consejo supremo de la nación fuere consultado por los agentes de los poderes ejecutivo y judicial, o implorado por las víctimas de las infracciones constitucionales o de las interpretaciones arbitrarias de las leyes.

ART. 37. Todos los artículos de este capítulo, relativos al sorteo de asientos, turno de los diputados en los oficios de presidente, vice-presidente, secretario y pro-secretario, y a la *exposición, discusión* y *decisión* de los negocios, regirán en los congresos provinciales, distritales y municipales.

CAPÍTULO IV
De la táctica para la formación del código nacional

ART. 38. Estando esencialmente ligadas entre sí todas las necesidades del hombre en sociedad, y los medios de satisfacerlas, también deben estarlo las leyes que no deben contener más que la expresión de estos medios. Por consiguiente, no regirá en toda la república más que un solo código general, único e indivisible.

ART. 39. Para la formación de este código, el primer paso indispensable que dará el congreso, será el de formar un cuadro completo y detallado de todos los males que afligen al cuerpo social y, en su consecuencia, el plan general de legislación, destinado a remediarlos, presentándolo distribuido en títulos y capítulos, con los epígrafes de las materias que deban contener.

ART. 40. Para la formación de este plan, se elegirá por escrutinio una comisión de los seis individuos que en concepto del congreso tengan más capacidad para formarlo; y concluido que sea, precederán para su aprobación los tres actos distintos de la *exposición, discusión* y *decisión*, que quedan prescritos en el capítulo antecedente para los casos de queja y consulta.

ART. 41. Aprobado el plan por el congreso, se procederá a formar el pormenor de los artículos que haya de abrazar cada capítulo, operación de que se irá encargando sucesivamente cada uno de los diputados según el orden riguroso de sus asientos, a derecha e izquierda del presidente.

ART. 42. El diputado que estuviere en turno de legislar o de formar el detalle de los artículos que haya de abrazar cada capítulo del código nacional, llevará el nombre de legislante, y para el cabal desempeño de su encargo, será auxiliado por todos los demás diputados que le ministrarán todas las luces esparcidas en los autores y códigos que trataren de la materia en cuestión.

ART. 43. Este suministro de luces se hará del modo siguiente. Una comisión de seis individuos sorteados entre todos los diputados del congreso, excepto el legislante, se encargará de recoger todos los nombres de todos los escritores y códigos que trataren de la materia en cuestión, y escritos en cédulas por el secretario, y distribuidos por sorteo entre todos los individuos del congreso, excepto el legislante; se encargará cada uno de extractar el autor o autores, y el código o códigos que le hubieren tocado por suerte.

ART. 44. Estos extractos, firmados por los mismos diputados que los hubieren redactado, se les entregarán al legislante, y se imprimirán e insertarán en las actas con el epígrafe siguiente: *Estado de los conocimientos humanos sobre la materia tal, de que va a ocuparse el supremo congreso.*

ART. 45. También se le ministrarán al legislante todos los datos estadísticos que pidiere y tuvieren relación con la materia en cuestión.

ART. 46. Auxiliado el legislante con todas estas luces, formará el detalle de todos los artículos del capítulo cuya formación le hubiere tocado por turno.

ART. 47. En la *exposición, discusión* y *decisión* de cada uno de los artículos del capítulo en cuestión, se observará lo mismo que queda prescrito para los casos de queja y consulta en el capítulo antecedente.

ART. 48. Todos los discursos durante los actos de la *exposición* y *discusión* de cada artículo, que pronunciaren el legislante y los demás diputados en apoyo o impugnación del mismo artículo, serán copiados por los taquígrafos y entregados al fin de cada sesión a sus autores respectivos, para que vean si las copias están fieles o no, y hagan en ellas las adiciones, correcciones y enmiendas que les parecieren, y sólo en este estado y firmadas por sus mismos autores, se publicarán en las actas para instrucción del pueblo soberano.

ART. 49. Concluida la formación del capítulo con todos los artículos que hubieren sido aprobados por las dos terceras partes de los diputados, uno más, se mandará circular y observar en calidad de *ley provisional*.

ART. 50. Luego que el supremo congreso hubiere mandado publicar un capítulo del código nacional para su observancia en calidad de ley provisional, lo dirigirá de oficio a los presidentes de los congresos provinciales* para su ulterior examen y discusión.

* La dilación de este trámite en nada perjudica a la prontitud de la circulación de las leyes, pues que rigen desde

ART. 51. Para que los congresos subalternos y los hombres sabios diseminados por todas las poblaciones de la República, puedan estar instruidos de antemano, y explicar su voto y opinión sobre todos los asuntos ventilados y resueltos por el supremo congreso, mandará éste publicar las actas de sus discusiones en un periódico diario o semanario, según mejor le parezca.

CAPÍTULO V
De la intervención de los congresos provinciales, distritales y municipales, en la formación de las leyes

ART. 52. Cuando el presidente de cada congreso provincial recibiere de oficio un proyecto de ley, aprobado en el congreso nacional, *en primer lugar*: dirigirá copias del mismo proyecto a todos los presidentes de los congresos *distritales* comprendidos en el territorio de la misma provincia.

En segundo lugar: lo hará publicar por medio de bando en la misma capital, invitando a todos los sabios para que dentro del término de 50 días presenten al congreso por escrito el reclamo o reclamos que les ocurrieren contra el proyecto de ley en cuestión.

En tercer lugar: mandará leer dicho proyecto en pleno congreso para su discusión.

ART. 53. Todo diputado del congreso que presentare a éste algún reclamo contra el proyecto de ley en cuestión, deberá hacerlo por escrito, exponiendo las razones en que lo funde.

ART. 54. Concluida la discusión de cada reclamo presentado por cada uno de los diputados del congreso, se procederá luego a la votación sobre su aprobación o desaprobación; y esta nota de censura se pondrá al fin de dicho reclamo en los términos siguientes: *Aprobado o desaprobado unánimemente, o aprobado por tantos votos, y desaprobado por tantos. N.* Secretario.

ART. 55. A la discusión y censura de los reclamos propuestos por los diputados del congreso, seguirá conforme en todo a lo prevenido para éstos, la discusión y censura de los reclamos presentados por los individuos de fuera del congreso, sin más diferencia que la de que a la lectura de cada uno de ellos en pleno congreso, debe luego seguir la votación de ¿si es o no digno de discusión?, y se tendrá por digno de ella si tres diputados del congreso por lo menos estuvieren por la afirmativa.

ART. 56. Todo ciudadano cuyo reclamo contra el proyecto de ley en cuestión se hubiere juzgado digno de discusión, es árbitro a asistir y a tener asiento en el congreso, durante las horas de la discusión de su reclamo.

luego que son aprobadas por la mayoría del congreso nacional; sino solamente a la prontitud de la sanción, y esto lejos de ser un mal es, por el contrario, un gran bien, atendiendo a que casi todos los desastres de un pueblo se originan de sus malas leyes. En general, ninguna debe sancionarse, sin que la experiencia de algunos años acredite el acierto, con que procedieron los legisladores al formarla. La buena legislación debe ser, como la buena física, experimental. Por otra parte, las aberraciones a que están expuestos los diputados, como que son hombres, deben tener un correctivo, y éste no puede ser otro que el del derecho de examen, contradicción y censura de las leyes. Este derecho es también de primera necesidad, para que sea generalmente reconocida la evidencia de la justicia de las leyes, y de este modo arrastre a los ciudadanos por medio de la convicción a su más puntual y exacto cumplimiento. En fin, este derecho se le debe conceder al pueblo, porque él es el dueño de la potestad legislativa, y a cada uno se le ha de dar lo que es suyo. *Unicaique tribuendam, quod suum est.*

ART. 57. Del mismo modo se practicará la discusión y censura de todas las leyes, expedidas por el congreso nacional en todos los congresos distritales y municipales de cada provincia, y los reclamos se dirigirán al congreso provincial, para que de todos ellos forme un examen analítico y lo circule y publique por todos los congresos de la misma provincia, y por los provinciales de los demás estados, dando cuenta de todo al central nacional.

CAPÍTULO VI
De la piedra de toque para la discusión y censura de las leyes

ART. 58. La piedra de toque en que habrán de probarse todas y cada una de las leyes, publicadas por el congreso nacional, será la de su conveniencia o repugnancia con las verdaderas leyes naturales, es decir, con las relaciones eternas, constantes, necesarias e invariables, establecidas por el autor del mando entre la naturaleza y necesidades del hombre y entre la naturaleza y propiedades de todos los objetos creados para satisfacerlas.

ART. 59. La señal más cierta y evidente de la conveniencia de las leyes positivas con las naturales, será la de su conformidad con las cuatro proposiciones siguientes.

Primera: todo hombre por derecho de la naturaleza tiene la más amplia y expedita libertad de hacer todo aquello que no choque, ofenda o vulnere directa o indirectamente los derechos naturales de sus demás consocios.

Segunda: todo hombre por derecho de la naturaleza está libre y exento de todo género de violencia, sin que ningún individuo más fuerte, o algún agente de la autoridad, tengan justicia jamás para inferirle fuerza sobre sus bienes y persona.

Tercera: todo hombre por derecho de la naturaleza es enteramente dueño de hacer de su persona y sus bienes adquiridos con su talento, trabajo e industria, el uso que mejor le parezca, sin que ninguna autoridad pueda jamás decirle con justicia, *distribuye tus bienes de este modo o del otro, empléalos o no los emplees en éste o en otro ramo de negociación o de industria.*

Cuarta: la ley es una misma para todos los ciudadanos, ya mande, ya vede, ya premie, ya castigue.

ART. 60. Toda ley conforme a los cuatro principios antecedentes, debe aprobarse y adoptarse; pero la que fuere contraria a ellos, directa o indirectamente, debe verse con horror e indignación y ser unánimemente desechada por toda la nación.

CAPÍTULO VII
De la discusión de reclamos en el congreso nacional

ART. 61. Luego que se hayan recibido en el congreso nacional los reclamos dirigidos por los congresos provinciales, se clasificarán estos reclamos reduciendo a un solo cuerpo todos los que rueden sobre un mismo objeto o punto de dificultad.

ART. 62. Hecha esta clasificación se procederá a la discusión de cada reclamo, y a ésta seguirá la votación sobre ¿si es fundado o infundado?, y se tendrá por fundado si la cuarta parte de los diputados, uno más, estuviere por la afirmativa.

ART. 63. Luego que en el congreso nacional se haya concluido la discusión de las objeciones dirigidas por los congresos de las provincias contra algún proyecto de ley en cuestión, el mismo congreso remitirá todas estas objeciones, juntamente con las respuestas que les hubiere dado, a los congresos provinciales, para que concedan o nieguen la sanción.

CAPÍTULO VIII
De la sanción de las leyes

ART. 64. En los congresos Provinciales reside el verdadero asiento del *veto* para la sanción de las leyes.

ART. 65. Luego que en cada congreso provincial se reciban las respuestas que el congreso nacional hubiere dado a los reclamos hechos contra alguna ley, sobre cada una de estas respuestas, se abrirán los tres actos distintos de *exposición, discusión* y *decisión*, que quedan prevenidos en el capítulo III.

ART. 66. Cuando por los votos de las dos terceras partes de los representantes provinciales, uno más, se hubiere decidido que son satisfactorias las respuestas dadas por el congreso nacional a las objeciones propuestas contra el proyecto de ley en cuestión, la ley contenida en él se tendrá como sancionada por el congreso provincial en que así se hubiere decidido; y de todo ello se remitirá constancia al supremo congreso nacional.

ART. 67. Cuando todos los congresos provinciales hubieren dado la sanción a un proyecto de ley, ésta se tendrá por sancionada, y se insertará con el carácter de tal en el código; pero si sólo hubiere sido sancionada por las dos terceras partes de los congresos provinciales, uno más, todavía seguirá rigiendo en calidad de ley *provisional*, y en el caso de no ser ratificada por las dos terceras partes de dichos congresos, uno más, cesará luego de observarse y se tendrá como desechada por la nación.

CAPÍTULO IX
De la redacción y perfección del código nacional

ART. 68. Al congreso naeional toca privativamente reducir a un solo cuerpo o código de leyes todas las que hubiere publicado para la conservación de los derechos de todos y cada uno de los habitantes de la república.

ART. 69. Al mismo congreso nacional pertenece igualmente de oficio dar a este código de leyes toda la perfección de que es susceptible.

ART. 70. El código nacional se tendrá por perfecto, cuando sea tan *verdadero* en todos sus artículos, que todas y cada una de las leyes que contenga, sólo sean la expresión de las leyes naturales; cuando sea tan *completo*, que abrace todos los ramos de la prosperidad social, sin que en el más pequeño de ellos deje lugar a la arbitrariedad e ignorancia de la autoridad, que son el verdadero origen del despotismo; cuando sea tan *exacto* que todos los artículos de sus capítulos no presenten más que una cadena de proposiciones que, partiendo de un principio de justicia generalmente reconocido, no sean más que una serie de consecuencias deducidas

las unas de las otras hasta en sus últimos pormenores; tan *sencillo* que todo él esté reducido al menor número posible de títulos, cada título al menor número posible de capítulos, cada capítulo al menor número posible de artículos, cada artículo al menor número posible de proposiciones, y cada proposición a la mayor concisión y claridad posibles, y en fin, cuando sea tan *uno* que todas sus partes estén no sólo perfectamente enlazadas entre sí las unas con las otras, sino que lo estén también con el principio de donde dimanan, y con el fin de la felicidad general a que se encaminan.

TÍTULO III
De la segunda rama de la soberanía

CAPÍTULO I
De la organización y ramificación del poder ejecutivo

ART. 71. El pueblo comisionará para el ejercicio del poder ejecutivo a un supremo magistrado, que residirá en la capital central de la república.

ART. 72. Siendo este encargo demasiado vasto, para que un solo hombre pueda llenarlo, este supremo magistrado tendrá por su inmediato ayudante un ministro encargado del despacho universal, que le dará cuenta diariamente de todos los negocios que ocurrieren.

ART. 73. A este ministro del despacho universal estarán inmediatamente sujetos y le darán parte diario de todos los negocios de su resorte respectivo, un ministro de relaciones exteriores, otro de hacienda, otro de guerra y marina, y otro de instrucción nacional y arreglo temporal del culto.

ART. 74. Todas las órdenes de los agentes del poder ejecutivo llevarán este epígrafe: *Conciudadanos la ley ordena y, en su consecuencia, nos mandamos etc.*

ART. 75. Todo agente del poder ejecutivo cesará de obrar siempre que faltare una ley que lo autorice para ello. Así, la ley será la luz que les alumbre el camino que deben seguir, y el freno saludable que los contendrá para no extraviarse a uno u otro lado de la senda constitucional.

ART. 76. En cada capital de provincia habrá igualmente un administrador, encargado del ejercicio del poder ejecutivo en toda su plenitud, el cual tendrá por su inmediato ayudante un ministro del despacho universal de todos los negocios de la misma provincia, y a éste estarán inmediatamente sujetos un administrador del banco nacional, otro de la renta del tabaco, un recaudador de décimas y contribuciones eclesiásticas, y un administrador de correos.

ART. 77. Asimismo y para el mismo fin, habrá en todos los pueblos cabeceras de distrito un administrador, a quien estarán inmediatamente sujetos un administrador del banco nacional, otro de la renta del tabaco, un recaudador de décimas y contribuciones eclesiásticas, y un administrador de correos.

ART. 78. En fin, en todos los pueblos de cada cantón o sección de distrito habrá también un administrador, a quien estarán inmediatamente sujetos todos los ministros u oficiales, encargados de la administración de los ramos mencionados en los dos artículos precedentes.

CAPÍTULO II
De las palancas del poder ejecutivo o de la tropa nacional

ART. 79. Las palancas de que se valdrán los agentes del poder ejecutivo, para hacer que las leyes tengan su más puntual e irresistible cumplimiento, serán los soldados del ejército que, para el efecto, estará diseminado por todas las poblaciones de la república, de la manera siguiente.

ART. 80. En todos los pueblos de cada cantón o sección de distrito habrá 12 soldados, 3 cabos y un sargento.

ART. 81. En todos los pueblos cabeceras de distrito habrá 16 soldados, 4 cabos, 2 sargentos, un teniente y un edecán.

ART. 82. En las capitales de las provincias de cuarto orden habrá 3 compañías, compuesta cada una de ellas de 50 plazas, a saber, un tambor, 32 soldados de número, 2 supernumerarios, 8 cabos, 4 sargentos, un subteniente, un teniente y un capitán; todas tres mandadas por un sargento mayor, quien tendrá dos edecanes.

ART. 83. En las capitales de las provincias de tercer orden habrá 4 compañías, mandadas por un sargento mayor, quien tendrá igualmente dos edecanes.

ART. 84. En las capitales de las provincias de segundo orden habrá 5 compañías, mandadas por un sargento mayor, quien tendrá 3 edecanes para el servicio.

ART. 85. En las capitales de las provincias de primer orden habrá 6 compañías, mandadas por un sargento mayor, quien tendrá igualmente 13 edecanes para el servicio.

ART. 86. En la capital de la república habrá un regimiento de 18 compañías, mandadas por un sargento mayor, un teniente coronel y un coronel, sujeto a las órdenes de un brigadier que funcionará de mayor de plaza y tendrá 5 edecanes.

ART. 87. Todos estos cuerpos de tropas estarán inmediatamente sujetos a los administradores de las provincias, distritos, y cantones o secciones de distrito, que serán sus comandantes natos.

ART. 88. Toda esta tropa se compondrá de infantería montada, igualmente disciplinada en evolucionar a pie o a caballo, según lo exigiere la naturaleza del servicio en que se la empleare.

ART. 89. El número de los individuos de la tropa mencionada en los artículos precedentes, podrá en cada lugar aumentarse o disminuirse, según lo pidiere la necesidad del servicio público, dividido en las dos clases de *rústico* y *urbano*.

ART. 90. El servicio *urbano* se reducirá a dar el que necesario fuere en todas las oficinas de la administración, y el de las faenas de la policía diurna y noctura en los lugares donde residiere.

ART. 91. Todos los piquetes o compañías, que por su turno no estuvieren empleados en el servicio *urbano*, se ocuparán en el *rústico* reducido a la composición de caminos, plantación de árboles al borde de ellos, construcción de puentes y calzadas, apertura de canales, etcétera.

ART. 92. Esta tropa será la que en caso de guerra volará a la defensa de los puntos amenazados, y a medida que fuere partiendo de los lugares donde estuviere apostada, irá siendo remplazada por soldados de la milicia nacional marcados de antemano para el efecto, y distribuidos en las clases de soldados de primero, segundo, tercero, cuarto remplazo, etc., hasta llegar a desplegarse la fuerza nacional en sus últimos elementos, si el caso lo pidiere.

CAPÍTULO III
De la marina nacional

ART. 93. Para el servicio marítimo de la nación, habrá una escuadra en el atlántico, y otra en el grande océano.

ART. 94. Además de esta escuadra, habrá en todas las provincias marítimas para su defensa, un número competente de lanchas cañoneras, y sobre todo, se multiplicarán todo lo posible los estrimbotes o buques de vapor, para acelerar la comunicación de nuestras poblaciones litorales, tan contrariada por las corrientes y vientos dominantes en el mar del sur.

CAPÍTULO IV
De la nomenclatura de los agentes del poder ejecutivo

ART. 95. Proscribiendo los nombres odiosos o vagos e insignificantes con que hasta aquí han sido marcados los agentes del poder ejecutivo, el primer jefe de la República se intitulará *N. por derecho de aptitud y de escala, Administrador de la República del Anáhuac, y general en jefe de sus fuerzas de mar y tierra.* El ministro del despacho universal se intitulará *N. por derecho de aptitud y de escala, Primer Ayudante del Supremo Jefe de la República, encargado del ministerio del despacho universal.* El de relaciones exteriores, *N. por derecho de aptitud y de escala, Segundo Ayudante del Supremo Jefe de la República, encargado del ministerio de relaciones exteriores*; y así sucesivamente los demás ministros de estado y del despacho de cada ramo de la administración general.

ART. 96. Los gobernadores de provincia se intitularán *N. por derecho de aptitud y de escala, Administrador de la provincia tal, y Comandante General de sus Armas*; el secretario de éste, *N. por derecho de aptitud y de escala, Primer Ayudante del Administrador de esta provincia, encargado del despacho universal de los negocios de ella*; el administrador del banco nacional, *N. por derecho de aptitud y de escala, Segundo Ayudante del Administrador de esta provincia, encargado de la administración del banco nacional*; y así sucesivamente los demás ministros, empleados en cada capital de provincia y encargados del despacho de cada uno de los ramos de su administración.

ART. 97. La nomenclatura especificada en los dos artículos que preceden, servirá de tipo para la que hayan de tomar los demás agentes del poder ejecutivo.

TÍTULO IV
De la instrucción nacional

CAPÍTULO I
De la organización y ramificación de una magistratura particular para la instrucción general de los ciudadanos

ART. 98. La instrucción es la gran necesidad y la gran palanca del hombre; con ella do-

mina los astros; sólo por su medio llega a conocer las relaciones que tienen con sus necesidades todos los objetos que le rodean, y sin ella son para él como si no existiesen. Por otra parte, es tan incompatible con el despotismo, como la luz con las tinieblas. Es, pues, más digna de formar uno de los resortes principales de la máquina política, que el ramo de hacienda u otros cualesquiera de la administración de los estados. Por tanto, habrá en todas las capitales de provincia un *comisario de instrucción*, encargado especialmente de velar sobre el cumplimiento de las leyes concernientes a la educación, enseñanza e ilustración general de los ciudadanos.

ART. 99. En los pueblos donde sólo hubiere una escuela de primeras letras, el profesor de ella llenará los oficios de esta magistratura; pero donde hubiere muchos, será desempeñada por el más antiguo.

ART. 100. Todos estos magistrados llevarán bastón, con borlas y cordones de seda blanca; y el comisario de la capital les añadirá una mezcla de hilo de oro.

CAPÍTULO II
De las escuelas de primera, segunda y tercera educación

ART. 101. Todo mexicano al llegar a la edad de siete años será forzosamente educado a expensas de la patria. Para el efecto, habrá en todas las poblaciones de la República escuelas de primera educación, en que los niños aprenderán a leer, escribir, contar, dibujar, el catecismo de la doctrina cristiana y el de la política en que breve y sucintamente estarán detalladas las obligaciones y derechos del ciudadano, a fin de que ni se dejen quitar los que a cada uno le dio la naturaleza, ni intenten despojar de ellos a los demás.

ART. 102. También aprenderán principios de agricultura práctica, para lo cual habrá en todos los pueblos un pequeño recinto de tierra, en que los niños puedan recibir estas lecciones, reducidas a sembrar simientes de árboles, trasplantarlos, injertarlos, podarlos, etc. De estos planteles se tomarán los árboles para los caminos y paseos, y el producto de su venta se invertirá a beneficio de los mismos niños.

ART. 103. Los niños estarán clasificados en compañías como las de los soldados: harán de oficiales los más instruidos encargados de dar y tomar lección a los demás; y concluidas sus labores de leer, escribir, etc., se ejercitarán en las evoluciones más triviales y sencillas del arte militar.

ART. 104. En las escuelas de niñas, concluidas las labores de leer, escribir, contar y dibujar, se aplicarán a las más corrientes y sencillas de la aguja, como coser y repulgar, y también a cortar vestidos de hombre y de mujer, para que lleven este caudal al matrimonio y encuentren este recurso en la adversidad.

ART. 105. En todos los pueblos cabeceras de distrito se irán estableciendo, según el orden de su población y en razón de su distancia de la capital de su respectiva provincia, escuelas de segunda educación, a medida que se fueren descubriendo fondos para dotarlas. En estas escuelas, un profesor dará lecciones de Química, Mineralogía y Botánica; y otro de Aritmética, Álgebra y Geometría, Física, general y particular, Astronomía y Geografía. El aprendizaje de las evoluciones militares continuará, como en las escuelas de primera educación.

A proporción que vayan desapareciendo las preocupaciones que en el día se oponen a la ilustración del bello sexo, se irán estableciendo escuelas de segunda educación para instrucción de las niñas, en que por lo menos aprendan las ciencias naturales que son de más utilidad en el uso doméstico, como la Química y la Botánica.

ART. 106. En las capitales de provincia habrá escuelas de tercera educación, en las cuales un profesor enseñará la ciencia de la Legislación, según que abraza el estudio del derecho natural, público, patrio y de gentes; otro, la Economía Política; y otro, el arte militar en toda su extensión, según que abraza el ejercicio de las tres armas, y todo lo relativo al arte de Ingenieros.

ART. 107. Todos los jóvenes que hubieren cursado las escuelas de segunda educación, y que aspiraren a las plazas de la magistratura y, en general, a todos los empleos y cargos públicos de la república, cursarán forzosamente estas escuelas.

ART. 108. Las lecciones que dieren los profesores de estas escuelas, del mismo modo que los de las de segunda educación, durarán por la mañana desde las ocho y media hasta las diez, y por la tarde desde las tres y media hasta las cinco, y sólo dejarán de darlas los domingos y fiestas de guardar y los jueves de cada semana, cuando entre ella no ocurriere día festivo. Las escuelas se abrirán desde el 18 de octubre hasta el 15 de agosto del año siguiente.

Las universidades de México, Guadalajara y Guatemala, se convertirán desde luego en escuelas de tercera educación.

ART. 109. La enseñanza de la medicina estará anexa a los hospitales, en los cuales habrá tres profesores, uno de anatomía, otro de cirugía y otro de medicina, y todos tres se ocuparán de mancomún en la curación de los enfermos de los mismos hospitales en que sirvieren.

ART. 110. La enseñanza de la Teología, Cánones, Historia y disciplina de la Iglesia, Lógica, Metafísica, Retórica, Gramática Latina, etc., queda reservada para los seminarios conciliares, establecidos en todas las diócesis, bajo la dirección de los R.R. Arzobispos y Obispos, según lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento. En estos seminarios conciliares se conferirán los grados mayores y menores bajo el mismo pie y forma que se confieren en las universidades.

ART. 111. Los jóvenes que quisieren seguir la noble y distinguida carrera de la marina, después de cursadas las escuelas de segunda educación, pasarán al *Instituto de Marina* en donde aprenderán todos los conocimientos propios para formar un buen oficial de marina. Habrá de estas escuelas o institutos, uno en Xalapa, otro en Chilpancingo y otro en Tepic.

ART. 112. Para instrucción de los jóvenes que se dedicaren a las artes y oficios, se compondrán pequeños tratados de la teoría de cada arte y oficio, y además de este auxilio, harán su aprendizaje al lado de algún maestro, y sin haber servido por lo menos un año en calidad de oficiales; no se les expedirá patente de maestría por el congreso municipal del lugar de su residencia.

CAPÍTULO III
De los exámenes

ART. 113. Ningún joven será obligado a detenerse por más tiempo en el curso de una cátedra, que el que tardare en instruirse bien en el ramo del saber que en ella se profese, de modo de poder acreditarlo en un examen público.

ART. 114. Para estos exámenes, todos los cursantes de una misma facultad habrán elegido de antemano, por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos, tres examinadores por cada diez de los mismos cursantes, jurando escogerlos de entre los de más reputación por su inteligencia en la facultad.

ART. 115. Cuatro de estos examinadores, rolando por sus turnos, harán el examen de cada escolar, que durará el espacio de una hora en las escuelas de segunda educación, y en las de tercera, hora y media. Concluido el examen, se procederá luego, *acto continuo*, a votar por escrutinio secreto la calificación que mereciere el examinado. Esta calificación se hará por todos los cursantes, menos los cuatro examinadores, en la forma siguiente.

El catedrático dirigirá a sus discípulos esta monición: *La patria tiene derecho a ser servida en todos los empleos por los ciudadanos, que sean más aptos para desempeñarlos; y los más aptos tienen derecho a ser preferidos para ellos a los que sean menos aptos. La menor parcialidad con que procediereis en este acto decisivo de la suerte de vuestro condiscípulo, le ocasionará a él y a la patria agravios irreparables, que después no resarcireis con ningún sacrificio. Con la vara que uno mide, con esa misma será medido. Dios os alumbre.*

ART. 116. Después, poniéndose en pie cada uno de los cursantes, según el orden riguroso de sus asientos, comenzando desde el primero hasta el último, se dirigirá hacia la mesa, en la cual se habrá puesto una urna bajo los pies de un crucifijo, y teniendo en la mano el signo de metal en que estuviere grabada la inicial del grado de aprobación que haya de dar al examen, de *supremo, mediano* o *ínfimo*, dirá en alta voz: *Juro calificar la instrucción que mi condiscípulo ha manifestado en su examen y fuera de él, según el dictamen de mi conciencia, deponiendo todo motivo de afecto o interés privado*; y clavando la vista en el crucifijo, dirá igualmente en alta voz: *Dios mío, haz que cuando sea calificado mi examen, lo sea con la misma imparcialidad y justicia, con que yo voy a calificar el del condiscípulo que acaba de examinarse*, y echado el signo de votación en la urna, y dejados sobre la mesa los dos de que no se hubiere valido, con las cifras vueltas hacia abajo, tornará a ocupar su asiento. Del mismo modo irán votando los demás.

ART. 117. Acabada la votación, y echados sobre la mesa los signos de votación contenidos en la urna, los irá leyendo el secretario, proclamando en alta voz el grado de aprobación cifrado en cada uno de ellos, y los entregará sucesivamente al interesado para que se satisfaga de la realidad de la proclamación. El resultado de la calificación se apuntará en un libro que parará original en los archivos de cada escuela, y todos los años se enviará copia autorizada de él al congreso provincial, en donde habrá un libro del registro general de las calificaciones de los exámenes de todos los escolares de la provincia.

ART. 118. Todo joven, que en el último examen sufrido en las escuelas de tercera educación, hubiere obtenido la calificación de supremo o de mediano, se presentará con los certificados de las calificaciones de todos sus exámenes ante el congreso de su provincia pidiendo le declare el derecho de aptitud que tiene adquirido en virtud de la ley fundamental de la República para obtener los cargos públicos.

ART. 119. El diputado provincial, comisionado para hacer esta declaración, usará de la fórmula siguiente: *En vista de los documentos con que habéis acreditado las calificaciones ventajosas de vuestros exámenes, declaro a nombre de la patria, que teneis un derecho de aptitud para obtener los empleos de primer grado en la escala del servicio nacional que fuere más de vuestro*

agrado; os concedo las insignias y grado de teniente militar; os constituyo fiscal del pacto social, e individuo nato de los congresos municipales de los lugares donde residiereis, teniendo en ellos voto consultivo.

CAPÍTULO IV
De las demás fuentes de la ilustración nacional

ART. 120. Se establecerá en la capital central de la República, con el nombre de *Instituto Mexicano*, una junta compuesta de veinte y un sabios, a más del presidente y secretario. El instituto se dividirá en tres secciones, compuesta cada una de siete individuos, incluso su vicepresidente y pro-secretario. La primera se encargará del fomento y promoción de las ciencias naturales; la segunda del de la historia, antigüedades mexicanas, ciencias políticas y morales, y la tercera de activar los progresos de las artes y oficios.

A más de los individuos de número del *Instituto Mexicano*, se dotará sobre un pie ventajoso un número indefinido de sabios nacionales y extranjeros, de los de más nombradía por las obras clásicas que hubieren publicado sobre las materias propias del resorte del *Instituto.*

ART. 121. Se establecerán igualmente tres *Observatorios Astronómicos*, uno en la capital central de la República, y otros dos en las provincias que se juzgaren más a propósito para el efecto. Cada uno se compondrá de un director, tres observadores y un secretario. Todos tres se corresponderán entre sí, y publicarán las observaciones astronómicas y meteorológicas; y el primero se encargará de formar anualmente el almanaque, necesario para el régimen y dirección de todos los habitantes de la República.

ART. 122. En todas las capitales de provincia y pueblos cabeceras de distrito se formarán gabinetes de *Historia Natural*, y de todos los objetos pertenecientes a sus tres reinos, se recogerán tres muestras, una para el gabinete de la capital central, otra para el de la capital de la provincia a que perteneciere el distrito, y otra para el del mismo distrito. Estos gabinetes serán formados por los profesores de las escuelas de segunda educación. Al primer año de formados, se pubblicará el estado en que estuvieren, y en los años siguientes se publicarán cada seis meses los adelantos que se hicieren en ellos; y en cada gabinete habrá un inventario de las piezas de que constare.

ART. 123. Todas las bibliotecas de los congresos municipales estarán abiertas para el público en todos los días del año, por las mañanas desde las ocho hasta las doce, y por las tardes desde las dos hasta ponerse el sol, y serán servidas por un bibliotecario asalariado, donde lo permitieren los fondos de la municipalidad.

ART. 124. En todas las capitales de las provincias de primer orden se establecerán *Academias de pintura, escultura y arquitectura*, compuestas de un director, un secretario, y tres profesores, que darán a los aficiondos lecciones de su arte respectiva, los martes, jueves y sábados de cada semana, desde las nueve hasta las once y media de la mañana.

TÍTULO V
De la potestad eclesiástica

CAPÍTULO I
De la naturaleza de esta potestad bajo sus relaciones civiles

ART. 125. La potestad eclesiástica se considerará en el orden político como una emanación del poder ejecutivo, y además de la jurisdicción espiritual que los ministros del altar reciben de la Iglesia para el cumplimiento de su ministerio, la nación les conferirá toda la porción de jurisdicción temporal que fuere necesaria para el más completo desempeño de este ministerio.

CAPÍTULO II
De las relaciones de la Iglesia Mexicana con la de Roma

ART. 126. Para conservar siempre pura e inmaculada entre nosotros la fe de Jesucristo, la Iglesia Mexicana mantendrá la correspondencia más íntima y estrecha con la santa sede apostólica; se recabará del santo padre que envíe cuanto antes a residir en la capital de la república un Nuncio de su S.S. revestido de las más amplias facultades para expeditar sin demoras los negocios de la Santa Iglesia Mexicana con arreglo al concordato que se ajustará con su S.S.

ART. 127. El Nuncio Apostólico de S.S. será mantenido en la capital de la República a expensas de la nación, bajo el mismo pie de esplendor y decoro que el Arzobispo primado de la Santa Iglesia Mexicana.

ART. 128. La República del Anáhuac enviará igualmente un ministro a residir cerca de la corte de S.S. y esta embajada se considerará como la única de absoluta e indispensable necesidad para la nación.

CAPÍTULO III
De la Jerarquía Eclesiástica

ART. 129. En todas las capitales de provincia se erigirán obispados para la más pronta y cabal asistencia de los ciudadanos en lo espiritual, y se erigirán con preferencia los de la Alta y Baja California, Chihuahua, Nuevo México, San Luis, Acapulco y Querétaro.

ART. 130. En todas las capitales de provincia se erigirán igualmente iglesias catedrales. El cabildo de la capital central se compondrá definitivamente de 15 individuos; los de las provincias de primer orden, de 12; los de las provincias de segundo orden, de 9; y los de las otras, de 7. Además habrá en todos ellos 13 prebendas honorarias o capellanías de coro para los curas y ministros que se imposibilitaren para poder continuar en el ministerio.

ART. 131. En las catedrales ya establecidas no tendrá lugar esta reducción de canonjías, sino hasta después que hubieren fallecido los que actualmente las disfrutan, para que la reducción se verifique sin convulsión ni trastorno de ninguno de los canónigos actuales.

ART. 132. Las canonjías se considerarán como plazas de descanso para el mérito contraído

en la educación de la juventud y en el ministerio de la cura de almas, y se proveerán respectivamente en los más antiguos de una y otra carrera, pues aquél tiene más derecho a descansar, que se ha cansado más sirviendo a la Iglesia y al estado.

ART. 133. Para la mejor y más puntual asistencia de los fieles, se reducirá todo lo posible el número de los curas y se aumenará el de los vicarios o ministros; por consiguiente, en todo pueblo o ciudad, por populosa que sea, no habrá más que un solo párroco, y todos los demás curatos que actualmente se hallan establecidos en ellas, se irán suprimiendo, a medida que fueren vacando, y se convertirán en iglesias auxiliares o ayudas de parroquia, servidas por un número de ministros duplo del que ahora tienen, y además por un ministro primario que dará cuenta diariamente al cura de todo lo que ocurriere en el ramo de su demarcación.

CAPÍTULO IV
Del clero regular

ART. 134. La humanidad está continuamente expuesta a degenerar en lo físico por las enfermedades, y en lo moral por los vicios. La humanidad doliente y la humanidad delincuente reclaman imperiosamente para su beneficio la continuación en la República de dos órdenes religiosos: a favor de la primera se conservará la religión hospitalaria de Belén, a la que se agregarán los religiosos de las demás instituciones análogas, y a favor de la segunda, la de S. Francisco de Asís, en la forma que la profesan los religiosos del colegio de *propaganda fide* de Zacatecas.

ART. 135. Los religiosos hospitalarios no tendrán iglesia pública, sino solamente un oratorio interior para su uso privado.

ART. 136. Además de los individuos que en sus capítulos trienales nombrarán estos religiosos para las plazas de oficio con arreglo a su instituto, elegirán un *protector de huéspedes* que se encargará de recibir por inventario los equipajes de los caminantes enfermos que llegaren a los hospitales, a presencia de los mozos que los condujeren, y de dar parte, por lo menos dos veces a la semana, a las familias de los pacientes del estado en que éstos se hallaren.

ART. 137. El gobierno económico de los hospitales correrá al cargo de una junta, compuesta del prelado y procurador del convento y de los tres médicos asalariados para el servicio del hospital.

ART. 138. Habrá de estos hospitales servidos por *Belemitas* en todas las capitales de provincia, en todas las poblaciones marítimas frecuentadas por los extranjeros, y en algunos de los lugares situados en los caminos públicos que atraviesan el territorio de la República en sus direcciones generales.

ART. 139. Para la reforma y enmienda de los infractores de las leyes, subsistirán en la República todos los conventos actualmente existentes de religiosos franciscanos; pero si en un lugar hubiere muchos de ellos, todos se reducirán a uno solo, y si el número de los religiosos fuere demasiado para que puedan mantenerse cómodamente con las limosnas de una sola casa, se distribuirán por los conventos de otros lugares.

ART. 140. Las casas de conversión, o de reforma de los infractores de las leyes, estarán contiguas a los conventos de estos religiosos, o dentro de los mismos claustros, si lo permitiere la capacidad del edificio.

ART. 141. Ninguno de estos religiosos será presentado para obispo si no hubiere servido a lo menos por espacio de tres años el empleo de *prefecto* de alguna casa de conversión.

ART. 142. Si por la progresión del espíritu del siglo escasearon las entradas de novicios en estas órdenes religiosas, serán remplazados por clérigos y sirvientes asalariados del estado secular.

ART. 143. Los individuos de las demás órdenes o institutos religiosos, continuarán sin novedad en el estado en que se hallan, pero no admitirán novicios, y los que quisieren secularizarse, serán auxiliados por el gobierno que les pondrá en sus manos el buleto de S.S. y les proporcionará rentas y destinos entre los individuos del clero secular.

TÍTULO VI
De la tercera rama de la soberanía

CAPÍTULO I
De la organización y ramificación del poder judicial

ART. 144. El poder judicial será libre en el ejercicio de sus funciones y enteramente independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. El primero no tendrá en él más influencia que la de trazarle las leyes, a que deberá ajustarse en su organización y desarrollo, e interpretar estas mismas leyes en los casos que su aplicación fuere dudosa, y el segundo, la de prestarle el apoyo de su fuerza, cuando lo implorare para hacer efectivas y llevar a cabo sus sentencias.

ART. 145. Para el cumplimiento de las leyes, relativas a la organización y desarrollo del poder judicial, habrá en todas las capitales de provincia y pueblos cabeceras de distrito, *un director del orden judicial, un fiscal y un secretario*, y en los pueblos de cada cantón o sección de distrito sólo habrá un *director*, y este oficio rolará anualmente por turno entre los individuos de cada congreso municipal.

ART. 146. Estando clasificada toda la población de cada lugar en corporaciones político-militares, compuestas de todos los individuos de un mismo estado, profesión o modo de vivir, cada ciudadano será juzgado por individuos de su misma corporación, el minero por mineros, el mercader por mercaderes, el labrador por labradores, el artesano por artesanos, el clérigo por clérigos, etc.; de manera que lo que hasta aquí ha pasado por un fuero particular, o privilegio, formará en lo sucesivo un punto de derecho común.

ART. 147. En todas las poblaciones de la República se congregarán por centurias el día quince de diciembre de cada año todos los ciudadanos de una misma corporación en la casa de su cuartel, y bajo la presidencia del capitán u oficial más antiguo de la misma compañía, que se hallare presente en el lugar, y estando ya reunidos todos los individuos de la compañía, se echarán en cántaro cédulas en que se habrán escrito los nombres de todos ellos, hecho lo cual, un niño sacará una por una doce de estas cédulas, y los sujetos a quienes pertenecieren, serán los electores de los jueces de la compañía para el año siguiente.

ART. 148. Diez días después de hecho el sorteo de los electores, se juntarán éstos en el mismo cuartel de su corporación, presididos por el jefe de la compañía, y a presencia del sargen-

to más antiguo que hará de secretario, para nombrar por escrutinio secreto tres jueces propietarios y dos suplentes, de manera que para cada regimiento de diez y ocho compañías, haya 54 propietarios y 36 suplentes. La elección se hará de la manera siguiente.

Poniéndose en pie cada elector, según el orden de su sorteo, se dirigirá a una mesa en que se habrá colocado la urna de votar; y al echar en ella la cédula en que hubiere escrito el nombre del sujeto a quien eligiere, pronunciará en alta voz esta fórmula: *Juro elegir por juez de nuestra corporación por lo que toca a esta compañía, a uno de los ciudadanos que en mi concepto tiene toda la integridad y talento necesario para desempeñar este encargo.* El que tuviere a su favor la pluralidad de votos, ése será el juez electo, y en caso de empate decidirá la suerte.

ART. 149. Hecha la elección de todos los jueces propietarios y suplentes de cada corporación, se escribirán sus nombres, por el orden de compañías y de su sorteo, en una tabla, en la cual se abrirán dos agujeros al principio y fin del nombre de cada juez, para introducir en ellos dos correas y denotar con la primera, cuando esté sacada hacia fuera, que aquel juez está ausente o enfermó, y con la segunda, que está recusado.

ART. 150. Para que el sorteo de los jueces pueda hacerse fácilmente, cuando hubiere de organizarse algún tribunal para la decisión de un litigio, los números pertenecientes a los jueces se grabarán en cubos de hueso o de madera, que en caso ofrecido se echará en un globo hueco de metal, al cual se le hará rodar nueve veces sobre su eje, y abriendo enseguida la portezuela por donde sólo cabrá uno de dichos cubos, se le dejará caer espontáneamente sobre la mesa en que el globo se hubiere fijado, y marcará con el número de su parte superior al juez sorteado.

ART. 151. Del mismo modo, para que el sorteo de los jurisconsultos, cuando hubieren de ser consultados sobre algún punto de derecho, pueda hacerse con el mismo mecanismos fácil y sencillo que el de los jueces, estarán clasificados numéricamente, para lo cual se echarán en cántaro cédulas que contengan los nombres de todos ellos y el nombre de aquél a quien tocare la primera que se sacare del cántaro por ministerio de un niño estará marcado en la lista con el número 1, aquél a quien perteneciere la segunda, con el número 2, etcétera.

CAPÍTULO II
De la administración de la justicia en lo civil y criminal

ART. 152. Los jueces ordinarios o electos anualmente por las compañías de cada corporación político-militar, se alternarán de tres en tres por semana y según el orden riguroso de su clasificación númerica a administrar la justicia civil de primer resorte, oyendo y sentenciando demandas verbales de poca monta, entendiéndose por tales en materia de deudas, aquéllas cuyo valor no pasare de 30 pesos.

ART. 153. Si alguna de las partes no se conformare con la sentencia dada por el primero de estos jueces de turno, se apelará al segundo, y si la sentencia de éste fuere conforme a la primera, se tendrá la demanda por terminada; pero si fuere contraria o distinta, se apelará al tercero, y en caso necesario, se diferirá la demanda hasta la semana siguiente, para ponerla ante alguno o algunos de los nuevos jueces de turno, hasta obtener dos sentencias conformes, circunstancia que se tendrá por esencialmente necesaria para dar el litigio por concluido.

ART. 154. Estos mismos jueces de turno servirán de árbitros o conciliadores de los litigantes en las desavenencias de cuantía, esforzándose en consorcio de dos hombres buenos, nombrados por cada una de las partes, a persuadirles que entren en una transacción racional y amistosa; y en el caso de no conseguirse, se dará al demandante un documento en que conste no haber habido lugar a la conciliación.

ART. 155. Cuando las partes no se avinieren ante los jueces árbitros, éstos acudirán al director del orden judicial para que se organice el tribunal que ha de sentenciar el litigio.

ART. 156. Antes de principiar el juicio se entregará la lista de los jueces a cada uno de los litigantes para que recusen a los que quisieren, sin dar ninguna razón, siendo árbitro cada uno a recusar de este modo hasta la quinta parte de los jueces; pero si los recusados pasaren de este número, tendrán forzosamente que motivar la recusación, y para ello no se admitirán otras causas que las relaciones conocidas de interés, de amistad y de parentesco de alguna de las partes con el recusado.

ART. 157. Hecha la recusación de los jueces desechados por una y otra parte, se procederá a organizar el tribunal, sorteando tres de los jueces de la tabla, del modo que queda mencionado en el artículo 150.

ART. 158. El juicio será presidido por el director del orden judicial, con asistencia del secretario, que de todo apuntará razón en las actas de los litigios.

ART. 159. El oficio del presidente se reducirá a autorizar el juicio con su presencia y a mantener el orden reclamándolo con toque de campanilla, cuando alguna de las partes lo interrumpiere, y multándolas, en caso necesario, si no obedecieren al toque.

ART. 160. Si los jueces, aun después de oído el parecer del fiscal, tuvieren alguna duda que no pudieren aclarar por sí mismos, se echará mano, para decidirla, de peritos en la materia que ocasionare la duda como, por ejemplo, de jurisconsultos, si la duda rodare sobre algún punto de derecho; de comerciantes, cuando se trataren asuntos mercantiles; de labradores, cuando materias de agricultura, etc. En estos casos, cada litigante nombrará por su parte un perito, y éstos darán su dictamen al tribunal.

ART. 161. Todo ciudadano tendrá derecho para exigir, cuando alguna duda hubiere de aclararse en algún juicio por dictamen de peritos, que el número de éstos sea de tres, y que su elección se haga por sorteo, y en tal caso, oficiará el presidente del tribunal a los jueces de turno de la corporación a que pertenecieren los peritos, para que el sorteo se verifique a presencia de los interesados.

ART. 162. El pronunciamiento de la sentencia de los jueces sobre cualquier litigio se hará de la manera que sigue. Poniéndose en pie sucesivamente cada uno de ellos, según el orden de su sorteo, se dirigirá a una mesa en que se habrá puesto una urna al pie de un crucifijo, y al echar en ella su voto escrito en una cédula, dirá en voz clara y perceptible: *Dios mío, haz que cuando yo me vea en la necesidad de pedir justicia a mis conciudadanos, me la administren con la misma imparcialidad y buena fe con que yo voy a sentenciar esta causa.* Concluida la votación, el secretario sacará las cédulas de la urna, leerá en alta voz el contenido de cada una de ellas, y la entregará al presidente, de cuyas manos pasará a las de los tres jueces, para que todos queden satisfechos de la verdad con que se ha proclamado la votación. Acabado este acto, y retirados los jueces, el presidente hará entrar a las partes y les intimará la sentencia.

ART. 163. Si pronunciada la sentencia por este primer tribunal, alguna de las partes no se aquietare con ella, se organizará segundo tribunal, procediendo en todo de la manera prescrita para la organización del primero, y se instaurará el jucio de la causa ante el nuevo tribunal, con cuya sentencia, en el caso de ser conforme a la del primero, se tendrá el negocio por concluido, pero si fuere contraria o distinta de ella, se procederá a organizar distinto tribunal por tercera o más veces, hasta que haya dos sentencias conformes.

ART. 164. La justicia en lo criminal se administrará bajo la misma forma y por los mismos agentes que la justicia civil, sin más diferencia que serán cinco los jueces sorteados para la organización de los tribunales que la administren. El derecho de la recusación de los jueces en las causas criminales será para el acusador y el reo el mismo, que queda detallado para los litigantes en las causas civiles.

ART. 165. Al fiscal tocará de oficio promover los intereses de toda la asociación contra los delincuentes.

ART. 166. Aunque al fiscal tocará de oficio acusar a los autores de los delitos, todo ciudadano, en virtud del pacto de la asociación, *defendedme y os defenderé*, será árbitro a usar del mismo derecho, aunque no sea personalmente el ofendido, sujetándose a la pena prescrita por las leyes al calumniador, en caso que la acusación resultare calumniosa, y prestando caución de no desamparar el jucio hasta su conclusión.

ART. 167. Si el reo fuere condenado o absuelto unánimemente por los cinco jueces del tribunal organizado para sentenciarle, se tendrá el jucio por concluido y no habrá lugar a la apelación; pero si sólo hubiere sido absuelto o condenado a pluralidad absoluta de votos, no será válida la primera sentencia, si no fuere confirmada por otro tribunal, que se organizará para el efecto.

ART. 168. Cuando un reo hubiere sido absuelto de un delito por dos tribunales a pluralidad absoluta de votos, aunque se libertará de la pena de dar satisfacción a la parte agraviada por no haber resultado probado en juicio el agravio en cuestión, sin embargo, por la violenta sospecha o dudas que habrán inspirado contra su conducta los votos de los jueces que le hubieren condenado, se le obligará a dar a la sociedad nuevas garantías de la bondad de su conducta, renovando su espíritu en una clausura, cuya duración, no pasará de veinte y un días, si sólo hubieren sido dos los jueces que hubieren votado en su contra, ni de treinta, si llegaren a tres los que le hubieren condenado.

CAPÍTULO III

De los derechos comunes a todo ciudadano, para su defensa, en tela de juicio

ART. 169. Todo ciudadano tiene un derecho inconcuso para promover por sí mismo en los tribunales la defensa de sus causas propias, y jamás se le obligará contra el derecho natural a confiarla a manos ajenas, que por activas y fieles que sean, no es de esperar las promuevan con el mismo interés y celo que el dueño de la acción.

ART. 170. Todo ciudadano que no se creyere capaz de exponer por sí mismo sus derechos en defensa de su causa, será árbitro a asistir al juicio, acompañado de otro ciudadano instruido que lo aconseje, alumbre y dirija para la exposición de las pruebas y razones que apoyen su justicia.

ART. 171. Estos directores que las partes llevaren a los juicios, no tomarán jamás la palabra, sino cuando el mismo interesado pidiere permiso para ello al presidente, y estarán sujetos a las mismas multas que las partes, siempre que no guardaren silencio o no obedecieren al toque de campanilla con que el presidente reclamare el orden, interrumpido por alguno de ellos.

ART. 172. Todo ciudadanos en virtud del pacto de la asociación, *defendedme y os defenderé*, tiene un derecho inconcuso a ser protegido por la suma de todas las fuerzas de la asociación, siempre que se viere oprimido en tela de juicio y fuera de ella; pero mientras que no pudiere hacerse efectiva esta concurrencia de todos a la salvación del oprimido, por ignorar la mayoría de los ciudadanos los deberes y obligaciones que les impone el pacto social, y mientras que no se logre encender de nuevo la llama del espíritu público apagada por el despotismo, se encargará de impartir esta protección al que la implorare, el individuo del congreso municipal que representare los derechos de la corporación a que perteneciere el oprimido.

ART. 173. Todo ciudadano, tanto en los juicios criminales como civiles, tiene un derecho inconcuso a que los jueces le apliquen todas las leyes que militaren en su favor, aunque él mismo no las alegue por ignorarlas.

ART. 174. Todo ciudadano, arrastrado a contestar en juicio sobre algún delito de que lo acusare la autoridad pública o algún ciudadano particular, tendrá un derecho indisputable para presenciar las declaraciones de los testigos que depusieren contra él, a disputar y altercar con ellos, a debilitar su testimonio, oponiéndoles el de otros que justifiquen su conducta, y a hacer comparecer por fuerza a los que se resistieren a declarar lo que supieren sobre la materia.

ART. 175. Todo ciudadano tiene un derecho inconcuso a ser bien tratado con todo el decoro correspondiente a la dignidad de hombre y de ciudadano, mientras no se descubriere ser un criminal, y por lo mismo, durante el juicio, solamente será detenido en una pieza cómoda y sana del cuartel de la tropa del servicio público, y el oficial de guardia prevendrá al centinela encargado de su custodia, que se ciña a llenar su oficio de la puerta de la pieza para fuera, sin tomarse jamás la libertad de penetrar adentro. El enjuiciado podrá en esta clausura pasajera recibir visitas de su familia y amigos en las horas oportunas.

CAPÍTULO IV
De las penas para la corrección y prevención de los delitos

ART. 176. Precavidos los delitos en sus fuentes, como lo están por este código, para la corrección de los pocos que asomen en la sociedad, no se establecerán otras penas que las directamente conducentes a indemnizar al agraviado de la injuria recibida, y a reformar el corazón del agresor, obligándole a dar a la sociedad nuevas garantías de la bondad de su conducta.

ART. 177. Del seno de una nación naturalmente inclinada a la virtud, generalmente celebrada en todos los pueblos por la belleza de su carácter moral e índole apacible, y alumbrada con el sol de la religión y de la filosofía, se desterrarán desde luego las cárceles, los grillos, las cadenas y todos los medios de corrección, o por mejor decir de corrupción, inventados contra los delincuentes en los tenebrosos tiempos del paganismo, como infructuosamente crueles, insuficientes para la reforma del corazón del hombre, y propios, cuando más, para formar hipócritas, y para infundir en las víctimas inmoladas por la justicia un secreto rencor contra

la sociedad, de la cual procuran desquitarse, rehaciendo contra ella, siempre que pueden hacerlo impunemente.

ART. 178. La bárbara pena del talión y todas sus reliquias horribles, con que hasta ahora se ha tratado de remedir un mal con otro mal, como si esto fuese conforme a la moralidad, y provechoso a la sociedad y al agraviado, será igualmente proscrita, no solamente por estar marcada con los caracteres de las mencionadas en el artículo anterior sino también por evidentemente injusta, como dirigida a privar al ofendido del inconcuso derecho que le asiste para ser indemnizado en lo posible de todos los males y perjuicios ocasionados por el ofensor.

ART. 179. Siendo una consecuencia que naturalmente mana del mismo contrato de la asociación, el que cuando un solo ciudadano es ofendido, lo es el cuerpo entero de la sociedad, y el ciudadano que atacare a otro en alguno de los derechos que juró respetar y defender al estipular el pacto social, no solamente tendrá que satisfacer completamente a la persona del ofendido, sino también a toda la sociedad, dándole, además, a ésta todas las ulteriores garantías que le exigiere de la bondad de su conducta para lo futuro.

ART. 180. Si la lesión que un ciudadano causare a otro, atacándole en alguno de sus derechos, fuere pasajera, le satisfará en dinero o bienes que lo valgan, todos aquéllos de que le privó durante el periodo de la lesión. Así, en el caso de una herida, por ejemplo, no solamente pagará los gastos de la curación y los de la manutención del paciente durante la enfermedad y convalescencia, sino también todos los salarios que dejó de ganar, por habérsele imposibilitado para el trabajo.

ART. 181. Si la lesión fuese perpetua y duradera, como en el caso de la mutilación de algún miembro del cuerpo necesario para el trabajo, o de un homicidio, y el agresor fuere algún sujeto rico y abonado, exhibirá de un golpe toda la cantidad equivalente a la de los bienes de que ha privado a su víctima, por todo el espacio de tiempo en que ésta hubiera podido seguirlos adquiriendo con su trabajo personal.

ART. 182. Si el agresor fuese solamente de medianas proporciones, y no pudiese exhibir de un golpe dicha cantidad, sin arruinarse a sí y a su familia, será condenado a estarla pagando dentro de las mismas épocas o periodos en que el difunto la hubiera adquirido con su trabajo.

ART. 183. En fin, si el agresor no tuviese algunos bienes con qué resarcir la injuria al ofendido, será condenado a pagarla con la mitad del producto de su trabajo diario.

ART. 184. Los autores de los robos y, en general, los de toda especie de delitos cometidos directamente contra toda la asociación, o contra cualquiera de sus individuos, serán castigados del mismo modo que queda prescrito en los artículos antecedentes, y la cantidad de bienes o dinero con que hubieren de satisfacer a las partes agraviadas, será siempre regulada por peritos.

ART. 185. No siendo otro el fin de la institución de la sociedad, que el impedir todo daño o perjuicio de tercero, haciendo que todo ciudadano reconozca por el término natural de su propia libertad la raya en que sus acciones comienzan a ser perjudiciales a los derechos de los otros, es evidente que si ella indultase en algún caso a los malhechores de las penas que merecen, ella misma destruiría el fin para que ha sido establecida. Así es que no habiendo en la sociedad facultad para indultar o perdonar las penas establecidas contra los infractores del pacto social, estas penas son por su misma naturaleza irremisibles, por lo que respecta a la satisfacción del ofendido.

ART. 186. La sociedad una vez agraviada por alguno de sus individuos no podrá menos que mirarle como peligroso para la pública seguridad, mientras no le dé una nueva garantía de su conducta para lo futuro, y no podrá ser otra esta garantía, que la práctica de los medios eficaces que la religión prescribe para la corrección y enmienda del hombre corrompido. Tiene, pues, la sociedad un derecho indisputable para prolongar el tiempo de la purgación y pruebas del delincuente, hasta no estar enteramente satisfecha de que efectivamente ha sido enmendado y corregido.

CAPÍTULO V
De la policía de las casas de conversión

ART. 187. Luego que un reo hubiere sido sentenciado por el tribunal organizado para juzgarle, será entregado con su sumaria al prefecto de la casa de conversión, quien le señalará desde luego un director que lo hará ocuparse exclusivamente en la práctica de los medios que la religión prescribe para la reforma del corazón humano.

ART. 188. Pasado este tiempo de purgación, el reo se ocupará alternativamente en actos de piedad y religión, y en labores de manos, trabajando en el arte o ejercicio que supiere, y si no tuviere oficio, aprenderá alguno, como también los deberes de cristiano y ciudadano, si los ignorare o los hubiere olvidado.

ART. 189. A fin de evitar toda arbitrariedad en este punto, una ley marcará la distribución de las horas que habrán de emplearse en los actos de religión, en la labor de manos y en el reposo, como también la duración del tiempo que cada delincuente deberá permanecer en la reclusión según la naturaleza y circunstancias de sus delitos, y los casos en que podrá relajarse el rigor de esta ley a favor de los convertendos que dieren pruebas extraordinarias de enmienda.

TÍTULO VII
Del equilibrio social

CAPÍTULO I
Del equilibrio entre los agentes del poder legislativo y ejecutivo

ART. 190. Hasta aquí los agentes de la autoridad, que atendida la naturaleza y origen de su institución, no son ni deben ser, otra cosa, que unos meros mandaderos o criados asalariados* del pueblo para su servicio, se han alzado frecuentemente con la misma autoridad, como si fuesen propietarios de ella, y han considerado al pueblo como a su súbdito y no como a su

* Esta teoría nada tiene de nuevo. En las cortes de Valladolid de 1518 los españoles dijeron a Carlos V: *VA. en verdad,* MERCENARIO *de sus vasallos es, e por esa causa asaz sus súbditos le dan parte de sus frutos e ganancias suyas, etc.*

amo o soberano. La causa del mal ha provenido de la falta de creación** de un poder moderador, que sea bastante ilustrado para conocer en todos casos la verdadera voluntad del pueblo, y bastante fuerte para hacerla respetar de los agentes de la autoridad, manteniéndolos a raya dentro de las órbitas de sus atribuciones respectivas, y sosteniendo entre ellos y la nación el equilibrio debido.

ART. 191. Ni los senados, ni las altas cámaras, ni las segunda salas, ni los consejos de estado, han sido bastantes hasta ahora, para libertar a los pueblos de la disolución de sus representaciones nacionales, ya por las facciones intestinas de las mismas asambleas, ya por las agresiones del poder ejecutivo, ya por los ataques de las facciones militares; así como ni tampoco han bastado para libertar a los primeros jefes de la magistratura de las injusticias de los cuerpos legislativos, en las épocas de conmoción y efervescencia.

ART. 192. Lo que no han podido hacer, ni harán jamás los senados, altas cámaras, y demás instituciones análogas, cuya debilidad e impotencia para resistir a la fuerza, está acreditada por la historia de casi todas las naciones antiguas y modernas, sólo pueden hacerlo bien, y sin cargar de nuevos gravámenes al pueblo, los congresos provinciales. Ellos, por estar diseminados por todas las provincias, están más al alcance que ninguna otra autoridad, de poder conocer cuál es la verdadera voluntad del pueblo, y de poderla manifestar en toda su pureza. Por lo mismo de ser muchos, por pocas fuerzas que cada uno levante en su demarcación, pueden entre todos juntos reunir una masa de fuerza bastante considerable, para quebrantar la protervia del poder insolente que se atreviere a levantar contra los otros o contra lo dispuesto por la voluntad nacional. En fin, por estar muy aislados entre sí, y separados a grandes distancias del congreso central, están más libres del espíritu de acaloramiento y de partido, que tan fácilmente cunde y se propaga de una en otra cámara, en donde el poder de legislar está dividido en dos distintas asambleas.

ART. 193. Cuando la representación nacional fuere disuelta u oprimida por el primer magistrado de la República, o por alguna invasión extranjera, cada uno de los congresos provinciales diputará al individuo más antiguo de su seno para la organización de un nuevo congreso nacional, que se fijará en un punto del territorio de la República diametralmente opuesto al que estuviere ocupado por las fuerzas opresoras.

ART. 194. Al mismo tiempo que cada congreso provincial diputare al individuo más antiguo de su seno para la organización del nuevo congreso, que ha de remplazar al disuelto, se mandará salir a campaña todas las tropas del servicio público de la capital y distritos de la provincia, para que reunidas a las de las otras, comiencen a obrar bajo la dirección de los generales, nombrados de antemano para estos casos.

ART. 195. Atrapado que sea el opresor, si éste fuere el primer jefe de la República, se le pondrá en custodia en el mismo palacio de su morada, y se le juzgará por el nuevo congreso; pero la sentencia de éste, sea sobre destitución, sea sobre destierro, no será válida, si no la confirmaren las dos terceras partes de los congresos provinciales, uno más.

** Véase el *Dictamen Imparcial* inserto al fin del t. II de nuestro *Fanal del Imperio Mexicano*, en donde hemos demostrado hasta la última evidencia, que por falta de este resorte han quedado en falso todas las máquinas políticas, levantadas por los legisladores antiguos y modernos, y que de hecho sólo los ejércitos han tenido el funesto priviliegio de terminar con la fuerza las convulsiones originadas de los debates entre los agentes de los poderes sociales, prohijando las más veces la causa de los tiranos contra la de las naciones, y muy pocas la de éstas contra la de aquéllos.

ART. 196. Las mismas medidas de salvación serán practicadas cuando el congreso nacional, apoyado de alguna facción militar, atacare al supremo jefe de la República, y en este caso, el nuevo congreso nacional, organizado provisionalmente para el restablecimiento del equilibrio y de la paz, remplazará al prevaricador, del cual sólo quedarán en sus puestos los diputados que, después de hecho el proceso de los traidores, resultaren fieles al cumplimiento de las leyes.

CAPÍTULO II
Del correctivo de las demás aberraciones de los mandaderos del pueblo

ART. 197. De las aberraciones del congreso nacional juzgarán siempre los congresos provinciales, teniéndose por válido lo que dispusieren las dos terceras partes de estos, uno más.

ART. 198. De las aberraciones particulares de cada diputado del congreso nacional juzgará privativamente el congreso de la provincia a que perteneciere. Todos los años, en la primera sesión que celebrare cada uno de los congresos provinciales en el mes de enero, se sorteará un individuo de su seno para que haga de fiscal de la conducta del diputado en el discurso del año anterior. El fiscal formará un análisis de esta conducta sobre los datos que de sí arrojare el periódico de las actas y discusiones del congreso nacional. Se imprimirá este análisis, se dirigirán copias a todos los congresos distritales, se les preguntará ¿si en su concepto tiene razón la provincia para estar satisfecha de la conducta de su diputado?, y recibidas las contestaciones, procederán los individuos del congreso a votar lo que les pareciere en pro o en contra.

ART. 199. Si la mitad de los individuos del congreso provincial, uno más, aprobaren la conducta del diputado, éste continuará sin novedad en el congreso nacional; pero si le faltare esta aprobación, bajará al congreso provincial de donde saliere el diputado que hubiere de subir a remplazarlo, y el diputado degradado quedará privado del derecho de ascenso por orden de escala.

ART. 200. El congreso nacional será el tribunal nato de las aberraciones del administrador de la República y de los ministros del despacho, relativas a las infracciones constitucionales; pero de las decisiones del congreso nacional se podrá apelar a las de los provinciales, teniéndose por válido lo que dispusieren las dos terceras partes de éstos, uno más.

ART. 201. Las aberraciones de los administradores de provincia serán juzgadas en los congresos provinciales respectivos a pluralidad absoluta de votos, y de las decisiones de ellos se podrá apelar al congreso nacional que dirimirá la contienda a pluralidad absoluta de votos.

ART. 202. Las aberraciones de los administradores de distrito serán juzgadas por los congresos distritales a pluralidad absoluta de votos, y de sus decisiones se podrá apelar al congreso provincial respectivo, el cual dirimirá la contienda a pluralidad absoluta de votos.

ART. 203. Las aberraciones de los administradores de cantón o sección de distrito serán juzgadas por los congresos municipales a pluralidad absoluta de votos, y de sus decisiones podrá apelarse a la del congreso distrital, y sucesivamente a la del provincial respectivo, quienes dirimirán la contienda a pluralidad absoluta de votos.

CAPÍTULO III
De los consejos de los agentes del poder ejecutivo

ART. 204. El congreso nacional será el consejo nato del primer magistrado de la República. Los congresos provinciales serán los consejos de los administradores de provincia. Los congresos distritales serán los consejos de los administradores de distrito. Los congresos municipales serán los consejos de los administradores de cantón o sección de distrito.

ART. 205. Las decisiones de los congresos inferiores en las consultas que les hicieren los administradores respectivos, estarán sujetas a la revisión de los congresos superiores.

TÍTULO VIII
De la provisión de los empleos y de sus salarios en todas las carreras

CAPÍTULO I
De la suprema Magistratura

ART. 206. El empleo de administrador de la República se proveerá siempre en el ministro más antiguo a quien le tocaré por su derecho de aptitud y de escala.

ART. 207. Como en un gobierno perfectamente republicano la majestad y poderío debe hallarse más bien en el mismo pueblo soberano, que en sus mandaderos, el administrador de la República de los Estados Unidos del Anáhuac sólo tendrá una renta de tres mil pesos cada mes o de treinta y seis mil pesos anuales.

ART. 208. El administrador de la República no permanecerá en la suprema magistratura más tiempo que el de nueve años, al cabo de los cuales se retirará a descansar de su larga carrera, emprendida desde los primeros grados de alguna de las escalas del servicio nacional, con doce mil pesos de renta.

ART. 209. Como la vacante de la suprema magistratura del gobierno proporcionará un ascenso general por derecho de escala a todos los empleados de la carrera del poder ejecutivo, y como todos tendrán, por consiguiente, un grande interés en que se verifique esta vacante, a fin de poner a cubierto contra todo género de insidia los preciosos días de la vida del primer jefe del Estado, en el caso que éste falleciera antes de cumplir los nueve años, se suspenderá el derecho de ascenso por orden de escala para todos los empleados en la carrera del gobierno, y entrarán alternativamente a llenar el interregno o el espacio de tiempo que le hubiere faltado al difunto para ajustar el novenio, o el individuo más antiguo del poder legislativo, o el más antiguo del poder judicial.

ART. 210. Los administradores intercalares de que se trata en el artículo antecedente, tanto durante su mansión en la suprema magistratura, como en su retiro, disfrutarán respectivamente de las mismas rentas que en uno y otro caso quedan asignadas para los administradores de derecho común y ordinario.

CAPÍTULO II
Del derecho de entrada para todos los empleos

ART. 211. El derecho de entrada para todos los empleos de primer grado en cualquiera de las escalas, es la aptitud de los ciudadanos para desempeñarlos, acreditada en sus exámenes públicos sobre las ciencias que disponen para el cumplimiento de la magistratura.

ART. 212. Siempre que en alguna provincia vacare un empleo de primer grado en cualquiera de las escalas, se le conferirá al candidato más antiguo que hubiere obtenido en sus exámenes mayor número de calificaciones respectivamente más ventajosas que las de los otros. La antigüedad se contará desde la fecha del último examen sufrido en las escuelas de tercera educación, constante en la certificación presentada por el interesado a su congreso provincial al tiempo de pedirle la declaración de su derecho de aptitud para obtener empleos de primer grado. En igualdad de circunstancias, preferirá el casado al soltero, y si fueren uno u otro, el mayor al de menor edad, y en el caso de una omnímoda igualdad, se echarán en una urna tantas cédulas cuantos fueren los competidores, escribiéndose en una de ellas el nombre del empleo vacante, para que, movida varias veces la urna, cada uno saque de ella una cédula, y el empleo será obtenido por el que sacare aquélla en que el nombre del empleo estuviere escrito.

ART. 213. Todo candidato será árbitro a renunciar todos los empleos que le tocaren por su derecho de antigüedad siempre que no fueren de su gusto, como también a reasumirlo, cuando quisiere, y en estos casos de renuncia, el derecho de ocupar el empleo vacante, pertenecerá al que se siguiere al renunciante en el orden de antigüedad. Las listas de los candidatos de los empleos de primer grado serán publicadas anualmente por los congresos provinciales para inteligencia anticipada de los interesados y que no haya demoras en la provisión de estos empleos.

ART. 214. En el catálogo universal de todos los empleados o guía de forasteros que se publicará anualmente en la capital de la República a continuación del nombre de cada empleado, se pondrá la fecha de su antigüedad, contada desde el día que comenzó a servir un empleo de primer grado en su escala respectiva.

CAPÍTULO III
De la escala y sueldos de la carrera literaria

ART. 215. Los empleos de primer grado en la escala de la carrera literaria serán las maestrías de las escuelas de primera educación, dotadas con seiscientos pesos. De aquí pasarán los profesores por el orden de su antigüedad a las cátedras de Química, Mineralogía y Botánica, en las escuelas de segunda educación de los pueblos cabeceras de distrito, con setecientos; de aquí, a las cátedras de Matemáticas puras, Física, etc., de las mismas escuelas con ochocientos; de aquí, a las cátedras de Química, Mineralogía y Botánica de las capitales de provincia, con novecientos; de aquí a las cátedras de Matemáticas puras, Física, etc., de las mismas capitales, con mil; de aquí a las cátedras de Legislación en las escuelas de tercera educación, con mil y ciento; de aquí a las de Economía Política, con mil doscientos; de aquí a las del Arte militar y de Ingenieros, con mil trescientos; de aquí a Comisarios de Instrucción, con dos mil y

quinientos; de aquí a Diputados de un congreso de provincia de cuarto orden, con tres mil; de aquí a un congreso de provincia de tercer orden, con tres mil y trescientos; de aquí a un congreso de provincia de segundo orden, con tres mil y seiscientos; de aquí a un congreso de provincia de primer orden, con cuatro mil; de aquí al congreso de la provincia de la Capital central de la República, con cuatro mil y quinientos; de aquí al congreso nacional, con siete mil, y de aquí a ocupar la primera magistratura en algún interregno, si lo hubiere, con treinta y seis mil, y pasado el interregno, a jubilarse con doce mil.

ART. 216. La jubilación ordinaria de los diputados del congreso nacional se les concederá al cumplir los setenta años, y se les dará para su retiro una renta anual de tres mil pesos.

ART. 217. Para los que abrazaren la carrera de la Medicina, los empleos de primer grado serán los de Médicos de los hospitales de las poblaciones situadas en los caminos públicos, dotados con seiscientos pesos; de aquí, por el orden de su antigüedad, pasarán a Médicos y Profesores de Anatomía en los hospitales marítimos de Xalapa, Tepic o Chilpancingo, con ochocientos; de aquí a Médicos de los mismos hospitales y Profesores de Cirugía, con mil; de aquí a Médicos de los mismos hospitales y Profesores de Medicina, con mil y doscientos; de aquí a Médicos de los hospitales de las capitales de provincia y Profesores de Anatomía, con mil y trescientos; de aquí a Médicos de los mismos hospitales y Profesores de Cirugía, con mil y seiscientos; de aquí a Médicos de los mismos hospitales y Profesores de Medicina, con dos mil; de aquí, competirán con los Profesores del Arte Militar y de Ingenieros para subir, según el orden de su antigüedad en su carrera respectiva, a comisarios de instrucción, con dos mil y quinientos, y puestos en este rango, continuarán ascendiendo por los grados ulteriores de la escala, que queda trazada para los ciudadanos que siguieren la carrera literaria.

CAPÍTULO IV
De la escala y sueldos de la carrera política

ART. 218. Los empleos de primer grado en la escala de la carrera política, serán los de administradores de cantón o sección de distrito dotado con seiscientos pesos. De aquí pasarán estos administradores según el orden de su antigüedad a administradores de correos de pueblo cabecera de distrito, con setecientos; de aquí a recaudadores de décimas y contribuciones eclesiásticas, con ochocientos; de aquí a administradores de la renta del tabaco, con novecientos; de aquí a administradores del banco nacional en el mismo distrito, con mil; de aquí, a gobernadores de distrito, con mil doscientos; de aquí a administradores de correos de capital de provincia, con dos mil quinientos; de aquí a recaudadores de décimas y contribuciones eclesiásticas, con tres mil; de aquí a administradores de la renta o factoría de tabaco, con tres mil seiscientos; de aquí a administradores del banco nacional, con cuatro mil; de aquí a primeros ayudantes de un administrador de provincia, con cinco mil; de aquí a gobernadores de un puerto de primer orden, con seis mil; de aquí a administradores de una provincia de cuarto orden, con seis mil y quinientos; de aquí a administradores de una provincia de tercer orden, con siete mil; de aquí a administradores de una provincia de segundo orden, con ocho mil; de aquí a administradores de una provincia de primer orden, con nueve mil; de aquí a administradores de la provincia de la capital central, con diez mil; de aquí a ministros de instruc-

ción nacional y arreglo temporal del culto, con once mil; de aquí a ministros de guerra y marina, con doce mil; de aquí a ministros de hacienda, con trece mil; de aquí a ministros de relaciones exteriores, con catorce mil; de aquí a ministros del despacho universal, con quince mil; de aquí a administradores de la República, con treinta y seis mil, y de aquí pasados nueve años, a jubilarse con doce mil.

ART. 219. Para los que abrazaren la carrera militar, los empleos de primer grado serán las plazas de tenientes de compañía en un pueblo cabecera de distrito, dotadas con seiscientos pesos; de aquí a edecanes del comandante de la tropa de una capital de provincia, con setecientos; de aquí a tenientes de alguna de las compañías de la misma tropa, con ochocientos; de aquí a capitanes, con mil y doscientos; de aquí a sargentos mayores y comandantes de la tropa de alguna capital de provincia, con dos mil; de aquí a tenientes coroneles y comandantes de la tropa de alguna capital de provincia, con dos mil y doscientos; de aquí a sargentos mayores de un regimiento de la guarnición de la capital central, con dos mil cuatrocientos; de aquí a tenientes coroneles del mismo regimiento, con dos mil seiscientos; de aquí a coroneles, con tres mil; de aquí a mayores de plaza y comandantes de la misma guarnición de la capital central, con tres mil y quinientos; de aquí a gobernadores de un puerto de segundo orden, con cuatro mil; de aquí a primeros ayudantes de un administrador de provincia, con cinco mil; de aquí competerían, según el orden de su antigüedad en su carrera respectiva, con los gobernadores de los puertos de primer orden para subir a administradores de una provincia de cuarto orden, con seis mil y quinientos, y llegados a este rango, continuarán ascendiendo por los grados ulteriores de la escala que queda trazada para los ciudadanos de la carrera política.

ART. 220. Para los que abrazaren la carrera de la marina, los empleos de primer grado serán los de guardias marinas al servicio de algún *esttimbote* o buque costanero de vapor, dotados con seiscientos pesos; de aquí pasarán a alféreces de fragata, con ochocientos; de aquí a alfereces de navío, con mil; de aquí a tenientes de fragata, con mil y quinientos; de aquí a tenientes de navío, con dos mil; de aquí a jefes de *esttimbote* con dos mil y quinientos; de aquí a capitanes de fragata, con tres mil; de aquí a capitanes de navío, con cuatro mil; de aquí a jefes de división, con seis mil; de aquí a tenientes generales de marina, con siete mil; de aquí a jefes de escuadra, con ocho mil; de aquí a administradores de una provincia de primer orden, con nueve mil, y llegados a este rango, continuarán ascendiendo por los grados ulteriores de la escala, que queda trazada para la carrera política, compitiendo por el orden de su antigüedad con los empleados en ella.

ART. 221. Los empleos de primer grado en la escala del pilotaje, serán los de aprendices o pilotines de *esttimbote*, con seiscientos pesos; de aquí pasarán a oficiales de piloto, con ochocientos; de aquí a pilotos en jefe de *esttimbote*, con mil y doscientos; de aquí a pilotos de fragata, con dos mil; de aquí a pilotos de navío, con dos mil y quinientos, y de aquí a capitanes de fragata, con tres mil. Llegados a este grado, ascenderán por los ulteriores de la escala trazada en el artículo anterior, compitiendo con los demás oficiales de marina, según su respectiva antigüedad.

ART. 222. A los pilotos y oficiales de marina, empleados en los puertos de las costas del mar del sur, se les contará *triple* para sus ascensos el tiempo que gastaren en los viajes marítimos a las islas y continente de Asia, y *duplo* el que emplearen en los viajes a la América meridional.

A los empleados en los puertos de las costas del Atlántico, se les contará *duplo* el que invirtieren en los viajes a la Europa.

CAPÍTULO V
De la escala y sueldos de la carrera eclesiástica

ART. 223. Los empleos de primer grado en la escala de la carrera eclesiástica, serán los de ministros o ayudantes de cura, dotados con seiscientos pesos; de aquí pasarán según el orden de su antigüedad a ministros primarios de una ayuda de parroquia, con ochocientos; de aquí a ministros primarios de una ayuda de parroquia de un curato de la capital de la provincia, con mil y doscientos; de aquí sin más requisito que el del examen o sínodo, a curas de una parroquia de tercera clase, con dos mil; de aquí a una parroquia de segunda clase, con tres mil; de aquí, a una parroquia de primera clase, con cuatro mil; de aquí a una canonjía de las catedrales subalternas, con tres mil; de aquí a una canonjía de las catedrales metropolitanas, con tres mil y quinientos; de aquí a una de la iglesia primada de la capital de la República, con cuatro mil y quinientos; de aquí a una mitra de provincia de cuarto orden, con nueve mil; de aquí a una mitra de provincia de tercer orden, con diez mil; de aquí a una mitra de provincia de segundo orden, con once mil; de aquí a una mitra de provincia de primer orden, con doce mil, y de aquí al arzobispado de la santa iglesia primada de la capital de la República, con quince mil.

A cada tres mitras vacantes que se proveyeren de eclesiásticos seculares, se proveerá una en individuos del clero regular, a quienes se les contará la antigüedad desde el día en que profesaron en su religión, y será preferido el que hubiere servido por más tiempo alguna prefectura de las casas de conversión y oficios subalternos, anexos a ella, como los de director, capellán y mayordomo.

Las capellanías de coro o prebendas honorarias se dotarán con mil y doscientos pesos, y cada vez que vacare alguna, se proveerá en el cura más antiguo de los que no quisieren o no pudieren recorrer todos los grados de la escala, y a falta de curas, en el ministro o vicario más antiguo.

CAPÍTULO VI
De la escala y sueldos de los agentes del poder judicial

ART. 224. Los empleos de primer grado en la escala de esta carrera serán los de secretarios de un directorio del orden judicial en un pueblo cabecera de distrito, dotados con seiscientos pesos; de aquí pasarán a fiscales en el mismo directorio, con ochocientos; de aquí a directores, con mil; de aquí a secretarios de un directorio de capital de provincia de cuarto orden, con mil doscientos y cincuenta; de aquí a fiscales en el mismo directorio, con mil y quinientos; de aquí a directores con dos mil; de aquí a secretarios de un directorio de capital de provincia de tercer orden, con dos mil doscientos y cincuenta; de aquí a fiscales en el mismo directorio, con dos mil y quinientos; de aquí a directores, con tres mil; de aquí a secretarios de un directorio,

de capital de provincia de segundo orden, con tres mil doscientos y cincuenta; de aquí a fiscales en el mismo directorio, con tres mil y quinientos; de aquí a directores, con cuatro mil; de aquí a secretarios de un directorio de capital de provincia de primer orden, con cuatro mil doscientos y cincuenta; de aquí a fiscales en el mismo directorio, con cuatromil y quinientos; de aquí a directores, con cinco mil; de aquí a secretarios del directorio de la capital central de la República, con cinco mil y quinientos; de aquí a fiscales en el mismo directorio, con seis mil; de aquí a directores, con siete mil, y de aquí si hubiere algún interregno en la suprema magistratura a ocuparlo en el caso prevenido por la ley, con treinta y seis mil, y pasado el interregno, a jubilarse, con doce mil.

CAPÍTULO VII
De la escala de la milicia nacional

ART. 225. Cuando en una centuria o compañía de cien hombres no hubiere sujetos que hayan cursado las escuelas de tercera educación, los grados de teniente, del mismo modo que los de subteniente, y las plazas de sargento y cabos se proveerán por los mismos soldados de la compañía, que harán las elecciones por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos. Pero si hubiere algún sujeto que haya cursado dichas escuelas, él será el teniente de la compañía, y en caso de haber muchos, se observará lo prescrito en el artículo 212, del capítulo II de este título. Estos tenientes, según el orden de su antigüedad pasarán a capitanes; de aquí a sargentos mayores; de aquí a tenientes coroneles; de aquí a coroneles; de aquí, a brigadieres, mas para obtener este grado han de haber cursado forzosamente las escuelas de tercera educación; de aquí a mariscales de campo; de aquí a tenientes generales, y de aquí a capitanes generales.

ART. 226. Cada cien hombres formarán una centuria; seis de éstas, un batallón; tres de éstos, un regimiento; tres de éstos, una brigada; tres de éstas, una mariscada; tres de éstas, una falange; tres de éstas, un ejército, al cual corresponderá un capitán general, 3 tenientes generales, 9 mariscales de campo, 27 brigadieres, 81 coroneles con otro tanto número de tenientes coroneles y sargentos mayores, 1 458 capitanes con otro número igual de tenientes y alféreces, y por todo 145 800 hombres, inclusos jefes oficiales y soldados.

CAPÍTULO VIII
De la elección de los representantes para la organización de los congresos distritales y municipales

ART. 227. Los jueces propietarios, nombrados por los electores de las compañías de que constare cada corporación, serán los electores del ciudadano que ha de representar los derechos de la corporación en los congresos distritales y municipales. La elección se hará todos los años en el último día del mes de diciembre, a pluralidad absoluta de votos, y pronunciando cada elector en alta voz la fórmula siguiente, al echar en la urna de votación la cédula en que hubiere escrito el nombre del ciudadano a quien votare: *Juro nombrar para representante de los*

derechos de nuestra corporación en el congreso distrital o municipal de este lugar al sujeto que, en mi concepto, tiene bastante ilustración para conocer estos derechos, y toda la firmeza de carácter necesaria para reclamar su observancia, en caso de violación. Si los votos fueren empatados, será preferido el mayor al de menor de edad, o decidirá la suerte.

CAPÍTULO IX
De la duración y destitución de los empleados en todas las carreras y destinos

ART. 228. Todo empleado permanecerá en su empleo, mientras lo desempeñare a gusto de sus comitentes, y será removido siempre que lo desempeñare a disgusto de ellos.

ART. 229. Se juzgará que un empleado desempeña su empleo a disgusto de sus comitentes, siempre que cometiere alguna infracción constitucional, y a la primera vez que tal hiciere, se le privará de la parte de su renta que le tocare ganar en un día, a la segunda, de la que le tocare ganar en una semana, y a la tercera será destituido de su empleo, teniendo además que subsanar en los tres casos los perjuicios de tercero a que se hubiere dado lugar con la infracción.

ART. 230. Todo empleado, destituido de su empleo por la primera vez, conservará su derecho de ascender por escala al empleo cuya vacante le tocare ocupar por su antigüedad en su carrera; pero jamás se acomodará en el mismo lugar en que hubiere sido destituido, y si en el nuevo empleo volviere a cometer alguna infracción constitucional, será destituido para siempre.

Fin del Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac.

APUNTES
Sobre un tratado de confederación general entre todas las Repúblicas Americanas

ARTÍCULO 1. La República de los Estados Unidos del norte de esta América nombrará tres diputados: tres, la de los Estados Unidos del Anáhuac; tres la de Colombia; tres la de Buenos Aires; tres la de Chile; tres la del Alto Perú; tres la de la Isla de Santo Domingo, y tres las de cada una de las demás Islas y Regiones del Continente que se fueren independiendo de los déspotas de Europa que las dominan.

ART. 2. La República de los Estados Unidos del norte contribuirá con seis buques de guerra; la de los Estados Unidos del Anáhuac con seis; la de Colombia con tres; la de Buenos Aires con tres; la de Chile con tres; la del Alto Perú con tres; la de la Isla de Santo Domingo con uno, y así a proporción las demás que se fueren erigiendo en lo sucesivo.

ART. 3. La República de los Estados Unidos del norte concurrirá con tres mil hombres de tropas de desembarco; con otros tantos la del Anáhuac, y con mil y quinientos cada una de las cuatro establecidas en la América Meridional; la de Haití con ciento y cincuenta, etcétera.

ART. 4. Todas estas fuerzas serán comandadas en el primer trienio por un General de los Estados Unidos del norte; en el segundo por uno de los del Anáhuac; en el tercero por uno de Colombia, etc. Pero en la premura de algunas circunstancias extraordinarias se suspenderá la alternativa y el congreso de los anfictiones americanos será árbitro a nombrar al General de más reputación que, en su concepto, fuere más a propósito para dar una buena dirección a las fuerzas federales.

ART. 5. El objeto de esta confederación será, *primero*: consolidar y completar la reconquista de la libertad del nuevo mundo, lanzando de sus islas y continente a los déspotas europeos que aún dominan en algunos puntos. *Segundo*: terminar amistosamente las diferencias que se suscitaren entre las potencias americanas. *Tercero*: facilitar la libertad y emigración de todos los hombres buenos que gimen bajo el imperio de los tiranos del antiguo mundo, recommendándolos a las Repúblicas que tuvieren más sobrante de tierras, para que los acomoden en ellas.

ART. 6. El congreso general de los diputados de todas las Repúblicas fijará por ahora su residencia en el paraje más oportuno de la Florida Oriental, que designare el congreso nacional de los Estados Unidos del norte, y la primera expedición que emprenderá será la de dar la libertad a la isla de Cuba, para fijar en La Habana el congreso anfictional, y dirigir desde allí la fuerza federal hacia todos los puntos ocupados o amenazados por los enemigos conjurados contra la especie humana.

Fin de los apuntes sobre un tratado de confederación, etcétera.

APÉNDICE

SOBRE EL MODO DE PONER EN PRÁCTICA ESTE CÓDIGO, MEJORANDO LA SUERTE DE TODOS Y DE CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS QUE AHORA VIVEN SIN CONVULSIÓN NI TRASTORNO DE NINGUNO, Y DE MANERA QUE UNA VEZ ORGANIZADA LA MÁQUINA POLÍTICA SIGA MOVIÉNDOSE ETERNAMENTE POR SÍ SOLA, SIN MÁS ACCIÓN QUE LA IRRESISTIBLE DEL RESORTE DE LA LEY Y SIN PERMITIR LA MÁS LIGERA INTERVENCIÓN A LA ARBITRARIEDAD O DESPOTISMO.

PARÁGRAFO I

Modo de organizar por la primera vez los poderes legislativo y judicial, mejorando a todos los abogados y literatos de profesión, y afianzando para lo futuro la multiplicación y perfección de los ilustrados ciudadanos que siguieren la noble carrera de los estudios

1. El sentido común dicta que cuando se trata de asuntos de arquitectura, se debe ocurrir precisamente a los arquitectos; cuando de comercio, a comerciantes; cuando de labranza, a labradores; etc. *Tractent Fabrilia fabri. Navita de nautis, de tauris narret arator.* Luego cuando se trata de legislación se debe echar mano de legistas. La conducta observada por los pueblos modernos de componer sus congresos legislativos de sujetos ineptos para legislar o no instruidos en la ciencia de hacer las leyes, es tan insensata, contradictoria y absurda, como lo sería evidentemente la de un hombre que tratando de aliviar a un enfermo desahuciado, en vez de una junta de médicos, formase una junta de sastres, mercaderes, poetas, oradores, teólogos casuistas, etcétera.

2. El pueblo jamás elige más libremente que cuando elige por medio de una ley o de una regla que lo ponga a cubierto de las aberraciones del capricho, del soborno y de todas las maniobras de la intriga. En este particular, todos los legisladores se hallan en un gran descubierto, porque el negocio importantísimo de las elecciones de los diputados para el cuerpo legislativo, de cuyo acierto pende el buen éxito de las revoluciones y la consistencia del edificio social, lo han abandonado enteramente al libre albedrío del pueblo, sin ministrarle la más ligera regla que le sirva de luz para este acierto.

3. La base, menos expuesta a inconvenientes, que desde luego podemos adoptar para organizar por la primera vez el poder legislativo, evitando todo género de arbitrariedad sin dar a nadie motivo racional de queja o disgusto y sin que haya lugar a preferencias caprichosas e injustas, es la de componerlo de abogados o legistas de profesión, acomodándolos a todos según el orden de su antigüedad, contada desde el día de la fecha en que se recibieron de abogados. Para el efecto, se sacará de los registros de las audiencias de México, Guadalajara y Guatemala, una lista general de todos ellos, sin distinción de seculares, eclesiásticos o togados. El acomodar a éstos, es de primera necesidad porque abolidas las audiencias por este código, sería

una injusticia dejar sin pan a los empleados en ellas, y este paso, sobre evidentemente injusto, sería además impolítico, pues los tornaría en enemigos forzosos de un sistema que los privase del reposo, honores y susbsistencia que disfrutan. Por el contrario, trasladados al cuerpo legislativo con una renta igual o superior a la que ahora tienen, resultarán notablemente mejorados, quedando puestos en orden de escala para subir hasta el congreso nacional con siete mil pesos de sueldo, y de allí, si les tocare la suerte, a llenar un interregno de la primera magistratura de la República con treinta y seis mil pesos anuales, y concluido éste, a jubilarse con una renta de doce mil.

4. Para el completo desempeño del poder legislativo no bastan solamente los jurisconsultos de profesión, sino que se necesitan además hombres instruidos en todas las ciencias, supuesto que el cuerpo legislativo tiene que legislar sobre toda clase de materias. No sucede así con el poder judicial, que solamente puede estar bien desempeñado por peritos en el código civil y criminal. Necesitándose pues, noventa abogados para organizar los directorios del orden judicial en las capitales de las treinta provincias de que actualmente se compone la República, y más de doscientos para proveer en ellos siquiera las plazas de fiscales en los directorios de los distritos más principales y poblados de las provincias, sólo se puede contar con el resto para la organización del poder legislativo. Así es que para organizar éste, después de formada la lista general de todos los abogados nacionales según el orden de su antigüedad, en los términos que quedan referidos, se formará también otra general de todos los literatos de profesión, condecorados con grados mayores en las facultades de filosofía, medicina y teología, y si como es muy probable, el número de todos éstos no bastare a cubrir el déficit de los jurisconsultos para la organización de los congresos legislativos, se echará mano de otros literatos, que aunque solamente graduados de bachilleres en filosofía, hayan estudiado otra facultad mayor, y serán preferidos los que a estas circunstancias añadieren la de poseer algunos de los sabios idiomas en que están escritas la mayor parte de las obras clásicas del derecho natural, público y de gentes, como son el inglés, francés, italiano, etc. Tanto a estos últimos literatos como a los condecorados con grado mayor se les contará la antigüedad desde el día en que recibieron el grado menor en filosofía.

5. Hecha la lista de todos los abogados, y descontando de ella el número de los que habrán de emplearse para la organización del poder judicial, se sabrá a punto fijo la proporción en que el resto de ellos habrá de concurrir para la organización del congreso nacional y provinciales con los demás literatos y el número preciso de éstos que se habrá menester para suplir el déficit de aquéllos. Reducidas pues, a una sola todas las listas de los jurisconsultos de profesión y de los demás literatos, se procederá a organizar los poderes legislativo y judicial de la manera siguiente.

6. De los treinta individuos más antiguos de la lista general se compondrá el congreso nacional, a razón de un diputado por cada provincia, y a cada uno de ellos se le dotará con siete mil pesos anuales.

7. A los tres abogados que se siguieren en antigüedad a los empleados de la misma clase en el congreso nacional, se les destinará en el directorio del orden judicial de la capital central de la República, proveyéndose en el más antiguo de ellos la plaza de director, con siete mil pesos; en el segundo, la de fiscal, son seis mil, y en el tercero, la de secretario, con cinco mil.

8. De los quince de la lista general, que siguieren en antigüedad a los empleados en el congreso nacional, se compondrá el congreso provincial de la capital central de la República, dotando a cada uno de ellos con cuatro mil y quinientos pesos.

9. De los que se siguieren en antigüedad a los empleados en el congreso provincial de la capital central de la República, se compondrán los congresos de las provincias de primer orden, a razón de doce individuos cada uno, y éstos diputados se dotarán de cuatro mil pesos.

10. A los abogados que se siguieren en antigüedad a los empleados de su clase en los congresos de las provincias de primer orden, se les acomodará de director del orden judicial en las capitales de las mismas provincias con cinco mil y quinientos pesos; a los que se siguieren a éstos, de fiscales, con cuatro mil y quinientos, y a los que se siguieren a éstos, de secretarios, con cuatro mil doscientos y cincuenta.

11. De los individuos de la lista general que se siguieren en antigüedad a los empleados en los congresos de las provincias de primer orden, se compondrán los congresos de las de segundo orden, a razón de nueve representantes cada uno, y se les dotará con tres mil y seiscientos pesos.

12. A los abogados que se siguieren en antigüedad a los empleados de su clase en los congresos de las provincias de segundo orden, se les acomodará de directores del orden judicial en las capitales de las mismas provincias, con cuatro mil pesos; a los que se siguieren a éstos, de fiscales, con tres mil y quinientos, y a los que se siguieren a éstos, de secretarios, con tres mil doscientos cincuenta.

13. De los individuos de la lista general que se siguieren en antigüedad a los empleados en los congresos de las provincias de segundo orden, se compondrán los congresos de las de tercer orden, a razón de siete representantes cada uno, y se les dotará con tres mil y trescientos pesos.

14. A los abogados que se siguieren en antigüedad a los empleados de su clase en los congresos de las provincias de tercer orden, se les acomodará de directores del orden judicial en las capitales de las mismas provincias, con tres mil pesos; a los que se siguieren a éstos, de fiscales, con dos mil y quinientos, y a los que se siguieren a éstos, de secretarios, con dos mil doscientos y cincuenta.

15. De los individuos de la lista general que se siguieren en antigüedad a los empleados en los congresos de las provincias de tercer orden, se compondrán los congresos de las de cuarto orden, a razón de cinco representantes cada uno, y se les dotará con tres mil pesos.

16. A los abogados que se siguieren en antigüedad a los empleados de su clase en los congresos de las provincias de cuarto orden, se les acomodará de directores del orden judicial en las capitales de las mismas provincias, con dos mil pesos; a los que se siguieren a éstos, de fiscales, con mil y quinientos, y a los que se siguierena éstos, de secretarios, con mil doscientos y cincuenta.

17. A los abogados jóvenes, que se siguieren en antigüedad a los empleados de su clase en los directorios del orden judicial en las capitales de las provincias de cuarto orden, se les acomodará de directores en los pueblos cabeceras de distrito, con mil pesos; a los que se siguieren a éstos, de fiscales, con ochocientos, y a los que se siguieren a éstos, de secretarios, con seiscientos.

18. A los individuos de la lista general, que se siguieren en antigüedad a los empleados

en los congresos de las provincias de cuarto orden, se les acomodará con dos mil y quinientos pesos en comisarías de instrucción, que son unas nuevas magistraturas, creadas en este código, para velar sobre el cumplimiento de las leyes relativas a la educación y enseñanza de la juventud y a la ilustración nacional, y que son el escalón inmediato que se sube para entrar en la carrera del poder legislativo. A los que se siguieren en antigüedad a los empleados en las comisarías de instrucción, se les acomodará en las cátedras del Arte Militar y de Ingenieros de las escuelas de tercera educación de las capitales de provincia, con mil y trescientos pesos; a los que se siguieren a éstos, en las cátedras de Economía Política de las mismas escuelas, con mil y doscientos; a los que se siguieren a éstos, en las cátedras de Legislación de las mismas escuelas, con mil y ciento; a los que se siguieren a éstos, en las cátedras de Matemáticas Puras, Física, Astronomía y Geografía, de las escuelas de segunda educación de las mismas capitales de provincia, con mil pesos; a los que se siguieren a éstos, en las cátedras de Química, Mineralogía y Botánica, de las mismas escuelas, con novecientos; a los que se siguieren a éstos, en las cátedras de Matemáticas Puras, Física, etc., de las escuelas de segunda educación de los pueblos cabeceras de distrito, con ochocientos; a los que se siguieren a éstos, en las cátedras de Química, Mineralogía, etc., de las mismas escuelas, con setecientos, y a los que se siguieren a éstos, en las maestrías de las escuelas de primera educación con seiscientos. A falta de sujetos de carrera literaria, se proveerán las maestrías de estas últimas escuelas en ciudadanos honrados que sepan leer, escribir y contar; pero estos maestros iliteratos, ni lograrán el derecho de ascenso por orden de escala, ni disfrutarán una renta que pase de quinientos pesos, así como ni tampoco, una que baje de trescientos; la regulación se hará por los congresos municipales, según la población del lugar, y el trabajo que hubieren de impender estos maestros en la educación y enseñanza de los niños.

19. A los médicos, comprendidos en la lista general de los literatos, y que se siguieren en antigüedad a los empleados de su profesión en los congresos legislativos y en las comisarías de instrucción, se les acomodará de médicos y profesores de medicina en los hospitales de las capitales de provincia, con dos mil pesos; a los que se siguieren a éstos, de médicos y profesores de Cirugía, con mil y seiscientos; a los que se siguieren a éstos, de médicos y profesores de Anatomía, con mil y trescientos; a los que se siguieren a éstos, de médicos y profesores de Medicina en los hospitales marítimos de Xalapa, Tepic y Chilpancingo, con mil y doscientos; a los que se siguieren a éstos, de médicos y profesores de Cirugía en los mismos hospitales, con mil; a los que se siguieren a éstos, de médicos y profesores de Anatomía en los mismos hospitales, con ochocientos, y a los que se siguieren a éstos, de médicos de los hospitales de tercer orden o de las poblaciones situadas en los caminos públicos, con seiscientos.*

20. Americanos: organizar el poder legislativo de la manera que se acaba de proponeros, es tener un poder legislativo compuesto de sus verdaderos elementos y es confiar el ejercicio del primero, más noble y difícil de los tres poderes sociales, a jurisconsultos y literatos de profesión, capaces de desempeñarlo, lo cual jamás podrá esperarse de unos procuradores bárba-

* Pero dirá alguno ¿hay fondos en la nación para dar a los empleados los buenos sueldos que les asigna este código?, respondo que sí, y esto puede hacerse fácilmente, no solamente sin aumentar en un solo maravedí las cargas que hoy pesan sobre el pueblo, sino disminuyéndolas notablemente, y aboliendo del todo las alcabalas de lo interior, como se demostrará en el apéndice tercero.

ros e ineptos que jamás han saludado la carrera de los estudios, o que la han abandonado enteramente para entregarse a profesiones incompatibles con aquel espíritu de cálculo y de combinaciones profundas, sin el cual no será posible que se logre jamás una obra maestra de legislación nacional.

21. Americanos: una vez organizada la máquina política del modo que se acaba de proponeros, ya no volverá a intervenir jamás en su reposición y conservación la arbitraria y caprichosa mano del hombre, siempre sujeta por la debilidad de su condición a las más dolorosas aberraciones. La rotación perenne, inalterable y constante de la máquina, fundada sobre la firme roca de los derechos de nuestra especie, y girando sobre los quicios naturales, eternos e inconmovibles de la conveniencia univeral, será solamente la obra del tiempo y del brazo irresistible y poderoso de la ley. ¡Qué sistema tan bello de orden y de justicia!, ¡cuán propio, para restablecer al linaje humano sobre su antigua dignidad y derechos primitivos!, ¡qué eficaz para hacer germinar y multiplicarse al infinito el patriotismo, la virtud, el mérito y las luces en todas las carreras, y para infundir en los corazones de los ciudadanos desde la más tierna infancia aquella noble fiereza e independencia propias de las almas republicanas! Si en la generación presente hubiere bastante amor de la justicia, para adoptar luego este código, adiós del imperio del oro, adiós del imperio de las faldas, adiós del imperio de las recomendaciones, adiós del imperio de la intriga y de todos los resortes oscuros, sórdidos y viles que hasta aquí habéis juzgado en la distribución de los empleos, os veréis enteramente aniquilados y acabados perentoriamente con vosotros los estragos y desolaciones que siempre habéis ocasionado, y seguis ocasionando todavía en la sociedad con vuestro influjo empozoñado.

22. Americanos: organizar el poder legislativo de la manera que se acaba de proponeros, es el único medio de dar al sistema representativo aquella firmeza, solidez, estabilidad, reposo y consistencia que no han acertado a darle los políticos modernos, los cuales parece que han creído que sólo se puede hacer feliz a la sociedad, manteniéndola en un estado de perpetua convulsión. Mudar frecuentemente los individuos del cuerpo legislativo, es el medio seguro de no tener jamás políticos profundos, ni estadistas consumados. En esta continua renovación de diputados que se suceden unos a otros, cuando los que salen apenas han comenzado a medio imponerse en el grave negocio que traen entre manos, ¡cuánto tiempo perdido!, ¡qué repetición inútil de aprendizajes y de noviciados!, ¡qué sempiterna bisoñería!, ¡qué difícil, o por mejor decir, qué imposible, que entre tanta variación de agentes resplandezca el espíritu de unidad, de coherencia y de armonía, en el todo y en las partes del código general! El docto Marina que se propone esta objeción, dice que nada prueba, porque prueba mucho, pues de ella se seguiría que los diputados hubiesen de ser perpetuos, vitalicios y duraderos. Pero yo, con permiso de tan sabio maestro, digo que no es ésa la consecuencia que salta de las reflexiones indicadas; sino solamente que los mandaderos del pueblo deben permanecer en su ministerio mientras que lo llenen a satisfacción de sus comitentes, y que deben removerse siempre que lo desempeñen a disgusto de ellos. La duración de los empleados no es una cosa absoluta, para que se pueda encerrar dentro de periodos fijos y determinados, sean cortos o largos; sino una cosa esencialmente hipotética, condicional y relativa, pues depende del modo con que cada uno se maneje en el empleo. El único correctivo natural de las aberraciones de los mandaderos de la asociación, es el derecho expedito de removerlos, que siempre debe reservarse el pueblo soberano, bastando

para que el uso de este correctivo sea siempre provechoso a la sociedad y jamás perjudicial, el que nunca se le despliegue arbitrariamente, sino siempre por medio de leyes terminantes y precisas que fijen de antemano los casos de destitución o suspensión, como lo hemos hecho en nuestro código.

PARÁGRAFO II

Modo de organizar por la primera vez el poder ejecutivo con arreglo a este código, mejorando a todos los jefes, oficiales y soldados del ejército, y a todos los empleados en la administración

23. Se sacará de los registros del ministerio de guerra una lista general de todos los jefes y oficiales del ejército, tanto de los que estén en actual servicio, como de todos los que hayan sido retirados por el gobierno español desde que principió la guerra de la independencia, hasta la fecha, y a todos se les irá acomodando según el orden de su antigüedad, contada desde el día en que comenzaron a servir en la carrera. En el jefe más antiguo de la lista se proveerá la plaza de administrador de la República, con treinta y seis mil pesos de sueldo; en el inmediato a éste, la de ministro del despacho universal, con quince mil; en el inmediato a éste, la de ministro de relaciones exteriores, con catorce mil; en el inmediato a éste, la de ministro de hacienda, con trece mil; en el inmediato a éste, la de ministro de guerra y marina, con doce mil, y en el inmediato a éste, la de ministro de instrucción nacional y arreglo temporal del culto, con once mil.

24. En el jefe que se siguiere en antigüedad a los seis expresados en el párrafo anterior, se proveerá la plaza de administrador de la provincia de la capital central de la República, con diez mil pesos; los inmediatos a éste, se acomodarán de administradores de las provincias de primer orden, con nueve mil; los inmediatos a éstos, de administradores de las provincias de segundo orden, con ocho mil; los inmediatos a éstos, de administradores de las provincias de tercer orden, con siete mil; los inmediatos a éstos, de administradores de las provincias de cuarto orden, con seis mil y quinientos; los inmediatos a éstos, de gobernador de los puertos de primer orden, con seis mil; los inmediatos a éstos, de ayudantes generales de los administradores de las provincias, con cinco mil, y los inmediatos a éstos, de gobernadores de los puertos de segundo orden con cuatro mil; el que se siguiere a éstos en antigüedad, de mayor de plaza o comandante de las tropas de la guarnición de la capital central de la República, con tres mil y quinientos; el inmediato a éste, de coronel del regimiento de la misma guarnición, con tres mil; el inmediato a éste, de teniente coronel del mismo regimiento, con dos mil seiscientos; el inmediato a éste, de sargento mayor, del mismo regimiento, con dos mil cuatrocientos; los inmediatos a éste, de sargentos mayores y comandantes de la guarnición de alguna capital de provincia, con dos mil; los inmediatos a éstos, de capitanes de alguna compañía de capital de provincia, con mil y doscientos; los inmediatos a éstos, de tenientes de alguna de dichas compañías, con ochocientos; los inmediatos a éstos, de edecanes de algún comandante de capital de provincia, con setecientos, y los inmediatos a éstos, de tenientes de una compañía en un pueblo cabecera de distrito, con seiscientos.

25. Los soldados rasos tendrán un sueldo de veinte pesos mensuales los cabos, de veinte

uno; los sargentos, de veinte y dos; pero en las compañías de las capitales de provincia el cabo tercero tendrá veinte y tres, el segundo, veinte y cuatro, y el primero, veinte y cinco. El número de la tropa, empleada de pie fijo en el servicio público nacional, al principio no pasará de cincuenta mil hombres de infantería montada.

26. Suprimidas las alcabalas por este código, para que no queden sin destino los empleados en su recaudación, se convertirán en administradores del banco nacional en los mismos lugares de su residencia. Los factores y administradores de la renta del tabaco continuarán sin novedad en sus destinos, del mismo modo que los administradores de correos. Todos estos empleados quedarán puestos en orden de escala, para irla recorriendo por todos sus grados superiores, según el orden de su antigüedad respectiva, hasta llegar a la primera magistratura de la República.

27. Los contadores de diezmos, actualmente empleados en el servicio de las catedrales, pasarán a ser recaudadores de décimas y de contribuciones eclesiásticas, bajo la inspección de los administradores de provincia, disfrutarán de las rentas que les están asignadas por este código, y quedarán puestos en orden de escala para recorrer sus grados ulteriores.

28. En fin, para no hacer demasiado prolijo el detalle de la ley de transacción, contenida en este apéndice, y no demorar su publicación, se observará por punto general, que todo funcionario, colocado en alguno de los empleos, suprimidos por este código, tendrán derecho incontestable, para ser indemnizado con otro de renta equivalente.

PARÁGRAFO III

Modo de reformar las rentas eclesiásticas sin convulsión ni trastorno de ninguno de los actuales individuos del clero, y de proveer las piezas vacantes de la manera más ventajosa para los actuales señores obispos, canónigos, curas y ministros

29. En el caso de declararse vacante el arzobispado de la santa iglesia primada de México, subirá a ocuparlo el obispo más antiguo de las diócesis de la República. Del mismo modo se proveerá la mitra de Michoacán, y las demás que se hallan vacantes, y que vacaren de resultas de la promoción de los señores obispos por el orden de su antigüedad, contada desde el día de su consagración a otras sillas más pingües y de rango superior. En materia de rentas, no se hará la más ligera novedad con ninguno de los prelados actuales, y tanto en las iglesias que hoy ocupan, como en aquéllas a que fueren promovidos, seguirán disfrutando de su cuarta episcopal.

30. Las mitras que quedaren vacantes por la promoción de los actuales señores obispos, y las que por ser de muy urgente necesidad se erigirán de luego a luego en la Alta California, Chihuahua, Nuevo México, San Luis Potosí, Querétaro y Acapulco, se proveerán en las dignidades más antiguas de las catedrales de México, Puebla, Valladolid y Guadalajara, y a cada dos mitras que se proveyeren en individuos de dichos cabildos eclesiásticos, se proveerá una en prelados de las órdenes extinguidas que hayan sido o sean ministros provinciales. A los primeros se les contará la antigüedad, no desde el día en que tomaron posesión de sus sillas de coro, sino desde que comenzaron a servir a la iglesia en algún destino público, como el de cu-

ras, provisores, promotores fiscales, catedráticos o vicarios adscritos a alguna parroquia, y a los segundos, desde el día en que profesaron su religión. Todos estos nuevos obispos disfrutarán de las rentas que les están asignadas por este código.

31. Todas las dignidades, canonjías y prebendas, actualmente vacantes en la catedral de México, como también las que vacaren por la promoción de sus individuos a los nuevos obispados, se proveerán en las dignidades, canónigos y prebendados más antiguos de las catedrales de Puebla, Valladolid y Guadalajara, según el orden de su antigüedad, contada en los mismos términos que quedan detallados en el párrafo anterior. Las piezas vacantes y que vacaren en las tres referidas catedrales de Puebla, Valladolid y Guadalajara, se proveerán en los individuos más antiguos de las demás catedrales, según el orden de su antigüedad. En materia de rentas no se hará la más ligera novedad con ninguno de los canónigos actuales, y tanto en las sillas que hoy ocupan como en aquéllas a que fueren promovidos, se les seguirán cubriendo sus planas de la misma manera que se ha practicado y se practica en el día.

32. Las piezas vacantes y que vacaren en las demás catedrales no especificadas en el párrafo anterior, se proveerán con un total arreglo a lo dispuesto en este código, en los curas respectivamente más antiguos de las diócesis de la República, y estos nuevos canónigos no disfrutarán otras rentas que las que se les asignan en el nuevo sistema de hacienda. Cada curato vacante y que vacare en cada obispado, se proveerá en el más antiguo de los curas que lo pretendieren, y a falta de éstos en el ministro o catedrático más antiguo.

APÉNDICE II

Sobre la amonedación de cobre, o resolución de los problemas siguientes

I. Demostrar que la causa del empobrecimiento o por mejor decir, de la miseria espantosa en que gime la inmensa mayoría de los individuos de que se componen las naciones, proviene de la escasez relativa de la moneda, y que el origen de esta escasez consiste en el error craso y absurdo de haber escogido la plata y el oro para elaborarla.

II. Demostrar que mientras este error grosero subsista entre las naciones, les será tan imposible a la inmensa mayoría de los individuos de que se componen, el enriquecerse o salir de la miseria en que gimen, aunque tengan todas las fuentes imaginables de riqueza, como le sería imposible a un destilador el obtener una sola botella de aguardiente, por más que tuviese sus bodegas rebosando de vino si, careciese de alambique en que destilarlo.

III. Demostrar que el medio necesario, forzoso e infalible del enriquecimiento pronto y rápido de la inmensa mayoría de los individuos de que se componen las naciones para las que se tienen por más pobres, es la acuñación de una moneda de cobre en que el valor nominativo esté al nivel del valor mercantil de este metal; el acuñarla en una cantidad proporcional a la suma de la publicación de cada sociedad, y a la de los objetos comerciables, y en subdividirlas en piezas tan pequeñas que su valor esté al nivel del de las pequeñas cantidades de bienes que cada individuo de la especie humana tiene que consumir diariamente para subsistir con una mediana comodidad.

La moneda de cobre acuñada en México por el gobierno español, es a todas luces detestable por lo exorbitante y arbitrario de su valor, pues no pasando de veinte pesos en el comer-

cio el precio medio del quintal de cobre, se le ha hecho subir al de doscientos pesos* por medio de una amonedación muy tosca y muy fácil de contrahacerse. Para demostrar lo absurdo y desatinado de esta medida, baste reflexionar el que ella es del todo equivalente a la que el mismo gobierno hubiera tomado, si hubiera mandado que el peso o la onza de plata sellada valiese diez pesos; el tostón, cinco; el deadós veinte reales; el real, diez reales, y el medio, cinco reales. El precio medio o el valor legítimo de la libra de cobre es con muy corta diferencia el de real y medio y dos granos; añadiéndole, pues, cosa de otros cuatro granos por gastos de amonedación, tendremos que el verdadero valor de la libra de cobre acuñado es el de dos reales, y por consiguiente, el de la media libra, un real; el de la cuarta de libra, medio real; el de la ochava de libra, una cuartilla o la mitad del medio real de plata, el de la onza, un *tlaco*, el de la media onza, medio *tlaco*; el de la cuarta de onza, *un pilón* o diez y seisavo del medio de plata, y el de la ochava de onza, *medio pilón* o un treinta y dosavo del mismo medio de plata. Luego es evidente que no teniendo las cuartillas de México más que cuatro adarmes o una cuarta de onza de cobre, y los *tlacos* solamente dos adarmes o una ochava de onza, el verdadero y legítimo valor de las primeras monedas no es el que ahora tienen de una mitad del medio de plata, sino el de un *pilón* o diez y seisavo del medio de plata, y el de las segundas no es, ni puede ser, el de una cuarta parte del medio de plata, sino solamente el de medio *pilón* o un treinta y dosavo del mismo medio de plata. El conocimiento del mal es el hallazgo del remedio. Luego el arbitrio seguro, cierto e infalible de remediar los defectos de la mala moneda de México, y de impedir su falsificación, es el de reducirla a su legítimo valor, rebajando las cuartillas a diez y seisavos, y los *tlacos*, a treinta y dosavo del medio real o adarme de plata.

Tan obvia y sencilla como es esta filosofía, no ha pasado aún por las cabezas de los gobernantes de las Naciones de Europa, ni por la de ninguno de sus economistas, sin exceptuar a los mismos ingleses, que pasan, y con razón, por los más profundos de todos ellos. Así es que habiendo éstos acuñado de un golpe en 1787 quinientas toneladas de cobre** en monedas del peso de una onza y de media onza y habiéndose falsificado mucho esta moneda, trataron en 1799 de prevenir este crimen, no por el medio sencillo que acabamos de descubrir, de reducir la moneda de cobre a su valor mercantil, sino dándole una forma tan esmerada y costosa*** que supliese por la vileza del metal para hacerla llegar al precio de su valor numismático.

* Los que quisieren instruirse sobre los males que ha ocasionado a la España la arbitrariedad de subir el valor numismático de los metales acuñados sobre el nivel de su precio mercantil, lean entre otros, a D. Gerónimo de Oztariz, en el cap. 104, pág. 370 y a Saavedra en su Empresa 69.

** Léase en el tomo XV, de los *Anales de las Actas y Manufacturas* la carta que M. Bolton, encargado por el ministerio inglés de la fabricación de esta moneda, escribió al ciudadano Droz pidiéndole permiso para hacer uso en Londres del volante de su invención *j'ai appris que notre Ministre est determiné, que je dois frapper cinq cents tonneaux de monnaie de cuivre, dont partie des pieces doivent être de la pesanteur d'une once, et partie de celle d'une demi-once.*

*** Si el gobierno pagase de contado en plata las monedas de cobre que le llevasen, podría darles casi sin inconveniente un valor intrínseco sumamente corto, pues las necesidades de la circulación absorberían siempre una cantidad muy grande y conservarían todo su valor lo mismo que si valiesen la fracción de moneda que representan, así como una cédula de banco que no tiene valor intrínseco, circula a veces muchos años seguidos como si valiese realmente lo que expresa su valor nominal. Esta operación le valida más que la facultad de completar con cobre una parte de sus pagos y no se alteraría como sucede con ella el valor de las monedas.

Sólo habría que temer a los monederos falsos, los cuales tendrían tanto mayor estímulo para ejercitar su infame oficio, cuanto mayor fuese la diferencia entre el valor intrínseco y el corriente. Habiéndo querido el penúltimo rey de Cerdeña recoger una moneda de vellón que su padre había labrado en tiempos calamitosos, recogió tres veces

Tres son las causas del enriquecimiento de las naciones o de que todos sus individuos adquieran la abundancia de todos los bienes necesarios para estar bien alimentados, vestidos, alojados y amueblados. La primera es la tierra, que es la que da todas las producciones; la segunda es la mano del hombre que la cultiva para sacar de su seno los productos y la que los elabora para acomodarlos a las necesiddes humanas, y la tercera es la moneda con que se compran los productos que tiene que consumir cada individuo, y sin la cual, por consiguiente, quedan las otras dos, por feraces y abundantes que sean, del todo paralizadas y sin producir. Del cultivo de la tierra o del fomento de la agricultura, y de los progresos de la industria y trabajo del hombre o de las artes, oficios y manufacturas, han tratado perfectamente bien los dos economistas más famosos de la Europa, a saber el inglés Smith y el francés Say, pero ninguno de los dos ha filosofado lo bastante sobre la moneda o sobre el único resorte que puede poner en movimiento la virtud germinativa de la tierra y los brazos de los hombres y sin cuya acción se contiene luego y cesa enteramente de girar la máquina de toda la producción y consumo de los bienes. Pero entre el creador de la economía política moderna, y entre el perfeccionador de este nuevo ramo del saber, hay la notable diferencia de que el primero, si no ha analizado profundamente las circunstancias y ventajas que constituyen toda la magia de la moneda, por lo menos no ha establecido ningún error sobre esta materia importantísima; al paso que el segundo, a los antiguos errores de rutina, ha añadido otros que le son peculiares y que influyen poderosamente sobre los pueblos que pasan por más ilustrados y que dan el tono a los demás para mantenerlos en los sistemas más errados, falsos, perjudiciales y contrarios a sus verdaderos intereses. Tanto Smith, por no haber penetrado y desenvuelto en toda su claridad la teoría de la moneda, como Say por haberla errado enteramente, sólo han publicado unos tratados truncos e incompletos de economía, cuyas lecciones han sido, son y serán eternamente insuficientes, para sacar de la opresión y la miseria a la inmensa mayoría de los individuos de que se componen las naciones europeas y de todas las que tienen la desgracia de modelarse por la conducta de ellas. Pero el descubrimiento que voy a revelar al mundo sobre la verdadera naturaleza y atribuciones de la moneda o del resorte poderoso que a todo le comunica vida, actividad y movimiento, y sin cuya intervención todo se muere y aniquila, influye tan necesaria e irresistiblemente en el enriquecimiento, libertad y civilización general de todos los pueblos de la tierra, que a todos los que tuvieren bastante dosis de sentido común para adoptar mi sistema o, por mejor decir, el de la naturaleza, que es el que voy a proponer, les será tan imposible el dejar luego de comenzar a enriquecerse, como le sería imposible al hombre que tomase una áscua ardiendo entre sus manos, el dejar luego de quemarse.

Si para las demostraciones que voy a hacer, sólo me valiese del cálculo y del raciocinio, daría lugar a que los genios ignorantes o suspicaces, arrastrados por el torrente de la preocupación que generalmente reina a favor de la moneda de plata, sospechasen de su evidencia, y la mirasen más bien como un juego del espíritu de cavilación o de sutileza de ingenio, que co-

más de la que había fabricado el gobierno. El rey de Prusia experimentó igual pérdida por la misma causa, cuando hizo recoger bajo el nombre supuesto del judío Efraín el vellón de baja ley que había hecho admitir por fuerza a los sajones en el apuro a que se vio reducido por la guerra de 7 años. En los países extranjeros es donde principalmente se ejecutan estas falsificaciones. Los ingleses han procurado prevenir este inconveniente haciendo fabricar el año de 1799 medios dineros esterlinos (*halfhence*) con un primorosísimo cuño y un trabajo tan esmerado que no es fácil contrahacerlo. Say, t. II, pág. 164, edición de México.

mo una consecuencia de la sana razón. Pero tengo la satisfacción de poder combatir al error común, más bien con las armas de la experiencia, que con las de la razón, siempre expuesta a alucinarse y a alucinar a los otros, y de confirmar cuanto dijere sobre la verdadera teoría de la moneda, no con el ejemplo de alguna de esas sociedades infantiles de la Europa, donde el fenómeno de la producción está tan contenido en sus fuentes, que su población solo se duplica cada cinco siglos, en sentir de Smith,* sino con la práctica constante e inveterada de muchos siglos, observada por la primera, la más antigua y la más civilizada de todas las naciones, cual lo es, sin disputa, la de la China, la única del globo en que los manantiales de la producción corren sin estorbo, la única que por lo mismo hace muchos siglos llegó al más alto punto de su agricultura, de su industria, de su comercio y de su población.

Con motivo de los progresos que fue haciendo la industria, dice Smith,** *tuvieron por conveniente las naciones comerciantes acuñar en moneda diversos géneros de metales; el oro para los pagamentos de más consideración y cuantiosos; la plata para las negociaciones de un valor moderado, y el cobre, o algún otro metal basto para las de poca consideración.* Pero yo digo que, generalmente hablando, la proposición es falsa, porque la China jamás ha incurrido en el frenesí de amonedar el oro y la plata, aunque tiene acumulada más cantidad de estos metales preciosos que ninguna otra nación del mundo. En segundo lugar, la moneda de oro y plata para el comercio de por mayor no es necesaria, y para el de por menor es del todo inservible. Una demostración práctica de la primera verdad es la conducta del banco de Hamburgo, uno de los más antiguos y acreditados de la Europa, que desde los principios de su erección jamás se ha valido para los giros de ninguna especie de moneda de oro, plata o papel, sino solamente de tejos de oro y barras de plata. Una demostración práctica de la segunda verdad, es la conducta universal de todos los pueblos comerciantes, que para las compras de las cosas de pequeño valor han tenido por insuficiente la moneda de plata, y se han visto en la precisión de labrarla para el efecto de cobre y otros metales de precio inferior, como lo confiesa el mismo Smith en el párrafo que acabamos de copiar. En una palabra, del oro y la plata, por ser de su naturaleza una de las más preciosas mercaderías de exportación, sólo puede hacerse, a lo más, una moneda volante, una moneda siempre expuesta a desaparecer y con la cual, por consiguiente, jamás se podrá contar con seguridad para constituirla la planca constante de los cambios y propia, por lo mismo, para contener muchas veces el curso de la producción de los bienes por falta de despacho. La plata y el oro por su escasez relativa a la suma de la población de cada sociedad y a la de los objetos comerciables, o lo que es lo mismo, por no poder multiplicarse a medida que se multiplican los hombres y a medida que se multiplican los efectos de la industria, jamás dejarán de ser lo que siempre han sido hasta aquí, es decir, más bien una traba que una palanca para la producción, consumo, reproducción y multiplicación de las riquezas. En fin, la plata y el oro por no poderse dividir en fracciones cómodamente manejables y ajustadas al pequeño valor de las cortas cantidades de bienes necesarios para el consumo diario de cada individuo de la especie humana, tampoco son cambiables por todo género de objetos, que es en lo que principalmente consiste la esencia de la moneda. Analicemos.

* Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. t. II. l. III. cap. IV, pág. 239, edición de Madrid.

** t. I. l. I. cap. V. pág. 63.

Desde luego es preciso convenir, en que acuñar la plata destinada para salir de nuestros puertos a los países extranjeros, es una operación insensata y absurda, como lo es evidentemente la de gastar tiempo y dinero en darle a una cosa muy valiosa por sí misma una forma muy costosa, que la haga valer menos de lo que vale en su estado natural y sin ninguna alteración. Ocuparse de acuñar la plata destinada a darse a los extranjeros en cambio de sus mercaderías, es ocuparse en rebajarle su valor al objeto más eminentemente comerciable que hay según la actual opinión del mundo. La plata pasta o en especie, sin más labores que las necesarias para afinarla o purificarla de toda materia extraña, vale más para los mismos extranjeros en igual cantidad de peso, que la plata acuñada, porque ésta está ligada con una cantidad de cobre; porque tiene el sobrecosto de los gastos de hechura que son perdidos para las naciones que sólo consideran a la moneda de plata como plata y no como moneda, o que sólo aprecian en ella el valor de la materia y no el de la forma, y en fin, vale menos por los derechos de braceaje, o por la utilidad o ganancia que el gobierno saca de los gastos de la fábrica. La amonedación no ofrece más ventaja al extranjero que la del certificado o garantía que le da el gobierno de que las piezas acuñadas tienen efectivamente el peso y ley que reza su inscripción. Pues bien, esta garantía puede dársele, sin gastar el tiempo y dinero que se pierde en la amonedación. Redúzcanse todas la maniobras de nuestra casa de moneda en este punto a practicar en las barras de plata la operación del apartado o la separación del oro, a darles todos los grados posibles de afinación,* a marcarlas con el cuño del sello nacional, y a grabarles la cantidad del peso que tuvieren y la ley de su ensaye. En este estado, déselas al extranjero, cargándoles los derechos de braceaje, y cargándoles también como una cantidad efectiva de plata u oro la del cobre con que se las habría ligado, en el caso de que se las hubiese reducido a moneda. Esta operación sería igualmente provechosa al extranjero que a la nación; al extranjero, porque llevaría plata pura sin liga de cobre y se excusaría de los gastos de fundición y afinación para separarla de este metal de precio inferior, y a la nación, porque si la cantidad de cobre con que se liga la moneda es de una duodécima parte, por ejemplo, es evidente que en este caso saldaría con once millones de onzas de plata pura la deuda que ahora paga con doce millones de pesos, es decir, con once millones de onzas de plata ligadas con un millón de onzas de cobre; luego en este caso ahorraría la nación un millón de pesos; más, ganaría netos todos sus derechos de braceaje sin los grandes gastos que ahora invierte en las casas de moneda; más, ahorraría toda la cantidad que emplea en las compras del cobre; más, ahorraría todos los gastos de fabricación.

Adoptada esta medida, lejos de prohibirse la extracción de la plata pasta debería enteramente franquearse su salida sin gravarla con nuevos derechos, para que adquiriese todo su valor como mercancía, e impedir al mismo tiempo por todos los medios posibles la extracción de la plata acuñada, es decir, que se debería hacer lo contrario de lo que se ha practicado y se sigue todavía practicando, con tal perjuicio de la nación que si nos hubiésemos puesto a discurrir de propósito un arbitrio seguro para estar sempiternamente en la miseria entre todas las

* El medio fácil, seguro y poco costoso de afinar la plata todo lo posible, reduciéndola a la ley de doce dineros, es el fundirla con salitre o nitrato de potasa, el cual tiene la propiedad de oxidar y reducir a escoria todos los demás metales con que la plata sale comunmente ligada de nuestras minas y con que comúnmente la ligan los plateros. Concluida la fundición, queda la plata pura, sin más mezcla que la del oro, del cual se la separa por el medio conocido de ácido nítrico. Así es que por la mucha abundancia y baratura del precio del salitre en este estado de Jalisco, no hay vieja que no pueda desempeñar muy bien el oficio de ensayadora.

fuentes de omnimoda riqueza que poseemos, no hubiéramos ciertamente atinado con otro más eficaz e infalible para conseguirlo. Demostrémoslo de modo que lo perciban hasta el aguador y el carbonero.

De todos los millones de pesos de oro y plata que se acuñan en cada año, es mucho mayor sin comparación la cantidad de los que salen para fuera, que la que queda entre nosotros. Así es que aunque somos la nación del mundo que acuña más moneda de todas, somos al mismo tiempo la que más carece de ella respectivamente que otra ninguna, en tales términos, que correspondiendo la moneda que circula en lo interior de la Francia a catorce pesos por cada habitante, según cálculos de Humboldt, apenas llega entre nosotros a diez pesos por cada persona, según el mismo escritor. Esta escasez de moneda o circulación de ella en una cantidad infinitamente inferior a la de los bienes comerciables por ella misma, es un hecho tan palpable y notorio que a cada paso estamos mirando a nuestros hacendados, con caudales de cincuenta y de cien mil pesos en bienes raíces y muebles, no solamente carecer del dinero necesario para emprender en sus tierras todas las mejoras de que son susceptibles, sino hasta del muy preciso para algunos pagos o compras de poca monta, viéndose obligados, para adquirirlo, a malbaratar sus ganados y semillas. Nada es más corriente que el estarles oyendo decir continuamente a nuestros mineros, *si yo tuviera dinero, le daría un socavón a mi mina, le abriría una lumbrera por tal parte, pondría tantas labores en corriente, construiría un arte de moler por mayor*, etc. Pues bien, mientras esta escasez de moneda siga adelante, nos será tan imposible dejar de ser pobres, a pesar de todas nuestras fuentes de riqueza, como le sería imposible a una india hacer un poco de atole, por más que tuviese la casa rebosando de maíz, si careciese de *metate* en que molerlo y de cazo o vasija en que cocerlo, y como le sería imposible a un destilador el tener una sola botella de aguardiente, por más que tuviese las bodegas llenas de vino, si careciese de alambique en que destilarlo. Lo que es el *metate* y el cazo para la atolera, y lo que es el alambique para un aguardientista, eso es la moneda* para la producción de las riquezas. Por más feraces que sean los campos, no brotan por sí solas las cosechas, ni las minas arrojan por sí mismas hacia fuera los metales que abrigan en su seno, ni las manufacturas se hacen por sí solas en los talleres de los artesanos. Para que haya riquezas agrícolas, metálicas y fabriles, no basta poseer sus fuentes respectivas, sino que es necesario poner en actividad y movimiento los brazos de los hombres, y asalariar o comprar sus trabajos, y estos trabajos no pueden comprarse o asalariarse fácilmente sin la moneda, que es la palanca que todo lo allana y facilita para la producción, consumo, reproducción y multiplicación de las riquezas.

* Cuando Say ha anunciado como un descubrimiento que la moneda de plata es una riqueza y no un signo de ella, o ha dicho una verdad de Pero Grullo, a saber, que es una riqueza particular del orden metálico, cosa que nadie ha negado jamás o ha dicho un desatino garrafal, si ha querido decir que la moneda de plata es la riqueza universal o la suma de todos los bienes que se adquieren con ella, cuando los hay, pues puede no haber algunos de los que se busquen, aunque se tenga moneda con que comprarlos. Pero aunque la moneda sea cosa muy distinta de la riqueza general o de los bienes que se adquieren con ella es, para servirme del lenguaje de Smith, la gran rueda de la circulación de todos ellos o el instrumento con que se adquieren para consumirlos y que, por lo menos, da lugar a que reproduzcan y multipliquen. Es pues, evidente que aunque la moneda sea cosa distinta de los bienes o riquezas, éstas dejarían de reproducirse y de existir, sin la moneda, así como que aunque las ollas, las cazuelas, el asador y demás instrumentos de cocina, no sean comida, ésta no podría hacerse sin ellos, por más que se tuviesen todos los materiales de que hacerla.

¿Cuál es, pues, en último análisis, la causa de que nosotros seamos y hayamos sido siempre tan pobres e indigentes, teniendo más fuentes de riqueza que ninguna nación del mundo? La razón es porque siempre hemos carecido y carecemos de la cantidad de moneda necesaria para la producción de las riquezas ¿y cuál es la causa porque siempre estamos escasos de la cantidad de moneda necesaria, cuando es un hecho que nosotros solos acuñamos más cantidad de ella que todas las naciones juntas? La razón es porque hemos tenido la insensatez de escoger para la formación de nuestra moneda precisamente los dos metales preciosos, y por lo mismo, los más apeticidos y codiciados de todas las naciones, que son la plata y el oro, cuya adquisición les ofrece grandes ganancias, y por lo mismo nos los están extrayendo incesantemente, de manera que si llevásemos adelante esta locura, nos sería tan imposible conservar la cantidad de moneda necesaria, como el tener agua en nuestras casas, queriéndola echar en un arnero.

La moneda de oro y plata, por más que nos obstinemos en considerar en ella la atribución de moneda, ella conserva otra cualidad esencial, preferente y sin comparación mucho más dominante, cual es la de mercancía, y la de una de las más preciosas y codiciadas mercancías. La razón de mercancía y la razón de moneda son entre sí tan opuestas e incompatibles, como lo negro y lo blanco, como la luz y las tinieblas porque toda mercancía por su naturaleza de tal está destinada a ser vendida, es decir, a salir de las manos del poseedor y a pasar a las del comprador; por el contrario, la moneda, por su naturaleza de moneda, está destinada a tener una existencia fija y permanente dentro de la nación que la acuña para que sirva de palanca de los cambios, pues en llegando a faltar o menguar, faltaría o menguaría el cambio de las cosas que se hace por ella, así como en una tienda de vinos se paralizaría el expendio de ellos, si faltasen las medidas en que medirlos. Así es que aunque en una época feliz hubiese entre nosotros tanta moneda de plata, cuanta se hubiese menester, para que todos los individuos de la nación pudiesen adquirirla por su trabajo y comprar con ella todo género de productos, esta ventaja no sería duradera por estar siempre expuesta a salir de nuestros puertos la moneda de plata, semejante a un pájaro de rápido vuelo siempre dispuesto a escapársenos de entre las manos para no volver jamás a nuestro poder. Acuñar, pues, moneda de plata es acuñar moneda para privarse de ella, es acuñarla para no tenerla, es obrar en sentido contradictorio, es querer conseguir un fin de que tenemos una necesidad diaria y permanente por unos medios pasajeros y contingentes, por unos medios que hoy son y mañana no, que hoy están en nuestra mano y mañana estarán muchas leguas distantes de nosotros.

El oro y la plata por su escasez relativa a la inmensa suma de los bienes comerciables, y a la inmensa muchedumbre de los individuos de la especie humana que jamás podrán tener estos metales en la cantidad suficiente para adquirir con ellos todos los bienes necesarios para la vida, lejos de poder servir de palanca, siempre serán un estorbo invencible, un obstáculo insuperable, para la formación, distribución, consumo, reproducción y multiplicación de las riquezas. Es un hecho que no todos los individuos de la especie humana tienen la moneda de plata necesaria para adquirir los bienes de absoluta e indispensable necesidad, pues si la tuviesen estarían medianamente alimentados, medianamente vestidos, medianamente alojados, y tendrían un sobrante con que mantener una mujer y procrear en consorcio de ella una prole robusta y numerosa; pero, por desgracia, vemos todo lo contrario. Entre todas las naciones,

aun las más opulentas, es muy corto el número de individuos que disfrutan de la abundancia de los bienes que Dios creó para todos; la inmensa mayoría de los que componen las clases media e ínfima de las sociedades, gime en la escasez y la penuria de todo, y es excesivamente crecido el número de los que desfallecen en la mendicidad y la miseria.

Si es un hecho que no todos los hombres tienen la cantidad de moneda de plata necesaria para adquirir todos los bienes, aun los de primera necesidad, también es una verdad incontestable que jamás podrán llegar a tenerla y esto por seis causas. Primera: porque la cantidad de la plata que sale de las minas es muy corta con respecto a todos los hombres y a todas las cosas del mundo, creadas para uso y servicio del hombre. Segunda: porque de la poca que sale de las minas, una gran parte se invierte en vajilla, muebles y utensilios. Tercera: porque la que se destina al cuño, teniendo anexa la cualidad de mercancía, está siempre pasando de unas a otras naciones y cada una queda frecuentemente privada de toda la cantidad que sale fuera de sus puertos. Cuarta: porque la que gira en el comercio interior de cada nación, es substraída de la circulación y atesorada por los avaros y por todos los hombres que tienen más renta de la que pueden consumir, y que por lo mismo se ven incitados a atesorar, aunque no sean avaros. Quinta: porque mucha parte perece en los naufragios, y en los entierros que hacen de ella los avaros, sin indicar antes de su muerte los parajes en que la dejan escondida. Sexta: porque la que circula libremente en el comercio interior y exterior de todas las naciones, se va incesantemente a sepultar en una región del Asia, así como todos los ríos corren a perderse en la mar, con la diferencia de que ésta tarde o temprano les vuelve sus aguas a los ríos por medio de la evaporación y la lluvia; pero la plata que llega a entrar una vez en la China, no vuelve jamás a salir de allí, por la manía que reina entre los chinos de enterrarla, así como entre nosotros la de sacarla de las entrañas de la tierra.

Querer que la producción y adquisición de todas las cosas dependa de una sola cosa esencialmente muy escasa y siempre expuesta a escasear más y más a causa de los errores y extravíos de las pasiones humanas, es querer que todo escasee, como ella, es querer que jamás haya abundancia sobre la tierra, es oponer a la progresión de los bienes naturales e industriales unas trabas insuperables a la mano del hombre, es la medida segura e infalible de mantener a los pueblos en un estado de empobrecimiento forzoso y sempiterno. Así es que esta idea insensata y absurda de acuñar la plata para convertirla en el medio de adquirir todas las cosas, parece que sólo ha podido ser inspirada por los demonios. Para que el oro y la plata pudiesen servir de instrumento para la producción y adquisición de las riquezas, sería preciso no solamente que estuviesen derramados con más profusión sobre la tierra, de manera que su adquisición siempre etuviera a la merced y voluntad del hombre, como lo está el fenómeno de la producción de las mismas riquezas, sino lo que es del todo imposible, que su cantidad pudiera aumentarse en razón directa de la población y la industria, pues no creciendo a la par de una y otra serán, como ya lo he dicho un estorbo y no una palanca para el aumento progresivo de la producción de los bienes, aumento que debe seguir la razón directa de la población y la industria, si se quiere que todos los hombres disfruten de la felicidad a que los llama el orden y las intenciones de la sabia naturaleza empeñada en que nade en la abundancia, como la rebosan el gorgojo y el gusano.

Confieso ingenuamente que para mí fue por mucho tiempo un escándalo contra la divina providencia, el que habiendo Dios creado a los hombres expuestos a mil necesidades, la

mayor parte de ellos nazcan y mueran, sin haber podido disfrutar de los bienes destinados a saciar estas necesidades. Pero, al fin me he desengañado de que esta escasez de bienes y la privación que de ellos experimentan los humanos, no es obra de la naturaleza sino de los errores del hombre. En efecto, la naturaleza no le ha puesto ningunos límites a la producción de los bienes, porque no los tiene la virtud germinativa de la tierra, que por medio de los abonos convenientes puede estarse convirtiendo incesantemente en hombres, plantas y animales, ni tampoco los tiene el trabajo e industria del hombre cuyos términos son inaveriguables y cuyo número se reproduce y multiplica, de tal modo que por cada individuo que fallece, son muchos más los que nacen para remplazar ventajosamente la actividad de los que mueren. Así es que en cuanto está por parte de la naturaleza, ella ha provisto a todos los hombres de todas las fuentes de abundancia, capaces de hacer nadar en ella no sólo a todos los individuos de la generación presente, sino al número indefinidamente mayor de cuantos nacieren y poblaren el globo en lo sucesivo. Pero el hombre se ha dado arte y maña de limitarlo todo, haciendo que todo dependa de un medio esencialmente muy corto, muy escaso y limitado, como lo es la moneda de oro y plata. De este modo, ha inutilizado los dones del Creador, ha reducido la tierra a la esterilidad y los brazos de los hombres a un estado de inacción y de ociosidad involuntaria. De nada serviría que hubiese en un pueblo toda la cantidad de trigo necesaria para surtir de pan a todos sus habitantes, y aun al triplo o cuádruplo de su población, si los encargados de la fabricación del pan sólo construyesen los hornos que apenas bastasen para cocer el necesario para el tercio de los habitantes. De nada serviría que hubiese en un pueblo una fuente de agua muy abundante si sus moradores se obstinasen en no mantener para recogerla, sino un número muy escaso de vasijas y éstas de muy pequeña capacidad para que todos pudiesen surtirse de ella en abundancia. Es evidente que en uno y otro caso la escasez del pan y del agua no provendría ni de la falta del trigo ni de la cortedad de la fuente, sino de la insensatez de haber adoptado unos medios esencialmente insuficientes para disfrutar del pan y del agua en abundancia. Lo mismo sucede con la escasez de bienes que padecen las sociedades humanas, ella no proviene de la escasez de las fuentes naturales, sino de la escasez del medio neciamente adoptado para obtenerlos.

El oro y la plata no solamente son un embarazo para la producción, progresión y distribución de las riquezas, como lo acabo de demostrar, sino que tienen con ellas tan poca conexión y dependencia, que bien puede una nación ser dueña de todas o casi todas las minas del mundo y recoger más plata y oro que todas, y ser al mismo tiempo la más pobre y miserable de todas, por muy reducida que sea su población. Tal es el espectáculo que ha presentado al mundo la España durante los tres siglos que ha poseído las Américas, y lo mismo nos ha sucedido a nosotros mientras hemos estado gimiendo bajo la férula de la administración errada y exterminadora de aquellos peninsulares. Ningún hombre come plata, bebe plata, ni viste plata. Este metal en tanto es apreciado, en cuanto facilita todos los bienes necesarios para la conservación de la vida. Pero ya hemos visto que este mismo metal por su escasez relativa, es más bien una traba que un auxilio para la formación y adquisición de los bienes. La naturaleza los ha preparado por medio de causas tan infalibles en sus resultados, como esparcidas con profusión por todo el globo que habitamos; pero nosotros hemos paralizado la acción de estos resortes, haciendo depender la abundancia de medios esencialmente muy escasos, insuficientes y arbitrarios.

Como la moneda de oro y plata se ha hecho de primera necesidad para que los hombres adquieran con ella todo lo que han menester, y como esta moneda escasea tanto que no alcanza para todos, de ahí es que todos viven disputándosela continuamente los unos a los otros y forcejean para adquirirla, sin pararse en la calidad de los medios. Así es como la plata se ha vuelto la verdadera manzana de la discordia universal, el resorte emponzoñado que tiene reducidas todas las sociedades a un estado de guerra perpetua. El día en que se rompa esta palanca infernal, o por lo menos el día en que se la reduzca a lo que debe ser por la naturaleza, es decir, al estado de una moneda puramente auxiliar y secundaria, ese día se verán ociosos casi todos los tribunales.

La experiencia acredita que la moneda de oro y plata se acumula fácilmente en un corto número de manos, y donde se forma una acumulación de ella, allí se forma un germen de despotismo, como también un germen de servilismo para todos los que rodean al que acumula el dinero, pues todos los que carecen de él, se postran ante el que lo tiene, se le prostituyen y se le prestan a servir de instrumentos para la opresión de sus demás conciudadanos. Así es como esta maldita palanca destruye incesantemente el equilibrio social, es el manantial más fecundo de la desigualdad de las condiciones, torna la sociedad en una reunión de opresores y oprimidos, de compradores de la libertad y de vendedores de ella, de déspotas y de esclavos, y por lo mismo es el obstáculo más insuperable para el establecimiento de un buen sistema republicano.

Es fin, si se analizan uno por uno todos los males físicos y morales que han desolado y corrompido a la especie humana, se encontrará que todos provienen del error capital de haber adoptado unos metales tan escasos como el oro y la plata para formar de ellos la palanca universal de los cambios.

Desengañémonos, si el hombre se ha hecho miserable, si se ve envilecido y degrado hasta los suelos, si se encuentra expuesto diariamente a las privaciones más horribles, es porque él mismo lo ha querido, es porque él mismo se ha puesto para la adquisición de los bienes precisos una traba, en la cual no ha tenido la más ligera intervención la bondadosa y sabia naturaleza. Que el hombre dependa de la tierra que lo sustenta, de la agua que lo refresca, del aire que respira y del sol que lo alumbra, esta dependencia nada tiene de extraño, esta dependencia está en el orden de la naturaleza, esta dependencia forzosa no está en su mano sacudirla, ni le sería útil el substraerse de ella, pues que directamente influye en su conservación. Pero que el mismo hombre, sin ninguna necesidad, y con notable perjuicio suyo, haya hecho depender su subsistencia y la adquisición de unos bienes que sólo son obra de sus manos de una cosa de difícil adquisición,* de una cosa enteramente extrínseca e inconexa con estos bienes, de una cosa que jamás ha sido ni podrá ser obra de sus manos, de una cosa con cu-

* M. Heron de Villefosse, en un estudio muy curioso que presenta la cantidad de cada metal que se beneficia en todo el globo, valúa el mercurio que se saca de las minas de Europa en 35 000 quintales. De este dato resulta que después del cobalto, es el azogue el metal más escaso, y que aun lo es dos veces más que el estaño; de manera que siendo la plata por sí misma muy escasa con respecto a la infinita muchedumbre de individuos de la especie humana, todavía lo es mucho más por la escasez del mercurio de que pende su beneficio. ¡Y que el hombre haya ligado todo su bienestar y subsistencia y la adquisición de todas las cosas a sólo dos objetos los más escasos de este mundo y cuya reproducción y multiplicación no está al alcance de su voluntad, como lo está la reproducción y multiplicación de los bienes que le sirven para su vestido y alimento!

ya posesión jamás podrá contar seguramente de modo de disponer de ella a su arbitrio cuando quiera, como lo es la plata, ¿no es el colmo de la insensatez* y de la extravagancia?, ¿no es el delirio más atroz, más bárbaro y más absurdo, que ha podido apoderarse de su espíritu? ¿Y cómo es que los pueblos que pasan por los más ilustrados del globo, han podido permanecer infatuados de este error por tantos siglos, cuando es tan obvio, tan patente y tan de bulto, que por sí mismo está saltando a los ojos, y cuando bastaría el cruel azote de la miseria que les hace padecer, para que percibiesen su asoladora y ominosa influencia?, ¿y cómo es que los hombres más sabios que se han dedicado de profesión a indagar los impedimentos y los medios de la progresión de la riqueza, han podido dejar de descubrir un error de este tamaño para desimpresionar de él a las naciones?, ¡qué digo!, los economistas más célebres parece que han tomado un particular empeño en confirmarlo y perpetuarlo en sus escritos. Sí, los economistas más aplaudidos y famosos han desbarrado tanto sobre este punto cardinal de la vida humana, que no han dudado avanzar que la misma plata si llegase a hacerse muy común, sería luego envilecida y no podría servir ya para la construcción de la moneda. En esto no advierten la contradicción palpable y grosera en que incurren, sosteniendo que las riquezas deben ser muy abundantes, no siéndolo el medio con que se producen y adquieren. En tanto hay lugar a los productos de la agricultura y las artes, en cuanto que éstos encuentran consumos, y en tanto encuentran consumos, en cuanto hay quien los compre, y en tanto hay quien los compre, en cuanto hay moneda con qué comprarlos, luego si la moneda es poco común y no abunda, tampoco abundarán los consumos de las producciones y, por consiguiente, tampoco habrá lugar a la abundancia de éstas, pues nadie siembra mucho de lo que se vende poco, ni en los talleres de los artesanos se multiplican las manufacturas que encuentran poco despacho o salida. Y así, la medida de la producción es proporcionalmente la medida del medio con que se adquiere; una cosa, por más común que sea, jamás es despreciada, cuando su adquisición es de primera necesidad, como sucede con el agua, esparcida por toda la superficie de la tierra.

Resulta de todas las reflexiones indicadas que la moneda de oro y plata ha surtido un efecto contrario al que los hombres se han propuesto al acuñarla, que es el de facilitar todas las cosas que han menester, pues una triste y dolorosa experiencia está haciendo ver todos los días que son incomparablemente y cien millones de veces muchas más las compras que dejan de hacerse diariamente por la falta de moneda que las que se hacen con ella. Luego la moneda de oro y plata más bien es una antimoneda, que una moneda; más bien el instrumento que impide las compras, que el medio que las facilita; más bien un arbitrio para impedir los consumos, que para multiplicarlos, y por consiguiente, un arbitrio que parece directamente imaginado para entorpecer la circulación y reproducción de los bienes.

Habiendo las naciones europeas y las demás que han tenido la desgracia de modelarse por su ejemplo, atinado con el medio indefectible de acotarlo y limitarlo todo, haciendo que todo dependa de un medio muy limitado y reducido, no es extraño que la inmensa mayoría de todos sus habitantes se vean envueltos en todos los horrores de la miseria, teniendo fuentes de riqueza capaces de inundarlas de bienes, no solamente de los de primera necesidad, sino aun de mucha parte de los de mera comodidad y lujo. Ninguna hay de todas ellas que no

* Querer que porque se carece de plata, se carezca de todo lo que no es plata, es ciertamente un absurdo de que apenas parece capaz el entendimiento humano. Con razón dijo Séneca *veniet tempus, quò posteri tam aperta nesciisse mirentur.*

tenga sobra de tierras que se pueden cultivar y que no se cultivan, y un sobrante de brazos que pueden trabajar y que no encuentran en qué ocuparse. Por eso va todo tan atrasado en Europa que su población no se dobla, sino cada quinientos años, como ya lo notamos más arriba con Smith. No sucede así en el vasto y dilatado imperio de la China, donde es desconocido el admirable saber de contener la producción con la moneda de oro y plata, y donde por consiguiente todos los manantiales de la riqueza fluyen sin estorbos ni embarazos.

La agricultura ha llegado a tal punto* entre los chinos, que después de cultivados todos los valles, laderas y colinas, han labrado hasta los cerros más altos, teniendo que subir a fuerza de brazos toda la tierra vegetal, necesaria para remplazar la que continuamente se deslíe y precipita hacia los valles por la acción de la lluvia. La abundancia de las producciones agrícolas y fabriles da lugar a un mercado tan vasto, que en su comparación es casi cero todo su comercio exterior, y el interno sólo *es acaso en su extensión muy poco menos que el general de todas las naciones de Europa*, en sentir de Smith,** y en fin, su población ha llegado a la asombrosa suma de doscientos millones de habitantes, en términos de que no bastando ya aquel terreno para alimentar mayor número de hombres, se ven en la dolorosa precisión de sacrificar todos los años muchos millones de niños recién nacidos, por no poderlos mantener las escasas facultades de sus padres.

Y bien ¿cómo es que la China sola, sin ejemplo entre ninguna otra de todas las demás naciones del antiguo y nuevo mundo, ha podido caminar tan constante y progresivamente hacia su omnímoda prosperidad, hasta llegar a un grado estacionario, del cual no parece ya poder pasar ulteriormente? Este prodigio inaudito de la China proviene de que allí jamás se ha pensado en poner trabas al resorte de la producción, constantemente reprimido entre todas las naciones; allí se produce todo cuanto puede producirse, porque todo cuanto se produce, se consume, y se consume cuanto se produce, porque siempre hay toda la abundancia de moneda necesaria para comprar todo cuanto se puede consumir, sin advertirse allí jamás lo que pasa diariamente entre nosotros y entre todos los demás pueblos de la tierra, de que sean muchos millones de veces más las compras que dejan de hacerse en cada día por la falta de moneda, que las que se hacen con ella. La moneda de los chinos siempre está circulando perennemente en el seno de aquel imperio vasto, sin poder salir jamás por ninguno de sus puertos, al revés de lo que sucede con la nuestra de oro y plata que está saliendo incesantemente para fuera, siendo siempre menos la que queda girando entre nosotros, que la que se exporta todos los años para las naciones extranjeras. Así es que esta moneda de los chinos conserva todo el carácter de una verdadera *antimercancía*, pues sin estar prohibida su extracción por alguna ley terminante y positiva, jamás se ha visto hasta ahora que ningún comerciante de la infinita muchedumbre de los que continuamente están acudiendo a los puntos de Cantón y de Macao, haya tratado jamás de comprarles una sola de sus *cagias* o monedas. Esta moneda de los chinos es toda de cobre con una ligera mezcla de plomo y estaño, que le da la dureza y

* Un agrónomo de los más ilustrados de la Europa no ha podido menos que hacer la siguiente confesión: *En la China la formación del calendario es un negocio de estado, la meteorología de cada provincia tiene los registros, y sus tribunales. Los europeos estamos todavía muy lejos de tener tan buena policía y preferimos disputar contra lo que practican los chinos, ó poner en duda la antigüedad y excelencia de su administración, que imitarlos en lo que sea útil y provechoso.* Véase el t. VI de las Memorias de Agricultura y Artes de Barcelona, pág. 20.

** t. III, l. IV, cap. IX, pág. 316.

consistencia de nuestro metal campanil; las piezas están taladradas por el centro para poderlas ensartar y cargar fácilmente, sin riesgo de que se pierdan,* y de estas sartas forman las sumas que llaman *maces* y *canderenas.*

Para dar alguna idea del pequeño valor de estas monedas, baste observar lo que dice de ellas el Lord Macartney en la historia de su viaje a la corte de Pekín por los años de 1793 y 94, a saber que un peso del cuño mexicano vale por seiscientas de estas *cagias,* y en algunas provincias, por setecientas y cincuenta. Si nosotros, siguiendo la división natural del peso del cobre en onzas, medias onzas, cuartas y ochavas, formamos monedas cuyo valor intrínseco corresponde al de cuartos, ochavas, diez y seisavos y treinta y dosavos del medio o adarme de plata, todavía estas últimas monedas, es decir, los treinta y dosavos, quedarán mucho más manejables y estarán mucho menos expuestas a perderse de entre las manos, que los medios de plata, pues tendrán un peso duplo de éstos o el de los dos adarmes, como los reales de plata. En este caso, las monedas más pequeñas de cobre que representen las últimas fracciones del peso de plata de nuestro actual cuño mexicano, se acercarán mucho al valor de las *cagias* de los chinos, pues llegarán al número de quinientas doce, y todavía quedará campo abierto para doblar este número en caso necesario, formando sesenta y cuatroavos del medio de plata que consten de un adarme de cobre, así como los medios reales de plata que sólo contienen el peso de un adarme de este metal, y entonces nuestro sistema de moneda llegaría a un grado de perfección digno de un pueblo extremadamente civilizado que, conociendo perfectamente bien la teoría de la producción de las riquezas, afianzaría su reproducción y multiplicación, facilitando los medios de su consumo hasta en sus últimos y más pequeños elementos.

A la verdad, el arte de la civilización está todavía tan en mantillas, que ninguno de los economistas más ilustrados de la Europa ha meditado hasta ahora lo bastante sobre la necesidad de la subdivisión de la moneda. Estando subdividos infinitamente en la naturaleza todos los objetos destinados a satisfacer las pequeñas, pero infinitas necesidades del hombre, y siendo también muy pequeñas las cantidades que cada uno de estos objetos entran en la composición del alimento diario de cada individuo, es evidente que sin monedas equivalentes a los pequeñísimos valores de las cortas porciones que de cada objeto puede consumir cada individuo, se vería en la necesidad de invertir en cada compra más moneda de la necesaria, y se vería privado, por lo mismo, de poder adquirir con el sobrante otra de las cosas que le hiciesen falta. Así es que esta subdivisión de la moneda es una cosa de primera necesidad para facilitar los consumos, sin los cuales es imposible que se reproduzcan y multipliquen los bienes, pues su reproducción, a confesión de todos los economistas, no tiene otra medida que la de los consumos. El comercio de las cosas bien puede hacerse en grande, pero ellas no se consumen sino en pequeño, y así sólo la moneda menuda facilita este consumo, es el verdadero eje de la

* En todo manifiesta el pueblo chino que es de una civilización muy antigua, pues ha tratado de remediar unos inconvenientes cuya precaución no es todavía una necesidad concreta en los demás pueblos de la tierra. El que quisiere formarse alguna idea de lo crecida que es la cantidad de moneda menuda que se pierde continuamente por el poco aprecio que se hace de ella y por el poco cuidado con que se la conserva, no tiene más que informarse de nuestros pulperos o tenderos de comistrajo, quienes a cada moneda tienen que estar haciendo nuevas provisiones de *tlacos,* para remplazar los que se pierden en poder de sus marchantes, a cuyas expensas medran, ganando más de un ciento por ciento con su malísima moneda, que no vale realmente las fracciones de la moneda de plata que representa, como que la forman de madera, plomo, estaño, etcétera.

circulación del comercio. Con la división ideal de la moneda no es tan fácil el hacerlo por menor como con su división real, verdadera y efectiva. En la provincia de Guadalajara, por ejemplo, sería muy embarazoso comprar diez y seis cosas con medio real de plata, y la memoria del vendedor tendría que fatigarse demasiado en unas ventas de un detalle tan minucioso, si el mismo medio de plata no estuviera representado efectivamente por diez y seis monedas físicas llamadas *pilones*, con cuyo auxilio puede muy bien el comprador, sin embarazar demasiado al tendero, mercar las diez y seis cosas, que quiere adquirir con el medio.

Tan pequeño, como es, el valor de las monedas o *cagias* de los chinos, basta una sola de ellas, dice el Viajero Universal,* para comprar *una taza de café, un vaso de aguardiente, una pipa de tabaco*, etc., y lo mismo sucedería entre nosotros, si el valor del adarme de plata estuviese representado por treinta y dos monedas de cobre del peso de dos adarmes. Con una sola de ellas podría comprarse un plátano, un zapote, una guayaba, un limón, una tuna, una pitaya, un ajo, una cebolla, media docena de cuauchiles,** un pozuelo de miltomates, un par de nueces, una hebra de pita, etc., en las épocas y parajes en que el centenar de las cosas referidas no pasa de real, o real y medio. Si el valor del adarme de plata estuviera efectivamente representado por las treinta y dos monedas de cobre mencionadas, se pudiera pagar con ellas hasta los servicios más pequeños, sin que nada se hiciese de balde; los mendigos hallarían más fácilmente quien pudiese darles una limosna, y sobre todo, este sería el arbitrio infalible de que el gobierno sacase grandes sumas hasta de las gentes más pobres, no estorcionando al miserable con lo cuantioso de una contribución que lo arruinase, sino con la acumulación de las muy pequeñas incesantemente repetidas, así como el diestro y hábil negociante que rejunta un grueso capital, no de las grandes ganancias de cada venta en particular, sino de los pequeños lucros de la repitición de muchas, centuplicadas con el cebo de la baratura. El hombre bárbaro e incapaz de reflexionar sobre nada, mientras mayor es su estupidez y su ignorancia, más se desdeña de hacer las cosas en detalle, y todo lo quiere hacer en grande y de un solo golpe, sin advertir que el mismo Dios, con ser Dios, no ha formado los objetos más grandes de la naturaleza sino de partes infinitamente pequeñas, como la tierra que sólo se compone de átomos, y como la inmensidad de las aguas del océano que sólo constan de imperceptibles y pequeñas gotas.

Desde el principio del mundo no ha habido tres invenciones más grandes, dice el Marqués de Mirabeau, ni que hayan dado tanta estabilidad a las sociedades políticas, no contando ahora con otros inventos que las han enriquecido y adornado, como la de la escritura, la cual solamente habilita a la naturaleza humana para transmitir sin alteración sus leyes, sus contratos, sus anales, y

* t. v, pág. 276.

** Yo me he puesto varias veces a contar, a consecuencia de mis reflexiones sobre los impedimentos de los consumos, las sartas de este picante y aromático pimiento con que casi todos los indígenas de este Estado de Jalisco, componen la salsa de su almuerzo diario, y he hallado que contienen hasta seiscientos, sin pasar su precio de un real en los años de abundante cosecha. Véase pues, si el tendero de por menor, que compra treinta y siete por un *pilón* o diez y seisavo del medio de plata, para dar media docena de estos pimientos por un treinta y dosavo de la misma moneda, ganando doscientos por ciento. Lo que ahora sucede con unos pocos renglones de corta monta, sucedería con muchos más, si se adoptase un buen sistema de reparto de tierras que multiplicasen los labradores, y si hubiere abundancia de moneda pequeña que pudiesen fácilmente adquirir los pobres con su trabajo para comprar lo necesario de su consumo.

sus descubrimientos. La segunda es la invención de la moneda, que liga todas las relaciones que tienen entre sí las naciones civilizadas. La tercera, la tabla económica, que es el resultado de las otras dos, que las completa pefeccionando sus objetos, el gran descubrimiento de nuestra edad; pero cuyo beneficio y fruto sólo nuestra posteridad ha de ser quien le disfrute. * Pero este elogio magnífico y pomposo que ha hecho de la moneda el *amigo de los hombres*, y que nada tiene de exagerado si recae sobre lo que debe ser la moneda, y no sobre lo que ha sido en todos los pueblos del mundo, de ninguna manera puede convenir a la de plata. Esta moneda por los notorios defectos de que adolece y que acabamos de analizar, esto es, por su cualidad eminente de mercadería que la expone a estar saliendo incesantemente del territorio de cada nación, para pasar al de las otras, y con la cual, por consiguiente, jamás podrá contarse con seguridad para que sirva perpetua y constantemente de palanca de los cambios; por su escasez, que da lugar a que sean muchos más los cambios que por su falta dejan de hacerse diariamente, que los que se hacen por su medio y por su indivisibilidad en pequeñas piezas cómodamente manejables y ajustadas al bajo precio de los pequeños objetos de consumo, jamás dejará de ser otra cosa que la traba de la producción, y lejos de podérsela mirar como la palanca de la civilización de la especie humana, se la debe ver, por el contrario, como el resorte principal y más poderoso de su actual degradación y envilecimiento. Al revés, el cobre, por la facilidad de poderse acumular en pocos años, hasta ponerse a nivel de los consumos y de los consumidores por los obstáculos que opone a su extracción, a causa de su poco valor y mucho peso y por la comodidad de poderse dividir en partes muy menudas y proporcionadas al valor de los pequeños objetos del consumo de por menor, que es el único modo con que todo se consume entre los hombres, siempre deberá ser visto, como el muelle más activo y vigoroso de la gran rueda del comercio interior de las naciones, como el instrumento de la abundancia, y por consiguiente, como la palanca natural del *liberalismo*.

En conclusión, solamente la moneda de cobre, fabricada en abundancia, puede dar todos los ensanches posibles al consumo de la riqueza, facilitándolo hasta en sus últimos elementos, y sólo ella, por consiguiente, podrá poner en marcha el carro de la producción, constantemente paralizado o detenido por la escasez de la plata. Esta ventaja inapreciable de la moneda de cobre, origen de todas las demás naturales y sociales que el hombre puede disfrutar sobre la tierra, hace que desaparezcan o sean enteramente nulos todos los inconvenientes y defectos que la irreflexión y la ignorancia puedan poner a esta moneda divina. El más fuerte y obvio que desde luego se presenta contra ella, es el de su embarazosa y difícil conducción de unos a otros lugares a causa de su mucho peso y volumen; pero no se adiverte que la mayor parte de las cosas de primera necesidad que se compran con ella, tienen sin comparación mucho mayor peso y volumen, y no por eso dejan de ser objeto de un comercio y de una circulación muy activa. Cuando la carga de maíz, por ejemplo, estuviere al valor de dos pesos, se la comprará con ocho libras de cobre, pero pesando doce arrobas la carga, es evidente que tiene un peso treinta y siete veces y media mayor que el cobre con que habrá de comprársela. Lo mismo que digo del maíz, sucede a proporción con otros muchos objetos destinados a nuestro diario sustento, como el frijol, el garbanzo, las patatas, las habas, la lenteja, etcétera.

* Smith t. III. l. IV. cap. VIII, pág. 314.

En segundo lugar, este mismo peso y volumen de la moneda de cobre es precisamente la cualidad que nos la debe hacer más preciosa, como que es la que dificulta a los extranjeros su extracción y asegura su permanencia entre nosotros, al revés de la de plata y oro siempre expuestas a volársenos de entre las manos y a dejarnos sin palanca para los cambios, como ha sucedido con los dos millones de pesos que de ella se han acuñado desde el principio de la conquista, y de los cuales es casi nada la cantidad que circula en nuestro suelo.

En tercer lugar, este inconveniente de la difícil conducción de esta moneda de unos a otros lugares está enteramente vencido con la organización del banco nacional, de que tantas veces he hablado en mis escritos, y que por medio de grandes depósitos de ella en todos los lugares, facilita su conducción mucho más que la del oro y de la plata, por medio de libramientos siempre pagaderos a letra vista y girados con un pequeño interés.

Todavía sería mucho más infundada la objeción de que la fábrica o fundición de esta moneda sería demasiado costosa, pues por mucho que lo sea, jamás lo será tanto como la amonedación de la plata, operación en que se gastan anualmente sumas inmensas, sin conseguirse otro efecto que el de gastar para perder o gastar para rebajarle su valor a este precioso metal, y después de todo, y a pesar de tanto gasto invertido en la acuñación diaria e incesante de esta moneda año por año, jamás hemos podido conseguir en tres siglos el fijar entre nosotros toda la cantidad necesaria para mantener en corriente la explotación de los obstruidos manantiales de nuestras minas, campos y talleres. En la amonedación del cobre se gastará mucho, es verdad, pero se gastará de una vez, y este metal una vez amonedado seguirá circulando entre nosotros muchos años, sin necesidad de refundirlos, hasta que se hubiere gastado con el uso. Después de todo, es necesario considerar las pérdidas que en la fundición de esta moneda sufriere la nación, con la que experimenta el labrador con la semilla que arroja por el suelo para verla después centuplicada, pues todos los gastos serán abundantemente recompensados con la asombrosa cantidad de productos de toda especie que comenzarán luego a rendir los capitales fecundados con su auxilio, y hoy esterilizados por su falta.

APÉNDICE III

De la organización de un banco nacional, para dar un golpe mortal y perentorio al despotismo

CAPÍTULO I
De la creación de una palanca perpetua y permanente para la organización del Banco Nacional

ARTÍCULO 1. En toda la extensión de la República no circulará otra moneda que la marcada con el sello nacional y se abolirá la privada de los pulperos, que actualmente circula, sin ninguna garantía en puntos muy reducidos del mercado público, y que por lo mismo más es un estorbo que una palanca para el giro del comercio de por menor.

ART. 2. No pudiéndose hacer de plata las monedas que representan cantidades inferiores al adarme de este metal, por la suma pequeñez que adquirirían, en términos de perderse fácilmente de entre las manos, para la fabricación de las de esta clase se adoptará el cobre, no

dándole el valor de dos pesos por libra, como tiene el acuñado en México por el gobierno español, sino solamente el de dos reales, para que su valor numismático quede al nivel de su precio mercantil.

ART. 3. A consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, los *tlacos* o cuartos del medio real de plata se compondrán de una onza de cobre; los medios *tlacos* u ochavos, de media onza; los *pilones* o diez y seisavos, de una cuarta, y los medios *pilones* o treinta y dosavos, de una ochava.

ART. 4. Toda la moneda de la República tanto la de oro y plata como la de cobre, no tendrá más que un solo *typo*, y será el que la experiencia de más de un siglo tiene acreditado ser el más fuerte para resistir a la frotación o al uso de su manejo, es decir, el de los dos mundos unidos y colocados entre dos columnas, con la inscripción DISSITOS. NECTIT. y al pie, el lugar de la fabricación y las iniciales del nombre y apellido del fabricante, y al reverso, el genio de la libertad, con la inscripción DEUS. ET. LIBERTAS. y al pie, la fecha de la fabricación y el valor de la moneda, como por ejemplo, en los treinta y dosavos de cobre, 1/512 VNC. ARG., es decir, *unum quingentesimum duodecimum uncide argenti.*

ART. 5. Siendo la moneda indispensablemente necesaria para mantener en un continuo movimiento la gran rueda de la producción, y no pudiéndose contar seguramente para este efecto con la moneda de oro y plata, por la tendencia que tienen una y otra a salir hacia afuera a causa de la cualidad eminente de mercaderías de exportación, como nos lo tiene acreditado la experiencia de tres siglos, a fin de que nuestro comercio interior de por menor, del cual depende esencialmente el de por mayor, tanto interior como exterior, jamás se paralice por falta de su palanca natural que es la moneda, se labrarán de la de cobre quince pesos por cada habitante de la República o noventa millones para toda la población que no baja de seis millones de habitantes.

ART. 6. Estos noventa millones de moneda de cobre se repartirán por todas las provincias en razón directa de su población o a razón de quince pesos por cada habitante; la cantidad que le tocare a cada provincia, se repartirá por todos sus distritos igualmente a razón de quince pesos por cada habitante, y la que le tocare a cada distrito, se repartirá en la misma proporción por todos sus cantones o secciones del mismo distrito.

ART. 7. Para abreviar, y hacer al mismo tiempo lo menos costosa posible la fabricación de esta moneda, ella no será acuñada, como la de oro y la de plata, sino solamente vaciada, como las *cagias* de los Chinos, y se la fabricará en las capitales de todas las provincias y en todos los Reales de Minas abundantes en vetas de cobre, donde este metal pudiere adquirirse al precio de veinte pesos el quintal.

ART. 8. Para facilitar la colección de la mala moneda de esta clase, fabricada en México, impedir los progresos de su falsificación, y favorecer la explotación de los minerales de cobre, la nación se reservará el derecho de comprarlo a los mineros, pagándoselo a razón de veinte pesos el quintal, como también el de comprar y pagar al mismo precio todo el cobre viejo de utensilios que se vendiere, siendo de cuenta de los vendedores los gastos de fundición para reducirlo a planchuelas o barretones, y lo venderá a los particulares a razón de dos reales la libra.

ART. 9. Para colectar los fondos necesarios para la fabricación de esta nueva moneda, se invitará a todos los prelados seculares y regulares de todas las iglesias de la República, para que presten a la nación todas las alhajas de oro y plata que quisieren, y que no fueren indispensa-

blemente necesarias para el culto. La nación afianzará la devolución de estas alhajas de cada iglesia, de su mismo peso y ley, y mejoradas de hechura, con más de medio millón de pesos con que las iglesias catedrales concurren anualmente para varios ramos de la administración del gobierno, quedando todos los años en poder de los cabildos la tercera parte de dicha cantidad para el abono del importe de estas alhajas.

ART. 10. Para el mismo importante objeto, todas las iglesias prestarán a la nación todas las campanas que no fueren de primera necesidad para convocar a los fieles a los templos, y la nación devolverá su importe, garantizándolo con los mismos fondos que quedan especificados en su artículo anterior.

ART. 11. Luego que se haya fabricado suficiente cantidad de esta moneda, para comenzar a organizar el banco nacional en todas las capitales de provincia, pueblos cabeceras de distrito y de cantón, se irá dirigiendo a los administradores la que le tocare a cada punto, bajo la inmediata inspección y responsabilidad del Gobernador de cada lugar y del congreso municipal, quien cuidará de facilitar lugar seguro para la custodia de estos caudales, y tanto el primero, por sí mismo o por medio de alguno de sus ayudantes, como el segundo por medio de dos individuos, sorteados de su mismo seno, revisarán la existencia de la moneda, sujetándola al peso de romana, en los cortes de caja semanarios, mensuales y anuales. Dos o tres vecinos de cada lugar serán árbitros, siempre que quisieren, a presenciar la revisión de esta moneda, y en este caso, autorizarán con sus firmas el resultado, a continuación de los revisores de oficio.

ART. 12. Para excusar a los ciudadanos de la necesidad de cargar esta moneda de unos lugares a otros, a todos los que quisieren se les darán libramientos con el premio de un tres por ciento, con tal que la distancia a que hubiere de pagarse la libranza no pase de cincuenta leguas; pero si pasare de ella, pagarán un *tlaco* más por cada peso a cada vez que la distancia ulterior fuere de otras cincuenta leguas.

ART. 13. A cada libramiento que se girare, se dirigirá carta de aviso al banquero contra quien se librare. Todos los libramientos girados en un año se marcarán con el número que les corresponda desde el 1 en adelante, y de cada uno de ellos se apuntará en un libro, destinado expresamente para el efecto, una partida como la del tenor siguiente. *Por cien pesos librados en esta fecha, con tal número, contra el banco de tal parte, a favor del ciudadano tal = tres pesos.* En la casilla de cada una de estas partidas se dejará un claro suficiente para apuntar la razón del recibo de la carta de aviso, y la fecha en que se pagare el libramiento.

ART. 14. Cuando en algún banco escaseare la moneda para estos libramientos, el administrador, instruido por los estados semanarios y mensuales de los demás bancos de los parajes en que la hubiere en abundancia, ocurrirá con tiempo al más cercano, pidiendo la que hubiere menester, en calidad de reintegro.

ART. 15. El ciudadano que acumulare en su poder una gran cantidad de esta moneda y no quisiere mantener su casa embarazada con ella, será árbitro a depositarla en cualquier punto del banco nacional, pagando un *tlaco* por cada peso en cada año, y recibirá un billete de constancia, impreso en papel de marquilla, y marcado con el número que le corresponda, según el orden con que lo tomare, y estos billetes se renovarán todos los años, y de ellos imprimirán lista en todos los cortes de caja semanarios, mensuales y anuales, todos los banqueros provinciales, distritales y cantonales de la República, como también de todos los libramientos que hubieren recibido y pagado, con expresión de sus números y del origen de su procedencia.

CAPÍTULO II
De las fuentes del Banco Nacional

ART. 16. Para asegurar perpetuamente la conservación de los capitales píos, sin que ninguno de ellos llegue jamás a perderse, como tantos otros de esta clase que se han perdido y están todavía expuestos a perderse; para afianzar igualmente para siempre los sufragios debidos a las almas de los fundadores de estos capitales, y sus réditos a los usufructuarios de ellos, y en fin, para que los bienes consignados a las manos muertas entre en el mismo giro rápido y activo de la fructificación y circulación de los demás bienes nacionales, la nación tomará todos los capitales de esta clase, a cuya toma no se opusiere perjuicio de tercero, para fincarlos sobre tierras, cuyo valor siempre creciente en razón directa de la población y la industria, garantice más y más cada día estos capitales y sus productos.

ART. 17. Teniendo la nación afianzada, generalizada y mejorada, la educación y enseñanza de la juventud de ambos sexos, en toda la extensión del territorio republicano, tomará todos los capitales, fincados para este objeto, y serán agregados a los fondos del banco.

ART. 18. Teniendo asimismo la nación afianzada, generalizada y mejorada la curación de los enfermos en los hospitales, tomará todos los capitales fincados para este objeto, y los agregará igualmente a los fondos del banco.

ART. 19. La nación tomará todos los capitales de capellanías, pertenecientes a clérigos particulares, llamados por los fundadores a disfrutarlas, siempre que quisieren espontáneamente ver mejor garantizados estos capitales y el pago de sus réditos, depositándolos en poder de la nación, que en poder de algún ciudadano particular.

ART. 20. La nación tomará todas las fincas rústicas y urbanas de monjas y frailes, siempre que las comunidades a que pertenezcan, quisieren espontáneamente tener bien afianzadas estas fincas y el pago de sus réditos, obligándose la nación a ponérselos netos y libres de todo gasto de administración y recaudación, dentro de las mismas celdas de sus conventos.

ART. 21. Todas las tierras adquiridas a título de conquista, y vinculadas para mayorazgos de las familias de los conquistadores, serán devueltas a la nación, agregadas a los fondos del banco y distribuidas en predios, con arreglo a la ley agraria fundamental de la República. Pero, por un efecto de equidad, a sus actuales poseedores, hijos y nietos, con tal que fijen su residencia en el territorio republicano, se les dará una pensión, que para los sucesores de Cortés y Colón no pasará de siete mil pesos, y para los demás, se arreglará en los términos que dispusiere el supremo congreso nacional.

ART. 22. La nación tomará todos los caudales que los ciudadanos quisieren imponer al rédito de un cinco por ciento sobre los fondos del banco nacional, obligándose a pagarles estos réditos poniéndolos a su debido tiempo dentro de las mismas casas de sus moradas.

ART. 23. En fin, todos los ramos de la hacienda pública* serán otras tantas fuentes destinadas a nutrir los fondos del banco nacional.

* Estos ramos quedan detallados en la primera edición y se reducen por la mayor parte a contratos de compañía en que todos y cada uno de los individuos de la asociación adquieren a la par y al precio más barato posible los bienes más indispensables de uso general. Este sistema tiene una tendencia directa a diseminar los bienes nacionales, y a impedir su acumulación en pocas manos, de donde proviene el despotismo, la extremada desigualdad de condiciones y todos los males que tienen convertidas las sociedades actuales en unas asociaciones leoninas, compuestas de opresores y oprimidos.

CAPÍTULO III
Objeto de la organización del Banco Nacional

ART. 24. El objeto primario, principal, perpetuo y directo de la organización del banco, es la redención del terreno nacional, comprándolo a sus actuales propietarios, a medida que lo fueren vendiendo, para repartirlo al precio más barato posible entre el mayor posible número de ciudadanos y del modo más propio para que rinda la mayor posible cantidad de productos.

ART. 25. El segundo objeto es, garantizar la dignidad e independencia individual del ciudadano, impidiéndole postrarse en sus cuitas ante un déspota, y recibir dinero con usura, facilitándole la nación cuanto hubiere menester en sus empresas sobre tierras, casas, metales de toda especie labrados y en pasta, y sobre todo género de piedras preciosas, joyas, alhajas y efectos cuyo depósito pueda efectuarse sin demérito de su valor el premio de estos préstamos, será de un cinco por ciento en un año; de dos y medio por ciento, en medio año; de diez reales por ciento, en tres meses, etcétera.

ART. 26. El tercer objeto, consecuencia forzosa de los dos antecedentes, es aniquilar de raíz el despotismo y prepotencia de la aristocracia, ocasionados por la acumulación de la riqueza nacional, y principalmente de la territorial, en un corto número de manos, y asegurar sin convulsión sobre sus ruinas el triunfo de la democracia, del orden, de la justicia, del equilibrio social y de la dignidad de nuestra especie.

CAPÍTULO IV
Del manejo del Banco Nacional

ART. 27. Cada uno de los ramos destinados a nutrir el banco, tendrá su arca particular, con la inscripción que le corresponda, como por ejemplo: *Arca de la renta general territorial. Arca de la contribución provisional sobre tierras de los propietarios particulares. Arca de la contribución provisional sobre casas,* etc. Así mismo, cada arca tendrá un oficial encargado privativamente de su manejo, y uno solo no podrá encargarse del de dos o más arcas, a menos que lo pudiere desempeñar bien y cómodamente. También tendrá cada arca tres llaves de distinta cerradura, una de las cuales parará en poder del administrador del banco, otra en poder del contador u oficial mayor, y otra en poder del oficial encargado privativamente de su manejo. En fin, dentro de cada arca habrá un libro en que se apuntarán las partidas de ingreso y egreso.

ART. 28. Al fin de cada semana, mes y año, se publicarán en todos los lugares donde estuviere organizado el banco, los estados del ingreso y egreso de cada una de sus arcas. Los estados de los bancos cantonales se dirigirán al banco del pueblo cabecera de distrito en donde se formará, publicará y circulará por todos sus cantones el estado general distrital del banco. Los estados distritales se dirigirán al banco de la capital de su provincia respectiva, en donde se formará y publicará el estado general provincial del banco que se circulará por todos los bancos distritales y cantonales. En fin, los estados generales provinciales del banco se dirigirán al banco de la metrópoli, en donde se formará, publicará y circulará el *Cuadro general del Banco Nacional en todos los puntos de su ramificación por todo el territorio republicano.*

APÉNDICE IV

SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA LEY AGRARIA PARA DAR MEDIOS DE SUBSISTIR A TODOS LOS QUE CARECEN DE ELLOS O PARA ENRIQUECER A TODOS LOS POBRES

La ley agraria, de que tanto he hablado en mis escritos anteriores, y cuyo establecimiento es de la más absoluta e indispensable necesidad para la extirpación de la miseria y vicios que manan de ella, está contenida en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 1. Todas las tierras pertenecientes a la nación, y todas aquéllas de que pueda disponer sin perjuicio de tercero y que quedan especificadas en el capítulo II del apéndice anterior, serán divididas en predios de un octavo de legua cuadrada o en porciones de cinco caballerías en que quepan treinta fanegas de sembradura de maíz.

ART. 2. El precio del arrendamiento anual de cada una de las referidas treinta fanegas de sembradura de maíz, en las tierras más feraces y más ventajosamente situadas para el comercio, será de doce reales; en las de mediana calidad, de un peso, y en las de ínfima clase, de poco más de seis reales, o lo que es lo mismo, los predios de primera clase se arrendarán por cuarenta y cinco pesos al año, los de segunda, por treinta, y los de tercera, por veinte y cinco.

ART. 3. Los ciudadanos que arrendaren estos predios, los disfrutarán por todo el tiempo de su vida, y serán árbitros a hacer en ellos todas las mejoras que quisieren, obligándose la nación a pagárselas por su justo precio, el día en que fallecieren o quisieren renunciarlos, precediendo, para tal efecto, avalúo de peritos, sorteados de entre los mismos labradores.

ART. 4. Para ser arrendatario de un predio nacional, no se necesita más que afianzar el pago de su arrendamiento, y dos de estos mismos arrendatarios podrán ser fiadores de un tercero. En los archivos de los congresos municipales habrá un libro en que se apuntarán todos los predios nacionales, que existan en cada jurisdicción, los nombres de los arrendatarios y los de sus fiadores, que firmarán a continuación de los sujetos a quienes hubieren fiado.

ART. 5. Siempre que hubiere de arrendarse algún predio nacional, se pondrá en pública subasta y se rematará en el mejor postor.

ART. 6. Todas las leyes contrarias a la libre circulación de las tierras, quedan desde luego abolidas.

ART. 7. Todas las tierras pertenecientes a los indios, tanto las que formaren el fundo legal de sus pueblos, como las que se hubieren comprado con dineros de la comunidad, se dividirán en tantas porciones iguales, cuantas fueren las familias de los indios, y a cada una se le dará en propiedad la que le toque, para que haga de ella el uso que quisiere.

ART. 8. De todas las tierras pertenecientes a la nación y de todas las que fuere comprando con los fondos de su banco nacional, sólo dejarán de dividirse en predios un sitio de ganado mayor cerca de las capitales de provincia, medio sitio cerca de las poblaciones de segundo orden, y un cuarto de sitio cerca de los pueblos más pequeños, quedando estas porciones de terreno destinadas para el uso del servicio público.

ART. 9. Las porciones de terreno, mencionadas en el artículo anterior, serán cultivadas por la tropa de servicio de cada lugar, la cual recogerá en ellas todos los granos y forrajes necesarios para la mantención de sus caballos, y el sobrante se repartirá entre los mismos individuos de la tropa. En ellas se conservará un número suficiente de mulas de tiro para los ca-

rros del servicio público y aparejadas de lazo y reata, para poner un término a la balandronada execrable de despojar de sus mulas y caballos al arriero y trajinante para que sirvan de bagajes a los empleados y soldados. En ellas habrá potreros levantados por la tropa para que pazcan los ganados destinados a abastecer las carnicerías de los lugares, pagando los interesados una ligera pensión por cada cabeza. En ellas, en fin, se practicarán los ensayos de grande de los nuevos métodos o nuevos ramos de agricultura, proyectados por los sabios agrónomos de la nación.

Mientras no se adoptaré un sistema de reparto de tierras, como el contenido en los nueve artículos de la ley agraria que se acaba de exponer, ni las tierras rendirán jamás todos los productos que pueden dar, ni se conseguirá formar con solidez un buen establecimiento republicano, pues todos los que se levantaren sin esta base encontrarán el mismo fin trágico y desastroso, que las repúblicas de los antiguos griegos y romanos, cuya ruina no tuvo otro origen que el de la acumulación de la propiedad territorial en pocas manos, como lo ha demostrado el sabio naturalista Bernardino de S. Pedro con testimonios claros y terminantes de Plinio y de Estrabón. Pero aun cuando el territorio de una nación estuviere extremadamente subdividido entre un crecido número de ciudadanos, y aun cuando el sistema de los arrendamientos vitalicios encontrare en un gobierno sabio e ilustrado toda la protección enérgica y vigorosa que encuentra en el de Inglaterra, no por eso se logrará establecer una buena democracia sobre las bases generalmente reconocidas de conveniencia universal y de justicia, mientras se conservare y no tratare de abolirse por medios suaves y pausados el derecho horrible de la propiedad territorial, perpetua, hereditaria y exclusiva: porque es tal la influencia de este ominoso derecho en el exterminio de la libertad o en la opresión de la clase mercenaria de que se compone la inmensa mayoría de las naciones, que la misma constitución inglesa que pasa por la más popular de todas las de Europa, examinada, al fin, a la claridad del gran fanal de la ilustración del siglo XIX, se ha encontrado ser esencialmente tiránica o aristocrática, tanto en su alta cámara como en la baja, por el poderoso influjo que en ella ejercen los propietarios territoriales. Son muy dignas de leerse sobre este asunto las observaciones de monseñor De Pradt en el capítulo XXIV del tomo segundo de su preciosa obrita intitulada *La América y la Europa*, a donde remitimos a nuestros lectores.

Para hacer ver las ventajas que producirá de luego a luego a toda la nación el establecimiento de esta ley agraria, y demostrar al mismo tiempo que hay más tierra que repartir, que ciudadanos a quienes repartírselas y que, por consiguiente, sobran los medios de enriquecer a todos los pobres, tomaremos para ejemplo de su pronta aplicación uno de los puntos más interesantes del territorio de este Estado de Jalisco, como lo es, sin disputa, el plan de tierra caliente anexo al apostadero de S. Blas.

Este plan que tanto de ancho como de largo, tiene una extensión de más de veinte y cinco leguas, contiene por lo menos seiscientas veinte y cinco leguas cuadradas, de las cuales pueden formarse cinco mil predios a razón de ocho por legua, para acomodar en ellos a cinco mil ciudadanos, mejorando de luego a luego la condición de más de veinte mil personas, aun suponiendo que las familias de los arrendatarios no pasen unas con otras de cuatro a cinco individuos.

Como aquellas tierras son todas de pan llevar, extremadamente feraces, propias para dar las más preciosas de nuestras producciones ecuatoriales, y como están tan ventajosamente si-

tuadas para el comercio, que para expender sus frutos los colonos a los extranjeros que doblaren el Cabo de Hornos, no tendrán que sufrir el gravamen de costosos fletes, todos aquellos predios deben reputarse por de primera clase y sus arrendamientos a razón de cuarenta y cinco pesos por año, o lo que es lo mismo, a razón de doce reales por cada fanega de sembradura de maíz, rendirán anualmente a la nación una suma de doscientos veinte y cinco mil pesos. Pero si se reflexiona en que una parte muy considerable de aquellos predios son propios para la elaboración de la sal común o muriato de sosa y que en la extensión de cinco caballerías o de un octavo de legua cuadrada, de que se compondrá cada uno, producirán muchos millares de cargas de este precioso ingrediente, por más que según sus productos se avalúe su valor capital a precios muy bajos, no dejará de ascender su arrendamiento a cuatrocientos o quinientos pesos y aun a mayor cantidad por las pujas que harán los ciudadanos interesados en adquirirlos. Así es que computados unos con otros los arrendamientos de los predios agrícolas y de los predios salinos, no será exagerado calcular en un millón de pesos la renta neta que percibirá la nación del establecimiento de la ley agraria en aquella fertilísima comarca.

Con este millón de pesos tendrá el estado con qué garantizar a los prestamistas el pago de los réditos de veinte millones que podrá tomar al cinco por ciento sobre los fondos del banco nacional para invertirlos en compras de tierras, que a su vez rendirán por lo menos otro millón de renta anual con que podrán asegurarse los réditos de otros veinte millones que podrán tomarse ulteriormente para emplearlos en el mismo importantísimo objeto, y así sucesivamente, de manera que la progresión de la toma de capitales para la redención del terreno nacional no tendrá más término, que el de la falta que hubiere de tierras que comprar.

El repartimiento de las tierras de S. Blas en los cinco mil predios referidos aumentará la masa anual de las riquezas del estado en más de diez millones en producciones agrícolas, siendo de advertir que gran parte de ellas podrán obtenerse dentro del corto espacio de seis meses después de hecha la partición de los predios, pues no pasa de este tiempo el periodo que media entre la siembra y cosecha del tabaco, añil, azúcar, algodón, maíz, frijol y otras legumbres, de que en aquel feracísimo plan puede establecerse un sistema incesante de siembras y cosechas por reinar en todo él una constante y perpetua primavera. Pero la más preciosa e incomparable ventaja que en aquel territorio producirá desde luego el establecimiento de la ley agraria, será el de convertir en el paraíso del estado de Jalisco un terreno que ha sido hasta ahora el terror de cuantos se acercan a sus inclementes contornos. Desmontado por los colonos el bosque, desaparecerán los enjambres numerosos de zancudos, mosquitos, jején, garrapatas y otros punzantes y venenosos insectos, que hacen intolerable la mansión en aquellos parajes, y comenzará luego a restablecerse la ventilación, que disipará los miasmas pútridos o gases deletereos que se levantan de los pantanos y aguas estadizas y que son el origen de las fiebres malignas que desolan aquella costa. Ni es de menos consideración la ventaja de proporcionar al estado para su seguridad y defensa cinco mil soldados de caballería, armados y montados a sus propias expensas, todos aclimatados, acostumbrados por el ejercicio de su misma profesión al manejo del caballo, endurecidos en la fatiga de las labores del campo, y que tendrán más interés que las tropas mercenarias en defender sus hogares y resistir una invasión, en cualquier caso ofrecido.

La nación no solamente puede comenzar desde luego a establecer la ley agraria en todos los terrenos baldíos y en todos los pertenecientes al fomento de las misiones de una y otra California y de las Filipinas, a los ex Jesuitas, a cofradías, legados y obras pías, sino también en las haciendas de muchos grandes propietarios territoriales que, con notable perjuicio suyo y de toda la nación, apenas sacan de sus vastas posesiones unas rentas miserables y mezquinas. Por ejemplo, los Paradas jamás han podido arrendar sus fertilísimas tierras de Aguacapan en más suma que la de tres mil pesos, y bien pudiera comprometerse el estado de Jalisco a darles anualmente seis mil y a reconocer sobre las mismas tierras el capital de ciento y veinte mil, que es el que corresponde a dicha cantidad de réditos. En los trescientos sitios mercenados de ganado mayor de que esta hacienda se compone, hay para acomodar a dos mil y cuatrocientos labradores, a razón de ocho en cada sitio, y aún suponiendo que solamente sean de primera clase o propios para rendir cuarenta y cinco pesos de arrendamiento anual, una tercera parte de los predios, otra tercera parte de mediana clase que se arrienden por treinta, y otra tercera de ínfima clase que se den por veinte y cinco, todos ellos producirán a la nación una renta neta de ochenta mil pesos, con los cuales podrá, si quisiese, redimir el capital en menos de dos años.

Ello es que si el Congreso del estado de Jalisco, penetrado de sus verdaderos intereses y arrastrado del placer de ver desaparecer de día en día muchos millares de pobres y de mendigos, comienza a emprender con calor el establecimiento de esta ley salvadora, en todos los parajes en que pudiere hacerlo sin perjuicio de tercero, yo no dudo que dentro de muy poco tiempo ascenderá a más de tres millones de pesos al año la suma de los arrendamientos de los predios nacionales, dentro de los solos límites de su demarcación, y con ellos podrá mantener constantemente asalariado un ejército de doce mil y quinientos hombres a razón de veinte pesos mensuales por cada soldado, con cuyo auxilio, no solamente podrá hacer respetar la justicia de sus derechos, sino también proteger, en caso necesario, la libertad de los demás estados del Anáhuac, contra cualesquiera tentativas de algún déspota interior o extranjero, que intentare de nuevo ultrajar los derechos de la humanidad afligida.

APÉNDICE V

MODO DE INTERESAR A TODAS LAS NACIONES EN LA PROSPERIDAD E INDEPENDENCIA DEL ANÁHUAC POR MEDIO DE UN SISTEMA LIBERAL DE COMERCIO EXTERIOR, DIRIGIDO A EXTIRPAR EL CONTRABANDO Y EL MONOPOLIO

ARTÍCULO 1. Todos los ciudadanos que quisieren dedicarse a la compra de efectos extranjeros, ya sea para lucrar en la venta de ellos, o ya simplemente para consumirlos, no formarán en toda la extensión de la República más que una sola compañía, única e indivisible.

ART. 2. Esta compañía nada tendrá de exclusiva, y serán árbitros a entrar en ella, tanto los comerciantes de profesión, como los no comerciantes, concurriendo para el fondo de compras con una o más acciones del valor de cien pesos cada una, sin pagar más derechos que un tres por ciento por vía de agencias de comisión, y el tres por ciento por la conducción del dinero desde el lugar de su entrega hasta el lugar en donde se hicieron las compras. La exhibición del dinero se hará en el banco provincial, distrital o cantonal de cada lugar, y el admi-

nistrador dará a cada interesado una patente en que constará el número de acciones que haya tomado.

ART. 3. Las patentes de los comerciantes de profesión se llamarán *patentes de número*, y estarán marcadas con el que les corresponda según el orden de tiempo con que hayan sido tomadas por los interesados. Las de los ciudadanos no alistados en la corporación mercantil se llamarán *patentes volantes*, y se marcarán igualmente con los números correspondientes según el orden de tiempo con que las hayan tomado sus dueños.

ART. 4. El gobernador de cada provincia, acompañado de seis comerciantes de profesión, hará echar en cántaro, escritos en cédulas, los números de las patentes de todos los comerciantes de profesión que hubieren tomado de veinte acciones inclusive para arriba, y hará sacar del cántaro por medio de un niño una por una, doce de estas cédulas. Los doce accionistas a quienes pertenecieren las patentes de los números contenidos en las cédulas sorteadas, serán los electores del Director de la compañía de comercio de la provincia.

ART. 5. Ocho días después de hecho el sorteo de los electores, se procederá a la elección del Director de la compañía de comercio de la provincia, presidiéndola el gobernador de la capital de la misma provincia, y en su defecto, el mayor general, y en defecto de éste, alguno de los ayudantes generales según el orden de su antigüedad. La elección se hará, poniéndose en pie cada elector, según el orden riguroso de sus asientos, y echando en una urna colocada a los pies de un crucifijo, la cédula en que hubiere escrito el nombre del comerciante a quien nombrare para Director, y diciendo en alta voz: *juro nombrar para Director de la compañía de comercio de efectos extranjeros de esta provincia al comerciante que según mi conciencia, es el más a propósito para desempeñar este encargo.* Del mismo modo seguirán votando los demás electores. El comerciante que sacare mayor número de votos, ese será el Director. En los casos de empate, será preferido el que hubiere tomado mayor número de acciones; si en esto fueren iguales, el mayor al de menor edad, y si en esto también fueren iguales, decidirá el presidente de la elección, que sólo tendrá voto en este caso. En los mismos términos se nombrará un secretario y tres oficiales para el servicio de la compañía. El Director tendrá tres mil pesos de sueldo; el secretario, dos mil; el oficial mayor, mil y doscientos; el segundo, novecientos, y el tercero setecientos.

ART. 6. Al día siguiente del nombramiento del Director, los mismos electores, bajo los mismos términos y fórmula, procederán a la elección de un Diputado de la compañía de comercio de la misma provincia.

ART. 7. Todos estos diputados del comercio de las provincias permanecerán en sus empleos, o serán removidos de ellos a voluntad de sus comitentes y a la del gobierno, siempre que descubriere en ellos alguna mala versación.

ART. 8. Todos estos diputados, al instalarse en sus empleos, harán juramento de servirlos con pureza, de no admitir obsequios, y de no hacer compra alguna en particular para sí u otra persona; pero podrán comerciar en las provincias por medio de sus dependientes, quienes tomarán sus acciones como uno de tantos y se surtirán de la masa de los efectos dirigidos a la totalidad de los accionistas.

ART. 9. De todos estos diputados, la mitad de los que pertenezcan a las provincias más orientales de la República, irá a residir a la villa de Xalapa, cerca del puerto de Veracruz, y la otra mitad de los pertenecientes a las más occidentales, se dividirá en dos secciones, una de las

cuales, irá a residir a la ciudad de Tepic, cerca del puerto de S. Blas, y la otra al pueblo de Chilpancingo, cerca de Acapulco, y cada una de estas tres secciones tendrá un presidente, un fiscal y un secretario, nombrados por el gobierno. El sueldo de los presidentes será de cinco mil pesos, el de los secretarios de cuatro mil, y el de los diputados de tres mil y quinientos. Estos sueldos se tomarán del producto de las patentes.

ART. 10. Se comunicará de oficio a todas las naciones que la República Mexicana está dispuesta a admitirlas a todas indistintamente al comercio de sus puertos, habilitando por ahora el de Veracruz en las costas del mar Atlántico, y los de Acapulco y S. Blas, en las del Pacífico, sin llevarles un solo maravedí por derechos de entrada.

ART. 11. Cada una de las naciones que quisieren ser admitidas al comercio de los puertos habilitados de la República, mandará a residir en la Capital de México un Cónsul que garantice la buena fe de cada uno de los comerciantes de su nación que vinieren a traficar en dichos puertos, y traerá consigo el arancel que rija en su país para el comercio de exportación. Además, cada comerciante extranjero vendrá autorizado para comerciar con una patente o permiso de su gobierno respectivo, concedido expresamente para tal efecto.

ART. 12. Luego que un buen extranjero arribare a cualquiera de los puertos habilitados de la República, el comandante o dueño de su cargamento dará parte de su arribo al gobernador del puerto, dirigiéndole una licencia o patente de permiso que trajere del gobierno de su nación y la factura de las mercancías que condujere a bordo. El gobernador dirigirá estos documentos por el correo diario a la junta de diputados de comercio, y ésta por el mismo correo diario los dirigirá al cónsul de la nación a que perteneciere el buque. Si el cónsul pusiere a los documentos el *Visto bueno*, la junta lo participará al interesado invitándole que pase al lugar de la residencia de la misma junta, para entrar en negociación.

ART. 13. Cada una de las juntas de diputados del comercio, residentes en Xalapa, Tepic y Chilpancingo, publicará un periódico con este título *Fanal del comercio exterior de la República del Anáhuac*. En él se insertarán los aranceles de comercio de las naciones extranjeras, garantizados con la firma de sus cónsules respectivos, traducidos en lengua vulgar y con expresión de la correspondencia que tengan con nuestras monedas las de cada país, mencionadas en su arancel. También se insertarán las arribadas de los buques, las facturas de las mercancías que condujeren, las posturas que la junta hiciere a cada cargamento, y los precios definitivos a que hubiere ajustado la compra de ellos. A este periódico se suscribirán los accionistas en masa de cada capital de provincia, los de cada pueblo cabecera de distrito y los de cada cantón o sección de distrito, como también todos los ciudadanos que quisieren, entregando el importe de la suscripción en la secretaría del congreso del lugar de su residencia, de donde se les dirigirá franco de porte a las casas de sus moradas.

ART. 14. A los precios efectivos a que la junta hubiere comprado los efectos extranjeros les añadirá un ochenta por ciento; mas a los procedentes de Asia e islas adyacentes, les cargará un ciento por ciento. En estos solos derechos quedarán refundidos todos los que se pagan actualmente en las infinitas aduanas de que el gobierno español ha dejado erizadas todas las poblaciones de la República y serán suprimidas todas estas aduanas.

ART. 15. Los accionistas de cada provincia, instruidos por el *Fanal del comercio exterior de la República del Anáhuac*, de los efectos que haya conducido cada buque y de los precios a que los hubiere comprado la junta de diputados, formarán la lista de sus demandas o pedidos. Ca-

da una de estas listas irá marcada con el número de la patente de cada accionista, y todas ellas serán reducidas a una sola lista general de pedidos por el secretario y oficiales de la compañía de comercio de cada provincia, que la dirigirán a la junta de los diputados.

ART. 16. Luego que la junta de diputados recibiere la lista general de las demandas o pedidos de los accionistas de una provincia, hará formar el cargamento, publicando en su periódico el detalle de los efectos, y el día de la salida. El cargamento será conducido de un lugar a otro con escolta de tropa de servicio de los mismos lugares, y los gobernadores de los distritos y secciones de distrito por donde pasare, inspeccionarán el número de los fardos a la entrada y salida de cada lugar, y darán parte de todo, tanto a la junta de diputados como al Director de la compañía de la provincia a donde el cargamento se dirigiere.

ART. 17. Entre tanto, la junta de diputados habrá circulado órdenes a todos los gobernadores de la carrera o camino por donde ha de pasar el cargamento, para que pongan los fletes en pública subasta y los ajusten con el arriero que hiciere postura más equitativa y ventajosa para los accionistas.

ART. 18. Cuando el cargamento hubiere llegado a la capital de la provincia de su destino, se organizará el tribunal de repartición, compuesto de cinco jueces sorteados de entre los mismos accionistas, nombrados de antemano para éste y otros casos, en la forma que queda prescrita en este código en el título *de la organización y desarrollo del poder judicial.* Este Tribunal, asociado del director, secretario y oficiales de la compañía, hará el repartimiento de los efectos a cada accionista según la lista de sus demandas, despachando primero a los de las patentes de número, y en seguida a los de las volantes, a unos y otros según el orden numérico de sus patentes. Concluido el repartimiento de los accionistas de la capital, se procederá al de los accionistas de los distritos de la provincia, avisándoles de antemano para que acudan por sí o por otra persona.

ART. 19. Todo accionista será árbitro a dirigirse a los lugares de la residencia de las juntas de diputados del comercio, para hacer por sí mismo las compras que quisiere, ya sea de los efectos almacenados por las juntas, ya de los conducidos por algún extranjero, ajustando la compra en este caso bajo la inspección de la junta respectiva, y pagando en ella los derechos prevenidos en los artículos dos y catorce de este Reglamento.

ART. 20. Las juntas de comercio tomarán de los fondos del banco nacional, en calidad de reintegro, todas las sumas necesarias para hacer grandes acopios de efectos de exportación que se les darán a los extranjeros a los precios corrientes en nuestros mercados públicos, sin cargarles más derechos que un cinco por ciento por vía de gastos de comisión y los costos que tuviere el almacenaje de los mismos efectos.

ART. 21. Las mismas juntas de comercio tomarán igualmente de los fondos del banco nacional en calidad de reintegro todo el dinero necesario para construir cada una en su respectivo punto un edificio cómodo, espacioso y magnífico, para el almacenaje y conservación en buen estado de todos los efectos de importación y exportación, y para dar alojamiento a los comerciantes extranjeros.

ADVERTENCIA

Las pruebas de la mayor parte de los artículos de este código, y de los preliminares necesarios para su inteligencia, se hallarán en los dos Tomos de la obra intitulada: *El Fanal del Imperio Mexicano*, que se vende al precio de ocho pesos, aforrada en media pasta, en la imprenta de la viuda de Romero, calle de S. Francisco, en donde se expende este cuaderno al precio de doce reales.

Fin del v y último apéndice

X

ACTA CONSTITUCIONAL

PRESENTADA
AL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE
POR SU COMISIÓN EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 1823

SEÑOR

La Comisión encargada de formar y presentar al Congreso un proyecto de Constitución, que haya de fijar para siempre la suerte de seis millones de hombres libres que habitan las provincias mexicanas, y elevarlos al grado de prosperidad a que los llama la naturaleza y el rango de Independencia, Libertad y Gloria que demanda imperiosamente su estado de civilización, y sus esfuerzos heroicos continuados por trece años para llegar a este término feliz; ha reconocido desde su primer paso, la suma inmensa de dificultades que a primera vista se presentan para desempeñar como corresponde a tan interesante objeto sus deberes, y habría desconfiado enteramente de poder llenarlos, si no estuviera convencida de que la mano misma que ha puesto a su cargo empresa de ejecución tan difícil, ha de ser la que con sus esfuerzos patrióticos y con su profunda sabiduría y consumada prudencia, de la última perfección a la grande obra de una Constitución digna de la Nación Mexicana.

Fiaba además una gran parte del acierto a la concurrencia de las luces y consejo del gobierno, comunicados por medio de sus secretarios del Despacho, quienes en efecto han asistido desde el principio de las sesiones diurnas y nocturnas de la Comisión, y también de las de otros patriotas, que aunque fuera del Congreso y difundiéndoles en las Provincias, por su ilustración y sus virtudes, hacen el ornamento más ilustre de la Nación Mexicana.

Entonces fue que cobrando ánimos con la presencia de auxilios tan poderosos, se atrevió a sentar con firmeza el pie, y a poner manos a la obra, y fijando altamente su atención en el estado político de la Nación, creyó de su primer deber poner al Congreso Constituyente la necesidad imperiosa y urgente de dar luego un punto cierto de unión a las provincias: un norte seguro al Gobierno general, comunicándole al mismo tiempo toda la autoridad, actividad y energía necesarias para asegurar la Independencia nacional, y consolidar la libertad por modos compatibles con la regularidad de las leyes, y a los pueblos una garantía natural, y por eso la más firme del uso de sus imprescriptibles derechos, usurpados por tres siglos, y rescatados por una guerra de trece años.

En tal concepto, y agitada de tan nobles y tan justas ideas, habría querido dedicar inmediatamente sus tareas a formar el proyecto de Constitución; mas la naturaleza misma de esta obra, y más que todo, la necesidad imperiosa de dar vida y salvar de una vez la Nación cuasi disuelta, y ya sin un movimiento regular, la han conducido al caos de decidirse a proponer este proyecto al Congreso para su deliberación: una acta constitutiva de la Nación Mexicana, que sirviéndole de base para sus ulteriores trabajos, diese desde luego a las Provincias, a los pueblos, y a los hombres que las habitan, una garantía firme del goce de sus derechos naturales y civiles por la adopción definitiva de una forma determinada de Gobierno, y por el firme establecimiento de éste, y desarrollo de sus más importantes atribuciones.

La Comisión tiene el honor de presentarla al Congreso sin poderse lisonjear del acierto, aunque esté muy segura de los sinceros y vivos deseos que en esta parte le animan. En ella verá el Congreso la organización de la Nación, y la forma de gobierno que a juicio de la Comisión, es más uniforme a la voluntad general, y por consecuencia preferible para hacer la felicidad de los pueblos, que es el objeto final de todo buen gobierno.

Si la situación política en que nos versamos, no presentara males que exigen un pronto remedio, la Comisión habría empleado más tiempo en exponer con detención las razones que la han decidido a preferir para el gobierno de la Nación Mexicana la forma de República representativa, popular federada; mas la conducta del anterior Congreso en este punto, la del Gobierno, y sobre todo, las obras y las palabras de cuasi todas las provincias, la excusan de detenerse en esta parte, reservando para las discusiones el desenvolver y ampliar más los fundamentos de su modo de pensar.

Como por una parte sea imperiosa, muy urgente y del momento la necesidad de dar estabilidad, fuerza y energía al Gobierno Nacional y por otra pareciese como natural el que recibiera estas importantes cualidades de la misma Constitución fundamental; para aproximar cuanto ha sido dado a los alcances de la Comisión unos extremos que es preciso estén separados en gran parte por un intervalo notable de tiempo, ha creído necesario presentar divididos para siempre los supremos poderes de la Federación, fijando y desarrollando las facultades de cada uno, hasta aquel punto en que siendo bastantes para consolidar y sostener la Independencia y Libertad Mexicana, no presentará, sin embargo, la idea atrevida de una Constitución fabricada como el mundo, en siete días.

Para hacer justicia a la voluntad general, acomodarse en cuanto es útil y posible a los principios prácticos de derecho público, sobradamente conocidos y felizmente aplicados por las Naciones más sabias y más celosas de sus justas libertades, y para dar una prueba de que el Congreso constituyente y su Comisión, nada desean más que el acierto, ni nada ambicionan más que la felicidad general: la Comisión se atreve en este proyecto de ley constitutiva a proponer al Congreso la reorganización de sí mismo, por la convocación inmediata de un Senado Constituyente, con cuyo establecimiento se verán aplicados prácticamente, en cuanto es posible, los principios políticos recibidos con utilidad general por las Repúblicas más ilustradas, y además se logrará el bien inmenso de acelerar con toda seguridad a nuestra patria, un día de gloria grande, en un día de unión general, cual será sin duda aquél en que vea sancionada, circulada y publicada su Constitución general, a despecho de sus crueles enemigos que tanto y con tanto encono trabajan día y noche por impedir su llegada.

Abrumada la Comisión de dificultades en orden a fijar el número de estados que deben componer la Federación de la Nación Mexicana, se fijó un principio general, a saber, que ni fuesen tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen en breves años aspirar a constituirse en Naciones independientes, rompiendo el lazo federal, ni tantos que por falta de hombres y recursos viniese a ser impracticable el sistema. Duda mucho de haberse aproximado al acierto, pero sí está resuelta a oír en la discusión con respeto y deferencia a los Señores Diputados, y aun para evacuar todo error, ha dejado la puerta abierta para que la Constitución general, con mejores datos y luces más claras, sea donde se fije definitivamente este punto.

Entre las facultades designadas al Supremo Poder Ejecutivo, ha creído la Comisión de su deber el conceder algunas que no encuentra dadas al Ejecutivo aun de algún sistema cen-

tral, y tal vez ni al de monarquías moderadas. Tal es el imperio de las circunstancias, nacidas de la ignorancia, y de la corrupción de tres siglos, herencia envenenada de nuestros opresores, y tal es también el imperio de la ley suprema de las Naciones, de salvar su Independencia y Libertad. Cuando el Gobierno es de leyes exactamente observadas, y no de hombres, no hay peligro por la severidad de aquéllas que llaman para los empleos a la virtud y mérito personal, que desechan de ellos la no aptitud, y que persiguen y castigan a pocos para escarmiento de muchos.

En el establecimiento de gobiernos y poderes de cada estado, no ha querido la Comisión sino fijar y reducir a práctica los principios genuinos de la forma de gobierno general ya adoptada, dejando que los poderes de los mismos Estados se muevan en su territorio para su bien interior en todo aquello que no puedan perturbar el orden general, ni impedir la marcha rápida y majestuosa de los poderes supremos de la federación.

Como el fin de la comisión ha sido dar en la expresada acta a la Nación un punto de unión general y un apoyo firme en que por ésta salve su Independencia, y consolide su libertad elevándose al poder y gloria a que la destinó DIOS, autor de todas las sociedades, ha querido concluirla proponiendo al Congreso algunas resoluciones generales, en que por unas se presente la Nación al universo revestida del candor y buena fe tan necesaria para alternar con las Naciones independientes y estrechar sus lazos sociales con todo el género humano: por otras se presenta a los estados de la Federación con toda la franqueza que debe ser propia de quien dirige su voz a seis millones de hombres, que hablan un mismo idioma, que profesan una misma religión, que con pequeñas diferencias tienen costumbres semejantes, y a quienes por el interés de todos sólo se exige, que de la suma de sus derechos depositados en el actual Congreso, cedan a los poderes supremos los necesarios para hacer el bien general, conservando los demás para procurarse su felicidad interior, y por otras, finalmente, se afirma cuanto es necesario la estabilidad de la misma acta, en que, prescindiendo de teorías y haciendo aplicaciones prácticas de los más sólidos principios de derecho público, en verdad se da una Acta constitutiva de la Nación Mexicana, propia para fijar eternamente su destino bajo un sistema acomodado a las luces del siglo y al goce de una libertad justa, regulada siempre por la ley, que es tal porque es la expresión de la voluntad general de los asociados.

La comisión repite, que lejos de lisonjearse de la perfección de sus primeros trabajos, sólo se atreve a presentarlos en un tiempo tan corto, para dar una prueba del vivo deseo que la anima de cooperar a salvar a la Patria con sus desvelos, sus afanes y débiles esfuerzos, que serían ciertamente inútiles, si no mereciesen el apoyo de las luces y virtudes del Congreso, y de los esfuerzos reunidos de todos los mexicanos.— Sala de Comisiones del Soberano Congreso, México 19 de noviembre de 1823.— *Miguel Ramos de Arizpe.— Manuel Argüelles.— Rafael Mangino.— Tomás Vargas.— José de Jesús Huerta.—*

ACTA CONSTITUTIVA DE LA NACIÓN MEXICANA

Art. 1o. La Nación Mexicana se compone de las Provincias comprendidas en el territorio del antiguo virreinato llamado de Nueva España, en el de la capitanía general de Yucatán, y en el de las comandancias generales de Provincias internas de oriente y occidente.

Art. 2o. La Nación Mexicana es libre, es soberana de sí misma, y es independiente para siempre de España y de cualquiera otra potencia, y no es, ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 3o. La religión de la Nación Mexicana es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera otra.

Art. 4o. La Soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar la forma de Gobierno que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad de establecer por medio de sus representantes sus leyes fundamentales, y de mejorarlas o variarlas, según ella crea conveniere más.

Art. 5o. La Nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal.

Art. 6o. Sus partes integrantes son estados libres, soberanos e independientes, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta acta y en la constitución general.

Art. 7o. Los estados de la federación son por ahora los siguientes: el de las Chiapas; el de Guanajuato; el interno de occidente compuesto de las provincias de Sonora, Sinaloa y ambas Californias; el interno del norte, compuesto de las provincias de Chihuahua, Durango y Nuevo México; el interno de oriente, compuesto de las provincias de Coahuila, Nuevo León, los Tejas y Nuevo Santander; el de México; el de Michoacán; el de Oaxaca; el de Puebla de los Ángeles, con Tlaxcala; el de Querétaro; el de San Luis Potosí; el de Tabaco; el de Veracruz; el de Xalisco; el de Yucatán y el de los Zacatecas.

Art. 8o. El Congreso en la Constitución podrá aumentar el número de los Estados, dividiendo, y modificando los comprendidos en el artículo anterior, según por mejores datos conozca sea más conforme a la voluntad general, y felicidad de los pueblos.

DIVISIÓN DE PODERES

Art. 9o. El Poder Supremo de la Federación Mexicana se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, y jamás podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

PODER LEGISLATIVO

Art. 10o. El Poder Legislativo general de la federación, residirá depositado en una cámara de Diputados y en un Senado, que componen el Congreso general de la federación.

Art. 11o. Todos los individuos de la cámara de Diputados y de la de el Senado, serán nombrados por los ciudadanos de cada uno de los Estados, en la forma que prevenga la Constitución.

Art. 12o. La base para nombrar los representantes de la cámara de Diputados, será la de la población. Cada Estado nombrará dos Senadores, según la forma que prescriba la constitución.

Art. 13o. Pertenece exclusivamente al Congreso general dar leyes y decretos.

I. Para sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación y seguridad de la Nación en todo lo que mira a sus relaciones exteriores.

II. Para conservar la paz y el orden público en el interior de toda la federación, y promover su ilustración y mayor prosperidad general.

III. Para mantener la independencia de los Estados entre sí.

IV. Para conservar la unión federal de todos los Estados que componen la federación Mexicana, arreglar definitivamente sus límites, y terminar del mismo modo las diferencias entre dos o más estados.

V. Para sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que todos los Estados tienen ante la ley.

VI. Para admitir nuevos Estados a la unión federal, incorporándolos a la Nación Mexicana.

VII. Para fijar cada año los gastos generales de la Nación, en vista de los presupuestos que le presentará el Poder Ejecutivo.

VIII. Para establecer las contribuciones que sean necesarias para cubrir los gastos generales de la República, determinar su inversión, y tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo.

IX. Para arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes Estados de la Federación y tribus de los Indios.

X. Para contraer deudas sobre el crédito de la República, y designar garantías suficientes para cubrirlas.

XI. Para reconocer la deuda pública de la Nación Mexicana, y señalar medios para consolidarla.

XII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Poder Ejecutivo.

XIII. Para designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el cupo respectivo a cada Estado, y formar la ordenanza y leyes de su organización.

XIV. Para organizar, armar, y disciplinar la milicia local de los Estados que deba ser empleada en servicio de la unión; reservando a cada uno de ellos el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruir la milicia, conforme a la disciplina prescripta para el Congreso general.

XV. Para aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada, y cualquier otro que celebre el Poder Ejecutivo.

XVI. Para conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias con conocimiento de causa, por tiempo limitado.

XVII. Para dictar todas las leyes que sean necesarias, a fin de desempeñar las facultades precedentes y todas las demás que se concedan por la Constitución a los Supremos Poderes de la federación mexicana.

Art. 14o. En la Constitución general se fijarán las demás atribuciones generales, especiales y económicas del Congreso Constitucional, su extensión, formas y modos de desempeñarlas, y las prerrogativas de este Cuerpo y de sus individuos.

Art. 15o. El actual Congreso Constituyente sin perjuicio de el lleno de sus facultades, perfeccionando su organización, según parece más conforme a la voluntad general, convoca un Senado también constituyente compuesto de dos Senadores nombrados por cada Estado, para que a nombre de éstos revise y sancione la Constitución general; una ley que se dará luego, arreglará el modo de nombrar los Senadores, el de ejercer dichas funciones y las demás atribuciones de este Senado.

Art. 16o. La Constitución general depositará por tiempo limitado el Poder Ejecutivo en un individuo, con el nombre de Presidente de la federación mexicana, el cual será Ciudadano por nacimiento de la misma federación, con la edad de 35 años cumplidos. Las demás cualidades, el modo de elegirlo, y su duración, se determinará por la misma ley constitucional.

Art. 17o. Para sustituirle, se nombrará igualmente un vice-presidente.

Art. 18o. Sus atribuciones a más de otras que se fijarán en la Constitución, son las siguientes.

I. Poner en ejecución las leyes dirigidas a conservar y consolidar más y más la integridad de la federación mexicana, y a sostener su Independencia Nacional en lo exterior, y su unión y libertad en lo interior.

II. Nombrar y remover libremente los Secretarios del Despacho.

III. Cuidar de la recaudación, y decretar la distribución de los fondos públicos provenientes de contribuciones nacionales, decretadas por el Congreso general todo con arreglo a las leyes.

IV. Nombrar los empleados de las oficinas generales de Hacienda, según la Constitución y las leyes.

V. Deponer de sus destinos a los empleados de las oficinas generales de gobierno y hacienda, y sus dependencias, con sólo el acuerdo de los Secretarios del Despacho formados en Consejos.

VI. Declarar la guerra, previo un Decreto de aprobación del Congreso general, y no estando éste reunido, del modo que designe la Constitución.

VII. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, y de la milicia activa, según convenga para la defensa exterior y seguridad interior de la federación.

VIII. Disponer de la milicia local para los mismos objetos; pero siempre que el Poder Ejecutivo crea conveniente usar de ella fuera del territorio de sus respectivos Estados, obtendrá previamente el consentimiento del Congreso, quien también calificará la fuerza que sea necesaria.

IX. Nombrar los empleados del Ejército, milicia activa y armada, con arreglo a la ordenanza y leyes vigentes, y a lo que se disponga en la Constitución.

X. Dar retiros y conceder licencias a los militares, arreglando sus pensiones a lo prescripto en la ordenanza y leyes vigentes, o que en adelante se dieren.

XI. Nombrar todos los Agentes diplomáticos y Cónsules con aprobación del Senado, y mientras éste se establece, del Congreso actual.

XII. Dirigir las negociaciones diplomáticas, iniciar, seguir y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, federación, tregua, neutralidad armada, comercio y cualesquiera otros, pero para prestar o denegar su ratificación a cualquiera de ellos, deberá preceder el consentimiento y aprobación del Congreso general.

XIII. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los Tribunales y Juzgados competentes, y de que las sentencias de éstos sean ejecutadas según la ley.

XIV. Publicar y circular, guardar y hacer guardar la Constitución general de la federación y las leyes, pudiendo por una sola vez objetar dentro del término de diez días sobre éstas, cuanto le parezca conveniente, suspendiendo su ejecución hasta la resolución del Congreso.

XV. Dar Decretos y órdenes, y formar y publicar Reglamentos para el mejor cumplimiento de la Constitución y las leyes pudiendo suspender de sus empleos y privar de la mitad de sus rentas a todos los empleados que le conste no haber cumplido sus órdenes y decretos, según en ellos se les prevenga, con tal que la suspensión no pase de tres meses, ni la privación de sueldos por mitad de los correspondientes a este tiempo, pasando los antecedentes de la materia al Tribunal respectivo, en los casos que crea debe formarse causa a tales empleados.

XVI. Cuando lo exija una causa grave, indultar a los delincuentes, o conmutar las penas, oyendo al Juez o Jueces de la causa y con el acuerdo de los Secretarios del Despacho formados en Consejo.

Art. 19o. Todos los decretos y órdenes del Poder Ejecutivo deberán ir firmados del secretario del ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Art. 20o. El presidente y vice-presidente o personas depositarias del Supremo Poder Ejecutivo durante su encargo, y un año después, pueden ser acusadas y juzgadas en todos los casos de una conducta manifiestamente contraria a la Constitución o las leyes, o al bien general de la República, y deberes de sus empleos.

Art. 21o. Por las mismas causas, y dentro del mismo tiempo que el Presidente y Vicepresidente, pueden ser acusados los Secreatrios del despacho.

Art. 22o. Las personas de que hablan los dos artículos anteriores, sólo podrán ser acusadas por la cámara de Diputados ante el Senado. Mientras no esté formado éste se observarán las leyes vigentes sobre la materia.

PODER JUDICIAL

Art. 23o. Todo hombre que habite en el territorio de la Federación Mexicana, tiene un derecho a que se le administre pronta, fácil, completa e imparcialmente justicia en orden a las injurias o perjuicios que se le infieran contra su vida, su persona, su honor, su libertad y propiedades, y con este objeto la Federación deposita para su ejercicio el Poder Judicial en una Corte suprema de justicia, y en los tribunales y juzgados que se establecerán en cada Estado.

Art. 24o. Ningún hombre será juzgado en el territorio de los Estados de la Federación Mexicana, sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto por lo cual se le juzgue;

en consecuencia queda para siempre abolido todo juicio por comisión especial, y toda ley *ex post facto*. No son comisiones especiales los tribunales establecidos por el Congreso anterior para la persecución de malhechores y ladrones.

GOBIERNO PARTICULAR DE LOS ESTADOS

Art. 25o. El gobierno de cada estado se dividirá para el ejercicio de sus funciones en los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y nunca podrán reunirse dos o más de ellos en una sola corporación o persona, ni el Legislativo depositarse en un solo individuo.

PODER LEGISLATIVO

Art. 26o. Éste residirá en un Congreso compuesto de un número de individuos que determinará la Constitución particular de cada Estado, electos popularmente, y amovibles en el tiempo y modo que ella misma disponga.

Art. 27o. Una ley que se dará luego, designará los electores que por primera vez han de nombrar a las legislaturas de los Estados, en donde no estén ya establecidas, y el tiempo, lugar y modo de verificar las elecciones.

PODER EJECUTIVO

Art. 28o. No se confiará el ejercicio del Poder Ejecutivo de cada Estado, sino por determinado tiempo, que fijará su Constitución particular.

PODER JUDICIAL

Art. 29o. El Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales y juzgados que establezca la Constitución respectiva.

Art. 30o. Todo juicio será fenecido hasta su última instancia y ejecución de su última sentencia, dentro del Estado en que tenga su principio, excepto los casos que la Constitución general reserve a la suprema Corte de justicia, o a otros tribunales.

RESOLUCIONES GENERALES

Art. 31o. Las Constituciones respectivas de los Estados no podrán oponerse de modo alguno a esta Acta constitutiva, ni a lo que se establezca en la Constitución general; por tanto no podrán sancionarse hasta que esté sancionada, circulada y publicada esta última.

Art. 32o. Sin embargo para no retardar el mayor bien a los Estados, en teniendo éstos

abiertas las sesiones de sus legislaturas, podrán organizar provisionalmente su gobierno interior, y entretanto se observarán las leyes vigentes.

Art. 33o. Ningún criminal de un Estado encontrará asilo en otro y será entregado a la autoridad que lo reclame inmediatamente.

Art. 34o. Ningún Estado sin consentimiento del Congreso impondrá contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, sino aquellas que puedan ser absolutamente necesarias para que tengan efecto sus leyes de inspección; pero la renta que produjeren todos los derechos o impuestos de algún Estado sobre importación o exportación, será para el uso de la Tesorería de los Estados de la Federación, quedando semejantes leyes sujetas a la revisión y examen del Congreso general.

Art. 35o. Ningún Estado establecerá, sin el consentimiento del Congreso general derecho alguno de tonelaje, ni tendrá tropas ni navíos de guerra en tiempo de paz. Tampoco entrará en transacción o contrato alguno con otro Estado o con potencia extranjera, ni se empeñará en guerra, sino en caso de actual invasión, o en tan inminente peligro que no admita dilaciones.

Art. 36o. La Nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la seguridad personal, la propiedad, la igualdad ante la ley, y los demás derechos de los individuos que la componen.

Art. 37o. Todas las deudas contraídas y empeños que se hayan hecho antes de la adopción de esta acta constitutiva, se reconocen por la Federación, a reserva de su liquidación y clasificación, según las reglas que el Congreso general establezca.

Art. 38o. La Constitución general, y mientras se publica esta Acta constitutiva, que será base de ella, garantizan a cada uno de los Estados de la Federación Mexicana, la forma de gobierno de la República representativa popular federada, adoptada en el artículo 5o. de esta misma ley, y cada Estado queda también obligado a sostener a toda costa la unión federal de todos.

Art. 39o. Esta Acta constitutiva no podrá variarse sino en el tiempo y términos que prescriba la Constitución general de la Federación.

Art. 40o. La ejecución de esta Acta se comete bajo la más estrecha responsabilidad al Supremo Poder Ejecutivo, quien desde su publicación se arreglará a ella en todo, ejerciendo las facultades que en la misma se designan al Presidente de la Federación Mexicana.

Sala de comisiones del Soberano Congreso. México, 19 de noviembre de 1823.— *Miguel Ramos Arizpe.— Manuel Argüelles.— Rafael Mangino.— Tomás Vargas.— José de Jesús Huerta.*

VOTO PARTICULAR DEL SR. D. RAFAEL MANGINO

A los diversos artículos del proyecto que antecede relativos a declaraciones de Soberanía y su ejercicio, es mi opinión se sustituya como único que lo comprende todo, el siguiente:

La Soberanía reside esencialmente en la reunión de los Estados que componen la Nación Mexicana, y la facultad de hacer, ejecutar y aplicar las leyes, será ejercida por los cuerpos o personas que se designen en esta Acta y en la Constitución.

México, 19 de noviembre de 1823.

Rafael Mangino

VOTO PARTICULAR DEL SR. D. ALEJANDRO CARPIO

Sr. Siempre he estado persuadido de que la Soberanía no puede residir en los Estados tomados distributivamente, sino en toda la Nación; por lo que pido a V. Sob. se agregue este mi voto al proyecto de Acta federal, que se leyó ayer.

México, noviembre 21 de 1823.

Alejandro Carpio

XI

ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN

31 DE ENERO DE 1824

EL SUPREMO GOBIERNO A LA NACIÓN

Compatriotas: Hemos llegado al término: se han cumplido los votos de los Estados: tenemos ya una Acta constitutiva, y si amamos el orden, si queremos tener Patria, si anhelamos a ser Nación, es llegado el momento en que esto se verifique. El Soberano Congreso ha hecho cuanto ha estado de su parte: ésta es la obra, no de uno u otro particular, sino de la Nación entera, puesto que ha sido discutida y decretada en plena libertad por sus representantes; de manera que el querer desviarse de su tenor, u obrar en contrario sentido, sería disputar a la Nación su independencia y soberanía. Por lo que a nosotros hace, hemos tenido la inefable satisfacción de ver verificada esta época memorable, en el tiempo de nuestra administración, aunque en su término. Compatriotas: podrá reprochársenos de no haber gobernado con todo el pulso y tino necesario, pero nuestras intenciones han sido rectas, nuestro norte ha sido constantemente la prosperidad pública: no hemos podido hacer todo el bien que hubiéramos querido: obstáculos insuperables, y que sólo disminuirá el tiempo, se han atravesado, pero al cabo el estado ha subsistido, los créditos de los empleados quedarán cubiertos hasta el día, y por lo demás, si no hemos llenado la expectación pública, y si hemos pagado un funesto tributo de inexperiencia, que nuestras equivocaciones o desaciertos sirvan de lección a los que nos sucedan. En fin, si el haber administrado la cosa pública en tiempos tan aflictivos, y en circunstancias desorganizadoras; si el haber luchado a brazo partido, y por tantos meses con toda clase de dificultades y contradiciones; si el habernos hallado al timón en estos días, cuando una tempestad deshecha ha estado para hundirnos a todos en un abismo; por último, si tan notables y penosas coyunturas, si lo que hemos sufrido en una posición tan singular, como la en que nos hemos visto por cerca de un año, dan derecho para suplicar, nosotros lo hacemos a nuestros compatriotas, inculcándoles en los términos más encarecidos, el amor al orden, este principio sostenedor de los Estados: penetraos, conciudadanos, de que la unión y subordinación a las Autoridades, es lo único que puede salvarnos, y que los que bajo cualquier pretexto que lo hagan, atacan este principio, son los enemigos del Anáhuac, y batidores de un tirano, que no dejará de aparecerse para sorprendernos en el desorden y hacernos sus esclavos.

Palacio nacional de México, febrero 1 de 1824. 4o. — 3o. *José Mariano Michelena*, Presidente.— *Miguel Domínguez.*— *Vicente Guerrero.*

El Supremo Poder Ejecutivo, nombrado provisionalmente por el Soberano Congreso Mexicano, a todos los que las presentes vieren y entendieren, SABED: *Que el Soberano Congreso Constituyente ha decretado lo que sigue.*

El Soberano Congreso Constituyente Mexicano ha tenido a bien decretar la siguiente

ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN
FORMA DE GOBIERNO Y RELIGIÓN

Artículo 1o. La nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato llamado antes Nueva España, en el que se decía capitanía general de Yucatán, y en el de las comandancias generales de provincias internas de oriente y occidente.

Art. 2o. La nación mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquiera otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 3o. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno, y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea convenirle más.

Art. 4o. La Religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

Art. 5o. La nación adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal.

Art. 6o. Sus partes integrantes son estados independientes, libres y soberanos en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta acta, y en la constitución general.

Art. 7o. Los estados de la federación son por ahora los siguientes: el de Guanajuato; el interno de occidente, compuesto de las provincias de Sonora y Sinaloa; el interno de oriente compuesto de las provincias de Coahuila, Nuevo León y los Tejas; el interno del norte compuesto de las provincias de Chihuahua, Durango y Nuevo México; el de México; el de Michoacán; el de Oaxaca; el de Puebla de los Ángeles; el de Querétaro; el de San Luis Potosí; el del nuevo Santander que se llamará el de las Tamaulipas; el de Tabasco; el de Tlaxcala; el de Veracruz; el de Jalisco; el de Yucatán; el de los Zacatecas. Las Californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguirá unido a Jalisco) serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componían la provincia del Istmo de Guazacualco, volverán a las que antes han pertenecido. La Laguna de Términos corresponderá al estado de Yucatán.

Art. 8o. En la constitución se podrá aumentar el número de los estados comprendidos en el artículo anterior, y modificarlos según se conozca ser más conforme a la felicidad de los pueblos.

DIVISIÓN DE PODERES

Art. 9o. El poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y jamás podrán reunirse dos o más de estos en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo.

PODER LEGISLATIVO

Art. 10o. El poder legislativo de la federación residirá en una cámara de diputados y en un senado, que compondrá el congreso general.

Art. 11o. Los individuos de la cámara de diputados y del senado serán nombrados por los ciudadanos de los estados en la forma que prevenga la constitución.

Art. 12o. La base para nombrar los representantes de la cámara de diputados, será la población. Cada estado nombrará dos senadores, según prescriba la constitución.

Art. 13o. Pertenece exclusivamente al congreso general dar leyes y decretos.

I. Para sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación y seguridad de la nación en sus relaciones exteriores.

II. Para conservar la paz y el orden público en el interior de la federación, y promover su ilustración y prosperidad general.

III. Para mantener la independencia de los estados entre sí.

IV. Para proteger y arreglar la libertad de imprenta en toda la federación.

V. Para conservar la unión federal de los estados, arreglar definitiamente sus límites y terminar sus diferencias.

VI. Para sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los estados tienen ante la ley.

VII. Para admitir nuevos estados o territorios a la unión federal, incorporándolos en la nación.

VIII. Para fijar cada año los gastos generales de la nación, en vista de los presupuestos que le presentará el poder ejecutivo.

IX. Para establecer las contribuciones necesarias a cubrir los gastos generales de la república, determinar su inversión y tomar cuenta de ella al poder ejecutivo.

X. Para arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados en la federación y tribus de los indios.

XI. Para contraer deudas sobre el crédito de la república y designar garantías para cubrirlas.

XII. Para reconocer la deuda pública de la nación y señalar medios de consolidarla.

XIII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el poder ejecutivo.

XIV. Para conceder patentes de corso, y declarar buenas o malas las presas de mar y tierra.

XV. Para designar y organizar la fuerza armada de mar y tierra, fijando el cupo respectivo a cada estado.

XVI. Para organizar, armar y disciplinar la milicia de los estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por el congreso general.

XVII. Para aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada y cualquier otro que celebre el poder ejecutivo.

XVIII. Para arreglar y uniformar el peso, valor, tipo, ley y denominación de las monedas en todos los estados de la federación, y adoptar un sistema general de pesas y medidas.

XIX. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la federación.

XX. Para habilitar toda clase de puertos.

Art. 14o. En la constitución se fijarán otras atribuciones generales, especiales y ecónomicas del congreso de la federación, y modo de desempeñarlas, como también las prerrogativas de este cuerpo y de sus individuos.

PODER EJECUTIVO

Art. 15o. El supremo poder ejecutivo se depositará por la constitución en el individuo o individuos que ésta señale: serán residentes y naturales de cualquiera de los estados o territorios de la federación.

Art. 16o. Sus atribuciones, a más de otras que se fijarán en la constitución, son las siguientes.

I. Poner en ejecución las leyes dirigidas a consolidar la integridad de la federación y a sostener su independencia en lo exterior, y su unión y libertad en lo interior.

II. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho.

III. Cuidar de la recaudación, y decretar la distribución de las contribuciones generales con arreglo a las leyes.

IV. Nombrar los empleados de las oficinas generales de hacienda, según la constitución y las leyes.

V. Declarar la guerra, previo decreto de aprobación del congreso general, y no estando éste reunido del modo que designe la constitución.

VI. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, y de la milicia activa para la defensa exterior, y seguridad interior de la federación.

VII. Disponer de la milicia local, para los mismos objetos; aunque para usar de ella fuera de sus respectivos estados, obtendrá previo consentimiento del congreso general, quien calificará la fuerza necesaria.

VIII. Nombrar los empleados del ejército, milicia activa y armada con arreglo a ordenanza, leyes vigentes y a lo que disponga la constitución.

IX. Dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los militares de que habla la atribución anterior, conforme a las leyes.

x. Nombrar los enviados diplomáticos y cónsules con aprobación del senado, y entretanto éste se establece, del congreso actual.

xi. Dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados de paz, amistad, alianza, federación, tregua, neutralidad armada, comercio y otros; mas para prestar o negar su ratificación a cualquiera de ellos, deberá preceder la aprobación del congreso general.

xii. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los tribunales generales, y de que sus sentencias sean ejecutadas según la ley.

xiii. Publicar, circular y hacer guardar, la constitución general y las leyes, pudiendo por una sola vez, objetar sobre éstas cuando le parezca conveniente dentro de diez días, suspendiendo su ejecución hasta la resolución del congreso.

xiv. Dar decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la constitución y leyes generales.

xv. Suspender de los empleos hasta tres meses, y privar hasta de la mitad de sus sueldos, por el mismo tiempo, a los empleados de la federación infractores de las órdenes y decretos, y en los casos que crea deber formarse causa a tales empleados, pasará los antecedentes de la materia al tribunal respectivo.

Art. 17o. Todos los decretos y órdenes del supremo poder ejecutivo, deberán ir firmados del secretario del ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

PODER JUDICIAL

Art. 18o. Todo hombre que habite en el territorio de la federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia, y con este objeto la federación deposita el ejercicio del poder judicial en una corte suprema de justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada estado; reservándose demarcar en la constitución las facultades de esa suprema corte.

Art. 19o. Ningún hombre será juzgado en los estados o territorios de la federación sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto, por el cual se le juzgue. En consecuencia quedan para siempre prohibidos todo juicio por comisión especial, y toda ley retroactiva.

GOBIERNO PARTICULAR DE LOS ESTADOS

Art. 20o. El gobierno de cada estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y nunca podrán reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un individuo.

Art. 21o. El poder legislativo de cada estado residirá en un congreso compuesto del número de individuos, que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan.

PODER EJECUTIVO

Art. 22o. El ejercicio del poder ejecutivo de cada estado no se confiará sino por determinado tiempo, que fijará su respectiva constitución.

PODER JUDICIAL

Art. 23o. El poder judicial de cada estado se ejercerá por los tribunales que establezca su constitución.

PREVENCIONES GENERALES

Art. 24o. Las constituciones de los estados no podrán oponerse a esta acta ni a lo que establezca la constitución general; por tanto no podrán sancionarse hasta la publicación de esta última.

Art. 25o. Sin embargo, las legislaturas de los estados podrán organizar provisionalmente su gobierno interior, y entretanto lo verifican, se observarán las leyes vigentes.

Art. 26o. Ningún criminal de un estado tendrá asilo en otro; antes bien será entregado inmediatamente a la autoridad que le reclame.

Art. 27o. Ningún estado establecerá sin consentimiento del congreso general derecho alguno de tonelaje, ni tendrá tropas ni navíos de guerra en tiempo de paz.

Art. 28o. Ningún estado sin consentimiento del congreso general, impondrá contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, mientras la ley no regule cómo deban hacerlo.

Art. 29o. Ningún estado entrará en transación o contrato con otro, o con potencia extranjera, ni se empeñará en guerra, sino en caso de actual invasión, o en tan inminente peligro que no admita dilaciones.

Art. 30o. La nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano.

Art. 31o. Todo habitante de la federación tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior, a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad de las leyes.

Art. 32o. El congreso de cada estado remitirá anualmente al general de la federación nota circunstanciada y comprensiva de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, con relación del origen de unos y otros; de los ramos de industria, agricultura, mercantil y fabril, indicando sus progresos o decadencia con las causas que los producen; de los nuevos ramos que puedan plantearse, con los medios de alcanzarlos, y de su respectiva población.

Art. 33o. Todas las deudas contraídas antes de la adopción de esta acta se reconocen por la federación a reserva de su liquidación y clasificación, según las reglas que el congreso general establezca.

Art. 34o. La constitución general y esta acta garantizan a los estados de la federación la forma de gobierno adoptada en la presente ley, y cada estado queda también comprometido a sostener a toda costa la unión federal.

Art. 35o. Esta acta sólo podrá variarse en el tiempo y términos que prescriba la constitución general.

Art. 36o. La ejecución de esta acta se comete bajo la más estrecha responsabilidad al supremo poder ejecutivo, quien desde su publicación se arreglará a ella en todo.

México a 31 de enero de 1824.— 4o. y —3o.

José Miguel Gordoa, Diputado por Zacatecas Presidente; Juan Bautista Morales, Diputado por Guanajuato; Juan Cayetano Portugal, Diputado por Jalisco; José Miguel Guridi Alcocer, Diputado por Tlaxcala; Tomás Vargas, Diputado por San Luis Potosí; Epigmenio de la Piedra, Diputado por México; Antonio de Gama y Córdova, Diputado por México; José Ignacio González Caralmuro, Diputado por México; Mariano Barbabosa, Diputado por Puebla; José Francisco de Barreda, Diputado por México; José María Gerónimo Arzac, Diputado por Colima; Miguel Ramos Arizpe, Diputado por Coahuila; Manuel Ambrosio Martínez de Vea, Diputado por Sinaloa; José de San Martín, Diputado por Puebla; Felipe Sierra, Diputado por México; Manuel Solórzano, Diputado por Michoacán; José María Covarrubias, Diputado por Jalisco; José María de Izazaga, Diputado por Michoacán; Francisco de Larrazabal y Torres, Diputado por Oaxaca; Juan Antonio Gutiérrez, Diputado por el Sur; Manuel Argüelles, Diputado por Veracruz; José Miguel Ramírez, Diputado por Jalisco; Carlos María de Bustamante, Diputado por México; José María de la Llave, Diputado por Puebla; Lorenzo de Zavala, Diputado por Yucatán; Víctor Marquez, Diputado por Guanajuato; Fernando Valle, Diputado por Yucatán; Félix Osores, Diputado por Queretaro; José de Jesús Huerta, Diputado por Jalisco; José María Fernández de Herrera, Diputado por Guanajuato; José Hernández Chico Condarco, Diputado por México; José Ignacio Espinosa, Diputado por México; Juan José Romero, Diputado por Jalisco; José Agustín Paz, Diputado por México; Erasmo Seguín, Diputado por Tejas; Rafael Aldrete, Diputado por Jalisco; Juan de Dios Cañedo, Diputado por Jalisco; José María Urive, Diputado por Guanajuato; Juan Ignacio Godoy, Diputado por Guanajuato; José Felipe Vásquez, Diputado por Guanajuato; Joaquín Guerra, Diputado por Querétaro; Luis Cortazar, Diputado por México; Juan de Dios Moreno, Diputado por Puebla; José Miguel Llorente, Diputado por Guanajuato; José Ángel de la Sierra, Diputado por Jalisco; José María Anaya, Diputado por Guanajuato; Demetrio del Castillo, Diputado por Oaxaca; Vicente Manero Embides, Diputado por Oaxaca; José Ignacio Gutiérrez, Diputado por Chihuahua; Luciano Castorena, Diputado por México; Francisco Patiño y Domínguez, Diputado por México; Valentín Gómez Farías, Diputado por Zacatecas; José María Castro, Diputado por Jalisco; Juan Manuel Assorrey, Diputado por México; Joaquín de Miura y Bustamante, Diputado por Oaxaca; José Mariano Castillero, Diputado por Puebla; Bernardo Copea, Diputado por Puebla; Francisco María Lombardo, Diputado por México; Pedro de Ahumada, Diputado por Durango; Ignacio Rayón, Diputado por Michoacán; Francisco Estevez, Diputado por Oaxaca; Tomás Arriaga, Diputado por Michoacán; Mariano Tirado, Diputado por Puebla; José María Sánchez, Diputado por Yucatán; Rafael Mangino, Diputado por Puebla; Antonio Juille y Moreno, Diputado por Veracruz; José Cirilo Gómez y Anaya, Diputado por México; José María Becerra, Diputado por Veracruz; José Vicente Ro-

bles, Diputado por Puebla; José María de Cabrera, Diputado por Michoacán; Luis Gonzaga Gordoa, Diputado por San Luis Potosí; José Rafael Berruecos, Diputado por Puebla; Bernardo González Angulo, Diputado por México; José María de Bustamante, Diputado por México; Pedro Tarrazo, Diputado por Yucatán; Manuel Crescencio Rejón, Diputado por Yucatán; Miguel Wenceslao Gasca, Diputado por Puebla; Florentino Martínez, Diputado por Chihuahua; Pedro Paredes, Diputado por Tamaulipas; Cayetano Ibarra, Diputado por México; Francisco Antonio Elorriaga, Diputado por el Norte; José María Jiménez, Diputado por la Puebla; Alejandro Carpio, Diputado por Puebla; Francisco García, Diputado por Zacatecas; José Guadalupe de los Reyes, Diputado por San Luis Potosí; Juan Bautista Escalante, Diputado por Sonora; Ignacio de Mora y Villamil, Diputado por México; Servando Teresa de Mier, Diputado por el Nuevo León; José María Ruiz de la Peña, Diputado por Tabasco; Manuel López de Ecala, Diputado por Querétaro; José Mariano Marín, Diputado por Puebla, Secretario; José Basilio Guerra, Diputado por México, Secretario; Santos Velez, Diputado por Zacatecas, Secretario; Juan Rodríguez, Diputado por México, Secretario.

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes y demás autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo enterado para su cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circule. Dado en México a 31 de enero de 1824. 4o.— 3o.

Mariano Michelena, Presidente.— Miguel Domínguez.— Vicente Guerrero.— Al ministro de Relaciones interiores y exteriores.

De orden de S.A. lo comunico a V. para su inteligencia y cumplimiento.

Dios y Libertad. México 31 de enero de 1824. 4o. —3o.

Juan Guzmán

XII

CONSTITUCIÓN FEDERATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROYECTO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONGRESO

FECHADO LOS DÍAS 6, 16 Y 20 DE MARZO DE 1824

Reproducción del ejemplar facilitado por el bibliófilo mexicano Manuel Porrúa

CONSTITUCIÓN FEDERATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Nos el pueblo de los Estados Unidos Mexicanos, usando del derecho que incontestablemente nos corresponde para afianzar nuestra independencia de España y de cualquiera otra potencia, y asegurar para nosotros y nuestra posteridad los inapreciables bienes de libertad, propiedad, seguridad e igualdad, acordamos y establecemos la siguiente Constitución federativa.

TÍTULO I
De la nación mexicana y de su territorio

ARTÍCULO. 1. La Nación Mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquiera otra potencia. Su territorio abraza lo que antes se llamaba Capitanía general de Yucatán, lo que formaba el reino de Nueva España, lo que en otro tiempo se conocía con el nombre de Provincias internas de oriente y occidente y la península de Californias.

TÍTULO II
De su religión, forma de gobierno y división de poderes

ART. 2. La religión de la Nación Mexicana es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

ART. 3. La Nación adopta la forma de gobierno de República representativa popular federal, y divide el supremo Poder de la federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

TÍTULO III
Del poder Legislativo

SECCIÓN PRIMERA
De las partes, límites y funciones de este Poder

ART. 4. El Poder legislativo de la federación residirá en una Cámara de diputados y en un Senado que compondrán el Congreso general.

ART. 5. Las leyes que emanen de este Poder deberán ser dirigidas:

1o. A sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación y seguridad de la Nación en sus relaciones exteriores.

2o. A conservar la unión federal de los Estados, procurando el que la paz y el orden público no padezcan alteraciones en lo interior de la federación.

3o. A mantener la separación e independencia de los Estados entre sí en todo lo respectivo a su gobierno interior.

4o. A sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los Estados tienen ante la ley.

ART. 6. La formación de las leyes puede comenzar indistintamente en cualquiera de las cámaras, a excepción de las que se versaren sobre contribuciones o impuestos, las cuales no pueden tener su origen sino en la Cámara de diputados.

ART. 7. En ambas cámaras respectivamente se deberán considerar como iniciatias de ley:

1o. Las proposiciones que cualquier Diputado o Senador hiciere por escrito, estando éste firmado a lo menos por tres individuos de la comisión de iniciativas de ley.

2o. Las proposiciones que el Poder Ejecutivo de la federación tuviere por convenientes al bien de la sociedad, y como tales las recomendare precisamente a la Cámara de diputados.

3o. Las proposiciones que por especial instrucción de las legislaturas de los Estados hicieren sus diputados o senadores, quienes manifestarán su instrucción, y no estarán obligados a ocurrir a la comisión de iniciativas de ley.

ART. 8. Todos los proyectos de ley sin excepción alguna, se discutirán sucesivamente en las dos cámaras, observándose en ambas con exactitud lo prevenido en el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en la discusión.

ART. 9. Si los proyectos de ley después de discutidos fueren aprobados por la pluralidad absoluta de una y otra Cámara, se presentarán al Poder Ejecutivo, quien si también los aprueba, los firmará, y si no los devolverá con sus observaciones a la cámara de su origen dentro de diez días útiles.

ART. 10. Los proyectos de ley devueltos por el Poder Ejecutivo serán segunda vez discutidos en las dos cámaras, y si en cada una de éstas fueren aprobados por las dos terceras partes de los individuos presentes, se presentarán de nuevo al Poder Ejecutivo, quien sin excusa ni pretexto deberá firmarlos.

ART. 11. Los proyectos de ley desechados por una negativa absoluta de la Cámara que los revisa, vuelven a la de su origen, y si examinados en ésta con presencia de los reparos de la otra fueren aprobados por las tres cuartas partes del número total de los individuos que deben componerla, pasarán segunda vez a la Cámara que los desechó, en la que repetida la discusión

no se entenderá que los vuelve a desechar, si no concurre el voto unánime de los dos tercios de la totalidad de sus individuos, pues siendo menor el número de los que reprobaren, deberán los proyectos tenerse por aprobados, y se presentarán al Poder Ejecutivo. En este caso si el Poder Ejecutivo los firma, tendrán fuerza de ley, y si no, los volverá dentro de diez días a la Cámara de su origen, en donde se deberán considerar como desechados.

ART. 12. Si el Poder Ejecutivo no devolviere algún proyecto de ley, dentro del tiempo señalado en los artículos 9 y 11, el proyecto será una ley, y como tal será promulgada, a menos que corriendo este término, el Congreso haya cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá verificarse en el primer día que estuviere reunido.

ART. 13. Las leyes se interpretan, modifican o derogan del mismo modo que se establecen, y todas las resoluciones del Congreso que, no siendo sobre esta materia, exigen sin embargo la concurrencia de ambas cámaras, se presentarán al Poder Ejecutivo para que tengan efecto con su aprobación o para que, siendo desaprobadas por él, se observe lo que en igual caso se prescribe respecto de los proyectos de ley. Se exceptúan los casos de suspensión y prorrogación de sesiones y el de traslación del Congreso, en los cuales no se necesita de la aprobación del Poder Ejecutivo.

SECCIÓN SEGUNDA
De las facultades del Congreso

ART. 14. Las facultades del Congreso son:

1a. Promover la ilustración y prosperidad general, concediendo por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores de escritos importantes o de invenciones útiles a la República.

2a. Proteger y arreglar la libertad de imprenta, de modo que jamás pueda suspenderse su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados de la federación.

3a. Arreglar definitivamente los límites de los Estados, y terminar sus diferencias cuando ellos no hayan convenido entre sí en la demarcación de sus respectivos territorios.

4a. Admitir nuevos Estados a la unión federal o territorios incorporándolos en la Nación. Pero ninguno de los Estados actuales se podrá unir con otro para formar uno solo, ni erigirse otro de nuevo dentro de los límites de los que ya existen sin el consentimiento de las legislaturas de los Estados interesados y aprobación del Congreso general.

5a. Establecer las contribuciones necesarias para cubrir los gastos generales de la República, determinar su inversión y tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo.

6a. Contraer deudas sobre el crédito público y designar garantías para cubrirlas.

7a. Reconocer la deuda nacional y señalar medios de consolidarla.

8a. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras y entre los diferentes Estados de la federación y tribus de los indios.

9a. Determinar y uniformar el peso, valor, tipo, ley y denominación de las monedas en todos los Estados de la federación y adoptar un sistema general de pesos y medidas.

10a. Habilitar toda clase de puertos.

11a. Declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Poder Ejecutivo.

12a. Conceder patentes de corso y declarar buenas o malas las presas de mar y tierra.

13a. Designar y organizar la fuerza armada de mar y tierra, fijando el cupo respectivo a cada Estado.

14a. Dictar providencias para organizar, armar y disciplinar la milicia de los Estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales y la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por el Congreso general.

15a. Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada y cualquiera otro que celebre el Poder Ejecutivo.

16a. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la federación.

17a. Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia en los puertos mexicanos por más de un mes.

18a. Permitir o no igualmente la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República.

19a. Crear o suprimir empleos públicos y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.

20a. Establecer una regla general de naturalización y uniformes leyes sobre bancarrotas en todos los Estados.

21a. Dar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo cuando en los casos de rebelión o invasión lo exija la salud de la patria, pero estas facultades deberán detallarse en cuanto sea posible, y limitarse al tiempo y lugares indispensablemente necesarios.

22a. Conceder indultos generales cuando lo exija algún grande motivo de conveniencia pública.

23a. Elegir un lugar fuera de las capitales de los Estados y cuya área no exceda de cuatro leguas, para que sirva de residencia a los supremos poderes de la federación, y ejercer en su distrito las atribuciones de un Poder legislativo particular como el de los otros Estados.

24a. Variar temporalmente esta residencia cuando lo juzgue necesario.

25a. Dictar todas las leyes que sean necesarias para desempeñar las facultades precedentes y todas las demás que por esta Constitución se conceden a los supremos poderes de la federación.

SECCIÓN TERCERA

De las funciones económicas y prerrogativas comunes a ambas cámaras y a sus miembros

ART. 15. Cada Cámara califica las elecciones y cualidades de sus respectivos miembros, los admite en su seno, y si se ofrecen dudas sobre estos puntos las resuelve.

ART. 16. Cada Cámara elige anualmente sus secretarios de entre los individuos que las componen y nombra también de fuera de su seno los oficiales, que en su juicio sean necesarios para el desempeño de sus trabajos, asignando a los últimos las gratificaciones correspondientes.

ART. 17. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los existentes, sean los que fueren, deberán siempre reunirse y compeler a los ausentes a que concurran del modo y bajo las penas que las mismas cámaras establezcan.

ART. 18. Cada Cámara en sus sesiones, debates, deliberaciones y en todo lo demás que pertenezca a su gobierno y orden interior, observará el reglamento del Congreso actual sin perjuicio de las reformas, que en lo sucesivo podrán hacerse en él, si ambas cámaras lo estimaren conveniente.

ART. 19. Cada Cámara en su primera sesión nombrará una comisión de cinco individuos con la denominación de comisión de iniciativas de ley. Los trabajos de estas comisiones se reducirán a examinar los proyectos de ley que los diputados o senadores quieran presentar en su respectiva Cámara, y hallándolos dignos de tomarse en consideración, los firmarán sin la necesidad de expresar su dictamen.

ART. 20. Las cámaras se comunicarán entre sí y con el Poder Ejecutivo por el conducto de sus respectivos secretarios o por medio de diputaciones.

ART. 21. Las cámaras gozan del derecho de policía en la casa de sus sesiones y fuera de ella en todo lo conducente al libre ejercicio de sus atribuciones.

ART. 22. Los miembros del Congreso gozan de inmunidad en sus personas y en sus bienes durante el tiempo de las sesiones y mientras van a ellas y vuelven a sus casas, excepto en los casos de traición o de otro grave delito contra el orden social.

ART. 23. En estos casos los diputados no podrán ser acusados sino ante el senado, ni los senadores sino ante la Cámara de diputados, constituyéndose cada Cámara en gran *juri*, para declarar si ha lugar a la formación de causa respecto de los acusados.

ART. 24. La declaración de que habla el artículo anterior, no subsiste en ninguna de las cámaras si no concurre el voto unánime de los dos tercios de los miembros presentes.

ART. 25. Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones políticas y jamás podrán ser reconvenidos ante la ley por los discursos que hubieren pronunciado en desempeño de su comisión.

ART. 26. La indemnización de los diputados y senadores será determinada por ley y pagada de la Tesorería general, debiéndose computar el tiempo que necesariamente hayan de invertir en venir de sus casas al lugar de la reunión, y volver a ellas concluidas las sesiones.

SECCIÓN CUARTA
De la Cámara de Diputados

ART. 27. La Cámara de diputados se compone de representantes elegidos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos de los Estados.

ART. 28. Las cualidades de los ciudadanos electores se prescribirán constitucionalmente por las legislaturas de los Estados, a quienes también corresponde reglamentar las elecciones conforme a los principios establecidos en esta Constitución.

ART. 29. Luego que en cualquiera Estado, a juicio de su legislatura, lo permitan los progresos de la ilustración de los pueblos, se establecerá la elección directa de sus diputados, cesando allí la celebración de las juntas populares que se han llamado primarias, secundarias y de provincia, y que por ahora se adoptan generalmente para el nombramiento de representantes.

ART. 30. Éste se verificará en un mismo día en todos los Estados, celebrándose las juntas llamadas de provincia en el primer domingo de octubre.

ART. 31. Las juntas primarias y secundarias se celebrarán en los días que fijaren las legislaturas, teniendo en consideración las distancias de los lugares, y cuanto pueda retardar la reunión de los electores.

ART. 32. La base para el nombramiento de diputados será la población a razón de un Diputado por cada cien mil personas, o por una fracción que pase de setenta y cinco mil. Pero todo Estado nombrará por lo menos un Diputado, sea cual fuere su población.

ART. 33. Un censo que se formará dentro de cinco años, y se renovará después en cada decenio, es el que ha de designar el número de diputados, que corresponde a los Estados. Entre tanto el Estado de Guanajuato elegirá cuatro propietarios, el interno de Occidente dos, el interno de Oriente dos, el interno del Norte tres, el de México diez, el de Michoacán tres, el de Oaxaca cinco, el de Puebla de los Ángeles ocho, el de Querétaro dos, el de S. Luis Potosí dos, el de las Tamaulipas uno, el de Tabasco uno, el de Tlaxcala uno, el de Veracruz dos, el de Jalisco cinco, el de Yucatán seis y el de Zacatecas dos.

ART. 34. Se elegirá así mismo en cada Estado el número de diputados suplentes, que corresponda, a razón de uno por cada tres propietarios o por una fracción que llegue a dos. Los Estados que tengan menos de tres propietarios elegirán, sin embargo, un suplente.

ART. 35. Para ser Diputado se requiere:

1o. Tener al tiempo de la elección la edad de veinte y cinco años cumplidos.

2o. Haber sido por seite años ciudadano de los Estados de la federación, con la residencia actual en el Estado que elige, o haber nacido en él aunque resida en otro.

3o. Ser dueño de una propiedad raíz del valor de mil pesos, o tener una renta, usufructo, u oficio que le produzca quinientos pesos anuales o ser profesor de alguna ciencia.

ART. 36. Los no nacidos en el territorio de la federación necesitan para ser diputados, además de la residencia de siete años, tener ocho mil pesos en bienes raíces, exceptuando los nacidos en cualquiera parte de la América, que en 1810 dependía de la España, y que no se ha unido a otra Nación extranjera o permanecido en la dependencia de la misma España, a quienes bastará tener tres años de residencia y cuatro mil pesos en bienes raíces.

ART. 37. La elección por razón de nacimiento preferirá a la que se haga en consideración a la residencia.

ART. 38. No pueden ser diputados:

1o. Los que están privados o suspensos de los derechos de ciudadano.

2o. Los individuos del Poder Ejecutivo de la federación.

3o. Los ministros de la corte general de justicia.

4o. Los secretarios del despacho y los oficiales de sus secretarias.

5o. Los gobernadores de los Estados.

6o. Los arzobispos, obispos, gobernadorse de los obispados, provisores y vicarios generales.

ART. 39. Pertenece exclusivamente a la Cámara de diputados el derecho de acusar ante el Senado:

1o. A los individuos del Poder Ejecutivo por delitos de traición contra la independencia nacional o la forma de gobierno adoptada.

2o. A los individuos de la corte general de justicia por los mismos delitos, y además por procedimientos indubitablemente contrarios a los deberes de su empleo, o por otros delitos graves que puedan perturbar el orden social.

3o. A los gobernadores de los estados por manifiestas infracciones de la Constitución general y de las leyes de la unión.

ART. 40. Corresponde también a la misma Cámara la inspección sobre los secretarios del despacho y demás empleados generales, a quienes igualmente podrá acusar ante el Senado por el mal desempeño de sus funciones u otros crímenes de gravedad. Pero esta inspección no exime a otros jefes o tribunales de la obligación que tienen de velar sobre la observancia de las leyes, ni deroga o disminuye la facultad de estas autoridades para juzgar, deponer o castigar, según derecho, a sus subalternos.

ART. 41. La Cámara de diputados elegirá anualmente su presidente y vice-presidente escogiendo para estos oficios individuos de su seno en el día y forma que se determinará por ley.

SECCIÓN QUINTA
De la Cámara del Senado

ART. 42. El Senado de la federación se compone de dos senadores de cada Estado, elegidos por sus legislaturas y renovados por mitad, de dos en dos años.

ART. 43. La elección periódica de los senadores, se hará en todos los Estados en un mismo día, que será el señalado para elegir a los individuos del Poder Ejecutivo.

ART. 44. El Senado, luego que por primera vez se hallare reunido, designará por medio de la suerte los senadores, que han de cesar al fin del segundo año, debiendo ser uno de cada Estado. En lo sucesivo la renovación bienal seguirá el orden de la antigüedad.

ART. 45. Cuando falte algún Senador por muerte, renuncia, destitución u otra causa, se llenará la vacante por la legislatura correspondiente, si estuviese reunida, y no estándolo, podrá el Gobernador respectivo nombrar uno que sirva en clase de interino hasta la próxima reunión de la legislatura, a quien entonces toca proveer en propiedad.

ART. 46. Para ser Senador se requiere tener al tiempo de la elección:

1o. La edad de treinta años cumplidos.

2o. La vecindad por nueve años en los Estados de la federación con residencia actual en el Estado que elige, o naturaleza por nacimiento en el mismo Estado, aunque actualmente no resida en él.

3o. La propiedad en bienes raíces de dos mil pesos lo menos, y en su defecto, el usufructo o renta de mil pesos anuales o ser profesor de alguna ciencia.

4o. Una integridad e ilustración conocida.

ART. 47. En la elección de senadores se observará la preferencia que el artílculo 37 señala al nacimiento respecto de la residencia.

ART. 48. No pueden ser senadores los que no pueden ser diputados, y para poder serlo los no nacidos en alguno de los Estados de la federación, además de la residencia y vecindad prevenida en el artículo 46, deben tener doce mil pesos en bienes raíces. Se exceptúan los nacidos en cualquiera parte de la América que en 1810 dependía de la España, y que no se ha unido a otra Nación extranjera ni permanezca dependiente de la misma España, a quienes bastará tener seis años de residencia y seis mil pesos en bienes raíces.

ART. 49. El individuo nombrado como suplente del Poder Ejecutivo será el Presidente nato del Senado; pero no tendrá voto sino para decidir en casos de empate, y en su ausencia o cuando funcionare en el gobierno será substituido por un Presidente que para estos casos elegirá anualmente el mismo Senado de entre los individuos de su seno.

ART. 50. El Senado es el gran *juri* que declara si ha lugar a la formación de causa en los casos de acusación de que hablan los artículos 39 y 40, y para esta declaración se necesita el voto unánime de las dos terceras partes de los senadores presentes.

ART. 51. Si se declara que ha lugar a la formación de causa, queda de hecho suspenso de su empleo el acusado y se pondrá a disposición del tribunal competente.

ART. 52. La declaración del Senado en estos casos deberá tener efecto sin que intervenga la revisión de la Cámara de diputados ni la sanción del Poder Ejecutivo.

SECCIÓN SEXTA
Del tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso

ART. 53. El Congreso se reunirá todos los años el día 1o. de enero en el lugar que se designare por ley, en la que se prescribirán las operaciones previas a la apertura de sus sesiones y las formalidades que se han de observar en su instalación.

ART. 54. Las sesiones ordinarias del Congreso serán diarias sin otra interrupción que las de los días festivos solemnes, y para suspenderse por más de dos días será necesario el consentimiento de ambas cámaras.

ART. 55. Éstas residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro, sin que ambas convengan en la traslación, designando un mismo punto para la reunión de una y otra. Pero si conviniendo las dos en la traslación difiriesen en cuanto al tiempo o lugar, el Poder Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo precisamente uno de los extremos de la cuestión.

ART. 56. El Congreso cerrará anualmente sus sesiones el día 15 de abril, pudiendo prorrogarlas hasta por treinta días más, cuando lo juzgue necesario o lo pida el Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, México 6 de marzo de 1824.— Miguel Ramos Arizpe.— Alcocer.— Vázquez.— Rejón.— Carpio.— Huerta.— Espinosa.— Becerra.— Gordoa.— Argüelles.— Cañedo.— Es copia.

MÉXICO, 1824
IMPRENTA DE LA ÁGUILA
dirigida por José Ximeno, calle de Medinas número 6

CONSTITUCIÓN FEDERATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SEGUNDA PARTE

TÍTULO IV
Del Supremo Poder Ejecutivo

SECCIÓN PRIMERA
Del número de individuos de que se ha de componer el Poder Ejecutivo, de las reglas que deberán observarse para su elección y de su duración

ART. 57. El Supremo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos se compondrá de tres individuos elegidos del modo siguiente.

ART. 58. La legislatura de cada estado nombrará a pluralidad absoluta de votos para propietarios de este poder por primera vez a tres individuos, de los cuales dos por lo menos no serán habitantes del mismo estado, y a uno para suplente, pudiendo ser éste de dentro o fuera del estado.

ART. 59. Estas elecciones se harán en un mismo día en todos los estados de la federación.

ART. 60. Concluidas las elecciones, remitirá cada legislatura al Presidente del actual Congreso una lista certificada y sellada de los cuatro individuos que hubiesen reunido la mayoría absoluta de votos, con distinción de los elegidos para propietarios y del nombrado para suplente.

ART. 61. Luego que el Presidente del actual Congreso reciba los certificados de todas las legislaturas, lo participará al mismo Congreso y en su sesión inmediata se abrirán todas las certificaciones y se contarán los votos.

ART. 62. Los que reuniesen para propietarios del Supremo Poder Ejecutivo la mayoría absoluta de votos, contada por estados, quedarán elegidos; pero si alguno o algunos no la reuniesen, el Congreso en cada elección escogerá por cédulas una de las dos personas, que tengan números más altos hasta completar la terna. Será en todo caso primer nombrado el que tenga más votos, y segundo el que reuniese número mayor que el tercero; en igualdad de sufragios decidirá la suerte.

ART. 63. En el caso que todos, o los que queden después de elegido alguno o algunos, tengan igual número de sufragios el Congreso elegirá de entre los que estén nombrados por las legislaturas, y no hubiesen reunido la mayoría absoluta.

ART. 64. Cuando el Congreso tenga que nombrar uno o más individuos del Supremo Poder Ejecutivo, y alguna de las dos personas, de las que tenga que escoger una, tuviese mayor número de votos, y las demás hubiesen reunido números iguales, entonces se observará lo pre-

venido en el artículo anterior. Si una hubiese reunido la mayoría respectiva, y dos o más, aunque tengan más votos que los otros, reúnan igual número de sufragios, éstas entrarán en sorteo para que la suerte designe la otra de las dos de que debe elegir una el Congreso; pero si más de dos tuviesen dicha mayoría e igual número de votos, la suerte señalará las dos personas, de las que se ha de nombrar una.

ART. 65. En todos los casos en que el Congreso tenga que elegir a los individuos del Supremo Poder Ejecutivo, la sala deberá estar compuesta de un representante o representantes de los dos tercios de los estados, y la representación de cada uno de éstos tendrá un voto, necesitándose para la elección la mayoría absoluta de sufragios tomada por el número total de los estados.

ART. 66. Concluida la elección de los propietarios procederá el Congreso a examinar si alguno de los suplentes designados por las legislaturas tiene la mayoría absoluta de votos, quedando elegido el que la hubiese reunido; pero si no, la elección se arreglará a lo prevenido en los artículos anteriores.

ART. 67. Cada dos años se renovará uno de los tres individuos del Supremo Poder Ejecutivo empezando la renovación por el primer nombrado que deberá cesar en sus funciones el 1 de abril de 1826, día en que entrará el nuevo propietario en el ejercicio de su oficio. En el otro bienio en igual día, cesará el segundo nombrado y prestará el propietario nuevamente elegido el correspondiente juramento para entrar en el desempeño de sus atribuciones. Del tercer bienio en adelante se mudará el más antiguo, cesando siempre el que deba salir el 1 de abril y entrando a ejercer en el Poder Ejecutivo en el mismo día el nuevo propietario.

ART. 68. El suplente nuevamente nombrado para remplazar al antiguo, deberá entrar en el ejercicio de sus respectivas facultades el mismo día que entre a fungir en el Poder Ejecutivo el nuevo propietario.

ART. 69. En caso de que el propietario nuevamente elegido no pueda entrar en el ejercicio de su oficio el día 1 de abril, el nuevo suplente le substituirá.

ART. 70. Para la renovación bienal, de que habla el artículo 67, el 1 de septiembre del año anterior a aquél en que deben entrar el nuevo propietario y suplente en sus respectivas funciones, la legislatura de cada estado nombrará a pluralidad absoluta de votos dos individuos, de los cuales uno por lo menos no será habitante del mismo estado. De éstos uno será para remplazar al propietario cesante, y el otro al suplente que en cada bienio deberá variarse. En estas elecciones bienales además de los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 se observarán los artículos siguientes, entendiénse de la Cámara de representantes lo que en aquéllos se dice del Congreso actual.

ART. 71. Concluida la elección remitirá cada legislatura al Presidente del Senado la lista certificada y sellada de los dos individuos que hubiesen reunido la mayoría absoluta de votos con distinción del que hubiese nombrado para propietario y del elegido para suplente.

ART. 72. El Presidente del Senado abrirá a presencia de las dos cámaras el 6 de enero del año en que han de entrar a fungir los nuevos propietario y suplente, todos los certificados y se contarán los votos.

ART. 73. Ningún individuo del Supremo Poder Ejecutivo podrá ser reelegido, sino después de un bienio de haber cesado en sus funciones. Tampoco será elegible para este destino por el mismo tiempo el suplente, que hubiese fungido más de un año en el Poder Ejecutivo.

ART. 74. Cuando sean suspensos los propietarios del Supremo Poder Ejecutivo, la Cámara de representantes nombrará dos individuos, que con el suplente fungirán durante la suspensión de aquéllos. Esto no impedirá la renovación periódica del que deba renovarse.

ART. 75. En caso de remoción de los tres propietarios se observará lo prevenido en el artículo anterior, e inmediatamente se circularán a las legislaturas las órdenes necesarias para que procedan a nueva elección de tres individuos para propietarios y uno para suplente. En estas eleccions se observarán los artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65, y además los dos siguientes, entendiéndose de la Cámara de representantes lo que en aquéllos se dice del Congreso actual.

ART. 76. Cada legislatura remitirá al Presidente del Senado la lista de los cuatro individuos que hubiesen reunido la pluralidad absoluta de votos con distinción de propietarios y suplente.

ART. 77. En el caso de que habla el artículo 75, el Congreso general designará el día, en que deben hacerse las elecciones por las legislaturas, como también en el que deberá el Presidente del Senado abrir en presencia de las dos cámaras los certificados y contarse los votos.

ART. 78. Los nuevamente elegidos serán variados según lo previenen los artículos 67, 68, 69, 70, 71 y 72. El primer nombrado no podrá durar más de dos años en el Poder Ejecutivo, debiendo ser mudado el 1 de abril del segundo año de aquél en que entró a fungir. Para esto las legislaturas el 1 de septiembre del año anterior al de la variación harán las elecciones y el 6 de enero del en que deben mudarse se abrirán las listas en presencia de las dos cámaras. La renovación se hará en lo sucesivo cada bienio, haciendo siempre las legislaturas la elección el 1 de septiembre del año anterior a aquél en que debe entrar a fungir el nuevo propietario y suplente, y debiendo abrirse los certificados el 6 de enero del en que ha de hacerse la variación.

ART. 79. Ninguno podrá ser elegido para propietario o suplente del Supremo Poder Ejecutivo, que no sea ciudadano por nacimiento en los estados o territorios de la federación mexicana, mayor de 35 años de edad, vecino y residente en el país.

SECCIÓN SEGUNDA
De las atribuciones del Poder Ejecutivo

ART. 80. El Supremo Poder Ejecutivo, publicará, circulará y hará guardar y cumplir la Constitución y las leyes generales, dando órdenes, reglamentos y decretos para su más exacto cumplimiento y podrá objetar por una sola vez en el término de diez días, cuando le parezca conveniente sobre las leyes que se le comuniquen para su publicación, suspendiendo ésta hasta la resolución del Congreso.

ART. 81. Pondrá en ejecución las leyes dirigidas a consolidar la integridad de la federación, a sostener su independencia en lo exterior, y su unión y libertad en lo interior.

ART. 82. Usará para promulgar las leyes de la fórmula siguiente: "El Supremo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos a todos los que las presentes vieren y entendieren sabed: que el Senado y Cámara de representantes han decretado (aquí el texto). Por tanto, mandamos se imprima, públique, circule, y se le de el debido cumplimiento".

ART. 83. Podrá nombrar y remover libremente a los secretarios generales del despacho.

ART. 84. Cuidará de la recaudación y decretará la distribución de las contribuciones generales arreglándose a las leyes.

ART. 85. Dispondrá de la fuerza permanente de mar y tierra de la milicia activa y local para la defensa y seguridad de la federación; pero para usar de la local fuera de sus Estados respectivos obtendrá previamente el consentimiento del Congreso, quien calificará la fuerza necesaria y no estando éste reunido, necesitará de la aprobación del consejo de gobierno.

ART. 86. Nombrará con aprobación del Senado y en los recesos de éste con la del consejo de gobierno, a los empleados de las oficinas generales de hacienda, a los embajadores, ministros y agentes diplomáticos de toda especie, y a los oficiales militares de Coronel arriba.

ART. 87. También hará el nombramiento de los demás empleados del ejército permanente, armada y milicia activa, de los de las secretarías del despacho y demás oficinas de la federación, arreglándose a lo que dispongan las leyes.

ART. 88. Declarará la guerra en nombre de los Estados Unidos, después que el Congreso la hubiese decretado, tomando las medidas preparatorias.

ART. 89. Podrá dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los militares conformándose en todo con lo dispuesto por las leyes.

ART. 90. Dirigirá las relaciones diplomáticas y comerciales con las potencias extranjeras, pudiendo celebrar tratados de paz, amistad, alianza, federación, tregua, neutralidad armada, comercio y otros; más para prestar o denegar la ratificación a los que ya estén concluidos por los plenipotenciarios, deberá preceder la aprobación del Congreso general.

ART. 91. Recibirá los embajadores y otros ministros de las demás potencias.

ART. 92. Podrá suspender de sus empleos hasta por tres meses y privar aun de la mitad de sus sueldos por el mismo tiempo a los empleados de la federación que delincan por razón de su oficio, y en los casos en que crea debérseles formar causa, pasará los antecedentes de la materia al tribunal respectivo.

ART. 93. Podrá con previo acuerdo y consentimiento del Congreso general, y no estando este reunido, del Consejo de gobierno, dictar todas aquellas medidas extraordinarias, que sean indispensables en los casos de conmoción con mano armada, y en los de una repentina invasión en el territorio de los Estados Unidos; pero el Congreso, o el consejo en su caso, limitará esta extraordinaria autorización a los lugares y tiempo absolutamente necesarios.

ART. 94. Podrá hacer al Congreso general las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al bien general de los Estados Unidos.

ART. 95. Concederá el pase o retendrá los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento del Congreso general, si contienen disposiciones generales: oyendo al Senado, si se versan sobre negocios particulares o gubernativos, y si contienen puntos contenciosos, a la suprema corte de Justicia.

ART. 96. Convocará a Congreso extraordinario en los casos en que crea conveniente tomar esta medida, o cuando lo acuerden las dos terceras partes de los individuos del Consejo de gobierno.

ART. 97. Podrá pedir al Congreso general la prorrogación de sus sesiones ordinarias hasta por 30 días.

SECCIÓN TERCERA
De las restricciones, deberes y prerrogativas de los individuos del Supremo Poder Ejecutivo

ART. 98. Ningún individuo del Supremo Poder Ejecutivo podrá mandar en persona las fuerzas de mar y tierra sin previo acuerdo y consentimiento del Congreso, y cuando alguno de ellos con el requisito anterior las mandase, dejará de concurrir en las funciones del Supremo Poder Ejecutivo.

ART. 99. Ninguna de las personas del Supremo Poder Ejecutivo podrá salir del territorio de la República durante su encargo, ni un año después sin permiso del Congreso.

ART. 100. Los individuos del Supremo Poder Ejecutivo deberán antes de entrar en el ejercicio de su oficio prestar en presencia de las dos cámaras, o ante el Consejo de gobierno cuando no pudiese presentarse durante las sesiones del Congreso, el juramento siguiente: "Juro por Dios y los santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo que los Estados Unidos Mexicanos me han confiado, y que guardaré y haré guardar la Constitución y las leyes generales de la federación".

ART. 101. El Supremo Poder Ejecutivo no podrá privar a ninguno de su libertad ni imponerle pena alguna, y solamente tendrá poder para expedir las órdenes necesarias sobre el arresto de alguna o algunas personas cuando así lo exija el bien y seguridad de los Estados Unidos; pero en el intermedio de cuarenta y ocho horas pondrá las personas arrestadas a disposición del tribunal competente.

ART. 102. Tendrá la obligación de dar a cada cámara al abrir sus sesiones anuales, cuenta del estado de la federación, indicando las mejoras o reformas que en cada ramo puedan hacerse.

ART. 103. También estará obligado a dar a cada cámara los informes que le pida, denegando únicamente aquellos que por entonces requieran reserva.

ART. 104. El primer nombrado tendrá la presidencia en el primer bienio, en el otro el segundo nombrado, y en lo succesivo el más antiguo.

ART. 105. Los individuos del Supremo Poder Ejecutivo durante su encargo solamente podrán ser acusados por los crímenes de traición contra la independencia, o contra el sistema de República representativa popular federal adoptado por los Estados Unidos, debiendo quedar suspensos admitida la acusación por el Senado, removidos en caso de convicción y castigados con arreglo a las leyes.

SECCIÓN CUARTA
Del Suplente

ART. 106. En caso de imposibilidad o muerte de alguno de los propietarios, entrará a desempeñar el suplente, debiendo éste fungir por todo el tiempo que había de durar el propie-

tario, cuyo lugar ocupe, si antes no cesase la imposibilidad. El suplente al entrar en el Poder Ejecutivo prestará el juramento prevenido en el artículo 42.

SECCIÓN QUINTA
Del Consejo de Gobierno

ART. 107. Durante el receso del Congreso general habrá un Consejo de gobierno compuesto de la mitad de los individuos del Senado, uno de cada estado.

ART. 108. En los dos años primeros fomarán este Consejo los primeros nombrados por sus respectivos estados, y en lo sucesivo los más antiguos.

ART. 109. Las atribuciones de este Consejo son las siguientes:

1a. Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes generales de la federación formando expediente sobre cualquier incidente relativo a este objeto.

2a. Hacer al Supremo Poder Ejecutivo las observaciones que crea conducentes para el mejor cumplimiento de la Constitución y de las leyes generales.

3a. Convocar a Congreso extraordinario cuando por circunstancias graves, y a juicio de las dos terceras partes de sus individuos presentes lo estimare necesario.

4a. Prestar su consentimiento para el uso de la milicia local en los casos de que habla el artículo 85.

5a. Aprobar el nombramiento de los empleados, que designa el artículo 86.

6a. Autorizar al Supremo Poder Ejecutivo para que dicte todas aquellas medidas extraordinarias que sean convenientes en los casos de conmoción con mano armada, o de una súbita invasión en el territorio de la federación arreglándose al artículo 93.

7a. Dar su dictamen sobre todos los negocios en que el Supremo Poder Ejecutivo tenga a bien consultarle.

SECCIÓN SÈXTA
De los Secretarios del Despacho

ART. 110. Habrá tres secretarios para el despacho de los negocios de la República: el primero se denominará secretario del despacho de relaciones, justicia y negocios eclesiásticos; el segundo de guerra y marina y el tercero de hacienda.

ART. 111. Los secretarios del despacho son los únicos órganos por donde debe el Supremo Poder Ejecutivo comunicar sus órdenes, y las que no estuviesen autorizadas por el secretario respectivo no deberán ser obedecidas, y será castigado con arreglo a las leyes el que las obedeciere sin este requisito.

ART. 112. Los secretarios del despacho serán responsables de las órdenes que autoricen contra la Constitución y las leyes generales.

ART. 113. El Congreso podrá hacer algunas variaciones sobre el número de las secretarías del despacho.

ART. 114. A cada secretaría se asignarán por el Congreso general los negocios que le perte-

nezcan por un reglamento particular, cuyo proyecto formará el Poder Ejecutivo y someterá a la aprobación del mismo Congreso.

Sala de Comisiones, México 6 de marzo de 1824.— Miguel Ramos Arizpe.— Alcocer.— Vargas.— Rejón.— Carpio.— Huerta.— Espinosa.— Becerra.— Gordoa.— Argüelles.— Cañedo.

MÉXICO, 1824
IMPRENTA DE LA ÁGUILA
dirigida por José Ximeno, calle de los Medinas núm. 6

CONSTITUCIÓN FEDERATIVA DE LOS ESTADOS-UNIDOS MEXICANOS

PARTE TERCERA

TÍTULO V
Del Poder Judicial

SECCIÓN PRIMERA

ART. 115. El Poder Judicial de la federación residirá en una corte suprema de justicia, en los tribunales de circuito y jueces de distrito.

SECCIÓN SEGUNDA
De la corte suprema de justicia, número de sus miembros, su duración y el modo de elegirlos

ART. 116. La corte suprema de justicia se compondrá de once ministros y un fiscal, divididos en tres salas para el mejor desempeño de sus atribuciones, sin perjuicio de que con el tiempo se aumente o disminuya este número, según el Congreso general lo halle por más conveniente.

ART. 117. Los nombrados para ella serán perpetuos, mientras no dieren lugar para ser removidos.

ART. 118. La elección de cada uno de los que la compongan se hará por las legislaturas de los estados a pluralidad absoluta de votos, en los términos que explica el artículo 125, pudiendo caer éstos en cualquier individuo de la federación, aunque no sea del mismo estado que elige, con tal que tenga las cualidades que después se dirán.

ART. 119. Estas elecciones serán en un mismo día en todos los estados de la federación.

ART. 120. Concluidas las elecciones, remitirá cada legislatura al Presidente del actual Congreso una lista certificada y sellada de los doce individuos, que hubieren sacado la mayoría de votos con distinción del que los haya obtenido para fiscal.

ART. 121. El Presidente luego que haya recibido todas las listas de los estados lo participará al Congreso, a cuya presencia se leerán los nombres de los elegidos.

ART. 122. Una comisión compuesta de un Diputado por cada estado revisará las listas para dar cuenta de si algunas convienen en determinadas personas, expresando cuáles son éstas, o si todas van dispersas.

ART. 123. El individuo o individuos, que hubieren reunido la mayoría de sufragios, computada por el número de los estados, y no por el de los miembros de sus legislaturas respecti-

vas, se tendrán desde luego por nombrados para la Corte suprema de Justicia, sin más que declararlo el Congreso.

ART. 124. En los demás elegidos, en que no hubiere esta circunstancia de haber reunido la mayoría de las legislaturas a su favor, recaerá el juicio del Congreso por medio de la elección que haga, entresacando precisamente para cada una de ellas los dos individuos que hayan reunido mayor número de legislaturas en las propuestas, o sorteando a los que lo tengan igual para competir después en la votación, como queda dicho, hablando de los miembros del Poder Ejecutivo.

ART. 125. Estas elecciones se harán por cédulas y con separación para cada uno de los individuos que falten a llenar el número de los doce eligendos, debiendo sacar la mayoría absoluta de sufragios para quedar electos; en caso de que ésta falte, se repetirá la votación entre los dos que hayan sacado mayor número de votos, y si hubiese empate decidirá la suerte.

ART. 126. Lo dispuesto hasta aquí para la organización de la suprema Corte de Justicia, se hará siempre que se trate de remplazar alguno de los miembros que falten de ella por muerte, jubilación, privación decretada según las leyes u otro motivo legal, verificándose siempre la elección de las legislaturas de todos los estados, a la que se ligará la cámara de representantes.

ART. 127. El juramento que deben hacer los Ministros ante el Supremo Poder Ejecutivo al entrar a ejercer su destino, es el siguiente: "¿Juráis a Dios nuestro Señor haberos fiel y legalmente en el desempeño de las obligaciones que os confía la Nación?— Sí juro.— Si así lo hiciereis Dios os lo premie, y si no, os lo demande".

ART. 128. Para ser elegido se necesita ser de cuarenta años de edad, natural de la federación, o con residencia de diez años no interrumpidos hasta el día de su nombramiento, y abogado de buen nombre, tanto en su ciencia respectiva, como en lo moral y político.

SECCIÓN TERCERA
De las atribuciones de la Corte suprema

ART. 129. Las atribuciones de la suprema Corte de Justicia, son las siguientes:

1a. Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro estado de la federación, siempre que lo reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que con pleno conocimiento de causa deba recaer formal sentencia, y lo mismo cuando uno de ellos sea parte, aunque no dispute precisamente con otro estado, sino con sus vecinos, o entre particulares sobre pretensiones de tierras bajo concesiones de diversos estados.

2a. Terminar las disputas que se susciten sobre tratados o negociaciones que haga el Poder Ejecutivo.

3a. Fallar sobre el pase o retención de los decretos conciliares y bulas pontificias expedidas en asuntos contenciosos.

4a. Dirimir las competencias trabadas entre los jueces de un estado con el de otro diferente, bien sea de primera, de segunda o de tercera instancia.

5a. Conocer de las causas de los individuos del Supremo Poder Ejecutivo que se les muevan durante el tiempo de su encargo o un año después, por los crímenes señalados en el artículo 39, y de las que se les moviesen en el año inmediato a aquél en que cesaron en sus funciones por los demás delitos cometidos en tiempo del ejercicio de su oficio, bajo las for-

malidades prescritas en los artículos 39, 50, 51 y 52. Pasado el año no podrán ser acusados ni removidos por dichos delitos.

6a. De las de los Diputados y Senadores en los casos y circunstancias demarcadas en los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

7a. De las de los Gobernadores de los Estados en las faltas de que habla el artículo 39.

8a. De las que se promovieren contra los individuos de la misma Corte suprema, en los términos designados en el artículo 39 citado antes, no llegando a estar su mayoría complicada en el crimen, pues si llegare este caso, o el de ser necesario hacer efectiva la responsabilidad de todo el tribunal entero, la cámara de Diputados previa la declaración, que requiere el artículo 50, procederá a nombrar para este fin un tribunal compuesto de nueve jueces elegidos por suerte de un número doble.

9a. De las de los Secretarios del Despacho antecediendo la expresada declaración.

10a. De los negocios civiles y criminales de los Embajadores, Ministros, Cónsules y Agentes diplomáticos.

11a. Dirimir las competencias que se susciten entre los jueces y tribunales de la federación, y los de los estados.

12a. Oír las dudas de todos los tribunales sobre inteligencia de una ley general y consultarlas al Supremo Poder Ejecutivo con los fundamentos en que estriben para que él promueva la declaración del Congreso.

13a. Conocer según lo prevengan las leyes de los crímenes cometidos en el mar, de las causas de almirantazgo, de las presas de mar y tierra, contrabandos, ofensas contra la nación de los Estados Unidos Mexicanos, y abusos de los empleados de hacienda, infracciones de las leyes generales y otros casos que se señalarán.

SECCIÓN CUARTA
De los tribunales de circuito

ART. 130. Los tribunales de circuito se compondrán de un Letrado, un Promotor fiscal, ambos nombrados por el Supremo Poder Ejecutivo a propuesta de la alta Corte de Justicia y de dos asociados según dispongan las leyes.

ART. 131. A estos tribunales corresponde conocer en segunda instancia, de los crímenes cometidos en el mar, en las causas de almirantazgo, presas, contrabandos, ofensas contra los Estados Unidos Mexicanos, en las causas civiles, cuyo valor pase de quinientos pesos y en que está interesada la federación. Por un reglamento particular se designará el número de estos tribunales y sus respectivas jurisdicciones, los demás negocios de que deben conocer y el modo y forma en que deberán ejercer sus atribuciones.

SECCIÓN QUINTA
De los jueces de distrito

ART. 132. Los Estados Unidos Mexicanos se dividirán en cierto número de distritos, y en

cada uno de éstos habrá un juez que conocerá en primera instancia en todos los casos de que habla el artículo 132 de la sección cuarta del Poder Judicial, y otros que designarán las leyes. Para ser Juez de distrito se requiere ser letrado, mayor de veinte y cinco años, y ciudadano de los Estados Unidos. Estos jueces serán nombrados por el Supremo Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte suprema de Justicia.

SECCIÓN SEXTA
Reglas generales de administración de justicia a que deberán acomodarse los estados de la federación

ART. 133. En todos los estados de la federación se prestará entera fe y crédito a los actos, registros y procedimientos de los jueces de los otros. El Congreso general uniformará las leyes según las que deberán probarse dichos actos, registros y procedimientos.

ART. 134. La pena de infamia no pasará del delincuente que según las leyes la hubiere merecido.

ART. 135. Queda para siempre abolida toda ley retroactiva y todo juicio por comisión.

ART. 136. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la actualidad según las leyes vigentes, mientras no se alteren debidamente.

ART. 137. Nadie podrá ser arrestado sin que haya semiplena prueba o indicio de que es delincuente.

[23]. A nadie podrá privarse del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros nombrados por ambas partes.

ART. 138. A ningún habitante de la federación se le tomará juramento al declarar en materias criminales sobre hecho propio.

ART. 139. Debiendo ser protegido el derecho que los ciudadanos tienen a que sus personas, casas y efectos sean asegurados de pesquisas y sorpresas, solamente podrá librarse orden de averiguación en los casos en que expresamente lo dispongan las leyes, mediando indicios o sospechas vehementes.

[26]. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre injurias leves, sin hacer constar haberse intentado el medio de la conciliación.

México, 16 de marzo de 1824.— *Ramos Arizpe.— Vargas.— Rejón.— Espinosa.— Huerta.— Cañedo.— Argüelles.— Becerra.— Gordoa.— Carpio.— Alcocer.*

MÉXICO, 1824
Imprenta del Ciudadano Alejandro Valdés, calle de Santo Domingo

CONSTITUCIÓN FEDERATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CUARTA PARTE

TÍTULO VI
De los Estados de la Federación

SECCIÓN PRIMERA
Del gobierno particular de los estados

ART. 142. El gobierno de cada estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y nunca podrán unirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el Legislativo depositarse en un individuo.

ART. 143. El Poder Legislativo de cada estado residirá en un Congreso compuesto del número de individuos que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan.

ART. 144. El ejercicio del Poder Ejecutivo de cada estado no se confiará sino por determinado tiempo que fijará su respectiva Constitución.

ART. 145. El Poder Judicial de cada estado se ejercerá por los tribunales que establezca su Constitución, y todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de su última sentencia.

SECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones de los estados

ART. 146. Cada estado deberá organizar su gobierno interior sin oponerse a esta Constitución, y queda también obligado a sujetarse a las leyes generales de la unión y a los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la suprema autoridad de la federación.

ART. 147. Los estados están obligados a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano.

ART. 148. Ningún estado podrá privar a sus habitantes de la libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación; pero todo estado cuidará de que se observen las restricciones y responsabilidad que prescriben las leyes de la materia.

ART. 149. El ciudadano de un estado lo será igualmente de otro luego que establezca en éste su vecindad.

ART. 150. Ningún criminal de un estado tendrá asilo en otro, antes bien será entregado inmediatamente a la autoridad que lo reclame.

ART. 151. Ningún estado protegerá a los fugitivos de otro, libertándolos de la obligación que en éste hubieren contraído de servir o trabajar, sino que deberá entregarlos a la persona que justamente los reclame, o compelerlos de otro modo a la satisfación de la parte interesada.

ART. 152. Ningún estado, sin el consentimiento del Congreso general, establecerá derecho alguno de tonelaje, ni tendrá tropas ni navíos de guerra en tiempo de paz.

ART. 153. Ningún estado, sin el consentimiento del Congreso general, impondrá contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, mientras la ley no regule cómo deban hacerlo.

ART. 154. Ningún estado, sin el consentimiento del Congreso general, entrará en transacción o contrato con otro o con potencia extranjera, ni se empeñará en guerra, sino en caso de actual invasión o en tan inminente peligro que no admita dilaciones.

ART. 155. La federación reconoce todas las deudas contraídas antes del establecimiento de esta Constitución, a reserva de su liquidación y clasificación, según las reglas que dictare el Congreso general.

ART. 156. El Congreso de cada estado remitirá anualmente al general de la federación nota circunstanciada y comprensiva:

1o. De los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos con relación del origen de unos y otros.

2o. De los de industria agricultora, mercantil y fabril, indicando sus progresos o decadencia con las causas que los producen.

3o. De los nuevos ramos que puedan plantearse, con los medios de alcanzarlos.

4o. De su respectiva población.

ART. 157. Esta Constitución y la Acta constitutiva garantizan a los estados de la federación la forma de gobierno adoptada en esta ley fundamental, y cada estado queda también comprometido a sostener a toda costa la unión federal.

TÍTULO VII
De la observancia, reforma y sanción de la Constitución General

SECCIÓN PRIMERA
De la observancia de la Constitución

ART. 158. El Congreso general en todo tiempo tomará en consideración las infracciones de esta Constitución y acordará el conveniente remedio, haciendo efectiva la responsabilidad de los que la hubieren infringido.

ART. 159. Todo habitante de la federación tiene derecho de representar al Congreso general, o al Supremo Poder Ejecutivo, reclamando la observancia de esta Constitución.

ART. 160. Toda persona pública, sin excepción alguna de clases, deberá prestar juramento al tomar posesión de su destino, de guardar esta Constitución y desempeñar debidamente su encargo.

SECCIÓN SEGUNDA
De la reforma de la Constitución

ART. 161. El Congreso general en todo tiempo podrá proponer y decretar reformas de esta Constitución y de la Acta constitutiva:

1o. Si lo juzgaren necesario las dos terceras partes de ambas cámaras.

2o. Si lo solicitaren las legislaturas de las dos terceras partes de los estados.

ART. 162. Las alteraciones, reformas o adiciones que el Congreso decretare en los casos del artículo anterior, se tendrán como parte de esta Constitución siempre que fueren ratificadas por las legislaturas de las tres cuartas partes de los estados.

ART. 163. Pero ninguna alteración o reforma podrá hacerse en los artículos que establecen la independencia y libertad de la Nación, su religión, su forma de gobierno y la división de poderes.

SECCIÓN TERCERA
De la sanción de la Constitución

ART. 164. La ratificación de doce legislaturas será suficiente para el establecimiento de esta Constitución en todos los estados de la federación, debiendo ceder las divergentes al juicio de la mayoría indicada.

ART. 165. En caso de que solamente se conformare una mayoría absoluta de las legislaturas de los estados sin llegar al número de doce, podrán las otras hacer sus observaciones y dirigirlas al Congreso general siguiente, a cuya resolución deberán sujetarse.

ART. 166. Lo mismo se observará si las legislaturas divergentes hicieren una mayoría que no llegue al número de doce.

ART. 167. La libertad de representar que tienen las legislaturas de los estados, según los dos artículos precedentes, no podrá suspender ni retardar en manera alguna la observancia de esta Constitución, que deberá ponerse en práctica luego que se publique y circule.

Sala de Comisiones, México 20 de marzo de 1824.— Ramos Arizpe.— Vargas.— Huerta.— Rejón.— Espinosa.— Alcocer.— Becerra.— Cañedo.— Argüelles.— Gordoa.— Carpio.

MÉXICO, 1824
IMPRENTA DE LA ÁGUILA
dirigida por José Ximeno, calle de los Medinas núm. 6

XIII

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DE 4 DE OCTUBRE DE 1824

PRIMERA SECRETARÍA DE ESTADO

Sección de Gobierno

El Supremo Poder Ejecutivo se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El Supremo Poder Ejecutivo nombrado provisionalmente por el soberano Congreso general constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los que las presentes vieren y entendieren *SABED*: que el mismo soberano Congreso se ha servido decretar lo siguiente.

El soberano Congreso general constituyente de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien decretar.

Sin pérdida de tiempo procederá el gobierno a publicar solemnemente la Constitución en esta capital y la comunicará inmediatamente a los gobernadores de los estados y autoridades políticas de los territorios, para que asimismo lo verifiquen en todos los pueblos de su demarcación.

Lo tendrá entendido el Supremo Poder Ejecutivo y dispondrá lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. México, 4 de octubre de 1824.— *Lorenzo Zavala*, presidente.— *Manuel de Villa y Cosío*, diputado secretario.— *Epigmenio de la Piedra*, diputado secretario.

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento y dispondreis se imprima publique y circule. En el palacio nacional de México a 4 de octubre de 1824.— *Guadalupe Victoria*, presidente.— *Nicolás Bravo.*— *Miguel Domínguez.*— A D. Juan Guzmán.

Y lo comunico a V. para su inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde a V. muchos años. México, 4 de octubre de 1824.

Juan Guzmán

El Supremo Poder Ejecutivo, nombrado provisionalmente por el Soberano Congreso General de la Nación a todos los que las presentes vieren y entendieren SABED: *Que el mismo Soberano Congreso ha decretado y sancionado la siguiente.*

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En el nombre de Dios todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad. El congreso general constituyente de la nación mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes, para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta la siguiente:

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TÍTULO I

SECCIÓN ÚNICA
De la nación mexicana, su territorio y religión

ARTÍCULO 1. La nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquiera otra potencia.

ART. 2. Su territorio comprende el que fue del virreinato llamado antes Nueva España, el que se decía capitanía general de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente, y el de la Baja y Alta California con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la federación, luego que las circunstancias lo permitan.

ART. 3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

TÍTULO II

SECCIÓN ÚNICA
De la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes y división de su poder supremo

ART. 4. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal.

ART. 5. Las partes de esta federación son los estados y territorios siguientes: el estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas, el territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.

ART. 6. Se divide el supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

TÍTULO III
Del poder legislativo

SECCIÓN PRIMERA
De su naturaleza y modo de ejercerlo

ART. 7. Se deposita el poder legislativo de la federación en un congreso general. Éste se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.

SECCIÓN SEGUNDA
De la cámara de diputados

ART. 8. La cámara de diputados se compondrá de representantes elegidos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos de los estados.

ART. 9. Las cualidades de los electores se prescribirán constitucionalmente por las legislaturas de los estados a las que también corresponde reglamentar las elecciones conforme a los principios que se establecen en esta constitución.

ART. 10. La base general para el nombramiento de diputados será la población.

ART. 11. Por cada ochenta mil almas se nombrará un diputado, o por una fracción que pase de cuarenta mil. El estado que no tuviere esta población, nombrará sin embargo un diputado.

ART. 12. Un censo de toda la federación que se formará dentro de cinco años y se renovará después cada decenio, servirá para designar el número de diputados que corresponda a cada estado. Entretanto, se arreglarán éstos para computar dicho número a la base que designa el artículo anterior y al censo que se tuvo presente en la elección de diputados para el actual congreso.

ART. 13. Se elegirá asimismo en cada estado el número de diputados suplentes que corresponda a razón de uno por cada tres propietarios, o por una fracción que llegue a dos. Los estados que tuvieren menos de tres propietarios elegirán un suplente.

ART. 14. El territorio que tenga más de cuarenta mil habitantes, nombrará un diputado propietario y un suplente que tendrá voz y voto en la formación de leyes y decretos.

ART. 15. El territorio que no tuviere la referida población, nombrará un diputado propietario y un suplente que tendrá voz en todas las materias. Se arreglarán por una ley particular las elecciones de los diputados de los territorios.

ART. 16. En todos los estados y territorios de la federación se hará el nombramiento de diputados el primer domingo de octubre próximo anterior a su renovación, debiendo ser la elección indirecta.

ART. 17. Concluida la elección de diputados, remitirán las juntas electorales por conducto de su presidente al del consejo de gobierno, testimonio en forma de las actas de las elecciones en pliego certificado y participarán a los elegidos su nombramiento por un oficio que les servirá de credencial.

ART. 18. El presidente del consejo de gobierno dará a los testimonios de que habla el artículo anterior, el curso que se prevenga en el reglamento del mismo consejo.

ART. 19. Para ser diputado se requiere:

1o. Tener al tiempo de la elección la edad de 25 años cumplidos.

2o. Tener por lo menos dos años cumplidos de vecindad en el estado que elige, o haber nacido en él, aunque esté avecindado en otro.

ART. 20. Los no nacidos en el territorio de la nación mexicana, para ser diputados deberán tener, además de ocho años de vecindad en él, ocho mil pesos de bienes raíces en cualquiera parte de la república, o una industria que les produzca mil cada año.

ART. 21. Exceptúanse del artículo anterior:

1o. Los nacidos en cualquiera otra parte de la América que en 1810, dependía de la España y que no se haya unido a otra nación, ni permanezca en dependencia de aquélla, a quienes bastará tener tres años completos de vecindad en el territorio de la federación y los requisitos del artículo 19.

2o. Los militares no nacidos en el territorio de la república que con las armas sostuvieron la independencia del país, a quienes bastará tener la vecindad de ocho años cumplidos en la nación y los requisitos del artículo 19.

ART. 22. La elección de diputados por razón de la vecindad preferirá a la que se haga en consideración al nacimiento.

ART. 23. No pueden ser diputados:

1o. Los que están privados o suspensos de los derechos de ciudadano.

2o. El presidente y vicepresidente de la federación.

3o. Los individuos de la corte suprema de justicia.

4o. Los secretarios del despacho y los oficiales de sus secretarías.

5o. Los empleados de hacienda, cuyo encargo se extiende a toda la federación.

6o. Los gobernadores de los estados o territorios, los comandantes generales, los M. RR. arzobispos y RR. obispos, los gobernadores de los arzobispados y obispados, los provisores y vicarios generales, los jueces de circuito y los comisarios generales de hacienda y guerra por los estados o territorios en que ejerzan su encargo y ministerio.

ART. 24. Para que los comprendidos en el artículo anterior puedan ser elegidos diputados, deberán haber cesado absolutamente en sus destinos seis meses antes de las elecciones.

SECCIÓN TERCERA
De la cámara de senadores

ART. 25. El senado se compondra de dos senadores de cada estado elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años.

ART. 26. Los senadores nombrados en segundo lugar cesarán a fin del primer bienio y en lo sucesivo los más antiguos.

ART. 27. Cuando falte algún senador por muerte, destitución u otra causa, se llenará la vacante por la legislatura correspondiente, si estuviere reunida, y no estándolo, luego que se reúna.

ART. 28. Para ser senador se requieren todas las cualidades exigidas en la sección anterior para ser diputado, y además tener al tiempo de la elección la edad de treinta años cumplidos.

ART. 29. No pueden ser senadores los que no pueden ser diputados.

ART. 30. Respecto a las elecciones de senadores regirá también el artículo 22.

ART. 31. Cuando un mismo individuo sea elegido para senador y diputado, preferirá la elección primera en tiempo.

ART. 32. La elección periódica de senadores se hará en todos los estados en un mismo día, que será el 1 de septiembre próximo a la renovación por mitad de aquéllos.

ART. 33. Concluida la elección de senadores, las legislaturas remitirán en pliego certificado por conducto de sus presidentes al del consejo de gobierno, testimonio en forma de las actas de las elecciones y participarán a los elegidos el nombramiento por un oficio que les servirá de credencial. El presidente del consejo de gobierno dará curso a estos testimonios, según se indica en el artículo 18.

SECCIÓN CUARTA
De las funciones económicas de ambas cámaras y prerrogativas de sus individuos

ART. 34. Cada cámara en sus juntas preparatorias, y en todo lo que pertenezca a su gobierno interior, observará el reglamento que formará el actual congreso, sin perjuicio de las reformas que en lo sucesivo se podrán hacer en él, si ambas cámaras lo estimaren conveniente.

ART. 35. Cada cámara calificará las elecciones de sus respectivos miembros y resolverá las dudas que ocurran sobre ellas.

ART. 36. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por el reglamento de gobierno interior de ambas, y compeler respectivamente a los ausentes bajo las penas que designe la ley.

ART. 37. Las cámaras se comunicarán entre sí y con el poder ejecutivo por conducto de sus respectivos secretarios, o por medio de diputaciones.

ART. 38. Cualquiera de las dos cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado sobre las acusaciones:

1o. Del presidente de la federación por delitos de traición contra la independencia nacional o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo.

2o. Del mismo presidente por actos dirigidos manifiestamente a impedir que se hagan las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que éstos se presenten a servir sus destinos en las épocas señaladas en esta constitución, o a impedir a las cámaras el uso de cualquiera de las facultades que les atribuye la misma.

3o. De los individuos de la corte suprema de justicia y de los secretarios del despacho, por cualesquiera delitos cometidos durante el tiempo de sus empleos.

4o. De los gobernadores de los estados por infracciones de la constitución federal, leyes de la unión u órdenes del presidente de la federación que no sean manifiestamente contrarias a la constitución y leyes generales de la unión, y también por la publicación de leyes o decretos de las legislaturas de sus respectivos estados, contrarias a la misma constitución y leyes.

ART. 39. La cámara de representantes hará exclusivamente de gran jurado cuando el presidente o sus ministros sean acusados por actos en que hayan intervenido el senado o el consejo de gobierno en razón de sus atribuciones. Esta misma cámara servirá del mismo modo de gran jurado en los casos de acusación contra el vicepresidente, por cualesquiera delitos cometidos durante el tiempo de su destino.

ART. 40. La cámara ante la que se hubiere hecho la acusación de los individuos de que hablan los dos artículos anteriores se erigirá en gran jurado, y si declarare por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes haber lugar a la formación de causa, quedará el acusado suspenso de su encargo, y puesto a disposición del tribunal competente.

ART. 41. Cualquier diputado o senador podrá hacer por escrito proposiciones o presentar proyectos de ley o decreto en su respectiva cámara.

ART. 42. Los diputados y senadores serán inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

ART. 43. En las causas criminales que se intentaren contra los senadores o diputados, desde el día de su elección hasta dos meses después de haber cumplido su encargo, no podrán ser aquéllos acusados sino ante la cámara de éstos, ni éstos sino ante la de senadores, constituyéndose cada cámara a su vez en gran jurado, para declarar si ha o no lugar a la formación de causa.

ART. 44. Si la cámara que haga de gran jurado en los casos del artículo anterior, declarare por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, haber lugar a la formación de causa, quedará el acusado suspenso de su encargo y puesto a disposición del tribunal competente.

ART. 45. La indemnización de los diputados y senadores se determinará por ley y pagará por la tesorería general de la federación.

ART. 46. Cada cámara y también las juntas de que habla el artículo 36, podrán librar las órdenes que crean convenientes, para que tengan efecto sus resoluciones, tomadas a virtud de las funciones que a cada una comete la constitución en los artículos 35, 36, 39, 40, 44 y 45, y el presidente de los Estados Unidos las deberá hacer ejecutar sin poder hacer observaciones sobre ellas.

SECCIÓN QUINTA
De las facultades del congreso general

ART. 47. Ninguna resolución del congreso general tendrá otro carácter que el de ley o decreto.

ART. 48. Las resoluciones del congreso general, para tener fuerza de ley o decreto, deberán estar firmadas por el presidente, menos en los casos exceptuados en esta constitución.

ART. 49. Las leyes y decretos que emanen del congreso general tendrán por objeto:

1o. Sostener la independencia nacional y proveer a la conservación y seguridad de la nación en sus relaciones exteriores.

2o. Conservar la unión federal de los estados y la paz y el orden público en lo interior de la federación.

3o. Mantener la independencia de los estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, según la acta constitutiva y esta constitución.

4o. Sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los estados tienen ante la ley.

ART. 50. Las facultades exclusivas del congreso general son las siguientes:

1a. Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas, sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados.

2a. Fomentar la prosperidad general decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos; estableciendo postas y correos y asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo de industria derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones.

3a. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la federación.

4a. Admitir nuevos estados a la unión federal o territorios incorporándolos en la nación.

5a. Arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando sus diferencias cuando no hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos distritos.

6a. Erigir los territorios en estados o agregarlos a los existentes.

7a. Unir dos o más estados a petición de sus legislaturas para que formen uno solo o erigir otro de nuevo dentro de los límites de los que ya existen, con aprobación de las tres cuartas partes de los miembros presentes de ambas cámaras y ratificación de igual número de las legislaturas de los demás estados de la federación.

8a. Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión y tomar anualmente cuentas al gobierno.

9a. Contraer deudas sobre el crédito de la federación y designar garantías para cubrirlas.

10a. Reconocer la deuda nacional y señalar medios para consolidarla y amortizarla.

11a. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras y entre los diferentes estados de la federación y tribus de los indios.

12a. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la silla apostólica, aprobarlos para su ratificación y arreglar el ejercicio del patronato en toda la federación.

13a. Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada y cualesquiera otros que celebre el presidente de los Estados Unidos con potencias extranjeras.

14a. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar su ubicación.

15a. Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas en todos los estados de la federación y adoptar un sistema general de pesos y medidas.

16a. Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el presidente de los Estados Unidos.

17a. Dar reglas para conceder patentes de corso y para declarar buenas o malas las presas de mar y tierra.

18a. Designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada estado y dar ordenanzas y reglamentos para su organización y servicio.

19a. Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de los estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales y la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.

20a. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la federación.

21a. Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en los puertos mexicanos.

22a. Permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la república.

23a. Crear o suprimir empleos públicos de la federación, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones.

24a. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes servicios a la república y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes hombres.

25a. Conceder amnistías o indultos por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación en los casos, y previos los requisitos que previenen las leyes.

26a. Establecer una regla general de naturalización.

27a. Dar leyes uniformes en todos los estados sobre bancarrotas.

28a. Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado.

29a. Variar esta residencia, cuando lo juzgue necesario.

30a. Dar leyes y decretos para el arreglo de la administración interior de los territorios.

31a. Dictar todas las leyes y decretos que sean conducentes para llenar los objetos de que habla el artículo 49, sin mezclarse en la administración interior de los estados.

SECCIÓN SEXTA
De la formación de las leyes

ART. 51. La formación de las leyes y decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, a excepción de las que versaren sobre contribuciones o impuestos, las cuales no pueden tener su origen sino en la cámara de diputados.

ART. 52. Se tendrán como iniciativas de ley o decreto:

1o. Las proposiciones que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos tuviere por convenientes al bien de la sociedad y como tales las recomendare precisamente a la cámara de diputados.

2o. Las proposiciones o proyectos de ley o decreto que las legislaturas de los estados dirijan a cualquiera de las cámaras.

ART. 53. Todos los proyectos de ley o decreto sin excepción alguna, se discutirán sucesivamente en las dos cámaras, observándose en ambas con exactitud lo prevenido en el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

ART. 54. Los proyectos de ley o decreto que fueren desechados en la cámara de su origen, antes de pasar a la revisora, no se volverán a proponer en ella por sus miembros en las sesiones de aquel año, sino hasta las ordinarias del año siguiente.

ART. 55. Si los proyectos de ley o decreto después de discutidos, fueren aprobados por la mayoría absoluta de los miembros presentes de una y otra cámara, se pasarán al presidente de los Estados Unidos quien, si también los aprobare, los firmará y publicará, y si no, los devolverá con sus observaciones dentro de diez días útiles a la cámara de su origen.

ART. 56. Los proyectos de ley o decreto devueltos por el presidente, según el artículo anterior, serán segunda vez discutidos en las dos cámaras. Si en cada una de éstas fueren aprobados por las dos terceras partes de sus individuos presentes, se pasarán de nuevo al presidente, quien sin excusa deberá firmarlos y publicarlos; pero si no fueren aprobados por el voto de los dos tercios de ambas cámaras, no se podrán volver a proponer en ellas sino hasta el año siguiente.

ART. 57. Si el presidente no devolviere algún proyecto de ley o decreto dentro del tiempo señalado en el artículo 55, por el mismo hecho se tendrá por sancionado, y como tal se promulgará, a menos que corriendo aquel término, el congreso haya cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá verificarse el primer día en que estuviere reunido el congreso.

ART. 58. Los proyectos de ley o decreto desechados por primera vez en su totalidad por la cámara revisora, volverán con las observaciones de ésta a la de su origen. Si examinados en ella fueren aprobados por el voto de los dos tercios de sus individuos presentes, pasarán segunda vez a la cámara que los desechó, y no se entenderá que ésta los reprueba si no concurre para ello el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

ART. 59. Los proyectos de ley o decreto que en la segunda revisión fueren aprobados por los dos tercios de los individuos de la cámara de su origen, y no desechados por las dos terceras partes de los miembros de la revisora, pasarán al presidente, quien deberá firmarlos y circularlos o devolverlos dentro de diez días útiles con sus observaciones a la cámara en que tuvieren su origen.

ART. 60. Los proyectos de ley o decreto que según el artículo anterior devolviere el presidente a la cámara de su origen, se tomarán otra vez en consideración, y si ésta los aprobare por el voto de los dos tercios de sus individuos presentes, y la revisora no los desechare por igual número de sus miembros volverán al presidente, quien deberá publicarlos. Pero si no fueren aprobados por el voto de los dos tercios de la cámara de su origen, o fueren reprobados por igual número de la revisora, no se podrán promover de nuevo, sino hasta las sesiones ordinarias subsecuentes.

ART. 61. En el caso de la reprobación por segunda vez de la cámara revisora, según el artículo 58, se tendrán los proyectos por desechados, no pudiéndose volver a tomar en consideración, sino hasta el año siguiente.

ART. 62. En las adiciones que haga la cámara revisora a los proyectos de ley o decreto se observarán las mismas formalidades que se requieren en los proyectos para que puedan pasarse al presidente.

ART. 63. Las partes que de un proyecto de ley o decreto reprobare por primera vez la cámara revisora tendrán los mismos trámites que los proyectos desechados por primera vez en su totalidad por ésta.

ART. 64. En la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos que se prescriben para su formación.

ART. 65. Siempre que se comunique alguna resolución del congreso general al presidente de la república, deberá ir firmada de los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas.

ART. 66. Para la formación de toda ley o decreto se necesita en cada cámara la presencia de la mayoría absoluta de todos los miembros de que debe componerse cada una de ellas.

SECCIÓN SÉPTIMA
Del tiempo, duración y lugar de las sesiones del congreso general

ART. 67. El congreso general se reunirá todos los años el día primero de enero en el lugar que se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo se prescribirán las operaciones previas a la apertura de sus sesiones, y las formalidades que se han de observar en su instalación.

ART. 68. A ésta asistirá el presidente de la federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante, y el que presida al congreso contestará en términos generales.

ART. 69. Las sesiones ordinarias del congreso serán diarias, sin otra interrupción que las de los días festivos solemnes, y para suspenderse por más de dos días, será necesario el consentimiento de ambas cámaras.

ART. 70. Éstas residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro, sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de una y otra. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difirieren en cuanto al tiempo, modo o lugar, el presidente de los Estados terminará la diferencia, eligiendo precisamente uno de los extremos en cuestión.

ART. 71. El congreso cerrará sus sesiones anualmente el día 15 de abril con las mismas formalidades que se prescriben para su apertura, prorrogándolas hasta por treinta días útiles, cuando él mismo lo juzgue necesario, o cuando lo pida el presidente de la federación.

ART. 72. Cuando el congreso general se reúna para sesiones extraordinarias, se formará de los mismos diputados y senadores de las sesiones ordinarias de aquel año, y se ocupará exclusivamente del objeto u objetos comprendidos en su convocatoria, pero si no los hubiere llenado para el día en que se deben abrir las sesiones ordinarias, cerrará las suyas, dejando los puntos pendientes a la resolución del congreso en dichas sesiones.

ART. 73. Las resoluciones que tome el congreso sobre su traslación, suspensión o prorrogación de sus sesiones, según los tres artículos anteriores, se comunicarán al presidente, quien las hará ejecutar sin poder hacer observaciones sobre ellas.

TÍTULO IV
Del supremo poder ejecutivo de la federación

SECCIÓN PRIMERA
De las personas en quienes se deposita, y de su elección

ART. 74. Se deposita el supremo poder ejecutivo de la federación en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

ART. 75. Habrá también un vicepresidente, en quien recaerán en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las facultades y prerrogativas de éste.

ART. 76. Para ser presidente o vicepresidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, de edad de treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección, y residente en el país.

ART. 77. El presidente no podrá ser relecto para este encargo sino al cuarto año de haber cesado en sus funciones.

ART. 78. El que fuere electo presidente, o vicepresidente de la república servirá estos destinos con preferencia a cualquier otro.

ART. 79. El día primero de septiembre del año próximo anterior a aquél en que deba el nuevo presidente entrar en el ejercicio de sus atribuciones, la legislatura de cada estado elegirá a mayoría absoluta de votos dos individuos, de los cuales uno por lo menos no será vecino del estado que elige.

ART. 80. Concluida la votación, remitirán las legislaturas al presidente del consejo de gobierno en pliego certificado, testimonio de la acta de la elección, para que le dé el curso que prevenga el reglamento del consejo.

ART. 81. El 6 de enero próximo se abrirán y leerán en presencia de las cámaras reunidas los testimonios de que habla el artículo anterior, si se hubieren recibido los de las tres cuartas partes de las legislaturas de los estados.

ART. 82. Concluida la lectura de los testimonios se retirarán los senadores, y una comisión nombrada por la cámara de diputados, y compuesta de uno por cada estado de los que tengan representantes presentes, los revisará y dará cuenta con su resultado.

ART. 83. En seguida la cámara procederá a ratificar las elecciones y a la enumeración de los votos.

ART. 84. El que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas será el presidente.

ART. 85. Si dos tuvieren dicha mayoría, será presidente el que tenga más votos, quedando el otro de vicepresidente. En caso de empate con la misma mayoría, elegirá la cámara de diputados uno de los dos para presidente, quedando el otro de vicepresidente.

ART. 86. Si ninguno hubiere reunido la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas, la cámara de diputados elegirá al presidente y vicepresidente, escogiendo en cada elección uno de los dos que tuvieren mayor número de sufragios.

ART. 87. Cuando más de dos individuos tuvieren mayoría respectiva e igual número de votos, la cámara escogerá entre ellos al presidente o vicepresidente en su caso.

ART. 88. Si uno hubiere reunido la mayoría respectiva, y dos o más tuvieren igual número de sufragios, pero mayor que los otros, la cámara elegirá entre los que tengan números más altos.

ART. 89. Si todos tuvieren igual número de votos, la cámara elegirá de entre todos al presidente y vice-presidente, haciéndose lo mismo cuando uno tenga mayor número de sufragios y los demás número igual.

ART. 90. Si hubiere empate en las votaciones sobre calificación de elecciones hechas por las legislaturas, se repetirá por una sola vez la votación, y si aún resultare empatada, decidirá la suerte.

ART. 91. En competencias entre tres o más que tengan iguales votos, las votaciones se dirigirán a reducir los competidores a dos o a uno, para que en la elección compita con el otro que haya obtenido mayoría respectiva sobre todos los demás.

ART. 92. Por regla general en las votaciones relativas a elección de presidente y vicepresidente no se ocurrirá a la suerte antes de haber hecho segunda votación.

ART. 93. Las votaciones sobre calificación de elecciones hechas por las legislaturas y sobre las que haga la cámara de diputados de presidente o vice-presidente, se harán por estados, teniendo la representación de cada uno un solo voto, y para que haya decisión de la cámara, deberá concurrir la mayoría absoluta de sus votos.

ART. 94. Para deliberar sobre los objetos comprendidos en el artículo anterior, deberán concurrir en la cámara más de la mitad del número total de sus miembros y estar presentes diputados de las tres cuartas partes de los estados.

SECCIÓN SEGUNDA
De la duración del presidente y vicepresidente: del modo de llenar las faltas de ambos y de su juramento

ART. 95. El presidente y vicepresidente de la federación entrarán en sus funciones el 1 de abril, y serán remplazados precisamente en igual día cada cuatro años, por una nueva elección constitucional.

ART. 96. Si por cualquier motivo las elecciones de presidente y vicepresidente no estuvieren hechas y publicadas para el día 1 de abril, en que debe verificarse el remplazo, o los elec-

tos no se hallasen prontos a entrar en el ejercicio de su destino cesarán sin embargo los antiguos en el mismo día, y el supremo poder ejecutivo se depositará interinamente en un presidente que nombrará la cámara de diputados, votando por estados.

ART. 97. En caso que el presidente y vice-presidente estén impedidos temporalmente, se hará lo prevenido en el artículo anterior, y si el impedimento de ambos acaeciere no estando el congreso reunido, el supremo poder ejecutivo se depositará en el presidente de la corte suprema de justicia y en dos individuos que elegirá a pluralidad absoluta de votos el consejo de gobierno. Éstos no podrán ser de los miembros del congreso general, y deberán tener las cualidades que se requieren para ser presidente de la federación.

ART. 98. Mientras se hacen las elecciones de que hablan los dos artículos anteriores, el presidente de la corte suprema de justicia se encargará del supremo poder ejecutivo.

ART. 99. En caso de imposibilidad perpetua del presidente y vice-presidente, el congreso y en sus recesos el consejo de gobierno, proveerán respectivamente según se previene en los artículos 96 y 97, y en seguida dispondrán que las legislaturas procedan a la elección de presidente y vice-presidente según las formas constitucionales.

ART. 100. La elección de presidente y vice-presidente, hecha por las legislaturas a consecuencia de imposibilidad perpetua de los que obtenían estos cargos, no impedirá las elecciones ordinarias que deben hacerse cada cuatro años el 1 de setiembre.

ART. 101. El presidente y vice-presidente nuevamente electos cada cuatro años deberán estar el 1 de abril en el lugar en que residan los poderes supremos de la federación y jurar ante las cámaras reunidas el cumplimiento de sus deberes bajo la fórmula siguiente: "*Yo N. nombrado presidente (o vicepresidente) de los Estados Unidos Mexicanos, juro por Dios y los santos evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me han confiado, y que guardaré, y haré guardar exactamente la constitución, y leyes generales de la federación*".

ART. 102. Si ni el presidente ni el vice-presidente se presentaren a jurar según se prescribe en el artículo anterior, estando abiertas las sesiones del congreso, jurarán ante el consejo de gobierno, luego que cada uno se presente.

ART. 103. Si el vice-presidente prestare el juramento prescrito en el artículo 101 antes que el presidente, entrará desde luego a gobernar hasta que el presidente haya jurado.

ART. 104. El presidente y vice-presidente nombrados constitucionalmente según el artículo 99, y los individuos nombrados para ejercer provisionalmente el cargo de presidente según los artículos 96 y 97, prestarán el juramento del artículo 101 ante las cámaras si estuviesen reunidas, y no estándolo, ante el consejo de gobierno.

SECCIÓN TERCERA
De las prerrogativas del presidente y vicepresidente

ART. 105. El presidente podrá hacer al congreso las propuestas o reformas de ley que crea conducentes al bien general, dirigiéndolas a la cámara de diputados.

ART. 106. El presidente puede por una sola vez dentro de diez días útiles, hacer observaciones sobre las leyes y decretos que le pase el congreso general, suspendiendo su publicación hasta la resolución del mismo congreso, menos en los casos exceptuados en esta constitución.

ART. 107. El presidente durante el tiempo de su encargo, no podrá ser acusado sino ante cualquiera de las cámaras y sólo por los delitos de que habla el artículo 38 cometidos en el tiempo que allí se expresa.

ART. 108. Dentro de un año, contado desde el día en que el presidente cesare en sus funciones, tampoco podrá ser acusado sino ante alguna de las cámaras por los delitos de que habla el artículo 38, y además por cualesquiera otros con tal que sean cometidos durante el tiempo de su empleo. Pasado este año no podrá ser acusado por dichos delitos.

ART. 109. El vice-presidente en los cuatro años de este destino podrá ser acusado solamente ante la cámara de diputados por cualquiera delito cometido durante el tiempo de su empleo.

SECCIÓN CUARTA

De las atribuciones del presidente y restricciones de sus facultades

ART. 110. Las atribuciones del presidente son las que siguen:

1a. Publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del congreso general.

2a. Dar reglamentos, decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la constitución, acta constitutiva y leyes generales.

3a. Poner en ejecución las leyes y decretos dirigidos a conservar la integridad de la federación, y a sostener su independencia en lo exterior, y su unión y libertad en el interior.

4a. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho.

5a. Cuidar de la recaudación y decretar la inversión de las contribuciones generales con arreglo a las leyes.

6a. Nombrar los jefes de las oficinas generales de hacienda, los de las comisarías generales, los enviados diplomáticos y cónsules, los coroneles y demás oficiales superiores del ejército permanente, milicia activa y armada, con aprobación del senado, y en sus recesos del consejo de gobierno.

7a. Nombrar los demás empleados del ejército permanente, armada y milicia activa y de las oficinas de la federación, arreglándose a lo que dispongan las leyes.

8a. Nombrar a propuesta en terna de la corte suprema de justicia los jueces y promotores fiscales de circuito y de distrito.

9a. Dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los militares conforme a las leyes.

10a. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra y de la milicia activa, para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.

11a. Disponer de la milicia local para los mismos objetos, aunque para usar de ella fuera de sus respectivos estados o territorios, obtendrá previamente consentimiento del congreso general, quien calificará la fuerza necesaria, y no estando éste reunido, el consejo de gobierno prestará el consentimiento y hará la expresada calificación.

12a. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previo decreto del congreso general, y conceder patentes de corso con arreglo a lo que dispongan las leyes.

13a. Celebrar concordatos con la silla apostólica en los términos que designa la facultad 12a. del artículo 50.

14a. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, federación, neutralidad armada, comercio y cualesquiera otros; más para prestar o negar su ratificación a cualquiera de ellos, deberá preceder la aprobación del congreso general.

15a. Recibir ministros y otros enviados de las potencias extranjeras.

16a. Pedir al congreso general la prorrogación de sus sesiones ordinarias hasta por treinta días útiles.

17a. Convocar al congreso para sesiones extraordinarias en el caso que lo crea conveniente y lo acuerden así las dos terceras partes de los individuos presentes del consejo de gobierno.

18a. Convocar también al congreso a sesiones extraordinarias cuando el consejo de gobierno lo estime necesario por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes.

19a. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por la corte suprema, tribunales y juzgados de la federación, y de que sus sentencias sean ejecutadas según las leyes.

20a. Suspender de sus empleos hasta por tres meses, y privar aun de la mitad de sus sueldos por el mismo tiempo, a los empleados de la federación infractores de sus órdenes y decretos, y en los casos que crea deberse formar causa a tales empleados, pasará los antecedentes de la materia al tribunal respectivo.

21a. Conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescritos, con consentimiento del congreso general, si contienen disposiciones generales, oyendo al senado, y en sus recesos al consejo de gobierno, si se versaren sobre negocios particulares o gubernativos, y a la corte suprema de justicia, si se hubieren expedido sobre asuntos contenciosos.

ART. 111. El presidente para publicar las leyes y decretos usará de la fórmula siguiente: *El presidente de los Estados Unidos Mexicanos a los habitantes de la república* SABED: *que el congreso general ha decretado lo siguiente: [aquí el texto]. Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.*

ART. 112. Las restricciones de las facultades del presidente son las siguientes:

1a. El presidente no podrá mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo consentimiento del congreso general o acuerdo en sus recesos del consejo de gobierno por el voto de dos terceras partes de sus individuos presentes, y cuando las mande con el requisito anterior, el vicepresidente se hará cargo del gobierno.

2a. No podrá el presidente privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna; pero cuando lo exija el bien y seguridad de la federación, podrá arrestar, debiendo poner a las personas arrestadas en el término de cuarenta y ocho horas a disposición del tribunal o juez competente.

3a. El presidente no podrá ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso o aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad general tomar la propiedad de un particular o corporación, no lo podrá hacer sin previa aprobación del senado, y en sus recesos del consejo de gobierno, indemnizando siempre a la parte interesada, a juicio de hombres buenos elegidos por ella y el gobierno.

4a. El presidente no podrá impedir las elecciones y demás actos que se expresan en la segunda parte del artículo 38.

5a. El presidente, y lo mismo el vice-presidente no podrá sin permiso del congreso salir del territorio de la república durante su encargo, y un año después.

SECCIÓN QUINTA
Del consejo de gobierno

ART. 113. Durante el receso del congreso general, habrá un consejo de gobierno, compuesto de la mitad de los individuos del senado, uno por cada estado.

ART. 114. En los dos años primeros formarán este consejo los primeros nombrados por sus respectivas legislaturas, y en lo sucesivo los más antiguos.

ART. 115. Este consejo tendrá por presidente nato al vicepresidente de los Estados Unidos, y nombrará según su reglamento un presidente temporal que haga las veces de aquél en sus ausencias.

ART. 116. Las atribuciones de este consejo son las que siguen:

1a. Velar sobre la observancia de la constitución, de la acta constitutiva y leyes generales, formando expediente sobre cualquier incidente relativo a estos objetos.

2a. Hacer al presidente las observaciones que crea conducentes para el mejor cumplimiento de la constitución y leyes de la unión.

3a. Acordar por sí solo, o a propuesta del presidente la convocación del congreso a sesiones extraordinarias, debiendo concurrir para que haya acuerdo en uno y otro caso, el voto de las dos terceras partes de los consejeros presentes, según se indica en las atribuciones 17a. y 18a. del artículo 110.

4a. Prestar su consentimiento para el uso de la milicia local en los casos de que habla el artículo 110, atribución 11a.

5a. Aprobar el nombramiento de los empleados que designa la atribución 6a. del artículo 110.

6a. Dar su consentimiento en el caso del artículo 112 restricción 1a.

7a. Nombrar dos individuos para que con el presidente de la corte suprema de justicia ejerzan provisionalmente el supremo poder ejecutivo según el artículo 97.

8a. Recibir el juramento del artículo 101 a los individuos del supremo poder ejecutivo en los casos prevenidos por esta constitución.

9a. Dar su dictamen en las consultas que le haga el presidente a virtud de la facultad 21a. del artículo 110 y en los demás negocios que le consulte.

SECCIÓN SEXTA
Del despacho de los negocios de gobierno

ART. 117. Para el despacho de los negocios de gobierno de la república habrá el número de secretarios que establezca el congreso general por una ley.

ART. 118. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán ir firmados por el secretario del despacho del ramo a que el asunto corresponda, según reglamento, y sin este requisito no serán obedecidos.

ART. 119. Los secretarios del despacho serán responsables de los actos del presidente que autoricen con sus firmas contra esta constitución, la acta constitutiva, leyes generales y constituciones particulares de los Estados.

ART. 120. Los secretarios del despacho darán a cada cámara luego que estén abiertas sus sesiones anuales, cuenta del estado de su respectivo ramo.

ART. 121. Para ser secretario del despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento.

ART. 122. Los secretarios del despacho formarán un reglamento para la mejor distribución y giro de los negocios de su cargo que pasará el gobierno al congreso para su aprobación.

TÍTULO V
Del poder judicial de la federación

SECCIÓN PRIMERA
De la naturaleza y distribución de este poder

ART. 123. El poder judicial de la federación residirá en una corte suprema de justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito.

SECCIÓN SEGUNDA
De la corte suprema de justicia y de la elección, duración y juramento de sus miembros

ART. 124. La corte suprema de justicia se compondrá de once ministros distribuidos en tres salas, y de un fiscal, pudiendo el congreso general aumentar o disminuir su número, si lo juzgare conveniente.

ART. 125. Para ser electo individuo de la corte suprema de justicia se necesita estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas de los estados, tener la edad de treinta y cinco años cumplidos, ser ciudadano natural de la república, o nacido en cualquiera parte de la América que antes de 1810 dependía de la España, y que se ha separado de ella, con tal que tenga la vecindad de cinco años cumplidos en el territorio de la república.

ART. 126. Los individuos que compongan la corte suprema de justicia serán perpetuos en este destino, y sólo podrán ser removidos con arreglo a las leyes.

ART. 127. La elección de los individuos de la corte suprema de justicia se hará en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos.

ART. 128. Concluidas las elecciones cada legislatura remitirá al presidente del consejo de gobierno una lista certificada de los doce individuos electos con distinción del que lo haya sido para fiscal.

ART. 129. El presidente del consejo luego que haya recibido las listas por lo menos de las tres cuartas partes de las legislaturas, les dará el curso que se prevenga en el reglamento del consejo.

ART. 130. En el día señalado por el congreso se abrirán y leerán las expresadas listas a presencia de las cámaras reunidas, retirándose en seguida los senadores.

ART. 131. Acto continuo la cámara de diputados nombrará por mayoría absoluta de votos una comisión que deberá componerse de un diputado por cada estado, que tuviere representantes presentes, a la que se pasarán las listas para que revisándolas den cuenta con su resultado, procediendo la cámara a calificar las elecciones, y a la enumeración de los votos.

ART. 132. El individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas, y no por el de sus miembros respectivos, se tendrán desde luego por nombrados, sin más que declararlo así la cámara de diputados.

ART. 133. Si los que hubiesen reunido la mayoría de sufragios prevenida en el artículo anterior, no llenaren el número de doce, la misma cámara elegirá sucesivamente de entre los individuos que hayan obtenido de las legislaturas mayor número de votos, observando en todo lo relativo a estas elecciones lo prevenido en la sección 1a. del título 4o. que trata de las elecciones de presidente y vicepresidente.

ART. 134. Si un senador o diputado fuere electo para ministro o fiscal de la corte suprema de justicia, preferirá la elección que se haga para estos destinos.

ART. 135. Cuando falte alguno o algunos de los miembros de la corte suprema de justicia por imposibilidad perpetua, se remplazarán conforme en un todo a lo dispuesto en esta sección, previo aviso que dará el gobierno a las legislaturas de los estados.

ART. 136. Los individuos de la corte suprema de justicia al entrar a ejercer su cargo prestarán juramento ante el presidente de la república en la forma siguiente: *¿Juráis a Dios nuestro señor haberos fiel y legalmente en el desempeño de las obligaciones que os confía la nación? Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.*

SECCIÓN TERCERA
De las atribuciones de la corte suprema de justicia

ART. 137. Las atribuciones de la corte suprema de justicia son las siguientes:

1a. Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro estado de la federación, siempre que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia y de las que se susciten entre un estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares sobre pretensiones de tierras bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio de que las partes usen de su derecho, reclamando la concesión a la autoridad que la otorga.

2a. Terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones celebrados por el gobierno supremo o sus agentes.

3a. Consultar sobre pase o retención de bulas pontificias, breves y escritos, expedidos en asuntos contenciosos.

4a. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la federación, y entre éstos y los de los estados y las que se muevan sobre los de un estado y los de otro.

5a. Conocer:

1o. De las causas que se muevan al presidente y vicepresidente según los artículos 38 y 39, previa la declaración del artículo 40.

2o. De las causas criminales de los diputados y senadores indicadas en el artículo 43, previa la declaración de que habla el artículo 44.

3o. De las de los gobernadores de los estados en los casos de que habla el artículo 38 en su parte tercera, previa la declaración prevenida en el artículo 40.

4o. De las de los secretarios del despacho según los artículos 38 y 40.

5o. De los negocios civiles y criminales de los empleados diplomáticos y cónsules de la república.

6o. De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, y contrabandos, de los crímenes cometidos en alta mar de las ofensas contra la nación de los Estados Unidos Mexicanos, de los empleados de hacienda y justicia de la federación, y de las infracciones de la constitución y leyes generales, según se prevenga por ley.

ART. 138. Una ley determinará el modo y grados en que deba conocer la corte suprema de justicia en los casos comprendidos en esta sección.

SECCIÓN CUARTA
Del modo de juzgar a los individuos de la corte suprema de justicia

ART. 139. Para juzgar a los individuos de la corte suprema de justicia, elegirá la cámara de diputados, votando por estados en el primer mes de las sesiones ordinarias de cada bienio, veinte y cuatro individuos que no sean del congreso general y que tengan las cualidades que los ministros de dicha corte suprema; de éstos se sacarán por suerte un fiscal y un número de jueces igual a aquél de que conste la primera sala de la corte, y cuando fuere necesario, procederá la misma cámara, y en sus recesos el consejo de gobierno, a sacar del mismo modo los jueces de las otras salas.

SECCIÓN QUINTA
De los tribunales de circuito

ART. 140. Los tribunales de circuito se compondrán de un juez letrado, un promotor fiscal, ambos nombrados por el supremo poder ejecutivo a propuesta en terna de la corte suprema de justicia, y de dos asociados según dispongan las leyes.

ART. 141. Para ser juez de circuito se requiere ser ciudadano de la federación, y de edad de treinta años cumplidos.

ART. 142. A estos tribunales corresponde conocer de las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, contrabandos, crímenes cometidos en alta mar, ofensas contra los Estados Unidos Mexicanos, de las causas de los cónsules y de las causas civiles cuyo valor pase de quinientos pesos y en las cuales esté interesada la federación. Por una ley se designará el número de estos tribunales, sus respectivas jurisdicciones, el modo, forma y grado en que deberán ejercer sus atribuciones en éstos y en los demás negocios, cuya inspección se atribuye a la corte suprema de justicia.

SECCIÓN SEXTA
De los juzgados de distrito

ART. 143. Los Estados Unidos Mexicanos se dividirán en cierto número de distritos, y en cada uno de éstos habrá un juzgado, servido por un juez letrado, en que se conocerá sin apelación de todas las causas civiles en que esté interesada la federación, y cuyo valor no exceda de quinientos pesos, y en primera instancia de todos los casos en que deban conocer en segunda los tribunales de circuito.

ART. 144. Para ser juez de distrito se requiere ser ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, y de edad de veinte y cinco años cumplidos. Estos jueces serán nombrados por el presidente a propuesta en terna de la corte suprema de justicia.

SECCIÓN SÉPTIMA
Reglas generales a que se sujetará en todos los estados y territorios de la federación la administración de justicia

ART. 145. En cada uno de los estados de la federación se prestará entera fe y crédito a los actos, registros y procedimientos de los jueces y demás autoridades de los otros estados. El congreso general uniformará las leyes, según las que deberán probarse dichos actos, registros y procedimientos.

ART. 146. La pena de infamia no pasará del delincuente que la hubiere merecido según las leyes.

ART. 147. Queda para siempre prohibida la pena de confiscación de bienes.

ART. 148. Queda para siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley retroactiva.

ART. 149. Ninguna autoridad aplicará clase alguna de tormentos, sea cual fuere la naturaleza y estado de proceso.

ART. 150. Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba o indicio de que es delincuente.

ART. 151. Ninguno será detenido solamente por indicios más de sesenta horas.

ART. 152. Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la república, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley y en la forma que ésta determine.

ART. 153. A ningún habitante de la república se le tomará juramento sobre hechos propios al declarar en materias criminales.

ART. 154. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la actualidad según las leyes vigentes.

ART. 155. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre injurias, sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliación.

ART. 156. A nadie podrá privarse del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, nombrados por ambas partes, sea cual fuere el estado del juicio.

TÍTULO VI
De los estados de la federación

SECCIÓN PRIMERA
Del gobierno particular de los estados

ART. 157. El gobierno de cada estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y nunca podrán unirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un solo individuo.

ART. 158. El poder legislativo de cada estado residirá en una legislatura compuesta del número de individuos que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan.

ART. 159. La persona o personas a quien los estados confiaren su poder ejecutivo, no podrá ejercerlo sino por determinado tiempo que fijará su constitución respectiva.

ART. 160. El poder judicial de cada estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe la constitución, y todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales, serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia.

SECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones de los estados

ART. 161. Cada uno de los estados tiene obligación:

1o. De organizar su gobierno y administración interior sin oponerse a esta constitución ni a la acta constitutiva.

2o. De publicar por medio de sus gobernadores su respectiva constitución, leyes y decretos.

3o. De guardar y hacer guardar la constitución y leyes generales de la unión, y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la federación, con alguna potencia extranjera.

4o. De proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, cuidando siempre de que se observen las leyes generales de la materia.

5o. De entregar inmediatamente los criminales de otros estados a la autoridad que los reclame.

6o. De entregar los fugitivos de otros estados a la persona que justamente los reclame, o compelerlos de otro modo a la satisfacción de la parte interesada.

7o. De contribuir para consolidar y amortizar las deudas reconocidas por el congreso general.

8o. De remitir anualmente a cada una de las cámaras del congreso general nota circunstanciada y comprensiva de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, con relación del origen de unos y otros; del estado en que se hallen los ramos de industria agrícola, mercantil y fabril, de los nuevos ramos de industria que puedan intro-

ducirse y fomentarse, con expresión de los medios para conseguirlo, y de su respectiva población y modo de protegerla o aumentarla.

9o. De remitir a las dos cámaras y en sus recesos al consejo de gobierno, y también al supremo poder ejecutivo copia autorizada de sus constituciones, leyes y decretos.

SECCIÓN TERCERA
De las restricciones de los poderes de los estados

ART. 162. Ninguno de los estados podrá:

1o. Establecer sin el consentimiento del congreso general derecho alguno de tonelaje ni otro alguno de puerto.

2o. Imponer sin consentimiento del congreso general contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, mientras la ley no regule cómo deban hacerlo.

3o. Tener en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra sin el consentimiento del congreso general.

4o. Entrar en transacción con alguna potencia extranjera, ni declararle guerra, debiendo resistirle en caso de actual invasión, o en tan inminente peligro que no admita demora, dando inmediatamente cuenta en estos casos al presidente de la república.

5o. Entrar en transacción o contrato con otros estados de la federación sin el consentimiento previo del congreso general o su aprobación posterior, si la transación fuere sobre arreglo de límites.

TÍTULO VII

SECCIÓN ÚNICA
De la observancia, interpretación y reforma de la constitución y acta constitutiva

ART. 163. Todo funcionario público sin excepción de clase alguna, antes de tomar posesión de su destino deberá prestar juramento de guardar esta constitución y la acta constitutiva.

ART. 164. El congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta constitución o la acta constitutiva.

ART. 165. Sólo el congreso general podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva.

ART. 166. Las legislaturas de los estados podrán hacer observaciones según les parezca conveniente, sobre determinados artículos de esta constitución y de la acta constitutiva, pero el congreso general no las tomará en consideración sino precisamente el año de 1830.

ART. 167. El congreso en este año se limitará a calificar las observaciones que merezcan su-

jetarse a la deliberación del congreso siguiente, y esta declaración se comunicará al presidente, quien la publicará y circulará sin poder hacer observaciones.

ART. 168. El congreso siguiente en el primer año de sus sesiones ordinarias se ocupará de las observaciones sujetas a su deliberación, para hacer las reformas que crea convenientes, pues nunca deberá ser uno mismo el congreso que haga la calificación prevenida en el artículo anterior y el que decrete las reformas.

ART. 169. Las reformas o adiciones que se propongan en los años siguientes al de treinta, se tomarán en consideración por el congreso en el segundo año de cada bienio, y si se calificaren necesarias según lo prevenido en el artículo anterior, se publicará esta resolución para que el congreso siguiente se ocupe de ellas.

ART. 170. Para reformar o adicionar esta constitución o la acta constituva, se observarán además de las reglas prescritas en los artículos anteriores, todos los requisitos prevenidos para la formación de las leyes, a excepción del derecho de hacer observaciones concedido al presidente en el artículo 106.

ART. 171. Jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la federación, y de los estados.

Dada en México a 4 del mes de octubre del año del Señor de 1824. 4o. de la independencia, 3o. de la libertad y 2o. de la federación.— *Lorenzo de Zavala*, diputado por el estado de Yucatán, presidente.— *Florentino Martínez*, diputado por el estado de Chihuahua, vicepresidente.— Por el estado de Chihuahua, *José Ignacio Gutiérrez*.— Por el estado de Coahuila y Tejas, *Miguel Ramos Arizpe*.— *Erasmo Seguía*.— Por el estado de Durango, *Francisco Antonio Elorriaga*.— *Pedro de Ahumada*.— Por el estado de Guanajuato, *Juan Ignacio Godoy*.— *Víctor Marquez*.— *José Felipe Vázquez*.— *José María Anaya*.— *Juan Bautista Morales*.— *José María Uribe*.— *José Miguel Lloreate*.— Por el estado de México, *Juan Rodríguez*.— *Juan Manuel Assorrey*.— *José Francisco de Barreda*.— *José Basilio Guerra*.— *Carlos María Bustamante*.— *Ignacio de Mora y Villamil*.— *José Ignacio González Caralmuro*.— *José Hernández Chico Condarco*.— *José Ignacio Espinosa*.— *Luciano Castorena*.— *Luis de Cortazar*.— *José Agustín Paz*.— *José María de Bustamante*.— *Francisco María Lombardo*.— *Felipe Sierra*.— *José Cirilo Gómez y Aretya*.— *Cayetano Ibarra*.— *Antonio de Gama y Córdova*.— *Bernardo González Pérez de Angulo*.— *Francisco Patiño y Domíguez*.— Por el estado de Michoacán, *José María de Izazaga*.— *Manuel Solórzano*.— *José María de Cabrera*.— *Ignacio Rayón*.— *Tomás Arriaga*.— Por el estado de Nuevo León, *Servando Teresa de Mier*.— Por el estado de Oaxaca, *Nicolás Fernández del Campo*.— *Víctores de Manero*.— *Demetrio del Castillo*.— *Joaquín de Miura y Bustamente*.— *Vicente Manero Embides*.— *Manuel José Robles*,— *Francisco de Larrazábal y Torre*.— *Francisco Estevez*.— *José Vicente Rodríguez*.— Por el estado de Puebla, *Mariano Barbabosa*.— *José María de la Llave*.— *José de San Martín*.— *Rafael Mangino*.— *José María Jiménez*.— *José Mariano Marín*.— *José Vicente de Robles*.— *José Rafael Berruecos*.— *José Mariano Castillero*.— *José María Pérez Dunslaguer*.— *Alejandro Carpio*.— *Mariano Tirado Gutiérrez*.— *Ignacio Zaldívar*.— *Juan de Dios Moreno*.— *Juan Manuel Irrisarri*.— *Miguel Wenceslao Gasca*.— *Bernardo Copca*.— Por el estado de Querétaro, *Félix Osores*.— *Joaquín Guerra*.— Por el estado de San Luis Potosí, *Tomás Vargas*.— *Luis Gonzaga Gordoa*.— *José Guadalupe de los Reyes*.—

Por el estado de Sonora y Sinaloa, *Manuel Fernández Rojo.— Manuel Ambrosio Martínez de Vea.— José Santiago Escobosa.— Juan Bautista Escalante y Peralta.*— Por el estado de las Tamaulipas, *Pedro Paredes.*— Por Tlaxcala, *José Miguel Guridi y Alcocer.*— Por el estado de Veracruz, *Manuel Argüelles.— José María Becerra.*— Por el estado de Jalisco, *José María Covarrubias.— José de Jesús Huerta.— Juan de Dios Cañedo.— Rafael Aldrete.— Juan Cayetano Portugal.*— Por el estado de Yucatán, *Manuel Crescencio Rejón.— José María Sánchez.— Fernando Valle.— Pedro Tarrazo.— Joaquín Casares y Armas.*— Por el estado de los Zacatecas, *Valentín Gómez Farías.— Santos Vélez.— Francisco García.— José Miguel Gordoa.*— Por el territorio de la baja California, *Manuel Ortiz de la Torre.*— Por el territorio de Coljma, *José María Gerónimo Arzac.*— Por el territorio de Nuevo México, *José Rafael Alarid.— Manuel de Villa y Cosío*, diputado por el estado de Veracruz, secretario.— *Epigmenio de la Piedra*, diputado por México, secretario.— *José María Castro*, diputado por el estado de Jalisco, secretario.— *Juan José Romero*, diputado por el estado de Jalisco, secretario.

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles, como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad que sean, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes la constitución inserta como ley fundamental de la nación. Tendreislo entendido para su cumplimiento y dispondreis se imprima, publique y circule. En México a 4 de Octubre de 1824.— *Guadalupe Victoria*, presidente.— *Nicolás Bravo.— Miguel Domínguez*, A D. *Juan Guzmán.*

Y lo comunico a V. de orden de S.A.S. para su más exacto cumplimiento.

Dios guarde a V. muchos años. México 4 de octubre de 1824.

Juan Guzmán

Esta segunda edición de
La República Federal mexicana: gestación y nacimiento
se terminó de imprimir en febrero de 2003
en los talleres de Editorial Color, S.A. de C.V.,
Naranjo 96-bis, Col. Santa María la Ribera, 06400 México, D.F.
Tipografía y formación a cargo de Socorro Gutiérrez y Patricia Zepeda,
en Redacta, S.A. de C.V.
La edición consta de 2 000 ejemplares
y estuvo al cuidado de Andrea Huerta y Ana Ezcurra.

ACTA

CONSTITUTIVA

DE LA FEDERACION

MEXICANA.



MEXICO: 1824.

Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio

ISBN 968-12-1044-2





EL COLEGIO DE MÉXICO
EL COLEGIO DE SAN LUIS